ISSN: 0213-2079 – ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481
Vol. 48, n. 1 (2026)

STUDIA HISTORICA

HISTORIA MODERNA

La historia de las instituciones hoy

Ediciones Universidad Salamanca

STUDIA HISTORICA

HISTORIA MODERNA

ISSN: 0213–2079 – e–ISSN: 2386–3889 – DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481

CDU: 94 – IBIC: Historia moderna: c. 1450/1500–c. 1700 (HBLH) – BIC: Early Modern History: c 1450/1500 to c 1700 (HBLH) – BISAC: History / Modern / General (HIS037030)

VOL. 48, n. 1 (2026)

EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

FUNDADOR: Manuel Fernández Álvarez.

DIRECTOR: Francisco Javier Lorenzo Pinar (Universidad de Salamanca).

SECRETARIO: Francisco Javier Rubio Muñoz (Universidad de Salamanca).

CONSEJO DE REDACCIÓN: Cristina Borreguero Beltrán (Presidenta de la Fundación Española de Historia Moderna, Universidad de Burgos, España); Francisco Fernández Izquierdo (Gerente de la Fundación Española de Historia Moderna. Instituto de Historia, CSIC, España); María Luisa Candau Chacón (Universidad de Huelva, España); Friedrich Edelmayer (Universidad de Viena, Austria); Mariela Fargas Peñarrocha (Universidad de Barcelona, España); Vittoria Feola (Universidad de Padua); José Ignacio Fortea Pérez (Universidad de Cantabria, España); Xavier Gil Pujol (Real Academia de la Historia, Universidad de Barcelona, España); María Luz González Mezquita (Universidad de Mar del Plata, Argentina); María Teresa Guerrini (Universidad de Bolonia, Italia); María Herranz Pinacho (Universidad de Salamanca, España); Tamar Herzog (Universidad de Harvard, EE. UU.); Antonio Jiménez Estrella (Universidad de Granada, España); Cristo José de León Perera (Universidad de Salamanca, España); Alberto Marcos Martín (Universidad de Valladolid, España); Miguel Ángel Melón (Universidad de Extremadura, España); Fernanda Olival (Universidad de Évora, Portugal); Henar Pizarro Llorente (Universidad Pontificia Comillas, España); Bernard Vincent (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia); María Antonietta Visceglia (Universidad de la Sapienza, Roma, Italia).

CONSEJO CIENTÍFICO: Jaime Contreras (Universidad de Alcalá, España); Enrique Giménez López (Universidad de Alicante, España); Francisco García González (Universidad de Castilla la Mancha, España); José Luis de las Heras Santos (Universidad de Salamanca, España); Juan José Iglesias Rodríguez (Universidad de Sevilla, España); Enrique Martínez Ruiz (Universidad Complutense, España); Pere Molas Ribalta (Universidad de Barcelona, España); Didier Ozanam (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia); María Ángeles Pérez Samper (Universidad de Barcelona, España); M.ª José Rodríguez Salgado (London School of Economics and Political Science, Reino Unido); Eliseo Serrano Martín (Universidad de Zaragoza, España); Valentín Vázquez de Prada (Universidad de Navarra, España); Josep Juan Vidal (Universidad de las Islas Baleares, España).

SECRETARÍA DE REDACCIÓN: Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea.
Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Salamanca.
C/ Cervantes, s/n. E–37002 Salamanca (España), Correo-e: kopolo@usal.es

Han formado parte de los órganos directivos de esta revista: Gonzalo Anes; Bartolomé Bennassar; Antonio Béthencourt; Francisco Chacón Jiménez; Baltasar Cuart Moner; Antonio Domínguez Ortiz; Antonio Eiras Roel; John H. Elliott; Manuel Fernández Álvarez; Antonio García Baquero; Francesco Manconi; M.ª José de la Pascua; Joseph Pérez; Ángel Rodríguez Sánchez; Felipe Ruiz Martín; Francisco Tomás y Valiente.

STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA es una revista científica en español sobre Historia Moderna, de periodicidad semestral y en la que los artículos recibidos son evaluados por revisores externos a la revista mediante el sistema conocido como de doble ciego.

La revista figura indexada en: DIALNET, DICE, Regesta Imperii, Historical Abstracts, Modernitascitas, Periodical Index Online (PIO), Scopus y es evaluada por: CARHUS, CIRC, DOAJ, ERIH, ERIHPLUS, FECYT, LATINDEX, MIAR, RESH, SJR, WoS / ESCI.

Los trabajos publicados pueden consultarse en: «eUSAL Revistas» <http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica>, Gredos <http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/68648>, Dialnet <http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1379>

REALIZA: Gráficas Lope, S.L.
ISSN: 0213-2079 - ISSN electrónico: 2386-3889 - DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo

Ni la totalidad ni parte de esta revista puede reproducirse con fines comerciales sin permiso escrito de Ediciones Universidad de Salamanca. A tenor de lo dispuesto en las calificaciones *Creative Commons* CC BY-NC-SA y CC BY, se puede compartir (copiar, distribuir o crear obras derivadas) el contenido de esta revista, según lo que se haya establecido para cada una de sus partes, siempre y cuando se reconozca y cite correctamente la autoría (BY), siempre con fines no comerciales (NC) y compartiendo la obra resultante bajo el mismo tipo de licencia (SA).

STUDIA HISTORICA
HISTORIA MODERNA

ISSN: 0213–2079 – e–ISSN: 2386–3889 – DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481
CDU: 94 – IBIC: Historia moderna: c. 1450/1500–c. 1700 (HBLH) – BIC: Early Modern History: c 1450/1500 to c 1700 (HBLH) – BISAC: History / Modern / General (HIS037030)
VOL. 48, n. 1 (2026)

ÍNDICE

LA HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES HOY

María López Díaz y M.ª del Carmen Saavedra Vázquez, *Presentación. «La historia de las instituciones hoy: logros del presente y perspectivas de futuro»* 7-21
Rafael Valladares, *El valido, ¿institución* de facto*? Haro y el virrey Alburquerque* 23-50
Carlos Javier de Carlos Morales, *Entre visitas y ordenanzas: el Consejo de Hacienda, una institución al servicio del gasto dinástico en la Corte de los Austrias* 51-80
Ramón Lanza García, *Juros, media anata de juros y el problema de la deuda pública de los últimos Habsburgo españoles (1621-1700)* 81-106
Anne Dubet, *Las intendencias españolas del marqués de Esquilache: un proyecto ambivalente (1760-1766)* 107-133
Eduardo Cebreiros Álvarez, *La intendencia y los regimientos gallegos ante las reformas municipales de Carlos III: un análisis desde la óptica local* 135-159
María López Díaz, *Entre lo necesario y lo inconveniente: la alcaldía mayor y auditoría general de Marina de Ferrol-A Graña (1734-1773)* 161-190
María del Carmen Saavedra Vázquez, *Ejército del reino, ejército del rey: La integración de los tercios gallegos en el primer ejército borbónico* 191-217
Josep Capdeferro, *Procesos legislativos y lucha por la sujeción de las autoridades al derecho en la Cataluña moderna* 219-248
David Bernabé Gil, *La Gobernación Foral de Orihuela y su sede alicantina: oficiales, conflictos y dinámica institucional en la Edad Moderna* 249-277
María del Carmen Irles Vicente, *El primer* «reformismo» *de Felipe V y sus ministros:* «compradores» *de corregimientos en el periodo 1705-1711* 279-309
José María Imízcoz Beunza, *Por una historia social de las culturas políticas: las élites reformistas y las élites resistentes al reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII* 311-343
María Seijas Montero y Antonio Presedo Garazo, *Linajes de poder municipal en Galicia: la presencia en el Cabildo Catedralicio Compostelano de las familias de la élite orensana en el siglo XVIII* 345-374

VARIA

Alfredo Bueno Jiménez, *El uso de la caballería ligera durante las primeras campañas militares en la isla española, 1493-1505* 377-422
Amparo Felipo Orts, *El linaje Vich y el patrocinio sobre el monasterio de Nuestra Señora de la Murta de Alzira* 423-454
Daniel Ochoa Rudi, *De poder y política: La secularización del cabildo metropolitano de Zaragoza entre Felipe II y el Duque de Lerma (1575-1604)* 455-486
Alfonso de Vicente Delgado, *A propósito de un libramiento y recibo. Sobre la distribución de impresos de polifonía religiosa en torno a 1600* 487-504
Sandra Bertolini Crespo, *La creación y consolidación del oficio de agente solicitador en la chancillería de Valladolid: la comisión del Conde de Castrillo en torno al donativo de las guerras de Italia (1629)* 505-528
Eduard Martí Fraga, *«El manantial inagotable con que premian los monarcas los grandes servicios». La política de concesión de mercedes nobiliarias de Carlos III, el archiduque, en Cataluña (1705-1713)* 529-563
Manuel Sobaler Gómez, *Versos para una* Ilustración Militar*: la evolución de la táctica militar en la Edad Moderna a partir de los* Axiomas Militares *de Nicolás de Castro* 565-597
Pablo Molejón y Paula Barbero, *Esclavitud, espacio doméstico y familia en Tenerife: una lectura cruzada entre padrones de habitantes y protocolos notariales (1640-1845)* 599-646

RESEÑAS 647-685

Ediciones Universidad Salamanca
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA

STUDIA HISTORICA

HISTORIA MODERNA

ISSN: 0213–2079 – e–ISSN: 2386–3889 – DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481
CDU: 94 – IBIC: Historia moderna: c. 1450/1500–c. 1700 (HBLH) – BIC: Early Modern History: c 1450/1500 to c 1700 (HBLH) – BISAC: History / Modern / General (HIS037030)
VOL. 48, n. 1 (2026)

CONTENTS

THE HISTORY OF INSTITUTIONS TODAY

María López Díaz and M.ª del Carmen Saavedra Vázquez, *Presentation. «The History Of Institutions Today: Current Achievements and Future Perspectives»* 7-21
Rafael Valladares, *The Valido,* De Facto *Institution? Haro and the Viceroy Alburquerque* 23-50
Carlos Javier de Carlos Morales, *Between Inspections and Ordinances: The Council of Finance, an Institution to Serv Dynastic Spending at the Habsburg Court* 51-80
Ramón Lanza García, *Juros, Media Anata of Juros and the Problem of Public Debt of the Last Spanish Habsburgs* 81-106
Anne Dubet, *The Spanish Intendancies of the Marquis of Esquilache: An Ambivalent Project (1760-1766)* 107-133
Eduardo Cebreiros Álvarez, *Intendancy and Galician Town Councils in the Face of Charles Iii's Municipal Reforms: An Analysis from a Local Perspective* 135-159
María López Díaz, *Between Necessity and Inconvenience: The Major Mayor's Office and General Judge-Advocate of Navy of Ferrol-A Graña (1734-1773)* 161-190
María del Carmen Saavedra Vázquez, *Army of the Kingdom, Army of the King: The integration of the Galician Tercios into the first Bourbon army* 191-217
Josep Capdeferro, *Legislative Processes and the Struggle to Subject the Authorities to the Law in Early Modern Catalonia* 219-248
David Bernabé Gil, *The* Foral *Governorship of Orihuela and Its Alicante Headquarters: Officials, Conflicts, and Institutional Dynamics in the Early Modern Period* 249-277
María del Carmen Irles Vicente, *The* «First Reformism» *of Philip V and His Ministers:* Buyers *of* «Corregimientos» *in the Period 1705-1711* 279-309
José María Imízcoz Beunza, *For a Social History of Political Cultures: Reformist Elites and Elites Resisting Enlightenment Reformism in 18th-Century Spain* 311-343
María Seijas Montero and Antonio Presedo Garazo, *Municipal Power Lineages in Galicia: The Presence of Elite Families from Ourense in the Cathedral Chapter of Santiago de Compostela in the Eighteenth Century* 345-374

VARIA

Alfredo Bueno Jiménez, *The Use of Popular Cavalry During the Early Military Campaigns on the Island of Hispaniola, 1493-1505* 377-422
Amparo Felipo Orts, *The Vich Lineage and the Patronage Over the Monastery of Nuestra Señora de la Murta in Alzira (Valencia, Spain)* 423-454
Daniel Ochoa Rudi, *On Power and Politics: The Secularization of the Metropolitan Chapter of Zaragoza Between Philip II and The Duke of Lerma (1575-1604)* 455-486
Alfonso de Vicente Delgado, *Concerning a Payment Order and Receipt: On the Distribution of Printed Sacred Polyphony Circa 1600* 487-504
Sandra Bertolini Crespo, *The Creation and Consolidation of the Solicitor's office in the Chancery of Valladolid: The Commision of the Count of Castrillo regarding the donation for the Italian wars (1629)* 505-528
Eduard Martí Fraga, *«The Inexhaustible Spring with which Monarchs Reward Great Services»: The Policy of Granting Noble Favors by Charles III, the Archduke, in Catalonia, Spain (1705-1713)* 529-563
Manuel Sobaler Gómez, *Verses for a* Military Enlightenment*: The Evolution of Military Tactics in the Early Modern Age from the* Axiomas Militares *of Nicolás de Castro* 565-597
Pablo Molejón and Paula Barbero, *Slavery, Domestic Space, and Family in Tenerife: A Cross-Reading of Population Registers and Notarial Records (1640-1845)* 599-646

REVIEWS 647-685

Ediciones Universidad Salamanca

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA

LA HISTORIA
DE LAS INSTITUCIONES HOY

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481721

PRESENTACIÓN «LA HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES HOY»

Presentation «The History of Institutions Today»

María LÓPEZ DÍAZ

Universidad de Vigo
marial@uvigo.gal

M.ª del Carmen SAAVEDRA VÁZQUEZ

Universidad de Santiago de Compostela
mdelcarmensaavedra@usc.es

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Este dossier nace del interés de observar la reconfiguración del vínculo existente entre las instituciones y la política en el mundo pre-contemporáneo hispano o, dicho de otra forma, de hacer reaparecer las instituciones como variable explicativa de *lo político* de la Época Moderna, después de que, partiendo del formalismo imperante en su estudio, fueran desplazadas por la noción más fluida de poder (con sus dinámicas), los sistemas o modelos políticos y, más recientemente, el envolvente concepto de «cultura política».

Palabras clave: Monarquía hispana; historia política; instituciones políticas; cultura política; actores políticos; élites gobernantes; agentes regios; Ejército; Marina; intendencias españolas; siglos XVI-XVIII.

ABSTRACT: This dossier stems from an interest in examining the reconfiguration of the relationship between institutions and politics in the pre-contemporary Hispanic world. In other words, it seeks to bring institutions back into view as an explanatory variable of politics in the Early Modern period, after they had been displaced —following the formalism that had long dominated their study— by the more fluid notion of power and its dynamics, by political systems or models, and, more recently, by the encompassing concept of «political culture».

Keywords: Hispanic Monarchy; political history; political institutions; political culture; political actors; ruling elites; royal agents; army; navy; Spanish intendancies; sixteenth-eighteenth centuries.

Este dossier nace del interés de observar la reconfiguración del vínculo existente entre las instituciones y la política en el mundo pre-contemporáneo hispano y primeras décadas del siglo XIX o, dicho de otra forma, de hacer reaparecer las instituciones como variable explicativa de *lo político* («la política») de la Época Moderna y primer liberalismo, después de que, partiendo del formalismo imperante en su estudio, fueran desplazadas por la noción más fluida de poder, luego, los sistemas o modelos políticos y, más recientemente, el envolvente concepto de «cultura política». En definitiva, se trata de reflexionar sobre la «historia de las instituciones», particularmente acerca de las denominadas «instituciones políticas», consideradas cruciales no solo en el desarrollo político de cualquier nación, sino también como catalizadores indispensables para su desarrollo económico (Baumert, 2024, p. 29). Un tema que, como todos los importantes, es multi o pluridisciplinar, lo que es una gran ventaja, pero también un hándicap. De hecho, ha sido y, tras su retorno a primera línea de la investigación en las últimas décadas del siglo XX, sigue siendo objeto de análisis y punto de encuentro de especialistas de distintos subcampos de las ciencias sociales e históricas, incluidas algunas naturales (sobre todo politólogos, sociólogos, estudiosos del derecho e historiadores «generales», amén de antropólogos y geógrafos), pero también lo fue y es de no pocas discrepancias, incluso dentro de las diferentes disciplinas académicas[1]; y como comunidad más acotada, entre los «científicos políticos» interesados en las concepciones fundamentales sobre los orígenes, las dinámicas, los actores y territorialidad de cualquier tipo de

1. Habida cuenta de que la mayoría de los especialistas no suelen están localizados en el núcleo de la disciplina, sino pertenecer a una subdisciplina híbrida: historia del derecho y de las instituciones, historia moderna, historia social, historia política, sociología política, economía política, geografía política, administración pública, etc. Goodin y Klinngeman, 2001, pp. 186-187.

poder político. Sin profundizar en el asunto, baste señalar que son tantas y de tal calibre las desavenencias que ni siquiera hay consenso sobre qué es una *institución* (Hodgson, 2006, pp. 17); tampoco sobre cuáles son sus propiedades, los criterios para valorarlas y también para clasificarlas —por antonimias simples (formales/informales, de orden espontáneo/diseñadas, extractivas/inclusivas, duras/blandas, …), con arreglo a la materia (sociales, políticas, económicas, culturales…), según la fuente de poder (ejecutivas, legislativas y judiciales…), su dogmatismo (formalidad/informalidad/ fácticas) y un largo etcétera—, con la particularidad añadida de que a veces se solapan entre sí (Baumert, 2024, pp. 32-34)—; y todo ello aun reconociendo que hubo una mejora notable de su conocimiento en las tres cuestiones medulares apuntadas (Almond, 2001, p. 83). De todos modos, no son las únicas diferencias. También las hay, e importantes, en la manera de abordar su estudio; o sea, los paradigmas, categorías y ángulos de aproximación, las fuentes y herramientas empleadas, los modelos y métodos aplicados en su análisis[2], el manejo del material discursivo y, por supuesto, las problemáticas que centran el interés de los investigadores, cuya explicación en ocasiones va más allá del paraguas institucionalista de una corriente o enfoque epistemológico concreto.

A pesar de la divergencia o heterogeneidad existente (en sí misma ambivalente), hay, por otro lado, un diálogo productivo, superposiciones e incluso fenómenos de hibridación entre los historiadores («generalistas») y los historiadores (especializados de las instituciones) de las diversas disciplinas; inclusive contaminaciones mutuas, más habituales, por razones obvias, entre campos comunes o próximos de investigación y menos, quizás, desde el punto de vista metodológico. Así, por ejemplo, en lo concerniente a la ciencia política, dentro de la escuela historiográfica del «nuevo institucionalismo» se da un «solapamiento de segmentos de disciplinas» entre tres de sus corrientes más pujantes: la de elección racional (enfoque empírico), el institucionalismo histórico y el institucionalismo social o sociológico (Peters, 2001, como se citó en Dogan, pp. 308-315; Hall y Taylor, 2003). Esta confluencia es más evidente, si cabe, en el caso del enfoque histórico, uno de los más atrayentes no solo para los politólogos y demás científicos sociales, sino que también puede ser de gran interés tanto para los historiadores generales como para los ius-historiadores (Artaza, 2015, p. 69). Otro ejemplo de hibridación, convergencia y circularidad de problemas e incluso de metodologías se da entre algunos historiadores generales y un sector de los historiadores del derecho y de las instituciones, ceñido en ambos casos al estudio de «lo político» del periodo pre-moderno y primer constitucionalismo (López, 2015, pp. 333-340, 342-351), apostando en su caso por un enfoque *cultural*; es decir, «la política [entendida] como cultura» (Cabrera, 2010; Garriga, 2012). En

2. Por ejemplo, en la ciencia política actualmente domina el «análisis comparativo», que no se identifica exactamente con el «método comparado» (Armelio, 2021, pp. 193-194).

consonancia con ello prestan una especial atención a los conceptos, la discursividad y el léxico, teniendo muy en cuenta el tiempo que delinea transformaciones y procesos de variada escala y temporalidad. Una intersección que, ciertamente, también se da entre los estudiosos de las instituciones que son historiadores (generalistas), politólogos o cultores de otras ciencias sociales (Dogan, 2001, p. 188), hecho que no está reñido con la progresiva y cada vez más acentuada especialización interna, tanto dentro de cada especialidad como de ese territorio común que comparten entre ellas. Siendo así que en la actualidad las instituciones y los institucionalismos gozan de buena prensa y están consideradas un aspecto relevante (imprescindible en algunos casos) para entender la historia política y nuestras sociedades en general (Acuña, 2013, pp. 21-24).

Sin ánimo de adentrarnos en estas cuestiones científico-disciplinares, referente al estudio de las instituciones políticas pre-contemporáneas, que son nuestro objeto de reflexión, ni tampoco de ofrecer una visión historiográfica al efecto, que nos alejaría del propósito de esta breve presentación, de lo señalado cabe destacar dos aspectos. El primero, que hoy en día, como en el pasado, la «historia de las instituciones» no se circunscribe a ninguna disciplina científica (o historias especializadas, sean del ámbito que sean) ni tampoco a la historia general (subdivida en periodos), sino que es terreno de investigación compartido, incluso de «contigüidad osmótica» entre todas aquellas que en las últimas décadas se han venido interesado por el tema. Es más, para algunos cultores supone «trabajar sobre/en las intersecciones», inter/transdisciplinarmente (D'Alessandro, 2025, pp. 34), que son zonas vastísimas, de una gran riqueza y todavía poco exploradas.

La segunda cuestión atañe a la importancia de la institucionalidad para explicar los procesos y fenómenos político-históricos. Pensamos que igualmente lo son para poder explicar las conductas de los actores, agentes e integrantes del juego político, tanto la de los grandes hombres (personalidades) como la de la gente común, de la mano de cuya investigación los estudiosos comprometidos con el giro de la nueva historia político-institucional empezamos a interesarnos por las «élites» de todo tipo y su acción política; o sea, por las decisiones de gobierno detrás de las cuales están los individuos o «grupos de individuos» ligados por identidades o intereses comunes hacia determinados objetivos. En otras palabras, que sus acciones no siempre son contingentes (cuestión de preferencia o que respondan a unos intereses), pues las instituciones, si bien no las determinan, ofrecen un marco que, en mayor o menor grado, ayuda a entender también por qué esos actores toman ciertas decisiones o actúan de una determinada forma (recursos/capacidad de diseñar e implementar acciones políticas). Por todo esto, es importante conocer las instituciones con sus *discontinuidades* o cambios cruciales (causas, ideas y cultura política de quienes las integran, que están detrás de esas trasformaciones, haciendo que muden las reglas de juego y sus objetivos), pero también reconocer la *continuidad institucional*

(nominal) detrás de la cual hay una modificación gradual o de adaptación al medio; más tratándose del Antiguo Régimen, con una *concepción jurisdiccionalista* del poder político, tan rica en procesos y consecuencias institucionales, que hace del orden jurídico el fin y límite de aquel, pero donde asimismo, no podemos olvidarlo, se empieza a abrir paso una concepción racionalista o utilitarista del poder soberano que, llevando el modelo corporativo hasta sus extremos, contribuirá a quebrarlo, haciendo emerger un «nuevo régimen».

Justificada la rehabilitación e interés de las instituciones en los estudios históricos de *lo político*, es llegado el momento y procede inquirir o preguntarnos «cuánto importan las instituciones»[3], su relevancia en los procesos políticos y el conjunto de las relaciones sociales, el gobierno y rumbo de la monarquía hispana de la modernidad. Queriendo dar respuestas, desde un enfoque más bien empírico, el conjunto de las contribuciones de este monográfico son una pequeña muestra sobre las posibilidades que ofrece su estudio, también sobre algunos de sus logros y posibles rutas o líneas de investigación. En general, son trabajos que apuestan más por lo analítico que por el aparato crítico, predominando el estudio de instituciones particulares con una espacialidad (ámbito territorial) diverso que van de la dimensión imperial a lo local (un universo de poderes e instituciones en sí mismo). Junto a ellos, otros centran su atención en la acción política (vertiente procedimental y eficacia) o bien en los actores (individuos y élites) y su comportamiento o actuación, sin considerarlos divorciados de la sociedad en la que viven. No deben esperar, pues, los lectores encontrar *una* historia o visión global de las instituciones políticas antiguo-regimentales, solo fragmentos que ayudan a reconocer su trascendencia como variable de los procesos sociales y políticos de la época. Del mismo modo, tampoco busquen una definición clara del vocablo, que se revela ya entonces huidiza (el caso del valido es un buen ejemplo), si bien trasciende o está presente en el contenido de todos y cada uno de los trabajos. Se evidencian, eso sí, distintas modalidades o tipologías que van más allá de las escalas, su función, la fuente de poder o materia de gobierno de que se ocupan, pues son clasificaciones que a veces se traslapan sin coincidir. De igual modo, se hace patente la necesidad de reconsiderar e historiar el concepto desde una perspectiva multifactorial que atienda no solo a la formalidad, el papel político que jugaron o su dimensión social y humana, sino también a su faceta cultural (cultura política e ideología que está detrás), antropológica y geográfica (cada institución engendra y posee su propia *geografía política* y *geografía social).*

Como epílogo de estas notas introductorias, recuperamos tres definiciones del concepto institución y su relación con la política —unas más próximas y familiares

3. Tomamos la expresión del título de un libro de un colega latinoamericano que reintroduce la reflexión sobre las instituciones como factor explicativo del Estado, el gobierno y la política argentina (Cuesta, 2013).

por referirse a la Modernidad; otra más lejanas, pero, creemos, igualmente plástica— que encajan con la idea de partida de este dossier, en la esperanza de poder inducir mediante ellas un esquema intelectual o marco de referencia global que posibilite una más clara captación de las infinitas modalidades, ideas directrices y procesos del universo político-administrativo que brindan aquellas.

Es la primera la que en 1970 ofreció el historiador francés Roland Mousnier en su monografía *La plume, la faucille et le marteau. Institutions et Société en France, du Moyen Age à la Revolution*: «une institutión c'est d'abord une idée directrice, l'idée d'une fin déterminée de bien public à atteindre, par des procédures prévues et imposées selon un comportament obligatoire» (1970, p. 7). Desde la perspectiva actual, hoy sería matizable en varios aspectos, como el tema referido al *disciplinamiento social*, concepto más amplio que la imposición según un comportamiento obligatorio, pero creemos que condensa algunos de los rasgos fundamentales para su definición (idea vectorial del «bien común», luego reconvertido en «utilitarismo»; imposición, etc.) y sigue siendo útil. Por su parte, la segunda, a medio camino entre lo jurídico-político e institucional, se debe a su colega Pierre Goubert: la expone en su manual sobre el Antiguo Régimen publicado tres años después, donde habla de estructuras sociales, políticas, institucionales y mentales como organismos vivos y vigorosos, aunque «el Estado trate de ahogarlos o al menos castrarlos». Específicamente, para él las «instituciones del Estado» son «unas instituciones más», cuya única originalidad consiste «en querer dominarlas y, al disponer de la fuerza armada, lograrlo con eficacia cada vez mayor» en lo que califica de conquista irregular, y sin embargo «progresiva, incompleta y poco popular» (Goubert, 1979, pp. 1-2). Tanto o más elocuente nos parece el título del primer epígrafe del segundo volumen de la obra dedicado a «Los poderes»: «El *'clima' institucional* en Francia» (la cursiva es nuestra), pudiendo sustituirse el «clima» por el paisaje institucional; conceptos ambos que rompen con el de estructuras formales (institucionales y jurídicas) apostando por explorar el entrelazamiento de unas y otras, ya que este es el contexto de la mayor parte de los hombres del Antiguo Régimen que liga desde el marco familiar de su aldea, jurisdicción o localidad hasta las más altas instancias del Estado (rey) y la Iglesia (Papa). Con todas las matizaciones, precisiones y añadidos que quiera hacerse, sugiere que cualquiera que sea la historia política del mundo premoderno que se quiera narrar deberán tenerse en cuenta las instituciones. Finalmente, la tercera y última definición procede de la vecina ciencia política acentuando o exagerando su papel. Se debe a los profesores estadounidenses Karen Orren y Stephen Skowronek que, tomándola de un colega (Kenneth Sphesle), definen las instituciones con una sugerente metáfora: considerándola el «cemento de la política que aglutina a variados actores y que los hace coherentes» (1994, p. 316). Sin llegar al extremo de esta valoración, encuadrada en el marco del giro institucional (*neoinstitucionalismo*) o «redescubrimiento» de las instituciones que devolvió su estudio a primer plano de la politología, hay, en nuestra opinión, un elemento común destacable en las tres

valoraciones: hacen hincapié en la relevancia y centralidad de las instituciones como componente imprescindible y variable explicativa de *lo/a político/a* del pasado y presente desde claves interpretativas diversas.

En esta línea se inserta la propuesta del presente dossier, que en esencia reúne las contribuciones del Seminario científico celebrado los días 17 y 18 de octubre de 2023 en la Facultad de Historia, de la Universidad de Santiago de Compostela, con el título *La Historia de las Instituciones hoy: logros y perspectivas de futuro*, el cual fue organizado por el grupo de investigación de Historia Moderna (GI 1921) de dicho centro en colaboración con el grupo de investigación H2M-Equipo moderna de la Universidad de Vigo. Con este evento tratamos de dar continuidad al conjunto de investigaciones recogidas en el libro editado por las dos coordinadoras —*Gobernar reformando. Los primeros Borbones en la España del siglo XVIII* (Comares, 2023)— que, a su vez, compiló los trabajos presentados en las Jornadas científicas *Los primeros Borbones. Poder y dinámica política* (Ourense, 21-22 de octubre de 2021). Este encuentro fue organizado por el equipo del Proyecto de investigación HAR2017-83605-P, financiado por la AEI/ FEDER, UE; un grupo interdisciplinar, consolidado y de trayectoria acreditada, tal y como certifican sus otras publicaciones de los últimos años, entre las que se cuentan varias monografías colectivas —como más reciente, además del libro ya citado, el titulado *Monarquías Ibéricas, poderes y territorios* (Sílex, 2021)— y tres monográficos publicados en diferentes revistas: «Reformismo, instituciones y espacios de poder en las monarquías ibéricas (siglo XVIII)» (*Obradoiro de Historia Moderna*, 29, 2020), «Poder real y poderes territoriales en el mundo atlántico: instituciones y prácticas políticas» (*Estudis. Revista de Historia Moderna*, 46, 2020) y «Galicia en el reinado de Felipe V: poder y dinámica política» (*Magallánica. Revista de historia moderna*, 9/18, 2023).

En cuanto a los contenidos del dossier, los doce ensayos atañen a distintas esferas y dominios mayormente peninsulares de la Monarquía hispana y su análisis abarcan los tres siglos de la Edad Moderna, en algún caso con proyección hacia la emergente monarquía nacional. Siguiendo la estela de la historiografía reciente, los correspondientes autores sitúan las instituciones políticas en el epicentro de sus investigaciones, que analizan desde enfoques y para escalas diferentes, planteando ideas y resultados estimulantes. Unos se interesan por la génesis de instituciones poco estudiadas, el proceso de normalización, adaptación y reajuste sobre el terreno, sus rasgos y las mutaciones (por fuerza o por inercia) de su andadura en la larga duración, así como la lógica político-jurídica que está detrás con las contradicciones que encierran; otros abundan en su funcionalidad (con su corolario de eficacia) y cómo condicionan la acción política de los actores involucrados o, viceversa, la manera en que estos influyen en el quehacer institucional, con algún apunte aislado hacia lo que podría denominarse la «calidad» institucional —con su reverso de vicios, desnaturalización y «corrupción»—, conceptuados estos vocablos dentro del modelo político en que

se enclavan; y el tercer subgrupo se interesa por los actores, agentes que vivifican las instituciones, evidenciando como las relaciones de todo tipo (personales, familiares, clientelares y de patronazgo) permean y «engrasan» la política o ejercicio del poder. Cualquiera de las reflexiones acerca de los temas señalados no se puede entender prescindiendo de la cultura política y sociedad en que se enclavan.

Descendiendo a las aportaciones individuales, Rafael Valladares reconsidera la problemática de la «institucionalidad» del valimiento, interrogándose si puede considerarse una institución *de facto*, el factótum del rey. Para ello, empieza trazando un puente con la pionera obra de Francisco Tomás y Valiente publicada en 1963 bajo el título *Los validos en la monarquía española del siglo XVII. Un estudio institucional*. A partir de ahí nos conduce al interior del debate planteado en torno a la naturaleza del fenómeno, sus rasgos y conceptualización historiográfica hasta llegar a su valoración desde las perspectivas más recientes, merced a las cuales, más que la formalidad, el sistema de gobierno o sus capacidades como pieza de poder, se toma en cuenta la cultura política de su tiempo que incluye desde el discurso, las imágenes, la familia o el patronazgo (con su reverso) o el clientelismo a la conflictividad con otros actores del juego político, entre otros muchos aspectos. Sobre la base de estas claves interpretativas muestra y demuestra cómo el valimiento devino en una «institución *constituida*» o *de facto*, sin un decreto de génesis ni un reglamento que la encorsetara. A tal efecto, como testimonio documental analiza la discursividad de varias cartas que el duque de Alburquerque, valiéndose de su puesto de gentilhombre primero y desde 1653 como virrey de Nueva España, escribió a don Luis de Haro en los años 1644-1654, derivando la institucionalidad de su ministerio.

Los textos de Carlos Javier de Carlos y Ramón Lanza tienen que ver con el Consejo de Hacienda, las finanzas y el gasto dinástico, con el problema de fondo en el segundo caso de la deuda pública y la forma en que se gestionó. El primero ofrece una renovada lectura de la trayectoria del Consejo en tiempo de los Austrias a partir del denominado paradigma *cortesano* y avances historiográficos de los últimos lustros sobre la Corte, la *polisinodia*, el funcionamiento de las instituciones centrales, la corrupción y los mecanismos de gasto y endeudamiento dinásticos. Evidencia como desde que se fundó su evolución estuvo condicionada no solo por la ordenación normativa en un contexto de continuas visitas y luchas faccionales cortesanas y los conflictos de competencias con otros consejos, juntas o comisiones, sino también por el patronazgo y el clientelismo, con la corrupción de base como práctica consuetudinaria, que, pese a ser un elemento importante de gobierno, agudizaba el problema de sostenibilidad del gasto dinástico. Por su parte, el artículo de Ramón Lanza pone el foco en el fisco y específicamente sobre el problema de la deuda pública de los últimos Habsburgos españoles. Hace un repaso de las características de los juros como instrumentos financieros y también de las emisiones (sobre servicios, rentas generales y regalías de la Corona) realizadas durante el

reinado de Felipe IV, el proceso de imposición de medias anatas y otros descuentos sobre los réditos, junto con su cuantía. Concluye que en estos años se duplicó el monto de la deuda, lo que obligó en tiempos de su sucesor Carlos II a buscar nuevos medios y tomar drásticas medidas de saneamiento, como las efectuadas mediante la reforma monetaria de 1680-1686 y el decreto de los cuatro millones de la causa pública de 1688, con consecuencias muy negativas tanto para los acreedores de la Corona como para la hacienda pública y economía en general. Entre otros, destaca el consiguiente encarecimiento del capital y las mayores dificultades de financiación pública y privada que, como contrapartida, contribuirían sin embargo a la recuperación económica del XVIII.

Si los tres ensayos anteriores centran su atención en la etapa de los Austrias, órganos e instituciones emblemáticas del entorno cortesano más próximo al rey, los dos siguientes tienen igualmente como protagonista a una institución regia, pero de la esfera político-administrativa provincial y periodo borbónico. Se trata de los intendentes, una figura clave del proyecto político de la nueva dinastía que observan desde dos vertientes totalmente diferentes, aunque próximas en el tiempo. Dando continuidad a otros trabajos suyos relacionados con las intendencias americanas, Anne Dubet abunda en su contribución en una fase de la trayectoria de las intendencias peninsulares poco estudiada, como es la del marqués de Esquilache, preguntándose si realmente el ministro de Hacienda de Carlos III tuvo un proyecto claro al respecto; esto es, su papel nodal y cuánto había de continuidad y de aporte respecto al proyecto intendencial de Ensenada, así como por las implicaciones políticas de los cambios que implementó durante los seis años de su ministerio. Con este fin, se interesa por su inserción en el engranaje dependiente del ministerio de Hacienda, especialmente en lo que concierne a la Superintendencia General de la Real Hacienda, y también por su relación con los actores del escenario político-administrativo provincial, particularmente con las oligarquías urbanas en materia de Haciendas municipales, donde los intendentes y su ministro de tutela principal, el de Hacienda, desempeñaron un rol importante que competía con el ejercido por el Consejo de Castilla. Lo mismo evalúa su papel en la articulación entre el citado superintendente general y, en lo jurisdiccional, la red de subdelegados fuera de las capitales de provincia (los intendentes de provincia eran subdelegados natos), nombrados por el rey conforme a la real cédula de 17 de diciembre de 1760. Como valoración final enfatiza las innovaciones de ministro en la estructura piramidal que vincula a los intendentes, el ministro de hacienda y los representantes locales, así como sus aportaciones respecto al proyecto de Ensenada, calificándolas de «ambiguas», pues si por un lado incrementó su prestigio y poder efectivo como magistrados de Hacienda en las provincias, por otro acentuó el control sobre su labor.

En cuanto al trabajo de Eduardo Cebreiros ofrece el contrapunto con un enfoque de su actividad a escala provincial/local, concretamente sobre su agencia

en el marco de la institución municipal de dos capitales de provincia gallegas jurídica, social y físicamente bien distintas: los ayuntamientos y corporaciones urbanas de Santiago de Compostela (que sigue siendo de dominio episcopal) y A Coruña (ciudad realenga, sede de las principales instituciones del rey en el Reino, incluida la propia Intendencia). En ambos casos se interesa por su participación en la aplicación de las reformas municipales de 1766 y relación con las nuevas figuras electivas del síndico personero y los diputados del común: su intervención en el asunto, las posibles alianzas tejidas con estas nuevas figuras o, al revés, las sostenidas con las instituciones tradicionales en las disputas y tensiones que se produjeron dentro y fuera de la nueva corporación municipal. Prueba que apenas se involucraron en su puesta en práctica e implementación y que su labor fue de bajo perfil, sirviendo como vehículo de comunicación de órdenes superiores; igualmente, que tuvieron una escasa presencia en las resistencias o desavenencias suscitadas con el cuerpo de regidores tradicional, a los que a veces presta respaldo.

Sin abandonar la Galicia del siglo XVIII, otras dos contribuciones tienen como protagonistas sendas instituciones de naturaleza híbrida, que atañen a entornos de guerra y comportan novedades en su itinerario derivadas de la política regia. María López Díaz analiza el proceso de implantación de la alcaldía mayor de Ferrol-A Graña y su vinculación con la auditoria o asesoría general de la Armada del Departamento de Marina de Ferrol durante el periodo que duró la unión; es decir, desde poco después de la creación del citado Departamento de Marina del Norte y el pequeño apostadero en A Graña en 1729 hasta el año 1773, en que Carlos III aprobó la separación de ambos puestos con sus cometidos, una escisión que se venía demandado por parte de las autoridades y responsables navales desde los cuatro lustros anteriores, coincidiendo con el inicio de las obras de construcción del arsenal de Ferrol. Es un asunto inédito, que no había sido objeto de estudio por parte de los especialistas que han abordado el alcance de la nueva política naval borbónica, que abunda en el ecosistema de tensión y disputas políticas, de triple naturaleza (jurisdiccional, institucional y social) que emerge en dichas localidades a cada paso. Entre otras cuestiones, presta atención a las causas que llevaron a Felipe V a tomar tal medida; la singularidad y/o «anomalía» de acoplar dos empleos de esferas jurisdiccionales tan diferentes, como eran la ordinaria y la militar de Marina, en un mismo oficial; los problemas y conflictividad derivados de la dualidad y las razones que llevaron a su posterior desagregación, interrogándose si puede considerarse un episodio más de la vieja pugna entre la *espada* y la *pluma* o de afirmación del «poder militar» opuesto al «poder civil».

Por su parte, M.ª del Carmen Saavedra Vázquez pone el foco en el ejército y, más concretamente, ahonda en el devenir de las unidades de infantería creadas en Galicia en 1705 por intermediación de la Juntas del Reino y cómo esos tercios regnícolas, que suponían un arcaísmo, acaban transformándose en regimientos similares a los

del resto del ejército en el marco de una operación destinada a reorganizar el ejército tras finalizar la Guerra de Sucesión. A partir de la documentación manejada y sobre la base de otros trabajos precedentes, nos ilustra sobre la cronología de los cambios llevados a cabo por las tropas, con el telón de fondo del problema de financiación y recluta padecidos por el contingente hasta 1715, fecha en la que concluye la transformación orgánica. Especialmente interesantes son las páginas dedicadas a calibrar la componente territorial (presencia de naturales en sus filas) en su constitución, confrontándolo con lo ocurrido a posteriori, poniendo de manifiesto la progresiva desnaturalización de las unidades en un proceso que no finalizará hasta comienzos de la década de 1730. Y ello por más que la monarquía quisiera, al menos en un primer momento, crear regimientos ligados por lazos de paisanaje, garantizándose de este modo la lealtad de las élites de la tierra.

Ahondando en el enfoque jurídico-político e institucional, pero con una perspectiva de larga duración y para un escenario geográfico ubicado en la Corona de Aragón, Josep Capdeferro revisita el tema de las Cortes y el parlamentarismo catalán como espacio de diálogo, consenso y transacciones entre el reino y la monarquía. Empieza su ensayo efectuando un repaso historiográfico sobre el tema de las últimas décadas, no exhaustivo pero representativo, que ilustra sobre la tesis dominante de la proactividad de la asamblea catalana y resiliencia estamental como clave de la modernidad del Principado. Luego, ofrece ejemplos de esa actividad en la proposición de leyes siguiendo el orden de las reuniones de Cortes, para, finalmente, centrarse en el análisis detallado de una experiencia exitosa: la creación del Tribunal de Contrafacciones, así como la legislación previa implementada sobre quienes podían enjuiciar las «contrafecciones» de los altos oficiales regios que incurrían en ellas. Todo esto desde la considerada primera petición y los debates interestamentales que se plantearon en torno a su composición. No en vano sirvieron de preámbulo a la petición formal y duras negociaciones llevadas a cabo para la creación final del citado Tribunal (1702-1713).

Sin abandonar la Corona de Aragón, pero para otro territorio y un *tempo* limitado a los siglos XVI y XVII, David Bernabé Gil se ocupa de la Gobernación foral de Orihuela desde su creación en el siglo XIV, la cual a su vez contenía otras más pequeñas, de ámbito municipal. Dicha institución se encargaba de representar la jurisdicción real allí, y conllevaba funciones primordiales que van desde lo militar a la administración de justicia (donde ocupa una posición intermedia entre las justicias municipales y la Real Audiencia), pasando por el mantenimiento del orden público o la persecución del bandolerismo. En particular, analiza el organigrama institucional y los elementos de esta fórmula de representación regia (sus peculiaridades, oficiales y dinámicas entre actores e instancias de poder), las variaciones habidas secularmente, así como el mayor conflicto mantenido entre las ciudades de Orihuela y Alicante en torno a la ubicación de la capitalidad del sur valenciano, al

desdoblarse la mayor parte de los oficiales ordinarios que integraban el sistema de Gobernación mediante la designación de subdelegados. Además del pleito, con la prolija documentación aportada por las partes y la correspondencia intercambiada, examina el funcionamiento práctico de esta bicefalia factual y las consecuencias de la preferencia de los gobernadores por residir en la sede alicantina con el trasfondo de ese enfrentamiento sostenido por alzarse con la capitalidad y su resultado final, detrás del cual también estaba, por los estrechos vínculos (clientelares y personales) que esos oficios regios mantenían con las élites locales, la pugna por la hegemonía y posiciones de las respectivas oligarquías urbanas que juegan un papel de primer orden.

Las tres aportaciones siguientes comparten la intención de buscar explicaciones de la práctica política otorgando protagonismo a los actores efectivos (individuales, colectivos o grupos nominativos) y los vínculos de parentesco, clientelares o de patronazgo que mantenían, pero también a sus estrategias familiares, a los comportamientos que se le asociaban y sus ideas, incluida su cultura política; o sea, observan o se interesan por la faceta humana de las instituciones, y lo hacen desde perspectivas, para entornos y cronologías dispares. M.ª del Carmen Irles Vicente focaliza su atención en los individuos que «beneficiaron» un corregimiento durante el periodo 1705-1711 en plazas de Castilla, tomando como punto de partida la relación de agraciados que proporciona Francisco Andújar en su monografía *Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711* (Madrid, 2008). Conocidas las razones que justificaron este tipo de operaciones calificadas de «venales» —en puridad, de mercadeo, pues no se traspasa el dominio o propiedad del cargo— y otros aspectos del proceso, se interesa por los individuos que lograron negociar u obtener (mediando dinero) un mandato o nombramiento por un trienio de ejercicio en un destino de su elección: el importe abonado por la vara; su procedencia, condición y estatus social; sus cualidades, conocimientos y experiencia previa (o falta de ella) en el desempeño de oficios, así como su continuidad o no en la carrera al servicio del monarca, una vez cesó el tráfico de varas y estas volvieron a proveerse siguiendo el procedimiento reglado (nombramiento regio previa consulta y presentación de una terna por parte de la Cámara de Castilla). Presta una especial atención al subgrupo de quienes ya tenían veteranía ejerciendo este tipo de oficios y solo buscaban un destino (mandato) de su gusto a cambio de dinero, evidenciando que intentaron resarcirse pronto de lo detraído. Interesante es también el cotejo de la geografía de procedencia y varas que beneficiaron.

Con un encuadre y abordaje totalmente distinto, José María Imízcoz Beunza incide en el debate historiográfico actual sobre la necesidad de efectuar una historia social de las culturas políticas; o sea, de analizar las relaciones entre actores efectivos (la personas) e ideas, amén de la acción política, ofreciendo para ello planteamientos y herramientas centrados en el denominado «análisis relacional». Como laboratorio de estudio, se interesa por el reformismo borbónico y campo de observación situado en

los espacios, voces y actores (sociales, políticos y culturales) de las provincias vascas y reino de Navarra; más concretamente, las parentelas de hidalgos que, provenientes de estos territorios, accedieron a los cuadros político, militar y administrativo del gobierno de la monarquía con Felipe V; y, una vez encumbrados, reprodujeron ese poder en las instituciones reformistas de sus sucesores y configuraron una cultura política reformista ilustrada en la segunda mitad de siglo, dando insignes representantes de esta corriente con Carlos III y, luego, en el periodo constitucional élites liberales. El texto analiza el proceso de formación de esas redes sociales y políticas, las características internas del grupo, su transformación ideológica por la penetración de la cultura política ilustrada, así como los contrastes y tensiones con los sectores tradicionales de las élites locales (mayoritarios), apegados a la cultura jurisdiccional y corporativa. Sobre esta base infiere que la mayor o menor proporción dentro de las élites locales de sectores reformistas o tradicionales, contribuye a explicar las diferencias territoriales en lo político desde finales del siglo XVIII hasta la primera guerra carlista, concordando en este punto con estudios realizados o que están en curso de realización para otras regiones sobre familias concretas en su transición del antiguo al nuevo régimen político.

Por último, volviendo sobre el escenario gallego, María Seijas Montero y Antonio Presedo Garazo, efectúan el estudio de «las familias» y de los grupos familiares (de los que forman parte) que, además de tejer vínculos entre ellos y con otros grupos sociales, lo hicieron con los instrumentos y diferentes engranajes del poder (instituciones) en el curso de varias generaciones. De manera expresa, profundizan en una de las estrategias desarrolladas por estas estirpes, como fue el acomodo de algunos de sus segundogénitos en uno de los cinco cabildos catedralicios existentes en el reino de Galicia. Para ello, hacen un seguimiento a aquellos linajes de los munícipes de la ciudad de Ourense que, en el curso del siglo XVIII, lograron que alguno de sus miembros accediera al tercer cabildo eclesiástico más importante de la Corona de Castilla: el de Santiago de Compostela. Aparte de sus trayectorias, examinan cómo accedieron a las canonjías y calibran el alcance de su contribución (en términos económicos, de capital social-relacional y también simbólico) como mecanismo de reforzamiento de las familias o ramas familiares de poder de las que proceden junto con sus parentelas, y en lo particular del jefe de Casa y/o de quienes poseían poder político (municipal), con resultado a veces menos halagüeño de lo esperado.

En definitiva, las aportaciones reunidas en este dossier revisitan un tema clásico como son las instituciones, que es materia de interés de distintas disciplinas y especialistas, y de manera particular las instituciones políticas de la Época Moderna, que sirven de paradigma desde el que estudiar, reflexionar y explicar lo *político* del Antiguo Régimen. Lo hacen con enfoques renovados y desde múltiples primas, echando mano de distintas herramientas, estrategias discursivas y fuentes documentales a diferentes escalas (desde la local a la estatal), pasando, cuando es posible, por

las fuentes legadas del ámbito privado. Partiendo de estas premisas se elaboraron trabajos muy variados y para escenarios dispares, con contribuciones que van desde lo conceptual (redefinición del término y de las tipologías institucionales), la cultura y práctica política (derivada de algunas de ellas) con los procesos de cambio histórico (tanto los suaves y casi imperceptibles, como las inflexiones), pero igualmente y con gran protagonismo, los actores (con todo su bagaje personal, ideológico y familiar y la maraña de relaciones que existe detrás), pues las instituciones no se entienden sin el elemento humano que las vivifica y hace operativas. La visión de conjunto ofrecida no tiene pretensiones de exhaustividad ni afán conclusivo, pero resulta reveladora sobre la necesidad de traerlas a primer plano y revalorizarlas como un elemento importante (a veces clave por englobante) en el estudio no solo de la acción política, en sentido más amplio de la cultura política, sino de los procesos de cambio histórico en general.

Responsabilidad y autoría

María López Díaz y M.ª del Carmen Saavedra Vázquez han sido las autoras de este texto en todas las fases de elaboración: concepción, investigación, interpretación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito.

Declaración sobre uso de inteligencia artificial

No se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

Política de financiación y agradecimientos

Este encuentro fue organizado por el grupo por el equipo del Proyecto de investigación *El reino de Galicia en la monarquía de Felipe V: instituciones y dinámica política* (HAR2017-83605-P, financiado por la AEI/ FEDER, UE, en colaboración con algún miembro del grupo de investigación de historia moderna (GI-1921) de la USC.

1. BIBLIOGRAFÍA

Acuña, C. H. (Comp.). (2013). *¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política argentina*. Siglo XXI Editores.

Almond, G. A. (2001). Ciencia política: la historia de la disciplina. En R. E. Goodin y H.-D. Klingemann (Eds.), *Nuevo manual de ciencia política* (Vol. 1, pp. 83-149). Istmo.

Artaza Montero, M. M. (2015). La ciencia política, la historia y las instituciones. *Ius Fugit: Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos*, *18*, 45-74.

Baumert, T. (Coord.). (2024). *Historia de las instituciones españolas* (2.ª ed.). ESIC Editorial.

Cabrera Acosta, M. A. (2010). La investigación histórica y el concepto de cultura política. En M. Pérez Ledesma y M. Sierra Alonso (Eds.), *Culturas políticas: teoría e historia* (pp. 19-85). Institución «Fernando el Católico».

D'Alessandro, P. L. (2025). La storia delle istituzioni politiche nelle riviste di storia contemporanea. *Le Carte e la Storia*, *1*, 29-38.

Dogan, M. (2001). La ciencia política y las otras ciencias sociales. En R. E. Goodin y H.-D. Klingemann (Eds.), *Nuevo manual de ciencia política* (Vol. 1, pp. 150-198). Istmo.

Garriga, C. (2007). Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen. En C. Garriga y M. Lorente, *Cádiz, 1812: La constitución jurisdiccional* (pp. 43-72). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Garriga, C. (2012). ¿La cuestión es saber quién manda? Historia política, historia del derecho y «punto de vista». *PolHis*, *10*, 89-100.

Goubert, P. (1979). *El Antiguo Régimen: 2. Los poderes*. Siglo XXI.

Hall, P. A., y Taylor, R. C. R. (2003). As três versões do neo-institucionalismo. *Lua Nova*, *58*, 193-224. https://doi.org/10.1590/S0102-64452003000100010

Hodgson, G. M. (2006). What are institutions? *Journal of Economic Issues*, *40*(1), 1-25. https://doi.org/10.1080/00213624.2006.11506879

López Díaz, M. (2015). Historia política e historia del derecho: aportes y desafíos con relación a la monarquía borbónica. En O. Rey Castelao y F. Suárez Fernández (Eds.), *Los vestidos de Clío: Métodos y tendencias recientes de la historiografía modernista española (1973-2013)* (pp. 331-363). Universidad de Santiago de Compostela.

Mousnier, R. (1970). *La plume, la faucille et le marteau: Institutions et société en France du Moyen Âge à la Révolution*. Presses Universitaires de France.

Orren, K., y Skowronek, S. (1994). Beyond the iconography of order: Notes for a «new institutionalism». En L. C. Dodd y C. Jillson (Eds.), *The Dynamics of American Politics: Approaches and Interpretations* (pp. 311-330). Westview Press. https://doi.org/10.4324/9780429496677-14

Peters, B. G. (2001). Las instituciones políticas: lo viejo y lo nuevo. En R. E. Goodin y H.-D. Klingemann (Eds.), *Nuevo manual de ciencia política* (Vol. 1, pp. 304-328). Istmo.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo20264812350

EL VALIDO, ¿INSTITUCIÓN *DE FACTO*? HARO Y EL VIRREY ALBURQUERQUE

The Valido, De Facto *Institution? Haro and the Viceroy Alburquerque*

Rafael VALLADARES

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
rafael.valladares@csic.es

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: En 1963, Francisco Tomás y Valiente publicó *Los validos en la monarquía española del siglo XVII. Estudio institucional*, donde define el valimiento como institución *in fieri*. Desde entonces, mientras una corriente aborda el tema del valido evitando pronunciarse sobre su naturaleza institucional, otra lo analiza desde la cultura política sin atribuirle carácter de institución. Este artículo recupera la «cuestión institucional» del valimiento definiéndolo como institución *de facto*, lo que explicaría mejor por qué el valido actuó como agencia ministerial pese a carecer de respaldo normativo. Como prueba se usan varias cartas enviadas a don Luis de Haro por el duque de Alburquerque entre 1644 y 1654.

Palabras clave: Historiografía; valido; virrey; Felipe IV; Luis de Haro; duque de Alburquerque.

ABSTRACT: In 1963, Francisco Tomás y Valiente published *Los validos en la monarquía española del siglo XVII. Estudio institucional*, in which he defined the royal favourite as an *institution in fieri*. Subsequent historiography has distanced itself from this institutionalist view. On the one hand, empirical scholars have analysed the royal favourite without

explicitly addressing the institutional question. On the other, historians of political culture have considered the phenomenon an original manifestation of royal sovereignty, but not an institution. This article defines the royal favourite as a *de facto* institution: a royal agency that did not require formal legal status. To support this argument, it examines several letters sent to Luis de Haro by the Duke of Alburquerque between 1644 and 1654.

Keywords: Historiography; royal favourite; Philip IV; Luis de Haro; Duke of Alburquerque.

1. INTRODUCCIÓN

En 1963, Francisco Tomás y Valiente publicó *Los validos en la monarquía española del siglo XVII*, obra pionera a la que subtituló *Estudio institucional.* En ella dio por resuelto el problema de la naturaleza del valimiento al calificarlo como institución *in fieri*. Según la Real Academia Española, de los varios significados que ofrece la palabra institución los más aptos para la propuesta de Tomás y Valiente serían los de «establecimiento o fundación de algo» y «cosa establecida o fundada», mientras que la locución latina *in fieri* es traducida como «en vías de hacerse o haciéndose» (Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, voces «institución» e «*in fieri*», consultado el 2 de febrero de 2025). En el estado en que entonces se hallaba la literatura sobre validos, hablar de institución *in fieri* resultó razonable, pese a la carga teleológica que implicaba. La biografía de Olivares publicada por Gregorio Marañón en 1935 había interpretado el valimiento en términos demasiado personalistas o de temperamento, sin «estructuras institucionales», un vacío que urgía corregir (Elliott, 2013). Por ello, Tomás y Valiente presentó el valimiento como una realidad política en vías de institucionalización, aunque atravesada por una tensión difícilmente resoluble: por un lado, la necesidad de dotar de forma, nombre y legitimidad a la posición del privado; por otro, el temor a que esa misma formalización pudiera interpretarse como la creación de una instancia intermedia capaz de oscurecer la soberanía del rey. En ese proceso, iniciado con el duque de Lerma, la expresión «primer ministro» fue ganando terreno desde el valimiento de Olivares hasta alcanzar una formulación más explícita con don Luis de Haro, reconocido en 1660 como «primer y principal ministro» del monarca. Sin embargo, Tomás y Valiente subrayó también los límites de dicha institucionalización: ni los cargos palatinos u honoríficos acumulados por los validos bastaban para definir una función política estable, ni los títulos nobiliarios resolvían por sí mismos el problema de su legitimación. El mismo Haro, que según Tomás y Valiente habría supuesto el ejemplo más próximo a la identificación entre valido y primer ministro, se sostuvo

sobre unos cargos y títulos relativamente sobrios, lo que pone de manifiesto tanto el avance como la persistente ambigüedad de aquella institucionalización del valimiento (Tomás y Valiente, 1982, pp. 96-111, especialmente pp. 108-111).

Con todo, Tomás y Valiente afirmó que una práctica tan rompedora como el valimiento no habría podido existir sin una mínima cobertura institucional. ¿Fue así? Y, en caso afirmativo, ¿solo pudo ser *in fieri*? En refuerzo de su propuesta debe tenerse en cuenta también la aportación de otro insigne historiador del derecho, José Antonio Escudero. A raíz de su investigación sobre los secretarios de Estado, tan seminal como la de Tomás y Valiente sobre los validos, Escudero corrobora los «perfiles institucionales» del valimiento ya desde Lerma, con quien se habría iniciado «la etapa de institucionalización de los validos». En cambio, disiente de su colega en cuanto al significado de la expresión «primer ministro», oficializada en 1660, como prueba de la culminación de este proceso, pues en sentido estricto carecía de cualquier «contenido jurídico preciso», por lo que su significado respecto al valido «debía ser lo mismo que llamarle *principal ministro*, es decir, reconocer la preeminencia del favorito», pero sin que el valido hubiera adquirido categoría de oficio ni, por tanto, nombramiento, salario, rango ni obligaciones precisas. «La figura del valido, por consiguiente, carece en la primera mitad del siglo XVII de marco institucional y soporte jurídico, y es una mera situación de hecho» (Escudero, 2004, 2008; ver particularmente 2009, pp. 670-675). Es difícil no estar de acuerdo con este matiz.

Desde Tomás y Valiente y Escudero el enfoque institucional de los validos ha declinado, con alguna excepción (Pérez Marcos, 2012). Pero el cúmulo de obras consagradas al valimiento desde 1963 parece invitarnos a replantear el tema. En parte, porque desde aquella fecha no se ha realizado ninguna investigación tan sistemática como la de Tomás y Valiente. La tendencia, también razonable, ha sido colmatar los vacíos existentes sobre cada valido por separado sin dar visiones de conjunto (Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, 1975; Brown y Elliott, 1981; Elliott, 1986; Elliott y Brockliss, 1999; Elliott y García Sanz, 1990; Stradling, 1989; Williams, 2007). Estos estudios de caso, naturalmente, han contemplado el problema relacional del valido con las demás instituciones, pero poniendo el acento en el grado de poder exhibido por las partes en conflicto más que en reflexionar sobre la esencia del valimiento como posible institución en concurrencia con otras. A este respecto, la biografía de John H. Elliott sobre Olivares de 1989 asentó esta visión del problema, en la que ahondó Anthony Thompson, para quien los validos fueron personajes «con funciones políticas e institucionales», pero que «operaron fuera (o al lado) de los canales institucionales establecidos». Y concluye categórico: «Considerado, pues, como un sistema de gobierno, el valimiento puede contemplarse como una forma de desinstitucionalización, de politización; el instrumento de la corona para recuperar el control del gobierno» (Thompson, 1999, p. 27). Cabe preguntarse si una forma de gobierno que es denominada «sistema» pudo no ser una institución. Muy relevante,

por otro lado, es su idea de que los validos fueron fruto de la razón de Estado, esto es, de la voluntad del rey de fortalecer su autoridad socavando conscientemente la tradición. Estas ideas son posiblemente la más divulgadas hasta hoy en las obras de síntesis (Sánchez González, 2019).

Desde la década de 1990 la nueva historia política consagró el interés por los validos como agentes del poder, pero no, o menos, como institución. El enfoque se desplazó a la cultura política del tiempo en todas sus derivadas: el discurso, la imagen, la familia, el mecenazgo, el uso de la gracia, el patronazgo (y la corrupción), las redes, el clientelismo, la literatura, el control de los espacios y el género, por citar solo las líneas punteras. Y, por supuesto, la conflictividad del valido con otros grupos y facciones, que parece haber interesado más que la relación *valida* con las instituciones mismas (Alvar Ezquerra, 2010; Benigno, 1992, 2020; Bermejo Vega, 1993; Bolaños Mejías, 2004; Fernández Mosquera, 2013; Fernández-Santos Ortiz-Iribas, 2020; Feros, 2000; García García, 1996, 1997a, 1997b, 1997c, 2001, 2003, 2020a, 2020b, 2024; González Cuerva, 2012; Hortal Muñoz, 2023; Lawrence et al., 2011; López Millán, 2018; Malcolm, 2001, 2016, 2017; Martínez Hernández, 2008, 2014, 2016; Mrozek Eliszezynski, 2018, 2020; Rivero Rodríguez, 2017, 2023; Tropé, 2010; Valladares, 2016, 2018; Villarreal Brasca, 2024). En realidad, la problemática institucional no está ausente en esta última bibliografía, pero queda subsumida en otros campos. Por ejemplo, se recoge en los títulos consagrados a los procesos judiciales a que fueron sometidos privados y validos, una línea que ya constituye un subgénero (Eliszezynski, 2015; Galván Desvaux, 2016; García García, 1999, 2012; Martínez Hernández, 2009). Este artículo, sin embargo, no indaga en tales campos, todos esenciales, sino en la posible naturaleza institucional del valimiento y en sus consecuencias.

2. LA *ANOMALÍA* DE PRIVAR

Un ramal de la nueva historia política ha desembocado en la cancelación de la tesis de Tomás y Valiente al determinar que el valido representó una «anomalía» tan contraria a la tradición jurídico-política heredada que se situaría en las antípodas de cualquier formato institucional (Carrasco Martínez, 2021; Carrasco Martínez, como se citó en Guillén Berrendero, 2025). Se entiende que el término anomalía se ajusta aquí a los dos significados que de él da la Real Academia Española: puede ser «desviación o discrepancia de una regla o de un uso» o «defecto de forma o de funcionamiento». Para estos autores, el valido consistió en un «cuerpo extraño en la cima del Estado» que, precisamente a causa de su naturaleza transgresora, imposibilitó los intentos para institucionalizarlo mediante su conversión en una suerte de omnipotente secretario de Estado. En este sentido, conviene recordar que el propio Tomás y Valiente recogió la propuesta —firmada por Saavedra Fajardo en 1640— de

crear para el valido una «Presidencia de los Consejos», lo que habría supuesto institucionalizar la supervisión que, por entonces, Olivares ya ejercía sobre el gobierno de Corte (Barrios, 2016; Tomás y Valiente, 1982, p. 67). Lo interesante es que mientras para el jurista valenciano estas proposiciones fallidas representaron capítulos en un proceso con altibajos pero que, a la postre, culminó en la aparición del primer ministro —o sea, en la institucionalización del valido—, en cambio para Carrasco y Guillén constituyen la prueba de que la «anomalía» valida era refractaria por naturaleza a cualquier intento de institucionalización o, si se prefiere, de normalización.

De hecho, expresiones como «anormalidad», «poder informal» o «falta de acreditación», todas referidas al valido, son usadas para sostener la interpretación de que este resultó obstinadamente contrario a encajar en ninguna institución, y de ahí su conflictividad. Téngase en cuenta que esta visión no se centra solo en el arranque del valimiento con Lerma, por tanto, cuando la «anomalía» se hallaba en boca de todos. Como señaló Escudero, «cuando los contemporáneos advierten la convulsión del cambio» (el mando otorgado a Lerma por el rey), el valido «carece de marco institucional y soporte jurídico, y es una mera situación de hecho», lo que solo se corregirá parcialmente en 1660 con el título de primer ministro para Haro. Pero a pesar de estas carencias, el valimiento, desde Lerma, entra «en la etapa de institucionalización» (Escudero, 2009). Así, para Escudero la «convulsión» representada por Lerma no anularía el potencial institucional del valido, que se habría ido construyendo, sin acabar del todo, durante el resto de la centuria. En cambio, para Carrasco y Guillén la «anomalía» introducida por Felipe III empujó en dirección opuesta desde más allá de su reinado. «Pensamos —anota Guillén— que es importante introducir el problema que plantea la condición anómala del valimiento como forma de gobierno durante el siglo XVII y los problemas derivados de ello». El valido, pues, sería una anomalía política en toda regla al situarse fuera, por encima y, en su caso, incluso contra las instituciones.

En puridad, más que «introducir» la cuestión de la «condición anómala del valimiento» sería más acertado hablar de la continuidad de este debate, pues desde que Tomás y Valiente identificó esta cuestión la gran mayoría de las pesquisas sobre el valimiento han partido de ella. En este sentido, para Tomás y Valiente el valido ya resultó igual de anómalo —genéricamente hablando— que para cualquier otro estudioso de la materia posterior al insigne jurista. Cuestión diferente es el modo de aproximarse al problema y las conclusiones de cada autor. Feros, por ejemplo, ha preferido abordar al valido desde la categoría de la legitimación, escudriñando en los tratados coetáneos los intentos de justificación del valimiento. Según él, con Lerma hubo un claro intento de institucionalizar al valido, al que define como «una suerte de primer ministro *de facto*, cuya legitimidad no era exactamente institucional». Pero este intento, consistente en desplegar «teorías, conceptos e imágenes» encaminados a legitimar al valido, fracasó en la medida en que no cuajó en la creación

de un oficio propiamente dicho. Ni siquiera el discurso del valido como mejor *amigo* del rey llegó a ver la tierra prometida. El poder de Lerma siguió siendo «más informal como principal consejero del rey» (Feros, 2002, pp. 141-143). Refiriéndose al trabajo de Feros, Salas Almela añade complejidad al señalar que «la búsqueda de un apoyo legitimador es muy diferente de la objetividad y formalización que se supone a la conversión de una función *de facto* en una institución (…), salvo que el autor argumentase que legitimar es ya un primer paso hacia la institucionalización. Esta última idea implícita —e interesante— necesitaría, a nuestro juicio, un mayor desarrollo» (Salas Almela, 2010, p. 171). La misma identificación entre legitimar e institucionalizar el valimiento parece advertirse en la reciente investigación sobre Lerma de Villarreal Brasca, quien define su gobierno como «sistema *de facto*» pero con «ejercicio institucionalizado en el plano pragmático». Es decir, con más éxito institucional del que Feros llegó a reconocer. La apreciación de esta autora es también muy valiosa porque se asienta sobre el análisis de la relación entre Lerma y el Consejo de Indias, una institución en pleno (Villarreal Brasca, 2024, pp. 105-111). La última aportación significativa a este debate ha sido la de Hermant, para quien el valido fue una «figura extrainstitucional», sin reglas, pero con «principios», cuya institucionalización habría tenido lugar no en 1660 sino en 1676 con don Juan José de Austria, «primer ministro» que puso fin a la «transgresión de la norma» (otra anomalía) representada por el valimiento. Solo entonces «la práctica se institucionaliza, recortando sus contornos gracias a un trabajo de objetivación» impuesto por la nobleza a Carlos II, un rey de escasa autoridad. Para limitar su poder, el valido es normalizado a costa de transformarlo en un ministro oficial (Hermant, 2013).

Todo apunta a que las incógnitas que Tomás y Valiente creyó haber despejado no han desaparecido y que las cuestiones que plantea la hipotética carga institucional de la figura del valido se mantienen inquietantemente en pie. Podría incluso decirse que cada uno de los autores citados tiene su parte de razón. Ante quienes comulgan con la idea de que el valido fue una institución, es difícil oponer argumentos frente a realidades como su larga duración o su progresiva aceptación. Quienes creen que no llegó a serlo, siempre podrán insistir en la falta de un decreto de nombramiento y de regulación. Los que ven al valido como una «anomalía» indigerible por la tradición pueden demostrarlo acogiéndose a la tormenta que Lerma desató en la Monarquía —la «convulsión» de que habló Escudero— y que nunca se calmó del todo ni con Olivares ni con Haro. Pero también cuesta poco dar con argumentos contrarios a todas estas visiones. Si el valido fue una institución *in fieri*, las suspicacias teleológicas afloran por doquier. Si nunca lo fue, resulta inexplicable que actuara como una institución y gozara de tal consideración para generaciones de súbditos. Y si fue una anomalía tan radical —ya fuera por desviación, discrepancia o defecto, por seguir la semántica que la Real Academia otorga al término anomalía—, surge la pregunta de cómo pudo serlo durante una andadura tan larga como la que experimentó. Por fuerza o por inercia, el valimiento habría devenido otra cosa: se normaliza, muta o

desaparece. Otro gran historiador del derecho, Tau Anzoátegui, ya señaló que la renovación del estudio de las instituciones ha sido fruto del interés por su práctica social, y es ahí donde quizás podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas (Tau Anzoátegui, 2000, p. 80).

La cuestión institucional del valimiento perdura ante la evidencia de que nos movemos sobre un terreno sin perimetrar a gusto de todos. Incluso han surgido tres neologismos que rivalizan (o lo han intentado) con valimiento: *validismo*, *validaje* y *validato*. El primero lo encontramos en la obra de Ramón Ezquerra sobre la conjura del duque de Híjar publicada en 1934, donde lo usa para referirse al gobierno de Haro. «La raíz de todo —escribe— estaba en el odio de Haro a Híjar por su oposición al validismo». (Ezquerra Abadía, 1934, p. 328). El segundo, validaje, parece haber nacido en 2004 (Suárez Fernández, 2004), y lo retomó Torres Arancivia algunos años después (Torres Arancivia, 2022b, p. 100). Este último autor, sin embargo, solo usó valido, no valimiento, en su obra sobre la corte virreinal de Lima (Torres Arancivia, 2006, 2022a). Validato ha sido el último vocablo en surgir (Pérez Gil, 2006, p. 159). Pérez Gil habría sido el primero en usarlo, tal vez su creador. Después de él solo lo hemos encontrado en un artículo de prensa del historiador y especialista en Historia Contemporánea José Manuel Cuenca Toribio [«La crisis en perspectiva histórica (s. XVII) III», *El Imparcial* de Córdoba, 7 de diciembre de 2012, consultado el 27 de marzo de 2025), y en un reciente manual de Historia Moderna (Santana Pérez, 2024, sección «El validato del duque de Lerma (1598-1618)»]. El autor, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, usa validato solo para referirse al periodo de Lerma, pero no para el de Uceda ni para el de Olivares. Haro ni siquiera aparece. Tanto validaje como validato han tenido un uso limitado.

En el *Tesoro de la lengua castellana* de Sebastián de Covarrubias (Madrid, 1611) aparecían ya las voces *privar*, *privado* y *privanza* con el significado que actualmente les damos los historiadores. En cambio, *valido* y *valimiento*, también con sus significados de hoy, tuvieron que esperar al *Diccionario de autoridades* del siglo XVIII para entrar oficialmente en la lengua española (Real Academia Española, *Diccionario de autoridades*, VI, 1739, voces «valido» y «valimiento», consultado el 28 de marzo de 2025). Por consiguiente, si ya disponíamos de suficiente vocabulario para expresar con propiedad los conceptos que demanda la historiografía sobre esta práctica de gobierno, sorprende la aparición de los tres términos referidos. En consecuencia, es comprensible también que ninguno de ellos haya sido aceptado por la Real Academia Española. El de validato quizás deba su origen —por analogía— a la influencia del francés *ministériat*, que en todo caso habría generado el término *ministeriato*. La relación entre validato y ministeriato sería también semántica, ya que *ministériat* equivale en francés al valimiento español. Según el *Dictionnaire de français Larousse*, el «*ministériat*» era en la Francia del Antiguo Régimen el «système

de gouvernement qui consacre la prépondérance d´un ministre, portant le titre de «Premier ministre» ou de «Principal ministre d´État». (Richelieu sous Louis XIII, Mazarin pour Anne d´Autriche et le cardinal de Fleury sous Louis XV.)» (consultado el 28 de marzo de 2025).

Esta inestabilidad en los términos nos empuja a buscar algún punto de encuentro capaz de superarla. La propia bibliografía sugiere una pista: si hay un denominador común en las interpretaciones sobre el valimiento es su condición de fenómeno *de facto*. Quizás fue así porque su naturaleza no respondió a la idea regia de institucionalizar al valido cuando llegara el momento oportuno, sino porque la corona apuntó a que fuera lo que siempre fue: una institución siempre *de facto* o, lo que es igual, una institución perpetuamente anómala —ahora sí— por la desviación, discrepancia o defecto que su índole evidenciaba con respecto a la tradición y a la soberanía real, una soberanía que el valido intentó fortalecer, no debilitar. Con su lucidez habitual, Elliott ya explicó que la anomalía (él también usó esta palabra, aunque en un sentido menos radical) representada por el valido fue solo aparente:

> En las sociedades monárquicas con una visión muy personalizada de la realeza (…) el ministro-valido parecería a primera vista una anomalía. Sin embargo, una de las ironías de la figura del valido es que (…) realmente contribuyó al reforzamiento del poder regio. (Elliott, 1997, p. 899)

Una situación anómala no equivale necesariamente a una anomalía. De ahí que el valido no tuviera que ser institucionalizado. Ningún monarca prudente habría expuesto a sus súbditos a una diarquía institucional de este calibre, que sí habría supuesto una anomalía incontestable. Pero la naturaleza de la monarquía compuesta impelía a la corona a auxiliarse con algún otro instrumento, aparte de ella misma, común y superior a los Consejos y a los territorios. De hecho, Felipe II pagó un alto precio por intentar construir un espacio político exclusivo junto a sus secretarios en el que pudiera decidir sin interferencia de los Consejos (Escudero, 2019, p. 173). El recuerdo de Ruy Gómez de Silva, el privado de Felipe II a quien los coetáneos llamaron irónicamente «rey Gómez», debió de pesar más de lo que parece. Esta expresión la recogió un embajador veneciano en 1557 (Boyden, 1995, p. 63). Las nuevas investigaciones sobre Ruy Gómez han reforzado la imagen de autoridad de que gozó este personaje (Guillén Berrendero et al., 2018). Todo indica que fue la crisis del *affaire* Antonio Pérez lo que arruinó el experimento iniciado por Carlos V, y seguido por su hijo, de crear *secretarios fuertes* en pro de la corona, lo que llevó a recuperar a un viejo conocido de la baja edad media castellana: el valido (Calderón Ortega, 1998). Nunca sabremos qué evolución hubieran tenido estos secretarios fuertes, caso de haber seguido su desarrollo, y menos aún si su consolidación habría evitado el valimiento, como al parecer sucedió en el Portugal del siglo XVI, si bien aquí el proceso estuvo interferido por la incorporación de esta corona a la

Monarquía de España (Costa, 2008; Gama, 2011). En todo caso, fue obvio que el valido, cuando resurgió con Felipe III, en ningún caso debía percibirse ni siquiera como un alto secretario, sino como otra cosa.

Para saber cuál, de nuevo el diccionario puede ayudarnos. La tercera acepción que la Real Academia establece de la locución *de facto* es «que no se ajusta a una norma o prescripción legal previa». Por tanto, cuando los investigadores han optado por añadir *de facto* a la definición del valimiento se diría que han acertado. El acierto va a más con la definición del *Diccionario panhispánico del español jurídico*: «*De facto*: Dicho de una situación que existe de hecho, pero que carece de fundamento jurídico, *lo que no impide que produzca efectos jurídicos*» (Real Academia Española, *Diccionario panhispánico del español jurídico*, voz «*de facto*», consultado el 28 de marzo de 2025). La cursiva que cierra la cita es nuestra: con esta última frase podría escribirse la historia del valimiento.

¿Cómo operó el valido con y entre las instituciones que no eran *de facto*? Un modo de saberlo consistiría en indagar a la inversa: cómo los coetáneos se relacionaron con el valido. Lo que aflora entonces son los rasgos institucionales de este, que no se distinguieron de los de las instituciones oficiales: todas compartieron legitimidad de origen, reconocimiento social, duración, un *modus operandi* visible y una finalidad u objetivos asumidos más o menos colectivamente. El valido devino así institución *de facto* a causa de desempeñar unas funciones determinadas de una manera reconocible por todos. Era tan real y auténtico social e institucionalmente como las instituciones que actuaban codificadas por la ley, o casi. A este respecto importa señalar que la institución *de facto* no debe confundirse con las denominadas instituciones informales, esto es, los conjuntos de reglas no escritas asumidas implícitamente por una comunidad[1]. El estudio de las instituciones informales ha sido, y es, tarea habitual de antropólogos, sociólogos y politólogos más que de los historiadores. Pero los debates de estos especialistas sobre las distintas definiciones, consecuencias y modos en que interaccionan las instituciones formales con las informales son una mina para cualquier modernista (Colson, 1974; Helmke y Levitsky, 2004; Leiras, 2004; Pejovich, 1999). El valido era un ministro del rey, no un conjunto de reglas ágrafas. Institución, pues, *constituida* antes o mejor que fundada, sin decreto de génesis y desprovista de la servidumbre de un reglamento. La unicidad del valimiento cimentó la nueva institución, en el sentido de que el rey ya no dio opción a canalizar los actos de gobierno sino a través de su hombre de confianza, erigido así en institución *de facto*. Desde ahora hablar del valido como factótum del rey no fue un oportunista juego de palabras, sino una descripción realista del proceso de creación de un determinado poder ocurrido en la Monarquía.

1. Agradezco a la profesora Margarita Serna Vallejo su valiosa ayuda para la caracterización de la institución *de facto*.

Este cambio generó nuevos problemas, pero también expectativas ante la posibilidad de explotar una institución encarnada por una sola persona. Hubo un virrey de Nueva España que intentó aprovechar esta circunstancia carteándose con el valido.

3. EL VALIDO Y EL VIRREY

La institución y cultura virreinales en la Monarquía de España respondían a unos patrones hoy bien identificados (Gálvez Martín, 2023; Rivero Rodríguez, 2011). Don Francisco Fernández de la Cueva, VIII duque de Alburquerque (1619-1676), nació en Barcelona cuando su padre, el VII duque, ejercía precisamente de virrey de Cataluña antes de ser embajador en Roma y luego también virrey de Sicilia. Empezó desempeñándose como militar en los frentes de Fuenterrabía (1638) y Flandes, participando en la batalla de Rocroi en mayo de 1643. Por su discutido papel en ella fue removido del ejército, al que regresó como oficial en Cataluña entre 1648 y 1649, y luego como exitoso capitán general de las galeras de España entre marzo de 1650 y 1653. Duque titular en 1637 y gentilhombre de Felipe IV desde el 8 de mayo de 1644 (para tapar su descalabro en Rocroi), en enero del año siguiente casó con Juana Díez de Aux, hija y heredera de Lope Díez de Aux, I marqués de Cadereyta (hoy Cadreita) y virrey de Nueva España entre 1635 y 1640. Conocía al dedillo, pues, el mundo de los altos cargos que solían conformar la biografía de un título y grande como él, que también desempeñaría un notable papel como mecenas (Abarca, 2024; Cañeque, 2004a, pp. 232-235; Fernández Bulete, 1998; Fernández Duro, 1884; Israel, 1980, pp. 252-262; Martínez Hernández, 2016, p. 91; Montes González, 2016; Rivero Rodríguez, 2023; Rodríguez Villa, 1884; Sanzsalazar, 2020).

Ignoramos cuándo conoció Alburquerque a don Luis de Haro, lo que pudo ocurrir antes de su regreso a la Corte a fines de 1643. Desde este momento ya no hay duda de que Haro y Alburquerque mantuvieron contacto, tanto por el puesto de gentilhombre que el rey concedió al duque como por su implicación en la guerra de Cataluña, que don Luis comandó *in situ* entre 1643 y 1647 (Valladares, 2024; 2026). A efectos de este artículo, interesa destacar que en 1644, con solo veinticinco años, solicitó el puesto de virrey de Nueva España, que le fue denegado por su corta edad.

Durante la negociación, Alburquerque dirigió una carta al rey insistiendo en «su pretensión». Se trata de un valioso documento para adentrarse en su mentalidad de grande[2]. Sabedor de que tenía difícil lograr el virreinato, el duque argumentó que cumplía sobradamente los tres requisitos que exigía un monarca para repartir cargos: «o por los servicios personales, o por los heredados, o por las buenas

2. El documento, localizado en el Archivo de los duques de Alburquerque (en adelante, ADAL) en Cuéllar, Segovia, lo publicó Fernández Duro (1884, pp. 50-52). Aunque carece de fecha, quizás por tratarse de una copia, es casi seguro que sea de mediados de 1644.

esperanzas de los venideros». Alburquerque se consideraba el mejor candidato en los tres supuestos y solicitaba ser recompensado porque el oficio de gentilhombre no había logrado «cerrar la boca a la malicia que, como el premio, aunque tan grande, fue de diferente profesión, solo se aseguró el escrúpulo de mi modo de proceder, no el de la suficiencia». En otras palabras, servir en la Corte probaba la virtud de su sangre, pero no capacidad de gobierno. Si el duque no demostraba ser *suficiente* para un cargo político, jamás se repondría de Rocroi. Pero su juventud, que él pretendía compensar con sus deseos de servir, le impedía acceder al virreinato. No había ninguna ley al respecto, pero sí una doctrina asentada. Como indicara en su *Instrucción* el presidente del Consejo de Indias, Pablo de Laguna, a Juan de Mendoza, III marqués de Montesclaros, al ser nombrado virrey de México en 1603, el *alter ego* del monarca debía siempre «parecer más viejo que mozo» (Cañeque, 2004b, p. 615). La autoridad del puesto estaba reñida con la juventud.

Adiestrado por generaciones de altos cargos y, naturalmente, por su propio padre, dos veces virrey, Alburquerque se esmeró en desmentir que sus pocos años pudieran apartarle del virreinato. Como arguyó,

> De ignorancia nunca pueden errar los virreyes sin gran malicia, porque las resoluciones de estos no las toman a solas (…). Las noticias se van adquiriendo dentro del mismo oficio sin que sea inconveniente el empezar sin ellas, porque todos los reinos se gobiernan debajo de unas máximas generales que tiran a solo un fin, que es la justicia, y estas se varían en cada provincia conforme las costumbres y la inclinación de aquella nación, pero estas ya las halla establecidas el que gobierna. No tiene mucha dificultad el observarlas y, para los casos nuevos que pueden ocurrir, tiene puestos Vuestra Majestad ministros que ayuden, como he dicho, al acierto de los virreyes. Esto es salvar la única objeción que puede haber contra mi falta de experiencia. (Fernández Duro, 1884, p. 51)

Es obvio que Alburquerque quedó muy tocado por Rocroi. Aquel tropiezo se tradujo en un lastre que urgía soltar y para este fin no bastaba el cargo de gentilhombre. A este respecto, el duque debía estar al tanto de que en el siglo XVII no pocos de los virreyes novohispanos habían sido gentilhombres de Su Majestad antes de pasar a América (Cañeque, 2022, p. 62). Esta experiencia palatina sin duda contribuyó a replicar en Indias la cultura cortesana peninsular, incluido el valimiento y la creación por el virrey de un notable aparato clientelar (Büschges, 2002; Latasa Vassallo, 2012; Suárez, 2017; Sullón Barreto, 2018; Villarreal Brasca, 2018). Alburquerque, pues, sabía que estaba en el trampolín adecuado, pero quiso saltar antes de tiempo. En su impulsiva carta al monarca palpitaba la autoestima del hijo de un grande convencido de sabérselas todas y, también, de quien estaba a punto de convertirse en el yerno de otro, Cadereyta. No sabemos si cuando Alburquerque redactó estas líneas ya había concertado su matrimonio con la hija del citado marqués, pero resulta muy probable, dado que el enlace tuvo lugar el 12 de enero de 1645 (Montes González,

2016, p. 77). Por tal razón, su futuro y experimentado suegro bien pudo inspirar al menos parte de la carta a Felipe IV. La paradoja fue que la actitud y los argumentos de Alburquerque seguramente dieron la razón a quienes lo juzgaban como un joven todavía inmaduro para el virreinato.

El duque purgó su ansiedad extemporánea en el frente catalán hasta 1653. Entre sus éxitos estuvo la toma de Barcelona en octubre del año anterior. Haro y Alburquerque tejieron su relación con los hilos del servicio al rey, uno como valido y otro como soldado. «Señor mío —le escribió don Luis al duque en 1650—, haber tomado seis galeras con cuatro navíos no tengo noticia de que se haya visto antes». Haro, grande también, aunque menos linajudo, firmaba sus cartas a Albuquerque como «su primo», que era el tratamiento correspondiente a esta categoría (Fernández Duro, 1884, pp. 63-65)[3]. Alburquerque le correspondió encantado, entre otras cosas porque desde febrero de 1648 Haro se había convertido en el nuevo gran canciller de Indias. Este oficio le capacitó para presidir el Consejo de Indias cuando este sesionaba sin su presidente (Lohmann Villena, 1953, «Estudio preliminar»; López Castillo, 2001). La doble condición de Haro como valido y gran canciller aunó dos naturalezas institucionales muy singulares —la primera *de facto* y la segunda oficial— que inevitablemente influyeron en la relación con el duque y en la obtención, por parte de este, del ansiado virreinato.

El nombramiento de Alburquerque como virrey de Nueva España se produjo el 9 de marzo de 1653. Felipe IV argumentó en su resolución el papel del duque en la recuperación de Barcelona unos meses antes (Montes González, 2016, pp. 88-89). Además, habían transcurrido casi diez años desde aquella primera solicitud de Alburquerque para ser virrey de México. El tiempo y los méritos del duque, ahora con 34 años, le allanaron el premio. La corona, por su parte, después de unos años convulsos en Nueva España, pretendía estabilizar su gobierno y para tal objetivo Alburquerque resultaba prometedor por su carácter recio y su identificación con la autoridad monárquica. En general, el duque no defraudó.

Todo apunta a que Haro intervino para que Alburquerque lograra el virreinato. Al menos, así se desprende de tres valiosas cartas que el duque remitió a don Luis desde México[4]. Tras tomar posesión de su cargo el 15 de agosto de 1653, una de las primeras preocupaciones de Alburquerque consistió en establecer comunicación con la Corte mediante dos vías: una, a través de la obligada correspondencia con el rey, que solía pasar luego al Consejo de Indias para elaborar con ella las consultas;

3. Se trata de una carta de Haro a Alburquerque, Madrid, 1 de diciembre de 1650.

4. Las tres misivas se conservan en ADAL, caja 22, n.º 3, don Francisco de la Cueva a don Luis de Haro, Ciudad de México, 16 de noviembre de 1653; caja 22, n.º 3, del mismo al mismo, Ciudad de México, 20 de noviembre de 1653; y caja 22, n.º 1, del mismo al mismo, Ciudad de México, 31 de marzo de 1654.

y otra, paralela a la anterior, que el duque inauguró con el valido con conocimiento del monarca. Hasta donde sabemos se trató de un método nuevo, pues hasta la fecha los virreyes americanos no parece que hubieran tenido correspondencia directa con Lerma ni con Olivares. La participación de los validos en los asuntos indianos está documentada, por supuesto, pero a través de papeles del Consejo de Indias, de otros Consejos o simplemente a través de billetes o informes que circulaban entre los responsables de los distintos ramos de la administración imperial. Pero, salvo equivocación, no hay constancia de cartas cruzadas, ni continua ni esporádicamente, entre los virreyes de Indias y los sucesivos validos anteriores a Haro. Si estas cartas existieron, quizás se han perdido, aunque resulta improbable que un conjunto de esta entidad haya podido extraviarse sin dejar alguna evidencia. Así, por ejemplo, para el periodo de Lerma se ha señalado que «la documentación más útil para conocer la gestión de Esquilache [Francisco de Borja, criatura de Lerma, virrey del Perú entre 1614 y 162] se compone principalmente de las cartas que el virrey fue enviando a la corte durante su gestión, con sus respuestas por parte del rey o del Consejo de Indias», pero no del valido (Villarreal Brasca, 2023, p. 376). Bajo Olivares, el esquema de comunicación entre, a su vez, los virreyes de Lima y Madrid, parece haber sido prácticamente el mismo (Arrigo Amadori, 2013). En contraste con esta realidad americana, se conservan cartas de Olivares y Haro con los gobernadores generales de Flandes y Milán (Elliott y Negredo del Cerro, 2021; Valladares, 2024, pp. vol. XXII, 120, 132). La impresión que dejan los archivos es que los virreyes —europeos y americanos— escribían solo o prioritariamente al monarca, seguramente por motivos de rango institucional.

La carencia de cartas entre los virreyes indianos y los validos ha podido originar uno de los vacíos científicos más notables que aún persisten en la historiografía americanista, al menos para el siglo XVII. Como apunta Gálvez,

> Escasamente se ha analizado la circulación de la comunicación política entre Madrid y las cortes virreinales. Apenas han sido esclarecidas la naturaleza y sustancia de los vínculos de los virreyes con la propia Corte o en el Consejo de Indias antes, durante y a posteriori de ejercer sus oficios, junto a los movimientos y estrategias que desplegaron en tales esferas durante dichos periodos, cuyas dimensiones y adaptaciones se diluyen esencialmente por un problema de documentación. (Gálvez Martín, 2023, p. 172)

Si, por tanto, hasta la tentativa de Alburquerque en 1653 no hubo cartas directas entre los virreyes y el valido de turno, es necesario averiguar la razón de este hecho. Quizás se debió al temor de que una comunicación directa entre ambos poderes desatara el malestar del Consejo de Indias, ninguneado por una práctica que lo habría devaluado al puentearlo. Pero con Haro el valimiento ya había rodado bastante como para que la iniciativa de Alburquerque no resultara tan molesta como lo hubiera sido antaño. Aun así, parece que el valido la ignoró: ni en el archivo de los

Alburquerque ni en otros lugares se conserva ningún epistolario fruto de la relación que el duque propuso mantener con Haro. Es cierto que en el archivo de Cuéllar existe un códice —la caja 22— en cuya cubierta se lee «Al Excelentísimo Señor Don Luis Méndez de Haro, mi Señor y mi primo, Gentilhombre de la Cámara de Su Majestad y su Caballerizo Mayor», y una línea más abajo, «Duque de Alburquerque, Gentilhombre de la Cámara de Su majestad, su Capitán General de las Galeras de España y Virrey de la Nueva España», lo que da pie a creer que se trata de una recopilación de las cartas cruzadas entre ambos a mitad del XVII. Es más, Jonathan Israel utilizó este acerbo para estudiar el virreinato de Alburquerque y, en particular, las cartas que creyó dirigidas por el duque al valido (Israel, 1980, pp. 252-262). Sin embargo, cuando se leen con atención estas cartas se comprueba que, salvo tres de ellas, las demás fueron escritas por Alburquerque a Felipe IV, no a Haro. No es lo mismo dirigirse a *Vuestra Majestad* que a *vuestra excelencia*. El códice, pues, no es el epistolario entre Haro y Alburquerque que todo estudioso de los validos desearía encontrar, ni tampoco hay rastro de él en las cajas 20 y 21, que recogen papeles de la gestión del duque como virrey hasta el fin de su mandato en 1660. En todo caso, la carátula del códice comentado ha dado lugar a un largo equívoco sobre su contenido, huérfano de las ansiadas cartas entre los *primos* Méndez de Haro y De la Cueva.

En la primera de las tres cartas del duque al valido, fechada en Ciudad de México el 16 de noviembre 1653, Alburquerque le informó de otra misiva que había escrito al rey pero que ponía en manos de Haro

> para que, habiéndola visto, se sirva vuestra excelencia de darla a Su Majestad y suplicarle (…) me responda, y vuestra excelencia [me responda también], y que pasen estas cartas por solo la mano de vuestra excelencia, que es el camino seguro para que Su Majestad sea más bien servido[5].

Por su brevedad, la carta era casi un billete, lo que también habla de la prioridad otorgada al mensaje que contenía. Pero no había duda de la intención del virrey: solo tres meses después de haber tomado posesión, pretendía instaurar un sistema de comunicación restringido al triángulo formado por el monarca, el valido y él mismo, convirtiendo el gobierno de México en un espacio político privativo al más alto nivel. Parece que Alburquerque desconfiaba del Consejo de Indias, organismo responsable de elevar, como queda dicho, las consultas al monarca a partir de las cartas del virrey. Haro, pues, sería su mediador para que determinadas informaciones no pasaran al citado organismo, el cual, inevitablemente, se ocuparía solo de asuntos menores, o también de los mayores, pero solo tras pasar el filtro del valido.

Alburquerque miraba a reproducir en México un valimiento indiano mimético con respecto al del propio Haro y el rey en Madrid. A fin de cuentas, eso era lo que

5. ADAL, caja 22, n.º 3, Alburquerque a Haro, Ciudad de México, 16 de noviembre de 1653.

el duque había visto en España. Su propuesta no consistía en que el virrey tuviera un valido en su corte americana, algo que ya habían hecho otros y que tal vez él tampoco excluyera llegado el caso, sino en establecer un hilo directo entre el virrey de Nueva España y el valido en la Corte. La alianza entre ambos era tan apremiante en la visión de Alburquerque que estaba resuelto a fraguarla nada más llegar a México. Por ello, cuatro días después de la carta anterior, el 20 de noviembre de 1653, volvió a plantear la cuestión a don Luis. A su parecer, solo de la comunión entre el virrey y el valido nacería un gobierno justo en América. Alburquerque rememoró su despedida de Felipe IV en Madrid para legitimar su parábola. «Me mandó Su Majestad cuando le besé la mano —escribió a Haro— que no me mandaba otra cosa sino la administración de justicia y que estorbase pecados públicos»[6].

4. AMIGO DE LA PERSONA, NO DEL VALIDO

¿Cómo se interpretaba un mandato así al otro lado del Atlántico? Alburquerque pensaba haberlo cumplido. «En lo uno y en lo otro he obedecido», aseguró a don Luis al vanagloriarse de lo conseguido durante su primer trimestre en México[7]. El fin era convencer al valido del acierto que había supuesto su nombramiento como virrey. «Por las cartas y decretos que remito a vuestra excelencia reconocerá el estado en que he topado estas provincias, lo atrasado que estaba la hacienda del rey por no haberla cobrado»[8]. Tras tomar las primeras medidas de orden fiscal y de justicia, todos le habían reconocido que eso era lo que se esperaba de un buen virrey, pese a la lógica antipatía que había infundido entre los perjudicados. El duque no solo creía haber enderezado el mal gobierno, sino todo un régimen virreinal sumido en la desidia y la anomia. Alburquerque recurrió a una pregunta retórica, artificio de sus dotes manipuladoras, solicitando al valido y al rey —por este orden—, que le aclarasen si contaba con su beneplácito o si, por el contrario, preferían que dejara todo como lo había encontrado. La tensión vivida en el virreinato avalaba al duque, aunque su objetivo iba más allá: buscaba cambios. En la escuela de virreyes donde estudió el duque era incompatible mirar hacia otro lado después de que el rey le hubiera pedido hacer justicia en México, por no hablar del cometido de impedir «pecados públicos», expresión que en pleno confesionalismo auspiciaba una intervención política transversal, ubicua y perpetua —lo que le daba un gran poder. Para Alburquerque, el panorama novohispano se había traducido en una ocasión única para añadir algo más que matices a la ciencia de gobernar:

6. ADAL, caja 22, n.º 3, Alburquerque a Haro, Ciudad de México, 16 de noviembre de 1653.
7. ADAL, caja 22, n.º 3, Alburquerque a Haro, Ciudad de México, 20 de noviembre de 1653.
8. ADAL, caja 22, n.º 3, Alburquerque a Haro, Ciudad de México, 20 de noviembre de 1653.

> Y cuando vuestra excelencia y Su Majestad traten de enviar virreyes aquí, suplícole[s] no busquen persona que venga a servir al rey, si no es que ame al rey, y que sea amigo no del valido, sino de la persona del señor don Luis de Haro, que esto es lo que conviene al rey y a vuestra excelencia, porque de esta manera será el virreinato del rey y de vuestra excelencia y en beneficio de los vasallos, y no siendo así será el virreinato para ellos, como lo ha sido de muchos años a esta parte[9].

El diccionario del *amor político* de Alburquerque era el de la época (Cardim, 1999). Sin vínculo personal, ningún ministro daría fruto a la corona. En el rey, este vínculo era el amor sinalagmático con el vasallo, hijo de obligaciones mutuas; y en el valido, era la amistad con la persona que lo encarnaba, no la mera fortuna de haberlo conocido. De ahí que citara a Haro por su nombre. Monarca y valido debían elegir a aquellos que, además de servirles, les amasen. La diferencia entre ambas situaciones radicaba en el grado de compromiso inherente a cada una, siendo interesado en la primera e ilimitado en la segunda. Donde solo había servicio únicamente había medro, por supuesto particular; pero si al servicio se sumaba el amor, también habría justicia y, al extremo de la cadena, comunidad y Monarquía. Esa era la epifanía que el virreinato de Alburquerque estaba alumbrando en Nueva España según las órdenes que había recibido del rey en su partida.

Solo con su acendrado sentido de amor al rey y de amigo «del señor don Luis de Haro», el duque podría afrontar los ataques de sus émulos. Y la mejor protección que ambos podían brindarle en un lugar tan lejano consistía en mantener con él una comunicación directa, asidua y, por ende, privilegiada, en el sentido de que solo en este flujo de información reposarían los arcanos de su gobierno. Alburquerque, al enviar sus cartas a Felipe IV por medio de Haro y no del Consejo de Indias, pretendía erigir un nuevo modo de relación con el monarca, con el valido y con el Consejo; es decir, con el gobierno en su conjunto. Se entiende así que Alburquerque insistiera tanto a don Luis en el punto de cartearse entre ellos, que es donde reposaba la clave de su propuesta. Pero para ello necesitaba que el valido confiara en él:

> Yo procuro obrar lo que vuestra excelencia sabe de mí y parecer en todo hechura de vuestra excelencia y criado de Su Majestad. Y en premio de todo lo que trabajo y deseo asistir a vuestra excelencia solo le suplico me haga merced de responderme a esta carta y de que no haya ocasión en que yo no tenga cartas de vuestra excelencia (…) porque mi sangre, mi Casa, mi persona y los oficios que tuviere han estado y han de estar siempre y en todos tiempos a los pies de vuestra excelencia. Y esto es tan fijo que, después de Dios y el rey, no quiero ni deseo servir a nadie si no es

9. ADAL, caja 22, n.º 3, Alburquerque a Haro, Ciudad de México, 20 de noviembre de 1653.

> a vuestra excelencia por su persona y por lo que le estimo (…). Y si no, al tiempo doy por testigo y para continuación de esta verdad[10].

La profesión de fe de Alburquerque a Haro parecía aludir a un extenso *cursus honorum* de servicios cuyos detalles más comprometedores solo podía conocer el valido. La carrera de estos nobles al servicio de un ministro tan principal como Haro solía estar salpicada de pequeños y grandes favores, no todos confesables, que recrecían sus vínculos de dependencia. No es extraño que el duque echara mano de este recurso para que Haro se aviniera a cartearse con él en México, lo que esperaba se tradujese en un circuito epistolar cosido de complicidades. En la siguiente carta de Alburquerque a Haro, fechada en Ciudad de México el 31 de marzo de 1654, el duque ahondó en su empeño de convertir al valido en su interlocutor privilegiado. Alburquerque arrancó así:

> Además de lo que en esta doy cuenta a vuestra excelencia, me ha parecido enviar a vuestra excelencia copia de todos los despachos que escribo a Su Majestad que, aunque vuestra excelencia es fuerza que tenga por el Consejo [de Indias] noticia de todos ellos, nunca le darán tan individualmente [como yo] por lo mucho que tienen que hacer, como vuestra excelencia verá por menor en los que yo le envío. Suplico a vuestra excelencia se sirva de mandarlos ver todos y de hacer que, en tomando Su Majestad y vuestra excelencia la resolución que les pareciere, se me responda a todos para que yo pueda encaminar más seguramente los aciertos[11].

Los recelos del virrey sobre la capacidad o voluntad del Consejo de Indias para resumir acertadamente sus despachos al rey quizás fueran sinceros, pero servían al duque de pretexto para involucrar al valido en una correspondencia en principio solo destinada al monarca. ¿Quién vería antes estos despachos de Alburquerque, el rey, el Consejo de Indias o el valido? Más que el orden de su lectura, lo que el duque trataba de imponer a Haro (parece que sin haberle consultado) era un protagonismo involuntario en la gobernación de Nueva España que, en caso de hacerse realidad, aumentaría la influencia que Haro ya disfrutaba sobre el Consejo en calidad de valido y de su canciller mayor. Era imposible que en el mundillo de las covachuelas madrileñas no se supiera que el virrey de México hacía llegar a don Luis duplicados de las cartas dirigidas al monarca.

El resultado de este contacto con el valido sería también la intimidación que tal hecho causaría entre los consejeros de Indias, por no hablar de posibles inhibiciones en los debates y votaciones, por temor o por enojo. La contribución del duque a una administración americana más ágil resultaba dudosa. Pero el fin de Alburquerque

10. ADAL, caja 22, n.º 3, Alburquerque a Haro, Ciudad de México, 20 de noviembre de 1653.

11. ADAL, caja 22, n.º 1, Alburquerque a Haro, Ciudad de México, 31 de marzo de 1654.

no consistía en engrasar la maquinara, sino en mantener al valido al tanto de aquella información que el duque se ocuparía de versionar debidamente para salir airoso de su virreinato. Su amistad con Haro pensó le brindaba aquella oportunidad, inaccesible a los demás virreyes, que mutaría en protección hasta acabar su mandato. No había palabras suficientes para expresar el rendido afecto que Alburquerque profesaba a su *primo*, pero todas giraban, y no por casualidad, en torno a la idea de amistad. «Siempre ha de hallar vuestra excelencia en mí el ministro más reconocido, más obligado y el amigo más seguro».

El duque replicaba la *amistad* que la tratadística sobre validos había identificado como esencia del fenómeno en relación con los monarcas. De hecho, lo más sustancial de esta tercera carta del duque a Haro versaba sobre la necesidad de que la corona protegiera más y mejor a sus virreyes. Los graves conflictos que habían sacudido el gobierno de México en los últimos años habían dejado maltrecha la autoridad virreinal, un periodo que el suegro de Alburquerque, el marqués de Cadereyta, vivió muy de cerca. Su insistencia en la acertada selección de los virreyes descansaba otra vez en el vínculo de la amistad. Con astucia y elegancia, la imagen que Alburquerque pintaba del buen virrey parecía un autorretrato:

> Señor, las experiencias de lo mucho que he obrado en tan poco tiempo en todas las materias muestra lo que tengo representado a vuestra excelencia y es que, cuando Su Majestad y vuestra excelencia traten de enviar sucesor a estos cargos, sea buscando persona que no venga solo a sus conveniencias ni al servicio del rey, que es como han venido los más (…), sino que sea persona que ame al rey y se muestre amigo verdadero de vuestra excelencia, reconocida y fija hechura de su mano[12].

La gestión emprendida por Alburquerque requería también una protección mayor desde Madrid, proporcional al riesgo que el virrey había asumido al desafiar los intereses creados de Nueva España. La mayor amenaza a la que este se exponía eran las denuncias que los vasallos americanos podían enviar a la Corte, donde el virrey, por ausente, resultaba indefenso. El mecanismo que Alburquerque solicitó activar a Haro consistía en que este priorizase las noticias transmitidas por su virrey antes que las procedentes de cualquier otra instancia. El duque quería blindar su jefatura en Indias, sin más, y proponía al valido un *quid pro quo* para mantener la autoridad regia en ultramar:

> Bien reconocerá vuestra excelencia que en un reino que se compone de tan grandes provincias es fuerza que haya a quienes les pese de que los ajusten a que vivan como es razón. Y así suplico a vuestra excelencia que en cualquier cosa que se ofrezca aguarde a oír mi razón, pues por lo que soy y por mi puesto debe Su Majestad y

12. ADAL, caja 22, n.º 1, Alburquerque a Haro, Ciudad de México, 31 de marzo de 1654.

> vuestra excelencia escucharla dándome crédito, pues me ha elegido para este oficio, y más conociéndome. Bien sabe vuestra excelencia que a todos los virreyes que tienen a su cargo gobiernos de provincias se está con atención por Su Majestad y vuestra excelencia a honrarlos, favorecerlos y ayudarlos en todo, hallando el lugar que debe tener lo que se representa a Su Majestad y vuestra excelencia por los despachos, por ser [los virreyes] autoridad de Su Majestad en el puesto que le sirven. Y mucho más se debe tener esta atención en las partes tan remotas como estas, donde viene a ser mayor grandeza de Su Majestad el que sus virreyes tengan con sus súbditos la estimación que deben por sus oficios[13].

La distancia, a juicio de Alburquerque, convertía a los virreyes americanos en los más importantes de toda la Monarquía, pero también en los más vulnerables. Sin embargo, hoy sabemos que en términos políticos y de obediencia la lejanía de Madrid no se medía en leguas, sino en intereses y en la forma en que estos se negociaban (Gaudin y Ponce Leiva, 2019). Con todo, Alburquerque necesitaba convencer al valido de que estas dificultades solo las afrontaría un virrey que además fuera su amigo. Se equivocó. Haro, pese a la insistencia de su *primo*, parece que no se avino a su plan o no, al menos, como el *amigo* que esperaba el duque.

5. CONCLUSIÓN

¿Por qué quiso Alburquerque cartearse privadamente con Haro? ¿Fue un gesto de coherencia con su idea, expresada en 1644 cuando aspiró por primera vez a gobernar Nueva España, de que para ser un buen virrey bastaba con recabar consejo? ¿Pretendía, llegado el obligatorio juicio de residencia, proteger su gestión con las cartas del *amigo* valido? ¿Y por qué Haro, a tenor de la documentación disponible, no aceptó su propuesta? Técnicamente al menos, no hay duda de que una línea de comunicación privilegiada con el virrey de México le habría suministrado a don Luis una información preciosa para ejercer su gobierno. Sin embargo, nada de esto parece haber sucedido con Alburquerque ni tampoco con su sucesor, don Juan de Leyva, II conde de Baños y virrey de México entre 1660 y 1664. El dato es pertinente porque Baños, en calidad de V marqués de Ladrada, era familia de Alburquerque. Entre los documentos de Baños conservados en Cuéllar o en otros archivos tampoco hay rastro de correspondencia entre Haro y el conde (Ragon, 2024, pp. 15, 179). Tampoco, en fin, parece que se carteara con el valido su también pariente don Diego de Benavides, VIII conde de Santisteban, virrey del Perú entre 1660 y 1666. Entre su llegada a Lima en julio de 1661 y la muerte de Haro en noviembre del mismo año hubo tiempo para que ambos hubieran cruzado más de una misiva (Jiménez Jiménez, 2024, pp. 29, 147).

13. ADAL, caja 22, n.º 1, Alburquerque a Haro, Ciudad de México, 31 de marzo de 1654.

Tales preguntas nos devuelven al punto de partida, pues las tres cartas de Alburquerque a Haro transcienden el mero acto comunicativo. Felizmente conservadas hasta hoy, no son un material común. Si dejamos a un lado la retórica del duque sobre la amistad política, lo que emerge al fondo como problema es la naturaleza del valimiento y el tipo de poder que representó para los súbditos de la Monarquía. La anomalía que el valimiento supuso con Lerma devino luego normalidad; contestada, pero estable o, al menos, continua. Su persistencia le otorgó un halo institucional que fraguó en imágenes y percepciones cada vez más sólidas como las que Haro heredó. Como toda institución, el valimiento también estuvo hecho de tiempo.

Pero el valido aportó seguridad e inquietud a partes iguales, tal vez porque fue una institución *de facto* y su indefinición normativa amplió la especulación sobre sus verdaderas atribuciones, siempre fluctuantes. El poder del valido era tan considerable o lábil como dictasen las circunstancias, un rasgo que alejó al valimiento de la vocación de certeza que se espera tenga toda institución al uso. Por ello, a ojos de Haro, Alburquerque le desafió, pero no como pariente o amigo, ni siquiera como ministro, pero sí como valido, esto es, como institución, lo que no le agradó políticamente, según se colige de su silencio epistolar con el duque, un hombre casi veinte años más joven que don Luis que no entendió la institucionalidad que este encarnaba. Alburquerque intentó replicar con su *primo* Haro la teoría de la amistad insistiendo machaconamente en la existencia de un vínculo afectivo entre ambos como génesis de una comunicación insólita. El valido tuvo en su mano servirse de su *primo* para disponer del gobierno indiano a través del carteo exclusivo con su pariente, cliente o amigo virrey. En cambio, declinó fundar la gobernanza de México sobre esta vía extraña y prefirió asentarla en la normalidad institucional vigente, dejando al rey y a su Consejo de Indias el arbitraje de la política americana. Además, una relación epistolar como aquella le habría llevado a una situación de dependencia muy arriesgada. Es probable también que su condición institucional de gran canciller de Indias hiciera el resto para poner candado a los experimentos.

Esto no significa que Haro descuidase la oportunidad del mandato mexicano del duque para adelantar el servicio del rey (y el suyo propio), pero subsumiendo esta amistad en la institucionalidad *de facto* de su valimiento. Al no aceptar el papel de correspondiente extraordinario al que le instó Alburquerque, Haro repudió ensalzar la anomalía que el valimiento representó en sus inicios y que él había contribuido a normalizar. Las circunstancias de la Monarquía desde 1640 le impedían ser otro Lerma u Olivares, y él, y Felipe IV, lo entendieron perfectamente. Para añadir institucionalidad a su ministerio, don Luis sustituyó el discurso de la amistad, ya desgastado y peligroso, por el del servicio. Para cumplir como valido no necesitaba que el duque le involucrara en una correspondencia furtiva, por muy amistosa que fuera, al margen de los ministros indianos ni, menos todavía, que le hiciera sabedor de las cartas que dirigía al rey. Precisamente en la década de 1650, la más estable de

su valimiento, a don Luis le complacía que lo vieran como un director de orquesta que dejaba a cada Consejo interpretar su partitura (Malcolm, 2000, p. 645). Suponía una ficción, pero templaba recelos. Alburquerque amenazó este dictamen y Haro, probablemente, lo neutralizó con su silencio: un silencio institucional.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Rafael Valladares.

Agradecimientos y financiación

Trabajo no financiado.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Abarca, M. (2024). Agustín de Salazar y Torres bajo el mecenazgo del VIII duque de Alburquerque en la corte virreinal siciliana: un hombre de armas y letras. *Hipogrifo. Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro*, *12*(1), 399-411. https://doi.org/10.13035/H.2024.12.01.26

Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, J. (1975). *España, Flandes y el Mar del Norte, 1618-1639*. Planeta.

Alvar Ezquerra, A. (2010). *El duque de Lerma: Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII*. La Esfera de los Libros.

Amadori, A. (2013). *Negociando la obediencia: Gestión y reforma de los virreinatos americanos en tiempos del conde-duque de Olivares (1621-1643)*. CSIC-Universidad de Sevilla.

Barrios, F. (2016). *La gobernación de la Monarquía de España: Consejos, juntas y secretarios de la administración de corte (1556-1700)*. BOE.

Benigno, F. (1994). *La sombra del rey: Validos y lucha política en la España del siglo XVII*. Alianza. (Obra original publicada en 1992).

Benigno, F. (2020). Costruire la figura del valido: Il «Ritratto» di Virgilio Malvezzi. *Cuadernos de Historia Moderna*, *45*(2), 639-664. https://doi.org/10.5209/chmo.72546

Bermejo Vega, V. (1993). Imago Alteri Regis: Olivares y el retrato del valido en la estampa barroca. *Cuadernos de Arte e Iconografía*, *6*(1), 325-333.

Bolaños Mejías, M. C. (2004). Baltasar de Zúñiga, un valido en transición. En L. Suárez Fernández y J. A. Escudero López (Coords.), *Los validos* (pp. 243-276). Dykinson.

Boyden, J. H. (1995). *The courtier and the king: Ruy Gómez de Silva, Philip II, and the court of Spain*. University of California Press.

Brown, J., y Elliott, J. H. (1981). *Un palacio para el rey: El Buen Retiro y la corte de Felipe IV*. Alianza. (Obra original publicada en 1980).

Büschges, C. (2002). El valido del virrey: Poder, patronaje y clientelismo en la corte virreinal mexicana (1621-1635). En E. F. dos Santos (Ed.), *Actas do XII Congresso Internacional de AHILA* (Vol. 2, pp. 141-149). Faculdade de Letras.

Calderón Ortega, J. M. (1998). *Álvaro de Luna: Riqueza y poder en la Castilla del siglo XV*. Dykinson.

Cañeque, A. (2004a). *The king's living image: The culture and politics of viceregal power in colonial Mexico*. Routledge.

Cañeque, A. (2004b). De sillas y almohadones o de la naturaleza ritual del poder en la Nueva España de los siglos XVI y XVII. *Revista de Indias*, *64*, 609-634. https://doi.org/10.3989/revindias.2004.i232.427

Cañeque, A. (2022). La corte virreinal de México durante la monarquía de los Austrias. En M. Luzzi, I. Escamilla González y J. A. Guillén Berrendero (Eds.), *La corte y la sociedad cortesana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII)* (pp. 59-88). Universidad Nacional de La Plata.

Cardim, P. (1999). Amor e amizade na cultura política dos séculos XVI e XVII. *Lusitania Sacra*, *11*, 21-57.

Carrasco Martínez, A. (2021). Perfecto privado, poder imperfecto: La privanza del duque de Lerma frente a los conceptos de soberanía y forma de gobierno. En J. Pérez Gil (Ed.), *El Palacio Real de Valladolid y la ciudad áulica* (pp. 25-46). Universidad de Valladolid.

Colson, E. (1974). *Tradition and contract: The problem of order*. Aldine Publishing Company.

Costa, A. da Silva. (2008). *Os secretários e o Estado do Rei: Luta de corte e poder político. Séculos XVI-XVII* [Tesis de maestría no publicada]. Universidade Nova de Lisboa.

Covarrubias, S. de. (1611). *Tesoro de la lengua castellana o española*. Imprenta Real.

Cuenca Toribio, J. M. (2012, 7 de diciembre). La crisis en perspectiva histórica (s. XVII) III. *El Imparcial*.

D'Artois, F. (2020). «Nuevo epiciclo al gran rubí del día»: El duque de Lerma, la danza cortesana y la imagen del poder. *Cuadernos de Historia Moderna*, *45*(2), 509-535. https://doi.org/10.5209/chmo.72542

Dictionnaire de français Larousse. https://www.larousse.fr

Elliott, J. H. (1990). *El Conde-Duque de Olivares: El político en una época de decadencia*. Crítica. (Obra original publicada en 1986).

Elliott, J. H. (1997). Unas reflexiones acerca de la privanza española en el contexto europeo. *Anuario de Historia del Derecho Español*, *77*, 885-899.

Elliott, J. H. (2013). El Olivares de Marañón. *Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura*, *189*(759), 1-10. https://doi.org/10.3989/arbor 2013.759n1008

Elliott, J. H., y Brockliss, L. (Eds.). (1999). *El mundo de los validos*. Taurus.

Elliott, J. H., y García Sanz, Á. (Eds.). (1990). *La España del conde-duque de Olivares*. Universidad de Valladolid.

Elliott, J. H., y Negredo del Cerro, F. (Eds.). (2021). *Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares: Correspondencia con el Cardenal Infante don Fernando (1635-1641)*. Marcial Pons.

Escudero López, J. A. (2004). Privados, validos y primeros ministros. En L. Suárez Fernández y J. A. Escudero López (Coords.), *Los validos* (pp. 15-34). Dykinson.

Escudero López, J. A. (2008). Siglo XVII: El gobierno del rey con validos, consejos, juntas y secretario del Despacho Universal. En J. A. Escudero López (Ed.), *El Rey: Historia de la monarquía* (pp. 365-380). Planeta.

Escudero López, J. A. (2009). Privados, validos y primeros ministros en la monarquía española de Antiguo Régimen: Viejas y nuevas consideraciones. *Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, *39*, 665-680.

Escudero López, J. A. (2019). *Felipe II: El Rey en el despacho*. BOE-Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Ezquerra Abadía, R. (1934). *La conspiración del duque de Híjar (1648)*. M. Borondo.

Fernández Bulete, V. (1998). La desconocida relación de gobierno del duque de Alburquerque, virrey de Nueva España. *Anuario de Estudios Americanos*, *55*(2), 677-702. https://doi.org/10.3989/aeamer.1998.v55.i2.355

Fernández Duro, C. (1884). *Don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque: Informe en desagravio de tan ilustre prócer presentado a la Real Academia de la Historia*. Imprenta y Fundición de Manuel Tello.

Fernández Mosquera, S. (2013). Quevedo y el valimiento: Del Discurso de las privanzas hasta Cómo ha de ser el privado. *Bulletin of Hispanic Studies*, *90*(4-5), 551-576. https://doi.org/10.1080/14753820.2013.802566

Fernández-Santos Ortiz-Iribas, J. (2020). «No minorar la memoria de mis pasados»: Apuntes para una biografía política de Gaspar de Haro y Guzmán, marqués del Carpio. *Cuadernos de Historia Moderna*, *45*(2), 689-715. https://doi.org/10.5209/chmo.72548

Feros, A. (2002). *El duque de Lerma: Realeza y privanza en la España de Felipe III*. Marcial Pons. (Obra original publicada en 2000).

Galván Desvaux, D. (2016). *Felipe IV y la defensa del valimiento: El proceso contra el duque de Uceda*. Universidad de Valladolid.

Gálvez Martín, R. (2023). Los virreyes indianos de la Monarquía Hispánica: Una revisión historiográfica. *Revista de Historiografía*, *38*, 147-194. https://doi.org/10.20318/revhisto.2023.6602

Gama, M. L. Marques da. (2011). *O Conselho de Estado no Portugal Restaurado: Teorização, orgânica e exercício do poder político na Corte Brigantina (1640-1706)* [Tesis de maestría no publicada]. Universidade de Lisboa.

García García, B. J. (1996). *La Pax Hispanica: Política exterior del duque de Lerma*. Leuven University Press.

García García, B. J. (1997a). *Los validos*. Akal.

García García, B. J. (1997b). Honra, desengaño y condena de una privanza: La retirada de la corte del Cardenal Duque de Lerma. En P. Fernández Albaladejo (Ed.), *Monarquía, imperio y pueblos en la España Moderna* (pp. 679-695). Universidad de Alicante.

García García, B. J. (1997c). La aristocracia y el arte de la privanza. *Historia Social*, *28*, 113-125.

García García, B. J. (1999). Pedro Franqueza, secretario de sí mismo: Proceso a una privanza y primera crisis del valimiento de Lerma (1607-1609). *Annali di Storia Moderna e Contemporanea*, *5*, 21-42.

García García, B. J. (2001). La sátira política a la privanza del duque de Lerma. En F. J. Guillamón Álvarez y J. J. Ruiz Ibáñez (Eds.), *Lo conflictivo y lo consensual en Castilla: Sociedad y poder político, 1521-1715* (pp. 261-295). Universidad de Murcia.

García García, B. J. (2003). Las fiestas de corte en los espacios del valido: La privanza del duque de Lerma. En B. J. García García y M. L. Lobato López (Eds.), *La fiesta cortesana en la época de los Austrias* (pp. 35-77). Junta de Castilla y León.

García García, B. J. (2012). «Fermosa gracia es la que el rey fase por merecimiento de servicio»: Proceso y justificación de las mercedes otorgadas al valido (1618-1624). En A. Esteban Estríngana (Ed.), *Servir al rey en la Monarquía de los Austrias: Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII* (pp. 321-359). Sílex.

García García, B. J. (2020a). Introducción: Retórica del valimiento, familiaridad y dominio del espacio. *Cuadernos de Historia Moderna*, *45*(2), 387-414. https://doi.org/10.5209/chmo.72538

García García, B. J. (2020b). El valido-arquitecto: La construcción de la grandeza de los Sandovales. En B. J. García García y Á. Rodríguez Rebollo (Eds.), *Apariencia y razón: Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III* (pp. 29-66). Doce Calles.

García García, B. J. (2024). Negociar el favor y cultivar el afecto del valido en la distancia: La mediación política de la archiduquesa María de Baviera con la corte de Felipe III (1599-1608). En A. Esteban Estríngana y J. A. López Anguita (Eds.), *Mujeres en la alta política de la Europa moderna: Visibilidad, ocultación y memoria* (pp. 113-154). Fundación Carlos de Amberes-Doce Calles.

Gaudin, G., y Ponce Leiva, P. (2019). Introduction au dossier: El factor distancia en la flexibilidad y el cumplimiento de la normativa en la América ibérica. *Les Cahiers de Framespa*, *30*. https://doi.org/10.4000/framespa.5553

González Cuerva, R. (2012). *Baltasar de Zúñiga: Una encrucijada de la Monarquía Hispánica (1561-1622)*. Polifemo.

Guillén Berrendero, J. A. (2025). Hipotiposis de las virtudes del valido: Heráldica y comunicación de una anomalía política en la primera modernidad: el duque de Lerma. *Eikón / Imago*, *14*(1), Artículo 14. https://doi.org/10 5209/eiko 96459

Guillén Berrendero, J. A., Hernández Franco, J., y Alegre, E. (Eds.). (2018). *Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli: Su tiempo y su contexto*. Iberoamericana-Vervuert. https://doi.org/10 31819/9783954876983

Hanke, L., y Rodríguez, C. (Eds.). (1977). *Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria. México II*. Gráficas Castilla.

Helmke, G., y Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. *Perspectives on Politics*, *2*(4), 725-740. https://doi.org/10 1017/S1537592704040472

Hermant, H. (2013). Du valido au 'Premier ministre': Restauration, transgression ou réinvention de la norme? Le cas de don Juan José de Austria (1665-1679). En F. Piat y L. Braguier-Gouverneur (Eds.), *Normes et transgressions dans l'Europe de la première modernité* (pp. 143-157). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10 4000/books.pur 52057

Hortal Muñoz, J. E. (2023). Los validos y la configuración del espacio: La culminación del sistema cortesano en la Monarquía Hispánica. *Potestas*, *23*, 65-96. https://doi.org/10 6035/potestas 7167

Israel, J. I. (1980). *Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670*. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1975).

Jiménez Jiménez, I. (2024). *El conde de Santisteban: De menino a virrey del Perú (1607-1666)*. Centro de Estudios Andaluces. https://doi.org/10 54790/fcentrahum 18

Latasa Vassallo, P. (2012). Poder y favor en la corte virreinal del Perú: Los criados del marqués de Montesclaros (1607-1615). *Histórica*, *36*(2), 49-84. https://doi.org/10 18800/historica 201202 002

Lawrence, J., Noble Wood, O., y Roe, J. (Eds.). (2011). *Poder y saber: Bibliotecas y bibliofilia en la época del conde-duque de Olivares*. Centro de Estudios Europa Hispánica.

Leiras, M. (2004). ¿De qué hablamos cuando hablamos de instituciones informales? En A. Fernández (Ed.), *Estudios de política comparada* (pp. 65-92). Universidad Nacional de Rosario.

León Pinelo, A. de. (1953). *El gran canciller de las Indias* (G. Lohmann Villena, ed.). Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

López Castillo, J. (2001). *Antonio de León Pinelo: Estudio crítico, documental y bibliográfico de su obra «El gran canciller de las Indias»* [Tesis doctoral no publicada]. Universidad Complutense de Madrid.

López Millán, M. A. (2018). Atalante y Hércules: Don Francisco Gómez de Sandoval y la «construcción» del duque de Uceda. En R. Valladares (Ed.), *Hijas e hijos de validos: Familia, género y política en la España del siglo XVII* (pp. 77-94). Albatros.

Malcolm, A. (2000). Teatro del gobierno: Las obras de Calderón representadas ante los consejos de Felipe IV. En I. Arellano (Ed.), *Calderon 2000: Homenaje a Kurt Reichenberger en su 80 cumpleaños* (pp. 637-648). Reichenberger.

Malcolm, A. (2001). La práctica informal del poder: La política de la corte y el acceso a la familia real durante la segunda mitad del reinado de Felipe IV. *Reales Sitios*, *147*, 38-48.

Malcolm, A. (2016). Intercesor de escritores: Las dedicatorias de libros a don Luis de Haro y su relación con los autores (1625-1662). En R. Valladares (Ed.), *El mundo de un valido: Don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661* (pp. 263-302). Marcial Pons. https://doi.org/10 2307/j.ctt20fw77n 12

Malcolm, A. (2019). *El valimiento y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1640-1665)*. Marcial Pons. (Obra original publicada en 2017).

Marañón, G. (1935). *El Conde-Duque de Olivares: La pasión de mandar*. Espasa-Calpe.

Martínez Hernández, S. (2008). Los cortesanos: Grandes y títulos frente al régimen de validos. En J. A. Martínez Millán y M. A. Visceglia (Eds.), *La monarquía de Felipe III* (Vol. 3, pp. 435-582). Polifemo.

Martínez Hernández, S. (2009). *Rodrigo Calderón, la sombra del valido: Privanza, favor y corrupción en la corte de Felipe III*. Marcial Pons.

Martínez Hernández, S. (2014). «Los más infames y bajos traidores…»: El desafío aristocrático al proyecto olivarista de regencia durante la enfermedad de Felipe IV (1627). *Investigaciones Históricas*, *34*, 47-80.

Martínez Hernández, S. (2016a). «Antes de que S. M. se canse de ser rey»: Los grandes de España frente al valimiento de don Luis de Haro. En M. Aglietti, A. Franganillo Álvarez y J. A. López Anguita (Eds.), *Elites e reti di potere: Strategie d'integrazione nell'Europa di età moderna* (pp. 183-198). Pisa University Press.

Martínez Hernández, S. (2016b). La cámara del rey durante el reinado de Felipe IV: Facciones, grupos de poder y avatares del valimiento (1621-1665). En R. Valladares (Ed.), *El mundo de un valido: Don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661* (pp. 49-96). Marcial Pons. https://doi.org/10 2307/j.ctt20fw77n 7

Montes González, F. (2016). *Mecenazgo virreinal y patrocinio artístico: El ducado de Alburquerque en la Nueva España*. Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Mrozek Eliszezynski, G. (2015). *Bajo acusación: El valimiento en el reinado de Felipe III. Procesos y discursos*. Polifemo.

Mrozek Eliszezynski, G. (2018). Un heredero que no está a la altura: El duque de Uceda y el fin del gobierno de los Sandoval. En R. Valladares (Ed.), *Hijas e hijos de validos: Familia, género y política en la España del siglo XVII* (pp. 95-107). Albatros.

Mrozek Eliszezynski, G. (2020). Parentesco y virreinato: La influencia de los validos y el poder de sus familiares en la Nápoles del siglo XVII. *Cuadernos de Historia Moderna*, *45*(2), 665-687. https://doi.org/10 5209/chmo 72547

Pejovich, S. (1999). The effects of the interaction of formal and informal institutions on social stability and economic development. *Journal of Markets & Morality*, *2*(2), 164-181.

Pérez Gil, J. (2006). *El Palacio Real de Valladolid, sede de la corte de Felipe III (1601-1606)*. Universidad de Valladolid.

Pérez Marcos, R. M. (2012). El ocaso de la administración consultiva: Validos y ministros. En A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (Eds.), *Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Comunicaciones* (Vol. 1, pp. 852-863). Universidad de Granada.

Ragon, P. (2024). *El conde de Baños, virrey de México: Poder y corrupción en el siglo XVII*. Editorial Universidad de Almería.

Real Academia Española. (1739). *Diccionario de autoridades* (Vol. 6). Imprenta de la Real Academia Española.

Real Academia Española. (2025a). Institución. En *Diccionario de la lengua española*. https://dle.rae.es

Real Academia Española. (2025b). In fieri. En *Diccionario de la lengua española*. https://dle.rae.es

Real Academia Española. (2025c). De facto. En *Diccionario panhispánico del español jurídico*. https://dpej.rae.es

Rivero Rodríguez, M. (2011). *La edad de oro de los virreyes: El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII*. Akal.

Rivero Rodríguez, M. (2017). *El conde duque de Olivares: La búsqueda de la privanza perfecta*. Polifemo.

Rivero Rodríguez, M. (2023a). *Olivares: Reforma y revolución en España (1622-1643)*. Arzalia.

Rivero Rodríguez, M. (2023b). La preservación de la «Unión de Armas»: Francisco IV Fernández de la Cueva, VIII duque de Alburquerque, un virrey castellano entre América y Sicilia (1653-1670). En P. Sanz Camañes (Ed.), *La nobleza titulada castellana en la conservación del imperio español en tiempos de Carlos II* (pp. 155-170). Sílex.

Rodríguez Villa, A. (1884). El duque de Alburquerque en la batalla de Rocroi: Impugnación a un artículo del duque de Aumale sobre esta batalla y noticia biográfica de aquel personaje. En C. Fernández Duro (Ed.), *Don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque: Informe en desagravio de tan ilustre prócer presentado a la Real Academia de la Historia* (pp. 1-27). Imprenta y Fundición de Manuel Tello.

Salas Almela, L. (2010). Realeza, valimiento y poder: En torno a las últimas aportaciones sobre el reinado de Felipe III. *Hispania*, *70*, 165-180. https://doi.org/10 3989/hispania 2010.v70.i234 161

Sánchez González, R. (2019). *La Europa de los validos*. Síntesis. https://doi.org/10 1093/europace/euz064

Santana Pérez, J. M. (2024). *Historia Moderna de la Corona Hispana*. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sanzsalazar, J. (2020). Encarar el miedo: Don Francisco Fernández de la Cueva, VIII duque de Alburquerque (1619-1676): Sobre su estancia en Flandes y su retrato por los hermanos Michaelina y Charles Wautier. *Philostrato. Revista de Historia y Arte*, *7*, 61-98. https://doi.org/10 25293/philostrato 2020 03

Simal López, M. (2020). El escenario del valido: El conde-duque de Olivares y el Palacio del Buen Retiro. *Cuadernos de Historia Moderna*, *45*(2), 565-601. https://doi.org/10 5209/chmo 72544

Stradling, R. A. (1989). *Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665*. Cátedra.

Suárez, M. (Ed.). (2017). *Parientes, criados y allegados: Los vínculos personales en el mundo virreinal peruano*. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Suárez Fernández, L. (2004). Orígenes del validaje. En L. Suárez Fernández y J. A. Escudero López (Coords.), *Los validos* (pp. 35-40). Dykinson.

Suárez Fernández, L., y Escudero López, J. A. (Coords.). (2004). *Los validos*. Dykinson.

Sullón Barreto, G. (2018). Los criados portugueses del príncipe de Esquilache, virrey del Perú, 1615-1621. *Memoria y Civilización*, *21*, 213-244. https://doi.org/10 15581/001 21 018

Tau Anzoátegui, V. (2000). Las Indias, ¿provincias, reinos o colonias? A propósito del planteo de Zorraquín Becú. *Revista de Historia del Derecho*, *28*, 77-137.

Thompson, I. A. A. (1999). El contexto institucional de la aparición del ministro-favorito. En J. H. Elliott y L. Brockliss (Eds.), *El mundo de los validos* (pp. 25-41). Taurus.

Tomás y Valiente, F. (1982). *Los validos en la monarquía española del siglo XVII: Estudio institucional*. Siglo XXI. (Obra original publicada en 1963).

Torres Arancivia, E. (2022a). *Corte de virreyes: El entorno del poder en el Perú del siglo XVII*. Pontificia Universidad Católica del Perú. (Obra original publicada en 2006). https://doi.org/10.18800/9972427471

Torres Arancivia, E. (2022b). El semiparaíso en la Tierra o sobre la sociedad cortesana en el Perú del siglo XVII. En M. Luzzi, I. Escamilla González y J. A. Guillén Berrendero (Eds.), *La corte y la sociedad cortesana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII)* (pp. 80-110). Universidad Nacional de La Plata.

Tropé, H. (2010). *La représentation du favori dans l'Espagne de Philippe III et Philippe IV*. Presses Sorbonne Nouvelle.

Valladares, R. (Ed.). (2016). *El mundo de un valido: Don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661*. Marcial Pons. https://doi.org/10 2307/j.ctt20fw77n 4

Valladares, R. (Ed.). (2018). *Hijas e hijos de validos: Familia, género y política en la España del siglo XVII*. Albatros.

Valladares, R. (2024). *Epistolario político de don Luis de Haro (Aragón, Cataluña y Andalucía, 1644-1647; Extremadura y Portugal, 1658-1659)*. BOE.

Valladares, R. (2026). Haro y el mando de la guerra en Cataluña, 1643-1652. *Guerra en Cataluña (1597-1700)* (pp. 147-156). Albatros.

Villarreal Brasca, A. (2018). El privado del virrey del Perú: Vínculos, prácticas y percepciones del favor en la gestión del príncipe de Esquilache. *Memoria y Civilización*, *21*, 141-165. https://doi.org/10 15581/001 21 014

Villarreal Brasca, A. (2024). *El duque de Lerma: Política y gestión para América en la Monarquía de Felipe III*. Albatros.

Williams, P. (2010). *El Gran Valido: El duque de Lerma, la corte y el gobierno de Felipe III, 1598-1621*. Junta de Castilla y León. (Obra original publicada en 2007).

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo20264815180

ENTRE VISITAS Y ORDENANZAS: EL CONSEJO DE HACIENDA, UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DEL GASTO DINÁSTICO EN LA CORTE DE LOS AUSTRIAS

Between Inspections and Ordinances: The Council of Finance, an Institution to Serv Dynastic Spending at the Habsburg Court

Carlos Javier de CARLOS MORALES

Universidad Autónoma de Madrid
carlos.carlos@uam.es

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN. En este trabajo se realiza una exposición actualizada de la evolución del Consejo de Hacienda de Castilla durante los siglos XVI y XVII, al socaire de los avances experimentados en la historiografía sobre la Corte y el gobierno polisinodial, del funcionamiento de las instituciones y del significado de la corrupción, y de los mecanismos del gasto y endeudamiento dinásticos. Como característica general, la senda del Consejo de Hacienda estuvo marcada por una larga sucesión de visitas y ordenanzas en un contexto de luchas faccionales cortesanas y de competencias con otros consejos, juntas y comisiones, y de atención a las necesidades financieras de gasto y endeudamiento dinásticos.

Palabras clave: Hacienda; finanzas; gasto dinástico; gobierno polisinodial; Corte.

ABSTRACT: This paper offers an updated account of the evolution of the Castilian Council of Finance during the sixteenth and seventeenth

centuries, in the light of recent advances in court studies, the analysis of polisynodal government, the functioning and oversight of institutions, the study of corruption, and the mechanisms of dynastic expenditure and indebtedness. In general terms, the history of the Council of Finance was marked by a long succession of inspections and ordinances, in a context shaped by court factional struggles, jurisdictional competition with other councils, juntas and commissions, and the need to meet the financial demands of dynastic expenditure and debt.

Keywords: Treasury; finances; dynastic spending; polisynodal government; Court.

1. INTRODUCCIÓN. EL CAMBIO DE PARADIGMA: DEL ESTADO MODERNO A LA CORTE

A mediados de los años ochenta del pasado siglo, el estudio de la Historia se encontraba en plena ebullición como consecuencia de la crisis de las dos grandes corrientes que habían vertebrado el panorama académico desde la conclusión de la II Guerra Mundial, los *Annales* y el materialismo histórico (Dosse, 1988; Santana-Pérez y Sanmartín (2020). Ambas escuelas habían procurado aportar sólidas interpretaciones sobre la evolución de las sociedades históricas, a partir del estudio, según fuera la tendencia, de las estructuras, ciclos y coyunturas, o clases, fuerzas y relaciones de producción. Pero, en lo que concernía a la historia político-jurídica, ninguna de las dos corrientes historiográficas había demostrado demasiado interés por los individuos, ni por las instituciones, a diferencia de la escuela tradicional de raíces decimonónicas positivistas que había enfatizado su respectiva importancia, como integrantes elementales del Estado.

En España, el marco historiográfico predominante se mantenía, en general, de acuerdo con los esquemas del positivismo tradicional: las instituciones se presentaban como órganos claramente reglamentados, con funciones normativas definidas a través de ordenanzas, incluso con un carácter burocrático en cuanto a composición y funciones; de esta manera, el estudio de la construcción del Estado se había convertido en el conocimiento de la historia de la administración pública, cuyos orígenes no se dudaba en ubicar en la Baja Edad Media. En este sentido, respecto a la monarquía de los Austrias se utilizaba el concepto de «sistema polisinodial» que, prácticamente, lo identificaba como la forma de gobierno central.

Esta interpretación encajaba con la óptica de la Historia del Derecho y de la Administración. Pero, tal y como entonces se percibía, el estudio de las instituciones se encontraba en una tesitura de contradicciones, fruto de la crisis del paradigma

historiográfico hasta entonces predominante, que había explicado el surgimiento del Estado moderno como antecedente del Estado liberal burgués. Así, los profesores Hespanha y Clavero encabezaron una nueva interpretación y orientaciones en el entendimiento de las instituciones de la Edad Moderna (Clavero, 1986, 1991; Hespanha, 1982; 1986; 1989), basadas en los métodos de la antropología y la sociología aplicados al estudio de las estructuras del poder. De esta manera, en el tránsito de los ochenta a los noventa las influencias metodológicas que recibía la investigación sobre las instituciones de la España moderna y el funcionamiento del sistema polisinodial fueron tan novedosas como consistentes, como resultado de la combinación de la historia social de la administración y de la prosopografía, y del estudio sobre las elites de poder y de las relaciones personales (Martínez Millán, 1992).

No es cuestión de extendernos en aquella renovación de la investigación sobre la evolución de las instituciones mediante la incorporación de nuevas perspectivas metodológicas, en particular, los análisis de *patronazgo* y *clientelismo*. En este sentido, hay que situar el descubrimiento de la corte, que la situaba como polo de dominación sociopolítica en donde convergían las mediaciones de carácter personal e institucional que vertebraban el control del territorio, con el soberano como *pater familiae* y fuente de la gracia (Martínez Millán, 1996).

2. ENTRE 1523 Y 1578: UN CONSEJO «EXTRAORDINARIO Y DE NEGOÇIOS EXTRAVAGANTES»

Como consecuencia, esta constelación de influencias ofreció el soporte metodológico del estudio de diversos consejos durante el siglo XVI (Ezquerra Revilla, 2000; Fernández Conti, 1998; Rivero Rodríguez, 1998). El conocimiento de la evolución institucional del Consejo de Hacienda de Castilla, por su parte, se fundamentó sobre dos parámetros complementarios: su carencia de definición jurisdiccional y su reparto de competencias y composición con la Contaduría mayor; de otro lado, las luchas entre facciones cortesanas por el control de la toma de decisiones hacendísticas, en particular, las referidas a la financiación del gasto (Carlos Morales, 1996, pp. 224-225).

Ciertamente, la fundación del Consejo se había realizado como respuesta a la agregación dinástico-patrimonial que conllevaba un cúmulo de egresos, pues desde los inicios del reinado quedaba patente que la Corona de Castilla se habría de convertir en el pulmón financiero del Imperio. Cuando se produjo el acceso al trono de Carlos de Austria y comenzaron las exigencias derivadas del sostenimiento de la corte y de la guerra, ya existían sólidos mecanismos de endeudamiento a largo y a corto plazo, firmemente asentados sobre la seguridad aportada, respectivamente, por las rentas ordinarias y extraordinarias. Así mismo, resultaba patente que el concurso de los ahorradores privados con capacidad de inversión en la financiación de la Corona,

así como de los banqueros de diversas nacionalidades, resultaba imprescindible. En este sentido, sin duda, otro factor en la decisión de constituir el Consejo de Hacienda se encontró en la necesidad de acometer el cumplimiento de los gastos derivados de la elección imperial, así como el sostenimiento de las Casas reales (Carlos Morales, 1989; 2000a; 2000b; 2021).

En consecuencia, entre febrero de 1523 y enero de 1525 se dictaron varias instrucciones, en el contexto de reorganización cortesana que había tenido lugar tras el regreso de Carlos V. En ellas, constaban de materia patente las vertientes básicas que se pretendían atender, principalmente pagos cortesanos y militares, para lo que se estableció una composición que, durante este reinado, básicamente comprendía a un letrado eclesiástico en la presidencia, que a veces también actuaba como Comisario General de Cruzada; uno o varios miembros del Consejo Real, que así mismo pertenecían a la Cámara; los tenientes de la Contaduría mayor de Hacienda, un secretario, y el Tesorero general de Castilla, que contaba con experiencia en asuntos financieros y asistía a las ferias del reino.

Desde su fundación, el Consejo de Hacienda operó como medio de preparación y gestión de las decisiones financieras extraordinarias, dedicándose principalmente a negociar asientos y cambios, impulsar la tramitación de los expedientes fiscales como ventas de juros, y vigilar los desembolsos correspondientes a egresos cortesanos, guardas, galeras, y fronteras. Así, entre sus principales cometidos se encontraba el cálculo anual de los dispendios que había que afrontar y de los ingresos disponibles. Mientras tanto, las Contadurías mayores mantuvieron su perfil institucional y competencias fijadas desde el reinado de Isabel I, concernientes fundamentalmente a la gestión y contabilidad de las rentas ordinarias.

De esta manera el Consejo de Hacienda contuvo potestad como órgano al que el soberano había transferido por *vía de comisión* las competencias relacionadas con determinadas órdenes financieras. Así, en 1554, el doctor Martín de Velasco afirmaba, con ocasión de la visita a las Contadurías mayores, que «como este Consejo es extraordinario y de negoçios estravagantes, no puede dársele horden çierta»[1]. Este tipo de valoración se hubo de repetir en diversas ocasiones, como cuando, al poco de ser elegido para dirigirlo sin título de presidente, a principios de 1574, Juan de Ovando se asombraba de que el Consejo no poseyera «Instructiones ni ordenaciones que dispongan de él»[2]. En definitiva, lejos de ser una cuestión circunstancial, uno de los rasgos distintivos del Consejo de Hacienda fue su carencia de reglamentación

1. Archivo General de Simancas, Diversos de Castilla [en adelante, AGS, DC], leg. 3, doc. 36, carta al Príncipe, 24 de junio de 1554.

2. Instituto Valencia de Don Juan [en adelante, IVDJ], envío 24 (caja 37), doc. 38, 16 de enero de 1574. Esta observación, en Archivo Zabálburu [en adelante, AZ], carp. 182, doc. 35, y, algo posterior, Biblioteca de Palacio Real de Madrid [en adelante, BPRM], ms. II-2227, f. 206-209.

institucional, mientras que las Contadurías mayores permanecieron como organismos definidos desde su finalidad original, con una planta estable de Contadores mayores, tenientes y oficiales, modificadas a través de las visitas y ordenanzas de 1554 y 1568-1569.

3. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONSEJO DE HACIENDA EN EL GOBIERNO POLISINODIAL, 1579-1602

Actuando por vía de comisión, desde 1523 fue desarrollándose un largo proceso de configuración jurisdiccional del Consejo, que culminó en 1593, con la promulgación de sendas ordenanzas. La trayectoria del Consejo de Hacienda coincidía con la de otros consejos como Cámara y Guerra, que durante décadas actuaron por vía de comisión y que se consolidaron institucionalmente en la segunda mitad del reinado de Felipe II, en un contexto generalizado de visitas y de ordenanzas que coincidía con intensas pugnas faccionales cortesanas (Martínez Millán y Carlos Morales, 1998). A este respecto, la conformación institucional del Consejo de Hacienda estuvo marcada por varios factores correlativos: la gradual asunción de competencias derivadas de las necesidades de cumplimiento del gasto dinástico; el nombramiento de un presidente con quitación y título específicos y dedicación exclusiva, a partir de 1579, así como la emisión de instrucciones detalladas para el ejercicio de la secretaria en 1588; la realización de una larga sucesión de visitas e inspecciones a consejeros y oficiales, y, finalmente, la promulgación de unas ordenanzas en 1593, posteriormente, corregidas en 1602.

En efecto, la sucesión de dos presidentes letrados (Vega entre 1579 y 1584 y Vázquez de Arce hasta 1593), propició que se produjera un sensible avance en la conformación jurisdiccional del Consejo, en la tramitación de arbitrios fiscales, principalmente de enajenaciones diversas (ventas de juros, alcabalas y tercias, hidalguías, tierras, jurisdicciones y localidades), de asientos y cambios, cuyas vertientes judiciales también había asumido por vía de expediente, mediante provisiones y cédulas que resolvían los litigios que surgieran, y de emisión de órdenes de pago. Así mismo, el Consejo de Hacienda había asumido competencias sobre las rentas ordinarias, hasta entonces realizadas por la Contaduría mayor (al frente de la que habían quedado vacantes y sin cubrir los puestos de contador mayor), como la renovación de los arrendamientos de los almojarifazgos, aduanas, puertos secos, estanco de minas y salinas, etc. En cuanto a la distribución de los recursos, el Consejo coordinaba la distribución y cumplimiento de los egresos mediante la emisión de las cédulas oportunas para que la Tesorería general abonara los pagos oportunos (Carlos Morales, 1996, pp. 224-225).

Esta orientación institucional correspondía con las necesidades funcionales de satisfacción del gasto dinástico, convertido en el principio del que partían los

mecanismos de financiación en correspondencia con un entramado fiscal al servicio de la deuda flotante y de la deuda consolidada. Déficit crónico, ingresos dispersos, obligaciones de pago en diversos territorios y en monedas diferentes fueron los factores que determinaron la configuración de un sistema financiero que habría de permitir el sostenimiento de la Monarquía durante los sucesivos reinados: la búsqueda de ingresos se orientó preferentemente hacia el incremento de las rentas extraordinarias, como las remesas de Indias, los subsidios eclesiásticos o los servicios de las Cortes, que se aplicaban a la atención de la deuda dinástica a corto plazo o flotante, generada por los asientos; por otro lado, el encabezamiento de las alcabalas y los arrendamientos de rentas extraordinarias ofrecieron un papel de garantía del pago de los gastos ordinarios de Castilla y de la deuda consolidada, cuyo aumento a través de las emisiones de juros alcanzó gran relevancia.

De igual manera, con la expresa intención de conseguir «el buen expediente y despacho de los negocios que en el Consejo de la Hazienda se libraren», en septiembre de 1588 se promulgó una Instrucción que, además de dividir el trabajo designando un secretario para ocuparse de los papeles de oficio y otro para atender los de partes, procuró regular los mecanismos administrativos y el comportamiento de sus titulares y oficiales. Años después, en marzo de 1596, se aprovechó nuevamente para reestructurar la secretaría mediante otra Instrucción, cuya principal novedad consistió en eliminar la anterior distribución documental, estableciendo que el reparto de las gestiones administrativas se hiciera por provincias, tomando al Tajo como línea territorial divisoria[3].

En segundo lugar, al mismo tiempo, el proceso de institucionalización del gobierno de la Hacienda estuvo alentado, a partir de 1578, por una sucesión de *visitas* que comenzaron por inspeccionar las cuentas de varios personales que habían tenido responsabilidad en la gestión de negocios financieros (Carlos Morales, 1996, pp. 145-148). Ciertamente, el tesorero general había asumido unas actividades fundamentales en el sostenimiento del gasto dinástico. Era el principal responsable de la gestión y cobranza del fruto de la enajenación de rentas y arbitrios fiscales, de los remanentes de la Casa de la Contratación y de los diversos ingresos con saldo positivo después de saldar el situado y cédulas de pago, así como, en particular, de negociar la contratación de asientos y cambios y cumplir con el abono de las libranzas. Finalmente, a partir de 1584, coincidiendo con el desplazamiento del centro de contratación financiera a Madrid y la pérdida de protagonismo del tesorero en las ferias medinenses, se promulgaron unas instrucciones para evitar

3. Ambas instrucciones, en AGS, Escribanía Mayor de Rentas, Quitaciones de Corte [en adelante, EMR, QC], legs. 27 y 5, respectivamente; Carlos Morales, 1996, pp. 153, 170, 213-214.

que los tesoreros generales incurrieran en comportamientos dolosos en el manejo de los caudales reales[4].

Desde 1586, la inspección del manejo de la Hacienda real se encargó el licenciado Laguna y se encauzó, por una parte, hacia ministros que habían desempeñado el cargo de tesorero general simultaneando la realización de negocios privados, con los consiguientes problemas de corrupción, y, por otra parte, hacia los oficiales de las Contadurías mayores de Hacienda y de Cuentas (Carlos Morales, 1996, pp. 128-131, 156-159). Mientras se realizaban las pesquisas de la visita, se promulgaron las Ordenanzas de El Pardo, en noviembre de 1593, que dotaron al Consejo de composición (un presidente, dos consejeros que simultáneamente pertenecerían al Consejo de Castilla y dos de los cuatro contadores, que perdían el carácter de *mayores*), horarios de reunión, personal subalterno fijo (secretario y oficiales) y una definición amplia de competencias, es decir, atención de provisiones por vía de asientos, impulso de expedientes fiscales, despacho de libranzas, y preparación de estimaciones de ingresos y gastos. Por su parte, la Contaduría mayor (formada por cuatro contadores) quedaba subordinada al Consejo, con el cometido de mantener la administración y percepción de la *Hazienda por menor*, al mismo tiempo que se definía su tribunal de oidores. El Consejo de Hacienda había alcanzado, por tanto, *cuerpo colegial* y *estilo cierto*, equiparándose institucionalmente con los demás integrantes del sistema polisinodial[5].

La promulgación de las Ordenanzas de El Pardo había definido normativamente la labor del Consejo y su ámbito jurisdiccional. No obstante, la división de competencias con la Contaduría mayor no hubo de resultar satisfactoria y se mantuvieron las propuestas de realizar una unificación institucional más estrecha entre ambos organismos, tal y como se había reiterado en otras ocasiones, sin llevarse a cabo. Al fin, con el cambio de reinado y el relevo de facciones cortesanas propiciado por el duque de Lerma tuvo lugar una nueva visita que dio lugar a la destitución del presidente, Francisco de Rojas (que había ocupado el cargo desde 1595), y de varios consejeros, y se redactaron unas nuevas ordenanzas que significaron la definitiva fusión institucional entre el Consejo de Hacienda y ambas Contadurías mayores.

La reorganización fue publicada en la villa de Lerma en octubre de 1602, anulaba la distinción entre administración al por menor y al por mayor, y se conformaba un «Consejo de Hacienda y Contaduría mayor della» como una única institución, formada por un presidente (Juan de Acuña, anteriormente, visitador) que veía realzadas sus facultades ya que se reconocía su labor de dirección sobre todos los organismos del ramo en la resolución y gestión de los negocios (así como de las

4. AGS, EMR, QC, leg. 9, docs. 522-530, y Carlos Morales, 1996, pp. 215-217.

5. *Nueva Recopilación de las Leyes de estos Reinos* [en adelante, *NR*], Libro IX, título II, Ley II. Véase Carlos Morales, 1996, pp. 162-166, 226-227, 251-252.

revisiones contables), ocho consejeros en lugar de contadores, y dos miembros del Consejo Real que acudirían por las tardes [6]). Al mismo tiempo, las ordenanzas dispusieron la división del despacho en dos secretarios, con el Tajo como línea divisoria territorial, como ya había sido dictado en 1596. Unos días después, el 26 de octubre de 1602 fue promulgada una nueva instrucción específica para el ejercicio de las secretarías. Su contenido básicamente repetía las mismas reglas que había sido redactadas en anteriores instrucciones[7].

4. PARTE DEL «SENADO DE ESPAÑA». MÁS VISITAS Y MÁS ORDENANZAS (1603-1626)

Con las ordenanzas dadas en Lerma, la situación del «Consejo de Hacienda y Contaduría mayor della» se había, por tanto, asimilado a la de otros integrantes del régimen polisinodial. Para el conocimiento de su evolución durante el siglo XVII, se contaba con un trabajo realizado por García-Cuenca Ariati (1982), que había tratado aspectos institucionales y normativos desde una perspectiva descriptiva, y otro posterior de De Francisco Olmos (1999), que ofrecía una útil y valiosa relación de consejeros y de textos. Posteriormente, se sumaron otras publicaciones, basadas en la reiteración de aspectos jurídico-normativos y en recopilaciones y comentarios de documentos (Bermejo Cabrero, 2016; Pulido Bueno, 2007).

En contraposición, desde años antes se había producido la consolidación de una nueva forma de estudiar las instituciones en la que, sin duda, la corte se había consolidado como protagonista del cambio de paradigma historiográfico (Labrador Arroyo, 2013; Martínez Millán, 2006, 2010). Esta misma perspectiva comenzó a ser asumida, así mismo, por algunos historiadores del Derecho, cuyo enfoque del régimen polisinodial fue gradualmente incorporando el concepto de *administración de corte*, y que, si bien desde una valoración basada en sus aspectos más áulicos, ceremoniosos y espaciales, renovaba sustancialmente la interpretación sobre la forma de gobierno de los Austrias (Barrios, 2016).

Por tanto, el entendimiento del proceso de toma de decisiones en el marco polisinodial debía seguir planteándose desde el estudio de las relaciones de poder basadas en el patronazgo y en el clientelismo, con el rey como fuente de la gracia y de la jurisdicción. Así, se entendía que la evolución del Consejo de Hacienda y de las juntas y comisiones se derivaba de una compleja trama que enlazaba la dinámica

6. *NR*, Libro IX, II, leyes III-V; Biblioteca Nacional de España [en adelante, BNE], ms. 6 587, f. 31-49r. Al respecto, Carlos Morales (1996), pp. 176-178. La plantilla se completaba con el tribunal de oidores.

7. AGS, QC, leg. 36, docs. 882-883, 893-904 y 909-919r, y leg. 6, f. 224-232. Carlos Morales, 1996, p. 214.

de ingresos y gastos, la correspondencia entre la Real Hacienda y las Cortes de Castilla, las relaciones mantenidas con los hombres de negocios que abastecían de crédito a los monarcas, y el contexto político internacional, dentro de un panorama de pugna entre las facciones cortesanas por el control del gobierno. En este sentido metodológico, se redactó un extenso estudio sobre la Real Hacienda de Felipe III, en el que se aportaba una novedosa visión sobre el funcionamiento del Consejo y las juntas que se reunieron durante el reinado (Carlos Morales, 2008b, pp. 749-886).

4.1. *La evolución del Consejo entre dos visitas (1602-1621)*

Después de las nuevas ordenanzas y nombramientos de 1602, bajo la presidencia del último visitador, Juan de Acuña, el Consejo de Hacienda y Contaduría mayor continuó con la renovación de sus miembros y la intensificación de sus reuniones. Sin embargo, la nueva situación institucional no significó que la autoridad del Consejo resultara reforzada, pues se convocaban numerosas juntas que detraían buena parte de las competencias que le había sido asignadas, en particular la Junta del Desempeño. Entre los años 1602 y 1607, el Consejo de Hacienda se encargó de la gestión de los ingresos y gastos fijos, y la Junta del Desempeño asumió la administración de los millones, gracias, flotas, arbitrios y crecimientos, así como de su asignación a los gastos del exterior (Carlos Morales, 2008b, pp. 767-791).

El Consejo no consiguió retener el control de la política financiera y, en la gestación y ejecución del decreto de suspensión de pagos de noviembre de 1607, como la Diputación del Medio General de 1608 (Carlos Morales, 2008b, pp. 779-804). Por otra parte, el Consejo tuvo que compartir la gestión hacendística con la Comisión de Millones, creada desde 1611 al socaire de la concesión de los sucesivos servicios, La Comisión de Millones, formada por cuatro procuradores, asumió la administración de este ingreso, una vez concedido, entre convocatoria y convocatoria de Cortes, con el auxilio de dos secretarios, dos contadores y otro personal subalterno, de manera que se fue institucionalizando y, como más adelante comentaremos, en 1659 terminó por incorporarse al Consejo de Hacienda (Cárceles de Gea, 1994; De Andrés Ucendo, 1999, pp. 33-41; Gallardo Fernández, 1805, pp. 46-62).

El nuevo presidente desde 1609, el licenciado Fernando Carrillo, se encontró con un Consejo de Hacienda que había reducido su composición y reuniones. Carrillo, dentro de su labor de recuperación de la entidad institucional del Consejo, desde 1611 anualmente dirigió la concertación de un asiento «grande» o de *provisiones generales*, en los que la comunidad bancaria se comprometía a financiar el grueso de los gastos dinásticos, y a cambio conseguían, además de las oportunas consignaciones, que la Real Hacienda garantizara que no habría más suspensiones o moratorias de consignaciones (Carlos Morales, 2008b, pp. 815-837). De esta manera, Carrillo reforzó la capacidad consultiva y decisoria del Consejo de Hacienda. Además de

los dispendios derivados de las actividades bélicas, el capítulo más cuantioso que atendía el Consejo de Hacienda procedía del sostenimiento de las casas reales, que significaba el apartado más importante del gasto cortesano (Carlos Morales, 2014).

Por otra parte, con las ordenanzas dictadas el Consejo era reconocido como pleno integrante del régimen polisinodial, y así consta en las descripciones coetáneas como «consejo supremo», al referir sus competencias y composición (González Dávila, 1623, pp. 492-498). De hecho, todos los consejos habrían de presentarse como «superiores», pues todos pretendían emanar del mismo *cuerpo*, como refería en 1617 fray Juan de Madariaga, al hacerlos partícipes del «Senado Supremo de España» (Rivero Rodríguez, 2011, pp. 123-131). Por entonces, su presidente Carrillo insistió en el carácter supremo de los consejos como parte sustancial de la conformación de la monarquía, dada la jurisdicción ordinaria que habían recibido (Barrios, 2016, pp. 328-329). En este sentido, bajo el mandato de un nuevo presidente, el conde de Salazar, continuó el reforzamiento del Consejo en pugna con las intromisiones de los consejos de Estado, de Cámara y de Castilla. Respecto a su competencia con este, Salazar señalaba que ninguno tenía superior jurisdicción que el de Hacienda, «porque ambas jurisdiçiones son con la soberanía que V.Md. ha sido seruido comunicalles, según el instituto de cada uno»[8].

Este indudable rasgo constitutivo de los consejos en cuanto organismos emanados directamente de la naturaleza regia se planteaba como una forma de contrarrestar la intromisión de las juntas, así mismo nutridas de la autoridad del rey, y se combinaba con otra dinámica de su funcionamiento, la realización de propuestas reformistas y de visitas periódicas. Así, el presidente Salazar planteó de manera patente cuál era la función del Consejo de Hacienda como órgano corporativo, sus competencias en la administración y su responsabilidad «atendiendo también al beneficio y descanso de los vasallos… *haciendo oficio de fiscal patrimonial*» frente a la actuación de otros personales, consejos y juntas[9].

4.2. *La reforma de 1621-1626*

Dentro de la tendencia reformista de los últimos años del reinado de Felipe III, desde 1617 también se llevó a cabo una nueva visita del funcionamiento del Consejo y Contadurías mayores y de los oficiales dependientes. A pesar de las dificultades que encontró el visitador, Melchor de Molina, comenzaron a revisarse los tratos financieros suscritos al socaire de la Diputación del medio general, así

8. AGS, Consejo y Juntas de Hacienda [en adelante, CJH], leg. 561, fajo 23, doc. 1, 10 de febrero de 1619.

9. AGS, CJH, leg. 555, fajo 21, doc. 1/3, 2 de diciembre de 1618. Con más detalle, Carlos Morales, 2008b, pp. 847-849.

como la actuación de ministros y oficiales y sus posibles prácticas de corrupción en connivencia con los hombres de negocios (Carlos Morales, 2008b, pp. 859-860; 2017, pp. 962-966).

Ya en los inicios del reinado de Felipe IV, el 12 de abril Molina elevó una consulta en la que refería las diligencias efectuadas y los obstáculos encontrados en su actuación. Pero, en particular, se centraba en las propuestas de «reformación» de la administración hacendística en torno a dos ejes: la reducción del número de consejeros, contadores y personal subalterno, y la mejora en la selección de los consejeros y oficiales[10]. Esos habrían de ser, a lo largo de la trayectoria institucional del Consejo de Hacienda durante el siglo XVII, los dos ejes de las reformas que habrían de reiterarse.

Poco después, junto con el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de Hacienda, Felipe IV decidió que el estado de la visita fuera sometido a la consideración de una junta que, a finales de julio de 1621, en una larga consulta, encareció la necesidad de dictar unas nuevas ordenanzas[11]. En general, se planteaba un severo cuestionamiento del funcionamiento de las instituciones hacendísticas y se trataba de una auténtica enmienda a la reforma efectuada en 1602, alentada por el carácter renovador del nuevo reinado, en relación con otras medidas de supresión de gastos superfluos y con el relevo en la elite de poder que acarreaba diversos cambios en la composición de los Consejos, eligiendo personas «útiles» y sin ambición (Rivero Rodríguez, 2023, pp. 46-57).

Finalmente, «la reformación» se hizo pública el 12 de noviembre mediante una cédula real redactada en 38 capítulos y tres apartados, relativos a la regulación de la composición y funcionamiento del Consejo de Hacienda, el tribunal de oidores, y la Contaduría mayor de cuentas[12]. En cierto sentido, la reforma suponía una auténtica refundación, en algunas partes inspirada en las ordenanzas de 1593 (al retornar a la composición de un presidente y cuatro consejeros), reducción de contadores y oficiales, establecimiento de incompatibilidades y comportamientos, etc. No obstante, existen dudas en cuanto a su implementación, en particular, respecto al número de consejeros y oficiales, pues, en lugar de reducirse, aumentó, como revela la referida obra de González Dávila y el registro de nombramientos que recoge De Francisco Olmos (1999, pp. 22-24).

10. Archivo Histórico Nacional [en adelante, AHN], Consejos, lib. 870, f. 89-118. El documento se acompañaba, ibídem, f. 119-136, por una extensa «Relazión del exerzizio que tienen los tribunales del Consejo de Hazienda y ynstituto por de cada uno y sus ministros y oficiales», firmada por Molina.

11. AHN, Estado, lib. 870, f. 161-192.

12. BNE, *Usoz*, ms. 9 451, f. 46-54. En su contexto cortesano y financiero, Carlos Morales, 2017, pp. 983-995.

De hecho, a los pocos años de que Felipe IV firmara la cédula de 1621, Olivares impulsó una nueva reforma. La labor de compilación de información quedó encomendada al nuevo presidente desde 1623, el marqués de Montesclaros, y sus dictámenes pusieron de manifiesto la falta de «inteligencia», la negligencia y enfrentamientos de consejeros y oficiales, los abusos y cohechos, la falta de control de gastos y mercedes, y los defectos en la aplicación de la reforma de 1621. En este sentido, también es conocida, la negativa opinión de Olivares sobre el funcionamiento del Consejo de Hacienda. Las fricciones entre el Consejo de Hacienda y el rey y su valido se remontaban a 1622, en consonancia con la evolución de los consejos como «voz» de los reinos (Carlos Morales, 2017, pp. 983-995).

En junio de 1625 quedó constituida una junta con el cometido de aumentar ingresos mediante arrendamientos, reducir fraudes y negligencias, y proceder a la reformación del Consejo de Hacienda, para lo que, a comienzos de 1626, se propuso reducir su composición y sus competencias en la negociación de tratos financieros. La reforma se hizo pública, según Gastón de Torquemada entre el 7 y el 21 de enero (1991, pp. 230-231). Habiendo sido informados de dicha decisión, a 22 de enero, los consejeros que habían recibido la orden de abstenerse de sus ministerios redactaron un prolijo y fundamentado impreso en el que clamaban contra la injusticia y oprobio recibidos, pues, a su entender, no podían ser destituidos sin haber sido sancionados por mal comportamiento mediante la instrucción de una visita, pues, «remouer de los oficios sin causa no se puede»[13].

A pesar de los sesudos argumentos que contraponían a la determinación de Felipe IV, en enero de 1626 se renovó completamente a los integrantes de la institución a través de una «nueva creación de ministros»: así, quedó conformada por un Contador mayor con facultades de presidente, Gilimón de la Mota, cuatro consejeros, y un secretario-consejero, cuyos nombramientos tendrían una duración inicial de dos años[14]. En definitiva, se trataba de la puesta en práctica de las propuestas de reducción de plazas de consejeros y de plantilla de 1621, revisadas por la desconfianza de Olivares respecto al funcionamiento de los integrantes del régimen polisinodial y, en particular, del Consejo de Hacienda (Barrios, 2016, pp. 561-562; Carlos Morales, 2017, pp. 993-1 002). La cuestión no era baladí, pues el ejercicio de los oficios conllevaba un sinfín de propinas, emolumentos, y otras gratificaciones que el reino otorgaba con ocasión de la concesión de servicios, lo que explica que los ministros y oficiales jubilados solicitaran la continuidad de tales

13. BNE, ms. Porcones 206: «Por los conseieros de Hazienda y Tribunal de la Contaduria mayor de Quentas. Que su Magestad el señor Rey don Felipe IIII que Dios guarde, mandó abstener de sus oficios, Magistrado y Consejo».

14. AHN, Consejos, libros de plazas, 725, f. 158-166; Carlos Morales, 2008a, pp. 998-1002.

gajes extraordinarios, con la consiguiente oposición a repartir de los consejeros que se mantuvieron en ejercicio[15].

5. DE LA «NUEVA CREACIÓN DE MINISTROS» DE 1626 A LAS ORDENANZAS DE 1659

Entre 1626 y 1659 sucesivas visitas y reformas jalonaron la evolución institucional del Consejo de Hacienda. La *nueva creación* de 1626 se aplicó y estuvo en vigor durante los años siguientes. Sin embargo, en la historiografía existen dudas sustanciales sobre la siguiente reforma, que, al parecer, se produjo en 1635.

5.1. *La incierta reforma de 1635*

La controversia procede de Gallado Fernández: «Reformación del año de 1635. En el año de 1635 expidió otra nueva Planta el señor Felipe IV estando en Aranjuez, la que nuestra diligencia no ha bastado a encontrar» (1805, p. 42). Diversos autores han reiterado esta afirmación, reconociendo que tampoco han sido capaces de localizar dicha cédula o decreto (García-Cuenca Ariati, 1982, p. 447) o, incluso, añadiendo alguna confusión más (Pulido Bueno, 2007, pp. 385-386). Sin embargo, Bermejo Cabrero puso en duda dicha reforma (2016, p. 53), aunque, previamente, De Francisco Olmos (1999, p. 183), no objetó que debió producirse ya que así lo avalaría un documento localizado en la Biblioteca Nacional de Francia previamente utilizado por Aldea (1980).

Merece la pena, por tanto, detenernos en el esclarecimiento de esta incierta «reformación» de Aranjuez. Según la transcripción realizada por Aldea, el Consejo de Hacienda se componía de tres tribunales gobernados por un mismo presidente. La Sala Mayor se componía de ocho consejeros de capa y espada y dos secretarios, encargada de la administración de las rentas reales. El segundo tribunal tenía cinco oidores y un fiscal y sentenciaba las causas de justicia. El tercero o Contaduría Mayor tenía cuatro contadores y un fiscal y desempeñaba la revisión de cuentas. Sin embargo, en el documento original existe una importante diferencia atinente al número de consejeros: «Consejo de contaduría mayor de Hacienda. En este consejo de contaduría mayor de Hacienda ay un presidente, *seis* consejeros de capa y espada»[16].

15. BNE, ms. Porcones 206: «Por los señores del Consejo de Hazienda, que actualmente siruen en él. En la pretensión qve tienen contra ellos los señores jubilados, de entrar a la parte de las gratificaciones que el Reyno suele conceder en ocasiones de seruicios».

16. La referencia que dio Aldea (1980), pp. 189-206, fue correcta, pero no la foliación. El original, en Biblioteca Nacional de Francia [en adelante, BNF], Manuscrits, Espagnol, 143,

Por consiguiente, en lugar de los ocho consejeros que apuntó Aldea en el texto original solamente aparecen seis. De hecho, en cuanto a los miembros que recoge Aldea a partir del documento señalado, el Consejo estaba formado, en su Sala Mayor, por un Gobernador-Presidente, el Marqués de la Puebla, que se encontraba en Portugal y que había sido sustituido por Antonio Campo-Redondo; además, se reunían Miguel de Peñarrieta, Pedro de Lezama (consejero y secretario), el marqués de los Trujillos (Antonio Álvarez de Bohórquez), Juan de Castro y Castilla (conde de Montalvo), Bartolomé Espínola, Manuel de Hinojosa y Pedro Valle de la Cerda, y como secretario, Francisco Gómez de la Asperilla. Esta exposición sí coincide con la del documento original[17]. Ahora cabe, por tanto, precisar el nombramiento y condición de cada consejero, acudiendo a los citados libros de plazas, para comparar esta situación con la formación establecida en 1626[18]. Durante los años siguientes, en cuanto a su estricto cumplimiento, la limitación de su composición a cuatro consejeros de número no se modificó aparentemente cuando, como un acto de gratificación, se designó como consejeros *ad honoren* a los que habían quedado destituidos[19].

En este período, uno de los nombramientos que engrosaron la plantilla fue el de Tomás del Bio Calderón, a comienzos de junio de 1630, como consejero supernumerario con asiento, voz y voto. Así mismo, hubo varios nombramientos más como supernumerarios que, en todo caso, tampoco pasaron a engrosar directamente la plantilla ya que recibieron esta condición para realzar su dignidad cortesana al serles encomendadas tareas diplomáticas y servicios de otra índole[20]. Por su parte, el factor general, Bartolomé Spínola, que ya participaba en las reuniones con anterioridad, el 5 de febrero de 1631 también obtuvo nombramiento como supernumerario. Otros cambios que tuvieron lugar fueron la designación en 1634 como gobernador de Antonio de Camporredondo y el de Pedro Valle de la Cerda en plaza supernumeraria con voz y voto, el 15 de marzo de 1635[21].

doc. 14, «Relación puntual de todos los consejos superiores y tribunales supremos que residen de ordinario en la corte de España, con las chancillerías que ay en ella y audiencias» (f. 55-64). El texto, en f. 61r.

17. Ibidem, «Consejos de su Magd Don Phelipe quarto, que Dios guarde, por sus precedenzias y antiguedades de los sres ministros que los asisten» (doc. 15, f. 65-68).

18. En 1626 fueron nombrados, además de Gilimón de la Mota, Francisco Dávila y Guzmán, marqués de la Puebla (gobernador desde 6 septiembre de 1629), Álamos de Barrientos, Juan de Castro y Castilla, y Antonio Álvarez de Bohórquez, y como secretario-consejero, Miguel de Ipeñarrieta (AHN, Consejos, libros de plazas, 725).

19. Los secretarios Lezama y Rodríguez Núñez, y el contador de Cuentas Álvaro Quiñones Osorio (AHN, Consejos, libros de plazas, 725; De Francisco Olmos, 1999, pp. 23-24).

20. A Juan Antonio de Vera y Zúñiga, conde de la Roca, el 20 de junio de 1630; a Francisco de Garnica el 28 de agosto, y, el 9 de diciembre 1631, a Manuel Francisco de Hinojosa: AHN, Consejos, libros de plazas, 726, passim; De Francisco Olmos, 1999, pp. 25-26.

21. AHN, lib. 726, passim; De Francisco Olmos, 1999, pp. 23-27.

De esta manera, podemos afirmar que la composición que consta en el documento de la BNF no fue producto de una reforma normativa de la institución, sino de la propia evolución de los nombramientos. Llegado 1635, el Consejo de Hacienda estaba formado por Campo-Redondo; los consejeros nombrados en 1626, Ipeñarrieta, Juan de Castro y Álvarez de Bohorques; y los supernumerarios Espínola, Hinojosa y Valle de la Cerda. En total, un presidente y seis consejeros de capa y espada, a los que se sumaban dos secretarios: Pedro de Lezama, antiguo secretario y consejero honorario, y Gómez de Lasprilla (fallecido en 1635).

Por tanto, aunque los dos documentos de París se redactaron de manera independientes, debidos a distinta mano y, probablemente, en fechas cercanas, la conexión entre ambos es evidente. Queda por dilucidar el motivo de la afirmación de Gallardo Fernández, a quién tampoco debemos considerar como infalible, pues, por ejemplo, no recogió la cédula de 1626. Lo cierto es que la supuesta reforma de 1635 no aparece recogida en la Nueva Recopilación ni en las diversas compilaciones de normas. Por ejemplo, en el «Prontuario de las reales resoluciones que por punto o regla general se han comunicado al Consejo de Hacienda desde el año de 1603», no aparece entre las disposiciones que sí constan, de 1626 y de 1651[22]. Por otra parte, en una extensa memoria sobre el gobierno del Consejo de Hacienda y sus tribunales, redactada en torno a 1670, tampoco figura[23].

De hecho, tal reforma hubiera resultado contradictoria con la política de Olivares, cuya persistente opinión negativa sobre el Consejo de Hacienda estaba, sin duda, relacionada con las dificultades para encontrar recursos en una situación de crecientes necesidades dinásticas, y ante las respuestas generalmente reticentes de la institución a las demandas que recibía (Barrios, 2016, p. 562; Domínguez Ortiz, 1983, pp. 172-173). En consecuencia, desde los inicios de su valimiento Olivares estuvo actuando en una doble dirección: de un lado, decidiendo la creación de numerosas juntas específicas para estudiar e impulsar arbitrios y expedientes fiscales (minas, moneda, donativo, media anata, papel sellado…), y, de otro, nombrando consejeros de Hacienda a destacados hombres de negocios para que propiciaran la contratación financiera, quizás como contrapeso a una composición nutrida básicamente de consejeros de capa y espada. Así, a la entrada de Espínola, siguió la de Octavio Centurión y Juan Lucas Palavesín en 1640, ambos como supernumerarios[24].

22. BNE, ms. 10.398-10.402 (volumen 2, f. 97-98).
23. AHN, Estado, leg. 3.214, y lib. 871, «Noticias del Gobierno de la Real Hacienda…».
24. AHN, Consejos, libros de plazas, 727, f. 24v y 27. De esta manera, casi la mitad de los consejeros eran hombres de negocios (Domínguez Ortiz, 1983, p. 173).

5.2. *La visita de 1643-1647*

La caída en desgracia de Olivares puso de manifiesto la influencia de los acontecimientos cortesanos en el devenir de las instituciones y, en particular, del Consejo de Hacienda. Al respecto, contamos con una enriquecedora perspectiva centrada en el conocimiento histórico de la corrupción en el mundo hispánico moderno (Andújar y Ponce Leiva, 2018; Gómez González, 2017; Ponce Leiva y Andújar, 2016), que ha ofrecido un importante bagaje de conocimientos sobre las visitas del Consejo de Hacienda, que se prolongaron, con interrupciones, entre 1643 y 1667 (Bermejo Cabrero, 2016, pp. 65-69, 72-77; Gómez González, 2016; Malaprade, 2017, 2018, pp. 33-64).

Si bien la visita comenzó con carácter general, pronto se transformó en dos encausamientos particulares, que, en buena medida, pueden interpretarse como un «ajuste de cuentas» entre miembros de la facción de Olivares, a la que pertenecía el promotor de la visita, Francisco Antonio de Alarcón, y el visitador, Diego de Riaño y Gamboa (cuya labor comenzó a mediados de julio de 1643 y concluyó en 1647), así como los principales procesados. La actuación del visitador debía centrarse en la averiguación de fraudes y colusiones entre los ministros y oficiales y los asentistas y arrendadores, así como la comprobación de las compras de juros y otros efectos que pudieran haberse efectuado en detrimento de los intereses de la Real Hacienda.

En ambos casos, además, la resonancia cortesana de la visita significó un castigo social, tan doloroso como la condena pecuniaria recibida por ambos. El consejero Valle de la Cerda y el fiscal Riaño sufrieron una «purga» que no afectó, al contrario, a los demás clientes de Olivares que se mantuvieron en el poder y, si, por una parte, la visita funcionó como un instrumento faccional, por otra, servía de advertencia tanto a ministros como a hombres de negocios de los límites del abuso y del fraude.

Este componente cortesano de la visita de 1643 aparece claramente reflejado en la carta enviada por Juan de España y Moncadí a Luis Méndez de Haro: el 28 de julio: en el Consejo de Hacienda «más peca la ignorancia que la malicia y mucho más que entrambas, el número, que por excesivo es tan perjudicial y costoso». Mostrando escepticismo respecto al resultado de la visita, ponía en duda la composición y funcionamiento del organismo, la incuria de los consejeros de capa y espada, y la preponderancia de los hombres de negocios que lo integraban. De esta guisa, encarecía que se actuara enérgicamente: «esta reformación es precisamente necesaria y se ha de hacer cueste lo que costare, supuesto que no hay cura sin dolor ni exemplo grande sin injusticia»[25].

25. Bermejo Cabrero, 2016, pp. 313-316. Seguía con su juicio: «En el Consejo de Hacienda de capa y espada no me parece que hay ahora mucho respeto... Lo que en este Consejo se debe enmendar es la suficiencia en que todos pecan, unos por más y otros por menos. Los extranjeros

En este sentido, estos rumores cortesanos que vinculaban el inicio de la visita con una importante reducción de la planta del Consejo de Hacienda fueron muy intensos[26]. Empero, como señalaba Juan de España, no parecía que la visita y la reforma del Consejo pudieran efectuarse al unísono. Así pues, más allá de las fuertes sanciones impuestas a ambos personajes por la visita (tras un largo proceso, sendas multas, pérdida de bienes dudosamente adquiridos, como juros y alcabalas, y sus cargos en el Consejo), las propuestas de reforma del Consejo no podían provocar una brusca ruptura en las negociaciones de asientos o del entramado de arrendamiento de rentas, dada la grave situación financiera padecida por Felipe IV. No obstante, en relación con la dinámica cortesana podemos entender que el conde de Castrillo, gobernador del Consejo desde julio de 1642, al año siguiente, en mayo, solicitara ser exonerado, y fuera sustituido precisamente por el licenciado Alarcón, instigador de la visita y presidente del Consejo hasta 1647. En definitiva, la confianza de los hombres de negocios debía mantenerse intacta y, así, con el objetivo de conservar el crédito a pesar de las notorias dificultades financieras, los epígonos de Olivares se mantuvieron en los puestos de dirección del Consejo y de las diversas juntas, como Alarcón y, posteriormente, José González, presidente entre 1647 y 1652 (Fayard, 1981; Sanz Ayán, 2013, pp. 221-225).

Por consiguiente, la reiterada intención de reducir la composición del Consejo de Hacienda no hizo sino incumplirse, dado que el número de consejeros supernumerarios había seguido aumentando desde 1640. De momento, el 21 de agosto de 1644 se realizó un ajuste del número de consejeros de capa y espada, que los dejó en seis; de oidores, en cinco, y de contadores de cuentas, en tres[27]. Sin embargo, la limitación de plazas se quedó al albur, dado que se ordenaba que las vacantes que se produjeran no se cubrieran y, así, se esperaba que se fueran consumiendo. A pesar de esta disposición, durante los años siguientes continuó produciéndose la entrada de supernumerarios, muchos de ellos caballeros de hábito (como el propio España en 1649) y, otros, importantes hombres de negocios. El nombramiento de consejeros supernumerarios redundaba en un aumento de gastos que periódicamente se pretendía acotar, pero, como fuente de patronazgo y forma de recompensar servicios, resultaba indispensable para la potestad real y el ejercicio del valimiento.

---

son muy hábiles pero interesados en cuanto allí se trata, jueces y partes contra todo derecho divino y humano. De los naturales hay muy pocos que se les puedan oponer, con lo cual los genoveses no son consejeros sino absolutamente todo el Consejo».

26. «Cartas de padres de la Compañía de Jesús», en *Memorial Histórico Español*, 17 (1863), pp. 198-199: «La reformación del Consejo de Hacienda está hecha, y para publicarse; quitan grande número de ministros…dejan cuatro del Consejo de Hacienda, cuatro de garnacha y cuatro contadores mayores, y de 150 contadores y zánganos que había de otros contadores» (agosto de 1643).

27. Bermejo Cabrero, 2016, pp. 54-55, 317.

5.3. *Bajo la órbita de Luis de Haro. Las reformas del Consejo entre 1651 y 1659*

La visita se reactivó en 1649, junto con la formación de una junta de reformación del Consejo, dirigidas ambas por Martín de Larreategui (Malaprade, 2017: 368; Milán Coronado, 2017, p. 187). Por una parte, se procedió a la revisión de las operaciones de compra y venta de juros por parte de contadores y oficiales y sus conexiones con los hombres de negocios; por otra, se propuso una nueva reforma, derivada del incremento del número de consejeros y del reiterado incumplimiento de las órdenes de 1621-26 y 1644.

Así, en el preámbulo de la real cédula firmada por Felipe IV el 25 de septiembre de 1651, se afirmaba que «con la multiplicidad de consejeros que se an aumentado en este consejo, de lo que disponen ayan las ordenanzas de él, se embaraza el despacho y expediente de los negocios que le pertenecen, resultan inconvenientes considerables no solo a mi servicio si no al interés de las partes». En suma, tras el incumplimiento de las directrices dadas con anterioridad respecto a la composición, el rey «dio nueva planta o forma al Consejo y Contaduría maior» mediante una nueva reducción de la plantilla, que quedó formada por el presidente, seis consejeros de mañana, «que eran dos más de lo que disponían las ordenanzas, y que fuesen los más antiguos», y otros dos de tarde (del Consejo Real), el secretario y un fiscal. Además, se redujo también a tres el número de oidores, «que era el que disponía la ordenanza», y el de contadores menores[28]. Esta vuelta a la organización establecida en 1644 debía limitar la formación dejando a los miembros más antiguos, si bien se apuntilló que debería efectuarse «quedando todos los del Consejo y Qontaduría maior que eran, con los gajes, casa de aposento, propinas, y emolumentos, como si siruieran, y pudiesen asistir a los actos públicos y besamanos».

Por su parte, señaló Gallardo Fernández que el principal móvil fue «excusar sueldos inútiles, sin alterar en lo sustancial las plantas anteriores», y no dejó pasar la ocasión para advertir el carácter de «supremo» y la jurisdicción «privativa» del Consejo, en relación con la expansión de la fiscalidad en los ámbitos administrativo y judicial (1805, pp. 42-44). Después de 1643, la gradual absorción de diversas juntas (sal, papel sellado, media annata), así como la preeminencia que ejercieron sucesivos presidentes en la crisis financiera de 1647-52, permitieron al Consejo dotarse de una mayor entidad institucional cortesana. Como bien reflejaron (Núñez de Castro, 1658, ff. 39v-40r; 1698, pp. 81-87) y De la Ripia (1796, pp. 107-110), el Consejo se había situado en el vértice de un tupido entramado administrativo hacendístico y, a lo largo de las décadas, el fortalecimiento de su solidez jurisdiccional no había

28. BNE, ms. 10.735, f. 126-128; AGS, CJH, leg. 568, doc. 14. A 15 de noviembre de 1656, se ordenó «Que se observase el anterior decreto de reformación y no se consultase oponiéndose a esta orden» (BNE, ms. 10.399, f. 98).

hecho más que crecer, con el envío de arrendadores, pesquisidores y comisarios, jueces ejecutores, etc.

En esta trayectoria cabe situar la absorción de la Comisión de Millones. La concesión de servicios de millones fue fundamental para el sostenimiento del gasto dinástico. Hacia 1655, los ingresos directos de la Real Hacienda, sin sumar remesas de Indias, Tres Gracias, donativos y arbitrios como la media annata, se acercaban a 12,5 millones de ducados, de manera que las rentas administradas por el Consejo de Hacienda montaban 7 425 897 ducados, los servicios gestionados por la Comisión de Millones 4 465 415 ducados, mientras que las rentas de procedencia eclesiástica sujetas a la jurisdicción del Consejo de Cruzada alcanzaban 5 802 667 ducados (Andrés Ucendo y Landa García, 2008, pp. 162-163). No resulta sorprendente, por tanto, que, desde la misma creación de la Comisión de Millones, formada por cuatro procuradores y personal dependiente del Reino, la Real Hacienda procurara intervenir en la administración de los servicios, cuyo destino era finalmente decidido en el Consejo a través de las negociaciones de los asientos de provisiones generales y otras negociaciones financieras.

El origen de la Comisión y su posterior incorporación al Consejo de Hacienda fueron expuestos por Gallardo Fernández (1805, pp. 46-66). En trabajos más recientes, Cárceles de Gea (1994; 1995; 2000) se ha detenido en los conflictos que surgieron entre el Reino, el Consejo de Castilla, y en Consejo de Hacienda, por el control del espacio fiscal que rodeaba la administración de los millones, con el fraude y corruptelas y otras cuestiones de orden político-institucional implícitos. Así, las reformas que tuvieron lugar en la Comisión de Millones entre 1632 y 1658 formaron parte de un plan para integrar este ingreso en el engranaje recaudatorio de la Real Hacienda, rompiendo con el ámbito jurisdiccional e instrumental creado previamente bajo el manto de las Cortes y el control de las ciudades y villas, que daba lugar a la profusión del fraude como forma de resistencia fiscal de los poderosos. La clave en su evolución institucional se produjo en 1632, con la entrada en la Comisión de tres ministros reales (cuatro desde 1638) que se sumaron a los cuatro comisarios del reino; este hecho, unido a la adquisición de jurisdicción privativa, significó «como si se hubiese creado un nuevo Consejo» (Fortea Pérez, 2008, p. 264).

El siguiente hito se produjo en 1647 con el intento de traspaso de todas las competencias sobre los millones al Consejo de Hacienda, aunque fracasó por la resistencia de la Comisión, con el apoyo del Consejo de Castilla (Fortea Pérez, 2023, pp. 151-159). No obstante, de nuevo en 1649 se procuró la incorporación de la Comisión al Consejo de Hacienda como una sala específica bajo la presidencia de José González, pero la oposición de las Cortes, que debían conceder un nuevo servicio de 24 millones, paralizó nuevamente el intento de controlar jurisdiccionalmente este espacio de gestión fiscal.

De esta manera, debe interpretarse que la reforma de 1658-1659 culminaba esta línea de intervención y de fortalecimiento de la Real Hacienda y de su Consejo frente a las Cortes (Fortea Pérez, 2008, pp. 277-286). Así pues, un decreto de 30 de mayo de 1659, finalmente, procedió a la «Agregación al Consejo de Hacienda de la Comisión del servicio de Millones y erección de la Sala de estos», con el argumento de que se simplificaría así la cobranza de los servicios y se evitarían costes de administración al quedar todo el edificio fiscal bajo una misma jurisdicción[29]. En definitiva, de momento el Consejo quedó conformado por una sala de Gobierno, otra de millones con plena jurisdicción (el presidente, cuatro consejeros de Hacienda, y cuatro comisarios nombrados por el Reino, fiscal y dos secretarios), y una tercera mixta de rentas y millones. Así mismo, la administración de alcabalas y unos por ciento quedaron agregados al Consejo de Hacienda, con lo que se daba otro paso más en la unificación de rentas y servicios bajo la cabeza de esta institución a través de sus instrumentos contables, administrativos, y judiciales (Cárceles de Gea, 1994).

Sin duda alguna, la posición del presidente del Consejo de Hacienda sobre el entramado institucional quedó reforzada; de hecho, ha pasado desapercibido que Felipe IV hizo coincidir esta reforma con el nombramiento de un nuevo gobernador, Juan de Góngora, el 17 de marzo de 1658: en su acto de juramento se hacía alusión a la renuncia del anterior presidente, Juan de Carvajal y Sande, pues, «representando convenía a mi servicio que la comisión de millones se agregase al Consejo de Hacienda, y porque para tan grande ocupación no se hallaba con la salud y fuerzas que requería», se designaba a Góngora en su lugar[30]. La decisión también había sido comunicada el 20 de marzo, a las Cortes, que, entre 1657 y finales de 1658, accedieron a la concesión de nuevos servicios que proporcionaron un importante incremento nominal de seis millones de ducados, que se sumaban a la mejoría de la recaudación neta proporcionada por sucesivas reformas administrativas en años anteriores (De Andrés Ucendo, 1999, pp. 39-40; Fortea Pérez, 2008, pp. 310-312).

La absorción de la Comisión formaba parte de un plan más amplio de reorganización del gobierno hacendístico que debía dotar al Consejo, con su presidente a la cabeza, de plena autoridad política y jurisdiccional sobre todos los espacios fiscales. En este sentido, ha de recordarse que, en septiembre de 1658, Felipe IV ordenó la unificación de la administración de las alcabalas, unos por ciento, servicios y millones, en cada partido y provincia, suprimiendo el entramado dependiente de las ciudades y villas con voto en Cortes, con objeto de reducir el fraude y mejorar la cuantía de la recaudación (Sánchez Belén, 1996, pp. 34-35).

29. *Novísima Recopilación* (1805), Ley V, título X, libro VI.
30. BNE, ms. 10.402, f. 319-320.

Por otra parte, también durante 1658 se estuvo reuniendo una junta, con el objetivo de proponer medidas de reducción de gastos de administración y de impulsar la percepción de los ingresos atrasados, confusos o perdidos. Esta última propuesta enlazaba con la actuación de la Junta de Cobranzas que había creado y presidido Luis de Haro, en 1652. No en vano, Góngora era cliente de Haro, quien había promovido su nombramiento y estaba detrás de todas las reformas que se sucedían con objeto de mejorar la recaudación neta reduciendo costes y vigilando fraudes e impagos. En este sentido, también de manera simultánea, desde años atrás se estaba llevando a cabo una visita por parte de García de Porres y Silva, consejero de Castilla, que había puesto su punto de mira en las irregularidades cometidas por la Escribanía mayor de Rentas en la gestión de los arrendamientos, y las conexiones entre contadores y hombres de negocios (Bermejo Cabrero, 2016, pp. 56-57, 78-79).

Las propuestas de esta junta fueron clave en la adopción de una serie de disposiciones que, como corolario de la anexión de la Comisión de Millones, entre el 7 de agosto y el 17 de noviembre de 1659, dotaron al Consejo de nueva planta y organización, así como de procedimiento para los nombramientos. Se compondría por el presidente y 12 consejeros, distribuidos anualmente en tres salas de cuatro miembros: de Gobierno, Millones y Cobranzas, que se convertía así en una sección especializada con competencias específicas. Para ajustar la plantilla, se irían consumiendo las plazas supernumerarias que excediesen. Finalmente, otras medidas afectaron al Tribunal de Cuentas y a su funcionamiento[31].

Las reformas de 1658-59 estuvieron también, sin duda, relacionadas con la extenuación hacendística sufrida por la Monarquía (Domínguez Ortiz, 1983, pp. 72-74). Desde 1656, a la guerra contra Francia se sumaron las agresiones inglesas contra Cádiz, Tenerife y a la flota de Indias, que no arribó durante dos años, con el consiguiente perjuicio para la financiación. A mediados de 1658 la derrota en la batalla de las Dunas y la caída de Dunquerque significó un trascendental golpe militar; al año siguiente, el 7 de noviembre, Luis de Haro y Mazarino firmaron el tratado de los Pirineos que sellaba la paz entre Felipe IV y Luis XIV.

6. EL CONSEJO DE HACIENDA ENTRE 1663 Y 1700: EN EL OCASO DEL GOBIERNO POLISINODIAL

Recientemente, Milán Coronado (2017 y 2018) se ha ocupado de estudiar la visita con la que concluyó el reinado de Felipe IV. Emprendida por Lope de los Ríos en 1664, se encontró con la firme resistencia del entonces presidente del Consejo de Hacienda, Miguel de Salamanca, que, por su parte, dirigía una nueva junta de reformación. No resulta sorprendente, dado que el «interrogatorio a cuyo tenor se

31. BNE, ms. 10.399, f. 98v.

han de examinar los testigos en la visita», comenzaba con una auténtica requisitoria sobre la «diligencia y vigilancia» que deberían haber guardado los presidentes y gobernadores en su labor (Bermejo Cabrero, 2016, pp. 319-318). Así, el foco se puso en la recepción y manejo de ayudas de costa indebidas, el fraude en la compra y venta de rentas y de juros, las relaciones entre ministros y oficiales con arrendadores y asentistas, la aceptación de dádivas y sobornos, y la falta de diligencia en la cobranza de atrasos y deudas.

Sin duda alguna, la influencia de los hombres de negocios en las actividades del Consejo condicionaba la actividad de gobierno: existía una «porosidad» entre asentistas, arrendadores, ministros y oficiales en distintos niveles, que, si por una parte propiciaba fraudes y corruptelas, por otra, resultaba un elemento básico en el funcionamiento del sistema hacendístico (Andújar Castillo, 2018, p. 171). Así puede entenderse que los propios asentistas obtuvieran silla en el mismo Consejo de Hacienda mediante nombramientos como supernumerarios, o que pudieran comprar cargos de contadores. Los consejos que más sufrieron la venalidad fueron el de Indias y el de Hacienda, como producto de la concesión de asientos o mediante compra directa cuando más apretaban las demandas dinerarias y más agotados estaban los recursos, y había que recurrir a las enajenaciones o a los nombramientos como forma de recompensa por servicios pasados o futuros (Andújar Castillo, 2011, pp. 82-84, 2024).

La presencia de los hombres de negocios en todos los niveles del gobierno hacendístico ha de relacionarse, sin duda, con la coincidencia serial y periódica de visitas y juntas de reformación. Por una parte, se trataba de un reflejo de las luchas entre facciones cortesanas, pero, también, de un conflicto secular entre el Consejo de Castilla, al que pertenecían generalmente los visitadores, y el Consejo de Hacienda, tal y como revela la actitud del sucesor de Salamanca en la presidencia, el conde de Villaumbrosa, sumamente reticente ante la visita. En la coyuntura de 1663-1665, el Consejo de Castilla actuaba, así mismo, en apoyo de los intereses del Reino representados por las Cortes, que querían recuperar el control de la administración de los millones (Cárceles de Gea, 1995, pp. 42-48). De esta guisa, a lo largo del reinado, el Consejo de Castilla continuó representando mediante memoriales su oposición a la actuación fiscal del Consejo de Hacienda (Bermejo Cabrero, 2016, pp. 59-60).

Mientras Lope de los Ríos avanzaba con la visita, la junta de gobierno y reformación del Consejo mantuvo sus reuniones, con presencia del mismo visitador, personaje cercano a Nithard y a la regente. Como era habitual en la transición entre reinados, máxime cuando comenzaba una regencia por la minoría de edad de Carlos II, en la corte proliferaban los memoriales que pretendían revisar, criticar o apoyar el gobierno polisinodial (Cárceles de Gea, 1987; Oliván Santaliestra, 2003). Las propuestas de reformación insistían en la reducción de gastos mediante la limitación de ministros, servidores y mercedes, la mejoría de la eficiencia de la

gestión hacendística acotando impagos y fraudes, la limitación de la influencia de los hombres de negocios en la toma de decisiones, y la importancia de efectuar la elección de consejeros y oficiales nombrado a personas con experiencia y buen caletre (Cárceles de Gea, 1995, pp. 68-69; Milán Coronado, 2017, pp. 200-203).

Sucesivos decretos, desde el 12 de marzo de 1666 hasta el 1 de abril, establecieron, «teniendo presente lo dispuesto en las ordenaciones pasadas y los justos motivos que obligan a reconocer el graue perjuicio que se ha obseruado en su inobseruancia», en ocho el número de consejeros, repartidos en dos salas, cuatro para la de Gobierno y otros cuatro para la de Millones. Pero la reducción de plantilla se encontró con la resistencia de todo el Consejo, por lo que hubo de ser reiterada a mediados de junio[32]. El cumplimiento de tales disposiciones se realizaría mediante la supresión de las plazas que excedieran dicho número, cuando se produjera la vacante, y con la orden de evitar el nombramiento de supernumerarios.

Pero la reforma encontró dificultades, siguieron nombrándose consejeros titulares, honorarios y supernumerarios, incluso bajo la gobernación de Lope de los Ríos (desde septiembre de 1667 hasta noviembre de 1673), por lo que tales disposiciones tuvieron que ser reiteradas en abril de 1669 (cuando había 12 consejeros) y octubre de 1676[33]. Además de la vía del patronazgo como fuente de nombramientos como forma de recompensa cortesana, la venta de oficios para obtener ingresos se hizo especialmente significativa: el caso quizás más relevante fuera la venta, el 2 de agosto de 1676, del oficio de chanciller mayor y consejero de Hacienda al marqués de Castromonte, Juan de Baena y Mendoza, por 125 000 escudos en efectivo y un préstamo de otros 75 000 (De Francisco Olmos, 1999, p. 50).

En la agitada coyuntura de la adquisición de la mayoría de edad de Carlos II y del fin de la regencia se produjeron importantes novedades en el gobierno polisinodial. La «desgraduación» de Valenzuela el 27 de enero, tras su breve pujanza cortesana, y el acceso a la cúspide del poder de don Juan José de Austria como «primer ministro», se acompañaron de dos decretos dirigidos a los Consejos el 10 de febrero: uno, pretendía atajar la «corrupción y falta de limpieza en los ministros»; otro, les encarecía que guardaran el debido secreto[34]. Ambos problemas debían ser especialmente graves en los consejos de Indias y de Hacienda, pues ambos fueron simultáneamente objeto de reformación al cabo de unos meses.

32. BNE, ms. 10.735, f. 129-130; ms 10.399, f. 99-100.

33. BNE, ms 10.399, f. 100v-101r, y ms. 10.402, f. 326. También, Sánchez Belén, 1996, pp. 12-15. Los nombramientos, en AHN, libros de plazas 729, y De Francisco Olmos, 1999, pp. 44-50.

34. BNE, ms. 18.275, f. 37v-41v. Sobornos y cohechos estaban a la orden del día, según Sánchez Belén, 1996, pp. 25-27.

En el Consejo de Hacienda, el 12 de julio de 1677 el decreto de reforma partía del reconocimiento de la necesidad de proceder a una reducción del número de consejeros, y de que fueran «experimentados e independientes», por lo que se efectuaban los oportunos nombramientos de un presidente, el conde de Humanes, y ocho consejeros, «quedando todos los demás, que aquí no van expresados, sin exercicio ni gajes», dos secretarios para la sala de gobierno y otro más para la de millones[35]. En el mismo decreto se reconocía que, como algunos nombramientos se habían efectuado por hacerles merced «por vía de casamiento, servicios pecuniarios o préstamo», tendrían que recibir la oportuna compensación. Al poco, el 10 de agosto, se reformaba también la composición de la sala de justicia, quedando con 5 oidores y un fiscal.

No obstante, tales disposiciones, una nueva reformación se produjo el 30 de diciembre de 1679: se amplió a nueve el número de consejeros, distribuidos en la sala de gobierno (siete) y en la de millones (cuatro, pero dos procedentes de la anterior), y se recuperó la sala de cobranzas «como se tenía en lo antiguo», formada por cuatro consejeros de los anteriores[36].

En suma, la crisis del gobierno polisinodial estuvo caracterizada por el desprestigio de estos tribunales y la crítica a los procedimientos de los nombramientos, que se efectuaban por venalidad y por la herencia de los honores, y no por los verdaderos méritos de los servicios y la experiencia. En consecuencia, la ambición e incompetencia de sus miembros dieron lugar a un desprestigio que hace comprender que se llegar a clamar «mueran los Consejos» (Cárceles de Gea, 1987, p. 120). De hecho, las reformas de don Juan José de Austria, Medinaceli, y Oropesa, abundaron en la merma de los intereses y prerrogativas de los consejos. Así se comprenden los sucesivos y contradictorios intentos de reducir el número de ministros y oficiales, fruto de los privilegios, y caminar hacia un gobierno más expeditivo y ejecutivo, contrario a la práctica jurídica y deliberativa de los consejos.

En este sentido cabe situar el nombramiento del primer superintendente general, el marqués de los Vélez, anteriormente presidente del Consejo de Indias y primo de Oropesa, el 31 de enero de 1687, encargado de situarse por encima del entramado institucional hacendístico y velar por la mejora de la eficiencia de la recaudación con objeto de atender al gasto dinástico (Bermejo Cabrero, 1984, pp. 410-418; Sánchez Belén, 1996, p. 16). Justamente, en la misma fecha, se llevó a cabo una nueva reforma del Consejo de Hacienda, dirigida a superar los «inconvenientes que tiene que en los tribunales haya mucho número de ministros por la confusión que causa y dificultad que los negocios se expidan con la brevedad que conviene, demás de lo

35. BNE, ms. 18.275, f. 41-42, y otras copias en ms 10.399, f. 101r, y ms. 11.009, f. 199.

36. BNE, ms. 10.399, f. 102-103. Ha pasado desapercibida, excepto para Cárceles de Gea, 1995, p. 70.

que con ellos se augmenta de gajes y salarios», para lo que se volvía a la planta de un presidente, seis consejeros y dos secretarios[37].

La frase, como hemos constatado, se había reiterado en numerosas reformaciones a lo largo de la centuria. Todavía se repetiría en la siguiente, que, en 1691, afectó simultáneamente a la plantilla de varios consejos (Cárceles de Gea, 1995, pp. 61-63) y que, en el de Hacienda, significó la vuelta a una sala de gobierno con un presidente y seis consejeros, «los más antiguos», un fiscal y dos secretarios, a los que se sumaba el Gran Canciller[38]. Se trataba de una nueva reforma auspiciada por el conde de Oropesa, que a los pocos meses debería abandonar la presidencia del Consejo de Castilla, y bajo cuyo gobierno se habían llevado a cabo importantes reformas monetarias y hacendísticas, como continuación de las medidas emprendidas desde 1680 por el duque de Medinaceli para garantizar el gasto dinástico, reprimir el fraude, aliviar los costes financieros y mejorar la recaudación neta (Sánchez Belén, 1996).

7. CONCLUSIONES

Desde su fundación, la correlativa sucesión de visitas y ordenanzas propiciadas por las pugnas faccionales cortesanas y los requerimientos financieros constituyeron el eje de la dinámica institucional del Consejo de Hacienda. Entre 1523 y 1578, actuando por vía de comisión, alcanzó significado como vía preferente para la gestión de los asientos y cambios y otros expedientes hacendísticos extraordinarios, imprescindibles para el sostenimiento del gasto dinástico. Durante un periodo de transición hasta inicios del reinado de Felipe III, el Consejo se perfiló institucionalmente y recibió al fin sendas ordenanzas (en 1593 y 1602) tras respectivas visitas, que finalmente le unificaron con las Contadurías mayores de Hacienda y de Cuentas y le otorgaron encaje definitivo en el engranaje polisinodial. Así, la institución se asimiló jurisdiccionalmente al resto de los consejos de la monarquía, adquiriendo carácter de supremo y privativo, tras una nueva visita y dos reformas complementarias (1621 y 1626). Otra visita iniciada en 1643 y las reformas de 1644 y 1651, enlazaron con la transcendental absorción de la comisión de millones en 1658, después de varios intentos, y una nueva ordenanza (1659), de manera que el Consejo, con su presidente a la cabeza, se situó, al fin, en la cúspide de todo el entramado institucional hacendístico. Desde la visita de 1663 hasta la muerte de Carlos II se reiteraron sucesivas ordenanzas, como la de 1691, que denotan la profunda contradicción entre sus cometidos jurisdiccionales y su situación cortesana, en un

37. BNE, ms. 10.399, f. 103v-104.

38. BNE, ms. 10.399, fols. 104-106; Gallardo Fernández (1805), 66-69. La medida se completó con la designación de un superintendente en cada una de las 21 provincias y, posteriormente, en 1694, con la supresión de la Diputación de alcabalas (Sánchez Belén, 1996, pp. 18-19).

contexto de patente crisis y descomposición del gobierno polisinodial, expresado en la venalidad y en la corrupción. En definitiva, la naturaleza del gobierno de la Real Hacienda en tiempo de los Austrias representa la correlación entre el patronazgo y el clientelismo y la ordenación normativa, con la corrupción como una práctica consuetudinaria que si, por una parte, resultaba una pieza esencial para el gobierno, por otra, detraía recursos y agudizaba los problemas de sostenimiento del gasto dinástico.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Carlos Javier de Carlos Morales.

Agradecimientos y financiación

Programa I+D de la Comunidad de Madrid "Madrid, Real y Cortesano" (PHS-2024/PH-HUM-290 MARCO)

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

8. BIBLIOGRAFÍA

Aldea Vaquero, Q. (1980). Los miembros de todos los Consejos de España en la década de 1630 a 1640. *Anuario de Historia del Derecho Español*, *50*, 189-206.

Andrés Ucendo, J. I. (1999). *La fiscalidad en Castilla en el siglo XVII: Los servicios de millones, 1601-1700*. Universidad del País Vasco.

Andrés Ucendo, J. I., y Lanza García, R. (2008). Estructura y evolución de los ingresos de la Real Hacienda de Castilla en el siglo XVII. *Studia Historica. Historia Moderna*, *30*, 147-190.

Andújar Castillo, F. (2011). La venalidad en los consejos durante el reinado de Carlos II: De las plazas de consejero al oficio de archivero. En *Hacer historia desde Simancas: Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego* (pp. 73-96). Junta de Castilla y León.

Andújar Castillo, F. (2018). Hombres de negocios y cargos públicos: El acceso venal a los cargos del Consejo de Hacienda en el siglo XVII. En *Studium, magisterium et amicitia: Homenaje al profesor Agustín González Enciso* (pp. 169-176). Eunate.

Andújar Castillo, F. (2024). Gobernar la monarquía en secreto en el reinado de Carlos II (1680-1700). *Magallánica*, *20*, 132-160.

Andújar Castillo, F., y Ponce Leiva, P. (2018). *Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Barrios, F. (2016). *La gobernación de la Monarquía de España: Consejos, juntas y secretarios de la administración de corte (1556-1700)*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Bermejo Cabrero, J. L. (1984). Superintendencias en la Hacienda del Antiguo Régimen. *Anuario de Historia del Derecho Español*, *54*, 409-448.

Bermejo Cabrero, J. L. (2016). *Organización hacendística de los Austrias a los Borbones: Consejos, juntas y superintendencias*. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Cárceles de Gea, B. (1987). Juicio y debate del régimen polisinodial en las campañas políticas del reinado de Carlos II. *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, *7*, 103-124.

Cárceles de Gea, B. (1994). *Fraude y administración fiscal en Castilla: La Comisión de Millones (1632-1658). Poder fiscal y privilegio jurídico-político*. Banco de España.

Cárceles de Gea, B. (1995). Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos II: La Sala de Millones (1658-1700). *Banco de España*.

Cárceles de Gea, B. (2000). *Fraude y desobediencia fiscal en la Corona de Castilla, 1621-1700*. Junta de Castilla y León.

Carlos Morales, C. J. de. (1989). El Consejo de Hacienda de Castilla en el reinado de Carlos V (1523-1556). *Anuario de Historia del Derecho Español*, *59*, 49-159.

Carlos Morales, C. J. de. (1996). *El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602: Patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI*. Junta de Castilla y León.

Carlos Morales, C. J. de. (2000a). La adaptación de los Consejos a la nueva realidad política castellana. En J. Martínez Millán (Dir.), *La Corte de Carlos V* (Vol. 1, pp. 221-225). Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Carlos Morales, C. J. de. (2000b). Las reformas de las Casas reales de 1522-1525. En J. Martínez Millán (Dir.), *La Corte de Carlos V* (Vol. 1, pp. 226-234). Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Carlos Morales, C. J. de. (2008a). *Felipe II: El Imperio en bancarrota. La Hacienda Real de Castilla y los negocios financieros del Rey Prudente*. Dilema.

Carlos Morales, C. J. de. (2008b). Política y finanzas. En J. Martínez Millán y M. A. Visceglia (Dirs.), *La monarquía de Felipe III: La corte* (Vol. 3, pp. 749-866). Fundación Mapfre.

Carlos Morales, C. J. de. (2014). La Casa de Borgoña como institución económica, 1517-1665. En J. Martínez Millán y J. E. Hortal Muñoz (Dirs.), *La Casa de Borgoña: La Casa del rey de España* (pp. 73-98). Leuven University Press.

Carlos Morales, C. J. de. (2017). La política financiera de Felipe IV, 1621-1628. En J. Martínez Millán y M. Rivero Rodríguez (Dirs.), *La Corte de Felipe IV (1621-1665): Reconfiguración de la Monarquía católica* (Tomo III, vol. 2, pp. 1099-1212). Polifemo.

Carlos Morales, C. J. de. (2021). El coste de la elección de Carlos V y la financiación del Imperio. En *L'impero di Carlo V e la geopolitica degli Stati italiani nel quinto centenario dell'elezione imperiale* (Quaderni dell'Accademia, 20, pp. 53-70). Accademia Nazionale Virgiliana.

Clavero, B. (1986). *Tantas personas como estados: Por una antropología política de la historia moderna*. Tecnos.

Clavero, B. (1991). *Antidora: Antropología católica de la economía moderna*. Giuffrè Editore.

Domínguez Ortiz, A. (1983). *Política y Hacienda de Felipe IV*. Ediciones Pegaso.

Dosse, F. (1988). *La historia en migajas: De Annales a la nueva historia*. Edicions Alfons el Magnànim.

Ezquerra Revilla, I. (2000). *El Consejo Real de Castilla bajo Felipe II*. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Fayard, J. (1982). *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*. Siglo XXI.

Fernández Conti, S. (1998). *Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía hispana en tiempos de Felipe II*. Junta de Castilla y León.

Fortea Pérez, J. I. (2008). *Las Cortes de Castilla y León bajo los Austrias: Una interpretación*. Junta de Castilla y León.

Fortea Pérez, J. I. (2023). Tiempos de incertidumbre: Las Cortes de 1649-51 y la resiliencia del Reino. En R. Lanza García (Ed.), *Los dineros de la Corona: Finanzas y cambio fiscal en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII)* (pp. 133-164). Comares.

Francisco Olmos, J. M. de. (1999). *Los miembros del Consejo de Hacienda en el siglo XVII*. Castellum.

Gallardo Fernández, F. (1805). *Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de España, su gobierno y administración* (Vol. 1). Imprenta Real.

García-Cuenca Ariati, T. (1982). El Consejo de Hacienda (1476-1803). En M. Artola Gallego (Dir.), *La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones* (pp. 405-502). Alianza.

Gastón de Torquemada, G. (1991). *Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde el año 1600 en adelante*. Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

Gibert y Sánchez de la Vega, R. (1976). Contadores de Hacienda e intervención fiscal en el Antiguo Régimen castellano. En *Itinerario histórico de la Intervención General del Estado* (pp. 87-191). Instituto de Estudios Fiscales.

Gómez González, I. (2016). Entre la corrupción y la venalidad: Don Pedro Valle de la Cerda y la visita al Consejo de Hacienda de 1643. En P. Ponce Leiva y F. Andújar Castillo (Eds.), *Mérito, venalidad y corrupción en España y América: Siglos XVII y XVIII* (pp. 235-250). Albatros.

Gómez González, I. (Coord.). (2017). La lucha contra la corrupción en la Monarquía Hispánica: Las visitas y otros mecanismos anticorrupción. *Tiempos Modernos*, *8*(35).

González Dávila, G. (1986). *Teatro de las grandezas de la villa de Madrid*. Méndez Editores. (Obra original publicada en 1623).

Hespanha, A. M. (1982). *História das instituições: Épocas medieval e moderna*. Livraria Almedina.

Hespanha, A. M. (1984). Para uma teoria da história institutional do Antigo Regime. En *Poder e instituições na Europa do Antigo Regime* (pp. 7-90). Fundação Calouste Gulbenkian.

Hespanha, A. M. (1986). A historiografia jurídico-institucional e a «morte do Estado». *Anuario de Filosofía del Derecho*, *3*, 191-227.

Hespanha, A. M. (1989). *Vísperas del Leviatán: Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*. Taurus.

Labrador Arroyo, F. (2013). Nueva historia política: Discursos y prácticas de poder desde la perspectiva de la corte. En E. Serrano Martín (Coord.), *De la tierra al cielo: Líneas recientes de investigación en historia moderna* (pp. 11-51). Fundación Española de Historia Moderna-Institución Fernando el Católico.

Malaprade, S. (2017). Crédito y corrupción: La visita al Consejo de Hacienda de 1643. *Tiempos Modernos*, *8*(35), 363-387.

Malaprade, S. (2018). *Des châteaux en Espagne: Gouvernement des finances et mobilité sociale au XVIIe siècle*. PULIM.

Martínez Millán, J. (1992). Introducción: La investigación sobre las elites de poder. En J. Martínez Millán (Dir.), *Instituciones y elites de poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI* (pp. 11-24). Ediciones Universidad Autónoma de Madrid.

Martínez Millán, J. (1996). Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismo en la administración de la Monarquía Hispana durante la Edad Moderna. *Studia Historica. Historia Moderna*, *15*, 83-106.

Martínez Millán, J. (2006). La corte de la Monarquía Hispánica. *Studia Historica. Historia Moderna*, *28*, 17-61.

Martínez Millán, J. (2010). La sustitución del «sistema cortesano» por el paradigma del «Estado nacional» en las investigaciones históricas. *Librosdelacorte.es*, *1*, 4-16.

Martínez Millán, J., y Carlos Morales, C. J. de. (Dirs.). (1998). *Felipe II (1527-1598): La configuración de la Monarquía Hispana*. Junta de Castilla y León.

Milán Coronado, E. (2017). Controlar y reformar: La visita al Consejo de Hacienda de Lope de los Ríos (1664-1667). *Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna*, *30*, 181-210.

Milán Coronado, E. (2018). La visita al Consejo de Hacienda en la segunda mitad del siglo XVII: Oposición y resistencia a un instrumento de control. En F. Andújar Castillo y P. Ponce Leiva (Eds.), *Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII* (pp. 449-462). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Núñez de Castro, A. (1658). *Sólo Madrid es corte y el cortesano en Madrid*. Imprenta Real.

Núñez de Castro, A. (1698). *Sólo Madrid es corte y el cortesano en Madrid*. Imprenta Real.

Oliván Santaliestra, L. (2003). «Discurso jurídico, histórico, político»: Apología de las reinas regentes y defensa del sistema polisinodial, una manifestación de la conflictividad política en los inicios de la regencia de Mariana de Austria. *Cuadernos de Historia Moderna*, *28*, 7-34.

Ponce Leiva, P., y Andújar Castillo, F. (Eds.). (2016). *Mérito, venalidad y corrupción en España y América: Siglos XVII y XVIII*. Albatros.

Pulido Bueno, I. (2007). *La Real Hacienda y sus oficiales de la Corte: Los contadores mayores de Castilla en el gobierno y administración del patrimonio y Hacienda Real*. I. Pulido.

Rivero Rodríguez, M. (1998). *Felipe II y el gobierno de Italia*. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Rivero Rodríguez, M. (2011). *La edad de oro de los virreyes: El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII*. Akal.

Rivero Rodríguez, M. (2023). *Olivares: Reforma y revolución en España (1622-1643)*. Arzalia Ediciones.

Santana-Pérez, J., y Sanmartín, I. (2020). La historiografía actual desde 1989. *Vínculos de Historia*, *9*, 345-366.

Sánchez Belén, J. A. (1996). *La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II*. Siglo XXI de España.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo202648181106

JUROS, MEDIA ANATA DE JUROS Y EL PROBLEMA DE LA DEUDA PÚBLICA DE LOS ÚLTIMOS HABSBURGO ESPAÑOLES (1621-1700)

Juros, Media Anata of Juros and the Problem of Public Debt of the Last Spanish Habsburgs

Ramón LANZA GARCÍA
Universidad Autónoma de Madrid
ramon.lanza@uam.es

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Este artículo se centra en algunas de las características de los *juros* como instrumentos financieros, las emisiones en el reinado de Felipe IV, el proceso de imposición de medias anatas y otros descuentos sobre los réditos, así como su justificación y cuantía, y en los daños derivados del problema de la sostenibilidad de la deuda pública y de la forma como se gestionó y ajustó en tiempos de Carlos II. Los prometedores inicios de esta forma de deuda pública moderna esbozados en la época de los Reyes Católicos y continuada por los Habsburgo no llegó a completarse ni arraigar, truncándose en grave perjuicio del sistema financiero y la economía del reino.

Palabras clave: Juros; media anata; deuda pública; ajuste fiscal; revolución financiera.

ABSTRACT: This article examines several features of *juros* (annuities) as financial instruments, the issues made during the reign of Philip IV, the imposition of the *media anata de juros* and other deductions from interest payments, as well as their justification and scale. It also

analyses the damage caused by the problem of public debt sustainability and by the way that debt was managed and adjusted during the reign of Charles II. The promising beginnings of this form of modern public debt, first outlined under Ferdinand and Isabella and continued by the early Habsburgs, were never fully consolidated or firmly rooted. Instead, they were cut short, with serious consequences for the kingdom's financial system and economy.

Keywords: Juros (annuities); media anata; public debt; fiscal adjustment; financial revolution.

1. INTRODUCCIÓN: LA REVOLUCIÓN FINANCIERA Y LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS

La llamada revolución financiera consiste en la difusión de instrumentos e intermediarios financieros, así como medios y sistemas de pagos nuevos que facilitan la movilización del ahorro, la financiación de las actividades económicas y de las finanzas públicas, y cuyos principales resultados se concretan en la reducción de las tasas de interés, esto es, el coste del dinero. Sus orígenes se encuentran según unos historiadores en las ciudades italianas del Renacimiento y según otros en las provincias de los Países Bajos en tiempos de Carlos V. En realidad, se trata de un proceso que protagonizaron los estados europeos desde la Baja Edad Media y que alcanzó la plena madurez en el Reino Unido durante el segundo tercio del siglo XVIII (Dickson, 1967; González Enciso, 2020; Munro, 2003; Parker, 1979; 't Hart, 1991).

Entre esas innovaciones destacan las ventas de rentas, llamadas censos, *rents* o *renten*, que aparecieron a finales del siglo XII como una forma de financiación para eludir la condena eclesiástica de la usura que pesaba sobre obligaciones y otros préstamos con interés. En el siglo siguiente comenzaron a ser utilizadas por algunas corporaciones locales y más tarde por repúblicas y principados, como Aragón en el siglo XIV y Castilla a finales del siglo XV. Se trataba de censos consignativos o «anualidades» porque se vendía el derecho a percibir una renta por un precio, de modo que el vendedor o censatario se comprometía a pagar al comprador o censualista una pensión, censo o canon anual consignado o situado sobre los frutos de cierta propiedad por un tiempo indefinido hasta la devolución del importe de la compraventa. Aunque en términos formales no eran préstamos, sino ventas, y aunque no desaparecieron las controversias doctrinales sobre algunas de sus características —personal o real— como señala Fiestas Loza (1999), sirvieron como instrumentos de crédito que redituaban un ingreso seguro a los compradores —por lo general ahorradores ajenos a la inversión o la empresa—, al tiempo que ampliaban

las fuentes de financiación de individuos, corporaciones y estados territoriales. De hecho, las ventas de renta constituyen la primera forma de deuda pública moderna, y con el paso del tiempo se convirtieron en instrumentos de crédito negociables que por su liquidez podían ser utilizados en operaciones mercantiles de todo tipo, desde garantía hipotecaria, aval o capital social hasta medio de pago, según el valor y la confianza que merecían en el mercado financiero (Munro, 2003).

La difusión de estos instrumentos financieros al servicio de la hacienda de los estados territoriales requería la creación de tributos permanentes donde consignar el pago de las rentas censales, las cuales precisamente por esto constituían una deuda pública. El consentimiento dado por los parlamentos a la creación de tributos permanentes y su participación en el proceso de recaudación tributaria significaban un compromiso de pago que reforzaba la confianza de los acreedores en el cumplimiento de las condiciones de emisión, lo que facilitaba su venta a precios ventajosos (Comín, 2016; Munro, 2003, p. 505; Pezzolo, 2012). El respeto de las condiciones contractuales, sin alterarlas unilateralmente, era condición inexcusable para la creación de una deuda pública moderna porque así los títulos podían ser negociables, no solo transferibles, para servir de garantía o medio de pago en operaciones mercantiles. La negociabilidad es precisamente la característica que corona la llamada revolución financiera, la cual es acompañada asimismo de la creación de formas legales o instituciones y de organismos capaces de imponer el respeto de los compromisos financieros del estado, haciéndolos creíbles a los inversores (North y Weinghast, 1989). El cumplimiento de estas condiciones facilitaba el de las demás y todas juntas ofrecían facilidades de financiación al fisco, las empresas y los particulares por medio de una mayor liquidez y unas tasas de interés más moderadas, lo cual podía impulsar la inversión y, con ella, el crecimiento económico. El resultado final dependía de la forma como las instituciones económicas condicionaban los intercambios de derechos entre los agentes económicos, propiciando un uso más eficiente de los recursos disponibles[1].

Uno de los casos más destacados de la historia financiera es, sin duda ninguna, el de la Monarquía de España, el primero de los grandes estados territoriales donde se difundieron a gran escala los títulos de deuda pública y donde antes se frustraron las posibilidades que ofrecía esta clase de instrumento financiero para el desarrollo de las finanzas públicas y privadas. Los Reyes Católicos fueron los primeros monarcas españoles que los utilizaron para financiar el gasto de la Hacienda real

1. Las instituciones económicas han sido objeto de estudio por economistas e historiadores económicos de diversas corrientes de pensamiento entre las que destacan la escuela histórica alemana y el institucionalismo norteamericano en el siglo XIX y principios del XX, así como más recientemente la nueva economía institucional y el neo-institucionalismo económico. Tampoco deben olvidarse las aportaciones de la escuela austríaca y, en particular, las de Friedrich Hayek. Véase al respecto North (1993) y la síntesis historiográfica de Chavance (2018).

de Castilla, siguiendo el ejemplo de las ciudades de la corona de Aragón, que desde mucho antes recurrían a la emisión de deuda en forma de censales para anticipar los servicios que las cortes de los reinos respectivos concedían al rey, encargándose ellas mismas, las ciudades, de pagar los réditos con cargo a los tributos que el rey, previo consentimiento de las cortes, les había confiado recaudar. En Castilla, la emisión de los juros correspondía a la Hacienda real y los réditos se consignaban sobre impuestos ordinarios como la alcabala, cuyo carácter permanente y el hecho de que, por medio del encabezamiento general, el importe y recaudación dependían del consentimiento de las cortes significaban para los compradores una garantía de pago que los convertía en una inversión tan segura como atractiva. Los juros también se situaron sobre derechos de aduanas, estancos e ingresos patrimoniales, concretamente los maestrazgos, pero en principio no sobre los servicios extraordinarios del reino porque estos, siendo temporales, no aseguraban el pago indefinido de los réditos ni la amortización del capital. Sin embargo, este inconveniente fue superado cuando las ciudades, a instancia de Felipe IV, se comprometieron a prorrogar los tributos con se recaudaban los servicios hasta la redención de la deuda (Artola, 1982).

Sin embargo, los ingresos tributarios no crecieron tanto como la deuda, de modo que no se podía acometer el desempeño del fisco real sin comprometer los objetivos de gasto. Al contrario, para financiarlo se impusieron retenciones sobre los réditos de los juros, lo que resultó en una rápida depreciación de los títulos hasta su virtual destrucción como instrumento financiero. Así terminaron los prometedores inicios de esta forma de deuda pública moderna esbozados en la España de los Reyes Católicos y continuada con los primeros Habsburgo, sin llegar a completarse y arraigar en provecho del sistema financiero y la economía del reino. Al contrario, las emisiones de juros durante el reinado de Felipe IV y los descuentos sobre los réditos impuestos convirtieron esta forma de deuda consolidada en una carga insostenible para el erario regio y una pérdida dolorosa para buena parte de sus acreedores: Artola (1982) los define como la primera deuda pública moderna de Castilla y Castillo Pintado (1963, p. 3) como «la deuda consolidada del Estado».

En las páginas siguientes fijaremos nuestra atención en algunas de las características de los juros, las emisiones realizadas en el reinado de Felipe IV, la imposición de medias anatas y otros descuentos sobre los réditos —cuyo proceso, justificación y cuantía son abordados a continuación— y, por último, en los daños derivados del problema de la sostenibilidad de la deuda pública y de la forma como se gestionó y ajustó en tiempos de Carlos II. El trabajo termina con unas breves consideraciones finales.

2. JUROS: EN EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN FINANCIERA

El término juro indica originalmente propiedad, derecho y dominio sobre un bien que se posee o traspasa *por juro de heredad*. Este sentido está asociado originalmente a la concesión de una merced regia, vitalicia o perpetua, por gracia o donación o en reconocimiento de un servicio. Más tarde adquiere el significado de venta de renta con cargo a un determinado patrimonio que sirve como consignación y garantía de pago. En el primer caso se trata o de una donación pura o de un contrato, en el segundo, de una compraventa como el censo consignativo. En su *Proyecto a Felipe V para la reducción de censos y juros* Melchor de Macanaz distinguía claramente ambos significados cuando decía, por una parte:

> «Los acreedores que ocupan la Hacienda de Vuestra Majestad se reducen a juros perpetuos y al quitar y mercedes perpetuas y temporales. A todos los juros tiene Vuestra Majestad una misma obligación porque los que no se pagaron en dinero efectivo se dieron en satisfacción de deudas de la Real Hacienda que es lo mismo».

Y un poco más adelante: «La obligación que tiene Vuestra Majestad de las mercedes es muy distinta, porque, aunque fueron por servicios, procedieron de la piadosa grandeza de Vuestra Majestad»[2]. Ciertamente, desde mucho antes los tanteos del situado distinguían el de juros y el de mercedes.

Los escolásticos españoles consideraban el censo consignativo como un caso particular de contrato de compraventa cuyo precio podía ser regulado por la autoridad de acuerdo con la teoría del precio justo, tal como Felipe II había hecho en 1563 fijándolo en 14 000 por millar de renta, y «lo mismo… los juros que hasta aquí hemos vendido, y vendiéremos adelante», tal como dice la pragmática de dicho año. Luis de Molina (1600) decía que «el juro es el nombre que recibe el censo en Castilla [y en Portugal] cuando es el rey quien, por donación, compensación por prestaciones y servicios o precio concede a alguien una renta anual, perpetua, redimible o vitalicia sobre los derechos reales que le corresponden en alguna ciudad o pueblo». Censos y juros, añadía, son contratos que obligan a las partes, aunque sean fruto de una donación por la prestación de servicios. Si la renta de juro perecía con la hacienda donde se consignaba —caso del censo real— o si permanecía hasta su redención, extendiendo la obligación hipotecaria a toda la hacienda —como en el censo personal— es algo sobre lo que la doctrina no se pronuncia. En la práctica notarial del siglo XVI comenzó a extenderse la interpretación más favorable a los censualistas o compradores de rentas, considerándolos de facto como censos reales, según Fiestas Loza (1999).

2. Biblioteca Nacional de España [en adelante BNE], Mss. 10.574, f. 132-133.

El juro revela su naturaleza contractual en el mismo título que lo define como venta de renta, «censo y juro», cuando alude a la facultad del comprador para transferirlo, así como a su carácter inalienable —salvo en caso de herejía, crimen de lesa majestad y pecado nefando— y, en fin, cuando afirma la expresa obligación de quien lo vende, el rey, de pagar la renta al propietario de ésta aun en el caso de falta de cabimiento, debiendo pagar la renta en tal caso sobre otra situación. El mismo rey reconocía ante las Cortes que la venta de renta de juro tenía «fuerza de contrato mutuo recíproco y obligatorio otorgado entre partes y en que ha intervenido el servicio que el reino me ha hecho». El carácter de privilegio se refiere al derecho a percibir un ingreso con cargo al fisco real, que por definición es privativo del rey, así como a la preferencia de cobro frente a otras deudas de la corona y por estar exento de alcabala[3].

El carácter contractual de los juros era reconocido como cosa sagrada y, sin embargo, incierta, frágil y engañosa por el contador Juan de España y Moncada en carta a Luis Méndez de Haro de 28 de julio de 1643[4]. El mismo año la ciudad de Sevilla escribía al rey reiterando lo dicho cinco años antes acerca del compromiso expresamente reconocido en la escritura de juro de pagar íntegramente los réditos, sin descuento alguno, hasta la redención del capital[5]. Unos «acreedores juristas» tampoco dudaban al respecto cuando decían:

> Ttheólogos y juristas convienen que el contrato çensual (que es el que se çelebra en la compra de los juros) es lícito y aprobado por constituçiones apostólicas, leyes Reales de V. Magd. y costumbre universal y que una vez çelebrado por su preçio legal obliga a V. Magd. por la parte que le toca, como los demás contratos justos en conçiençia, según justiçia, con la misma firmeça y fuerça directiva que obligó por la suya al que contrató con V. Magd. porque de lo contrario resultaría desigualdad en el contrato, cosa derechamente repugnante a la buena fe del y a la disposiçión de las leyes naturales çiviles y políticas[6].

3. Un ejemplo de juro, en Toboso (1987, pp. 298-306). Las palabras del rey datan de la sesión de 15 de febrero de 1642: Archivo del Congreso de los Diputados [en adelante ACD], Actas de las Cortes de Castilla [en adelante ACC], vol. 52, f. 312. La data de los tesoreros y administradores de rentas comienza siempre por los réditos de juros. Menciona la exención de alcabala Juan de Lugo (1652, tomo 2, disp. XXVII, pp. 318-352).

4. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Col. Salazar A 53. folio 92 a 97, cit. por Bermejo Cabrero (2015, p. 361).

5. Archivo General de Simancas [en adelante AGS], Consejo y Juntas de Hacienda [en adelante CJH, leg. 956, Memorial de 30 de septiembre de 1638, y leg. 852, Carta de 14 de abril de 1643. En un memorial de 30 de abril de 1649 recordaban que el jurista «o sus antecesores dieron sus haciendas a V. M. y a los señores Reyes sus progenitores para el socorro de las necesidades… debajo de contrato tan seguro y cierto como el que se hace con la persona Real»: *Ibid*. leg. 956.

6. BNE, Mss. 14.947/16, *Discurso sobre que Su Magd no debe tomar la media annata de los juros, año de 1641*.

En ningún caso aludían esta y otras quejas similares a la extinción de la renta sino por medio de la redención. Claro que, si el fisco real no perece, tampoco deberían hacerlo sus obligaciones contractuales y, de hecho, la deuda de juros no fue repudiada, por cuanto siguió pesando sobre la Hacienda real hasta bien entrado el siglo XIX (Toboso, 1987, pp. 217-249). Solo en caso de necesidad extraordinaria, causa justa y falta de recursos suficientes para conservar la monarquía, el rey podía recurrir a medios extraordinarios, como tomar la hacienda de los vasallos, pero compensándoles, tal como reconocía la doctrina sobre la propiedad privada[7].

Por supuesto, el rey tenía la iniciativa respecto al gasto y la gestión de la Hacienda real, la cual las Cortes y los acreedores no podían supervisar, controlar y ni siquiera autorizar. Por una parte, la gestión de la deuda, desde la emisión hasta el pago de los réditos y las eventuales amortizaciones, correspondía siempre al fisco real, nunca al Reino, que —más allá de consentir la emisión de renta de juros sobre los servicios— no podía conocer el estado de la deuda sino por mediación y voluntad de los ministros del rey. Por otra parte, el pago de los réditos estaba centralizado en el Consejo de Hacienda, de donde partían las relaciones de juros situados en cada renta con indicación de acreedores, capital e importe de los réditos adeudados y otras circunstancias que —con las imprescindibles órdenes de pago— hacían llegar a los arrendadores, tesoreros o administradores de rentas encargados de la recaudación y distribución tributaria, y cuyas cuentas eran auditadas por la Contaduría Mayor de Cuentas al final de su cargo. Este sistema proporcionaba cierto grado de control sobre las actuaciones de los recaudadores, pero era lento y se prestaba al abuso, sobre todo cuando en 1645 se comenzó a prescindir de la emisión de libranzas de la Contaduría de Mercedes para confiar la autorización de los pagos a los mismos recaudadores, hasta que en 1720 se decidió centralizar el pago de los réditos en la tesorería general de Madrid[8].

El pago de los réditos dependía obviamente del rendimiento de la recaudación fiscal, pero no del conjunto, sino de los ingresos de aquellas tesorerías donde se consignaban los títulos. Esto se hacía así porque, no habiendo unidad de caja, se lograban «economías de información». Era más fácil conocer el curso de la recaudación de una determinada tesorería que la del conjunto y, en consecuencia, agilizar los pagos consignados, lo que generaba mayor confianza a los acreedores, aparte de permitir al fisco real conocer la responsabilidad de quienes intervenían en la gestión tributaria. En cualquier caso, para no comprometer su crédito, la corona hacía como los particulares

7. Ahí radica la diferencia entre las teorías de la propiedad de Juan de Lugo y John Locke (San Emeterio, 2021).

8. Archivo Histórico Nacional [en adelante AHN], leg. 1.990, s.n., cit. por Torres López y Pérez-Prendes (1967, pp. 83-86). Sobre la centralización de los pagos, Dubet y Sánchez Santiró (2022, pp. 241-254).

y se guardaba de publicar el estado de la deuda, de modo que los inversores no podían conocer la cuantía exacta de las emisiones sobre un determinado ingreso o tesorería. Los recaudadores sí podían saberlo, aunque no podían condicionar el proceso de emisión, como sí podían los recaudadores holandeses (Fritschy, 2017, p. 96).

El problema surgía cuando los réditos de los juros no tenían «cabimiento» porque superaban el valor de la recaudación donde estaban consignados. La causa podía ser o un exceso de emisión o una caída de rendimiento fiscal provocada por la quiebra del recaudador, una contracción económica, un conflicto bélico, una epidemia de peste o una combinación de cualquiera de ellas. En tal caso, era preciso respetar la antelación y dar nueva situación a los juros sin cabimiento. Los juros situados sobre una renta de cierta tesorería podían corresponder a emisiones distintas que implicaban derechos de cobro o antelaciones diferentes, siguiendo un orden de antigüedad. Sin embargo, no siempre era posible «mudar» la consignación porque, o no había rentas vacantes, o los juristas carecían de información y contactos para conseguirlo. Un mercado secundario permitiría la venta de los títulos de deuda con la menor pérdida respecto al valor de emisión, pero la falta de cabimiento provocaba inevitablemente su depreciación. Ciertamente, los juros podían ser enajenados, precediendo autorización y mediante trámites costosos, así que eran transferibles, pero no negociables porque carecían de cláusula al portador u orden que eximiera de riesgo al tenedor en caso de impago de terceros. Aun así, los juros podían servir como instrumentos financieros en negociaciones mercantiles mientras el crédito de la corona lo permitiera, lo que dependía de la puntualidad y exactitud en el servicio de la deuda (Álvarez Nogal, 2009, p. 63; Munro, 2003, p. 54; Toboso, 1987, pp. 103-107, 124-127, 145-148; Ulloa, 1986, pp. 846-847). Por supuesto, demoras e impagos provocaban la depreciación de los juros situados en rentas diferentes o en una misma renta y tesorería. Felipe Ruiz Martín (1965) mostró cómo los juros situados en la Casa de Contratación en los años 1560 se depreciaron a causa de los impagos reiterados, echando por tierra el proyecto para convertirlo en banco al servicio de la Hacienda real y el comercio de Indias. A finales de siglo la depreciación afectaba también a los juros situados en las rentas de aduanas e incluso los de alcabalas —el más estable de los ingresos de la corona—, tal como demuestra un documento de 1594 que estima la pérdida de los títulos situados sobre dichos ingresos en el 14,28 % y el 7,15 % de su respectivo valor nominal (Ruiz Martín, 1965, p. 55; Toboso, 1987, p. 148). Dos décadas después, Sancho de Moncada (1619/1974, p. 172) decía que «faltan rentas Reales y sobran situaciones». La depreciación se agudizó cuando Felipe IV decretó en 1621 la reducción unilateral del precio de todos los juros a 20 000 el millar y todavía más desde 1634 en adelante con motivo de la imposición de la media anata y otros descuentos sobre los réditos de los juros. Así, el rey de España venía a hacer con la deuda consolidada de la Hacienda real de Castilla lo mismo que otros estados, aunque a una escala y con unas consecuencias en absoluto comparables (Fritschy, 2017, pp. 100, 157-161; Pezzolo, 2012, pp. 281-282; Ruiz Martín, 1965, p. 55; Toboso, 1987, p. 148).

3. LA EXPANSIÓN DE LA DEUDA DE JUROS EN EL REINADO DE FELIPE IV

La ambiciosa política exterior de Felipe IV exigía aumentar el gasto y, con él, los ingresos y la deuda con que financiarla. La carga tributaria nominal volvió a crecer tan deprisa como en tiempos de Felipe II, duplicándose en pocos años, pero no lo suficiente respecto al gasto a que apremiaba la coyuntura bélica. Por tanto, fue preciso aumentar la deuda y pronto el situado de juros pasó de 5 261 000 ducados en 1621 a 9 959 882 en 1669. El resultado fue añadir 4 698 882 ducados de réditos a las cantidades anteriores, multiplicándolos por 1,89 respecto a comienzos del reinado y por 2,15 respecto a 1598. Algo más realmente porque, si a los juros al quitar se suman las mercedes, el situado ascendería en 1669 a 10 717 440 ducados[9]. En las dos décadas siguientes esta cifra apenas se modificó por cuanto no hubo más emisiones, aunque una relación de 1687 cifra el situado de juros y mercedes en 11 149 421ducados[10].

La gran novedad del reinado de Felipe IV fue la participación de las Cortes en el proceso de emisión. En efecto, la aparición en 1590 de una «hacienda del Reino» de la mano de los servicios de millones fue seguida a partir de 1626 por la creación de una «deuda del Reino», en virtud de la cual «las cortes se hacen cargo del servicio de las nuevas emisiones de juros, quedando a cargo de la corona la colocación del papel y en su beneficio los ingresos obtenidos con su venta», así como la eventual amortización. De esta manera, la emisión de deuda pública requería el acuerdo previo de las Cortes, que aceptaban el límite de la emisión, el interés y las rentas donde consignar el pago. Además, al colocar la emisión sobre los servicios del reino, que eran temporales, fue necesario incluir en la escritura de consentimiento una cláusula de garantía por la cual las ciudades se comprometían al pago de intereses de los nuevos juros en caso, «altamente improbable», de que el servicio no se renovase (Artola, 1982, p. 146). A esto debe añadirse el consentimiento para la fundación de un censo con el fin de permitir a la corona colocar la emisión con quebranto —esto es, por debajo de su valor nominal—, tal como demandaban los acreedores, lo cual no era posible en una primera venta, ni siquiera mediante la donación de la diferencia de réditos a los compradores, sino a través de lo que por este medio venía a convertirse en una segunda venta[11].

9. AGS, CJH, leg. 1.913.

10. Canga Argüelles (1834/1968, vol. 2, pp. 94-99). El aumento de 1687 respecto a 1669 es un 4 % que puede ser resultado de un aumento del importe de mercedes, no de los juros al quitar, o a diferentes criterios de cómputo. El *Estado…* de 1707 cifra el situado de juros en 9 158 402 escudos, casi el 20 % menos que el situado de juros de 1669 sin mercedes.

11. ACD, ACC, vol. 46, fol. 153, Acuerdo de primero de diciembre de 1634 para la emisión de 200 000 ducados de renta de juros sobre el servicio de 24 millones. Asimismo, los 300 000 ducados de renta de juros sobre el primer uno por ciento en 1639, Ibid., vol. 50, f. 386.

La renta de juros autorizada por las Cortes desde 1626 hasta 1660 ascendió a 3 015 000 ducados de renta, según Eiras Roel (2000). Ahora bien, el tanteo de 1669 registra una cantidad mayor que la autorizada por el reino, exactamente 3 879 054 ducados de situado de juros —sin contar 345 144 ducados de mercedes— sobre servicios de millones, servicio ordinario y extraordinario, papel sellado y primero, segundo y tercero uno por ciento, un exceso cercano al 30 %. Esa diferencia se concentraba en el primer uno por ciento y, sobre todo, en el tercero y el cuarto. Las Actas de las Cortes no recogen la autorización expresa de dichas emisiones, si bien consta que en 1664 accedieron a la perpetuación del tercer y cuarto ciento cuando negociaban con la corona la emisión de juros a 16 000 el millar sobre dichos tributos con el fin de lograr el desempeño de la deuda flotante pendiente de pago[12]. Por su parte, la corona lanzó otras emisiones de juros sobre la sal, el tabaco, el papel sellado, las rentas de lanas y las medias anatas de mercedes y juros que no precisaban consentimiento del Reino por ser regalías de la corona, y cuya cuantía probablemente superó los dos millones de ducados. El capital desembolsado en estas emisiones fue sin duda menor que el nominal de 20 000 el millar, por lo menos en la cuarta parte, aunque sobran testimonios que indican depreciaciones mayores. De hecho, no faltaron los repartimientos forzosos entre ministros, regidores, procuradores en Cortes y personas pudientes de las ciudades del reino[13].

Estas emisiones debían financiar provisiones generales, consolidaciones de la deuda, acuñación de moneda, compensaciones a los mercaderes por «secuestros» o empréstitos forzosos y, sobre todo, indemnizaciones a los juristas por las retenciones de media anata (Eiras Roel, 2000, pp. 59-63; Toboso, 1987, p. 185). En el primer objetivo deben contarse 150 000 ducados en 1627 del medio millón situado sobre el servicio de los 18 millones y 150 000 en 1646 sobre el segundo uno por ciento. Al objetivo de la consolidación de la deuda en 1627, 1643 y 1664 se destinaron 870 000 ducados de renta de los 3 015 000 ducados aprobados por las Cortes, a los que habría que sumar 430 000 ducados de exceso sobre el tercero y el cuarto uno por ciento a que antes nos referimos, más las emisiones sobre regalías de la corona —sal, tabaco, rentas de lana y medias anatas de mercedes y juros—, todo por 1 884 520

12. En las deliberaciones de las cortes se barajaron cifras diferentes de deuda pendiente de consignación, aunque el consentimiento que consta es el de los 200 000 ducados sobre el tercer ciento ya mencionado. Tampoco era necesario, una vez perpetuados estos impuestos. Sobre esta negociación es imprescindible Fortea Pérez (2023).

13. Los juros emitidos en 1647 sobre el servicio ordinario y extraordinario se colocaron a la mitad: AGS, CJH, leg. 923. En las Cortes de 1649 se decía que la renta de juros sobre el derecho de las medias anatas no llegaba siquiera a 6 000 el millar: ACD, ACC, vol. 57, Sesión de 26 de abril de 1649, f. 112-113. Ni siquiera la Hacienda real aceptaba juros a la par como fianza, sino a 5 000 el millar, de acuerdo con una cédula de 9 de octubre de 1645, reiterada en 22 de abril de 1687 y 9 de marzo de 1691: BNE, Mss. 13.287, fols. 142, 144 y 146.

ducados[14]. La acuñación de moneda ligada emprendida en 1660 se pensaba financiar con los 200 000 ducados de renta de juros sobre el tercero uno por ciento[15]. A los secuestros a mercaderes se dedicaron 250 000 ducados de renta anual, según Eiras Roel (2000). En consecuencia, al quinto y último objetivo de indemnizar a los juristas debió destinarse la cuantía restante, poco más de dos millones de ducados.

4. VALIMIENTOS DE MEDIA ANATA Y OTROS DESCUENTOS DE LOS RÉDITOS DE LOS JUROS

El *Diccionario de Autoridades* de 1739 define el valimiento como «el servicio, que el Rey manda le hagan sus vasallos de alguna parte del caudal, ò rentas de sus haciendas, ù proprios, valiendose de ellas para alguna urgencia por tiempo determinado». Se trata de una regalía de la corona, que el mismo *Diccionario*, en su edición de 1737, definía así: «Preeminencia, prerrogativa o excepción particular y privativa, que en virtud de suprema autoridad y potestad exerce qualquier Soberano en su Reino, o Estado: como el batir moneda».

Si el valimiento era una regalía, como así lo reconocieron las Cortes, el rey no precisaba consentimiento del reino para imponerlo[16]. Esto no impidió que se debatiera una propuesta presentada por el presidente de Castilla en septiembre de 1617 para imponer el valimiento de los juros de extranjeros no residentes, la cual los procuradores aprobaron por mayoría, luego de escuchar los dictámenes favorables de los letrados del Reino, aunque no se aplicó entonces[17]. Las Cortes de 1623 volvieron a considerar este arbitrio, aunque prefirieron aprobar la propuesta presentada el 7 de octubre por Cristóbal Gutiérrez de Moya, procurador por Salamanca, de imponer el 3 % sobre los réditos de juros y censos, «más o menos la cantidad que al reino le pareciere», entre otros medios para recaudar el servicio fallido de los 72 millones de ducados[18]. Dos años después, durante la negociación del servicio de

14. El medio general de 1627 incluía 350 000 ducados de renta de juros sobre millones; el de 1648 326 920 sobre la sal, más 250 000 sobre el segundo uno por ciento y 70 000 sobre el servicio ordinario y extraordinario; el de 1654, 257 600 ducados sobre el papel sellado, la sal, la media anata de mercedes y otras pequeñas rentas, además del servicio de 8 000 soldados. El de 1662 se aplicó de acuerdo con el desempeño aprobado por las Cortes en 1664 que contemplaba la perpetuación del tercero y el cuarto uno por ciento. Ruiz Martín (1990), Eiras Roel (2000), Sanz Ayán (2013) y Fortea Pérez (2023).

15. ACC, LXI, I, 137-145, Escritura de 17 de noviembre de 1660.

16. ACD, ACC, vol. 46, Cortes de 1632, Sesión de 16 de septiembre de 1634, fol. 48, y vol. 55, Cortes de 1646, sesión de 19 de enero de 1647, fol. 265, y 31 de enero de 1647, fol. 272.

17. Marcos Martín (2017) ha explicado con detalle las posiciones de los procuradores al respecto y cómo la mayoría votó favorablemente, aunque los sólidos argumentos contra dicha retención fueron defendidos por no pocos.

18. ACC, XXXVIII, pp. 473-475.

los 12 millones, varios procuradores propusieron que el rey no subiera el precio de censos y juros, salvo que fueran de nueva imposición[19]. Lo que el rey ordenó ese año de 1625 fue precisamente el valimiento de los réditos de los juros de extranjeros situados sobre las rentas de la corona[20].

Aquella medida excepcional, impuesta por real decreto, volvió a repetirse en 1629 y otra vez en el último tercio de 1634 extendiéndola a los naturales, y a partir de entonces se convirtió en un ingreso regular y tan importante cuantitativamente para el rey, si no más, que el servicio de 24 millones[21]. La retención aplicada en 1634 y 1635 fue un tercio a los naturales y la totalidad a los extranjeros, y en 1636 la mitad a todos, proporción que se mantuvo después, salvo en 1641 y 1642 —que no se cobró—,1648 —que se redujo a la cuarta parte— y 1653 y 1654, que solo se cobró un tercio (Ripia, 1675/1769, pp. 193-202).

Años después se aplicaron otros descuentos adicionales del 5, el 10, el 15 y hasta el 20 %, incluso el 30 %, de una forma que podía variar de un año a otro según la naturaleza de los títulos —antiguos o modernos, originarios, cesonarios o compuestos— y del tributo donde estaban consignados. ¿Por qué esas diferencias? En el primer caso porque se pretendía distinguir aquellos títulos que se consideraba habían sido comprados a precios inferiores al nominal —reconociendo así la depreciación que venían experimentando—, y en el segundo porque si había «finca» en las rentas donde estaban consignados podía modularse la tarifa del gravamen dependiendo de los objetivos de gasto[22].

El derecho de regalía facultaba al rey para disponer de la media anata y otros valimientos sobre los juros. En principio era por vía de empréstito y, por tanto, con indemnización. Esta consistía en la entrega de títulos por valor nominal equivalente al importe de los réditos, o con quebranto. Sin embargo, en los dos primeros años no hubo indemnización, tampoco en 1654 y 1655. Las Cortes decían en consulta al rey de 15 de julio de 1664 que en once años no había habido indemnización, así que la media anata era en la práctica un tributo[23]. No obstante, desde muy pronto el

19. ACC, XLII, pp. 176-178, Sesión de 21 de enero de 1625.

20. El valimiento también se impuso a todos los juros situados en las rentas de los partidos de Llerena y otros de Extremadura y Andalucía, según Juan de la Ripia (1769, p. 194), lo que hace pensar que se trató de aplicarlo a los naturales.

21. AGS, CJH, leg. 714. Cuatro años después, en 1638, las Cortes consiguieron incorporar en las escrituras de la prorrogación del servicio de 24 millones una súplica al rey para que no se valiese de los juros de los naturales: ACD, ACC, vol. 50, f. 140vº.

22. Cuentas de rentas reales y servicios así lo indican: AGS, Contadurías Generales, leg. 1851-1854. Sobre las características mencionadas, véase Toboso (1987, pp. 174-178).

23. Un tributo en el sentido técnico de prestación sin contrapartida directa. Las Cortes habían pedido el 28 de mayo de 1639 «que su majestad se sirva dar satisfacción de lo que se ha valido de los juros». ACD, ACC, vol. 50, f. 287. En la fecha citada reconocían que hubo cédula real para que se diese satisfacción de las medias anatas hasta 1653, pero no desde entonces,

rey aceptó la «reserva» a ciertos juros, permitiendo cobrar íntegramente los réditos. Esto fue en parte resultado de las peticiones del Reino.

En efecto, tan pronto como el 15 de mayo de 1635 las Cortes presentaron una consulta al rey refiriendo los graves inconvenientes que ocasionaba la retención de una parte de los réditos de los juros, reiterando argumentos similares una y otra vez hasta 1664 en que se reunieron por última vez. La ciudad de Sevilla hizo lo mismo en 1638 —al igual que Burgos— y después en 1643, 1649, 1650, 1662 y 1664[24]. El mismo Consejo de Hacienda lo reconocía en una consulta de 22 de agosto de 1641 en la que repetía punto por punto lo dicho en un discurso anónimo del mismo año —citado anteriormente— que destacaba —como habían hecho todos hasta entonces— las implicaciones que suponía romper unilateralmente las condiciones de los contratos de venta[25]. Ante la situación política que se vivía entonces, la prudencia aconsejó al gobierno prescindir de la media anata ese año y el siguiente de 1642, como recuerda Gelabert (2001, pp. 283-284)[26]. Al imponerla de nuevo en 1643 volvieron a repetirse de nuevo las mismas quejas de la ciudad de Sevilla[27]. El descontento debió de ser hondo porque las Cortes condicionaron la emisión de 300 000 ducados de renta de juros sobre el primer uno por ciento de lo vendible precisamente a que el rey no se valiera de la media anata de juros, lo cual aceptó[28]. La misma condición intentaron imponer en 1646 con motivo de la emisión de 130 000 ducados de renta sobre el segundo ciento, pero no lo consiguieron, es más, acabaron reconociendo la regalía de la corona y permitiendo el valimiento de la media anata, si bien a cambio de aumentar hasta los 500 000 ducados las reservas en favor de conventos y obras pías y de que no se hicieran «repartimientos involuntarios de juros»[29]. En las cortes de 1649 reiteraron las quejas que llegaban de Sevilla, Valladolid y otras ciudades del reino y justo entonces el rey accedió a consolidar la reserva de los juros de los «cuatro géneros»[30]. Como quiera que los valimientos continuaron, las quejas volvieron a reproducirse en cada convocatoria de Cortes.

«que son once años»: ACC, LXI, 3, 499. Todo lo más de modo parcial, según Juan de la Ripia (1675/1769).

24. AGS, CJH, leg. 852 y 956, ACD, ACC, vol. 48, fol. 168, y vol. 57, f. 112 y 158, y *ACC*, LXI, 1, 88-82, 2, pp. 105-113, y 3, f. 533-536.

25. AGS, CJH, leg. 819.

26. En su respuesta de 19 de octubre de 1641 a la consulta que el reino había hecho sobre que no se valiera de los juros, el rey esperaba compensar la renuncia a este medio con el ensanche de la alcabala de los arrendamientos: ACD, ACC, vol. 52, f. 240vº. Este tributo no llegó a ser aprobado.

27. AGS, CJH, leg. 852.

28. Ibid. Sobre el consentimiento de las ciudades a los descuentos en 1644. AHN, Consejos, leg. 7 157.

29. ACD, ACC, vol. 55, Sesión de 8 de enero de 1647, fol. 250 y 275.

30. AGS, CJH, leg. 951, Decreto de 4 de abril de 1649.

El Reino poco más podía hacer que aconsejar al rey respecto a las consecuencias de la política fiscal y el exceso de gasto, que eran prerrogativas del rey con sus consejos (Marcos Martín, 2013, pp. 119, 122; Thompson, 1994b, pp. 189-190). En uso del derecho de petición, las Cortes proponían reservar de media anata a obras pías, conventos de monjas y personas pobres, incorporar a la escritura de concesión de un determinado servicio la *súplica* al rey de que renunciase a imponerla a los naturales —como en la prorrogación del servicio de 24 millones de 1638- y, sobre todo, reiterar las razones jurídicas, económicas, financieras y políticas que contradecían o desaconsejaban este recurso: en resumen, tratando de prevenir su aplicación, moderarla en general o suprimirla en casos particulares[31]. El Reino no podía negar la ayuda que el rey pedía por causas justas, tal como prescribían los principios doctrinales y políticos de la fiscalidad de la época y recordaban reiteradamente el rey y sus ministros cuando decían, como Juan Chumacero el 26 de marzo de 1643, a la sazón presidente de Castilla, que «la causa pública prevalece sobre los intereses privados de un corto número de personas»[32]. Por supuesto, el rey mostraba disposición a prescindir de este recurso si el Reino ofrecía otro en su lugar. Así, los ministros informaron a las Cortes el 23 de julio de 1638 que la compensación por el valimiento de tercio, anata entera y medias anatas había sido posible —con el quebranto de 14 y 16 mil respecto a 20 mil el millar—, pero no la de cuartas partes porque «su majestad no tiene hacienda ninguna desembarazada de que poderlo hacer y el Reino no ha dado consentimiento para que en principal de juros de millones se satisfagan», para lo cual, añadía, serían necesarios 150 000 ducados de renta, «antes más que menos»[33]. El mismo rey instaba en respuesta a una consulta de 27 de abril de 1649 que «precise el reino qué medios se le ofrecen que sean de igual cantidad, calidad y proporción… que excusará la media anata de juros», porque éstas habían sido ofrecidas por consignación a los hombres de negocios. La verdad era que el Reino no había concedido servicios nuevos desde 1643 y no lo haría hasta 1655. En diciembre de este año el rey instaba al reino a introducir los medios que habían propuesto sus consejeros para recaudar seis millones de ducados, entre los que destacaba la imposición del 15 % sobre los réditos de juros y censos en lugar de la media anata de juros. La propuesta no pasó adelante y justamente en 1656 y 1657 dejó de compensar la mitad del importe de la media anata, y un año después impuso el primero de los valimientos adicionales sobre los réditos de los juros[34].

Las retenciones de media anata y otros descuentos sobre los réditos de los juros pronto se convirtieron en el principal ingreso de la corona y con el tiempo en

31. Dos procuradores propusieron apelar al «Consejo de Justicia»: ACD, ACC, vol. 57, 1, sesión de 27 de abril de 1649, f. 118.
32. ACD, ACC, vol. 52, f. 426.
33. ACD, ACC, vol. 48, f. 63.
34. ACC, LIX, 2, pp. 863-868, 968-970, y Ripia (1675/1769, p. 196).

prácticamente el único del que podía disponer con regularidad, dada la magnitud que alcanzó el situado sobre rentas y servicios. De acuerdo con los datos de que disponemos, los descuentos podían proporcionar desde 2 149 203 ducados en 1635 hasta 4 440 974 de 1669. El importe ingresado variaba en función de la recaudación tributaria, de la cuantía del situado, de lo que tenía cabimiento y lo que no, de las tasas de descuento aplicadas a los juros con derecho a cobro y de lo reservado de descuento. El resultado era que la Hacienda real podía disponer de cantidades muy importantes comprendidas entre un mínimo de 1 438 587 ducados en 1648 y un máximo de 3 133 542 en 1662. El tanteo de 1669 cifra la recaudación en 3 019 612 ducados, cantidad que probablemente se mantuvo constante hasta que la depresión provocada por la baja de la moneda de vellón de 1680 obligó a imponer un severísimo ajuste fiscal.

A decir verdad, el situado de juros apenas disminuyó, pero la carga tributaria tuvo que ajustarse a la capacidad contributiva de la población, que había disminuido drásticamente a causa de la deflación de 1680-1686, por lo que se redujo necesariamente la cuantía del situado que tenía cabimiento. En cambio, el importe de lo reservado, lejos de reducirse, aumentó, así que lo pagado a juros y lo retenido por la Hacienda real tuvo que disminuir también, tal como se aprecia en 1687. Fue en el año siguiente de 1688 cuando se advierte claramente una nueva contracción del peso de la deuda de juros por la triple vía de reducir el situado en un quinto, el situado que tenía cabimiento en un sexto respecto al de 1687 y, sobre todo, lo pagado a juros en más del tercio, tal como se aprecia en la Tabla 1. En resumen, los impagos a los juristas por medio de la cancelación del situado, el no cabimiento y los descuentos sobre los juros llegó a suponer a finales del siglo XVII más de las tres cuartas partes del importe de los réditos adeudados. Ni siquiera el gasto escapó al ajuste[35].

35. Castillo Pintado (1963, pp. 26-30) fecha el comienzo del ajuste en 1677, pero a la vista de los mapas de 1669, 1687 y 1701 el saneamiento fiscal se produce en 1688. En 1701 la suma de los descuentos y los juros que no tenían cabimiento eleva el impago total anual a 6 022 472 ducados, el 66 % del total del «situado de juros». El promedio de lo pagado a juros en 1689, 1697 y 1699 respecto al situado que tenía cabimiento en 1687 y 1701 dejaría el importe de media anata y descuentos en 3 515 927 ducados de promedio anual. En 1702 se impusieron descuentos adicionales para financiar la guerra.

Tabla 1. Situado de juros y su distribución (en ducados)

	Situado de juros	Lo que cabe	Media anata y descuentos	Haberes de juros sujetos a descuento	Reservado (incluido en pagado a juros)	Media anata líquida	Pagado a juros
1598	4 634 294						*4 634 294*
1621	5 216 000						*5 216 000*
1623	5 627 000						*5 627 000*
1635	*6 116 000*		2 149 203			2 149 203	*3 966 797*
1636	*6 116 000*		3 044 697			3 044 697	*3 071 303*
1637	*6 418 746*		3 209 373		352 266	2 857 107	3 561 639
1638	6 588 749		3 294 374		365 717	2 928 617	3 660 132
1648						1 438 587	
1649						2 830 000	
1655	7 720 000		3 926 000		965 000	2 961 000	4 759 000
1659		10 005 869					
1660	11 500 000					2 579 440	
1662		8 347 234	4 170 323		1 036 781	3 133 542	5 213 692
1667	10 797 322	9 147 341					
1669	10 717 440	9 013 167	4 440 974		1 421 347	3 019 612	5 993 555
1687	11 179 910	7 399 393	3 822 627		1 514 405	2 308 221	5 091 172
1688						2 314 393	3 372 526
1689							3 302 690
1697							3 606 643
1699							3 438 299
1701	9 158 434	6 285 022		1 556 357	1 580 605	*3 148 060*	3 136 962

Fuente: Años 1598, 1623 y 1637: Domínguez Ortiz (1960/1983, p. 325); 1621: Tanteo del contador Tomás de Aguilar (1960/1983, pp. 313-324); 1635 y 1636: AGS, CJH, leg. 828, valores de tercio y media anata, respectivamente, y el situado, estimación propia mediante suma del situado de 1621 y las emisiones de juros sobre servicios aprobadas por las Cortes hasta 1635; 1638: Marcos Martín (2013, p. 140), y AGS, CJH, leg. 777; 1648 y 1649: AGS, CJH, leg. 924 y 939; 1655: ACC, LIX, 1, p. 258; 1659: AHN, Consejos, leg. 51.279, «Todos los juros situados en las Rentas del Reino… en las que hay cabimiento, que son de los que se vale SM por media anata»; 1660: BNE, Ms. 9 400; 1662: ACC, LXI, 2, p. 125; 1667: AHN, Estado, leg. 4.834; 1669: AGS, CJH, leg. 1913, donde el situado de juros y mercedes asciende a 9 186 500 ducados y el situado de juros a 8 431 655 ducados;

1687: 12 297 779 escudos de situado, de los cuales 4 157 823 escudos sin cabimiento, según Tomás de Aguilar (1960/1983, pp. 313-324); 1688: 2 545 832 escudos ingresados en concepto de descuentos y 3 709 779 escudos pagado a juros, según Canga Argüelles (1834, vol. 2, p. 106); 1689: AGS, CJH, leg. 1 552; 1697: AGS, Estado leg. 4.182; 1699: AGS, CJH, leg. 1 694; 1701: BNE, Mss. 13.287, *Mapa General de rentas reales… Año de 1707*, f. 225bis (1 y 2). Este documento es resultado, como reza en f. 224vº, de los trabajos emprendidos por una junta creada en 1701 para reconocer el estado de las rentas reales en la que participaron varios ministros del Consejo de Hacienda y el intendente de Hacienda d'Orry. Kamen (1974, pp. 232-233) ofrece datos fechados en 1702 que corresponden con toda probabilidad a la misma averiguación y que incluyen, además del valor de las rentas, el importe de lo pagado a juros, pero no el de lo reservado ni el de lo sujeto a descuento. *Estimación propia a partir de los datos de la fila correspondiente*.

5. RECUENTO DE DAÑOS

Los valimientos de media anata y otros descuentos sobre los réditos de los juros provocaron sentidas quejas de corporaciones y particulares que expusieron en memoriales y discursos al rey a través de las Cortes y el Consejo de Hacienda. Las razones que aducían revelan los graves perjuicios que sufrieron el patrimonio de los juristas, la economía de las ciudades, el crédito de la Monarquía y el sistema financiero en general. Los argumentos expuestos desde el principio fueron reiterados siempre que hubo ocasión, haciendo constar la conmoción que todo esto causaba a los juristas.

En el *Discurso sobre que su Magd no debe tomar la media annata de los juros* del año 1641 los «acreedores juristas» representaban «la suma neçesidad a que han llegado con los daños tan intolerables de sus patrimonios y (lo que más para llorado es) de su reputaçión y honra», y declaraban «no ser este arbitrio seguro en justiçia ni conveniente al serviçio de V. Magd». La argumentación partía del principio por el cual la compra de juros era un contrato censual que obligaba a las partes a respetarlo, no pudiendo ser firme para el particular y al mismo tiempo sujeto a variación a voluntad del rey, porque aquél sería «defraudado», en cuyo caso se incurriría en «ilícito». El valor de «este linaje de hacienda» quedaba en entredicho, habiendo sido «la mejor, más segura y de mayores conveniençias hasta los tiempos presentes en que el tropel de tantas ocasiones de gastos a que V. Magd. ha sido preciso acudir a podido motivar esta resoluçión, sin duda por más fácil y exequible, no por más justa» de retener en concepto de media anata una parte de los réditos de los juros. El daño que resultaba a los particulares era si cabe mayor para el rey «por el descrédito que redunda a sus contratos la dificultad o impusibilidad a que reduçen a V. Magd. para el comercio». En efecto, cuando los contratos con el rey corrían «por sus términos naturales» eran un «atra[c]tivo» para los capitales que buscaban empleo seguro y redituable, pero ahora «apenas ay quien no procure desbiarse dellos ni quien deje de exponerse de mejor gana al apremio y compulsión que çoçobrar en los riesgos

de perderla a el exemplo de lo que vee». En fin, la confianza y la igualdad de trato que debían presidir las relaciones contractuales eran cuestionadas de un modo que sin duda debía perjudicar los intercambios y, con ello, el curso de la actividad económica[36].

En teoría, tal como establecían la doctrina y la práctica fiscal de la época, en «habiendo causa pública» el rey podía «compeler a sus vasallos a que le compren o vendan su hazienda por el justo preçio y valor y servirse de ella para este efecto». Sin embargo, esta doctrina no era aplicable al caso cuando «se saca al contrato de los términos de voluntario», y si lo fuera, no sería conveniente porque «no todo lo lícito es onesto». ¿Por qué no era aplicable? El descrédito de los juros los había depreciado tanto respecto al «justo precio» que los dueños que pretendían cederlos o venderlos difícilmente recibían la cuarta parte del capital que habían desembolsado en su compra. El resultado era doble: el empobrecimiento de los que por salir de sus apuros se veían forzados a vender y el enriquecimiento de otros «que a costa de la neçesidad» compran «por veinte y çinco y aun menos lo que a ellos costó çiento, con que en breves días emos visto creçer en modo increyble en aver y rentas a muchos que plegue a Dios no sean de los mismos que justificaron a V. Magd. este arbitrio y le haçen perseverar en él con daño tan sensible de la sangre y substançia de los pobres».

Una segunda razón que desacreditaba el arbitrio de la media anata era la desigualdad de la contribución, porque gravaba a quienes no tenían más patrimonio que los juros, mientras quedaban exentos los que poseían otras formas de propiedad y, en particular, mercaderes y comerciantes, siendo así que «la razón natural y çivil dicta que los que partiçipan con ygualdad en el benefiçio y les es común la utilidad deven también partiçipar con la misma proporçión en las cargas y los gastos neçesarios para conseguirla». El resultado fue que los que tenían un juro podían vivir antaño «con seguridad de poder remediar con él a sus hijos o … servir de abonada ypoteca para buscar sobre ella lo que su necesidad pidiese y oy ni ay matrimonio en que se estime por dote, ni Religión que con él se contente, ni acreedor que sobre él socorra ni fíe, porque con el descrédito a que han llegado por medio deste arbitrio súbitamente se hallan sus dueños de ricos y acomodados, transformados en miserables, pobres y necesitados con oprobio de sus familias y perjuizio notable de sus obligaçiones». Al empobrecimiento y los cambios de fortuna se añadían las vejaciones y molestias que sufrían los acreedores juristas, «sin otro fruto que… padeçerlas». Por último, si los contratos no eran respetados ni tenidos por «seguros en la fe y palabra real de S. M.», podía ser cuestionada la obediencia de los vasallos, lo que «nunca Dios permita» ni era concebible dada su inquebrantable fidelidad, por lo que «no es Razón que los vasallos castellanos de V. M. por más leales y sufridos sean más oprimidos».

36. BNE, Mss. 14.947/16, del que hay varias copias.

Sin duda, la detracción de la mitad o más de los réditos de los juros significaba una pérdida económica muy importante. Lógicamente, la contracción del ingreso reducía también la capacidad de consumo y de ahorro de las familias juristas y de la economía local entera. En términos reales, la pérdida era agravada por la inflación que venía produciéndose desde finales del siglo XVI y se agravó en el XVII con las alteraciones del vellón, que era la moneda con que cobraban los juristas. Cuántas familias sufrieron estas pérdidas es difícil saberlo, pero sin duda fueron las suficientes para agravar la depresión que atravesaban las ciudades castellanas por causa de la caída de la renta de la tierra y del declive industrial. En 1598 se decía haber 6 000 o 10 000 propietarios de juros en Castilla y el situado se duplicó en los dos reinados siguientes hasta venderse cerca de 64 000 títulos. Los juristas representaban una proporción significativa de la población de ciudades provinciales como Burgos, donde había unos 120 en 1650 —respecto a poco más de 800 vecinos laicos— con más de dos millones de ducados de capital que devengaban cerca de mil ducados de renta anual por familia, el equivalente al ingreso de un trabajador. En Sevilla no debía ser menos importante, a tenor de la insistencia con que la ciudad representó al rey el impacto de la media anata sobre la actividad económica, que consideraba dependiente del ingreso de los juristas porque era el gasto privado lo que alimentaba el comercio, la manufactura, los hospitales y las obras pías en general. Por lo que respecta a la inversión, es evidente que la contracción del ingreso provocó una disminución más que proporcional de los fondos prestables, dada la inelasticidad de la demanda de bienes de consumo básicos y la magnitud de la crisis urbana (Lanza García, 2025; Marcos Martín, 2017; Thompson, 1994a, p. 177; Toboso, 1987, p. 208).

Por desgracia, el problema no terminaba aquí porque los descuentos precipitaron la depreciación de los juros. Los juristas no podían disponer de avales sólidos para tomar a crédito lo que precisaban para sus gastos corrientes, ni mucho menos para inversión, y si la necesidad les forzaba a vender los derechos de cobro o los mismos juros recibían solamente una pequeña parte del valor que habían desembolsado. Por otra parte, como advirtieron los procuradores en Cortes en 1617 y reiteraron en 1662, los préstamos a la corona se encarecieron porque los asentistas reclamaban mayores garantías y tomaban los juros con quebranto, tanto es así que la Hacienda real ordenó valorar los juros que servían de fianza de asientos y arrendamientos al precio de mercado o cuando menos a 10 000 el millar, la mitad del nominal.

Por otra parte, como consecuencia de todo lo anterior, y, por si fuera poco, la depreciación redujo la utilidad de los juros como instrumento financiero: no solo valían menos, sino que, además, no eran aceptados fácilmente ni podían ser negociables. Los banqueros a quienes se pagaba con estos efectos también perdían el crédito y, de hecho, encontraban serias dificultades para colocar letras, obligaciones u otros

instrumentos financieros en los mercados porque nadie quería fiarles[37]. En tales circunstancias el mercado secundario no podía desarrollarse. Es verdad que numerosos juros cambiaron de manos, transferidos por vía de herencia o compraventa, y, de hecho, había corredores especializados en esta y otras transacciones financieras (Álvarez Nogal, 2009, p. 51-78). En realidad, el mercado se nutría de la oferta de juristas empobrecidos que vendían a precios muy inferiores al valor nominal, yendo los juros a parar a manos de compradores que disponían de contactos personales con los que conseguían, o bien la mudanza de los juros a situaciones favorables o bien la reserva de la media anata, y, por uno u otro medio, cobrar íntegramente los réditos nominales, con lo que el rendimiento de su inversión podía devengar intereses muy superiores al 5 % nominal (Álvarez Nogal, 2015). Por supuesto, el aumento de las tasas de interés empeoraba las perspectivas económicas (Lanza García, 2020, pp. 234-235). En cualquier caso, el mal llamado mercado secundario era tan imperfecto como segmentado, las cotizaciones no eran públicas y los contratantes presentaban perfiles muy desiguales por su diferente capacidad de negociación, así que no podía cumplir su misión, que era permitir que los títulos tuvieran un valor cierto, seguro y reembolsable para poder ser negociables. Solo así los propietarios del capital podían compensar la inversión y, eventualmente, conseguir liquidez, medios de pago en sus empresas, garantías para los negocios que emprendían y crédito con avales ciertos, firmes y ejecutables. En resumen, la depreciación de los juros se traducía en depreciación del capital y escasez y carestía de crédito.

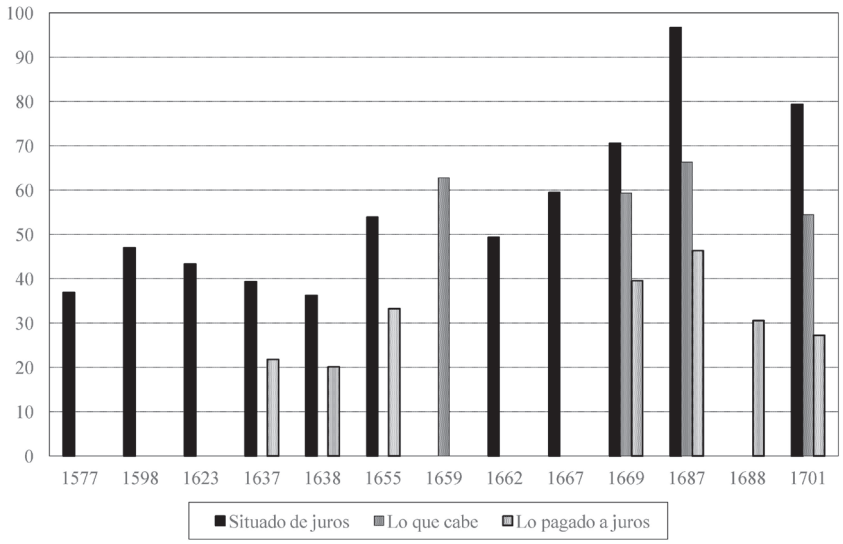
Por último, la expansión de la deuda comprometía la capacidad de gasto, tal como advirtieron algunos procuradores en Cortes y se comprueba a la vista del porcentaje que representaba el situado respecto a los ingresos de la Hacienda real. La sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo estaba evidentemente en cuestión. No parece que fuera así en tiempos de Felipe II cuando dependía del éxito militar antes que de una conducta fiscal más o menos «responsable», según Drelichman y Voth (2014). Un ciclo similar parece advertirse en la primera mitad del reinado de Felipe IV, cuando el cociente situado/ingresos estaba en cotas similares a las del reinado de su abuelo, incluso menores si se comparan los años 1637 y 1638 con el de 1598 (Gráfico 1).

Sin embargo, la coincidencia de dos tendencias opuestas, por una parte, el aumento del situado de juros y, por otra, el estancamiento y caída de los ingresos del tesoro amenazaba con estrangular la capacidad de gasto y financiación de la corona. La causa última de este deterioro fiscal se encontraba en el agotamiento

37. Francisco Centani decía en 1665 que los asentistas «se hallan en tan miserable estado… que generalmente todos los que escriben de fuera de España, sobre que se negocie alguna letra, la primera orden que dan es que no sea con hombres… que tengan asientos de V.M.». BNE, Ms. 6.579, fol. 6. Cit. por Sánchez Belén (1996).

de la capacidad contributiva de los castellanos derivada del declive demográfico y la depresión económica que estaba sufriendo el reino y que era en parte fruto no deseado de la política fiscal y financiera de la Monarquía. La crisis de deuda de 1647 significó un punto de giro en este proceso que no pudo resolverse como las anteriores debido a que faltaron consignaciones suficientes, toda vez que el Reino denegó la concesión de nuevos servicios al rey desde 1643 hasta 1655. La consiguiente insuficiencia fiscal explicaría la reiteración de los decretos de suspensión de consignaciones de 1652 y 1662 y los problemas para ejecutar los medios generales que les siguieron (Fortea Pérez, 2023, p. 256). Aunque el peso del situado respecto a los ingresos disminuyó del 63 % al 49 % de 1659 a 1662 gracias a la consecución de nuevos ingresos, enseguida volvió a subir desde el 49 % en 1667 hasta el 70 % en 1669 y nada menos que el 97 % en 1687. Ahora bien, no todo el situado tenía cabimiento, ni éste era pagado íntegramente porque los réditos eran objeto de importantes descuentos. En realidad, los impagos de la deuda consolidada redujeron «lo pagado a juros» desde el 46 % de los ingresos que había alcanzado en 1687 al 31 % en 1688 y el 27 % en los años siguientes.

Gráfico 2. Situado de juros, lo que cabe de juros y lo pagado a juros como porcentaje del ingreso de la Hacienda real de Castilla



Fuente: El situado de juros, las mismas que la Tabla 2, y el ingreso, las citadas en Lanza García (2020, p. 217, nota 37).

El problema devino absolutamente insostenible a raíz de la reforma monetaria de 1680-1686 y de la deflación consiguiente, que provocó a su vez una contracción económica tan devastadora que no quedó más remedio que reducir, primero, la carga tributaria para ajustarla a la capacidad contributiva de los castellanos y, con ella, el gasto mediante la fijación de las partidas básicas que debía atender la Hacienda real. Al fin se consiguió lo que podríamos considerar el saneamiento fiscal, no tanto por medio de la amortización de deuda, como del simple y radical impago de los réditos de juros sin cabimiento, de mayores descuentos sobre los réditos y de simples demoras en el pago de libranzas, en definitiva, a costa de los juristas y los hombres de negocios, sin por ello aliviar suficientemente a los contribuyentes (Sánchez Belén, 1996; Sanz Ayán, 2004, 2016). Entre tanto, la economía del reino se quedaba atrás y las ambiciones de la Monarquía debían reducirse a dimensiones manejables respecto a los recursos sensiblemente disminuidos de que podía disponer.

5. CONCLUSIONES: UNA EVOLUCIÓN TRUNCADA

La deuda de juros se duplicó en el reinado de Felipe IV por medio de emisiones principalmente sobre los servicios del reino, más otras sobre rentas generales y regalías de la corona. Era el resultado de la insuficiencia fiscal, fruto, a su vez, de un gasto enorme y creciente respecto a un ingreso que no podía crecer al mismo ritmo a causa de la caída de las remesas de plata americana y del agotamiento de la capacidad contributiva de los castellanos. Como los objetivos de gasto eran irrenunciables y no podían ser cuestionados ni supervisados por las Cortes, para cumplirlos se hacía necesario buscar medios nuevos como los descuentos sobre las rentas de juros, que habían estado exentos de contribuir y eran muy fáciles de recaudar.

Los estados de la época como Venecia y las Provincias Unidas también impusieron descuentos sobre los réditos de la deuda pública consolidada en circunstancias políticas extraordinarias, aunque no en la medida y con la persistencia de la Hacienda real de Castilla. Las consecuencias fueron muy negativas, tanto para los acreedores de la corona como para la hacienda pública y la economía en general. Las tres formas de impago que se impusieron —no cabimiento, cancelación, descuentos— significaron grandes pérdidas en términos de credibilidad y confianza en la Hacienda real, de demanda agregada en paralelo con la reducción del ingreso privado y el ahorro, y, en fin, de capacidad de innovación institucional, por cuanto la destrucción de este instrumento financiero se tradujo en el encarecimiento del capital y en mayores dificultades de financiación pública y privada.

El fisco ciertamente no perece, aunque sea por medio de drásticas medidas de saneamiento como las emprendidas por medio de la reforma monetaria de 1680-1686 y el decreto de los cuatro millones de la causa pública de 1688 que, a costa de enormes sacrificios, sirvieron para sentar las bases de la recuperación económica

del siglo XVIII. La corona evitó en adelante el endeudamiento, limitándolo a las anticipaciones de los arrendadores de impuestos y descartándolo prácticamente desde el momento que se impuso la administración directa de regalías, rentas generales y rentas provinciales. Pero esto fue después de la suspensión de pagos de 1739 y gracias a unas remesas de plata americana en aumento de que no dispusieron Felipe IV y Carlos II. Entre tanto, los juros se convirtieron en una incómoda reliquia que recordaba el sacrificio impuesto a los castellanos para la conservación de la Monarquía.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Ramón Lanza García.

Agradecimientos y financiación

Este trabajo ha sido posible gracias al Proyecto de Investigación «Crisis fiscal y declive económico en la Monarquía Hispánica, 1550-1740», PID2020-118287GB-I00, Agencia Estatal de Investigación, Gobierno de España.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Actas de las Cortes de Castilla. (1893-1991). Congreso de los Diputados.

Álvarez-Nogal, C. (2009). *Oferta y demanda de deuda pública en Castilla: Juros de alcabalas (1540-1740)*. Banco de España.

Álvarez-Nogal, C. (2015). La rentabilidad de los juros de Castilla en el siglo XVII. En C. Álvarez-Nogal y F. Comín Comín (Eds.), *Historia de la deuda pública en España (siglos XVI-XXI)* (pp. 85-110). Instituto de Estudios Fiscales.

Andrés Ucendo, J. I., y Lanza García, R. (2008). Estructura y evolución de los ingresos de la Real Hacienda de Castilla en el siglo XVII. *Studia Historica. Historia Moderna*, *30*, 111-155. https://doi.org/1014201/shhme200830111155

Artola, M. (1982). *La Hacienda del Antiguo Régimen*. Alianza.

Barthe Porcel, J. (1949). *Los juros: Desde el «yuro de heredat» hasta la desaparición de las «cargas de justicia» (siglos XIII al XXI). Resumen de una investigación histórico-jurídica*. Universidad de Murcia.

Bermejo Cabrero, J. L. (2015). *Organización hacendística de los Austrias a los Borbones: Consejos, juntas y superintendencias* [Tesis doctoral no publicada]. Universidad Complutense de Madrid.

Canga Argüelles, J. (1968). *Diccionario de Hacienda con aplicación a España*. Instituto de Estudios Fiscales. (Obra original publicada en 1833-1834).

Castillo Pintado, A. (1963). Los juros de Castilla: Apogeo y fin de un instrumento de crédito. *Hispania. Revista Española de Historia*, *23*(89), 1-30.

Chavance, B. (2018). *La economía institucional*. Fondo de Cultura Económica.

Comín, F. (2016). *Las crisis de la deuda soberana en España (1500-2015)*. Catarata.

Del Vigo Gutiérrez, A. (1997). *Cambistas, mercaderes y banqueros en el Siglo de Oro español*. Biblioteca de Autores Cristianos.

Dickson, P. G. M. (1967). *The financial revolution in England: A study in the development of public credit, 1688-1756*. Macmillan.

Domínguez Ortiz, A. (1983). *Política y hacienda de Felipe IV*. Ediciones Pegaso. (Obra original publicada en 1960).

Drelichman, M., y Voth, H. J. (2014). *Lending to the borrower from hell: Debt, taxes, and default in the age of Philip II*. Princeton University Press. https://doi.org/101515/9781400848430

Dubet, A., y Sánchez Santiró, E. (Coords.). (2022). *Erarios regios: El gobierno de las Reales Haciendas de la Monarquía española y la Monarquía francesa en el siglo XVIII. Una visión comparada*. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora-El Colegio de Michoacán.

Eiras Roel, A. (2000). La deuda estatal en la etapa final del reinado de Felipe IV: Intento de evaluación. En J. M. Usunáriz (Ed.), *Historia y humanismo: Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada. II. Historia económica* (pp. 56-74). Eunsa.

Fiestas Loza, A. (1999). El censo consignativo, según una fórmula castellana del Antiguo Régimen. En R. Robledo Hernández, E. Torijano Pérez, S. de Dios y J. Infante Miguel-Motta (Coords.), *Historia de la propiedad en España. Siglos XV-XX. Encuentro interdisciplinar. Salamanca, 3-6 de junio de 1998* (pp. 163-190). Centro de Estudios Registrales.

Fortea Pérez, J. I. (2023). Fiscalidad y deuda pública bajo los Austrias: Las últimas bancarrotas de Felipe IV (1647, 1652, 1662). En A. Galán Sánchez, J. R. Díaz de Durana Ortiz de Urbina y J. M. Triano Milán (Eds.), *Oficio de príncipes: Conflicto militar, economía y circuitos financieros en la Península Ibérica (siglos XIII-XVII)* (pp. 229-285). Editorial Comares.

Frías de Albornoz, B. (1573). *Arte de contratos*. En casa de Pedro de Huete.

Fritschy, W. (2017). *Public finance of the Dutch Republic in comparative perspective: The viability of an Early Modern federal state (1570s-1795)*. Brill. https://doi.org/101163/9789004341289

Gelabert, J. E. (2001). *Castilla convulsa (1631-1652)*. Marcial Pons.

González Enciso, A. (2020). *Los sistemas financieros de la Europa del siglo XVIII: Bancos privados, fiscalidad y deuda pública para la guerra*. Síntesis.

Kamen, H. (1974). *La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715*. Grijalbo.

Kamen, H. (1981). *La España de Carlos II*. Crítica.

Lanza García, R. (2020). Guerra, hacienda y economía en la Monarquía de España en la crisis del siglo XVII. En J. I. Fortea Pérez, J. E. Gelabert, R. López Vela y E. Postigo Castellanos (Coords.), *Monarquías en conflicto* (pp. 197-255). Fundación Española de Historia Moderna-Universidad de Cantabria.

Lanza García, R. (2025). Las ciudades en la España Moderna: Crecimiento económico, crisis y reconstrucción, 1500-1800. *Memoria y Civilización*, *28*(1), 39-72. https://doi.org/1015581/001 28 1 002

Lugo, J. de. (1652). *De Iustitia et Iure* (Tomus secundus). Philippi Borde, Laurentii Arnaud & Claudii Rigaud.

Marcos Martín, A. (2013). 'Porque el aprieto de mis armas y neçesidad de acudirles no da lugar a otra cosa...': La primacía del gasto sobre el ingreso en la hacienda regia castellana de los siglos XVI y XVII. En A. Galán Sánchez y J. M. Carretero Zamora (Eds.), *El alimento del Estado y la salud de la res publica: Orígenes, estructura y desarrollo del gasto público en Europa* (pp. 115-143). Instituto de Estudios Fiscales.

Marcos Martín, A. (2017). Crisis y reestructuración de la deuda pública consolidada en el siglo XVII: La media anata de juros. En R. Lanza García (Coord.), *Las instituciones económicas, las finanzas públicas y el declive de España en la Edad Moderna* (pp. 57-94). Universidad Autónoma de Madrid.

Mercado, T. de. (1975). *Suma de tratos y contratos* (R. Sierra Bravo, Ed.). Editora Nacional. (Obra original publicada en 1571).

Molina, L. de. (1659). *De Iustitia et Iure*. Joh. Godofredi Schönwetteri, Bibliopolae Francofurtensis.

Moncada, S. de. (1974). *Restauración política de España* (J. Vilar, Ed.). Instituto de Estudios Fiscales. (Obra original publicada en 1619).

Munro, J. H. (2003). The medieval origins of the financial revolution: Usury, rentes, and negotiability. *The International History Review*, *25*(3), 505-756. https://doi.org/101080/07075332 20039641005

North, D. C. (1993). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. Fondo de Cultura Económica.

North, D. C., y Weingast, B. (1989). Constitutions and commitment: The evolution of institutional public choice in seventeenth-century England. *The Journal of Economic History*, *49*(4), 803-832. https://doi.org/101017/S0022050700009451

Parker, G. (1979). El surgimiento de las finanzas modernas en Europa (1500-1730). En C. M. Cipolla (Ed.), *Historia económica de Europa. 2. Siglos XVI y XVII* (pp. 410-464). Ariel.

Pezzolo, L. (2012). Republics and principalities in Italy. En B. Yun-Casalilla, P. K. O'Brien y F. Comín Comín (Eds.), *The rise of fiscal states: A global history, 1500-1914* (pp. 267-284). Cambridge University Press. https://doi.org/101017/CBO9781139004237014

Ripia, J. de la. (1769). *Práctica de administración y cobranza de las rentas reales y visita de los ministros que se ocupan en ellas*. Joaquín Ibarra. (Obra original publicada en 1675).

Ruiz Martín, F. (1965). Un expediente financiero entre 1560 y 1575: La Hacienda de Felipe II y la Casa de Contratación de Sevilla. *Moneda y Crédito*, *92*, 3-58.

Ruiz Martín, F. (1990). *Las finanzas de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-1665)*. Real Academia de la Historia.

Sánchez Belén, J. A. (1996). *La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II*. Siglo XXI.

San Emeterio, N. (2021). La teoría de la propiedad de Juan de Lugo como precedente de John Locke. *Revista de Estudios Políticos*, *193*, 13-37. https://doi.org/1018042/cepc/rep193 01

Sanz Ayán, C. (2004). *Estado, monarquía y finanzas: Estudios de historia financiera en tiempos de los Austrias*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Sanz Ayán, C. (2013). *Los banqueros y la crisis de la Monarquía Hispánica de 1640*. Marcial Pons.

Sanz Ayán, C. (2016). La evolución de los juros en el reinado de Carlos II. En M. C. Saavedra Vázquez (Coord.), *La decadencia de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII: Viejas imágenes y nuevas aportaciones* (pp. 147-164). Biblioteca Nueva.

T Hart, M. (1991). 'The devil or the Dutch': Holland's impact on the financial revolution in England, 1643-1694. *Parliaments, Estates and Representation*, *11*(1), 39-52. https://doi.org/101080/02606755 19919525791

Thompson, I. A. A. (1994a). Castile: Polity, fiscality, and fiscal crises. En P. T. Hoffman y K. Norberg (Eds.), *Fiscal crises, liberty, and representative government, 1450-1789* (pp. 140-180). Stanford University Press. https://doi.org/101515/9781503619500-007

Thompson, I. A. A. (1994b). Castile: Absolutism, constitutionalism, and liberty. En P. T. Hoffman y K. Norberg (Eds.), *Fiscal crises, liberty, and representative government, 1450-1789* (pp. 181-225). Stanford University Press. https://doi.org/101515/9781503619500-008

Toboso Sánchez, P. (1987). *La deuda pública castellana durante el Antiguo Régimen (juros) y su liquidación en el siglo XIX*. Instituto de Estudios Fiscales.

Torres López, M., y Pérez-Prendes, J. M. (1967). *Los juros: Aportación documental para una historia de la deuda pública en España*. Instituto de Estudios Fiscales.

Ulloa, M. (1986). *La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II*. Fundación Universitaria Española.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481107133

LAS INTENDENCIAS ESPAÑOLAS DEL MARQUÉS DE ESQUILACHE: UN PROYECTO AMBIVALENTE (1760-1766)

The Spanish Intendancies of the Marquis of Esquilache: An Ambivalent Project (1760-1766)

Anne DUBET

Université Clermont-Auvergne
anne.dubet@uca.fr

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

En memoria de Didier Ozanam.

RESUMEN: En la historia de las intendencias de la España peninsular, se ha prestado poca atención a la reforma de Esquilache de 1760, aunque llegó a ser una referencia para sus contemporáneos. Intento definir este proyecto político de Esquilache interesándome por las dos vertientes de la figura de los intendentes tal como fueron definidas, la jurisdiccional y la gubernativa. Expongo en particular la progresiva forja del proyecto y la interpretación que le dan sus promotores.

Palabras clave: España; siglo XVIII; intendentes y subdelegados; administradores generales de provincias; Superintendencia General de Hacienda; vía gubernativa vs contenciosa.

ABSTRACT: In the history of the intendancy system in peninsular Spain, little attention has been paid to Esquilache's 1760 reform, even though it was a major landmark for his contemporaries. This article seeks to analyse Esquilache's political project by focusing on the two dimensions of the role of intendants as he himself defined them: the jurisdictional and the governmental. Particular attention is paid to the gradual construction of this project and to the interpretations produced by its promoters.

Keywords: Spain, eighteenth century; intendants and subdelegates; general administrators of provinces; General Superintendency of the Royal Treasury; administrative vs. contentious procedure.

1. ¿ESQUILACHE TUVO UN PROYECTO PARA LAS INTENDENCIAS?

El marqués de Esquilache, ministro de Hacienda de Carlos III en España desde diciembre de 1759 hasta su caída, causada por el Motín al que dio su nombre, goza de una fortuna historiográfica paradójica[1]. En efecto, si se le suele citar en estudios relativos a la fiscalidad real y municipal o las formas del control contable, no es evidente que tuviera un proyecto político para las Haciendas reales peninsulares, al contrario de lo observado en fechas recientes para América (Amores Carredano, 2024; Castejón, 2020; Delgado Ribas, 2007; Kuethe y Andrien, 2018). Ofrece un buen reflejo del estado del arte la nota biográfica que le dedicó Didier Ozanam en el *Diccionario Biográfico Español*. El historiador hace un listado nutrido de las disposiciones de Esquilache en materia fiscal en España —omite la vertiente americana—. Sin embargo, concluye en estos términos:

En el transcurso de sólo seis años, y pese al tremendo coste de una guerra a la que no era proclive, el marqués tomó una serie de medidas, muchas de ellas acertadas, aunque a menudo decididas en un orden disperso, sin un plan general que las ordenase. (Ozanam, 2011)

Este juicio no solo es tributario de los de los diplomáticos enviados a las cortes de Nápoles y España. Estos, resumidos por Ozanam, destacaban en Esquilache una intensa actividad y la codicia de poder del *parvenu* —no la de dinero, reservada a su esposa[2]—, pero le reprochaban el ser «más hacendista que político», carente de una visión a medio plazo sobre el comercio. Ozanam también explica su apreciación por la «sorprendente (…) carencia de cualquier estudio serio» sobre el «desempeño ministerial» de Esquilache en España. De hecho, en su nota, se apoyó en la biografía de Strazzullo (1997). Esta se basa, para el periodo español de Esquilache, casi solo en la correspondencia activa de Bernardo Tanucci. Como ya mostrara Barrio Gozalo (1986), el secretario de Estado de Nápoles pasó de un franco desprecio por

1. Como varios de sus predecesores, era secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, superintendente general de la real Hacienda y gobernador del Consejo de Hacienda, así como —por ser secretario— superintendente de las Casas de Moneda de España e Indias y presidente de las Juntas de la Renta del Tabaco y de Comercio y Moneda. Fue nombrado a 12/12/1759 (Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Estado, leg. 6.401-1).

2. Como señala Recio Morales, queda por estimar el enriquecimiento de la pareja y apreciar en qué medida la protección del ministro facilitó la ascensión social de su familia (2025, p. 115).

Esquilache a considerarlo como un hombre de Estado con quien podía dialogar. No obstante, si valoró su política fiscal respecto al clero, reconociendo en ella su propia línea regalista, apenas comentó la reorganización del resto de la fiscalidad y el gobierno de la Hacienda real en España, sea porque no le interesaba o porque Esquilache no se la pormenorizó[3]. Por tanto, quien desee saber si Esquilache tuvo una visión sobre el buen gobierno de la Hacienda no la hallará en los *Epistolarios* del ministro italiano.

Ahora bien, Ozanam también utilizó el magno estudio de Andrés-Gallego sobre el Motín. Esta suma ricamente documentada y, sin lugar a duda, «seria» —para usar el vocabulario de Ozanam— relata de modo casi exhaustivo las iniciativas atribuibles al ministro en diversos ámbitos. No obstante, me parece comprensible la lectura de Ozanam. En efecto, el objeto de Andrés-Gallego no fue reconstruir un eventual proyecto de Esquilache sino identificar los elementos de su acción que pudieron provocar la participación de determinados individuos o grupos en los levantamientos de 1766, en España y América. En el denso capítulo dedicado al fisco, refiere una a una las disposiciones del ministro, examinando después, de modo sugerente, cómo las interpretaron grupos variados (en particular sectores del clero). Asimismo, repara en algunas diferencias entre las decisiones de Esquilache y los consejos que recibiera. Así, Esquilache sin duda leyó la ácida crítica que Martín de Loynaz dedicó en septiembre de 1759 a los órganos de gobierno de la Hacienda, en un texto redactado a instancias del entonces ministro de Hacienda, el conde de Valdeparaíso, tal vez a demanda del italiano[4]. Sin embargo, Andrés-Gallego no explica por qué Esquilache, según los casos, se apartó de los consejos de Loynaz o los aplicó ni expone lo que sería una visión de Esquilache sobre la ruta a seguir en

3. La cédula de 17/12/1760 que redefinía la jurisdicción del superintendente general de la Hacienda solo le valió a Tanucci un elogio de principio: «Non lascerà di esser molto utile all'erario l'altro decreto per la soprintendenza generale dell'Azienda, vedo che molto di questo era un'antica disposizione et me ne rallegro» (Tanucci, lettera 205, Nápoles, 13/01/1761, en Tanucci, 1985, pp. 295-297). No encontré comentarios sobre la reforma de las intendencias en su prosa.

4. Andrés-Gallego, 2003, pp. 81, 134-149. Se conocen dos copias del texto de Loynaz, una, publicada en el *Semanario erudito* en 1788 y atribuida a Joaquín de Aguirre, contador general de la Renta de Plomos, y otra, manuscrita, conservada en los papeles del abad Beliardi en la Bibliothèque Nationale de France (en adelante, BNF). Este agente general de comercio de Luis XV en España atribuye su autoría a Loynaz. Es probable que tenga razón, pues el texto reitera motivos de la prosa anterior de Loynaz, sobre la Contribución Única o el personal de la Renta del Tabaco. Desde su llegada a la península, Esquilache pidió una serie de balances a Valdeparaíso, quien interrogó en particular a los directores generales de rentas (AHN, Estado, leg. 2.979 y Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Dirección General de Rentas (en adelante, DGR), 2.ª remesa, leg. 2.958). Por eso, es probable que la prosa de Loynaz, a la sazón administrador general de la Renta del Tabaco, sea la respuesta a un encargo de este.

materia fiscal, fuera de su regalismo[5]. Una razón de este silencio podría ser la falta de grandes discursos programáticos de Esquilache, a diferencia, por ejemplo, de Ensenada (Gómez Urdáñez, 2017; Rodríguez Villa, 1878). De hecho, las páginas dedicadas a «Esquilache y el pan» informan más sobre las ideas económicas de Pedro Rodríguez de Campomanes que sobre las de Esquilache, aunque este sin duda las tuvo (Andrés-Gallego, 2003, p. 163). Recio Morales señala sin embargo y con razón que todavía se echa de menos un estudio de las nociones de economía que había adquirido el ministro al abandonar Nápoles para Madrid (Recio Morales, 2025, pp. 111-112). Los verdaderos protagonistas de «la política regalista» son el mismo Campomanes, Tanucci y el fiscal del Consejo de Hacienda Francisco Carrasco de la Torre, quienes dejaron una colección de discursos o cartas que ayuda a recomponer su cultura política[6].

Entre los aspectos de la política de Esquilache que merecen atención, me parece nodal su concepción del papel de los intendentes. Como se sabe, durante todo el siglo XVIII, las facultades atribuidas a estos nuevos agentes e incluso su existencia fueron uno de los puntos de cristalización del debate sobre la forma de gobierno de la monarquía. Se conoce el interés del ministro por las intendencias. Así, se ha mostrado que, desde la jubilación del secretario de Estado y Guerra Ricardo Wall, en septiembre de 1763, Esquilache, con su colega de Estado el marqués de Grimaldi, condujo la política de reforma de las Indias. En particular, destinó a Cuba su primer intendente, a fines de 1764. Para la visita de Nueva España, él eligió en 1764 a Francisco de Armona, luego a José de Gálvez en marzo de 1765, encargándole al segundo examinar la posibilidad de instituir intendentes de provincia[7]. En cambio, se comentan poco las reformas que adoptó en 1760 para los intendentes de España. Así, se ha dedicado atención —como veremos— a los cambios en el control de las Haciendas municipales y a la relación entre los intendentes y el Consejo de Castilla. En cambio, las disposiciones relativas a la relación entre intendentes, ministro de Hacienda y responsables locales solo interesaron a quienes estudiaron la forja de un ministerio de Hacienda, en su vertiente «gubernativa» (Dubet y Solbes Ferri,

5. Algunas medidas tendrían una motivación sicológica, como el control sobre las haciendas municipales o la reforma de Cuba (Andrés-Gallego, 2003, pp. 164, 329). Uno de los motivos fiscales de Esquilache es el «afán de cobrar en efectivo» (Andrés-Gallego, 2003, pp. 155-159).

6. No se hallaron las cartas de Esquilache a Tanucci, fuera de volúmenes dedicados a negocios de Nápoles (AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda (en adelante, SSH), legs. 963-5).

7. Varios trabajos previos al de Andrés-Gallego, leído por Ozanam, dan indicios de la intervención de Esquilache en el génesis de las intendencias de Nueva España y Cuba: Andrés-Gallego, 2003, pp. 168-169; Kuethe y Blaisdell, 1991; Mariluz Urquijo, 1995; Navarro García, 1997; Varela Marcos, 1986. Amores Carredano (2024), Castejón (2020) y Delgado Ribas (2007), mostraron cómo Esquilache y Grimaldi marginaron a Julián de Arriaga, preparando a menudo los textos que el secretario de Indias debía firmar.

2019, pp. 247-303; Torres Sánchez, 2012, pp. 60-62). Varias de las innovaciones de Esquilache apenas se comentan. Llama la atención, en particular, el silencio del libro de referencia de Ozanam y Abbad (1992) y de la nota biográfica ya citada (Ozanam, 2011) sobre la instrucción de noviembre y la cédula de diciembre de 1760. Esta discreción alimenta la impresión de una continuidad estricta con el aporte de Ensenada, cuando algunos contemporáneos de Esquilache sí valoraron *a posteriori* las implicaciones políticas de los cambios de Esquilache. Así, algunos de los consejeros invitados por Gálvez a revisar su proyecto de instrucción para los intendentes indianos quisieron ver en la instrucción un intento imperfecto de emular las bondades de la organización fiscal americana (Diego-Fernández Sotelo, 2016; Dubet, 2021; Dubet y Sémery, 2025, pp. XLI, LXVIII, 138). En 1802, el ministro Miguel Cayetano Soler estimó que las instrucciones dadas por Ensenada en 1749 y Esquilache en 1760 dieron a los intendentes la autoridad necesaria. Él pretendía restablecerla después de los ataques de Pedro de Lerena[8].

Me propongo examinar la reforma de 1760, preguntándome en qué medida significa una inflexión en la trayectoria de las intendencias españolas. Me interesaré por la inserción del intendente en un dispositivo global dependiente del ministro de Hacienda (en particular la Superintendencia General de la real Hacienda) así como por sus relaciones con los demás actores provinciales, tal y como las interpretan Esquilache y sus coetáneos. En particular, utilizaré una joya descubierta por Ozanam, las memorias redactadas en 1765-1766 para satisfacer la curiosidad del *alter ego* de Esquilache en Francia. El veedor general de Hacienda, Laverdy, había encargado a uno de sus intendentes, Moreau de Beaumont, un balance sobre las imposiciones de los demás países de Europa. Laverdy pidió a su colega de Estado que solicitara informaciones a los diplomáticos en cada país. En España, el embajador, el marqués de Ossun, acudió a Esquilache, quien le entregó descripciones entre mayo de 1765 y fines de 1766. Estas, traducidas al francés por Ossun, se copiaron, con algunos cambios, en la publicación de Moreau de Beaumont en 1768 (Ozanam, 1966). La consulta del libro de Moreau revela que Esquilache fue uno de los que ofrecieron el trabajo más completo, en particular en el «État détaillé des revenus du roy d'Espagne et de la manière de les administrer», traducido antes de 20 de mayo de 1765: además de las rentas, describió los órganos que las administraban, desde las provincias a la corte. El texto ofrece, por tanto, una interpretación *ex post*, validada por el propio Esquilache, de su política. Con este y las demás fuentes usadas, no se trata de revelar un proyecto exclusivo del marqués, sino de recomponer las ambiciones que pudo compartir con sus hombres de confianza.

8. *Instrucción general de rentas reales*, Madrid, Imprenta real, 1802, firmada por Soler a 30/07/1802. Una copia en el Archivo de la Facultad de Teología de Granada, Fondo Saavedra, C012-015. Sobre la reforma de Lerena, ver Dubet y Solbes, 2019, pp. 313-330; Dubet, 2021b.

2. VÍA GUBERNATIVA Y CONSEJO DE CASTILLA: LAS HACIENDAS MUNICIPALES

Aunque me voy a centrar en las tareas de los intendentes en la administración de las rentas reales, vale la pena dedicar una digresión a la política de Esquilache en materia de Haciendas municipales. Los aportes de Pablo Fernández Albaladejo y Carmen García García muestran que no se puede reducir la ampliación de las atribuciones de los intendentes y su ministro de tutela principal (el de Hacienda) al proyecto de agravar la postergación de los Consejos y ceñirlos a lo judicial. Tampoco cabe asimilar la respuesta de estos a la defensa de sus tradicionales prerrogativas.

Aunque hubo iniciativas previas, las reformas generales se deben a Ensenada. Este tuvo proyectos ambiciosos, planeando confiar todo el gobierno de las Haciendas municipales a agentes directos del ministro de Hacienda. Al Consejo de Castilla, a quien correspondía hasta aquí esta tutela, solo le quería dejar «lo contencioso en punto riguroso de justicia». La idea reflejaba su convicción de que los cuerpos colegiales de togados no eran aptos al gobierno ejecutivo, en particular la Hacienda, que requería peritos. La reforma municipal hallaba su justificación en la necesidad de poner fin a los abusos de las oligarquías locales, acusadas de ser culpables de la miseria de los pueblos y de sus ingentes deudas que, de modo nada accesorio, les impedían pagar las contribuciones reales (Fernández Albaladejo, 1992, pp. 455-460; García García, 1996, pp. 177-183). El primer paso fue la instrucción de 1745, que instituía juntas municipales de propios y arbitrios, sin precisar dónde —¿en las cabezas de cada partido o solo las capitales de provincias?—. Lo completó la ordenanza de intendentes de 1749, extendiendo las intendencias a cada provincia sin ejército de Castilla y confiriéndoles la supervisión de las nuevas juntas municipales (*Ordenanza*, § XV). Suscitaron tensión estas novedades y, todavía más, la creación de un director de las Haciendas de la mayor parte de los pueblos de Castilla colocado bajo la autoridad del ministro de Hacienda. En este contexto, García García muestra como la solución adoptada a 30 de julio de 1760 no fue una pura imposición de Esquilache sobre (y contra) el Consejo de Castilla, sino el fruto de un compromiso con un sector del Consejo «dispuesto en cierta manera a acoplarse a los principios de *ejecutividad* defendidos por Campillo y Ensenada». Para controlar las juntas de propios y arbitrios, se creó una Contaduría General de Propios y Arbitrios en el seno del Consejo, responsable, en principio de los negocios «gubernativos», en particular la validación de un reglamento de gastos para cada municipio. Trabajaba bajo la supervisión de la Sala de Gobierno del propio Consejo, aunque ambos debían dirigirse al rey por la vía reservada del secretario del Despacho de Hacienda. Los procedimientos judiciales, en cambio, permanecían en manos de la Sala de Justicia. En las provincias, las juntas de arbitrios y propios se situaban bajo la autoridad de los intendentes y las Contadurías provinciales (García García, 1996, pp. 183-198).

El consenso se resquebrajó a la hora de determinar qué negocios eran de puro gobierno, reservados por tanto, dentro del Consejo, al contador general. Los escribanos del Consejo pensaban que la revisión de cuentas, la concesión o prorrogación de arbitrios o la constitución de censos necesitaban «un juicio formal», confiándoseles los expedientes, en vez de despachar la decisión «gubernativamente» en la nueva Contaduría. En segundo plano, estaba la definición de las facultades de los intendentes, encargados de velar por la aplicación local de los reglamentos: estos se quejaban de los recursos que las ciudades introducían en las Escribanías para cortocircuitar sus decisiones. Esquilache aclaró su postura en un decreto de 22 de noviembre de 1763, sin duda redactado por un letrado de su confianza[9]: los asuntos de propios y arbitrios no se debían «hacer contenciosos cuando solo medie interés del común» e, incluso en el caso de que el interés de un tercero estuviera en juego «o hubiese disputa sobre propiedad o agravios de cuentas», debía hacerse lo posible para tomar «providencias gubernativas», «antes de remitir [el negocio] a justicia» (García García, 1996, pp. 210-211). Interesa conocer la postura de uno de sus principales interlocutores, Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla desde julio de 1762. En enero de 1763, fue delatado por querer convertir sistemáticamente expedientes «puramente gubernativos» en contenciosos para trasladarlos a las Escribanías. Para Fernández Albaladejo, era una defensa de la «posición tradicional» del Consejo. No obstante, García García matiza levemente esta lectura al observar que, en 1772, Campomanes y su colega José Moñino intentaron definir la frontera entre negocios de «policía» y expedientes municipales que requerían un tratamiento contencioso (Fernández Albaladejo, 1992, p. 461; García García, 1996, pp. 211-212). El mismo Campomanes, en un texto posterior de alcance general, explicó que cada vez que se trataba de «dominio, de posesión, de conservación de honores, de imposición de penas, en una palabra, de derecho de tercero», el negocio exigía «trámites contenciosos». En cambio, las disposiciones destinadas a «favorecer la labranza» no entraban en esta esfera[10]. Así, definía lo contencioso en términos similares a los del decreto de Esquilache. Conviene añadir que, en el fragmento citado, el fiscal afirmaba que usar la vía contenciosa en negocios gubernativos era fuente de inestabilidad, atribuyendo esta opción a la pereza intelectual de ciertos gobernantes. Así, su postura no procedía de una convicción de la superioridad absoluta de la vía contenciosa[11]. Mi

9. Pudo apoyarse en Pedro Salvador de Muro, asesor y subdelegado general de su Superintendencia, o en Francisco Carrasco, fiscal del Consejo de Hacienda. Véase *infra.*

10. Citado por Garriga Acosta, 2008, p. 10. La cita fue sacada de Dou y de Bassols (1800-1803, vol. 2, cap. 9, sec. 4, pp. 47-49). Dou citaba el *Apéndice a la educación popular* (t. IV).

11. Quien no hacía el esfuerzo de informarse (en particular adquiriendo principios de buena economía) y había «de depender de la inconstante altercación de un proceso para remediar los males generales […] no se halla[ba] en estado de llenar su empleo». Campomanes, 1777, p. 422, nota 1. Dou, después de referir esta frase de Campomanes, citaba el inicio del decreto

sensación es que, aunque, obviamente, Esquilache pretendía extender la esfera de lo que los intendentes y el contador general debían tratar gubernativamente (y bajo su vía reservada) más de lo que hubiera querido Campomanes, los dos hablaban un lenguaje común con el que podían negociar, aunque con dificultad.

3. LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA HACIENDA EN 1760

En el ámbito de las rentas y patrimonio real, la acción de Esquilache prolonga la consolidación del ministro de Hacienda y los órganos dependientes de él iniciada desde la década de 1720. Se enfatiza, con razón, el poder que daba al ministro su calidad de secretario de Estado y del Despacho: gracias a la vía reservada de Hacienda, sus predecesores se arrogaron una cantidad creciente de negocios que, en su opinión, no precisaban causas judiciales, sino un procedimiento gubernativo, guiado por su propia «inteligencia» en materia de Hacienda y la de sus subordinados. En la práctica, al dar órdenes en nombre del rey, controlaron de modo creciente la distribución de los fondos del rey, monopolizando las órdenes de pago a la Tesorería General y la selección de los grandes asentistas y arrendatarios de rentas. Asimismo, como secretarios, presidían Juntas en que influían políticamente —la del Tabaco, la de Comercio y Moneda— (Dedieu, 2011; Dubet, 2018; Dubet y Solbes Ferri, 2019, parte I; Torres, 2012). Se ha insistido menos en su calidad de superintendentes generales de las rentas reales o de la Hacienda real. Este segundo empleo les daba dos tipos de facultades. En lo gubernativo, dirigían las tareas de recaudación fiscal —confiadas a directores o superintendentes de rentas y, en las provincias, administradores e intendentes—, velando sobre el ingreso de lo recaudado en la Tesorería General[12]. En lo contencioso, ejercían una jurisdicción de la que se apelaba ante el Consejo de Hacienda —por medio de subdelegados y apoyándose en asesores letrados—. Si se afirmaron estas competencias desde que el marqués de Campoflorido recibiera la Superintendencia General de las Rentas Generales, en 1717, el período de mayor despliegue coincidió con el ciclo reformador abierto por Ensenada al firmarse la Paz de Aquisgrán en 1748. Varias rentas fueron puestas en administración directa, en

---

de 22/11/1763 relativo a arbitrios y propios («que el conocimiento de los propios y arbitrios debe ser gubernativo, cuando solo medie el interés del común»). No notaba contradicción entre los dos. Dou y de Bassols, 1800-1803.

12. Interrogado por Esquilache, el conde de Valdeparaíso, ministro anterior, le confirmó que no se podían hacer gastos sin el acuerdo del rey tramitado por el secretario, por estar «radicadas en la soberanía y no transferidas a persona alguna las facultades de distribuir los caudales del real erario». Por eso, dada la incapacidad de Fernando VI en su enfermedad, muchos gastos se hicieron «a buenas cuentas», esperándose a que Carlos III los validara a posteriori. «En lo respectivo a la Superintendencia, se incluye el encargo extendido de cuidar de la mejor administración de las rentas de SM y del ingreso de su producto en la Tesorería-Mayor en virtud de cartas de pago formales (…)». Carta a Esquilache, Madrid, 08/11/1759. AHN, Estado, leg. 2.979.

particular las Provinciales. Por tanto, los directores generales de Rentas Generales extendieron su radio de acción, bajo la autoridad del superintendente, creándose también nuevas Contadurías Generales[13]. Previamente, en 1741, el ministro José Campillo había abrogado el Juzgado del contrabando, arrogándose su jurisdicción como superintendente general de las rentas generales (Gallardo Fernández, 1805-1808, vol. 1, p. 94; vol. 4, p. XIX; Ripia y Gallard, s.f., vol. 5, pp. 540-541). En 1748, el rey reforzó el poder del superintendente general mandando que el Consejo de Hacienda se abstuviera de conocer del «gobierno, custodia y resguardo de las rentas que están en administración de cuenta de mi Real Hacienda y sus incidentes». En materia contenciosa, la Sala de Justicia de este solo debía ponerse en movimiento una vez «evacuadas» las causas en primera instancia por la Superintendencia y pidiendo siempre un informe de los directores generales (Ripia, s.f., vol. 3, pp. 159-160). En las provincias de Castilla sin ejércitos, a 13 de octubre de 1749, se restablecieron los intendentes. Uno de los motivos era la necesidad de supervisar la administración directa de las Rentas Provinciales, anunciada 3 días antes. Se les otorgaron los corregimientos de cada capital y la jurisdicción privativa en materia de rentas reales y patrimonio real, aunque se mencionaron todos los negocios (derechos señoriales, amortización de bienes eclesiásticos, etc.) en los cuales debían actuar bajo la autoridad de otros Consejos que el de Hacienda (*Ordenanza*, § I, LII-LVII, LX-LXI). A este respecto, María López Díaz observa, con razón, un acomodo con el «orden tradicional» y, en particular, el Consejo de Castilla. Así, se borraron las referencias de la ordenanza anterior (1718) a la capacidad del intendente para entrometerse de modo sumario en la justicia ordinaria (López Díaz, 2019).

De este modo, la consolidación del ministro de Hacienda no se limitó al crecimiento de los órganos de la vía reservada frente a la de los Consejos ni a la extensión de los negocios (del secretario o del superintendente) considerados como gubernativos. También se afirmó la jurisdicción de la Superintendencia General en primera instancia, aunque el Consejo de Hacienda conservó la apelación de las causas de

13. Dubet y Sánchez Santiró (2022): caps. 2 y 3. A partir de aquellos años, se usó más a menudo «Superintendencia general de la real Hacienda» o «las rentas reales», y no solo de rentas generales, aunque la denominación siguió siendo vacilante (Covarrubias, 1790, vol. 4, fols. 35-42). La Renta del Tabaco era un caso aparte: abolida su Superintendencia en 1726, la gobernaban dos directores y —para la jurisdicción— una Junta bajo la autoridad del secretario. En una fecha indeterminada, los directores fueron sustituidos por dos administradores generales. Escobedo Romero, 2007. Por otra parte, la colocación de las Contadurías Generales en el organigrama es dudosa: las dos primeras (las de Valores y Distribución) se crearon como órganos de la vía reservada de Hacienda en mayo de 1717 —cuando el secretario de Hacienda y el superintendente general eran individuos distintos— (Dubet y Solbes Ferri, 2019, p. 97). No obstante, en las décadas de 1750 y 1760, las de rentas dependían de la Dirección General de Rentas. De hecho, el primer contador general de Rentas Provinciales fue director de ellas, hasta 1757 (Ripia y Gallard, 1795, vol. 3, pp. 228-232).

Hacienda, inhibiéndose cualquier otro tribunal —lo recordó la instrucción de intendentes de Ensenada (*Ordenanza*, § LII)—. Además, Ensenada intentó encauzar la actividad judicial de la Sala de Justicia obligándola a pedir informes de los directores. Señal inequívoca del protagonismo que quería dar a la Superintendencia en materia contenciosa es la creación, en mayo de 1743, de un cargo de subdelegado general del superintendente general, con funciones de asesor universal (Covarrubias, 1790, vol. 4, fol. 65r). Su primer titular, Pedro Salvador de Muro, ministro togado del Consejo, era uno de los consejeros de mayor confianza del ministro[14].

Durante la estancia de la comitiva real en Zaragoza en noviembre de 1759 y el viaje a Madrid, en diciembre, Esquilache se informó sobre el estado de los negocios de cada Secretaría, pretextando el descontento del rey por la ignorancia en que lo dejaban. Como respuesta, su predecesor, el conde de Valdeparaíso, pormenorizó las facultades de sus empleos de secretario y superintendente general y los modos de recoger por escrito la voluntad del rey y tramitar cada tipo de gasto. Aunque el siciliano hacía pocos comentarios, ya dio indicios de su desprecio por Valdeparaíso, sospechoso de laxismo con Juan de Isla, probable culpable de una estafa en la exportación de lanas. En algunos negocios, manifestó su voluntad de instaurar procedimientos regulares de control de la buena ejecución de las decisiones reales. Refiriéndose a la provisión militar de pan, lamentaba que no hubiera «en las provincias quien invigiese (sic) de parte del ministro de Hacienda, que es por donde se hacen y aprueban asientos, sobre el modo de darles cumplimiento». En cuanto a la enajenación de bienes destinada a saldar parte de las deudas heredadas de Fernando VI, confiada por Valdeparaíso a un comisionado, requería una validación legal (un decreto rubricado por rey que expusiera su voluntad de enajenar bienes, y no solo una orden del secretario), unas reglas que establecieran los criterios de preferencia entre los acreedores y unos procedimientos para que «conste la aprobación de Su Majestad de cada venta» (AHN, Estado, legs. 2.901 y 2.979).

Esquilache también dudaba de la calidad del trabajo del personal subalterno. Sin duda le impresionó el alegato de Loynaz. El administrador general de la Renta del Tabaco vituperó un desorden que empezaba en el estrato inferior al ministro, comparando el erario con tierras llenas de malezas, «entregadas a una multitud de capataces, mayorales y factores de cuatro administradores, que quizás entraron a serlo con la barba cana y a estudiar teóricamente su mecanismo». Se refería a los directores de rentas y al otro administrador general del tabaco, criticables por ser

14. Participó en juntas importantes (pago de la deuda corriente de Felipe V, pago de los juros, Contribución Única). Según un adversario suyo, formaba parte de los letrados dispuestos a justificar todo cuanto deseaba Ensenada (Rodríguez, 1878, pp. 255-262).

viejos[15] y carecer de conocimientos prácticos, pero también denunciaba problemas organizativos. Entre ellos, señalaba en la cúpula la propensión a confiar materias de gobierno a «juristas» (inexpertos y causa de lentitud en el despacho), la falta de autoridad de los directores (verdaderos «alcaldes pedáneos»), la dispersión del gobierno de diversas rentas (algunas podían reunirse bajo un solo director o agregarse a la administración del tabaco; podían concentrarse las Contadurías Generales; debían abrogarse ciertas comisiones extraordinarias) o la ausencia de información contable suficiente en Madrid (había que exigir siempre certificación de los valores). En las provincias, si había demasiados empleados y dependientes, no todos útiles, Loynaz deseaba mejorar la selección de administradores, contadores, visitadores y cabos de resguardos, a elegir entre los hidalgos pobres para que fuesen «personas de representación». En cuanto a los oficiales de las oficinas contables, debían ser «mozos instruidos, aplicados y trabajadores», porque la formación era práctica. Serían «dot[ados] de manera que puedan vivir con la decencia correspondiente para que no se dediquen a los muchos arbitrios que tienen». Los «vistas» serían antiguos mercaderes, no principiantes, y los guardas, antiguos soldados. En suma, el personal, por su experiencia previa o su nacimiento, debía dar garantías de honestidad, pero también, en el caso de los administradores, contadores, visitadores y cabos, ostentar el prestigio suficiente para imponerse. Era indispensable el conocimiento práctico, adquirido antes o en el mismo empleo, y se imponía una dedicación a tiempo completo. La revalorización de los salarios permitiría prevenir el fraude o, para los contadores, el abuso en cobrar «propinas» por cada acto. Uno de los remedios consistía en sustituir a los directores cerca del ministro por uno solo, «autorizándolo en todo lo posible» y subordinándole dos administradores. El director idóneo sería «un hombre de buena edad, que hubiese corrido algunas caravanas […], fuese muy aplicado y trabajador, para ir enderezando entuertos que iría tocando con la experiencia». La descripción suena a autorretrato (Loynaz, 1759, p. 38, 43-6, 67).

Esquilache también recibió el balance de los dos directores generales de rentas, Francisco de Cuéllar y Luis de Ibarra, encargado por Valdeparaíso. Estos recordaban la cronología de la puesta en administración de las rentas bajo el mandato de Ensenada, refiriendo, no sin autocomplacencia, el crecimiento de su producto[16]. Si el discurso no contenía ningún análisis crítico ni consejo de reforma, entre líneas, le confirmaba a Esquilache que ya no cabía acusar a los arrendatarios de rentas provinciales o solo a las oligarquías municipales de los males fiscales, sino que, como

15. Loynaz tenía 58 años. Los directores Francisco de Cuéllar y Luis de Ibarra le llevaban respectivamente 13 y 14 años. Solo el otro administrador del Tabaco, Eugenio de Mena, era más joven (49 años), según la base Actoz.

16. «Memoria sobre el establecimiento y origen de todas las rentas q componen el real erario», Madrid, 15/10/1759, AHN, Estado, leg. 3.211-1; Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE), ms 10.695, fols. 301-55 y ms 21.300, fols. 366-428.

sugería Loynaz, el ministro también debía enfocarse en su propia administración[17]. Ya en noviembre, convencido de que muchos empleados de las rentas, en lugar de residir, designaban «substitutos», prohibió que se les pasara en cuenta su salario si no justificaban su presencia (AHN, Estado, leg. 2 901; AGS, DGR, 2.ª remesa, leg. 2 319). En los meses sucesivos, con el concurso de su secretario de la Superintendencia, Rosendo Sáez de Parayuelo, pidió estados de los valores de todas las rentas y, en particular, información sobre los gastos de recaudación, con listas de los empleados que dependían de la Dirección General de Rentas, la Contaduría General de Rentas Generales, la Renta del Tabaco e incluso la de Correos, con sus salarios y ayudas de costas respectivas. La Dirección General y los administradores generales del Tabaco debieron informar además sobre los empleos vacantes y los empleados culpables de ausencias injustificadas, así como los «inútiles». Por fin, Esquilache pidió un estado de todos los subdelegados de la Superintendencia General, que recibió a principios de diciembre de 1760[18].

Las respuestas no siempre fueron las previsibles. En particular, en noviembre de 1759, los directores generales de rentas y los administradores generales del Tabaco acompañaron sus relaciones de los ausentes con valoraciones optimistas: los pocos ausentes tenían justificaciones legítimas. Los administradores del Tabaco (incluido Loynaz) se presentaban como modélicos: ya habían establecido procedimientos regulares para que nadie se ausentara sin licencia, responsabilizando a los administradores de provincias, y para que cada mes constara en Madrid la lista de los ausentes de cada provincia. Añadían que ningún empleo era inútil y los salarios eran insuficientes (AGS, DGR, 2.ª remesa, leg. 44). Un año después, el contador general de rentas, Juan Matías de Arozarena, describió las tareas de su oficina. Argüía que tres factores agravaron la carga de trabajo, causando atrasos: primero, la puesta en administración de varias rentas (en torno a 1748-50), que llevaba a controlar más cuentas; segundo, el alza del producto recaudado (y por tanto la cantidad de justificantes a revisar); tercero, la exigencia de nuevas relaciones contables en Secretarías del Despacho desde 1754. Contaba aparte las primeras reformas de Esquilache. Así, las rentas pedían un «continuo cultivo» y lo razonable sería aumentar su planta (AGS, DGR, 2.ª remesa, leg. 44).

17. Sobre las críticas anteriores a arrendatarios y poderosos: Delgado Barrado, 2007, cap. 4; Dubet, 2015, pp. 145-151 y González Alonso, 2015. Todavía en la Ordenanza de 1749 Ensenada suponía que los principales responsables de los atrasos en la recaudación eran los poderosos (§ XLIX). La denuncia de los abusos de estos no cesó en las décadas finales del siglo, pero cohabitaba con la de los administradores.

18. AGS, DGR, 2.ª remesa, legs. 41, 43, 44, 254, 255, 2.319, 2.958; BNE, ms 10.695, fols. 356-8; AHN, Fondos Contemporáneos-Ministerio de Hacienda (en adelante, FC-MH), lib. 10.797, fols. 179-80.

No obstante, una de las grandes preocupaciones de Esquilache era saber si los empleados físicamente presentes cumplían con su deber de modo puntual y eficaz, además de no cometer fraudes. Como vimos, no bastaba con negociar un buen asiento en la corte si nadie velaba sobre su ejecución local. En la recaudación, las «quiebras» eran su gran inquietud, o sea los descubiertos o alcances. Por eso, como sus predecesores, pretendía conocer los «valores» que debieron recaudar los responsables locales (Dubet y Sánchez Santiró, 2022, pp. 274-278; Dubet y Solbes Ferri, 2019, pp. 227-236, 319). Las causas eran variadas. Así, ciertos empleados defraudaban con omisiones culpables, que demandaban respuesta judicial. Además, la tardanza de los acreedores en pedir sus pagos producía equivocaciones, reclamando remedios contables. Por fin, se acusaba la negligencia de los administradores y los intendentes en activar la cobranza, creyendo en particular los primeros que bastaba con esperar a que ingresase el dinero (Dubet, 2025).

4. LA JURISDICCIÓN DE LOS INTENDENTES

Esquilache aparece como un heredero de Ensenada en lo tocante a las instituciones de gobierno de la Hacienda, pero con inflexiones. Así, compartía con él la voluntad de confiar los negocios gubernativos a ministros individuales y expertos, bajo la autoridad del ministro y los órganos que dependían de él en Madrid. No obstante, potenció más que él la Superintendencia, precisando la naturaleza de su relación con intendentes y administradores generales de provincias. Para ello, se esforzó por definir e imponer procedimientos encaminados a controlar la actividad de todos sus agentes. Esto afectó tanto lo gubernativo como lo contencioso.

Es patente el esfuerzo por ampliar su jurisdicción. Como explicó Esquilache a Laverdy en 1765, el superintendente general era «juez privativo de todos los ramos, derechos y rentas reales» y su jurisdicción era «tan privilegiada» que podía arrogarse causas nacidas en otros tribunales si los intereses de la real Hacienda estaban en juego[19]. Esquilache respetó la separación de la renta de Correos, cuya Superintendencia pertenecía al secretario de Estado[20]. Según recordaría el fiscal de Hacienda Carrasco, participó en 1764 en la puesta en obra del nuevo establecimiento de Correos Marítimos, pero la renta permaneció bajo la autoridad del nuevo secretario de Estado (Bermejo Cabrero, 1989, p. 159; Vallejo García-Hevia, 1998a, 1998b). En cambio, amplió su control sobre la persecución de ciertos fraudes a expensas

19. Ozanam, 1966, p. 227. A falta del texto en español que recibió Ossun, que no conseguí localizar, traduzco el «État détaillé», con el riesgo de no coincidir exactamente con el original.

20. Según Carrasco, imaginó controlar la distribución de la Renta integrándola a la Tesorería General, dejando la Superintendencia al secretario de Estado Grimaldi, pero renunció para evitar roces. Bermejo Cabrero, 1989, p. 135.

del Consejo de Guerra. A 21 de diciembre de 1759, diez días después de su acceso al ministerio, una orden privaba a este cuerpo de la jurisdicción sobre el comercio ilícito o el contrabando de los extranjeros «transeúntes». En adelante, el superintendente general debía juzgar estos casos, con apelación ante el Consejo de Hacienda, conservando el de Guerra el contrabando de armas y municiones. Para justificar esta decisión, se citaba el decreto de Campillo (Ripia y Gallard, 1795, t. V, pp. 540-541). A 7 de octubre de 1760, Esquilache daba a conocer su jurisdicción exclusiva sobre las causas de exportación de caballos y mulas (Andrés, 2003, p. 180; Archivo General de Simancas [AGS], DGR 2.ª remesa, leg. 255). Por otra parte, no necesitó de una decisión nueva para ocuparse de la Renta del Tabaco en Cuba en una fecha temprana, por estar incluida en el monopolio de España (Escobedo Romero, 2007; Luxán Meléndez, 2023). En abril, el flamante fiscal de la Sala de Millones del Consejo, Francisco Carrasco —nombrado en enero—, quien ya gozaba de su confianza, era responsable con su colega de Gobierno y Justicia de la causa contra la Compañía de la Habana. Para ayudarlos, Esquilache nombró un nuevo abogado de la renta, eligiendo a José Moñino en agosto[21]. Por fin, afirmó su control jurisdiccional sobre los empleados de la real Hacienda: a 21 de abril de 1760, prohibió que acumularan a su empleo en rentas administradas unas comisiones sujetas a otros tribunales que el suyo. Lo interesante es el motivo: el superintendente general debía ser el único juez en poderlos juzgar y deponer[22].

Para respaldarlo en esta supervisión, el ministro realzó la figura de su asesor y subdelegado general, Pedro Salvador de Muro. En diciembre de 1760, al hacerse una revisión sistemática de la remuneración de los agentes de la Dirección, la Superintendencia y las Contadurías Generales, este fue uno de los que se beneficiaron de un alza sustancial de su ayuda de costa (AGS, DGR, 2.ª remesa, leg. 255). En 1761, ingresaba en la Junta del Tabaco, cosa imposible sin la anuencia de Esquilache, y Carlos III le gratificaba con el título de marqués de Someruelos (Actoz). El «État détaillé» describía el empleo: «El superintendente general siempre se vale de un consejero del Consejo de Hacienda como asesor, consultando y resolviendo con él todos los negocios contenciosos» (Ozanam, 1966, p. 228). A pesar de esta afirmación de la Superintendencia General, el Consejo de Hacienda no salió perdedor. Al tener la apelación de las causas sentenciadas por el superintendente, amplió con él

21. Esquilache a la Dirección y los administradores generales del tabaco, San Ildefonso, 26/08/1760, AGS, DGR, 2.ª remesa, leg. 255. Aunque todavía no eran amigos, en 1760, Esquilache confiaba en Carrasco para la defensa de las regalías reales y la ejecución del concordato de 1737. AHN, FC-MH, lib. 10.797, fols. 207-8, 383-4. En abril, tomó la precaución de decirle que, al nombrar un abogado para ayudarle en la causa del tabaco de Cuba, no quiso reducir las «regalías» de su empleo. Moxó, 1959, pp. 659-660.

22. Precisaba a 24/05/1760 que podían tener comisiones en rentas arrendadas bajo su jurisdicción. AHN, FC-MH, lib. 8.021, núms. 1.607 y 1.612, fols. 222-3 y 280.

esta esfera de competencias. Además, en febrero de 1760, se suprimió en su favor el Juzgado de las Rentas de Lanzas y Media Annata y se le confiaron todas las causas de incorporación de bienes enajenados. En los dos casos, también se encargaba de lo gubernativo, deslindándose las dos vertientes. En el caso de las incorporaciones, cabe preguntarse, sin embargo, si los verdaderos beneficiarios de la medida fueron el Consejo o sus fiscales, invitándose al primero a despachar los negocios con los segundos. En particular, en diciembre, Carrasco recibió la responsabilidad de las incorporaciones en una revisión del reparto de los negocios entre los dos fiscales, (Covarrubias, 1790, vol. 8; Ripia y Gallard, 1795, vol. 3, pp. 160-163).

Los intendentes eran la base del edificio. Esquilache quiso preservar su jurisdicción privativa en materia de Hacienda y, hasta cierto punto, su margen de maniobra para ejercerla. Se han comentado dos disposiciones que *a priori* parecen opuestas. A 5 de marzo de 1760, a raíz de una consulta del Consejo de Castilla, una cédula real delimitó la jurisdicción de los intendentes en materia de justicia ordinaria, economía, policía y gobierno: solo la tendrían en la demarcación en que eran a la vez corregidores (el de la capital de su provincia) y en su calidad de corregidores, «sin mezcla ni confusión alguna con el concepto de intendentes». Se apelaría de sus decisiones ante las Audiencias y Chancillerías (Gallardo Fernández, 1805-1808, vol. 5, pp. 258-259; Lorenzo Jiménez, 2012, p. 701). A 10 de junio de 1760, un decreto probablemente emanado de una consulta del Consejo de Hacienda reafirmó la jurisdicción privativa de los intendentes en materia de rentas y patrimonio real; se apelaría ante el Consejo de Hacienda, siendo inhibidos los demás tribunales, en primer lugar, las Audiencias y Chancillerías (Archivo Histórico Nacional [AHN], FC-MH, lib. 8 021, núm. 1 613, fols. 282-283; Barrio Gozalo, 1986; Gallardo Fernández, 1805-1808, vol. 5, pp. 259-262; Lorenzo Jiménez, 2012, pp. 712-713). La oposición aparente entre los dos textos, tendentes a respaldar respectivamente la jurisdicción de Hacienda y la ordinaria del Consejo de Castilla, alimentó la imagen de una actitud beligerante de Esquilache respecto a este (Corona, 1980, pp. 112-115). La tensión es innegable. En 1766, el Consejo de Castilla, en la famosa consulta que propuso separar los empleos de corregidor de la capital de provincia y de intendente, afirmó que los intendentes obtuvieron órdenes particulares del ministro (Esquilache) «ganadas clandestinamente y fundadas en causas aparentadas» en las que neutralizaba la cédula de marzo[23]. Sin embargo, algunos historiadores matizan el antagonismo. Andrés-Gallego pone en el mismo plano las dos disposiciones, presentadas como complementos sobre la jurisdicción de los intendentes (Andrés-Gallego, 2003, p. 150). Lorenzo Jiménez, estudiando la jurisdicción de Hacienda en el siglo XVIII, señala el paralelismo

23. Consulta del Consejo de Castilla de 06/10/1766. Campomanes, en el dictamen previo, iba en el mismo sentido, aunque sin mencionar la cédula de marzo 1760. AHN, Consejos, leg. 6.855, exp. 27. Corona, 1980, p. 113.

existente entre dos textos: estos, para los diversos espacios de la jurisdicción de los intendentes, definían límites territoriales e identificaban tribunales de apelación (Lorenzo Jiménez, 2012, p. 701). Por su parte, López Díaz critica la idea de que la cédula de marzo señalara un triunfo corporativo del sector «judicialista», pero tampoco admite que Esquilache quisiera atacar frontalmente al Consejo de Castilla. Así, observa más bien una forma de acomodo con este que prolongaba el de la ordenanza de 1749. De hecho, esta siguió siendo válida, con sus concesiones al «orden tradicional» (López Díaz, 2019 y 2020), aunque para la jurisdicción sobre la Hacienda real Esquilache intentó sustraer a los intendentes de un control indirecto del Consejo de Castilla, como vamos a ver.

La inflexión respecto a Ensenada reside —entiendo— en la articulación entre superintendente, intendentes y, para la jurisdicción, otros subdelegados. Dos disposiciones fueron fundamentales. La cédula de 17 de diciembre definió las facultades del superintendente general y sus subdelegados[24]. Recordaba la lista de rentas de las cuales el primero era juez privativo (§ 4) y, reiterando los textos de 1759-60, daba una definición extensiva al contrabando que le incumbía perseguir judicialmente. Este incluía el del tabaco, la «extracción» de moneda o barras de oro y plata, «caballos, machos y ganado», así como todo fraude en las Rentas Provinciales, Generales y otras administradas (§ 3). A continuación, se perfilaban la red de subdelegados y la arquitectura de los tribunales. Los intendentes de provincias eran subdelegados natos, aunque había otros subdelegados fuera de las capitales de provincias (a menudo, gobernadores de puertos o plazas, corregidores, alcaldes mayores, etc.). Todos, para ser remunerados, necesitaban un «despacho o nombramiento» del rey expedido por el superintendente, «con las facultades que tenga [el superintendente] por convenientes». Para ejercer su función de jueces, los intendentes podían elegir libremente a sus asesores, con la anuencia del superintendente. En cuanto a este, podía reclamar y retener «los autos que hayan hecho [los subdelegados] en virtud de la subdelegación», determinándose el juicio en el «juzgado de la Superintendencia General», con apelaciones «al Consejo de Hacienda, a la Sala de Millones o Junta del Tabaco». Para las otras causas, los subdelegados debían informar al Superintendente de su inicio y «le consultar[ía]n la sentencia que dieren» (§ 2, 4, 5, 15). Se detallaban el procedimiento a seguir en causas de contrabando —«por vía de inquisición»— y el modo de usarlo —evitando inculpar «vagamente con motivos generales»—. También se alertaba a los subdelegados sobre las exenciones que podían alegar reos privilegiados, sin justificación, retomándose aquí también disposiciones previas (§ 6-12). Finalmente, el texto organizaba el reparto del producto

24. Gallardo Fernández (1805-1808, vol. 5, pp. 13-19) y Ripia y Gallard (1795, vol. 3, pp. 149-153; vol. 5, pp. 544-548). La cédula completaba el decreto de 14/12/1760: *Novísima Recopilación* (1805, lib. 6, tít. 9, ley 2).

de la venta de mercancías decomisadas, innovando al reservar una cuarta parte al superintendente general (§ 13-14, 16), lo que debió de ser una sustancial fuente de ingresos para Esquilache[25]. En suma, la cédula asentaba una definición amplia del espacio de jurisdicción del superintendente y, en las provincias, de los subdelegados como sus agentes directos. Entre estos, otorgaba una neta preeminencia a los intendentes. Según el «État détaillé», los demás subdelegados tenían menos poder que los intendentes y deberían enseñarles sus autos cada vez que estos lo mandasen (Ozanam, 1966, pp. 225-226). Asimismo, Esquilache dio mayor autonomía a los intendentes respecto al Consejo de Castilla que Ensenada, quien les impusiera los alcaldes mayores como asesores (López Díaz, 2019). Esta era una «restricción […] perjudicial a mi real Hacienda» (§ 2), en particular, porque los alcaldes mayores se nombraban en la Cámara de Castilla y estaban sujetos a juicio de residencia.

Previamente, a 5 de diciembre de 1760, se había reducido el número de los subdelegados que no eran intendentes. La medida no solo permitía una economía sustancial[26]. Un intercambio de cartas, a fines del año, entre Esquilache y Francisco de Armona, visitador general del reino de Murcia, ofrece una clave de interpretación política. Armona, quien ya empezaba a inspirar confianza al ministro, pensaba que el intendente, a diferencia de los demás subdelegados, era «el único en que los ordinarios reasumen el conocimiento de los negocios, de que se hallan inhibidos, por ser la jurisdicción que ejercen la principal de que se desmembraron todas las de comisión». Además, convenía alejar a los defraudadores de su lugar de residencia, donde la protección de sus «adeudos» podría entibiar el celo de los subdelegados. El problema se resolvía juzgándolos el intendente, con su conocimiento privativo, en la capital de la provincial. En regla general, el intendente tenía más autoridad que otros subdelegados, contra los cuales era frecuente recurrir. Así, podía convocar a los «sujetos distinguidos de los pueblos» que encubrían el fraude e infligirles ciertos castigos sin procedimiento formal. Esquilache asintió: «Y que por lo que mira a los muchos subdelegados que hay, procuraré cortar todos los que no estime indispensables y que estos sirvan con títulos míos para evitar todo recurso de sus providencias por defecto de jurisdicción»[27]. Así, se trataba de imponer a los intendentes como los mayores magistrados en materia de Hacienda en cada provincia.

25. No se ha estudiado su caso. El ministro Lerena (1785-92) completó ventajosamente su salario con los comisos (Melón, 2015). Hizo lo propio Gálvez, quien implantó la medida en América al acceder al empleo, nuevo, de superintendente general de la real Hacienda de Indias (Zepeda Cortés, 2013).

26. Las ayudas de costa bajaron en un 32 %. «Ayudas de costa que actualmente gozan los subdelegados de todas rentas en el reino y las que deben gozar desde 1.° de enero de 1761 en adelante». AGS, DGR, 2.ª remesa, leg. 255.

27. Carta de Armona, Murcia, 24/12/1760, respondida a 30/12/1760. AGS, SSH, leg. 1.298. Sobre la trayectoria de Armona, véase Álvarez Barrientos, Imízcoz Beunza & Aranburuzabala, 2012.

Sin embargo, la posición de los intendentes era ambivalente. En efecto, la afirmación de su jurisdicción venía contrapesada por el estrecho control personal del superintendente. Este los elegía, revisaba sus sentencias y validaba la elección de sus asesores, sin duda ayudado de su propio asesor y subdelegado general. La cédula anunció que el esquema sería completado por una instrucción sobre «procesos y causas de contrabando» (§ 17). Esta se publicó a 22 de julio de 1761[28]. Se hacía eco de la de 1760 al explicar a los intendentes y otros subdelegados cómo actuar frente al privilegio de varios cuerpos. Por otra parte, buscaba diseñar una «regla fija» para el tratamiento «uniforme» de las causas e incluso de las penas, describiendo categorías de delitos y su correspondencia con dichas penas (Archivo Histórico Nacional [AHN], FC-MH, lib. 8 022, núm. 1734, fols. 164-173; Ripia y Gallard, s.f., vol. 5, pp. 548-557). Así, Esquilache intentaba cercenar, aunque no anular, la facultad de arbitrar de los magistrados que dependían de él. Lo subrayó para Laverdy: «el juez solo tiene que examinar y comprobar cuál es el género de fraude y pronunciar la pena conforme a la indicada en la instrucción mencionada» (Ozanam, 1966, p. 222).

De este modo, Esquilache quiso ampliar su jurisdicción sobre las diversas formas de fraude fiscal y confirmar la que tenía sobre las rentas. Para ello, se apoyó en órganos existentes, su asesor y subdelegado general, cuya importancia destacó, el Consejo de Hacienda, que ganó competencias, en provecho suyo o de sus fiscales, y los intendentes. El trato dado a estos es ambivalente porque, si Esquilache quiso que fueran los primeros magistrados de su provincia, les recordó su dependencia y buscó cómo encauzar su actividad judicial.

5. INTENDENTES Y ADMINISTRADORES

Creo que el camino es análogo en materia gubernativa. En tocante a la cúpula de los órganos de gobierno, es significativo que Esquilache desoyera la propuesta más beligerante de Loynaz, sustituir a los directores de rentas por un solo director. ¡No quería competencia! Lejos de acabar con los directores y los administradores generales del tabaco, trabajó de modo regular con ellos: además de la voluminosa correspondencia escrita entre ellos, tenían «juntas» de trabajo[29]. En la Dirección General de Rentas, como en otros órganos, se reformaron plazas, pero también se dio mayor legitimidad institucional a sus jefes. Una nueva instrucción, a 24 de enero de 1761, insistía en la subordinación de oficiales y otros dependientes a los directores, los contadores generales de rentas y los oficiales mayores. Otras prescripciones

28. Silvestre Martínez, al reproducirla en su *Librería de jueces* (1768–1769, vol. 4, pp. 157-175, §§ 149-199) explicó que era «consecuencia de la real instrucción antecedente».

29. Ibarra Larrea y Cuéllar a Esquilache, Madrid, 18/02/1760. AGS, SSH, leg. 1.609. Loynaz y Mena a Esquilache, 06/10/1760. AGS, SSH, leg. 1.788.

se hacían eco a las sugerencias de Loynaz: horarios de trabajo, justificación de las ausencias, remuneración limitada al salario. Además, se describían procedimientos administrativos para clasificar los documentos y comprobar la ejecución de diversas etapas del trabajo, así como los castigos para quien fuera desobediente o, simplemente, negligente. El conjunto diseñaba una jerarquía administrativa en cuya cúpula se situaban directores y contadores generales; por debajo de ellos, los oficiales reales se responsabilizaban de la ejecución de sus mandatos (Archivo Histórico Nacional [AHN], DGR, 2.ª remesa, leg. 2 959; Ripia y Gallard, s.f., vol. 3, pp. 215-220). De este modo, no sorprende que el abad Beliardi, agente general de comercio de Francia, designara una vez a los directores como «ministros de Hacienda» (Bibliothèque nationale de France [BNF], ms 10 764, fols. 369-372). En el «État détaillé», Esquilache les dedicaba un párrafo, realzando la calidad de los directores, «muy versados» (en materias de Hacienda), su autoridad sobre los administradores y subdelegados en las provincias y la exactitud de sus métodos de trabajo y clasificación de archivos (Ozanam, 1966, pp. 226-227).

El ministro impuso su propia autoridad. Al ordenar a los directores y contadores generales que le designaran las plazas u oficiales inútiles, en diciembre de 1760, había empleado una fórmula reveladora: los contadores serían responsables «a Dios, al rey y a mí» si proponían un oficial innecesario o descartaran hombres celosos por desafecto personal (Archivo General de Simancas [AGS], DGR, 2.ª remesa, leg. 255; leg. 2 958). De hecho, su autoridad abarcaba tanto las decisiones de política general como los detalles. Al nombrarlo, el rey le dio facultades idénticas a las de sus predecesores, inclusive la de nombrar y deponer a todo empleado, fijando el monto de su remuneración (Archivo Histórico Nacional [AHN], Estado, leg. 6 401-1; Covarrubias, 1790, vol. 2, fol. 39, fol. 42). Ante Laverdy, Esquilache ensalzaba este poder: «todos dependen absolutamente de él». El texto también precisaba que, si los directores le sometían dudas o dificultades, «el superintendente las decide irrevocablemente y prescribe todo cuanto se debe hacer en base a ello» (Ozanam, 1966, p. 227). En el control sobre el buen desempeño de los oficiales, intervenía personalmente: la instrucción de la Dirección General citada preveía que quien quisiera ausentarse de Madrid pidiera permiso al propio Esquilache; la correspondencia con las provincias conserva numerosas respuestas a demandas similares de un tesorero, un subdelegado de rentas, un oficial de la Contaduría provincial. Por otra parte, Esquilache tenía facultad para castigar sin procedimiento judicial las faltas profesionales que, de un modo u otro, atribuía a la negligencia, como las ausencias indebidas o los retrasos en enviarle cuentas de los tesoreros y contadores de aduanas o los administradores generales (los de provincias) o particulares[30]. Tantas responsabilidades personales

30. Circular a los tesoreros de aduanas, 04/03/1760. AHN, FC-MH, lib. 8.021, fols. 210. En septiembre de 1762, mandó suspender el salario de todo administrador que se retrasara en enviar cuentas en el reino de Granada. AGS, SSH, leg. 1.481.

imponían un trabajo superior a la capacidad de un solo hombre. En el quehacer diario, gran parte de la preparación de este trabajo correspondía a la Secretaría de la Superintendencia, una oficina que ha pasado desapercibida, aunque, según Covarrubias, la Secretaría de la Presidencia del Consejo «se halla[ba] unida a la de la Superintendencia General desde que recayeron ambos empleos en la misma persona» (Covarrubias, 1790, vol. 4, fol. 33), o sea desde 1721. No era una novedad que el ministro se apoyara en el jefe de esta Secretaría, pero el redactor de la memoria a Laverdy (¿el propio secretario?) tuvo el detalle de mencionar su existencia, señal de la importancia que le confería (Ozanam, 1966, p. 228). En aquellas fechas, el secretario era Rosendo Sáez de Parayuelo, premiado con un empleo de director general en diciembre de 1765 y sustituido por Diego López Perella (Archivo Histórico Nacional [AHN], FC-MH, leg. 229-1; FC-MH-Tesorería, leg. 87, fols. 5-6).

La instrucción dada a los intendentes y los administradores generales a 10 de noviembre de 1760, entre otros aportes, explicaba cómo implementar el método a nivel provincial. Pretendía remediar la «falta de cumplimiento en las reglas e instrucciones dadas para el manejo y administración» de las rentas y «la desidia, poca inteligencia o sobrada contemplación de algunos administradores y otros dependientes». Tanta incuria e incapacidad causaban retraso y «gran desfalco en la exacción de los legítimos derechos», abriendo la puerta al fraude de los contribuyentes (Ripia y Gallard, 1795, vol. 3, pp. 232-240). Entre las soluciones ideadas, señalaré las que remiten a las relaciones entre ministro, intendentes y administradores[31]. Puede que, en este caso, Esquilache recordara el consejo de Loynaz, quien le había manifestado que la instrucción existente (la de 1749) era «propia para que se encargase su práctica a algún flamenco, pero no para españoles, […] de que se sigue que no explicándole (sic) cosa por cosa lo que se debe poner en ejecución, el cómo y de qué medio se ha de valer, no hay que imaginarse el que tome nadie el trabajo de la práctica» (Loynaz, 1759, pp. 72-73). De hecho, el nuevo texto puede leerse como un desarrollo del párrafo 44 de la instrucción de Ensenada relativo a la prevención de los atrasos en la cobranza, reducido a once líneas. Esquilache, en cambio, describía las «obligaciones» de cada uno, exponiendo un «método». A todos, se les prescribía el calendario de las operaciones, el tipo de informaciones que debían producir, la forma de los documentos. Los intendentes venían en primer lugar, dada su jurisdicción privativa y su autoridad, que debían ejercer sobre todos, hasta el menor guarda. Una de sus misiones era examinar su «pureza e integridad», ver «si todos cumplen con su obligación» (§ I-15), pero también si eran «inteligentes» y si su plaza era útil (§ I-3). Para que pudieran ejercer una coerción, el ministro los facultaba para infligir castigos. En particular, encerrarían al contador y al administrador en su casa

31. Las líneas sucesivas se refieren a las dos partes de la instrucción, «para intendentes» (I) y «administradores generales» (II). Las soluciones contables fueron estudiadas por Dubet y Solbes Ferri (2019, pp. 247-303) y Torres Sánchez (2012, pp. 60-62).

hasta que remitieran sus cuentas, si tardaban; podrían primero amonestar y, si era insuficiente, suspender a los empleados que faltasen a su deber. Además, apuntarían en un libro los defectos y méritos de cada uno (§ I-13 a 16).

En cuanto a los administradores generales, también debían «celar sobre la conducta de todos los dependientes, hacer que cada uno cumpla con las funciones de su ministerio, procurar que los derechos que al rey pertenecen se cobren sin dispensación de modo que las rentas tengan todo el aumento posible, cortando cualquiera abuso perjudicial». No tenían facultades judiciales, pero observarían si las causas tenían «el pronto curso» requerido, ejecutándose las penas sobre los culpables y premiándose a los «interesados» en el reparto de los comisos (§ II-17). Para convencer a sus subordinados de cumplir con su deber, usarían de amenazas de represalias: el administrador general no debía castigarlos, pero daría relaciones escritas al intendente sobre su actuación y, en particular, los abusos o negligencias de todos. A su vez, a él podía castigarlo el intendente. Además, Esquilache innovó al obligarle a rendir cuentas, como el contador, y darle la «responsabilidad» de la «recta administración», un término que se iría explicando en los meses sucesivos (Dubet, 2025). La otra gran innovación fue la junta semanal, en que debían participar el intendente, el administrador general, el contador provincial y el tesorero de «todas rentas» (todas las de la provincia). Su objeto era conocer el estado de las rentas, identificar los «descubiertos» y sus causas, consultando soluciones, comprobar que no había abusos contra el contribuyente (como la cobranza de derechos indebidos) o usurpaciones contra el rey y evaluar la calidad del trabajo de cada individuo, a sabiendas de que «solo se han de mantener los indispensables» (§ I-2). Esta fue una de las novedades más valoradas por la junta que preparó las instrucciones de los intendentes de Nueva España y el Río de la Plata desde 1778 (Diego-Fernández Sotelo, 2016, p. 361). *A priori*, para el intendente, era un medio más de control sobre los subalternos, además de un espacio de colaboración entre expertos para valorar la eficacia de la recaudación. Reforzaba por tanto una cadena jerárquica que iba desde el ministro a las provincias. De hecho, los directores y administradores generales preguntaron si habían sido olvidados en la nueva instrucción[32].

Sin embargo, para los intendentes, había un reverso de la medalla. La instrucción se refería a su obligación de dar cuenta al superintendente general, sobre el estado de las rentas, pero también el comportamiento de los empleados, ya que solo el ministro podía despedirlos. En particular, los intendentes debían informar a Esquilache sobre el contenido de las juntas semanales (§ I-4). Esquilache precisó después que se trataba de enviarle un resumen o testimonio semanal (Dubet, 2025;

32. Intentó tranquilizarlos Esquilache a 22/11/1760: podían seguir tomando disposiciones para la buena administración y reclamando informaciones. AHN, FC-MH, lib. 8.021, núm. 1 652, fol. 410; AGS, DGR, legs. 255 y 2.958.

Ozanam, 1966, p. 222). Arma de doble filo: el intendente vigilaba y era vigilado, exigiéndole Esquilache eficacia en la recaudación fiscal. Lo aclaró la conclusión del texto: si los intendentes no hicieran lo necesario para «cortar todo daño o abuso», los administradores podrían informar «inmediatamente» a Esquilache para que el rey «se digne tomar la resolución que estime conveniente para que, en la provincia donde suceda, se ponga sujeto de celo que sepa hacer el real servicio» (§ II-17). La amenaza sonaba más clara en el «État détaillé»: el superintendente general conocía «cada semana el estado de todas las rentas […] y gracias a este conocimiento es capaz de distinguir entre los intendentes y oficiales que cumplen con su deber con el mayor celo y los que son negligentes, con lo que puede remediarlo» (Ozanam, 1966, p. 228).

***

Esquilache tuvo que encargarse de una Hacienda real peninsular que la casi generalización de la administración directa, acometida por Ensenada, modificó en profundidad. Por tanto, dedicó suma atención al funcionamiento de los órganos de gobierno. En las páginas precedentes maticé la imagen de un puro técnico que habría adoptado una serie de medidas sin «plan general». No se trata de rescatar la memoria del siciliano, ya que en el fondo no sé si la autoría de la reforma descrita le corresponde a él o a compañeros o clientes bien informados, como Pedro Salvador de Muro, Francisco Carrasco, Martín de Loynaz, José Moñino… De lo que se trata es de echar luz sobre la coherencia de la reforma conjunta de la Superintendencia General de Hacienda y sus dependencias, entre ellas las Direcciones de Rentas, las Intendencias y las Administraciones Provinciales de Rentas. Los vínculos entre las disposiciones descritas fueron mencionados por sus promotores y, *a posteriori*, algunos actores consideraron que estas marcaron una etapa digna de atención, que se tratara de prolongarla o rectificarla.

Esta política articuló dos vertientes del gobierno de la Hacienda real, el gobierno económico y el jurisdiccional. Prolongando la política de Ensenada, Esquilache amplió algo las facultades de secretario del despacho y, sobre todo, de superintendente general del ministro de Hacienda. Sin duda creía, como sus predecesores, que el poder del ministro era el mejor instrumento para que el rey controlara su Hacienda. La originalidad de su acción reside más bien en su voluntad de aclarar las consecuencias prácticas de estas facultades, tanto las gubernativas como las contenciosas. Así, buscó explicar las relaciones jerárquicas entre diversos órganos en Madrid —ante todo la Superintendencia General— y las provincias, describir las tareas que les incumbían y establecer nuevos medios de coerción sobre magistrados, empleados y dependientes, asegurándose de que su autoridad personal en tanto superintendente general fuera efectiva. En este panorama, los intendentes,

sus agentes directos en las provincias, experimentaron cambios ambivalentes. De cara al público, ganaron lustre y poder efectivo, como primeros magistrados de Hacienda de sus provincias y como jefes de su administración. En la gestión interna, la contrapartida fue el proyecto de un estrecho control del ministro sobre su actividad. Este pasaba por cierta uniformización de sus tareas, la necesaria validación de sus decisiones por el ministro y la posibilidad de que sus abusos o negligencias fueran denunciados y castigados con o sin procesos, lo mismo que para los demás empleados. Esquilache no parece haber compartido las inquietudes de la época y, en particular, de Campomanes respecto al posible despotismo de los intendentes (Corona, 1980; García García, 1997, pp. 141-156, p. 178; Gay Escoda, 1983). La finalidad de estos contrafuegos era doble: recordarles su dependencia respecto al superintendente e imponerles una exigencia nueva, la eficacia.

Esta interpretación de la política inicial de Esquilache abre la puerta a algunos interrogantes. En primer lugar, se trataría de saber en qué medida era pensada como la solución a problemas concretos de recaudación y manejo de fondos, pero también dificultades planteadas por la jurisdicción previa del superintendente general y los intendentes. Las recriminaciones de Loynaz, en particular, nos informan sobre las creencias de Esquilache y su equipo al respecto, determinantes en sus decisiones, pero sería deseable estudiar el funcionamiento diario de la Superintendencia General y su percepción por diversos actores en las décadas previas. Así, en 1771, Campomanes y Moñino, dictaminando sobre una reforma de Gálvez en las Indias que presentaba fuertes analogías con la de Esquilache, señalaban que incluso en España «fue preciso tomar» muchas providencias una vez puestas en administración las rentas provinciales, «para fijar los conocimientos y no exponer las reglas económicas o mixtas a contenciones» (Dubet, 2025b, p. 32). Convendría poder dar un contenido a este imperativo. De modo más general, el estudio presentado aporta una pequeña contribución a una línea de investigación que ha renunciado a la idea simple de una progresiva evicción del gobierno jurisdiccional por el económico, atenta a la complejidad de las relaciones entre los dos en una época fecunda en replanteamientos de los fines y modos de lo que no tardará en llamarse la administración pública (Celaya Nández y Sánchez Santiró, 2019; Godicheau y Grenet, 2021; López Díaz, 2021; Sánchez Santiró, 2023).

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Anne Dubet.

Agradecimientos

La primera versión de este artículo y las siguientes se beneficiaron de la atenta lectura crítica de María López Díaz, a la que quisiera agradecer esta generosidad. Asimismo, agradezco a los revisores anónimos sus sugerentes comentarios.

Declaración sobre el uso de la inteligencia artificial

La autora declara que no se ha empleado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Abbad, F., y Ozanam, D. (1992). *Les intendants espagnols du XVIIIe siècle*. Casa de Velázquez.

Álvarez Barrientos, J., Imízcoz Beunza, J. M., y Aranburuzabala, Y. (2012). Introducción. En J. A. de Armona y Murga, *Noticias privadas de casa útiles para mis hijos* (pp. 17-107). Trea / Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII / Universidad del País Vasco. https://doi.org/10.25267/cuad_ilus_romant.2013.i19.24

Amores Carredano, J. B. (2024). *Política, Hacienda y sociedad en Cuba: La intendencia de La Habana (1764-1800)*. Universidad del País Vasco.

Andrés-Gallego, J. (2003). *El motín de Esquilache, América y Europa*. Mapfre. https://doi.org/10.15581/007.14.23578

Barrio Gozalo, M. (1986). Squillace y su actividad política a través de la correspondencia de Tanucci (1759-1766). En R. Ajello y M. D'Addio (Eds.), *Bernardo Tanucci: Statista, letterato, giurista* (Vol. 1, pp. 313-343). Jovene.

Bermejo Cabrero, L. (1989). Los Cuadernos sobre gobierno y administración del Fiscal Carrasco. En L. Bermejo Cabrero, *Estudios de Historia del Derecho y de las Instituciones* (pp. 113-169). Universidad de Alcalá.

Castejón, P. (2020). *Réformer l'empire espagnol au XVIIIe siècle: Le système de gouvernement de José de Gálvez (1765-1787)*. Presses Universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.99672

Celaya Nández, Y., y Sánchez Santiró, E. (Eds.). (2019). *Hacienda e instituciones: Los erarios regio, eclesiástico y municipal en Nueva España. Coexistencia e interrelaciones*. Instituto Mora / Universidad Veracruzana.

Corona, C. E. (1980). Los «Cuerpos» de Zaragoza según el marqués de Avilés, intendente de Zaragoza en 1766: El problema de la jurisdicción de los intendentes. *Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita*, *37-38*, 99-116.

Coronas, S. M. (1993). Estudio preliminar. En P. Rodríguez de Campomanes, *Escritos regalistas. Tomo I: Tratado de la regalía de España*. Junta General del Principado de Asturias.

Covarrubias, J. de. (1790). *Código o recopilación de leyes de real Hacienda* (Biblioteca Nacional de España, ms. 7605-7615).

Dedieu, J.-P. (2011). *Après le roi: Essai sur l'effondrement de la monarchie espagnole*. Casa de Velázquez. https://doi.org/10.4000/books.cvz.15967

Delgado Barrado, J. M. (2007). *Aquiles y Teseos: Bosquejos del reformismo borbónico (1701-1759)*. Universidad de Granada / Universidad de Jaén.

Delgado Ribas, J. M. (2007). *Dinámicas imperiales (1650-1796): España, América y Europa en el cambio institucional del sistema colonial español*. Ediciones Bellaterra.

Diego-Fernández Sotelo, R. (2016). *El proyecto de José de Gálvez de 1774 en las ordenanzas de intendentes del Río de la Plata y Nueva España*. El Colegio de Michoacán.

Dou y de Bassols, R. L. de. (1800-1803). *Instituciones del derecho público general de España*. Don Benito García y Compañía.

Dubet, A. (2015). *La Hacienda Real de la Nueva Planta (1713-1726), entre fraude y buen gobierno: El caso Verdes Montenegro y las reformas de la Hacienda*. Fondo de Cultura Económica.

Dubet, A. (2018). El gobierno de las Haciendas reales hispánicas en el siglo XVIII: Dinámicas de los reformismos borbónicos. *Magallánica. Revista de Historia Moderna*, *5*(9), 39-79.

Dubet, A. (2021a). Americanizar las intendencias de Gálvez: La propuesta de Francisco Machado Fiesco. *Anuario de Estudios Americanos*, *78*(2), 501-538. https://doi.org/10.3989/aeamer.2021.2.04

Dubet, A. (2021b). La reforma de la administración fiscal de Lerena: Una visión ilustrada del gobierno de la Hacienda. *Studia Historica. Historia Moderna*, *43*(2), 307-335. https://doi.org/10.14201/shhmo2021432305337

Dubet, A. (2025a). Esquilache y el gobierno de la Hacienda real provincial: ¿Una nueva visión de la administración? *Espacio, Tiempo y Forma*, *38*, 93-120. https://doi.org/10.5944/etfiv.38.2025.45644

Dubet, A. (2025b). Las intendencias de Gálvez, Campomanes y Moñino (1765-1771): ¿Un proyecto compartido? *Prohistoria*, *44*, 1-39.

Dubet, A., y Sánchez Santiró, E. (Eds.). (2022). *Erarios regios: El gobierno de las Reales Haciendas de la Monarquía española y la Monarquía francesa en el siglo XVIII. Una visión comparada*. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora / El Colegio de Michoacán.

Dubet, A., y Sémery, G. (Eds.). (2025). *Francisco Leandro de Viana, Informe sobre el proyecto de intendencias en Nueva España*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Dubet, A., y Solbes Ferri, S. (2019). *El rey, el ministro y el tesorero: El gobierno de la Real Hacienda en el siglo XVIII español*. Marcial Pons.

Escobedo Romero, R. (2007). La expansión geográfica de la renta del tabaco. *Estudis. Revista de Historia Moderna*, *33*, 193-224.

Fernández Albaladejo, P. (1993). *Fragmentos de Monarquía*. Alianza Universidad.

Gallardo Fernández, F. (1805-1808). *Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de España, su gobierno y administración*. Imprenta Real.

García García, C. (1996). *La crisis de las haciendas locales: De la reforma administrative a la reforma fiscal (1743-1845)*. Junta de Castilla y León.

Garriga, C. (2008). Gobierno y justicia: El «gobierno de la justicia». *Cuadernos de Derecho Judicial*, *7-8*, 43-113.

Gay Escoda, J. M. (1983). Un «proyecto ... para restablecer el antiguo magistrado de Cataluña» al segle XVIII. *Recerques. Història, Economia i Cultura*, *13*, 145-158.

Godicheau, F., y Grenet, M. (Eds.). (2021). *Raison administrative et logiques d'empire (XVIe-XIXe siècle)*. Casa de Velázquez / École Française de Rome. https://doi.org/10.4000/books.efr.10413

Gómez Urdáñez, J. L. (2017). *El marqués de Ensenada: El secretario de todo*. Punto de Vista Editores.

González Enciso, A. (2015). La supresión de los arrendamientos de impuestos en la España del siglo XVIII. *Tiempos Modernos*, *8*(30). https://doi.org/10.4000/mcv.6781

Kuethe, A. J., y Andrien, K. J. (2018). *El mundo atlántico español durante el siglo XVIII: Guerra y reformas borbónicas, 1713-1796*. Universidad del Rosario. (Obra original publicada en 2014). https://doi.org/10.2307/j.ctvc5pfbv

Kuethe, A. J., y Blaisdell, L. (1991). French influence and the origins of the Bourbon colonial reorganization. *The Hispanic American Historical Review*, *71*(3), 579-607. https://doi.org/10.1215/00182168-71.3.579

López Díaz, M. (2019). Intendencia y justicia: Una visión comparada de las ordenanzas de 1718 y 1749. *Mediterranea. Ricerche Storiche*, *16*(47), 570-600. https://doi.org/10.19229/1828-230X/4772019

López Díaz, M. (2020). Intendencia, justicia y gobierno: La real cédula de 5 de marzo de 1760. ¿Nuevo triunfo del orden tradicional? *Obradoiro de Historia Moderna*, *29*, 79-108. https://doi.org/10.15304/ohm.29.6570

López Díaz, M. (Ed.). (2021). *Monarquías ibéricas, poderes y territorios: Instituciones, nobleza y dinámica política (siglo XVIII)*. Sílex.

Lorenzo Jiménez, J. V. (2012). La jurisdicción de Hacienda a finales del Antiguo Régimen. *Anuario de Historia del Derecho Español*, *82*, 683-716.

Luxán Meléndez, S. (2023). *De imperio a nación colonial: El sistema atlántico español del tabaco. El papel relevante de la isla de Cuba. Estudio institucional (1620-1833)*. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.

Mariluz Urquijo, J. M. (1995). La causa de Hacienda. En J. M. Mariluz Urquijo (Ed.), *Estudios sobre la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata* (pp. 83-111). Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.

Melón Jiménez, M. Á. (2015). Servir y servirse del Estado: Pedro López de Lerena y la persecución del contrabando en la España del siglo XVIII. *Tiempos Modernos*, *8*(30).

Navarro García, L. (1997). La crisis del reformismo borbónico bajo Carlos IV. *Temas Americanistas*, *13*, 1-22.

Ozanam, D. (2011). Leopoldo de Gregorio y Masnata. Marqués de Esquilache. En J. Olmedo Ramos, G. Anes y Q. Aldea Vaquero (Eds.), *Diccionario biográfico español* (Vol. 17). Real Academia de la Historia.

Recio Morales, Ó. (2025). Las biografías de Esquilache: Leopoldo de Gregorio (1699-1785), más allá del motín. En M. L. González Mezquita y G. Téllez Calvín (Eds.), *Italianos en la monarquía de España en el siglo XVIII: Movilidades, identidades, interacciones* (pp. 105-133). *Mo.Do. Rivista di Storia, Scienze Umane e Cultural Heritage*, *11-12*.

Ripia, J. de la, y Gallard, D. M. (1795). *Práctica de la administración y cobranza de las rentas reales y visita de los ministros que se ocupan en ellas*. Antonio Ulloa.

Rodríguez Villa, A. (1878). *Don Cenón de Somodevilla, marqués de La Ensenada: Ensayo biográfico formado con documentos en su mayor parte originales, inéditos y desconocidos*. M. Murillo.

Sánchez Santiró, E. (2023). *Gazofilacio regio y jurisdicción: El gobierno de la Real Hacienda*. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Strazzullo, F. (1997). *Il marchese de Squillace, Leopoldo de Gregorio, ministro di Carlo di Borbone*. Liguori Editore.

Tanucci, B. (1985). *Epistolario*. Edizioni di Storia e Letteratura.

Torres Sánchez, R. (2012). *La llave de todos los tesoros: La tesorería general de Carlos III*. Sílex.

Vallejo García-Hevia, J. M. (1997). *La monarquía y un ministro: Campomanes*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Vallejo García-Hevia, J. M. (1998a). La Asesoría General del Juzgado de la Renta de Correos (1755-1762): Campomanes, precursor de la moderna Administración del Servicio Postal. *Revista de Administración Pública*, *146*, 51-84.

Vallejo García-Hevia, J. M. (1998b). Los navíos de aviso y los correos marítimos a Indias (1492-1898). *Ius Fugit. Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos*, *7*, 197-268.

Zepeda Cortés, M. B. (2013). *Empire, reform and corruption: José de Gálvez and political culture in the Spanish world, 1765-1787* [Tesis doctoral inédita]. University of California, San Diego.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481135159

LA INTENDENCIA Y LOS REGIMIENTOS GALLEGOS ANTE LAS REFORMAS MUNICIPALES DE CARLOS III: UN ANÁLISIS DESDE LA ÓPTICA LOCAL

Intendancy and Galician Town Councils in the Face of Charles III's Municipal Reforms: An Analysis from a Local Perspective

Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ

Universidade da Coruña
eduardo.cebreiros@udc.es

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: El trabajo pone de manifiesto las relaciones entre determinados oficiales públicos que surgen en el siglo XVIII. El primero, el intendente, fruto de las novedades institucionales puestas en marcha por Felipe V con la finalidad de centralizar y uniformar la administración. Los segundos, diputados del común y síndico procurador personero, que surgen como consecuencia de las reformas que, en el ámbito municipal, impulsó Carlos III, ya en la segunda mitad del XVIII. Se trata de examinar los problemas que pudieron surgir entre ellos, las posibles alianzas tejidas entre estos nuevos oficiales o, por el contrario, su apoyo a viejas instituciones ya existentes como podían ser las audiencias o el capitán general. El análisis de la documentación municipal de dos ciudades gallegas de la relevancia de Santiago de Compostela y A Coruña, aunque fundamentalmente de esta segunda, servirá de guía para el estudio. Se trata, además, de dos municipios muy diferentes en cuanto a su estructura, pues mientras que el primero representa el ejemplo claro de territorio señorial, en manos del Arzobispo, el segundo supone una «isla de realengo» en el panorama

gallego, plagado de nobleza e iglesia al frente de los municipios. Del mismo modo, A Coruña era la ciudad donde se encontraban los delegados de la monarquía, particularmente, la Audiencia y el capitán general, a los que ahora se unía la figura del intendente.

Palabras clave: Intendente; diputados del común; procurador síndico personero; reformas municipales de Carlos III; Felipe V.

ABSTRACT: This paper examines the relationships between certain public officials who emerged in eighteenth-century Spain. The first of these, the intendant, was the result of the institutional changes introduced by Philip V in order to centralize and standardize the administration. The second group, the *diputados del común* and the *personero*, emerged as a consequence of the municipal reforms implemented by Charles III in the second half of the eighteenth century.

The paper analyses the conflicts that may have arisen between them, the possible alliances forged among these new officials, and the support they received from existing institutions such as the *audiencias* or the captaincy general. The study is based on the municipal records of two important Galician cities, Santiago de Compostela and A Coruña.

These two municipalities differed significantly in their institutional structure. Santiago was a clear example of a seigneurial jurisdiction under the authority of the archbishop, whereas A Coruña constituted an «island of royal jurisdiction» within a Galician landscape largely dominated by noble and ecclesiastical lordship at the municipal level. A Coruña was also the city where the monarchy's principal representatives were based, especially the *Audiencia* and the captain general, to whom the figure of the intendant was now added.

Keywords: Intendant; «diputados del común»; «procurador síndico personero»; municipal reforms of Carlos III; Felipe V.

1. INTRODUCCIÓN

Creo que siempre resulta de gran interés el estudio de las relaciones entre instituciones u oficiales que intervienen en campos de la administración pública y se interrelacionan. Particularmente, esto cobra mayor utilidad si se trata de examinar nuevas figuras. Así sucedió cuando, con la dinastía borbónica, iniciado el siglo XVIII, el intendente aparece en la administración española y comparte espacio en las tareas de gobierno con otros cargos en diferentes ámbitos: en el municipal,

caso de regidores o alcaldes mayores, por ejemplo, o en otras esferas más amplias, como audiencias o capitanías generales. Las novedades y cambios suelen generar problemas entre instituciones en las que se plasman aspectos muy interesantes sobre el modo de gobernar.

De ahí la elección del tema de estudio. Me ha parecido útil comprobar si se consolida el gobierno a través a de la vía reservada, dando preeminencia a las secretarías del despacho por encima de los consejos. En este sentido, los intendentes dependían de aquellas. Se plasmaría así una tendencia a destacar las competencias administrativas por encima de las judiciales en los órganos de gobierno, idea que algunos autores han puesto de manifiesto (Garriga Acosta, 2006; López, 2020, p. 103; Vallejo, 1996-1997, pp. 547-557).

No procede detenerse en este trabajo a explicar de forma minuciosa la intendencia ni las reformas municipales de Carlos III. Será suficiente con recordar que la llegada de los Borbones al trono de España trajo, como una de sus consecuencias, una reforma institucional que modificó diferentes ámbitos de la administración, con una finalidad unificadora y centralizadora. El modelo francés parece estar muy presente en la forma con la que Felipe V comienza a reinar, aunque se trata de una tesis objeto de revisión desde hace ya un tiempo (Dubet, 2007). Una de sus acciones consistió en colocar un oficial territorial, el intendente, con la competencia básica de cumplir y supervisar las órdenes que llegaban desde la capital, sin olvidar, obviamente, las tareas propias del puesto recogidas en las ordenanzas que regularon su actuación.

El nuevo cargo no estuvo exento de problemas de todo tipo con instituciones ya existentes en su territorio de acción. La Ordenanza de 1749, que regulaba la intendencia, no era clara a la hora de distribuir competencias y se generaron problemas en cuanto a determinados aspectos, entre ellos la administración de justicia. Entre 1756 y 1757 el intendente de Galicia José Avilés mantuvo un importante conflicto con la Audiencia como consecuencia de discrepancias en cuanto al entendimiento de las apelaciones. Para la alta instancia judicial resultó especialmente «doloroso» que el intendente solo las admitiese ante el Consejo si se trataba de determinados asuntos derivados de su actuación como intendente y no como corregidor de la ciudad, sin permitir entender de las mismas al citado tribunal gallego. Fue necesaria la aprobación de la Real Cédula de 5 de marzo de 1760[1], para contener las expectativas de la intendencia y frenar su actividad contenciosa, favoreciendo a las audiencias, en lo que podría denominarse un triunfo del orden tradicional de la jurisdicción ordinaria (López Díaz, 2020, pp. 85-101).

En la propia evolución de las competencias de los intendentes, la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios por Real Decreto e Instrucción de

1. Novísima Recopilación (Nov. R.), 7/11/24.

30 de julio de 1760 no vino más que a ampliarles su carga de trabajo. Como corregidores en su ciudad, deberían controlar todas las haciendas locales. De ahí que, años más tarde, la Real Cédula de 13 de noviembre de 1766 provocase la separación de funciones entre corregidores e intendentes: los primeros asumirían los ramos de justicia y policía y los segundos los relativos a hacienda y guerra (López Díaz, 2020, pp. 101-102).

Sobre las reformas municipales de Carlos III, únicamente quiero detenerme ahora en la aparición en los consistorios de diputados del común y procuradores síndicos personeros, que surgen con el famoso Auto Acordado de 5 de mayo de 1766, complementado por la Instrucción de 26 de junio que, sobre todo, aclaraba los aspectos controvertidos de las elecciones de los nuevos oficios. Si tomamos como punto de partida lo establecido en la normativa, los diputados del común surgirían para ayudar en el control de los abastos[2], especialmente después de los problemas que la crisis de granos había provocado por estas fechas y los tumultos que se desencadenaron. Todo ello, al margen de que los conocidos como motines de Esquilache han generado mucha controversia acerca de los verdaderos motivos de su aparición (Corona, 1969; Egido, 1979; García Monerris, 1991; Rodríguez Casado, 1962; Rodríguez Díaz, 1975; Ruiz, 1979; Tomás y Valiente, 1982; Vilar, 1982). Siguiendo al profesor Garriga, frente a la plebe, que actuaba de modo violento, la Corona se planteó un encuadramiento corporativo del pueblo mediante los nuevos empleos electivos (Garriga, 2018, p. 303).

De este campo inicial de los abastos, sucesivas reformas provocaron que los diputados del común se introdujesen poco a poco en el gobierno de los municipios, comenzando por los asuntos relacionados con propios y arbitrios[3].

Por su parte, el personero del común, o procurador síndico personero del público —como lo denomina el Auto Acordado- tendrá voz en el ayuntamiento para pedir y proponer todo lo que convenga a los vecinos. Este ámbito competencial tan amplio le permitió una participación muy activa, al menos desde el punto de vista teórico. Otra cosa será valorar su actuación en cada lugar, que dependerá mucho de los elegidos para el puesto y de sus intereses.

De este modo, el poder central, amparándose en las ideas ilustradas de favorecer los intereses del pueblo, de promover su participación política permitiéndole la elección de oficiales locales, adoptaba medidas tendentes a controlar o, al menos, disminuir el poder de la oligarquía que gobernaba a su antojo multitud de ayuntamientos.

2. «…para tratar y conferir en punto de abastos, examinar los pliegos ó propuestas que se hicieren, y establecer las demas reglas económicas tocantes á estos puntos, que pida el bien común» Nov. R., VII, XVIII, I, cap. 5.°

3. Así, una circular del Consejo de Castilla de 12 de diciembre de 1767 establecía que los diputados debían asistir y tener voto en la Junta de Propios y Arbitrios.

Se intentaba frenar, al mismo tiempo, el sempiterno problema del absentismo de los regidores. También se pretendía mejorar la economía con la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios, lo que provocaría un control de las haciendas locales (Guillamón, 1998, pp. 72-73). Sin embargo, las reformas parece que iban demasiado rápidas, a juzgar por algunos problemas surgidos, entre ellos el motín contra Esquilache, lo que llevó a ralentizarlas, frenando la vía gubernativa frente a la contenciosa. Ello favoreció a los poderes tradicionales, audiencias y consejos, especialmente (Fernández, 1992, p. 443; Granados, 1996, pp. 111-112).

El objeto de este trabajo será comprobar, para el caso gallego, cómo se comportaron los intendentes ante las reformas que, en el ámbito municipal, llevó a cabo Carlos III, plasmadas, fundamentalmente, en el ya mencionado Auto Acordado de 5 de mayo de 1766. Es decir, analizaremos las relaciones entre los nuevos diputados del común y personero y la intendencia, los problemas que, en su caso, se pudieron dar y las alianzas que unos y otros buscaron.

Para ello, examinaremos, fundamentalmente, las actas consistoriales de la época, en particular las de la ciudad de A Coruña, con algunas referencias, también, a las de Santiago de Compostela, aunque en menor medida. Se trata de dos de los núcleos urbanos más relevantes del territorio gallego que, además, presentan una estructura orgánica muy diferente. La primera, representa el modelo de localidad de realengo que acoge en su territorio, también, la sede de instituciones territoriales conectadas directamente con la Corona, caso del capitán general, la Audiencia o el propio intendente. La segunda configura, como es sabido, un ejemplo tipo de ciudad señorial, en manos del poderoso Arzobispo compostelano. Igualmente, se analizará en este trabajo la doctrina que ha escrito sobre la actividad y las relaciones entre los oficiales objeto de estudio en otras ciudades españolas, con el fin de encontrar puntos de conexión y poder realizar análisis comparativos.

2. LOS NUEVOS OFICIALES Y SU INTEGRACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS TRADICIONALES

En Galicia, las relaciones entre la intendencia y los nuevos oficiales creados por Carlos III aparecerán ya desde el inicio, desde la creación de estos. Así, será el intendente destinado en este territorio el encargado de comunicar al consistorio compostelano el Auto Acordado que daba origen a las reformas en la estructura del cuerpo municipal[4]. Al contar Santiago con más de 2 000 vecinos, se deberían nombrar cuatro diputados del común y un personero.

4. Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela (en adelante, AHUS), Fondo Ayuntamiento de Santiago de Compostela (en adelante F.M.), Consistorios enero julio 1766, C. 25-VI-1766, ff. 278r-278v.

Sin embargo, después, no parece existir una gran intervención del intendente en este tema, a pesar de las claras dilaciones que el regimiento de la ciudad llevará a cabo para retrasar todo lo posible la elección de los nuevos oficios (Cebreiros, 1999, pp. 204-206; López Díaz, 2006a, p. 223). Aunque las primeras decisiones del consistorio compostelano fueron rápidas, al establecer, el mismo día que conocieron el Auto, que las parroquias de la ciudad llevasen a cabo las actuaciones necesarias para el nombramiento de los oficiales que correspondiese, lo cierto es que tardaron en comenzar a ejercer su labor en el seno del ayuntamiento.

En otras ciudades, por el contrario, la intendencia se involucró mucho más en las elecciones de los nuevos oficios, incluso de modo apresurado. Sucede esto en Granada, donde, ante las dilaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento, el intendente obligó a elegir un personero del común, aunque el oficio de procurador general no se hallaba enajenado (Marina, 1990, pp. 141-145; Prados, 2016, pp. 194-196). En todo caso, conviene aclarar que se trataba de ciudades que acumulaban también el corregimiento, con lo que, en rigor, parece más que el oficial que tomaba estas decisiones lo hacía en virtud de este segundo oficio.

Lo mismo ocurrió en Soria, donde los diputados de los doce linajes pidieron la intervención del intendente corregidor ante los problemas de asiento que sufrían con las nuevas figuras municipales. Igualmente, llevó a cabo propuestas acerca de cómo celebrar las elecciones previstas y el protagonismo que podrían tener las cuadrillas ya existentes para la designación de jurados, dirigiendo y ordenando el proceso electoral (Andrés-Gallego, 1988, pp. 116-119). También en Guadalajara el intendente corregidor procede a convocar las elecciones (Díaz y Calderón, 2006, p. 243). En Valencia, igualmente, hubo rechazo hacia las nuevas figuras y se buscó un motivo para tener que abrir el proceso de elección. El hecho de que el sistema de abastos hubiese dependido del Superintendente, luego del intendente, y no del Cabildo, provocó que los regidores se opusiesen a cumplir el Auto, aunque no sirvió de nada y las elecciones acabaron realizándose (Giménez, 1992, p. 436).

Es cierto que también hubo ciudades que, sin necesidad de la intervención del intendente, nombraron a un personero aunque el oficio de procurador general tampoco estaba enajenado y se renovaba anualmente. Tal fue el caso de Albacete (Guillamón y Losa, 1996, p. 761). Probablemente, el control de los procesos electorales por parte de la oligarquía local llevó a esta medida.

El rechazo a las nuevas figuras fue general en el Señorío de Vizcaya, donde se aprecia una oposición inicial a implantar el Auto Acordado, salvo en Bilbao, aunque aquí se retrasó el cumplimiento de las órdenes durante un par de años. Existía temor entre los regidores a que los nuevos oficiales planteasen problemas, como así fue[5]

5. Los nuevos oficiales se opusieron al nombramiento de caballeros patricios, que solo representaban a los hidalgos bilbaínos. El Consejo los prohibirá, pues la elección popular

(Garriga, 2018, pp. 308-327). Incluso hubo pequeños municipios, caso de Ondárroa y Elorrio, que incumplieron directamente la normativa, eligiendo la hidalguía a los nuevos oficiales mediante los procedimientos establecidos por la tradición foral (Garriga, 2018, pp. 330-334).

Las elecciones de los nuevos oficiales fueron un gran foco de problemas. Primero, por la falta de normativa sobre cómo realizarlas y, después, tras la aprobación de la Instrucción de 26 de junio de 1766, que ordenaba todo esto, por el control que llevan a cabo los regidores sobre el proceso o por el desinterés general hacia el mismo que se aprecia en muchos lugares. Es el caso de Guadalajara, donde fue en aumento cuando el pueblo verificó que los elegidos resultaban cercanos a la oligarquía local que venía gobernando el municipio desde siglos atrás (Mejía, 1997, p. 142). Lo mismo sucedió en Sevilla, donde el paulatino descenso del número de electores parece deberse al desinterés generado por un proceso que no conseguía cambiar la general corruptela de la oligarquía local. Los vecinos no se sentían representados (Campese, 2005, p. 195). En otros lugares, caso de Albacete, se tradujo en desconfianza hacia los nuevos oficiales, que representaban los intereses de la oligarquía, lo que provocó también un paulatino desinterés por participar en el proceso, llegándose al extremo de no votar nadie en las elecciones llevadas a cabo en 1787 (Guillamón y Losa, 1996, p. 763; Cózar, 2005, pp. 386-389). En Ourense, el proceso electoral ya nació viciado, pues el corregidor había propuesto y conseguido que la división del cuerpo de electores no fuese la parroquia sino el gremio y la cofradía. En esta última, además, la división en dos grupos provocó conflictos a la hora de valorar qué vecinos habían obtenido más votos (López Díaz, 2006b, pp. 163-165).

El papel de garante de los cambios lo llevarán a cabo las audiencias y chancillerías. Aquí sí parece que existe unidad de actuación a lo largo del territorio peninsular. En Galicia, su Real Acuerdo se mostró tajante ante las dudas que planteaba la ciudad de Santiago sobre el procedimiento a seguir, indicándole que con la normativa existente y las aclaraciones posteriores del Consejo de Castilla se podían resolver todos los problemas que se estaban suscitando[6]. También se encargaría de apremiar al consistorio local para que tomase las medidas oportunas para que se llevasen a cabo las elecciones, sin más dilaciones[7]. Su labor tuitiva continuaría años después,

---

legitimaba tanto a diputados como a personero. En Vitoria, el regimiento se opuso a los nuevos cargos hasta en dos ocasiones, alegando que los oficios municipales no recaían en determinadas familias. En Guipúzcoa será su Diputación la que apadrine la resistencia a cumplir el Auto Acordado, asunto que llegará a la Corte. Sin embargo, el Consejo de Castilla, una vez más, ordenó seguir el procedimiento para elegir diputados.

6. AHUS, F.M., Consistorios agosto-diciembre 1766, C. 23-VIII-1766, f. 52v.
7. AHUS, F.M., Consistorios agosto-diciembre 1766, C. 9-X-1766, ff. 126-26v.

cuando solicitaría al Ayuntamiento la formación de unas Ordenanzas que regulasen los nuevos oficios, a lo que se opuso la institución local[8].

En realidad, no extraña la actividad de estas instituciones judiciales, pues el propio Auto Acordado establecía que se encargarían de dilucidar los problemas que surgiesen[9], fundamentalmente, por ser la competencia de abastos la más relevante de los diputados. La Audiencia de Galicia tuvo que actuar, también, en *Ourense*, ante las quejas recibidas por un comerciante de la ciudad, al que el corregidor negó el asiento de diputado del común, mandando repetir las elecciones. El alto tribunal dictó sentencia a favor del primero y condenó al representante regio en el consistorio *ourensano* (López Díaz, 2006b, pp. 166-167). Sin embargo, no fueron pocas las veces en las que estas instituciones actuaron con bastante arbitrariedad a la hora de aportar soluciones, caso de los problemas suscitados en Valencia, ya a principios del siglo XIX (Hernando, 2001-2002, p. 418).

En todo caso, sí se puede generalizar, señalando que los reales acuerdos se encargarán de resolver las irregularidades que se provocan en las elecciones y los conflictos entre los regidores y los nuevos oficiales, centrados, fundamentalmente, en el ámbito competencial de estos últimos (Pascual, 2015, pp. 252-254). La tendencia fue a que se redujesen los problemas conforme iban pasando los años, como se constata en las actuaciones llevadas a cabo por la Chancillería de Granada, que se minoraron sobre estos temas a partir de 1771(Sánchez, 2018, p. 789).

No existió una posición uniforme por parte de los nuevos oficios en su actuación de oposición a los viejos oficiales del consistorio. En unos lugares, el enfrentamiento fue desde el inicio, muy probablemente porque los regidores no fueron capaces de controlar las elecciones y, en otros, allí donde lo lograron, se difirió el control y quejas a las actuaciones de los tradicionales oficios municipales al momento en el que estos ya no pudieron hacerlo. Como ejemplo del primer supuesto tenemos Guadalajara, donde los personeros mantuvieron una etapa beligerante solo los

8. Se alegaba que no era necesaria tal normativa, al estar reguladas con claridad las competencias que poseían los nuevos oficiales, vid. AHUS, F.M., Consistorios septiembre-diciembre 1771, C. 20-XII-1771, ff. 213-13v.

9. Nov. R. VII, XVIII, I, cap. 8: «Si en las providencias de abastos hubiere discordia entre Regidores y Diputados del Comun, acudan a las Audiencias y Chancillerías del territorio a proponer lo que convenga al Público; decidiéndose estas materias de abastos, y elecciones de Diputados y Síndico del Comun, en el Acuerdo de dichos Tribunales superiores gubernativamente, excusando costas y dilaciones a los interesados, aunque sea necesario celebrar Acuerdos extraordinarios para decidirlas con regularidad; consultando el mismo Acuerdo al Consejo las dudas, cuya decisión pueda producir regla general»; Nov. R., VII, XVIII, II, cap. 15: «Las Chancillerías y Audiencias Reales se informarán, de si en algun pueblo estuviere por cumplir el auto acordado de 5 de Mayo de este año (ley anterior) por medio de los Fiscales de S.M. residentes en ellas; á quienes se encargue muy particularmente esten á la vista para tomar las noticias convenientes, y pedir en su execucion lo que corresponda al mas exacto cumplimiento».

cuatro primeros años desde su creación, entre 1766 y 1770 (Mejía, 1997, p. 153). Como modelo del segundo caso podemos señalar Burgos, ciudad en la que los primeros elegidos eran individuos muy humildes, controlados con facilidad por los regidores[10], pero donde a partir de 1770 ya se encuentran las primeras quejas (Pérez, 1985, pp. 470-471). Lo mismo pasó en ciudades gallegas como Ourense o Santiago de Compostela, donde se constata una mayor conflictividad a partir de la década de los años 80 (Cebreiros, 1999, pp. 223-228; López Díaz, 2006b, pp. 171-176). El aumento de competencias de los nuevos oficiales, el absentismo y desidia cada vez mayor por parte de los regidores y la entrada en esos puestos de nueva creación de individuos de cierto nivel económico pueden servir de causa explicativa (López Díaz, 2006b, pp. 171-172).

En aquellas poblaciones donde el choque alcanzó especial gravedad, por ejemplo, Palma de Mallorca o la isla de La Palma, los diputados y personero llegaron a solicitar la creación de regidurías bienales[11] (Rodríguez Rodríguez, 2020, pp. 87-88) o trienales (Pascual, 2015, p. 260) que fuesen sustituyendo las que eran vitalicias. La propuesta seguía la línea de medidas que ya había adoptado la Corona, principalmente para reducir el absentismo de regidores, mediante la creación de oficios de este tipo con carácter temporal, como sucedió en A Coruña o Palencia (Granados, 1996, pp. 108-110; Guillamón, 1990, pp. 307-316). Parece que allí donde la nobleza ocupó pocas regidurías, las relaciones entre viejos y nuevos oficios fueron cordiales, como sucedió en Cádiz (Bustos, 1981, p. 97).

Teniendo en cuenta que, tras una primera fase inicial en la que los diputados se circunscribieron solo al campo de abastos, estos fueron aumentando sus competencias, especialmente en temas de arbitrios, resulta bastante extraño que no tuviesen más contacto con los intendentes, tan preocupados por estos temas.

Desde 1780, los diputados pretenderán aumentar sus competencias, mostrándose especialmente beligerantes en este asunto. De ahí que las audiencias, una vez más, debieran pronunciarse al respecto[12]. En Andalucía, la Chancillería recibió muchas quejas de los diputados del común porque los respectivos regimientos no les dejaban ejercer sus funciones (Sánchez, 2018, p. 794).

10. Así lo afirmaba el Arzobispo de Burgos cuando comentaba el funcionamiento del gobierno de la ciudad.

11. Fue el caso de la isla de La Palma, donde el Consejo de Castilla dio la razón a los diputados y ordenó deponer a los regidores perpetuos, siendo sustituidos por cuatro regidores bienales elegidos por los electores de las parroquias.

12. El Real Acuerdo estableció que los alcaldes ordinarios de Santiago de Compostela no debían de convocar ningún Ayuntamiento sin llamamiento a los diputados del común, vid. AHUS, F.M., Consistorios 2.º semestre 1788, C. 3-X-1788, ff. 166v-67.

3. LA SITUACIÓN DE DIPUTADOS Y PERSONERO EN EL CONSISTORIO CORUÑÉS

3.1. *Los primeros años de los nuevos oficiales: su relación con la intendencia y los conflictos con el regimiento de la ciudad*

Como ya había sucedido en la vecina Santiago, también en la ciudad herculina, el intendente es el que comunica el Auto Acordado al ayuntamiento, con el fin de que proceda a dar cumplimiento a sus preceptos, por lo que resulta ser la pieza esencial para introducir a los nuevos oficiales en la organización municipal[13].

Al igual que en Santiago de Compostela, la primera actitud del ayuntamiento será retrasar los nombramientos aduciendo que hacía poco, en 1763, se habían designado siete regidores bianuales y dos procuradores generales con el fin de mejorar la gestión del gobierno local y que ya se ocupaban de los mismos temas para los que se creaban los oficios de diputados del común y personero. A finales de junio, ante las protestas planteadas por escrito por un vecino, será el Consejo de Castilla el que traslade al Real Acuerdo de la Audiencia las órdenes para que se procediese sin más dilaciones a elegir a los nuevos oficiales[14]. Estas circunstancias provocaron que la toma de posesión de los diputados y personero creados por el Auto Acordado no se produjese hasta agosto[15].

Del mismo modo que hemos visto con antelación en un contexto más general, el papel de la Audiencia, en este caso la de Galicia, es capital en la ciudad herculina a la hora de la puesta en marcha de los nuevos oficiales. Tanto el conocimiento de si se habían celebrado las elecciones en la provincia, como los ejemplares sobre la instrucción de elecciones los envió el Real Acuerdo[16]. Lo mismo sucede con los problemas suscitados ante la negativa de los elegidos para tomar posesión, alegando que incurren en alguna causa de exclusión. Son asuntos que se trasladan al Real

13. Lo hace el 23 de mayo, vid. Archivo Municipal de A Coruña (en adelante, AMC), Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 56-2, Consistorio 24-5-1766, ff. 26v-27r.

14. Había sido Juan de Peña Redonda quien se había dirigido al Consejo con la queja. Ante el requerimiento de la Audiencia, la ciudad acordó poner en marcha las elecciones, vid. AMC, Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 56-2, Consistorio 28-6-1766, ff. 30v-31r.

15. Como diputados, fueron elegidos Francisco Javier Yáñez de Abaunza y el licenciado Fernando Codesido. El regidor decano les dio la posesión, vid. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 56-2, Consistorio 4-8-1766, ff. 37v-38r. Las elecciones se efectuaban, siguiendo las disposiciones al efecto, entre los vecinos de las cuatro parroquias de la ciudad: Santiago, Santa María, San Nicolás y San Jorge.

16. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 56-2, Consistorio 16/10/1766, f. 50r y f. 94r, respectivamente.

Acuerdo y allí se deciden, tal y como se preveía en las disposiciones recogidas en el Auto Acordado, ya señaladas[17].

Estas circunstancias constituyen el motivo por el que no se aprecia en la documentación manejada ninguna actuación del intendente a la hora de resolver las problemáticas suscitadas.

Sí podemos encontrar alguna intervención del intendente con los diputados y personero del común, particularmente cuando se trata de temas que afectan a la hacienda y/o al ejército. En 1767, los problemas con el abasto de carne llegaron a implicar a los jefes militares, por su particular fuero, y ello determinó correspondencia cruzada entre varios oficiales. El capitán general trasladó el tema al intendente, quien encargó al ayuntamiento que se reuniese, con asistencia de diputados y personero, para estudiar las respuestas dadas por los militares al informe sobre abastos preparado por la ciudad[18]. En este punto, los diputados del común chocaron con la oposición del consistorio a sus demandas y el Real Acuerdo no pareció secundar su pretensión de que se aportasen fondos de propios y arbitrios para reducir la carestía del producto, remitiéndoles al Consejo para que hiciesen llegar sus reclamaciones. Tampoco se aprecia movimiento alguno del intendente sobre esta cuestión.

Sin embargo, será diferente la postura mostrada por el oficial borbónico cuando se tratan aspectos que tienen que ver con las finanzas. Ese mismo año de 1767, enviará a la ciudad la orden para que personeros y diputados no se entrometiesen en el manejo de rentas reales y se frenen ciertos abusos, sobre todo de personeros. Parece que, pese a que la normativa irá ampliando con el tiempo las competencias de los nuevos oficiales, el intendente no estaba dispuesto a que se iniciasen actuaciones en el ámbito hacendístico que no contasen con su aprobación o consentimiento, si bien es cierto que, en este caso, se trataba de una medida que partía de una orden llegada del poder central. Puede que los nuevos oficiales, que se encontraron con todo un conjunto de resoluciones favorables a sus intereses frente a los tradicionales encargados del gobierno local, tuviesen una tendencia a extralimitarse en sus funciones, amparados por el apoyo desde la corte. En todo caso, quedaba claro que el conocimiento de los asuntos de rentas reales no les estaba permitido. Además, por

17. En 1768, se aceptaron las excusas de Bernardino de Lago, por ser pariente de un capitular, pero no las de José Ramos Bolaño, tesorero general del ejército, vid. AMC, Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 3 636: 1768-1820: Expedientes de elecciones de diputados de abastos y procuradores síndicos del común, año de 1768, 14/1/1768 y 23/1/1768, s/f.

18. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 57, Consistorio 9-2-1767, f. 22r. Se había llevado a cabo una Junta con presencia del capitán general, intendente, regente de la Audiencia, alcalde mayor y otros oficiales para estudiar los problemas del abasto de carnes. El ayuntamiento alegaba la jurisdicción privativa del Real Acuerdo para estos asuntos, vid. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 57, Consistorio 31-1-1767, ff. 19v-20r.

lo que se refiere a la competencia jurisdiccional en estos temas, el intendente dejará patente que debía acudirse al foro especial de tribunales o juzgados de hacienda[19].

En 1768 encontramos una pequeña disputa entre regidores y diputados del común, pues estos no veían con buenos ojos la construcción de las nuevas casas consistoriales ante la falta de fondos del ayuntamiento. Sin embargo, se trataba de una actividad ya aprobada por el Consejo, por lo que no se paralizará[20]. Ese mismo año, el personero del común pretenderá que la causa que se seguía ante la intendencia por un problema con el abasto del vino se trasladase a los tribunales de la Audiencia, alegando que era un problema vinculado a propios y arbitrios (Granados, 1996, p. 114).

La escasez de subsistencias de 1769 desencadenará también algún problema entre regidores y diputados y personero sobre la existencia de sobrantes de granos[21]. En todo momento, será el Real Acuerdo el que dirija las actuaciones y señale lo que proceda, fundamentalmente encaminado a la averiguación de excedentes.

Ese mismo año se generará un fuerte enfrentamiento entre el personero José de Vila, abogado, y el consistorio. La disputa comenzó ya en la propia designación del nuevo oficial, pues este puso de relieve los obstáculos que el ayuntamiento había indicado para evitar tal nombramiento, por la vía de justificar la existencia de varios procuradores generales que cumplían sus funciones. De hecho, el escrito presentado por Vila nos aporta gran información acerca del oficio de procurador general y nos permite comprobar, de ser ciertas las afirmaciones del personero, que este puesto había sido acaparado ilegalmente por el municipio pues, en su origen, se había creado por el rey *ad personam*[22].

19. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 57, Consistorio 11-2-1767, f. 23r.

20. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 58, Consistorio 18-2-1768, ff. 13v-19v.

21. Particularmente, el personero criticaba las escasas o nulas medidas adoptadas por el ayuntamiento para conseguir buen aprovisionamiento de granos, lo que negaba la ciudad, vid. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 59, Consistorio 18-4-1769, ff. 38r-40v.

22. Así, Vila señala que Carlos II, en 1674, había hecho merced a D. Pedro Conde y Marzoa del título de Procurador General de la ciudad, con la prohibición expresa de que pudiese nombrarse otro. En 1713 el oficio se subastó y se adjudicó a Antonio Sanjurjo Montenegro, quien lo ejerció hasta 1738. Desde ese año nombró a un teniente, José Bueno del Corral, pero la ciudad lo convirtió en titular, frustrando las legítimas expectativas de los herederos de Sanjurjo. Además, continuó nombrando ilegalmente a otros, caso de Manuel Fernández Blanco, que desempeñó el oficio hasta los cambios de 1763, que provocaron la entrada en el regimiento de siete regidores bienales y un procurador general electivo, con el fin de resolver el absentismo de oficiales al ayuntamiento. Será este electivo el que se encontrará en los consistorios de 1765 y 1766. Al año siguiente, el municipio designó a Andrés de Ponte, con el fin de eludir la designación del personero del común, aunque el Real Acuerdo derogó tal nombramiento por Real Cédula de 15 de noviembre de 1767. Igualmente, Vila puso de manifiesto en su escrito las incompatibilidades en las que incurría Andrés de Ponte para ejercer el oficio, pues era contador de propios y arbitrios y estaba casado con la cuñada del escribano más antiguo del ayuntamiento.

Además, la beligerancia del nuevo personero continuaría nada más comenzar su mandato, al escribir al Real Acuerdo para quejarse de aspectos de gran relevancia. Quizás el más grave fuese la acusación de que no se le convocaba a todos los ayuntamientos y que se le denegaba la vista de los papeles que pedía. Probablemente debido a su condición de jurista, también se quejaba de la inexistencia de fuentes legales en el consistorio, fundamentalmente la Nueva Recopilación, cuando era preceptivo contar con ellas. Pese a que sus reivindicaciones fueron rebatidas por el regimiento[23], lo cierto es que la decisión del Real Acuerdo constituyó un gran triunfo para el personero del común, pues se le dio la razón en todo[24]. Quedaba claro, por los escritos de ambas partes, que se trataba de una fuerte pugna derivada de una oposición manifiesta de José de Vila al orden tradicional y al funcionamiento del gobierno municipal. El consistorio local no se cansaría de manifestar el mal hacer del abogado, ahora personero, pese a acatar la decisión de la Audiencia, como así se lo trasladó a esta:

> Obedezio esta Ciudad el decreto de V.e. ziegamente mas no deja de quedar con el dolor de que aia sido creido como evangelista un hombre que no mereze el mejor concepto en el pueblo y se alla destituido de toda política sin que pueda servir le de avono la elección de personero por haber sido premeditada y echa por maior numero de bocales de los litigantes y comerciantes a quienes esta defendiendo en la zitada causa…[25].

No acabarán ahí los conflictos. La creación del hospicio volvería a ser tema de disputa entre regimiento y personero del común en verano de ese año. José de Vila se quejará de las prisas y de la falta de voluntad del ayuntamiento para facilitarle

---

Hasta aquí los antecedentes y la situación de conflicto que se encontró el personero Vila, vid. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 59, Consistorios de 1769, ff. 426r-427r.

23. En su defensa, la ciudad alegaba los intereses profesionales, como abogado, que movían al personero y no el beneficio del común, como hacía pensar en sus escritos. Particularmente, los regidores señalaban que José de Vila había solicitado la anulación del arrendamiento de derechos del peso real, apoyando a un específico grupo de mercaderes, y que por ese motivo no se le habían entregado determinados documentos, al ser juez y parte y tener intereses en esa cuestión. Además, se negaba la falta de convocatoria del oficial a las sesiones consistoriales y se justificaba la ausencia de la normativa alegándose que se cosía a los acuerdos. Por lo que se refería a la inexistencia de ejemplares de fuentes jurídicas básicas en ese momento, caso de la Nueva Recopilación, esta situación se explicaba debido a la escasez de fondos y a contar la ciudad con abogados a los que acudir para resolver los temas legales, teniendo en cuenta, además, que la gran mayoría de regidores eran de capa y espada y, por lo tanto, no poseían preparación jurídica suficiente, vid. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 59, Consistorios de 1769, ff. 431r-432v.

24. Por Real Auto fechado el 20 de enero de 1769, vid. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 59, Consistorios de 1769, ff. 429r-430r.

25. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 59, Consistorios de 1769, f. 432v.

documentación, especialmente económica. Llega a pedir al Consejo de Castilla que nombre un ministro de la Audiencia para que presida los ayuntamientos y juntas de propios y arbitrios, por no estar arreglados los papeles y por la dejadez de los regidores[26]. La respuesta de estos no se hizo esperar y tres días después acordarán presentar una representación al Consejo, acompañando los testimonios necesarios. Consideraban que el alcalde mayor debería separar a un miembro tan insociable, que insultaba a la ciudad[27].

3.2. *La situación de los nuevos oficiales tras la separación de intendencia y corregimiento*

En aquellos lugares donde intendencia y corregimiento se acumulaban en la misma persona, por ser las ciudades en las que se había establecido el nuevo oficial borbónico, resultó imposible atender debidamente los dos puestos debido a la enorme carga de trabajo. Es algo que se puede constatar de forma palpable en A Coruña, donde el intendente presidió muy pocas sesiones del consistorio, algo que le correspondía como corregidor de la ciudad.

De ahí la aprobación de la Real Cédula de 13 de noviembre de 1766 que dividía las competencias de intendente y corregidor, como ya señalaba al inicio de este trabajo. Sin embargo, en A Coruña, no se separarán ambos oficios hasta 1775[28], cuando fallece el intendente Julián Robiou, Marqués de Piedrabuena, que desempeñaba su labor desde el verano de 1763 (Granados, 1996, pp. 117-118).

Esta circunstancia nos permitirá observar las relaciones entre la intendencia y los diputados del común y personero desde una perspectiva diferente, puesto que el primero se presentará más lejano, al no formar parte del ayuntamiento de la ciudad. Además, cambia el ámbito competencial, más limitado ahora, donde cobra protagonismo el ramo de hacienda, punto de confluencia con los diputados del común una vez que fueron expandiendo su campo de actuación, limitado inicialmente a los asuntos de abastos.

26. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 59, Consistorio 13-6-1769, ff. 69r-71r.
27. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 59, Consistorio 16-6-1769, ff. 73r-73v.
28. En septiembre de 1775 se comunica en el consistorio la noticia del fallecimiento del intendente y se acuerda manifestar al rey que quedaba dividido este oficio y el corregimiento de la ciudad, pidiendo al monarca que este último fuese de letras, dando traslado de todo ello al agente en Madrid, vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 64, Consistorio 30-9-1775, f. 120v.

Comienza así un periodo de interinidad en los dos oficios. De la intendencia se ocupará Jorge Astraudi, que era comisario ordenador[29], mientras que el corregimiento será atendido por el alcalde mayor[30].

Del análisis de la documentación de la ciudad herculina referente a esta etapa se desprende una nula relación entre intendencia y diputados y personero. El primero se centrará en remitir información focalizada en temas hacendísticos (importe del impuesto de utensilios, autorizaciones del Consejo de Castilla para que la ciudad pueda asumir determinados gastos, petición de informes sobre descubiertos[31], etc.), mientras que los segundos ocuparan su tiempo en asuntos de abastos y policía urbana. Existirán algunos conflictos en los que estos últimos se verán involucrados, pero nunca con el intendente.

El Real Acuerdo continuará resolviendo todos los temas derivados de los conflictos suscitados con las elecciones de diputados y personero del común[32], aunque en 1781 tuvo que recordar por un auto que los recursos tanto de regidores bienales, procurador general electivo y diputados de abastos y personero del común pidiendo la exoneración del cargo, debían ir directamente a ese tribunal y no a ninguna otra jurisdicción[33].

Debemos tener en cuenta que, a la altura de esta división de intendencia y corregimiento, la ciudad herculina contaba no solo con los oficiales electivos instaurados a nivel general por el Auto de 1766 ya reseñado, sino que desde un poco antes, un real despacho del Consejo de Castilla de 18 de noviembre de 1763 había creado la figura de los regidores bienales, en número de siete, y dos procuradores de provincia, con el objeto, nunca conseguido, de reducir el absentismo de los oficiales municipales.

29. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 64, Consistorio 5-10-1775, f. 122v.

30. En julio de 1776 se examinó en el consistorio una carta del agente de la ciudad en la corte, Francisco Javier del Busto, indicando que, tras la representación de la ciudad hecha al rey, se había acordado que la Real Cámara propusiese letrados de mérito para el corregimiento, al que se agregaría la vara de alcalde mayor, quedando esta extinguida. La ciudad no pudo más que darle las gracias por sus gestiones, vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 64-2, Consistorio 6-7-1776, f. 92r.

31. Caso de la extraordinaria contribución correspondiente a 1782, en la que según el Consejo de Castilla las cuentas presentaban un descubierto contra la ciudad de 89 304 reales. El escrito justificativo que preparó la ciudad explicaba que el caudal de propios y arbitrios no había producido lo suficiente, vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 70, Consistorio 24-4-1783, ff. 51r-v.

32. En las elecciones para 1776 dio por bueno el proceso contra el parecer del personero saliente, que parecía no moverse por el interés común, vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 64-2, Consistorio 17-1-1776, ff. 11r-13r.

33. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 68-2, Libro de Consistorios de 1781, f 199r.

Muchas veces, serán estos los que se quejen de determinadas actuaciones dentro o fuera del ayuntamiento.

El primer problema práctico que se deriva de la división de competencias entre intendente y corregidor apareció pronto. En febrero de 1776, el procurador general de provincia —había quedado reducido su número a uno desde 1768 por la existencia ya de otro de carácter perpetuo- se quejó de los abusos llevados a cabo por el intendente interino a la hora de repartir el aprovisionamiento de carros con madera, pues parece que había tomado medidas que correspondían a las facultades de gobierno de la ciudad[34].

Sin embargo, como ya he indicado, la mayoría de escritos del intendente lo fueron para trasladar órdenes, pedir datos o informaciones varias, sin que se refleje una conducta que pudiese dar pie a conflictos o quejas. En esta etapa de fuerte control de las cuentas municipales, proliferaron cartas en las que solicitaba la opinión del consistorio ante cualquier cambio que pudiese afectar a las depauperadas arcas locales. En ocasiones, esta documentación recoge la preocupación de algunos regidores por no aumentar los gastos de la ciudad, como en el caso del salario del tesorero[35].

La extensión competencial de diputados del común y personero, una tónica general que se puede apreciar en la normativa con el paso de los años, provocó también algún problema en el consistorio local, aunque en 1776 se trató de un conflicto entre el regimiento y diputados y personero. El desacuerdo surgió a la hora del nombramiento del médico de la ciudad. Frente a la pretensión de los diputados del común de votar para dicha elección, la mayoría de los regidores se opuso, al no tratarse de un tema ni de abastos ni de propios y arbitrios. No era ese el sentir de los nuevos oficiales, pues, al igual que una pequeña parte de regidores, entendían que sí debían participar al estar en juego fondos municipales con los que se pagaba al médico. El conflicto llegó al Real Acuerdo, que pidió informe al respecto, sin que contemos con la resolución definitiva de este asunto en las actas

34. «…se prevenga al motivado caballero Intendente interino no se mezcle en lo subzesibo con lo que es peculiar y pribatibo de las ciudades y del gobierno político y económico de ellas respecto en nada se obpone a las de la Intendencia», vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 64-2, Consistorio 23-2-1776, f. 28r.

35. Ante la opinión mayoritaria de aumentar el sueldo del tesorero a un fijo de 700 ducados anuales, si lo aprobaba el Consejo de Castilla, Francisco Somoza de Monsoriu ponía de relieve cómo nunca había llegado a recibir 400, pareciéndole excesivo el incremento propuesto teniendo en cuenta que los caudales públicos debían mirarse como sagrados, repartiéndose y distribuyéndose con la más prudente economía. Tres regidores más apoyan su pretensión, afirmando que la ciudad no se encontraba en posición de secundar ideas que fuesen origen de grandes dispendios, antes bien todo lo contrario, pues la ciudad no contaba con plaza pública, fuentes ni conductos generales. Terminan indicando que eran tutores de fondos públicos, que debían emplearse bien para el beneficio del pueblo. Toda una declaración de intenciones, vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 71-2, Consistorio 11-2-1785, ff. 21v-24r.

capitulares[36]. Al año siguiente, tampoco se permitirá a los diputados del común participar en la sesión en la que se discutía sobre los problemas en la sala de comedias, aunque, finalmente, la Audiencia revocará esta decisión[37]. Las controversias sobre su derecho a voto fueron bastante frecuentes. En 1785 se debatió sobre su participación en la elección de los individuos que integrarían el Consulado que se había aprobado para la ciudad. Finalmente, prosperó la idea de que deberían de hacerlo, al ser esta institución fundamental para el comercio, donde una parte importante la conformaban los abastos públicos[38].

Hay que tener en cuenta que la personalidad de los diputados y personero elegidos cada año resultó fundamental a la hora de plantear quejas y cumplir sus funciones de defensa del pueblo. Cuando no se da esta circunstancia, la protección debe quedar en manos de otros personajes con el carisma e interés suficientes. Así, en 1778, será el capitán general Félix Oneille quien se queje al Real Acuerdo de la mala dirección que se llevaba en los abastos de la ciudad, particularmente debido a la nula calidad de las harinas extranjeras y del vino, la actividad de los revendedores y la falta de aranceles con los precios[39]. Evidentemente, todos estos temas debían haber sido manifestados por los nuevos oficiales creados por Carlos III, pues se trataba de competencias nucleares de los mismos, particularmente de los diputados. Más habituales fueron las disputas competenciales entre la ciudad y la Audiencia a la hora del orden público, como sucedió en los carnavales de 1785, donde el ayuntamiento solicitó al alto tribunal se abstuviese de publicar bandos que competían al gobierno político[40].

36. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 64-2, Consistorio 14-9-1776, ff. 108v-111v y 20-9-1776, f. 114r.

37. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 66, Consistorio 24-3-1778, f. 38v y 26-7-1778, f. 114v.

38. En esta ocasión, el conflicto parecía provocado más por el interés personal de un miembro del consistorio, que por razones objetivas de ámbito competencial. Se produjo por la oposición de un regidor, Manuel Carrillo, quien pretendía la plaza de asesor del Consulado y era consciente de que los votos de los diputados no le favorecerían frente al otro candidato, su compañero de ayuntamiento, Francisco Somoza de Monsoriu. No se equivocó, pues tras la votación de todos los puestos (prior, primer y segundo cónsul, consiliarios, asesor, contador, tesorero, guarda almacén, agente del consulado en la corte y porteros) las actas consistoriales reflejaron su segundo puesto para el oficio de asesor, vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 71-2, Consistorio 27-8-1785, ff. 66r-70r.

39. Así se aprecia en la carta remitida por el capitán general al consistorio, fechada el 23 de junio de 1778, vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 66, ff. 403r-404v.

40. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 71-2, Consistorio 27-1-85: ff. 13v-14r: «En este ayuntamiento habiéndose tratado sobre el asunto del bando publicado por el Gobernador y alcaldes mayores de la Sala del Crimen en el día de ayer veinte y seis relativo a la prohibición de todo motivo de inquietud en el carnaval próximo y reconociéndose la ninguna jurisdicción que tiene la sala para la publicación de iguales bandos como peculiar del magistrado político acordó

Cuando regimiento e intendente no estuvieron de acuerdo en algo, no parece que los nuevos oficiales creados se pusiesen de parte del oficial borbónico, sino que apoyaron la decisión mayoritaria de sus compañeros de consistorio[41]. Eso sí, algún caso hubo de «victoria» de diputados y personero frente al tradicional cuerpo de regidores locales. Quizás uno de los más relevantes en esta época fue el relacionado con la gestión de los impuestos sobre aguardientes y licores. En 1782, el Consejo de Castilla había aprobado la administración directa de este ramo por la ciudad pero, ante la queja de los nuevos oficiales creados para la defensa de los vecinos, la institución central acabó pidiéndoles que elaborasen un presupuesto de lo que podría obtenerse del arbitrio, incluyendo también el vino, con el fin de que se sacase a subasta al mejor postor por parte de la junta de propios y arbitrios coruñesa[42].

Pese a que los nuevos oficiales se fueron integrando cada vez más en el cuerpo municipal, se pueden constatar recelos por parte de integrantes de la vieja oligarquía. Parece que, impulsado por alguno de ellos, en 1782, el portero de la ciudad se negó a entregar al personero la llave de la casa de comedias para que pudiese ser inspeccionada. Sin embargo, el consistorio apoyó al nuevo oficial, pues aprobó que se le dejase inspeccionar la casa y se determinó enviar al mencionado portero a la cárcel durante dos meses por el delito cometido[43]. Se trató de un caso de falta de reconocimiento a las nuevas figuras que se dio también en otros lugares, como

---

pasar el correspondiente oficio al Excmo. Sr. Capitán General Presidente de la Real Audiencia para que le haga entender se abstenga en lo futuro de la publicación de semejantes bandos por no corresponderle y que siempre que contemple precisa la práctica de alguna providencia como necesaria para la seguridad pública la comunique a la ciudad por oficio que esta la publicará por medio de bando a sus vecinos para su cumplimiento y observancia».

41. Así sucedió en 1781, cuando el intendente pedía a la ciudad el nombramiento de un responsable del cobro del arbitrio del aguardiente y esta le contestaba que no era algo que entrase dentro de sus competencias. El Consejo de Castilla resolvió la disputa encargando que ambas instituciones se pusiesen de acuerdo, partiendo de la elección por parte del ayuntamiento de la persona más apta para ello, vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 68-2, Consistorio 21-2-1781, ff. 37r-38r y 8-3-1781, ff. 40r-41v.

42. En la sesión en la que se aprobaron las reglas sobre cómo llevar a cabo la administración directa por la ciudad, que había sido aprobada por el Consejo, los diputados del común, a quienes se adhirió el personero, manifestaron sus dudas acerca de los cálculos efectuados y se declararon contrarios a la administración, pues se había perdido mucho dinero en otros casos semejantes, poniendo como ejemplo la gestión mediante este sistema del arbitrio de dos maravedís en azumbre de vino. El procurador general electivo, Agustín Bernardo de Ron, siendo partidario de la administración, más ventajosa que el arrendamiento, consideraba que había que buscar un método más sencillo para que esta fuese viable, reduciendo el plan previsto de oficiales implicados. Estimaba que solo eran necesarios tres individuos: un factor, un fiel y un manferidor, vid. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 69, Consistorio 27-2-1782, ff. 25r-31r y 37r-37v y Consistorio 23-6-1782, ff. 122r-123r.

43. AMC. Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 69, Consistorio 11-4-1782, ff. 57r-v.

en León, donde el personero se quejó del tratamiento que recibía por parte de los regidores y llegó a dimitir del puesto (Gómez, 2005, p. 113).

Un hecho significativo, que puede servir para defender el poco espíritu de reivindicación manifestado por los diputados del común coruñeses, viene marcado por el número de sus integrantes, que incumplía las disposiciones vigentes. Durante veinte años, hasta 1786, se nombraron solo dos diputados del común en lugar de los cuatro que correspondería según la población. El censo de 1782 recogía la existencia de 2 402 vecinos, cifra claramente superior a los 2 000 exigidos por la normativa. De hecho, en una de las reuniones del consistorio de finales de ese año, se había acordado el nombramiento de cuatro diputados teniendo en cuenta esta circunstancia. Será el corregidor el que paralizará esta decisión alegando que había bastantes personas en la ciudad que gozaban de fuero de guerra, a los que no se les consideraba vecinos, y que, además, no podían ejercer estos oficios. A continuación, solicitará informe al Real Acuerdo haciéndole ver el número de vecinos sujetos a la jurisdicción real y a cargas concejiles y los que no. Parece que todo esto fue suficiente para convencer a la Audiencia, pues los nombramientos se retrasaron un tiempo[44].

Cuatro años después, la solicitud pidiendo el aumento del número de diputados ni siquiera surgirá de ellos, sino del personero del común. Será, de nuevo, la Audiencia, la que resuelva el asunto, tras reclamar un informe al consistorio coruñés. En este, el ayuntamiento se mostraba favorable a la petición del personero, pues no solo se cumplía el requisito de población, sino que la gran cantidad de abastos que entraban en la ciudad y se consumían, hacía necesario un aumento de oficiales que se ocupasen de esos temas. Explicaban, además, que desconocían los motivos por los que los anteriores regidores no habían procedido a nombrar los oficiales en el número exigidos por la normativa, pero se aventuraban a suponer que se debería a no reunir los vecinos suficientes en ese momento. Finalizaban su informe, a modo de exculpación, señalando que, en caso de que hubiese otros motivos, ellos no los apoyaban[45]. La reclamación del personero sería efectiva, pues un Real Auto de 22 de mayo de 1786 obligaba a llevar a cabo las elecciones para los dos nuevos diputados[46]. Estos tomaron posesión el 1 y 13 de junio respectivamente[47].

No parece que se pueda generalizar en cuanto al apoyo que recibieron los nuevos oficiales por parte del intendente. En función del lugar y de sus particularidades,

44. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 69, Consistorio 12-12-1782, ff. 169r-169v.

45. El escrito dirigido a la Audiencia estaba fechado el 24 de abril, vid. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 72, Consistorio 2-5-1786, ff. 24r-25v.

46. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 3636: 1768-1820: Expedientes de elecciones de diputados de abastos y procuradores síndicos del común, año de 1786, s/f.

47. AMC., Fondo Ayuntamiento de A Coruña, caja 72, Consistorio 1-6-1786, f. 38r y Consistorio 13-6-1786, f. 39r.

influyendo también aspectos personales, se constatan ciudades donde diputados y personeros son apoyados y otras donde no lo serán y el máximo dirigente territorial se alinee con el cuerpo de regidores municipales[48] (Lorenzana, 2020, pp. 41-42; Rubio, 1989, p. 157). Igualmente se constata una aceptación de los oficiales creados por Carlos III en aquellos lugares donde pronto tendieron a «mimetizarse» con los viejos cargos municipales[49] (Marina, 1984-1985, p. 288).

4. CONCLUSIONES

En las relaciones mantenidas entre los intendentes y los nuevos oficiales municipales creados por Carlos III en 1766 encontramos una inicial actuación de relevancia, pues los primeros serán los encargados de comunicar a los ayuntamientos la normativa que incorporaba las nuevas figuras de diputados del común y procurador síndico personero a cada consistorio, tal y como se constata documentalmente en ciudades gallegas como Santiago y A Coruña. Sin embargo, esta actividad de los primeros momentos no se verá continuada por otro tipo de conexiones con los nuevos cargos. En buena medida, ello es debido a que el propio Auto Acordado de 1766 que creaba estos oficios en los municipios dejaba claro que todos los problemas o cuestiones que se suscitasen con ellos deberían ser resueltos por las respectivas audiencias o, en su defecto, por el Consejo de Castilla. Así, los respectivos reales acuerdos tuvieron que ocuparse, profusamente, tanto de frenar las claras dilaciones que mostraban los municipios, retrasando todo lo posible la instalación de los nuevos oficiales, como de resolver los cuantiosos problemas suscitados en las elecciones.

Llama la atención que el intendente no tuviese más relaciones o contacto con unos oficiales que se encargaron de los asuntos de abastos, pero también de los propios y arbitrios locales, máxime cuando las ordenanzas de 13 de octubre de 1749, que regularon al primero, les otorgaban competencias en esos asuntos económicos de los municipios.

Se constata que los diputados y personero están más cómodos con la Audiencia y Consejo que con el intendente, pero tampoco chocaron con este, probablemente

48. En Alicante, el intendente anuló multas impuestas por los diputados del común, en asuntos de abastos. Parece ponerse del lado de regidores y de alcalde mayor, que tuvieron bastantes disputas con ellos. Por el contrario, en Badajoz, el intendente apoyó algunas protestas de diputados y personeros contra regidores, que acaparaban grano, o para que no se vendieran baldíos.

49. Es el caso, por ejemplo, de Ciudad Real, donde corregidor, alcalde mayor e intendente miraron con indiferencia a los nuevos oficiales al principio e incluso se oponían a muchas de sus propuestas. Cuando estos, con el paso del tiempo, fueron imitando las actuaciones de los regidores y aprovechando su posición, fueron más respetados e incluso apoyados.

porque no se relacionaron mucho con él. Son aquellas instituciones tradicionales las garantes de su existencia, como el Auto Acordado señala.

Desde la perspectiva municipal, la actividad del intendente gallego, en el periodo que llevaba unido el corregimiento coruñés, muestra ámbitos de actuación conjunta con los diputados y personero en temas relacionados con hacienda y ejército.

No es posible generalizar a la hora de valorar la relevancia de los nuevos oficiales que se integraron en la oligarquía local. De la documentación, se infiere una constante vigilancia de mercados y policía urbana, con un aumento gradual de competencias, al hilo de lo aprobado por la normativa. Al menos en los primeros años, parecen buscar una asimilación con los regidores que les lleve a seguir sus mismas prácticas. Solo la fuerte personalidad de algunos personajes que ostentarán los oficios, caso por ejemplo del personero Vila en A Coruña, pondrán de manifiesto desavenencias y nos colocarán detrás de la pista de posibles problemas.

Evidentemente, surgieron conflictos con los regidores, que componían una sólida oligarquía que no veía con buenos ojos la entrada de estos oficiales en algunas de las tareas propias del concejo. De ahí que se resistiesen y dilatasen todo lo posible la implantación de las reformas, como hemos visto, así como limitasen sus competencias y, después, intentasen controlar los designados mediante su involucración en los procesos de elección.

En ocasiones, los diputados se quejaron de la actuación de los regidores, pretendiendo cambiar algunos procedimientos. No fueron pocas las veces en las que, pese a los intentos, los nuevos oficiales vieron cómo el intendente seguía alineado con el tradicional cuerpo de regidores, lo cual puede sorprender si asociamos directamente que los nuevos oficiales se van a unir frente a las instituciones ya existentes. Se trata de una conclusión simplista, amparada, además, en datos extraídos de las actas municipales, donde, a mi juicio, sí se aprecia cierta moderación y freno a los cambios que, de forma apresurada, pretendían impulsar algunos diputados del común. Tal hecho resulta palpable, sobre todo, en un momento avanzado de su implantación, hacia finales del siglo, cuando la burguesía comercial se va consolidando en estos oficios que le permitieron participar en las decisiones de gobierno del municipio.

Una vez que la intendencia gallega se desgaja del corregimiento de la ciudad de A Coruña en 1775, su actividad competencial decae desde esta óptica del gobierno municipal, sin que se aprecie contacto con los nuevos oficiales creados por Carlos III en 1766. Sus tareas se centrarán en trasladar órdenes que llegaban desde la Corte y en solicitar datos. Recordemos que estamos en una etapa de fuerte control de la hacienda local desde la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios, así como de las juntas de este ramo en cada ayuntamiento. La aprobación de minuciosos reglamentos, en los que se consignaban tanto ingresos como gastos permitidos, provocó un saneamiento en las cuentas de muchos municipios. En esta etapa, los diputados mantuvieron algunos enfrentamientos con el regimiento coruñés por la

negativa de este a reconocerles el derecho a voto en determinados asuntos. Con el tiempo, se aprecia su integración, cada vez mayor, en la oligarquía local, desapareciendo las disputas con los regidores. Buen ejemplo de ello, como hemos explicado, se manifiesta en el hecho de que los diputados no impulsasen el aumento de su número, claramente inferior al requerido por la normativa en atención al número de habitantes de la ciudad herculina. Se trata de un dato constatable y de público conocimiento, a tenor de la documentación municipal, al menos entre 1782 y 1786.

Debido a esta actividad que se comprueba en las actas consistoriales, no existió mucha ocasión para que el intendente apoyase o rechazase propuestas de los nuevos oficiales, pues su trabajo, insisto, se ciñó a trasmitir órdenes superiores sobre impuestos a cobrar o sobre autorizaciones concedidas desde el Consejo de Castilla —léase Contaduría General de Propios y Arbitrios- para asumir determinados gastos.

Creo que, para el caso gallego, tras el estudio de la implantación de los nuevos oficiales municipales de diputados del común y procurador síndico personero y la actividad desarrollada por el intendente iniciada la segunda mitad del siglo XVIII, podemos constatar un ejemplo más de freno a la actividad de gobierno ministerial y un intento de volver a la vieja relevancia de los consejos y las audiencias, del orden tradicional (López Díaz, 2020). Los tumultos y revueltas de estos momentos preocuparon y redujeron la velocidad de las reformas. Se había corrido mucho, quizás demasiado, y aún no se daban las condiciones propicias para afrontar tantos cambios.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Eduardo Cebreiros Álvarez.

Agradecimientos y financiación

Agradecemos al proyecto del MINECO: «El Reino de Galicia en la monarquía de Felipe V: Instituciones y dinámica política» (HAR2017-83605-P), en el que también se engloba este trabajo.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

5. BIBLIOGRAFÍA

Andrés-Gallego, J. (1988). Soria, 1766: El problema de la representatividad y de la participación en la vida pública. *Investigaciones Históricas: Época Moderna y Contemporánea*, *8*, 109-120.

Bustos Rodríguez, M. (1981). La representación popular en el Ayuntamiento gaditano del siglo XVIII: El primer procurador síndico personero y los primeros diputados del Común. *Gades*, *7*, 85-106.

Campese Gallego, F. J. (2005). *La representación del común en el Ayuntamiento de Sevilla (1766-1808)*. Universidad de Sevilla.

Cebreiros Álvarez, E. (1999). *El municipio de Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen (1759-1812)*. Xunta de Galicia.

Corona Baratech, C. (1969). El poder real y los motines de 1766. En *Homenaje al Dr. Cañellas* (pp. 259-277). Universidad de Zaragoza.

Cózar Gutiérrez, R. (2005). Los nuevos cargos del ayuntamiento: Análisis del proceso electoral de diputados del común y síndicos personeros en la villa de Albacete (1766-1817). En *Reformistas y reformas en la administración española* (pp. 373-392). Instituto Nacional de Administración Pública.

Díaz González, F. J., y Calderón Ortega, J. M. (2006). La aplicación de las reformas municipales de Carlos III: El caso de Guadalajara. En *X Encuentro de Historiadores del Valle del Henares: Alcalá de Henares, 23-26 noviembre 2006. Libro de actas* (pp. 235-252). Institución de Estudios Complutenses.

Dubet, A. (2007). ¿La importación de un modelo francés? Acerca de algunas reformas de la administración española a principios del siglo XVIII. *Revista de Historia Moderna*, *25*, 207-233. https://doi.org/1014198/RHM20072508

Egido, T. (1979). Madrid, 1766: «Motines de Corte» y oposición al gobierno. *Cuadernos de Investigación Histórica*, *3*, 125-153.

Fernández Albaladejo, P. (1992). *Fragmentos de monarquía: Trabajos de historia política*. Alianza.

García Monerris, E. (1991). *La monarquía absoluta y el municipio borbónico: La reorganización de la oligarquía urbana en el Ayuntamiento de Valencia (1707-1800)*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Garriga Acosta, C. A. (2006). Justicia animada: Dispositivos de la justicia en la Monarquía católica. *Cuadernos de Derecho Judicial*, *6*, 59-106.

Garriga Acosta, C. A. (2018). Comunidad v. pueblo: Las elecciones de diputados del común en el Señorío de Vizcaya (1766-1808). *Iura Vasconiae: Revista de Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia*, *15*, 295-353.

Giménez Chornet, V. (1992). Elecciones municipales en el País Valenciano: Los diputados del común y el síndico personero (1766-1769). *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, *68*(3), 431-443.

Gómez Martínez, A. (2005). Las reformas de la administración local de la ciudad de León (1766-1770): Personeros y diputados del común. En J. Paniagua Pérez (Coord.),

España y América entre el Barroco y la Ilustración (1722-1804): II Centenario de la muerte del Cardenal Lorenzana (1804-2004) (pp. 107-122). Universidad de León.

Granados Loureda, J. A. (1996). Reflexiones en torno a las reformas del régimen municipal de A Coruña a mediados del siglo XVIII. *Obradoiro de Historia Moderna*, *5*, 95-118.

Guillamón Álvarez, F. J. (1990). La introducción de regidores añales en el municipio castellano: El caso de Palencia (1779-1820). En M. V. Calleja González (Coord.), *Actas del II Congreso de Historia de Palencia* (Vol. 3, pp. 307-316). Diputación Provincial de Palencia.

Guillamón Álvarez, F. J. (1998). Reformismo institutional y gobierno municipal en el siglo XVIII. En P. Molas Ribalta, A. Alvar Ezquerra, y J. M. de Bernardo Ares (Coords.), *Espacios urbanos, mundos ciudadanos: España y Holanda (ss. XVI-XVIII). Actas del VI Coloquio Hispano-Holandés de Historiadores celebrado en Barcelona en noviembre de 1995* (pp. 65-82). Universidad de Córdoba.

Guillamón Álvarez, F. J., y Losa Serrano, P. (1996). Absolutismo ilustrado y administración local (estado de la cuestión de la reforma de 1766): Elecciones de diputados del Común y Síndico personero de la Villa de Albacete (1766-1817). En *El mundo hispánico en el Siglo de las Luces* (Vol. 2, pp. 753-770). Universidad Complutense de Madrid.

Hernando Serra, M. P. (2001-2002). Las elecciones de Síndico Personero y Diputados del común en la ciudad de Valencia a principios del siglo XIX. *Saitabi: Revista de la Facultat de Geografia i Història*, *51-52*, 401-432.

López Díaz, M. (2006a). Reformismo borbónico y gobierno municipal: Las regidurías compostelanas, siglo XVIII. *Obradoiro de Historia Moderna*, *15*, 205-237.

López Díaz, M. (2006b). Municipio y reforma: Ourense, otro ejemplo del fracaso de la política reformista borbónica. *Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna*, *3*, 133-181.

López Díaz, M. (2020). Intendencia, justicia y gobierno: La Real Cédula de 5 de marzo de 1760. ¿Nuevo triunfo del orden tradicional? *Obradoiro de Historia Moderna*, *29*, 79-108. https://doi.org/1015304/ohm296570

Lorenzana de la Puente, F. (2020). La voz del pueblo: Síndicos y diputados del común en el Ayuntamiento de Badajoz, 1766-1808. En M. Á. Naranjo Sanguino y J. A. Matador Matos (Coords.), *Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz: Tomo XV* (pp. 27-54). Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz.

Marina Barba, J. (1984-1985). La reforma municipal de Carlos III en Ciudad Real (1766-1780). *Chronica Nova*, *14*, 249-292. https://doi.org/1030827/cn.v0i02890

Mejía Asensio, A. (1997). Las reformas municipales de Carlos III en Guadalajara: El personero y los diputados del Común (1766-1790). *Wad-al-Hayara: Revista de Estudios de Guadalajara*, *24*, 137-164.

Pascual Ramos, E. (2015). Los Diputados del Común y el Síndico Personero del ayuntamiento de Palma (1766-1808). *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del Siglo XVIII*, *21*, 249-266. https://doi.org/1025267/Cuad_Ilus_Romant2015.i2114

Pérez Martín, J. (1985). Los diputados del común y procuradores personeros de Burgos (siglo XVIII). En *La ciudad de Burgos: Actas del Congreso de Historia de Burgos. MC*

aniversario de la fundación de la ciudad, 884-1984 (pp. 469-477). Junta de Castilla y León.

Prados García, C. (2016). La acumulación de oficios (intendente-corregidor) tras la Real Cédula de 13 de noviembre de 1766: Un estudio de caso: El Ayuntamiento de Granada (1808-1814). *Cuadernos de Historia del Derecho*, *23*, 191-210. https://doi.org/105209/rev_CUHD 2016.v2353062

Rodríguez Casado, V. (1962). *La política y los políticos en el reinado de Carlos III*. Rialp.

Rodríguez Díaz, L. (1975). *Reforma e Ilustración en la España del siglo XVIII: Pedro Rodríguez de Campomanes*. Fundación Universitaria Española.

Rodríguez Rodríguez, J. J. (2020). Hito anticipatorio del nuevo orden local: Los regidores electivos del Cabildo de La Palma. En M. Poggio Capote, V. J. Hernández Correa, y A. Lorenzo Tena (Coords.), *Cinco mitos para cinco siglos: 525 aniversario de la fundación de Santa Cruz de La Palma* (Vol. 2, Tomo 2, pp. 77-92). Cabildo Insular de La Palma.

Rubio Fernández, M. D. (1989). *Elecciones en el Antiguo Régimen: La reforma municipal de Carlos III en Alicante, 1766-1770*. Universidad de Alicante.

Ruiz Torres, P. (1979). Los motines de 1766 y los inicios de la crisis del Antiguo Régimen. En B. Clavero, P. Ruiz Torres, y F. J. Hernández Montalbán, *Estudios sobre la revolución burguesa en España* (pp. 29-112). Siglo XXI.

Sánchez Andújar, I. M. (2018). La intervención de la Chancillería de Granada en las elecciones de diputados del común y síndicos personeros (1766-1775). En M. Á. Pérez Samper y J. L. Betrán Moya (Coords.), *Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: Economía, sociedad, política y cultura en el mundo hispánico* (pp. 787-798). Universidad Autónoma de Barcelona / Fundación Española de Historia Moderna / Universidad de Barcelona.

Tomás y Valiente, F. (1982). *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*. Alianza Universidad.

Vallejo García-Hevia, J. M.ª. (1997-1998). Sobre los intendentes españoles del siglo XVIII: A propósito de F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle. *Ius Fugit: Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos*, *5-6*, 547-557.

Vilar, P. (1982). *Hidalgos, amotinados y guerrilleros: Pueblo y poderes en la historia de España*. Crítica.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481161190

ENTRE LO NECESARIO Y LO INCONVENIENTE: LA ALCALDÍA MAYOR Y AUDITORÍA GENERAL DE MARINA DE FERROL-A GRAÑA (1734-1773)

Between Necessity and Inconvenience: The Major Mayor's Office and General Judge-Advocate of Navy of Ferrol-A Graña (1734-1773)

María LÓPEZ DÍAZ

Universidade de Vigo
marial@uvigo.gal

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Este artículo analiza en clave político-institucional los principales trazos de la unión entre la alcaldía mayor de Ferrol-A Graña y la auditoría general de Marina del Departamento ferrolano durante el periodo que duró la anexión (1734-1773). En particular, intento dilucidar los motivos que sustentaron la medida, la singularidad del caso al acoplar empleos de dos esferas jurisdiccionales diferentes —la ordinaria y la militar de Marina—, los problemas de forma y fondo derivados de la dualidad y las razones que llevaron a su posterior separación en un contexto propicio en la alta administración.

Palabras clave: siglo XVIII; Departamento naval; Ferrol-A Graña; alcaldía mayor; auditoría general de Marina; intendencia de Marina; Comandancia General de Marina; conflictividad jurisdiccional.

ABSTRACT: This article analyses, from a political and institutional perspective, the key aspects of the union between the chief magistracy

of Ferrol-A Graña and the office of judge advocate of the Navy in the Ferrol Department during the period in which the two offices were joined together, from 1734 to 1773.

In particular, it seeks to clarify the reasons that supported this measure, the singular nature of the case —since it brought together offices belonging to two different jurisdictions, ordinary jurisdiction and naval military jurisdiction—, the formal and substantive problems arising from this situation, and the reasons for its subsequent separation within a favourable context in the higher administration.

Keywords: Eighteenth century; Naval Department; Ferrol-A Graña; chief magistracy; judge advocate general of the Navy; Navy Intendancy; General Command of the Navy; jurisdictional tensions.

1. INTRODUCCIÓN

Corregidores y alcaldes mayores constituían uno de los ejes del organigrama político-administrativo de la monarquía borbónica a nivel territorial que, legado del modelo de gobierno de los Reyes Católicos, irá adaptándose al sistema de gestión, estilo y práctica política de la nueva dinastía. Esta adaptación fue imprescindible por las profundas reformas y remodelaciones efectuadas en dicho ámbito, pues, directa o indirectamente, antes o después, con mayor o menor intensidad, les concernieron. Del tándem señalado, los alcaldes mayores judiciales o tenientes de corregidor —una de sus tipologías— son los más desconocidos. Merecen que se les preste atención, pues la investigación en la Península se ha focalizado esencialmente en los corregimientos, apenas hay trabajos monográficos y los existentes se circunscriben a localidades y territorios muy concretos (Cerro, 2001; De Bernardo, 1978; Giménez, 2006, pp. 210-228). Específicamente para Galicia no hay ninguno. Esto de por sí ya justifica la pesquisa del caso propuesto, pero añadiré otras dos motivaciones: una, se trata de oficios que formaban parte de la carrera de varas que los Borbones procuraron dignificar o «profesionalizar» con las reformas ilustradas; y otro, igualmente importante, la singularidad de la alcaldía mayor de Ferrol-La Graña por tener acumulada la auditoria general de Marina de dicho Departamento. O sea, se trataba de una figura dual, cuyos titulares aunaban dos empleos de justicia de ámbitos jurisdiccionales distintos, el ordinario y el militar. Esta particularidad trascendió a sus dos agencias: eran atípicas entre los corregimientos y alcaldías peninsulares (Álvarez, 2012, pp. 115-498; Giménez, 2006, pp. 201-208; González Alonso, 1970; López Díaz, 2016, pp. 135-153); y también en el cuadro del personal auxiliar de los Arsenales y Departamentos de Marina donde se ubicaban administrativamente los auditores, pues, que sepamos, formalmente la misma agregación

de oficios solo se dio en el arsenal cántabro de Guarnizo[1]. Hablo de las auditorías capitalinas, pues las de los partidos y subdelegaciones marítimas, dado el escaso interés que suscitaban, a veces eran compaginadas con otras asesorías o comisiones jurídicas (Vázquez, 2006, p. 162).

En Ferrol esta unión deriva de la decisión borbónica de convertir este puerto, una pequeña villa costera, en una de las bases de asentamiento de la nueva estructura de la organización marítima junto con Cádiz y Cartagena[2]. *A priori*, la fórmula ensayada puede parecer anómala, pues aglutina en una sola persona potestades de dos ramos jurisdiccionales distintos —«justicia-gobierno»-«civil» y «militar»—, con un despliegue reformador, dispositivos y vías de tramitación diversos, y en ocasiones enfrentados. Pero en el Antiguo Régimen no lo era en absoluto, pues las esferas de poder no estaban netamente separadas, ni siquiera en el siglo XVIII, para el que se ha sugerido una cierta «militarización de la administración» (Andújar, 1992; Giménez, 1994) sin ir más lejos, los corregidores tenían atribuciones militares en sus distritos, más obvias en el caso de los «militares». Pero hay otros ejemplos: los «gobernadores militares de plazas fuertes»; los gobernadores—capitanes generales con función de presidentes de los respectivos Tribunales Superiores y Reales Audiencias territoriales y los intendentes-corregidores, a los que se otorgan amplísimas atribuciones económicas, de justicia y policía, además de las militares, esenciales junto con las hacendísticas. Ciertamente, los dos últimos casos no son equiparables al nuestro, por ser de un rango institucional muy superior (administración provincial o territorial), mientras que las «alcaldías mayores unipersonales» (Yali, 1972, p. 2), como la aquí estudiada, solían ser oficios o instancias de menor categoría de la administración judicial periférica; una especie de paso previo para lograr un corregimiento (Giménez, 2006, p. 207). Es más, hasta 1749 la mayoría de estos alcaldes mayores eran nombrados por los corregidores, limitándose la Cámara de Castilla a conceder la licencia para que el letrado designado jurara el cargo ante su elector; por tanto, estaban supeditados al corregidor. Solo tras la Ordenanzas de Intendentes-Corregidores de 13 de octubre de 1749 (cap. II) estos perdieron esa capacidad y su control pasó a manos del rey, quien proveerá libremente dichas plazas, previa propuesta de la Cámara, sentando así las bases de la futura carrera de varas.

En tal sentido, la alcaldía mayor de Ferrol añade una segunda peculiaridad: la de ser provista desde su creación por el monarca, adelantándose así a lo regulado en dicha Instrucción. Este hecho refuerza su singularidad, evidencia las ventajas e

1. Archivo General de Simancas [AGS], SMA, 194-1, Año 1773.

2. Obvio citas, pues es un tema conocido y profusa la bibliografía sobre la historia y evolución de la Real Armada española en el siglo XVIII, pues ha sido estudiada por un elevado número de eruditos y especialistas, no siempre historiadores, con enfoques, fuentes y herramientas dispares.

inconvenientes derivados de la citada anexión e inevitablemente liga la suerte de los dos oficios durante el tiempo que perdura la agregación. Mi propósito es captar la esencia de esa especificidad, la razón de la unicidad, los problemas que conlleva el doble desempeño, así como algunas de las vicisitudes hasta que se produce su separación. Para ello, en el primer apartado revisaré el paso de las villas de Ferrol y A Graña del señorío al realengo, esclareciendo la naturaleza del traspaso. A continuación, abordaré la génesis y el encaje político de la nueva figura dentro del organigrama político-institucional establecido, la justificación de la fórmula ensayada y cómo se fue «normalizando» la institución *de facto*. Y ya en los dos últimos hablaré de los actores y de los grandes trazos de su evolución con los condicionantes; de cómo muta sobre el terreno y de los problemas que suscita el ministerio compartido, haciéndose cada vez más indigerible para las autoridades de Marina, hasta provocar su disociación. Sobre este particular trataré de ver cómo se forja, las razones y sus flexiones en el tiempo, amén de la dialéctica planteada sobre el asunto en lo que podría interpretarse como un lance (más) de la vieja pugna entre la *espada* y la *pluma* en la Marina de Guerra (Merino, 1981, pp. 24-46; Perona, 1999, pp. 24-26; Vázquez, 2007, pp. 134-136). ¿Fue realmente así? ¿Cabe deducir que estamos ante un episodio del proceso de afirmación de un «poder militar» fuerte, que no autónomo, opuesto al «poder civil»? A responder dedicaré las palabras finales.

Como colofón de esta introducción, quisiera hacer una última observación sobre el enfoque. Si bien la historiografía que hizo aproximaciones y estudios sobre la conversión de Ferrol en cabecera del Departamento marítimo del Norte y sus repercusiones tanto desde el punto de vista naval (Cuerpo de Intendencia) como municipal, e incluso urbanístico, alude al establecimiento de la citada vara de alcalde mayor unida a la auditoría de Marina, ninguno abordó el hecho en sí, más allá de dejar constancia de la conflictividad jurisdiccional generada en el ámbito urbano (Barreiro, 1996, p. 77; Granados, 1998, p. 197; Granados, 2011, p. 127; Montero, 1972, pp. 191, 193; Santalla, 1991, p. 45). Por separado, la auditoría ha merecido la atención de algún especialista de historia naval por su condición de asesor jurídico en las capitales de provincia marítimas, centrándose exclusivamente en los aspectos normativos y retribuciones (Vázquez, 2007, pp. 8, 99, 160-168). En cuanto a la institución plantar —vara de alcalde mayor—, solo se le prestó atención en su faceta de corregidor municipal (Barreiro, 1996, pp. 78-85; Montero, 1972, pp. 185-203; Santalla, 1999), que es como a veces se le denomina[3]. Mi perspectiva es diferente: me interesa en su doble o triple rol porque esta circunstancia condicionó sus dos encargos y devenir como institución. A diferencia de los segundos, que emplean documentación local, y de los primeros, cuyo análisis es esencialmente ordenan-

3. Archivo Histórico Nacional [AHN], Consejos; leg. 12533, leg. 42520, exp. 1; AGS, SMA, 194-1, Año 1747.

cista o normativo, como fuentes documentales utilizaré sobre todo la información obtenida de los expedientes localizados en el Archivo Histórico Nacional (AHN, Consejos) y en el Archivo General de Simancas los del fondo de Secretaría de Marina (AGS, SMA).

2. PASO PRIMERO: VUELTA AL REALENGO DE A GRAÑA Y FERROL

Por Real Decreto de 21 de septiembre de 1733 la Corona reincorporó al Patrimonio real las antiguas villas del Ferrol y A Graña, cesando en su dominio a la Casa de Andrade y Lemos, hasta entonces dueña jurisdiccional. Es una medida derivada de la decisión del ministro José Patiño de convertir a Ferrol en capital del Departamento del norte (1726) y A Graña en un pequeño apostadero, seguramente por la importancia logística que había obtenido la primera como puerto en los siglos precedentes. Ambos hechos serán trascendentales en un futuro próximo, porque posibilitaron la presencia del marqués de la Ensenada durante un tiempo dirigiendo la actividad de sus astilleros (Araguas y Abeledo, 2012, pp. 93-94; Gómez, 1996, p. 66); y, no se olvide, él habrá de ser el principal valedor de la opción ferrolana como un bastión en la estrategia naval de la Corona.

En cuanto al mecanismo empleado para efectuar este cambio de estatus jurídico, a mediados del siglo XIX el archivero e historiador local Montero Aróstegui sugirió que había sido producto de una «cesión» de la Casa Condal a la Corona (1972, p. 43) y, siguiéndole, otros especialistas lo han venido reiterando desde entonces (Granados, 2011, p. 123; Santalla, 1991, p. 45; Vázquez, 2007, p. 99). También se han hecho eco de la ausencia de reacciones serias de los Lemos ante la desmembración y su escaso interés por preservar dicho dominio, amparándose en los casi nulos ingresos económicos que obtenían del señorío. Reparan en que, para solucionar los posibles conflictos jurisdiccionales que pudieran surgir mientras no se decidió su traspaso, siempre estaban la Real Audiencia y las jurisdicciones especiales, a las que podían acogerse los aforados (Barreiro, 1996, p. 77). Son, indudablemente, afirmaciones de notable utilidad como primer acercamiento, pero hoy en día matizables y en algunos aspectos revisables desde nuevos enfoques o perspectivas y un marco interpretativo más rico y complejo.

La primera cuestión que precisar es el dispositivo empleado en la restitución al Patrimonio Real. *Sensu stricto*, no fue por una cesión gratuita de los Lemos a la Corona, sino una incorporación por mandato real, aunque no siguiera los cauces habituales de las reversiones de la época; a saber, una instrucción en aplicación de una disposición general o mediante un procedimiento incoado judicialmente en el Consejo. Como en los casos de la Isla de León y El Puerto de Santa María, pertenecientes a la Casa ducal de Arcos y ducado de Medinaceli, respectivamente, el rescate del señorío, oficios y derechos jurisdiccionales obedeció a «razones de estado»

relacionadas con los planes militares de la Corona; en la Isla también de índole comercial (González, 1993, pp. 71-74; 1994, pp. 112-114; 2004, pp. 11-17; López Garrido, 1999, pp. 22-25). De hecho, aunque en el citado decreto no se mencionaba una motivación explícita, justificándolo con la vaga expresión de «convenir a mi real servicio y a la Corona»[4] —que evoca necesidad, beneficio común o mayor «utilidad pública», incluso un derecho superior con fundamento de *soberanía*—, en la práctica todo apunta a razones de interés estratégico relacionadas con la política exterior, la reorganización del mapa de la administración marítima y el desarrollo de la Marina real. Y ello pese a que el rescate no se materializó hasta siete años después de convertir a Ferrol en capital departamental. Un retraso debido al hecho de no considerar imprescindible inicialmente hacerse con la jurisdicción de las citadas villas o bien por ser el tiempo que tardó en tomar cuerpo dicho proyecto (Barreiro, 1996, p. 77). Sea como fuere, tampoco puede desligarse de lo ocurrido con la reincorporación de la Isla de León y El Puerto, que le sirvieron de modelo en distintos aspectos, sobre todo la primera que por dimensiones se asemejaba más. Basta cotejar las fechas: su reversión se había efectuado cuatro años antes (Real Orden de 31 de mayo 1729) y, tanto o más importante, ya se había resuelto la reclamación interpuesta por la Casa de Arcos ante el Consejo de Hacienda concerniente al monto de la remuneración por el señorío y derechos jurisdiccionales (diciembre de 1732), quedando solo pendiente la devolución de los bienes particulares y dilucidar la consideración de algunos. Esto último dio pie a una nueva reclamación que alargó el proceso hasta el año 1743 (González, 1993, pp. 93-94); otra fecha en la que, como se verá, también hay coincidencia, pues es cuando la Casa de Lemos reactiva el proceso indemnizatorio.

Volviendo sobre nuestro caso, una vez tomada la decisión de incorporarlas, el rey ordenó a los Consejos de Hacienda y de Castilla despachar las correspondientes disposiciones, junto con las de posesión de las alcabalas y demás derechos reales cedidos a la Casa por títulos o privilegios. En concreto, al primero le encomendó fijar la indemnización («equivalente») por la jurisdicción, derechos y bienes reintegrados y elevar la propuesta a consulta. Por su parte, el segundo comisionó como juez ejecutor para la «expropiación» y toma de posesión al alcalde mayor de A Coruña y teniente del intendente de Galicia, Juan Luis Ximénez, encargándole que también hiciera averiguación del territorio y de los bienes, rentas y demás derechos percibidos por los Lemos en ambas localidades[5]. Como datos destacados de su informe, cabe señalar que, aparte de definir los límites territoriales detallando las parroquias de cada localidad, hizo constar para la villa de A Graña la designación de un alcalde ordinario, un procurador general y un mayordomo pedáneo en su única feligresía

4. AHN, Consejos, 6118/ 58. La misma fórmula empleada en la Isla de León y El Puerto (González, 1994, p. 73; 1995, p. 112; 2004, p. 12).

5. AHN, Consejos, 6118/ 58.

(Santa María de Brión); y que pagaba como derechos señoriales la «talla» (77 reales anuales) y otro de 49 reales y 14 maravedíes anuales. Según la relación, el Conde también percibía allí la alcabala foránea (encabezada), parte de los diezmos (sinecuras) y diferentes derechos forales, añadiendo que las dos últimas rentas no deberían incluirse en el expediente. En lo concerniente a la de Ferrol[6] anota el nombramiento de un alcalde ordinario, cuatro regidores, un procurador general, un escribano del ayuntamiento, dos de número, dos procuradores de causas, un veedor y carcelero y seis mayordomos (uno por cada feligresía); y como derechos jurisdiccionales que abonaban menciona la «talla» (13 166 maravedíes/año) y el de «cevadas»[7].

En cuanto a la indemnización por la jurisdicción, derechos y bienes afectados, el expediente, igual que en los enclaves gaditanos, se demoró. Es por ello que la marquesa viuda de Aytona y condesa propietaria de Lemos, doña Rosa M.ª Fernández de Castro, vinculada a los círculos de la alta aristocracia cortesana, que hereda los títulos y el condado de su tío Ginés en 1741, velando por la administración de sus bienes, la reclamó al año siguiente en un marco propicio: coincidiendo con la reactivación del proceso de rescate de bienes y regalías enajenados a la Corona, cuando Felipe V crea una magistratura específica, con jurisdicción privativa —el «Juzgado de Incorporaciones»—, dentro del Consejo de Hacienda, con el fin de «evaquar» los muchos expedientes de incorporación pendientes de resolver (López Díaz, 2017, pp. 124-125). El comisionado para ejercer el cargo fue el sevillano Pedro Díaz de Mendoza, del Consejo de Hacienda, caballero de la orden de Santiago, fiscal honorario de la Sala de Alcaldes y Juez de Lanzas y medias Annatas del Reino (R.D. de 19/10/1742), que antes fuera fiscal de rentas y salinas del Reino y juez privativo del Real Valimiento y de Yerbas de la villa de Madrid y su partido, y siéndolo —curiosamente— pretendió el empleo de fiscal del Real Almirantazgo en 1738[8]. Pues bien, la condesa de Lemos solicitó la compensación a poco de crearse dicho juzgado, pese a ser un proceso de incorporación *ad hoc*.

6. Cita los lugares de Canido y Resimil y las feligresías de San Jorge de Mariña, San Juan de Esmelle, San Martín de Covas, San Pedro de Leixa, Santa Mariña del Vilar y San Vicente de Meá, entre las que había jurisdicciones de particulares (Ibidem). Esta relación no concuerda con la ofrecida por Montero para sus alfoces (Granados, 2011, p. 56). Algunas de las que menciona seguían bajo dominio de los Lemos en 1752 (Barreiro, 1994, p. 70, n. 2).

7. Por él cada labrador con carro, ferrado y bueyes, paga 5,5 reales anuales y el que no lo tiene y las viudas la mitad. No valora el montante por depender del número de labradores. Estaba arrendado con las rentas de sinecuras. No incluye la luctuosa como derecho jurisdiccional percibido por los Lemos, si bien figura en la representación que como comisionado eleva al Consejo informando de la ejecución del encargo (La Coruña, 21/10/1733). También refiere el cobro de rentas no jurisdiccionales (forales, diezmo del pescado del mar en ambas rías, penas de cámara, las de marcos y los mostrencos). AHN, Consejos, 6118/58.

8. AGS, SMA, 194-1, Año 1738.

En respuesta a su demanda, desde la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, José del Campillo, también secretario del Despacho de Marina e Indias y de Guerra[9], pidió a Pedro Salvador Muro y Alonso, ministro togado numerario del Consejo de Hacienda (Sala de Justicia) con estrechos vínculos profesionales con Ensenada, que, como experto y auditor general de la Armada[10] (Pérez, 2004, p. 452; Perona, 1999, p. 122), informase sobre el asunto. En su dictamen este aludió a las diversas tasaciones efectuadas tanto por peritos de la Casa condal como por el Consejo y Contaduría general de valores, estimando que la Real Hacienda le adeudaba 314 705 reales y 9 maravedíes por los derechos de ambas villas, incluida la alcabala foránea que percibía. Pero lo verdaderamente relevante desde la perspectiva jurídica es que sobre esta base plantea dos opciones: una, incorporarlas sin recompensa, salvo la alcabala foránea, en su condición de puertos, pues es —decía— su único interés como «alhajas de la Corona»; y, otra de signo contrario, si para el monarca tenía más «digno aprecio la jurisdicción de dichas villas por su situación», entonces debía remunerarlas abonando por ellas lo estipulado o su equivalente, tras desechar algunos conceptos solicitados por la parte afectada[11]. O sea, esboza la disyuntiva entre despachar el asunto echando mano de los principios de *ejecutividad* o bien continuar el expediente por la vía o procedimiento judicial ordinario. No se pronuncia con claridad, pero el apunte es significativo. Optando por no innovar y hacer como en Cádiz, la segunda fue la solución que adoptó el rey *reservadamente*; vía a través de la cual se tramitó casi todo lo referido al Departamento y arsenal de Ferrol-La Graña, salvo lo concerniente al gobierno ordinario de ambas villas que queda supeditado al Consejo y Cámara de Castilla. Es el primer paso de un cambio profundo.

3. DE LA UNIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR Y AUDITORÍA DE MARINA

La reincorporación de las dos localidades al realengo generó problemas desde el mismo momento que se efectuó. Así se desprende del escrito que el juez ejecutor remitió al presidente del Consejo de Castilla cuando finaliza su encargo. En él se

9. Sobre su origen montañés, nobleza, linaje, méritos y carrera de servicios a la monarquía en distintos puestos, incluidos los de armas y la Marina, alegados en su pretensión de obtener el hábito de caballero de Santiago, ver García, 2021.

10. Oficio creado durante la etapa del Almirantazgo, siendo nombrado el susodicho por Felipe V a propuesta del Infante Felipe (R.D. 03/03/1738). Asesoraba a la Junta de Justicia del Almirantazgo en la resolución en última instancia de los pleitos civiles y criminales cuya jurisdicción tenía encomendada. AGS, SMA, 194-1, Año 1738. Coincidiendo con el ministerio de Campillo, pese a suprimirse dicha Junta, el rey ordena mantener el empleo mientras existiese el almirante general o bien el lugarteniente general, por deber asesorarles (Perona, 2004, p. 469).

11. AGS, SMA, 711, Año 1743.

quejaba de que, pese a querer poner su jurisdicción en manos de personas distinguidas, había tenido que designar a los que ejercían «por la constitución actual», urgiendo la necesidad de establecer un nuevo reglamento sobre el asunto[12]. En este escenario se encuadran los dos nuevos decretos que Felipe V despachó meses después, organizando el sistema de gobierno de ambas villas: uno de 1734 (7 de junio) disponiendo que hubiera un «gobernador militar» del cuerpo de la Armada, y para «la administración de justicia y demás dependencias de la jurisdicción ordinaria… un Alcalde maior letrado» —adviértase, no un corregidor, aunque a veces se le denomine así— propuesto por la Cámara de Castilla a consulta y aprobación real[13]; y otro de 23 del mismo mes dirigido a la propia Cámara, preceptuando que el letrado elegido serviría conjuntamente el empleo de auditor general o asesor letrado de dicho Departamento. Asimismo, informó del nombramiento a Francisco Cornejo en su condición de primer comandante general de dicho Departamento[14] y le mandó proponer candidatos para ejercer la citada vara de alcalde mayor y auditor general de Marina[15], obviando de este modo parte de lo providenciado en el primer decreto.

Curiosamente, nada indicaba sobre la sustitución del viejo ayuntamiento compuesto por regidores nombrados por los Lemos, ni del resto de los oficios que designaban en dichas villas. No obstante, la Cámara abordó el asunto: pidió al juez comisionado un informe detallado del número de regidurías existentes en cada una y su calidad, a fin de incoar el expediente de creación de las respectivas plantas municipales; incluso le mandó tantear la posibilidad de «beneficiar» los cargos —es decir, que la Corona percibiera un provecho adicional por nominar a determinados sujetos o pretendientes— con el propósito último de hacerlos *perpetuos* o que al menos se sirvieran vitaliciamente, condición que tenían los designados por la administración señorial desde principios del XVII (Montero, 1972, p. 190). Pero su conclusión fue desalentadora: no había sujetos de calidad interesados en adquirir los cargos a título lucrativo. Por eso, en la villa ferrolana no se desposeyó a los tres regidores y demás oficios nombrados por los Lemos (el escribano del ayuntamiento y los tres procuradores de causas); mientras que, en A Graña, aun siendo la base inicial del Arsenal, sencillamente no se consideró necesario que hubiera capitulares, aunque

12. AHN, Consejos, 6118/58 (Fecha: 21/10/1733).
13. AGS, Gracia y Justicia (o GJ), 869, s.f.
14. El teniente general de la Armada Francisco Cornejo y López de Cotilla, «paradigma» de los militares que protagonizaron la transición entre las décadas finales del XVII y la primera etapa reformista borbónica, poseía una dilatada carrera profesional: primero en el Ejército (había sido soldado arcabucero, capitán de Infantería y ayudante general del Ejército de Andalucía) y luego en la Armada, donde sirvió como capitán de fragata, capitán de navío y jefe de escuadra. En 1737 pasa a formar parte de la Junta de Marina del nuevo Almirantazgo y tras desmantelarse este será nombrado consejero de Guerra el 9 de mayo de 1742 (Pérez, 2004, pp. 437-438, 469; Perona, 1999, pp. 120, 130-132; y, sobre todo, el detallado análisis biográfico de Baudot, 2018/1).
15. AGS, SMA, 194-1, s.f. Sobre la creación de dichos empleos.

sí un procurador general elegido por los vecinos[16]. Por el momento no se tomaron más medidas de orden gubernativo.

Los años 1740 marcaron un punto de inflexión en este sentido. Sucede cuando se plantea un problema de legitimidad con los oficios, coincidiendo con el proceso de reversión de bienes enajenados de la Corona y la consiguiente verificación de títulos. Se concretó en una Real Orden de la Cámara de Castilla, disponiendo que quienes servían cargos concejiles sin título del rey acudiesen a sacarlos como procedía. Pues bien, los capitulares ferrolanos se negaron a hacerlo y pagar la *media annata* correspondiente, alegando que los oficios que desempeñaban no eran suyos «si no de la Corona»; que lo hacían sin cédulas reales y los procuradores «como excusadores, y que desde luego [teniendo que sacar el título y pagar] hacían dejación de ello». Así lo hizo constar el alcalde mayor-auditor de Marina Isidro de Prado en la representación que envió a la Cámara dándole cuenta del asunto. Razón por la que esta remitió un segundo requerimiento, pero la réplica de los afectados fue, si cabe, más demoledora: reiteraron su negativa a servir los oficios y carencia de derechos sobre los mismos; y mostraron su deseo de abandonarlos, declinando asistir al cabildo por sus ocupaciones e incompatibilidades, achaques o avanzada edad. De esta manera, el asunto acabó generando un problema mucho más grave del inicialmente planteado: hablo de un ayuntamiento vacío con la consiguiente «parálisis» consistorial[17]. No es, sin embargo, tema de los que en primera línea interesen a nuestro objetivo. Por ello, no lo abordaré, máxime cuando ya existen algunos trabajos enfocados en esta vertiente (Barreiro, 1996, pp. 76-80; Montero, 1972, p. 191).

Volviendo sobre la vara, otro aspecto a destacar es el interés que suscitó entre los pretendientes de corregimientos y alcaldías mayores que pululaban por las oficinas y covachuelas de la Corte, pues al anexionarle la auditoría de Marina con el consiguiente fuero, potestades y dotación revalorizó su cotización. En realidad, ya antes de que se tomara esta medida captó la atención de los servidores regios presentes en Galicia. De hecho, en cuanto se tuvo conocimiento en el reino de la incorporación de dichas localidades al realengo, el entonces corregidor de Vivero, Bernardo Ramírez de Arellano, pidió al rey que anexionara a su corregimiento el de Ferrol-La Graña, presuponiendo que se crearía una vara de este tipo. Aparte de sus méritos y los de su progenitor al servicio de la Corona, adujo, por un lado, la pobreza de la vara vivariense, no siendo rentable siquiera para la asistencia diaria, de ahí —aducía— que a veces no hubiera candidatos para ocuparla; y, por otro, la cercanía de ambas poblaciones, que facilitaba su gestión[18]. El monarca solicitó informe sobre la propuesta, entre otros, de la Cámara de Castilla. Desconozco cuál

16. AHN, Consejos, 13265, exp. n.os 1 y 2.
17. AHN, Consejos, 13265, exp. 4.
18. AHN, Consejos, 13265, exp. 1.

fue su dictamen. En cualquier caso, y pese a la veracidad de los argumentos del interesado —el corregimiento de Vivero era el de menor «rango» entre los gallegos y más de la mitad de los electos en el periodo 1587-1667 no lo aceptaron (López Díaz, 2016, p. 131)—, la solución que adoptó, seguramente con el beneplácito del secretario de Estado y del Despacho Universal José Patiño, fue otra: por los citados decretos de 1734 encargó la gobernación de la capital departamental a dos tipos de jurisdicciones (la ordinaria y la castrense de marina), igual que después haría en la villa de Guarnizo (Santander), sede de otro Astillero real[19]. ¿Por qué razón?

Motivos económicos son los esgrimidos en casi todos los documentos de la Cámara y de la Secretaría de Marina para justificar la unión de la alcaldía mayor de Ferrol-A Graña y la asesoría jurídica departamental, pues el concierto llevaba aparejado un sueldo de 1 000 escudos de vellón anuales[20] imputados a la Tesorería de Marina por ambos desempeños. Por fuerza fue la principal causa, y en ello ha insistido la bibliografía al uso achacándolo a dos hechos. Uno, que fueran dos localidades de reducidísimas dimensiones: hacia 1717 Ferrol apenas contaba con 225 vecinos y A Graña bastantes menos, con la particularidad de que, cuando después de los años 1730 se atisban cambios por la elección de A Graña como apostadero real, aquella se convirtió en una especie de barrio residencial para su población al no poder alojarlos, aunque su verdadero crecimiento demográfico no será hasta después de 1750, cuando se ubica allí el Arsenal (Martín, 2005, pp. 42-43; 2008, pp. 44, 46-56; Vázquez, 2007, pp. 102-103; 2018, pp. 16-17)[21]. Y el otro, por carecer el ayuntamiento prácticamente de *bienes de propios* y recursos (Granados, 2011, pp. 101)[22], no mejorando la situación hasta el año 1765, cuando, con el apoyo de las autoridades navales, aquel obtuvo autorización real para imponer un arbitrio de 4 maravedís en azumbre del vino introducido en la villa para financiar la reedificación de la iglesia parroquial (Montero, 1972, p. 193; Santalla, 1991, p. 48)[23]. Después fue

19. AGS, SMA, 194-1, Año 1773. Ignoro cuándo se agregó la auditoría marítima a la alcaldía mayor en Guarnizo. No encontré referencia en la bibliografía consultada, ni siquiera en Maruri (2001).

20. Por dotación pertenece a los empleos de la banda media del Cuerpo de Intendencia de la Armada de dicho Departamento: el intendente percibía 500 escudos de vellón al mes, el contador principal y el Tesorero 150 cada uno (Araguas y Abeledo, 2012, p. 96).

21. La cifra de vecinos de Ferrol en 1717 coincide casi con la que da Santalla en 1736 (222 vecinos), ascendiendo en 1752 a 1208 (1986, p. 47). Por su parte, Granados ofrece datos para distintas cronologías entre 1721 y 1797 dispares (2011, p. 151) y A. Vigo, basándose en testimonios cualitativos, para 1753, señalando que apenas alcanzaba los 1500 (1984, p. 136), dígito que hoy parece inflado.

22. Son reiteradas las quejas al respecto; por ejemplo, AHN, Consejos, 13265, exp. 4.

23. Para su administración se creó una junta especial —Junta del Arbitrio de vino— presidida por el comandante general de Marina. El mismo año se estableció el *Peso Real* que el concejo arrendó como *propio* de la villa. ARG, SMA, 204 y 374.

prorrogado y sus fondos se destinaron a otras actuaciones municipales[24]. Resumiendo, inciden en la precariedad económica, que es evidente para todos.

No obstante, mi percepción es que, en la decisión regia, luego de efectuar el monarca las consultas pertinentes, pesaron también otras razones encaminadas a favorecer la tarea de las autoridades de la Armada allí. Siendo como era El Ferrol la capital de un Departamento naval y A Graña sede de un complejo militar, no es aventurado pensar que la duplicidad funcional del nuevo magistrado se considerara asimismo un factor doblemente positivo en términos políticos. Primero, al compaginar funciones de las dos jurisdicciones allí concurrentes —la ordinaria, a la que estaba sometida la población local en general, y la *privativa* de Marina que gozaban los aforados recién llegados (trabajadores del arsenal, autoridades delegadas…) y que afectaba a los asuntos del gobierno militar y económico del Arsenal y del Departamento— podía ser un medio eficaz de evitar conflictos y favorecer la convivencia entre ambas, argumento que hábilmente ya había sido utilizado para los intendentes en la Ordenanza de 1718. Nada excepcional, por otro lado, en el contexto de un modelo político donde, como ya señalé, no siempre existía una indiferenciación orgánica ni siquiera una diferenciación clara por ámbitos incluso mediada la centuria dieciochesca, salvo en los de Guerra y Hacienda, aunque tendencialmente se apuntara (Nieto, 1986, pp. 91-95). A mayores (segundo), era una forma de situar a la máxima autoridad civil de dichas villas bajo la cadena de mandos de Marina, empezando por los responsables marítimos ferrolanos, hasta llegar a la Secretaría de Estado y del Despacho Universal y el Consejo del ramo[25]. Sobre el terreno, podía facilitar la labor de las autoridades departamentales y sus buenas relaciones con las autoridades locales; claro que también subordinaba a un empleado militar, aunque solo fuera un auxiliar o asesor jurídico, a la tutela de los órganos de jurisdicción ordinaria, permitiéndoles interferencias.

¿Cuestión de necesidad o de necesidad-oportunidad? Técnicamente unir la auditoria departamental a la vara de alcalde solventó un problema; incluso resultó provechoso para los planes inmediatos e intereses políticos de la monarquía, pudiendo facilitar la convivencia entre poderes e instituciones. Pero la práctica enseguida pondría al descubierto la otra cara de la moneda; esto es, las complicaciones y tensiones derivadas de la singularidad o duplicidad funcional de la alcaldía mayor —verdaderamente, triplicidad, pues el titular era además capitán (título que necesitaba como corregidor, expedido por la Secretaría de Guerra) y auditor de Marina[26]— que no fueron pocas. Por añadidura, estas aparecieron desde muy pronto; ya con la provisión del oficio.

24. AHN, Consejos, 13265, exp. 19; AGS, SMA, 374, Año 1768 (Nueva población de Ferrol).
25. AGS, SMA, 194-1, Años 1734-1747.
26. AGS, SMS, 194-1, Años 1747-1748 (01/02/1747).

El nombramiento lo hacía el rey y la propuesta de candidatos, siendo el oficio plantar la vara, correspondía a la Cámara de Castilla, encargada de presentarle una terna de letrados para elegir. Sin embargo, esta propuesta no era vinculante y, de hecho, la Secretaría de Despacho de Marina y en la etapa del Almirantazgo del Infante don Felipe su secretario el marqués de la Ensenada, el Auditor General y/o el ministro de turno encargado de los asuntos de Estado y/o Marina pudieron intervenir en el proceso e influir en su decisión, a veces consultados por el monarca o por otros procedimientos al uso, no siempre reglados; y cuando no pudieron hacerlo mostraron su malestar. Todas las alternativas resultaban problemáticas. Pondré algunos ejemplos.

Como en la provisión de otras alcaldías mayores y corregimientos, el rey a veces designó a sujetos no propuestos por la Cámara, atendiendo a recomendaciones, el patronazgo, servicios prestados, etc. (López Díaz, 2016, p. 154). Concretamente, dos de los nueve titulares que ocuparon la vara en los casi cuarenta años que estuvo ligada a la auditoría naval (1734-1773) no fueron presentados por dicho organismo y en otro caso el seleccionado fue apadrinado por el secretario del Despacho de Marina. Los tres eran especialistas en leyes con un perfil muy específico: veteranía en el ejercicio de alcaldías mayores o corregimientos letrados, praxis en el desempeño de comisiones y cierta experiencia en la asesoría jurídica de asuntos de Marina. La cronología de sus mandatos es asimismo elocuente. José Benito de Figueroa fue el primer alcalde mayor-auditor departamental (1734-1740); y Francisco Xavier González de Estrada —quien antes fuera corregidor de Betanzos y de Ourense (López Díaz, 2016, pp. 165, 166)[27]— será designado en 1754, tras iniciarse las obras de construcción del Arsenal en Ferrol, llamado a sustituir al de A Graña[28]. No por casualidad, el primero fue elegido por recomendación del comandante general del Departamento y gobernador militar del Cuerpo de Armada Francisco Cornejo, al que Patiño solicitó parecer *reservadamente* sobre la terna de la Cámara donde no figuraba. En su informe hizo constar que el susodicho era la persona idónea para el cargo, pues, además de abogado de la Real Audiencia, era «hombre de literatura» (instruido en leyes), acreditado y tenía experiencia previa por haber ejercido ya como «asesor» suyo y del intendente de Marina[29]. En cuanto a González Estrada, también contó con el beneplácito del entonces comandante general, Francisco de Orozco, quien, en junio de 1757, próximo a concluir su mandato, escribió por vía reservada al secretario de Marina Julián de Arriaga pidiendo que le fuese prorrogado otros tres años, por «su buen juicio, conducta y desempeño» (garantía de su honestidad) y por tener conocimiento práctico en asuntos de Marina adquirido

27. AGS, SMA, 194-1, Fecha 14/09/1754.
28. AHN, Consejos, 13265, exps. 2 y 9.
29. AGS, SMA, 194-1. Años 1734-1747.

en el mismo empleo. Evidentemente, Arriaga hizo llegar su petición Fernando VI y este aprobó la prórroga sin consultar a la Cámara, limitándose a comunicárselo para que lo publicaran[30].

En suma, el nombramiento de titulares no siempre se efectuó conforme a lo decretado. No solo porque el rey, a veces, obviara la proposición de la Cámara, concediendo *gracias* o atendiendo las recomendaciones de las autoridades navales ferrolanas; y otras, les pidiera su parecer sobre los candidatos presentados por aquella. También porque en ocasiones se apoya en los órganos de gobierno de la Marina o ministro de turno y estos «influencian» su decisión desde el despacho (*reservadamente*) o vía consulta. Como en tantas otras ocasiones, no hay una línea continua ni una regulación clara, sino un modo de proceder a veces opaco y fluctuante en el tiempo. Por lo que he podido ver depende, entre otros factores, de la arquitectura del poder gubernamental, de quién decide sobre los asuntos de la Armada y de quien ocupa la Secretaría de Estado de Marina[31]. No puedo detenerme a analizarlos uno a uno. Baste subrayar que la mayor intermediación de las altas instancias de la Armada en los nombramientos coincide con el «ministerio» de Patiño al frente de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Marina. Luego, se reeditará con Campillo y, sobre todo, a partir de 1750, cuando la Corona de la mano de Ensenada escoge Ferrol como enclave donde construir el Gran Arsenal de Marina y se aprueban las obras para su inicio, dando lugar a una febril actividad constructiva (Vigo, 1984; 2008, p. 69; 2016, pp. 51-68). *Grosso modo*, concuerda con la cronología los dos casos señalados. Añado un tercero: el licenciado Fernando Vivero Sánchez, nombrado en octubre de 1767. Iba incluido en la terna de la Cámara, en la que entró y salió elegido por recomendación de Julián de Arriaga, secretario del Despacho de Marina[32].

Con independencia del procedimiento empleado, el agraciado para tomar posesión de ambos cargos debía efectuar ciertos trámites, que, como la elección, eran más complejos de lo normal. Primero, obtener la acreditación. ¿Quién debía expedírsela dado que aunaba dos naturalezas jurisdiccionales? Consultado el rey a raíz del primer nombramiento, dispuso la doble titularidad (febrero de 1735); orden que el ministro Patiño, seguramente su mentor, comunicó al cardenal Molina, gobernador del Consejo de Castilla[33]. O sea, la cédula de la vara la despachaba la Cámara por su Secretaría y la de auditor la de Marina. Hasta donde sabemos no se reguló el modo de proceder para esta gestión. Así que surgirán nuevas incidencias ya con quien

30. AHN, Consejos, 13265, exp 10. AGS, GJ, 155; https://eltiempodelosmodernos.wordpress.com/ (entrada 1757-6-28-arriaga).

31. Para la etapa del Almirantazgo, Pérez, 2004, pp. 458-459.

32. AHN, Consejos, 13265, exp 13. AGS, SMA, 194-1. Años 1760-1774.

33. AGS, SMA, 194-1 (De 05/10/1742 a 01/08/1747): El Pardo, 25/02/1735, de Patiño al Gobernador del Consejo (Copia de 03/08/1742).

sucede a Figueroa, Isidro Ruiz de Prado, abogado de la Chancillería de Granada y de los Consejos y con experiencia como alcalde mayor de Granada y corregidor de Alcaraz, pero sin servicios militares de guerra o de marina[34]. Había sido propuesto por la Cámara y nombrado por resolución regia el 30 de octubre de 1741. Dándole cumplimiento, aquella le expidió el título de alcalde mayor, pero no el de auditor; razón por la cual el afectado recurrió al monarca. Felipe V ordenó a Molina que le expidieran el título y este, a su vez, dio traslado de su mandato a Campillo, quien replicó en tono airado (octubre de 1742) mostrándose contrariado con la forma de proveerse el cargo: argüía que con solo la consulta no se sabía el motivo por el que la Cámara presentaba al rey sujetos para la alcaldía mayor y auditoría de Marina, máxime no constando los méritos de los candidatos. Y aprovecha para recordar que la asesoría la confería la Secretaría de Despacho de Marina[35].

Lo que se desprende de este cruce de misivas es un clima de tensión entre *ministerios*. Seguramente, por haber conferido el rey la vara como un mero corregimiento, siguiendo la letra de la ley, que nada especificaba de consultar con las autoridades marítimas. Desconozco si el monarca pidió a Campillo su parecer, aunque no creo. Parece incluso que no tenía conocimiento del nombramiento. En todo caso, es obvio que no consideraba idóneo al candidato por carecer de práctica fuera de la jurisdicción ordinaria. Y también es una señal inequívoca de su desagrado tanto por la preferencia otorgada en la provisión a la Cámara de Castilla (¿o no logró influir en su voluntad al elegir?) como porque, mediante esta designación, el Consejo de Castilla podían injerirse en la esfera judicial de Marina, aun siendo un oficio auxiliar. Hay un dato elocuente que, pienso, puede ayudar a explicarlo: Campillo, ya secretario de Hacienda, logra en esas fechas reunir en su persona también las de Guerra y Marina, después de que el 11 de octubre de 1741 Felipe V decidiera el cese de Casimiro Ustáriz en Guerra y de José de la Quintana en Marina e Indias y le asignara a él estas dos secretarías del despacho, con lo cual su poder empezó a asimilarse al ostentado por Patiño (Cebreiro, 2024, p. 371; Escudero, 2001, vol. 1, p. 111; Pérez, 2018, p. 47; Perona, 1999, p. 134). Su pretensión era acumular todo el poder ejecutivo, incluida la Secretaría de Gracia y Justicia, que, de ocuparse de todos los negocios que él consideraba acertados darle según su organigrama ministerial ideal, dejaría vacío de contenido al Consejo de Castilla (Castellano, 2006, pp. 125-127). Además, a diferencia de su sucesor, el marqués de la Ensenada, quien, mirando a Francia, defendía que en la magistratura hubiera tanto togados colegiales como manteístas atendiendo a sus cualidades (Gómez, 1996, p. 227; Rodríguez, 1878,

34. AGS, GJ, 147 (La Cámara, 30/01/1741); https://eltiempodelosmodernos.wordpress.com/ (entrada 1741-El Ferrol-Felipe V).

35. AHN, Consejos, 13265, exp. 3 (Campillo a Molina, 31/07/1742; Molina a Campillo, 04/08/1742; Campillo, San Ildefonso, 05/10/1742).

pp. 94-95, 132, 134). no estimaba precisamente a los hombres de leyes, queriendo arrebatarles indirectamente su poder, desdeñaba los juristas y defendía a los políticos y el gobierno a través de las Secretarías del Despacho.

En la práctica todas estas diligencias demoraron la toma de posesión de Ruiz de Prado durante más de un año[36]. Algo inusual, pues incluso con las prórrogas que solían pedir los agraciados (2-4 meses), el preceptivo juramento y la toma de posesión en el Consejo —con ocasionales dispensas para hacerlo ante el regente o el gobernador de la Real Audiencia, alguna «comprada» con dinero[37]—, su llegada a la villa ferrolana no solía retrasarse más de cuatro o cinco meses. Sin embargo, antes debían cumplir con otro requisito no menos importante para el monarca: pagar la *media annata*, un asunto que inevitablemente también necesitó aclaraciones.

Antes de expedir el primer título, la secretaría de la Cámara ya pidió al Consejo de Hacienda que indicase el importe a pagar; y este, previo informe de la Contaduría General y del fiscal, lo fijó en 90 767 maravedíes de vellón (68 000 por la mitad del salario y los 22 676 restantes por el tercio de los honorarios regulados como aprovechamientos de la vara)[38]. Volverá a suceder lo mismo en 1773, cuando se separaron los oficios. Al quedar la alcaldía sin retribución fija tuvo que modificarse la tasación. Esta vez el Consejo estableció el monto en 10 ducados junto con la obligación de afianzar el valor justificado por los aprovechamientos. El titular de la vara recurrió la tasación, alegando que la plaza carecía de poyo pese a tenerlo solicitado, pero aquel, luego de pedir información al entonces intendente de Galicia, confirmó su dictamen[39]. Es evidente que en la nueva valoración se contemplaron los emolumentos de juzgado, pero también la revalorización de la alcaldía derivada del crecimiento demográfico de la villa posterior a su creación, pues, siendo el número de negocios donde podía intervenir muy superior, también lo eran las costas procesarles y los derechos percibidos. Ciertamente, la mayoría de la población era aforada (Martín, 2005, pp. 42-43; 2008, pp. 38-44) y esta superposición de jurisdicciones, como argumentaba el afectado, resultaba lesiva para el producto del poyo y la justicia ordinaria, por las mayores limitaciones en este ámbito a su actuación en primera instancia; unas limitaciones que no habían tenido sus predecesores por ser, además de jueces ordinarios, auditores de Marina. Aun así, lo estipulado se ratificó tras el Decreto de marzo de 1783, que, entre otros aspectos, escaló los corregimientos y alcaldías mayores en clases[40], y la Instrucción de mayo de 1788, que dio un paso más en la

36. AGS, SMA, 194-1 (1734-1742: Ferrol, 12/06/1742).

37. Cincuenta ducados es lo que abonó José Benito de Figueroa en 1735 por poder jurar el cargo ante el regente de la Real Audiencia gallega, aplicados al gasto de la octava a celebrar ese año en el convento de los Capuchinos de la Paciencia de la Corte. AHN, Consejos, 13265, exp. 2.

38. AHN, Consejos, 13265, exp. 2.

39. AHN, Consejos, 13265, exp. 17.

40. *Novíssima Recopilación*, 7, 11, 29.

profesionalización de la carrera, equiparando al alcalde mayor con el corregidor letrado. En la nueva gradación que entonces se estableció la vara de Ferrol fue categorizada en el rango más bajo o de primera clase («entrada»), regulándose su valor en 1788 en 13 400 reales anuales, incluidos los emolumentos del juzgado; o sea, por encima de los 11 000 anuales de una alcaldía de entrada normal —dotación que se le asignó en 1783 sobre el arbitrio de cuatro maravedíes en azumbre del vino[41]— y bastante más que plazas catalanas de su misma categoría (Cerro, 2001, p. 307)[42].

Con todo, el principal desafío de los titulares de la vara fue funcional al acumular a su empleo de jueces ordinarios y corregidores una comisión sujeta a otras instancias y tribunales diferentes a los suyos, con capacidad también para poderlos juzgar y deponer. Así pues, lo que de antemano era una condición ventajosa respecto a otras similares, con el tiempo se convirtió en un estorbo y una fuente constante de fricciones y conflictos de competencias. Aparte de los actores y aspectos de índole local, algunos tributarios de los propios intereses de la monarquía, en esta deriva influyó el diferente despliegue del reformismo en ambos ámbitos, así como las nuevas disposiciones y reglamentaciones aprobadas por Fernando VI —sobre todo las promovidas por el marqués de la Ensenada— y por su sucesor Carlos III, mayormente en la primera etapa, que afectaron de muy distinta manera a las dos esferas de poder, a sus instancias y oficiales.

4. … A LA SEPARACIÓN DE OFICIOS

En los decretos de 7 y 23 de junio de 1734 se aludía vagamente al cometido de los dos empleos. Como alcalde mayor, al titular le competía administrar justicia y conocer en primera instancia de causas de jurisdicción ordinaria; además, formaba parte y presidía el órgano encargado del gobierno político-municipal de ambas localidades. Su demarcación territorial abarcaba el término municipal con las parroquias aledañas y sus obligaciones, igual que las exigentes cualidades que se le suponen, eran las de cualquier corregidor «letrado»: moderado en el uso de la autoridad, conocedor de las leyes y austeridad en su quehacer (Giménez, 2006, p. 14). Un deber «muy dilatado», hasta no tener «límite las obligaciones de este empleo», decía el jurista y buen conocedor del derecho positivo Santayana y Bustillo en su obra *Gobierno político de los pueblos de España* (1979, p. 165), centrada en el régimen municipal

41. De esta dotación, 600 ducados le fueron asignados por Real Provisión de 29/09/1777 y los 500 restantes se incrementaron por otra de 06/09/1785. AHN, Consejos, 13265, exp. 24.

42. Este autor posee varios trabajos sobre varas de alcalde mayor y sus tenientes para distintas cronologías y localidades catalanas (Barcelona, Tarragona, Girona, Lérida, Manresa, Vic, Mataró, etc.) que obviamos citar por limitación de espacio. Para títulos: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=9599

patrio de la primera mitad del siglo XVIII, que escribió cuando ya se alzaban voces denunciando el excesivo egoísmo de muchos y su inutilidad en la administración.

En cuanto a su labor como auditor, era el encargado de «asesorar» jurídicamente al gobernador militar del cuerpo de la Armada, estando bajo sus órdenes en la materia, como el de Cádiz, su modelo en este aspecto; o sea, debía informar tanto la actividad judicial y las causas de Marina y de los aforados de la capital, como las apeladas ante los juzgados del comandante y del intendente procedentes de otros lugares (partidos o subdelegaciones) del Departamento. Así lo disponía también la normativa aprobada por el Infante Almirante en 1737, en el punto 21 de la Instrucción de 4 de noviembre relativa a los auditores de los departamentos (Vázquez, 2007, pp. 160-161)[43]. De igual modo, en las Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1748, elaboradas en la etapa final del Almirantazgo y publicadas coincidiendo con su disolución; concretamente, en la disposición 25 del Tratado V («De la disciplina, y materias de Justicia»), título I («De la policía, y disciplina que debe observarse à bordo de los Vageles de Guerra»), que trataba sobre la jurisdicción civil y criminal del jefe del cuerpo de la Armada en asuntos de guerra y de sus empleados y sobre la forma de sustanciar las causas él o sus delegados, indicando que debían hacerlo «con parecer de los Auditores de Guerra de Marina, o de otros asesores de Letras, donde no los huviere»[44]. Un paso más en dicho sentido se dio con la posterior *Ordenanza para el régimen y fomento de la marinería matriculada* de 1751, al crearse las provincias marítimas, que fijó la forma de nombrarlos y también precisó sus funciones en el artículo 154: además del «Auditor general», ordenaba que hubiera otro, también letrado, en cada cabeza de partido del Departamento para solventar los pleitos y demás asuntos pertenecientes al Juzgado de Marina, especificando que sería nombrado por el rey a consulta del intendente de Marina. Como asesor de su ministro, se le encomendaba «substanciar todas las causas de oficio o contenciosas, civiles y criminarles hasta ponerlas, en término de sentencia», debiendo entregarle autos detallados con citación de ordenanzas, decretos y órdenes particulares, aunque su parecer no fuera vinculante en los fallos (Vázquez, 2007, p. 162). Ni estos ni el auditor general del Departamento tenían, por tanto, facultades judiciales (jurisdicción), pero, como «expertos» legales, sí podían influir en las resoluciones judiciales de los superiores a los que asesoraban.

Este es el marco normativo general de dicho empleo. Pero en el caso ferrolano solo aplicó de manera parcial, por estar anexionado y ejercerse acumulativamente

43. En el caso estudiado se habla a veces de auditor general. Según Vázquez Lijó, era el capitalino, pero existía otro en los partidos de Cuatro Villa y del Principado de Asturias (2007, p. 161).

44. *Ordenanzas de Su Magestad para el gobierno militar, político, y económico de su Armada naval*. Madrid: Imprenta de Juan de Zúñiga, 1748, 2 vols., I (Parte primera), p. 251.

junto con la vara de alcalde mayor, teniendo rasgos propios uno y otro empleo. Ya aludí a los concernientes a su provisión, el control de un buen desempeño y la cadena supervisión y dependencia derivada del dimorfismo. Sobre el primer aspecto, al hilo de lo que acabo de señalar, añadiré un último apunte: aunque el rey a veces designara alcaldes mayores-auditores sin contar con las Cámara de Castilla, siguiendo los criterios, parecer o recomendación de los responsables civiles y militares ferrolanos o del ministro del ramo —pudiendo aproximarse por esta vía al modo de nombrar los auditores en otras capitales departamentales e incluso concordar con lo regulado en 1751 para designar a los de los partidos y provincias marítimas, también designados por el rey, pero a propuesta del intendente de Marina o con su aquiescencia (Vázquez, 2007, p. 163)— la propensión fue más bien de hacer los nombramientos según lo establecido por la real orden. Hasta donde sé no siempre se consultó con las autoridades de la Armada. Es por esta razón que los agraciados tuvieron un perfil profesional heterogéneo y bastante diversificado, que no concuerda con el de los titulares de otras varas letradas ni con el de otros auditores marítimos; una cuestión, en mi opinión, merecedora de un estudio pormenorizado. Hablo de la etapa de unión de ambos empleos, pues repercute en su dedicación (a tiempo parcial para los dos), su labor y la calidad de su trabajo, también necesitado de un análisis exhaustivo.

Llegado este punto, cabe preguntarse: ¿Por qué se efectuó la escisión? ¿Fue por estas circunstancias o un gesto de coherencia con una idea de gobierno? Según el oficio remitido por el secretario del Despacho de Marina Arriaga al todopoderoso presidente del Consejo de Castilla Aranda, Carlos III aprobó la medida en enero de 1773[45]. Desconozco si la medida sorprendió a los camaristas. Posiblemente no, pero, que sepa, el monarca tampoco les consultó. Desde luego, no parece haberse tomado de la noche a la mañana. Las fricciones y beligerancia entre instancias y jurisdicciones por el asunto venían de largo, igual que las peticiones de las autoridades navales ferrolanas clamando por la separación. Solo era cuestión de tiempo y cristaliza cuando las circunstancias son propicias. Cumple rastrear los antecedentes.

El acople de encargos resultó difícil desde el principio, pero la fina línea de consenso quebró coincidiendo con la llegada del marqués de la Ensenada a la cúspide gubernamental, por su concepción del poder y empresa reformista —particularmente en la Marina, que hicieron pensar a los mandos departamentales no ya en la posibilidad— sino la necesidad de separar la auditoría de la vara de alcalde mayor. La primera tentativa firme se materializó en agosto de 1749, de la mano del intendente de Marina Bernardino Freire. Fue él quien, recurriendo a la vía reservada, hizo llegar a Ensenada una solicitud de Bernardo de Lago Bermúdez –abogado de la Real Audiencia y auditor interino– pidiendo que se le concediera el puesto en

45. AHN, Consejos, 13265, exp. 16.

propiedad, la cual acompañó de otra misiva suya respaldando su petición[46]. En ella exponía que el titular, Damián de la Peña, se había ausentado de la villa hacía más de un año con «solo la autorización del Consejo de Castilla» (¿indebidamente?), y justificaba la petición del interesado resaltando su capacidad y compromiso, pues no solo había seguido las dependencias de justicia vistas tanto en el Juzgado de la Intendencia como en el de la Comandancia General, sino que también había ejercido como «fiscal» de la Intendencia en las causas de oficio desde 1746 sin recibir gratificación alguna[47]. Pero su objetivo iba más allá: buscaba cambios. Por eso, añadía, dado que solo faltaban unos meses para terminar el mandato de titular de la vara-auditoría, convendría, por lo expuesto en otras ocasiones, que se estableciera en Ferrol un auditor de Marina «de pie fixo» —o sea, a tiempo completo— como en los Departamentos de Cádiz y Cartagena. Claramente, pretendía disociar la auditoría de Marina del «corregimiento», término que usa intencionadamente queriendo resaltar las funciones gubernativas de la vara por encima de las judiciales. De ahí que insistiera en los graves perjuicios derivados de la unión de empleos, recalcando que la renovación trienal de la alcaldía impedía a los electos adquirir conocimientos y práctica en asuntos de Marina con la consiguiente afectación en la resolución de sus causas, donde reposaba la clave de su propuesta y del apoyo prestado al solicitante. En realidad, Freire hizo suyos gran parte de los argumentos de Lago. Puede incluso que fuera el impulsor de su iniciativa y que esta descansara no (solo) en la conveniencia o su excelencia, sino (también) en un vínculo de amistad. Desde luego, hay un hecho que prueba que mantenían una «buena» relación, directa, que permitía el flujo de información; y es que, como fundamentos jurídicos para solicitar la plaza de auditor, en su escrito el susodicho adujera —no por casualidad— dos normativas que incumbían directamente a responsabilidades de la Intendencia: un capítulo de la reciente Instrucción de la matrícula que mandaba a los intendentes de Marina que para resolver en materia contenciosa se valieran de letrados de su satisfacción, «los que serían atendidos para sus ascensos» según el informe que aquellos hiciesen de sus méritos y destrezas; y otro de una Real Orden de 1738 remitida por Ensenada a Freire, donde constaba que para conformar el Juzgado de Marina era preciso disponer de un «fiscal honorario». Se entiende así que tanto en su pedimento como en la correspondencia de Freire se incidiera en su deseo de «servir al rey»: que no solo había ejercido y ejercía como promotor fiscal en las causas de oficio y asesorado en la resolución de otros delitos juzgados por el intendente, sino que también había suplido en sus ausencias a los auditores titulares, sin pedir ni en uno ni en otro caso

46. AGS, SMA, 194-1. Fecha: 05/08/1749.

47. Fecha en la que Bernardino Freire envía un memorial al monarca, notificándole su nombramiento como fiscal honorario sin sueldo (AGS, SMA, 194-1. La Coruña, 07/12/1746).

nada a cambio. Que el intendente le avalara en premio a su trabajo cuadraba además con la normativa que regía en la provisión del conjunto de auditorías de Marina.

Como secretario de Marina, Ensenada respaldó la propuesta y la elevó ante el soberano. Pero este postergó la decisión requiriendo otros pareceres, pues el asunto también incumbía a la Cámara y el Consejo de Castilla. Además, cuando correspondió nombrar al nuevo alcalde mayor, si bien lo hizo siguiendo el procedimiento establecido e incluso eligió a uno de los candidatos presentados por la Cámara (11/05/1750), introdujo una novedad: mandó despacharle solo el título de alcalde y que sirviera la auditoría como interino. Por otro lado, pidió al comandante y al intendente del Departamento de Ferrol que le observasen y enviasen informes *reservadamente* para ver si podía ser un «buen auditor [titular]»[48]. La respuesta del intendente fue de lo más retórica: avaló su valía (lo consideraba una «persona integra y con deseos de acertar»), observando que su principal traba era deber compaginar el empleo con la alcaldía-corregimiento que le subordinaba a la autoridad de la Real Audiencia, pues, por las multas que solía imponerles, procedería «con la [misma] timidez de sus antecesores en el desempeño de la Auditoria». Con lo cual, concluía, continuarán los enfrentamientos y tensiones con las justicias ordinarias e incluso irán a más por las obras del puerto. A mayores, incidió en las otras justificaciones señaladas para reclamar la separación de los oficios que ocasionaban lentitud y retraso en la resolución de las causas de Marina. Lo que cuestionaba, por tanto, no era tanto el grado de compromiso del titular con el cargo, sino su dedicación (parcial o limitada e interesada) —o mejor, el modelo establecido; se entiende, la anexión a la alcaldía— que inevitablemente repercutía en su capacidad para desempeñar la auditoría. Por su parte, el titular, Salvador de Sevilla, reclamó este empleo en propiedad ante la Cámara y, poco después, elevó la misma petición a Ensenada como secretario del despacho de Marina. En ella alegaba la carencia de remuneración de la vara y los antecedentes, detalla los méritos y servicios prestados a la Corona y, después de la despedida formal de rigor, añadió una reveladora frase buscando su aprobación: que, si lo estimaba conveniente, para cumplir con plena dedicación la asesoría jurídica de Marina, nombraría un teniente de corregidor que se ocupase de los abastos, su principal tarea en la gestión municipal, que también afectaba a los aforados[49]. El informe de la Cámara de Castilla sobre el asunto refrendó su demanda: debía conferírsele la auditoría como a sus predecesores o bien suprimir la vara por carecer de ingresos. No me consta que se consultara formalmente con los órganos de Marina, aunque su parecer se tuviera en cuenta. Sencillamente, al poco tiempo se le despachó a aquel el título de auditor en propiedad con la conformidad regia,

48. AGS, SMA, 194-1 (14/09/1754).
49. AGS, SMA, 194-1 (Ferrol, 08/09/1750).

desechándose de esta manera desunir los oficios. ¿Por qué razón? ¿Qué hizo que Fernando VI tomara esta decisión?

Sorprende, cuando todo parecía a favor, siendo como era la medida del agrado del preeminente ministro de Marina e Indias. A mi juicio, no es mera coincidencia, ni fue solo por motivos económicos. Semeja que también entraron en juego los deseos y la más que probable presión de los órganos de los que dependía la vara de alcalde mayor y el gobierno interior del país; o sea, de la Cámara y el Consejo de Castilla y de la Secretaría de Gracia y Justicia, sobre las que ejercía un importante poder el padre Rávago, confesor regio, aun cuando este poder fuera indirecto, al haber mediado en el nombramiento de los gobernadores del citado Consejo (Alcaraz, 1992, pp. 194-197), y un tanto mermado por el restablecimiento de los intendentes, que eran nombrados por el citado secretario de despacho de Hacienda o el de Guerra. No en vano tenía acceso directo y gozaba de la confianza del rey, pudiendo influir en materias que no eran de su terreno (Castellano, 2006, pp. 146-149); más siendo como era entonces presidente del citado Consejo el obispo Díaz Santos Bullón, con poco peso político y hechura suya. Lo señalado no impidió que mantuviera buena relación con el marqués de la Ensenada: estamos en la etapa de un equipo de gobierno que expresivamente ha sido denominado «Triunvirato» (Rávago-Ensenada-Carvajal) (Castellano, 2006, pp. 139-149). Y dentro de esta tríada, conviene recordarlo, Ensenada a veces se valió del propio Rávago para hacerle llegar algunos de sus proyectos al rey (Gómez, 1996, p. 105; 2019, pp. 36-37). Simplemente, hubo un reparto de poder y se respetaron los respectivos ámbitos de influencia.

Así pues, fue necesario esperar a los años 1772-1773. Es entonces cuando, ante las continuas quejas y representaciones llegadas sobre todo a la Secretaría del Despacho de Marina y al Consejo de Guerra, tanto de quienes ejercían los citados empleos como de las máximas autoridades de Marina del departamento ferrolano y del partido de Santander, Carlos III valoró con sus consejeros separar las auditorías de Marina de Guarnizo y Ferrol de las respectivas alcaldías mayores[50]. Estas denuncias, que daban continuidad a las de las dos décadas precedentes, pusieron al descubierto la cada vez mayor tirantez y frecuentes disputas existentes entre la jurisdicción ordinaria y la de Marina[51], por un lado, y de los auditores-alcaldes mayores con sus superiores navales —los comandantes generales y los intendentes de Marina en el caso del departamento de Ferrol, y el ministro subdelegado del Intendente de Marina en la capital cántabra y Arsenal de Guarnizo en el segundo[52]—, por otro. Omitiré aquí

50. AGS, SMA, 194-1 (El Pardo, 19/01/1773).

51. A modo de ejemplo, Archivo Municipal de Ferrol (AMF), C-396, exp. 66; C-89/ exp. 2; C-378-A, exp. 1; para Santander, AGS, SMA, 194-1 (Guarnizo, 06/12/1770).

52. AGS, SMA, 194-1 (Guarnizo, 04/10/1770; Guarnizo, 06/12/1770; San Ildefonso, 02/08/1771; El Pardo, 19/01/1773).

los factores específicos de esta creciente conflictividad jurisdiccional, al no ser el foco central de este trabajo, centrándome solo en sus repercusiones para el caso.

En lo que aquí nos interesa, baste señalar que a nivel local estas tensiones aumentaron sensiblemente durante el segundo mandato como alcalde mayor-auditor de Francisco Xavier Basadre (1771-1774), por sus continuos choques con el comandante general interino Manuel Flórez y, sobre todo, con el intendente Pedro Antonio de Hordeñana. Tanto aquel como estos hicieron llegar sus correspondientes protestas y reclamaciones al secretario del Despacho de Marina o al auditor general de la Armada[53], y en el caso de recursos contenciosos al Consejo. En este contexto, concretamente a principios del año 1772, Flórez elevó sendos memoriales al conde de Aranda como presidente de Castilla y también al secretario de Marina Julián de Arriaga, planteando como perentorio separar los dos puestos. Argüía que la «larga práctica» de los años no solo había variado la «constitución de las cosas», sino que también había mostrado los «graves inconvenientes» que la unión ocasionaba al servicio regio. Entre otros, citaba el hecho de aunar dos jurisdicciones distintas, que defendiéndolas forzosamente obligaba a los agraciados a litigar siempre contra sí mismos; la imposibilidad de ejercer bien las dos comisiones por el notabilísimo crecimiento de asuntos tanto de Marina como los concernientes a abastos, policía y gobernación; y el relevo trienal de los alcaldes, que, por la impericia —e imposibilidad de adquirir práctica—, perjudicaba sensiblemente el trabajo del auditor atrasando la resolución de las causas, considerando que debía confiarse dicha asesoría a juristas expertos en la materia, con los indispensables conocimientos, experiencia y dedicación a tiempo completo. Haciendo hincapié en este punto, recordaba las reiteradas demandas presentadas al rey con quejas similares tanto por sus predecesores como por los intendentes de Marina y, fundamental, que el motivo inicial que justificaba la fusión había desaparecido, pues con los derechos y obvenciones que percibían los titulares de la vara podían sustentarse[54].

Representaciones denunciando problemas similares y pidiendo la separación de oficios fueron elevadas a la Corte por los ministros de Marina de la provincia de Santander desde, al menos, comienzos de la década de 1760; la más reciente, en agosto de 1772 del entonces titular Manuel Ximénez Carmona, quien, además de quejarse de la actuación del alcalde mayor como auditor, subrayaba los perjuicios

53. En 1738 lo fue Pedro Salvador de Muro (ver, *supra*, nota 10), que tuvo una larga carrera de honores y méritos sirviendo a la monarquía. Fue consejero del Consejo de Hacienda (1740) y ministro del Consejo de Castilla (1753). Pese a los vínculos profesionales y afectivos con Ensenada y tildarlo entre los caídos en desgracia junto al ministro, siguió teniendo puestos cruciales después, como la Subdelegación General del Superintendente General de Hacienda con Esquilache, y participó en juntas relevantes, siendo recompensado por Carlos III con el marquesado de Someruelos (1761). Véase, en este dossier, el texto de Anne Dubet.

54. AGS, SMA, 194-1 (Guarnizo, 19/01/1773).

de la unión con idénticos argumentos. Fue en este escenario cuando, debiendo proveerse la vara, probablemente instado por el secretario de despacho de Marina, Carlos III sopesó disociar ambos empleos tanto en su caso como en Ferrol. Para ello, pidió a las autoridades marítimas de ambas localidades un informe reservado sobre los ingresos estimados de las respectivas varas. En la correspondencia mantenida, a la primera Carmona le consignaba más de 700 ducados de ingresos anuales (300 de sueldo pagados por la ciudad y el resto de las obvenciones y derechos), más lo percibido como subdelegados de rentas y otras comisiones. Y respecto al Ferrol, Flórez señalaba que, entre los 1 000 reales de auditor y lo obtenido de derechos y obvenciones como alcalde mayor, sumaban los titulares más de 30 000 reales anuales, amén de lo recibido de otros arbitrios. O sea, que las dos eran autosuficientes económicamente.

Habiendo desaparecido la causa que justificó la anexión y teniendo ambos oficios solvencia económica —la auditoría garantizada, conforme al artículo 155 de la Ordenanza de 1751 (Vázquez, 2006, p. 166)—, el tándem podía disolverse, máxime teniendo en cuenta las razones subyacentes. No he visto un pronunciamiento expreso de Arriaga al respecto, quizás el monarca formalmente no se lo pidió. Tampoco me consta que lo hiciera al presidente de la Cámara y Consejo de Castilla, de quien dependía la alcaldía mayor. Aun así, pienso que, como en la iniciativa anterior, el desenlace no fue ajeno a la correlación de fuerzas existente en la alta administración. Significativamente, coincide con un momento en que Aranda se hallaba en sus horas más bajas, al perder la confianza del rey y estar próximo a ser sustituido, mientras que Arriaga, pese a haber quedado menguado su prestigio político tras la expulsión de los jesuitas, sigue al frente del Despacho de Marina (Castellano, 2006, pp. 211-213; Perona, 1999, pp. 258-261). Sobre el particular conviene recordar dos hechos: primero, el asunto le afectaba directamente, por ser los asesores letrados personal de apoyo de las autoridades departamentales en lo contencioso y corresponderle a él proveer los empleos subalternos de los cuerpos militares y en lo político de la Armada (Perona, 1999, p. 228); segundo, la mayor beligerancia por la agregación procedía precisamente de este ámbito. A la cúpula de los órganos de gobierno de Marina nunca le agradó el binomio, lo consideraban lesivo para su jurisdicción, pero tras el ciclo reformador abierto por Ensenada la presión y esfuerzo por desagregar la auditoría se redobló. No tengo constancia escrita de reivindicaciones similares de los alcaldes mayores, ni de la Real Audiencia, su órgano superior en Galicia, pese a las injerencias y continuos conflictos que mantuvieron con las autoridades navales, especialmente la Intendencia, tanto en lo contencioso como en lo gubernativo, incluso cuando estas aumentaron merced al crecimiento demográfico de Ferrol y su entorno (Barreiro, 1996, pp. 83-85). Es más, las quejas y representaciones posteriores pidiendo al rey que reunificara a la alcaldía mayor la auditoría de Marina vinieron de su parte, apelando nuevamente a razones económicas

y prácticas, como el evitar competencias y retrasos en las causas[55]. Lo mismo sucedió en el caso de Santander. En noviembre de 1778 el asunto fue incluso consultado al Consejo de Hacienda, a raíz de lo cual Miguel de Múzquiz, secretario del Despacho del ramo, pidió un informe sobre la conveniencia de volver a vincular la auditoría de Santander a su alcaldía mayor. Intuyo que también se consultó a su homónimo de Marina, pero ni siquiera se contestó[56]. La separación era ya un hecho irreversible.

5. REFLEXIONES FINALES

El periplo de la institución investigada lo resume fielmente el título del trabajo: la Corona anexionó la auditoría del recién creado Departamento naval de Ferrol a la alcaldía mayor de Ferrol-A Graña, creando una especie de «figura bifronte», por motivos esencialmente económicos. Incluso se hizo de la necesidad virtud, considerando la agregación beneficiosa en otros aspectos: eran oficios de justicia compatibles, la unicidad podía facilitar la cohabitación de las respectivas jurisdicciones y se abonaba un único sueldo por desempeñar dos empleos regios, subsanando así las deficiencias de ambos. Esto, unido al lucro de los derechos de juzgado que crecerá conforme lo hace la población, revalorizó ambos puestos. Claro que intrínsecamente la fórmula ideada llevaba aparejados no pocos problemas. El principal, las tensiones derivadas de simultanear un oficial funciones de dos ramos distintos, muchas veces enfrentados y con desigual despliegue reformador, dispositivos y vías de tramitación. Unas fricciones que arreciarán después de 1750, justo cuando empieza a tomar cuerpo el proyecto del nuevo arsenal en Ferrol que acarrea un sensible crecimiento demográfico de la villa y comarcas aledañas, tanto de gentes aforadas de Marina como de no aforados. Esto acrecentó sus respectivos cometidos y, simultáneamente, proliferaron los conflictos jurisdiccionales en el día a día, encontrándose dicho oficial en el centro de una gran parte de ellos. En tales circunstancias las ventajas de compatibilizar oficios, sobre todo en lo funcional, se tornaron inconvenientes.

Claramente, las principales críticas procedieron del mando militar y del cuerpo de Ministerio del Departamento —particularmente, del comandante general y el intendente de Marina— que incidieron en la singularidad de la auditoría y las dinámicas propias de este ramo que no concordaban con las de una instancia judicial ordinaria. Así, cuestionaban el sistema de provisión (híbrido partiendo de la Cámara), la duración de los mandatos (insuficiente para que letrados inexpertos adquirieran cualificación en legislación y temas marítimos), su falta de ecuanimidad, el deficiente desempeño como auditores, que favorecieran a la jurisdicción ordinaria, la dejadez y mayor dedicación al corregimiento, conflicto de intereses en diversos

55. AGS, SMA, 194-2 (Auditores, 20/03/1776).
56. AGS, SMA, 194-1 (Auditores, 19/01/1773).

asuntos y un largo etcétera. No solo juzgaban desacertada la anexión de empleos, sino sumamente gravosa para la jurisdicción castrense, cual que fuera la única (o la más) perjudicada. A nivel local-provincial, se explica en un contexto de creciente expansión y permeación de esta sobre la ordinaria, donde todo giraba en torno al arsenal y la Marina, incluso la gestión municipal. A su vez, evidencia la profunda tensión existente entre instancias de uno y otro poder, y el deseo de fortalecer la jurisdicción privativa marítima a costa de la ordinaria. Claro que en la resolución del asunto participaron otros actores, influyeron otros factores y se entremezclaron otras tensiones existentes tanto dentro del ámbito de la Real Armada como en la cúspide gubernamental de la monarquía. Es obvio que la manera de resolver el primer embate planteado por la separación, siendo Ensenada ministro de Hacienda y de Marina e Indias, no fue indiferente al equilibrio de poder y praxis política del momento. Tampoco parece haberlo sido el desenlace del asunto a la correlación de fuerzas existente en el gobierno en los años 1772-1773.

Esto nos devuelve a la pregunta inicial: ¿Cabe deducir de los hechos analizados que estamos ante un episodio a escala local de la vieja pugna entre la *espada* y la *pluma* en la Marina de Guerra, entre el cuerpo General de Guerra y el cuerpo de la Intendencia)? O bien, desde un plano general, ¿puede considerarse un lance más de la «dialéctica poder civil-poder militar» del XVIII que apunta, como tendencia, al deseo —otra cosa es la práctica— de un «poder militar» *(relativamente)* autónomo diferenciado del «poder civil»? Tomando con mucha cautela los términos entrecomillados y la cuestionable polaridad que trasciende de su significado —no son etiquetas neutras y el problema de la conceptualización de lo militar / civil dieciochesco que se diluye en el amplio especto unificador de la monarquía—, pienso que apunta más a lo segundo que a lo primero, y con matizaciones, por una razón. No hay discrepancias sobre el asunto entre las autoridades departamentales. Si acaso, el más contumaz fue el intendente de Marina, pues por sus atribuciones era quien más friccionaba en el día a día con el alcalde-corregidor y especialmente beneficiado con el deslinde en lo concerniente al nombramiento. No obstante, tampoco creo que deba interpretarse en términos estrictamente antagónicos la oposición entre jurisdicciones e instancias de poder en el caso. Había, efectivamente, en las autoridades departamentales y órganos superiores de Marina un deseo de preservar la jurisdicción privativa contenciosa en dependencias marítimas y las de sus aforados, así como de tener las manos libres para manejarla sin interferencias. Pero en otros asuntos aquí no abordados, caso del arbitrio de azumbre del vino, por fuerza debieron colaborar. Para una valoración más certera convendría tener un conocimiento más profundo tanto de la normalidad institucional, esto es, la convivencia de ambas jurisdicciones, como de los conflictos de competencias surgidos y de la actuación del Consejo de Guerra —no solo la Secretaría de Marina— y del Consejo de Castilla en su caso.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de María López Díaz.

Agradecimientos y financiación

Este artículo se ha realizado al amparo del Proyecto de investigación *El reino de Galicia en la monarquía de Felipe V: instituciones y dinámica política* (HAR2017-83605-P, financiado por la AEI/ FEDER, UE.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

La autora declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Alcaraz Gómez, J. F. (1992). El padre Rávago y las provisiones episcopales en el reinado de Fernando VI: El caso de los gobernadores del Consejo de Castilla y del inquisidor general. *Estudis*, *18*, 173-198.

Álvarez y Cañas, M. L. (2012). *Corregidores y alcaldes mayores: La administración territorial andaluza en el siglo XVIII*. Universidad de Alicante.

Andújar Castillo, F. (1992). Poder militar y poder civil en la España del siglo XVIII: Reflexiones para un debate. *Mélanges de la Casa de Velázquez*, *28*(2), 55-70. https://doi.org/103406/casa19922615

Araguas Álvarez, A., y Abeledo Maristany, R. (2012). *Promociones del Cuerpo de Intendencia de la Armada: Del siglo XVIII al siglo XXI*. Doin.

Barreiro Mallón, B. (1996). Organización administrativa de Ferrol y su comarca a fines del Antiguo Régimen. *Obradoiro de Historia Moderna*, *5*, 69-94.

Baudot Monroy, M. (2018a). Francisco Cornejo, primer comandante del Departamento marítimo del Ferrol (1730-1737). *Tiempos Modernos*, *9*(36), 215-236.

Baudot Monroy, M. (2018b). Los cuentos de don Francisco: Luchas de poder en el Departamento Marítimo de Ferrol (1730-1737). En O. Rey Castelao, R. Castro Redondo y C. Fernández Cortizo (Eds.), *La vida inquieta: Conflictos sociales en la Edad Moderna* (pp. 17-41). Universidad de Santiago de Compostela.

Castellano, J. L. (2006). *Gobierno y poder en la España del siglo XVIII*. Universidad de Granada.

Cebreiro Núñez, J. I. (2024). *Los orígenes del Ministerio de Hacienda: La creación de la Secretaría del Despacho de Hacienda y su evolución hasta el final del Antiguo Régimen (1715-1808)*. Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales.

Cerro Nargánez, R. (2001). Los alcaldes mayores de Cataluña: Una evolución desigual y conflictiva (1717-1808). *Hispania*, *61*(207), 289-314. https://doi.org/103989/hispania2001.v61.i207313

De Bernardo Ares, J. M. (1978). *Los alcaldes mayores de Córdoba (1750-1833)*. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.

Escudero, J. A. (2001). *Los orígenes del Consejo de Ministros en España* (2 vols.). Editorial Complutense.

García Mantecón, F. J. (2021). José Campillo Cossio, 1728: Su pretensión al hábito de caballero de Santiago. *Ascagen*, *25*, 43-72.

Giménez López, E. (1994). El debate civilismo-militarismo y el régimen de la Nueva Planta en la España del siglo XVIII. *Cuadernos de Historia Moderna*, *15*, 41-75.

Giménez López, E. (2006). *Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII: Estudio y repertorio biográfico*. Institució Alfons el Magnànim.

Gómez Urdáñez, J. L. (1996). *El proyecto reformista de Ensenada*. Editorial Milenio.

Gómez Urdáñez, J. L. (2019). *Fernando VI y la España discreta*. Punto de Vista Editores. (Obra original publicada en 2001).

González Alonso, B. (1970). *El corregidor castellano (1348-1808)*. Instituto de Estudios Administrativos.

González Beltrán, J. M. (1993). *El cabildo municipal de El Puerto de Santa María (1725-1734): Un estudio de la institución en su tránsito de señorío a realengo*. Diputación Provincial de Cádiz.

González Beltrán, J. M. (1994). La incorporación de La Isla de León a la jurisdicción real (1729). En *De La Isla a San Fernando: Actas del X Encuentro de Historia y Arqueología* (pp. 109-120). Ayuntamiento de San Fernando.

González Beltrán, J. M. (2004). Del señorío a realengo: Reflexiones sobre la incorporación de El Puerto de Santa María a la Corona (1729). *Revista de Historia de El Puerto*, *32*, 11-25.

Granados Loureda, J. A. (1996). Ferrol na Idade Moderna. En AA.VV., *Historia de Ferrol* (pp.108-230). Vía Láctea.

Granados Loureda, J. A. (2011). Un arsenal para el rey: Ferrol en el Antiguo Régimen (ss. XVI-XVIII). *Nalgures*, *7*, 55-172.

Guimerá, A., y Chaline, O. (2022). *La Real Armada y el mundo hispánico en el siglo XVIII*. UNED - Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

López Díaz, M. (2016). Corregimientos y corregidores de Galicia (1700-1759): Elementos para una panorámica general. En M. López Díaz (Ed.), *Galicia y la instauración de la Monarquía borbónica. Poder y dinámica política* (pp. 123-167). Sílex.

López Díaz, M. (2017). Política de incorporaciones regia y derechos adquiridos: Apuntes sobre legislación y doctrina práctica en la España de los primeros Borbones (señoríos y oficios). En M. Rivero Rodríguez (Coord.), *La crisis del modelo cortesano. El nacimiento de la conciencia europea* (pp. 113-152). Ediciones Polifemo.

López Garrido, J. L. (1999). *La villa de la Real Isla de León (1668-1768)*. Universidad de Cádiz.

Martín García, A. (2005). *Demografía y comportamientos demográficos en la Galicia moderna: La villa de Ferrol y su tierra, siglos XVIII-XIX*. Universidad de León.

Martín García, A. (2008). *Auge y decadencia: Desarrollo económico, cultura y educación en Ferrolterra durante el Antiguo Régimen*. Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Maruri Villanueva, R. (2001). Ensenada y el Real Astillero de Guarnizo. *Brocar*, *25*, 123-136. https://doi.org/1018172/brocar1851

Merino, J. P. (1981). *La Armada española en el siglo XVIII*. Fundación Universitaria Española.

Montero y Aróstegui, J. (1972). *Historia y descripción de El Ferrol*. Gersan. (Obra original publicada en 1858).

Pérez Fernández-Turégano, C. (2004). El Almirantazgo del Infante don Felipe (1737-1748): Conflictos competenciales con la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina. *Anuario de Historia del Derecho Español*, *74*, 409-476.

Pérez Fernández-Turégano, C. (2018). *El Real Cuerpo de Artillería de Marina en el siglo XVIII (1717-1780)*. Ministerio de Defensa. https://doi.org/102307/j.ctvf3w3rk

Perona Tomás, D. A. (1999). *Los orígenes del Ministerio de Marina*. Ministerio de Defensa.

Quintero González, J. (2018). La Carraca, el Arsenal del Sur. En J. Marchena y J. Cuño (Eds.), *Vientos de guerra: Apogeo y crisis de la Real Armada, 1750-1823. Vol. III. Los arsenales, el Pacífico y la vida a bordo* (pp. 199-316). Doce Calles.

Rodríguez Villa, A. (1878). *Don Cenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada: Ensayo biográfico*. Librería de M. Murillo.

Rodríguez-Villasante Prieto, J. A. (1986). *La Intendencia de la Armada: Historia de la gestión económica, financiera y material*. E. N. Bazán.

Rodríguez-Villasante Prieto, J. A. (2007). El Arsenal de Ferrol. *Revista General de Marina*, *253*(8-9), 289-304.

Rodríguez-Villasante Prieto, J. A. (2017). 300 años de historia del Cuerpo de la Intendencia de la Armada. *Revista General de Marina*, *273*(extra 11), 19-36.

Sánchez Baena, J. J., y Roda Alcantuz, C. (2018). El Arsenal del Mediterráneo: Cartagena (1750-1824). En J. Marchena y J. Cuño (Eds.), *Vientos de guerra: Apogeo y crisis de la Real Armada, 1750-1823. Vol. III. Los arsenales, el Pacífico y la vida a bordo* (pp. 117-198). Doce Calles.

Santalla López, M. (1991). Aproximación a la villa de Ferrol y la provincia de Betanzos en el siglo XVIII. *Anuario Brigantino*, *14*, 45-50.

Santayana y Bustillo, L. (1979). *Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ellos* (F. Tomás y Valiente, Estudio preliminar). Instituto de Estudios de la Administración Local. (Obra original publicada en 1742).

Vázquez Lijó, J. M. (2006). *La matrícula de mar en la España del siglo XVIII: Registro, inspección y evolución de las clases de marinería y maestranza*. Ministerio de Defensa.

Vázquez Lijó, J. M. (2018). El Arsenal de Ferrol: Un derrotero del esplendor al ocaso (1750-1820). En J. Marchena y J. Cuño (Eds.), *Vientos de guerra: Apogeo y crisis de la Real Armada, 1750-1823. Vol. III. Los arsenales, el Pacífico y la vida a bordo* (pp. 9-116). Doce Calles.

Vigo Trasancos, A. (1984). *Arquitectura y urbanismo en El Ferrol del siglo XVIII*. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Vigo Trasancos, A., y Mera Álvarez, I. (2008). *Ferrol y las defensas del puerto de guerra del rey: La Edad Moderna, 1500-1800*. Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Vigo Trasancos, A. (2016). «Esta obra sublime es la señal de un gran rey»: La ciudad-arsenal de Ferrol o el sueño portuario del marqués de La Ensenada (1747-1754). *Cuadernos Dieciochistas*, *17*, 47-71. https://doi.org/1014201/cuadieci2016174771

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481191217

EJÉRCITO DEL REINO, EJÉRCITO DEL REY: LA INTEGRACIÓN DE LOS TERCIOS GALLEGOS EN EL PRIMER EJÉRCITO BORBÓNICO

Army of the Kingdom, Army of the King: The Integration of the Galician Tercios into the First Bourbon Army

María del Carmen SAAVEDRA VÁZQUEZ

Universidad de Santiago de Compostela
mdelcarmensaavedra@usc.es

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: El objetivo de este artículo es analizar la evolución de las unidades de infantería creadas en Galicia en 1705 a través de las Juntas del Reino, un contingente que contaba con características propias, pero acabó transformando sus tercios en regimientos semejantes a los del resto del ejército. Con este objetivo se estudia la cronología de los cambios experimentados por las tropas, prestando especial atención a los problemas de financiación y recluta sufridos por el grupo hasta 1715, cuando concluyó su transformación orgánica. También se analiza la procedencia de sus componentes para determinar la importancia que tenía el factor territorial en su constitución. En el mismo sentido, la progresiva reducción del porcentaje de oficiales gallegos en sus filas permite comprobar la desnaturalización de las unidades, un proceso que habría finalizado a comienzos de la década de 1730.

Palabras clave: ejército; tercios; regimientos; Felipe V; Galicia.

ABSTRACT: This article analyses the evolution of the infantry units created in Galicia in 1705 through the mediation of the *Juntas del Reino*.

These forces possessed distinctive characteristics of their own, but their *tercios* were eventually transformed into regiments similar to those of the royal army. To this end, the study examines the chronology of the changes undergone by these troops, paying particular attention to the funding and recruitment problems faced by the contingent until 1715, when its organizational transformation was completed. It also analyses the origins of its members in order to determine the importance of the territorial factor in its composition. In the same vein, the gradual decline in the proportion of Galician officers within its ranks reveals the loss of the units' original character, a process that appears to have been completed in the early 1730s.

Keywords: army; *tercios*; regiments; Philip V; Galicia.

1. INTRODUCCIÓN

La llegada al trono de Felipe V tuvo importantes repercusiones en el terreno militar, aunque estas hayan recibido escasa atención frente a los cambios sufridos por la administración central y territorial. De ahí las numerosas cuestiones que siguen pendientes de un análisis en profundidad, pese a las abundantes publicaciones surgidas a raíz de las conmemoraciones del tercer centenario de la guerra de Sucesión. Entre las cuestiones menos tratadas cabe destacar el proceso de configuración del ejército borbónico, un asunto tradicionalmente minusvalorado en beneficio de las reformas normativas. Bien es verdad que la atención prestada en los últimos años a la venalidad de los oficios militares ha permitido ahondar en los procesos de creación de nuevas unidades, particularmente las surgidas como fruto de los acuerdos negociados por la Corona con particulares u organismos representativos (Andújar, 2004). La cronología de dichos servicios, las negociaciones entabladas con instituciones territoriales y locales y las contrapartidas y ventajas obtenidas por los promotores de tales operaciones se han convertido así en argumentos recurrentes de la investigación. Una tendencia que retoma una realidad ya conocida (Thompson, 1981), pero que ha servido para incidir en el poder del dinero como mecanismo de movilidad social en época borbónica.

Ahora bien, los servicios de hombres realizados por territorios concretos durante la guerra de Sucesión no sólo tenían un componente político no desdeñable, sino que facilitan un acercamiento en profundidad a la evolución de la organización militar. Pese a ello, el análisis de dichas contribuciones ha tendido a incidir en el procedimiento de reparto de los cargos de la oficialidad y la identidad de sus beneficiarios (Andújar, 2006; López Díaz, 2009a). Un enfoque que elude la trayectoria de las

unidades surgidas de tales contribuciones y el destino de los empleos creados. La primera cuestión es importante porque es importante verificar el grado de eficacia de esas nuevas unidades y precisar los procedimientos que facilitaron su integración en el ejército real. La segunda es igualmente relevante, dado que en los últimos tiempos se ha incidido mucho en el uso de esos oficios como «trampolines» para ascender en el ejército (Angulo, 2016) y en las carreras meteóricas de algunos oficiales y sus clientelas, obviando las trayectorias ordinarias de la oficialidad, que eran las mayoritarias, y el hecho de que no todos los oficiales que obtuvieron sus oficios por vía privilegiada siguieron la carrera militar (Saavedra, 2022).

Por ello es importante descender al detalle de las operaciones, una tarea que no resulta fácil debido a la variedad y dispersión de las fuentes disponibles. Además, la reorganización de las fuerzas militares durante el conflicto sucesorio es desigualmente conocida, en tanto que la atención se ha centrado en determinados casos como los de Asturias, Murcia o Cataluña, que muestran las diferentes estrategias seguidas en el proceso (Espino, 2014; Martínez-Radío, 2009; Muñoz, 2014). Dicha disparidad y las limitaciones de espacio hacen que este trabajo se conciba como un primer acercamiento al tema poniendo el foco en los ocho tercios de infantería levantados por el reino de Galicia en 1705. Aunque esa contribución al esfuerzo militar de la Corona se realizó bajo condiciones muy precisas, estas acabaron siendo incumplidas por la monarquía, de modo que las nuevas unidades irían perdiendo sus rasgos distintivos para acabar integrándose en el ejército real como unidades ordinarias. El proceso que lo hizo posible constituye el objeto de este trabajo, un propósito destinado a perfilar mejor los mecanismos que permitieron la configuración de ese ejército borbónico caracterizado tradicionalmente por la uniformidad, la centralización y el control de la oficialidad por parte del rey. Dicho análisis se apoya en las actas municipales de los principales concejos gallegos, las Actas de las Juntas del Reino de Galicia, las hojas de servicio de algunos regimientos y la documentación de la sección de Estado del Archivo Histórico Nacional referida a Galicia, pero también a Castilla y Extremadura por incluir referencias a la situación de las unidades gallegas que se trasladaron a esos territorios durante la contienda.

2. LA CREACIÓN DE UN EJÉRCITO PARA LA DEFENSA DEL REINO

Aunque la historiografía reciente ha insistido en la capacidad de adaptación y la operatividad mantenida por el ejército de Carlos II (Maffi, 2020), la situación militar de Galicia en dicho reinado iba a caracterizarse por la falta de tropas y el deterioro de las infraestructuras defensivas (Saavedra, 2016). En contrapartida, se había convertido en un importante territorio de recluta para la monarquía como consecuencia del crecimiento demográfico experimentado por el reino (Rodríguez, 2007). Debido a la lentitud y dificultades que rodeaban al reclutamiento

administrativo en la región, dichos procesos solían requerir la colaboración de las élites territoriales y locales. En la mayor parte de los casos esas unidades reclutadas con la intermediación local pasaban a sueldo del rey de manera inmediata, pero no siempre fue así, y en ocasiones eran mantenidas por los naturales a través de la asamblea que los representaba —las Juntas del Reino de Galicia—, configurándose como unidades propias, una suerte de ejército del reino.

Esto fue lo que ocurrió a comienzos del reinado de Felipe V, tras el estallido de la guerra de Sucesión y una vez que se produjo el retorno del rey desde Italia en 1703. Por aquel entonces la política de reclutamiento forzosa en Castilla iba a sustanciarse en la conocida «leva del 1 %», cuyo objetivo era reclutar 1 000 hombres para cada uno de los 17 de tercios de infantería española establecidos en la Península, además de 2 500 caballeros para ampliar de 7 a 12 el número de trozos de caballería[1]. Aun así, las fuerzas a disposición de la Corona resultaban insuficientes para hacer frente a las necesidades militares, de ahí la decisión de favorecer la formación de tercios de particulares o recurrir a las aportaciones de los reinos. En Galicia esa leva del 1 % no se aplicó «debido a la urgencia de defender sus costas»[2], pero eso no significa que la región hubiese quedado al margen de reclutas. En su lugar se organizó un repartimiento de 1 000 hombres para reforzar el tercio de don Juan Fernández de Aguirre, asentado en el reino tras haber sido formado en León en 1694 (De Sotto, 1865, vol. 9, p. 322). Galicia también iba a asistir a la formación de dos tercios de particulares, que se incorporaron al ejército real pese a encontrarse incompletos y provocar el disgusto de los oficiales reales, que consideraban su creación un gran engaño[3].

La entrada de Portugal en la guerra apoyando a Carlos de Austria en mayo de 1703 supuso más presión para Felipe V, quien en febrero del año siguiente iba a ordenar el traslado a Castilla de parte de las tropas reales asentadas en Galicia, en concreto 16 compañías de caballería y dos tercios de infantería. Una medida que dejaba a la región en condiciones defensivas muy precarias, de ahí las iniciativas de la Corona para lograr el aumento de la contribución militar de los naturales. Estas diligencias iban a orientarse en un doble sentido, de modo que tanto las ciudades a título individual como las Juntas del Reino de manera colectiva comenzaron a recibir peticiones de nuevas reclutas. En un primer momento los concejos recibieron la orden de prender a «todos los vagamundos y personas ociosas que hallaren en la ciudad para remitirlas al real servicio»[4]. En 1706, un año particularmente difícil

1. Archivo Municipal de A Coruña (AMC), Libros de Actas (LA), 1703, sesión de 7 febrero.
2. AMC, LA, 1703, 16 marzo.
3. Comisario José Arias a Canales, Pontevedra, 28 marzo 1704. Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, leg. 263.
4. Archivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS), Concello de Santiago, Consistorios, AM 85, 1705, f. 69, 2 febrero.

para la causa felipista, las demandas se intensificaron, de modo que se trasladó a las ciudades la propuesta real de formar dos cuerpos «para sus guardias, el uno de caballería y otro de infantería». Una propuesta que no llegó a concretarse, aunque resulta interesante por prever que los capitanes fueran los encargasen de levantar sus compañías[5].

Paralelamente, el temor a un ataque portugués en la frontera iba a impulsar la formación de regimientos de caballería a cargo de las ciudades, iniciativa que fue rechazada por A Coruña «sintiendo mucho el no hallarse con medios»[6]. En contrapartida, el concejo orensano sí aceptó la petición real, contando con la ayuda del obispo y cabildo de la ciudad (López Díaz, 2009). Lo mismo ocurrió en el caso de Santiago, cuyas autoridades se mostraron dispuestas a reforzar su contribución militar añadiendo a los hombres a caballo un contingente de hasta 6 000 infantes[7]. Bien entendido que la formación del regimiento de caballería resultó lentísima y la propuesta de los infantes no iba a cuajar, pese a los apremios del gobernador[8].

Además de favorecer estas contribuciones de las ciudades, el representante real iba a llevar a cabo intensas negociaciones con las Juntas del Reino para lograr la creación y el mantenimiento de un importante contingente de infantería. La posibilidad de crear tercios de naturales en sustitución de las milicias era una idea antigua, que ya se había tratado en las reuniones del reinado de Carlos II (Saavedra, 2012). La entrada de Portugal en la guerra de Sucesión redobló la presión de la Corona para lograr dicho objetivo, de modo que en agosto de 1703 las Juntas gallegas aceptaron levantar cuatro tercios de 400 hombres cada uno para servir en las plazas de la frontera y puertos. Cierto es que dicho servicio no conllevaba la supresión de las milicias, dado que en caso de peligro se preveía la movilización de hasta 12 000 hombres de milicia[9]. Tampoco llegó a concretarse debido a los problemas de financiación (Eiras, 2003a), a diferencia de lo que ocurrió en Asturias o las Provincias Vascas, que sí crearon tercios en este momento (Angulo, 2016; Martínez-Radío, 2008).

Al año siguiente, el 20 de septiembre de 1704, el gobernador duque de Híjar iba a plantear a las Juntas una nueva propuesta monárquica, una iniciativa ambiciosa que preveía la formación de ocho regimientos de infantería mediante repartimiento entre las provincias[10]. En tanto que la concesión de hombres era mayor, la Junta aspiraba a la supresión total de las milicias, de modo que los naturales no pudieran ser llamados «a ningún ejercicio militar con armas ni trabajo de fortificaciones»,

5. AMC, LA, 1706, f. 158v, 9 junio.
6. AMC, LA, 1706, f. 208, 15 julio.
7. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 89, 1706, f. 587 v. y ss., 13 junio.
8. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 89, 1706, f. 705, 3 septiembre.
9. Actas de las Juntas del Reino de Galicia (AJRG), volumen XII, 102D, pp. 659-608.
10. AJRG, vol. XII, 17B, p. 428.

aunque algunos diputados seguían mostrándose recelosos ante esa «nueva planta nunca practicada en este Reino»[11]. Bien entendido también que las Juntas aceptaban levantar tropas durante «las guerras presentes», de ahí su intención de convocar una reunión tras el fin de la contienda para «resolver el que continúen dichos tercios o se extingan en todo o en parte»[12].

En todo caso, el principal motivo de discrepancias con la Corona tenía que ver con las condiciones que acompañaban al servicio y conllevaron el inicial rechazo del monarca. Aun así, el gobernador duque de Híjar continuó negociando con la asamblea hasta lograr la concesión del reino el 22 de febrero de 1705[13] y el beneplácito real al acuerdo el 5 de marzo del mismo año[14]. A diferencia de lo planteado en un principio, el documento aprobado diferenciaba las condiciones formales de la concesión, que eran de carácter militar, de las peticiones o súplicas, que se centraban en cuestiones fiscales o de justicia. Aunque estas últimas han sido las más atendidas por la historiografía (Eiras, 2003b, p. 25), las primeras resultan particularmente relevantes a nuestros efectos.

El compromiso de las Juntas consistía en reclutar un contingente de 4 000 hombres más sus correspondientes oficiales, que serían mantenidos por el reino mediante un tributo específico de 14 reales en anega de sal. A cambio, las nuevas unidades contarían con una oficialidad propia formada por naturales y nombrada a propuesta de las Juntas en el caso de los oficiales superiores —maestres de campo y sargentos mayores— y de las ciudades en el de los oficiales de las compañías. En la práctica, esto supuso que los beneficiados con los oficios de maestres de campo fueron representantes de la nobleza titulada y los demás destacados integrantes de las elites territoriales que en su mayor parte contaban con experiencia militar en Flandes. El requisito de naturaleza había sido una condición habitual en este tipo de servicios en la época de los Austrias y en los concedidos a Felipe V en 1703, como demuestran los ejemplos de Asturias, Cantabria y Navarra. Sin embargo, lo llamativo de esta situación era que el acuerdo se firmó en 1705, cuando ya se había publicado la ordenanza estableciendo que el nombramiento de la oficialidad correspondía al monarca, un procedimiento considerado crucial para lograr el control del ejército por parte del rey (Andújar, 2002). Bien es verdad que los procesos de venalidad de los oficios militares iban a permitir eludir dicha normativa, aunque en el caso de las propuestas efectuadas por las Juntas la designación se hizo de manera graciosa (Saavedra, 2013).

11. AJRG, vol. XII, 159D, pp. 725-732.
12. AJRG, vol. XII, 116D, pp. 742-74.
13. AJRG, vol. XIII, 10A, pp. 97-100.
14. AJRG, vol. XIII, 7B, pp. 273-274.

El acuerdo de 1705 también incluía otros aspectos específicos, como la determinación de que el tesorero-pagador de los arbitrios fuera designado por las ciudades, lo que daría lugar a profundos enfrentamientos entre ellas, que a punto estuvieron de malograr el nombramiento del primer tesorero, el regidor de Tui Domingo de la Fuente (Eiras, 2003b, pp. 29-34). El objetivo de la medida era evitar que la administración utilizase los fondos del arbitrio para otros fines, aunque las cuentas y revistas seguían siendo competencia de los oficiales del sueldo. Además, quedaba a cuenta de la Hacienda Real proporcionar armas y pan de munición a las tropas.

Con todo, la condición más significativa era la decisión de organizar el contingente bajo la forma de tercios, pese a que en 1704 se había publicado la ordenanza obligando a la sustitución de los tercios por regimientos (Borreguero, 2001) y la medida ya se había aplicado tanto a las unidades del ejército real como a los tercios de Asturias y Cantabria. Además, los tercios se concebían como tercios provinciales, de modo que los hombres eran naturales de la provincia que los reclutaba, que también debía encargarse de su reemplazo en caso de muerte o deserción[15]. De este modo se levantaron ocho tercios, uno por cada una de las siete provincias del reino, salvo Santiago, que levantó dos debido a su mayor extensión y carga fiscal. La insistencia de las Juntas en mantener el sistema de tercios obedecía al hecho de que resultaban más baratos de costear que los regimientos por contar con menor número de oficiales. Un argumento de peso, pero que suponía la pervivencia del modelo organizativo del ejército de Carlos II, que la Corona había liquidado por obsoleto. Pese a ello, el rey transigió con dicha condición debido a la acuciante necesidad de tropas, de ahí el interés de conocer cómo iba a gestionar las particularidades del servicio en adelante.

Desde noviembre de 1705 los ocho tercios estaban completos e iban a convertirse en la principal defensa del reino, dado que en mayo del mismo año se había dado orden de traslado a Ciudad Rodrigo de las fuerzas de la Corona que quedaban en Galicia. Bien entendido que la puesta en marcha del nuevo ejército iba a resultar un proceso complejo, puesto que cada capital de provincia debió hacer frente a las necesidades de su tercio y adelantar el dinero para su mantenimiento mientras no se disponía de los fondos del arbitrio. En este sentido, los principales problemas se plantearon para sufragar los gastos de la leva y los vestidos de los soldados. Este último era un capítulo importante y difícil de gestionar, como certifican los problemas del concejo de Santiago para encontrar a una persona dispuesta a hacerse cargo de la manufactura de los uniformes y los medios para pagarlos. Tras un proceso tortuoso en que llegó a hacerse un reparto obligatorio de su fabricación entre varios

15. Escritura y contrato otorgado entre la Junta del Reino y don Domingo de la Fuente, tesorero pagador del nuevo arbitrio impuesto en la sal. AJRG, vol. XIII, 124D, pp. 486-515.

mercaderes de la ciudad[16], acabaría firmándose un asiento con un solo contratista, don Francisco Mariño[17]. A su vez, el problema del pago se resolvió efectuando el reparto de los 100 000 reales de su coste entre los vecinos más caudalosos de la ciudad[18]. El mismo procedimiento se utilizó para proporcionar los primeros socorros a los hombres reclutados, un proceso igualmente dificultoso que se resolvió tras el apresamiento de los regidores en el ayuntamiento por orden del gobernador[19].

En el caso de A Coruña la provisión de los vestidos se logró pronto, merced a un asiento con el reconocido negociante Jacobo Flon, pero el pago de su importe iba a resultar difícil, dado que el concejo se había mostrado dispuesto a adelantar los 60 000 reales que costaban, pero tardó varios meses en reunir la totalidad de lo comprometido[20]. Además, la falta de propios le había llevado a recurrir a un arbitrio, el de ¾ en octava de vino, que estaba destinado al pago de antiguos créditos y deudas de la ciudad, lo que suponía una desviación de fondos que provocó las protestas de algunos munícipes[21]. La situación iba a normalizarse en octubre de 1706, cuando se dispuso de los primeros ingresos del arbitrio de la sal y esto permitió negociar un asiento para fabricar los 4 000 vestidos necesarios para todo el contingente[22]. Los contratistas fueron tres mercaderes asturianos y cántabros residentes en Galicia, que se comprometieron a entregar los uniformes en Pontevedra al precio de 13 pesos y medio escudo de plata cada uno[23].

Bien es verdad que este arreglo no puso fin a los problemas surgidos en el reino con respecto a los tercios, dadas las dificultades planteadas para lograr el adecuado alojamiento de las unidades, sobre todo en el caso coruñés. La falta de espacios para acoger a las tropas de otras provincias y los gastos que conllevaban hicieron que su concejo solicitase el pago con cargo al arbitrio de la sal[24]. En este sentido, consideraba que la localidad no estaba obligada a «socorrer con leña ni luces los tercios provinciales pues cada una de las ciudades … está prevenido que cada acuda con los gastos necesarios que a cada una toca»[25]. Una demanda que acabó resolviendo el gobernador ordenando el reparto de los gastos con las ciudades de Betanzos y Mondoñedo[26].

16. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 85, 1705, ff. 375, 393, 428,432,436.
17. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 86, 1705, f. 538.
18. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 86, 1705, f. 547.
19. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 86, 1705, ff. 738, 764v y 794v.
20. AMC, LA, 1706, f. 5, 7 enero.
21. AMC, LA, 1706, ff. 167v-168, 26 junio.
22. AMC, LA, 1706, f. 297v, 22 octubre.
23. AMC, LA, 1707, f. 221v, 5 noviembre.
24. AMC, LA, 1706, f. 42, 6 febrero.
25. AMC, LA, 1707, f. 77v, 19 abril.
26. AMC, LA, 1706, f. 151, 3 junio.

Con ser importantes, estos problemas resultaban menores frente a las grandes dificultades surgidas para el reemplazo de los soldados muertos y los desertores. Tal y como se encargó de recordar el gobernador a algunas localidades, las capitales estaban obligadas a sustituir a los soldados de su provincia fallecidos o huidos[27]. Una problemática en la que confluían factores de muy diverso tipo, desde las malas condiciones de vida de los hombres, de modo que «muchos mueren por falta de médico y botica»[28], hasta la dificultad para obtener reclutas, de modo que los regidores santiagueses llegaron a ofrecer cuatro doblones a quienes quisieran sentar plaza para cubrir el cupo de los soldados que tocaban a su provincia[29]. Cierto es que dicho objetivo se veía obstaculizado por la tendencia de la Corona a completar otros cuerpos recurriendo a los soldados de los tercios gallegos, como los que se sacaron para las guardias reales en el verano de 1707[30]. Dichas operaciones no sólo suponían un menoscabo de efectivos, sino también la pérdida de soldados entrenados, como denunciaba el concejo coruñés al señalar que sus sustitutos eran hombres enfermos, mal vestidos y sin utilidad ni experiencia en el ejercicio de las armas «por ser de los reclutados de nuevo»[31].

Los nombramientos de los oficiales también iban a convertirse en un importante foco de tensiones en relación con las vacantes fruto de fallecimientos o la promoción o dejación del puesto realizada por los beneficiados con los primeros oficios. En el caso de los oficiales mayores, las actas de las Juntas del Reino no incluyen más referencias a propuestas de candidatos que las efectuadas en 1705, una cuestión sobre la que habremos de volver en adelante. Por lo que se refiere a las propuestas de los oficiales de las compañías, las ciudades entendían que a ellas correspondían también en caso de vacantes, aunque el rey había recuperado dicha potestad por cédula de 6 de julio de 1705[32]. Esta decisión iba a motivar una representación de las ciudades gallegas que se confió a José Rodríguez, capitular de Ourense y agente en la Corte[33]. Como resultado de dichas diligencias, en diciembre del mismo año el comisionado daba cuenta de la decisión real de mantener el sistema tradicional y que los puestos vacos «se provean por las ciudades en conformidad de lo capitulado por la Junta del Reino»[34]. En consecuencia, las ciudades siguieron efectuando las propuestas con el objetivo de favorecer a sus

27. AMC, LA, 1706, 7 enero.
28. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 86, 1705, f. 875, 14 agosto.
29. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 88, 1706, f. 376v, 4 mayo.
30. AMC, LA, 1707, ff. 101, 12 mayo.
31. AMC, LA, 1707, ff. 116-117, 4 junio.
32. AJRG, vol. XIII, 9B, pp. 277-278.
33. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 87, 1705, f. 1015v, 27 octubre.
34. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 87, 1705, f. 1121, 14 diciembre.

naturales[35]. Un privilegio que los concejos iban a defender con fuerza, de modo que el concejo coruñés llegó a debatir la posibilidad de que en caso de capitanías vacantes se nombrase siempre a los alféreces «como medio de facilitar su promoción y que los naturales se animen a servir en los tercios»[36].

Aunque dicha iniciativa no llegó a cuajar, la dinámica de las unidades revela que en los años inmediatos a su constitución las tropas gallegas seguían diferenciándose de los regimientos reales por su ámbito de recluta y actuación, la naturaleza de sus componentes, el proceso de nombramiento de su oficialidad, el origen de su financiación y su organización como tercios. Claro está que como parte del ejército de Felipe V se encontraban a las órdenes del capitán general de Galicia y su destino dependía de la voluntad monárquica, factores que condicionaban su futuro y estaban destinados a modificar sus características en adelante.

3. LA INCORPORACIÓN AL EJÉRCITO DE CASTILLA

Tras la victoria de Almansa, la situación del bando borbónico experimentó una notoria mejoría, que permitió desarrollar una importante ofensiva en el frente de Extremadura. El objetivo de sitiar Olivenza y recuperar Ciudad Rodrigo iba a exigir el reforzamiento del ejército borbónico, de modo que en mayo de 1707 el rey ordenaba al gobernador marqués de Risbourg su traslado a Zamora para incorporarse a las tropas del mariscal de campo don Jacinto Pozobueno, con los efectivos de los tercios gallegos «que estuvieren en estado de ponerse en marcha»[37]. En respuesta a dicha orden, en la región se formaron cuatro batallones de infantería sacando 250 hombres de cada uno de los ocho tercios «no obstante la gente que salió para el regimiento de guardias y para los de Segovia y la Marina»[38], fuerzas que abandonaron Galicia el 14 de junio para establecerse en Ciudad Rodrigo junto a 12 compañías de caballería.

Esta decisión fue recibida con gran pesar en el reino, por cuanto contradecía las condiciones del servicio y dejaba la defensa del territorio en condiciones aún más precarias. Una situación que reconocía el propio Risbourg al señalar que las compañías de los tercios situadas en las plazas de la frontera con Portugal estaban formadas por reclutas nuevos y mal armados, al igual que los integrantes del regimiento de caballería de Santiago, enviados a la frontera «aunque no sea más que para azer bulto»[39]. Además, también se lamentaba de la falta de maestres de campo, ya

35. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 88, 1706, f. 164v, 6 febrero.
36. AMC, LA, 1706, f. 44, 9 febrero.
37. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 30 mayo 1707. AHN, Estado, leg. 318.
38. Inspector don Antonio Pacheco a Grimaldo, Santiago, 12 junio 1707. AHN, Estado, leg. 318.
39. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 30 mayo 1707. AHN, Estado, leg. 318.

que cuatro de ellos se habían trasladado a Castilla —el marqués de Mos, el conde de Maceda, el conde de Fefiñanes y Baltasar Ramón de Aldao—. De hecho, en Galicia solo quedaba Manuel de Quirós, al estar vacos los empleos de maestre de campo del tercio de Ourense y el de Lugo por la muerte del marqués de San Miguel, mientras el marqués de Orani (Tui) se encontraba en la Corte, «de donde no creo vuelva»[40]. Pese a ello, la decisión de traslado de los efectivos se mantuvo, justificándola por razones de urgencia y la necesidad de retomar la iniciativa en el frente portugués.

Dicha medida no tenía en cuenta la precariedad en la que se encontraban los tercios gallegos asentados en Castilla por falta de pagas y vestidos. Aunque las condiciones del servicio establecían que las tropas debían recibir uniformes nuevos cada dos años, sólo se habían repartido los correspondientes a la formación inicial. Cierto es que las autoridades militares sabían que «ay caudal suficiente para hacerlos en poder del thesorero de los arbitrios»[41] y que se había negociado un asiento para traer los uniformes desde Francia[42], por lo que el problema planteado no era tanto de dinero como de voluntad política. En tanto que las ciudades gallegas pretendían eximirse de la obligación de pagar, reclutar y vestir a las tropas que habían sido enviadas fuera de Galicia, la situación iba a convertirse en una fuente de conflictos con el gobernador y en una estrategia destinada a generar el malestar de las autoridades militares castellanas, que asistían impotentes al hecho de que «los quatro [tercios] de gallegos están descalzos y en cueros y sin comer porque habrá compañía que ha dos meses que no tiene socorro»[43]. Por ello, y en tanto que la falta de pagas favorecía los desórdenes de la tropa y las deserciones, el marqués de Risbourg acabaría remitiendo el dinero para las pagas sacando el caudal «de poder del tesorero del arbitrio sin consentimiento del reino»[44]. Y no sólo eso, pues algunos meses más tarde seguía maniobrando «el modo más breve y silencioso» para lograr la remisión a Mérida de un millón de reales del residuo del arbitrio[45].

En paralelo a estas medidas que socavaban el control de las ciudades de los fondos del servicio, el gobernador iba a redoblar los esfuerzos para lograr el reemplazo de los tercios. En este sentido, remitió a los concejos de las capitales provinciales una orden recordándoles su obligación de sustituir a los soldados muertos y huidos[46],

40. Risbourg a Grimaldo, Verín, 24 noviembre 1707. AHN, Estado, leg. 318.
41. D. Fernando de Moncada a Grimaldo. Madrid, 6 noviembre 1707. AHN, Estado, leg. 307.
42. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 11 febrero 1708. AHN, Estado, leg. 340. En abril parte del vestuario ya estaba embarcado en Baiona, aunque el mal tiempo impedía su envío al reino. Pachecho a Grimaldo, Pontevedra, 20 abril 1708. AHN, Estado, leg. 336.
43. Gobernador de Ciudad Rodrigo al duque de San Juan, C. Rodrigo, 11 febrero 1708. AHN, Estado, leg. 339.
44. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 11 febrero 1708. AHN, Estado, leg. 340.
45. Alzedo a Grimaldo, Pontevedra, 3 junio 1708. AHN, Estado, leg. 336.
46. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 9 marzo 1708. AHN, Estado, leg. 340.

medida a la que siguió poco después el envío a las provincias de los tenientes generales marqués de Parga y Domingo de la Canal para «que las acaloren y hagan se execute con toda puntualidad»[47]. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados debido a la huida de mozos a Castilla, la extrema juventud de algunos de los reclutados y la «floxedad que rezelaba de parte de las ciudades»[48]. De hecho, la Junta del Reino trataría de hacer frente a la situación remitiendo un memorial a la Corte solicitando la retirada de los apremios e insistiendo en que las decisiones tomadas por la Corona contravenían el contrato de los tercios y que «siendo recíproco el contrato lo deve ser la obligazión de ambas partes para su cumplimiento»[49].

Este episodio ha servido para resaltar la férrea resistencia de las Juntas a las demandas monárquicas y lo oneroso de algunas de las decisiones adoptadas entonces por el rey, como la de exigir el envío a Castilla del dinero reunido para el pago de las tropas y hacerlo además en metales preciosos (Eiras, 2005). Sin embargo, apenas se ha tenido en cuenta que agilizar el pago de los sueldos a las unidades gallegas era una necesidad real y el propio Risbourg insistía en ello, al señalar que sus muchas diligencias para reunir moneda respondían no sólo al deseo de «satisfacer plenamente a este cuidado», sino también «por lo que estimula la falta de pagamentos con que se halla la gente del exército»[50]. De hecho, la orden de enviar el dinero del arbitrio directamente al tesorero de Castilla buscaba evitar los retrasos derivados del procedimiento tradicional, según el cual el tesorero del arbitrio enviaba los fondos disponibles al tesorero del ejército de Galicia y este hacía lo propio al tesorero del ejército castellano[51].

Tampoco se han considerado las divergencias que suscitó el envío de tropas fuera de la región entre las propias autoridades militares. Hasta el punto que el asunto iba a exigir el dictamen de varios expertos, destacando el parecer del director general de Infantería, don Fernando de Moncada, quien consideraba las quejas del reino sobre el incumplimiento del contrato de los tercios «insustanciales», salvo en lo referido al traslado de parte de sus efectivos a Castilla, un tema que a su juicio exigía «reflexión». En este sentido, su informe señalaba la dificultad de admitir que el rey «tenga tropas que no pueda aplicar adonde haia necesidad», pero igualmente reconocía «contra esto ay el contrato que se concedió». Aunque en el texto se recomendaba solicitar al Consejo de Guerra la escritura del servicio con las consultas anejas, su párrafo final resumía perfectamente la disyuntiva a la que se enfrentaba

47. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 6 mayo 1707. AHN, Estado, leg. 318.
48. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 18 mayo 1708. AHN, Estado, leg. 336.
49. El reino de Galicia a Grimaldo, Pontevedra, 6 marzo 1708. AHN, Estado, leg. 340.
50. Risbourg a Grimaldo. Pontevedra, 28 julio 1708. AHN, Estado, leg. 340.
51. Campoflorido a Grimaldo. Madrid, 3 febrero 1708. AHN, Estado, leg. 336.

la Corona, que debía elegir entre «tomar una severa resolución o cumplir al Reino todo lo capitulado»[52].

Tal alternativa resultaba poco realista teniendo en cuenta la situación que se vivía entonces en el frente de guerra. De ahí la insistencia monárquica en el traslado de las tropas, pese a las penosas condiciones padecidas por los gallegos destinados en tierras castellanas. Tanto es así que en septiembre de 1708 sus maestres de campo se mostraban alarmados «viendo lo que se están minorando estos cuerpos» y solicitaban al gobernador que «procurase tener asistidas estas tropas respecto de ser de la obligación de aquel Reyno el mantenerlas»[53]. A estos efectos ha de tenerse en cuenta que la falta de recursos no sólo favorecía la disminución del contingente gallego, sino que le restaba operatividad. El propio gobernador de Ciudad Rodrigo reconocía esta situación en septiembre de 1708, al señalar «Que si llegase para aquella guarnición dinero de Galicia y los enfermos mejorasen podía hacer una gran diversión ayudado de las milicias»[54]. Sin embargo, ni la situación de las unidades iba a experimentar cambios ni la realidad del conjunto del ejército era mucho mejor debido a la falta de dinero, la escasez de víveres y la propagación de epidemias[55].

Lo mismo cabe decir de la situación del resto de los tercios que permanecían en Galicia, aquejados de la falta de pagas y recursos. De ahí que en la primavera del mismo año los oficiales generales, el estado mayor de las plazas y la caballería se hubiesen dirigido al gobernador para recordarle «la estrechez y falta de medios con que se hallan por haver tanto tiempo sin pagamentos»[56]. También persistían otros problemas ya conocidos, como las dificultades de alojamiento en A Coruña[57], una situación agravada por la ruina de la Casa de la Moneda, en donde residían parte de los hombres[58]. La falta de reclutas seguía siendo otra dificultad importante, lo que daba lugar a cierta tolerancia hacia los soldados que habían huido de sus unidades en Castilla para integrarse en las asentadas en el reino. En palabras del propio gobernador Risbourg, «me ha parezido combeniente no darme por entendido por que no deserten ... asta que haviendo ocasión de gente de reclutas pueda remitirlos con ella a sus destacamentos»[59].

52. Fernando de Moncada a Grimaldo, Madrid, 24 febrero 1708. AHN, Estado, leg. 340.
53. El conde de Maceda a Grimaldo. Ciudad Rodrigo, 8 septiembre 1708. AHN, Estado, leg. 341.
54. El gobernador de Ciudad Rodrigo a Grimaldo. Ciudad Rodrigo, 1 septiembre 1708. AHN, Estado, leg. 341.
55. Bay a Grimaldo, Mérida, 1 septiembre 1708. AHN, Estado, leg. 341.
56. Risbourg a Grimaldo. Pontevedra, 25 mayo, 1708. AHN, Estado, leg. 336.
57. AMC, LA, 1708, s.f., 17 diciembre; 1709, f. 4, 20 enero.
58. AMC, LA, 1709, f. 5v-6r, 31 enero.
59. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 17 febrero 1708. AHN, Estado, leg. 336.

En medio de tales dificultades, la decisión francesa de retirar parte de sus tropas de España iba a provocar el incremento de las demandas militares de la Corona y una mayor presión sobre las Juntas gallegas. Uno de los principales motivos de controversia fue el nombramiento de un nuevo gestor del arbitrio de los tercios, tras la dejación de la tesorería efectuada por Domingo de la Fuente. El rey encargó entonces la gestión del tributo al tesorero de la renta de salinas, Carlos de Alzedo Sotomayor, mientras las ciudades de Santiago, Ourense y Lugo nombraban al vecino de Pontevedra Joseph de Ochoa e insistían en su capacidad para nombrarlo y la necesidad de mantener lo capitulado en el contrato de los tercios para «que adelante no se puedan estrabiar caudales del arbitrio sin el pleno asenso del Reyno»[60]. Una queja que tenía que ver con anteriores maniobras del marqués de Risbourg, cuyo posicionamiento en el asunto daría lugar a nuevos motivos de tensión.

En principio Carlos de Alzedo trató de asegurar su cargo reuniéndose con el gobernador y presionando para lograr que su nombramiento fuera aceptado por las ciudades gallegas. Entre sus argumentos destacaba el referido a la naturaleza del tributo, al señalar que los arbitrios sobre la sal no eran caudales propios del reino, de ahí que lo fijado en el contrato de los tercios «no fue concesión ni servicio... por ser propio derecho y regalía de S.Magd. ymponer en la sal el precio que le pareziere»[61]. Aun así, Risbourg iba a mostrarse remiso a actuar en contra de las localidades gallegas provocando el malestar de Alzedo[62]. Sin embargo, dicha postura era compartida con importantes figuras de la administración, como el propio presidente del Consejo de Castilla, Francisco Ronquillo, quien recomendaba la suspensión del nombramiento de Alzedo y señalaba que el producto del arbitrio «ni es del Reyno, ni de S.Magd. sino para el fin a que se destinó»[63].

Pese a ello, la Corona estaba decidida a imponer su criterio, de modo que acabó haciendo efectiva la designación del nuevo tesorero. Y no solo eso, dado que las Juntas iban a recibir una nueva petición real solicitando el traslado a Castilla de los cuatro tercios que quedaban en Galicia y el aumento de diez hombres por compañía, dejando la defensa de las plazas y fronteras en manos de las milicias[64]. La oposición a las nuevas medidas fue general, aunque los debates planteados en algunos concejos resultan reveladores de la diversidad de posturas existente con respecto a las órdenes reales. En el concejo coruñés, por ejemplo, la decisión de enviar las tropas fuera del reino fue acogida por el corregidor y parte de los regidores con resignación, por cuanto «la oportunidad del tiempo y urgencias de la guerra no admiten pactos ni

60. AMC, LA, 1709, ff. 46v-47r, 17 abril.
61. Alzedo a Grimaldo. Santiago, 21 julio 1709.
62. Alzedo a Grimaldo, Santiago, 28 julio 1709. AHN, Estado, leg. 360.
63. Ronquillo a Grimaldo, Madrid, 9 agosto 1709. AHN, Estado, leg. 360.
64. AJRG, vol. XV, 4D, f. 378.

condiciones para con S. Magd.... Y a todos nos constituye en la precisa obligación de obedecer ciegamente»[65]. Sin embargo, otro sector de los munícipes insistía en la necesidad de ajustar su contribución a los términos de «la escritura por donde previene por una condición que pasados los soldados fuera del reino no esté obligado al reemplazo ni al sustento»[66]. Además, la propuesta real suponía la reactivación de las milicias, un recurso juzgado poco eficaz porque sus integrantes eran «jente rústica, yncapazes de las armas y de exercicio de ninguna utilidad pueden servir a la defensa»[67]. Su movilización también planteaba otros problemas, dada la necesidad de buscar fondos para mantenerlos en un momento de dificultades económicas, responsables de algunos motines en el reino (López Díaz, 2009b). A todo ello cabía añadir los abusos atribuidos a la oficialidad de las milicias, de ahí la petición coruñesa de «no sujetar estos milicianos a cabos ni capitanes de la tierra»[68].

La resistencia de las Juntas y las ciudades a enviar tropas fuera de Galicia y sustituir a los tercios por unidades de milicia solo se quebró ante la amenaza de cobro de las cantidades adeudadas por cinco de las ciudades gallegas a la Hacienda real. Aun así, las Juntas tardaron un año en aceptar el reemplazo y el traslado de los tercios, cuestión esta última que se resolvió en octubre de 1710 mediante cédula real[69]. En la práctica, por lo tanto, la situación de las unidades gallegas en Castilla no iba a experimentar más cambios que los derivados de la llegada del resto de los tercios, un proceso que no supuso una mejora significativa de los recursos y condiciones de vida de sus integrantes. De hecho, a comienzos de 1710 y a instancias de la reina gobernadora, el marqués de Risbourg recordaba al reino que «ha dos años que no se han dado vestidos a los ocho tercios», ordenando su pronta provisión[70]. Sin embargo, hubo de pasar casi un año hasta lograr un asiento con un hombre de negocios de Santiago, que se comprometía a proporcionar los uniformes en un plazo de cuatro meses y medio[71]. Los informes del marqués de Bay también insistían en la falta de hombres que aquejaba a las unidades en Ciudad Rodrigo y sus gestiones ante el gobernador Risbourg «sobre la importancia de que por el Reyno se reqluten quanto antes, y se les provea de todo lo demás que necesitaren»[72]. Bien entendido que se trataba de una demanda con escasas perspectivas de prosperar, a juicio del propio marqués de Bedmar, quien se quejaba del «total abandono en que se hallan los ocho tercios de Galicia». En este sentido, aconsejaba «hacer alguna demostración»

65. AMC, LA, 1709, f. 131v, 29 agosto.
66. AMC, LA, 1710, f. 1v, 6 enero.
67. AMC, LA, 1709, ff. 114v-115r, 17 julio.
68. AMC, LA, 1709, ff. 131v-132 r, 29 agosto.
69. AHUS, Consistorios, AM 98, ff. 491-492, 21octubre 1710.
70. Risbourg al reino de Galicia. Santiago, 21 marzo 1710. AHN, Estado, leg. 381.
71. Risbourg a Grimaldo, 7 febrero 1711. AHN, Estado, leg. 401.
72. Bedmar a Grimaldo, Madrid, 20 marzo 1710. AHN, Estado, leg. 392.

con los oficiales que «están ausentes»[73], a lo que respondió la Corona ordenando que «si dentro de quinze días no estuviesen en sus cuerpos se les proveerán sus empleos»[74]. Pese a la contundencia de la medida, el problema de la falta de oficiales no iba a resolverse entonces, como tampoco la escasez de soldados de los tercios, como reconocía el propio Risbourg meses más tarde, al señalar que «sobre faltarles mucha gente han quedado oy tan diminutos»[75].

En realidad, las deficiencias que aquejaban a las unidades gallegas se inscribían en una problemática más amplia, derivada de la precariedad que rodeaba al conjunto del ejército borbónico. De hecho, en julio de 1710 el marqués de Bay informaba de la falta de víveres que sufrían sus tropas «no teniendo el día de oy más que para un día de pan»[76]. La escasez de hombres en el ejército de Extremadura era otra de sus necesidades más acuciantes, una problemática a la que trató de hacer frente solicitando el apoyo del capitán general de Andalucía y del gobernador Risbourg. Cierto es que tenía pocas esperanzas de que este último pudiera trasladarse a Puebla de Sanabria, en donde le esperaba, «porque se dize está en Santiago ocupado en una Junta del Reyno»[77]. Una información que nos remite a la dura pugna que por aquel entonces sostenía el gobernador con las ciudades gallegas para fijar las condiciones que habían de acompañar al nuevo servicio de seis tercios concedido para sustituir a los hombres enviados a Castilla[78].

Aunque su salida de la región había supuesto una clara desviación del propósito original de destinar las tropas a su defensa, el contingente todavía mantenía sus principales rasgos distintivos. Cierto es que algunas de sus particularidades comenzaban a ser cuestionadas, de modo que en febrero de 1709 Risbourg comunicaba el deseo real de convertir en regimientos los tercios gallegos incorporados al ejército castellano «considerando S.Magd. lo que convendrá que estén en el [pie] que generalmente tienen todos»[79]. Bien entendido que no solo se trataba de homologar la organización de las unidades a las del resto del ejército, sino que la medida tenía como objetivo añadir dos compañías a cada tercio «para que tengan el número de doze oficiales que correspondan a ellas», y lograr que los capitanes reclutasen a sus compañías, de modo que «el país se libra de los muchos gastos que les causa los continuos reemplazos»[80]. En todo caso, dicha transformación no llegó a produ-

73. Bedmar a Grimaldo, Madrid, 25 abril 1710. AHN, Estado, leg. 387.
74. Grimaldo a Bedmar, Palacio, 26 abril 1710. AHN, Estado, leg. 387.
75. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 18 de abril de 1711. AHN, Estado, leg. 401.
76. Bay a Grimaldo, Puebla de Sanabria, 3 julio 1710. AHN, Estado, leg. 386.
77. Bay a Grimaldo, Puebla de Sanabria, 3 enero 1710. AHN, Estado, leg. 392.
78. AJRG, XV, 155 D, f. 534.
79. AMC, LA, sesión 17 febrero 1709. F. 12. AHUS, Santiago, Consistorios AM 94, f. 121, 14 febrero 1709.
80. Risbourg a Grimaldo, Pontevedra, 22 abril 1707. AHN, Estado, leg. 318.

cirse, de modo que en el verano de 1710 una orden real dirigida a los comisarios de guerra del ejército de Extremadura establecía que «mientras los ochos cuerpos de Galicia se mantuvieran en la planta de tercios se incluyan en los extractos los pages y abanderados que se hallaren presentes según se practicaba por lo pasado»[81].

Otro de los elementos que particularizaba a las unidades gallegas —la capacidad de presentar los candidatos a oficiales en caso de vacantes— había registrado una evolución desigual. En el caso de los oficiales mayores, en los años inmediatos a la constitución de los ocho tercios las vacantes se cubrieron con individuos incluidos en la propuesta elaborada por las Juntas en 1705. Así iba a ocurrir en el caso de Manuel de Quirós y Sarmiento, que en 1707 figuraba al frente del tercio de Santiago en lugar del marqués de la Sierra[82]. Por lo que se refiere a la oficialidad de las compañías, se mantuvo el procedimiento tradicional, como se documenta en los casos de Santiago, cuyo concejo siguió haciendo sus propuestas regularmente[83], y en el de A Coruña, que continuó promoviendo como capitanes y alféreces de sus compañías a familiares de la oligarquía concejil y de los altos cargos de la plaza[84]. Sin embargo, las interferencias de la Corona iban a convertirse en una amenaza cada vez más presente, de ahí que a lo largo de 1710 los concejos de ambas ciudades debieran oponerse a algunas designaciones efectuadas por orden real, proponiendo a otros candidatos en su lugar[85]. Un triunfo que resultó efímero, en tanto que el mantenimiento de las singularidades de las unidades gallegas iba a resultar cada vez más dificultoso, en consonancia con los cambios experimentados por la coyuntura y las relaciones entre el rey y el reino.

4. LA PLENA INTEGRACIÓN EN EL EJÉRCITO REAL

La buena marcha de la guerra tras el fracaso de la ofensiva austracista de 1710 y la concentración del esfuerzo militar borbónico en el frente catalán hicieron que el servicio previsto de los seis nuevos tercios no llegara a levantarse. En consecuencia, la situación defensiva de Galicia siguió siendo muy precaria, de modo que el marqués de Risbourg se lamentaba de «lo expuesto que aquel reyno se halla a los insultos de los enemigos», señalando que «la mayor parte de las plazas y fuertes están guarnecidos

81. Agustín Bodin a Grimaldo. Badajoz, 7 agosto 1710. AHN, Estado, leg. 386.

82. Manuel de Quirós se incluía en la propuesta de las ocho capitales, habiendo ocupado el segundo lugar en la presentada por el concejo coruñés, lo que no fue suficiente para su designación inicial como maestre. AJRG, XIII, 82 D, f. 429.

83. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 92, ff. 153, 235, 297, 301, 344, 387.

84. AMC, LA, 1707, f. 99v, 12 mayo.

85. AMC, LA, 1710, f. 36v, 7 abril. AHUS, Santiago, Consistorios, AM 96, f. 1051, 2 noviembre 1709.

de pobres paysanos inútiles para el servicio»[86]. De hecho, el representante real cifraba las tropas existentes en la frontera en 200 infantes y 50 caballos[87], mientras insistía en lo poco que se podía esperar de unas milicias que «además de la falta de disciplina se hallan sin armas»[88]. Una situación que se vería agravada tras recibir la orden de pasar a Castilla con la artillería que estaba de servicio en Galicia, lo que iba a generar nuevas quejas de las ciudades por los «gravísimos inconvenientes que resultan contra el reino quedando totalmente indefenso»[89].

Aunque la creación de los seis nuevos tercios no pasó del proyecto, las reuniones de las Juntas para tratar del asunto darían lugar a algunas deliberaciones particularmente interesantes, por incluir diversas referencias al destino de los tercios viejos. En principio, la asamblea se mostraba dispuesta a dejar «a libre disposición de la corona los ocho tercios provinciales»[90], asumiendo que el rey había de tomar «por su quenta la manutención y recluta»[91]. Sin embargo, en el reino corrían rumores de lo contrario y señalaban «que S.Magd. a resuelto quedarse con dichos ocho tercios con la condición de que se formen regimientos, se recluten y paguen por quenta del Reino»[92]. Esto revela el interés de la Corona por integrar plenamente a las tropas gallegas en su aparato militar, lo que supondría modificar sus características organizativas y su modelo de financiación. Las crecientes dificultades planteadas para pagar a los tercios iban a convertirse en una buena oportunidad para lograr esto último. A comienzos de 1711 el tesorero del arbitrio de la sal comunicaba a las ciudades gallegas su incapacidad para pagar a las tropas asentadas en Castilla[93]. Según sus informaciones, la escasez de sal en los alfolíes del reino justificaba esta situación que chocaba con el decreto publicado por el gobernador gallego el 29 de enero anterior señalando su obligación de socorrerlas. De ahí que el concejo coruñés decidiese representar al rey que el decreto del gobernador «es contra lo estipulado por S.Magd. en la escritura otorgada en 30 de julio de 1705»[94]. Un recordatorio tardío, por cuanto las condiciones del servicio ya se habían modificado de manera sustancial tras la salida de las tropas y el nombramiento por parte real del pagador del arbitrio sin contar con el acuerdo de las ciudades.

Además, esta última medida no había sido más que el primer paso en un camino que acabaría situando a la renta bajo el control de la hacienda real. El principal avance

86. Risbourg a Grimaldo. Pontevedra, 11 febrero 1711. AHN, Estado, leg. 401.
87. Risbourg a Grimaldo. Pontevedra, 11 abril, 1711. AHN, Estado, leg. 401.
88. Risbourg a Grimaldo. Pontevedra, 25 abril 1711. AHN, Estado, leg. 401.
89. AMC, LA, 1711, ff. 12v-13r, 5 febrero.
90. AMC, LA, 1710, f. 82, 15 julio.
91. Bedmar a Grimaldo. Madrid, 11 mayo 1710. AHN, Estado, leg. 381.
92. AMC, LA, 1711, f. 48, 29 abril 1711.
93. AHUS, Consistorios, AM 99, f. 109v, 9 febrero 1711.
94. AMC, LA, 1711, f. 20, 10 enero.

en dicho proceso iba a registrarse a finales de 1711, cuando la monarquía trató de imponer un nuevo servicio de un doblón por vecino y eso supuso la apelación de las Juntas a la necesidad de una convocatoria de Cortes, provocando la alarma en la Corte (Eiras, 2005). Como resultado de tal situación, en febrero del año siguiente la Corona acordaba rescindir el contrato de los tercios, ajustar la cuenta del arbitrio y levantar cuatro regimientos de infantería directamente por el rey[95]. Aunque esta última medida no llegaría a concretarse, el gobernador Risbourg fue facultado para intervenir los caudales cobrados hasta entonces del arbitrio de la sal. En paralelo a estas decisiones también se ordenó el traslado a Madrid de los diputados gallegos, un expediente que explica su creciente docilidad ante las órdenes reales. Entre ellas la de restituir el arbitrio sobre la sal para el pago de las tropas en lugar del donativo del doblón, aunque su administración quedase a cargo de la Hacienda real[96].

La pérdida de control de los fondos del arbitrio no fue el único menoscabo sufrido por las ciudades gallegas en ese momento, puesto que también acabaron perdiendo la capacidad de intervenir en los nombramientos de la oficialidad. En relación con los puestos mayores, las actas de las Juntas revelan que a la altura de 1711 la asamblea se limitaba a proporcionar cartas de favor a los candidatos[97]. Por aquel entonces los nombramientos los efectuaba el rey de manera discrecional, lo que explica que en 1712 figuren como maestros de campo del tercio de Mondoñedo Pedro de Castro y Neira y del tercio de Betanzos Guillermo de la Valois, ninguno de los cuales figuraban en las propuestas originales de las Juntas. Más significativo aún resulta el origen de los designados, en tanto que Pedro de Castro y Neira sí era gallego y había levantado un tercio en el reino en 1703, pero Guillermo de la Valois era un militar profesional de origen jenízaro[98]. En consecuencia, su nombramiento alteraba el presupuesto de reservar los puestos de la oficialidad a los naturales.

Los nombramientos de los oficiales menores en caso de vacantes, los propuestos por cada ciudad, también iban a verse afectados por la pretensión de las autoridades militares de Castilla de intervenir en la designación de capitanes y alféreces de los tercios, provocando las protestas de los concejos[99]. Una batalla que acabaron perdiendo, por cuanto la última propuesta de nombramiento registrada en las actas municipales de A Coruña se produjo el 19 de octubre de 1711 y en las de Santiago el 7 de enero de 1712[100]. A partir de este año los nombramientos de la oficialidad menor iban a realizarse siguiendo el procedimiento vigente en el resto de las unidades del ejército. Esto suponía que la propuesta de candidatos la efectuaba el coronel del

95. AHN, Estado, leg. 422.
96. AJRG, XV, 18 B, f. 313.
97. AMC, LA, 1711, f. 10, 30 enero.
98. AGS, SGU, leg. 2.574-7.
99. AHUS, Consistorios AM 100, f. 399 y 410, 1 y 4 julio 1711. AMC, LA, 1711, f. 99, 20 agosto.
100. AMC, LA, 1711, f. 129, 19 octubre.

regimiento por orden de preferencia y esa terna era evaluada por el inspector de infantería, el capitán general y el secretario de estado de Guerra. La única diferencia registrada en el caso de las unidades gallegas era la relativa a su modelo orgánico, de modo que en julio de dicho año las «Proposiciones de infantería del exército de Extremadura» incluían las efectuadas por los coroneles de dos regimientos castellanos —los de Toro y Soria— y los maestres de campo de cuatro tercios gallegos —los de Betanzos, Tui, Santiago y Mondoñedo—[101]. Normalmente sus candidatos solían aprobarse sin grandes variaciones, asumiendo que los empleos debían otorgarse a oficiales de su agrado. Esto facilitaba que los ascensos recayeran en integrantes de su misma unidad, lo que en el caso gallego facilitaba la promoción de los oficiales propios. Bien es verdad que los oficios en los tercios cada vez resultaban menos atractivos para las oligarquías territoriales, como revela la situación del tercio coruñés, que en agosto de 1712 se enfrentó a la necesidad de cubrir cuatro empleos que se encontraban vacantes desde hacía tres años[102]. Una problemática que se añadía al absentismo registrado entre sus responsables, de modo que en el verano siguiente al frente de los tercios de Compostela y Coruña se encontraban los sargentos mayores Gregorio Salgado y Francisco de Larrea «por ausencia de sus maestres de campo»[103]. Más aún, a la hora de elaborar las hojas de servicio del duque de Híjar y de Baltasar Ramón de Aldao, antiguos maestres de campo de los tercios de Tui y Compostela, el inspector Solís hacía constar en 1716 que «no se han presentado ni constan sus servicios»[104].

Este desinterés de los mandos resulta llamativo dadas las presiones protagonizadas por la nobleza gallega para acceder a los oficios militares creados en 1705. Un comportamiento que reproducía modelos anteriores, en tanto que la integración de familias gallegas en el ejército a través de unidades propias contaba con una larga tradición, que hundía sus raíces en la guerra de Portugal y en las levas a Flandes en tiempos de Carlos II. Por esta vía los notables locales encontraron la posibilidad de hacer carrera en el ejército, pero sobre todo de reforzar su prestigio y ascendencia sobre la población de su provincia. De ahí su desapego al servicio militar una vez que las instituciones regionales dejaron de intervenir en las finanzas y gestión de los tercios, diluyendo su condición de «ejército del reino». A estos efectos resulta igualmente relevante la orden remitida al gobernador por el marqués de Bedmar el 1 de junio de 1713 para suspender las quintas y reemplazos en Galicia[105]. Una

101. AHN, Estado, leg. 478.
102. AHN, Estado, leg. 478.
103. Francisco Laso, coronel del regimiento de León, a Bedmar. Ciudad Rodrigo, 19 julio 1713. AHN, Estado, leg. 478.
104. AGS, SGU, leg. 2557-23.
105. AMC, LA, 1713, f. 99, 6 junio.

decisión que suponía una amenaza a su calidad de contingente de naturales —uno de los pocos rasgos distintivos que todavía conservaban—, por falta de relevos.

La política de la Corona, por lo tanto, parecía destinada a laminar las particularidades del contingente una vez rematada la contienda, en consonancia con su objetivo de lograr mayor control y homogeneidad de los efectivos militares. Un proceso fundamental para avanzar en la política de recuperación del poder militar española a partir de 1713 (Storrs, 2022). Sin embargo, la estrategia real iba a ser menos abrupta de lo supuesto. En 1715 la firma de la paz con Portugal y la ocupación borbónica de las Baleares permitió a Felipe V reorganizar sus tropas y proceder a una profunda reformación de las unidades, una operación de gran alcance que supuso la extinción de nueve regimientos y la refundición de otros 33. Una situación que permitió el establecimiento de un ejército de nueva planta en Galicia (Saavedra, 2018) y facilitó la integración de catalanes en el ejército borbónico (Andújar, 2015). En el caso de los tercios gallegos su escasa operatividad parecía aconsejar la desmovilización y el licenciamiento de los hombres, sin embargo, el monarca decidió mantenerlos en sus filas, optando por su reforma. Fue entonces cuando los tercios gallegos desaparecieron para dar paso a nuevas unidades organizadas como regimientos, poniendo fin a su orgánica diferenciada. Según la visión tradicional, los ocho tercios se refundieron en tres regimientos distintos: los de Coruña, Lugo y Ourense en el regimiento de Galicia, los de Santiago, Tui y Betanzos en el regimiento de Santiago y los de Mondoñedo y Compostela en el regimiento de Zamora (De Sotto, 1859, vol. 5, p. 142). No fueron las únicas fuerzas regnícolas sujetas a este procedimiento que permitía mantener unidades diferenciadas por el origen de sus miembros. La misma política se aplicó al formar el regimiento de Cantabria con los efectivos de los regimientos (Angulo, 2020). Sin embargo, en el caso gallego dicha estrategia se vio reforzada por la formación de los primeros batallones de los regimientos de Galicia y Zamora con unidades repatriadas de Flandes, en buena parte formadas por gallegos, como revela el estudio de las hojas de servicio de su oficialidad (Saavedra, 2024). La naturaleza de los integrantes de los nuevos regimientos se convirtió así en un elemento de continuidad, que facilitaba la integración de las antiguas tropas del reino en el ejército real.

En consecuencia, cabe plantearse hasta cuándo fue relevante dicho factor en esas unidades, una cuestión compleja que exige un estudio detenido y ya hemos abordado en anteriores trabajos (Saavedra, 2022, 2024). En este caso se ofrece una visión genérica del asunto partiendo de las hojas de servicio de los oficiales del regimiento de Santiago, el único que no logró sobrevivir al reinado. También es el que cuenta con las hojas de servicio más antiguas, anteriores a su transformación en regimiento, elaboradas en Badajoz en 1712. Su análisis revela la escasez de efectivos y la pervivencia de su condición de unidad de naturales, en tanto que 15 de los 22

oficiales vivos identificados por sus orígenes eran gallegos (68 %)[106]. En 1716, una vez producida la reformación, aparece organizado en dos batallones con 79 oficiales vivos, entre los que había 43 gallegos (54,4 %). Este descenso del porcentaje de oficiales gallegos se acompañaba de una distribución muy desigual entre los grados, reduciéndose mucho el número de gallegos en los empleos inferiores, dado que solo había dos entre los 25 subtenientes[107]. Teniendo en cuenta que estos últimos eran los más jóvenes y los que habían entrado más tarde en el regimiento, el dato resulta significativo y apunta a una falta de relevo de la oficialidad gallega, de ahí el interés de conocer la evolución posterior.

La trayectoria de la unidad puede seguirse a rasgos generales mediante las hojas de servicio, que informan de su destino inicial en Extremadura, su presencia en Cádiz en 1718 y su posterior traslado a Ceuta, en donde estuvo de guarnición durante 30 meses. En 1722 el regimiento volvió a Extremadura y sufrió una reforma que redujo sus dos batallones a uno, lo que indica la debilidad de sus efectivos. Una apreciación que confirma la última libreta de hojas disponible, que fue elaborada en Santiago en diciembre de 1724, cuando el regimiento contaba únicamente con 37 oficiales[108]. De ahí su extinción y la incorporación de sus integrantes al regimiento de Galicia (Saavedra, 2023). Por aquel entonces, el porcentaje de oficiales gallegos se había reducido al 43 % y su reparto entre los distintos empleos resulta revelador.

Tabla 1. Origen de los oficiales vivos del regimiento de Santiago en 1724

	Galicia	Andalucía	Castilla	Extremadura	Otros	Total
Plana mayor	2		1	1		4
Capitanes	5	2	1		1	9
Tenientes	8	3	2			13
Subtenientes	1	6	1	2	1	11
Total	16 (43 %)	11 (29,7 %)	5 (13,5 %)	3 (8,1 %)	2 (5,4 %)	37

Fuente: AGS, SGU, leg. 2.557-30.

Estas cifras confirman que la unidad se había ido desnaturalizando, aunque todavía los oficiales de origen gallego eran mayoría. En este sentido, más significativo que la reducción del número de oficiales era su causa, vinculada al envejecimiento de la oficialidad original y la escasa presencia de gallegos entre los oficiales más jóvenes. Una realidad reforzada tras la revisión de sus procedencias, en tanto que 13 de los 16 oficiales de origen gallego que quedaban en 1724 procedían de los tercios levantados

106. AGS, SGU, leg. 2.557-22.
107. AGS, SGU, leg. 2.557-23/24.
108. AGS, SGU, leg. 2.557-30.

en 1705. Los otros tres también habían servido en el contingente gallego, aunque tenían experiencia militar previa. En su caso la constitución de los tercios se convirtió en la ocasión propicia para integrarse en una unidad de compatriotas, al igual que ocurrió con la reforma de 1715, que permitió a otros tres oficiales continuar su carrera en un regimiento en donde sus paisanos seguían siendo mayoría. También la mayor parte de los oficiales andaluces, extremeños o castellanos que se integraron en la unidad lo hicieron en 1715, a raíz de la reformación general y la desaparición de sus regimientos originales. La operación de reorganización de las fuerzas de infantería que tuvo lugar en ese año constituye por ello un momento de gran interés en la evolución del ejército de Felipe V, tanto por el número de unidades afectadas como por los criterios utilizados por la Corona para realizar el trasvase de efectivos.

Bien entendido que no fue la única operación de este tipo realizada a lo largo del reinado, y que la reformación de regimientos sueltos era un procedimiento corriente. De hecho, en 1732 el regimiento de Galicia también sufrió una reforma que redujo sus dos batallones a uno y supuso la constitución de un segundo batallón con el regimiento de Badajoz. Las hojas de servicio realizadas con carácter previo muestran que el porcentaje de oficiales gallegos ya se había reducido al 31 % y el grueso de los contabilizados habían entrado en el regimiento procedentes de los tercios[109]. El resto llegó a la unidad de manera individual, como fruto de traslados o permutas de plazas. Unos movimientos que resultan de particular interés considerando que el porcentaje de oficiales gallegos en el conjunto del ejército español era muy bajo, cifrado en el 4,47 % entre 1715 y 1735 (Andújar, 1991, p. 318). Consecuentemente, cabe afirmar que estos regimientos sirvieron también como polo de atracción de los gallegos diseminados en otras unidades. En contrapartida, el porcentaje de castellanos del regimiento de Galicia en 1732 era del 38 %, en tanto que andaluces y extremeños suponían otro 35 % de la oficialidad. El hecho de que los gallegos hubiesen dejado de ser mayoritarios en la unidad hacía que su denominación e identificación con Galicia respondiese más a la tradición que a la naturaleza de sus integrantes. En consecuencia, el proceso de integración de los antiguos tercios gallegos en el ejército real podía darse por concluido a comienzos de la década de 1730, en tanto que el tercero de los regimientos que acogió a sus oficiales —el de Zamora—, ya presentaba un porcentaje de gallegos muy bajo —11 %— en 1718[110].

5. CONCLUSIONES

La configuración del primer ejército borbónico constituye un tema desigualmente conocido, en tanto que la historiografía ha prestado particular atención al incremento

109. AGS, SGU, leg. 2.575-3/4.
110. AGS, SGU, leg. 2.676-1/2.

del número de hombres y los mecanismos que lo hicieron posible. En contrapartida, la reorganización de sus efectivos en las primeras décadas del reinado de Felipe V apenas ha sido investigada, por lo que exige una investigación en profundidad que refleje la diversidad de situaciones planteadas. Partiendo de dicha premisa, este trabajo apuesta por abordar un caso concreto y particularmente interesante, por cuanto revela las estrategias desarrolladas por la Corona para sortear las particularidades organizativas de uno de los contingentes creados durante la guerra de Sucesión. Así, la evolución de los tercios de infantería levantados por intermediación de las Juntas del Reino de Galicia en 1705 permite comprobar que dichas unidades se crearon adoptando las características tradicionales de las unidades regnícolas: un ejército concebido para garantizar la defensa del propio territorio, sostenido mediante un tributo específico pagado por el reino, formado por naturales de las provincias y dirigido por sus propios mandos. Estos elementos reproducían el esquema de los tercios provinciales de Carlos II y suponían un arcaísmo que chocaba con el modelo de ejército diseñado por las ordenanzas militares de 1704.

Más allá de las razones que llevaron al rey a aceptar ese arreglo, el trabajo incide en los problemas de gestión que afectaron al contingente y las estrategias empleadas por el monarca para lograr su integración en condiciones de igualdad con el resto del ejército. Aunque la primera de las cuestiones ha sido poco atendida por la historiografía hasta la fecha, la documentación revela que los tercios gallegos padecieron grandes carencias durante su estancia en el reino, problemas que se acrecentaron una vez trasladados a Castilla. En la práctica, por lo tanto, se convirtieron en unidades muy poco operativas desde el punto de vista militar, lo que obliga a considerar el intervencionismo monárquico desde nuevos presupuestos.

El progresivo control de los tercios gallegos por parte de la Corona iba a ser resultado de un proceso tortuoso que se desarrolló a lo largo del conflicto sucesorio y cuyos mayores avances iban a producirse a partir de 1710, una vez que Luis XIV retiró a parte de sus tropas de España. Dicho objetivo iba a lograrse merced a las crecientes presiones reales para administrar el arbitrio que mantenía al contingente y designar libremente a su oficialidad. Unos objetivos que se lograron dos años más tarde, en paralelo a la desactivación política de las Juntas del Reino. En este sentido, el componente político que inspiró la política monárquica resulta innegable; sin embargo, también ha de tenerse en cuenta que la propia ineficacia del modelo de los tercios hacía necesario su reforma para adaptarlo a las nuevas formas de hacer la guerra. Bien entendido que las prioridades de la monarquía consistían en disponer libremente de fondos y oficios, de ahí que la reforma del contingente no se produzca hasta 1715.

El cambio organizativo se produjo en el marco de una operación más ambiciosa, destinada a la reorganización del ejército tras el fin de la guerra. En principio la actuación con respecto a los tercios gallegos se ajustaba al procedimiento habitual cuando una unidad contaba con pocos miembros, que consistía en suprimirla y

trasladar sus efectivos a otras. La particularidad de este caso fue que la operación se aprovechó para suprimir los tercios y crear en su lugar nuevos regimientos, lo que permitía al monarca disponer de unidades homologables al resto del ejército. Esto facilitaba también los trasvases de efectivos de unas unidades a otras, aunque la decisión monárquica de concentrar a los efectivos gallegos en unidades específicas pone de manifiesto el deseo de crear regimientos ligados por los lazos del paisanaje y la lealtad a los dirigentes de la tierra.

Esa estrategia de mantener su condición de unidades de naturales exigía el reemplazo de sus integrantes por nuevos combatientes originarios de Galicia. Sin embargo, el estudio de hojas de servicio de la oficialidad de los regimientos creados en 1715 demuestra que esta sucesión no se produjo. Por el contrario, los regimientos iban a sufrir una desnaturalización progresiva, de modo que a comienzos de los años 30 los oficiales gallegos ya no eran mayoría en tales unidades y los que permanecían en ellos eran los incorporados al ejército en 1705. No hubo un relevo generacional que les permitiera mantener su condición originaria, lo que ponía fin al modelo que había facilitado la transición entre los antiguos tercios del reino y el ejército real. Este desenlace puede entenderse como un triunfo de la Corona, que avanzaba así en su propósito de homogeneizar su aparato militar; sin embargo, no podemos olvidar que fue resultado de la progresiva desafección de las elites territoriales, que ya no encontraban interés en el servicio militar. Bien es verdad que pocos años después la creación de las milicias provinciales iba a permitirles servir al rey sin abandonar el reino ni sus instituciones, lo que explica su conversión en un destino especialmente apetecible para los notables locales. Pero esa es otra problemática que esperamos abordar en próximos trabajos.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de M.ª del Carmen Saavedra Vázquez.

Agradecimientos y financiación

Este artículo se ha elaborado al amparo del Proyecto de investigación *El reino de Galicia en la monarquía de Felipe V: instituciones y dinámica política* (HAR2017-83605-P, financiado por la AEI/ FEDER, UE.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

La autora declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Andújar Castillo, F. (1991). *Los militares en la España del siglo XVIII: Un estudio social*. Universidad de Granada.

Andújar Castillo, F. (2002). La reforma militar en el reinado de Felipe V. En J. L. Pereira Iglesias (Coord.), *Felipe V de Borbón, 1701-1746* (pp. 615-40). Universidad de Córdoba.

Andújar Castillo, F. (2004). *El sonido del dinero: Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII*. Marcial Pons.

Andújar Castillo, F. (2006). Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías: Las recompensas de la Guerra de Sucesión en Andalucía. En J. M. de Bernardo Ares (Coord.), *La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725* (Vol. 1, pp. 43-74). Universidad de Córdoba.

Andújar Castillo, F. (2015). De la militarización de Cataluña a los «espacios de integración» de los catalanes en el ejército borbónico tras 1714. En J. Albareda i Salvadó y A. Alcoberro i Pericay (Coords.), *Els Tractats d'Utrecht: Clarors i foscors de la pau. La resistència dels catalans* (pp. 227-236). Museu d'Història de Catalunya - Universitat Pompeu Fabra.

Angulo Morales, A. (2016). Militares en las fronteras imperiales del Setecientos: El ejemplo de los regimientos de Cantabria y Navarra. En É. Sarmiento, M. Pinheiro de Carvalho y P. Flier (Orgs.), *Movimientos, trânsitos & memórias: Temas e abordagens* (pp. 981-994). ASOEC.

Angulo Morales, A. (2020). De casacas azules a blancas: El Regimiento de Infantería de Cantabria (1715-1826). *Tiempos Modernos. Revista Electrónica de Historia Moderna*, *10*(40), 340-355.

Borreguero Beltrán, C. (2001). Del tercio al regimiento. *Estudis. Revista de Historia Moderna*, *27*, 53-90.

De Sotto, S., conde de Clonard. (1851-1859). *Historia orgánica de las armas de infantería y caballería españolas desde la creación del ejército permanente hasta el día* (16 vols.). Imprenta de D. B. González.

Eiras Roel, A. (2003a). Las Juntas del Reino de Galicia de 1701 a 1704. En *Actas de las Juntas del Reino de Galicia* (Vol. XII). Xunta de Galicia.

Eiras Roel, A. (2003b). Las Juntas del Reino de Galicia de 1705 a 1706. En *Actas de las Juntas del Reino de Galicia* (Vol. XIII). Xunta de Galicia.

Eiras Roel, A. (2005). Las Juntas del Reino de Galicia de 1709 a 1712. En *Actas de las Juntas del Reino de Galicia* (Vol. XV). Xunta de Galicia.

Espino López, A. (2014). *Las guerras de Cataluña: El teatro de Marte (1652-1714)*. Edaf.

López Díaz, M. (2009a). Servicio al rey, tráfico de oficios y honores de la guerra: La formación del Regimiento de Caballería de Ourense (1706-1707). En O. Rey Castelao y R. J. López López (Eds.), *El mundo urbano en el siglo de la Ilustración* (pp. 557-569). Xunta de Galicia.

López Díaz, M. (2009b). Crisis de subsistencia y guerra de Sucesión en Galicia: Los motines de Coruña de 1709. En M. López Díaz (Coord.), *Estudios en homenaje al profesor José M. Pérez García* (Vol. 2, pp. 417-438). Universidade de Vigo.

Maffi, D. (2020). *Los últimos tercios: El ejército de Carlos II*. Desperta Ferro.

Martínez-Radío Garrido, E. C. (2008). Levas y reclutas en la Asturias de la Guerra de Sucesión: El caso del Tercio del Principado. *Revista de Historia Militar*, *103*, 127-166.

Martínez-Radío Garrido, E. C. (2009). *La Guerra de Sucesión y Asturias*. Consejería de Educación y Turismo del Principado de Asturias - KRK Ediciones.

Muñoz Rodríguez, J. D. (2014). *La séptima corona: El reino de Murcia y la construcción de la lealtad castellana en la Guerra de Sucesión (1680-1725)*. Universidad de Murcia.

Rodríguez Hernández, A. J. (2007). De Galicia a Flandes: Reclutamiento y servicio de soldados gallegos en el ejército de Flandes (1648-1700). *Obradoiro de Historia Moderna*, *16*, 213-251.

Saavedra Vázquez, M. C. (2012). Las raíces del ejército borbónico: La perspectiva gallega. En M. R. García Hurtado (Ed.), *Soldados de la Ilustración: El ejército español en el siglo XVIII* (pp. 101-130). Universidade da Coruña.

Saavedra Vázquez, M. C. (2013). La élite militar del reino de Galicia durante la Guerra de Sucesión. En M. López Díaz (Ed.), *Élites y poder en las monarquías ibéricas* (pp. 223-244). Biblioteca Nueva.

Saavedra Vázquez, M. C. (2016). La defensa peninsular en tiempos de Carlos II: La experiencia gallega. En M. C. Saavedra Vázquez (Ed.), *La decadencia de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII: Viejas imágenes y nuevas aportaciones* (pp. 129-146). Biblioteca Nueva.

Saavedra Vázquez, M. C. (2018). La nueva planta del ejército en Galicia durante el reinado de Felipe V. En M. de P. Pi Corrales y J. Cepeda Gómez (Coords.), *Aspectos de la historiografía moderna: Milicia, Iglesia y seguridad. Homenaje a Enrique Martínez Ruiz* (pp. 307-338). Actas.

Saavedra Vázquez, M. C. (2022). La paz de Utrecht y la reforma militar de Felipe V: Un análisis y varias reflexiones partiendo de la experiencia gallega. *Studia Historica. Historia Moderna*, *44*(2), 85-116. https://doi.org/10.14201/shhmo202244285116

Saavedra Vázquez, M. C. (2023). De los tercios de gallegos al regimiento de Galicia: Un ejemplo práctico de reformismo militar (1715-1718). En M. López Díaz y M. C. Saavedra Vázquez (Eds.), *Gobernar reformando: Los primeros Borbones en la España del siglo XVIII* (pp. 243-272). Comares.

Saavedra Vázquez, M. C. (2024). *Los supervivientes de Flandes*. Ediciones La Crítica.

Storrs, C. (2022). *El resurgir español, 1713-1748*. Desperta Ferro.

Thompson, I. A. A. (1981). *Guerra y decadencia: Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620*. Crítica.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481219248

PROCESOS LEGISLATIVOS Y LUCHA POR LA SUJECIÓN DE LAS AUTORIDADES AL DERECHO EN LA CATALUÑA MODERNA

Legislative Processes and the Struggle to Subject the Authorities to the Law in Early Modern Catalonia

Josep CAPDEFERRO
Universitat Pompeu Fabra
josep.capdeferro@upf.edu

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Desde los años 1990, en buena parte debido a la edición de procesos inéditos de Cortes celebradas entre 1480 y 1706, el conocimiento del parlamentarismo histórico catalán ha recibido un gran impulso. Cada vez se sabe mejor el papel determinante que jugaron los tres estamentos en la promoción de nuevas normas generales para el Principado de Cataluña y, hasta 1659, los Condados de Rosellón y Cerdaña. Después de negociaciones internas en comisiones parlamentarias, se abría un diálogo con el rey para que las leyes que decretara reflejaran un complejo concurso de voluntades políticas. Reiteradamente, desde principios del siglo XVI, los estamentos reivindicaron leyes que acotaran los márgenes del poder real —a menudo también señorial—, evitando arbitrariedades y garantizando la observancia del derecho, que en buena parte se había pactado en Cortes. Sucesivamente, en 1617, 1626, 1641 y entre 1701 y 1706, dignatarios catalanes plantearon mecanismos para resolver conflictos político-constitucionales graves con la mayor neutralidad posible. Dos tuvieron aplicación práctica: los juicios paccionados (1642-1647) y el Tribunal de Contrafaccions (1702-1713).

Palabras clave: Parlamentarismo; legalidad; política; Cataluña; Edad Moderna.

ABSTRACT: Since the 1990s, largely thanks to the publication of previously unpublished records of the Cortes held between 1480 and 1706, knowledge of Catalan historical parliamentarism has received a major boost. There is now a much better understanding of the decisive role played by the three estates in promoting new legislation for the Principality of Catalonia and, until 1659, the Counties of Roussillon and Cerdagne. After internal negotiations within parliamentary committees, a dialogue was opened with the king so that the statutes he enacted would reflect a complex combination of political wills. From the early sixteenth century onwards, the estates repeatedly demanded laws that would limit the scope of royal power —and often seigneurial power as well—, prevent arbitrariness, and guarantee the observance of the law, much of which had been agreed upon in the Cortes. In 1617, 1626, 1641 and between 1701 and 1706, Catalan dignitaries successively proposed mechanisms to resolve serious political and constitutional conflicts with the greatest possible neutrality. Two of these were put into practice: pact-based judicial proceedings (1642-1647) and the *Tribunal de Contrafaccions* (1702-1713).

Keywords: Parliamentarism; Rule of law; politics; Catalonia; Early Modern period.

1. LA EDICIÓN DE FUENTES, UN IMPULSO A LOS ESTUDIOS SOBRE PARLAMENTARISMO HISTÓRICO

En la última década se ha producido un incremento exponencial de documentación asequible para estudiar el parlamentarismo catalán desde finales de la baja edad media hasta su extinción, mediante el Decreto de Nueva Planta publicado en 1716[1]. En la colección Textos Jurídics Catalans, auspiciada por el Departament de Justícia —actualmente Departament de Justícia i Qualitat Democràtica— y el Parlament de Catalunya, se han editado las actas de las Cortes de 1480-81 presididas por Fernando II (2023), el brazo eclesiástico de las Cortes de 1599 y las ultimísimas Cortes de 1705-06, que presidió el archiduque Carlos de Austria, entonces reconocido como

1. Las actas del congreso de historia institucional «Les Corts a Catalunya» celebrado en 1988 se mantienen como una referencia firme. El contenido de la mayoría de las contribuciones ahí presentadas sigue vigente.

Carlos III en los territorios de la Corona de Aragón (el proceso del brazo eclesiástico se publicó en 2014, el del brazo militar en 2016 y el del tercer estamento o brazo real en 2022). Así, se va dando continuidad a la edición exitosa entre 2001 y 2010 de cinco volúmenes sobre las Cortes catalanas celebradas en Monzón en 1585 —en paralelo a Cortes aragonesas y valencianas. El quinto incluyó significativamente valiosos materiales complementarios que permiten estudiar esas reuniones políticas de altísimo nivel no sólo desde su eje central, sino también mediante fuentes periféricas, principalmente instrucciones y cartas de corporaciones municipales o cabildos catedralicios a sus síndicos. Está en curso la edición de otros volúmenes de Cortes catalanas: tres de las de 1599, convocadas por Felipe III (II de Aragón) al inicio de su mandato, en su momento consideradas muy exitosas para todos los participantes; las de 1547, presididas por el futuro Felipe II (I de Aragón) como heredero y lugarteniente general del emperador Carlos; y las de 1701-02, con las que el flamante Felipe V (IV de Aragón) quiso ganarse el apoyo de los súbditos del Principado en un contexto de guerra en Italia, sabiendo contestada su sucesión al trono de la monarquía hispánica.

Esas ediciones, a pesar de estar al alcance de todo el público, entrañan dificultades de comprensión e interpretación que sólo se suavizarán con el paso del tiempo y una historiografía contextualizadora. Al respecto, como punto de partida son imprescindibles los estudios introductorios de cada volumen, muchos de ellos realizados por la añorada Eva Serra, figura clave en la reivindicación del parlamentarismo histórico catalán (Serra, 2007b), a quien este artículo rinde un sentido homenaje. Otros han sido escritos por discípulos y continuadores suyos que integran el llamado «equip de Corts», que asume la tarea de transcribir cientos de páginas sobre materias a veces crípticas, que sólo después de meses van cobrando el debido relieve y muestran su dimensión política.

Resulta revelador que el punto de arranque de esta tarea editorial sean las actas de las Cortes de 1480-81. Celebradas unos meses después de que la muerte del rey Juan II dejara sin concluir las de 1473-1479, con el bajón moral por la pérdida —entonces provisional— en manos del rey de Francia de los condados de Rosellón y Cerdaña, tuvieron que lidiar con conflictos de gran calado derivados de la guerra civil que había sacudido Cataluña durante la década de 1460. Fue complicadísimo conseguir consensos sobre aspectos como la restitución de bienes a los vencidos o la condonación parcial de deudas contraídas por la Diputació del General que se había levantado en armas contra el rey. Un rey con autoridad creciente facilitó grandes acuerdos lo más transversales posibles, entre los cuales la célebre constitución *Poc valria*, llamada a ser piedra angular de la observancia del derecho durante los siglos a venir —tendremos ocasión de hablar sobre ello en el apartado 4.

Después de la llamada sentencia arbitral de Guadalupe de 1486, que ha dado y dará lugar a tantas interpretaciones (Feliu, 2011, pp. 55-59), se abriría una nueva

página con las Cortes del monasterio barcelonés de Santa Anna en 1493, donde se concretaría la configuración institucional del flamante Real Consejo y Real Audiencia de Cataluña, específico respecto del general de los territorios de la Corona de Aragón que había funcionado durante la baja edad media (Tatjer, 2009). Una Real Audiencia llamada a convertirse en el eje de la jurisdicción superior real en Cataluña, una pieza troncal en la estructura virreinal concebida para mitigar el creciente ausentismo de los monarcas (Lalinde, 1964). Dicha Audiencia pronto se vería contestada respecto al enjuiciamiento de la observancia del derecho, tema central de este artículo.

2. SOBRE LA VITALIDAD DEL PACTISMO SECULAR CATALÁN Y SU CONTEXTO

Detrás de cualquier análisis sobre las Cortes catalanas de la edad moderna sobrevuela un interrogante: ¿Seguía vigente el pactismo que según la historiografía mayoritaria había arraigado en Cataluña y otros territorios de la Corona de Aragón cismarina durante la baja edad media?

Sin ánimo de hacer un repaso exhaustivo de la historiografía modernista catalana de las últimas décadas, de gran vitalidad desde el celebérrimo *The revolt of the Catalans* (Elliott, 1963), como se refleja en la magnífica síntesis del maestro Josep Fontana (Fontana, 2014), y afortunadamente con proyección futura (Capdeferro y Torra-Prat, 2021), hay algunas referencias que no pueden omitirse, tanto de autores de historia del derecho y las instituciones como de historia moderna con un fuerte interés hacia las instituciones. Cito sólo algunos jalones.

Tomàs de Montagut y discípulos como Albert Estrada-Rius, Isabel Sánchez de Movellán o Pere Ripoll, enlazando con trabajos del equipo dirigido por Manuel Sánchez Martínez en la Institució Milà i Fontanals del CSIC (1995, a modo de síntesis), sentaron las bases para dimensionar la plenitud fiscal, financiera y jurisdiccional de la que fue dotada la Diputació del General desde la segunda mitad del siglo XIV y durante el siglo XV (Estrada-Rius, 2001; Montagut, 1996; Ripoll, 2023; Sánchez de Movellán, 2004). No en vano, la Diputació se erigiría en la encarnación permanente de los tres brazos o estamentos que constituían el General de Cataluña, es decir, una columna del régimen dualista del que el aparato de la monarquía sería otro pilar.

Como es natural, abundaron aportaciones sobre el aparato de la monarquía: abarcaron desde el análisis estructural del Consejo Supremo de la Corona de Aragón —órgano común a los varios territorios de la Corona, pero con jurisdicción distinta sobre cada uno de ellos— y la acción de alguno de sus miembros (Arrieta Alberdi, 1994) o la fiscalidad y finanzas regias en la Cataluña moderna (Hernández, 2003) a la prosopografía de nobles y notables que ostentaron ministerios y altos oficios regios en el Principado (Molas, 1996, 2004), con particular atención a dignidades y magistrados de la Real Audiencia (Rodríguez, 2006). Mención especial merecen

estudios sobre regalismo político (Gil, 1998, 2008) y personas y parentelas que oscilaron entre la defensa de intereses regios y territoriales (Fargas, 1997; Palos, 1997).

Albert García Espuche, fundamentalmente a partir de un vaciado exhaustivo de protocolos notariales, puso en valor la red de ciudades y el mercado interior que se estructuraron entorno a la capitalidad barcelonesa desde mediados del siglo XVI, la importancia de los vínculos de ciudadanía en familias con un tronco en una ciudad y unas ramas en otras y el valor de la participación política en instituciones municipales y territoriales para mejorar las interconexiones. Ante sus evidencias uno se pregunta si la unificación de pesos y medidas según el patrón de Barcelona que se ejecutó —lentamente— a partir de las Cortes de 1585 (Serra, 1999; Teixidó, 2008-2009) fue causa o fruto del desarrollo de dicho mercado interior. Un elemento interesantísimo de sus análisis fue la evolución en términos de demografía y relevancia económica de ciudades y villas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, con una creciente preponderancia del litoral en detrimento de la Cataluña interior (García Espuche, 1998).

Eva Serra, ya citada, evolucionó desde los estudios de historia económica hacia revueltas populares y protestas antiseñoriales. Su interés creciente por las instituciones políticas y los debates legislativos siempre mantuvo un acento social. Por ejemplo, en el marco del parlamentarismo histórico, desde hace décadas se hacía eco de las frecuentes discrepancias sobre el momento adecuado para contabilizar el diezmo, en haz o en grano —*delmar en garba o en gra*—, consciente de que los señores sentirían predilección por lo primero y los campesinos por lo último —detrás de la cuestión estaba una mejor fiscalización y control sobre posibles excedentes (Serra, 1978). Tuvo a muchos discípulos, a menudo fuera del sistema académico propiamente dicho, que han iluminado aspectos estratégicos como: a) Elementos de limitación del poder monárquico presentes en la Capitulació de Vilafranca de 1461 y pretensiones de las instituciones de legitimidad ascendente ante el aparato de Juan II y ante reyes que fueron nombrados subsidiariamente durante la Guerra Civil de 1462-72 (Muxella, 2013); b) la crisis de 1592-1593, que había recibido poquísima atención historiográfica —no ajena a las alteraciones aragonesas de 1591 y a la «pacificación» en Cortes de Tarazona de 1592—, entre la monarquía de Felipe II y las instituciones catalanas, con el *afer Granollacs* en el centro de la escena (Pérez Latre, 2003, p. 208); c) la tenacidad litigadora de comunidades rurales —estructuradas políticamente— ante la Real Audiencia mediante evocaciones de causas para exigir a sus señores el respeto a derechos sobre bienes comunales y otras prerrogativas históricas (Olivares, 2000); d) la movilización de recursos financieros, fiscales y militares por parte de la Diputació del General y el Consell de Cent para hacer frente a la monarquía de Felipe IV al principio de la Guerra dels Segadors (Estanyol, 1999); e) el exilio de las élites, principalmente eclesiásticas y nobiliarias, partidarias de los Habsburgo cuando buena parte de Cataluña pasó formalmente bajo soberanía de los reyes de Francia a partir de 1641 (Vidal, 1984), etc.

Antoni Simon Tarrés, como Eva Serra o Xavier Torres Sans (Torres, 1995), que editaron la publicística de época fundamental al respecto —después de las gacetas y noticias (Ettinghausen, 1993)—, hilvanó los conflictos político-constitucionales que se habían suscitado y amplificado desde las décadas previas a 1640. Antes de la revolución institucional, se había generado un denso bagaje intelectual y jurídico para que los defensores de las instituciones de legitimidad ascendente hicieran frente a los postulados y exigencias de la monarquía (Simon, 1999). Mucho más recientemente, y de forma complementaria, Eulàlia Miralles ha ilustrado cómo se trasladó a la poesía, también con vocación política, legitimadora y movilizadora —más que puramente estética— el combate armado entre 1640 y 1652 (Miralles, 2020-2023).

Eva Serra —su legado científico es enorme— reivindicó la amplitud y la transversalidad de la participación política en las instituciones representativas de la Cataluña moderna mediante la edición de documentos como los *Llibres de l'ànima* de la Diputació del General (Serra coord., 2015) —los del Consell de Cent barcelonés están pendientes de culminar y publicarse. Con una notoria sobrerepresentación de los grupos socioeconómicos privilegiados, claro está, pero conociendo la simbiosis que se había operado entre ciudadanos honrados o doctores en derecho y medicina y las clases privilegiadas tradicionales (Amelang, 1986). Fue de los autores que juzgó más severamente cómo, después del regreso de Cataluña bajo obediencia hispánica en 1652, la monarquía se reservó intervenir en los procesos de insaculación —en definitiva, podía filtrar quiénes serían elegibles para cargos en la Diputació y el Consell de Cent, lo que desnaturalizaba potencialmente la representación (Serra, 1997). Mucho más recientemente, Eduard Puig ha analizado cómo se materializó ese filtraje entre 1654 y 1705 —fueron tiempos muy críticos, con la Revuelta dels *Barretines* y la Guerra de los Nueve Años (Puig, 2012). Por otra parte, Joaquim Verde ha abundado en el estudio de la representación política durante los primeros años del siglo XVIII, antes del Decreto de nueva planta, en tres niveles sucesivos e interconectados: Cortes, Diputació del General y veinte municipios, la mayoría regios y algunos señoriales (Verde, 2021).

Ricard Torra-Prat ha estudiado el potencial (desde 1433), las tentativas más o menos prometedoras (entre 1520 y 1599) y la consolidación de la visita interna de la Diputació del General, desde 1599, con periodos de gran eficacia y notable grado de ejecución de las sentencias condenatorias a oficiales en fraude doloso —más que a cargos políticos— y décadas de marginalización y erosión del mecanismo fiscalizador. Con un elemento en común, fuere cual fuere la época: la abundancia de conflictos jurisdiccionales entre el consistorio de la propia Diputació y el de sus visitadores (Torra, 2021).

Eduard Martí ha estudiado el desarrollo de dos mecanismos supletorios o complementarios de representación ante la no celebración de Cortes y el intervencionismo real en las instituciones que habían sido de base representativa en la

segunda mitad del siglo XVII. Por un lado, el brazo militar extraparlamentario —a no confundir con el que se reunía en Cortes—, con la particularidad de ser un común o corporación ajeno a restricciones en la insaculación de su nómina y sus cargos (Martí, 2016, pp. 55-59). Por otra parte, la confluencia de las tres principales instituciones del Principado (Diputació del General, Consell de Cent y brazo militar extraparlamentario) en la Conferència dels Tres Comuns, principalmente entre 1697 y 1714, donde participarían muchas personas de distinta condición social —siempre dentro de un marco oligárquico. Su acción concertada generaría la masa política necesaria para plantear exigencias a la monarquía en nombre de unos intereses de una élite ampliada de la comunidad política que no coincidían con los dinásticos (Martí, 2008).

Joaquim Albareda ha reivindicado el zénit del constitucionalismo y el parlamentarismo en Cataluña en la primera década del siglo XVIII, algo paradójico comparado con lo que sucedía coetáneamente en otros territorios europeos. Los estamentos consiguieron implementar un programa económico y jurídico de signo muy avanzado, entre el que brillaría con luz propia una jurisdicción mixta y paritaria entre el rey y la provincia de signo paraconstitucional llamada Tribunal de Contrafaccions —es objeto *in extenso* del apartado 4. Ello sería fruto, por una parte, de la habilidad y tenacidad política de muchos participantes en las Cortes de 1701-02 y 1705-06; por otro lado, de la necesidad de los candidatos de la lucha sucesoria por atraerse el favor de los súbditos catalanes. Poniendo émfasis en la participación del hombre común en varios marcos institucionales, Albareda ha ayudado a entender porque tantos sujetos de Cataluña y de la Corona de Aragón que valoraban este modelo de tintes republicanistas se alinearon con el austriacismo durante la Guerra de Sucesión (Albareda, 2019, 2021).

Más recientemente, se ha investigado un elemento para nada accesorio en el conjunto poliédrico de instituciones que configuraban el pactismo: el rol de tercer árbitro que ejercía el canciller, al mismo tiempo prelado y alto oficial regio, en las disputas entre jurisdicciones eclesiásticas y reales para juzgar conflictos civiles o criminales que se hallaban en un terreno gris o fronterizo entre los ámbitos de poder espiritual y temporal. No en vano, una parte sustancial del constitucionalismo histórico catalán y de otros territorios de la Corona de Aragón era el vigor de las libertades eclesiásticas y su resistencia —por lo menos en términos relativos— ante la *vis expansiva* de la monarquía (Capdeferro, 2023).

En definitiva, son muchos y complementarios los autores que, a partir de fuentes de archivo antes poco o nada exploradas, leen el empoderamiento o la resiliencia estamental como una clave de modernidad y no como un atraso o mera resistencia en Cataluña (s. XVI-inicios s. XVIII). En este sentido, Serra lamentaba que el respetadísimo Jaume Vicens Vives hubiera sido incapaz de entender el poder público en parámetros de republicanismo (Serra, 2011, p. 16). A continuación, como elemento

adicional a ponderar en la balanza, procede plantear en qué medida los estamentos fueron proactivos en el proceso legislativo de las Cortes catalanas de la edad moderna.

3. LA PROACTIVIDAD DE AGENTES ESTAMENTALES EN LA PROPOSICIÓN DE LEYES

Es conocido que uno de los principales atributos en las asambleas representativas catalanas, y también aragonesas y valencianas, era la actualización del derecho general, con el concurso de las voluntades del rey —quien debería decretarlo— y los estamentos que estructuraban la comunidad política (Peguera, 1632; Montagut, 2002, pp. 651-653).

Con el paso de los años va perdiendo fuelle la tesis de que las normas llamadas constituciones eran siempre fruto de la iniciativa legislativa de la monarquía y contaban con el consenso estamental, mientras que los capítulos de corte habrían sido propuestos por los estamentos y sancionados por el rey. La formulación había alimentado esa idea: las constituciones se proclamaban desde un *Nós* majestático mientras que los capítulos de Corte se rubricaban con un *Plau al Senyor Rei*, a veces absoluto, a veces con condicionantes (Font i Rius, 1998). Cada vez hay más testigos de la proactividad muy superior —¿incluso absoluta? (Serra, 2003, p. 155)— de los estamentos en el proceso legislativo, tanto en lo que se acabaría materializando en constituciones como en capítulos de corte. Ello había sucedido incluso en ámbitos a priori exclusivos de la monarquía, por ejemplo la regalía de alta justicia para toda la Corona. Constan iniciativas estamentales en la materia entre 1382 y 1437 —y más allá de este periodo—, a tomar en cuenta aunque no prosperaran. Concretamente en las Cortes de 1410 los estamentos habían elaborado cien *capítols de la Justícia* que no llegaron a ser propuestos a aprobación del rey porque murió durante la reunión política, que quedó inconclusa (Montagut, en prensa).

Por lo que respecta a la Cataluña moderna, sirvan como ejemplos de proactividad legislativa casos como los siguientes, ordenados cronológicamente.

En las Cortes de 1493, una constitución —obviamente buscada por el brazo real— promovió la remisión de diez fuegos censales sobre cada cien —un diez por ciento— en la exacción de impuestos reales a ciudades, villas y lugares de Cataluña en concepto de población pobre y miserable, una medida de gracia parcial que se obtuvo alegando las turbaciones y mortaldades pasadas, durante la guerra civil (Serra, 2005, pp. 46).

En 1510, fue a propuesta de la *vint-i-quatrena* (comisión de veinticuatro) *de Corts* del Consell de Cent de Barcelona que prosperó la constitución n.º 55, «Més avant estatuïm y ordenam», que rubricó algo que ya debía estar enraizado en la cultura jurídica y política de Cataluña —¿de toda la Corona de Aragón?—: la exigencia de

motivar públicamente las sentencias judiciales definitivas, incluyendo las de la Real Audiencia (Irazábal, 2025).

Para el conjunto del siglo XVI, tanto para el periodo 1520-1564 como para el ciclo entre 1564 y 1599, con la compleja lucha contra el bandidaje como telón de fondo, Eva Serra defendió con abundantes pruebas la implicación directa de los estamentos en la mejora de la legislación en materia de orden público (Serra, 2003) o en la administración de justicia real, en clave garantista (Serra, 1999), a menudo con el objetivo de limitar los abusos y excesos de oficiales regios que actuaban al margen de las constituciones catalanas, pero sin conseguir mecanismos eficaces para frenar las llamadas *contrafaccions* o contrafueros.

En 1617, ante el anuncio que quizás Felipe III convocaría unas sesiones de Cortes que finalmente no se celebraron, el equipo jurídico de la Diputació del General elaboró un memorial exhaustivo de propuestas normativas sobre problemas que llevaban tiempo esperando o respondían a nuevas circunstancias del país[2]. El trienio estaba a punto de concluir cuando, el 12 de junio, siete personas nombradas por los diputados —algunas de ellas, juristas de condición— acumularon información, sabiendo que tendría que ser revisada y precisada por sus sucesores al frente de la institución provincial. Es interesante ver la veintena larga de normas que redactaron como idealmente saldrían aprobadas en Cortes, algunas ya formuladas en nombre del rey y otras de los brazos. Entre ellas, la primera, como si fuera una constitución de promoción regia —«ordenam y statuïm, la present Cort aprovant»—, buscaba resolver las *contrafaccions* o violaciones de derecho tanto por parte de oficiales reales como señoriales, mediante un mecanismo inédito que tendría a la Diputació del General como ministerio público y a la Real Audiencia como primera fase jurisdiccional. En caso de que no se lograra la revocación del acto judicial o gubernativo ilegal, habría una segunda fase donde intervendría una comisión de ocho personas, nombradas paritariamente entre la Diputació del General y la monarquía —cuatro por un lado, cuatro por el otro. De esas, seis serían miembros de los estamentos y dos serían juristas. En caso de empate, se recurriría a un tercer árbitro elegido de la siguiente forma: en una junta de brazos o reunión estamental celebrada en la sede de la Diputació serían elegidas tres personas mediante votación pública, de las que el virrey tendría que escoger una, quien tendría la última palabra sobre el caso.

En las sesiones de Cortes no clausuradas de 1626 se propuso que la nobleza en proceso de urbanización que llevaba tiempo consiguiendo que algunos de sus rangos —los caballeros, por lo menos— entraran en gobiernos de municipios catalanes dejara de estar exenta de las imposiciones de dichos municipios. Esa cuestión

2. Biblioteca del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (BICAB), manuscrito B-199/1, inédito.

no era vista como una mera petición del brazo real o tercer estamento, sino como un asunto general a abordar por vía legislativa (Serra, 2005, p. 49).

En el apartado 4 se presentan otros proyectos normativos planteados en distintas Cortes (1510, 1626 —inconclusas—, 1701-02 y 1705-06) sobre mecanismos ad hoc, lo menos intervenidos por la monarquía que fuera posible, para juzgar *contrafaccions* o contrafueros cometidos por oficiales reales (en 1510 y 1626) y también señoriales (en 1701-02 y 1705-06), como en la propuesta non-nata de 1617.

Más allá del contenido de propuestas de constituciones y capítulos de corte, crece la evidencia de cuán decisivas fueron las comisiones interestamentales que las sugirieron, filtraron y concretaron. Formadas por dos, tres, cuatro o seis miembros de cada uno de los brazos, su cometido no era meramente técnico —aunque se puedan equiparar a comisiones técnicas especializadas—, sino con una fuerte componente política. Por lo menos durante varias Cortes de la edad moderna, actuaron como la cocina de las Cortes y, concretamente las comisiones de *constitucioners* y de *combinadors*, como la amasandería donde se pastaba y el horno donde se cocía la legislación —donde se concordaban voluntades particulares para conseguir una general. Concretamente, los *constitucioners* hacían una primera selección de propuestas normativas recabadas entre distintos agentes parlamentarios y extraparlamentarios. Con la ayuda de abogados —a veces controvertida, por excesivamente intervencionista—, elaboraban los borradores que serían sometidos a deliberación y votación en cada uno de los brazos. Los *combinadors* o *combinadors d'esmenes*, por su parte, negociaban enmiendas introducidas en cualquiera de los estamentos para conseguir un texto que fuera del agrado de los tres y pudiera ser finalmente elevado a decretación regia (Pérez Latre, 2014, pp. 85-89). Hace unas décadas parecería ilusorio conocer el destino de todas las propuestas que afloraron en la primera o ambas comisiones en cada una de las Cortes entre finales del siglo XV y principios del XVIII, incluso las descartadas y olvidadas. Investigaciones recientes van llenando este vacío historiográfico —por ejemplo, para las Cortes del período 1547-1552 (Serra, 2004).

Cabe subrayar la interconexión contínua de los tres estamentos en unas comisiones transversales y paritarias, donde se cruzaban intereses, complicidades y negociaciones, claro está, no siempre con los estamentos eclesiástico y nobiliario por un lado y el tercero por otro, como se verá en el apartado 4. Cualquier división entre estamentos más y menos privilegiados resulta simplista, incluso absurda, puesto que cada estamento acogía varias almas en su seno y albergaba tensiones internas que iban más allá de disidencias clientelares (véase también Serra, 2007b). No siempre coincidían los intereses de obispos y síndicos de cabildos catedralicios, ni los de nobleza titulada, alta nobleza y cavalleros o los de ciudades, villas y lugares. De ahí el afán legítimo de unos u otros por colocar alguno de sus representantes en las principales comisiones de trabajo (Capdeferro, 2008).

En varias ocasiones —recordemos que el proceso de revelación de documentación está en curso—, se aprecia que las propuestas legislativas, resultaran exitosas o fallidas, no emanaban propiamente de las dignidades o corporaciones representadas en los estamentos. La fuente originaria habían sido corporaciones de un nivel inferior, que veían así elevadas sus ideas e inquietudes a nivel parlamentario. Es el caso, por ejemplo, de la petición de los zapateros de Vic al gobierno de su municipio para que en las Cortes de 1626 postulara la prohibición de importación de cueros o cordobanes[3].

Recientemente, ha sido estudiado un documento muy interesante que, sin ser representativo —es único en su género, por lo menos en Cataluña— ilustra estas dinámicas *bottom-up*. Se trata de un amplio programa jurídico-político que redactó el archivero del Hospital de la Santa Creu de Barcelona, Sebastià Roger, al principio de las Cortes ya mencionadas de 1599. Roger, un escribano ansioso por mejorar la organización de la sociedad, formuló a conciencia un memorial de propuestas legislativas para que las tomara en consideración la comisión de seguimiento de las Cortes nombrada por el Consell de Cent de Barcelona, la ya citada *vint-i-quatrena de Corts*. El memorial constaba de cincuenta y cinco puntos sobre materias dispares, que estructuró en los ámbitos siguientes —los traduzco al castellano—: (I) «De algunas cosas tocantes a la honra de Dios y de la Iglesia»; II) «De algunas tocantes al bien común de toda Cataluña»; III) «De la Real Audiencia, jueces y notarios»; IV) «De la Diputació [del General]»; V) «De la ciudad de Barcelona, bien de su casa y del hospital general de Santa Creu» (principalmente, repensando la captación de recursos y el rol de los oficiales serviciales).

La disposición del texto —fue transcrito bellamente, con la máxima solemnidad— demuestra la ilusión que un agente social relativamente modesto podía tener por participar en la mejora de las normas del país. Sebastiá Roger era plenamente consciente de ser una pequeña pieza en un proceso legislativo multinivel, pues sus propuestas deberían ser filtradas por lo menos por siete instancias: la *vint-i-quatrena de Corts* de Barcelona, los síndicos de la ciudad de Barcelona, la comisión de los *constitucioners*, cada uno de los tres estamentos, separadamente, y sólo en caso de acuerdo, la monarquía (Capdeferro, 2021).

Dejamos en el tintero una cuestión fundamental —del género ¿fue primero el huevo o la gallina?— que sobrepasa la ambición del presente estudio: en qué medida la gran proactividad estamental en el proceso legislativo parlamentario en la Cataluña moderna fue causa o bien efecto de la preferencia de la monarquía por normas ajenas a pacto como pragmáticas, decretos o edictos —*crides* o *proclames*.

3. Arxiu Municipal de Vic, Manual de acuerdos n.º 15, 7.º punto de la lista de sugerencias normativas de 6 de febrero de 1626, fol. 237v. En los fol. 221v-222r y 236v constan las peticiones hechas al respecto por los zapateros al municipio en fechas 16 y 27 de enero.

Sirvan a modo de ejemplo los bandos del virrey duque de Feria sobre *pedrenyals* en 1598 que ordenaron a herreros y cerrajeros una limitación de las medidas de arcabuces, contra las constituciones que consagraban el libre comercio en Cataluña (Belenguer, 1987, p. 111). Ello conllevó a menudo conflictos con las instituciones representativas que, al ver burlados de forma unilateral los esfuerzos para pactar en Cortes, intentaban reconducir las normas reales al foro multilateral que consideraban adecuado (Serra, 2003, p. 155). Otros conflictos en la compleja dialéctica entre derecho real y paccionado tuvieron como objeto la suspensión unilateral por la monarquía de normas aprobadas en Cortes, como sucedió en 1593 con los capítulos 7, 13 y 34 del *redreç* del General aprobado en 1585 (Pérez Latre, 2003, pp. 225-228), o el desacuerdo —por ejemplo, entre los años 1599 y 1601- sobre si los textos legales que se imprimían eran exactamente los mismos que se habían aprobado en Cortes.

4. UN EJEMPLO EXITOSO DE TENACIDAD ESTAMENTAL EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA: EL TRIBUNAL DE CONTRAFACCIONS (1702-1713)

Hay un caso que aflora meridianamente en los procesos de Cortes y la documentación aneja —en vías de edición, como se dijo en el apartado 1– sobre la tenacidad o resiliencia del pactismo en la Cataluña moderna —apartado 2—, como ejemplo de proactividad estamental en el proceso legislativo que se desarrollaba en Cortes —apartado 3—: la reglamentación e implementación del Tribunal de Contrafaccions, una jurisdicción lo más neutra posible para juzgar las *contrafaccions* o contrafueros que cometieran oficiales reales y/o señoriales en el ejercicio de sus funciones. Por lo que respecta a su contenido y con la prudencia que debe acompañar cualquier comparación anacrónica, en ciertos aspectos se podría equiparar a una jurisdicción paraconstitucional, en otros sería como un antecedente de tribunal contencioso-administrativo. Antes de analizarlo en detalle (4.2), es precisa una introducción donde será inevitable evocar algunos contenidos que ya se han avanzado, aportando complementos relevantes (4.1).

4.1. *Desde la (¿primera?) petición en 1510 hasta la experiencia (¿exitosa?) de 1642-1647*

Desde la erección de una Real Audiencia particular para Cataluña en las Cortes de 1493 se evidenció el riesgo de que, por parcialidad de los doctores nombrados exclusivamente por el rey, quedara en papel mojado el programa jurídico-político de la Observancia que había recibido un fuerte empujón en las Cortes de 1480-1481 con la célebre constitución *Poc valria*. Era evidente que, por elemental corporativismo, los altos magistrados regios no tendrían ningún incentivo para procesar, menos todavía condenar, a otros altos oficiales de la monarquía que hubieran podido

contravenir los *usatges*, el derecho aprobado en Cortes u otras fuentes de derecho catalán, general o particular. Ya en las Cortes de 1510 presididas por Fernando II, la comisión barcelonesa que seguía minuciosamente la reunión política —la mencionada *vint-i-quatrena de Corts*— pidió que cada dos o cada tres años, el rey o, en su ausencia, su lugarteniente general, con consejo de algunos juristas que el uno o el otro eligieran, «pus sien catalans i no del consell de la Real Audiència» (mientras fueran catalanes y no fueran miembros de la Real Audiencia), *ex officio* o a instancia de la Diputació del General o de cualquier particular, investigaran a cualquier oficial real, incluyendo a doctores de la dicha Real Audiencia, que no hubiera respetado el derecho catalán[4]. A lo largo de otras Cortes del siglo XVI se evidenciaría de nuevo la inquietud de los estamentos catalanes por la falta de neutralidad de quienes podían enjuiciar *contrafaccions* de los altos oficiales regios. En las primeras sesiones de Cortes que fueron convocadas durante el siglo XVII, en 1626, se formularon en el seno de los estamentos varios proyectos legislativos de signo claramente republicanista, que buscaban garantizar la sujeción a derecho de los dichos altos oficiales. Uno de ellos, promovido por la ciudad de Girona, postulaba como jueces de *contrafaccions* a una troica integrada por el obispo de Barcelona, el diputado militar o nobiliario de la Diputació del General y el primer edil —el *conseller en cap*— de Barcelona, con asesoramiento preceptivo del abogado fiscal de la Diputació y los dos asesores ordinarios de la capital catalana. Ahí, la monarquía quedaba totalmente al margen del enjuiciamiento de lo que hoy podríamos calificar como conflictos político-constitucionales[5]. Otro proyecto, el que acabó siendo objeto de debate, llevaba por nombre Sala de Sant Jordi. La sustanciación de las presuntas *contrafaccions* iría a cargo de un tribunal mixto formado por trece personas, seis o siete de ellas —alternativamente— serían doctores o «magistrados» de la Real Audiencia y serían extraídos a suerte entre los insaculados a las bolsas de los tres estamentos de la Diputació del General (Villanueva, 1995, pp. 254-255). La ambición estamental, juntamente con las prioridades absolutamente distintas de Felipe IV y sus ministros —la célebre Unión de Armas era su punto de partida en la negociación— coadyuvó en la crisis de esas sesiones parlamentarias y las que continuaron en 1632. Desde hacía años, se habían sucedido conflictos político-constitucionales de gran trascendencia —ya han sido evocados— que no consiguió pacificar el alto diálogo político que antaño tenía lugar en las Cortes, cada vez menos frecuentes.

4. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), 1B-XVI-79, *Deliberacions fetes per lo consell de la XXIII* [26/07/1510] «contra los contrafactors de constitucions». Las investigaciones del doctorando David Irazábal están poniendo en valor otras partes de estas «Deliberacions» en relación con la consolidación de la Real Audiencia de Cataluña, casi veinte años después de haber sido creada en su versión particular para el Principado.

5. Arxiu Municipal de Girona, *Liber Curiarum* de 1626, fol. [72], punto 23.º del listado de cuestiones de justicia que Girona llevó ante la Cort General que se celebraba en Barcelona.

La erupción de la guerra franco-española, lejos de facilitar una *entente*, complicó más el escenario. Tras nuevas tensiones constitucionales graves —sobre la legitimidad de la convocatoria del *usatge Princeps namque* en 1637 o alojamientos abusivos de tropas, por citar sólo dos ejemplos—, en junio de 1640 estalló la crisis social llamada *Corpus de Sang*. Desde septiembre los dirigentes de la Diputació del General o Generalitat convocaron una *junta general de braços* —lo más similar posible a unas cortes sin rey—, que legitimó acciones fiscales, financieras y de reclutamiento tendientes a una secesión (Simon, 2019). Lo que había empezado como una revuelta popular se convertía en una revolución liderada desde las instituciones (Serra, 1991). Unas instituciones demasiado débiles militarmente, que acabaron poniendo Cataluña en manos de Luis XIII de Francia. La sujeción a la monarquía gala se hizo mediante dieciseis capítulos comunmente conocidos como pactos de Peronne, uno de los cuales, el de mayor enjundia, establecía una ansiada jurisdicción mixta y paritaria para juzgar *contrafaccions*: los «juicios paccionados». Era mixta entre la monarquía y los estamentos políticos del país, y paritaria de forma mediata: en los juicios de orden impar participarían siete jueces de la Real Audiencia y seis de los tres estamentos, y en los de orden par se invertiría la proporción —como se había previsto en la Sala de Sant Jordi, elocuentemente. A pesar de no ser fruto de un acuerdo parlamentario ni en el fondo ni en la forma, el capítulo 14.º de Peronne fue redactado como una enmienda parcial a la constitució *Poc valria* de 1481. Apenas se ha descubierto que ese mecanismo para resolver conflictos constitucionales de alto nivel llegó a funcionar en cuatro ocasiones, entre los años 1642 y 1647 (Capdeferro, 2025). Lo han revelado varias anotaciones en los *Dietaris de la Generalitat de Catalunya* y dos memoriales políticos escritos por juristas en 1646, uno por Francesc Martí Viladamor y el otro por Narcís Peralta. Una primera evidencia que ha arrojado esta investigación es que las autoridades de la monarquía francesa jugaron hábilmente con la alternancia de mayorías en el comité de enjuiciamiento, reservando los comités donde previsiblemente tendría una mayoría de siete jueces para las *contrafaccions* de mayor enjundia. Así, se aseguraron el voto de calidad en el juicio al virrey conde de Harcourt y a dos altos oficiales regios por haber detenido, embarcado y expulsado a Roma, en diciembre de 1645, a tres canónigos de la catedral de Barcelona considerados desafectos a la causa francesa, sin respeto alguno por las libertades eclesiásticas, que como se ha dicho constituían un elemento fundamental del constitucionalismo histórico catalán. Una segunda evidencia es que los cuatro casos enjuiciados fueron muy escasos entre el amplio número de *contrafaccions* cometidas en época de guerra. La razón es que se puso el foco sólo en algunas que la Diputació del General —que actuaba como acusación pública— consideró estratégicas o en el calendario o en la temática para recordar a la monarquía francesa —hasta entonces el archienemigo histórico, no lo olvidemos (Jané, 2006)— que no dominaba Cataluña por derecho de conquista, sino por un pacto de entrega voluntaria y condicionada suscrito en 1641.

Como es sabido, un conglomerado de causas —el avance de la guerra, la Fronda contra Luis XIV, las tensiones internas y una fuerte peste que se propagó desde 1650- influyó en el retorno bajo soberanía hispánica de la mayor parte de Cataluña —toda excepto el condado del Rosellón y parte del condado de Cerdaña— en octubre de 1652. Y, ya se ha dicho en el apartado 2, la monarquía de Felipe IV se reservó el control de las insaculaciones de la Diputació del General y el Consell de Cent, las principales instituciones representativas, para asegurar su control político —otro medio para mantenerlas sujetas fue el altísimo nivel de deuda que habían contraído para la guerra. Así, parte del vigor en la defensa del constitucionalismo catalán que en las últimas décadas del siglo XVII e incluso durante la Guerra de Sucesión no podrían ostentar una Diputació y un Consell de Cent debilitados lo asumirían el Brazo Militar extraparlamentario y la Conferència dels Tres Comuns, como también se ha dicho en el apartado 2.

Con la llegada de la dinastía Borbón, se convocaron Cortes, ante una urgencia —más que necesidad— de pasar página. No hay que olvidar que la misma Barcelona había sido bombardeada por tropas francesas en 1691 y asediada y bombardeada en 1697 —antes del bombardeo, como medida defensiva, se había procedido a una «cortadura» o demolición de un número considerable de casas para fortalecer el que parecía el punto más débil de la ciudad, la muralla de Sant Pere (García Espuche, 2005, pp. 147-198).

Sólo desde mediados de la década de 2010 se sabe que el Tribunal de Contrafaccions constituído tanto en las Cortes de 1701-1702, presididas por Felipe V, como en las de 1705-1706, encabezadas por el archiduque Carlos de Austria —entonces reconocido como Carlos III en la Corona de Aragón—[6] llegó a funcionar, tanto en el periodo 1702-1705 como en 1713, juzgando un total de diecinueve casos tocantes a todos los estratos de la sociedad, incluyendo personas muy humildes (Capdeferro y Serra, 2015a, 2015b). Los años en que no estuvo propiamente activo, resultó un instrumento de presión útil para conseguir la contención de actos antijurídicos por parte de oficiales tanto regios como señoriales —su ámbito de actuación se había ampliado respecto de los juicios paccionados de la década de 1640, que sólo atendían a *contrafaccions* cometidas por oficiales regios. Más que el tribunal en sí mismo o sus actuaciones, interesa hoy destacar cómo se gestó mediante complejos procesos legislativos.

Antes de entrar en ello, el lector agradecerá saber cómo acabó configurada la institución en sus rasgos principales. Tendría una composición mixta y perfectamente paritaria entre *rex* y *regnum*. Mixta porque tendría tres jueces que representarían

6. Véase la legislación aprobada en ambas Cortes, con un magnífico estudio introductorio comparativo de Joaquim Albareda, en *Constitucions, Capítols i actes de Cort: 1701-1702 i 1705-1706* (2006).

a la monarquía –miembros preeminentes de la Real Audiencia de Cataluña– y otros tres que encarnarían los estamentos de la comunidad política –el arzobispo de Tarragona o el canónigo de una catedral catalana más antiguo que se hallare en Barcelona, el protector del Brazo Militar extraparlamentario y el consejero ciudadano de mayor rango de Barcelona. Paritaria porque, en caso de empate entre los seis jueces, se procedería a una extracción a suerte del nombre de uno de ellos para que volviera a votar; no habría nadie designado por el rey que tuviera un voto de calidad para desempatar. Vista la singularidad de esta estructura bilateral, no puede sorprender la complejidad de los debates en las Cortes de 1701-1702 —los de las Cortes de 1705-1706 se omiten porque ya han sido estudiados y porque no fueron tan jugosos, al partir de una jurisdicción que ya había tenido una planta e incluso entrado en funcionamiento (Capdeferro y Serra, 2015b, pp. 110-115).

4.2. *Debates interestamentales intensos, como preámbulo a duras negociaciones con la monarquía (1701)*

En primer lugar, procede observar los debates que se produjeron entre los tres estamentos catalanes, principalmente en noviembre de 1701. El foro inicial de dichos debates, como era natural, fue la comisión interestamental de *constitucioners* –dieciocho personas elegidas, seis por cada estamento, para sugerir propuestas para nuevas leyes o constituciones. La comisión, seguramente con discrepancias internas, en un momento indeterminado durante la primera mitad de noviembre formuló una propuesta —concretada en un lote de distintas leyes– de un tribunal de nueva planta para juzgar las *contrafaccions* formado por siete miembros, de los cuales dos serían designados por el rey, uno sería eclesiástico, dos nobles y dos ciudadanos de Barcelona. Así, se contemplaba un tribunal doblemente asimétrico, en parámetros *rex-regnum* y también en parámetros interestamentales. Entre el 14 y el 16 de noviembre de 1701 la propuesta fue votada en los plenos de los tres estamentos. La aprobaron los estamentos militar y real —qua a menudo actuaron en sintonía en las Cortes de 1701-1702– y la rechazó de forma contundente y comprensible el brazo eclesiástico. Para mostrar su oposición frontal, el brazo eclesiástico propuso que la jurisdicción competente para enjuiciar *contrafaccions* continuara siendo la Real Audiencia de Cataluña, pero con medidas de presión temporal y de silencio positivo —en caso de que los jueces no dictaran sentencia en unos plazos prefijados– para evitar que las causas se dilatasen y acabaran sin resolución alguna[7]. A continuación, la comisión de *combinadors* de constituciones —negociadores de

7. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 124v-125v (14/11/1701). Los plazos propuestos serían de un año para las causas ya instadas y tres meses para las que se instarían a partir de la finalización de las Cortes.

enmiendas– intentó acercar las posiciones a priori inconciliables de los tres estamentos —mejor dicho, trató de atraer a los eclesiásticos al consenso de los otros estamentos—, pero fracasó en su empeño[8].

El 19 de noviembre el brazo eclesiástico, presionado por sendas embajadas de los brazos militar y real, puso sobre la mesa otra propuesta que buscaba el consenso. Aceptaba la creación de un nuevo tribunal para juzgar *contrafaccions*, pero con la condición de que respetara tanto el equilibrio entre el rey y la provincia como entre los tres estamentos. Así, tendría seis jueces, tres de parte del rey y uno de parte de cada uno de los tres estamentos –el arzobispo de Tarragona o subsidiariamente el obispo de Barcelona, el protector del estamento militar y el *conseller en cap* de Barcelona. Sería fácil reclamar esa doble paridad, alegando precedentes seculares como las comisiones mixtas en Cortes sobre habilitación o agravios. Para romper eventuales empates entre un número par de jueces, la propuesta de los eclesiásticos preveía —sin intentar justificarlo– que el juez de su estamento ejerciera el voto de calidad[9].

Se había producido un acercamiento valioso —el estamento eclesiástico se había sumado a la petición de un Tribunal de Contrafaccions–, pero no suficiente: persistía la discrepancia sobre el número de sus jueces y la forma de evitar los efectos nocivos de la paridad, cuestiones que desde el estamento eclesiástico se intentaban presentar como secundarias —literalmente «accidentales»[10]. El 20 de noviembre el estamento militar o nobiliario decidió mandar una legación al brazo eclesiástico para intentar que reconsiderara su posición, haciéndole partícipe de unos motivos que, a su parecer, justificaban sobradamente la composición asimétrica del Tribunal de Contrafaccions que se estaba diseñando —«[la] que més convé y se adapta per a obviar inconvenients y lograr la pública utilitat». Esos motivos no se explicitaban por escrito, obviamente se explicaron verbalmente, aunque seguramente no era preciso pues eran de tipo innegablemente político y nadie entonces podía no conocerlos: la monarquía ejercería fácilmente una presión intolerable sobre prelados cuyo nombramiento dependía de su beneplácito. Como medida de presión adicional, el estamento nobiliario amenazó con un disentimiento general, un bloqueo que paralizaría todas las actividades de las Cortes[11]. El día 21 el estamento real, subrayando el acierto y la prudencia de lo deliberado por el militar sobre un asunto de tanta transcendencia y con efectos tan poderosos, le dio su apoyo absoluto «en tot y ab tot»[12]. El estamento eclesiástico no cedió y el mismo día deliberó mandar a

8. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona [AHCB], Consell de Cent, XVI-87, fol. 214v-215r (19/11/1701).
9. Archivo de la Corona de Aragón [ACA], 1771, Generalitat, N-1.063, fol. 158.
10. AHCB, Consell de Cent, XVI-87, fol. 216v-217v —legación de 20/11/1701 del estamento eclesiástico al real.
11. ACA, Generalitat, N-1.065, fol. 261v-262r.
12. AHCB, Consell de Cent, XVI-87, fol. 222.

los demás una extensa respuesta que giraba sobre tres ejes: a) un elogio tanto de la paridad *rex-regnum* como de la paridad interestamental; b) un rechazo de la supuesta superioridad de la propuesta de los estamentos militar y real, que no podían exceder –¡a lo sumo igualar!– el celo del eclesiástico en la defensa de los derechos de Cataluña; c) la superioridad de la propuesta eclesiástica, que daría ventaja a los estamentos si se aceptaba que el arzobispo de Tarragona o el obispo de Barcelona deshicieran eventuales empates en el Tribunal[13].

El marqués de Anglesola y conde de Peralada, presidente del estamento militar, alertó de los rumores de que el rey se iría pronto de Barcelona y pidió buscar un punto de encuentro posibilista. A instancia suya, los nobles sugirieron que cada estamento designara dos o tres personas –los promovedores respectivos y una o dos elegidas *ad hoc*– para que se reunieran con el fin de pactar una planta para el tribunal satisfactoria para todos que los plenos de los estamentos deberían ratificar posteriormente[14]. La idea contó con la adhesión entusiasta del estamento real[15]. El 22 de noviembre se nombró la comisión *ad hoc*, con nueve miembros: el síndico del cabildo catedralicio de Vic Miquel Joan Bosch, don Felicià de Cordelles y Claudi Alsina –los promovedores de los tres estamentos–; el abad de Camprodon Genadi Colom y el canónigo de Barcelona Dalmau de Copons, por el estamento eclesiástico; el barón de Canyellas Josep Terré i Marquet y Joan Bonaventura de Gualbes, por el estamento militar; el síndico de Barcelona Joan Llinàs y el de Vic Francesc Comalada i Cànovas, por el estamento real[16]. Más allá del nombre y la condición de los elegidos, merece ser destacada la hábil solución de una comisión técnica específica para salir de un atasco político aparentemente irresoluble. La comisión se constituyó inmediatamente.

El 23 de noviembre por la mañana, la comisión *ad hoc* propuso una nueva planta para el Tribunal de Contrafaccions. Lo formarían seis jueces. Por parte del rey estarían el canciller, el regente de la Cancillería y el baile general de Cataluña. Por parte de los estamentos estarían el arzobispo de Tarragona, el protector del brazo militar y el conceller en cap de Barcelona, cada uno con los preceptivos sustitutos en caso de faltar. Cabe subrayar dos cosas en relación con los jueces: la sorprendente previsión de sentar en el tribunal al baile general o supremo administrador de las rentas reales en Cataluña, y en su ausencia a su lugarteniente o al lugarteniente del maestro racional —responsable supremo de las cuentas del rey en Cataluña–; la previsión hasta entonces inédita de que, a falta del arzobispo de Tarragona o subsidiariamente el obispo de Barcelona, entraría en el tribunal el canónigo más antiguo

13. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 167v-169r.
14. ACA, Generalitat, N-1.065, fol. 273v-274r.
15. AHCB, Consell de Cent, XVI-87, fol. 228v-229r (22/11/1701).
16. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 174r-176r.

de las catedrales de Cataluña presente en Barcelona, computando su antigüedad desde la fecha de posesión de su plaza canonical. Sin duda, ahí estribaba una clave del pacto: la incidencia potencial de la monarquía sobre los cabildos o canónigos era mucho menor que sobre las dignidades episcopales.

Para deshacer eventuales empates entre los seis jueces se establecía un mecanismo complejo también muy interesante: los diputados y oidores de cuentas extraerían a suerte los nombres de nueve personas —tres de cada estamento– insaculadas en las bolsas de la Diputació del General que estarían habitando en Barcelona. Entre esos nueve, los jueces del Tribunal de Contrafaccions extraerían uno también a suerte, quien decidiría la causa finalmente. Así, la simetría entre los tres estamentos quedaba asegurada. La que quedaba en una situación asimétrica era la monarquía, privada de cualquier opción de ejercer el voto de calidad.

El mismo día 23 por la tarde los estamentos eclesiásticos —que introdujo dos enmiendas menores– y militar aprobaron esa nueva planta[17]. El 24 de noviembre también la avaló el estamento real[18] y la planta consensuada fue enviada a la comisión de los *constitucioners* para que la completara, junto con otras propuestas normativas. La comisión *ad hoc* había resuelto satisfactoriamente su reto, harto complejo. Y se había conseguido dar máxima visibilidad al consenso de los estamentos en un tema políticamente prioritario.

El 27 de noviembre cada uno de los estamentos votó separadamente las nuevas constituciones de la observancia de Cataluña, por lo que pasarían a minutarse para ser presentadas al rey[19]. La fórmula que se sometería a consideración de Felipe V, finalmente formada por tres normas interrelacionadas[20], era ambiciosa pero no en extremo respecto al mecanismo de eventual desempate. Recordemos —nuevamente— que desde 1654 la monarquía había asumido un valioso control sobre las personas insaculadas en las bolsas de la Diputació del General.

17. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 181-182; N-1.065, fol. 289v.
18. AHCB, Consell de Cent, XVI-87, fol. 243v-244r.
19. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 200r; N-1.065, fol. 320v.
20. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 253r-258r, lista de sesenta y cuatro propuestas normativas (30/11/1701); fol. 255v-256r por lo que respecta a las tres del Tribunal de Contrafaccions —durante su tramitación serían 37-38-39, al final de las Cortes acabarían siendo 36-37-38—: n.º 37 «En què se disposa nova forma y nominació de personas per declarar las causas de contrafaccions o contra constitucions contra qualsevols oficials així reals com de baró y que purgan com que no purgan taula»; n.º 38 «en què se declara lo orde de judiciari de ditas causas de contrafacció o contraconstitutió y dels terminis y dilacions que han de tenir y concedir-se per los jutges»; n.º 39 «contenint major explicació dels dos precedents capítols y del dret y circunstàncias que se deuhen observar y atténdrer en la declarató de ditas causas de contrafaccions o contra constitutions». Véase también ACA, Generalitat, N-1.065, fol. 359v (30/11/1701), mucho menos locuaz sobre el contenido de cada propuesta.

Entre diciembre de 1701 y enero de 1702 tendría lugar la negociación sobre el tribunal en ciernes entre los estamentos y la monarquía. Si ya había sido difícil edificar un consenso de los tres estamentos entorno al proyecto legislativo, lo más complicado estaba por llegar: conseguir la decretación de Felipe V, el nieto de Luís XIV de Francia, por lo tanto miembro de una dinastía nada proclive a ceder parcelas de jurisdicción.

Varios proyectos normativos de los estamentos catalanes fueron trasladados a la monarquía el 30 de noviembre —algunos se habían entregado antes, otros irían después. El 1 de diciembre el secretario de despacho universal don Antonio de Ubilla y Medina, presuntamente sin mediar consulta con el rey —¿cómo mero globo sonda?– devolvió los textos a los estamentos con unas decretaciones en su gran mayoría muy frustrantes. Las tres normas sobre el Tribunal de Contrafaccions eran rechazadas de pleno, con la orden de que las *contrafaccions* se siguieran juzgando por la Real Audiencia —que en adelante debería sentenciarlas en un plazo de dos meses, lo cual se presentaba como una gran concesión[21].

La protesta enérgica de los estamentos no se hizo esperar. El 2 de diciembre intentaron convencer al rey para que mejorara sustancialmente las decretaciones inicialmente sugeridas por su secretario de despacho universal. Su petición era barroca en el fondo y en la forma. No es de extrañar, no era baladí lo que se estaba intentando conseguir de Felipe V. Costaría salvar tanto la letra como el espíritu de las normas del Tribunal de Contrafaccions. Se alegaron por lo menos seis motivos poderosos: a) eficencia —«la més breu, recta, justa y fàcil declaració de las contrafaccions»–; b) necesidad histórica —«donant nova providència al que en las Corts de mil siscents vint-y-sis ja se necessitava»; c) numerosos antecedentes de *contrafaccions* sin llegar a juzgarse por razones formales –«moltas difficultats que se susitan en los ritos y formalitats preparatòrias y preliminars»–; d) escasísimas *contrafaccions* que hubieran sido objeto de sentencia –«quinas hagen tingut favorable declaració apenas fan número»–; e) incumplimientos flagrantes de la constitución de 1481 por parte de los doctores de la Real Audiencia, mediante interpretaciones rebuscadas de su literalidad –«no faltan interpretacions extraviadas del literal sentir»–; f) finalmente, que garantizar el respeto a la ley no sería una limitación sino un gran beneficio para la monarquía –«[que se] observen las lleys municipals y que vostra magestat quede servit ab la puntual observança de aquellas»[22]. Seguramente el último de los seis puntos era el que mejor ilustraba la distancia entre las culturas políticas todavía vigentes en Cataluña y en la monarquía Hispánica. En el marco iuscentrista catalán fuertemente anclado en la cultura del *ius commune*, el rey, lejos de situarse por encima del derecho, era el primer interesado en el cumplimiento escrupuloso de

21. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 268r; también N-1.065, fol. 379.
22. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 289v-290r; también N-1.065, fol. 405v-406.

los *usatges* de Barcelona, las constituciones, capítulos y actos de corte que había pactado en Cortes y otras disposiciones de derecho general o particular que hubiere concedido, decretado o validado a lo largo del tiempo.

Así, la pelota volvía a quedar en el techo de Felipe V. El 3 de diciembre por la noche éste convocó a los tratadores de los estamentos y les comunicó las decretaciones revisadas a la primera serie de proyectos normativos que le habían sido presentados. Bastantes de ellas implicaban un rechazo frontal, una desnaturalización o una enmienda sustancial de los proyectos legales solicitados. Entre las últimas —las que suponían una enmienda sustancial– estaban las decretaciones a los proyectos relativos al Tribunal de Contrafaccions, tramitados con los números 37, 38 y 39. El rey aceptaba la constitución hasta las siguientes Cortes de un tribunal de nueva planta y carácter mixto, aunque no fijaba qué oficiales de su aparato de poder participarían en él y reservaba al virrey o subsidiariamente al canciller un voto de calidad, en caso de ser necesario para deshacer algún empate:

> *Placet* a su magestad el conceder por mayor consuelo de la provincia y hasta las futuras Cortes el que con tres sugetos de oficio de los que se proponen y con otros tantos ministros de su magestad se vean y determinen estas causas de contrafacciones, y en caso de igualdad de votos concurra el virrey que es o fuere, y le (*sic*, lo) tenga decisivo en los casos en que pueda concurrir, y en los que sea parte tenga la misma facultad de decidir el canciller que es o fuere[23].

El 6 de diciembre el estamento eclesiástico, por docilidad o por estrategia, pareció conformarse con la decretación real del día 3. Mejor dicho, se planteó cuál de las dos decretaciones hasta entonces formuladas prefería, la del 1 o la del 3 de diciembre, y se inclinó por la primera, parecida a su propia petición de 14 de noviembre. A su entender, así por lo menos se evitaba un tribunal ilusoriamente paritario que *de facto* estaría siempre dominado por el rey[24].

Los estamentos militar y real no dieron su brazo a torcer y convencieron al eclesiástico para que no se separara del consenso. Así, el 8 de diciembre a las 8 de la noche los comisarios de los tres estamentos nombrados para reunirse con los tratadores del rey visitaron a Felipe V, le agradecieron las decretaciones y le suplicaron que escuchara algunos reparos[25]. Por lo que respecta a las tres normas sobre el Tribunal de Contrafaccions, los reparos eran estos: que ni el virrey ni el canciller pudieran tener voto de calidad, sino que uno de los seis jueces del Tribunal, elegido aleatoriamente, votara por segunda vez y deshiciera eventuales empates —fue ahí que se forjó la piedra angular del tribunal–; que la monarquía identificara claramente

23. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 300r; también N-1.065, fol. 427r.
24. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 322r.
25. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 330r-338v, texto de la segunda representación al rey y lista detallada de los reparos.

cuáles de sus altos oficiales en Cataluña —excepto los abogados fiscales– participarían en el tribunal. Ambas peticiones se acompañaban de su debido fundamento: la primera, que el juez que volvería a votar estaría perfectamente instruído sobre el caso, ello agilizaría su solución; la segunda, que no cabrían dudas —ni las dilaciones consecuentes– sobre a quien se debería recorrer para que tramitara y enjuiciara las denuncias de *contrafacció*[26].

El 10 de diciembre el rey comunicó a los comisarios de los tres estamentos que aceptaba uno de los dos cambios que habían solicitado: accedía a que las leyes identificaran que el regente de la Cancillería y los dos doctores de la Real Audiencia más antiguos —es decir, los nombrados con mayor antelación– serían los oficiales regios que se sentarían en el Tribunal de Contrafaccions. Seguía reservando al virrey o al canciller un voto de calidad en caso de empate:

> N. 37, 38, 39 Constitucions de la Observansa: *Placet* a su magestad conceder, por mayor consuelo del Principado, y hasta las futuras Cortes, el que con tres sugetos de oficio de los que se proponen y con otros tantos ministros de su magestad, que han de ser regente y dos ministros más antiguos, se vean y determinen estas causas de contrafacciones; y en caso de igualdad de votos concurra el virrey y le tenga decisivo en los casos en que pueda concurrir, y en los que sea parte tenga la facultad el canciller[27].

Esta información no fue presentada al estamento militar hasta el día 11 por la mañana. Por la tarde, el presidente del estamento, el marqués de Anglesola y conde de Peralada, propuso aceptar con agradecimiento la concesión del rey. Inmediatamente después, Pere Torrellas Sentmenat puso un disentimiento general a todos los actos de la Corte —un bloqueo de alto voltaje político—, al considerar insuficientes las decretaciones del rey en las propuestas normativas de mayor transcendencia que le habían sido elevadas. Denunció que no estaban en correspondencia con los méritos de la comunidad política catalana, representada ordinariamente en la Diputació del General, cuyos ingresos habían servido fundamentalmente para servir al rey y costear otros gastos legítimos. Justificó su bloqueo por la finalidad de las Cortes Generales de actualizar el ordenamiento jurídico para resolver las necesidades de los vasallos y por el juramento que había prestado al inicio de la reunión «de mirar y atténdrer al que sie de major utilitat y benefici de la Cort». Diecinueve otros nobles le secundaron sin vacilar —sus nombres son irrelevantes en este artículo, pero no la existencia legítima de facciones políticas o, por lo menos, grupos de interés. El desacuerdo en torno al Tribunal de Contrafaccions no se mencionaba explícitamente, pero iba claramente implícito en el disentimiento[28].

26. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 334v-335r; también N-1.065, fol. 459r-460r (6/11/1701).
27. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 349r.
28. ACA, Generalitat, N-1.065, fol. 482r-483v; también N-1.063, fol. 353.

Este disentimiento se mantuvo firme y paralizó totalmente las deliberaciones durante una semana. No fue levantado hasta el 17 de diciembre al anochecer, en una sesión multitudinaria del brazo militar –«entrevenint un numerós concurs de individuos del dit bras»[29]. El desbloqueo se justificó por el compromiso del rey, notificado a Pere Torrellas y Joan Bonaventura de Gualbes, de atender otra comunicación de los estamentos relativa a peticiones de leyes o privilegios –«tant en matèrias de gràcia com de justícia»–; así, Felipe V aceptaba una ronda negociadora adicional. Pere Torrellas era quien había formulado el disentimiento estratégico. Gualbes era uno de los diecinueve nobles que lo había suscrito, y también —no menos importante— uno de los nueve miembros de la comisión *ad hoc* nombrada el 22 de noviembre y reunida con éxito el día siguiente.

El 20 de diciembre los estamentos acordaron el contenido de su última petición al joven rey para que mejorara sus decretaciones —es decir, para que éstas se acercaran más a lo inicialmente solicitado. Una de las puntas de lanza era que la monarquía renunciara a tener un voto de calidad en el Tribunal de Contrafaccions. Ésta era la decretación que se esperaba de él para el capítulo o constitución —su calificación no es evidente (por ejemplo, Lalinde, 1992, p. 14)— que entonces llevaba el número 37:

> Plau a sa magestat lo concedir, per major consuelo del Principat, y fins a la conclusió de las primeras Corts, que ab tres subjectes de ofici dels que·s proposan, y ab altres tants ministres de sa magestat, que han de ser lo regent de la Real Audiència y los dos ministres més antichs de ella, que de present són y en avant seran, se vejan y determinen estas causas de contrafaccions en lo quarto de la visita o en altre lloch ben vist a ell, y en cas de igualtat de vots se fasse extracció a sort de un dels sis, lo qual torne a votar per llevar la paritat.

Para los capítulos o las constituciones número 38 y 39 se buscaba simplemente «lo plau a sa magestat» sin adición alguna[30].

Esta insistencia se explica por diligencias privadas que el mencionado Pere Torrellas y Joan Bonaventura de Gualbes habían hecho con el duque de Medina Sidonia, tratador del rey, para conseguir los *placets* a las constituciones. Según habían referido al estamento militar, le habían hallado bien predispuesto –«molt propício»–, les había dado a entender que el rey admitiría mucho de lo que se le pidiera en una última ronda de negociación, incluso habían apuntado las cláusulas precisas de las decretaciones que resultarían satisfactorias para ambas partes[31].

Debido a una enfermedad del rey en fechas navideñas, las sesiones de Cortes quedaron en suspenso durante días. Finalmente, el 11 de enero de 1702 el protonotario

29. ACA, Generalitat, N-1.065, fol. 484r-486r.
30. ACA, Generalitat, N-1.063, fol. 372r; N-1.066, fol. 498r.
31. ACA, Generalitat, N-1.066, fol. 496v.

de la Corona de Aragón José de Villanueva Fernández de Híjar entregó a los secretarios de los tres estamentos el cuaderno de las constituciones con las decretaciones definitivas de Felipe V. Cuando el notario Rafel Albià las leyó en el estamento eclesiástico suscitó gran satisfacción de los asistentes: «Ohidas las quals decretacions foren aquellas approbadas y summament aplaudidas per lo present estament»[32]. Los capítulos o constituciones 36, 37 y 38 —esta fue su numeración definitiva– eran decretados como una gran mayoría había deseado, con el «Plau a sa magestat» de rigor, sin cláusula alguna que los relativizara o desnaturalizara[33]. Eventuales empates en el nuevo Tribunal de Contrafaccions se resolverían por uno de los seis jueces designado al azar, ninguna persona externa interferiría con un supuesto voto de calidad. Un tribunal totalmente mixto y paritario sustanciaría las actuaciones de ministros y oficiales regios o señoriales contrarias a las constituciones y los derechos de Cataluña. Probablemente —hay indicios, pero no evidencias documentales al respecto, de momento— en el seno del aparato real se forjó la estrategia de dar cobertura normativa a la institución y, sucesivamente, bloquear su despliegue.

Ocho meses más tarde, en septiembre de 1702, después de no pocas vicisitudes, juraron los seis jueces iniciales del Tribunal de Contrafaccions. Las primeras causas fueron instadas el 6 de octubre del mismo año y la primera sentencia fue dictada en 19 de junio de 1703 (Capdeferro y Serra, 2015b, pp. 91-100).

5. CONCLUSIONES

En las últimas décadas los estudios de historia sobre parlamentarismo catalán en la edad moderna han dado un gran salto adelante. Ello ha sido posible a partir de la revelación y el estudio tenaz de fuentes inéditas —principalmente procesos o actas de las Cortes de 1480-81, 1599 y 1705-06, y fuentes periféricas relacionadas con ellas u otras, como las de 1510—, y también del análisis de fuentes ya conocidas, bajo nuevas perspectivas historiográficas o poniendo el foco sobre elementos que habían pasado desapercibidos.

Paulatinamente, van encajando las piezas de un puzzle que permite conjugar la historia económica, social, jurídica y política de un territorio al mismo tiempo periférico y estratégico: desde finales del siglo XV Cataluña pasó a ser relativamente periférica respecto de los nuevos núcleos de poder y expansión de la Monarquía Hispánica universal, pero continuaría siendo estratégica por la contigüidad a la potencia tradicionalmente rival, Francia, y por las rutas mediterráneas de comercio y defensa. A lo largo de los siglos XVI y XVII, con numerosos y graves altibajos, no solo se mantuvieron en vigor las estructuras de raíz pactista implementadas en

32. ACA, Generalitat, N-1.064, fol. 482r.
33. ACA, Generalitat, N-1.066, fol. 608v.

la baja edad media sino que se desarrollaron otras nuevas, a modo de mecanismos adaptativos o reactivos a una monarquía poco proclive a la observancia o el respeto del derecho catalán.

Las Cortes que, con regularidad y éxito desigual, se continuaron celebrando entre los reyes y sus súbditos catalanes continuaron siendo un escenario de grandes pactos políticos y ajustes legislativos, en buena parte —sino en su inmensa parte— sugeridos por los estamentos. Tenazmente, en muchas de esas Cortes, los estamentos reivindicaron mecanismos no estrictamente vinculados a la monarquía —incluso abiertamente ajenos a ella— para garantizar el respeto a las normas que tanto (en dinero, servicios, negociaciones, etc.) había costado aprobar en Cortes y conseguir mediante privilegios.

A pesar de la escasísima documentación directa sobre las deliberaciones en comisiones de trabajo en sede parlamentaria, los procesos o actas de Cortes han dejado suficientes testimonios que permiten reconstruir diálogos y transacciones en los que se hicieron sentir muchas voces, y no precisamente en defensa de intereses oligárquicos, sino frecuentemente transversales en muchas capas de la sociedad. En este sentido, son paradigmáticas las negociaciones entre los tres estamentos catalanes y entre éstos y la monarquía de Felipe V, recientemente entronizado, para la aprobación durante las Cortes de 1701-1702 de una jurisdicción completamente mixta y paritaria llamada a juzgar los conflictos «constitucionales», con ingredientes jurídicos y políticos, que inevitablemente estallarían a partir de entonces.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Josep Capdeferro.

Agradecimientos y financiación

Este trabajo ha sido posible gracias al proyecto de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades «Conflictos singulares para juzgar, arbitrar o concordar (siglos XII-XX)». (PID2020-117702GA-I00/MICIN/AEI/1013039/501100011033).

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Albareda, J. (2019). Political participation in Catalonia: From zenith to suppression. En J. Albareda y M. Herrero Sánchez (Eds.), *Political representation in the Ancien Régime* (pp. 213-230). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429443855-13

Albareda, J. (2021). Representación y participación política en Cataluña en torno a 1700. *eHumanista*, *48*, 112-120.

Amelang, J. S. (1986). *La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714*. Ariel.

Arrieta Alberdi, J. (1994). *El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707)*. Institución Fernando el Católico.

Arrieta Alberdi, J. (1996). Las regalías en la Corona de Aragón en el siglo XVII: A propósito de un dictamen de Silverio Bernat de 1624. *Anuario de Historia del Derecho Español*, *66*, 365-444.

Belenguer, E. (1987). Un balance de las relaciones entre la corte y el país: Los «greuges» de 1599 en Cataluña. *Estudis*, *13*, 99-130.

Capdeferro, J. (2008). Sessions plenàries versus comissions de treball a les Corts catalanes del segle XVII. En R. Micó y L. Guia (Eds.), *Certs i Parlaments de la Corona d'Aragó: Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta* (pp. 307-327). Publicacions de la Universitat de València.

Capdeferro, J. (2021). Propuestas legislativas en ascenso en las Cortes catalanas: El memorial de Sebastià Roger (1599). *eHumanista*, *48*, 93-104.

Capdeferro, J. (2023). El canceller de Catalunya, un àrbitre entre jurisdiccions ponderat (segles XVI-XVIII). *Revista de Dret Històric Català*, *22*, 43-59.

Capdeferro, J. (2025). Quatre judicis de contrafacció paccionats a la Catalunya lliurada als reis de França (1642-1647). *Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics*, 36, 15-43.

Capdeferro, J., y Serra i Puig, E. (2015a). *Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713)*. Parlament de Catalunya-Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Capdeferro, J., y Serra i Puig, E. (2015b). *El Tribunal de Contrafaccions de Catalunya i la seva activitat (1702-1713)*. Parlament de Catalunya-Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Capdeferro, J., y Torra-Prat, R. (2021). Una historiografia emergent. *Afers. Fulls de Recerca i Pensament*, *36*(99), 285-300.

Constitucions, Capítols i actes de Cort: 1701-1702 i 1705-1706. (2006). J. Albareda (Estudio introductorio). Parlament de Catalunya-Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Barcelona (1480-1481). (2023). J. M. Bringué i Portella (Estudio introductorio). Parlament de Catalunya-Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés del protonotari. (2001). M. Pérez Latre (Estudio introductorio). Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç reial. (2001). E. Serra i Puig (Estudio introductorio). Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç eclesiàstic. (2003). J. M. Bringué i Portella (Estudio introductorio). Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç militar. (2003). P. Gifre i Ribas (Estudio introductorio). Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Annexos i índex. Esborrany del procés familiar del Braç Reial, documentació complementària i índex. (2010). (Estudio introductorio). Parlament de Catalunya-Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Barcelona (1599). Procés familiar del braç eclesiàstic. (2025). R. Torra-Prat (Estudio introductorio). Parlament de Catalunya-Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Barcelona (1705-1706). Procés familiar del braç eclesiàstic. (2014). E. Serra i Puig (Estudio introductorio). Parlament de Catalunya-Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Barcelona (1705-1706). Procés familiar del braç militar. (2016). E. Serra i Puig (Estudio introductorio). Parlament de Catalunya-Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Cort General de Barcelona (1705-1706). Procés familiar del braç reial. (2022). E. Serra i Puig (Estudio introductorio). Parlament de Catalunya-Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Elliott, J. H. (1963). *The revolt of the Catalans: A study in the decline of Spain (1598-1640)*. Cambridge University Press.

Estanyol Bardera, V. (1999). *El pactisme en guerra: L'organització militar catalana als inicis de la guerra de separació, 1640-1642*. Fundació Salvador Vives i Casajuana.

Estrada-Rius, A. (2001). *Els orígens de la Generalitat de Catalunya: La Deputació del General de Catalunya, dels precedents a la reforma de 1413* [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Pompeu Fabra.

Ettinghausen, H. (1993). *La Guerra dels Segadors a través de la premsa de l'època* (4 vols.). Curial.

Fargas, M. (1997). *Família i poder a Catalunya, 1516-1626: Les estratègies de consolidació de la classe dirigent*. Fundació Noguera.

Feliu, G. (2011). Rellegint la història dels remences de Jaume Vicens Vives. *Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics*, *22*, 33-64.

Font i Rius, J. M. (1988). Estudi introductori. En *Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495*. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Fontana, J. (2014). *La formació d'una identitat: Una història de Catalunya*. Eumo Editorial.

García Espuche, A. (1998). *Un siglo decisivo: Barcelona y Cataluña, 1550-1640*. Alianza Editorial.

García Espuche, A. (2005). *Barcelona entre dues guerres: Economia i vida quotidiana (1652-1714)*. Eumo.

Gil Pujol, X. (1998). El discurs reialista a la Catalunya dels Àustries fins al 1652, en el seu context europeu. *Pedralbes*, *18*(2), 475-487.

Gil Pujol, X. (2008). Regalies i constitucions: Els continguts del pactisme en l'obra de Sebastià de Cortiada (1676). *Pedralbes*, *28*(1), 217-232.

Hernández, B. (2003). *Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna: La fiscalidad catalana en época de Felipe II*. Taller de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos.

Irazábal, D. (2025). La Cort General de Montsó de 1510: La motivació de les sentències i l'observança del dret a la Catalunya moderna. *eHumanista/IVITRA*, *27*, 361-374.

Jané, Ò. (2006). *Catalunya i França al segle XVII: Identitats, contraidentitats i ideologies a l'època moderna (1640-1700)*. Afers.

Lalinde Abadía, J. (1964). *La institución virreinal en Cataluña (1471-1716)*. Instituto Español de Estudios Mediterráneos.

Lalinde Abadía, J. (1992). Las Cortes de Barcelona, de 1702. *Anuario de Historia del Derecho Español*, *62*, 7-46.

Les Corts a Catalunya: Actes del congrés d'història institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988). (1991). Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Martí Fraga, E. (2008). *La conferència dels tres comuns (1697-1714): Una institució decisiva en la política catalana*. Pagès Editors-Fundació Ernest Lluch.

Martí Fraga, E. (2016). *El braç militar de Catalunya (1602-1714)*. Publicacions de la Universitat de València.

Martínez Rodríguez, M. À. (2006). *Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya a la segona meitat del segle XVII*. Fundació Noguera.

Miralles, E. (Ed.). (2020-2023). *Versos per vèncer: Antologia de la Guerra dels Segadors (1640-1652)* (2 vols.). Editorial Barcino.

Molas Ribalta, P. (1996). *Catalunya i la Casa d'Àustria*. Curial.

Molas Ribalta, P. (2004). *L'alta noblesa catalana a l'edat moderna*. Eumo.

Montagut i Estragués, T. de. (1996). *Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya: Des dels seus orígens fins a la reforma de 1413*. Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Montagut i Estragués, T. de. (2002). Pràctiques parlamentàries a Catalunya en el segle XVI i la seva formulació escrita per Lluís de Peguera. *Ius Fugit*, *10-11*, 633-656.

Montagut i Estragués, T. de. (en prensa). Notes sobre el projecte de reforma de la Justícia Universal de la Cort General de Catalunya de Perpinyà-Sant Cugat-Barcelona de 1406-1410. En A. Furió (Ed.), *La veu del Regne: 600 anys de la Generalitat Valenciana*.

Muxella, I. (2013). *La Terra en guerra: L'acció de les institucions durant el regnat de Renat d'Anjou (1466-1472)* [Tesis doctoral no publicada]. Universitat de Barcelona.

Olivares Periu, J. (2000). *Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria*. Pagès Editors.

Palos Peñarroya, J. L. (1997). *Els juristes i la defense de les constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649)*. Eumo.

Peguera, L. de. (1632). *Practica, forma, y stil, de celebrar Corts generals en Catalunya, y materias incidents en aquellas, dividida en tres parts*. Gerony Margarit.

Pérez Latre, M. (2003). *Entre el rei i la terra: El poder polític a Catalunya al segle XVI*. Eumo.

Pérez Latre, M. (2014). Les comissions a les institucions nacionals de la Catalunya constitucional moderna: Iniciativa i representació. En M. B. Castellà (Coord.), *Poders a l'ombra: Les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX)* (pp. 73-102). Parlament de Catalunya-Universitat Pompeu Fabra.

Puig Bordera, E. (2012). *Intervenció reial i resistència institucional: El control polític de la Diputació General de Catalunya i del Consell de Cent de Barcelona (1654-1705)* [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Pompeu Fabra.

Ripoll Sastre, P. (2023). *El Llibre de Vuit Senyals de la Generalitat de Catalunya (segle XV)*. Parlament de Catalunya-Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya.

Sánchez de Movellán, I. (2004). *La Diputació del General de Catalunya (1413-1479)*. Generalitat de Catalunya-Institut d'Estudis Catalans.

Sánchez Martínez, M. (1995). *El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catalunya (segles XII-XIV)*. Eumo-Universitat de Girona.

Serra i Puig, E. (1978). El règim feudal al camp català als segles XVI i XVII. *Cuadernos de Historia Económica de Cataluña*, *19*, 57-64.

Serra i Puig, E. (1991). 1640: Una revolució política. La implicació de les institucions. En E. Serra i Puig (Introd.), *La revolució catalana de 1640* (pp. 3-65). Crítica.

Serra i Puig, E. (1997). Catalunya després del 1652: Recompenses, censura i repressió. *Pedralbes*, *17*, 191-215.

Serra i Puig, E. (1999). Constitucions i Redreç: Corts de Montsó-Barcelona (1563-1564) i Corts de Montsó (1585). En E. Belenguer (Coord.), *Felipe II y el Mediterráneo* (Vol. 4, pp. 159-189). Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Serra i Puig, E. (2003). Signori «bandolers» e legislazione nella vita parlamentare catalana. En F. Manconi (Ed.), *Banditismi mediterranei (secoli XVI-XVII)* (pp. 147-169). Carocci Editore.

Serra i Puig, E. (2004). Constitucions perdudes (1547-1552): Algunes reflexions. En *Josep Fontana. Història i projecte social: Reconeixement a una trajectòria* (pp. 407-423). Crítica.

Serra i Puig, E. (2005). El món urbà en l'espai històric català: Incidència territorial i legislativa. En J. Dantí (Coord.), *Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna* (pp. 41-140). Rafael Dalmau.

Serra i Puig, E. (2007a). Butlletí bibliogràfic sobre les Corts catalanes. *Arxiu de Textos Catalans Antics*, *26*, 663-738.

Serra i Puig, E. (2007b). El braç militar, un estament no homogeni: Una mirada a la Cort de Montsó de 1552. En J. M. Delgado *et al*. (Eds.), *Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània in memoriam* (pp. 297-311). Universitat Pompeu Fabra.

Serra i Puig, E. (2011). Vicens Vives: Un intent de visió global. *Recerques*, *63*, 9-20.

Serra i Puig, E. (Coord.). (2015). *Els llibres de l'ànima de la Diputació del General de Catalunya (1493-1714)* (2 vols.). Institut d'Estudis Catalans.

Simon i Tarrés, A. (1999). *Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640*. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Simon i Tarrés, A. (2019). *1640*. Rafael Dalmau.

Tatjer Prat, M. T. (2009). *La Audiencia Real en la Corona de Aragón: Orígenes y primera etapa de su actuación (s. XIII y XIV)*. Universitat Pompeu Fabra.

Teixidó i Puigdomènech, F. (2008-2009). *Pesos, mides i mesures al principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594)* (5 vols.). Fundació Noguera.

Torra i Prat, R. (2020). *Anticorrupció i pactisme: La Visita del General de Catalunya (1431-1714)*. Afers.

Torres Sans, X. (Ed.). (1995). *Escrits polítics del segle XVII. I: Noticia Universal de Cataluña, de Francesc Martí Viladamor*. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives-Eumo.

Verde i Llorente, J. (2021). *Participació i representació polítiques a la Catalunya dels inicis del segle XVIII: Universitats locals, Cort general i Diputació del General* [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Pompeu Fabra.

Vidal i Pla, J. (1984). *Guerra dels Segadors i crisi social: Els exiliats filipistes (1640-1652)*. Edicions 62.

Villanueva López, J. (1995). El debat sobre la constitució de l'Observança a les Corts catalanes de 1626-1632. *Manuscrits*, *13*, 247-272.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481249277

LA GOBERNACIÓN FORAL DE ORIHUELA Y SU SEDE ALICANTINA: OFICIALES, CONFLICTOS Y DINÁMICA INSTITUCIONAL EN LA EDAD MODERNA

The Foral Governorship of Orihuela and Its Alicante Headquarters: Officials, Conflicts, and Institutional Dynamics in the Early Modern Period

David BERNABÉ GIL

Universidad de Alicante
david.bernabe@ua.es

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Aunque la consolidación del virreinato desde finales de la Edad Media eclipsó y mediatizó el protagonismo de la Gobernación General en los distintos territorios de la Corona de Aragón, esta fórmula de representación regia mantuvo su vitalidad, sobre todo en distritos que, por su lejanía respecto de la sede virreinal u otras particularidades, resultaban más difícilmente controlables. Tal era el caso de la demarcación correspondiente a la *Governació General d'Oriola i Regne de València dellà Sexona*. Tras resumir el organigrama de esta institución y algunas peculiaridades de la oficialía que la sirvió, el presente trabajo profundiza en las tensas relaciones que a veces mantuvieron sus ocupantes, al verse implicados en la pugna librada entre las ciudades de Orihuela y Alicante por la capitalidad del distrito, y analiza su repercusión en las mutaciones que experimentó su articulación interna, desde las últimas décadas del Quinientos hasta el final de la etapa foral.

Palabras clave: Orihuela; Alicante; España; siglo XVI; siglo XVII; gobernación; oficiales.

ABSTRACT: Although the consolidation of the viceroyalty from the late Middle Ages onwards limited the role of the General Governorship in the various territories of the Crown of Aragon, this form of royal representation retained its vitality, particularly in districts that, because of their distance from the viceregal centre or other specific circumstances, were more difficult to control. Such was the case of the jurisdiction corresponding to the *Governació General d'Oriola i Regne de València dellà Sexona*. After summarizing the organizational structure of this institution and some of the peculiarities of the officials who served it, this study examines the often tense relations among its officeholders, who became involved in the rivalry between the cities of Orihuela and Alicante over the status of district capital. It also analyses the impact of this conflict on the internal transformations of the institution from the late sixteenth century to the end of the period of foral institutions.

Keywords: Orihuela; Alicante; Spain; 16th century; 17th century; governorship; officials.

1. INTRODUCCIÓN

La consolidación del virreinato desde finales de la Edad Media eclipsó y mediatizó el protagonismo de la Gobernación General como sistema institucional al servicio del soberano para hacer efectiva la acción de gobierno y la administración de justicia en los distintos territorios que componían la Corona de Aragón (Lalinde, 1962, pp. 184-197). Mas no por ello esa antigua fórmula de representación regia quedó despojada de sus funciones originarias —como sucesora de la Procuración General—, sobre todo en distritos que, por su lejanía respecto de la sede virreinal u otras particularidades, resultaban difícilmente controlables, dados los escasos recursos al alcance de los virreyes para imponer su autoridad. Tal era el caso de la demarcación correspondiente a la denominada *Governació General d´Oriola i Regne de València dellà Sexona*, cuya sede oficial quedó fijada en Orihuela desde su creación en el siglo XIV (Cabezuelo, 1988-89). Ubicada en el extremo meridional del reino levantino, esta Gobernación era independiente de la de Valencia *deçà Sexona*; y solo tenía por encima la figura del virrey —con la Real Audiencia— y el Consejo de Aragón, con el monarca (Salvador, 1984).

En su articulación interna la Gobernación de Orihuela estaba integrada por tres grandes piezas territoriales que, a su vez, contenían otras más pequeñas, de ámbito municipal. Dos de aquéllas eran de realengo y se correspondían con los *términos generales* de las ciudades de Orihuela y de Alicante, respectivamente[1]; la tercera abarcaba un conglomerado de señoríos de jurisdicción suprema o baronías, en los valles del río Vinalopó, pertenecientes a varios titulares entre los que destacaban —ya en época moderna— el marqués de Elche y el conde de Elda.

En general, el sistema de la Gobernación estaba encargado de representar la jurisdicción real y conllevaba como funciones primordiales el mando militar, la ejecución de las órdenes reales, la administración de justicia con su curia —ocupando un lugar intermedio entre los tribunales municipales y la Real Audiencia—, la persecución del bandolerismo y el mantenimiento del orden público (Gadea, 1925; Lalinde, 1962; Matheu, 1704, pp. 129-149; Taraçona, 1580, pp. 29-36). De la Gobernación de Orihuela se conoce, a grandes rasgos, la prolongada pugna que mantuvo su capital con la ciudad de Alicante por la supremacía del distrito *dellà Sexona* (Alberola, 1984, pp. 345-351; Bernabé Gil, 1990, pp. 151-159, 2007, pp. 115-122, 2019; Vilar, 1981, vol. 3, pp. 723-736), así como el personal que sirvió los oficios más importantes que la integraban (Bernabé Gil, 2008, 2012, 2014, 2021, 2024), y muy poco acerca de las tensiones generadas en sus inevitables relaciones con las oligarquías municipales (Bernabé Gil, 2007, pp. 129-134; 2018). Pero no son menos relevantes los aspectos relativos a la práctica efectiva de su poder territorial, desde una perspectiva dinámica con proyección en la larga duración, que aún permanecen en penumbra.

El presente trabajo aspira a mejorar los conocimientos de la institución, profundizando en determinadas materias relativas a las peculiaridades de la oficialía que la sirvió, a las relaciones mantenidas entre los distintos actores e instancias que formaron parte de aquella —sin obviar las continuas implicaciones del poder municipal— y a la incidencia de estos factores en las mutaciones que se fueron produciendo en su fisonomía a lo largo de un periodo más que secular. Y, como trasfondo de esa dinámica, se destaca la ya mencionada disputa que vinieron manteniendo las ciudades de Alicante y Orihuela por la capitalidad del sur valenciano, sin menospreciar la incidencia de los comportamientos y de las relaciones personales en su desarrollo.

1. Sobre los núcleos de población, en sus diversas categorías, que integraban el *término general* de Orihuela y sus relaciones con la metrópoli, Bernabé, 1993; sobre el de Alicante, Dueñas, 1997.

2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL A PRINCIPIOS DE LA MODERNIDAD

Aunque la capital oficial de la Gobernación se ubicaba en la ciudad de Orihuela, la creciente importancia —militar y mercantil— que fue adquiriendo Alicante determinó su consagración como segunda sede capitalina, al desdoblarse la mayor parte de los oficiales ordinarios que integraban el sistema de la Gobernación mediante la designación de subdelegados que, aun quedando subordinados a los titulares oriolanos, constituyeron otra curia propia, paralela a la principal y —como luego se dirá— hasta cierto punto independiente. El reconocimiento de esta bicefalia *de facto* apenas ha permitido clarificar, no obstante, el modo como llegó a funcionar realmente en su práctica cotidiana el tribunal supuestamente sufragáneo establecido en la ciudad de Alicante y, en consecuencia, el tipo de relaciones jurisdiccionales mantenidas entre ambas sedes gubernativas.

En principio, la mera relación de la oficialía que nutría la curia alicantina apunta a una especie de sección delegada de la existente en Orihuela. En los inicios de la modernidad la cúspide del sistema la ocupaba el gobernador, cuya exacta intitulación —según confirmaron varias sentencias sucesivas a lo largo del período considerado— era *Portantveus de General Governador d'Oriola i Regne de València dellà Sexona.* Su nombramiento, sin duración prefijada, correspondía al rey previa consulta del Consejo de Aragón; y debía recaer en un noble o caballero valenciano o, en caso de graves alteraciones de la paz social, en un natural de la Corona de Aragón (Bernabé Gil, 2008). Su jurisdicción, que abarcaba el mero y mixto imperio, civil y criminal, alta y baja, permitía que su curia se configurase esencialmente como tribunal de apelación por encima de los tribunales municipales, pero también de primera instancia en determinadas materias y causas reservadas. Además —mediante nombramiento aparte—, el *portantveus* ejercía la Lugartenencia de la Capitanía General en su distrito.

Puesto que el sistema contemplaba —y se fundamentaba en— la delegación, en un nivel inferior al anterior se situaba el *llochtinent general* del mencionado *portantveus*, cuya designación realizaba éste de forma discrecional eligiendo generalmente —desde 1604 de forma obligatoria— a un noble o caballero que, aunque no necesariamente tenía que ser oriolano, en la práctica siempre lo fue. Su jurisdicción, de carácter delegada, se extendía —frente a la opinión de Lalinde (1962, pp. 381, 411)— por todo el territorio de la Gobernación y se hacía efectiva en caso de ausencia o incapacidad del *portantveus* (Bernabé Gil, 2012, 2014).

Como podía suceder que los dos oficiales anteriores se hallasen al mismo tiempo ausentes de Orihuela o impedidos para actuar en su curia, el *portantveus* solía nombrar un subrogado local con capacidad para ejercer dentro del término general de esta ciudad designando a un caballero o noble autóctono. No se trataba este exactamente de un oficial ordinario, pues aunque se le exigía una constante

disposición para entrar en escena cuando fuera necesario, su intervención venía determinada en teoría por el impedimento simultáneo de los dos oficiales superiores (Bernabé Gil, 2014, pp. 41-47). En contraste con el *portantveus*, al ser oriolanos los ocupantes de la Lugartenencia General y de la Subrogación local, su íntima conexión —familiar y clientelar— con las elites del poder municipal facilitaba la construcción de marcos de entendimiento convenientes de cara a las aspiraciones urbanas en su pugna con Alicante.

Para ajustar a derecho las decisiones y actuaciones de la curia de la Gobernación, validar las sentencias y auxiliar a los titulares de la jurisdicción, estaba la figura del asesor ordinario. Recayente en un doctor en derecho necesariamente valenciano y generalmente foráneo del territorio de la Gobernación sureña, el nombramiento de este cargo, sin duración prefijada, correspondía al rey a través del procedimiento habitual de terna presentada por el Consejo de Aragón previo informe del virrey. El asesor ordinario gozaba del derecho a nombrar asesor subdelegado o regente de la Asesoría para cubrir sus ausencias e indisposiciones de forma provisional, sin limitación temporal, eligiendo doctores locales que no formaran parte de la administración municipal (Bernabé Gil, 2024).

Para la defensa jurídica de los derechos regalianos y patrimoniales la curia de la Gobernación se servía de un abogado fiscal y patrimonial, cuyo nombramiento, recayente en un letrado natural del territorio *dellà Sexona* pero ajeno a los cargos consistoriales, realizaba el monarca con el Consejo de Aragón (Bernabé Gil, 2021). El abogado podía actuar a través de un procurador fiscal y patrimonial local, que era nombrado asimismo por el rey[2], y las intervenciones procesales de ambos se extendían también al tribunal de la Baylía como miembros integrantes de la Junta Patrimonial.

En un plano inferior a los mencionados se inscribía el alguacil, que estaba encargado de detener a los delincuentes y ponerlos a disposición judicial, así como de cualquier otro tipo de actuación que expresamente se le encomendara; el carcelero, que custodiaba a los presos; y el escribano, que tomaba acta y registraba las actuaciones judiciales y tenía a su cargo el archivo de la curia. Y a todos ellos cabría añadir, con carácter esporádico, los participantes en las comitivas que auxiliaban a los oficiales antedichos en la persecución y apresamiento de las bandas de forajidos y demás perturbadores del orden público que actuaban dentro del territorio de la Gobernación[3].

2. Referencias a la provisión regia de este oficio de procurador fiscal y patrimonial de Orihuela, en Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón (CA), leg. 639, doc. 6/4 (1600); leg. 727, doc. 118/1, leg. 729, doc. 7/3-7, leg. 639, doc. 29/9-12 (1649); leg. 734, doc. 89/3-4 (1653); leg. 788, doc. 3 (1675).

3. Hay alusiones dispersas a los oficios mencionados en Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 21936, exp. 14; Archivo Municipal de Orihuela (AMO), D-2.222.

La teórica conformación en Alicante de una curia parecida a la descrita para la ciudad de Orihuela, integrada por una oficialía hasta cierto punto paralela y de naturaleza vicaria con respecto a los titulares de la sede capitalina, contemplaba, empero, algunas significativas variaciones que —como luego se dirá— permiten matizar la idea de un desdoblamiento integral a la hora de caracterizar el sistema administrativo de la Gobernación sureña. Así, la máxima autoridad gubernativa peculiar a la ciudad portuaria, encarnada por un subrogado local, extendía su jurisdicción sobre el término general de esta; era elegida por el *portantveus* de forma discrecional, habitualmente de entre los caballeros y nobles en ella avecindados, y solo debía intervenir si no estaban activos ni el titular de la Gobernación ni su lugarteniente general. En teoría su rango era equivalente al del subrogado oriolano. Pero, en comparación con este, la presencia ordinaria del lugarteniente en la ciudad del Segura confería al oficial alicantino —al estar menos mediatizado— una más prolongada continuidad en el desempeño de sus funciones y en la presidencia de la curia donde actuaba, lo que le permitía aparentar y ejercer *de facto* una mayor autoridad.

Para el asesoramiento letrado del subrogado de Alicante se contemplaba la presencia y auxilio de un subdelegado del asesor ordinario, que este último designaba libremente —de entre los doctores alicantinos— desde su sede oriolana en caso de que no quisiera o pudiera actuar personalmente en la ciudad portuaria (Bernabé Gil, 2024). También el abogado fiscal y patrimonial podía hacerse representar mediante un sustituto letrado nombrado por él mismo en dicha curia, si así le convenía (Bernabé Gil, 2021, p. 1 442). Y lo mismo sucedía con el cargo de alguacil, que era único para toda la Gobernación —según se confirmó en cortes de 1585 (Salvador, 1975, fol. 17v, cap. 121)—, aunque el titular de la jurisdicción podía nombrar eventualmente lugartenientes de alguacil y comisarios especiales en ambas ciudades cuando las circunstancias requerían su intervención. El escribano y el carcelero, finalmente, eran oficios desdoblados, uno para cada sede[4]; al igual que el procurador fiscal y patrimonial[5].

En resumen, la coexistencia jerarquizada en el organigrama de la Gobernación de oficios de perfil político y de naturaleza letrada, de extracción local y de procedencia foránea, de nombramiento regio y de designación personal por el titular, y siempre —hasta mitad del siglo XVII— de duración indefinida, dotaba al sistema de la capacidad y de los equilibrios necesarios para poder atender sus cometidos básicos: garantizar la imparcialidad de sus decisiones y actuaciones para la recta

4. Ibidem.

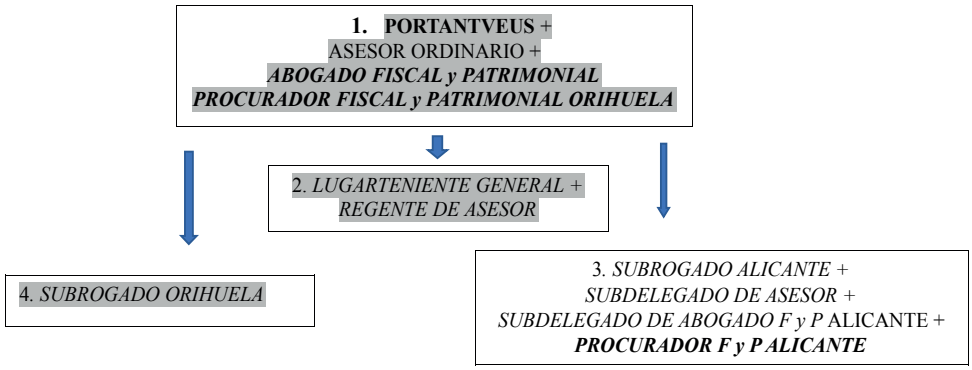
5. Referencias a la provisión regia de este oficio para Alicante, también integrado en la Junta Patrimonial local dependiente de la Baylía, en ACA, CA, leg. 863, doc. 58 (1599); leg. 933, doc. 95 (1694).

Cuadro 1. Organigrama de los oficios principales de la Gobernación de Orihuela a mediados de los siglos XVI y XVII

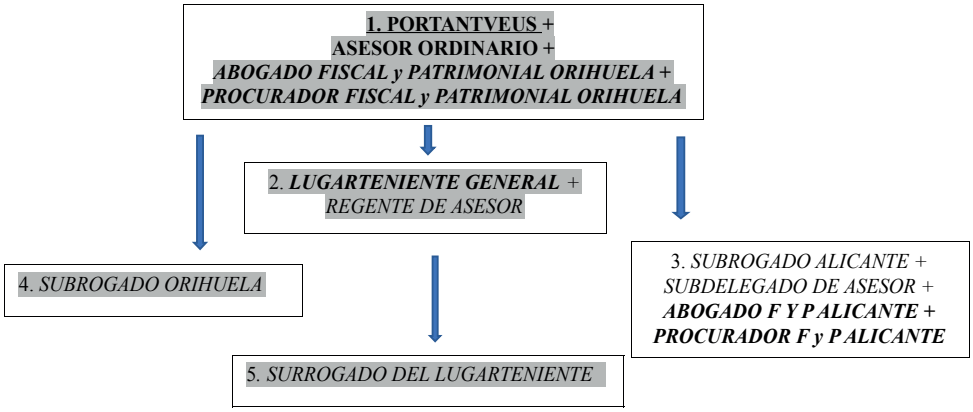
ORGANIGRAMA DE LOS OFICIOS PRINCIPALES DE LA GOBERNACIÓN DE ORIHUELA

SEDE OFICIAL DE ORIHUELA
NEGRITA: NOMBRADOS POR EL REY
CURSIVA: PROCEDENCIA LOCAL
SUBRAYADO: MANDATO TRIENAL

I) MITAD DEL S. XVI



II) MITAD DEL S. XVII



administración de la justicia, implicar e integrar a una parte de las élites locales y territoriales en el engranaje de la institución regia mediante la ocupación de oficios, y fortalecer las fidelidades y los vínculos —clientelares y de cualquier tipo— de la administración periférica con la Corona. Todo ello, en aras de conseguir la mayor efectividad posible de la acción de gobierno.

La evolución de esta estructura institucional puede sintetizarse en el siguiente organigrama del cuadro adjunto, que permite apreciar tanto la jerarquía de los oficios como el progresivo desdoblamiento funcional entre la sede oficial de Orihuela y la sede alicantina.

Sobre este panorama institucional de fondo, a medida que avanzaba la segunda mitad del Quinientos y durante la siguiente centuria incidieron una serie de tendencias, actitudes y disposiciones legales que lo fueron modificando. Tanto el organigrama esbozado como algunos de los rasgos de la oficialía que la sirvió van a experimentar mutaciones a lo largo de los siglos XVI y XVII en consonancia con las nuevas necesidades que fueron surgiendo, pero también como resultado de las actitudes y los movimientos protagonizados por los diferentes actores implicados en la gobernación del territorio y en la política municipal y, en definitiva, de las disputas surgidas dentro y fuera del sistema.

3. CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES DE LA PREFERENCIA DE LOS GOBERNADORES POR RESIDIR EN LA SEDE ALICANTINA

A medida que avanzaba el período considerado, la creciente vitalidad del puerto de Alicante, su decidida proyección internacional y la reestructuración del sistema defensivo litoral frente a los enemigos de la Corona, confirieron a esta ciudad un protagonismo socioeconómico, estratégico y militar que —junto a la bondad de su clima— propició su progresiva consolidación como residencia preferida por la mayoría de los titulares de la Gobernación. Así se entiende que en 1616 el síndico de esta ciudad presentara testigos dispuestos a corroborar no solo que estaba en posesión inmemorial de

> tenir en aquella la sede y residència ordinària dels portantveus de Governador (…) residint en aquella ordinariamente ab ses cases y families, sens haver residit mai temps considerable en la ciutat de Oriola,

sino que era conveniente y necesario que continuara siendo así

> perquè a occasió del gran comersi, tracte y negociació y concurs de tantes nacions estrangeres, hi ha en dita ciutat de Alacant més negocis y causes més importants, y també, essent com és frontera tan frequentada de enemichs y corsaris, té neccessitat

de la asistència del llochtinent de capità general, tot lo que cessa en la dita ciutat de Oriola[6].

Las frecuentes —e inútiles— quejas expresadas por el consistorio oriolano para que se obligara al *portanveus* a residir en su sede oficial al menos ocho meses al año son indicativas de una práctica —*contrario sensu*— cada vez más difundida a lo largo del Seiscientos[7]. En estas circunstancias la presencia del *portantveus* en la ciudad portuaria durante un tiempo prolongado, además de conllevar la asunción personal de la presidencia de la curia allí existente, podía relegar la actividad del subrogado a la de un mero colaborador e incluso provocar su cese provisional *de facto* en el ejercicio de sus funciones[8]. Además, esos frecuentes desplazamientos del *portantveus* a Alicante solían arrastrar tras de sí a otros oficiales de la curia teóricamente adscritos a la ciudad de Orihuela para auxiliarle directamente, como era el caso del asesor ordinario e incluso del alguacil[9]. El resultado de todo ello apuntaba, por tanto, a un aparente traslado de la sede principal de la Gobernación desde Orihuela hacia la ciudad portuaria, con la consiguiente reactivación de la disputa que ambas ciudades venían manteniendo acerca de la capitalidad y/o de su desdoblamiento. Y puesto que, en esa pugna, a ambas partes interesaba acumular actos positivos que pudieran ser utilizados ante las altas instancias a la hora de hacer inclinar la balanza a su favor, no faltaron actuaciones e iniciativas —orientadas a conseguir tales objetivos— que acabaron modificando parcialmente las respectivas situaciones de partida de ambas sedes.

3.1. *Iniciales tentativas alicantinas de equiparación institucional*

Ya en las cortes valencianas de 1547 Orihuela denunció una circunstancia anómala que —a su entender— precisaba oportuno reparo, como era la de que el abogado fiscal y patrimonial de la Gobernación hubiera fijado su domicilio en Alicante en lugar de residir en la capital. Trataba de defender con ello la supremacía de la ciudad del Segura en la demarcación meridional del reino. Mas el remedio propuesto —que aquel restableciera su asiento en Orihuela— resultaba difícil de aplicar, ya que el

6. AMO, D-2.222, ff. 107v-108.

7. AMO. Contestador de 1 575, f. 98; Bernabé, 1990, p. 159; 2007, pp. 118, 120-121; 2014, p. 49.

8. Así se recoge en el capítulo 4.º de un reglamento virreinal de 1560 sobre la administración de justicia en la curia alicantina de la Gobernación. AHN, Consejos, leg. 21.936, exp. 14, ff. 168-176.

9. Algunos ejemplos, en ACA, CA, leg. 682, doc. 14/1-4; 9/1-5; AHN, Consejos, leg. 21.936, exp. 14, ff. 27-41v.

mencionado letrado, el Dr. Tomás Pasqual (a. 1547-1577)[10], era vecino y natural de la ciudad portuaria. Pasqual, por tanto, continuó residiendo en su Alicante natal, y seis años más tarde incluso llegó a solicitar que el oficio que venía desempeñando se desdoblara en dos, de modo que se nombrara otro abogado fiscal y patrimonial para Orihuela al tiempo que él conservaba su cargo en la sede alicantina. Este intento de dividir la mencionada Abogacía no llegó a cuajar por el momento, pero sí lo haría de forma ya definitiva en 1594 (Bernabé Gil, 2021, pp. 1 449-1 450).

Con el desdoblamiento de la Abogacía Fiscal y Patrimonial la ciudad portuaria obtenía un reconocimiento parcial de esa bicefalia a la que aspiraba, que aún se vería respaldado ese mismo año de 1594 por la promesa arrancada a Felipe II de dividir también la Asesoría ordinaria de la Gobernación cuando se produjera la próxima vacante. Y aunque llegado ese momento —en 1605— se consideró más conveniente aplazar su cumplimiento para mejor ocasión —que ya jamás volvería a presentarse (Bernabé Gil, 2024) —, en la dinámica seguida por la disputa entre ambas ciudades durante el cambio de centuria era Alicante la que parecía ir ganando terreno.

Antes de ello, la promulgación a instancias del virrey, en noviembre de 1560, de unas ordenanzas específicas reguladoras de las actuaciones del personal integrado en la curia alicantina de la Gobernación[11], había contribuido a dotar a esta sede de una personalidad propia que, si bien no afectaba directamente a sus tradicionales relaciones de dependencia con respecto de la oriolana, podía alimentar en aquella la pretensión de ostentar una cualificada distinción. Y así quedó de manifiesto, entre otras iniciativas alicantinas, en la orientada a obligar a los sucesivos *portantveus* a realizar en esa ciudad el juramento de los 21 capítulos de que constaba aquel documento cuando tomaran posesión del cargo. Así lo intentó, aunque inútilmente, al inicio de los mandatos de D. Enrique de Palafox (1566-81)[12] y de D. Juan Quintana (1581-86)[13]. Mas, conocedor de estos precedentes, en 1596 era D. Alvaro Vique y Manrique (1588-1607) quien apremiaba en confidencial misiva al consistorio oriolano para que se movilizara como era menester, pues

> el año 92 la ciudad de Alicante movió un negocio que ha quarenta años que le dura y es que jurase yo en aquella ciudad unos capítulos que ellos llaman Redrezo de justicia, y sabe Dios lo que es […], y sintiendo que es agravio notable así para el Governador como para essa ciudad, no lo ha jurado ningún Governador […] y, constándole ser en daño de la jurisdicción y autoridad dessa ciudad, salga a defendello diciendo que esa es la silla y cabeza de la Governación y que yo he jurado

10. Los años entre paréntesis se corresponden, a partir de ahora, con los de entrada y salida en la ocupación del oficio de referencia.
11. Constitutivas de 21 capítulos. AHN, Consejos, leg. 21.936, exp. 14, ff. 168-176.
12. AMO. Contestador de 1 575, f. 98.
13. Archivo del Reino de Valencia (ARV), Real Audiencia, Procesos 1.ª parte, S/685.

> en ella como todos los Governadores lo han hecho, y que ninguno ha jurado en Alicante […], pues consta que después de hechos los capítulos ha habido cinco o más Governadores, o más, y que nadie los ha jurado[14].

Tras el rechazo de la celebración del acto más que simbólico del juramento se escondía en realidad la defensa de la integridad estructural de la Gobernación, amenazada por las pretensiones alicantinas. Temerosa de que con ese tipo de acciones pudiera abrirse la puerta a una auténtica segregación, la legación oriolana destacada en Madrid —para el seguimiento del proceso incoado ante el Consejo de Aragón— se erigía en firme baluarte de la unidad jurisdiccional como mejor garantía de la eficacia del poder real y de la consecución del bien común. Así, tras exhibir la jurisprudencia que reforzaba su posición, argumentaba que

> de semejantes desmembraciones jamás se ha visto ningún útil, efecto ni provecho a las repúblicas y particulares vecinos, antes por el contrario, notables daños a la gente común, y desautoridad grande a los ministros superiores de V. Magd […] porque, disminuidas las fuerzas de la jurisdicción en tantos ministros, ya por lo que toca a la autoridad real, en cuyo nombre se exercitan […], no pueden exercer su jurisdicción con la autoridad que conviene […], y es de considerar que semejantes desmembraciones siempre se procuran por los hombres ricos de los lugares, pareciéndoles que lo que no pueden con la potencia de un Governador […], podrán con un particular, a quien, aunque no les falte la jurisdicción, le faltará la autoridad para exercerla, y la suya podrá prevalecer, y con eso hacer que la justicia se administre a su modo y ellos sean sublevados, y los pobres, que poco pueden, oprimidos y molestados[15].

Las tensiones surgidas entre ambas ciudades en defensa de sus pretendidas prerrogativas respecto a la capitalidad podían acabar trasladándose fácilmente, además, a las relaciones mantenidas entre los propios delegados del titular de la Gobernación. Así, ante las frecuentes ausencias del *portantveus* Vique y Manrique del distrito de la Gobernación, los mandatos sucesivos de los subrogados Mosén Pere Sánchez y Antoni Mingot al frente de la curia alicantina por delegación de aquél, y —ya bajo el gobierno de D. Juan Ferrer (1607-26)— de Francisco Burguño, no estuvieron exentos de varias polémicas protagonizadas con los oficiales regios procedentes de la ciudad vecina, si bien, alternadas con episodios de resignado acatamiento.

Según aseguraban en declaración jurada de 1614 varios miembros de la curia oriolana que habían participado personalmente en algunas de las actuaciones que relataban —protagonizadas, años atrás, durante sus desplazamientos a la ciudad portuaria para acompañar a distintos lugartenientes generales de la Gobernación—, los subrogados alicantinos no habían tenido más remedio que permitir que aquellos

14. AMO, Contestador de 1596, ff. 449-449v.
15. AHN, Consejos, leg. 22.134, ff. 137-137v.

se pasearan por su ciudad y su término general empuñando la vara de mando, que dictaran las órdenes oportunas para el apresamiento de delincuentes, que celebraran audiencia pública en la curia de Alicante y que pronunciaran sentencias, incluida la de pena de muerte[16]. A juicio de los declarantes todo ello afianzaba la figura del lugarteniente como oficial superior, presidente eventual de la curia y administrador de la jurisdicción gubernativa por encima del subrogado, cuyas funciones cesaban en su presencia[17].

Frente a estos testimonios, el síndico de Alicante exhibió treinta y siete misivas remitidas al subrogado por el lugarteniente oriolano D. Luis Togores (1569—1606), entre 1594 y 1598, en las que este utilizaba locuciones y estilo administrativo propios de una curia cuando se dirigía a otra de similar categoría —palabras preceptivas y no deprecativas, requiriendo y rogando, pero no mandando—, que denotaban la falacia de esa pretendida superioridad[18]. Y un testigo alicantino declaró también que cuando en 1608 el lugarteniente D. Baltasar Ladrón (1608-1609) intentó presidir la curia donde solía actuar el subrogado Francesç Burguño, al ser éste informado de la presunta suplantación y usurpación acudió rápidamente acompañado de otros oficiales municipales, obligaron a aquel a bajar del estrado donde tenía su asiento y solo consiguió evitarse un escándalo mayúsculo merced a la mediación de varios caballeros[19].

La pretensión alicantina en la disputa planteada incluía así mismo el reconocimiento para la curia allí ubicada de una independencia efectiva —además del mismo plano de igualdad— en su funcionamiento con respecto a la existente en Orihuela (Alberola, 1984, pp. 350). Así, según exponía el síndico Antoni Mingot, en mayo de 1616, ambos tribunales

> tenen sos districtes y jurisdictions differents y cada una de aquelles [ciutats] és cap de son districte y son los dos tribunals independents, lo hu del altre, y ab uniforme preeminència y jurisdictió, taliter que de les sentències donades en qualsevols de dits tribunals no.s recorre ni apella sinó és a altre jutge superior, com la Real Audiència o el Sacro Supremo Conselll de Aragó, y de les sentències que.s donen per los justícies y altres jutges ordinaris dels llochs del destricte de la dita ciutat de Alacant sols se apella al tribunal del Governador de la dita ciutat y no al tribunal del Governador de la dita ciutat de Oriola, y suposat que de les sentències donades per lo Subrogat de Governador de la ciutat de Alacant no y ha ni pot apellar al tribunal del Governador de la ciutat de Oriola […] es ben cert que entre aquells no y ha superioritat ni preeminència alguna[20].

16. AHN, Consejos, leg. 21.936, exp. 14, ff. 27-41v.
17. Ibidem, ff. 25-41.
18. Ibidem, ff. 195v-210.
19. AMO, D-2.222, ff. 520-521.
20. Ibidem, f. 551v.

El pleito donde se expresaron los antedichos testimonios, tras varias tensiones y contiendas legales entre ambas ciudades producidas años atrás, se había iniciado ante la Real Audiencia de Valencia en 1614 precisamente a raíz de un supuesto desacato cometido por el subrogado Francesç Imperial contra el lugarteniente D. Jaume Rosell (1611-1626), cuya pretendida superioridad aquel se habría negado a reconocer[21]. Lo que había comenzado como una riña entre oficiales del mismo sistema jurisdiccional se trasladaba, así, a un enfrentamiento entre las ciudades a las que aquellos pertenecían. Y acabó con una sentencia definitiva del Consejo de Aragón en 1617 que confirmaba la emitida por el alto tribunal valenciano el año anterior, amparando los derechos esgrimidos por la ciudad de Orihuela en cuanto a la preeminencia y carácter general —y no local— de la jurisdicción del lugarteniente frente a la del subrogado alicantino[22].

Interesa destacar que el embajador designado inicialmente, en 1614, por el consistorio oriolano para negociar en la corte una resolución satisfactoria no fue otro que el propio lugarteniente Rosell[23] y que la culminación de esa labor ante el Consejo de Aragón, en 1617, correspondió al primogénito homónimo de otro lugarteniente anterior, D. Luis Togores[24]. Y, nada más publicarse la sentencia fue Rosell, como oficial en ejercicio, el encargado personalmente de ejecutarla mediante un pomposo acto ceremonial celebrado en la ciudad de Alicante —aprovechando la ausencia del *portantveus*—, en el que estuvo acompañado de autoridades oriolanas expresamente desplazadas para la ocasión[25].

La sentencia de la Audiencia, de 16 de mayo de 1616, marcó un hito importante en el transcurso de la disputa que venían manteniendo ambas ciudades al confirmar el carácter general —y no solamente local, como pretendía Alicante— del alcance de la jurisdicción del lugarteniente. Y para que no quedara en el olvido tan decisiva declaración, casi una década más tarde el mismo D. Jaume Rosell —aprovechando la ausencia del *portantveus*— regresó a la ciudad portuaria para llevar a cabo varios actos positivos que consolidaran allí la posición que entonces se le había reconocido.

Del 9 al 18 de abril de 1625 se halló el lugarteniente, en efecto, presidiendo la curia alicantina y protagonizando —siempre con el acompañamiento del asesor ordinario interino Micer Jerónimo Sanz (1623-30)— una amplia gama de actuaciones jurisdiccionales que incluían la celebración de audiencias públicas —de 10 a 11 de la mañana—, la provisión de mandatos ordenando la comparecencia ante su presencia a todos los empleados de la curia, la entrega —por el escribano— de

21. AMO, Contestador de 1614, ff. 190-191.
22. AHN, Consejos, leg. 21.936, exp. 14, ff. 15-118.
23. AMO: Contestador de 1614, ff. 345-352.
24. AMO, Contestador de 1617, ff. 465-469.
25. AHN, Consejos, leg. 21.936, exp. 14, ff. 15-118, 230-236.

una relación de los pleitos vigentes, el despacho de comisiones a sus alguaciles para actuar en poblaciones cercanas (Monforte), la visita a las prisiones, la salida de ronda nocturna —con actos como el desarme de un vecino que portaba espada y el arresto de un caballero que faltó el respeto al asesor—, la admisión de denuncias por parte de particulares, la recepción de testimonios sobre varios robos perpetrados en el medio rural, el apresamiento de delincuentes, e incluso la recepción de juramento y homenaje de las autoridades consistoriales de una población del entorno (San Juan)[26].

Pero esta intervención de Rosell en Alicante se había visto facilitada no solamente por la ausencia del *portantveus,* sino también por la suspensión temporal del subrogado local en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de su incriminación por una serie de actuaciones irregulares de la que había sido acusado. Y es que, justamente por entonces, la imagen que estaba ofreciendo el sistema de la Gobernación *deçà Sexona* no era precisamente la más edificante u honorable, como cabía esperar de tan preeminente escaparate representativo de la administración regia, debido a las recientes disputas internas en que se hallaban envueltos sus representantes más cualificados.

3.2. *De la ofensiva del asesor Dr. Bernat al desprecio del portantveus D. Luis Ferrer*

Antes del contundente recordatorio escenificado por el lugarteniente Rosell en la primavera de 1625 respecto de la jerarquía institucional que había que respetar, una nueva disposición real contribuyó a acrecentar también la figura del asesor ordinario en sus relaciones, no con su subdelegado alicantino sino con el subrogado, y aun con el propio *portantveus*. En febrero de 1619 se despacharon desde Madrid unas instrucciones «para el buen gobierno» del distrito, conteniendo algunas novedades que no fueron del agrado del *portantveus* D. Juan Ferrer (1607-1626), pues se abstuvo de comunicarlas al resto de la oficialía de ambas sedes con el argumento —según explicó más tarde— de que el monarca no había sido bien informado de la práctica tradicional observada en dicha Gobernación y, en consecuencia, convenía hacérselo saber para que rectificara.

Parece improbable que el asesor ordinario, Dr. Silverio Bernat (1619-27), tuviese inmediata noticia de la existencia de esas ordenanzas puesto que esperó hasta diciembre de 1621 para hacer un requerimiento formal ante la curia oriolana —presidida a la sazón por el subrogado local D. Pedro Rocamora, en ausencia del *portantveus* y del lugarteniente—, sobre la obligación de registrar aquel documento en el archivo para instrucción de todo el personal. Y acto seguido se dirigió al domicilio oriolano de Ferrer, donde se hallaba convaleciente de una enfermedad,

26. Ibidem, ff. 84-100; AMO, D-2.222, ff. 626-652.

para recriminarle duramente, en presencia de sus hijos, por no haber ejecutado la real orden a su debido tiempo[27].

Entre otras disposiciones se establecía en ella la intervención obligatoria, con voto, del asesor ordinario en las remisiones de penas y en las concesiones de *guiatges* (salvoconductos) por parte de la curia, así como su expresa autorización para excarcelar a cualquier preso y su participación en la elección de alguaciles y comisarios, proponiendo los sujetos idóneos para desempeñar esos empleos. Este reforzamiento de la figura letrada mediatizaba significativamente la capacidad del *portantveus* —así como la del lugarteniente y los subrogados— en determinados tipos de actuaciones. Pero también las de los asesores subdelegados, que a partir de entonces necesitarían que en su documento de nombramiento —librado por el asesor ordinario— constara expresamente el alcance concreto de los poderes recibidos[28].

El episodio aludido contribuyó a enturbiar más aún las ya tormentosas relaciones que venían manteniendo el *portantveus* y el asesor, y derivó en la elaboración de varios memoriales y cartas dirigidos al Consejo de Aragón en los que ambos oficiales se cruzaron todo tipo de acusaciones. Mucho más prolijas en detalles, las invectivas del Dr. Bernat arremetían no solamente contra Ferrer, sino también contra el subrogado en Alicante, D. Gaspar Sanz, aunque tampoco quedaba del todo indemne el lugarteniente oriolano D. Jaume Rosell. Además, exponía la conveniencia de que estos dos oficios fueran provistos mediante nombramiento regio y no por libre designación del *portantveus*, «porque los nombra de su facción y no hacen justicia sino a gusto de este»; o bien, que para las ausencias o impedimentos de éste «se nombre como lugarteniente y subrogado al asesor Ordinario» —esto es, el cargo que él mismo ocupaba —, pues de este modo podría actuar con más autoridad.[29]. Se denunciaba en el mismo documento, además, las estrechas y delictivas connivencias de Ferrer y Sanz con la famosa cuadrilla de bandoleros y delincuentes capitaneados por la familia Berenguer de Muchamiel y con sus valedores, entre los que destacaba el noble linaje de los Escorcia de Alicante[30]. Y —en otro— se insistía en la necesidad de impedir que el *portantveus* continuara nombrando a su arbitrio a los alguaciles y comisarios, para evitar que estos empleos recayeran en delincuentes, como —según afirmaba— estaba ocurriendo[31].

En otros memoriales y cartas fechados entre el 12 de diciembre de 1621 y el 9 de febrero del año siguiente el asesor Bernat, cuya extensa e intensa actividad venía

27. ACA, CA, leg. 682, doc. 6/1-3.
28. Ibidem, doc. 5/1-7.
29. Ibidem, doc. 1/1-3.
30. Ibidem. Sobre esta banda de forajidos y la protección de los Escorcia, vid. Urzainqui, 2016, pp. 299-306.
31. Ibidem, doc. 5; 14/1-4.

desarrollándose mayoritariamente desde la sede alicantina, narraba con todo lujo de detalles una amplia serie de abusos, atropellos, corruptelas, prevaricaciones, negligencias, connivencias con el bandolerismo y tropelías de diverso tipo cometidas en Alicante y en los pueblos de su entorno, sobre todo por D. Gaspar Sanz, pero algunas de ellas con aquiescencia o permisividad de Ferrer[32].

Sin entrar en más detalles, interesa resaltar la decidida denuncia que hacía Bernat de la sistemática obstaculización a la acción de la justicia que —en su versión— venía practicando impunemente el *portantveus*, así como su desprecio y desacato a las iniciativas que él, como asesor ordinario, trataba de adoptar para hacer prevalecer el imperio de la ley y el respeto a la institución a la que ambos representaban[33]. Pero, como era previsible, la invectiva del Dr. Bernat tuvo su oportuno contrapeso en otro extenso memorial de la parte contraria que contenía la imputación de un total de 50 cargos concretos para que aquél respondiera de ellos ante las altas instancias, al tiempo que enfatizaba el carácter díscolo, independiente, prepotente y engreído del Dr. Bernat, descrito como

> hombre que no quiere que se haga cosa en la Governación por el Governador y subrogado que él no lo sepa […] que no le den razón de ello, diciendo que él es la cabeza del govierno, y él sin dar razón al Governador […], todo a fin de vanidad, y después que asiste en Alicante, ha cerca de un año que no ha acudido a hacer información alguna en los casos que se han ofrecido[34].

Las prolijas informaciones contenidas en los materiales aportados por ambas partes, junto a la naturaleza del episodio que había provocado el encontronazo, apuntan a un reforzamiento de la figura del asesor ordinario independientemente de la curia donde desplegara el grueso de sus intervenciones. En cualquier caso, el resultado de la disputa fue la realización de una pesquisa —encomendada en febrero de 1622 al oidor de la Audiencia de Valencia, Dr. Luis Ariño— para dilucidar el alcance de esos «escándalos» que habían deteriorado las relaciones entre los oficiales de la Governación y el nivel de desprestigio público en que había quedado sumida la administración de justicia.

Consecuencia directa de las pesquisas y residencias a que fueron sometidos fue, por un lado, el alejamiento y posterior remoción de Bernat, pero no sin tener en cuenta su propia voluntad ya que este había solicitado en sus últimas misivas que se le relevara de la Asesoría oriolana y se le encomendara un cargo en Mallorca o en Valencia, «donde no esté arrimado a nombre de Ferrers»[35]. Desde 1623 le encontra-

32. Ibidem, doc. 9/1-5.
33. Ibidem.
34. ACA, CA, leg. 681, doc. 85/1-8.
35. Ibidem, doc. 14/4.

mos, pues, en Madrid, defendiendo su gestión —y colaborando con Olivares y con el consistorio oriolano en la incriminación del asesor de la Baylía General meridional, Dr. Luis de Ocaña, por sus actuaciones como visitador de los oficiales y propios de la ciudad[36] —para no regresar ya jamás a ocuparse de la Asesoría ordinaria de la Gobernación, cuya titularidad nominal, no obstante, conservó. Aunque no fue hasta 1628 que obtuvo nombramiento para hacerse cargo de la regencia de Cerdeña[37]. En cuanto al subrogado Sanz, se hallaba ejerciendo todavía en 1624, pero al año siguiente acabó siendo condenado a suspensión en el empleo por un trienio. No obstante, antes de que trascurriera el segundo año —en enero de 1627— el virrey informó favorablemente la petición elevada por aquél para que se le condonara el tiempo restante atendiendo a que «ha procedido con mucha cordura […] y en consideración que los cargos que se le hicieron en la residencia no fueron de cohecho»[38].

Y también el *portantveus* D. Juan Ferrer acabó siendo objeto de una residencia, que aún no había llegado a su fin cuando en 1626 falleció (Bernabé Gil, 2014, p. 44). El desdoro personal que esta le supuso quedó grabado en la memoria de su hijo y sucesor al frente de la Gobernación, D. Luis Ferrer y Próxita (1626-1645), quién no perdonó a un sector de la oligarquía oriolana por haber testificado duramente en contra de su progenitor. Y, al menos en parte, quizás por las incomodidades y desatenciones que le auguraban esas malas relaciones, el flamante *portantveus* decidió trasladar su residencia habitual a la ciudad de Alicante, dejando a su pariente y mayor potentado local, D. Jerónimo Rocamora y Thomás (1626-39) —futuro primer marqués de Rafal—, al frente de la Lugartenencia[39]; y a D. Pedro Rocamora como subrogado en Orihuela, tras los nombramientos interinos de ambos oficios llevados a cabo inicialmente por el virrey[40].

Tras los mencionados incidentes de carácter interno, las tensiones entre ambas ciudades volvieron a reanudarse a propósito de una actuación supuestamente vejatoria del siguiente *portantveus* —ordenada desde la sede alicantina— contra el síndico de Orihuela, que incluyó la detención de este[41]. Pero el tema de fondo derivó nuevamente hacia la delimitación del alcance de la jurisdicción del lugarteniente

36. ACA, CA, leg. 577, doc. 18/1-12, Bernabé, 2022, pp. 172.

37. ACA, CA, leg. 633, doc. 2/8.; leg. 682, doc. 14/4, 21-22; leg. 707, doc. 110. ARV, Procesos de Madrid, J/868. Sobre el Dr. Bernat, vid. Arrieta, 2013, pp. 376-380; y Tore, 2013, pp. 190-203.

38. ACA, CA, leg. 928, doc. 96/1-2.

39. Bernabé, 2014, pp. 39. D. Juan había casado en Orihuela en primeras nupcias con una hermana de la esposa de D. Jerónimo, y, en segundas, con una tía de aquellas. Ambos llegaron a una concordia en 1626 para resolver la herencia de Rafal, que recayó en el segundo, a cambio de una importante compensación económica al primero. Vid. Bernabé, 1985, pp. 40-41.

40. ACA, CA, leg. 633, doc. 2/8; leg. 941, doc. 131.

41. AMO, Contestador de 1630, ff. 45-47, 64-68, 77-79.

mientras su superior no estuviera ausente del territorio de la Gobernación[42]. Decidida a no dejar pasar la ocasión para afianzar sus posiciones, en el transcurso de las negociaciones desarrolladas en Valencia y en Madrid entre 1630 y 1632, Orihuela dio instrucciones a sus síndicos y embajadores —nuevamente D. Jaume Rosell, ya desvinculado de la Lugartenencia— de solicitar varias peticiones referentes a la figura del *portanveus*: que se limitara a un trienio su mandato —como ya se había intentado, sin éxito, en las cortes anteriores de 1604 y de 1626 (Bernabé Gil, 2007, pp. 355-356)—, que quedara obligado a residir en su sede oficial y que —tal como se aprobó por el fuero CLVII de las cortes de 1585, sin que llegara a ejecutarse— fuera sometido a residencia una vez dejara el cargo. Se trataba así, con la pretendida sujeción a estas tres exigencias, de menoscabar la notoria arrogancia y prepotencia que le atribuían[43]. Ninguna de ellas se otorgó por el momento, pero D. Luis Ferrer (1626-1645) no pudo evitar ser objeto —al igual que su padre antecesor— de una visita de residencia de resultas de la operación inquisitiva de alcance general que, en este sentido, inició en 1635 D. Martín de Funes contra los oficiales reales del reino de Valencia.

Según exponía el propio *portantveus*, la residencia a que fue sometido se produjo «a instancia de los émulos de dicho Governador [él mismo], valiéndose del nombre de la ciudad de Orihuela». Pero si en Alicante «se recibió un número grande de testigos y por ellos no constó haber cosa alguna de cargo», en la ciudad del Segura, en cambio, «halló los ánimos de seis u ocho personas mal dispuestas contra el»[44]. La pesquisa concluyó en el verano de 1637 con una sentencia condenatoria a seis años de suspensión de oficio —luego reducida a solo dos— y multa de 200 libras, pronunciada por el Obispo de Petra como continuador de las pesquisas iniciadas por D. Martín de Funes, «recayendo esta sentencia sobre noventa y más cargos que le hizo el fiscal y en materias bien graves». Y, a pesar de los insultos e injurias proferidas en público por el residenciado, en cuanto aquella le fue notificada, contra el honor del Obispo —que le valieron el arresto domiciliario y 2 000 ducados de multa, al llegar a conocimiento del virrey[45]—, no habría de transcurrir todo el tiempo previsto en la condena antes de que Ferrer retomara el ejercicio del cargo de *portantveus*.

Mientras tanto la administración de la justicia regia en la demarcación *dellà Sexona* fue encomendada por el virrey —antes de que el Consejo de Aragón le solicitara la terna correspondiente para la provisión del cargo— a dos oficiales, sin distinción de rango, uno para cada ciudad:

42. ARV, Real Audiencia, Procesos, parte 1.ª, S/3 076.
43. Ibidem y AMO, Contestador de 1630, ff. 45-47; Contestador de 1631, ff. 50-53v; Contestador de 1632, ff. 56-58.
44. ACA, CA, leg. 878, doc. 117.
45. Ibidem, doc. 174/11-5, ACA, CA, leg. 650, doc. 10/1-4.

> en Origuela y su distrito a Don Jayme Rossell, y en el de Alicante a Don Gaspar Sans, por ser estos cavalleros personas de que tengo toda satisfacción, y que otra vez que lo han hecho han cumplido con sus obligaciones[46].

Además de valorarse la experiencia, ya que ambos regresaban a la oficialía de la Gobernación, se primaba claramente de este modo la bicefalia —explicitada ahora en el recurso a dos cargos indiferenciados al frente de ambas curias— sobre la unidad del oficio de *portantveus*. Cabe dudar, no obstante, de que esa doble designación virreinal se llevara realmente a efecto en los términos en que fue anunciada, pues la iniciativa no parece que fuera compartida por el Consejo de Aragón, que habría optado por mantener la unidad de la titularidad de la Gobernación[47]. Es solamente a D. Gaspar Sans, en efecto, a quien hallamos presidiendo la curia oriolana entre octubre de 1637 y principios de 1639 con título de *portantveus*, alternando a veces con D. Nicolau Rocamora en calidad de lugarteniente. D. Jaime Rosell, en cambio, no volverá a aparecer vinculado a la Gobernación desde que en 1626 fuera relevado de la Lugartenencia[48]. Esta solución a la situación de interinidad en que se hallaba inmersa la cabeza de la Gobernación como consecuencia de la condena de Ferrer debió satisfacer a la ciudad del Segura más que la propuesta por el virrey en su apuesta por la bicefalia efectiva. Y, una vez superada aquella con el regreso de D. Luis —bastante antes de lo previsto—, la estrategia oriolana estuvo dirigida a rebajar en lo posible la cuota de poder correspondiente al *portantveus* y a reforzar la independencia del lugarteniente respecto a aquel, al tiempo que a afianzar la naturaleza ordinaria de este oficio.

La consecución de estos objetivos permitiría al patriciado urbano de Orihuela, además, incrementar su influencia en las actuaciones del representante efectivo de la Gobernación en dicha ciudad —a medida que su cabeza continuara basculando hacia Alicante—, toda vez que la Lugartenencia solía recaer en un noble o caballero local. Es por ello que, además de reiterar sus planteamientos de 1630—32, a finales de 1639 Orihuela solicitase a cambio de un cuantioso servicio ofrecido a la Corona varias mercedes entre las que figuraba, junto a su tradicional aspiración a reducir a un trienio la duración del *portantveus*, la jubilación de D. Luis, comprometiéndose el consistorio a pagarle su salario de forma vitalicia, y la provisión de la Lugartenencia

46. Ibidem.

47. ACA, CA, leg. 878, doc. 173. El virrey informaba a Madrid de su decisión el 28 de julio de 1637, y el 7 de agosto escribía el Consejo de Aragón solicitando «terna de personas para el tiempo de la condenación de los seis años». ACA. CA. leg. 878, doc. 174/5.

48. Así se deduce de la consulta de más de una treintena de expedientes sustanciados ante la curia de la Gobernación de Orihuela entre 1637 y 1639, en los que figuran los componentes del tribunal para cada actuación procesal. AHO. Gobernación, carpetas G/7 y G/8.

en adelante por designación real (Bernabé Gil, 2014, p. 49). La razón de las dos primeras peticiones era clara:

> habiéndosele remitido la suspensión por V. Magd, ha vuelto al dicho gobierno, y el dicho Don Luis en venganza ha movido y sigue muchos pleitos, ocasionándolos con su proceder a dicha ciudad, por lo que quiere mal el dicho D. Luis a los que han testificado contra el y su padre, y en particular a los del gobierno, por haver pedido dicha residencia, y ahora nuevamente la que se le ha crecentado contra ellos por las quexas que se han representado a V. Magd enviando síndicos para dicho efecto, y es cierto que ha de procurar con todas veras molestar y vexar a los del gobierno e hijos y deudos dellos[49].

Mas no se trataba solamente de protegerse de la venganza del *portantveus*, recientemente expresada en el apresamiento del justicia criminal y del escribano de los jurados y en la condena a 10 años de galeras al asesor de la ciudad[50]. También había que evitar que la influencia alicantina en la Audiencia de Valencia, encarnada en el abogado fiscal de la misma, Dr. Gregorio Mingot, bloqueara las aspiraciones de Orihuela. En consecuencia, puesto que los informes previos de los virreyes podían resultar decisivos de cara a las resoluciones adoptadas a través del Consejo de Aragón, debía solicitarse en el tribunal valenciano que dicho letrado

> no es trobe pressent quant se vote y tracte de la consulta, per ser natural de Alacant y haver estat síndich y advocat en los plets contra esta ciutat, esforsant les pretensions del Governador en nom de la ciutat de Alacant y en lo procés de la intitulata y del llochtinent del governador[51].

Las peticiones oriolanas se producían en un contexto de reciente desprecio, por parte del *portantveus*, hacia esa específica modalidad de delegación que era la Lugartenencia. Así, nada más recuperar las riendas de la Gobernación en el verano de 1639 —tras dos años de suspensión efectiva en el empleo, en lugar de los seis a que fue condenado por la residencia a que fue sometido—, Ferrer se había negado a nombrar lugarteniente al marchar hacia Alicante y, en su lugar, designó a un subrogado para ejercer en su nombre en Orihuela como muestra ostensible y elocuente de menosprecio al carácter general de la jurisdicción de aquél. No obstante, ante las encendidas protestas que esta insólita actuación suscitó en el consistorio oriolano, al cabo de varias semanas fue obligado desde Madrid a rectificar, nombrando entonces al caballero local Juan Cascante García de Laza (1639-58) para servir la Lugartenencia. Más aún, pocos meses más tarde —en julio de 1640— la ciudad consiguió

49. ACA, CA, leg. 718, doc. 72/1-12.
50. AMO, Contestador de 1640, ff. 68v, 93-94, 180-181v.
51. AMO, Contestador de 1640, f. 25.

la revalidación —mediante nueva provisión, ahora, en forma de real privilegio— de Cascante en calidad de lugarteniente por nombramiento regio, lo que significó un reforzamiento de la jurisdicción ordinaria anexa a dicho oficio frente a la figura del *portantveus* (Bernabé Gil, 2014, pp. 47-52).

La conversión de la Lugartenencia, a partir de 1640, en un cargo de designación real conllevó, además de la consiguiente independencia respecto del *portantveus*, el recurso a la subrogación propia como una práctica —hasta entonces desconocida— susceptible de ser activada por aquel en casos de ausencia personal. De este modo, junto al tradicional subrogado del *portantveus* en Orihuela, a partir de entonces comenzamos a encontrar ocasionalmente también a un subrogado del lugarteniente en esta misma ciudad como novedosa manifestación del rango recientemente alcanzado por la Lugartenencia (Bernabé Gil, 2014, pp. 53-55). Y este reforzamiento institucional se complementó al poco tiempo con la consecución en las cortes de 1645 de otra de las viejas aspiraciones de la ciudad del Segura, como era la reducción a un trienio, con posibilidad de una sola prórroga, del mandato del *portantveus* —hasta entonces, de duración indefinida—, como fórmula dirigida a limitar su supuesta prepotencia (Bernabé Gil, 2008, p. 20).

Por otro lado, la consabida inclinación de los *portantveus* por residir en la ciudad portuaria contribuyó a incrementar la importancia de su curia y —como lógica consecuencia— a atraer hacia ella la activa participación del asesor ordinario. No ha de extrañar, por tanto, que en la Junta de Materias del reino de Valencia formada en las cortes de 1645 (Guía, 1984, pp. 158-167) llegara a tratarse el tema de la tantas veces postergada división de la Asesoría, a instancias del síndico alicantino[52]. No obstante, la ágil capacidad de respuesta de que hizo gala la ciudad del Segura, complementada con la decisiva concesión de un sustancioso servicio extraordinario a la Corona, consiguió parar el golpe[53]. Y aunque Alicante persistió en la presentación de varias aspiraciones ofreciendo diferentes donativos no menos cuantiosos, en función de la importancia otorgada a las distintas propuestas que iba desglosando, solo consiguió —pero nada más y nada menos que— el traspaso a su favor de la capitalidad oficial de la Baylía General *dellà Sexona* el año siguiente (Alberola, 1984, pp. 353-354). No se otorgaron, en cambio, las solicitudes de la división de la Asesoría, ni la de que la Lugartenencia recayera en un alicantino, ni la de que la intitulación de la Gobernación fuera «de Orihuela y Alicante», ni la de que su titular estuviera obligado a jurar el cargo también en la ciudad portuaria, que eran —todas ellas— materias expresamente incluidas en las propuestas elevadas por la ciudad portuaria ante el Consejo de Aragón en 1647[54].

52. ACA, CA, leg. 660, doc. 55/2
53. ACA, CA, leg. 659, doc. 48/3-8.
54. ACA, CA, leg. 660, doc. 55/1-3; leg. 893, doc. 106/1-3.

Habiéndose redefinido con todo ello la articulación interna del sistema de la Gobernación, durante la segunda mitad de la centuria fueron algo más escasas las fricciones detectadas.

3.3. *Aspiraciones de equiparación del lugarteniente con el portantveus*

Una de esas situaciones problemáticas se suscitó en 1659, y nuevamente en 1661, cuando el lugarteniente, D. Jerónimo Rocamora Cascante (1658-70), se negó a cursar en la sede oriolana sendas órdenes despachadas desde la curia alicantina por el *portantveus* D. Diego Sanz de la Llosa (1656-64). Pretextó para justificar su actitud que se habían redactado inadecuadamente, sin usar fórmulas deprecativas e *in subsidium*, como si se tratara de un tribunal superior dirigiéndose a otro inferior, cuando debía ser a la inversa[55]. Tal como el asesor ordinario —también residente a la sazón en la ciudad portuaria— tuvo que aclarar en la segunda ocasión (1661) tras su sorpresa y asombro inicial, el rango de la curia no podía prevalecer sobre el del oficial que en ella asistía o presidía en cada momento. Según informaba, pues,

> no alcanzo el fundamento de pretender que, porque nos hallemos Governador y yo en Alicante, perdamos tanto nuestra preeminencia que a nuestro tribunal de Orihuela hayamos de tratarle con palabras deprecativas[56].

En el fondo del incidente planeaba la pugna que ambos oficiales venían manteniendo por la emisión de sentencias, en la que no faltaron acusaciones de interés desmedido por apropiarse los emolumentos que estas generaban y, por la parte contraria, de incurrir en supuestos cohechos[57].

Pero el desacato de Rocamora se explica ante todo por la independencia conseguida a partir de la instauración del procedimiento de provisión regia y por tiempo indefinido del cargo que ocupaba, ya que este modo de designación le desligaba de la voluntad del *portantveus*, cuya autoridad, además, se había resentido desde que su estancia en el oficio quedara reducida a un trienio.

A propósito de esas turbias relaciones institucionales, bastantes años más tarde, en 1693, Orihuela aun trataba de convencer al virrey de la correcta interpretación de la jurisprudencia con que contaba a su favor, en virtud de la cual

> las letras que se ofrecen despachar del tribunal de Alicante en nombre del Governador principal al Teniente de esta ciudad no vienen mandando, si con tratamiento igual, […] al contrario de quando el Teniente de Governador despacha de aquí al subrogado

55. El episodio de 1659, en AHN, Consejos, leg. 21.971.
56. ACA, CA, leg. 754, doc. 3/1.
57. ACA, CA, leg. 754, doc. 77/1-3.

> de Alicante, pues en semejantes casos van las letras mandando y no en tratamiento igual, por haberlo así ganado la ciudad contra Alicante en la real sentencia de 16 de mayo del año 1616, [….] de todo lo qual se infieren dos cosas, la primera es los dos distritos diferentes de que se compone esta Governación. El uno gobernado por el tribunal de esta ciudad y los ministros que lo componen estando en ella y no de otra manera, y el otro gobernado por los ministros de Alicante estando en aquella ciudad, sin poder traerse los negocios de aquel distrito a este, ni de este al otro, aunque en qualquiera de estas dos partes se halle el principal Governador, como ni tampoco puede este mandar al teniente, si que el tratamiento ha de ser de igual a igual[58].

La pretendida equiparación, en la práctica, entre ambos oficiales se planteaba ahora desde Orihuela como corolario resultante de la expresamente admitida independencia funcional de ambas curias, pero —paradójicamente— siguiendo la línea argumental de lo que había expuesto décadas atrás —en 1617— el síndico alicantino. Con la notable diferencia de que ahora, tras la dinámica experimentada a partir de la consolidación de Alicante como residencia habitual del *portantveus*, el objetivo era preservar la curia oriolana de cualquier intromisión, incluida la del titular de la Gobernación mientras éste se hallara en la ciudad portuaria. Era, por tanto, el síndico oriolano el que en 1693 defendía, curiosamente,

> que los ministros que aquí constituyen tribunal pueden solamente exercer su jurisdicción en el distrito de este partido y no en Alicante ni su distrito, aunque sea el principal Governador y el asesor togado; como ni tampoco pueden éstos, estando en Alicante, extender el exercicio de su jurisdicción a esta ciudad y su distrito[59].

La aspiración de los lugartenientes a equipararse con los *portantveus* como estrategia para contrarrestar el absentismo de éstos y mantener la independencia funcional de la curia desde la que actuaban tuvo ocasión de expresarse también durante las vacantes y prolongadas ausencias del titular de la Gobernación. Puesto que el subrogado alicantino debía cesar cuando decayera quien le había nombrado, para cubrir ese vacío el lugarteniente se había arrogado la facultad, como máxima autoridad provisional en la Gobernación, de designar a un delegado en Alicante si es que tenía previsto permanecer en Orihuela. Así ocurrió en varias ocasiones, al menos a partir de 1671; concretamente, merced a los nombramientos de subrogados efectuados —en las vacantes y ausencias de los sucesivos *portantveus*— por el lugarteniente D. Luis Togores García de Laza (1670-79) en la persona de D. Josep Mingot aquel año, y en D. Nicolás Félix Escorcia y Ladrón en 1673, a los que siguieron los protagonizados por el lugarteniente D. Francisco Ruiz de Ávalos

58. AMO, Contestador de 1693, ff. 196v-197.
59. Ibidem, f. 196.

(1680-90) en favor, sucesivamente, de D. Feliciano Pasqual, D. Gabriel Paravecino y D. Josep Vaillo de Llanos, todos ellos alicantinos[60].

Pese a esta tradición, cuando en 1685 el *portantveus* D. Francisco Guerau (1679-85) cumplió su segundo —y ya improrrogable— trienio, el virrey le ordenó que no abandonase la ciudad de Alicante hasta que no se personara en ella su sucesor, D. Juan de Cardona (1685-86). Trataba así de evitar el virrey un aparente vacío de autoridad que pudiera aprovechar el lugarteniente para designar allí un subrogado. La iniciativa virreinal fue contestada, sin embargo, por el consistorio oriolano, que reclamó, con éxito, que era a esta ciudad donde debía acudir en primer lugar el nuevo *portantveus* para realizar su juramento[61].

Por entonces, ambas ciudades se hallaban disputando nuevamente ante el Consejo de Aragón —además de la antigua pretensión de dividir la Asesoría ordinaria— una cuestión de gran contenido simbólico como era la exacta intitulación de los distintos oficiales del sistema de la Gobernación en la práctica cancilleresca. Los resultados fueron favorables a Orihuela[62], pero tampoco el reconocimiento de esa supremacía consiguió evitar que en 1700 se planteara la duda de cómo proceder en Alicante ante el agotamiento del segundo —y ya improrrogable— trienio del *portantveus* D. José de Borja (1693-1700).

Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que correspondiera al nuevo *portantveus* interino designado por el virrey, D. Vicente Falcó, elegir al subrogado alicantino —hasta que se proveyera la titularidad de aquel oficio principal a través del Consejo de Aragón—, prevaleció el criterio, en cambio, de que tal función era potestativa del lugarteniente D. Carlos Ruiz (1691-1705). No en vano se trataba este de un oficial ordinario provisto en propiedad mediante real privilegio, circunstancia que no concurría en D. Vicente, dada su condición interina. Mas solo cuando a las pocas semanas se produjo el inesperado fallecimiento de D. José se disiparon las dudas, ordenándose a D. Carlos que realizara el nombramiento de subrogado. Se permitió entonces el virrey recomendar para el cargo a quien ya lo venía ejerciendo con el difunto: el alicantino D. Francisco Enrique Escorcia; al cual —atendiendo tal sugerencia— el lugarteniente no tuvo reparo en volver a reclutar para que continuara ocupando la subrogación en la ciudad portuaria[63], sin que obstara para ello haber protagonizado cierto altercado con el *portantveus* interino[64]. Lo que tampoco impidió que este último, D. Vicente Falcó (1700-1705), fuera confirmado al poco

60. ACA, CA, leg. 857, exp. 70/8.
61. ACA, CA, leg. 824, exp. 19/1-11, AMO, n.º 2.033, ff. 199-199v, 237-238v, 250-251v; AMO, Contestador de 1685, ff. 215v-216v.
62. Ibidem, ff. 281-282v; AMO, Contestador de 1685, ff. 215v-216v, Contestador de 1686, ff. 338, 340-340v, 346-346v.
63. ACA, CA, leg. 857, exp. 70/6-18.
64. ACA, CA, leg. 860, exp. 51.

tiempo para ejercer el oficio en propiedad al valorarse «la aprobación con que sirve los encargos que se han puesto a su cuidado»[65].

Debió tratarse este episodio de uno de los últimos rescoldos de la problemática relación que acerca de esta materia venían manteniendo las dos sedes gubernativas, antes de que el comienzo de las hostilidades derivadas del cambio dinástico introdujera un nuevo elemento potencialmente perturbador. En diciembre de 1705, mientras las tropas austracistas avanzaban por el sur valenciano, Falcó tuvo que abandonar la titularidad de la Gobernación para ocupar una plaza de capa y espada en la Real Audiencia valenciana. En ese contexto fue su sucesor interino, el alicantino marqués del Bosch, quien, al recibir el despacho de nombramiento correspondiente —fechado el 13 de diciembre—, se apresuró a dejar constancia, para evitar la subsiguiente reclamación oriolana, del error de redacción en que había incurrido la cancillería al haber empleado la impropia intitulación de «gobernador de Alicante y Orihuela», en lugar de la preceptiva locución *«portantveus de general governador d'Oriola i Regne de València dellà Xixona»* (Pérez, 2008, vol. 2, p. 323). Y no menos discrepante con el estilo acostumbrado resultó la orden recibida por el mismo diez días más tarde para que delegara en Orihuela en la persona del noble local D. Luis Togores en calidad de sucesor del lugarteniente D. Carlos Ruiz.

Para acabar de complicar la situación, tres días después —el 26 de diciembre—, era expedido en favor del oriolano marqués de Rafal un decreto de nombramiento como gobernador de Orihuela con jurisdicción limitada al término general de la ciudad, mientras que el 9 de enero de 1706 se ratificaba a del Bosch como gobernador de Alicante, pero con jurisdicción en todo el distrito de la Gobernación, advirtiendo —y reconociendo— que en circunstancias especiales, como eran las que concurrían en esos momentos de guerra, «no pueden observarse las formalidades en los Despachos» (Pérez, 2008, vol. 2, p. 324). Si lo que se perseguía con este cúmulo de nombramientos anómalos era mantener la fidelidad de ambas ciudades a la causa borbónica, el resultado fue un desdoblamiento efectivo de la autoridad gubernativa y militar en el distrito meridional del reino de Valencia, que no habría de ser ajeno al desarrollo inmediato de las acciones bélicas en dicho escenario.

El año siguiente, el decreto de Nueva Planta de 29 de junio ponía punto final al sistema de la Gobernación y abría paso a la implantación de los corregimientos, con dos sedes independientes y del mismo rango, establecidas en Orihuela y en Alicante (Giménez, 1990, pp. 9-42). Ambas contarían, así mismo, con sus respectivos alcaldes mayores, como herederos de los ya extintos asesor ordinario y subdelegado de asesor. Quedaba así sellada la bicefalia que había venido abriéndose paso *de facto* en la etapa precedente, ahora sin ninguna subordinación entre ambas sedes gubernativas.

65. ACA, CA. leg, 857, exp. 70/4.

4. CONSIDERACIONES FINALES

La evolución experimentada por las distintas piezas que conformaban el sistema de la Gobernación general en el sur valenciano no parece que respondiera únicamente a unos hipotéticos designios procedentes de la corte o de la capital del reino, durante las distintas etapas que se fueron sucediendo desde el reinado de Felipe II hasta el final del periodo foral. Aunque la autorización regia y los informes e injerencias puntuales del virrey resultaban insoslayables, las distintas iniciativas que fueron apareciendo y que en determinados casos acabaron derivando en reformas orgánicas de distinto calado, se engendraron mayoritariamente en el seno de dos ciudades inmersas en un sostenido enfrentamiento por alzarse con la capitalidad de la Gobernación meridional. En esa pugna por la hegemonía, las oligarquías urbanas que sostenían el poder municipal urdieron estrategias políticas y discursivas en defensa de sus respectivas posiciones que, a menudo, no podían dejar de involucrar a unos oficiales reales comprometidos con la defensa tanto de la jurisdicción real, cuanto de la preeminencia de la ciudad a la que se hallaban más fuertemente ligados.

Las estrechas vinculaciones mantenidas entre el personal autóctono que nutría a ambos sectores de la administración, las redes clientelares en que aquel se insertaba e incluso los frecuentes traspasos personales y funcionales entre los dos ámbitos institucionales[66] facilitaron una auténtica simbiosis de objetivos comunes. Al designar a determinados oficiales reales como síndicos y embajadores de la ciudad ante el Consejo de Aragón o ante la Audiencia valenciana para la defensa de planteamientos que afectaban tanto a las preeminencias de la ciudad cuanto a las de los representantes regios en ella asentados —y que podían repercutir en la conformación del espacio de poder urbano—, se estaba reconociendo, si no proclamando, esa confluencia de intereses compartidos[67].

Mas no siempre cabe interpretar las actuaciones de los distintos oficiales que dieron vida a la institución gubernativa, en sus diversas instancias, como mero trasunto de sus respectivas vinculaciones con las élites locales y de su inserción en redes clientelares. A veces, también las relaciones personales, forjadas a través del contacto cotidiano, del intercambio o rechazo de favores o agravios, o del grado de

66. Era el caso de los lugartenientes, de los subrogados del *portantveus* y del lugarteniente —desde que, a mediados del XVII, la nobleza quedó habilitada para poder participar en el gobierno municipal de ambas ciudades—, de los procuradores fiscales y patrimoniales y de los regentes y subdelegados del asesor ordinario.

67. Además del lugarteniente D. Jaume Rosell, que fue nombrado en varias ocasiones por la ciudad de Orihuela embajador en la corte para defenderla de las pretensiones alicantinas, también recibieron poderes para actuar en nombre de aquella los abogados fiscales y patrimoniales Dres. Vicente Xodar, en 1671, y Josep Roca de Togores en 1686; así como un hermano del lugarteniente Juan Cascant García de Laza, de nombre Bartolomé, en 1646 (Bernabé, 2007, pp. 106-107).

compatibilidad de caracteres, jugaron un papel de primer orden —junto al propio *ethos* del individuo— en los comportamientos de los diferentes actores e influyeron en sus posibles repercusiones en el plano puramente institucional. Así, la incidencia del factor humano en el mantenimiento de la armonía que debía presidir el adecuado funcionamiento del sistema de la Gobernación, integrado por una pluralidad de oficiales con intereses no siempre coincidentes, trascendió en ocasiones el equilibrio buscado a través de una ajustada diversificación tanto de las fórmulas empleadas en la provisión de los cargos —más allá de los condicionantes derivados del carácter delegado de algunos de ellos—, cuanto de la procedencia geográfica de los mismos.

El carácter sostenido de esa pugna por la capitalidad permite apreciar, por otra parte, la vertiente dinamizadora del conflicto, pues de no haberse producido aquellas disputas el conformismo con la situación heredada de época medieval habría propiciado seguramente una fosilización de la estructura interna del sistema de la Gobernación. Y, en el trasfondo de esas controversias, fue la dispar dinámica socioeconómica experimentada por cada una de las dos ciudades durante el período tratado —como quedó de manifiesto en los discursos legitimadores elaborados por una y otra (Bernabé Gil, 2019)— el motor principal que, en última instancia, mantuvo vivo el proceso de readaptación a las nuevas realidades emergentes.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de David Bernabé Gil.

Agradecimientos y financiación

No cuenta con financiación.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

5. BIBLIOGRAFÍA

Alberola Romà, A. (1984). *Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII-XVIII)*. Ayuntamiento de Alicante-Universidad de Alicante.

Arrieta Alberdi, J. (1996). Las regalías en la Corona de Aragón en el siglo XVII: A propósito de un dictamen de Silverio Bernat de 1624. *Anuario de Historia del Derecho Español*, *66*, 365-444.

Bernabé Gil, D. (1985). La formación de un patrimonio nobiliario en el Seiscientos valenciano: El primer Marqués de Rafal. *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, *5*, 11-66. https://doi.org/10.14198/RHM1985.5.01

Bernabé Gil, D. (1990). Alicante en la monarquía hispánica. En *Historia de la ciudad de Alicante. Edad Moderna* (Vol. 3, pp. 149-181). Comisión V Centenario de la Ciudad de Alicante.

Bernabé Gil, D. (1993). Una coexistencia conflictiva: Municipios realengos y señoríos de su contribución general en la Valencia foral. *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, *12*, 11-77. https://doi.org/10.14198/RHM1993.12.01

Bernabé Gil, D. (2007). *El municipio en la corte de los Austrias: Síndicos y embajadas de la ciudad de Orihuela en el siglo XVII*. Institució Alfons el Magnànim.

Bernabé Gil, D. (2008). Nobles valencianos en el servicio regio: La provisión del oficio de Portantveus de Gobernador Ultra Sexonam en la Edad Moderna. *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, *26*, 13-60. https://doi.org/10.14198/RHM2008.26.01

Bernabé Gil, D. (2012). Oficiales regios en redes sociales de ámbito local: Los lugartenientes de la Gobernación General de Orihuela en la Edad Moderna. En A. Giménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (Coords.), *Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Comunicaciones* (Vol. 1, pp. 949-960). Universidad de Granada-Fundación Española de Historia Moderna.

Bernabé Gil, D. (2014). La Lugartenencia y las Subrogaciones locales de la Gobernación General de Orihuela en la Edad Moderna. *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, *32*, 33-60. https://doi.org/10.14198/RHM2014.32.02

Bernabé Gil, D. (2018). El municipio frente al fortalecimiento de la Gobernación General de Orihuela bajo el mandato de D. Juan de Moncayo (1553-1567). En C. Cerón Torreblanca (Coord.), *Los límites del Estado: La cara oculta del poder local* (pp. 29-58). UMA Editorial.

Bernabé Gil, D. (2019). Dinámicas socioeconómicas y discursos de ciudad en la disputa por la capitalidad del sur valenciano: Alicante versus Orihuela en el siglo XVII. En *II Congresso Histórico Internacional. As Cidades na História: Sociedade* (pp. 237-266). Câmara Municipal de Guimarães.

Bernabé Gil, D. (2021). «Timonero de todos los tribunales»: La provisión de las abogacías fiscales y patrimoniales de Orihuela y de Alicante en el siglo XVII. En C. Borreguero Beltrán, Ó. R. Melgosa Oter, Á. Pereda López y A. Retortillo Atienza (Coords.), *A la sombra de las catedrales: Cultura, poder y guerra en la Edad Moderna* (pp. 1445-1461). Universidad de Burgos.

Bernabé Gil, D. (2022). Ascenso y tribulaciones de un jurista regio en el sur valenciano: El Dr. Luis Ocaña (1559-1626). *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, *40*, 154-180. https://doi.org/10.14198/RHM2022.40.05

Bernabé Gil, D. (2025). Juristas valencianos al servicio de los Austrias: Los asesores de la Gobernación foral de Orihuela. *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, *44*, 237-273. https://doi.org/10.1344/pedralbes2025.44.9

Cabezuelo Pliego, J. V. (1988-1989). En torno a la creación y funcionamiento de la Gobernación General de Orihuela. *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval*, *7*, 159-180. https://doi.org/10.14198/medieval.1988-1989.7.07

Dueñas Moya, M. C. (1997). *Territorio y jurisdicción en Alicante: El término general durante la Edad Moderna*. Generalitat Valenciana-Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

Gadea Guiteras, J. (1925). *Del Portant Veus de General Gobernador en el reino de Valencia durante la época foral*. Arte Tipográfico.

Giménez López, E. (1990). *Militares en Valencia (1707-1808)*. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

Gómez Zorraquino, J. I. (2014). Los gobernadores del Reino de Aragón (siglos XVI-XVII). *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, *32*, 11-31. https://doi.org/10.14198/RHM2014.32.01

Guia Marín, L. (1984). *Cortes del reinado de Felipe IV: Cortes valencianas de 1645*. Universidad de Valencia.

Lalinde Abadía, J. (1962). *La Gobernación General en la Corona de Aragón*. CSIC.

Matheu i Sanz, L. (1704). *Tractatus de regimine Regni Valentiae*. Lyon.

Pérez Aparicio, C. (2008). *Canvi dinàstic i Guerra de Successió: La fi del Regne de València*. Edicions Tres i Quatre.

Salvador Esteban, E. (1975). *Cortes valencianas del reinado de Felipe II*. Universidad de Valencia.

Salvador Esteban, E. (1984). La Gobernación valenciana durante la Edad Moderna: Cuestiones en torno a su singular estructura territorial. En *Studia historica et philologica in honorem M. Batllori* (Vol. 3, pp. 443-456). Instituto Español de Cultura.

Taraçona, P. H. (1580). *Institucions dels furs y privilegis del Regne de Valencia*. Pere de Huete.

Tore, G. (2013). Fedeltà política e governo dei regni: L'ascesa di un letrado nella Spagna dell'Olivares: Silverio Bernat e l'Olimpius nemisianus. En G. Murgia y G. Tore (Eds.), *Europa e Mediterraneo: Politica, istituzioni e società* (pp. 190-203). FrancoAngeli.

Urzainqui Sánchez, S. (2016). *Bandidaje y gobierno del territorio en la Valencia foral: La gobernación de Orihuela en tiempos de Felipe III*. Universidad de Alicante.

Vilar Ramírez, J. B., y García Martínez, S. (1981). *Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna: Historia de la ciudad y obispado de Orihuela*. Patronato «Ángel García Rogel».

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481279309

EL PRIMER «*REFORMISMO*» DE FELIPE V Y SUS MINISTROS: «*COMPRADORES*» DE CORREGIMIENTOS EN EL PERIODO 1705-1711

The «First Reformism» *of Philip V and His Ministers: Buyers of* «Corregimientos» *in the Period 1705-1711*

María del Carmen IRLES VICENTE

Universidad de Alicante
carmen.irles@ua.es

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: En este trabajo pretendemos arrojar algo de luz sobre los individuos que beneficiaron el cargo de corregidor en el periodo 1705-1711 en el ámbito castellano. Desarrollado el proceso en el contexto de la Guerra de Sucesión española, y propiciado por el déficit hacendístico existente y las múltiples exigencias de capitales que la misma implicó, son varios los aspectos que nos interesa abordar respecto a los titulares de esos cargos, entre ellos, si disponían de la preparación adecuada para asumir las tareas que les esperaban al frente de un corregimiento, así como valorar su comportamiento en el desempeño de dichas tareas, como también constatar su continuidad, o la falta de ella, una vez cesaron las ventas y la provisión del cargo volvió a su procedimiento habitual: consulta de una terna por parte de la Cámara de Castilla al rey y consiguiente designación regia.

Palabras clave: venalidad; corregidores; perfil sociológico; cursus honorum; siglo XVIII.

ABSTRACT: In this paper, we aim to shed light on the individuals who held the office of *corregidor* in Castile between 1705 and 1711. This process unfolded in the context of the War of the Spanish Succession and was driven by the fiscal deficit and the substantial demand for capital that the war entailed. Several aspects of these officeholders are examined: whether they had the necessary training to assume the responsibilities awaiting them at the head of a *corregimiento*; how they performed those duties; and whether or not they continued in office once sales ceased and the appointment procedure returned to its usual form, namely the Council of Castile's submission of a list of three candidates to the king, followed by royal appointment.

Keywords: venality; corregidores; sociological profile; cursus honorum; 18th century.

1. INTRODUCCIÓN

En el libro *Necesidad y venalidad. España e Indias, 1705-1711* Francisco Andújar analiza de manera sistemática las razones que llevaron a Felipe V a poner en marcha, al poco de su llegada a España y recién iniciada ya la Guerra de Sucesión, toda una serie de medidas que habían sido utilizadas con frecuencia en su país de origen, pero también en la España de los Austrias (Domínguez, 1970; Tomás, 1970), cada vez que los problemas hacendísticos se intensificaban y cabía inyectar numerario en las maltrechas arcas regias, esto es, la venta de cargos públicos[1]. La principal diferencia entre la práctica empleada con anterioridad y el procedimiento que se abrió a partir de 1705-1711 fue el alcance que logró dicho proceso enajenador, que no solo afectó a regidurías a nivel municipal —o a los cargos menores en Chancillerías, Audiencias…—, sino también a empleos que implicaban ejercicio de la justicia, cargos que, por lo que tradicionalmente se había dicho, habían quedado al margen del mercado venal; la gran aportación del profesor Andújar ha sido la de documentar —pese a las inmensas dificultades que el proceso de averiguación conlleva— cómo, en dicho intervalo temporal, siempre que hubo un pretendiente dispuesto a aprontar la cantidad que se le exigiera por el honor o cargo a que aspirase podía llegar a obtenerlo, incluidos, por supuesto, los vinculados a la administración de justicia, ya fueran corregidores, oidores, alcaldes del crimen, o incluso consejeros.

1. La bibliografía sobre el tema es abundante; para una consulta exhaustiva de la existente remitimos a la citada por Andújar, 2004 y 2008; así como Gómez, 2000 y 2003.

No vamos a extendernos comentando cómo se produjo la gestación del procedimiento de adquisición de cargos durante el intervalo referido, quiénes lo diseñaron o se encargaron de extenderlo, cuestiones todas ellas a las que el profesor Andújar presta una exhaustiva atención en la obra referida; por nuestra parte nos interesa, sobre todo, fijarnos en el factor humano, es decir, en quiénes se valieron de la oportunidad que se les brindaba en ese momento para acceder a un corregimiento —aunque fuese con carácter temporal— y emplearse en un cargo tradicionalmente dotado por el monarca en función de los méritos del aspirante y en el que el parecer de la Cámara de Castilla tenía una importancia relevante.

En esa tesitura, la disponibilidad de numerario resultó fundamental para incorporarse a la administración del Estado al frente de una de las circunscripciones territoriales en las que se había ido dividiendo el solar hispano desde que a mediados del siglo XIV se crearon los primeros corregimientos o distrito encargado a un corregidor, el delegado en esencia del monarca para el control del territorio y sus habitantes (Bermúdez, 1974; González, 1970).

Una puntualización, o aclaración, quisiera hacer sobre el sentido de algunos de los términos o vocablos que aparecen reiteradamente mencionados en este trabajo; se habla de compra y venta de cargos a sabiendas de que no se trata de ventas *sensu estricto*, pues lo que se adquiere no es una posesión absoluta como la que la ley atribuye a la adquisición de un objeto o bien determinado. Las ventas de corregimientos a que se hace referencia repetidamente en las páginas de este artículo no son a perpetuidad, por juro de heredad, con todo lo que este tipo de enajenaciones conlleva de facultad para poder disponer a su antojo por el propietario, vendiéndolo, hipotecándolo o transmitiéndolo en herencia; ni siquiera se trata de una adquisición con carácter vitalicio —como en muchos de los cargos enajenados por la monarquía en otros momentos históricos—, sino con carácter temporal breve, un trienio, el tiempo que legalmente tenía asignado el ejercicio del cargo de corregidor. ¿Por qué se habla entonces de compras, ventas, mercado venal…? Sencillamente porque medió dinero a la hora de que el aspirante lograra el cargo apetecido, porque la oferta de una determinada cantidad facilitó que fuera el designado por el monarca para dicho empleo al margen de los habituales cauces establecidos para la provisión —consulta de la Cámara de Castilla y resolución regia—.

Si el monarca podía hacer uso de la gracia regia para recompensar servicios, también los súbditos venían obligados a ayudar al rey en momentos de apuros, como los que se experimentaron durante el conflicto sucesorio, de ahí que se multiplicasen las ofertas de numerario a cambio del logro de un cargo, un título nobiliario, un puesto en el ejército y un amplio etcétera. Que hubo en torno a la dotación de estos un cierto mercadeo, que en tiempos de paz y de menores agobios hacendísticos no se produjo, es algo evidente y que se justificó, precisamente, por esas especiales

circunstancias de crisis, como ha documentado de manera profusa la Dra. López Díaz en un reciente trabajo (López, 2026, pp. 254-269).

Hecha esta salvedad cabe señalar que son varias las preguntas que se nos antoja como necesitadas de respuesta por lo que al proceso de dotación corregimental abierto en el periodo 1705-1711 se refiere; por un lado, quiénes accedieron a ese inesperado mercado para adquirir la titularidad de un corregimiento[2], por espacio de un trienio —o dos en el caso de aquellos que, cumplido el plazo de disfrute establecido por la ley, pretendieron la consecución de una prórroga al frente de dicho destino, o bien acceder a otro distinto terminado el periodo de ejercicio en el primero—, y por qué lo hicieron. Interesante resulta, asimismo, identificar si dichos sujetos se habían incorporado con antelación al servicio del monarca dentro del circuito corregimental u otros cargos de provisión regia, o si, por el contrario, dicha medida enajenadora pudo servir para despertar el interés de acercarse a esa carrera en individuos que todavía no habían entrado en el mercado laboral por su juventud o bien de quienes habiéndolo hecho, estaban buscando cambiar de empleo como, por ejemplo, militares castigados físicamente por los años de servicio en el ejército y que aspiraban a un cargo menos peligroso o más relajado y acorde a la situación en la que por su edad y/o problemas físicos o de salud se encontraban ¿qué podemos saber sobre su origen social? ¿se trataba de nobles, letrados…? ¿seguían una tradición familiar o se acercaban por primera vez a dicho cargo? ¿continuaron en la carrera cuando el dinero dejó de tener el peso necesario para inclinar la balanza? ¿cuál fue su conducta y comportamiento al frente de ese u otros cargos que pudieran desempeñar con antelación o a posteriori? Estas son algunas de las preguntas a las que pretendemos dar respuesta con este trabajo que, por otro lado, se inserta en una línea de investigación que no nos resulta ajena, y en la que obtuvimos en su momento importantes resultados, si bien para otro relevante cargo a nivel local (Irles, 1990; 1995).

Además de comprobar si los peticionarios contaban con un currículum previo a su incorporación a uno de esos corregimientos venales, nos interesa conocer cuál fue su posterior *cursus honorum* —si es que lo hubo—, es decir, si continuaron ascendiendo en la carrera corregimental o se desvincularon de ella, así como cuál fue el papel desempeñado por la Cámara de Castilla —responsable de someter al parecer regio la terna de candidatos para cubrir las respectivas vacantes— o del propio Felipe V a partir de que se cerrara ese temporal mercado de cargos.

2. No nos referimos a los nombres y apellidos, que de ellos da buena cuenta el profesor Andújar en su libro, sino a su currículum socioprofesional, anterior y posterior a dichas adquisiciones por servicio pecuniario.

Un importante porcentaje de quienes se implicaron en beneficiar corregimientos —durante el tiempo que se dieron facilidades para ello por parte de la monarquía— carecía de experiencia previa en la carrera de varas cuando optó por acceder a uno de dichos cargos, pero logró posteriormente, con más o menos dificultades, hacerse un hueco en las ternas que la Cámara presentaba al monarca cada vez que su titular concluía el preceptivo trienio, así como ser designado para un nuevo destino, esta vez sin que mediase ya el poder del dinero, sino los méritos contraídos durante sus años de ejercicio; otros, sin embargo, no lo lograron y finalizado el periodo a que les daba derecho la cantidad satisfecha a la hacienda regia abandonaron la carrera corregimental para no volver a ocupar otro corregimiento nunca más; a mitad de camino entre uno y otro grupo podemos situar a quienes fueron consultados por la Cámara al rey, aunque este no les confiara finalmente el cargo, o lo hiciera solo en muy contadas ocasiones; aún cabe establecer un cuarto grupo, el de aquellos que se implicaron en el proceso de adquisición de corregimientos con una cierta experiencia previa que siguieron ampliando después de acabado el periodo de venta, llegando en ocasiones a desarrollar una larga y fructífera carrera de servicios al monarca en corregimientos, habitualmente de capa y espada, en algún caso militares o bien de letras, e incluso dando el salto a la magistratura para formar parte de alguna Audiencia[3]; de los integrantes de este cuarto grupo nos ocupamos en el presente trabajo, los otros tres no han podido ser abordarlos por los límites de extensión que todo artículo conlleva, si bien consideramos que merecen especial atención por las singularidades que implican.

El análisis realizado se basa fundamentalmente en la documentación conservada en los dos grandes archivos centrales: Archivo Histórico Nacional y Archivo General de Simancas. La sugerencia de ampliar la investigación mediante el estudio sistemático de documentación municipal —especialmente las actas de toma de posesión de los corregidores, registros de ejercicio del cargo o expedientes de cese— abre una línea de investigación particularmente prometedora. Ciertamente permitiría reconstruir con mayor precisión la aplicación práctica de estas designaciones en el ámbito local, cuestión que excede los límites de este artículo, pero que constituye un objetivo relevante de cara a futuras investigaciones.

2. LOS COMPRADORES Y SU ACCESO AL MERCADO VENAL

Un aspecto en el que pone especial énfasis F. Andújar es el de las dificultades que entraña descubrir quiénes adquirieron los cargos, precisamente por el ocultismo que se generó en torno a todo el proceso para evitar la visibilidad de unas ventas que a ninguna de las dos partes participantes convenía airear: monarca y

3. Tan solo hemos localizado el caso de Gaspar Cevallos.

compradores (Andújar, 2008, pp. 225-227). Ciertamente, nuestras sospechas, como las del propio Dr. Andújar, apuntan a que el número de individuos que lograron beneficiar un corregimiento en el periodo 1705-1711 fue muy superior al que se aporta en el listado presente en el mencionado libro, pues tanto las fechas como la existencia de un real decreto confiriendo Felipe V los corregimientos de capa y espada, sin la habitual consulta de la Cámara de Castilla, apuntan frecuentemente en esa dirección, pero carecemos del refrendo de la cantidad abonada y, por lo tanto, de la constatación documental que, como sabemos, se cuidó mucho por mantener en secreto. Ni los interesados en adquirir un cargo por servicio pecuniario, ni quienes se desprendieron temporalmente de él tenían el menor interés en que esa documentación pasara a la posteridad, de ahí que las prácticas utilizadas buscaran la ocultación por todos los medios a su alcance, anotando muchas veces las cantidades ingresadas por la real hacienda por ese concepto como «venta secreta», sin la más mínima referencia al nombre de quien se había visto favorecido por la misma.

Tomando como punto de partida la información que suministra Andújar en los cuadros 12 al 14 del libro de referencia, podemos constatar que la región geográfica que mayor interés despertó entre los potenciales compradores fue Andalucía; el gran número de corregimientos existente pudo ser una razón[4], pero no la única; de hecho también se observa que varios distritos corregimentales fueron apetecidos, y adquiridos, por más de un comprador distinto a lo largo del periodo en que se pudo optar a ello; la prontitud con que surgieron aspirantes a beneficiar un corregimiento en dicha área geográfica sería otro argumento de esa mayor atracción que despertó servir al monarca en la zona. Como ejemplo cabe destacar la adquisición de que fue objeto el corregimiento de Carmona en 1705 por Antonio Barrera, quien ingresó en las arcas regias 60 000 reales por desempeñarlo durante un trienio; pero también que en 1710 fuera otro caballero, Pedro Quintana, quien pretendió y adquirió dicho destino, eso sí, por una cantidad muy inferior, cifrada en 21 000[5].

4. Sobre el número de corregimientos existentes en Andalucía por esas fechas vid. Álvarez, 2012.

5. Las razones que propiciaron semejante diferencia pudieron estar tanto en el interés que tuvieran por el cargo los compradores —hasta dónde estuvieran dispuestos a llegar en su ofrecimiento—, como las necesidades de numerario por parte del monarca y la posibilidad o no de encontrar quién ofreciera más, así como también, por supuesto, la disparidad existente en el currículum personal de los aspirantes (Andújar, 2008, p. 227).

Tabla 1. Ventas de corregimientos en España (1705-1711)[6]

Ubicación geográfica	N.º de corregimientos	N.º de compradores
Andalucía	19[7]	24[8]
Castilla-León	16[9]	16
Castilla-Mancha	8[10]	12[11]
Extremadura	3[12]	3
Canarias	2[13]	2
Murcia	1[14]	1
Total	49	58

Elaboración propia a partir de F. Andújar Castillo, *Necesidad y venalidad…*, pp. 228-236.

6. Se han contabilizado tan solo las adquisiciones iniciales —sin las prórrogas—, incluyendo en estas la del corregimiento de Salamanca por parte de Juan Antonio Cevallos y el de Mancha Real por Tomás Escobar de Aldana —cuya información conocemos por haber logrado en 1710 sendas prórrogas—; para aquellos otros que consiguieron también su continuidad por un segundo trienio remitimos a Andújar, p. 230, cuadro 13.

7. En Andalucía se enajenaron la asistencia de Sevilla, los corregimientos de capa y espada de Carmona, Écija, Antequera, Jaén, Alcalá la Real, Jerez, Mancha Real, Guadix, Ronda y Granada; los de letras de las Cuatro Villas de la Hoya de Málaga, Bujalance y Quesada; los gobiernos político-militares de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Motril y Almería; así como el gobierno de Martos, perteneciente a la orden de Calatrava.

8. Los corregimientos de Carmona, Alcalá la Real, Antequera, Martos y Motril se vendieron en un par de ocasiones y a compradores distintos.

9. Las compras afectaron a los corregimientos de Ávila, Tordesillas, Toro, Medina del Campo, Segovia, Palencia, Soria, Burgos, Carrión y Sahagún, Aranda de Duero, Medina de Rioseco, Valladolid, Ágreda, Salamanca y León; como también al gobierno militar de la Puebla de Sanabria.

10. En tierras manchegas se vendieron los corregimientos de Alcaraz, San Clemente, Chinchilla, Cuenca y Guadalajara; así como Villena y Requena —aunque desde la división provincial de Francisco Javier de Burgos se incorporaron a Alicante y Valencia, respectivamente, creemos más oportuno asignarlos a la Mancha a comienzos del siglo XVIII por tratarse de territorios pertenecientes a la Corona de Castilla—, y el gobierno de Almagro, encuadrado en tierras de la orden de Calatrava.

11. Como ocurriera en Andalucía, también en esta área geográfica hubo 4 destinos que se vendieron en dos ocasiones a individuos distintos: San Clemente, Cuenca, Chinchilla y Almagro.

12. En Extremadura fueron objeto de transacción monetaria los corregimientos de Plasencia y Cáceres, así como el gobierno de Llerena, perteneciente a la orden de Santiago.

13. En Canarias fueron enajenados el corregimiento de Gran Canaria y el de Tenerife-La Palma.

14. En Murcia queda documentada la venta del de Lorca en 1710.

Todo el secretismo que rodeó a las enajenaciones de cargos emprendidas en 1705 debió propiciar que no fuera hasta 1708 cuando se «popularizó» entre quienes querían emplearse en la carrera de varas —y contaban con la solvencia económica necesaria para ello— la posibilidad de realizar un ofrecimiento en metálico al monarca para entrar a su servicio; en Canarias y La Mancha las primeras compras documentadas se produjeron ese año, mientras en Castilla-León no llegaron hasta 1709, y en Murcia y Extremadura en 1710.

Por lo que al estatus social de los compradores se refiere, conviene señalar que la mayor parte de los que hemos logrado identificar formaban parte de la nobleza, incluso alguno de ellos disfrutaba de un título nobiliario, como el marqués de Villacampo o el conde de Miraflores de los Ángeles; se trataba de una nobleza reciente, obtenida en la segunda mitad del s. XVII, aprovechando las facilidades que durante ese periodo se dieron para ello[15]; otros eran descendientes de titulados, como Sebastián Antonio Laiseca, hijo del marqués de la Laguna; que la mayor parte de los corregimientos beneficiados estuvieran encuadrados en la categoría de capa y espada responde, en buena medida, a esa condición noble de los adquirentes, que requerían un destino acorde con su estatus donde ejercer.

Una cuestión a destacar es que quien optó por recurrir a la compra en una ocasión rara vez fue la única, sobre todo si disponía de una economía saneada que le permitiera ir modelando, gracias al dinero, un currículum de preeminencia social a la medida de su gusto o aspiraciones; como prototipo de ello nos gustaría centrarnos en una familia sevillana, los Tous de Monsalve, varios de cuyos miembros se interesaron por participar activamente en esa «almoneda» instalada en tierras castellanas durante buena parte del conflicto sucesorio.

Los Tous de Monsalve constituían una saga familiar muy presente en el ayuntamiento de Sevilla (Márquez, 2010), del que habían formado parte, al menos desde mediados del s. XVII, tanto el padre como el abuelo —ambos de nombre Alonso— de los hermanos Lope y Diego Tous —aspirantes, por servicio pecuniario, al corregimiento de Antequera y el gobierno de Almagro, respectivamente, en 1708[16] y 1709—. Aunque cuando se mostraron pretendientes a los referidos cargos estaban en los comienzos de su trayectoria profesional, el objetivo a conseguir debió ser imitar a sus mayores e incluso lograr un mayor encumbramiento del linaje.

15. El conde de Miraflores de los Ángeles lo había adquirido en 1689 (Cadenas y Cadenas, 1993, p. 557).

16. Lope Tous, futuro marqués de su apellido, inició los trámites para beneficiar el corregimiento de Antequera, llegando a entregar 30 000 reales en la Tesorería regia, aunque finalmente quien se quedaría por espacio de un trienio con el cargo de corregidor por el que había pujado fuera un pariente suyo, Fernando Zulueta Monsalve (Andújar, 2008, p. 228).

Los Tous, que en el consistorio sevillano ostentaron los oficios más honoríficos y de mayor preeminencia social —como el de alcalde mayor y teniente de alguacil mayor, así como sendas veinticuatrías—, alcanzaron también la condición de titulados tras conseguir el abuelo el título de conde de Benagiar en 1691, distinción que disfrutarían, consecutivamente, su hijo Alonso y dos de sus nietos —Fernando y Diego—, en este último caso a partir de 1703 y hasta 1730 por fallecimiento de su fraterno, que era el primogénito.

Lope, el cuarto de los hijos del II conde de Benagiar, deseando emular al resto de sus hermanos —el tercero, José, asumió desde 1700 a 1728, como teniente de su madre, el oficio de veinticuatro que con anterioridad había ocupado su abuelo materno y que recaía en la familia con carácter perpetuo desde 1642[17]— se embarcó en una espiral de proyectos que garantizaran su afianzamiento y ascenso social; en este sentido, desde 1704 a 1744 actuó como teniente de alguacil mayor (Márquez, 2010, pp. 93-96); se incorporó como caballero de la orden de Santiago en 1711, año en el que también logró el título de marqués de Tous y el nombramiento de gentilhombre de cámara de S.M, adquisiciones a las que no debió ser ajena la práctica venal.

Máximo exponente de nobleza personal y servicios a la monarquía, Alonso Joaquín Tous de Monsalve, V conde de Benagiar y marqués de Valdeosera —hijo de Diego Tous— uniría a su condición de alcalde mayor de Sevilla —honor que venía ostentando la familia con carácter perpetuo— una larga y prolífica carrera en corregimientos e intendencias, que inició en Jaén a partir de 1742, continuó como intendente de La Mancha y gobernador de Almagro en 1753, intendente-corregidor de León desde 1764, para volver nuevamente a tierras manchegas, donde fallecería en 1772 (Abbad y Ozanam, 1992, pp. 177-178; Irles, 2022, pp. 191-192).

3. COMPRADORES CON EXPERIENCIA PREVIA

De los algo más de cincuenta individuos que nos consta adquirieron un corregimiento en el periodo 1705-1711[18], sabemos que alrededor de un 18 % disponía de experiencia previa en la carrera de varas, un 16 % en la administración municipal, al menos un 8 % formaba parte del ejército, mientras que de un abultado 31 % no hemos conseguido obtener datos sobre su trayectoria anterior ni posterior a la

17. También las dos hermanas mantuvieron estrecha relación con el ayuntamiento de Sevilla, pues contrajeron matrimonio con otros dos caballeros veinticuatros (Márquez, 2010, pp. 176-177, 1069-1070).

18. Para elaborar los porcentajes que presentamos hemos prescindido de los seis individuos que adquirieron un gobierno militar en el periodo, dado que distorsionaría el resultado, pues todos los gobernadores-corregidores eran, necesariamente, militares.

adquisición de la plaza que beneficiaron[19], muy probablemente porque no la tuvieron con antelación ni lograron continuar al servicio del monarca —o cuanto menos no al frente de un corregimiento— después de acabado el tiempo que pudieron adquirir entre 1705 y 1711.

3 1. *Al frente de corregimientos*

Uno de los aspectos clave, cuando de una operación venal se trata, es conocer la actuación que mostraron los compradores al frente del cargo; otro aspecto, no menos importante, lo constituye la experiencia que reunían en el momento de acceder al puesto que habían adquirido; pues bien, en este sentido podemos señalar que, con honrosas excepciones, quienes beneficiaron los corregimientos a comienzos del Setecientos carecían de práctica en el ejercicio de las tareas que eran inherentes al cargo. Entre esas excepciones podemos apuntar el caso de Pedro Quintana, quien llevaba más de una década empleado en corregimientos cuando benefició el de Carmona en la primavera de 1710.

Natural de la Montaña de Burgos, y caballero de la Orden de Calatrava, Pedro Quintana había sido provisto en el corregimiento de Hellín y Calasparra a principios de 1691 y ocupado el de Carmona desde agosto de 1692 hasta diciembre de 1695; gobernador de Martos, desde marzo de 1707 a junio de 1710, volvió a asumir el destino carmonense —esta vez tras ingresar 21 000 reales en las arcas regias— a partir del mes de julio de 1711 y hasta octubre de 1714. Concluido el trienio, fue consultado por la Cámara hasta en tres ocasiones a lo largo de 1715 para los corregimientos de Cáceres, León y Carrión; pues bien, tras solicitar los correspondientes informes, todos aquellos a quienes se preguntó por su conducta al frente de los destinos que había ocupado coincidieron en destacar sus grandes cualidades en el desempeño de las tareas corregimentales, entre ellos Macanaz, quien valoró muy positivamente su larga trayectoria profesional, de más de dos décadas, desarrollada «con grande acierto»; Francisco Portell, quien tras enumerar los empleos ocupados indicó que los había ejercido «con toda satisfacción», por lo que estimaba era «digno de ser atendido»; Juan Milán, quien juzgaba haber «servido con grande aprobación en muchos encargos y comisiones de importancia del Real Servicio […], dando muy buenas residencias»; Mateo Pérez Galeote, quien aseguró ser «benemérito», haber ejercido «muchos corregimientos con acierto» y ser digno de los empleos para los

19. Del restante 27 % disponemos de diferentes datos sobre su familia, actuación al frente de los corregimientos adquiridos, opiniones de consejeros informantes, consultas de la Cámara…, si bien dicha información no nos permite trazar un perfil que posibilite encuadrarlos socioprofesionalmente; entre ellos figuraría, no obstante, un buen número de abogados, pues se requería estar formado en Leyes para ocupar un corregimiento de letras, aunque solo en una ocasión —Fernando Bea Ortega— se señale expresamente.

que iba propuesto; o García Pérez de Araciel, quien apuntó que pese a haber ocupado el corregimiento de Carmona «por beneficio no hubo de él la menor queja en el Consejo», así como tener «buena opinión y crédito»[20]; todos los juicios de valor expresados sobre Quintana resultaron ser coincidentes.

Designado por Felipe V corregidor de Carrión y Sahagún en el verano de 1715, permaneció en dicho destino hasta noviembre de 1718, siendo nuevamente consultado por la Cámara en 1721, esta vez para Segovia, momento en el que volvieron a repetirse parecidos comentarios laudatorios a los expresados hasta ese momento[21], que sin duda propiciaron la concesión por parte del monarca, donde sería prorrogado en 1724 y, nuevamente, en 1727[22], contando con el respaldo del consistorio e iglesia de Segovia, que solicitaron, asimismo, su continuidad al frente del cargo[23].

La concesión de sendas prórrogas en el distrito segoviano vino condicionada por el hecho de estar a la espera de promocionarle a un destino superior —«entretanto que se le confiere otro de ascenso»[24]—; sin embargo, la avanzada edad de Pedro Quintana debió desaconsejar finalmente dicha promoción, optando por que la recompensa a sus muchos y encomiables servicios a la monarquía se trasladara a un hijo de igual nombre, a quien se concedió en 1732 la plaza de fiscal de la Audiencia de Galicia; los méritos del hijo, que había sido colegial del Arzobispo y opositor a cátedras en la universidad de Salamanca[25], debieron ser acordes a los del padre, pues de él decía Francisco Núñez de Castro que estaba «reputado por de muy buena literatura y aplicación, con juicio y buenas costumbres», mientras Manuel

20. Archivo General de Simancas *Gracia y Justicia* [en adelante AGS GJ] leg. 133 *Corregimiento de Cáceres*, *Corregimiento de León* y *Corregimiento de Carrión*, 1715.

21. José de Castro no dudó en resaltar que había «servido 28 años en diversos empleos, regentándolos con aprobación y crédito de desinteresado y celoso», al tiempo que reconocía que su edad era «crecida, aunque muy a propósito para continuar en el servicio»; Pérez Galeote, por su parte, puso especial énfasis en los diferentes corregimientos que había ocupado durante casi tres décadas, como también en que últimamente había sido «visitador del partido de Calatrava por Órdenes», siendo muy de destacar la valoración que realizó de su trayectoria al señalar que «en todos estos empleos se ha portado con gran aplicación y celo al Real Servicio y bien común, y con pureza igual en el manejo de caudales públicos, en que ha dado muestras de integridad. Es de buenos talentos, gran juicio, porte correspondiente, y que su conducta no ha podido ser mejor», en AGS GJ leg. 136 *Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de Segovia*, 1721.

22. *Gaceta de Madrid* [en adelante *Gaceta*], 18/2/1721, 20/6/1724 y 14/10/1727.

23. AGS GJ leg. 139 *Memorial*.

24. AHN *Consejos*, leg. 13.627, exp. 1.

25. Quintana Acevedo ya había sido consultado en 1727 para fiscal de la Audiencia de Valencia, ocasión en la que Valcárcel Dato lo calificó como «sujeto aplicado y de bastante literatura, sano, robusto y de buenas costumbres, y su edad como de treinta años», en AGS GJ leg. 139 *Sujetos propuestos para la fiscalía que vaca en la Audiencia de Valencia por promoción del marqués del Risco*.

Martínez Carvajal aseguraba ser «sujeto de buena literatura y habilidad, esplendor y lucimiento, buen juicio y porte»[26].

Una década más tarde, un real decreto fechado en San Ildefonso el 14 de septiembre de 1742 nombraba a Pedro de Quintana Acevedo nuevo corregidor de Segovia, «por los buenos servicios de su padre y la avanzada edad en que se halla»[27], desde donde se trasladó a Cuenca en 1749, como su nuevo intendente y corregidor[28].

Natural de Santander, Gaspar de Cevallos había desarrollado una larga trayectoria en la carrera de varas antes de beneficiar un corregimiento, pues había servido en Alcaudete, Gibraltar, Huete —desde 1697 a 1700— y Segovia a finales del s. XVII. Designado para Tordesillas en 1706, ese destino no debió ser de su agrado, pues no aceptó desempeñarlo; en cambio ofreció, dos años más tarde —agosto de 1708—, 9 000 reales por el de Alcaraz y, de nuevo en 1711, una vez concluido el trienio. Tras finalizar su periodo de ejercicio en tierras manchegas Cevallos, que había casado con Teresa Torán y Sorell, hermana de José Torán —por aquel entonces alcalde del crimen de la Audiencia de Valencia, y futuro conde de Albalat—, fue designado en 1714 para el mismo puesto que desempeñaba su cuñado, empleo que ocupó hasta 1717, año de su fallecimiento (Giménez, 2006, p. 315; Molas, 1999, p. 98).

Entre quienes contaban con una cierta experiencia en la carrera antes de aventurarse a adquirir un trienio de ejercicio en un destino de su elección también figuraba Antonio González, quien había servido con antelación como corregidor de Becerril de Campos desde 1697 a 1701, y de Vivero a partir de 1702[29]; se trataba de dos corregimientos modestos, como también lo fue el que compró en 1709, Tordesillas, por 6 000 reales; así como aquél para el que fue consultado, sin éxito, en enero del año anterior[30].

De origen andaluz, Francisco Cayetano Santisteban —o Rodríguez Santisteban, que de ambas formas lo encontramos en la documentación—, nació a finales de la década de los setenta del Seiscientos en Alcaudete (Jaén), y ya se había iniciado en la carrera de varas cuando empezaron a producirse las primeras ventas de cargos, pues había ocupado el corregimiento de Santo Domingo de la Calzada, que sirvió a partir de 1703, y el de Andújar desde 1705[31], aunque puede que este último fuera beneficiado, como lo fue el de las Cuatro Villas de la Hoya de Málaga, que adquirió en febrero de 1710, ofreciendo 18 000 reales por él.

26. AGS GJ leg. 142 *Plaza de alcalde mayor de la Audiencia de Galicia.*
27. *Gaceta*, 2/10/1742, p. 320.
28. *Gaceta,* 22/11/1749.
29. AGS GJ lib. 1.560.
30. AHN, *Consejos*, leg. 18.006 *La Cámara propone a V.M. sujetos para el Corregimiento de la ciudad de Albarracín*, 11/1/1708.
31. AGS GJ lib. 1.561.

Alcalde mayor de Málaga desde 1712 a 1713 (Ybáñez, 2002, p. 245)[32] y corregidor de Molina de Aragón desde 1714 a 1716[33], fue propuesto por la Cámara en 1715 para el corregimiento de Vélez-Málaga en primera posición y designado por el monarca, permaneciendo allí hasta 1718 (Pezzi, 2003, p. 444).

Concluido su periodo de ejercicio en Vélez-Málaga fue propuesto en primer lugar para teniente de corregidor de Madrid en 1719, ocasión en la que Francisco León y Luna destacó haber sido corregidor de Vélez-Málaga y alcalde mayor de Málaga, al tiempo que especulaba con que habría tenido otros empleos, «pues hace mucho tiempo que empezó a servir», mientras aseguraba que en los dos referidos, según le habían dicho, se había «acreditado de activo, celoso y desinteresado y amante de la justicia», y que «en Vélez le estimaba mucho el ayuntamiento por sus justificados procederes, sobre los que recae ser bien nacido y virtuoso»; también Mateo Pérez Galeote informó que había «servido la vara de Vélez-Málaga con grandes créditos y aprobación del Consejo», así como «ejecutado las provisiones que le han encargado», para acabar destacando que era «buen letrado, de buenos talentos e integridad» y que había «cuidado con vigilancia sobre los haberes de V.M. en su empleo»[34]; pese a reunir tan notables cualidades, no fue el seleccionado para dicho destino, sino para el corregimiento de Alcaraz, para el que también fue consultado ese año[35], permaneciendo en dicha villa manchega hasta 1722.

La ya amplia experiencia de Santisteban en la carrera de varas, así como las aptitudes mostradas al frente de los cargos que venía desempeñando por espacio de dos décadas, debieron animar a los camaristas a consultarlo para plaza de oidor de una Audiencia, aunque ésta fuese modesta y su nombre figurara en tercera posición, la de Canarias en 1724, que no consiguió; con dicho motivo fueron preguntados José Castro y Baltasar Acevedo, destacando el primero que «su literatura pudiera ser más aventajada», mientras el segundo ponía de relieve su «buena conducta» al frente de los empleos ocupados, si bien añadía no tener «experiencia de su profesión literaria»[36]; así las cosas se le confió un nuevo corregimiento, esta vez en tierras andaluzas, el de

32. En una terna para teniente de alcalde de Casa y Corte en 1714, en la que Santisteban iba consultado en tercer lugar, Francisco Portell indicó que había «desempeñado bien» dicho empleo, en AGS GJ leg. 133.

33. En el informe elaborado por Juan Milán de Aragón en febrero de 1715 se retrotraía a su época universitaria para señalar que Santisteban estudió en Salamanca, «y aunque por entonces manifestó travesura de genio, después ha servido con aprobación diferentes corregimientos, y entre otros el de Santo Domingo de la Calzada, y actualmente ejerce el de Molina de Aragón con bastante crédito», en AGS GJ leg. 133 *Corregimiento de Vélez-Málaga*, 1715.

34. AGS GJ leg. 135 *Sujetos propuestos por la Cámara para la plaza de teniente de Corregidor de Madrid,* 1719.

35. AGS GJ leg. 135 *Sujetos propuestos para el corregimiento de letras de Alcaraz*, 1719; y lib. 1.563.

36. AGS GJ leg. 137 *Oidor de Canarias*, 1724.

Bujalance, que ocupó entre 1725 y 1729[37], cuando de nuevo fue consultado por la Cámara, esta vez para asumir el puesto de corregidor de Ágreda (Soria).

Ágreda resultaba un destino demasiado modesto para alguien curtido en la profesión y cuya labor y conducta desarrollada en la misma era juzgada no solo como correcta, sino muy positivamente por aquellos a quienes se preguntó; en este sentido cabe aportar los adjetivos utilizados por los consejeros Rodrigo de Cepeda, quien lo calificó como «muy bueno», y Juan Valcárcel, quien destacó haber «servido con aprobación algunos corregimientos; es sujeto inteligente, desinteresado y de lo mejor que anda en la carrera de varas, y su edad hasta 50 años»[38]. No fue el nombrado por el monarca en dicha ocasión, que prefirió asignarle el corregimiento de Utiel, pese a no figurar en la terna[39]. Este destino, que compartía la misma consideración ya expresada respecto a Ágreda, no hacía justicia a los méritos de Santisteban, quien no dudó en excusarse y no tomar posesión, según refirió «por su avanzada edad, achaques, familia dilatada y larga distancia desde donde se halla»[40].

Tanto los camaristas, como el propio Felipe V, debieron reconocer que los argumentos expresados eran ciertos, pues al año siguiente encabezó la terna que tenía por objeto dotar el corregimiento de Ciudad Real; de nuevo fue enjuiciada positivamente su persona y labor en dicha ocasión, esta vez por Fernández Molinillo, quien aseguró que era «buen letrado y de mucho expediente, y ha servido con acierto muchas varas», opinión que compartía Valcárcel Dato, por lo que pasó a Ciudad Real en 1731 como su corregidor para desempeñar el que creemos fue su último destino[41].

Como los anteriores, también Alonso Carrillo Salcedo, natural de Soria y regidor perpetuo de Soria y Trujillo, llevaba algún tiempo en la carrera corregimental cuando se decidió a beneficiar uno de dichos empleos. En este sentido nos consta que desde 1705 a 1708 actuó como corregidor de Carrión y Sahagún[42], así como que en diciembre de 1707 fue consultado para Tarazona (Zaragoza), destino que, pese a serle confiado por el monarca[43], renunció, posiblemente por las dificultades que podía experimentar en un territorio recientemente recuperado por las armas de Felipe V del control austracista.

Corregidor de Palencia desde 1710, tras ingresar en las arcas regias 60 000 reales por obtener la titularidad del cargo, una vez cumplido el trienio volvió a

37. AGS GJ lib. 1.565.
38. AGS GJ leg. 140 *Corregimiento de letras de la villa de Ágreda*, 1729.
39. AGS GJ lib. 1.566; y *Gaceta*, 6/9/1729.
40. AGS GJ leg. 141 *Corregimiento de letras de Utiel.*
41. AGS GJ leg. 141 *Corregimiento de letras de Ciudad Real*; Íbid. lib. 1.566; y Gaceta, 20/3/1731.
42. AGS GJ lib. 1.561.
43. AHN *Consejos* leg. 18.020.

ser consultado por la Cámara en 1714 para dos destinos bastante alejados entre sí, el de Carmona y el de Calatayud, obteniendo la designación para el segundo. En dichas consultas se recogieron las opiniones, coincidentes, de varios consejeros, como Francisco Portell, quien expresó que «en sus empleos y encargos ha manifestado sus buenas prendas y cumplido con su obligación»; Juan Milán, quien le recomendó expresamente, o Melchor de Macanaz, que aseguró haber servido en varios corregimientos, así como ser el más experimentado y, consiguientemente, a él debía conferirse el cargo, como así lo hizo el monarca[44], tomando posesión del mismo en enero de 1715[45].

Nacido hacia 1674 en Arévalo, y regidor perpetuo de su ayuntamiento durante 13 años, Francisco José Montalvo Huerta se inició en la carrera de varas cuando se le confió el corregimiento de Medina del Campo, empleo que ocupó desde enero de 1707 hasta febrero de 1710. Concluido el trienio, se desprendió de 60 000 reales para acceder al de Valladolid, permaneciendo al frente del cargo desde julio de 1711 a diciembre de 1714, momento en el cual solicitó ser prorrogado; sin embargo, desde el Consejo se recomendó un intercambio entre los destinos que desempeñaban en ese momento Gerónimo de Blancas —en Zaragoza— y Montalvo —en Valladolid—[46].

Corregidor de Zaragoza desde principios de 1715 hasta septiembre de 1718[47], en 1721 fue consultado por la Cámara encabezando las ternas elaboradas para los corregimientos de Jerez de la Frontera y Écija. Como era habitual, con dicho motivo se dieron a conocer las opiniones expresadas por algunos consejeros sobre los propuestos; informaba en ese sentido José Castro que «sirvió el corregimiento de Valladolid con aprobación, buena conducta y desinterés»; que de allí pasó a Zaragoza, y que no sabía que en ese segundo empleo «desdijese del celo, desinterés y acierto con que desempeñó el primero». También Mateo Pérez Galeote se expresaba en términos similares al asegurar que había ejercido los corregimientos de Medina del Campo, Valladolid y Zaragoza y que era «capaz, juicioso y celoso del real servicio; ha servido con pureza estos empleos»[48].

44. AHN *Consejos* leg. 18.012 *Propuesta de la Cámara para el Corregimiento de Calatayud,* 31/8/1714; y AGS GJ leg. 133 *Corregimiento de Carmona* y *Corregimiento de Calatayud*.

45. AHN *Consejos* leg. 18.012 *Toma de posesión de D. Alonso Carrillo Salcedo*, 21/1/1715.

46. Por lo que respecta al ejercicio del cargo en Valladolid merece ser destacada la información que se aportó desde el Consejo al señalar que «a los cuatro meses de entrado en él, con el establecimiento de los superintendentes, se le quitaron la administración de rentas reales y conservadurías que ejercía, de que se le siguió el mayor atraso de medios». Por dicha razón, «y hallarse con dilatada familia, y por el desempeño con que asimismo ha procurado servir dicho corregimiento de Valladolid, en que ha cumplido», se recomendaba mantenerle el cargo, pero en distinto destino, en AHN *Consejos* leg. 13.638, *El Consejo en gobierno,* 3/9/1714.

47. AGS GJ Lib. 1.562.

48. AGS GJ leg. 136 *Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de Jerez de la Frontera*, 1721.

En la segunda consulta que recogía el nombre de Montalvo, la que tenía como objeto dotar el corregimiento de Écija, Baltasar Acevedo señaló que había «servido con mucho acierto y desinterés, y con aceptación en todas sus operaciones»; que su calidad era «muy conocida, estuvo consultado el primero en Jerez, y es muy digno del lugar que ocupa en esta consulta»; por último, Sebastián García Romero adelantaba que era «sujeto aprobado en todos sus procedimientos»; que era «notoria su pureza y limpieza, y la acreditan los pocos medios con que se manifiesta; por su talento y buena conducta le considera legítimo acreedor a este corregimiento»[49]; méritos que debió reconocer el rey, pues fue el designado.

Corregidor de Écija desde 1722 a 1726[50], cumplido el periodo de ejercicio se mostró aspirante al corregimiento de Segovia, Cuenca o cualquier otro que se hallase vacante en 1727[51], sin resultado positivo alguno. Eso sí, en 1730 fue nuevamente consultado para dos destinos en Andalucía, el de Jaén y Écija, ocasión en que los informantes volverían a poner énfasis en sus cualidades, como Rodrigo Cepeda, quien no dudó en señalar que era «de los mejores y más antiguos que andan en la carrera, y muy digno de que se le emplee»; o Valcárcel Dato, quien avanzó que había «servido los corregimientos de Medina del Campo, Valladolid, Zaragoza y Écija, y otros encargos, y de todo ha dado buena cuenta»; como también que era «sujeto capaz y de pocos medios, y su edad hasta 56 años»[52]. Fernández Molinillo, por su parte, valoró muy positivamente la labor desempeñada en los diferentes corregimientos en que había actuado, destacando que lo había hecho con «crédito, estimación y abono de su desinterés y prudencia». Ante tal cúmulo de cualidades el monarca no dudó en designarle nuevamente a Écija, destino en el que falleció algún tiempo después[53].

Incorporado al ejército en 1687, José Antonio de Valdenebro y Tapia fue comandante de la plaza de Moya, en la frontera con Aragón y Valencia, durante la Guerra de Sucesión. Recuperadas las tierras valencianas después de la batalla de Almansa, el 23 de enero de 1709 se le expidió el título de corregidor de Castellón, empleo del que tomó posesión un mes más tarde, y que desempeñó hasta 1711 (Giménez, 1990, p. 73), justo el año que benefició el corregimiento de Requena por 9 000 reales.

49. AGS GJ leg. 136 *Sujetos propuestos para el corregimiento de Écija*, 1722.
50. Gaceta, 21/7/1722 y AGS GJ lib. 1 564.
51. AGS GJ leg. 139 *Memorial.*
52. AGS GJ leg. 141 *Corregimiento de Jaén*, 1730. Cuando unos meses más tarde, al ser consultado para Écija, fue preguntado nuevamente Valcárcel por Montalvo, mejoró parcialmente su juicio apuntando que «ha servido con créditos de inteligente, capaz y justo», en AGS GJ leg. 141 *Corregimiento de Écija*.
53. AGS GJ lib. 1.566; y *Gaceta*,12/12/1730.

Casado con una valenciana, en 1713 se mostró aspirante a una regiduría en el ayuntamiento de la ciudad de Valencia[54], que le confió Felipe V y de la que se le expidió el correspondiente título en marzo de 1714 (García, 1991, p. 116; Irles, 1996, p. 347), tomando posesión dos meses más tarde, cuando ostentaba el grado de teniente coronel. Algunos años después, en 1721, quizás nostálgico del cargo que había desempeñado un tiempo atrás, pretendió volver a Castellón como corregidor[55], si bien no lo consiguió.

Militar como algunos otros de los compradores de corregimientos fue Juan Bautista Berecéibar Segovia, capitán de infantería en Flandes y caballero de Santiago. Corregidor de Tarifa desde 1704 a 1708[56], en marzo de 1710 abonó 48 000 reales por el cargo de corregidor de Segovia que Felipe V le había concedido por decreto de 16 de febrero anterior, y que desempeñó hasta 1713.

Cuando, finalizado su periodo de ejercicio en Segovia, fue consultado por la Cámara en 1714 para el corregimiento de Toledo, Francisco Portell le avaló señalando que había obrado «muy bien» en los destinos que había desempeñado, que era «sujeto de excelentes procedimientos y operaciones», que había servido «con buen crédito y aprobación» y que le consideraba a propósito para ese corregimiento. No fue tan satisfactoria para los intereses de Berecéibar la opinión expresada por el segundo informante, Melchor de Macanaz, quien pese a coincidir en que era «muy bueno», añadió que Toledo era un destino que requería mucha más experiencia de la que aquél había podido reunir en sus escasos años de servicio en la carrera de varas, por lo que recomendaba seguir el curso habitual para poder llegar finalmente a los más cotizados corregimientos[57].

Los comentarios de Macanaz fueron tenidos en cuenta y poco después el nombre de Berecéibar volvió a figurar en otra consulta, esta vez para proveer el corregimiento de Teruel, que se le confió después que Juan Milán de Aragón lo calificara como «sujeto de excelentes prendas», que Portell reiterara la opinión expresada unos meses atrás y que Macanaz la refrendara al señalar que «dejó el servicio militar y benefició el corregimiento de Segovia, que le sirvió muy bien y es muy capaz para el servicio»[58].

54. AHN *Consejos* leg. 18.351 *Memorial.*

55. AGS *Guerra Moderna* leg. 1855 *Pretendientes al Gobierno de Castellón de la Plana*, 1721.

56. AHN *Consejos* leg. 13.632, exp. 1.

57. Macanaz aseguraba en su informe que «sus servicios en la carrera son muy cortos, y a proporción sus experiencias para un corregimiento como el de Toledo, y así podrá esperar otros menores», en AGS GJ leg. 133 *Corregimiento de Toledo*, 1714.

58. AGS GJ leg. 133 *Corregidor de Teruel*, 1714; y AHN *Consejos* leg. 18.021 *Corregimiento de Teruel*, 1714.

Corregidor de Teruel desde 1714 hasta 1721, finalizado su periodo de ejercicio en tierras aragonesas fue consultado en 1722 para Murcia y al año siguiente para Antequera, momento en que volvieron a materializarse las opiniones que diferentes consejeros tenían sobre él, como en el caso de Pérez Galeote, quien lo calificó como «sujeto de calidad y buen juicio», al tiempo que aseguraba haber «servido sus empleos con aprobación y pureza»; José de Castro, por su parte, manifestó no tener dudas sobre «su buena conducta y experiencias en esta clase de empleos»; por último, Baltasar de Acevedo terció señalando que había «dado buenas residencias, con aprobación y concepto», así como que tenía «edad competente para cualquier empleo»[59]. Pese a las favorables opiniones expresadas no se le confió ninguno de los dos destinos comentados, debiendo esperar hasta 1726 para ocupar el corregimiento de Jaén[60].

Concluido su periodo de ejercicio en tierras giennenses encabezó la terna que tenía por objeto dotar la plaza de corregidor de Cuenca en 1731, que no se le confió pese a que José Castro reconoció que había servido los corregimientos de Tarifa, Segovia, Teruel y Jaén «con el concepto de buena conducta y experiencia, y no ha oído en el Consejo, ni fuera de él, cosa alguna que se oponga a esta inteligencia»; y Fernández Molinillo aseguró exceder «en servicios, práctica y buena conducta» al resto de los consultados[61].

Propuesto de nuevo en primera posición para el corregimiento de Palencia, en 1733, esta vez sí fue el elegido, dado que, como en ocasiones anteriores, los informantes destacaron sus muchas cualidades; en este sentido Antonio Valcárcel refería tener hasta sesenta años de edad, ser «sujeto muy hábil y de buenas prendas, y así tiene los primeros créditos en la carrera, así de juicio como de rectitud, no habiendo descaecido en nada su mérito»; en tanto que Juan José Mutiloa aseguraba que «ha servido con crédito de buen corregidor los empleos en que se ha ocupado; tiene más de cincuenta años de edad y su capacidad es regular»[62]. Palencia sería su último destino, pues falleció allí en 1736[63].

3.2. *En el ayuntamiento*

Entre quienes beneficiaron corregimientos cabe destacar, asimismo, a individuos que llevaban ya un tiempo formando parte de los ayuntamientos de sus respectivas

59. AGS GJ leg. 136 *Corregidor de Murcia*, 1722; Ibid. leg. 137 *Corregidor de Antequera*, 1723.
60. AGS GJ lib. 1.565.
61. AGS GJ leg. 141 *Corregimiento de Cuenca*.
62. AGS GJ leg. 143 *Corregimiento de la ciudad de Palencia.*
63. AHN *Consejos* leg. 13.622, exp. 1.

poblaciones de origen, ya fuera como regidores o bien ostentando el más honorífico cargo de alcalde mayor perpetuo; entre estos últimos cabe citar a Diego Tous de Monsalve en Sevilla, IV conde de Benagiar, a quien nos hemos referido anteriormente, así como al II Marqués de Villacampo —Antonio Fernández de Castro—, en Burgos, quien aportó 60 000 reales a las arcas regias por acceder al corregimiento de León en 1711.

Nieto de Antonio Fernández de Castro y de la Moneda, primer poseedor del título, a quien se le confió en 1666, su abuelo fue un militar que sirvió a Carlos II por espacio de cuatro décadas, de las cuales la mitad como capitán de corazas; que alcanzó la condición de caballero de la orden de Santiago, y que disfrutó también el honorífico título de alcalde mayor de Burgos (Cadenas y Cadenas, 1993, p. 1 005). Como sucesor suyo, y vinculado también al ejército, merece ser destacada la labor desarrollada por el II marqués de Villacampo, quien pasó a Cádiz en 1715 para establecer las aduanas y unión de rentas generales de la ciudad del Puerto de Santa María, Jerez y Sanlúcar de Barrameda.

Corregidor del Puerto de Santa María desde 1731, finalizado el trienio en 1734 solicitó ser prorrogado, aspiración en la que fue secundado por el ayuntamiento, que no dudó en destacar su dedicación en el ejercicio del cargo al indicar que

> se ha desvelado en cumplir exactamente su obligación promoviendo todo lo correspondiente a desempeñarla, aumentando sus propios, manteniendo convenientes abastos, haciendo diferentes obras públicas[64].

Pese al buen hacer de Fernández de Castro, no logró su objetivo, debiendo esperar un tiempo hasta que el monarca le confió otro corregimiento, esta vez en Antequera en 1739[65]; sería el preámbulo a la obtención del nombramiento como consejero honorífico del Consejo Hacienda que logró en 1743[66], antes que le sobreviniera la muerte el 9 de febrero de 1748.

El II marqués de Villacampo mantenía estrechas relaciones familiares con varios capitulares del concejo burgalés, entre otros con Nicolás Fernández de Castro, su sobrino, quien también benefició un corregimiento, en su caso el de Guadalajara por 30 000 reales. Fue Nicolás quien tomó posesión del cargo de alcalde mayor perpetuo en nombre de su tío en 1701 —precisamente el año en que también él se incorporó al consistorio burgalés como regidor—, ya que aquél residía en Cádiz

64. AGS GJ leg. 144 *El ayuntamiento del Puerto de Santa María a José Patiño*, Puerto de Santa María, 1/2/1734.
65. AGS GJ lib. 1.567; y *Gaceta*, 26/5/1739.
66. *Gaceta,* 24/9/1743; y AHN *Consejos* lib. 736.

por esas fechas[67]. Natural de Burgos, Nicolás era hijo de Fernando Ruiz de Castro y nieto de Nicolás Fernández de Castro[68], ambos caballeros de la orden de Santiago, y bisnieto de Fernando Ruiz de Castro, alcalde mayor perpetuo de Burgos y procurador en Cortes desde 1580 hasta 1588, así como corregidor de Segovia. Quizás fuera ese deseo de emular a sus mayores el que le impulsara a adquirir por servicio pecuniario el referido corregimiento, en el que se mantuvo desde 1707 a 1713 dado que no solo benefició un trienio[69], sino también una prórroga.

El mismo año que asumió el cargo de corregidor de Guadalajara nos consta que la Cámara de Castilla lo consultó para idéntico empleo en Daroca, si bien no fue designado por Felipe V[70]. Tras finalizar el periodo de ejercicio en aquella, nuevamente volvió a figurar su nombre en una terna en 1714, también para dotar de titular un corregimiento en tierras aragonesas —el de Tarazona—, encabezándola esta vez y siendo el elegido. Los favorables informes de que fue objeto en dicha ocasión pudieron incidir en el resultado final; en este sentido cabe señalar que Juan Milán, lo calificaba como «caballero prudente y de conocida calidad»; también aseguró que procedía «con acierto y crédito» y era a propósito para el cargo. Como Milán, Francisco Portell puso especial énfasis en su condición de «caballero de calidad», en tanto que Macanaz destacó haber servido con acierto el corregimiento de Guadalajara[71].

Destinado en 1715 a Tarazona, Fernández de Castro solicitó un alargamiento en el periodo de tiempo estipulado para la toma de posesión para preparar convenientemente el traslado[72]. Pese a la raigambre de su apellido, parece que su situación económica no era todo lo boyante que cabía esperar, pues finalizado su mandato en 1718, el deán y cabildo de Tarazona solicitaron para él otro empleo a la vista de la precariedad con que se desenvolvía, pues, según reconocieron, se hallaba «tan

67. Agradezco al Dr. Sanz de la Higuera su generosidad al facilitarme la lectura del capítulo correspondiente a los regidores, del libro que se halla redactando sobre Burgos en el siglo XVIII.

68. Su abuelo actuó como consultor del reino de Sicilia, mientras un hermano de éste —Gaspar Fernández de Castro—, también caballero de Santiago, fue oidor de la Audiencia de México.

69. AGS GJ lib. 1.561.

70. AHN *Consejos* leg. 18.015 *Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de Daroca*, 1707.

71. AGS GJ leg. 133 *Corregimiento de Tarazona*, 1714.

72. Señalaba en ese sentido el corregidor que «necesitando precisamente pasar a la ciudad de Burgos, donde tiene su mujer e hijos, y destinado para llegar a la referida ciudad de Tarazona 100 leguas, con poca diferencia, donde son precisos a lo menos 30 días por la detención que ocasiona, así la busca de carruaje y otras en dicha marcha dilatada», en AHN *Consejos* leg. 18.020 *Súplica de D. Nicolás Antonio Fernández de Castro*, 1715.

falto de medios que no puede retirarse a su casa ni pasar a la Corte a hacer esta representación a V.M.»[73].

La petición formulada por las autoridades religiosas parece que tuvo un resultado positivo para las aspiraciones de Fernández de Castro, si bien, como sabemos, el proceso de provisión solía ser algo lento y el nuevo nombramiento no llegó hasta 1722, cuando fue consultado y provisto en otro corregimiento aragonés, el de Daroca, después que Pérez Galeote reconociese haber ejercido en Guadalajara «con aprobación común por su gran desinterés y pureza en todas sus operaciones» y José Castro asegurase que era «un caballero de juicio y buena conducta»[74].

Su estancia en Daroca se alargó hasta 1729, pues fue prorrogado en diciembre de 1725, iniciándose a partir de ese momento un periodo de consultas al monarca por parte de la Cámara que no culminaría hasta 1733 cuando fue nuevamente provisto en Daroca[75], que resultaría ser su último destino, pues falleció en 1738.

Natural de Sevilla, y veinticuatro en su ayuntamiento desde 1697 a 1724 (Márquez, 2010, p 1 002), Juan Chacón Tribiño y Guillamas, era hermano del capitán de infantería Félix Chacón, quien perdió la vida en el ejercicio de las armas durante la Guerra de Sucesión. Interesado por el corregimiento de Chinchilla, en 1709 lo benefició previo ofrecimiento de 15 000 reales[76]. Aunque no nos consta que se le hubiera confiado ningún cargo similar con anterioridad, sabemos que fue consultado en tercera posición para el corregimiento de Daroca, en Aragón, en octubre de 1707[77]. Posteriormente asumió el de San Clemente en 1715, tras encabezar la

73. AHN *Consejos* leg. 18.020 *Memorial del deán y canónigos de la Iglesia catedral de Tarazona*. Tarazona, 20/10/1718.

74. AHN *Consejos* leg. 18.015 *Sujetos propuestos para el corregimiento de Daroca,* 1722; AGS GJ leg. 136 *Corregimiento de Daroca*, 1722; y *Gaceta,* 21/7/1722.

75. Aunque Fernández de Castro envió en 1730 un memorial al monarca en solicitud de los corregimientos de Écija o Alcalá la Real, la Cámara lo propuso para Teruel (1728), Ávila (1731) y Palencia (1733), plazas que por aquel entonces se hallaban pendientes de provisión. Transcurridos tres años sin acomodar, en 1733 el regidor burgalés solicitó volver a Daroca, siendo provisto por el monarca fuera de la terna. En el tiempo que permaneció a la espera de destino fueron conociéndose más opiniones de consejeros sobre el pretendiente; ratificándose en anteriores pareceres, José Castro aseguró que «sirvió muy bien los corregimientos de Tarazona y Guadalajara; es sujeto de muy buen juicio y conducta, y así lo ha continuado en el de Daroca»; Fernández Molinillo enfatizó que había dado «buena residencia»; Antonio Valcárcel destacó «su mérito, sin nota alguna que le perjudique»; mientras Juan José Mutiloa, abundando en la ausencia de defectos, lo calificaba como «hombre regular y que ha servido sin nota alguna», en AGS GJ leg. 141 *Corregimiento de la ciudad de Ávila*; y AGS GJ leg. 143 *Corregimiento de la ciudad de Palencia*.

76. El título se le expidió en Madrid, el 1 de febrero de 1709 y se le dio posesión en 22 del mes siguiente, en Archivo Histórico Provincial de Albacete, *Municipio*, lib. 86, año 1709, ff. 1-3.

77. AHN *Consejos* leg. 18.015 *Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de Daroca,* 19/10/1707.

correspondiente terna, así como contar con el favorable informe de Juan Milán, quien dijo de él que «cumplió muy bien en Chinchilla, hasta el punto de que los vecinos le solicitaron segunda vez por su corregidor», así como que era sujeto «de excelentes prendas»[78].

Después de 1718, momento en que concluyó su trienio, Chacón fue consultado por la Cámara en varias ocasiones y para destinos diferentes, como el de Guadix-Baza en 1719, Trujillo al año siguiente y, finalmente, para Logroño, sin obtener el beneplácito del monarca en ningún momento, y ello pese a la buena opinión que sobre su persona y conducta tenían todos los consejeros que se pronunciaron sobre él; en este sentido lo hicieron Francisco León y Luna, quien lo calificó como «de buena intención y genio», al tiempo que aseguraba haber «mantenido paz en los pueblos» y ser «caballero ilustre»; Mateo Pérez Galeote, por su parte, apuntó en 1718 que era «de buenas prendas, juicioso en sus determinaciones y de buenas costumbres», para añadir dos años más tarde que estaba «sirviendo de diputado de Granada en la Corte para seguimiento de algunos pleitos», así como que era «provecto en edad», pudiendo quizás ser esta última razón la responsable de que Felipe V no le volviera a confiar ningún otro destino[79]. Continuando con los pareceres expresados sobre Chacón, José Castro apostillaba que «fue capitulado en San Clemente, pero se comprobó que los capítulos eran injustos»[80], en tanto que Sebastián García Romero opinaba que «tiene algún conocimiento y es de muy buen juicio, buenas costumbres y buen cristiano, pero no puede decir de sus talentos»[81].

Francisco Bastardo de Cisneros constituye otro ejemplo de capitular interesado en adquirir un corregimiento. Nacido en Vélez-Málaga en el seno de una familia vinculada al ejército, pero también a la administración municipal, era hijo de Baltasar Bastardo de Cisneros, capitán de infantería y regidor perpetuo de Málaga; nieto de Gonzalo de Mondragón, capitán de caballería y sargento mayor de la ciudad de Vélez; y bisnieto de Gaspar de Mondragón, capitán y sargento mayor, alcaide y justicia mayor de la ciudad y fuertes de Melilla, y castellano del castillo de Pamplona; pero también padre del corregidor Baltasar Bastardo (Irles, 2023, p. 362).

78. AGS GJ leg. 133 *Corregidor de San Clemente*, 1715.

79. Tampoco su hijo Fernando logró hacer carrera en la administración territorial pese a ser consultado por la Cámara en 1734 para el corregimiento de Huesca y contar con un muy buen informe elaborado por Sancho Barnuevo en el que aseguraba ser «de una vida muy arreglada, de mucha prudencia y juicio; tiene especial dirección para el manejo de los negocios, es amable en su trato y justificado en sus acciones, por lo que siendo su padre corregidor de San Clemente lo pidió la villa por teniente en sus ausencias y enfermedades, y gobernó a satisfacción de todos, y ha muchos años que es pretendiente, con poca fortuna, y considera que si entrase en la carrera sería muy útil al real servicio», en AGS GJ leg. 143 *Corregimiento de la ciudad de Huesca*, 1734.

80. AGS GJ leg. 135 *Sujetos propuestos para el corregimiento de Trujillo*, 1720.

81. AGS GJ leg. 138.

Regidor Perpetuo de Málaga como su padre, Francisco se incorporó como capitular del ayuntamiento malacitano en julio de 1691. Una década más tarde, iniciado ya el conflicto entre austracistas y borbónicos en la península, adquirió el grado de capitán de caballos por patente de 1 de agosto de 1706[82]. Poco tiempo después se abrieron nuevas expectativas para él, tras beneficiar el corregimiento de Alcalá la Real, Loja y Alhama a finales de 1708 por 30 000 reales, cargo que ocupó desde enero de 1709 hasta abril de 1712.

Francisco Bastardo fue uno de los pocos que benefició dos corregimientos distintos, probablemente porque no pudo conseguir una prórroga en el de Alcalá la Real al adelantársele Isidro Carbajo Bernaldo de Quirós y abonar 36 000 reales —6 000 más de los que él había satisfecho tres años atrás— por dicho cargo. Ante la imposibilidad de renovar en tierra alcalaínas, el regidor malacitano optó por San Clemente, aunque esta decisión obligara a su vez a cambiar de destino a Bernardo Gómez Zorrilla, quien se desplazó en 1711 desde San Clemente, donde servía, a Cuenca[83].

Finalizado su periodo de ejercicio en tierras manchegas en 1715, Bastardo de Cisneros fue consultado por la Cámara, ese mismo año, para el corregimiento de Valencia, ocasión en la que localizamos las primeras valoraciones sobre su conducta, que fueron practicadas por Pérez Araciel, quien lo calificó de «prudente», y Milán de Aragón, quien tras destacar que fue capitán de caballos en la milicia de Málaga, apuntó que había ejercido «con toda probación y acierto»[84].

Aspirante al corregimiento de Trujillo, que no logró, y propuesto para el de Guadix-Baza en 1717, en el que tampoco fue provisto, fue en ese momento cuando se produjo la única valoración negativa que sobre su conducta hemos localizado, en ella el informante se expresaba en los siguientes términos:

> según me han dicho contra su proceder, haberse beneficiado lo estoy positivamente informado de persona religiosa, grave y de excepción, que le tiene y ha tenido por

82. Según refería el propio Bastardo, «se le despachó patente de capitán de caballos de una compañía de las cuatro que se levantaron de vecinos de aquella ciudad y la equipó a su costa», en AGS GJ leg. 135. *Relación de méritos*, 25/8/1715.

83. Francisco Bastardo adquirió el corregimiento de Alcalá la Real en diciembre de 1708; en enero de 1709 hizo lo propio Bernardo Gómez con el de San Clemente; sin embargo, a la hora de solicitar la prórroga Bastardo se encontró con que no podía renovar en Alcalá porque Carbajo lo había beneficiado ya en marzo de 1711, de ahí que en julio de ese año abonase 30 000 reales por el de San Clemente, idéntica cantidad a la desembolsada por Gómez en 1709. Tampoco éste pudo proseguir en el destino que ocupaba por habérsele adelantado Bastardo, pero sí beneficiar el de Cuenca en noviembre de 1711, logrando, con carácter de futura, la última plaza corregimental que se enajenó en el periodo (Andújar, 2008, pp. 225, 228-229).

84. AGS GJ leg. 133 *Corregimiento de Valencia,* 1715.

> de mala cabeza y que en San Clemente estuvo con poca estimación y todos poco satisfechos de su gobierno, cuyo concepto he confirmado yo en el trato[85].

Muy distinta era la opinión que sobre Bastardo mantenía Pérez Galeote, quien lo calificó como «de buenos talentos, juicio, prudencia y desinterés, de gentil habilidad»[86], parecer en el que se ratificó en 1721, cuando fue consultado para el corregimiento de Huesca, al señalar que había servido «con aprobación y desinterés». Rodrigo Cepeda, que coincidió en su valoración, lo consideraba

> digno acreedor a que V.M. le honre con este y mayores empleos pues, sobre su notoria calidad y servicios políticos y militares, sirvió con común aprobación el corregimiento de Alcalá la Real y San Clemente[87].

Designado corregidor de Huesca, tomó posesión del cargo en agosto de 1721 y allí siguió hasta 1724, momento en el que su nombre volvió a figurar en una terna, esta vez para cubrir el corregimiento de Córdoba[88], que se le confió y donde se mantuvo hasta 1747, de manera ininterrumpida, tras ser objeto de reiteradas prórrogas, «en atención a algunos particulares servicios que ha hecho en esa ciudad»[89]. Aunque en 1731 se mostró aspirante a la intendencia de Sevilla el monarca lo desestimó, prefiriendo conservarlo al frente del corregimiento cordobés hasta el final de sus días[90].

Natural de Cartagena, y capitular en su ayuntamiento, Juan Bautista Tacón benefició en mayo de 1710 el corregimiento de Lorca tras abonar 12 000 reales en las arcas regias. En agosto de 1714, finalizado ya el periodo de ejercicio, fue consultado por la Cámara para el corregimiento de Tarazona, sin que lo lograse, quizás porque en aquel momento se expresaron opiniones contradictorias sobre él por parte de los consejeros que fueron preguntados; en este sentido, Juan Milán adelantó que había «servido en varios puestos con grande amor y celo, aprobación y crédito», así como tenerlo por «muy digno y a propósito para este puesto»; similar opinión expresó Melchor de Macanaz, quien aseguró que había «servido con aprobación cargos»;

85. AGS GJ leg. 134 *Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de Guadix-Baza,* 1717.
86. AGS GJ leg. 135 *Corregimiento de Trujillo.*
87. AGS GJ leg. 136 *Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de Huesca,* 1721.
88. También en esta ocasión se solicitó el parecer de Pérez Galeote, quien no dudó en reiterar las muchas cualidades que reunía Bastardo, a quien calificó como «sujeto de gran capacidad, igual expedición en todo género de negocios, desinteresado y de grandes talentos. Ha servido con común aprobación en los pueblos donde ha estado», en AGS GJ leg. 137 *Corregidor de Córdoba*, 1724.
89. *Gaceta,* 22/2/1724, 18/3/1727, 11/7/1730, 14/12/1732, 27/8/1737; y AGS GJ leg. 148 *Corregimiento de Córdoba*, 1743.
90. AGS GJ leg. 142 *Memorial de Francisco Bastardo.*

Francisco Portell, más desconfiado, o quizás menos conocedor de su trayectoria profesional, apostilló: «sospecho que no debe ser muy adecuado»[91].

Por su parte, el capitán Fernando Viana Pliego, nacido en Málaga y regidor en su ayuntamiento, adquirió en julio de 1711 el cargo de corregidor de Granada a cambio de 54 000 reales, si bien no pudo llegar a disfrutar de la inversión realizada, pues falleció antes de tomar posesión (Andújar, 2008, p. 229).

3.3. *Militares*

Natural de Sevilla, donde había nacido hacia 1672, y militar de profesión[92], Sebastián Antonio Laiseca era hijo del conde de la Laguna, gobernador y capitán general en América, y se introdujo en la carrera corregimental a raíz de la adquisición del cargo de corregidor de Ávila en marzo de 1709, destino en el que se mantuvo hasta diciembre de 1715 gracias a la prórroga conseguida en junio de 1711; cabe destacar, no obstante, que en su caso, y frente a lo que resultó más habitual, se produjo una oscilación a la baja entre la cantidad abonada en un primer momento —80 000 reales— y la satisfecha al solicitar la prórroga —60 000—.

Finalizado su periodo de ejercicio en Ávila, Laiseca asumió el corregimiento de Burgos en abril de 1717 y allí permaneció hasta septiembre del año siguiente[93], momento en que se aproximó temporalmente a las tierras que le habían visto nacer, tras tomar posesión del corregimiento de Úbeda-Baeza en octubre de 1718[94], manteniéndose allí hasta febrero de 1723. Tras su paso por este último destino Laiseca encabezó la terna que la Cámara pasó a Felipe V para proveer el corregimiento de Cuenca; se atendieron en dicha ocasión los informes elaborados por Baltasar Acevedo, quien destacó que había servido los corregimientos de Ávila, Burgos y Úbeda, «de que ha dado residencia y en que no ha habido defecto substancial; tiene conducta, celo y aplicación, con desinterés», cualidades todas ellas muy necesarias en alguien que había de presidir un consistorio; Francisco Arana, por su parte, destacó que «ha muchos años que sirve con crédito, y en la última residencia no hubo contra él queja ni cargo alguno de entidad»[95]; así las cosas el monarca le confió el corregimiento de Cuenca, que desempeñó hasta finales de 1727. Aunque Laiseca pretendió ser prorrogado en el destino conquense, petición que fue respaldada por

91. AGS GJ leg. 133 *Corregimiento de Tarazona*, 1714.
92. Laiseca sirvió en el ejército de América por espacio de cinco años; durante la Guerra de Sucesión participó en la rendición de Cartagena, batalla de Almansa, reducción de los reinos de Aragón y Valencia, rendición de Lérida, Tortosa…
93. *Gaceta*, 23/3/1717, p. 48; y AGS GJ lib. 1.563.
94. AGS GJ lib. 1.563.
95. AGS GJ leg. 137 *Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de Cuenca*, 1724.

la propia ciudad y cabildo de Cuenca en sendas cartas, no logró su objetivo[96], razón por la que dos años más tarde se mostró aspirante al corregimiento de Madrid, que tampoco obtuvo[97].

Como en ocasiones anteriores, de nuevo encabezó Laiseca la consulta redactada por los camaristas para dotar de corregidor a Jaén en 1730 y nuevamente contó con informes que avalaban su persona y labor profesional de cerca de un cuarto de siglo; así lo hizo Rodrigo Cepeda, quien señaló que era «de los mejores y más antiguos que andan en la carrera, y muy digno de que se le emplee»; Valcárcel Dato, tras enumerar los distintos destinos en los que había actuado como corregidor, y destacar que los había «servido con reputación», añadió que era «muy hábil y prudente, y su edad 58 años»[98]. Ese fue su último destino, en el que no llegó a completar el trienio, pues falleció en 1732[99].

También Fernando Paz Fajardo se había iniciado en el ejército, en el que había alcanzado el grado de coronel de caballería, antes de incorporarse a la carrera de varas. Caballero de la Orden de Santiago, benefició el corregimiento de Cáceres en agosto de 1711 tras abonar 30 000 reales por el cargo, empleo en el que, si atendemos al parecer expresado por Baltasar Acevedo y Pérez Galeote unos años más tarde, se desenvolvió con solvencia; en este sentido indicó el primero que había «servido muchos años de capitán de infantería y de caballos, sargento mayor, teniente coronel y coronel, y después el corregimiento de Cáceres con muy buena residencia y utilidad del común»; aludiendo tan solo a su vertiente militar apuntó el segundo que había actuado «con grande honra y estimación en la mejor opinión de todos sus jefes, capaz por su mérito y calidad para este empleo, y de otro cualquiera que V.M. le confiare»[100]. Designado por el monarca en 1723 para el corregimiento de Guadix, parece que falleció ese mismo año[101].

Nacido el 27 de marzo de 1679 en Almiñé (Burgos), Bernardo Gómez Zorrilla era hijo de Vicente Gómez, regidor hijodalgo en el valle de Valdivielso en los años 1666, 1672 y 1683. Empleado en el ejército en un primer momento —Bernardo era capitán en 1708 y coronel de infantería en 1719—, al lograr en 1708 el ingreso como caballero de la orden de Santiago (Cadenas, 1977, p. 314) debió pensar en modificar parcialmente su trayectoria profesional, aventurándose a solicitar el corregimiento de San Clemente, en la Mancha, previa entrega de 30 000 reales, ofrecimiento que se tuvo en cuenta y propició que desde enero de 1709 asumiera el cargo de corregidor

96. AGS GJ lib. 1 565; y AGS GJ leg. 139.
97. AGS GJ leg. 141 *Memorial.*
98. AGS GJ leg. 141 *Corregimiento de Jaén*, 1730.
99. *Gaceta*, 20/6/1730, p. 100; y AGS GJ leg. 142 *Memorial de Alonso Francisco Zambrana,* 1732.
100. AGS GJ leg. 137 *Sujetos propuestos por la Cámara para el Corregimiento de Guadix*, 1723.
101. AGS GJ lib. 1.565.

y superintendente general de rentas del partido de San Clemente; también su traslado a Cuenca en 1712 respondió a idéntica praxis[102], siendo prorrogado en 1715 por tiempo de un año[103].

Concluido su periodo de ejercicio en Cuenca fue consultado en 1717 para el corregimiento de Toledo con resultado adverso, el mismo que obtuvo un tiempo después como respuesta al memorial que envió al rey mostrándose pretendiente a idéntico cargo en Orihuela. Los negativos comentarios que se vertieron sobre su persona en dichos años debieron propiciar el final de sus servicios en la carrera corregimental[104], pues aunque de nuevo insistió solicitando el gobierno de Peñíscola en 1722, tampoco obtuvo el resultado apetecido. Los argumentos referidos por Gómez Zorrilla para fundamentar su petición servirían más para confirmar su irregular comportamiento en el último destino que para propiciar la concesión de uno nuevo; en este sentido apuntaba que «por ser tan corto el sueldo, y tan indispensable la decencia del suplicante en una ciudad de aquel lustre [Cuenca], se empeñó y gastó su corto patrimonio, y aun el de su mujer»; añadía, asimismo, que

> desde mediado el año de 1716 se restituyó a esta Corte, de la ciudad de Cuenca, motivo de haberse acabado de aniquilar de medios, que le obliga a estar reducido a un porte tan moderado como lo que pueden soportar las cortas rentas de su mujer[105].

4. CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas anteriores hemos ido perfilando las trayectorias socioprofesionales de aquellos corregidores que accedieron a la praxis venal contando con una experiencia previa en la administración, ya fuera a nivel local o territorial; entre ellos encontramos tanto letrados como militares e integrantes mayoritariamente del estamento nobiliario que encontraron acomodo en corregimientos de

102. Aunque no disponemos de datos concretos que lo corroboren, es posible que incluso el logro de la condición de caballero de Santiago y el grado de capitán hubieran sido obtenidos tras la entrega de sendas cantidades en las arcas regias, dadas las fechas en que los adquirió, la facilidad con que se desprendía del dinero y el interés mostrado por beneficiar cargos.

103. AGS GJ lib. 1.562.

104. En este sentido cabe destacar las opiniones que barajaron los camaristas a la hora de elaborar la correspondiente terna para el corregimiento de Orihuela, que se expresaban en los siguientes términos: «Jacinto de Arana me ha dado a boca malos informes de Zorrilla; le he escrito un papel para que me los dé por escrito, pero no me ha respondido. También me ha dicho D. Francisco León y Luna que en Cuenca hubo este sujeto que entregar 300 doblones porque no lo acusasen en la residencia», en AGS GJ leg. 135 *Sujetos propuestos por la Cámara para el corregimiento de Orihuela*, 1719.

105. AGS *Guerra Moderna* leg. 1.857 *Pretendientes al gobierno de Peñíscola*,1722.

capa y espada, de letras o gobiernos militares en función de su estatus de partida y del ofrecimiento económico realizado.

Si además de en quienes beneficiaron los corregimientos nos fijamos en el proceso en sí, cabe destacar que la praxis adoptada en el intervalo 1705-1711 tuvo diferentes consecuencias; por un lado, sirvió para que el monarca pudiera obtener unos ingresos extras para la financiación de la Guerra de Sucesión —objetivo que sirvió para justificar esa práctica que no era nueva, pues ya había sido utilizada anteriormente en tiempos de los Austrias, y más recientemente por el último de ellos, Carlos II—; por otro lado, permitió que algunos corregidores accedieran al cargo en función de las cantidades aportadas a la hacienda regia e independientemente de los méritos que reunían, al tiempo que quedaban relegados, al menos temporalmente, una parte de quienes venían desempeñando el cargo —al ampliar significativamente el número de candidatos pendientes de destino—, y ello tanto en los años en que el dinero resultó el requisito básico para conseguir ser provisto en una de las vacantes —o incluso futuras—, como después de concluido el proceso, cuando quienes los habían beneficiado pasaron a ser consultados por la Cámara de Castilla.

En cuanto al posicionamiento de Felipe V respecto al proceso de enajenación de cargos consideramos que se limitó a un uso interesado de una práctica ya existente, pero que dejó de utilizarse tan pronto las circunstancias que la propiciaron desaparecieron. De hecho, tras el fin del conflicto sucesorio el monarca rechazó diferentes ofertas de adquisición de empleos a cambio de un ofrecimiento en metálico; esta postura se mantuvo inalterada hasta que a finales de la década de los treinta y principios de los cuarenta —presionado por las exigencias de una nueva guerra y las dificultades de la hacienda regia— hubo de recurrir a nuevas ventas, incluso en tierras de la antigua Corona de Aragón, donde hasta ese momento se había negado a recurrir a dicha praxis, incluso después de abolidos los fueros.

Pese a que el protagonismo de la Cámara se vio muy reducido durante el tiempo de vigencia de las enajenaciones, momento en que se implantó una doble vía de provisión que tenía en cuenta tanto el tradicional sistema de consultas, como el de dotación a cambio de aportar una determinada cantidad, lo cierto es que una vez desaparecida la posibilidad de beneficiar cargos el volumen de candidatos a los mismos se amplió notoriamente, pues no solo optaron a ellos quienes venían desempeñándolos tradicionalmente —además de las lógicas nuevas incorporaciones—, sino también aquellos que habían conseguido acceder a la carrera gracias a la disponibilidad de numerario y al dinero satisfecho por un trienio de disfrute del puesto.

Si la competencia entre diversos aspirantes giró en el intervalo 1705-1711, en buena medida, en torno a la disponibilidad de efectivo de los compradores, después de 1711 el número de potenciales ocupantes de las vacantes que se fueron produciendo pasó a depender, nuevamente, de los méritos que adornaban a los candidatos, así como el peso de los valedores que pudieran avalar su conducta al frente del cargo; sin

embargo, ese aumento de solicitantes propició que algunos individuos que podían hacer gala de cualidades de tipo personal y también profesional no llegaran a conseguir revalidar la condición de corregidor ostentada durante el periodo venal, o que lo hicieran con intervalos cada vez más dilatados entre el ejercicio en un destino y la concesión del siguiente; es decir, que el tiempo de permanencia en la Corte como pretendiente se alargara, con el consiguiente gasto que ello implicaba, pero también de falta de continuidad en el ejercicio del cargo.

Aunque por los ejemplos apuntados todo parece indicar que la conducta de la mayoría de quienes beneficiaron corregimientos fue acorde con la actitud y labor que se esperaba de ellos, siendo muy bien valorada por los informantes a quienes se preguntó con ocasión de las diferentes consultas pasadas por la Cámara al rey para confiarles otro destino, es cierto que nos hemos centrado básicamente en aquellos corregidores que conocían el oficio con anterioridad a emplear el dinero como potenciador del logro de sus aspiraciones. Hemos debido obviar, por lo tanto, comentarios sobre muchos de aquellos que adquirieron el cargo sin tener ninguna experiencia previa, tema que dejamos para un futuro trabajo que nos permita perfilar si hubo diferencias entre ambos grupos o si, por el contrario, mostraron actuaciones bastante similares; así como, también, si ello pudo influir en su continuidad en la carrera.

Apuntar, por último, que el dinero desembolsado por hacerse un hueco en la red corregimental propició, en ocasiones, que quienes habían elegido ese camino sin disponer de sólidos capitales o rentas intentaran resarcirse con rapidez de las cantidades detraídas, y de ahí, quizás, las denuncias de que fueron objeto algunos de ellos. Pero, evidentemente, no siempre ocurrió así, por lo que, como hemos ido exponiendo, la casuística fue diversa y, por supuesto, requiere de un análisis y estudio más extenso que la perfile en el tiempo.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de María del Carmen Irles Vicente.

Agradecimientos y financiación

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación financiado por el Govern de les Illes Balears, PDR2025/24 «La (re) construcción de la identidad mallorquina durante el siglo XVIII: nuevas tensiones institucionales, fiscales y socioespaciales en la periferia del Estado».

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

La autora declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

5. BIBLIOGRAFÍA

Abbad, F., y Ozanam, D. (1992). *Les intendants espagnols du XVIIIe siècle*. Casa de Velázquez.

Álvarez Cañas, M. L. (2012). *Corregidores y alcaldes mayores: La administración territorial andaluza en el siglo XVIII*. Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Andújar Castillo, F. (2008a). *El sonido del dinero: Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII*. Marcial Pons.

Andújar Castillo, F. (2008b). *Necesidad y venalidad: España e Indias, 1704-1711*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Bermúdez Aznar, A. (1974). *El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474)*. Departamento de Historia del Derecho.

Cadenas y López, A. A. de, y Cadenas y Vicent, V. de. (1993). *Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles*. Hidalguía.

Cadenas y Vicent, V. de. (1977). *Caballeros de la Orden de Santiago. Siglo XVIII* (Vol. 1). Hidalguía.

Domínguez Ortiz, A. (1970). La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económico-sociales. *Anuario de Historia Económica y Social*, *3*, 105-138.

García Monerris, E. (1991). *La monarquía absoluta y el municipio borbónico: La reorganización de la oligarquía urbana en el Ayuntamiento de Valencia (1707-1800)*. CSIC.

Giménez López, E. (1990). *Militares en Valencia (1707-1808)*. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

Giménez López, E. (2006). *Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII: Estudio y repertorio biográfico*. Diputació de València - Institució Alfons el Magnànim.

Gómez González, I. (2000). *La justicia en almoneda: La venta de oficios en la Chancillería de Granada (1505-1834)*. Comares.

Gómez González, I. (2003). *La justicia, el gobierno y sus hacedores: La Real Chancillería de Granada en el Antiguo Régimen*. Comares.

González Alonso, B. (1970). *El corregidor castellano (1348-1808)*. Instituto de Estudios Administrativos.

Irles Vicente, M. C. (1990). Venta de regidurías en un municipio del sur valenciano: Orihuela (1739-1741). En *Actas del I Congreso de Jóvenes Historiadores y Geógrafos* (Vol. 2, pp. 213-221). Universidad Complutense.

Irles Vicente, M. C. (1995). *El régimen municipal valenciano en el siglo XVIII: Estudio institucional*. Diputación Provincial de Alicante - Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Irles Vicente, M. C. (1996). *Al servicio de los Borbones: Los regidores valencianos en el siglo XVIII*. Edicions Alfons el Magnànim.

Irles Vicente, M. C. (2022). Agentes de la monarquía en el ayuntamiento de León durante el siglo XVIII: Corregidores y alcaldes mayores. En D. Bernabé Gil, M. C. Irles Vicente y J. D. Rodrigues (Coords.), *Actores e instrumentos del poder en las monarquías ibéricas* (pp. 167-248). Almedina.

Irles Vicente, M. C. (2023). El corregimiento de Ronda-Marbella durante el reinado de Felipe V. En F. Andrés Robres et al. (Eds.), *Poderosos, marginados y gente común: Una historia de todos* (pp. 355-364). Albatros.

López Díaz, M. (2026). El reformismo político borbónico y sus límites: Una lectura iushistórica y algunos desafíos. En J. M. Imízcoz, A. Artola y J. Esteban (Eds.), *La vertebración de España: Culturas políticas, organización institucional y entramados sociales en la primera modernidad española (siglos XVI-XIX)* (pp. 245-312). Marcial Pons.

Márquez Redondo, A. G. (2010). *El Ayuntamiento de Sevilla en el siglo XVIII*. Ayuntamiento de Sevilla - Cajasol.

Molas Ribalta, P. (1999). *La Audiencia borbónica del Reino de Valencia (1707-1834)*. Universidad de Alicante.

Pezzi Cristóbal, P. (2003). *El gobierno municipal de Vélez-Málaga en el siglo XVIII*. Diputación de Málaga.

Tomás y Valiente, F. (1970). Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de cargos públicos en Castilla. En *I Symposium de Historia de la Administración* (pp. 125-159). Instituto de Estudios Administrativos.

Ybáñez Worboys, P. (2002). Alcaldes mayores malagueños (1700-1725). En J. L. Pereira Iglesias (Coord.), *Felipe V de Borbón, 1701-1746* (pp. 235-248). Universidad de Córdoba.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo202648311343

POR UNA HISTORIA SOCIAL DE LAS CULTURAS POLÍTICAS: LAS ÉLITES REFORMISTAS Y LAS ÉLITES RESISTENTES AL REFORMISMO ILUSTRADO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII

For a Social History of Political Cultures: Reformist Elites and Elites Resisting Enlightenment Reformism in 18th-Century Spain

José María IMÍZCOZ BEUNZA
Universidad del País Vasco
jm.imizcoz@gmail.com

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: El texto defiende la necesidad de una historia social de las culturas políticas y aporta planteamientos y herramientas para ello, desde una perspectiva de historia social relacional, capaz de analizar sin determinismos las relaciones efectivas entre actores e ideas.

Aplicado a la historia del reformismo en la España del siglo XVIII, el trabajo se centra en las redes de los actores sociales, políticos y culturales que, en el seno de la monarquía jurisdiccional y corporativa, configuraron una cultura política reformista ilustrada en la segunda mitad de la centuria. El trabajo analiza la formación de las redes sociales de los cuadros políticos y militares del reformismo borbónico, las características internas de esta clase reformista, la transformación ideológica que experimentó con la disrupción de la cultura política ilustrada, así como los contrastes y conflictos con los sectores mayoritarios de las élites jurisdiccionales y locales que seguían ancladas en las inercias de la cultura jurisdiccional y corporativa.

Palabras clave: reformismo ilustrado; jurisdiccionalismo; redes; conflictos; España; XVIII.

ABSTRACT: This article argues for the need to develop a social history of political cultures and offers approaches and analytical tools for doing so from the perspective of relational social history, capable of examining the actual relationships between actors and ideas without resorting to determinism.

Applied to the history of reformism in eighteenth-century Spain, the article focuses on the networks of social, political and cultural actors who, within the framework of the jurisdictional and corporate monarchy, shaped an enlightened reformist political culture in the second half of the century. It analyses the formation of the social networks of the political and military cadres of Bourbon reformism, the internal characteristics of this reformist class, the ideological transformation it underwent as a result of the disruptive impact of Enlightenment political culture, and the contrasts and conflicts with the broader sectors of the jurisdictional and local elites that remained anchored in the inertia of jurisdictional and corporate culture.

Keywords: enlightened reformism; jurisdictionalism; networks; conflicts; Spain; 18th century.

1. INTRODUCCIÓN

La tarea de evaluar el alcance del reformismo del siglo XVIII es difícil porque, según hacia donde miremos, se observan realidades diferentes que favorecen interpretaciones contradictorias. En España, la tendencia historiográfica ha evolucionado, desde los trabajos de las décadas finales del siglo XX, en que se enfatizó el alcance del reformismo ilustrado, al revisionismo de las últimas décadas, que cuestiona severamente su alcance, al observar la pervivencia del orden jurisdiccional.

La solución no puede venir de una media aritmética entre reformismo y conservadurismo, porque lo que hubo en realidad fueron fuertes contrastes según los sectores sociopolíticos. Este dilema no puede seguir siendo planteado en términos genéricos, como se hace desde la historia de las ideas políticas, la historia de las instituciones, la historia del derecho constitucional o la historia de los conceptos. Todos estos acercamientos son fundamentales, qué duda cabe. Pero, para definir el grado de reformismo o, al contrario, de mantenimiento del orden jurisdiccional, es necesaria una historia social de lo político y lo cultural: una historia social de

las culturas políticas que identifique, en las élites gobernantes e intelectuales de la monarquía, los sectores de tendencia reformista y los sectores de tendencia jurisdiccional. Pero que los identifique no según las clasificaciones deterministas de la vieja historia socioeconómica, en clave de clases o estamentos (nobleza vs. burguesía), que se ha comprobado que no funcionan, sino en clave de análisis relacional de redes sociales; esto es, a partir de las acciones e interacciones de los actores efectivos (las personas) que actúan en el campo social y político conectados entre sí, compartiendo encuentros, experiencias y dinámicas en las que se forman sus culturas políticas y cosmovisiones de diferente signo.

Nuestra pregunta es: En un sistema jurisdiccional, corporativo y señorial de larga duración, legitimado por la tradición, configurado por las leyes de Dios y los privilegios de los cuerpos políticos —un universo plenamente admitido por la gran mayoría—, ¿cómo se configuró una cultura política de signo contrario que impugnaba la tradición y terminaría por imponerse, al menos legalmente, desde el poder político, en el siglo XIX? Y como las cosas no se hacen solas, desde nuestro planteamiento de historia de los actores sociales, esta pregunta se centra en qué actores sociales, políticos y culturales llevaron a cabo este proceso, de qué modo, con qué inercias y resistencias y con qué consecuencias.

Para tratar de responder a estas preguntas, en un primer momento, observaremos las aportaciones historiográficas que nos parecen especialmente útiles para construir una historia social de las culturas políticas.

En un segundo tiempo, empezaremos por documentar la oposición de ideas y de intereses entre sectores de las élites reformistas y sectores de las élites jurisdiccionales y corporativas en la España de la segunda mitad del siglo XVIII.

A continuación, nos centraremos en las redes sociopolíticas que se formaron con las reformas de las instituciones y los cambios en el reclutamiento de los cuadros políticos y militares que llevaron a cabo los Borbones desde el reinado de Felipe V. Para poder observar de forma intensiva la dinámica de estas redes a lo largo del siglo, reduciremos la escala de observación y seguiremos a las parentelas de hidalgos provenientes de las provincias vascas y del reino de Navarra que se elevaron al gobierno de la monarquía con Felipe V, se reprodujeron durante toda la centuria en las instituciones reformadas por los Borbones y dieron ilustrados a la vanguardia de la modernidad española con Carlos III y, luego, élites liberales moderadas en las primeras décadas del siglo XIX.

El seguimiento de estas parentelas nos mostrará los mecanismos de reclutamiento y formación de los sectores reformistas de la nueva clase política, la conjunción de ideales e intereses, su formación específica en los centros educativos promovidos por los Borbones, los encuentros, experiencias compartidas y endogamias en las que se configuraron sus lazos internos, así como sus conexiones particulares con el rey y los mecanismos clientelares de reclutamiento mediante los que se reprodujeron

en las instituciones y negocios del Estado hasta la crisis final de la monarquía en el primer tercio del siglo XIX.

Sobre estas bases, propondremos cómo la transformación ideológica de esta clase política se produjo especialmente en la segunda mitad del XVIII, con la disrupción de la cultura política ilustrada, de la mano de la Economía Política, de las obligaciones de una nueva Filosofía Moral, de la política de «fomento» practicada por el gobierno ministerial y de la acción reformista de las Sociedades Económicas. En nuestra hipótesis, el afán reformador de estos sectores desde el gobierno ministerial de Carlos III inició la deriva hacia la formación del Estado contemporáneo como ente legislador y, desde esta perspectiva, creemos que el reformismo ilustrado fue mucho más novedoso de lo que suponíamos, al menos en sus pretensiones, con respecto al orden jurisdiccional heredado del pasado, aunque los resultados inmediatos fuesen limitados por las inercias y resistencias de los gobernantes imbuidos de cultura jurisdiccional y de intereses corporativos.

Terminaremos proponiendo que los resultados de las reformas dependieron, geográfica y socialmente, del peso específico que tuvieron las élites reformistas o las élites contrarias a las reformas en unas instituciones u otras y en unos territorios u otros: hubo reformas e Ilustración donde dominaron los reformistas ilustrados, concretamente donde controlaban los gobiernos locales, y no hubo reformas ni Ilustración donde dominaron las élites jurisdiccionales y corporativas. Esta historia territorial comparativa está por hacer.

2. PLANTEAMIENTOS CONCEPTUALES Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA UNA HISTORIA SOCIAL DE LAS CULTURAS POLÍTICAS

En las últimas décadas, la historia política se ha enriquecido con las aportaciones de diferentes disciplinas y puntos de vista. Sin pretender dar una visión de conjunto, aquí vamos a centrarnos en los elementos que nos permiten plantear las bases de nuestro proyecto de una historia social de las culturas políticas en la España del siglo XVIII.

La profunda revisión sobre lo que eran el poder político y el orden jurídico en las sociedades del Antiguo Régimen, llevada a cabo desde la historia del derecho a partir de los años 1980, ha transformado profundamente el campo de la historia política, con autores como Brunner, Hespanha, Clavero, Costa, Fernández Albaladejo, Garriga, Portillo o Llorente, entre otros (Garriga, 2004). Como es sabido, esta revisión ha criticado la historiografía «estatalista» que definía el orden político del Antiguo Régimen como un orden estatal en el cual el «Estado moderno» iría creciendo desde el siglo XVI hasta alcanzar el poder absoluto en el XVIII. Al contrario, hasta la revolución liberal, la monarquía seguiría siendo un orden jurisdiccional

no-estatal en el que el entramado corporativo era el entramado político y la revolución liberal no consistiría en la liberación del Estado del absolutismo, sino en la creación misma del Estado, entendido este como Estado legislador.

La cultura jurisdiccional formada en la Baja Edad Media dominaría el universo político durante toda la Edad Moderna. En este universo, el poder político estaría sometido a un orden jurídico superior, anterior e indisponible, un orden configurado esencialmente por les leyes de Dios y los privilegios de los diferentes cuerpos del entramado corporativo. En este orden, el poder del rey consistía en la potestad de aplicar el derecho (estableciendo normas y administrando justicia), pero no de crearlo, y esto hasta la formación del Estado liberal, en el siglo XIX, como ente creador del derecho. Estos principios se concretaban en un modelo judicial de gobierno en el que los magistrados, conocedores del derecho, eran el tipo ideal de agente público y gobernaban con el rey en sus consejos y tribunales.

Sin embargo, con la disrupción cultural de la Ilustración y la nueva ciencia de la Economía Política, en la segunda mitad del siglo XVIII se formó, en ese contexto jurisdiccional, otra cultura política de signo reformista que impugnaba la tradición. Ambas cosmovisiones convivieron en ese momento produciendo contradicciones internas en el sistema y tensiones entre sectores de las élites gobernantes, como luego veremos.

«Cultura política» es un concepto complejo y multidireccional que se podría definir como un sistema de representaciones que se forjan en el seno de una familia o tradición política; que implica una visión del mundo determinada, modelada por un universo de referentes culturales, simbólicos e históricos; que es portadora de ideas, normas y valores compartidos; se expresa a través de un discurso codificado, de símbolos y de ritos; condiciona la acción política y comporta formas de sociabilidad propias que favorecen la identificación de los propios y la diferenciación con los ajenos (Rubio Pobes, 2021, p. 28).

Esta definición genérica tiene que ser completada con reflexiones sobre sus elementos de variabilidad, intensidad y mestizaje. Una cultura política no es un sistema unificado, homogéneo y cerrado. Puede ser un repertorio diverso, con elementos incluso hasta cierto punto contradictorios, que diferentes actores pueden utilizar como una caja de herramientas, según las circunstancias y conveniencias (Schneider & Avenburg, 2015, pp. 166-118). Una cultura política tiene un carácter dinámico. Puede variar a través del tiempo y de las condiciones históricas.

La historia social aporta la posibilidad de observar la relación entre actores y culturas políticas: cómo éstas son entendidas y utilizadas por los diversos actores sociales; de qué modo se vinculan, en la práctica y en cada momento, las conductas políticas de los actores con las tradiciones o con las novedades culturales, cuáles son los valores compartidos e interiorizados por los individuos en el seno de determinadas redes sociales, pero no en otras; cómo facilitan o constriñen, y hasta qué

punto, los patrones de acción y de conducta; cuáles son los diferentes grados de intensidad e implicación de los individuos, de los más militantes a los más laxos; cuáles son los factores de su variabilidad, tanto individual, por la evolución política de los individuos (por ejemplo Jovellanos, cuando pasa de la cultura jurisdiccional aprendida en la universidad a la cultura de la economía política), como colectiva, por los encuentros y experiencias compartidas por determinados actores sociales en las nuevas instituciones borbónicas, en el ejercicio de políticas reformistas y en las formas de sociabilidad ilustradas donde se producen específicas dinámicas de cambio de cultura política.

La aportación de la historia social a la historia de las culturas políticas es relevante. Las ideas, los conceptos, las culturas políticas no se autoproducen ni autotransforman *per se*, de forma autónoma, sino que son socialmente producidas, mantenidas, transformadas y desechadas por los actores sociales. Desde el análisis de redes se explica cómo, si las estructuras condicionan a los individuos que nacen en ellas, al mismo tiempo estas se construyen, se reproducen o se transforman por la acción de los actores sociales, de modo que podemos analizar las estructuras y las normas como un efecto emergente de redes sociales (Degenne y Forsé, 1994, pp. 8-12). El análisis relacional es un instrumento idóneo para observar cómo los actores, con sus acciones e interacciones, en dinámicas sostenidas en el tiempo, generan, mantienen o transforman las culturas políticas. Y cómo lo hacen de forma diferencial, según los encuentros y experiencias compartidas o no por los diferentes sectores sociopolíticos.

También desde los años 1980, la historia política se enriqueció con la prosopografía llevada a cabo desde la historia social de la administración española en el siglo XVIII, encabezada por autores como, entre otros, Molas Ribalta, Fayard, Ozanam, López-Cordón, Castellano, Dedieu, Andújar, Pérez-Samper, Arias-Saavedra, Dubet, Bertrand, Glesener y sus discípulos (Bertrand et al., 2017; Castellano et al., 2000; Molas Ribalta, 1980, pp. 9-20). La prosopografía o «biografía colectiva» es un método de investigación que estudia un colectivo o institución no por los rasgos genéricos que se atribuyen a un estamento, grupo o institución, sino mediante el conocimiento detallado del conjunto de sus componentes, lo que procura un análisis mucho más rico y complejo de una institución que el simple estudio genérico. En este conocimiento entran multitud de aspectos, desde la fortuna, los estudios y los méritos de los individuos hasta la venalidad de los cargos (Andújar, 2011). La máxima expresión colectiva de esta línea de investigación ha sido la colaboración de docenas de investigadores españoles e hispanistas que materializó el profesor Dedieu en la base de datos Fichoz, sobre el personal administrativo y político de España en el siglo XVIII, con información proveniente de los archivos de la corona y de numerosas otras fuentes documentales y bibliográficas (Dedieu, 2004).

En este contexto, desde los años 1990 aportamos a la historia social del poder el análisis de redes sociales (Imízcoz, 1996, 2004), observando las redes informales de poder e influencia de los actores políticos y sociales articuladas por relaciones de parentesco, amistad, patronazgo, profesionales, afinidades electivas, etc. Esta línea

de investigación se apoyó especialmente en la correspondencia privada (Imízcoz & Arroyo, 2011), una documentación que revela de forma privilegiada las influencias informales, difíciles de encontrar en los papeles oficiales de la monarquía.

El análisis relacional ha llevado a superar una limitación clásica de la prosopografía. Esta tendía a limitarse a los miembros de un colectivo previamente acotado, cuando la experiencia demuestra que los miembros de una institución forman parte de redes sociales que la desbordan ampliamente, de modo que sus relaciones fuera de dicho colectivo pueden tener mucho que ver con su composición y funcionamiento interno. Para superar este hándicap, la «prosopografía relacional» añade a la biografía colectiva tradicional el estudio de las relaciones de los actores considerados, tanto dentro como fuera del colectivo o institución investigada (Castellano & Dedieu, 1998; Artola, 2013).

El análisis del poder como relación (en la medida en que, según Max Weber, son los otros quienes hacen que un poder sea efectivo) bebe de diversas fuentes, a mitad de camino entre la historia jurisdiccional y la historia social. Las aportaciones de Hespanha y Clavero sobre «la gracia» real (Hespanha, 1993; Clavero, 1991) deben llevar, simétricamente, al estudio de los intereses de los vasallos. En la práctica, la clave de bóveda del sistema político era el flujo de intercambios entre la corona y las élites territoriales, en el cual el rey recompensaba los servicios con empleos, honores, rentas, pensiones y privilegios, a cambio de una lealtad que debía asegurar la gobernabilidad de los territorios y la percepción de los impuestos reales (Dedieu, 2010, 2016). Este planteamiento es necesario para equilibrar la tendencia al «idealismo historiográfico» que domina la historia de las culturas políticas. Para un planteamiento equilibrado es necesario tener en cuenta la relación entre las afinidades intelectuales y los intereses materiales que estas afinidades podían reportar. Como veremos más adelante, estos intereses estuvieron muy presentes en la confrontación entre culturas políticas de la segunda mitad del siglo XVIII.

En cuanto a la historia institucional propiamente dicha, González Fuertes interpreta que la crítica historiográfica hacia el «Estado moderno» llevada a cabo desde la historia del derecho ha contribuido a desvalorizar los estudios de carácter institucional y propone una vuelta a la historia de las instituciones, pero no como la historia institucional producida por la historia del derechos tradicional, centrada en los aspectos normativos y con escasa documentación archivística, sino como una historia de la práctica administrativa, una historia que aúne las normas y las personas, las disposiciones generales con las normas particulares y los ajustes lícitos tenidos en cuenta por los participantes en las tomas de decisiones: una historia, en definitiva, de la organización de las instituciones y de su práctica efectiva en el día a día como un terreno en el que la historia de una institución puede ayudar a contextualizar y a servir como marco imprescindible para desarrollar otras vías de investigación, como las basadas en las ideas de la antropología política, el capital relacional, el capital simbólico, los criterios de capacidad y antigüedad u otros medios de influencia como las relaciones informales o la venalidad (González Fuertes, 2022, pp. 19, 120-121)

3. CULTURAS POLÍTICAS E INTERESES MATERIALES ENFRENTADOS EN LA ESPAÑA DE 1786

La confrontación entre élites reformistas y élites tradicionales está claramente documentada en las fuentes de la segunda mitad del siglo XVIII. En 1786, interrogadas por el Consejo de Castilla sobre las causas de su decadencia, las Sociedades Económicas denunciaron la oposición y desprecio hacia ellas de unos sectores de las élites específicos: los magistrados, los regidores de las ciudades y los sectores conservadores de los cabildos eclesiásticos y de las órdenes religiosas; en definitiva, la oposición de las élites imbuidas de la cultura jurisdiccional y corporativa. Este señalamiento proviene de la dirección de las Sociedades Económicas; esto es, de los sectores de cada territorio más activamente vinculados a la política de fomento de Carlos III, actores que conocían de primera mano el peso de las inercias y las resistencias locales por parte de los sectores reactivos u opuestos a las reformas[1]. Basten algunos ejemplos.

En cuanto a los magistrados y los corregidores, la Sociedad Económica de Valladolid se queja de que

> los Magistrados que inmediatamente debieran ser los oradores de estas comunidades son en su propia conducta sus mayores enemigos y destructores (…): huyen con fastidioso rostro de nombrarse individuos, se deleitan en ridiculizar las justas y sencillas fatigas de la comunidad, y sembrando la semilla de la discordia en el insensato Pueblo, que les cree oráculos, entibian el más enardecido espíritu y aún extienden su odio a los demás.

La Sociedad de Segovia expone «lo indispensable y necesario que es para el progreso de los proyectos de las sociedades la protección de los Magistrados y Jueces», pero denuncia

> el poco interés que regularmente toman estos Sres. en promoverlos y protegerlos por más que se los recomiende la superioridad. Las sociedades por si no tienen autoridad ni hay necesidad de que la tengan, siempre que los corregidores auxilien, como se les tiene mandado, sus pensamientos o ideas, pero si en vez de auxiliarlas se mofan y ríen de ellas y oponen a su planificación aquella autoridad que era necesaria para que se realicen (...) ¿Cómo han de hacer progresos las Sociedades, viéndose a menudo ridiculizadas de las mismas Justicias?

En Requena y Vélez Málaga se quejan igualmente del desinterés e inasistencia del corregidor.

1. Todos los testimonios provienen de Archivo Histórico Nacional [AHN], s.f., *Consejos*, leg. 3.658/11.

Con respecto al clero conservador, en Valladolid denuncian que

> los obispos, los Cabildos y los Prelados de las Religiones que conforme a las sagradas máximas y disposiciones debieran celebrar y distinguir la concurrencia de sus súbditos a estos Cuerpos, su aplicación al beneficio público y tan honesta ocupación, son los primeros que les abaten, no les dan la regular estimación y graduándoles con una mala moral distraídos de su instituto eclesiástico les posponen en sus gracias y aún positivamente les niegan aquellos ascensos y preeminencias que por turno regular les eran debidos, atropellando en desempeño de su odio los más claros estatutos de sus Religiones, las inconcusas costumbres Monacales y el mérito adquirido en el servicio personal de las Iglesias.

En cuanto a los regimientos de las ciudades y otros cuerpos, en Lugo reprochan que los alcaldes crean «algunos estorbos dimanados de preocupaciones vulgares, aun en muchos que, por sus empleos, deberían cooperar al bien común». En Medina de Rioseco, se «experimentaron desde las primeras sesiones, la mayor impugnación y no esperada tibieza de parte de el Ayuntamiento, desentendiéndose los Capitulares de ser Individuos de la Sociedad». La Aragonesa halla grandes obstáculos en los gobiernos de los pueblos y otras personas pertenecientes a la clase rectora que acogen las mismas nociones perniciosas del vulgo. En Sigüenza «se pensó en erigir una escuela en el arrabal de Toledo para la enseñanza de primeras letras», pero «se opuso la ciudad» y «no tuvo efecto». «Tampoco hallaron aceptación entre los miembros eclesiásticos de la ciudad, de los cuales muchos eran socios de la Sociedad».

En Santiago de Compostela, la Sociedad critica

> la oposición tácita e indirecta que ha experimentado de algunos Cuerpos, que creen estos establecimientos opuestos a sus intereses. Hay cierta preocupación muy general contra las Sociedades. Se ridiculiza el Título de Socio, y se hace burla de los que asisten a sus Juntas y desempeñan con actividad sus encargos, lo que retrae a un gran número, y es causa de que residiendo regularmente en esta Ciudad más de Cien Socios, hay muchas Juntas en que no llegan a ser diez los vocales (…)». «Hay muchos sujetos constituidos en dignidad que no queriendo alistarse en las Sociedades, o por un espíritu de avaricia, o por la indiferencia con que miran el bien público, pretenden justificar su conducta a los ojos del vulgo, desacreditando estos establecimientos, hablando de ellos con desprecio en sus conversaciones, y haciendo todos los esfuerzos posibles para desbaratar sus mejores ideas. Además del influjo que tales sujetos tienen en la opinión pública (…) suelen ser individuos de Comunidades o Cuerpos poderosos, y impiden los auxilios que de ellos debieran esperar las Sociedades.

La Sociedad vallisoletana se lamenta de que

> los jefes de las ciudades donde se hallan estos Cuerpos en aquellos asuntos que diariamente se ofrecen y tienen inmediata conexión con su instituto, y en que por lo mismo pudieran recibir unas singularísimas nociones para sus providencias o para los

> informes que se les pidiese, se desdeñan de acordar con los Directores, graduando indecorosa esta racional conferencia. Todo es desprecio, todo abatimiento hacia la Sociedad y sus individuos, y aquel se cree más hombre de juicio y circunspección que inventa más chismezuelos y esfuerza su oratoria contra estos establecimientos.

En Zaragoza denuncian

> la oposición indirecta de varios cuerpos y particulares que creen a las Sociedades contrarias a sus intereses y fines (…) Las gracias de Regidores perpetuos de Zaragoza y otros empleos que modernamente se han conferido sin esta previsión a diferentes sujetos opuestos a la Sociedad y sus individuos, influyen en la flojedad y desmayo de muchos.

En Tudela, «la causa inmediata de la decadencia de la Sociedad es la suma tibieza y despego con que generalmente se le mira en el País, como lo acredita y se ha justificado por el ningún fomento y mucha impugnación que han tenido en común y en particular sus más benéficas ideas», por la malignidad del regimiento y el cabildo eclesiástico, que vierten sus especies al público.

Por otro lado, el discurso de las Sociedades Económicas muestra que ideales e intereses iban unidos. Son discursos que están imbuidos de grandes ideales de servicio al público, pero cuando el rey les pregunta por los remedios para evitar su decadencia, lo que piden es la promoción de sus miembros en los cargos civiles, militares y eclesiásticos. Los mismos que proclaman «los impulsos de un verdadero patriotismo» y ensalzan su trabajo «a favor del Público de su Nación», esperan alcanzar los empleos y dignidades del Estado, muy en la línea de lo que vamos a ver más adelante sobre la formación de la clase política reformista e ilustrada.

En la mayoría de los casos, el premio que solicitan es «que para cualquier beneficio prebenda eclesiástica, plazas de toga y empleos políticos o militares se prefiera siempre, en igualdad de circunstancias, al que tenga calidad de socio», como piden en Tudela. Incluso algunas propuestas fueron más radicales, pidiendo «que para todas las gracias y empleos de Provisión de S.M. en cualquiera carrera que sea, no se admita Memorial de sujeto alguno sin que acredite ser socio», piden en León; o «que positivamente se excluyesen de los empleos y gracias Reales a los que no fuesen miembros de alguna Sociedad y en ella ejercitado su celo, aplicación y talentos en beneficio público», reclaman en Valladolid.

4. EL CONTEXTO GENERAL: LA REFORMA DEL SISTEMA POLÍTICO Y LA RENOVACIÓN DE LOS GOBERNANTES DE LA MONARQUÍA

Resumiendo mucho, podemos decir que, desde el reinado de Felipe V, los progresos del gobierno ejecutivo fueron posibles mediante la reforma de las instituciones y la selección de otro tipo de gobernantes (Castellano, 2006; Dedieu, 2010, 2011; Imízcoz, 2017b, 2023).

4.1. *La reforma de las instituciones*

Felipe V instauró un gobierno ministerial, por encima del tradicional gobierno mediante consejos, encarnado en las Secretarías del Despacho en la Corte, secundadas por sus agentes en el gobierno territorial. Las Secretarías dependían directamente del rey y le daban mayor libertad de acción. A lo largo del siglo, las Secretarías se fueron convirtiendo en el centro político-administrativo de la monarquía (López-Cordón, 1996)

Esta lenta emergencia de la monarquía administrativa se produjo junto al mantenimiento de las instituciones jurisdiccionales; en principio para colaborar (González Fuertes, 2022), pero no pocas veces con tensiones.

Progresivamente, los Consejos fueron quedando subordinados a las Secretarías y perdieron funciones en favor de ellas. El poderoso Consejo de Castilla, compuesto por grandes magistrados formados en la doctrina jurisdiccional, mantuvo sus funciones y, en ocasiones, resistió a las reformas saliendo en defensa del orden corporativo del reino. Felipe V no pudo reformarlo, pero Carlos III pareció dominarlo, filtrando el reclutamiento de los consejeros y poniendo a su cabeza a fiscales y abogados de su confianza, como Campomanes (Dedieu, 2005).

El gobierno territorial había dependido tradicionalmente del Consejo de Castilla, que tenía en sus manos el nombramiento de los presidentes de las audiencias y de los corregidores. Los Borbones pusieron lo esencial del gobierno territorial bajo autoridades nombradas por las Secretarías de Estado y que solo debían rendir cuentas a estas: las audiencias territoriales, bajo la presidencia de capitanes generales formados por el monarca en sus Guardias Reales, y las provincias, bajo los intendentes, que asumían, además, las funciones de corregidores en las capitales de provincia (Dedieu, 2010, pp. 61-66).

El segundo pilar de las reformas borbónicas fue el ejército. La principal novedad fue que el rey pasó a formar por primera vez a sus oficiales, mediante la creación de las Guardias Reales, que se convirtieron en el principal semillero de generales y cargos político-militares de la monarquía (Andújar, 2000), y mediante la creación de Academias Militares (Galland, 2008; García Hurtado, 2013; Herrero, 1990; Ortega del Cerro, 2018). Además, se extendió la práctica de poner a militares a la cabeza de los gobiernos territoriales: virreyes, gobernadores, capitanes generales-presidentes de audiencias, muchas veces formados por el rey en sus Guardias Reales (Dedieu, 2019).

En la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente con Carlos III, se produjeron avances del absolutismo ministerial. En particular, el regalismo ganó poder sobre la Iglesia de España. Desde el concordato de 1753, el rey tuvo en sus manos el patronato pontificio para nombrar a varias decenas de miles de cargos eclesiásticos, en su mayoría curas de parroquias (Dedieu, 2010, pp. 68-70). La política regalista intentó sacudirse la tutela política de la Iglesia y marginar a los defensores de las doctrinas

jurisdiccionales que limitaban el poder del rey. En cuanto al episcopado, Carlos III favoreció sistemáticamente el nombramiento de candidatos regalistas, apartando a los jesuíticos (Artola, 2013). En 1767, la expulsión de los jesuitas eliminó el principal obstáculo intelectual y educativo al absolutismo (Giménez, 2022).

En definitiva, este conjunto de instituciones reformistas permitiría a la corona superar progresivamente las limitaciones que le imponía el orden jurisdiccional, ampliando su potestad absoluta y extendiéndola a nuevos campos de aplicación. Sobre estas bases, en la segunda mitad del siglo se iniciaría una dinámica estatal materializada en el «absolutismo ministerial» y las reformas de Carlos III. A la postre, esta forma de gobierno permitiría superar el modelo de gobierno jurisdiccional en el siglo XIX (Portillo, 2000; Pro, 2019). Sin embargo, la mayoría de las élites del reino y de la sociedad seguiría aferrada a la cultura política jurisdiccional y a la tradición.

4.2. *La renovación de los agentes de la Corona*

La renovación de las instituciones se acompañó de la renovación de sus gobernantes. Las reformas borbónicas fueron posibles en la medida en que los reyes contaron con unos agentes específicos capaces de aplicar las reformas.

La renovación del personal político se produjo esencialmente en las instituciones de la nueva administración ministerial y en sus terminales territoriales de gobierno administrativo, hacendístico y político-militar: secretarios y oficiales de las Secretarías del Despacho, virreyes, gobernadores y capitanes generales presidentes de audiencias, intendentes de provincias, así como, en gran medida, en el mando del ejército y la marina y, con Carlos III, en parte del episcopado. En cambio, los sectores de la magistratura, de los estados señoriales (Aragón, 1990) y de buena parte de la Iglesia continuaron reproduciéndose según sus dinámicas y culturas tradicionales.

El cambio en la política de reclutamiento se inició con Felipe V, tras la Guerra de Sucesión, quien se rodeó de hombres sin bases de poder propias, enteramente dependientes del rey y obedientes. La mayoría provenía de la pequeña y mediana nobleza, especialmente de las parentelas de leales durante la guerra. Entre ellos hubo abundantes hidalgos norteños (vascos, navarros, cántabros), servidores extranjeros y minorías felipistas de la corona de Aragón (Dedieu, 2001, p. 393). Luego, los miembros de estas parentelas se reprodujeron abundantemente en la clase política reformista por medio de relaciones clientelares desde dentro de las instituciones (Imízcoz & Bermejo, 2017).

La elevación política de estas redes se produjo, justamente, en el momento de las grandes reformas administrativas, militares y hacendísticas de Felipe V. Había que poblar las nuevas administraciones con leales dependientes del rey, lo cual favoreció que estos grupos se concentraran especialmente en las nuevas instituciones del gobierno ministerial; esto es, en aquellas instituciones en las que se produciría el

cambio político a lo largo del siglo: las Secretarías del Despacho, la Real Hacienda, las intendencias y la oficialía del ejército y de la marina (Molas Ribalta, 2008, pp. 224-255). También en el episcopado y el alto clero dependiente de la selección real (Artola, 2013; Imízcoz & García del Ser, 2008, pp. 125-187).

Con estas reformas, las élites gobernantes de la monarquía jurisdiccional —la aristocracia, la magistratura y el alto clero— perdieron de algún modo cotas de poder político o se vieron subordinadas al gobierno ministerial.

La aristocracia se vio apartada del gobierno de la monarquía por Felipe V. Salvo raras excepciones, a lo largo del siglo no hubo secretarios del Despacho (Morales Moya, 1987, pp. 23, 27-84) ni virreyes de este origen (Dedieu, 2019). Esta se mantuvo en el gobierno de sus estados señoriales, en posiciones honoríficas de palacio, en parte del ejército y en la diplomacia (Molina Recio, 2020), pero perdió el poder político del Estado. Esto generó un descontento aristocrático a lo largo de todo el siglo: anónimo[2] (Caro Baroja, 1969, p. 465; Egido, 2002) cuando los reyes fueron fuertes y abierto (Demerson, 1971) con la crisis de la autoridad real en tiempos de Carlos IV y Godoy.

Como no podía ser de otro modo, la magistratura continuó ejerciendo las funciones judiciales, vitales para la monarquía, pero se vio subordinada políticamente al gobierno ministerial. Los Borbones ganaron autonomía a la hora de nombrar cargos, empleando el «decreto ejecutivo» en detrimento de la «vía consultiva» controlada por los magistrados del Consejo. González Fuertes ha contabilizado la proporción de ambas vías en los nombramientos de jueces en el siglo XVIII. Carlos III nombró a cargos teniendo en cuenta generalmente la consulta de la Cámara, mientras que Carlos IV recurrió masivamente al decreto ejecutivo (Calvo Maturana & González Fuertes, 2016; González Fuertes, 2022, pp. 1992-1997), pero es probable que, si Carlos III empleó mayoritariamente la consulta, fue porque tenía un Consejo de Castilla afín, dominado a través de Campomanes (Dedieu, 2005), de modo que cabe suponer que las propuestas de la Cámara correspondían a lo que deseaba el monarca. En cambio, si Carlos IV recurrió masivamente a nombrar por la vía ejecutiva fue señal, probablemente, de debilidad y de menor control del Consejo, en un contexto marcado por una creciente contestación política.

Por otra parte, los Borbones crearon o patrocinaron a lo largo del siglo unas instituciones educativas y culturales específicas para formar y reclutar a sus cuadros políticos y militares: centros educativos como los seminarios de nobles, las academias militares y las propias Secretarías del Despacho; sociedades culturales y económicas, como las Academias Reales (Bédat, 1989; Imízcoz, 2021; Velasco, 2000) y las Sociedades Económicas (Anes, 1981), y órganos informativos como la *Gaceta de Madrid*.

2. *El duende crítico de Madrid*, 1844, pp. 29, 33, 41-33, 49, 58-59.

El seguimiento de las trayectorias de los hijos de los sectores políticos reformistas muestra que estas instituciones tienen que ser consideradas no aisladamente, como se ha hecho hasta ahora, sino en su conjunto, como un espacio común por el que circularon y en el que se formaron y se encontraron entre sí los miembros de los grupos familiares especialmente vinculados a la construcción del Estado borbónico (Artola, Bermejo & Chaparro, 2019; Imízcoz, 2024).

Mientras tanto, la élite de la magistratura siguió formándose en los colegios mayores de las principales universidades, donde eran educados por la Iglesia (jesuitas y dominicos) en los principios de la cultura jurisdiccional que limitaban el poder del rey, con autores neo-escolásticos como Vitoria, Suárez, Mariana o Molina. Carlos III intentó reformar las universidades (Rodríguez-San Pedro, 2002) poniéndolas bajo la supervisión de la Secretaría de Estado, rompiendo su autonomía por diversos medios, controlando sus planes de estudios y prohibiendo a los autores neo-escolásticos (Dedieu, 2010, p. 71).

Así mismo, Carlos III marginó a los colegiales y se apoyó especialmente en abogados y fiscales, simples prácticos del derecho que debían su elevación política al monarca, como Campomanes, gobernador del Consejo de Castilla; Gálvez, secretario de la Secretaría de Indias (Castejón, 2020), o Floridablanca, secretario de Estado. Tras varios intentos de reforma (1771), los colegios mayores fueron finalmente clausurados y sus bienes desamortizados en 1798. Por otro lado, Carlos III promocionó a los intelectuales que escribieran a favor de sus regalías y reformas (Dedieu, 2010, p. 76).

5. POR UNA HISTORIA COMPARATIVA: EL PARADIGMA DE LAS REDES DE VASCOS Y NAVARROS EN LAS INSTITUCIONES DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA

Para analizar la formación de sectores políticos reformistas a lo largo del siglo XVIII es necesario reducir la escala de observación. En nuestro caso, hemos seguido especialmente a las redes de los hidalgos vascos y navarros que se elevaron con fuerza al gobierno de la monarquía con Felipe V (Guerrero, 2012) y que se reprodujeron en esas posiciones a lo largo del siglo gracias a su capital relacional. Se trató en su origen de grupos de parentesco que se elevaron en el comercio en la segunda mitad del siglo XVII, que ayudaron financiera y militarmente a Felipe V en la Guerra de Sucesión y que luego fueron elevados por este a las nuevas instituciones de gobierno, en las que se reprodujeron a lo largo de todo el siglo mediante lazos de parentesco y mecanismos clientelares (Imízcoz & Bermejo, 2017).

Para llevar a cabo esta investigación, superando los *impasses* de las categorías analíticas tradicionales de estamentos y clases, hemos empleado una metodología «relacional». Esta consiste en partir de la observación empírica de los actores efectivos

de la historia —las personas— y de sus interacciones, tal y como aparecen en las fuentes, para reconstruir por inducción sus redes sociales y configuraciones colectivas, y, a partir de ahí, seguir sus dinámicas en el tiempo y, en última instancia, descubrir sus relaciones con las ideas, las instituciones, la economía y el funcionamiento del sistema. Esta forma de análisis relacional, a partir de los actores efectivos y de sus interacciones, se concreta en una serie de instrumentos de observación, como son la genealogía social, la prosopografía relacional o el análisis de redes sociales (Imízcoz, 2004, 2017a).

El capital relacional que estuvo en la base de esta dinámica de producción y multiplicación de carreras a lo largo del siglo fue el parentesco; concretamente, el parentesco colateral. La política de estas familias para la colocación de sus hijos consistió en guardar un heredero o heredera en casa, al frente del mayorazgo, y destinar a todos los varones que fuera posible —según el número de hijos y el capital relacional— a las carreras al servicio del rey o a los negocios, gracias al patrocinio de los parientes que ya estaban instalados anteriormente en las instituciones de la monarquía y en el comercio, con la ayuda de los amigos, ministros y colegas que estos parientes fueran capaces de movilizar en su favor (Imízcoz, 2010, 2014).

Las parentelas de vascos y navarros que se elevaron al gobierno de la monarquía con Felipe V estuvieron sobrerrepresentadas en las nuevas instituciones de la administración borbónica a lo largo de todo el siglo. En las Secretarías del Despacho hubo al menos 17 secretarios y un total de 180 secretarios y oficiales de este origen (Guerrero, 2012). En la administración de Hacienda destacó una larga nómina de cargos y empleos (Imízcoz, 2014).

En el mando militar hubo al menos 206 oficiales superiores (por encima de los grados de coronel y capitán de navío), de los cuales 145 en el Ejército y 61 en la Armada. Los miembros de estas parentelas tuvieron una presencia destacada en las Guardias Reales —como muestra la parentela de Idiáquez— y en las Academias Militares. Así mismo se distinguieron en los gobiernos político-militares como virreyes y gobernadores en la Península y en América (Imízcoz y Bermejo, 2016).

En el alto clero sobresalieron 62 obispos y arzobispos y, por debajo de ellos, numerosas dignidades en las catedrales de toda la Península y de las Indias (Imízcoz & García del Ser, 2008).

La preponderancia de los grandes comerciantes vascos y navarros en la corte y en el imperio ha sido destacada por numerosos historiadores. Desde el reinado de Felipe V, miembros de estas parentelas se distinguieron como tesoreros de la familia real, proveedores del Ejército y de la Marina, arrendadores de las rentas reales y administradores de la Real Hacienda (Caro Baroja, 1969; González Enciso, 2003; Imízcoz & Guerrero, 2012; Torres, 2006).

En los Cinco Gremios Mayores de Madrid, principal institución de crédito en la España de la segunda mitad de la centuria, 30 de los 31 diputados directores tenían

este origen, así como el 46 % de los comerciantes que formaban esta compañía: 105 de 207 socios en 1763 (Martínez Borrallo, 2022). Los hidalgos norteños originarios de las provincias vascas y del reino de Navarra, junto a cántabros y riojanos, dominaron el gran comercio y las finanzas de Madrid en la segunda mitad del siglo (Cruz, 2000, pp. 36, 40, 70-71, 80; Martínez Borrallo, 2022).

Los naturales y originarios de estos territorios estuvieron también especialmente sobrerrepresentados, proporcionalmente con respecto a la población de los territorios, en la obtención de hábitos de Órdenes Militares y de la Real Orden de Carlos III (Aranburuzabala, 2019)

Igualmente, estuvieron muy presentes entre los suscriptores de la *Gaceta de Madrid*, órgano de información de la Corona. En 1762, en el momento en que la *Gaceta* pasó de casa de los Goyeneche a la Secretaría de Estado, el 53 % de los suscriptores eran todavía vascos y navarros (Fernández Sebastián, 1990)

Tabla 1. Suscriptores de la *Gaceta de Madrid* en 1763

REGIÓN	CASOS	%
Provincias vascas	102	43,04
Rioja	27	11,39
Cantabria	24	10,13
Castilla Vieja[3]	22	9,28
Navarra	22	9,28
Andalucía	13	5,49
Desconocido	9	3,80
Castilla Nueva	5	2,11
Galicia	4	1,69
Extremadura	2	0,84
Francia	2	0,84
Canarias	1	0,42
Cataluña	1	0,42
(Madrid)	1	0,42
Murcia	1	0,42
Valencia	1	0,42
TOTAL	237	100

3. De los cuales, 13 en la provincia de Burgos.

La información de la *Gaceta* era fundamental para estos grupos elevados en las instituciones y la economía del Estado. Como muestra la correspondencia privada, la *Gaceta* era vital para los intereses de carrera, inversiones y cultivo del capital relacional de los baztaneses instalados en las estructuras de la Monarquía, que la leían y utilizaban habitualmente para su provecho (Imízcoz, 2015, pp. 164-167). En nuestra hipótesis, el mayor o menor número de suscriptores por territorios indicaría el mayor o menor grado de vinculación de sus élites regionales con la economía y las carreras del Estado borbónico. No es casualidad que los porcentajes más altos correspondan a los territorios de hidalgos norteños que ascendieron en mayor número al gobierno de la Monarquía con Felipe V. Esperamos poder desarrollar estas comparaciones territoriales en futuros trabajos.

Un excelente ejemplo de la formación de esta clase política y cultural del reformismo borbónico es el de las familias fundadoras y dirigentes de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, creada y aprobada por Carlos III en 1765. Estas familias estuvieron intensamente vinculadas a la corte, al ejército y a las carreras del reformismo borbónico desde el reinado de Felipe V. Formaban un grupo de parentesco en el que todos eran parientes de parientes y parientes entre sí, y los abuelos y tíos abuelos de su núcleo central fueron las cabezas del «partido vizcaíno» en torno a Felipe V (Guerrero, 2012). A lo largo del siglo, a estas familias centrales se fueron añadiendo por matrimonio otras que aportaban cuantiosas dotes provenientes del comercio y de las Indias y que, a través de los parientes de ese núcleo central, colocaban también a sus vástagos en la oficialía del ejército y en la alta administración (Imízcoz & Chaparro, 2009).

A partir de aquel núcleo originario, estas parentelas se reprodujeron abundantemente en las estructuras de gobierno de la monarquía. Su capacidad de reproducción fue en aumento durante el reinado de Felipe V, creció de forma notable con Carlos III por el apadrinamiento de los anteriores, y entró en crisis a finales del siglo con la política de Godoy, para extinguirse prácticamente en las dos primeras décadas del XIX (Imízcoz & Bermejo, 2017). En total, las familias de los 24 socios de número de la Bascongada dieron a lo largo del XVIII no menos de 144 hijos con carreras al servicio de la corona fuera de las provincias vascas. Entre ellos, destacaron numerosos oficiales del ejército y de la marina —el sector más abundante—, pero también servidores de palacio, consejeros (especialmente de Hacienda, Indias y Órdenes Militares), personal de Hacienda, diplomáticos y canónigos (Bermejo, 2022; Imízcoz & Bermejo, 2017).

Las parentelas de vascos y navarros que participaron en aquella dinámica expansiva experimentaron una movilidad geográfica y social extraordinaria. Especialmente, las numerosas familias originarias del mundo rural realizaron ascensos vertiginosos, pasando de casas campesinas al comercio y de ahí a los ministerios y el generalato

gracias a la mano del rey. El caso de los valles de Baztán, Ayala, Encartaciones de Vizcaya o Mena es paradigmático.

Estos grupos de parentesco tenían bases locales, pero no eran «élites regionales» enclavadas localmente, sino, al mismo tiempo, élites estatales e imperiales. Su correspondencia privada revela cómo estaban a caballo entre la aldea, la corte y el imperio: se trataba de unas élites multisituadas y polivalentes que actuaban, cooperaban e intercambiaban con gran provecho entre diversas geografías, instituciones y actividades políticas, económicas y culturales.

6. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE POLÍTICA Y CULTURAL DEL REFORMISMO BORBÓNICO

El seguimiento de estas redes sociales nos revela aspectos muy significativos sobre las características y dinámicas internas de la nueva clase política que se formó en las instituciones del reformismo borbónico.

En primer lugar, se trató de unas élites que dependían en gran medida del rey. Felipe V reclutó a servidores que no poseían bases de poder propias, sino que dependían estrechamente de él. No poseían estados señoriales con grandes rentas ni formaban parte de las grandes oligarquías urbanas de la magistratura con importantes bases económicas regionales. Una familia como la de José Antonio Armona y Murga, intendente y corregidor de Madrid, vivía de los salarios, montepíos y pensiones de Carlos III (Imízcoz, 2012). La gracia de los Borbones se destinó especialmente a recompensar a los sectores de las élites reformistas más implicadas al servicio del monarca, en particular bajo Carlos III, con quien el patronazgo real alcanzó su máxima capacidad y extensión. Entre otras manifestaciones de recompensa y fidelización están la multiplicación de títulos nobiliarios (Felices, 2013), la concesión de obispados a los eclesiásticos afines (Artola, 2013), el mantenimiento de administradores y militares que vivían de los sueldos del rey (Armona, 2012), las pensiones de viudedad y de orfandad para sus familias (Ortega del Cerro, 2019), los privilegios económicos para las compañías privilegiadas de comercio, las reales fábricas de armas y los asientos (Imízcoz & Guerrero, 2012). Carlos III favoreció especialmente con su Orden a los servidores de la administración reformista, mientras retraía recursos económicos de las encomiendas de las Ordenes Militares, coto tradicional de la aristocracia, y de la Iglesia para financiar las grandes cruces pensionadas de sus principales servidores (Gorraiz, 2017).

En segundo lugar, esta clase política fue promocionada en determinadas instituciones educativas y reclutada de una forma selectiva basada en relaciones de parentesco y de clientelismo practicadas desde dentro de las instituciones (Imízcoz, 2010). Esto favoreció la reproducción en la administración y la oficialía del ejército de determinadas redes sociales, mientras que los sectores de las élites que no tenían

las conexiones necesarias quedaban excluidos (Morales, 1987, pp. 46-47). Esta fue, sin duda, una poderosa razón de descontento que hay que investigar.

En tercer lugar, esta clase política reformista estuvo trabada por lazos internos. E.P. Thomson planteó, en la formación de la clase obrera en Gran Bretaña, cómo una conciencia de clase se forma en los encuentros y experiencias compartidas por los actores sociales (Thomson, 1977). En esta perspectiva, las instituciones del reformismo —educativas, profesionales, societarias, informativas— fueron la matriz por la que circularon y en la que se encontraron y compartieron experiencias los hijos de estas parentelas.

Los hijos de estos sectores se encontraban desde la infancia en los seminarios de nobles (Chaparro, 2010), las Academias militares, las Guardias Reales y las covachuelas de las Secretarías del Despacho (Artola, Bermejo & Chaparro, 2019; Imízcoz, 2024a). Ahí compartían un nuevo tipo de educación, más técnica, más científica, y sin duda nuevos valores políticos y civilizatorios que hay que investigar. Muchos iban juntos del seminario de nobles a la misma academia militar y luego volvían a encontrase en los navíos de Su Majestad o en los cuerpos de artilleros. Y ahí establecían sus amistades íntimas (Imízcoz, 2012). Luego seguían compartiendo trabajos, misiones, amistades y afinidades profesionales (también enemistades) a lo largo de sus carreras profesionales, como muestran, entre otras, las memorias de José Antonio Armona y Murga, José María de Zuaznávar y Francia, José Nicolás de Azara, José García de León y Pizarro, Gaspar Melchor de Jovellanos o Manuel Godoy. Sin obviar el mérito, los lazos internos de amistad y de compañerismo fueron importantes para medrar dentro de las instituciones (Gorraiz, 2017) y para trabar el entramado de esta clase administrativa y militar.

La endogamia profesional se reforzó con otros vínculos que estamos investigando: endogamias matrimoniales (Peña, 2022, 2024); informativas, por ejemplo con la *Gaceta de Madrid* (Fernández Sebastián, 1990; Imízcoz, 2015, pp. 164-167); afinidades societarias e intelectuales, como muestra su participación intensa en los círculos de sociabilidad ilustrados en España (Franco Rubio, 2004, 2005) y en América (Torales, 2001), en las Sociedades Económicas, las Academias Reales (Bédat, 1989; Imízcoz, 2021; Velasco, 2000), las tertulias políticas y la prensa de opinión (Larriba, 2013).

7. EL REFORMISMO ILUSTRADO Y LA ECONOMÍA POLÍTICA: LOS SECTORES REFORMISTAS ILUSTRADOS

Al lado de una Ilustración erudita (Mestre & Pérez García, 2004), en la segunda mitad del siglo XVIII hubo una «Ilustración política» apoyada en la nueva ciencia de la Economía Política y en todo lo que supusiera la acción del Estado para transformar la economía, la política, la cultura y las costumbres. Carlos III jugó un

papel fundamental en esta línea con la política de fomento, objeto por excelencia del gobierno ministerial desde mediados del siglo, ampliando el poder del Estado a nuevos campos de actuación en los que el gobierno de la monarquía no se había adentrado hasta entonces, o no de este modo, desde el comercio, la industria, la agricultura, la modernización de las infraestructuras, las comunicaciones, la articulación del mercado interior o el nuevo sistema de correos hasta la educación y la ciencia, la beneficencia, el urbanismo, la higiene, el gusto artístico, el modo de vestir, las costumbres, las prácticas de ocio o la «policía»: a todo aquello que contribuyera a la felicidad pública (Astigarraga, 2017; González Alonso, 1995; Pérez Sarrión, 2012).

En efecto, esta voluntad de reformar suponía una diferencia esencial con respecto a las reformas anteriores: ahora no se trataba, como en el pasado, de reformar el cuerpo del rey —su administración, el ejército, la marina o las finanzas—, sino de reformar la sociedad, y de reformarla en profundidad, en abierta oposición muchas veces a la tradición recibida.

La Economía Política sirvió como medio para introducir novedades en un contexto social mayoritariamente resistente al cambio, regido por los principios del orden jurisdiccional, corporativo y aristocrático (Artola e Imízcoz, 2022). Desde mediados del siglo, la Economía Política adquirió un carácter general por la vía de la nueva Filosofía Moral fundada sobre la idea de utilidad pública, un bien superior al cual todos los ciudadanos debían contribuir (Imízcoz, 2025). Los conceptos fundamentales de la Economía Política se transfirieron al campo político, reforzando así el basamento de los derechos naturales predicados por las Luces y cambiando la naturaleza de los lazos entre los individuos (Carmagnani, 2016).

Esta Ilustración política se dio principalmente en los círculos sociales más vinculados al gobierno reformista y a la economía del Estado: ministros y oficiales de las Secretarías (Franco Rubio, 2005); militares ilustrados (Franco Rubio, 2004); intendentes; eclesiásticos regalistas; hacendistas, financieros y grandes comerciantes vinculados al primer capitalismo de Estado (Martínez Borrallo, 2022); literatos, artistas e intelectuales orgánicos pensionados por la Corona; abogados, fiscales y algunos magistrados convertidos a la Economía Política, como Jovellanos.

El ejemplo de las parentelas vascas vinculadas al servicio del reformismo borbónico desde la Guerra de Sucesión es altamente significativo en este sentido. La historia de los grupos de parentesco de los fundadores y dirigentes de la Bascongada revela la convergencia en unas mismas parentelas de las dos principales fuentes de modernidad política en la segunda mitad del siglo XVIII, el reformismo borbónico y las Luces francesas. Por un lado, el reformismo aprendido por los segundones de estas familias en las nuevas instituciones educativas y en la administración borbónica, en cuyas prácticas de gobierno ministerial, academias militares y oficialía del ejército se transformaron política y culturalmente, y, por otro, los estudios en colegios de Francia, como Peñaflorida en Toulouse, donde aprendió el modelo de las academias.

En efecto, estas élites ilustradas apelaban a la soberana autoridad del rey y del gobierno ministerial para remover los obstáculos y hacer posibles las reformas. Peñaflorida, fundador de la Bascongada, habla en su «Discurso preliminar» del 7 de febrero de 1765 de las «enfermedades políticas que tienen postrada Su Provincia» de Guipúzcoa y, entre los obstáculos al bien del Pueblo, incluía los obstáculos de orden político y jurídico:

> Los abusos autorizados de los Pueblos, tal vez fundados en el método particular de su gobierno, o ya las leyes mismas del Reino que no pueden tener un mismo uso en todos los tiempos y en todas las Provincias, oponen a cada paso un número de embarazos que solo puede remover la soberana autoridad.

Por ello, «la soberana autoridad» del rey es la única manera de procurar el bien del Pueblo, «servido de un Ministerio cuya vigilancia y autoridad le hiciesen capaz de llevar a ejecución las generosas intenciones del Monarca». Porque la Nobleza instruida y laboriosa puede conocer las enfermedades políticas del reino, investigar sus causas, hallar los remedios, pero no hará grandes progresos en la práctica si no se halla sostenida «por un Gobierno iluminado cuyo supremo poder las haga triunfar de todos los obstáculos que se opusieren a su ejecución» (Imízcoz, 2025).

Por un lado, al asumir las funciones de la Economía Política, la corona necesitó a gobernantes con nuevas competencias. Los ministros absolutistas buscaron juristas alejados de las doctrinas jurisdiccionales escolásticas. Y no simples letrados, sino hombres experimentados en el arte de gobernar, fiscales o abogados que fueran instrumentos eficaces del gobierno, con un perfil político que orientara la justicia a la extensión del poder de la corona para garantizar el bien público, y a poder ser, aptos para el desempeño de la parte económica o gubernativa de la Nación (Calvo Maturana, 2013).

Por otro lado, la corona promocionó nuevos espacios de sociabilidad, poniéndolos al servicio de su política reformista (Usoz, 2015, pp. 118-119). Con Carlos III, la monarquía se posicionó como responsable del fomento y desde 1774 intentó vincularse a los actores económicos y culturales del reino a través de la promoción de las Sociedades Económicas, pidiendo iniciativa a las fuerzas vivas locales e intentando integrarlas en sus proyectos reformistas (Dedieu, 2010, p. 67). En un primer momento, estas Sociedades fueron un éxito, ya que en treinta años se crearon sesenta y nueve, aunque solo funcionaron medianamente unas veinte (Anes, 1981). Las quejas de las Sociedades en 1786 muestran que no fue tan sencillo.

Como en toda la Europa de las Luces, estas sociedades obedecían a un modelo asociativo nuevo, contrario a las sociedades aristocráticas y corporativas. Se trataba de asociaciones que no venían dadas por el nacimiento o por la pertenencia a un estamento o corporación, sino que se constituían por la adhesión libre de los individuos, según sus afinidades electivas, y se caracterizaban por relaciones horizontales,

sin jerarquías estamentales. En ellas se encontraron y formaron unas élites locales de signo reformista que compartían elementos comunes como su carácter interestamental, su conexión con las instituciones de gobierno creadas por los Borbones y un conjunto de valores compartidos sobre la educación, la razón, el mérito personal y la dedicación al servicio público (Imízcoz, 2025).

En estas sociedades se formó un primer «espacio público» en el que se estudiaban los asuntos públicos, se buscaban reformas, se opinaba libremente y se debatían y votaban sus resoluciones. La discusión libre de cuestiones que afectaban al gobierno de la monarquía, a la economía, a la sociedad, a la educación o a cuestiones morales como el lujo y la usura hicieron de estas sociedades lugares de confrontación política. La esfera política se formó en torno a estos debates, que hicieron de estas sociedades económicas el vector de una primera politización en la España de las últimas décadas del siglo XVIII (Artola e Imízcoz, 2022; Astigarraga, 2015, pp. 65-67, 80). Como en todo Occidente, en estas nuevas prácticas y experiencias societarias se fue configurando un imaginario común sobre cómo deberían ser la sociedad en su conjunto y el gobierno de los hombres para ser justos (Guerra, 1992, cap. 3).

Aunque la composición sociopolítica de estas sociedades está por investigar, parece que entre sus principales protagonistas destacaron los administradores reformistas del Estado borbónico, los conversos a la Economía Política, las élites militares formadas por el rey y los sectores regalistas del clero, a menudo relacionados entre sí por lazos de parentesco y de amistad (Franco Rubio, 2004, 2005; Imízcoz & Chaparro, 2009). De hecho, como hemos visto, los sectores políticos tradicionales de la magistratura, las oligarquías locales y una parte del clero mostraron reiteradamente su rechazo a la creación de estas sociedades y desprecio hacia sus actividades.

La acción de la corona, cooperando con sus nuevos agentes políticos, fue fundamental para la constitución de una estructura económica en la cual la lógica estatal y mercantil fue penetrando progresivamente, en detrimento de la lógica aristocrática y corporativa. Las reformas introducidas con la política de fomento fueron transfiriendo los mecanismos de protección y de asistencia, propios hasta entonces de la *Oeconomia* aristocrática, eclesiástica y corporativa, hacia el Estado, que fue asumiendo de forma creciente las funciones de asistencia, protección, utilidad y desarrollo.

Las reformas ilustradas prepararon, por lo tanto, las condiciones para el paso de un orden señorial, doméstico y corporativo, en que la autoridad y la protección estaban en manos de Dios, del *pater familias* y del señor (Imízcoz, 2024), a otro en que el Estado iba asumiendo funciones sociales crecientes y tendía a regular al conjunto de la sociedad.

De este modo, mientras la mayoría de la magistratura permanecía en su cultura jurisdiccional y administraba justicia, mientras la mayoría de la aristocracia continuaba en su cultura nobiliaria y gobernaba sus estados señoriales, mientras las élites

locales gobernaban el orden corporativo, en la administración ministerial se fue consolidando, en la segunda mitad del siglo, un gobierno de voluntad reformista que asumía una función transformadora de la sociedad, extendiendo sus competencias a nuevos campos, buscando reformas que superaran las rémoras de la tradición y legislando de forma cada vez más general: una deriva estatalista en la que se inició la formación del Estado contemporáneo como estado legislador, liberado —pretendidamente— de las trabas del entramado corporativo y de las limitaciones del orden jurisdiccional.

7. CONTRASTES, INERCIAS Y RESISTENCIAS EN LA ESPAÑA DEL REFORMISMO ILUSTRADO

Fuera de las redes de estas élites reformistas, la sociedad española seguía siendo profundamente tradicional. La mayoría de las élites había quedado al margen de las experiencias y encuentros transformadores de las nuevas instituciones y, al contrario, habían continuado en las prácticas, experiencias y relaciones de la economía doméstica, corporativa y señorial. La nobleza regional española parece reacia al espíritu de reforma ilustrado, como revela el ejemplo de la nobleza extremeña (Aragón, 1990, pp. 482). Los magistrados, guardianes del orden jurisdiccional, salieron a menudo en defensa del orden corporativo, resistiendo a la tendencia absolutista del gobierno ministerial. Así lo muestran, por ejemplo, la resistencia del Consejo de Castilla y el favor de jueces locales en defensa de los gremios, frente a las pretensiones de los discípulos de la Real Academia de Bellas Artes (Bédat, 1989, pp. 370-343; 345-356; Imízcoz, 2021, pp. 89-90).

Da la impresión de que el reformismo ilustrado solo se hizo efectivo allí donde las élites reformistas dominaban el gobierno local y tenían unas bases sociales de apoyo suficientes, como Madrid, las provincias vascas o el valle de Baztán. Al contrario, parece que los proyectos de reforma encontraron enormes dificultades, o ni tan siquiera se plantearon, allí donde dominaban los sectores tradicionales de la magistratura, las oligarquías urbanas y los cabildos eclesiásticos anclados en la cultura jurisdiccional y con intereses corporativos.

Lo vimos al observar la reacción de diferentes sectores sociales y geográficos con respecto a la orden que Carlos III dio en 1777 a todas las autoridades civiles y eclesiásticas de sus reinos de no construir obra de arquitectura sin pasar previamente por la censura de la Real Academia de San Fernando, con el objeto de desterrar el mal gusto del barroco en favor del buen gusto del neoclasicismo. Frente a las inercias del incumplimiento, como el que se observa en la catedral de Lugo, destaca el celo, por ejemplo, de eclesiásticos «jansenistas» que, al contrario, fueron agentes decididos de las reformas que incluso denunciaron a aquellas autoridades que incumplían la voluntad del rey (Imízcoz, 2021, pp. 84-89).

De modo semejante, son los miembros de las redes reformistas de las provincias vascas y del reino de Navarra los que hicieron efectivo el reformismo ilustrado en sus localidades, por ejemplo, en el campo asistencial. Así lo demuestran las creaciones de cuatro casas de misericordia en Guipúzcoa (Larrínaga, 2024), del hospicio de Vitoria, por la acción de Valentín de Foronda, de la casa de misericordia de Tudela (Salvador, 2016) o del hospicio de Elizondo, promovido por patricios locales baztaneses estimulados por sus primos de la corte. En todos estos lugares, los sectores reformistas dominaban el gobierno local y pudieron llevar a cabo sus reformas sin mayores obstáculos (Imízcoz, 2026, pp. 281-289).

En cambio, en las ciudades donde los reformistas ilustrados no dominaban el gobierno encontraron enormes resistencias. Un excelente ejemplo de ello es la oposición cerrada del regimiento y del cabildo eclesiástico de la ciudad de Tudela al proyecto de la Sociedad Económica Tudelana de establecer una casa de misericordia en la ciudad, entre 1778 y 1800. Este proyecto correspondía al llamamiento de Carlos III a crear hospicios, pero los miembros del regimiento y del cabildo entendían que la función de asistencia correspondía, según la tradición, a sus prerrogativas jurisdiccionales, y calificaron el proyecto como un «proyecto criminal… de una ambiciosa dominación contra los derechos y regalías de ambos cabildos», acusando a la Sociedad de ser

> un Cuerpo animado de ciertos espíritus ambiciosos que, bajo el especioso pretexto del bien común, solo aspira a establecer en el Pueblo una autoridad imperiosa que, si no se resiste, llegará a ser despótica con el predominio de sus ideas que, protegida del gobierno y por captar su favor, será siempre, con servil condescendencia, parcial de aquellas máximas que en el dictamen vulgar son interesantes al mayor poder y grandeza del Estado, pero perniciosas a la franqueza y libertad de los pueblos a quienes deprimen[4].

El lenguaje expresa de forma ejemplar el choque entre dos culturas políticas. En este caso, la resistencia llegó a extremos de violencia. Un regidor que colaboraba con el proyecto fue zarandeado en el regimiento y amenazado con sacarle el corazón y comer sus hígados (Guijarro Salvador, 2016, p. 262). En este caso, el proyecto solo salió adelante por la intervención personal de Carlos III, alertado porque el director de la Sociedad Tudelana, Felipe González de Castejón, era sobrino del secretario del Despacho de Marina, Pedro González de Castejón.

Seguramente, en los lugares donde no había reformistas ilustrados la cuestión ni se planteó y la política jurisdiccional corporativa continuó en su ser, por mucho que dijera el gobierno del Estado. Es probable que en la mayoría de los territorios las inercias antiguo-regimentales siguieran dominando, pero el estudio comparativo está por hacer.

4. AHN, Consejos, leg. 3.658/11, Tudela, 17 de diciembre de 1786.

8. REFLEXIONES FINALES

La consideración de la vitalidad del orden jurisdiccional hasta finales del siglo XVIII debería llevarnos no tanto a intentar limitar el alcance del reformismo y a propugnar el mantenimiento del orden jurisdiccional en España hasta muy avanzado el siglo XIX como a valorar la disrupción y contraste que supuso el reformismo ilustrado en la España de la segunda mitad del XVIII.

La Ilustración política constituyó probablemente la mayor disrupción ideológica de la Edad Moderna, con respecto a un orden gobernado por la tradición. La voluntad de reformas del absolutismo ilustrado chocó con enormes inercias y resistencias, lo que subraya la novedad radical que esta voluntad de reforma supuso a ojos de la mayoría social. Esto revela la vitalidad que continuaban teniendo las estructuras corporativas, religiosas y señoriales del Antiguo Régimen, sin duda mucho más vivas de lo que se había creído y, con ello, el enorme contraste entre las minorías reformistas y la mayoría de las élites del país y del pueblo llano.

Los magistrados habían sido el personal político por excelencia de la Monarquía de los Austrias, pero en el siglo XVIII y, especialmente en su segunda mitad, hay otro personal concurrente, en otras instituciones, y cada vez más con otra cultura política, de modo que, si se quiere hacer una antropología política de este momento de transición, ya no basta con escuchar una sola voz, la de los jueces, guardianes por antonomasia del orden jurisdiccional, sino que hay que escuchar las diferentes voces en presencia, tener en cuenta las diferentes culturas políticas en liza.

Esta historia fue profundamente diferencial. Creemos que la desigual presencia en los territorios de élites reformistas ilustradas o de élites tradicionales contribuye a explicar las diferencias territoriales. Es probable que en las regiones donde no hubo sectores reformistas de alguna consideración, las élites tradicionales prevalecieran, de modo que se mantuvo la tradición jurisdiccional y la sociedad continuó en su ser, sin tensiones graves. En cambio, la observación de los contrastes y fracturas internas que se produjeron en las tierras vascas, desde finales del siglo XVIII hasta la primera guerra carlista, tiende a mostrar que allí donde se formó un sector reformista e ilustrado de peso, hubo Ilustración efectiva y reformas, pero también se produjeron contrastes extremos en unas comunidades muy tradicionales que derivaron en fracturas internas extremadamente violentas (Imízcoz & Artola, 2017).

La explicación tradicional de este proceso por la historia social se hizo desde categorías analíticas de clase o de estamentos, que no funcionan (Cruz, 2000). La clave explicativa radicaría más bien en la diferencia de las experiencias y encuentros en que se forjaron las culturas políticas de unos actores sociales y de otros. Así lo resumía el conde de Guendulain, Joaquín Ignacio Mencos, al explicar cómo se dividió la nobleza navarra entre liberales y carlistas en la Primera Guerra Carlista:

> Puede asegurarse que la opinión popular, la de la clase media en general, y la de aquella Nobleza que podemos llamar más domiciliada en el país, pertenecían al partido del Pretendiente. Una parte del alto comercio y las casas (salvo raras excepciones) más relacionadas con la Corte y que contaban sus hijos en el Ejército nos habíamos declarado a favor de los derechos de las hijas del difunto Monarca[5].

Esto es, las diferencias ideológicas de las élites dirigentes no vendrían determinadas por una diferencia estamental o de clase, sino por la diferencia de experiencias y encuentros de los actores sociales: la diferencia entre aquellos que se habían formado en las experiencias del reformismo borbónico, en las instituciones de la Corte y en el ejército, y aquellos que había permanecido domiciliados en el país; esto es, que habían continuado enclavados en los horizontes de la tradición política y cultural.

Nuestro trabajo es un intento de historia social de las culturas políticas. Como muestran las redes de los reformistas vascos y navarros, las ideas y valores de los actores sociales se forman en determinadas experiencias y encuentros, se transmiten y circulan en determinadas redes sociales, pero dejan fuera de su conocimiento, o producen rechazo, en sectores con otras experiencias, de forma diferencial. Esta diversidad de experiencias explicaría por qué actores de una misma condición socioeconómica tuvieron valores y comportamientos políticos divergentes o, al contrario, por qué actores de diferentes clases o estamentos compartieron una misma cultura política.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de José María Imízcoz Beúnza.

Agradecimientos y financiación

Proyectos de I+D+i del Gobierno de España PID2020-114496RB-100, «Disrupciones y continuidades en el proceso de la modernidad, siglos XVI-XIX. Un análisis pluridisciplinar (Historia, Arte, Literatura)» (2020-2024). Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco IT1465-22, *Sociedades, Procesos, Culturas (siglos VIII-XVIII).*

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

5. *Memorias de Don Joaquín Ignacio Mencos, conde de Guendulain, 1799-1882*, Pamplona, Aramburu, 1952, p. 83.

9. BIBLIOGRAFÍA

Abbad, F., y Ozanam, D. (1992). *Les intendants espagnols du XVIIIe siècle*. Casa de Velázquez.

Andújar Castillo, F. (1991). *Los militares en la España del siglo XVIII: Un estudio social*. Universidad de Granada.

Andújar Castillo, F. (2000). Élites de poder militar: Las Guardias Reales en el siglo XVIII. En J. L. Castellano, J. P. Dedieu y M. V. López-Cordón Cortezo (Eds.), *La pluma, la mitra y la espada: Estudios de historia institucional en la Edad Moderna* (pp. 65-94). Marcial Pons.

Andújar Castillo, F. (Ed.). (2011). *El poder del dinero: Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen*. Biblioteca Nueva.

Anes, G. (1981). *Economía e «Ilustración» en la España del siglo XVIII*. Ariel.

Aragón Mateos, S. (1990). *La nobleza extremeña en el siglo XVIII*. Consejo Ciudadano de la Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner.

Aranburuzabala Ortiz de Zárate, Y. (2019). *Los caballeros vascos y navarros en el siglo XVIII: Honores, ascenso social y repercusiones en el territorio*. Universidad del País Vasco.

Armona y Murga, J. A. de. (2012). *Noticias privadas de casa útiles para mis hijos* (J. Álvarez Barrientos, J. M. Imízcoz, y Y. Aranburuzabala, Eds.). Trea.

Artola Renedo, A. (2013). *De Madrid a Roma: La fidelidad del episcopado en España (1760-1833)*. Trea.

Artola Renedo, A., Bermejo Mangas, D., y Chaparro Sáinz, Á. (2019). The making of an enlightened ruling class: Basque and Navarrese elites in the educational system of the Spanish Monarchy (1717-1808). *Espacio, Tiempo y Educación*, *6*(2), 35-58.

Artola Renedo, A., e Imízcoz Beunza, J. M. (2022). Politics, morals and politicisation in the eighteenth-century Spanish monarchy: The creation of a public sphere and its enemies. *Journal of Iberian and Latin American Studies*, *28*(2), 163-182. https://doi.org/10.1080/14701847.2022.2094623

Astigarraga Goenaga, J. (2015). Economic societies and the politicisation of the Spanish Enlightenment. En J. Astigarraga (Ed.), *The Spanish Enlightenment revisited* (pp. 65-80). Voltaire Foundation.

Astigarraga Goenaga, J. (2017). *La política del comercio: Cultura económica y traducción en la Ilustración española (1743-1794)* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].

Bédat, C. (1989). *La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808): Contribución al estudio de las influencias y de la mentalidad artística en la España del siglo XVIII*. Fundación Universitaria Española.

Bermejo Mangas, D. (2022). *La caída de una clase política: Los reformistas vascos en la crisis del Antiguo Régimen (1764-1814)*. Universidad del País Vasco.

Bertrand, M., Andújar Castillo, F., y Glesener, T. (Eds.). (2017). *Gobernar y reformar la monarquía: Los agentes políticos y administrativos en España y América (siglos XVI-XIX)*. Albatros.

Calvo Maturana, A. (2013). *Cuando manden los que obedecen: La clase política e intelectual de la España preliberal (1780-1808)*. Marcial Pons.

Carmagnani, M. (2016). En los orígenes del liberalismo: Revolución atlántica y nacimiento de la economía política. En E. García Monerris, I. Frasquet y C. García Monerris (Dirs.), *Cuando todo era posible: Liberalismo y antiliberalismo en España e Hispanoamérica (1740-1842)* (pp. 17-30). Sílex.

Caro Baroja, J. (1969). *La hora navarra del XVIII: Personas, familias, negocios e ideas*. Diputación Foral de Navarra-Instituto Príncipe de Viana.

Castejón, P. (2020). *Réformer l'empire espagnol au XVIIIe siècle: Le système de gouvernement de José de Gálvez (1765-1787)*. Presses Universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.99672

Castellano, J. L. (2006). *Gobierno y poder en la España del siglo XVIII*. Editorial Universidad de Granada.

Castellano, J. L., y Dedieu, J. P. (Dirs.). (1998). *Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l'Ancien Régime*. CNRS.

Castellano, J. L., López-Cordón Cortezo, M. V., y Dedieu, J. P. (Eds.). (2000). *La pluma, la mitra y la espada: Estudios de historia institucional en la Edad Moderna*. Marcial Pons.

Chaparro Sáinz, Á. (2011). *Educarse para servir al rey: El Real Seminario Patriótico de Vergara (1776-1804)*. Universidad del País Vasco.

Clavero, B. (1991). *Antidora: Antropología católica de la economía moderna*. Giuffrè.

Cruz Valenciano, J. (2000). *Los notables de Madrid: Las bases sociales de la Revolución liberal española*. Alianza.

Dedieu, J. P. (2001). Dinastía y élites de poder en el reinado de Felipe V. En P. Fernández Albaladejo (Ed.), *Los Borbones: Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII* (pp. 381-400). Marcial Pons.

Dedieu, J. P. (2004). Les grandes bases de données: Une nouvelle approche de l'histoire sociale: le système Fichoz. *Revista da Faculdade de Letras. História*, *5*(1), 101-114.

Dedieu, J. P. (2005). La muerte del letrado. En F. J. Aranda Pérez (Coord.), *Letrados, juristas y burócratas en la España moderna* (pp. 479-512). Universidad de Castilla-La Mancha.

Dedieu, J. P. (2010). *Après le roi: Essai sur l'effondrement de la monarchie espagnole*. Casa de Velázquez. https://doi.org/10.4000/books.cvz.15967

Dedieu, J. P. (2011). El aparato de gobierno de la monarquía española en el siglo XVIII. En G. Pérez Sarrión (Coord.), *Más Estado y más mercado: Absolutismo y economía en la España del siglo XVIII* (pp. 53-74). Sílex.

Dedieu, J. P. (2019). *El canto de cisne del Imperio / El canto de cisne de la grandeza, o cómo gobernaban el imperio*. HAL Open Science. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01695840

Degenne, A., y Forsé, M. (1994). *Les réseaux sociaux: Une analysis structurale en sociologie*. Armand Colin.

Demerson, P. (1971). El escrito del conde de Teba: El «Discurso sobre la autoridad de los ricos hombres». *Hispania*, (117), 137-156.

Egido López, T. (2002). *Prensa clandestina española del siglo XVIII: «El Duende Crítico»*. Universidad de Valladolid.

El duende crítico de Madrid. (1844). Imprenta de D. Domingo Vila.

Felices de la Fuente, M. M. (2013). *La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo XVIII (1701-1764): Entre el mérito y la venalidad*. Universidad de Almería.

Fernández Sebastián, J. (1990). Los subscriptores vasco-navarros de prensa periódica en la segunda mitad del siglo XVIII. *Estudios de Historia Social*, (52-53), 195-219.

Franco Rubio, G. (2004). Militares ilustrados y prácticas de sociabilidad. *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, (22), 369-402. https://doi.org/10.14198/RHM2004.22.13

Franco Rubio, G. (2005). El ejercicio del poder en la España del siglo XVIII: Entre las prácticas culturales y las prácticas políticas. *Mélanges de la Casa de Velázquez*, *35*(1), 51-77. https://doi.org/10.4000/mcv.1605

Galland Seguela, M. (2008). *Les ingénieurs militaires espagnols de 1710 à 1803: Étude prosopographique et sociale d'un corps d'élite*. Casa de Velázquez. https://doi.org/10.4000/books.cvz.21254

García Hurtado, M. R. (2013). *El arma de la palabra: Los militares españoles y la cultura escrita en el siglo XVIII*. Universidade da Coruña.

Garriga Acosta, C. (2004). Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen. *Istor*, (16), 1-21.

Giménez López, E. (2022). *Tempestad en tiempo de las Luces: La extinción de la Compañía de Jesús*. Cátedra.

González Alonso, B. (1995). Las raíces raíces ilustradas del ideario administrativo del moderantismo español. En F. Tomás y Valiente (Ed.), *De la Ilustración al Liberalismo: Symposium en honor al profesor Paolo Grossi* (pp. 157-196). Centro de Estudios Constitucionales.

González Enciso, A. (2003). *Felipe V: La renovación de España. Sociedad y economía en el reinado del primer Borbón*. Eunsa.

González Fuertes, M. A. (2022). *La Cámara de Castilla y la magistratura borbónica castellana (1700-1834)* [Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid].

Gorraiz Gonzalo, N. (2017). La clase política en la Orden de Carlos III: Servicio al rey y redes de relaciones en la alta administración. *Magallánica. Revista de Historia Moderna*, *4*(7), 121-144.

Guerra, F. X. (1992). *Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*. Mapfre.

Guerrero Elecalde, R. (2012). *Las élites vascas y navarras en el gobierno de la Monarquía borbónica: Redes sociales, carreras y hegemonía en el siglo XVIII (1700-1746)*. Universidad del País Vasco.

Guijarro Salvador, P. (2016). *El espíritu ilustrado en Navarra: Los marqueses de San Adrián y la Real Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público*. Gobierno de Navarra.

Herrero Fernández-Quesada, M. D. (1990). *La enseñanza militar ilustrada: El Real Colegio de Artillería de Segovia*. Academia de Artillería.

Hespanha, A. M. (1993). *La gracia del derecho: Economía de la cultura en la Edad Moderna*. Centro de Estudios Constitucionales.

Imízcoz Beunza, J. M. (1996). Comunidad, red social y élites: Un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen. En J. M. Imízcoz Beunza (Dir.), *Élites, poder y red social: Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna* (pp. 13-50). Universidad del País Vasco.

Imízcoz Beunza, J. M. (2004). Actores, redes, procesos: Reflexiones para una historia más global. *Revista da Faculdade de Letras. História*, (5), 115-140.

Imízcoz Beunza, J. M. (2010). El capital relacional: Relaciones privilegiadas y redes de influencia en el Estado español del siglo XVIII. En J. M. Imízcoz Beunza y O. Oliveri Korta (Eds.), *Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen* (pp. 227-281). Sílex.

Imízcoz Beunza, J. M. (2012). Los agentes de la monarquía borbónica: Un contexto para Armona. En J. A. de Armona y Murga, *Noticias privadas de casa útiles para mis hijos* (J. Álvarez Barrientos, J. M. Imízcoz y Y. Aranburuzabala, Eds., pp. 17-47). Trea.

Imízcoz Beunza, J. M. (2014). Los navarros en la Corte: La Real Congregación de San Fermín (1683-1808). En B. J. García García y Ó. Recio Morales (Eds.), *Las corporaciones de nación en la monarquía hispánica (1580-1750): Identidad, patronazgo y redes de sociabilidad* (pp. 141-212). Fundación Carlos de Amberes.

Imízcoz Beunza, J. M. (2015). Entre apertura y enclavamiento: Las redes de los navarros en la primera globalización (1512-1833). *Príncipe de Viana*, (261), 164-167.

Imízcoz Beunza, J. M. (2017a). El paradigma relacional: Actores, redes, procesos para una historia global. En M. Bertrand, F. Andújar Castillo y T. Glesener (Eds.), *Gobernar y reformar la monarquía: Los agentes políticos y administrativos en España y América (siglos XVI-XIX)* (pp. 65-80). Albatros.

Imízcoz Beunza, J. M. (2017b). La clase política del reformismo borbónico: Las redes sociales del cambio. *Magallánica. Revista de Historia Moderna*, *4*(7), 12-62.

Imízcoz Beunza, J. M. (2021). La Real Academia de Bellas Artes y el siglo del buen gusto: Vanguardias reformistas y resistencias en la España del siglo XVIII. En F. R. Bartolomé García y E. Ortega Mentxaka (Coords.), *Élites, promoción artística e imagen del poder (siglos XV-XIX)* (pp. 45-114). Universidad del País Vasco.

Imízcoz Beunza, J. M. (2023). The political and cultural class of Enlightened reformism: Avant-garde networks, reform, and resistance in 18th-century Spain. En F. Chacón Jiménez (Ed.), *Changing social environments in Spain: Families, new solidarities and hierarchical breakdown (16th-20th centuries)* (pp. 177-262). Peter Lang.

Imízcoz Beunza, J. M. (2024a). Estudiantes e instituciones educativas en el siglo XVIII: La formación de las élites vascas y navarras en las vías de reclutamiento del reformismo borbónico. En R. Cózar Gutiérrez y C. Vega Gómez (Eds.), *Estudiantes: Familias, curso de vida y formación en la España moderna* (pp. 97-140). Trea.

Imízcoz Beunza, J. M. (2024b). *[Referencia pendiente de completar por el autor]*.

Imízcoz Beunza, J. M. (2025). «El buen republicano»: Una revisión del modelo de «político» en la Ilustración vasca. En M. García Fernández, J. Esteban Ochoa de Eribe y J. P. Blanco (Eds.), *Modelos de vida: Procesos de civilización y emergencia del yo a finales del Antiguo Régimen* (pp. 177-222). Trea-Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Imízcoz Beunza, J. M. (2026). Los navarros y la Monarquía borbónica: De «la hora del XVIII» a la fractura del reino. En M. Galán Lorda (Dir.), *Modelos territoriales en la construcción de Estados: Navarra en la Monarquía hispánica desde una perspectiva comparada* (pp. 263-318). Aranzadi.

Imízcoz Beunza, J. M., y Arroyo Ruiz, L. (2011). Redes sociales y correspondencia epistolar: Del análisis cualitativo de las relaciones personales a la reconstrucción de redes egocentradas. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, *21*, 98-138. https://doi.org/10.5565/rev/redes.419

Imízcoz Beunza, J. M., y Artola Renedo, A. (Coords.). (2017). Redes sociales, procesos de cambio cultural y conflicto en las provincias vascas y Navarra (1700-1839) [Número especial]. *Historia Social*, (89).

Imízcoz Beunza, J. M., y Bermejo Mangas, D. (2016). Grupos familiares y redes sociales en la carrera militar: Los oficiales de origen vasco y navarro en el ejército y la marina, 1700-1808. *Cuadernos de Historia Moderna*, *41*(2), 497-538. https://doi.org/10.5209/CHMO.54199

Imízcoz Beunza, J. M., y Bermejo Mangas, D. (2017). Genealogía social de una clase dirigente: Auge, reproducción y caída, 1700-1833. *Magallánica. Revista de Historia Moderna*, *4*(7), 65-92.

Imízcoz Beunza, J. M., y Chaparro Sáinz, Á. (2009). Los orígenes sociales de los ilustrados vascos. En J. Astigarraga, M. V. López-Cordón y J. M. Urkia (Eds.), *Ilustración, ilustraciones* (Vol. 2, pp. 993-1027). Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

Imízcoz Beunza, J. M., y García del Ser, M. V. (2008). El alto clero vasco y navarro en la monarquía hispánica del siglo XVIII: Bases familiares, economía del parentesco y patronazgo. En R. Aguirre y L. Enríquez (Coords.), *La Iglesia hispanoamericana, de la colonia a la república* (pp. 125-187). Universidad Nacional Autónoma de México.

Imízcoz Beunza, J. M., y Guerrero Elecalde, R. (2012). Negocios y clientelismo político: Los empresarios norteños en la economía de la monarquía borbónica. En J. Ocampo Suárez-Valdés (Ed.), *Empresas y empresarios en el norte de España (siglo XVIII)* (pp. 331-362). Trea.

Larriba, E. (2013). *El público de la prensa en España a finales del siglo XVIII (1781-1808)*. Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Larrínaga Ortiz, M. (2024). *Alcance y límites del proyecto ilustrado: El impacto de las reformas asistenciales y de orden público en Guipúzcoa (1750-1850)* [Tesis doctoral inédita, Universidad del País Vasco].

López-Cordón Cortezo, M. V. (1996). Cambio social y poder administrativo en la España del siglo XVIII: Las Secretarías de Estado y del Despacho. En J. L. Castellano (Ed.),

Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen (pp. 29-155). Universidad de Granada.

López Díaz, M. (Ed.). (2021). *Monarquías ibéricas, poderes y territorios: Instituciones, nobleza y dinámica política (siglo XVIII)*. Sílex.

Martínez Borrallo, A. (2022). *Comerciantes vascos y navarros en Madrid: Una élite mercantil ilustrada al servicio de la Monarquía española (1700-1830)*. Universidad del País Vasco.

Mestre Sanchís, A., y Pérez García, P. (2004). La cultura en el siglo XVIII español. En L. Gil Fernández (Ed.), *La cultura española en la Edad Moderna* (pp. 385-538). Ediciones Istmo.

Molas Ribalta, P. (1980). La historia social de la administración. En P. Molas Ribalta (Coord.), *Historia social de la administración española: Estudios sobre los siglos XVII y XVIII* (pp. 9-20). CSIC-Institución Milà i Fontanals.

Molas Ribalta, P. (2008). *Los gobernantes de la España moderna*. Actas.

Molina Recio, R. (2020). La evolución del papel político de la nobleza española de la Edad Moderna a la Contemporánea: El ejemplo de los Fernández de Córdoba. *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, (38), 144-182. https://doi.org/10.14198/RHM2020.38.05

Morales Moya, A. (1987). *Reflexiones sobre el Estado español del siglo XVIII*. Instituto Nacional de Administración Pública.

Nava Rodríguez, M. T. (Ed.). (2017). *De ilustrados a patriotas: Individuo y cambio histórico en la Monarquía española*. Sílex.

Ortega del Cerro, P. (2018). *El devenir de la élite naval: Experiencias de los oficiales de la Armada en tiempos de cambio (inicios del siglo XVIII-finales del siglo XIX)*. Sílex.

Ortega del Cerro, P. (2019). The Spanish Monte Pío Militar: Institutional protection for the widows and other relatives of naval officers, 1730-1900. *Social Science History*, *43*, 813-833. https://doi.org/10.1017/ssh.2019.37

Peña Ramos, J. (2024). *Los lazos internos que tejieron una clase política: Las alianzas matrimoniales de las élites en la Monarquía de Carlos III (1759-1788)* [Tesis doctoral inédita, Universidad del País Vasco].

Pérez Sarrión, G. (2012). *La península comercial: Mercado, redes sociales y Estado en España en el siglo XVIII*. Marcial Pons Historia.

Portillo Valdés, J. M. (2000). *Revolución de nación: Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Pro Ruiz, J. (2019). *La construcción del Estado en España: Una historia del siglo XIX*. Alianza.

Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. (Ed.). (2002). *Historia de la Universidad de Salamanca: Vol. 1. Trayectoria histórica e instituciones vinculadas*. Universidad de Salamanca.

Rubio Pobes, C. (2021). *El laberinto de la representación: Partidos y culturas políticas en el País Vasco y Navarra (1875-2020)*. Tecnos.

Schneider, C., y Avenburg, K. (2015). Cultura política: Un concepto atravesado por dos enfoques. *Postdata*, *20*(1), 109-131.

Thompson, E. P. (1977). *La formación histórica de la clase obrera: Inglaterra, 1780-1832*. Laia.

Torales Pacheco, M. C. (2001). *Ilustrados en la Nueva España: Los socios de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País*. Universidad Iberoamericana.

Torres Sánchez, R. (2016). *Military entrepreneurs and the Spanish contractor state in the eighteenth century*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198784111.001.0001

Usoz, J. (2015). Political economy and the creation of the public sphere. En J. Astigarraga (Ed.), *The Spanish Enlightenment revisited* (pp. 118-119). Voltaire Foundation.

Velasco Moreno, E. (2000). *La Real Academia de la Historia en el siglo XVIII: Una institución de sociabilidad*. Boletín Oficial del Estado-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481345374

LINAJES DE PODER MUNICIPAL EN GALICIA: LA PRESENCIA EN EL CABILDO CATEDRALICIO COMPOSTELANO DE LAS FAMILIAS DE LA ÉLITE ORENSANA EN EL SIGLO XVIII

Municipal Power Lineages in Galicia: The Presence of Elite Families from Ourense in the Cathedral Chapter of Santiago de Compostela in the Eighteenth Century

María SEIJAS MONTERO
Universidade de Vigo
mariaseijas@uvigo.gal

Antonio PRESEDO GARAZO
Universidade de Vigo
antonio.presedo@uvigo.gal

Recibido: 07/12/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Entre las estrategias desarrolladas por las familias que integran las oligarquías urbanas gallegas durante la Edad Moderna, el acomodo de algunos de sus segundogénitos en uno de los cinco cabildos catedralicios galaicos merece un lugar ciertamente destacado. Tomando en consideración este dato, nos hemos propuesto ahondar en el siguiente trabajo en esta cuestión centrándonos en aquellas familias de los munícipes de la ciudad de Ourense que, durante el siglo XVIII, lograron situar a alguno de sus vástagos en el tercer cabildo catedralicio más importante de la Corona de Castilla: el de Santiago de Compostela. Para ello, examinaremos sus respectivas trayectorias prestando especial atención a su relación

con el regimiento orensano. Asimismo, analizaremos cómo se produjo la incorporación de estos eclesiásticos a dicho cabildo catedralicio, junto con su trayectoria capitular. Y valoraremos cuál fue su contribución particular al reforzamiento de estas familias de poder de las cuales proceden.

Palabras clave: oligarquía urbana; regimiento urbano; ciudad de Ourense; alto clero secular; cabildo catedralicio compostelano; reforzamiento familiar; siglo XVIII.

ABSTRACT: Among the strategies developed by the families of Galicia's urban oligarchies during the early modern period, particular importance should be attached to the incorporation of some of their younger sons into one of the five Galician cathedral chapters. Focusing on this issue, this article studies the families of the aldermen of the city of Ourense who succeeded in placing one of their younger sons in the third most important cathedral chapter of the Crown of Castile: the cathedral chapter of Santiago de Compostela, during the eighteenth century. It examines their trajectories, paying particular attention to the relationship between these families and the town council. It also analyses the specific ways in which their ecclesiastical relatives were integrated into the cathedral chapter, as well as their subsequent careers within that institution. Finally, it examines the contribution made by these clergymen to the strengthening of their own families.

Keywords: urban oligarchies; town council; city of Ourense; hight secular clergy; cathedral chapter of Santiago de Compostela; familial reinforcement; Eighteenth century.

1. INTRODUCCIÓN

En la profusa bibliografía que recoge, por una parte, las investigaciones sobre las élites municipales y, por otra, las centradas en el alto clero catedralicio en los dominios peninsulares de la Monarquía española durante la Edad Moderna, se ha puesto de manifiesto la importancia que tenían para los miembros de los cabildos municipales y catedralicios los vínculos de parentesco y las relaciones sociales establecidas dentro y fuera de dichas instituciones, así como la relevancia no menor de sus redes e influencias familiares[1]. En Galicia, han recibido un impulso notable en

1. La relación de títulos es prolija, así que remitimos a los trabajos que se citan en el presente artículo y al estado de la cuestión de López (2004) sobre el poder municipal y oligarquías urbanas en Galicia, y los más recientes de Seijas y Rodicio (2016, pp. 231-238), Barrio

la última década debido a las aportaciones que, para estas poderosas corporaciones locales, se han venido elaborando por parte del grupo que dirige María López Díaz, desde el cual se ha privilegiado el estudio del poder y las instituciones políticas en la primera mitad del siglo XVIII.

En este marco, una de sus líneas de trabajo se ha centrado en las familias de poder local de acuerdo con las pautas metodológicas fijadas por dicha historiadora, que dan preferencia al prisma institucional a la hora de examinar sus trayectorias (López, 2011b, 2013b, pp. 188-200). Tomando en consideración la evolución que experimenta el regimiento de la ciudad de Ourense durante el siglo XVII y décadas iniciales del XVIII (López, 2011a, 2013a), han visto la luz una serie de estudios de caso de familias estrechamente relacionadas con este (Peláez, 2018; Presedo, 2016b, 2020a, 2020b; Rionegro, 2013), a las cuales podemos añadir otras dos más para el concejo de Santiago, que, a través de estrategias matrimoniales interprovinciales, consolidaron lazos de parentesco con sus homónimas aurienses (López & Presedo, 2022; Seijas, 2021). Indistintamente nos fijemos en una localidad u otra, todas forman parte de una minoría elitista —más numerosa en la primera por efecto del acrecentamiento municipal—, en la que predominan quienes proceden de la pequeña y mediana nobleza provincial (López, 1991, pp. 141-142, 2011a, pp. 265-266); y que se han incorporado a la principal institución política de la provincia (el concejo de la capital provincial), a través del servicio de un oficio (o varios) en su regimiento por parte de uno o varios de sus parientes. Una situación que intentan se perpetúe en el tiempo como uno de los símbolos de identidad más eminentes de sus respectivas estirpes[2], tras haberse integrado en la oligarquía urbana (Aranda, 1999, pp. 191–193; García, 2021, pp. 228-250; Hernández, 1995, pp. 237-245; Irles, 1996, pp. 82-86; López, 2013b, pp. 188-200).

A su vez, los cabildos catedralicios de ambas ciudades también han sido objeto de análisis por parte de este mismo equipo, permitiendo subrayar no solo el papel destacado que desempeñaron las relaciones estrechas que mantienen estos capitulares con otras élites eclesiásticas y civiles, sino asimismo su rol en el afianzamiento socioeconómico de sus propias familias (Presedo, 2015a, pp. 184-190; Rodicio, 2016; Seijas, 2016, pp. 269-279; Seijas & Rodicio, 2017, pp. 412-414, 424-427)[3]. Naturalmente, se trata de cuestiones abordadas en los estudios de caso, sobre todo en aquellos que han examinado las alianzas interprovinciales (López & Presedo, 2022; Seijas, 2021); pero el haber dirigido la pesquisa histórica hacia estos prebendados, ha

(2017, pp. 61-64) y Caro (2023, pp. 16-27) para los cabildos catedralicios y sus integrantes. Una amplia panorámica de la producción internacional sobre los capítulos eclesiásticos puede verse en Díaz Rodríguez (2010, pp. 82-99).

2. Véase complementariamente para la villa de Baiona, González (2016, pp. 351-353).
3. Para el cabildo catedralicio de Tui, véase, González (2018, pp. 1824-1828).

contribuido a resaltar la aportación de los segundogénitos a la reproducción social de las familias de poder.

Combinando ambas perspectivas, centramos nuestra atención, en esta ocasión, en aquellas familias de la élite concejil auriense que en exclusiva consiguieron situar a algunos de sus miembros en el cabildo catedralicio de Santiago. Una poderosísima corporación en la Galicia antiguo-regimental, que, al igual que los de las otras cuatro Iglesias-catedrales galaicas, se convirtió en uno de los destinos más cotizados entre los segundones de la pequeña y mediana nobleza regional (Iglesias, 1996, pp. 436-438; Migués & Presedo, 2012, p. 302; Saavedra, 1985, pp. 548-549); con el añadido de que el cuerpo capitular compostelano era el tercero en importancia en la Corona de Castilla después de Toledo y Sevilla. Sobre esta base, entre nuestros objetivos figura, en primer término, delimitar su singularidad, teniendo presentes las características sociológicas de la oligarquía orensana en el Setecientos, sin perder de vista los hitos más sobresalientes que marcan la evolución del regimiento con posterioridad a la incorporación definitiva de la ciudad al realengo en 1628, puesto que los cambios institucionales condicionan, en mayor o menor medida, sus trayectorias familiares. La siguiente fase de nuestro trabajo nos permitirá cubrir, en segundo lugar, otro objetivo que esperamos nos ayude a encontrar la respuesta a dos preguntas complementarias entre sí que nos hemos formulado. A saber, analizar las implicaciones que para estas estirpes tiene justamente dicho logro[4]: ¿su presencia en esta poderosa institución eclesiástica favoreció el afianzamiento de alianzas con otras homólogas de esta y otras provincias, siguiendo pautas análogas a las ya registradas para otros casos previamente estudiados (López & Presedo, 2022; Seijas, 2021)? y ¿cuál fue y en qué se tradujo la aportación concreta de estos segundones —prebendados compostelanos— a la reproducción social de sus familias?

Para alcanzar nuestra meta y responder a los interrogantes planteados, nos hemos decantado por el referido enfoque metodológico que prima el prisma institucional al examinar las trayectorias familiares de las élites locales gallegas. Aquel dota a estas de un armazón identitario que consideramos imprescindible a la hora de identificarlas significativamente en el seno de la sociedad urbana a la cual pertenecen, al asociarlas con la/s institución/es que les permite/n tomar contacto con el poder[5]. En este

4. No figura pues entre nuestros objetivos el examen de la estructura económica y niveles de riqueza de estas familias.

5. Desde esta perspectiva, los niveles «de honor, fortuna, consideración social y conciencia de la propia estimación que son inherentes a las élites» (Eiras, 1984, p. 122) se convierten, por tanto, en variables dependientes, toda vez que la variable independiente viene dada por la incorporación del sujeto a «las clases dirigentes locales y provinciales» (Gil Pujol, 1983, pp. 75-77). O, incluso en términos más precisos: «la minoría de familias que controlaban el poder municipal en las siete ciudades capitales de provincia gallegas, que desde 1623 comparten además el derecho de hablar en las Cortes de Castilla en nombre del Reino» (López, 2011b, p. 386).

sentido, su análisis se ve notablemente enriquecido por el estudio de la dinámica institucional, máxime si esta puede llegar a influir en una etapa dada en la configuración de la composición social de sus integrantes, como de hecho se ha constatado en el caso auriense. Obviamente, como no podía ser de otra manera, también hemos atendido a los factores que condicionan, a nivel generacional e intergeneracional, la reproducción social de estas familias que presentan como característica común el haber colocado a un vástago en el citado cabildo catedralicio[6]. Siempre teniendo presente que, al tratar de las estrategias familiares puestas en práctica por las élites urbanas, «una buena reconstrucción de familias abre amplias posibilidades de tratamiento» (López, 2011b, p. 393); y que estas contribuyeron, junto a los posibles vínculos relacionales consolidables —alianzas con otras familias o grupos familiares y relaciones de amistad, clientelismo y patronazgo— a generar redes sociales más o menos sólidas que podían dar lugar a «una trayectoria de intercambios de servicios y favores, y seguían siendo eficaces en la medida en que se activaban y renovaban efectivamente» (Imízcoz, 2009, p. 91)[7].

2. LA OLIGARQUÍA URBANA ORENSANA EN EL SETECIENTOS

La reintegración de la ciudad de Ourense al realengo durante el reinado de Felipe IV fue seguida de un incremento en la planta municipal que culmina en 1630-1659, quintuplicándose sus efectivos entre la primera mitad del siglo XVI y finales del XVII, al pasar de 8 a 39-40 oficios (López, 2011a, p. 163, 2013a, pp. 110-111, 2013b, pp. 167-170). Dicha inflación en toda regla de los oficios consistoriales estuvo acompañada de un aumento del número de familias con posibilidades de servir uno de ellos, bien renunciable o bien adquirido y patrimonializado, a los cuales hemos de añadir las tenencias de regiduría a cuyo nombramiento tienen derecho algunos de los titulares de estos segundos. Si atendemos a su composición social, sobresalen aquellas que proceden de la pequeña y mediana nobleza provincial —o *fidalguía*— (Presedo, 2013), ora se trate de linajes ya consolidados en el siglo precedente y que refuerzan su posición en el concejo en el Seiscientos, ora de nuevas familias hidalgas

6. En este marco metodológico concreto, «La familia desborda por extensión y funciones la unidad de residencia» (Chacón, 1995, p. 77).

7. Brevemente, entre las fuentes documentales que hemos consultado para reconstruir las trayectorias de las familias que se ajustan a la casuística señalada, figuran los libros de actas sacramentales procedentes de los archivos parroquiales orensanos, fondos de protocolos notariales depositados en diferentes archivos históricos y documentación familiar privada que se ha conservado para alguna de ellas. Asimismo, en lo concerniente a los mecanismos de acceso a ambas instituciones, se han revisado distintos fondos del Archivo Catedralicio de Santiago (particularmente los expedientes de limpieza de sangre de los capitulares) y, para el regimiento orensano, ha resultado imprescindible la exhaustiva base de datos elaborada por López (2013b, pp. 209-220).

que sobresalen en esta etapa, en ambos casos inicialmente muy ligadas al ámbito rural y que, conforme avance esta centuria, irán urbanizando gradualmente sus hábitos culturales tras incorporarse a la oligarquía. Así, sus solares originarios no acostumbran a ubicarse a gran distancia de la capital provincial, en comarcas vitivinícolas o próximas a ellas, circunscribiéndose sus intereses básicamente al ámbito local, comarcal e incluso provincial (López & Presedo, 2022, pp. 108, 125-126; Presedo, 2016, pp. 232-237, 2020b, pp. 185-191; Rionegro, 2013); y se hallan inmersas en procesos de movilidad social ascendente y/o de afianzamiento del *status* previamente adquirido, de tal manera que el acceso a la condición de munícipe representa una pieza clave —en alguna de ellas incluso su culminación— entre los diversos mecanismos y vías de promoción de los cuales se valen (Hernández, 2004). Junto a estas, figuran otras estirpes vinculadas igualmente a la nobleza provincial con probada vocación urbana, lo cual no es óbice para que intenten extender su radio de influencia al hinterland rural de la ciudad, y, llegado el caso, hacia áreas geográficas más distantes, compartiendo intereses y estrategias económicas afines con el sector anterior, como también a la hora de asegurarse un puesto entre la oligarquía ciudadana (Peláez, 2018; Presedo, 2020a). Y, en tercer lugar, otras familias con un perfil socioprofesional más diverso, mayoritariamente relacionadas con el mundo curial, el ámbito miliciano y, bastantes menos, de la escasa y reducida burguesía provincial ligada a las finanzas y el comercio (López, 2011a, pp. 185-186).

En la segunda mitad del siglo XVII, aun compartiendo intenciones de promoción próximas, estas cuentan no obstante con niveles de honor y *status* diferenciados, conseguidos indistintamente tanto antes como después de haber obtenido la preciada plaza de munícipe: puestos en el Santo Oficio (especialmente familiaturas) e instituciones eclesiásticas (sobre todo en el cabildo catedralicio orensano), hábitos de una orden militar, otros oficios relacionados con el ejercicio de la justicia, honores vinculados a la milicia (Presedo, 2023), acceso a pequeños cotos (Presedo, 2015b), etc.[8]. Dejando al margen su solar originario, entre su particular capital simbólico sobresale su primera residencia estratégicamente localizada en el plano de la ciudad, en cuya fachada exhiben sus escudos de armas (Presedo, 2019a, pp. 135-142), las preeminencias de que disfrutan en el espacio sagrado (singularmente en la basílica catedralicia) (Presedo, 2019b, pp. 112-113, 123-125) y, desde luego, la propia condición de capitulares que les reporta un reconocimiento social claramente identificable por quienes conforman la sociedad orensana del momento.

A medida que nos acerquemos al tránsito del siglo XVII al XVIII, y ya manifiestamente en las décadas iniciales de este segundo, la oligarquía auriense irá adquiriendo un perfil progresivamente menos permeable a las nuevas incorporaciones, que se va a

8. Véanse, para distintos contextos peninsulares, Hernández (1995, pp. 224-228), López (1996, pp. 89-97), Irles (1996, pp. 147-174) y Aranda (1999, pp. 268-328).

reforzar conforme avance el Setecientos «debido al cierre del grupo» (López, 2011a, p. 266). En este sentido, la política matrimonial y las alianzas familiares desempeñan un papel importante, con dotes que pueden llegar a alcanzar los 110 000 reales[9] y casamientos calculados con meticulosidad que facilitan la coincidencia de varios capitulares en el consistorio unidos por lazos de parentesco (Presedo, 2020b, pp. 193-195). Es entonces cuando algunos consiguen incorporarse a la nobleza titulada —marquesados de San Saturnino y Bóveda de Limia en 1688 y 1700 respectivamente (Felices, 2012, p. 125; Presedo, 2020a, p. 199)—, a los cuales se irán sumando otros pocos ya avanzada la centuria dieciochesca —condados de Borraxeiros y Troncoso, ambos en 1762—, incluso alguno de ellos tras recibirlo en merced en Nápoles —marquesado de Bosqueflorido en 1736—, y otros pocos más cuyas casas se acabarán agregando, a través de la política matrimonial, a otras que ya pertenecen a la alta nobleza —entronque de los Armada de Vide con los marqueses de santa Cruz de Ribadulla (título concedido en 1688), de los Boán de Guizamonde con los condes Oleiros y Quirós (ídem en 1716), y de los Ulloa y Taboada de A Albertesga con los condes de Ximonde (ídem en 1766) (Acuña, 2002, pp. 44-45; Gallego, 1999, p. 132; López & Presedo, 2022, pp. 110, 123-124; Presedo, 2020b, pp. 187-191)—. Pero, por regla general, continúan predominando quienes proceden de niveles más bajos de la jerarquía nobiliaria provincial, con algunos de los cuales llegan a establecer eventualmente lazos de consanguinidad sujetos de la reducida burguesía orensana, si bien a un ritmo menor y más selectivamente que en el siglo previo, puesto que, tal como ha precisado López Díaz (2011a, p. 266), «son pocos y en general no bien aceptados por la oligarquía tradicional».

Este cierre de la oligarquía tradicional, que trae consigo un acotamiento social de sus integrantes y que cuaja en las primeras décadas del siglo XVIII, coincide en el tiempo con otros dos procesos que inciden directamente en la dinámica política de la institución. En primer lugar, el exceso de asistentes a los consistorios debido a la concurrencia de los titulares de los oficios junto con algunos de sus tenientes, acabará por generar ciertos desórdenes en su regular funcionamiento que fueron palpables en 1692, cuya solución requerirá de un dictamen regio en 1713, mediante el cual se limita el número de capitulares encargados de las tareas de gobierno del concejo a tan solo 13 que se deben suceder en turnos rotatorios trienales. Y coincidiendo con esto, en segundo lugar, una vez puesta en marcha dicha rotación trienal, comienza a aumentar el absentismo municipal que irá *in crescendo* a partir de la

9. Para ejemplos de dotes que abonan en dicha etapa, Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu), Protocolos Notariales (PN), Ourense, c 3.126/01 (1694), ff. 52r-54r; c 3.176/01 (1696), f. 47r/v.; c 3.176/02 (1698), ff. 71r-72r y 375r-376v; c 3.177/01 (1700), f. 130r/v; c 3.178/06 (1706), ff. 118r-121r; c 3.236/04 (1720-1727), ff. 7v y 67r-68v. Estas dotes presentan un valor parejo a las de las mujeres de los regidores compostelanos a mediados del siglo XVIII, aunque ligeramente inferior (López, 1991, pp. 101-104).

década de 1720 (López, 2013a, pp. 114-115). También por entonces, algunas de estas familias comienzan a expandir su campo de actuación tras emparentar con las élites de otras provincias gallegas, para, ya mediada la centuria, incluso cambiar su residencia principal en la capital —o en su solar— auriense por otra situada geográficamente a bastante distancia (López & Presedo, 2022, pp. 108, 125-126; Presedo, 2020a, p. 201). Un proceso que se halla en clara sintonía con la estrategia de agregación de casas que protagonizan durante el Setecientos los niveles más elevados de la nobleza provincial (Saavedra, 2003, pp. 295-297); y presumiblemente los segundogénitos incorporados al cabildo catedralicio compostelano no solo habrían podido colaborar en el reforzamiento del *status* familiar, sino además en el apuntalamiento de posibles relaciones interprovinciales con otras estirpes análogas de otras provincias.

3. TRAYECTORIA SECULAR DE LAS FAMILIAS QUE TOMAN CONTACTO CON EL CABILDO COMPOSTELANO[10]

No parece, sin embargo, que nos hallemos ante una vía de promoción social explotada de manera generalizada por la élite municipal auriense durante el siglo XVIII. Más bien al contrario: son pocas las familias que logran acomodar a alguno de sus miembros en este cabildo catedralicio. Comprobaremos en el siguiente apartado el peso específico que llegan a representar en dicha institución eclesiástica, pero lo cierto es que, circunscribiéndonos ahora al grupo constituido por los munícipes orensanos, lo primero que debemos subrayar es su reducido número, apenas ampliable a alguna estirpe más si incluimos a los canónigos y dignidades con lazos de parentesco no directo con ellas[11]. Según la revisión exhaustiva que hemos realizado de la ascendencia paterna y materna de estos prebendados, únicamente podemos señalar a los Rivera y los Losada, los Martínez de Arce y los Boán. En definitiva, su reducida presencia nos permite inferir que se trata de una vía de promoción que, durante la tercera centuria moderna, no les posibilita sobresalir entre la nobleza provincial —de la cual forma parte la mayoría—, debiendo contentarse con las prebendas que pone a su disposición la Iglesia-catedral de Ourense (Seijas & Rodicio 2017, p. 426). Volveremos sobre esta cuestión más adelante al examinar la trayectoria de los capitulares compostelanos con vínculos parentales con la oligarquía orensana, para centrarnos en este epígrafe en la evolución de sus respectivas familias.

Las dos primeras se hallan unidas a los Zúñiga, originarios de la diócesis de Tui, que entroncan con los Villamarín de la Casa do Mato, en la parroquia de san Martiño

10. Por limitaciones de espacio no se han incluido los cuadros genealógicos de estas familias.
11. Es este el caso de la familia Toubes, emparentados colateralmente con los Gaioso y los Salgado de Parada de Amoeiro, a quienes, de nuevo por cuestiones de espacio, dedicaremos otro trabajo.

de Cameixa, próxima a la comarca vitivinícola de O Ribeiro (Gallego, 1999, pp. 137-138). Una vez aquí asentados, sitúan durante tres generaciones sucesivas a un segundón en el citado cabildo catedralicio entre finales del siglo XVII y finales del XVIII[12], y asimismo a un jefe de Casa y a un pariente colateral en sendos escaños del consistorio santiagués en la segunda mitad del Setecientos[13]. Pues bien, las respectivas consortes del jefe de Casa de quienes son hijos dos de los tres prebendados y uno de ambos munícipes proceden de dos familias de la oligarquía auriense: los Rivera y los Losada. La primera de ellas —Margarita de Rivera Sarmiento— proviene de los Rivera, cuyo solar se sitúa en el lugar de Lentille (parroquia de san Lourenzo da Pena), en O Ribeiro[14]. Es precisamente su padre —Antonio de Rivera Taboada y Ulloa— el primero en ocupar uno de sus escaños. Integrado en la estructura administrativa del estado señorial de Ribadavia en calidad de alcalde mayor de Valdeorras y Ribadavia, sus dos principales enclaves territoriales en Galicia, se hace con un oficio municipal en 1678 por ejecución judicial por deudas contra su anterior propietario, el cual habrá de ser servido de manera continuada por sus sucesores al menos hasta el tercer cuarto del siglo XVIII: en 1711 le sigue su hijo Francisco Antonio de Rivera Sarmiento hasta 1759[15], año en que le sucede su yerno José Rafael Pardo. Y será dicho Francisco Antonio de Rivera Sarmiento —hermano de Margarita— quien contribuya a reforzar todavía más estos lazos parentales al desposarse con su sobrina-nieta Margarita Juana Zúñiga y Losada[16].

Por su parte, la segunda —Teresa de Losada y Álvarez—, ya en la siguiente generación, procede por rama paterna de los Losada, señores de los cotos de Pol, Millán y Vilardecans. Tanto su padre —José Francisco de Losada y Quiroga— como uno de sus hermanos —Tomás Francisco de Losada Soutomaior y Arxiz— servirán sendas regidurías por libre designación episcopal, respectivamente, en 1682 y 1721. Su familia es un buen ejemplo de aquellas cuyo ascenso debemos relacionar con la

12. Archivo de la Catedral de Santiago (ACS), Información de limpieza de sangre (ILS), IG 774 (1726) y *Libro de posesiones y vacantes*, *(ss. XVIII-XIX)*, Pte. Sign., s/f.

13. Se trata de los primos en primer grado José Francisco de Losada y Quiroga (1744-1776) —a quien corresponde la jefatura de la Casa do Mato— y Juan Bernardino Basadre y Zúñiga (1772). Cebreiros (1997, p. 130), López (2006, pp. 229, 236) y Archivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS), Archivo Municipal de Santiago, *Libro de Actas*, A.M. 234 (1772-1773), f. 5r/v.

14. La documentación notarial permite comprobar el interés de los Rivera por rentas situadas en esta comarca vitivinícola, concretamente, las del beneficio eclesiástico de santa María de Mugares. AHPOu, PN, Ourense, c 3.078/03 (1680), f. 74r.

15. Tras la defunción de Antonio de Rivera Taboada y Ulloa, el oficio fue servido por un teniente de regidor por minoría de edad de Francisco Antonio entre 1705 y 1711. Todas las fechas de toma de posesión de los oficios consistoriales, así como su modalidad, proceden de López (2013b, pp. 209-220.).

16. AHUS, PN, Santiago, S-6.015 (1791), f. 19v.

milicia en las últimas décadas del siglo XVII y años iniciales del XVIII coincidiendo con la Guerra de Sucesión española. El primero fue capitán y cabo de las milicias de la ciudad de Ourense y su partido[17], y su otro hijo Diego Luis de Losada y Soutomaior, recibió una patente de capitán de una de las compañías del regimiento de caballería ofrecido por la ciudad en 1706-1707 (López, 2009, pp. 563, 567-568; Presedo, 2023, p. 378), para ascender luego a coronel del regimiento de caballería de Flandes (Gallego, 1999, p. 137), obteniendo en recompensa por sus servicios de armas prestados en Italia la merced del título nobiliario de marqués de Bosqueflorido en 1736. Dos años más tarde, accederá a una regiduría, en este caso provista por el monarca en 1738[18]. Por rama materna, era nieta del licenciado Bernardino Álvarez de Arxiz, un abogado de la Real Audiencia de Galicia[19] que había servido como teniente de distintos regidores en diversas ocasiones en el último cuarto del Seiscientos, y alguno de cuyos hermanos figuran aportando capital en compañías cuyo principal asciende a 140 000 reales de vellón[20]. Así pues, durante tres generaciones consecutivas la alianza familiar entre los Álvarez Arxiz y los Losada consiguió situar a alguno de sus miembros en el consistorio orensano, valiéndose, eso sí, de vías distintas.

En resumidas cuentas, tras haber establecido lazos familiares con los Rivera de Lentille, a quince kilómetros de Cameixa, los Zúñiga, ya con su primer segundón en el cabildo catedralicio compostelano, van a ampliar aún más su acercamiento a la élite municipal orensana al establecer nuevos vínculos con los integrantes de una alianza ya existente dentro de esta —los Losada y los Álvarez Arxiz—, coincidiendo justo con la generación en que los propios Zúñiga muestran interés por acceder al consistorio santiagués[21].

Cronológicamente, los Martínez de Arce son los siguientes que dispondrán de un segundogénito en el cabildo santiagués. En contraposición a las anteriores, nos

17. AHPOu, PN, Ourense, c 3.174/03 (1691), f. 64r; c 3.176/02 (1698), f. 124r; c 81/01 (1703), f. 6r. José Francisco de Losada y Quiroga participó en el arriendo de beneficios eclesiásticos (Id., c 3.176/02 (1698), ff. 82r-83v y 99r-100r), y su tío Luis Antonio de Losada fue nombrado oidor en Santa Fe de Bogotá en 1699 (Id., c 3.422/4 (1699), f. 26r/v).

18. ACS, ILS, IG 774 (1784) y Archivo Histórico de la Nobleza, Quiroga, C 12, D 24 y 25-28, ff. 18v y 35r (Recuperados de http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/4044624 y https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/4044618).

19. AHPOu, PN, Ourense, c 3.177/03 (1702), f. 2r/v. Otra hija suya —Mencía Rosa Ventura— se casó con Juan Antonio de Temes Ribadeneira, quien recibió en 1694 una mejora vincular de su tío, el canónigo orensano Antonio de Temes Ribadeneira. Id., c 3.175/02 (1694), ff. 121r-126v.

20. AHPOu, PN, Ourense, c 3.079/04 (1686), f. 37r.

21. Finalmente, José Benito de Zúñiga y Zarate, hijo de José Francisco de Losada y Quiroga, llegó a ser en 1789 caballero maestrante de la Real Maestranza de Ronda, regidor perpetuo en Ourense y contador general de millones en dicha ciudad y su provincia. Gallego (1999, p. 139) y AHUS, PN, Santiago, S-6.008 (1789), f. 5r.

hallamos ante un caso representativo de esa escasa y reducida burguesía provincial, relacionada con el mundo de las finanzas, que consigue abrirse paso entre la oligarquía tradicional cuando esta comienza a volverse cada vez más compacta y cerrada a partir de inicios del siglo XVIII. Originarios del valle de Liendo en Cantabria, Pedro Martínez de Arce accede a la tesorería del papel sellado y la mayordomía de propios de Ourense en la última década del XVII[22]. Como suele ser habitual en estas familias, intenta imitar el estilo de vida de quienes ya disfrutan del *status* que aspira a adquirir. Por dicha razón, contrae nupcias con una mujer de la familia Fernández Cid[23], participa en la adquisición de inmuebles y en la actividad crediticia, paga dotes a favor de sus hijas por valor de 22 022 reales en 1719, entre cuyos bienes se encuentran granjas en las cuales predomina el viñedo y casas propias de la élite urbana en la ciudad (con un alto, patio, caballeriza y huerta)[24], y orienta a dos de sus hijos hacia el alto clero catedralicio gallego: uno como canónigo y arcediano de Ourense —Pedro Martínez Feixóo— (Seijas y Rodicio, 2017, p. 440) y el segundo como cardenal compostelano. Será también uno de sus hijos —Juan Martínez de Arce y Feixóo— el primer deudo en adquirir la condición de capitular en el consistorio auriense, al servir entre 1741 y 1777 en calidad de teniente la regiduría del conde de Altamira, y en cuya tenencia le seguirá José Antonio Martínez de Arce Feixóo a partir de 1777[25].

En tercer lugar, los Boán de la Casa de San Damián aportan otros dos prebendados, si bien el primero nace en la villa de Noia y el segundo —procedente de una rama colateral que entronca con la Casa de Guizamonde— se incorpora a dicho cabildo catedralicio más tardíamente, a finales del tercio inicial del siglo XIX. Sin lugar a dudas, se trata de la familia de la élite auriense sobre la cual se han realizado más estudios, así que, por limitaciones de espacio, únicamente señalaremos que estamos de nuevo ante otra familia de la *fidalguía* orensana, cuyos orígenes se remontan a comienzos del XVI en las inmediaciones de la villa luguesa de Chantada, desde

22. El primer miembro de esta familia en establecerse en Ourense fue su padre Diego Martínez de Arce, quien casó con Benita Feixóo, ambos fallecidos antes de 1693. Este era natural del referido valle de Liendo, donde había ejercido como procurador general por el estado de hijosdalgo, y donde continuaron residiendo sus abuelos paternos Pedro Martínez de Laiseca y María de la Portilla y Arce. ACS, ILS, IG 748 (1755) y AHPOu, PN, Ourense, c 3.175/01 (1693), ff. 29r-30r. Téngase en cuenta que se trata de una zona próxima al área de donde procede una parte importante de los dirigentes de los Cinco Gremios Mayores de Madrid durante el siglo XVIII (Martínez, 2022, pp. 90-98).

23. A través de este enlace, van a tener como deudos lejanos a los Cid de san Cibrán das Viñas, emparentados con los Boán, de los que nos ocuparemos a continuación.

24. AHPOu, PN, Ourense, c 3.175/0 (1694), ff. 165r-166v; c 80/01 (1694), ff. 18r/v, 70r-71v y 83r-84v; c 3.236/01 (1713), f. 5r/v; c 3.236/01 (1719), ff. 16r-18v.

25. Se trata de un nieto del citado Pedro Martínez de Arce, posiblemente vástago de su hija Damiana María Manuela Martínez de Arce, casada en 1719. Ibid.

donde se desplazan hasta el área de los Chaos de Amoeiro —donde fijan su solar y consolidan un notable patrimonio rústico— y los inicios de O Ribeiro —donde poseen su granja de santa Cruz—, contando para su ascenso con el apoyo de la casa condal de Lemos (Ferro, 1975; López, 2013b, pp. 194-196; Rionegro, 2013). Añadiremos, eso sí, una serie de cuestiones que consideramos relevantes para la temática que nos ocupa. Primeramente, los Boán le conceden gran importancia a la educación de una parte de la prole. Si tomamos de referencia a Pedro Fernández de Boán y Landecho (1592-1654) —bisabuelo paterno del primer prebendado compostelano—, a quien se debe la anexión al mayorazgo familiar del oficio concejil adquirido en 1640, su tío paterno —el licenciado Juan Fernández de Boán (1549-1613)— había sido «collegial del mayor del arçobispado de Salamanca y catedrático de Cánones y Leyes en su misma universidad, viçerector della, oydor de Lima, en Yndias en las del Pirú, en la ciudad de los Reyes, visrey por muerte del conde de Monterrey»; y otro tío suyo —el doctor Fernando de Boán—, «collegial (…) de quatro collegios, del Menor y Mayor de Santiago deste reyno de Galizia, y de los de Trilingüe y Mayor de Obiedo de Salamanca, y cathedrático de Theología en ella, magistral de Badajoz y ellecto obispo de Cartaxena»[26]. En su propia generación, su hermano Fernando de Boán y González de Bóveda portó su beca en el colegio compostelano de Santiago Alfeo o de Fonseca en 1631 (Pérez, 1998, p. 145); y su otro hermano, el licenciado Juan Fernández de Boán y Araúxo (1589-1639) se distinguió por la redacción de la *Historia y General Descripción del Reino de Galicia* (Bouza, 2009, pp. 22-24) y el falso cronicón titulado *Historia de Don Servando*[27]. Su hijo y heredero en la jefatura de la Casa, Juan Antonio de Boán y Landecho (1624-1675), estudia dos cursos de Gramática en el colegio de la Compañía de Jesús en Monforte de Lemos en 1635-1636, oye los cursos de Artes y Cánones en la universidad compostelana en 1642 y 1643, y

> En noviembre de 1644 fue con dicho su Ayo al estudio de la Universidad de Salamanca, a donde estuvo hasta junio de 1645 (…), con que dieron fin sus estudios, que llegó a saber tanto por la gran ynclinación que a ellos tenía, que me pareció se le volvería el juizio con tanto estudio[28].

26. AHPOu, Fondos Privados (FP), Boán, lib. 043, f. 15v; y Pérez (1998, p. 146).

27. La redacción de este falso cronicón fue llevada a cabo conjuntamente por ambos hermanos Pedro Fernández de Boán y Landecho y Juan Fernández de Boán y Araúxo, con el objeto de intentar legitimar su ascendencia noble, cuestionada al querer acceder el primero a un hábito de caballero de la Orden de Santiago (Ferro, 1972, pp. 39-43; Rey, 2003, pp. 621-622). Para una edición crítica, véase Souto (2007).

28. AHPOu, FP, Boán, lib. 043, f. 374r.

Incluso su nieto segundogénito, también llamado Juan Antonio de Boán, con «nueve años (…) murió cursante en la villa de Monforte»[29]. Y su citado bisnieto, el lectoral de decretos compostelano, ingresó igualmente en 1727 en el referido colegio de Santiago Alfeo (Pérez, 1998, p. 146).

La segunda cuestión tiene que ver con su política matrimonial que, del mismo modo que acontece con los Losada, les lleva a emparentar con otra familia de la oligarquía urbana, permitiéndoles extender su radio de influencia geográfica tras haberse unido esta a otra oriunda de la villa de Noia. De hecho, por parte materna, un bisabuelo del lectoral de decretos, el licenciado Pedro Cid Feixóo —abogado de la Real Audiencia de Galicia—, había accedido en 1626 a una regiduría provista por el rey; en la siguiente generación, el yerno de este —el capitán Francisco del Río Caraza[30]— tendrá acceso en 1640 a otro oficio con la alcaidía mayor anexa que luego pasará a su cuñado el licenciado Juan Cid Feixóo de Losada —hijo del referido Pedro Cid Feixóo—, quien estudia segundo y tercero de Cánones en 1647 y 1648 en la universidad compostelana, ocho años antes de sentarse en su escaño de regidor en 1655, y será oidor de la Real Chancillería de Valladolid[31]; y, en la generación consecutiva descendente, Diego Cid Feixóo —hijo de Juan Cid Feixóo de Losada—, caballero de hábito de la Orden de Santiago y señor de dos cotos próximos a la ciudad de Ourense —Rairo y Moimenta—, accede en 1711 a otro oficio provisto por el rey propiedad de su mujer[32]. Estos Cid Feixóo establecieron relaciones de parentesco con los Noguerol Prego y Moscoso de Noia, a través del matrimonio de una de las hijas del citado Pedro Cid Feixóo —Manuela Cid Feixóo y Cadórniga—, siendo esta la abuela materna del referido prebendado. Así que el casamiento en primeras nupcias del padre de este eclesiástico —Pedro Jacinto Fernández de Boán y Landecho— con Ana Manuela Noguerol y Solís, al que siguen durante el siglo XVIII otros con destacadas familias de la nobleza provincial, favorecerá que los Boán amplíen su radio de acción a otras provincias galaicas, viéndose influenciados por los avatares sucesorios que caracterizan a algunas de estas poderosas estirpes a comienzos del XIX (Ferro, 1975, pp. 45-50; López y Presedo, 2022, pp. 128-132). Asimismo, otro entroncamiento no menos relevante de los Boán es el que tiene

29. Archivo Histórico Diocesano de Ourense (AHDOu), Fondos parroquiales (Fp), libros de actas sacramentales (LAS), santa Mariña de Fonfría, lib. 02.07.05, f. 179r.

30. Una hija de Francisco del Río Caraza se casará con el I marqués de Bóveda de Limia, igualmente perteneciente a otra familia de la oligarquía auriense (Presedo, 2020a, p. 198).

31. AHUS, Fondo de la Universidad (FU), Serie Histórica (SH), *Matrículas, 1647-1661*, A-229, s.f. AHPOu, PN, Ourense, c 3.174/01 (1688), f. 20r/v.

32. Su segunda mujer, Margarita Pérez de Tejada, era hermana del capitular Juan Pérez de Tejada, quien había servido antes de 1696 una regiduría provista por el rey. Previamente, estuvo casado en primeras nupcias con Josefa Leonor de Boán, muy probablemente originaria de una rama colateral de los Bóan de San Damián. AHDOu, Fp, LAS, santa Mariña de Fonfría, lib. 02.07.05, s.f.

lugar con la Casa de Guizamonde, en Santiago das Caldas. Concretamente, será el matrimonio de una sobrina del mencionado Pedro Fernández de Boán y Landecho el que facilite que un bisnieto de ésta —José Benito Marcelino Boán (1711-1789)— ocupe su jefatura y un escaño en el consistorio orensano[33]. A su vez, el nieto de este último será el postrero en engrosar esta reducida lista de capitulares compostelanos.

La tercera se refiere, como no podía ser de otro modo, al oficio que sirven en el regimiento orensano. Por no extendernos en exceso no detallaremos la relación de familiares que toman propiedad del mismo a partir de 1640, puesto que ya ha sido elaborada con minuciosidad por López (2013b, pp. 194-196), a quien remitimos para aquellos lectores interesados en ampliar información al respecto. No obstante, sí nos interesa señalar que, a diferencia de estos Boán de San Damián, que sirven una regiduría provista por el rey a pesar de sus ausencias, los Boán de Guizamonde solo lo harán puntualmente, cuando el abuelo paterno del canónigo Ramón Antonio José Ventura Boán y Losada se haga con una plaza de regidor por libre designación episcopal en 1763.

4. LOS CAPITULARES CATEDRALICIOS COMPOSTELANOS PROCEDENTES DE LA ÉLITE AURIENSE

Al dirigir nuestra atención hacia los segundogénitos que se incorporaron al cabildo compostelano, debemos tener en cuenta el peso que las élites locales le concedían a la carrera eclesiástica. Era uno de los destinos idóneos a la hora de darles un decente acomodo, si es que el jefe de Casa había previsto su exclusión del mercado matrimonial. Sin duda, esta desempeñó un papel fundamental al favorecer la movilidad social ascendente (Díaz, 2012, pp. 189-214; Irigoyen, 2010, pp. 129-149, 2016, pp. 101-131; Soria & Díaz, 2012), y son numerosas las investigaciones que confirman lazos consanguíneos de los capitulares con los prelados de sus diócesis o con miembros de diferentes comunidades regulares en las que ingresaban, sobre todo, las mujeres de la familia (Cerro, 2015, pp. 176-207; González, 2018, pp. 1819-1830; Irigoyen, 2023, pp. 2152-2153; Pérez Álvarez, 2020, p. 50; Suárez, 2021, pp. 502-519). El clérigo, desde su privilegiada posición en la institución catedralicia, podía favorecer a sus parientes y allegados. En definitiva, el provecho que obtenían las familias podía medirse en términos de capital económico, social y simbólico (Irigoyen, 2016, p. 113, 2025, pp. 133-160).

Según los datos recogidos por Arturo Iglesias Ortega (1996, p. 430, 2000, pp. 301-337), antes del concordato de 1753, de los 97 capitulares compostelanos de origen gallego, 71 procedían de la diócesis santiaguesa, seguida de Lugo con 11 y Ourense, que aportó 7. A partir de esta fecha las posiciones coinciden, pero destaca

33. AHPOu, PN, Ourense, c 3.235/04 (1708), ff. 58r-60v e Id., FP, Saco Cid, c 14.247, s.n.

el descenso de los oriundos de Santiago. El total de pretendientes galaicos en la institución hasta 1752 fue del 58 % y después la proporción se elevó al 64,7 %. Se reafirma, por consiguiente, la superioridad de los naturales de Galicia, aunque los orensanos fueron pocos —8,4 % en toda la centuria—, y en su mayoría de localidades rurales, pues solo dos habían nacido en la capital provincial: Martínez de Arce y Fariñas del Valle[34]. Pues bien, del total de procedentes del obispado de Ourense, solo cuatro (30 %) provenían de las familias analizadas en el apartado anterior que tenían, o habían tenido, algún pariente consanguíneo que ocupaba, o había ocupado, un escaño en el consistorio auriense (Tabla 1).

Tabla 1. Capitulares compostelanos de origen orensano

Capitular	Período en el cargo	Cargo	Parroquia
Barcia y Araujo, Pedro	1710-1710	Racionero	Santo André de Abelenda das Penas
Zúñiga y Rivera, Lorenzo de	1727-1729	Arcediano de Cornado	San Martiño de Cameixa
Losada y Quiroga, José Francisco	1741-1761	Magistral	Santa Olaia de Trabazos
Prado y Ulloa, Juan Francisco Antonio de	1742-1785	Arcediano de Cornado	San Miguel de Osmo
Toubes Salgado Porras y Gayoso, Antonio de	1743-1770?	Cardenal	Santa Ouxea de Eiras
Mosquera Novoa y Villamarín, Benito Ventura Cristóbal Florencio	1745-1783	Canónigo	San Xoán de Sadornín
Losada y Enríquez Varela, Juan Mateo de	1752-1769	Cardenal	San Martiño de Cameixa
Prado y Ulloa, Bernardino de	1754-1762	Arcediano de Salnés	San Miguel de Osmo
	1761-1794	Canónigo	
Martínez de Arce, José Carlos	1755-1764	Cardenal	Santa Eufemia (Ourense)
Cotón Pardo, Francisco Manuel	1759-1789	Canónigo	Santa María de Beade

34. Antes y después del concordato, el 70 % de los capitulares gallegos de los cinco cabildos catedralicios procedían del mundo rural, en consonancia con la escasa urbanización del territorio (Rey, 1990, pp. 586-587).

Capitular	Período en el cargo	Cargo	Parroquia
Fariñas del Valle, José	1760-1762	Canónigo	Ourense
Toubes Rodríguez, Agustín Cayetano de	1770-1795	Arcediano de Salnés	Santa Baia de Banga
	1795-1807	Chantre	
Zúñiga y Losada, Martín Carlos de	1784-1796	Canónigo	San Martiño de Cameixa
Boán y Losada, Ramón Antonio José Ventura	1831-1857	Canónigo	Santiago das Caldas

Nota: En negrita, los prebendados procedentes de las familias de la oligarquía auriense. No se ha incluido al lectoral de decretos José Vicente Fernández Boán Noguerol (1761-1769) porque su nacimiento se produjo en la villa de Noia, sita en la diócesis compostelana. Fuente: ACS, *Expedientes de limpieza de sangre, Actas capitulares* y *Libro de posesiones y vacantes* (*XVIII-XIX*).

Por tanto, no solo fueron contadas las estirpes de la oligarquía orensana las que lograron orientar a un segundón hacia esta poderosa institución eclesiástica, sino que estos prebendados representaron una minoría selecta sobre el total originario de dicha diócesis. Examinemos con detenimiento sus respectivas trayectorias.

En relación con la familia Rivera, debemos referirnos en primer lugar a Lorenzo de Zúñiga y Rivera (1672-1729), nieto y sobrino materno correlativamente de los regidores Antonio de Rivera Taboada y Ulloa y Francisco Antonio de Rivera Sarmiento. Durante su carrera académica, obtuvo el título de bachiller en Artes y en Teología (1696) por la universidad compostelana y fue admitido como colegial del colegio del Arzobispo de Salamanca en 1701 (Ferrer & Misol, 1956, p. 109)[35]. En esta universidad estuvo matriculado como teólogo entre 1701-1713, y fue catedrático sucesivamente de Artes (1705-1709), de Súmulas en propiedad (1710-1711), de Lógica (1711-1712) y de San Anselmo (1712-1713)[36]. En enero de 1727, ingresó en la institución —su tío paterno, Eliseo Zúñiga Villamarín, ya había sido canónigo magistral entre 1680-1710—, ocupando el arcedianato de Cornado durante poco tiempo, pues falleció en la primavera de 1729[37]. Lorenzo llegó a Santiago al permutar el arcedianato del que disfrutaba en la Catedral de Ávila, en donde había

35. Sus dos hermanos, Juan Domingo y Antonio de Zúñiga, también fueron colegiales del Arzobispo en Salamanca. ACS, ILG, IG 774 (1726).

36. AHUS, FU, SH, *Grados, 1583-1717*, A-187, ff. 56r-56v.

37. ACS, ILS, IG 774 (1726) y *Libros de posesiones y muertes (ss. XVII-XVIII)*, Pte. Sign, s/f. Para su fallecimiento acontecido el 10/05/1729 y su testamento, véase ACS, *Actas Capitulares* (AC), IG 520 (1729), f. 58 y AHUS, PN, Santiago, S-2.623 (1729), ff. 10r-13v.

sido canónigo y arcediano, desde 1675, su primo en segundo grado Jerónimo de Rivera (Sánchez, 2002, p. 174). En consecuencia, al menos desde el último cuarto del Seiscientos, resulta palpable cierto interés de la familia Rivera por acceder a puestos de poder eclesiástico[38].

Tras haber enlazado con los Losada, los Zúñiga regresaron a este cabildo en la segunda mitad de la centuria. Así, Martín Carlos Zúñiga y Losada (1719-1796) —sobrino del anterior, bisnieto y sobrino nieto de los dos munícipes citados, y nieto por parte materna del regidor José Francisco de Losada y Quiroga— tomó posesión de una canonjía en septiembre de 1784[39]. Antes de llegar a Compostela, había sido párroco en Santa María de Gracia durante un año, luego en Santiago de Albarellos, y once años en Santa Baia de Montes, localidades situadas en la jurisdicción orensana de Monterrei[40]. Desde 1772 ocupó la dignidad de arcediano de Deza en la Catedral de Lugo. Años después, en 1794, también accedió a otra canonjía —tras haber enviudado— Melchor Basadre y Zúñiga Bermúdez de Castro, hijo del munícipe compostelano Juan Bernardino Basadre y Zúñiga y tataranieto del orensano Antonio de Rivera Taboada y Ulloa. Melchor mantuvo la prebenda hasta su fallecimiento en agosto de 1796. Es decir, durante algo más de un año Martín Carlos coincidió en la corporación capitular con su pariente, de modo que pudo influir para favorecer su acceso a la institución[41]. Además, como era habitual entre los prebendados, se encargó de la administración de una parte del patrimonio

38. Su hermano fray Fernando de Zúñiga y Rivera fue abad de San Martiño de Santiago (1725-1729), luego del monasterio de Santa María de Ripoll en Cataluña y murió habiendo sido consultado para el arzobispado de Tarragona; y sus dos hermanas, Josefa Benita y Violante Teresa, fueron religiosas en el monasterio compostelano de Antealtares y en el convento de concepcionistas de Tui, respectivamente. Para el expediente de limpieza de sangre de Fernando de Zúñiga y Rivera, AHUS, *San Martiño*: *Limpieza de sangre*, Clero 811 (1699). Lorenzo de Zúñiga también tenía un pariente —desconocemos el grado—, Pedro de Puga Ventura Noguerol, chantre en Ourense (1723-1733) (Seijas & Rodicio, 2017, p. 439).

39. ACS, *Libro de posesiones y vacantes*, *(ss. XVIII-XIX)*, Pte. Sign, s/f. Al igual que el anterior, sus progenitores —Juan Domingo de Zúñiga y Rivera y María Teresa Losada y Sotomayor— encaminaron a otras cuatro hijas a la vida religiosa: Tomasa, Violante y María Antonia ingresaron en el monasterio de Antealtares, llegando la primera a ser abadesa en 1761 y fallecer al poco tiempo (Buján, 2002, pp. 99, 110); y la otra, Juana Bernarda, entró en el convento de Belvís.

40. AHUS, PN, Santiago, S-6.015 (1796), f. 20r.

41. Melchor Basadre y Zúñiga Bermúdez de Castro era natural de Santiago y colegial en Fonseca. Para su testamento, AHUS, PN, Santiago, S-6.015 (1796), ff. 26r-27v y ACS, *Libro de posesiones y vacantes*, *(ss. XVIII-XIX)*, Pte. Sign, s/f. Aunque en el archivo catedralicio no se conserva su expediente de limpieza, en la información de nobleza e hidalguía de su sobrino, Diego Basadre y Abona, teniente del regimiento de Húsares de la Corona, el tercer testigo declara que antes de ingresar en la corporación capitular, Melchor fue miembro del consejo de Su Majestad y oidor (Pérez, 1998, pp. 15). AHUS, *Expedientes de información de filiación, nobleza, hidalguía y limpieza de sangre: Letra A-B*, A.M 506 (1805), p. 11.

capitular organizado en tenencias, rematadas al mejor postor por la corporación. Así, el 03/08/1785 el cabildo le remató la tenencia de Firminstáns por 2 000 reales, la de Martín Rubio por otros 2 810, y la de Vilar de Cruces por 3 100, todas con propiedades y bienes cercanos a la ciudad compostelana. El 04/08/1788 se convirtió en administrador de la de Hervidíns por 320 reales y de la de Sada por otros 4 400; y al año siguiente se le remató la de Covas por 10 000[42]. Se colige, por tanto, su capacidad económica. Además, el tenenciero obtenía en su beneficio la diferencia entre lo que realmente producían los bienes de la tenencia y el precio señalado en la subasta realizada por el cabildo[43].

Por su parte, el único capitular compostelano de la familia Martínez de Arce fue José Carlos Martínez de Arce y Feijoo, hijo del mencionado Pedro Martínez de Arce. Previamente, ocupó el cargo de capellán mayor del Hospital Real de Santiago durante nueve años y en 1739 le fue concedida la jubilación con una renta anual de cien ducados[44]. Ese mismo año, por cédula del mes de enero, se convirtió en capellán de honor de Felipe V. También fue administrador del Real Colegio de Loreto en la villa de Madrid. Años después, en 1755, fue provisto por el rey para la dignidad de cardenal en la catedral compostelana[45]. Formó parte de la institución hasta 1764, cuando permutó la prebenda cardenalicia por el arcedianato de Trasancos en la Catedral de Mondoñedo[46], en donde permaneció hasta 1775[47]. Su hermano Pedro Martínez de Arce y Feijoo ingresaría en 1743 en el cabildo de Ourense para ocupar un arcedianato hasta 1757 (Seijas & Rodicio, 2017, p. 440). Por tanto, en la primera mitad de la centuria, la familia buscó el acceso a ambos cabildos de la ciudad auriense, pero también consiguió extender sus redes de influencia hasta el clero palatino, donde colocaron a uno de sus vástagos. Tras el concordato de 1753 —cuando los beneficios capitulares que antes nombraba el papa pasaron a ser de patronato real (Barrio, 2018, pp. 89-107; Ferrándiz, 2019, pp. 72-76; Saavedra, 2013, pp. 695-704; Sigüenza, 2007, pp. 99-110)—, la influencia en la corte madrileña o las relaciones establecidas en el entorno del monarca, probablemente, contribuirían a que José Martínez de Arce consiguiese un puesto tan prestigioso como la dignidad capitular. Asimismo, se advierte una estrecha relación con los arzobispos compostelanos, sin que se pueda

42. ACS, AC, IG 529 (1785), f. 268v e IG 567 (1788-1789), ff. 106v y 183r.

43. Para su fallecimiento ocurrido el 30/03/1796 y su testamento, ACS, *Libro de posesiones y vacantes*, *(ss. XVIII-XIX)*, Pte. Sign, s/f.; Id., AC, IG 568 (1796), ff. 249r/v y AHUS, PN, Santiago, S-6.015 (1796), f. 19v.

44. AHUS, Hospital Real, *Cédulas*, 5, Exp. 457, 18/08/1739.

45. ACS, *Posesiones y muertes. XVII-XVIII*. Pte sign, s/f.

46. ACS, AC, IG 526 (1764), ff. 43v-44v.

47. Para su testamento, Archivo Histórico Provincial de Lugo, PN, 6.844-009 (1765), ff. 6r-7v. En la diócesis de Mondoñedo, donó en vida 70 000 reales en 1769 para fundar una escuela de primeras letras para niños pobres y ricos en el seminario mindoniense, iniciándose la obra en 1770 (Saavedra, 2015, pp. 23-63).

descartar su mediación para ocupar el puesto vacante. Téngase en cuenta que, tras la firma del concordato la Cámara de Castilla solicitaba a los prelados informes sobre los posibles candidatos que luego nombraba el rey. De hecho, ya antes de acceder a la corporación, Cayetano Gil Taboada otorgó varios poderes a su favor «por la buena conducta, confianza y satisfacción que tiene del sobre dicho»[48]. Incluso, cuando ya había fallecido el arzobispo, fue su albacea, el canónigo Juan Eligio de la Cárcel Reinoso, quien le dio poder para que le representase ante el Consejo Real en Madrid en los pleitos que mantenía sobre la herencia del citado prelado[49]. Y un año después de tomar posesión de la cardenalía —en junio de 1755[50]— recibió otro poder de su sucesor, Bartolomé Rajoy, para administrar las rentas de su dignidad en el partido de Valladolid[51]. A fin de cuentas, promover a sus aliados permitía a los prelados tener mayor control dentro de la institución capitular.

Como hemos señalado, en la familia Boán de la Casa de San Damián, José Vicente Fernández Boán Noguerol (1708-1769), natural de la villa de Noia —y bisnieto de Pedro Fernández de Boán y Landecho—, fue el único que formó parte del cabildo catedralicio en el siglo XVIII. Siendo bachiller ingresó en 1727 en el colegio compostelano de Fonseca con una beca de jurista (Pérez, 1998, p. 146)[52]. En junio de 1735 se licenció y luego doctoró en Cánones por la universidad compostelana[53]. José Vicente fue provisto por el rey a la prebenda de lectoral de decretos y tomó posesión en febrero de 1761[54]. Su ingreso en la corporación derivaba, pues, de una buena preparación intelectual, que su familia se había esmerado en cuidar. Ocupó el cargo de lectoral hasta su muerte en 1769. También fue tenenciero de las tenencias de Figueiras —el cabildo se la remató en 1763 por 800 reales[55]—, Viduido y Amio entre 1765-1769, todas con propiedades y bienes en la ciudad compostelana y en los contornos. Por estas últimas, pagaba a la mesa capitular 7 000 y 8 270

48. AHUS, PN, Santiago, S-3.432 (1750), f. 167r; S-3.431 (1747), ff. 44r-45r y S-3.431 (1748), ff. 32r-33r.

49. AHUS, PN, Santiago, S-3.433 (1752), ff. 64r-64v.

50. ACS, AC, IG 524 (1755), f. 302v.

51. AHUS, PN, Santiago, S-3.437 (1756), ff. 17r-18r.

52. AHUS, FU, SH, Colegio de Fonseca, *Pruebas de Limpieza de Sangre* (1727), 203, Exp. 7. Por parte materna, su pariente Bernardino Yáñez Prego había sido colegial del colegio Arzobispo, en Salamanca, oidor en la Real Audiencia de Sevilla y consultor del Santo Oficio (Pérez, 1998, p. 146).

53. AHUS, FU, SH, *Grados. Grados de Cánones* (1698-1769), A-194, ff. 153r-159r.

54. ACS, AC, IG 525 (1761), ff. 210r y 218r/v. Las constituciones de Francisco Blanco del siglo XVI establecían que la canonjía lectoral de decretos, creada en 1506, era de presentación del deán quien debía elegir a un licenciado o doctor en cánones o leyes, que, entre otras funciones, debía defender los negocios de la Iglesia, siempre que hubiese necesidad, y leer una lección de Decreto en la universidad compostelana (Iglesias, 2012, pp. 95-97).

55. ACS, AC, IG 526 (1763), f. 25r.

reales anuales a cambio de su usufructo[56]. Téngase presente que, en ocasiones, las tenencias se incluían en las estrategias familiares de algunas estirpes, pues cuando los canónigos tenían derecho de presentación sobre algún beneficio curado, dentro de las mismas, nombraban a parientes, sobre todo sobrinos, para asegurarles el sustento (Seijas, 2021, p. 396)[57].

Los Boán no volverían a tener representación en esta institución hasta 1831. Ese año ingresó Ramón Antonio José Ventura Boán y Losada (1778-1857) para ocupar una canonjía hasta su muerte. Procedía de la Casa de Guizamonde y era nieto del munícipe José Benito Marcelino Boán. En su expediente de provisión de la prebenda se conserva una relación de méritos en la que se indica que estudió tres años de Filosofía, cuatro de Teología con asistencia a la academia, seis de Teología moral, siendo sustituto de sus respectivos catedráticos, y uno de Sagrada Escritura. Familiar desde los siete años del obispo de Ourense, Pedro de Quevedo y Quintano, en 1807 fue promovido al beneficio curado de san Martiño de Beariz que regentó hasta 1815. Ese año el prelado le agració con una ración en la catedral orensana y le colocó de nuevo entre sus familiares. Fue predicador y confesor en varias diócesis, además de examinador sinodal del obispado de Lugo[58]. Asimismo, antes de ocupar la canonjía compostelana, fue arcediano titular en la catedral auriense entre 1824-1829 (Leza & Pérez, 2018, p. 140)[59]. Ya en Santiago, desde 1832 se encargó de la administración del hospital de San Roque para atención de sifilíticos y bajo patronazgo del cabildo. También fue caballero de la Orden de Carlos III[60].

En definitiva, estas tres familias estuvieron presentes en la corporación eclesiástica, aunque no siempre de forma continuada. En ningún caso se produjo la transmisión parental del beneficio por medio de coadjutores, tan habituales antes del concordato de 1753, para convertir, prácticamente, las prebendas en hereditarias, como se ha demostrado en varios espacios peninsulares (Callado, 2019, p. 290; Cánovas, 1994, pp. 247-249; Iglesias, 2016, p. 266; Irigoyen, 2001, p. 39; Sánchez, 2021; Vázquez, 1987, p. 51). Sin embargo, queda patente su interés por situar a algún segundogénito en dicho cabildo, puesto que, a fin de cuentas, esta circunstancia

56. ACS, *Vacantes de casas y tenencias*. Sign: 114/3 (1697-1848).

57. José Vicente Fernández Boán Noguerol falleció abintestato en 18/VI/1769. ACS, AC, IG 526 (1769), f. 217r.

58. ACS, *Expediente de provisión de Ramón Boán y Losada (16/11/1830-15/01/1831)*, Sign.: CS 0189/06.

59. La relación de esta familia con el cabildo orensano ya aflora con su abuelo paterno, el regidor José Benito Marcelino Boán, que fue apadrinado en 1711 por el canónigo auriense Antonio Amoeiro y Sotelo (Seijas y Rodicio, 2017, p. 445). AHDOu, FP, LAS, Santiago das Caldas, lib. 30.08.01, f. 30v.

60. Para su fallecimiento ocurrido el 21/03/1857 y su testamento, ACS, AC, IG 604 (1857), f. 20v y AHUS, PN, Santiago, S-8.427 (1857), ff. 155r-156v.

beneficiaba al propio clérigo y al conjunto familiar. El primero necesitaba al segundo para acceder a la Iglesia y la familia necesitaba al eclesiástico para ayudar y promover a sus parientes (Irigoyen, 2011; Morgado, 2010; Pérez Álvarez, 2018). De esta manera, podían contribuir al reforzamiento de sus familias de origen (López, 2013b; Presedo, 2015a, 2016a). En este sentido, los testamentos de los capitulares proporcionan valiosa información sobre sus herederos y los legados destinados a su parentela. Eran frecuentes algunas mandas a favor de los varones de la familia, y, sobre todo, en el caso de las mujeres, para su dotación matrimonial o religiosa. Además, los testantes podían designar a sus parientes como herederos universales, si bien el nombramiento no siempre implicaba recibir el grueso de la herencia.

Por ejemplo, el arcediano Lorenzo de Zúñiga y Rivera legó a una sobrina suya, hija de su hermano mayor y jefe de Casa, 200 ducados para entrar como religiosa; si bien la cantidad se le entregaría, después de cumplido su testamento, «habiendo cabimiento para ello». A continuación, estipuló que el residuo de sus legítimas, paterna y materna, descontados los gastos empleados como colegial en Salamanca, se destinase a la conservación y mantenimiento de la capilla de la Casa y Granxa do Mato, fundada por su tío —el magistral Elíseo de Zúñiga— y de la cual había sido su primer capellán. A su vez, instituyó por herederos universales a una hermana, ya viuda, con quien convivía, y a otro hermano. Recibirían partes iguales de su herencia[61]. Así pues, su familia fue la principal beneficiada, aunque no destinó la herencia al sucesor en el mayorazgo, su sobrino y munícipe compostelano José Francisco de Zúñiga y Losada. Las asignaciones a las mujeres de la familia también asoman en las últimas voluntades del doctor Martínez de Arce. Una hermana recibiría 800 ducados, los mismos que la viuda de su hermano, el regidor orensano Juan Martínez de Arce. Asignó 4 500 ducados a tres de sus sobrinas —1 500 a cada una—, condicionados a no contraer matrimonio antes de cumplirse el legado. Les garantizaba así una posición económica más holgada antes de tomar estado. Luego, buscando su salvación, pero, en verdad, beneficiando a la Iglesia como institución receptora, heredó a su alma «para que se distribuya mi herencia en misas, limosnas y más sufragios que consideren oportunos mis albaceas»[62]. En ocasiones, los canónigos no precisaban las cantidades concedidas a la familia y delegaban en sus testamentarios la decisión. Así lo dispuso Ramón Antonio José Ventura Boán y Losada —que también destinó sus bienes a su alma— para sus dos sobrinos hijos de su difunto hermano, el teniente coronel Juan Francisco Antonio Boán, y otra sobrina hija huérfana del comandante de infantería Manuel Peralta y de María Josefa Bernardina Losada y Boán[63].

61. AHUS, PN, Santiago, S-2.623 (1729), ff. 12v-13r.
62. AHPL, PN, 6.844-009 (1765), ff. 6r-7v.
63. AHUS, PN, Santiago, S-8.427 (1857), ff. 155r-156v.

Algo diferente fue el caso de Martín Carlos de Zúñiga y Losada. En 1783 había hecho una donación recíproca con su sobrino José Benito de Zúñiga y Zárate, hijo único de su hermano mayor, José Francisco de Zúñiga y Losada, «atendiendo a la buena armonía que siempre habían llevado»[64]. Pero la familia era una realidad viva, no estática, con relaciones personales de afectos y también de desencuentros, así que el capitular cambió de opinión. Lo acredita su testamento, redactado en 1791 y formalizado en 1796. José Benito había acompañado a su tío buena parte de su carrera eclesiástica, y fue durante el arcedianato de Martín Carlos en la catedral lucense cuando se casó en primeras nupcias con María Susana de Ron. En 1784, al ser promovido a la canonjía, el matrimonio se trasladó con él a Santiago. Cuatro años después ella falleció. Al año siguiente, José Benito contrajo segundas nupcias y se trasladó a vivir con su mujer a la Casa y Granxa do Mato. La «separación y otras circunstancias» llevaron al prebendado a «reflexionar sobre el instrumento de donación» que había otorgado con su sobrino y su primera esposa, y, aunque no justificó el motivo de las desavenencias familiares, revocó la donación en junio de 1791. Incluso, interpuso pleito ante la Audiencia del juez ordinario de apelaciones de Santiago para solicitar la separación y partija de los bienes de la difunta. Además, encargaba a sus cumplidores que, si antes de su muerte no hubiera saldado las deudas contraídas «en beneficio de su sobrino y de su casa», debería ser José Benito quien las pagase de los bienes del testador. Si se resistiese, ordenaba que «se le haga cuenta y cargo de todos los gastos y desembolsos que hice y pude hacer (…) obligándole por justicia a que los satisfaga»[65]. Por lo tanto, aunque inicialmente había donado sus bienes al heredero de la jefatura familiar, acabaría por entregar el remanente de su herencia, descontadas las distintas mandas, a la fábrica de la Catedral compostelana. En un codicilo posterior ofreció a otro sobrino, José María Basadre, 6 000 reales. Este los reclamó en 1796 al cabildo para pagar la deuda de 2 200 reales con la mesa capitular por el alquiler de la casa en que vivía[66]. Por su parte, en las mandas testamentarias de Melchor Basadre y Zúñiga no se menciona a ningún pariente, solo dispuso la donación de sus libros a la biblioteca de la Real Universidad de Santiago y a la del colegio de Fonseca, donde había sido colegial. Además, ordenó que si «quedase algún residuo o remanente lo dedico, ofrezco y mando al glorioso Apóstol Santiago, cuio capellán soy con destino a su mayor culto»[67].

64. AHUS, PN, Santiago, S-6.010 (1791), f. 30r.
65. AHUS, PN, Santiago, S-6.015 (1796), f. 21r.
66. ACS, AC, IG 568 (1796), f. 287r.
67. AHUS, PN, Santiago, S-6.015 (1796), f. 27r.

5. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados, quizá el hecho que mejor permite definir la singularidad de estas tres familias de la oligarquía auriense es que, precisamente, fueron capaces de situar a alguno de sus segundogénitos en el tercer cabildo catedralicio más importante de la Corona de Castilla, esto es, el cabildo compostelano. Sus respectivas trayectorias se ajustan a las características específicas del modelo de reproducción social del grupo, como asimismo a las diferentes vías de que se valen sus integrantes a la hora de acceder a un oficio en el regimiento de la ciudad capital de provincia (López, 2013b, pp. 167-173). Presentan como peculiaridad el haber logrado acomodar a uno de sus parientes en dicha institución eclesiástica. Ofrecer un hijo o hija a la Iglesia era una vía muy eficaz para evitar la disgregación patrimonial, pues era el primogénito el que recibiría la mayor parte de la hacienda familiar. Además, en el caso que nos ocupa, los prebendados culminaron su carrera eclesiástica después de ocupar cargos en otras instituciones, incorporándose al alto clero catedralicio, lo cual acrecentaba su capital simbólico y relacional, al ser una institución con reconocido poder y prestigio. Asimismo, se infiere que las ayudas recibidas de la red familiar y las relaciones sociales que mantuvieron los pretendientes pudieron facilitar la obtención de las prebendas.

Una vez afianzada la plaza en el cabildo, estos segundones siguieron manteniendo vínculos con sus familias de origen. Sus mandas testamentarias, de objetos o en dinero, otorgadas generalmente a favor de sus hermanas y sobrinas, pero también otros parientes directos, como los sobrinos, lo confirman. Y, sin duda, fueron aquellas más desfavorecidas —viudas, solteras, huérfanas— las destinatarias predilectas de los legados. Es decir, se perciben algunas coincidencias con lo ya visto en otros estudios en los que las mandas a favor de la familia tenían un gran peso. Reforzaban las solidaridades internas y ofrecían ayuda a los familiares para promocionar (Irigoyen, 2011, pp. 106-113; Pérez Álvarez, 2018, pp. 525-532; Presedo, 2009, pp. 325-336; Quintana, 2008, pp. 244-246; Regalado, 2022, pp. 358-364), aunque parece que no todos lo hicieron de igual forma, tal como acreditan los legados en favor de la Iglesia. Especial relevancia cobra en este sentido la cantidad que el doctor Martínez de Arce asignó en su testamento a favor de la viuda de su hermano, a quien había correspondido la jefatura de Casa y había servido una tenencia de regiduría en el consistorio auriense; como también el acompañamiento de José Benito de Zúñiga y Zátare, hijo de un regidor compostelano y sobrino nieto de sendos munícipes orensanos, a su tío, el canónigo Martín Carlos de Zúñiga y Losada, hasta que se produjo la ruptura familiar una vez se establecieron en Santiago. A pesar de esta desavenencia, ambos casos nos informan del especial contacto que algunos de estos prebendados seguían manteniendo con el pariente que detentaba la jefatura familiar, sin que debamos perder de vista que, en este caso, se trata de familias de poder.

Por tanto, es evidente que su presencia en dicho cabildo tuvo una serie de implicaciones positivas para estas estirpes, más allá del importante capital simbólico y relacional que aportan, aunque no siempre se cuente entre estas un significativo afianzamiento de las relaciones interprovinciales con las élites locales de otras provincias, análogo al de otras familias ya estudiadas (López & Presedo, 2022; Seijas, 2021). Sus logros en relación con este aspecto influyeron igualmente en el aumento de las expectativas al alcance de sus parentelas, pero todo parece apuntar a que lo hicieron a un nivel algo inferior. Así, el acceso a la canonjía compostelana por parte de los Boán de San Damián se produjo tras el enlace del jefe de Casa con los Noguerol y Solís de Noia en el último cuarto del siglo XVII, en la provincia de Santiago, habiéndose seleccionado en la generación precedente para el casamiento del jefe, que a la vez era regidor auriense, una cónyuge de Vigo. En cambio, para los Zúñiga tudenses, tras asentarse en O Ribeiro y enlazar con dos familias con presencia en el regimiento orensano, la estrategia de situar a un segundogénito en el cabildo catedralicio compostelano durante tres generaciones sucesivas, fue acompañada por el ingreso del jefe de Casa en el consistorio santiagués en el siglo XVIII. Al fin y al cabo, al margen de su mayor o menor alcance, estas relaciones representaban una vía de que se valían las familias de las oligarquías urbanas gallegas para poder incrementar su influencia.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es obra conjunta de María Seijas Montero y Antonio Presedo Garazo.

Agradecimientos y financiación

Este artículo se ha realizado al amparo del Proyecto de investigación El reino de Galicia en la monarquía de Felipe V: instituciones y dinámica política (HAR2017-83605-P, financiado por la AEI/ FEDER, UE).

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Los autores declaran que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Acuña Rubio, C. (2002). Títulos nobiliarios de los hijos de Galicia. *Boletín de Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia*, *1*, 37-50.

Aranda Pérez, F. J. (1999). *Poder y poderes en la ciudad de Toledo: Gobierno, sociedad y oligarquías en la Edad Moderna*. Universidad de Castilla-La Mancha.

Barrio Gozalo, M. (2017). El clero en la España del siglo XVIII: Balance historiográfico y perspectivas. *Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII*, (27), 51-79. https://doi.org/10.17811/cesxviii.27.2017.51-79

Barrio Gozalo, M. (2018). *El sistema beneficial de la Iglesia española en el Antiguo Régimen (1475-1834)*. Publicacions Universitat d'Alacant.

Bouza Álvarez, F. (2009). Dar Galicia y el gallego a la imprenta: As Galegadas y A História de Galicia de Lobariñas Feijoo, la Verdadera descripción de Ojea y algunas iniciativas historiográficas de la primera mitad del siglo XVII. *Obradoiro de Historia Moderna*, (18), 9-44.

Buján Rodríguez, M.ª M. (2002). *Abadologio femenino: Monasterio de benedictinas de San Payo de Ante-Altares*. Xunta de Galicia.

Callado Estela, E. (2019). *El cabildo de la catedral de Valencia en el siglo XVII: Crisis y conflicto*. Tirant Humanidades. https://doi.org/10.36151/TLB_9788417508937

Cánovas Botía, A. (1994). *Auge y decadencia de una institución eclesial: El Cabildo Catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y sociedad*. Universidad de Murcia.

Caro López, E. J. (2023). *El clero catedralicio malagueño (1700-1851): Historia y genealogía*. Universidad de Córdoba.

Cebreiros Álvarez, E. (1997). *El municipio de Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen*. Universidade da Coruña.

Cerro Bohórquez, M.ª P. del. (2015). *Familia y reproducción social: Los Espinosa Núñez de Pardo, una élite de poder en tierras de Cádiz y Sevilla (siglos XVII-XVIII)*. Editorial Universidad de Sevilla.

Chacón Jiménez, F. (1995). Hacia una nueva definición de la estructura social en la España del Antiguo Régimen a través de la familia y las relaciones de parentesco. *Historia Social*, (21), 75-104.

Díaz Rodríguez, A. J. (2010). Cabildos catedralicios y clero capitular en el Antiguo Régimen: Estado de la cuestión. *Revista de Historiografía*, (13), 82-99.

Díaz Rodríguez, A. J. (2012). *El clero catedralicio en la España Moderna: Los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808)*. Universidad de Murcia.

Eiras Roel, A. (1984). Las élites urbanas de una ciudad tradicional: Santiago de Compostela a mediados del siglo XVIII. En *La documentación notarial de la Historia* (pp. 117-139). Universidade de Santiago de Compostela.

Felices de la Fuente, M.ª M. (2012). *La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo XVIII (1701-1746): Entre el mérito y la venalidad*. Universidad de Almería.

Ferrándiz Moreno, M. (2019). *Clero y Real Patronato en tiempos de Carlos III: Un estudio a partir de las provisiones beneficiales de la Archidiócesis de Toledo y sus sufragáneas*. Universidad de Alicante.

Ferrer Ezquerra, L., y Misol García, H. (1956). *Catálogo de colegiales del colegio mayor de Santiago el Cebedeo, del Arzobispo, de Salamanca*. Universidad de Salamanca.

Ferro Couselo, X. (1972). Xente llana con Ventura: Los Boanes. *Boletín Auriense*, *2*, 7-73.

Gallego Domínguez, O. (1999). Notas sobre unha estirpe ourensá: os condes de Troncoso. *Boletín Auriense*, *29*, 117-164.

García Heras, V. A. (2021). *La guerra de Sucesión en Cuenca, 1700-1714: Familias, élites de poder y movilidad social*. Sílex.

Gil Pujol, J. (1983). Notas sobre el estudio del poder como nueva valoración de la historia política. *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, (3), 61-88.

González Vidal, J. M. (2016). Élites y gobierno municipal en una villa cabeza de corregimiento: Baiona tras la instauración borbónica. En M. López Díaz (Ed.), *Galicia y la instauración de la Monarquía borbónica* (pp. 345-371). Sílex.

González Vidal, J. M. (2018). Tui entre el cabildo catedralicio y el gobierno municipal: Aproximación a dos familias de poder en la primera mitad del siglo XVIII. En E. Serrano Martín y J. Gascón Pérez (Eds.), *Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico, de Fernando el Católico al siglo XVIII* (pp. 1819-1830). Institución Fernando el Católico.

Hernández Benítez, M. (1995). *A la sombra de la Corona: Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808)*. Siglo XXI.

Hernández Benítez, M. (2004). Ayuntamientos urbanos, trampolines sociales: Reflexiones sobre las oligarquías locales en la Castilla moderna. *Mélanges de la Casa de Velázquez*, *34*(2), 91-114. https://doi.org/10.4000/mcv.1295

Iglesias Ortega, A. (1996). Análisis sociológico del cabildo compostelano a través de los expedientes de limpieza de sangre. *Compostellanum*, *41*(3-4), 421-450.

Iglesias Ortega, A. (2000). Los expedientes de limpieza del Archivo Catedralicio de Santiago de Compostela: Un elenco de los canónigos compostelanos. *Compostellanum*, *45*(1-2), 301-337.

Iglesias Ortega, A. (2012). *La Catedral de Santiago de Compostela y sus capitulares: Funcionamiento y sociología de un cabildo en el siglo XVI*. Deputación Provincial da Coruña.

Iglesias Ortega, A. (2016). Nepotismo y patronazgo eclesiástico en la Galicia moderna: El cabildo catedralicio de Santiago de Compostela. *Hispania Sacra*, *68*(137), 259-280. https://doi.org/10.3989/hs.2016.018

Imízcoz Beunza, J. M. (2009). Las redes sociales de las élites: Conceptos, fuentes y aplicaciones. En E. Soria Mesa, J. J. Bravo Caro y J. M. Delgado Barrado (Eds.), *Las élites en la Época Moderna: La Monarquía española* (Vol. 1, pp. 77-111). Universidad de Córdoba.

Irigoyen López, A. (2001). *Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución: El cabildo de la catedral de Murcia en el siglo XVII*. Universidad de Murcia.

Irigoyen López, A. (2010). Aproximación historiográfica a las relaciones entre el clero y familia en la España Moderna. En M. Soares y J. Hernández Franco (Coords.), *Sociedad,*

familia y poder en la Península Ibérica (pp. 129-149). Universidad de Murcia. https://doi.org/10.4000/books.cidehus.5355

Irigoyen López, A. (2011). Estrategias de transmisión del alto clero secular en Castilla durante el Antiguo Régimen: Los prebendados de Murcia en el siglo XVIII. *Studia Historica. Historia Moderna*, (33), 97-119.

Irigoyen López, A. (2016). Sobre el ingreso en el clero: A cuestas con la vocación y las estrategias familiares en la España del siglo XVIII. *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, *20*(2), 101-131.

Irigoyen López, A. (2023). Lazos personales y sociales en el acceso de los racioneros al cabildo de la catedral de Murcia a comienzos del siglo XVIII. En J. M. Imízcoz Beunza, J. E. Ochoa de Eribe y A. Artola Renedo (Coords.), *Los entramados políticos y sociales en la España Moderna* (pp. 2143-2156). Universidad del País Vasco-Fundación Española de Historia Moderna.

Irigoyen López, A. (2025). Las prebendas: Un asunto de familia. Ejemplos del cabildo de la Catedral de Murcia durante la primera mitad del siglo XVIII. En E. Callado Estela (Ed.), *Dignidad, privilegio y honor: Cabildos catedrales hispánicos en la Edad Moderna* (pp. 133-160). Sílex.

Irles Vicente, M. C. (1996). *Al servicio de los Borbones: Los regidores valencianos en el siglo XVIII*. Edicions Alfons el Magnànim.

Leza Tello, P., y Pérez Formoso, P. (2018). Dignidades de la catedral de Ourense. *Diversarum Rerum*, (13), 117-140.

López Díaz, M. (1991). *Oficios municipales de Santiago a mediados del siglo XVIII*. Estudios Mindonienses.

López Díaz, M. (1996). *Gobierno y hacienda municipales: Los concejos de Santiago y Lugo en los siglos XVI y XVII*. Diputación Provincial de Lugo.

López Díaz, M. (2004). Poder municipal y oligarquías urbanas en la Galicia moderna: Un balance y algunas reflexiones. *Studia Historica. Historia Moderna*, (26), 321-348.

López Díaz, M. (2006). Reformismo borbónico y gobierno municipal: Las regidurías compostelanas, siglo XVIII. *Obradoiro de Historia Moderna*, (15), 205-237.

López Díaz, M. (2009). Servicio al rey, tráfico de oficios y honores de la guerra: La formación del Regimiento de Caballería de Ourense (1706-1707). En O. Rey Castelao y R. J. López López (Eds.), *El mundo urbano en el siglo de la Ilustración* (Vol. 2, pp. 557-569). Xunta de Galicia.

López Díaz, M. (2011a). *Jurisdicción e instituciones locales de la Galicia meridional (siglos XVI-XVIII)*. Universidade de Vigo.

López Díaz, M. (2011b). Familia, relaciones sociales y estrategias familiares de las élites urbanas gallegas (siglos XVI-XVIII). En C. Santos (Coord.), *Família, espaço e património* (pp. 385-399). CITCEM.

López Díaz, M. (2013a). Élites locales y dinámicas de poder en la Galicia filipina: Cambio dinástico y primeras tentativas reorganizadoras (1700-1722). En M. López Díaz (Ed.), *Élites y poder en las monarquías ibéricas: Del siglo XVII al primer liberalismo* (pp. 99-127). Biblioteca Nueva.

López Díaz, M. (2013b). Regidores de Ourense y dinámicas duraderas: Guía de titulares, oficios y familias. En M. López Díaz (Ed.), *Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna IV* (pp. 165-220). Tórculo.

López Díaz, M., y Presedo Garazo, A. (2022). Poder interprovincial y estrategias familiares en la Galicia del siglo XVIII: Los Cisneros, condes de Ximonde. En F. García González y J. M. González Beltrán (Eds.), *¿Destinos inmóviles?: Familias, estrategias de poder y cambio generacional en España y América Latina (siglos XVI-XIX)* (pp. 99-146). Comares.

Martínez Borrallo, A. (2022). *Comerciantes vascos y navarros en Madrid: Una élite mercantil ilustrada al servicio de la Monarquía española (1700-1830)*. Universidad del País Vasco.

Migués Rodríguez, V. M., y Presedo Garazo, A. (2012). Los privilegiados. En I. Dubert (Coord.), *Historia de la Galicia Moderna: Siglos XVI-XIX* (pp. 269-317). Universidade de Santiago de Compostela.

Morgado García, A. (2010). Iglesia y familia en la España moderna. *Tiempos Modernos*, *20*(1), 1-22.

Peláez Rivero, M. D. (2018). Los Méndez Montoto (1507-1650): Primera aproximación a una familia del poder ourensano. En J. I. Fortea Pérez, J. E. Gelabert González, R. López Vela y E. Postigo Castellanos (Coords.), *Monarquías en conflicto: Linajes y noblezas en la articulación de la Monarquía hispánica* (pp. 683-696). Fundación Española de Historia Moderna-Universidad de Cantabria.

Pérez Álvarez, M.ª J. (2018). El reparto de bienes del alto clero leonés en la Edad Moderna (finales del siglo XVII y siglo XVIII). *Tiempos Modernos*, *9*(36), 510-533.

Pérez Álvarez, M.ª J. (2020). Estrategias familiares en la ciudad de León en la Edad Moderna: Los Quijada-Rojas. En M. Torremocha Hernández (Coord.), *Matrimonio, estrategia y conflicto (siglos XVI-XIX)* (pp. 49-65). Ediciones Universidad de Salamanca.

Pérez Costanti, P. (1998). *Linajes galicianos* (E. Pardo de Guevara y Valdés, Ed., ed. completa y ampliada). Aras Solis-Consorcio de Santiago.

Presedo Garazo, A. (2009). Una poderosa élite local en Galicia durante la época moderna: El clero secular de origen hidalgo. En E. Soria Mesa, J. J. Bravo Caro y J. M. Delgado Barrado (Coords.), *Las élites en la época moderna: La monarquía española* (Vol. 2, pp. 325-335). Universidad de Córdoba.

Presedo Garazo, A. (2013). Hidalgos y casas hidalgas en la provincia de Ourense en la Edad Moderna. En M. López Díaz (Ed.), *Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna IV* (pp. 65-105). Andavira.

Presedo Garazo, A. (2015a). El canónigo maestrescuela don Diego Juan de Ulloa y su relación con la casa de Noceda (1733-1764). *Annuarium Sancti Iacobi*, (15), 163-210.

Presedo Garazo, A. (2015b). Élite hidalga y poder señorial en Galicia: Principales mecanismos de acceso (1480-1650). *Studia Historica. Historia Moderna*, (37), 123-151. https://doi.org/10.14201/shhmo201537123151

Presedo Garazo, A. (2016a). Dinámica de reforzamiento grupal de las élites concejiles de Ourense, ca. 1680-1725: Primeros avances. En M. López Díaz (Coord.), *Galicia y la instauración de la Monarquía borbónica* (pp. 287-317). Sílex.

Presedo Garazo, A. (2016b). Familia y poder en la Casa de Lagariños en tiempos de don Antonio de Vivero Suárez de Navia y Villamil (1628-1692). *Boletín Auriense*, (46), 227-253.

Presedo Garazo, A. (2019a). La ciudad de Ourense en 1680-1725: ¿Un espacio urbano al servicio de las élites concejiles orensanas? En A. Antero y A. Marques (Coords.), *II Congresso Internacional «As cidades na História: Sociedade»: Vol. V. Cidade Moderna-I* (pp. 129-155). Câmara Municipal de Guimarães.

Presedo Garazo, A. (2019b). Entre la religiosidad barroca y el reforzamiento de estatus: El comportamiento religioso de los regidores de Ourense in 1680-1725. En J. Prada Rodríguez y D. Rodríguez Teijeiro (Eds.), *Indivisa manent: Estudos en homenaxe a Jesús de Juana* (pp. 105-134). Galaxia.

Presedo Garazo, A. (2020a). Dinámica de casa y poder local en la ciudad de Ourense: Don Juan Nicolás de Espinosa Feijóo, I marqués de Bóveda de Limia (1657-1743). *Obradoiro de Historia Moderna*, (29), 189-220. https://doi.org/10.15304/ohm.29.6572

Presedo Garazo, A. (2020b). Alianzas, ambiciones y ascenso de dos familias de la élite concejil orensana en 1680-1746: Los Armada y Araúxo, y los Salgado y Gundín. *Estudis. Revista de Historia Moderna*, (46), 181-201.

Presedo Garazo, A. (2023). Élites concejiles y vinculación con la milicia: El caso de Ourense a comienzos del siglo XVIII. *Magallánica. Revista de Historia Moderna*, *9*(18), 362-385.

Quintana Andrés, P. C. (2008). El cabildo catedral de Canarias: Una élite socioeconómica e ideológica de ámbito regional. *Revista de Historia Moderna*, (26), 221-248. https://doi.org/10.14198/RHM2008.26.07

Regalado González-Serna, V. D. (2022). *Prosopografía del cabildo catedral de Sevilla en el siglo XVIII*. Universidad de Sevilla.

Rey Castelao, O. (1990). El alto clero gallego en tiempos de Carlos III. En *Coloquio Internacional Carlos III y su siglo* (Vol. 2, pp. 579-600). Universidad Complutense de Madrid.

Rey Castelao, O. (2003). *Libros y lectura en Galicia, siglos XVI-XIX*. Xunta de Galicia.

Rionegro Fariña, I. (2013). Una familia de poder de la élite orensana: Los Boán. En M. López Díaz (Ed.), *Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna IV* (pp. 107-130). Andavira.

Rodicio Pereira, L. (2016). Relaciones familiares y de poder en el cabildo de Ourense en el siglo XVIII. En M. García Fernández (Coord.), *Familia, cultura material y formas de poder en la España moderna. III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna* (pp. 1103-1112). Fundación Española de Historia Moderna.

Saavedra Fernández, P. (1985). *Economía, política y sociedad en Galicia: La provincia de Mondoñedo, 1480-1830*. Xunta de Galicia.

Saavedra Fernández, P. (2003). La vida en los pazos gallegos: Entre la literatura y la historia. *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, (23), 285-316.

Saavedra Fernández, P. (2013). El concordato de 1753 y la reforma beneficial en Galicia. En A. Jiménez Estrella, J. J. Lozano Navarro, F. Sánchez-Montes González y

M. M. Birriel Salcedo (Eds.), *Construyendo historia: Estudios en torno a Juan Luis Castellano* (pp. 695-704). Universidad de Granada.

Saavedra Fernández, P. (2015). O seminario e o clero de Mondoñedo: De Trento a principios do XIX. En A. López, A. Requeixo y R. Villares (Eds.), *O Seminario de Mondoñedo 1565-2013: Centro de formación e de promoción cultural* (pp. 23-63). Deputación Provincial de Lugo.

Sánchez González, R. (2021). A la sombra de un ilustre apellido: El canónigo toledano don Juan de Silva y Ribera. *e-Spania*, (39). https://doi.org/10.4000/e-spania.40910

Sánchez Sánchez, J. (2002). *Cinco hospitales de la ciudad de Ávila en el Antiguo Régimen*. Universidad Complutense de Madrid.

Seijas Montero, M. (2016). Aproximación a una élite de poder: El cabildo catedralicio de Santiago y los lazos de sangre durante el reinado de Felipe V. En M. López Díaz (Ed.), *Galicia y la instauración de la Monarquía borbónica* (pp. 259-286). Sílex.

Seijas Montero, M. (2021). Lazos familiares y estrategias de poder durante la primera mitad del siglo XVIII: El ejemplo de los Porras. En M. López Díaz (Coord.), *Monarquías ibéricas, poderes y territorios: Instituciones, nobleza y dinámica política* (pp. 379-404). Sílex.

Seijas Montero, M., y Rodicio Pereira, L. (2016). Los cabildos catedralicios de Santiago y Ourense en el reinado de Felipe V: Estado de la cuestión, fuentes y perspectivas de investigación. *Tiempos Modernos*, *8*(32), 230-248.

Seijas Montero, M., y Rodicio Pereira, L. (2017). Los cabildos catedralicios de Santiago y Ourense en el reinado de Felipe V: Algunos resultados. *Studia Historica. Historia Moderna*, *39*(1), 403-449. https://doi.org/10.14201/shhmo2017391403449

Sigüenza Tarí, J. F. (1997). La consecución del Patronato Real en España: El penúltimo intento (1738-1746). *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, (16), 99-110. https://doi.org/10.14198/RHM1997.16.05

Soria Mesa, E., y Díaz Rodríguez, A. J. (Coords.). (2012). *Iglesia, poder y fortuna: Clero y movilidad social en la España Moderna*. Comares.

Souto Cabo, J. A. (2007). *A História de Don Servando: Estudo e edizón*. Cabido da SAMI Catedral-Seminario de Estudos Galegos.

Suárez Golán, F. (2021). *Príncipes e pastores: Os arcebispos de Santiago de Compostela na Época Moderna*. Universidade de Santiago de Compostela.

Vázquez Lesmes, R. (1987). *Córdoba y su cabildo catedralicio en la Modernidad*. Monte de Piedad y Caja de Ahorro de Córdoba.

VARIA

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481377422

EL USO DE LA CABALLERÍA LIGERA DURANTE LAS PRIMERAS CAMPAÑAS MILITARES EN LA ISLA ESPAÑOLA, 1493-1505

The Use of Popular Cavalry During the Early Military Campaigns on the Island of Hispaniola, 1493-1505

Alfredo BUENO JIMÉNEZ

Universidad Anáhuac México
Universidad Nacional Autónoma de México
alfredo.bueno@anahuac.mx

Recibido: 11/06/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: El presente estudio analiza el uso de la caballería ligera durante las primeras campañas militares que se desarrollaron en la isla Española, actual República Dominicana y Haití, entre 1493 y 1505. Esta isla fungió como el primer *nodo* y plataforma de advenimiento de los castellanos a tierras americanas, donde las unidades de caballería que se avecinaron emplearon el estilo de montar a la jineta, una tradición ecuestre de origen islámico, que adoptó la caballería castellana en el contexto de la *Reconquista* en las zonas fronterizas de Andalucía y Murcia, consolidándose plenamente en el siglo XV. En las fases iniciales de la conquista de La Española, esta forma de montar se registra en las fuentes históricas y evidencia arqueológica custodiada en instituciones culturales y sitios arqueológicos de República Dominicana, donde se pudieron examinar diversos artefactos del contacto temprano, asociados a la práctica ecuestre de la monta a la jineta.

Palabras clave: caballos; caballería ligera; jinetes; lanzas jinetas; gineta; estribos; espuelas, La Española; siglo XV.

ABSTRACT: This study delves into the use of light cavalry during the initial military campaigns carried out on the island of Hispaniola—present-day Dominican Republic and Haiti—between 1493 and 1505 The island served as the first strategic hub and launching platform for the Castilian presence in the New World. The cavalry units that arrived there employed the jineta style of riding, an equestrian tradition of Islamic origin adopted by Castilian cavalry during the Reconquista, particularly in the frontier regions of Andalusia and Murcia, where it became fully established by the 15th century. In the early phases of the conquest of Hispaniola, this riding style is documented in historical sources and corroborated by archaeological evidence preserved in cultural institutions and archaeological sites in the Dominican Republic. Various early contact artifacts associated with the jineta riding practice have been examined in these contexts.

Keywords: horses; La Española; horsemen; lanzas jinetas; *gineta* style; stirrups; spurs; Hispaniola; 15th century.

1. INTRODUCCIÓN

Desde la Edad del Bronce hasta la consolidación de los grandes imperios de la Antigüedad tardía, los équidos constituyeron un elemento estructural de los dispositivos bélicos mediterráneos y euroasiáticos. No obstante, fue a partir del siglo IV a.C. cuando comenzó a generalizarse el empleo sistemático del caballo como arma táctica autónoma, tal como documentan los primeros tratados de poliorcética y táctica militar (Eneas el Táctico, ca. 360 a. C./1991, p. 64). Esta transformación respondió a factores tecnológicos —la introducción del freno metálico articulado y de las primeras sillas de montar— así como a cambios en la organización política de los ejércitos, cuya especialización funcional fue cobrando mayor complejidad conforme se consolidaban las estructuras estatales. Flavius Vegetius Renatus, en su concepción tripartita de la *res militaris*, que comprendía el armamento (*armatura*), los efectivos humanos (*milites*) y su disposición táctica en el campo de batalla, situó en posición preferente la fuerza ecuestre, por delante de la infantería y de la flota naval (Vegecio Renato, 383/2021, p. 191). Esta jerarquización no puede interpretarse como mera convención retórica, pues obedecía a la ventaja táctica y simbólica que otorgaba al jinete la altura sobre su montura, de observar a su oponente desde una posición superior. Tal posición no solo optimizaba el rendimiento combativo —amplitud visual, potencia de golpe, velocidad de desplazamiento— sino que operaba simultáneamente como un poderoso marcador social, al inscribir en el cuerpo del jinete una distinción ontológica respecto al combatiente de a pie (Keen, 2005,

pp. 13 y 28). Esta función dual —militar y simbólica— se intensificó durante la Plena y Baja Edad Media, cuando la caballería dejó de ser únicamente una categoría técnica para convertirse en el fundamento institucional de un estamento social (Duby, 1978).

En este marco, la denominada «caballería villana» constituyó una élite municipal intermedia de notable relevancia en los procesos de reorganización socio militar en los reinos ibéricos, que se encontraba por encima de los peones y la gente común, simplemente por gozar de un patrimonio suficiente para adquirir un équido de guerra y el armamento necesario para combatir sobre él, con la finalidad de proteger y defender un territorio (Pescador del Hoyo, 1964, p. 169; Tavares Durán, 2008, pp. 248-249). Este modelo de adscripción miliciana, condicionado por criterios económicos antes que genealógicos, generó un conjunto de privilegios y exenciones fiscales que configuraron una frontera permeable entre el estamento nobiliario y el estado llano. La distinción fundamental residía, precisamente, en ese carácter adquirido y no transmisible: frente a la noble nobleza de sangre o linaje —sancionada por la ley I del título XXI de las *Siete Partidas* de Alfonso X (1255-1272)—, la condición del caballero villano se definía por el desempeño activo y la disponibilidad material para el servicio. Este modelo de integración miliciana resultó determinante en la configuración de las compañías militares que protagonizaron, siglos más tarde, las empresas de conquista ultramarina (Powers, 1988).

Durante los últimos *impasses* de la *Reconquista* en la península ibérica, en el área territorial conocida como la Frontera, la posición socioinstitucional de aquellas personas poseedoras de un equino idóneo para la guerra y armas para combatir sobre él, experimentó una consolidación normativa de alcance estructural. En el seno de las Cortes de Alcalá de 1348, Alfonso XI procedió a institucionalizar mediante el establecimiento de una cuantía mínima una prestación ecuestre preexistente, cuya regulación fue sucesivamente ajustada por diferentes reyes hasta configurar la denominada «caballería de cuantía», un estatuto jurídico que hacía de la posición acreditada del caballo y armas un requisito indispensable para acceder a la condición plena de *caballero* (Pérez Prendes y Muñoz de Arraco, 1960, p. 125; Torres Fontes, 1968, p. 35). Esta disposición respondía tanto a imperativos defensivos —la necesidad de mantener una caballería popular operativa en una frontera permanentemente militarizada— como a lógicas de diferenciación social que el Estado monárquico buscaba regular y controlar. En este contexto de militarización fronteriza, las unidades de caballería popular incorporadas en las mesnadas señoriales y reales, adoptaron de forma progresiva la técnica de monta *a la jineta*, una modalidad ecuestre de origen norteafricano introducida en Al-Ándalus con la llegada de los *zenetes*, una comunidad berberisca vinculada a los Benimerín, que estuvieron al servicio de Mohamed I de Granada, fundador de la dinastía nazarí (Ferrandis Torres, 1943, p. 142; González Jiménez, 1998, p. 335; Pereira, 2008, p. 108).

No obstante, la transferencia de esta técnica ecuestre a la caballería castellana no se produjo de manera inmediata ni homogénea. Su adopción data de inicios del siglo XIV en la frontera de Andalucía y Murcia, un espacio que se extendía desde Lorca hasta Tarifa, donde convivieron dos mundos enfrentados y en guerra casi permanente. De ahí que la primera referencia léxica del arabismo *ginete* en castellano –derivado del árabe *zanâta*, denominación de la tribu berberisca reconocida por su destreza en la equitación– aparece en la *Crónica* de Alfonso X, redactada a finales de la primera mitad del siglo XIV (Mailló Salgado, 1982, p. 108). A partir del siglo XV, la monta a *la jineta* se consolidó en los reinos cristianos peninsulares, constituyendo el substrato técnico y simbólico de las prácticas ecuestres que, en el marco de la expansión imperial atlántica, habrían de trasladarse a los territorios americanos (Gimeno Gómez, 1993). La isla Española, actual territorio compartido por Haití y República Dominicana, se configuró como el primer espacio americano en el que dicha práctica fue implementada, lo que le otorga una posición inaugural en la historia del contacto temprano.

Pese al protagonismo que tuvo esta modalidad ecuestre en La Española, la historiografía le ha dedicado escasa atención al tema, abordándolo, cuando mucho, de forma tangencial en relación con los procesos de conquista y colonización temprana. En este sentido, los estudios más sólidos sobre la caballería popular ibérica se han enfocado en la mentalidad, el origen institucional y la evolución de estos cuerpos en la Frontera peninsular (Carmona Ruiz, 2006; González Jiménez, 1998; Menjot, 2012; Nogales Rincón, 2019; Pescador del Hoyo, 1964), constituyendo el antecedente historiográfico inmediato de las prácticas bélicas trasladadas al ámbito caribeño. Para el caso americano, los trabajos ofrecen aproximaciones generales a la introducción del ganado equino y sus usos socioeconómicos y militares (Alvarado León et al., 2023; Cabrera, 1945; Cortés et al., 2017; Cunninghame Graham, 1997; Del Río Moreno, 1992; Digard, 1997; Gregson, 1969; Johnson, 1943; Rivera Serna, 1979), con particular énfasis en el espacio novohispano (Denhardt, 1951) y en el desarrollo de la arriería como sistema de transporte (Mijares Ramírez, 2009; Suárez Argüello, 1992, 1997). Para el caso antillano en particular, destacan los aportes de Demetrio Ramos Pérez (1984), Raúl Andrés Perezgrovas Garza (2024) y Alfredo Bueno Jiménez (2025). Tanto Ramos Pérez como Bueno Jiménez analizan el caso de los escuderos a caballo de la Santa Hermandad, la primera cuadrilla de caballería ligera que arribó a tierras americanas por mandato expreso de los Reyes Católicos, mientras Perezgrovas ofrece una visión sucinta del embarque e introducción de los primeros équidos en el Caribe. La persistencia de estas lagunas historiográficas pone de manifiesto la necesidad de una investigación integral que examine el rol estratégico de la caballería ligera en las operaciones militares iniciales desarrolladas en La Española, primer espacio colonizado de forma sistemática en el continente americano. En este sentido, el presente trabajo se inscribe en la creciente corriente de la historia militar comparada y de la historia global del caballo (Digard, 1997;

Kelekna, 2009), que sitúa al équido como agente activo en los procesos de conquista, no como mero instrumento pasivo del poder colonial.

A propósito de lo expuesto, la presente investigación se propone analizar el papel de la caballería ligera en las campañas militares desarrolladas en la isla Española durante el período colombino y la administración de Nicolás de Ovando. De forma específica, se atiende las operaciones en la región de Cibao –zona interior de la isla– durante el gobierno colombino entre 1494 y 1498, así como las expediciones de conquista hacia los extremos occidental y oriental de la isla emprendidas bajo el mandato de Ovando, en concreto, las campañas de Jaragua e Higüey, regiones sometidas al control castellano entre 1502 y 1504. En estos escenarios, las cuadrillas de caballería ligera desempeñaron funciones de exploración territorial, hostigamiento, persecución y control del espacio. Metodológicamente, el estudio combina el análisis de fuentes cronísticas y documentales con la revisión de tratadística ecuestre y el examen de materiales arqueológicos procedentes de instituciones patrimoniales de la República Dominicana, configurando una propuesta de historia material de la conquista de enfoque interdisciplinar.

El primer libro de la *Historia de las Indias* de Bartolomé de las Casas (redactada entre 1527 y 1561) constituye una fuente de valor excepcional, al aportar información detallada sobre las campañas militares en Cibao y en la cordillera Septentrional, así como referencias precisas sobre la participación de los jinetes castellanos en las expediciones al extremo oriental de la isla. A este respecto, resultan valiosas las descripciones de las campañas de conquista y resistencia en Higüey, en las que participó el propio Las Casas. Por tal motivo, aparecen en su obra datos sobre el equipamiento ecuestre, indumentaria militar y formaciones de combate. A esta fuente se suman la *Historia del Almirante* de Hernando Colón (h. 1539), redactada en plena efervescencia de los pleitos colombinos a partir de documentación autógrafa del almirante; *De Orbe Novo Decades Octo* de Pedro Mártir de Anglería (h. 1511), de notable valor por su contemporaneidad respecto a los eventos narrados; la *Historia general y natural de las Indias* de Gonzalo Fernández de Oviedo, especialmente su primera parte publicada en 1535; y la *Historia general de las Indias de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano* de Antonio de Herrera y Tordesillas (1601) complementan el corpus de fuentes cronísticas del periodo. Si bien estas obras incluyen referencias dispersas respecto a la actividad ecuestre, su valor documental es fundamental para reconstruir el papel de la caballería en el periodo analizado y en otros espacios de la monarquía hispánica. Complementan el corpus anterior las crónicas castellanas de finales del siglo XV y comienzos del XVI —entre las que destacan las de Palencia (ca. 1480/1904), Bernáldez (ca. 1513/1962) y Pulgar (ca. 1501/1943)—, que proporcionan numerosas referencias sobre la monta a la jineta en el contexto castellano.

Complementariamente, se han revisado cédulas reales, memoriales, instrucciones, relaciones de los viajes colombinos escritos por testigos presenciales –Diego Álvarez Chanca y Guillermo Coma– y correspondencia privada. Numerosos de estos documentos conservados en el Archivo General de Indias (Sevilla) y en el Archivo General de Simancas (Valladolid), aportan información sobre el número de équidos embarcados, el equipamiento *a la jineta* transportado, las solicitudes de abastecimiento dirigidas a la Corona y las funciones militares atribuidas a estas cuadrillas durante el contacto temprano en la isla Española. Afortunadamente, un segmento significativo de ese corpus documental se halla disponible en las compilaciones documentales de Juan Gil (1984) y Consuelo Varela (2003), Juan Pérez de Tudela Bueso (1994) y Vicente Rubio (2007), cuya labor ecdótica facilita la consulta de fuentes de difícil acceso directo.

La identificación e interpretación del equipamiento del jinete ha sido posible gracias a la revisión crítica de los tratados y obras técnicas sobre la monta *a la jineta* de los siglos XVI y XVII. Nos referimos a los escritos de Fernando Chacón (1551), Pedro de Aguilar (1572), Juan Suárez de Peralta (1580), Juan Arias Dávila Puertocarrero (1590), Pedro Fernández de Andrada (1599), Vargas Machuca (1599/1892; 1600; 1621) y Gregorio de Tapia y Salcedo (1643), que proporcionan descripciones técnicas precisas sobre la postura corporal del jinete, el manejo de las armas, la morfología de los arreos y la terminología especializada asociada a esta práctica ecuestre. Dicha tratadística ha resultado especialmente útil para la interpretación arqueológica de artefactos materiales asociados a la caballería ligera en La Española, procedentes de instituciones culturales y museos de sitio en la República Dominicana. Entre estos contextos patrimoniales destacan el sitio arqueológico de La Isabela, primer asentamiento permanente de época colombina, ubicado en la provincia de Puerto Plata; el área de exhibición del sitio de La Vega Vieja, en la actual provincia Sánchez Ramírez –actualmente cerrada al público y en avanzado estado de deterioro, lo que plantea una urgente alerta patrimonial–; la Oficina de Arqueología Pueblo Viejo de Cotuí, que custodia materiales procedentes del primer campamento minero castellano fundado en la región de Cibao (Olsen Bogaert et al., 2016), gestionado bajo la administración de la empresa minera transnacional Barrick Gold; y el Museo Casa Fuerte Juan Ponce de León, primigenia residencia del conquistador castellano localizado en el municipio de San Rafael del Yuma, en la provincia de La Altagracia, epicentro de la primigenia villa de Salvaleón de Higüey. Estas colecciones contienen artefactos hasta ahora inéditos, procedentes de contextos arqueológicos del período del contacto temprano, que aportan evidencia material directa sobre la monta *a la jineta* y su equipamiento militar en el primer escenario de colonización sistemática en tierras americanas. El estudio de este conjunto material, realizado en julio de 2024 gracias a los permisos otorgados por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental y la Dirección General de Museos del Gobierno de la República Dominicana, así como por la trasnacional minera Barrick Gold, constituye un componente material

escasamente explorado en los estudios sobre historia militar temprana en América. Su análisis permite enriquecer la comprensión del rol que desempeñó la caballería ligera en las primeras campañas de conquista en La Española y, por extensión, en la configuración de los dispositivos bélicos que articularon la expansión imperial castellana en el ámbito atlántico.

2. EL ADVENIMIENTO DE LA PRIMERA CUADRILLA DE CABALLERÍA LIGERA Y SU CONFLICTO CON LA ADMINISTRACIÓN COLOMBINA, 1493-1495

Analizar la primera cuadrilla de caballería ligera que se fletó desde la península ibérica a los territorios americanos implica identificar, en primer lugar, el momento exacto de su envío y punto de destino. Al respecto, las fuentes históricas evidencian cómo no se introdujeron equinos hasta el segundo viaje de Colón, pues los objetivos de la expedición inicial era hallar nuevas tierras, sin la intención explícita de conquistar y colonizar, como sucedió a partir de la segunda navegación. En este sentido, el arcediano de Sevilla, Juan Rodríguez de Fonseca, en calidad de primer intendente de Indias, fue el encargado de organizar y aprovisionar las diecisiete embarcaciones que conformaron la armada, la cual zarpó el 25 de septiembre de 1493. En cuanto al número de équidos embarcados, la ausencia del libro de armada impide una cuantificación documental precisa; no obstante, el cotejo crítico de crónicas, relaciones de viajes y documentación administrativa de la época permite inferir una cifra en torno a los cuarenta ejemplares, considerando caballos, yeguas y mulos (Bernáldez, ca. 1513/1962, p. 301; Colón, 1494/2003, p. 235, ca. 1539/2000, pp. 158-159; Las Casas, 1527-1561/1994, pp. 846-847).

De este contingente, veinticinco ejemplares correspondían a una cuadrilla de caballería ligera integrada por escuderos reclutados de las principales capitanías del Reino de Granada y de las milicias concejiles de Salobreña, Almuñécar y Guadix (Tabla 1) (Bueno Jiménez, 2025, p. 20; Pérez de Tudela, 1994, p. 356; Ramos Pérez, 1982, p. 36). Esta unidad aparece en la documentación oficial bajo el apelativo de *lanzas jinetas*[1], denominación que alude a la modalidad ecuestre de raigambre islámica que adoptó la caballería castellana en la frontera peninsular andaluza y murciana, lo que confiere una marcada connotación geográfica. Dicha designación se distingue conceptualmente del término *hombres de armas* en Castilla, que evolucionó semánticamente hacia el de *lanza* —referencia espacial castellana—, no en razón del número de efectivos que pudieran conformarla, sino por la novedad del equipamiento militar incorporado a través de la influencia que ejercieron las

1. «Cédula de los Reyes Católicos dirigida al coronel Villalba», Barcelona, 23 de mayo de 1493 Archivo General de Indias (AGI), Patronato, leg. 9, fol. 4r.

compañías extranjeras que intervinieron en la guerra civil entre Pedro I y el futuro Enrique II (Martín Vera, 2021, p. 324). En este proceso, *lanza* se consolidó como una sinécdoque —tropo retórico mediante el cual se designa el todo por una de sus partes o viceversa—, recurso que simplificó y enfatizó el lenguaje militar de la época (Martín Vera, 2021, p. 305).

Conviene precisar que la *lanza* castellana no fue una unidad táctica, agrupación operativa ni formación de combate en sentido estricto —aceptación que sí correspondería a la *lanza* gala y borgoñona, articulada en torno a un elenco diverso de combatientes: caballeros, ballesteros, pajes, entre otros— tal como la conciben autores como J. Santiago Palacios Ontalva (2018, pp. 306, 311, 316, 320) y Ayala Martínez (2001, pp. 8-10). A diferencia de aquella, la *lanza* castellana se reducía a un único combatiente dotado de caballo, armas y pertrechos conforme al ordenamiento regio, eventualmente acompañado de un paje (Ladero Quesada, 1993, pp. 30-31; Martín Vera, 2021, pp. 304-308). Por esta razón, con el fin de evitar ambigüedades terminológicas y de connotación geográfica, se ha optado en el presente trabajo por el término *cuadrilla* para designar a dicho contingente, en tanto que alude a un grupo de personas organizado para la ejecución de una labor colectiva sin liderazgo jerarquizado.

De este modo, las *lanzas jinetas* de la Santa Hermandad no constituían una unidad militar *stricto sensu*, sino una cuadrilla de escuderos a caballo que adoptó la modalidad ecuestre de la monta *a la jineta*. Su sostenimiento salarial corrió a cargo de la Santa Hermandad, institución organizada en las Cortes de Madrigal en 1476, cuya misión era garantizar la seguridad en los campos y vías de comunicación, además de proveer tropas y financiamiento en el contexto de la guerra de Granada (Lunenfeld, 1970; Martínez Ruiz, 1992). Este último aspecto, contribuyó de forma decisiva en la creación de las futuras Guardas de Castilla, consideradas el primer ejército real permanente en la Monarquía hispánica (Martínez Ruiz y Pazzis Pi Corrales, 2012). A esta fuerza pertenecían la cuadrilla de escuderos a caballo, como aclaran los reyes en su respuesta al *Memorial* que entregó Cristóbal Colón al contino Antonio de Torres, el 30 de enero de 1493[2]. La selección de los jinetes fue encomendada a Hernando de Zafra, secretario regio, con la finalidad de dotar al segundo viaje de un componente militar que garantizase la estabilidad del proyecto colombino en las nuevas tierras y, simultáneamente, apoyase en las campañas militares que pudiesen desarrollarse en los territorios recién incorporados. Asimismo, se contempló el embarque de cinco *dobladuras* yeguas (Bueno Jiménez, 2025, p. 21; Pérez de Tudela, 1994, p. 356; Ramos

2. «[…] y en lo destos escuderos sus altezas mandan que estén allá y siruan pues son de las guardas y criados de sus altezas». «Memorial de Colón sobre lo que Antonio de Torres ha de decir de su parte a los Reyes», La Isabela, 30 de enero de 1494 En Pérez de Tudela, 1994, I, 549, doc. 87

Pérez, 1982, p. 36), previsión que obedecía a una política deliberada de reproducción equina orientada a consolidar la yeguada en La Española. Esta hipótesis difiere de la propuesta de Miguel Ángel Ladero Quesada, quien atribuye a las *dobladuras* de las *lanzas* castellanas una función de apoyo logístico —transporte de cargas o sustitución del caballo en caso de fatiga o pérdida— (1993, p. 31), función que, en el contexto del segundo viaje colombino, habría recaído previsiblemente en bestias de carga destinadas al transporte de suministros y material de campaña. Por otra parte, en el modelo de las Guardas de Castilla, la *dobladura* era montada por un *paje de lanza*, figura habitualmente responsable del acarreo de dichos pertrechos (Martín Valera, 2021, p. 312), circunstancia que no se replica en el caso de los escuderos a caballo de la Santa Hermandad.

De este modo, la primera fuerza ecuestre que se avecinó a la isla Española fue, por tanto, el resultado de una selección cuidadosa entre las principales capitanías del Reino de Granada, trasladada más tarde a Sevilla hasta el momento de embarque[3]. Los caballos elegidos fueron corceles, sementales muy preciados en la época, entrenados para el combate y para los ejercicios de torneos, cuya naturaleza permite inscribirlos en la categoría de lo que la historiografía sobre la zootecnia histórica denomina «caballos de guerra», caracterizados por su porte, resistencia y adiestramiento específico (Morales Muñiz, 2010, p. 540). Guillermo Coma proporciona información sobre estos caballos poco después de la escala en el puerto de Navidad y del encuentro con el cacique Guacanagarí, refiriéndose a ellos como «excelentes corceles, veloces en la carrera y fuertes para soportar las armas» (Coma, ca. 1494/1984, pp. 196-197, doc. VIII). Esta valoración laudatoria contrasta con la visión peyorativa que el propio Cristóbal Colón consignó en el *Memorial* a Torres, donde denunció que los équidos embarcados eran de baja calidad y no valían más de 2 000 maravedíes. Más aún, insinuó que los ejemplares exhibidos durante los alardes en Sevilla habían sido sustituidos por otros de inferior condición, señalando al funcionario Juan de Soria como presunto artífice de la permuta, motivada según el almirante «por algún interés suyo». Esta denuncia no se limita a la calidad de los animales, también cuestiona la actitud de los propios jinetes, a quienes reprochó haberse negado a ceder sus monturas durante las faenas de fundación de La Isabela. Es por ello por lo que Colón sugiere a los Reyes Católicos adquirir los caballos a sus propietarios, argumentando su escaso valor[4].

3. «Cédula al coronel Villalva, para que con veinte ginetas de la Santa Hermandad del reino de Granada este en Sevilla el 20 de junio a fin de pasar a Indias con el Almirante Colón», Barcelona, 23 de mayo de 1493 (Pérez de Tudela, 1994, pp. 359-360, doc. 87).

4. «Memorial de Colón sobre lo que Antonio de Torres ha de decir de su parte a los Reyes», La Isabela, 30 de enero de 1494 (Pérez de Tudela, 1994, p. 549, doc. 87).

Tabla I. Identificación de diecisiete de lanzas jinetas de los veinte seleccionados por Hernando de Zafra y capitanías de procedencia

	Nombre	Capitanía y/o lugares de procedencia
1	Francisco de Olmedo	Capitanía del señor don Álvaro de Luna
2	Antonio de Peñalosa	Capitanía del señor Garcilaso [de la Vega]
3	Arias Gonzalo	Capitanía del señor don Luys
4	Francisco de Estrada	Capitanía del señor don Luys
5	Gonzalo Pacheco	Capitanía del señor Antonio del Águila
6	Diego Osorio	Capitanía del señor don Rodrigo
7	Rodrigo Valerio/Vázquez	Compañía del señor don Rodrigo
8	Antonio Román	Capitanía del señor don Diego
9	Rodrigo de Arévalo	Capitanía del señor don Bernardo
10	Antonio de Quintela	Escudero de las lanzas que están en Salobreña
11	Diego de Leyva	Escudero de las lanzas que están en Guadix
12	Lopez de Careces	Escudero de las lanzas que están en Almuñécar
13	Diego de Sepúlveda	No consta su procedencia
14	Álvaro Serrano	No consta su procedencia
15	Cristóbal de León	No consta su procedencia
16	Pedro Coronado	No consta su procedencia

Fuentes: Ramos Pérez (1982, pp. 50-56); León Guerrero (2000); Bueno Jiménez (2023, pp. 180-181); Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1, fol. 103; Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, leg. 1 315, fol. 246.

Las acusaciones formuladas por Colón suscitaron una reacción inmediata en los Reyes Católicos, quienes ordenaron a Juan Rodríguez de Fonseca investigar el asunto y, en caso de corroborarse, remitir a los responsables y aplicar las correspondientes sanciones. Al mismo tiempo, los monarcas instaron a los jinetes de la Santa Hermandad a cumplir sin dilación las órdenes emitidas por Colón y a ceder sus monturas cuando este lo estimase necesario[5], logrando de esta manera el genovés imponer su voluntad. Sin embargo, la severidad de estas críticas, deben entenderse en un contexto más complejo, de raíces más profundas, en el que chocaban las aspiraciones de los jinetes de la Santa Hermandad y las férreas limitaciones del sistema de gobierno colombino (Bueno Jiménez, 2025, p. 28; Ramos Pérez, 1982, p. 20). Estas «tensiones predeterminadas», como las define Demetrio Ramos Pérez, antecedieron incluso al embarque en Sevilla y se fueron agudizando de manera progresiva tras la

5. «Memorial de Colón sobre lo que Antonio de Torres ha de decir de su parte a los Reyes», La Isabela, 30 de enero de 1494 (Pérez de Tudela, 1994, p. 549, doc. 87).

partida desde la bahía de Cádiz. Entre los agravios esgrimidos por los jinetes en una carta dirigida a los monarcas, resalta, en primer lugar, la falta de provisión de cebada durante más de seis meses y la apropiación forzosa de sus monturas para accionar los molinos de las tahonas instaladas a lo largo del curso fluvial del Bajabonico, así como su empleo en el acarreo de piedra y agua destinados a las obras públicas del asentamiento (Bueno Jiménez, 2025, p. 26; Colón, 1494/2003, pp. 264-265; Ramos Pérez, 1995, p. 211). Este último agravio adquiere una dimensión simbólica particular, pues los jinetes subrayan que sus caballos realizaron tales labores con «albarda»[6], es decir, el aparejo de los animales de carga, impropio para un corcel entrenado para la guerra y las actividades de representación.

Estas fricciones permiten contextualizar, en parte, algunos de los sucesos que acontecieron poco después de la primera expedición al interior de La Española, acometida por Alonso de Ojeda y Ginés de Gorbalán a principios de enero de 1494, durante la cual se obtuvieron muestras de oro en Cibao (Álvarez Chanca, ca. 1494/1984, p. 175). El 12 de marzo del mismo año, Colón encabezó la segunda incursión a dicha región, al frente de los hombres en mejores condiciones físicas en La Isabela, incluyendo algunos indígenas de las inmediaciones a la villa y efectivos de la cuadrilla de caballería ligera, con la finalidad de reconocer el territorio, recolectar oro y erigir una casa-fuerte (Colón, ca. 1539/2000, p. 171; Las Casas, 1527-1561/1994, p. 873). A tres jornadas de La Isabela, ante las dificultades que imponía la accidentada orografía de la cordillera Septentrional para el avance de la caballería, Colón ordenó a los jinetes, junto a un grupo de trabajadores pertrechados con azadas y azadones, la apertura de un camino mediante el desbroce de la maleza (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 873). La contribución de los jinetes fue reconocida simbólicamente mediante la denominación de «Puerto de los Hidalgos», calificado por Hernando Colón como «primero que se abrió en las Indias» (Colón, ca. 1539/2000, p. 172). No obstante, tanto este episodio como los sucesos anteriores, representa una transgresión de los fueros de caballería, en virtud de los cuales sus miembros estaban exentos de *facendera* y *castillería*, esto es, de participar en labores de construcción de caminos y obras de defensa (Ramos Pérez, 1982, p. 111).

El resultado de la expedición fue la fundación del fuerte de Santo Tomás de Jánico, al que retornaron días después, procedentes de La Isabela, dieciséis jinetes de la Santa Hermandad, aunque en este caso como parte de una compañía capitaneada por Alonso de Ojeda, compuesta por 250 efectivos de a pie, entre escuderos y ballesteros; 110 espingarderos, además de 20 oficiales. La finalidad operativa de

6. «Cédula real de Madrid, de 23 de febrero de 1495, ordenando a Hernando de Zafra resuelva en lo que se indica el valor de lo que los hermanos Colón tomaron en las Indias a los componentes de las lanzas jinetas». Archivo General de Simancas, Valladolid, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1, fols. 102-103.

la misión consistía en articular tres frentes militares, conforme a una instrucción emitida por Cristóbal Colón al caballero aragonés Pedro Margarite, hasta entonces alcaide del fuerte, con fecha del 9 de abril de 1494. La instrucción encomendaba a Margarite el liderazgo de una campaña de reconocimiento por diferentes regiones de la isla, con énfasis particular en Cibao. Sin embargo, cuando llegó Ojeda con el contingente a Santo Tomás para relevar a Margarite y transferirle el mando, el relieve escarpado de la cordillera Central impidió el avance de los jinetes, quienes se vieron obligados a dejar sus caballos en el fuerte bajo la custodia de un escudero de la Hermandad o persona de confianza de Margarite. En este escenario, la instrucción colombina contiene una orden de notable valor documental para la comprensión del estado real de la cuadrilla: Colón ordenaba a Margarite «curar destos caballos juntamente con mucha diligencia todos más que fuesen suyos, porque ya vedes quanto nos va en tenerlos buenos»[7]. La expresión «curar destos caballos» y la insistencia en el tratamiento diligente revelan el deterioro físico en que se encontraban los equinos, el cual cabe atribuir a la acumulación de sobrecargas funcionales padecidas en los meses precedentes: en enero y febrero de 1494 habían sido empleados en los molinos del Bajabonico; en marzo, en el desbroce de vegetación en la cordillera Septentrional; y en abril, en el trayecto desde La Isabela hasta Santo Tomás, travesía que implicó cruzar nuevamente la cordillera Septentrional y vadear cauces fluviales de considerable caudal, como el río Yaque del Norte. De ahí que los equinos estuviesen maltrechos y su recuperación fuese una cuestión estratégica para la administración colombina, pues implicaba también desactivar un foco de tensión corporativa y preservar la capacidad operativa del único cuerpo de caballería disponible en la isla, cuyo valor como arma de choque y de intimidación psicológica sobre las comunidades indígenas resultaba esencial.

Este cúmulo de tensiones explica por qué los jinetes regresaron a la península ibérica mientras Cristóbal Colón estaba ausente en la isla, realizando un viaje exploratorio por las Antillas Mayores entre abril y septiembre de 1494. En este contexto de vacío de autoridad, los hermanos del almirante, Diego y Bartolomé Colón, procedieron a confiscar los caballos de los jinetes de la Santa Hermandad, lo que motivó las subsiguientes demandas formales[8]. En sus reclamaciones, exigieron la indemnización de los equinos que habían dejado en La Isabela, situación que quedó consignada en dos documentos expedidos el 23 de febrero de 1495: la «Carta de los reyes a Hernando de Zafra acerca de las reclamaciones», y la «Relación de los maravedíes que se han de librar a los escuderos que fueron a las Indias con sus

7. «Instrucción que dio el almirante don Cristóbal Colón a Mosén Pedro Margarite para la exploración de la Isla Española», La Isabela, 9 de abril de 1494 (Pérez de Tudela, 1994, pp. 557-560, doc. 188).

8. Archivo General de Simancas, Valladolid, España, Consejo y Junta de Hacienda, leg. 1, fols. 102-103.

caballos». Ambos documentos contemplan la compensación económica por los caballos, las armas jinetas, las sillas de montar y los demás pertrechos necesarios para la jineta, que habían permanecido en la isla. La indemnización hubo de sufragarse con fondos procedentes de las capitanías del Reino de Granada, tras declararse oficialmente los caballos como «muertos», en conformidad con lo dispuesto por las ordenanzas de la Santa Hermandad relativas a la reposición de pérdidas. Dicho mecanismo habilitaba la reclamación de la compensación correspondientes por los equinos con independencia de que su fallecimiento no hubiera sido fehacientemente acreditado, lo que revela la flexibilidad procedimental de los marcos jurídicos castellanos ante situaciones de excepcionalidad. El monto total de la indemnización ascendió a 106 000 maravedíes por la pérdida de trece caballos,[9] cifra que abre dos hipótesis interpretativas no excluyentes. Por un lado, de que algunos ejemplares hubieran perecido en La Española por causas no documentadas, o bien que algún miembro de la cuadrilla de caballería ligera hubiera logrado retornar a la península con su montura. Esta segunda posibilidad no resulta inverosímil si se considera el elevado valor económico, militar y social del caballo en la Castilla tardomedieval.

3. LA TÉCNICA DE MONTA A LA JINETA EN LA ISLA ESPAÑOLA: EVIDENCIA HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA

Antes de emprender el análisis de la participación que tuvieron las cuadrillas de caballería ligera en las primeras campañas militares en la isla Española, resulta imprescindible aproximarse a la técnica de *monta a la jineta* y a la cultura material asociada a dicha práctica. Tanto las fuentes históricas como evidencia arqueológica custodiada en museos de sitio de la República Dominicana permiten inferir la presencia de esta modalidad ecuestre desde el contacto temprano y, por extensión, su difusión progresiva hacia el resto de territorios americanos. Se trata de una forma de caballería ligera propia del reino nazarí de Granada, ampliamente extendida entre las milicias europeas del siglo XV. La caballería castellana no fue ajena a esta influencia, que según David Nogales Rincón incorporó en la frontera de Andalucía y Murcia desde principios del siglo XIV (2019, p. 39), hasta alcanzar su plena consolidación en la siguiente centuria. Su principal característica radicaba en el empleo de caballos veloces y ágiles —como los denominados «berberiscos»—, montados sobre sillas provistas de estribos elevados que permitían al jinete mantener las piernas ligeramente flexionadas (Pereira, 2008, p. 115; Del Río Moreno, 1992, p. 51). Esta postura favorecía una mayor movilidad y control durante la cabalgata, cualidades esenciales en las tácticas propias de la caballería ligera. En contraposición, la técnica de monta *a la*

9. Archivo General de Simancas, Valladolid, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1, fols. 102-103; Archivo General de Simancas, Valladolid, Guerra Antigua, leg. 1.315, fol. 246

brida, característica de los ejércitos cristianos del norte peninsular y de las regiones septentrionales, respondía a los requerimientos de la caballería pesada acorazada. Esta segunda modalidad se definía por el uso de équidos robustos, capaces de soportar jinetes equipados con armaduras completas y escudos de madera de gran envergadura, cuya sujeción al brazo y al hombro exigía un complejo sistema de correas (Pereira, 2008, p. 130). Eran igualmente propias en este tipo de caballería las lanzas largas, aunque su rasgo más definitorio fue el empleo de estribos bajos, fijados a la silla mediante *loros* o correas (Pereira, 2008, p. 114-115, 122). Esta configuración obligaba al caballero acorazado a mantener las piernas extendidas, concentrado el peso del cuerpo sobre los *codillos* o *estriberas*, una solución mecánica necesaria para compensar el desequilibrio derivado del peso del armamento e indumentaria (Morales Muñiz, 2010, p. 542; Del Río Moreno, 1992, pp. 51).

En lo que concierne a la monta *a la jineta*, esta imponía exigencias más bruscas sobre el caballo, a través del uso de diversos mecanismos metálicos y sistemas de correas destinados a facilitar la equitación y control del animal. Entre estos elementos de control destacaban los dispositivos que se colocaban en torno a la boca y la cabeza del equino, en particular, el bocado, freno o embocadura, que funcionaba a modo de palanca, ejerciendo presión sobre el asiento del diastema, un espacio de anchura variable entre los incisivos y los premolares del animal, donde se insertaba la pieza. Este componente estaba conectado a un juego de correas que, al ser accionadas por el jinete, generaban presión simultánea sobre la barbilla y el paladar del caballo. A diferencia de la Antigüedad clásica, en que se utilizaban bocados de gran severidad —algunos provistos de púas (*achine*, erizo) e incluso de discos cortantes para impedir que el animal los «mordiese» (Quesada Sanz, 2005, p. 98)—, los jinetes del Medievo tardío y, en particular, quienes participaron en las campañas tempranas en La Española, optaron por una tipología diversificada (Figura 1), determinada tanto por la morfología bucal del caballo como por los efectos de control que se pretendían conseguir. No obstante, todos los ejemplares conocidos presentan *desveno* o «libralenguas», es decir, unas barras o asiento dispuestos sobre la lengua del animal, con el fin de estimular su salivación y propiciar así un estado de relajación muscular. Esta afirmación se valida a través de numerosas referencias contenidas en la tratadística ecuestre (Aguilar, 1572, fols. 9-10; Fernández de Andrada, 1599, fol. 89; Vargas Machuca, 1619, fol. 9; Tapia Salcedo, 1643, pp. 29-30), la evidencia iconográfica y, de manera especial, los testimonios arqueológicos, como el ejemplar custodiado en el Museo Casa Fuerte Ponce de León, cuya embocadura mide aproximadamente 13 centímetros (Figura 2).

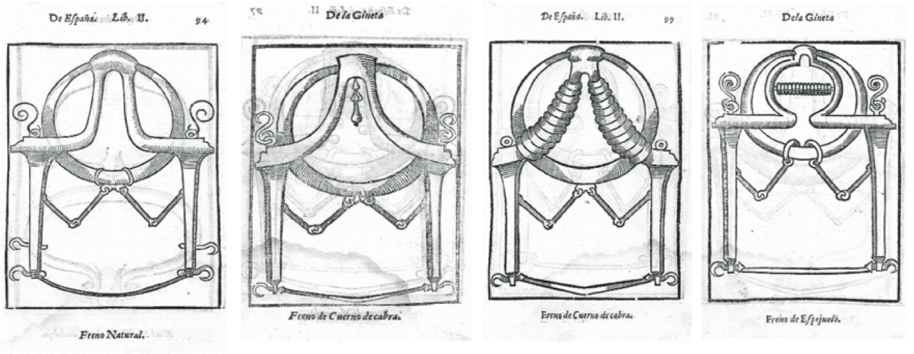


Figura 1. Representación de diversos géneros de frenos: natural, espejuelo, cuerno de cabra y portalete, todos con desveno, contenidos en los fols. 89, 90 y 91 del *Libro de la gineta de España* de Pedro Fernández de Andrada (1599)



Figura 2. *Izquierda*. Diseño de bocado africano de argollas, denominado comúnmente *mameluco*, provisto de desveno, reproducido a partir del diseño de Elwyn Hartley Edwards (1994, p. 23). *Derecha*. Embocadura con desveno de curvatura pronunciada, custodiada en el Museo Casa Fuerte Ponce de León, San Rafael Yuma, República Dominicana, datada de principios del siglo XVI. Sin núm. de catálogo. Fotografía y edición digital por Alfredo Bueno Jiménez, 2024

Igualmente, entre la evidencia arqueológica del contacto temprano en La Española, no faltan los elementos de estimulación del caballo, como las denominadas *espuelas jinetas* o «espuelas moriscas», ampliamente documentadas en los

inventarios de bienes suntuarios del medioevo y modernidad (Martínez Martínez y Lora Serrano, 2007, p. 201). Estas consistían en estructuras metálicas a las que se fijaban las lazadas destinadas a ajustar el borceguí, rematadas con una punta aguda de hierro provista de un tope que impide la penetración profunda en el flanco del animal, con el fin de evitar lesiones de consideración. Un ejemplo característico de este conjunto tipológico es el *acicate*, variante de espuela documentada tanto en el sitio arqueológico de La Isabela —un ejemplar recuperado en excavación— como en la colección del Museo Casa Fuerte Juan Ponce de León —con otro ejemplar conservado—, ambos datados entre finales del siglo XV y principios del XVI (Figuras 3 y 4). Los dos acicates presentan un remate en espiga metálica con tope, un cuerpo rígido articulado mediante ranuras o ventanas rectangulares en sus extremos para facilitar la sujeción por correas, y un resalte o moldura en su parte superior para reforzar el ajuste al tobillo del jinete. Esta última característica establece una notable continuidad morfológica con espuelas de época tardorromana (Quesada Sanz, 2005, p. 125). Una tipología distinta fue identificada en la sala expositiva del sitio arqueológico de La Vega Vieja, la denominada *espuela barrilera*, característica de los siglos XV y XVI, cuyo rasgo definitorio es la presencia de «ojos» o tachones discoidales en ambos extremos del cuerpo, a través de los cuales se insertan las correas de sujeción (Tapia Salcedo, 1643, p. 19; Vargas Machuca, 1600, fol. 9v) (Figura 5). En el extremo del vástago de la pieza se dispone una abertura destinada a alojar la *rodaja* (Vargas Machuca, 1600, fol. 9), una rueda dentada giratoria para generar estímulos mediante pinchazos o golpes sobre el flanco del caballo (Figura 6).

La estabilidad y seguridad del jinete se conseguía principalmente mediante el uso combinado de la *silla de jineta* y los denominados *estribos nazaríes* o *moriscos*. Con respecto al primero, los registros de flete hacia La Española evidencian el embarque de sillas de jineta desde los primeros años de la empresa colonial. Es el caso de la «Relación de las cosas que los maestres Fernán Pérez, Bartolomé de Leza, Juan Lucero y Bartolomé Colón recibieron para llevar a las Indias», fechada en Sevilla el 3 de agosto de 1495, consigna el envío de seis sillas de jineta junto a doce cinchas, doce petrales, doce cabezadas, diez pares de espuelas y una docena de cabestros,[10] lo que evidencia tanto la sistematicidad del abastecimiento ecuestre como la previsión logística de integrar el caballo como recurso estratégico de la conquista y colonización. La tipología documental reconoce dos variantes de este apero: la *silla entera* y la *media silla* (Tapia y Salcedo, 1643, pp. 23-24). La elección entre una y otra respondía a variables morfológicas tanto de la complexión del équido como del jinete (Vargas de Machuca, 1621, p. 1), lo que sugiere un grado considerable de adaptación técnica y especialización en el manejo ecuestre. Ambas variantes compartían, no obstante, una característica estructural definitoria: un

10. Archivo General de Indias, Sevilla, Contratación, 3.249, fol. 38r.

fuste o arzón delantero de mayor altura que el trasero, solución que proporcionaba una mayor estabilidad al jinete cuando se incorporaba sobre los estribos durante la acción bélica (Arias Dávila Portocarreo, 1590, fol. 11v; Fernández de Andrada, 1599, fol. 135v; Tapia y Salcedo, 1643, pp. 23-24); por otro, permitía mantener las manos libres para el manejo de las armas (López Fernández, 2003, pp. 167), lo que en conjunto optimizaba la eficacia táctica del jinete en combate. Sin embargo, Vargas Machuca no menciona en ninguno de sus tratados esta particularidad de la silla de montar, por lo que cabe suponer que también se empleó una montura sin un arzón delantero tan pronunciado.



Figura 3. Acicate de hierro forjado con espiga metálica, ranuras rectangulares en sus extremos y resalte o moldura en la parte superior, conservado en el museo de sitio de La Isabela, Puerto Plata, República Dominicana, finales del siglo XV. Núm. de catálogo: Dr C.14 Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.



Figura 4. Acicate de hierro forjado fracturado, rematado con espiga metálica y ranura rectangular en su extremo, y resalte o moldura en la parte superior, conservado en el Museo Casa Fuerte Ponce de León, San Rafael del Yuma, La Altagracia, República Dominicana, principios del siglo XVI. Sin núm. de catálogo. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.



Figura 5. Espuela barrilera de bronce, rematada con un vástago con abertura para insertar la rodaja, custodiada en el área de exhibición de La Vega Vieja, República Dominicana, siglo XVI. Dimensiones: 128 mm x 115 mm. Núm. de catálogo (elaborado por Pierre Denis): MC-1-003. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.



Figura 6. Rodajas de puntas radiales para su inserción en el vástago de la espuela, conservadas en el museo de sitio de La Isabela, finales del siglo XV. Número de catálogo SI3369. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.

Para garantizar la fijación de la silla y prevenir su desplazamiento longitudinal, se empleaba el *pretal*, una pieza del arnés que actuaba como sistema de retención anterior de la silla, y la *baticola*, un accesorio que se engancha en la parte trasera de la montura y rodea la base de la cola (*maslo*) del equino para evitar que la silla se desplace hacia adelante. Desde el punto de vista arqueológico, la recuperación de evidencias materiales asociadas a la montura en contextos del contacto temprano en La Española continúa siendo escaso. Hasta la fecha, los únicos elementos documentados corresponden a un conjunto de estribos y una hebilla de cincho, aunque fragmentaria (Figura 7), para ajustar y asegurar la correa o banda de la montura al dorso del caballo. La ausencia de monturas completas puede atribuirse tanto a la naturaleza perecedera de los materiales orgánicos —cuero, madera, textiles— como a los sesgos tafonómicos y deposicionales propios de los contextos arqueológicos caribeños del siglo XV y XVI.



Figura 7. Anverso y reverso de una hebilla de cincho elaborada en bronce, conservada en la sala expositiva de La Vega Vieja, República Dominicana, siglo XVI. Dimensiones: 88 mm x 72 mm. Sin número de catálogo. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.

Los estribos de bronce recuperados en La Isabela —cuatro ejemplares— y el conservado en el Museo Casa Fuerte Ponce de León merecen un tratamiento especial dada su calidad y singularidad dentro del registro material del Caribe insular. Pedro de Aguilar subraya que no existía elemento en la práctica de la jineta que demandase mayor perfección ni que suscitara mayor atención que «el buen ornato y aderezo de los pies» (1572, pp. 24r-25v), formulación que resalta la dimensión estética del artefacto inseparable de su dimensión utilitaria. De ahí la calidad técnica y decoro que se proyecta en la base, como manifiestan los ejemplares custodiados en La Isabela y en el Museo Casa Fuerte Ponce de León, reconocibles por su amplia caja lisa de morfología triangular (Figuras 8, 9, 10 y 11). Dicha tipología, denominada también *estribos marinos* (Arias Dávila Portocarrero, 1590, fols. 14-15; Fernández de Andrada, 1599, fol. 135r), fue considerada como la más conveniente para la caballería ligera por su capacidad para cubrir y proteger el pie del jinete (Pérez de Peralta, 1580, fol. 23), cualidades que la convertía en la más apta para el combate (Tapia y Salcedo, 1643, p. 22). Al mismo tiempo, se consideraba la espuela más elegante, prevaleciendo sobre su homólogo, el estribo de *celemín* o *media luna*, de perfil circular y escasa difusión por su excesiva cobertura del pie (Arias Dávila Puertocarrero, 1590, pp. 14-15), aunque igualmente eficaz en la protección durante el combate (Fernández de Andrada, 1599, fol. 135r).

Desde el punto de vista morfológico y ornamental, la pieza presenta en su parte superior un enganche elíptico destinado a sujetar la cincha de la montura, mientras que en el lado opuesto se encuentra la base plana, normalmente decorada con lacerías caladas de tradición oriental y nazarí, inspiradas en los alicatados andalusíes (Aguado Villalba, 2004; Sánchez Trujillano, 1992, pp. 210-211) y artesonados mudéjares (García Nistal, 2021), con bandas entrelazadas, rectas y angulosas. Sobre este gusto estético, Aguilar documenta la preferencia que se tenía por los estribos procedentes del reino ziyánida de Tremecén (1572, fol. 25v) –en el actual noreste de Argelia–, estado que mantuvo estrechas relaciones culturales y artísticas con el emirato nazarí de Granada. Tal tendencia pudo haberse consolidado y difundido a través del contacto directo con las guardias moriscas que ingresaron en las tropas de los reinos cristianos peninsulares a lo largo del siglo XV (Echevarría Arsuaga, 2001, 2006; Jódar Mena, 2012, p. 338). A partir de estas convergencias morfológicas y ornamentales, es plausible postular que los estribos documentados en La Isabela fueron manufacturados en algún taller granadino, hipótesis sustentada por su notable similitud con dos ejemplares conservados en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada.[11] A este conjunto debe incorporarse un ejemplar adicional de tipología nazarí, todavía sin catalogar ni exhibir públicamente, conservado

11. Se tratan de un par de estribos de hierro forjado del siglo XIV-XV, de procedencia indeterminada en la ciudad de Granada. Número de Inventario 2.599.

en el Museo Casa Fuerte Ponce de León, en el municipio de San Rafael del Yuma (Figura 11). Su hallazgo en la región de Higüey, actual provincia de La Altagracia, último territorio en ser sometido militarmente en La Española en 1504, durante el gobierno de Nicolás de Ovando, evidencia la operatividad sostenida de la caballería ligera hasta las últimas fases del proceso de conquista en la isla.



Figura 8. Frontal y lateral de un ejemplar de estribo nazarí de hierro forjado con lacería calada en la base, conservado en el museo de sitio de La Isabela, Puerto Plata, República Dominicana, finales del siglo XV. Número de catálogo: Pi 58. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.



Figura 9. Ejemplar de estribo nazarí de hierro forjado con base de lacería calada, conservado en el museo de sitio de La Isabela, Puerto Plata, República Dominicana, finales el siglo XV. Número de catálogo: Dr C. 2. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.



Figura 10. Ejemplar de estribo nazarí de hierro forjado con base de lacería calada en la base, conservado en el museo de sitio de La Isabela, Puerto Plata, República Dominicana, finales el siglo XV. Número de catálogo: Pi 58. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024



Figura 11. Ejemplar de estribo nazarí de hierro forjado fracturada con lacería calada en la base, conservado en el Museo Casa Fuerte Ponce de León, San Rafael del Yuma, La Altagracia, República Dominicana, principios del siglo XVI. Sin núm. de catálogo. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024

No menos notable fue la dimensión escénica y representacional del caballo, articulada a través de las cualidades estéticas de su equipamiento y adornos, revistiendo el arzón y arnés con lujosas telas ornamentales. Esta atención al detalle no respondía únicamente a criterios estéticos, sino que también cumplía una función simbólica y social, de exteriorizar la capacidad económica, el rango y prestigio del jinete. En el seno de una sociedad imbuida en una mentalidad feudo-caballeresca, la función militar de la caballería popular, particularmente en los espacios de frontera, fue concebida como la expresión militar por excelencia. En consecuencia, el atuendo del jinete debía estar acorde con su dignidad, motivo por el cual, desde el reinado de Alfonso X se promulgaron sucesivas leyes suntuarias que regulaban, entre otras materias, la vestimenta y los accesorios de lujo, tradición que culminó en las pragmáticas de los Reyes Católicos (González Arce, 1999). Un hito significativo en este proceso fue la concesión otorgada por Juan I de Castilla a los integrantes de «las lanzas de la gineta de Andalucía», a quienes se autorizó el uso del mismo equipamiento lujoso que hasta entonces había sido prerrogativa exclusiva de la caballería nobiliaria de sangre (Martínez Martínez y Lora Serrano, 2007, p. 204). Esta apertura normativa impulsó la asimilación de la estética caballeresca por parte de este nuevo grupo ecuestre, convirtiendo al caballo en un elemento suntuario, capaz de encarnar las aspiraciones sociales y las expresiones del poder, en la línea de lo que Norbert Elias denominó el *Außenseite*, la superficie o apariencia visible de las personas (1997, p. 90), estrechamente ligado al proceso civilizatorio del control de las emociones. Así lo escenificó la cuadrilla de caballería ligera de la Santa Hermandad cuando Colón acudió junto a Guacanagarí al puerto de Navidad. Sobre este episodio, Diego Álvarez Chanca, Hernando Colón y Bartolomé de las Casas, documentaron el asombro que provocaron los caballos en el cacique de Marien (Álvarez Chanca, 1494/1984, p. 171; Colón, ca. 1539/2000, p. 169; Las Casas, 1527-1561/1994, p. 861). Ahora bien, la descripción más detallada y vívida de este despliegue corresponde a Guillermo Coma:

> traían muchos y muy excelentes corceles, veloces en la carrera y fuertes para soportar las armas, con frenos labrados, jaeces teñidos y muy pulidos y engalanados petrales; ofrecían un espectáculo formidable, no sin gran pavor de los indios, que recelaban que su pasto era carne humana (Coma, ca. 1494/1984, p. 197, doc. VIII).

El testimonio de Coma articula con precisión dos registros constitutivos de la caballería hispánica: el militar y el representacional. La calidad de los corceles y el refinamiento de su equipamiento —frenos labrados, jaeces pulidos, petrales engalanados—, incluyendo los ornamentos, convertían al caballo en un símbolo de distinción, lujo y exotismo. El cronista resalta cómo estaban ricamente *enjaezados*, esto es, adornados con guarniciones ornamentales destinadas a realzar la belleza del animal y captar la atención del espectador, reforzando con ello la imagen pública y el capital simbólico del jinete. Más aún, estos adornos podían revestir una

dimensión apotropaica, funcionando como amuletos o talismanes de protección (Martín Ansón, 2003), lo que añade una capa de significación religiosa y mágica a su uso. Por tal motivo, el *jaez* fue uno los ornamentos ecuestres más característicos de la cultura de las apariencias del período final de la Edad Media e inicios de la modernidad, aunque desde la antigüedad ya se enjaezaban los equinos (Polieno, ca. 162 d. C./1991, p. 538). En la práctica, solía disponerse sobre el arnés, el pelaje del équido y la silla de jineta (Eiroa Rodríguez y Martínez Martínez, 2016, pp. 151-152; Roumier, 2023, p. 315), integrándose así en un sistema ornamental coherente que cubría al conjunto caballo-jinete como unidad de representación social. En este contexto adquiere especial relevancia un ejemplar recuperado en el Museo Casa Fuerte Ponce de León, elaborado en cobre, de morfología circular polilobulado (Figura 13), que constituye hasta la fecha el único jaez documentado en el registro arqueológico temprano del Caribe insular. La presencia de perforaciones en su superficie indica que fue utilizado para decorar una silla de jineta, a la que se fijaría mediante pequeños clavos.



Figura 12. Anverso vs Reverso de un jaez circular polilobulado elaborado en cobre, conservado en el Museo Casa Fuerte Ponce de León, San Rafael Yuma, República Dominicana, principios del siglo XVI. Dimensiones: 61 mm x 61 mm. Sin número de catálogo. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.

La técnica de montar a la jineta condicionó de manera determinante el equipamiento militar y la protección del jinete, conjunto que las fuentes refieren como *armas a la jineta* o *armas moriscas*, en alusión a la síntesis de dos tradiciones militares, la oriental y occidental. La panoplia *a la jineta* de inspiración islámica, se caracterizó por su mayor ligereza frente al equipamiento pesado de la monta *a la brida* o *caballeresca*. Esta distinción no era meramente técnica, sino que implicaba concepciones diferenciadas del combate, del cuerpo del combatiente y de su relación con el caballo. En este sentido, descollaron las armas de asta como la *lanza jineta*,

que se utilizó en prácticamente todos los contextos de la conquista en América. Su difusión respondía a cualidades físicas, como la delgadez de su fuste, aunado a una excelente longitud —entre ocho a diez palmos, equivalente a 160 a 200 cm— (Tapia y Salcedo, 1643, pp. 2-3). Su manufactura empleaba preferentemente madera de fresno, rematada en uno de sus extremos con un hierro de hoja de oliva (Tapia y Salcedo, 1643, p. 2). Dichas cualidades provocaron una amplia demanda, como revelan los inventarios de pertrechos de las armadas. Un ejemplo fue la flotilla de dos carabelas (Santa Cruz y Santa Clara) de Pedro Francés y Juan Bermúdez, que zarpó con 54 lanzas jinetas del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 3 de julio de 1498.[12] El manejo de esta arma dependía exclusivamente de la fuerza y pericia del brazo del jinete, a diferencia de la lanza de ristre, propia de la caballería pesada, que requería de la ayuda de una pieza metálica adosada al peto de la armadura (ristre), para soportar el peso y facilitar su manejo (Mario Salas, 1959, pp. 187-188).

En el contexto específico de La Española, esta arma fue empleada en las campañas militares emprendidas por Cristóbal Colón en 1495 en la sabana occidental de La Vega Real, donde los jinetes castellanos alancearon a numerosos indígenas. Precisamente, el más célebre, bizarro y estimado ejercicio de la jineta era «dar lanzadas» (Vargas Machuca, 1600, fol. 71). En relación con esto, Bartolomé de las Casas ofrece un vívido relato del uso de esta arma durante la primera campaña militar de Higüey, a través del episodio protagonizado por el jinete Diego de Valdenebro (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 322). No menos relevante dentro de la panoplia jineta, fue la *espada jineta*, también denominada como *espada morisca* o *zeneta*, cuyo diseño se inspiraba en los modelos nazaríes. Gregorio de Tapia y Salcedo la describe como una pieza más corta –aproximadamente cuatro palmos, unos 80 cm– y menos pesada que las convencionales espadas europeas, gracias a la delgada sección transversal de su ancha hoja (1643, p. 1). Contaba con un solo filo para evitar que el jinete cortase el brazo al desenfundarla, y su hoja era recta para facilitar su extracción de la vaina, la cual amarraba al muslo izquierdo mediante una liga (Tapia Salcedo, 1643, p. 1). El equilibrio de la pieza se lograba mediante una empuñadura deliberadamente más pesada que la hoja, que actuaba como contrapeso y facilitaba su manejo durante el combate (Ferrandis Torres, 1993, p. 144). Para incrementar el peso y la elegancia, la empuñadura se remataba con un pomo de forma plana o esférica, como atestigua un ejemplar recuperado en el sitio arqueológico de La Isabela (Figura 13), donde también se custodian diversas puntas de bronce correspondientes a vainas de espadas y dagas de jineta, tipología que se repite en los fondos de la Oficina de Arqueología Pueblo Viejo de Cotuí (Figura 14) y el área de exhibición del sitio arqueológico de La Vega Vieja.

12. Archivo General de Indias, Sevilla, Contratación, 3.249, fol. 179 v.

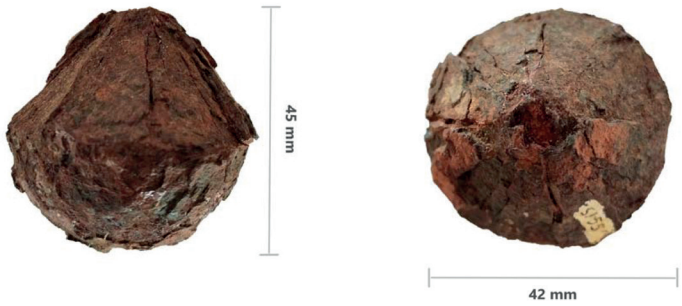


Figura 13. Pomo de espada de jineta, sección lateral y superior, custodiado en el museo de sitio de La Isabela, Puerto Plata, República Dominicana, finales siglo XV. Número de catálogo: 5 155 Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.



Figura 14. Puntas de vaina de espada de jineta, conservadas en el sitio de La Isabela, Oficina de Arqueología Pueblo Viejo y La Vega Vieja, en República Dominicana. Fotografías y edición digital de Alfredo Bueno Jiménez, 2024.



Figura 15. Miniatura del manuscrito *La gran conquista de ultramar* (siglo XIV), Anónimo. Custodiado en la Biblioteca Nacional de España, Madrid, Sala Cervantes, Signatura MSS/1 187, fol. 2.



Figura 16. Óleo sobre tabla, «Juego de cañas en la Plaza Mayor de Valladolid», atribuido a Jacob van Laethem, 1506, custodiado en el Château d'Écaussinnes-Lalaing, Bélgica.

El equipamiento ofensivo se complementó con el defensivo, en cuyo seno destacó la *adarga* —del árabe *daraqa*—, un escudo de morfología redondeada u ovalada de tradición islámica, introducido en al-Ándalus por contingentes norteafricanos hacia el segundo tercio del siglo XIII (Soler del Campo, 2006, p. 222). Su manufactura empleaba cuero plegado y cosido, obtenido principalmente de pieles de vacuno, onagro o antílopes que habitaban en los desiertos africanos (Pereira, 2008, pp. 123, 125; Soler del Campo, 2006, p. 222). Su ligereza, en comparación con los escudos de tradición europea, favorecía su manipulación con una sola mano mientras el jinete permanecía montado, en consonancia con las exigencias del combate ecuestre de raigambre musulmana. Estas cualidades explican la alta estimación de que gozó la adarga entre la caballería castellana fronteriza durante los siglos XIV y XV, así como su prolongación en el ámbito caribeño durante la primera década de la conquista. Su presencia está documentada en las primeras campañas castellanas en La Española, donde los jinetes la empleaban con particular eficacia frente a las flechas y azagayas, principales armas ofensivas de las comunidades antillanas. Desde la perspectiva tipológica, Álvaro Soler del Campo (2006, p. 300) y Flanklin Pereira (2008, 2009), a partir de la evidencia iconográfica, escultórica y arqueológica, distinguen dos variantes formales: la *acorazada* y la *bivalva*. La primera presenta una silueta de doble óvalo en su mitad superior, mientras que la base está rematada en punta o adopta una ligera curvatura que evoca la forma de un corazón alargado (Figura 15). La segunda, por el contrario, se caracteriza por una silueta compuesta por dos óvalos o formas reniformes unidos (Pereira, 2008, p. 123), tipología representada en el óleo sobre tabla «Juego de cañas en la Plaza de Valladolid» (Figura 16), atribuido a Jacob van Laethem, pintor flamenco que acompañó a Felipe el Hermoso y a doña Juana de Castilla en su viaje a España en 1501 (Zalama Rodríguez y Domínguez Casas, 1995, p. 347). Esta misma variante se documenta en los ejemplares conservados en Hofjagd und Rüstkammare del Kunsthistorisches Museum de Viena (Núm. de inventario C.195) y en la Real Armería del Palacio Real de Madrid (Núm. de catálogo 86), donde también hay una versión novohispana elaborada por indígenas amantecas como obsequio a Felipe II (Núm. de catálogo D.88) (Pérez Lugones, 2022), pieza que ilustra con singular elocuencia los procesos de apropiación y resignificación material (Cummins, 2015).

Para el contexto específico de La Española, las fuentes históricas no permiten establecer con certeza cuál fue la tipología predominante, aunque el episodio de Valdenebro alude al empleo de una *adarga de juego de cañas*, lo que introduce una distinción funcional de interés. El juego de cañas constituyó uno de los principales pasatiempos caballerescos y cortesanos en la corte festiva de los Austrias durante los siglos XVI y XVII (Soler del Campo, 2006, p. 222). En dichos juegos, dos cuadrillas de caballeros —una cristiana y otra disfrazada de «moros»— armadas con cañas arrojadizas en lugar de lanzas, y pertrechadas con adargas, reproducían las tácticas de combate andalusí basadas en cargas y repliegues bruscos, conocidos en árabe como

«*al-kar wa-l-farr*» (Fernández Truan y Orthous, 2012, pp. 4-5; Digard, 1997, p. 235). En este tipo de representaciones predominaba por lo general la tipología bivalva, lo que permite inferir, con las debidas cautelas, su uso también en el contexto antillano. Según Vargas Machuca, era de mayor tamaño, con la mitad superior rígida y la inferior flexible (Vargas Machuca, 1600, p. fol. 90), detalle perceptible en la pintura de Laethem, donde el escudo protege simultáneamente al jinete y al caballo. La sujeción al brazo se realizaba mediante una manija central y, en ocasiones, dos brazales (Arias Dávila Puertocarrero, 1590, fol. 57v; Tapia y Salcedo, 1643, p. 14; Vargas Machuca, 1600, fol. 60v). En cuanto a su ornamentación, el anverso solía presentarse liso, mientras el reverso se decoraba con motivos alusivos al rango y la procedencia del portador, a los que podían añadirse borlas decorativas de cuero o tela (Pereira, 2008, pp. 123, 125; Soler del Campo, 2006, p. 222), elementos que refuerzan la dimensión identitaria y representacional del artefacto dentro de la cultura de las apariencias caballerescas ya examinada.

4. LA CABALLERÍA LIGERA EN LAS CAMPAÑAS MILITARES EN LA REGIÓN DE CIBAO Y NORORIENTAL, 1495-98

Si bien las interacciones iniciales entre los castellanos y las comunidades nativas de La Española fueron complejas, no fue hasta 1495 cuando la violencia escaló de forma exponencial en la región de Cibao. Este proceso de escalada respondía al modelo de control y dominación impuesto por los castellanos, mediante el despliegue de guarniciones y asentamientos adyacentes a las aldeas y jefaturas indígenas (Flores Sasso, 2007), estrategia que reproduce en líneas generales el patrón de ocupación por la antigua Roma en sus áreas fronterizas, consistente en la articulación de una red de enclaves militares destinados a vigilar y someter a las poblaciones locales (Luttwak, 1979, pp. 80-111; Mayoral et al., 2016; Whittaker, 1994, pp. 55-59). A este contexto estructural se sumaron diversos episodios de violencia que agravaron el malestar en la isla, como sucedió con la actuación de Alonso de Ojeda en la primavera de 1494, que infligió un severo castigo a un jefe local —ordenando que le cortaran las orejas—, en represalia por un supuesto hurto de ropa cometido por algunos de sus súbditos a unos castellanos cuando se disponían a cruzar el río Yaque del Norte. Cuando Colón regresó a La Isabela el 29 de septiembre de 1494, concluido su viaje exploratorio por las Antillas Mayores encontró un panorama muy convulso (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 909), particularmente en la región de Cibao. A partir de este momento, el almirante planificó una campaña de represión orientada a consolidar el dominio castellano y sofocar las resistencias emergentes en el interior de la isla (Bueno Jiménez et al., 2026), contando para ello con las fuerzas aliadas de Guacanagarí, quien perseveraba en su amistad con la familia Colón desde el primer viaje (Colón, ca. 1539/2000, p. 194).

Aunque se desconoce la fecha exacta del inicio de la ofensiva, esta debió desarrollarse entre finales de 1494 e principios de 1495, comenzando en el Macorix de Abajo, en el interior de La Vega Real, donde Colón había ordenado meses atrás la construcción de la fortaleza de La Magdalena, emplazada a orillas del río Yaque del Norte, a unas tres o cuatro leguas de la villa de Santiago (Las Casas, 1527-1561/1994, pp. 947-948). Las fuentes no registran el empleo de caballería ligera en el Macorix de Abajo, pero sí documentan su participación en la sabana occidental de La Vega Real, donde tuvo lugar pocos meses después, el 27 de marzo de 1495, el enfrentamiento que culminó en la batalla homónima (Figura 19). Conviene precisar que los jinetes que tomaron parte de este conflicto no pertenecían a la cuadrilla de caballería ligera de la Santa Hermandad, puesto que habían regresado a la península ibérica a bordo de los cuatro navíos que Bartolomé Colón había traído a La Isabela el 14 de abril de 1494 (Las Casas, 1527-1561/1994, pp. 937, 946), debido a las fuertes tensiones políticas y personales ya examinadas. Surge así la pregunta sobre la identidad y composición de la fuerza ecuestre que intervino en el conflicto. Aunque las fuentes no especifican el destino que Colón asignó a los caballos tras la partida de los aludidos jinetes, es probable que él mantuviese un control directo sobre ellos, asignándolos a personas de su confianza en las campañas militares. Esta hipótesis encuentra respaldo en la notable concentración de herraduras documentadas por José María Cruxent y Kathleen Deagan en la casa fuerte del almirante en La Isabela. Casi la mitad del total de las herraduras procedían en dicho recinto, mientras que el resto se distribuía por el área residencial de élite (Deagan y Cruxent, 2002, p. 175), lo que sugiere un control centralizado de los équidos por parte de la familia Colón.

La participación de la cuadrilla de caballería ligera en la sabana vegana tuvo un profundo impacto psicológico sobre las fuerzas locales. Si bien no se conservan testimonios indígenas que describan directamente la percepción del caballo, las crónicas tempranas coinciden en subrayar el miedo que estos animales provocaban, especialmente cuando relinchaban o ejecutaban corvetas. Bartolomé de las Casas relata cómo los indígenas, nada más verlos, sentían que «les temblaban las carnes, creyendo que los habían de devorar», llegando incluso a concebir el jinete y al caballo como una misma criatura (Las Casas, 1537-1561/1994, pp. 889, 921). Este terror respondía, en parte, al carácter insólito del animal, pues desde finales del Pleistoceno el caballo estaba extinto del continente americano (Luís et al., 2006; MacFadden, 1994). Conocedor de este efecto, Cristóbal Colón dispuso la caballería ligera en uno de los flancos de la formación, lo que era muy común desde la Antigüedad, al menos desde época de Teodosio I (Vegencio, ca. siglo IV d. C./2021, pp. 215, 286). En el opuesto, desfiló una jauría de veinte «lebreles de presa» (Bueno Jiménez, 2022, pp. 124-126; Colón, ca. 1539/2000, p. 195; Herrera y Tordesillas, 1601, p. 76; Las Casas, 1527-1561/1994, p. 928), mientras en el centro de la compañía marcharon los hombres de a pie, equipados con espadas y ballestas, junto a la «milicia» indígena de Guacanagarí (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 919), cuyo volumen las fuentes no

cuantifican. La disposición táctica de la fuerza ecuestre perseguía una doble finalidad: maximizar el efecto de asombro que provocaban los equinos sobre el adversario y, al mismo tiempo, ejecutar una maniobra envolvente o de flanqueo, destinada a desorganizar las formaciones enemigas, interrumpir sus líneas de comunicación y bloquear las posibles rutas de retirada, en una articulación táctica que combinaba el terror psicológico con la superioridad técnica como instrumentos complementarios de la dominación castellana.

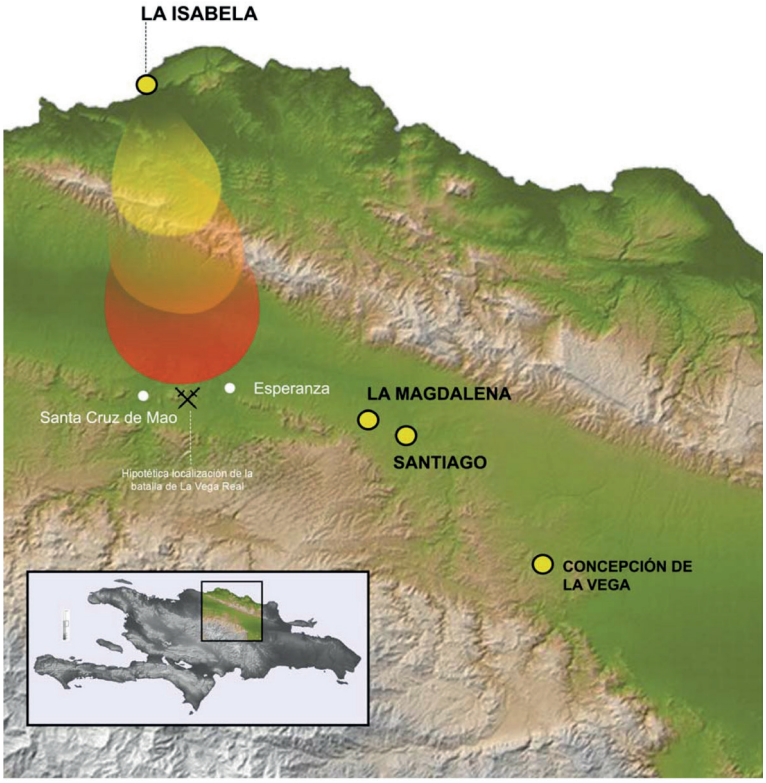


Figura 17. Hipotética localización de la batalla en la sabana occidental de La Vega Real, el 27 de marzo de 1495, en la que participó una cuadrilla de caballería ligera. Elaboración propia. Diseño digital de Alfredo Bueno Jiménez y Jazmín Fonseca Piña, 2023.

Se trata de la primera referencia detallada desde una perspectiva táctica y militar documentada en tierras americanas (Bueno Jiménez, Flores Sasso, Prieto Vicioso,

2026; Bueno Jiménez, 2023, pp. 182-183), que tuvo su inicio el 24 de marzo de 1495 con la partida de la expedición desde La Isabela. A dos jornadas de la villa, Colón dividió la compañía con su hermano Bartolomé Colón, articulando dos destacamentos cuyos flancos quedaron resguardados por la caballería ligera y la jauría canina (Colón, ca. 1539/2000, p. 174). Al tercer día, el 27 de marzo, tuvo lugar el enfrentamiento entre ambos contendientes en la sabana occidental de La Vega Real (Figura 17). La coalición indígena adoptó una formación abierta y dispersa, disposición táctica desaconsejable en campo abierto frente a un adversario provisto de caballería ligera (Mártir de Anglería, ca. 1511/1989, p. 45; Vargas Machuca, 1599/1892, pp. 141-142). Ante esta vulnerabilidad, tras la primera descarga de virotes de ballesta y munición de fuego, se lanzó la cuadrilla de caballería ligera por un flanco, al mismo tiempo que los lebreles fueron liberados de sus traíllas (Mártir de Anglería, ca. 1511/1989, p. 45; Vargas Machuca, 1599/1892, pp. 141-142), lo que provocó el terror y desconcierto en la muchedumbre nativa, resultando en una aplastante victoria del lado castellano.

Lejos de ceder el uso de la caballería ligera a la resolución del conflicto vegano, continuó presente en las campañas emprendidas en los meses inmediatos en distintas partes de Cibao y la Maguana, hasta alcanzar su «obediencia y quietud» a finales de 1495 (Colón, ca. 1539/2000, p. 196; Las Casas, 1527-1561/1994, p. 932). El resultado de estas campañas fue la imposición en el verano de 1495 del primer sistema tributario europeo en tierras americanas (Bueno Jiménez, Flores Sasso y Prieto Vicioso, 2026, pp. 85-87), cuyas cargas fiscales recayeron sobre las comunidades cibaeñas, afectando a la población comprendida entre los catorce y setenta años de edad (Mártir de Anglería, 1516/1989, p. 44). Estas imposiciones tributarias, aunado a los continuos brotes epidémicos que azotaron la región, desencadenaron nuevos focos de resistencia en Cibao y la huida del cacique Guarionex hacia la región nororiental de la isla, donde el líder ciguayo Mayobanex le dio refugio en los escarpados montes de Capronus, aproximadamente a diez leguas al este de La Isabela (Mártir de Anglería, ca. 1511/1989, p. 53). Justo, en esta región, se libró la más rigurosa guerra de guerrillas hasta entonces en La Española, caracterizada por una feroz resistencia de los nativos ciguayos, cuyas fuerzas distribuyeron en pequeñas «bandas» dispersas por la cordillera Septentrional (Mártir de Anglería, ca. 1511/1989, p. 66). Bartolomé Colón aprovechó este contexto para «reducir» la región nororiental de la isla y compeler a los naturales de La Vega a darse a la huida, dado que la mayor parte del tributo procedía de los súbditos de Guarionex (Bueno Jiménez, 2023, p. 188). Con este propósito, el adelantado organizó un contingente en la villa de Santo Domingo durante la ausencia de su hermano Cristóbal, quien había retornado a la península ibérica para informar a los Reyes Católicos. La compañía quedó integrada por noventa hombres de infantería, un número indeterminado de jinetes y «tres mil isleños» encargados del transporte de pertrechos y del abastecimiento de víveres (Las Casas, 1527-1561/1994, pp. 988, 993; Mártir de Anglería, ca. 1511/1989, p. 64). Una vez más, las fuentes aluden a la caballería ligera, aunque la circunscriben a las

fases iniciales del conflicto, pues el relieve abrupto de la cordillera Septentrional y la presencia del caudaloso río Camú o Yuna dificultaron el empleo de la fuerza ecuestre, factor que explica la prolongación del conflicto ciguayo durante tres meses y el agotamiento progresivo, llevando a ambos bandos al borde de la inanición (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 991; Mártir de Anglería, 1989, p. 64). A diferencia del conflicto de La Vega Real, las condiciones orográficas e hidrológicas del noreste de la isla anularon la principal ventaja táctica castellana, subrayando los límites geográficos de la superioridad militar ecuestre en el contexto caribeño temprano.

5. LA CABALLERÍA LIGERA EN LAS CAMPAÑAS MILITARES EN EL EXTREMO ORIENTAL DE LA ISLA ESPAÑOLA (HIGÜEY), 1502-04

Siete años después de las campañas militares dirigidas por la administración colombina en Cibao y la cordillera Septentrional, el gobierno de Nicolás de Ovando (1502-1509) focalizó sus esfuerzos hacia ambos extremos de la isla, que aún permanecían fuera del control castellano. Con este propósito, el gobernador cacereño impulsó una estrategia de represalias que inició en el extremo oriental de la isla, donde se encontraba el cacicazgo de Higüey. Las características geográficas de esta región —conformada por un relieve de sabana y carente de grandes sistemas montañosos a excepción de la meseta kárstica de Los Haitises— la convertían en un territorio propicio para el despliegue de la caballería ligera, ventaja táctica que se materializó en las dos campañas militares de conquista y resistencia que tuvieron lugar en el territorio. Ovando, nada más desembarcar en la villa de Santo Domingo en 1502 —entonces emplazada en el margen oriental del río Ozama—, asumió como prioridad la reorganización territorial, procediendo a la refundación de algunos asentamientos y a la creación de otros nuevos, con la finalidad de articular una red de comunicación más eficiente en una isla cuyos vínculos internos se habían debilitado tras el abandono de Navidad y La Isabela. En este marco reorganizador, el nuevo gobernador ordenó el envío de un navío con un contingente de vecinos de la villa de Santo Domingo para poblar y fundar en la costa norte la villa de Puerto Plata en 1502 (Las Casas, 1527-1561/1994, pp. 1 317-1 318). Como era habitual en las navegaciones que bordeaban el extremo oriental de la isla, la embarcación hizo escala en isla Saona para aprovisionarse de casabe y descansar. Durante dicha escala se produjo un grave incidente: un grupo de ocho cristianos fue emboscado y asesinado por indígenas de la zona, que pretendían resarcir la muerte de un jefe local que, meses atrás, había sido víctima de un episodio de aperreamiento mientras sus súbditos fletaban casabe en una embarcación (Bueno Jiménez, 2022, p. 126; Churampi Ramírez, 2012, pp. 82-83; Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 317).

El incidente sirvió de pretexto para el primer alzamiento documentado en el extremo oriental de La Española y, al mismo tiempo, para que Ovando acometiera la sujeción de la región. Con este fin, el gobernador, reclutó entre trescientos y cuatrocientos hombres de infantería procedentes de las villas de Santiago, Concepción de la Vega, Bonao y Santo Domingo (Figura 18), a los que se sumaron contingentes de indígenas aliados y una unidad de caballería ligera cuyos integrantes las fuentes no identifican, todos ellos bajo el mando del capitán Juan de Esquivel (Las Casas, 1527-1561/1994, pp. 1 321-1 322). El resultado de esta primera campaña fue el sometimiento de la región, la ejecución por ahorcamiento de la cacica principal, Higuanamá (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 323), y la capitulación de Cotubanamá, jefe subsidiario de la región frontera a la isla Saona –actualmente integrada en la provincia de La Altagracia–, con quien Esquivel formalizó un acuerdo de paz mediante un *guaitiao*, ritual indígena consistente en el intercambio de nombres como símbolo de amistad, colaboración y compromiso mutuo (Mira Caballos, 2004; Las Casas, 1527-1561/1994, pp. 1 324, 1 360). Como parte de este pacto, Cotubanamá se comprometió a continuar proveyendo casabe y otros alimentos a los castellanos, quienes, por su parte, levantaron una pequeña guarnición de madera en la región para albergar un contingente de nueve hombres bajo el mando de Martín de Villamán (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 324).



Figura 18. Mapa de la isla Española, que ilustra los itinerarios de las campañas militares en Higüey y Xaragüa, 1502-1504 Elaboración propia. Diseño digital de Alfredo Bueno Jiménez y Jazmín Fonseca Piña, 2023.

La paz alcanzada en Higüey resultó, no obstante, efímera e inestable, pues apenas duró dos años, lapso durante el cual reiterados abusos y vejaciones infligidas a la población local propiciaron un ciclo de resistencia armada, que culminó con el incendio de la fortaleza castellana y la muerte de ocho de los nueve efectivos que integraban la guarnición. Este desenlace, precipitó el inicio de la segunda campaña militar, cuya duración osciló entre ocho y diez meses, y se desarrolló de manera paralela a las operaciones en *Xaragüa* (Jaragua), en el extremo occidental de La Española. En el verano de 1504, Ovando ordenó pregonar la guerra y dispuso una nueva leva en las villas anteriormente mencionadas, encomendando de nuevo el mando a Juan de Esquivel, en calidad de capitán general, secundado por los capitanes Juan Ponce de León y Diego de Escobar (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 357). La fuerza expedicionaria reunida ascendió a poco menos de cuatrocientos efectivos, que se concentraron en la aldea de Icayagua, donde se procedió al reclutamiento de «indios de guerra con sus armas» (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 357).

La relevancia operativa de las cuadrillas de caballería ligera en ambas campañas de Higüey, queda corroborada en el segundo libro de la *Historia de las Indias* de Bartolomé de las Casas, quien participó en los hechos como un soldado raso. El dominico refiere cómo los nativos a menudo se retiraban hacia zonas escarpadas y montañosas, con el propósito de dificultar el avance de las cabalgadas. En esos parajes, las tropas castellanas organizaban batidas en cuadrillas para montear a los indígenas —término que en el vocabulario militar de la época designaba la persecución y captura en terrenos boscosos o fragosos— en cuyo transcurso los jinetes los alanceaban (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 322), subrayando así la centralidad operativa de la lanza jineta. El condicionamiento topográfico de las operaciones militares se refleja igualmente en la elección del emplazamiento del real durante la segunda campaña, establecido en un llano contiguo a un monte despejado, con la finalidad de garantizar el despliegue y la movilidad de la caballería (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 358). Esta decisión táctica es coherente con los principios de la guerra de cabalgada, modalidad operativa propia de la tradición militar castellano-nazarí medieval, que privilegia la velocidad, el impacto y la capacidad de explotar el terreno abierto. En lo tocante a la panoplia del jinete, Las Casas proporciona información precisa a través del equipamiento de determinados individuos que participaron en ambas campañas. Uno de los casos más ilustrativos es el de Diego de Valdenebro, mencionado junto a un tal Pontevedra como «personas señaladas en la jineta», quienes intervinieron en la primera campaña militar. De Valdenebro, al menos, puede identificarse como un importante encomendero en Concepción de la Vega, beneficiario de un repartimiento de 52 nativos según el Repartimiento de Alburquerque de 1514 (Arranz Márquez, 1991, pp. 530, 555). Las Casas informa que acudió armado con lanza, espada y puñal, tal como se infiere del pasaje sobre un episodio de combate singular:

> Arremete con el caballo y alcánzalo. El indio, de que vido que lo alcanzaba, vuélvese a él [Valdenebro]; no sé si le tiró algún flechazo. El Valdenebro encuéntralo con la lanza y pásalo de parte a parte. El indio toma con las manos la lanza y métela más y vase por ella hasta tomar las riendas en la mano. Saca la espada el de caballo y métesela por el cuerpo […] Ya quedó el de caballo desamardo. Velo el otro de donde estaba; bate las piernas al caballo; encuéntralo con la lanza; y tomada por el indio, hace lo mismo del espada y del puñal. Helos aquí ambos desarmados, y el indio con seis armas en el cuerpo; hasta que se apeó el uno y sácale el puñal con una coce que le dio, y luego cayó muerto el indio en el suelo. Esto acaeció en esta guerra y fue público y notorio (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 322).

Este fragmento constituye una fuente de excepcional valor para el análisis de la cultura material bélica en el contexto de las primeras campañas militares en la isla Española. La secuencia narrativa no solo evidencia la panoplia estándar del jinete y jerarquía funcional del armamento portado por el mismo —lanza, espada y puñal, dispuestos en orden de empleo según la distancia respecto al adversario—, sino que también permite documentar la capacidad de agencia táctica y resistencia activa del combatiente indígena frente al sistema de armamento hispano. Un caso complementario es el de Alexos Gómez, uno de los jinetes más experimentados de la segunda campaña y registrado posteriormente como encomendero de la ciudad de Santo Domingo (Arranz Márquez, 1991, p. 538), quien portaba espada ceñida, daga, media lanza y una adarga grande de juego de cañas (Las Casas, 1527-1561/1994, pp. 1 361-1 362). La inclusión de este último elemento ilustra como la panoplia de la conquista no respondía a un modelo homogéneo, sino a una configuración híbrida y adaptativa, condicionada por las exigencias específicas del teatro de operaciones. Por otro lado, la presencia en la panoplia de Gómez de la «media lanza», enfatiza como los jinetes también se ayudaron de armas de asta más cortas y ligeras, de tipo arrojadizo.

6. LA CABALLERÍA LIGERA EN LAS CAMPAÑAS MILITARES DEL OCCIDENTE DE LA ISLA ESPAÑOLA, 1502-1504

En el otoño de 1503, Nicolás de Ovando planificó una operación logística orientada al control y sometimiento de la región occidental de la isla Española, motivado por el temor a un posible alzamiento de la cacica Anacaona y sus jefes auxiliares (Fernández de Oviedo, 1535/1992, p. 83). Los antecedentes de esta tensión se remontan a comienzos de 1497, cuando Behechío, jefe supremo del cacicazgo de Xaragua (Jaragua), había suscrito con el adelantado Bartolomé Colón un acuerdo de tributación voluntaria consistente en algodón y yuca, recaudada con una periodicidad trimestral. La creciente inestabilidad en la región, agravada entre 1497 y 1499 por el asentamiento de la facción roldanista en el valle de Neiba (Bueno Jiménez, 2024, p. 48), determinó que el gobernador extremeño organizara

una comitiva compuesta por un contingente de doscientos hombres de a pie y una unidad de caballería ligera de entre sesenta y setenta jinetes (Fernández de Oviedo, 1535/1992, p. 83; Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 327). Esta fuerza ecuestre constituye el contingente más numeroso desplegado hasta entonces en suelo americano. La cifra resulta sorprendente si se contrasta con los apenas veinte jinetes que había participado en la contienda de La Vega Real. Por otro lado, la relevancia del dato se acentúa si se consideran las dificultades de la cría caballar en las etapas iniciales en la isla. Así lo evidencia un *Memorial anónimo* dirigido a Isabel la Católica, fechado en julio de 1496, que informa como en La Española solo quedaban entre quince o veinte caballos,[13] lo que representaba una regresión con respecto a la cifra inicial. Esta situación se vio agravada por la rebelión de Francisco Roldán y su compañía, que saqueó la alhóndiga de La Isabela y se apoderó del hato ganadero en el valle del Bajabonico, incluyendo yeguas, potros y caballos destinados a la reproducción (Bueno Jiménez, 2024, pp. 51-56; Colón, ca. 1539/2000, pp. 247-248; Las Casas, 1527-1561/1994, p. 977). La presencia de potros en dicho hato sugiere que existían una tentativa de crianza organizada, interrumpida abruptamente por este episodio. La situación no mejoró durante el gobierno de Bobadilla. Según Las Casas, tras la partida de las dos carabelas que condujeron a los hermanos Colón como prisioneros a comienzos de 1500, apenas quedaba en la isla «veinte o treinta caballos», y añade que «muy rico había de ser el que alcanzase una yegua» (Las Casas, 1527-1561/1994, pp. 1 281, 1 327-1 328). Esta escasez respondía, en parte a las políticas implementadas sobre el hato equino por Bobadilla, quien repartió gran parte de los ejemplares como pago de deudas,[14] desarticulando así cualquier posibilidad de recuperación sostenida del plantel.

Fue la armada de Ovando la que resolvió estructuralmente este déficit, al transportar un total de 59 ejemplares —yeguas y caballos— distribuidos entre diversos pasajeros (Mira Caballos, 2014, pp. 76-77). El presupuesto inicial contemplaba el flete de treinta caballos destinados para uso de funcionarios reales,[15] cifra que el gobernador redujo cuatro días después a veinte ejemplares; no obstante, la incorporación de animales pertenecientes a personalidades destacadas –Gabriel Varela,[16] Cristóbal de

13. «Memorial anónimo a la reina católica» (Gil y Varela Bueno, 1984, p. 262, doc. XVIII).

14. «Instrucción de los reyes al comendador de Lares, sobre lo que ha de hacer como gobernador en las islas y tierra firme del Mar Océano», Granada, 16 de septiembre de 1501. Archivo General de Indias, Indiferente, 418, lib. 1, fol. 41r.

15. «Presupuesto de gasto de la real hacienda en la armada para el nuevo poblamiento de La Española», Granada, 12 de septiembre de 1501. Archivo General de Indias, Sevilla, Indiferente, 418, lib. 1, fol. 28

16. Se sabe que el comendador Varela transportó una jaca. «Cédula de la reina a Gómez de Cervantes, en recomendación del comendador Varela», Écija, 21 de noviembre de 1501. Archivo General de Indias, Indiferente, 418, fol. 69v.

Tapia, Diego de Nicuesa, entre otros– permitió alcanzar el total de cincuenta y nueve. Significativamente, la armada incluyó un «boticario para caballos»,[17] lo que revela una conciencia institucional acerca de la necesidad de preservar el capital ecuestre como recurso estratégico de primer orden. Este incremento en la disponibilidad de équidos hizo posible la conformación de una fuerza ecuestre de la envergadura desplegada en Xaragua, algo impensable en los años precedentes.

Anacaona recibió a la comitiva de Ovando con honores, alojando al cacereño en un *caney* –vivienda principal del cacique–, como una muestra de hospitalidad de élite reservada a altos dignatarios en visitas oficiales (Wilson, 1990, p. 119; Bueno Jiménez, 2023, p. 192). Con ocasión de dicha visita, la cacica convocó una asamblea de jefes locales subalternos de la región para recibir al gobernador. Un domingo posterior a una comida oficial, Ovando organizó ante la cacica y sus auxiliares una exhibición de juego de cañas, una especie de simulacro de combate a caballo a la jineta. Este episodio tiene particular relevancia por constituir la primera referencia registrada sobre este espectáculo en tierras americanas, donde los caballeros exhibían su destreza en la forma de cabalgar y luchar (Asenjo González, 2013, pp. 47-50). En este caso, más que un pasatiempo, el juego funcionó como un ardid para distraer a la élite local y facilitar un ataque sorpresa (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 329). Así dio inicio la campaña militar en Xaragua, que culminó con castigos ejemplarizantes y alanceamiento de numerosos indígenas (Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 329; Fernández de Oviedo, 1535/1992, p. 83).

A este episodio le siguieron otras acciones de resistencia en el extremo occidental de la isla, aunque no se dispone de evidencia documental que permita confirmar el empleo de fuerzas ecuestres. Es el caso de la resistencia en la sierra del Bahoruco protagonizada por Guarocuyá —también denominado Guaorocaya—, pariente de Anacaona, quien fue capturado y ahorcado por una compañía de ciento treinta efectivos enviados por Ovando (Fernández de Oviedo, 1535/1992, p. 83; Las Casas, 1527-1561/1994, p. 1 332). En los meses siguientes se desarrollaron operaciones militares en otros puntos de la región occidental, igualmente carentes de referencias al empleo de caballería, como la región de Guahaba, sometida por el capitán Rodrigo Mexía de Trillo, y Guacayarima –el cabo más occidental de la isla y sede de la jefatura de Haniguayaba–, sojuzgada por el capitán Diego Velázquez de Cuellar (Fernández de Oviedo, 1535/1992, p. 83).

17. «Respuesta de los reyes a un memorial de preguntas del Comendador de Lares», Granada, 20 de septiembre de 1501, informa que «puedan pasar la gente de sueldo 20 caballos sin pagar flete». Archivo General de Indias, Indiferente, 418, lib. 1, 54v.

7. CONCLUSIÓN

Los contingentes de caballería que se trasladaron a la isla Española en primera instancia se caracterizaron por el uso de la monta a la jineta, una forma de monta y equipamiento de raigambre islámica, la cual fue adoptada por los jinetes castellanos durante la *Reconquista* en la península ibérica y trasladada poco después a La Española, al fungir como cabeza de puente entre el *Viejo* y *Nuevo Mundo*. Esta continuidad técnica y cultural queda atestiguada tanto en las crónicas tempranas como por la evidencia arqueológica custodiada en museos e instituciones culturales de la República Dominicana vinculadas al período del contacto temprano. Las comunidades nativas carecían de referentes culturales y de experiencia táctica previa para hacer frente a una fuerza tan insólita en suelo caribeño, a diferencia de lo ocurrido en otros contextos continentales, donde diversas sociedades indígenas desarrollaron con relativa rapidez estrategias de contención específicas —como la excavación de fosas ocultas o la preparación de terrenos accidentados destinados a inmovilizar o derribar a las monturas—, lo que evidencia una capacidad adaptativa que en el Caribe insular tardó más en manifestarse. El combate en campo abierto y en terreno de sabana, paradigmáticamente ilustrado por el conflicto de La Vega Real, pone de manifiesto este desconocimiento inicial, que favoreció de manera decisiva la eficacia táctica de la caballería hispana en la fase de conquista.

No obstante, el panorama se transformó de manera sustancial en el transcurso de apenas dos décadas. Las comunidades indígenas no solo desarrollaron estrategias para neutralizar la caballería, sino que llegaron a incorporar el manejo del caballo como recurso propio de resistencia. El ejemplo más elocuente lo ofrece la resistencia del Bahoruco (1519-1533), liderada por el cacique Enriquillo, quien proyectó sus operaciones sobre la escarpada codillera homónima con una doble finalidad táctica: dificultar el avance tanto de los hombres de a pie como de los jinetes, convirtiendo la geografía en un aliado estratégico. Desde la perspectiva de los estudios sobre resistencia indígena y ecología del conflicto (Bueno Jiménez, 2026; Escobar, 2021, 2008), este desplazamiento revela una apropiación selectiva de las lógicas militares del adversario, fenómeno que la historiografía reciente ha conceptualizado como *military transculturation, y* Wayne E. Lee ha denominado *adaptive Exchange* (2011, p. 3).

Por su parte, la introducción progresiva de las armas de fuego transformó profundamente las formas de hacer la guerra a lo largo del siglo XVI, erosionando la eficacia táctica de la caballería frente al uso de la pólvora. Ello determinó una reconfiguración funcional del caballo en las sociedades ibéricas e iberoamericanas, desplazando la monta a la jineta hacia una esfera predominantemente representativa y cortesana, vehiculada a través de los juegos ecuestres —corridas de toros, juegos de cañas, sortijas— que articulaban la sociabilidad y la afirmación identitaria de las élites coloniales.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Alfredo Bueno Jiménez.

Agradecimientos y financiación

La presente investigación se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Historia militar del Contacto temprano en las Antillas Mayores, 1492-1533», PI0000155, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad Anáhuac México, México, bajo la dirección de Alfredo Bueno Jiménez (2023-2027), y dentro del proyecto de investigación «Transatlantic Crossroads Lab», 101235830, HORIZON-MSCA-2024-SE-01, coordinado por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (España).

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

8. BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, P. (1572). *Tractado de la caballería de la gineta*. Sevilla: Hernando Díez.

Alvarado León, C.; Delsol, N.; Cossich Vielman, M. (2023). El caballo en América: una breve crónica de su regreso. *Revista ARCHAEBIOS*, 18(1), 124-144.

Álvarez Chanca, D. (1984) [1494]. Carta del doctor Diego Álvarez Chanca al Cabildo de Sevilla. En J. Gil y C. Varela (Eds.), *Cartas de particulares a Colón y relaciones coetáneas* (pp. 152-176, doc. VII). Madrid: Alianza Editorial.

Arias Dávila Puertocarrero, J. (1590). *Discurso de don Juan Arias Dávila Puertocarrero, segundo conde de Puñonrostro, para estar a la gineta con gracia y hermosura*. Madrid: Pedro Madrigal.

Arranz Márquez, L. (1991). *Repartimientos y encomiendas en la isla Española (El Repartimiento de Alburquerque de 1514)*. Madrid: Fundación García Arévalo.

Asenjo González, M. (2013). Fiestas y celebraciones en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media. *Edad Media. Revista de Historia*, 14, 35-61.

Ayala Martínez, C. (2001). Bienes y rentas de las Órdenes Militares castellano-leonesas (ss. XII-XIV). Balance y perspectivas de análisis. En *Aragón en la Edad Media. Rentas, producción y consumo en España en la Baja Edad Media. Sesiones de trabajo. Seminario de Historia Medieval* (pp. 7-18). Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

Bernáldez, A. (1962) [h. 1513]. *Memorias del reinado de los Reyes Católicos*. Madrid: Real Academia de la Historia.

Bueno Jiménez, A. (2026). Presentación: Primeras manifestaciones de resistencia y resiliencia indígena-africana en los espacios canario-americanos, 1492-1582 *Fronteras de la Historia*, 31, 2 https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/3295

Bueno Jiménez, A.; Flores Sasso, V. y Prieto Vicioso, E. (2026). Las resistencias tempranas en Cibao y la cuestión del Santo Cerro, 1494-1497 *Fronteras de la Historia*, 31, 2 https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/3206

Bueno Jiménez, A. (2024). La rebelión de Francisco Roldán en la isla de La Española. *Ciencia y Sociedad*, 49, 4, pp. 43-70 https://doi.org/1022206/cys.2024v49i43345

Bueno Jiménez, A. (2022). El uso militar del perro europeo por las huestes castellanas durante la conquista de La Española, 1495-1505m*Ciencia y Sociedad*, 47, 3, pp. 107-132 https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciso/article/view/2575

Bueno Jiménez, A. (2023). Primeras resistencias indígenas y conquistas castellanas en la isla de La Española. De la batalla de la Vega Real a las resistencias de Higüey y Jaragua, 1495-1505. En M. Gámez Casado y A. Bueno Jiménez (Coords.). *Un mar de encuentros. El Caribe: arte, sociedad y cultura (Siglos XV-XVII)* (pp. 167-193). Madrid y Ciudad de México: Universidad Complutense, Colmich, Universidad Anáhuac.

Cabrera, Á. (1945). *Caballos en América*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Carmona Ruiz, Mª. A. (2006). El caballo andaluz y la frontera del reino de Granada. *Cuadernos de Historia de España*, 80, 55-64.

Chacón, F. (1541). *Tractado de la caballería de la gineta*. Sevilla: Cristóbal Álvarez.

Colón, C. (2003) [1494]. Relación del segundo viaje, La Isabela, 20 de enero de 1494 En J. Gil y C. Varela (Eds.), *Cartas de particulares a Colón y relaciones coetáneas* (pp. 235-254, doc. VIII). Madrid: Alianza Editorial.

Colón, H. (2000) [h. 1539]. *Historia del Almirante*. Madrid: Dastin, 2000.

Coma, G. (1984) [h. 1494]. Relación de Guillermo Coma, traducida por Nicolas Esquilache. En J. Gil y C. Varela (Eds.), *Cartas de particulares a Colón y relaciones coetáneas* (pp. 177-203, doc. VIII). Madrid: Alianza Editorial.

Cortés, O. *et al*. (2017). The legacy of Colombus in American horse populations assessed by microsatellite markers. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 134(4), 340-350 https://doi.org/10 1111/jbg.12255

Cummins, T. B. F. (2015). Adarga D-88 or the Wing of God. En A. Russo, G. Wolf y D. Fane (Eds.). *Images Take Flight. Feather Art in Mexico and Europe 1400-1700* (pp. 270-281). München: Hirmer Verlag.

Cunninghame Graham, R. B. (1997). *Los caballos de la conquista*. Madrid: Elefante Blanco.

Deagan, K. y Cruxent, J. M. (2002). *Columbus´s Outpost among the Taínos. Spain and America at La Isabela, 1493-1498* New Haven y London: Yale University Press.

Del Río Moreno, J. L. (1992). *Guerreros y ganaderos I. Caballos y équidos españoles en la conquista y colonización de América (S. XVI)*. Sevilla: Real Maestranza de Caballería de Sevilla/Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores de Sevilla/Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.

Denhardt, R. M. (1951). The Horse in New Spain and the Borderlands. *Agricultural History*, 25(4), 145-150.

Digard, J. P. (1997). El caballo y la equitación entre Oriente y América. Difusión y síntesis. En M. García-Arenal (Coord.), *Al-Ándalus allende el Atlántico* (pp. 234-252). París-Granada: UNESCO-El Legado Andalusí.

Duby, G. (1978). *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*. París: Gallimard.

Echevarría Arsuaga, A. (2001). La guardia morisca: un cuerpo desconocido del ejército medieval español. *Revista de Historia Militar*, 90, 55-78.

Echevarría Arsuaga, A. (2006). *Caballeros en la frontera: la guardia morisca de los reyes de Castilla (1410-1467)*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Eiroa Rodríguez, J. A. y Martínez Martínez, A. (2016). Sobre pinjantes y piezas de jaez bajomedievales: a propósito de un aplique decorado procedente del Castillo de Lorca. *Albertca: Revista de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca*, 14, 147-155.

Elias, N. (1997). *Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Eneas el Táctico. (1991) [h. 360 a.C.]. *Poliorcética*. Madrid: Gredos.

Escobar, A. (2008). *Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes*. Durham y London: Duke University Press, 2008.

Escobar, A., «Culture Sits in Places: Reflections on Globalism and Subaltern Strategies of Localization». *Political Geography*, 20, 2 (2021), 139-174. https://doi.org/10.1016/S0962-6298(00)00064-0

Fernándes de Andrada, P. (1599). *Libro de la gineta de España*. Sevilla: Imprenta de Alonso de la Barrera.

Fernández Truan, J. C.; Orthous, M.H. (2012). El juego de cañas en España. *Recorde. Revista de História do Esporte*, 5(1), 1-23.

Ferrandis Torres, J. (1943). Espadas granadinas de la jineta. *Archivo Español de Arte*, 57, 142-166.

Flores Sasso, V. (2007). Primeras construcciones defensivas españolas en el Caribe. En *Anuario 2. Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español adscrito a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña* (pp. 25-47). Santo Domingo: Editora Búho.

Gimeno Gómez, A. (1993). El arte de la jineta en las Indias del siglo XVI. En E. Lorenzo Sanz (Coord.). *Proyección histórica de España en sus tres culturas. Castilla y León, América y el Mediterráneo* [Actas del Congreso celebrado en Medina del Campo en 1991] Vol. 1 (pp. 467-474). Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo.

González Arce, J. D. (1999). *Apariencia y poder. La legislación suntuaria castellana en los siglos XIII-XV*. Jaén: Universidad de Jaén.

González Jiménez, M. (1998). La caballería popular en la frontera. En *II Estudios de Frontera. Actividad y vida en la frontera. En memoria de Claudio Sánchez-Albornoz* (pp. 333-348). Jaén: Diputación Provincial de Jaén.

Gregson, R. E. (1969). The Influence of the Horse on Indian Cultures of Lowland South America. *Ethnohistory*, 16(1), 33-50. https://doi.org/10.2307/480942

Hartley Edwards, E. (1994). *El bocado: Teoría y práctica*. Ávila: Noticias.

Herrera y Tordesillas, A. (1601). *Historia general de los hechos de los castellanos en las islas i tierra firme del Mar Océano*. Madrid: Imprenta Real.

Jódar Mena, M. (2012). El gusto por lo morisco como símbolo de identidad del poder: el caso del Condestable Iranzo en el reino de Jaén. *Revista de Antropología Experimental*, 12, 335-348.

Johnson, J. J. (1943). The introduction of the horse into the Western Hemisphere. *Hispanic American Historical* Review, XXIII(4), 557-610.

Keen, M. H. (2005). *Chivalry*. New Haven y London: Yale University Press.

Las Casas, B. de. (1994) [1527-61]. *Obras completas. 3. Historia de las Indias*. Madrid: Alianza Editorial, 1 y 2.

Ladero Quesada, M. Á. (1993). *Castilla y la conquista del reino de Granada*. Granada: Diputación Provincial de Granada.

López Fernández, I. (2003). Aproximación a la caballería de la jineta y el juego de cañas de Andalucía en el siglo XVI. *Materiales para la Historia del Deporte*, 1, 167-187.

Luís, C. *et al*. (2006). Iberian Origins of New World Horse Breeds. *Journal of Heredity*, 97(2): 107-113 https://doi.org/10 1093/jhered/esj020

Luttwak, E. N. (1979). *The Grand Strategy of the Roman Empire. From the First Century A.D. to the Third*. Baltimore y London: The Johns Hopkins University Press.

MacFadden, B. J. (1994). *Fossil horses: systematics, paleobiology, and evolution of the family Equidae*. Cambridge: Cambridge University Press.

León Guerrero, M. M. (2000). *El segundo viaje colombino*. Valladolid: Universidad de Valladolid [Tesis Doctoral].

Lunenfeld, M. (1970). *The Council of the Santa Hermandad. A Study of the Pacification Forces of Ferdinand and Isabella*. Coral Gables, Florida: University of Miami Press.

Maíllo Salgado, F. (1982). Jinete, jineta y sus derivados: contribución al estudio del medievo español y al de su léxico. *Studia Philologica Salmanticensia*, 6, pp. 105-117.

Martín Ansón, Mª. L. (2005). Amuletos-talismanes para caballos, en forma de creciente, en la España medieval. *Archivo Español de Arte*, 309, pp. 5-21. https://doi.org/10.3989/aearte.2005.v78.i309.205

Martínez Martínez, Mª. y Lora Serrano, G. (2007). Las inversiones suntuarias de la nobleza a fines de la Edad Media. En J. Vilar, A. Peñafiel Ramón y A. Irigoyen López (Coords.). *Historia y sociabilidad: homenaje a la profesora María del Carmen Melendreras Gimeno* (pp. 197-219). Murcia: Universidad de Murcia.

Martínez Ruiz, E. (1992). Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad. *Cuadernos de Historia Moderna*, 13, pp. 91-108.

Martínez Ruiz, E. y Pi Corrales, M. (2012). *Las Guardas de Castilla (Primer ejército permanente español)*. Madrid: Sílex Ediciones.

Mártir de Anglería, P. (1989) [h. 1511]. *Décadas del Nuevo Mundo*. Madrid: Ediciones Polifemo.

Martín Vera, M. A. (2021). La lanza bajomedieval castellana: una propuesta sobre su origen. *Medievalismo*, 31, pp. 303-330. https://doi.org/106018/medievalismo.505001

Mayoral, V.; Pulido Arroyo, J. J.; Walid Sbeinati, S. y Bustamante, M. (2016). Arqueología de la conquista romana: fortificaciones y control del territorio en el suroeste de la provincia Ulterior (siglos II-I a. C.). En J. Pera y J. Vidal (Ed.). *Fortificaciones y control del territorio en la Hispania republicana* (pp. 83-108). Zaragoza: Libros Pórtico.

Menjot, D. (2012). Hidalgos et caballeros dans les villes du royaume de Castille: l'exemple de Murcie (XIIIe-XVe siècles). En H. Vasconcelos Vilar y M. F. Lopes de Barros (Eds.). *Categorias Sociais e Mobilidade Urbana na Baixa Idade Média* (pp. 83-98). Lisboa: Edições Colibri.

Mijares Ramírez, I. (2009). La mula en la vida cotidiana del siglo XVI, en Janet Long Towell y Amalia Attolini León (coords.), *Caminos y mercados de México*, UNAM-INAH: 291-310.

Mira Caballos, E. (2014). *La gran armada colonizadora de Nicolás de Ovando, 1501-1502* Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia.

Mira Caballos, E. (2004). Caciques guatiaos en los inicios de la colonización: el caso del indio Diego Colón. *Iberoamericana* 4, 16, pp. 7-16.

Morales Muñiz, D. C. (2010). El caballo en la Edad Media. Un estado de la cuestión. En *Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano. Vol. 2* (pp. 537-552). Madrid: Sociedad Española de Estudios Medievales, Universidad de Murcia, CSIC.

Nogales Rincón, D. (2019). La monta a la *gineta* y sus proyecciones caballerescas: De la frontera de los moros a la corte real de Castilla (siglos XIV-XV). *Intus-Legere Historia*, 13(1), 37-84. https://doi.org/10.15691/07176864.2019.003

Olsen Bogaert, O., Duval Bonilla, S. y Coste Castillo, F. (2016). Investigaciones arqueológicas en el primer campamento minero colonial de América, Pueblo Viejo, de Cotuí. *Boletín del Museo del Hombre Dominicano*, XLIII(47), 311-331.

Palacios Ontalva, J. S. (2018). Una aproximación al concepto de «lanza» en relación a las Órdenes Militares. En I. C. Ferreira Fernandesn (Coord.). *Entre Deus o Rei. O mundo das Ordens Militares*, vol. 1 (pp. 297-320). Palmela: GEsOS (Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago).

Palencia, A. (1905) [ca. 1480]. *Crónica de Enrique IV*. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos.

Pereira, F. (2008). A monta «à brida» e «à jineta» nas planícies da Península Ibérica: selas, arreios e protecção do cavaleiro cristão e muçulmano. *Mirabilia: Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval*, 8, pp. 108-135.

Pereira, F. (2009). Selas e adargas: a monta à jineta e os fabricantes dos artefactos, através da documentação e da iconografía. En *VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievavais. A Guerra e a Sociedade na Idade Média, Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, Campo Militar de S. Jorge (CIBA)-Porto de Mós-Alcobaça-Batalha* (pp. 447-470). Lisboa: Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais.

Pérez de Tudela, J. (Dir.) (1994). *Colección documental del descubrimiento (1470-1506)*. Madrid: Real Academia de la Historia, CSIC, Mapfre, 1-2.

Perezgrovas Garza, R. A. (2024). Historia de los caballos en crónicas relativas a la exploración y conquista española de las Antillas. *Acta Universitaria*, 34, 1-10 https://doi.org/1015174/au.20243812

Pérez Lugones, L. (2022). Un peculiar ejemplo de arte indígena novohispano: la adarga realizada por los amantecas para su rey Felipe II. *Itinerarios*, 35, 195-229. https://doi.org/10.7311/ITINERARIOS.35.2022.10

Pérez Prendes y Muñoz de Arraco, J. M. (1960). El origen de los caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén en el siglo XV (notas para su estudio). *Revista Española de Derecho Militar*, 9, pp. 111-175.

Pescador del Hoyo, M. C. (1964). La caballería popular en León y Castilla. *Cuadernos de historia de España*, 39/40, 169-260.

Polieno. (1991) [h. 162 d.C.]. *Estratagemas*. Madrid: 1991.

Powers, J. F. (1988). *A Society Organized for War: The Iberian Municipal Militias in the Central Middle Ages, 1000-1284.* Berkeley, Los Ángeles y London: University of California Press.

Pulgar, H. (2024) [h. 1501]. *Crónica de los señores Reyes Católicos*. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

Quesada Sanz, F. (2025). El gobierno del caballo montado en la antigüedad clásica con especial referencia al caso de Iberia. Bocados, espuelas y la cuestión de la silla de montar, estribos y herraduras. *Gladius*, XXV, 97-150. https://doi.org/10.3989/gladius.2005.26

Ramos Pérez, D. (1982). *El conflicto de las Lanzas Jinetas. El primer alzamiento en tierra americana, durante el segundo viaje colombino*. Valladolid: Casa-Museo de Colón, Seminario Americanista de la Universidad de Valladolid.

Ramos Pérez, D. (1995). *Colón en Simancas.* Madrid: Junta de Castilla y León, Sociedad V Centenario Tratado de Tordesillas.

Rivera Serna, R. (1979). El caballo en el Perú (siglo XVI). *Anuario de estudios americanos*, 36, 375-404.

Roumier, J. (2023). Caballos, hacaneas y jaeces: la distribución de una montura de prestigio en los hechos del condestable don Miguel Lucas y otras fuentes de la Castilla medieval. *Cuadernos del CEMYR*, 31, 307-25. https://doi.org/1025145/j.cemyr.202331 13

Rubio, V. (2007). *Cedulario de la isla de Santo Domingo, 1492-1501.* Santo Domingo: Centro de Altos Estudios Humanísticos del Idioma Español, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Archivo General de la Nación.

Soler del Campo, Á. (2006). Notas sobre las adargas de la Real Armería: de al-Andalus a América. En S. Gómez Martínez (Coord.). *Al-Ândalus. Espaço de mudança. Balanço de 25 anos de história e arqueologia medievais. Homenagem a Juan Zozaya Stabel-Hansen* (pp. 221-224). Mértola, Campo Arqueológico de Mértola.

Suárez Argüello, C. E. (1992). Los arrieros novohispanos. En *Trabajo y sociedad en la historia de México, siglos XVI-XVIII* (pp. 75-137). Ciudad de México, Secretaría de Educación Pública.

Suárez Argüello, C. E. (1997) *Camino real y carrera larga. La arriería en la Nueva España durante el siglo XVIII*. Ciudad de México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Suárez de Peralta, J. (1580). *Tractado de la caballería, de la Gineta y Brida.* Sevilla: Fernando Díaz.

Tapia y Salcedo, G. (1643). *Exercicios de la gineta.* Madrid: Diego Díaz.

Tavares Durán, A. (2008). El estatuto de los Caballeros Villanos, Peones y Ballesteros en la Edad Media según los Fueros Extensos de los concejos portugueses de Guarda, Santarém, Évora y Beja. *Mirabilia: Electronic Journal of Antiquity, Middle & Modern Ages*, 8, 248-260.

Torres Fontes, J. (1968). La caballería de alarde murciana en el siglo XV. *Anuario de Historia del Derecho Español*, 38, 31-86.

Varela, C. y Gil, J. (Eds.) (2003). *Cristóbal Colón. Textos y documentos completos*. Madrid: Alianza Editorial.

Vargas Machuca, B. (1600). *Libro de exercicios de la gineta*. Madrid: Pedro Madrigal.

Vargas Machuca, B. (1619). *Teórica y ejercicios de la gineta, primores, secretos, y advertencias della, con las señales y enfrentamientos de los caballos, su curación y beneficio*. Madrid: Diego Flamenco.

Vargas Machuca, B. (1621). *Compendio, y doctrina nueva de la gineta*. Madrid: Fernando Correa de Montenegro.

Vargas Machuca, B. (1892) [1599]. *Milicia y descripción de las Indias*. Madrid: Librería de Victoriano Suárez.

Vegencio Renato, F. (2021). *Compendio de técnica militar*. Madrid: Cátedra.

Vego, M. (2017). *Operational Warfare at Sea. Theory and Practice*. London/ New York: Routledge.

Lee, W. E. 2011. Projecting Power in Early Modern World: The Spanish Model? En W. E. Lee (Ed.). *Empires and Indigenes: Intercultural Alliance, Imperial Expansion, and Warfare in the Early Modern World* (pp. 1-16). New York: New York University Press. https://doi.org/1018574/nyu/9780814753088003000 1

Whittaker, C. R. (1994). *Frontiers of the Roman Empire: A Social and Economic Study*. Baltimore y London: The Johns Hopkins University Press.

Zalama Rodríguez, M. A. y Domínguez Casas, R. (1995). «Jaconb van Laethem, pintor de Felipe «el Hermoso» y Carlos V: Precisiones sobre su obra». *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA*, 61, pp. 347-358.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481423454

EL LINAJE VICH Y EL PATROCINIO SOBRE EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MURTA DE ALZIRA

The Vich Lineage and the Patronage Over the Monastery of Nuestra Señora de la Murta in Alzira (Valencia, Spain)

Amparo FELIPO ORTS
Universitat de València
amparo.felipo@uv.es

Recibido: 25/08/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Participando de la línea de investigación interesada por el mecenazgo ejercido durante la Edad Moderna por la nobleza sobre monasterios y centros conventuales como estrategia de representación de poder y de perpetuación de la memoria familiar más allá de la muerte, estas páginas profundizan en el patronazgo que sobre el Monasterio de Santa María de la Murta de Alzira ejerció el prestigioso linaje valenciano de los Vich durante el amplio periodo comprendido entre finales del siglo XV —en que se documenta su vinculación al centro jerónimo— y su extinción a mediados del siglo XVII. Esta actitud, compartida por las sucesivas generaciones, nos permite rastrear y valorar la implicación de cada uno de sus miembros en la conformación del periodo de máximo esplendor del cenobio.

Palabras clave: linaje Vich; Monasterio de la Murta; Alzira; patrocinio; siglos XV-XVII.

ABSTRACT: Participating in the line of research interested in the patronage exercised during the Modern Age by the nobility over

monasteries and convent centres as a strategy for representing power and perpetuating family memory beyond death, these pages delve into the patronage exercised over the Monastery of Santa María de la Murta de Alzira by the prestigious Valencian lineage of the Vich family during the long period between the end of the 15th century—when their connection to the Hieronymite monastery is documented—and their extinction in the mid-17th century. This attitude, shared by successive generations, allows us to trace and assess the involvement of each of its members in shaping the monastery's period of greatest splendour.

Keywords: Vich lineage; Monastery of La Murta; Alzira; Valencia; Spain; patronage; 15th-17th centuries.

1. INTRODUCCIÓN

> *La sclaresida luz del Linage y apellido de Vique ya para el siglo apagada y reduzida toda a las senisas que reserva este insigne santuario. Renace dellas para eterna succesión de los tiempos en memorias.*
>
> Diego Vich y Mascó, 1657

Es bien sabido que el patrocinio como política de prestigio y visibilidad social experimentó un creciente protagonismo entre la nobleza durante la Edad Moderna, y que si el mecenazgo artístico adquirió cierta primacía no menor fue la preocupación por inmortalizar la memoria de la familia y del individuo después de la muerte. Conseguir este fin requería enterrar a los difuntos en lugares privilegiados —iglesias, conventos o monasterios— cuyas capillas funerarias ensalzaran la grandeza del linaje (Carrasco, 2000, pp. 233-272; Herreros, 2012, pp. 111-144; Ranera, 2022; Rocha, 2025, pp. 159-182; Roth, 2007, pp. 213-234; Soria, 2002, pp. 135-148)[1]. Se establecía de esta manera un estrecho vínculo entre la comunidad religiosa y la casa nobiliaria, que en no pocas ocasiones acabó monopolizando algunos de sus espacios (Atienza, 2008, pp. 79-116). No sin razón, el mecenazgo nobiliario sobre monasterios y conventos cuenta con una larga trayectoria en la historiográfica española

1. Un magnífico ejemplo en este sentido lo encontramos en los duques del Infantado estudiados por Carrasco, quien pone de relieve que, si desde finales de siglo XIV sucesivos miembros de la familia ejercieron el patrocinio sobre la orden franciscana, esta les brindó un espacio privilegiado donde inmortalizar las excelencias del linaje. Más recientemente, han profundizado en el tema Soria Mesa, Roth, Herreros, Ranera Nadador o Rocha, entre otros.

que parece revitalizarse en tiempos recientes (Atienza, 2016, pp. 109-134; Cavero, 2020, pp. 67-92; Tarifa, 2017, pp. 823-838; Viforcos y Campos, 2005). Entre las aportaciones, no faltan estudios específicos sobre los cenobios jerónimos, ya sea desde una perspectiva temporal y geográfica amplia (Ladero, 1986, pp. 409-440), centrados en un edificio determinado (Arciniega, 2000) o contemplados desde la actuación particular de una familia sobre uno de sus centros[2] (Delicado, 2000, pp. 73-86), entre otros enfoques.

Es en este último contexto en el que nos proponemos observar el patronazgo que sobre el Monasterio jerónimo de Santa María de la Murta de Alzira ejercieron sucesivos miembros del linaje Vich. Asentados en territorio valenciano durante la conquista de la mano de Guillem Vich —quien siguió a Jaime I hasta Valencia— también sus descendientes mantuvieron durante la etapa medieval una intensa actividad militar y política al servicio de los reyes de la Corona de Aragón como evidencia su presencia en los escenarios de los principales acontecimientos. Sus servicios y cercanía a la Corona fueron compensados con posesiones territoriales —valles de Ebo y Gallinera, lugares de Xeresa y Alcodar— y puestos de relevancia —preceptor, camarero o mayordomo real, capitán, alcaide, baile, maestre racional— que reportaron a la Casa un prestigio social y político, que una acertada política matrimonial contribuyó a reforzar[3].

Ya en el umbral de la modernidad el linaje continuaría elevando su posición con Jerónimo Vich, quien desde 1506 desarrolló una destacada trayectoria política como embajador de Fernando el Católico en Roma, y también de Carlos I hasta 1521. Una misión que le exigió atender asuntos de gran envergadura y que vio reconocida con la donación de la ciudad de Corata en Nápoles en 1513 y la venta del lugar de Matada en 1514. Su prestigiosa posición no fue óbice para que los sucesores en la Casa prosiguieran los servicios a la Monarquía. De hecho, su primogénito, Luis Vich, compaginó la participación en las campañas bélicas de Carlos I con una notoria función en las instituciones políticas valencianas —Cortes, Generalitat y Estamentos del Reino— cuya compensación se vio proyectada en las relevantes posiciones alcanzadas por sus descendientes.

Fruto de su unión con doña Mencía Manrique fue una nutrida descendencia conformada por ocho hijos. Jerónimo sucedió al frente de la Casa; Luis fue

2. Es el caso de los Borja sobre el Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, situado en el término municipal de Alfahuir, cercano a Gandía.

3. Trascendental en este sentido fue el matrimonio, a mediados del siglo XV, de Luis Vich Corbera con Antonia Romaní, señora de las baronías de Llaurí, Matada y Beniboquer. Un importante conjunto señorial al que todavía incorporó la jurisdicción de Beniomer que el rey otorgó en 1446. A su muerte sin descendencia, doña Antonia legó este conjunto patrimonial a su marido, incorporándose por esta vía al linaje de los Vich la que sería la base de su patrimonio señorial.

caballero profeso de la Orden de Santiago, comendador de Montalbán en el reino de Aragón, alcaide de Peníscola, gentilhombre de la casa de Su Majestad y virrey de Mallorca; Juan alcanzó las sucesivas dignidades de obispo de Mallorca y arzobispo de Tarragona; Pedro fue nombrado general de las galeras de Indias; Jorge recibió las mercedes de comendador de Ares de la Orden de Montesa y capitán de caballos de Orán; Francisco, fue comendador de la Orden de San Juan; Álvaro reunió las posiciones de caballero y comendador de Fradell en Teruel y de la Orden de Santiago, castellano de Alicante y gobernador de Orihuela; y Ana casó con Gaspar Marrades, señor de Sallent y lugarteniente de tesorero real en la Ciudad y Reino de Valencia. Y también el último representante de la estirpe, don Diego Vich —paje de Felipe II y de Felipe III—, se había iniciado en la milicia. No obstante, la muerte de su padre le sorprendió cuando se encontraba en Nápoles camino de Flandes, de donde hubo de regresar para situarse al frente de la Casa.

Estamos, por tanto, ante una familia que gozaba de prestigio y reconocimiento en la sociedad valenciana del momento, para la que el mecenazgo sobre el Nuestra Señora de la Murta actuaría como estrategia de representación de su poder más allá de la muerte.

2. LOS INICIOS DE UNA RELACIÓN SECULAR

Los orígenes de la vinculación de la familia Vich con la Murta se encuentran documentados desde finales del siglo XV. Allí falleció el 8 de abril de 1477 don Luis Vich Corbera cuyos restos fueron depositados en la capilla del claustro para la que, además de donar 250 libras, encargó un nuevo retablo con los Siete Gozos de la Virgen e imágenes de santa Magdalena y san Juan Bautista (Arciniega, 1999, p. 272). Evidenciaba así una devoción por este centro religioso que también compartía su tercera mujer, Damiata Vallterra. De hecho, en su testamento dispuesto el 24 de noviembre de 1514 ante el notario Luis Ballester —además de a sus hijos Jerónimo y Guillem Ramón— designaba albacea encargado de garantizar el cumplimiento de sus deseos a quien en el momento de su muerte fuera prior, solicitaba ser enterrada en la misma capilla que su marido y disponía entre sus legados algunas cantidades para los frailes jerónimos[4].

Desde estos momentos la relación de los Vich con el Monasterio no haría más que estrecharse. De hecho, fruto del matrimonio de don Luis y doña Damiata, don Jerónimo Vich Vallterra, en testamento dispuesto ante el notario Juan Francisco Ballester el 31 de diciembre de 1534[5] (Manglano, 1944, pp. 49-81), también confiaba

4. Archivo del Colegio de Corpus Christi de Valencia [ACCCV], protocolos Luis Ballester, 29.001.

5. Utilizamos la transcripción del documento realizada por Manglano y Cucaló de Montull (1944).

el albaceazgo —además de a su primogénito Luis Vich— al prior del cenobio Juan Gallego o quien ostentara tal dignidad en el momento de su muerte. Y no menor relevancia adquiere en este sentido la minuciosa descripción del ceremonial a seguir tras su óbito. Deseaba permanecer en su casa ocho horas antes de ser enterrado, revestido con el hábito de San Jerónimo, rodeado de seis antorchas y acompañado de seis presbíteros de la iglesia de San Martín de Valencia que entonaran los salmos, mientras se celebraban responsos por su alma en distintas iglesias. Concluida esta parte, se procedería a su sepelio en el recinto jerónimo, a cuyos religiosos encomendaba la celebración de una misa cantada; ochenta misas bajo la advocación de un elevado número de santos y santas; una misa perpetua cantada el día de Jueves Santo en la capilla donde sería enterrado, por su alma y la de sus padres; diversos aniversarios en fechas señaladas; y los sufragios que, en su condición de heredero universal, le había encargado su madre por el alma de su hermano Juan. Un elevado número de ceremonias religiosas, en fin, para cuya celebración destinaba mil ducados de oro de los que también debían sufragarse catorce cirios que arderían perpetuamente en la Murta en los momentos más solemnes de las celebraciones litúrgicas.

Con todo, serían sus disposiciones relativas al acondicionamiento y ornato de la capilla en la que deseaba que reposaran sus restos y los de sus padres, hermanos, hijos y descendientes, la mayor expresión de su compromiso con el cenobio jerónimo. Al respecto, manifestaba su anhelo de que en ella se ubicara un sepulcro, se desplazara el altar y se cerrara la capilla con una baranda. Asimismo, encomendaba la realización de un retablo nuevo con puertas, con las imágenes de Cristo crucificado, Nuestra Señora, santa Magdalena, José de Arimatea, Nicodemo y las dos Marías, así como un Crucifijo de bulto elevadizo a fin de que se colocara en el Monumento el Jueves Santo, con la indicación añadida de que si no todas las imágenes cupieran en el retablo se pintaran en las puertas. Encargaba además algunas reformas en la capilla, que incluían la incorporación de un portal que abriera al claustro:

> E així mateix vull e man que en la dita capella sia fet hun portal que done de front la claustra al costat de la porta de la Iglésia, en lo qual portal de dita capella que dona en la claustra, com dit és, vull e man sia mudat lo reixat que està huy en la porta de la dita mia capella com aquella fasa atanquar de barandat, com damunt tinch dit, sols han de restar les claravoyes que estan ubertes entre la obra de tall perquè donen claredat al cap del altar de dita Iglésia y a la dita capella… (Manglano, 1944, p. 56).

Como también la construcción de una estructura elevada de ladrillo donde quedaran depositados sus restos hasta ser trasladados a la sepultura definitiva:

> E fins lo dit vas sia fet lo dit meu cors no sia soterrat sinó que sia deposat en hun depòsit en terra dins la dita mia capella, fent hun planell de rachola y damunt ell sia posada la caxa del meu cos y puixat de rachola quatre palms que sobrepuje la paret a la caxa bon tros. Y de allí faran hun entabacat fins a la paret de la capella

> que reste tanquat allí lo meu cors, hon starà de vida de la dita doña Yolant Ferrer, muller mia. Y com ella pasarà de esta vida posaran los dos juntament en lo vas si aquella volrrà. Y sobre lo entabaquat que clou se fasa una Creu com se acostuma de fer en Roma en los depòsits segons lo fill y hereu meu desús escrit sab molt bé (Manglano, 1944, pp. 56-57).

La reforma de la capilla, la disposición de un Crucifijo que presidiera las celebraciones y el encargo de un nuevo retablo constituían una aportación sin duda relevante de quien fuera embajador de Fernando el Católico al embellecimiento y enaltecimiento del Monasterio y, paralelamente, al prestigio del linaje. Apenas unos días después, el 7 de enero de 1535, falleció don Jerónimo Vich y Valterra y, de acuerdo con su voluntad, fue enterrado en Nuestra Señora de la Murta.

También su primogénito y sucesor en la Casa, don Luis Vich y Ferrer, siguiendo la que se había convertido en preferencia familiar, dejó dispuesta su pretensión de ser enterrado en el centro jerónimo en los dos testamentos que hemos podido documentar. Así lo hizo ya en el primero de ellos, protocolizado el 27 de septiembre de 1541 ante el notario Francisco Juan Ballester[6], en el que —como hicieran algunos de sus antepasados— también confió en su prior para el cumplimiento de sus mandas —juntamente con su mujer, doña Mencía Manrique, y el doctor en Teología Tomás Real— y asimismo en la Murta quiso que se celebraran los sufragios por su alma para los que dejaba cien libras: cincuenta para misas dedicadas a las Llagas de Jesucristo, santa Magdalena, san Jerónimo, san Miguel, san Agustín, san Gregorio, san Pablo y san Antonio, y las restantes de réquiem[7].

Y continuando con la tradición de la Casa también quiso dejar su impronta en la capilla funeraria. Disponía, en su caso, la realización de un banco de madera con cajones y respaldos; la colocación en la cubierta de las armas de los Vich, Vallterra y Manrique y la culminación del encargo de su padre, del que aseguraba quedar solo pendiente la ejecución del retablo:

> Item, vull e man que en la nostra capella de la Verge Maria de la Murta hi sien fets banchs de fusta ab sos caxons y respatlers y posar (…) en dita capella en la cuberta ab les armes de Vich, Vallterra y Manrique. E que sia fet lo restant conforme al que lo dit noble don Gerònim Vich, pare de aquell, en son testament deixà, com ja no resta altre a fer per a cumplir lo que dit quondam pare en deixà que fes en dita capella, sinó lo dit retaule[8].

6. ACCCV, Protocolos Francesc Joan Ballester, 11.800.
7. De su estrecha relación con los frailes del monasterio nos informa que entre sus legados incluyera diez ducados al fraile del Bartolomé Vidal para que rezara por su alma y la condonación de la deuda de otros tantos al fraile Juan Gallego.
8. ACCCV, Protocolos Francesc Joan Ballester, 11.800.

No sería, sin embargo, este testamento el que recogiera sus últimos propósitos porque el 24 de diciembre de 1584, afectado por una enfermedad, dispuso otro ante el notario Juan Guardiola[9]. Con especial minuciosidad manifestaba sus deseos respecto a su entierro. Disponía que su cuerpo permaneciera en la habitación en la que se hubiera producido el óbito durante las horas que estimaran sus albaceas, revestido con el hábito de san Jerónimo, rodeado de seis antorchas encendidas y acompañado de seis presbíteros de la parroquia de San Martín que cantaran los salmos y rezaran el oficio de difuntos con tres nocturnos hasta la hora de celebrar misa de réquiem en su capilla. Concluidas estas ceremonias, su cuerpo se depositaría en un ataúd recubierto con un paño de lana negra con una cruz roja y se conduciría a las iglesias de San Francisco, San Martín y San Andrés con acompañamiento de la Cofradía de La Virgen María de la Seo y de la Cofradía de los Santos Inocentes y de los Desamparados, de las que se manifestaba cofrade. Finalmente, se trasladaría a Santa María de la Murta, donde se dispondría delante del altar mayor, rodeado de seis antorchas encendidas y dos bancadas de cirios blancos durante la celebración de los oficios funerarios para ser finalmente sepultado en la capilla familiar:

> Y fetes les absolucions, lo dit meu cors sia lliurat a ecclesiàstica sepultura en lo dit monestir, en lo vas de la mia capella que està en la claustra del dit monestir, hon estan soterrats mos señors pare e mare e fills meus[10].

Un anhelo que acompañaba de la celebración de un total de mil misas. De ellas, dejaba una parte a elección de sus albaceas, pero requería la celebración de las restantes en el Monasterio, donde también encargaba una eucaristía mensual perpetua a celebrar por seis de sus frailes y un rosario semanal, de acuerdo con las condiciones que había concertado con el entonces prior Gaspar Trilles en documento firmado en octubre de 1582 ante el notario Juan Guardiola[11]. Sumaba a ello que todos los años, el día de Todos los Santos se llevaran al cenobio seis antorchas y un cirio verde para que se celebrara misa cantada por su alma, la de sus padres, hijos y hermanos.

Además, don Luis encomendaba a su heredero custodiar una cruz de plata dorada y guarnecida de perlas y piedras finas que guardaba un fragmento del *Lignum Crucis* y una caja de plata con reliquias, que a su muerte debían pasar a la Murta. Sobre ellas, si a su hijo le imponía la condición de velar por la preservación sin modificación alguna de un legado que confesaba ser de gran valor y tener en elevada estima, al Monasterio le prohibía sacarlo de su recinto:

9. ACCCV, Protocolos Juan Guardiola, 1591.
10. ACCCV, Protocolos Juan Guardiola, 1591.
11. ACCCV, Protocolos Juan Guardiola, 1591.

> Ittem, per quant yo tinch una creu de argent molt bé daurada y guarnida entorn de tota ella de perles y enmig lo Lignum Crucis y en lo peu pedres fines y penjant de la creu una perla grosa, y una capsa de argent ab moltes relíquies, les quals yo he estimat y estime molt y per ço fins huy les he tengudes e tinch ab molt gran beneració. E respecte de ésser relíquies y joyes de tant valor y encara confie molt que lo dit mon fill y hereu les tindrà en lo mateix compte y reverència, no res menys emperò per mon descàrrech pregue y encarregue molt encaridament al dit mon fill y hereu que, per amor y reverència de Nostre Senyor Jhesuchrist, tinga les dites creu y relíquies e joya en la mateixa honrra, estima e veneració. E que per ninguna via, directa ne indirecta, no leve, altere ni remoga de la dita creu perla ni pedra alguna, sinó que tot temps se conserve com huy està. E lo dit mon hereu tinga en son poder la clau del armari y rexa hon estan dites relíquies e no permeta se traguen del dit loch sinó a coneguda e voluntat del dit mon hereu y en sa presència les traguen e tornen per a que no.s puga levar per nengun temps cosa, pedra ni perla alguna de aquelles.
> E aprés lo òbit del dit don Hieroni Vich, fill y hereu meu, do y eleix la dita creu y capsa de argent ab les dites relíquies e ab totes le perles e pedres que està guarnida al prior, frares e convent de la Verge Maria de la Murta del Orde del gloriós Sant Hieroni (…) los quals quant haja loch lo present legat ho hajen de rebre ab acte e inventari públich e ab pacte y condició que per via directa e indirecta la dita creu e caixa o capsa no puga exir ni ser treta del dit monestir sinó per al servey de misses e professons que.s faran en dita casa e monestir, encarregant-los molt sa consciència per a que no puguen fer lo contrari ne obtener dispensa ni altra cosa que revoque o mude esta ma voluntat…[12].

Nos situamos, de nuevo, ante una donación muy valiosa al Monasterio por parte de don Luis Vich Ferrer, y ante un claro exponente del interés de los miembros del linaje de perpetuar la vinculación de su memoria a este cenobio jerónimo[13]. Un nexo que también su mujer, doña Mencía Manrique, contribuyó a estrechar. De hecho, en testamento redactado el 10 de junio de 1583 ante el notario Juan Guardiola[14], manifestaba su anhelo de ser sepultada en la Murta y disponía 3.000 sueldos para gastos de entierro y trescientas misas de réquiem, de las cuales cincuenta a celebrar en él, donde también instituyó una misa mensual perpetua por su alma y la de sus difuntos[15].

12. ACCCV, Protocolos Juan Guardiola, 1591.
13. Bajo estas disposiciones falleció poco después Luis Vich Ferrer, haciéndose públicas el 24 de abril de 1585. ACCCV, Protocolos Joan Guardiola, 1590.
14. ACCCV, Protocolos Joan Guardiola,1590.
15. Del resto, cincuenta se celebrarían en altares privilegiados y las doscientas restantes en las iglesias y conventos a elección de sus albaceas. De la suma restante, donaba tres libras a los monasterios de Jerusalén, la Misericordia, la Esperanza, La Encarnación, Santa Tecla, Santa Catalina de Siena y San Julián; tres libras a los pobres de la iglesia de San Martín, quince libras a los pobres del Hospital General y diez libras al rector de la Compañía de Jesús. ACCCV, Protocolos Joan Guardiola, 1590.

3. NUEVA GENERACIÓN, INTERESES COMPARTIDOS

No culmina con este matrimonio una tendencia centenaria. Como hemos referido, fruto de la unión de don Luis y doña Mencía fue una numerosa y diversa prole, que daba continuidad al linaje y que como sus antepasados se involucró, aunque con diferente intensidad, en el patrocinio de Nuestra Señora de la Murta.

De sus hijos, don Luis Vich y Manrique, en sus últimas voluntades, escritas de su propia mano el 24 de noviembre de 1593[16], también expresaba su deseo de ser enterrado en el Monasterio. No obstante, su residencia en Mallorca, donde desempeñaba el cargo de virrey, le exigió adoptar las prevenciones convenientes. Disponía al efecto que a su muerte su cuerpo quedara en su cama cubierto con el repostero con las armas de su Casa, ubicado ante un altar con seis hachas encendidas alrededor de su cuerpo y acompañado del mismo número de clérigos encargados de recitar salmos. Trascurridas las horas preceptivas, sus restos serían trasladados a un ataúd y sepultados en el lugar elegido por su hermano Juan —obispo de aquella diócesis— a la espera de ser trasladado a la Murta. Llegado al recinto, pedía a los monjes que entonaran vísperas y maitines de difuntos antes de ser enterrado; celebraran una misa cantada y cuantas eucaristías pudieran en sus altares y capillas al día siguiente; y una misa cantada muy solemne de la Purísima Concepción todos los sábados perpetuamente, con asistencia de diácono y subdiácono.

Por otra parte, ordenaba a su heredero que todos los años para la festividad de Todos los Santos hiciera llegar al cenobio hachas para que iluminaran la tumba de su padre; sufragara los gastos de aceite para que la lámpara de la capilla ardiera día y noche; aportara un terno eclesiástico de damasco blanco con franjas de seda blanca y azul, al igual que los cordones de las dalmáticas, y una casulla que portara, tanto en la parte anterior como posterior, una Cruz de Santiago de terciopelo carmesí, además de las armas de los Vich, que también debían figurar en la vestimenta de los diáconos y subdiáconos. Y a fin de sufragar el gasto que ello comportara le encomendaba cargar sobre sus bienes un censal cuya renta fuera suficiente para satisfacerlos[17]. Mas no concluía con ello la aportación de don Luis al cenobio. No teniendo hijos, instituía heredera universal con carácter vitalicio a su hermana Ana —bajo prohibición expresa de enajenar propiedades o censales— a cuya muerte sucedería el hijo de esta, Jorge Marrades y Vich, sobre quien instituía un vínculo de masculinidad y primogenitura. Pero contemplaba también la contingencia de extinción de toda la línea familiar, en cuyo caso el vínculo pasaría al Monasterio a fin de culminar el altar de su iglesia mayor, debiendo destinarse la cantidad sobrante a misas por su alma, la de sus padres y la de sus predecesores.

16. Archivo Histórico de la Nobleza [AHNOB], Fernán Núñez, C. 152, D. 47.
17. AHNOB, Fernán Núñez, C. 152, D. 47.

La realización del inventario de bienes que sucedió a su fallecimiento nos permite conocer el contenido de su legado. Si aceptamos los valores reseñados en él, el capital total invertido en censales se elevó a 23.774 libras y las pensiones producidas en torno a 1.188 libras y 14 sueldos, cifras en absoluto desdeñables. Y a ellas todavía cabe incorporar algunas joyas y piezas de plata cuyo valor también se consignó. Se trata de las siguientes: un armario de madera pintado de verde; una medalla de santa Úrsula de oro con piedras preciosas de diferentes colores rodeada de un círculo de diamantes, que se valoró en 28 libras; una fuente ovalada de plata dorada con las armas de los Marrades, justipreciada en 89 libras, 18 sueldos y 4 dineros; una fuente de plata dorada con un delfín y sobre él un niño con las armas de los Marrades, estimada en 53 libras, 9 sueldos y 1 dinero; dos frasqueras de plata con las armas de los Marrades valoradas en 97 libras 7 sueldos y 11 dineros; y una taza de plata dorada con seis gallones y una flor en el centro, a la que se atribuyó un valor de 24 libras, 11 sueldos y 5 dineros[18].

Don Luis falleció, mientras desempeñaba el cargo virreinal, el 6 de septiembre de 1594, siendo sepultado inicialmente en la capilla de San Pedro de la catedral de Mallorca (Montaner, 2017, pp. 105-143). Sabemos que tampoco Jorge Marrades tuvo descendencia, por lo que a su muerte en 1646 la sucesión revirtió en la rama iniciada por don Pedro Vich Manrique. Para entonces tanto don Pedro como su hermano y sucesor en la Casa, don Álvaro, ya habían fallecido, pasando el vínculo a don Diego. En estas circunstancias, pese a los pleitos suscitados, no podemos confirmar que los bienes de don Luis pasaran inmediatamente a la Murta, pero sí que allí se encontraban las joyas y alhajas cuando en mayo de 1656 don Diego dictó las que serían sus voluntades finales[19].

También sus hermanos eligieron el cenobio jerónimo como lugar de sepultura. Así lo manifestaba don Jorge en testamento de 13 de diciembre de 1578, si bien dejaba la elección a los albaceas, y en particular a su padre a quien encomendaba asumir los gastos que generara «com jo no tinch forma de dexar-me hun real per obs de la dita mia sepultura y ànima»[20]. A don Francisco la muerte le sobrevino en Mallorca, donde fue enterrado hasta que, a instancias de su hermano don Juan, su cuerpo fue trasladado al Monasterio. Carecemos de información documentada sobre los deseos de don Jerónimo al no haber localizado el protocolo notarial de Juan Guardiola correspondiente a 1592 donde se registró su testamento, aunque todo invita a pensar que mantuviera la tradición familiar[21]. Asimismo, don Pedro,

18. AHNOB, Fernán Núñez, C. 152, D. 47.
19. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.
20. AHNOB, Fernán Núñez, C. 152, D. 28.
21. No así su mujer, doña Rafaela Moncada que, hija del señor de Vilamarxant, prefirió que su cuerpo reposara en el panteón que su familia poseía en el Monasterio del Remedio de Valencia. AHNOB, Fernán Núñez, C. 152, D. 41.

en sus voluntades de 16 de marzo de 1606, elegía la Murta para su sepultura, destinando 400 libras para el funeral y la celebración de misas en altares privilegiados, a elección de sus albaceas[22]; y su mujer, Francisca Roca, en testamento de 17 de marzo de 1606, además de expresar su propósito de que sus restos reposaran en el centro jerónimo, nombraba entre sus testamentarios a su prior y destinaba 400 libras para satisfacer los gastos funerarios y sufragios por su alma[23].

Por su parte, en disposición de 15 de marzo de 1608, don Álvaro pedía que, cumplidas las ceremonias preceptivas en los caballeros de la Orden de Santiago en la sala de su casa, se le enterrara con la menor pompa posible en la capilla familiar, donde encomendaba que se le dijera el mayor número de misas posible en función de su disponibilidad económica[24]. Y manifestaba haber hecho promesa de ofrecer una lámpara de plata por valor de 100 libras para Nuestra Señora de la Murta caso de ganar determinados pleitos, cuyo cumplimiento encomendaba a su hijo:

> Ittem, más como yo haya ofrecido quando llevaba el pleyto de los dichos vínculos que si ganava la Cassa aría una lámpara de plata a Nuestra Senyora de la Murta para que estuviese juntamente con la de mi padre y hermano y valiese cien libras, y con mis muchas necessidades y gastos yo no he podido cumplir esta promessa, ordeno a mi hijo que, pues sucederá en el dicho vínculo, si al tiempo de mi muerte yo no hubiese echo la dicha lámpara, que la aga de los bienes míos propios luego[25].

Mayor impronta en el proceso de transformación dejó don Juan Vich y Manrique, nacido en 1530 en el Monasterio, donde también acabó reposando su cuerpo[26]. En 1593 donó diversos objetos litúrgicos que se valoraron en 6.000 libras. Según fray Juan Bautista Morera, integraban el conjunto un terno de brocado con capa, frontal, paño para el facistol y una mantilla para Nuestra Señora; un cáliz de oro con esmaltes y piedras preciosas; una cruz de plata sobredorada con botones de cristal a ambas partes; un relicario de plata y ébano con reliquias; una casulla de damasco carmesí; una colgadura de terciopelo encarnado y telilla de plata blanca y otra de terciopelo morado y telilla de plata blanca; dos reposteros con sus armas; paños para

22. ACCCV, Protocolos Francisco Almenara, 11.006.
23. ACCCV, Protocolos Francisco Almenara, 11.006.
24. Su mujer, doña Blanca de Castellví, no eligió la Murta como destino final. Encomendaba ser sepultada en la capilla que su familia —los Mascó— poseía en la iglesia de San Juan del Mercado bajo la advocación de santa Catalina y san Vicente Mártir, destinando 200 libras para gastos funerales, respecto a los cuales manifestaba su deseo de que se celebraran misas de aniversario y «capdany» con intervención de la Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados. ACCCV, Protocolos Bartolomé Simancas, 24.478.
25. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153, D. 28.
26. Manglano y de Garay, G. Juan Vich y Manrique de Lara. *Real Academia de la Historia, Historia Hispánica*. https://historia-hispanica.rah.es/biografias/49514-juan-vich-y-manrique-de-lara

el vestuario de los monjes y mantas para las camas (Morera, 2020, pp. 48-52). Un importante conjunto, sin duda, al que cabe añadir la cesión de su propia biblioteca en 1611 (Arciniega, 1999, p. 276).

A todo ello sumó la construcción de la capilla mayor, alargando la iglesia vieja, previas capitulaciones firmadas con el cenobio en 1609 en las que estipulaba sus medidas en 40 palmos de lado y de 50 palmos de altura, obligándose a donar al convento 6.000 libras. No obstante, siguiendo el consejo de los expertos, finalmente se decidió acometer la construcción de toda la iglesia —que se esperaba haber concluido en seis u ocho años— consignando a tal fin la renta de 6.000 libras aportada por don Juan Vich. El 16 de junio de 1610 se contrató la obra con el maestro de cantería Francisco Figuerola por valor de 4.100 libras (López et al., 1995, p. 20).

4. LA DECISIVA IMPLICACIÓN DE DON DIEGO

Fue, con todo, don Diego Vich quien más profundamente se comprometió en la mejora y transformación de la Murta. En 1631 manifestó su voluntad de concluir la cripta e iniciar el retablo mayor de la iglesia. Para la elaboración de la parte escultórica contrató al afamado escultor y ensamblador oscense Miguel Orliens[27]. El acuerdo de la obra —que debía estar concluida en septiembre de 1633 coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora— fue protocolizado por el notario Vicent Gaçull el 20 de marzo de 1632[28]. Se especificaban en él con todo detalle las características de la composición, sus dimensiones, la disposición del sotobanco, altar, pedestal, cornisa y basa; la ubicación y ornato del sagrario; el relieve y talla de las puertas; la guarnición de los tableros y puerta del sagrario a fin de disponer pinturas sobre ellos; la realización de tres nichos entre las columnas que albergaran las imágenes de san Miguel, san Jerónimo y la Virgen:

> que entre dichas columpnas haya de hazer los tres ninchos con todo el ornato de cornisas, frontispicios, figuras y talla conforme están en dicha traça dibuxados, haziendo en los dos ninchos grandes dos figuras de bulto: la una del señor san Miguel, y la otra del señor san Gerónimo, y en el nincho más pequeño haya de estar la ymagen de Nuestra Señora que oy tiene el convento de la Murta (Campos, 2022, p. 636).

Se pactaba, asimismo, la disposición en la parte superior de un entablamento, compuesto por arquitrabe, friso, cornisa y cartela; un nicho en el que se acomodara

27. De su renombre en la Valencia del momento da idea que, tras realizar el retablo de San Juan del Mercado, se hizo cargo, sucesivamente, de los retablos de los monasterios de San Juan de los Reyes, de la Murta y de la Cartuja de Valldecrist, ahora en la iglesia parroquial de Altura.

28. El documento completo fue transcrito por Campos, 2022, pp. 636-638.

una escultura de Cristo en la cruz con san Juan y dos imágenes de la Virgen a ambos lados; una cornisa en la que se colocara el escudo de armas de los Vich sostenido por dos genios; un escudo grande con las armas de Vich en la zona central del arco de la capilla mayor y tres escudos de armas con la insignia de la cruz de Alcántara en los extremos del retablo.

Terminada esta parte, don Diego concertó el dorado con el no menos prestigioso pintor Pedro de Orrente el 5 de enero de 1634, de nuevo con Vicent Gaçull como fedatario. El documento, transcrito en parte por Almarche (1919, p. 212), ha sido recientemente completado por Campos (2022, pp. 639-641).

> Primeramente, por quanto el dicho don Diego Vich y Mascó, en servicio de Nuestro Señor Jesuchristo y de su SS. Madre, Señora Nuestra, concebida sin mácula de pecado original, ha hecho hacer por su cuenta un retablo para la capilla mayor de la Iglesia del Convento y Monasterio de Nuestra Señora de la Murta de frayles Gerónimos, construido en el término de la villa de Alcira, el qual está ya assentado y puesto en dicha capilla, y agora desea hacer dorar y pintar aquel con toda perfección, lo que se ha ofrecido hacer el dicho Pedro de Orrente. Y assí, después de algunos trasteos y vistas de dicho retablo, con asistencia de personas pláticas y inteligentes en la materia, ha deliberado y resuelto que le dore y pinte el dicho Pedro de Orrente, según aquel se ha offrezido doralle y pintalle (Almarche, 1919, p. 212).

Proyectado el convenio, como en el caso anterior, pormenorizaba los trabajos a realizar por Orrente. Incidían estos en la preparación de la talla mediante un baño de cola floja para fijar el revestimiento y en el posterior proceso de dorado respecto al cual se exigía que

> haya de procurar el dicho Pedro de Orrente que el aparejo no le dé espeso sino de buen temple y que antes peque en claro, de modo que por lo menos se den a todo el retablo seys o siete manos de cada uno y con mucho cuydado, a saber es, siete manos de hiezo moreno cernido con cedazo espeso de seda y otras siete de hiezo mate y otras tantas de bol armenio para que el oro salga bien y de buen color (Campos, 2022, p. 639).

Se concertaba también estofar toda la talla y simular brocados y telas de oro en los ropajes de las figuras, a fin de conferirles mayor naturalidad; dar color a las figuras mediante el uso de pincel, como si de una tabla o lienzo se tratase, y pintar cogollos en las partes no revestidas de talla. Se acordaba, por otra parte, representar en las puertas del sagrario a Melquisedec revestido de sacerdote y a Abraham «en hábito de capitán vencedor»; en el pedestal de la parte del evangelio la Natividad de la Virgen, la Anunciación y la Encarnación; en tablero menor, en la parte posterior, la visitación a santa Ysabel, y en la mayor, la muerte de la Virgen, «que por ser el retablo dedicado a la Virgen parece conviniente que todas las historias sean de su vida» (Campos, 2022, p. 640). El precio de esta intervención —incluidas las tareas

de «desarmar y armar el retablo, aparejalle, doralle, estofalle y pintalle, comprehendiendo en él el tabernáculo o sacrario donde ha de estar reservado el Santíssimo Sacramento y todo lo demás de dicha obra» — se estipuló en 2.000 libras de las que Orrente recibía en ese momento quinientas, debiendo satisfacerse el resto a partir de la renta producida por los molinos de Cullera.

Así las cosas, el 11 de noviembre de 1634 se dio por asentado el retablo mayor cuyo coste se elevó a 3.500 libras (López et al., 1995, p. 21). Poco antes, el 25 de julio de 1634, se había acordado realizar un sagrario detrás del altar mayor tomando para ello el aposento de la enfermería que servía de botica, que ya el 5 de octubre de 1635 había pagado don Diego, según se hacía constar, para sepultarse en él «haciendo una bóveda que solo cupiese su ataúd» ya que la familia debía enterrarse en la capilla mayor. En 1642, concluido el trasagrario con retablo, frontal de altar y bóveda, se le concedió licencia para enterrarse en él (Arciniega, 1999, p. 284). No obstante, nunca hizo uso de este espacio porque en 1648 solicitó la concesión de dos palmos de tierra a la entrada de la iglesia donde inhumar sus restos bajo una losa de mármol en la que constara la siguiente inscripción: «Don Diego Vich esta sepultado aquí porque habiendo labrado el sagrario para su entierro se encuentra indigno dél, murio a (...) de año 16 (...)» (López, Mateo y Ruiz, 1995, p. 23).

Entretanto, en 1642 don Diego se comprometió, además, a costear una escalera nueva y concertó otras obras con el maestro de cantería Joaquín Bernabéu por un valor total de 1.070 libras. En 1649 llegó a un acuerdo con el prior relacionado con la traza del claustro, que finalmente llevó a cabo el maestro Guillem Carreres (Arciniega, 1999, p. 287). Sobre la actuación en este espacio escribía fray Juan Morera:

> Renovó el claustro chapándolo todo de azulejos, quitando las claraboyas de yeso que había en los arcos de medio arriba y los estribos que había arrimados a los postes a la parte de la fuente. Hizo quitar los naranjos que había en la luna del claustro como perjudiciales a la obra y rebajar el claustro bajo hasta igualarlo con la iglesia (Bruna, 1957).

Todavía, en 1650 don Diego acometió la realización de la portada de la fachada de la iglesia, que contrató con Vicente Mir. El acuerdo final incluyó su ejecución por valor de 515 libras y la de un aguamanil para la sacristía y la colocación de la piedra del Sagrario por valor de 170 libras[29]. A todo ello se añadía la campana mayor

29. En València a 27 de noembre 1656, ajustamentats contes Vicent Mir y yo, y dells dit dia li restí devent doscentes y deu lliures, ço es, les cinch lliures restí deudor de les cinch centes y quince en què concertàrem la portada y les cent y setanta en què està concertat lo aguamanil de la Sacristia, mudar borrar y escriure y tornar a asentar la pedra que estaba en lo Sagrari, y treinta y cinch lliures que alcança de les millores de dita portada, les quals tres partides fan dita suma de doscentes y deu lliures y estes me obligue a pagar a dit Vicent Mir donant-li trenta lliures cada mes, començant del present mes de nohembre y continuant per mesades fins tant

de la torre por la que pagó 211 libras. Y durante los años siguientes prosiguieron incesantes las actuaciones de don Diego en el cenobio. En 1654 se colocó la baranda de hierro del coro y en 1656 se dispusieron los florones de yeso policromados sobre los centros de las bóvedas vaídas (Arciniega, 1999, p. 287). A todo ello añade Morera la realización de la fuente del claustro, las celdas del camaranchón, los revoltones que faltaban en la galería, las ventanas, balcones y baranda del coro, la torre de las campanas, las ventanas del claustro y la de la celda prioral, el dormitorio de «los nuevos» y las puertas del guardarropa (Bruna, 1957).

De las obras ejecutadas y de los gastos devengados don Diego dejó registradas diferentes partidas, que Almarche pudo consultar y que reprodujo para el periodo comprendido entre 1649 y 1656. No obstante, escribió este autor que de sus anotaciones entresacaba las que estimaba más interesantes por ser alusivas a la intervención del pintor Espinosa y a la confección de los azulejos. De ello se puede deducir que no quedan reflejados todos y que, por consiguiente, fueron mayores las cantidades que invirtió. Pero, más importante que los valores numéricos, consideramos que el documento —que reproducimos en forma de tabla— constituye una evidente demostración de la fuerte implicación personal de don Diego en todas y cada una de las intervenciones.

Tabla 1. Sumas abonadas por don Diego Vich para la Murta (1649-1656)

Fecha	Concepto	Desembolso		
		L	s	d
26/05/1649	Desplazamiento a la Murta con los maestros Martín de Olinda y Guillermo Carreres.	4	2	6
28/04/1652	1.330 azulejos «mitadados» por valor de 10.126 sueldos y 1.330 de rositas valorados en 14 libras y 126 sueldos.	526	12	
28/04/1652	Serones y embalaje de los azulejos para la Sacristía.	2		
28/04/1652	Precio del porte de 10 serones de azulejos de 69 arrobas de peso (5 L 3 s 6 d), de 4 rejas de 11 arrobas de peso (2 L 16 s 10 d) y de 100 libras cuyo porte ascendió a 10 sueldos.	8	10	4
28/04/1652	300 tejas verdes y blancas para el chapitel de la torre de las campanas.	30		
09/06/1654	Pago a Jerónimo Espinosa a cuenta de los dibujos de los azulejos.	6		
25/08/1654	Otro pago a Jerónimo Espinosa a cuenta de los dibujos de los azulejos.	12		

sien pagades les dites doscentes y deu lliures. Fet dit dia de 27 de noembre 1656.- Diego Vich. Yo Visent Mir confese ser veritat tot lo sobredit y que e rebut les trenta lliures de la present mesada del mes de nohembre hui a 27 del dit (Almarche, 1919, p. 213).

Fecha	Concepto	Desembolso		
		L	s	d
01/10/1654	2.380 azulejos para las gradas y suelo del presbiterio; 100 azulejos y 100 cintillas para el suelo y perímetro de los balcones de la iglesia; 108 azulejos grandes «los quales se hizieron para muestra sobre el primer dibujo de Gerónimo Espinosa».	75	3	9
01/10/1654	Embalaje de azulejos para llevar a la Murta.	1	1	
25/02/1655	3.020 azulejos comprados a Ángela Martínez de Barberán.	84	11	
25/02/1655	625 azulejos para el suelo del presbiterio; 370 azulejos de dibujo para la guarnición de las paredes del presbiterio; 150 cintillas para el antepecho del coro.	36	9	1
01/02/1655	Pago a Jerónimo Espinosa, pintor, por los dibujos de azulejos realizados hasta esa fecha.	18		
14/05/1655	Pago a Jerónimo Espinosa por los dibujos de azulejos de las gradas de la iglesia.	4		
02/05/1655	Madera de los manperlanes de las gradas del altar mayor.	37	16	
00/06/1655	Dos viajes para transportar dos cargas de azulejos de dibujo.	4		
00/06/1655	Macizado de las gradas del altar mayor y chapado con azulejos de todo el presbiterio.	100		
10/06/1655	Pago de azulejos a Ángela Martínez de Barberán.	30		
19/07/1655	Otro pago de azulejos a Ángela Martínez de Barberán.	30		
19/09/1655	1.920 azulejos del chapado de las capillas y pago pendiente de otros.	136	19	4
03/06/1656	Pago a Jerónimo Espinosa por el papel para los azulejos de la sepultura del sagrario.	3		
10/03/1656	Dos espejos guarnecidos para la Sacristía.	14		

Fuente: Elaboración propia a partir de la obra de F. Almarche Vázquez, *Historiografía valenciana…*, pp. 215-217.

4.1. *Las colecciones de pinturas*

Con ser extraordinaria, no fue esta la única aportación de don Diego al enaltecimiento de la Murta. Las Actas Capitulares de 19 de julio de 1641 se hacen eco de la donación de un amplio conjunto de pinturas. El mismo don Diego afirmaba remitir todas las obras que poseía, salvo las vinculadas.

> Ayer, día de santa Ana, envié con fray Gerónimo las últimas piezas, asegurando a V.P. en ley de quien soy, que no me quedan en casa porción chica ni grande, sino la vinculada. Y es de suerte el desproporcionamiento que, estándolas liando, presente el padre Ripoll, se me acordó que en un escritorio tenía muy guardadas unas Horas manuscritas, con algunas iluminaciones de unos paxaritos y flores, que según están bien executadas por cierto son de mano de Alberto, el mayor hombre que ha tenido

> el mundo, y se me hizo escrúpulo de quedarme con ellas, como les daba a la Murta, y se las entregué al padre Ripoll para que él mismo las llevase y estuviesen en mi nombre y memoria en esa librería. Y a fe que en su santo y en su especie que no es la peor de mis pinturas (Almarche, 1919, pp. 210-211).

A finales del siglo XVIII fray Juan Morera, en su *Historia de la Fundación del Monasterio* refería al respecto que:

> dejó en vida toda la pintura que tenía en su casa de Valencia, que era mucha y buena. El Apostolado de la capilla mayor; 20 cuadros que se acomodaron en las cuatro calles del claustro; 10 que se acomodaron en la escalera; 11 en la portería; y 51 en la galería. Ytem, dio también el Bautismo de Cristo que es de alabastro y está sobre la pila de agua bendita de la Iglesia (Bruna, 1957).

Pero más que el número de obras nos interesa el contenido y autoría de la colección, que el estudio de Yarto, Mateo y Ruiz (1995, pp. 17-23) nos permite concretar. Se trata de El País de San Estacio y de la historia del samaritano, ambos originales de Paulo Bril; san Pedro, san Diego, san Dimas, san Agustín, san Sebastián, san Isidro, El plato de uvas, El hombrecillo que saluda y Los pícaros que juegan, todos ellos originales de Juan de Ribalta; La Música o santa Cecilia autoría de los Ribalta, padre e hijo; la Historia de Raquel y el Nacimiento, ambos de Basan; el de Tamar y el de Nuestra Señora de los Ángeles, de Pedro de Orrente; una Creación del Mundo, el Salvador y la Virgen, Susana y San Juan Bautista, todos ellos de Luis Morales; retablillos y láminas de san José, san Antonio y santa lnés; el cuadro de la Galera y cinco países «de agua y tierra», originales del flamenco Andrés Smidt[30]. Se trata, por tanto, de una magnífica colección pictórica que donó como un conjunto dada la pretensión de don Diego de que formaran parte de su morada final. De hecho, impuso como condiciones que permanecieran en lugares comunes de la casa, preferentemente el trasagrario o la biblioteca, expuestos con luz apropiada y bajo prohibición de venta o préstamo, a fin de que no pudieran realizarse copias (Arciniega, 1999, p. 286).

En cualquier caso, no fue esta su única donación de obras pictóricas. A ellas añadió la colección de varones insignes que en un primer momento se colocó en el claustro[31]. En el conjunto, integrado por treinta y un retratos, se encontraban representados santos y beatos —san Bernardo Mártir, san Vicente Ferrer, Luis Beltrán,

30. Biblioteca Serrano Morales, Diario de Valencia de 26 de mayo de 1791, C-35, pp. 218-219.

31. Sobre el destino de esta colección con motivo de la desamortización, a partir de la información proporcionada por D. Francisco Xavier Borrull y Vilanova, Académico de Honor de la Real Academia de San Carlos, en informe presentado el 23 de abril de 1821, véase Aldea, 1999. Sobre la diversa autoría y calidad de los retratos, ver Marco, 2021, p. 162.

Francisco de Borja, Nicolás Factor— papas —Calixto III, Alejandro VI— reyes —Fernando I de Aragón— obispos —Honorato Juan[32], José Esteve[33] (Martínez, 2024, pp. 555-612)— humanistas —Luis Vives, Federico Furió Ceriol[34]— poetas y dramaturgos —Ausias March, Jaume Roig, Gaspar Aguilar, Guillén de Castro— teólogos —Benito Pereira[35]— catedráticos de la Universidad de Valencia destacados en sus respectivas disciplinas —Francisco Collado, Jerónimo Muñoz, Jaime Ferruz, Pedro Juan Núñez, Juan Plaza, Agustín Martí, Miguel Salón, Pedro Juan Trilles[36]— canónigos de la catedral de Valencia —Francisco Tárrega[37]— regentes del Consejo de Aragón —Gaspar Sapena[38]— miembros de la nobleza —Baltasar Marrades[39]— maestros de capilla —Juan Bautista Comes— o un personaje que tanta polémica suscitó en la sociedad valenciana del siglo XVII como Francisco Jerónimo Simó[40]. Era un amplio elenco de personajes, a quienes unía la condición de ser valencianos o haber desarrollado su actividad en Valencia y gozar de elevada significación en sus respectivos ámbitos, lo que nos aproxima a las inquietudes personales, culturales e intelectuales de don Diego. Actuaba además con ello como impulsor del gusto por las galerías de retratos que, irradiada desde la corte, tanta impronta estaba adquiriendo entre las élites nobiliarias del momento[41].

32. Humanista, preceptor de Felipe II, obispo de El Burgo de Osma, autor de diversas obras. https://historia-hispanica.rah.es/biografias/24916-honorato-juan-tristull

33. Obispo de Orihuela.

34. Humanista, autor de *El Concejo i Concejeros del Príncipe* (1559). https://historia-hispanica.rah.es/biografias/11723-miguel-juan-ceriol-balle

35. Filósofo y teólogo, profesor de la Universidad de Évora. https://historia-hispanica.rah.es/biografias/35494-benito-pereira

36. Sobre la actividad de estos personajes, para no extendernos en demasía, remitimos a las respectivas páginas de Felipo, 1993. Pedro Juan Núñez (pp. 71-200) fue catedrático de Retórica y Oratoria; Jaime Ferruz (pp. 77-206) catedrático de Teología, participó en el Concilio de Trento; Jerónimo Muñoz (pp. 128-175), catedrático de Matemáticas y Astrología; Juan Plaza (pp. 141-205), catedrático de Medicina; Pedro Juan Trilles (pp. 80-208) catedrático de Sagrada Escritura y calificador del Santo Oficio; Francisco Collado (p. 175) catedrático de Hebreo; Miguel Bartolomé Salón (pp. 50-208) catedrático de Teología y Agustín Martí (pp. 128-175) catedrático de Medicina.

37. Canónigo de la catedral de Valencia y miembro de la Academia de los Nocturnos. Mas,1999, p. 59.

38. Asesor de la Comisaría General de Cruzada, Regente de la Cancillería y del Consejo de Aragón https://historia-hispanica.rah.es/biografias/40971-gaspar-sapena

39. Gobernador y maestre de campo general de Bohemia, consejero del Imperio, caballero de la Orden de San Juan. https://historia-hispanica.rah.es/biografias/28118-baltasar-marrades-i-de-vic

40. Sacerdote y místico. Su discutida santidad propició una fuerte convulsión religiosa y social. Ver Callado, 2000.

41. Véase a título de ejemplo Carrió, 2014, pp. 113-134; Falomir, 1994, pp. 121-124; Gil, 2011, pp. 655-672.

Con ser elevadísima, no concluyó con todo ello la aportación de don Diego a las obras de la Murta. El codicilo que añadía a su testamento en 1657 precisaba un conjunto de reformas a proseguir —con los bienes que el convento percibiría en su condición de heredero universal— en la sacristía, la cocina y el refectorio. Disponía también la realización de tres sillas de cuero negro y clavazón dorado «a la moderna» para el presbiterio. Pero mayor entidad tenían las intervenciones que debían realizarse en los claustros, ventanas, paredes, bóvedas…, que quedaban especificadas con todo lujo de detalles.

En el claustro bajo, además de enlosarse con piedra, debían chaparse sus paredes:

> El claustro baix se ha de solar tot de pedra com estan los cruseros o faixes que van desde els rincons a la lluna o pati o descubert perquè los quatre andamis e parets de la pesa que servix de capítol han de chapar-se differenciant de mostra, però de la mateixa altària que té el chapat del dit claustro baix ab lo qual se dona la mà. Y lo mateix advertixch y mane se execute en lo claustro alt. Perquè encara que es continuen los chapats pareix que sent diferents peses pot permitir la diferencia de mostra, si val per no fastidiar la vista si una mateixa mostra corregués per tot. Advertint que el dit chapat del claustro alt ha de señir tot lo ventarratje que ix al de baix[42].

En las ventanas se dispondrían barandas de hierro y se repararían con yeso blanco las paredes y las bóvedas «y en dites bóvedes se han de posar sos florons de algeps sens armes». Establecía, asimismo, que no se pusieran más cuadros que los que se dispondrían en las estaciones, respecto a los cuales especificaba que «se han de fer aposta y originals de la mà de Gerony Espinosa, o altre excelent pintor»[43]. Asimismo, se abrirían las dos ventanas de la plaza y de la montaña a las que se incorporarían balcones de hierro con vuelo. En el claustro alto, sobre la celda donde nació su tío arzobispo se acomodaría un texto en su memoria, además de un epitafio, que él mismo se encargó de redactar y que rezaba así:

> En esta selda nació el Illustríssimo señor don Joan Vique, obispo de Mallorca y arçobispo de Tarragona, a treze de agosto mil quinientos y treinta, estando sus padres don Luis Vique y doña Mencía Manrrique en este sitio a causa de la peste de Valencia. Y en memoria de ello y con la evidencia de que havía de ser enterrado aquí estava en la pared vieja gravado de mano de su Illustríssima este epitafio: «*Nudus egresus sum de utero matris mea hich, et nudus reventor huch».* Pot-se escriure açò en pergamí o paper gros y guarnit com si fora quadro y se ha de posar sobre la pared de la mateixa selda[44].

42. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.
43. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.
44. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.

Otras intervenciones consistían en la rehabilitación de la torre del Palomar, siguiendo el modelo de la de las campanas. Y disponía también la realización de un lienzo encargado al afamado pintor Jerónimo Espinosa con la imagen de un Cristo crucificado de las mismas medidas que el cuadro que había entregado a Felipe IV, además de dos lienzos colaterales que representaran al buen y mal ladrón:

> Ittem se ha de fer y pintar sobre llens imprimat que està en casa Gerony Espinosa, pintor, un Christo crusificat mort, que per a este intent està en dita casa dit llens, per ser de la mateixa medida del quadro que se.n portà el rey nostre señor y se ha de posar en aquell la mateixa guarnisió(…) Y lo mateix vull y man se faça dels dos altres llensos colaterals en los quals se han de pintar lo bo y mal lladre, los quals llensos estan imprimats en casa de dit Espinosa, y les guarnisions de aquells estan en dit convent de la Murta[45].

Asimismo, encomendaba pulir todas las paredes del convento de mortero fino y colocar al lado de la puerta que daba a la plaza una losa con un escrito que él mismo dejó redactado:

> La sclaresida luz del Linage y apellido de Vique ya para el siglo apagada y reduzida toda a las senisas que reserva este insigne santuario. Renace dellas para eterna succesión de los tiempos en memorias calificadas de lo que ha sido, y en desengaño infalible de que la más Illustre estimación de la presente vida es y ha de ser últimamente polvo y nada. Don Diego Vique en quien se acabó de extinguir su familia y nombre, mandó echar el sello con esta piedra a la reparación deste Convento quando, fiado en los divinos auxilios más que en la proprias fuerças, se opuso piadoso a las injurias que el tiempo començava a executar en la venerable ancianidad de su edificio[46].

Encargaba, además, la realización de dos blandones de bronce para cada uno de los altares de la iglesia, capítulo y sacristía, a fin de que cuando se celebraran misas, además de las luces ordinarias se encendieran dos candelas de cera «al santus, y que se apaguen en avent sumit, y no abans». Refería seguir con ello la práctica del Colegio del Corpus Christi y encomendaba garantizar su cumplimiento a su hermana doña Mencía, quien emplearía a tal efecto 150 libras de las 200 que le había dejado. Las cincuenta restantes se destinarían a los reparos del convento, finalidad para la que solicitaba la cooperación de los religiosos:

> Y supplique y encarregue a tots los religiosos en general y a cada hu en particular que al temps de la visita general no celen als pares visitadors, en cas que no es guarde dita ma disposició per a que coneguen della y la manen observar y castiguen a qui

45. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.
46. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.

> tindria culpa de no haver-se observat, encara que sia la més mínima part d.esta ma disposició[47].

Era este, en definitiva, un completo programa de mejoras del edificio y una demostración del patrocinio ejercido por don Diego sobre la Murta. Entretanto, el reconocimiento del Monasterio a su inmensa aportación se hizo efectivo cuando el 14 de abril de 1653 se le concedió el patronazgo de la capilla y convento (López et al., 1995, p. 23).

4.2. *La culminación del proyecto. Las voluntades finales de don Diego*

Pese a las extraordinarias aportaciones de don Diego Vich ya relacionadas, serían sus últimas voluntades las que marcaran el cénit del empeño familiar de ejercer el patrocinio sobre el cenobio. Don Diego dictó al menos dos testamentos, a los que todavía añadió un codicilo posterior. En el primero de ellos, dispuesto el 8 de julio de 1640, pedía ser enterrado en la sepultura familiar de la Murta, a cuyos religiosos encomendaba quinientas misas rezadas —que completaba con otros encargos a los conventos de San Cristóbal y del Socorro, a la iglesia de San Martín y al Colegio del Corpus Christi de Valencia— asignando ochocientas libras para gastos de entierro y sufragios por su alma. Y de sus mandas constituían las de mayor relevancia las destinadas al centro jerónimo.

Una de ellas era la realización del sagrario del modo que tenía acordado con el baile de Cullera Sebastián Vila[48]:

> Ittem, vull e man que de mos béns y herència sia fet y fabricat lo sagrari de la església del dit convent y Monestir de Nostra Señora de la Murta de frares gerónymos construit dins los terminis de la vila de Alçira, a elecció, disposició y lliure voluntat de Sebastià Vila, balle de Cullera, conforme ho tenim los dos acordat. Y que per a dit effecte se pague y gaste lo necesari a coneguda de aquell, com no excedeixca de 600 lliures, moneda real de València[49].

Pero no sería la única. En el apartado de legados a familiares, hacía usufructuario a don Juan Jerónimo Vives de un importante conjunto de pinturas que, a su muerte, o en caso de ingresar en religión, se debían trasladar al Monasterio «ahon estiguen per a sempre en memòria meuha». Se trata de los siguientes:

47. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.

48. De la amistad que le unía a Sebastián Vila y de la satisfacción con el modo de administrar su hacienda da buena cuenta que le legara 100 libras y que de ella quisiera dejar constancia en su testamento: «(…) dich y declare que estic content, satisfet y pagat, així de aquell com de sos fillastres». ACCCV, Protocolos Vicente Gaçull, 8.092.

49. ACCCV, Protocolos Vicente Gaçull, 8.092.

> Lo quadro del País de Sant Estacio y el que está en lo corredoret de ma casa sobre la porta que hix al corredor, que són de mà de Pau Esbrí; més lo de san Pedro, més lo de sant Agostí, més lo de sant Dimes, més lo de sant Diego, més lo de sant Sebastià, més el quadret de les ovelles y pastors de la Istòria de Raquel de mà del Basan, més el de Tamar que está al present en la sala sobre la finestra, que és de la mà de Orrente, més el de sant Isidro, més lo de lo plat de rayms, més los dels cinch països higuals de mà de Andrés, y lo quadret de la Creació del món, que són de la millor pintura que tinch[50].

Era, evidentemente, una magnífica colección pictórica de la que, como hemos referido en páginas anteriores, en realidad, hizo donación al centro jerónimo en 1641. Y también en las obras del sagrario se estaba trabajando por las mismas fechas. Era, por tanto, un testamento cuyos deseos vio cumplir antes de fallecer pero que tiene la virtud de mostrar su firme propósito de beneficiar con ellos a la Murta.

En cualquier caso, no serían estas sus últimas voluntades. El 30 de mayo de 1656 redactó un nuevo documento en plica escrito y firmado de su propia mano, que libró al notario Pedro Juan Ferrer. Apenas un año después, el 9 de abril de 1657, incorporaba un codicilo y el 15 de abril de 1657 a petición de sus albaceas Felipe Pasqual —prior del Monasterio— don Manuel Vives —caballero de la Orden de Montesa— y don Gerardo Cervelló —conde de Cervelló— se procedía a la apertura del testamento en la casa de la calle del «Forn del embaixador Vich» de la parroquia de San Martín de Valencia, donde vivía el testador. En él transmitía su voluntad de ser enterrado en la sepultura de la Murta sin ostentación ni manifestación externa alguna y prohibía expresamente «las visitas y pésames de amigos y parientes y el estrado de las señoras y otra qualquiera fúnebre ceremonia y obstentación de estas que la vanidad mundana a introducido y platicado»[51]. Y también su ataúd debía ser austero: de madera, sin forrar y cubierto de bayeta negra, sin decoración alguna salvo la Cruz de Alcántara «que descoserán de alguna ropa mía y la acomodarán encima de la caxa», que solicitaba que se colocara a los pies de la lápida de su tío don Juan Vich, arzobispo de Tarragona.

En otro orden, declaraba poseer dos tipos de bienes: los vínculos en los que había sucedido al embajador Jerónimo Vich y a don Luis Vich; y los heredados de su tío don Juan Vich, de su tía Castellana de Castellví y de su madre doña Blanca de Castellví, además de los que había conseguido por sí mismo, de los cuales podía disponer libremente. Junto a ellos, representaba contar con un conjunto de censos, de los cuales una parte debían destinarse a satisfacer deudas pendientes y otra incorporarse a los vínculos. Señalaba en relación con la plata, joyas, tapices y otros objetos de valor que, siendo importantes en tiempos de don Jerónimo y don

50. ACCCV, Protocolos Vicente Gaçull, 8.092.
51. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.

Luis Vich, se habían visto muy mermados con posterioridad tanto por las pérdidas sufridas por la Casa como por la falta de interés de sus predecesores. Sus palabras en este sentido no pueden ser más claras:

> Y en quanto a la plata, joyas, perlas, tapicerías y otros bienes muebles, que en calidad y cantidad fueron un tiempo de mucho precio y estimación, recayentes en los dichos vínculos de los dichos señores don Gerónimo y don Luis Vique, afirmo con toda verdad que de los diversos naufragios que esta casa a padecido después de la muerte del dicho don Luis, mi abuelo, y de la poca atención de sus posehedores en su beneficio y augmento, solamente llegaron a mi poder aquel valor de bienes que se puede inferir del ittem arriba referido[52].

Al respecto, estimó conveniente esclarecer que cuando sucedió en la Casa se encontraba en la sala un retablo grande y un portacruz, ambos del afamado autor veneciano Sebastián del Piombo[53], que aseguraba haber entregado a Felipe IV en 1645 en remisión de las deudas contraídas por su abuelo don Luis Vich durante los cinco años que desempeñó el oficio de maestre racional[54]:

> Ittem, advierto que quando entré a poseer esta casa allé en ella el retablo grande que estava en la sala y el portacruz, ambos originales de Sebastián del Piombo y recahientes en dichos vínculos. Estas pinturas me imbió a pedir el rey nuestro señor, estando su Magestad en Valencia el año mil seiscientos quarenta y cinco. Y yo le serví con ellas por remisión de los cargos que se le hazían en el oficio de maestre racional

52. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.

53. Muy recientemente, M. Gómez-Ferrer se ha interesado por la llegada a Valencia del Tríptico del Piombo, las escenas que lo componían y sus posibles destinos, al tiempo que ofrece un interesante recorrido por las aportaciones historiográficas —en parte derivadas de las copias de que fue objeto— en torno a su iconografía y simbolismo. Es, no obstante, la consulta del inventario de bienes de don Pedro Vich la que le ha permitido perfilar su descripción y desarrollar una aproximación a sus claves interpretativas, contribuyendo así a poner en valor el significado de la obra y los intereses artísticos de don Jerónimo Vich. Gómez-Ferrer, 2024, pp. 197-211.

54. Según una consulta elevada por el Consejo de Aragón al rey con fecha de 8 de marzo de 1634 la deuda de su abuelo se situaba en 7.000 libras. ACA. CA. Legajos, 941, n.º 11. Ya en septiembre de 1609 don Diego elevó un memorial al rey en el que refería los méritos de sus pasados y los propios para solicitar que se le eximiera del débito aduciendo haberse hecho así con el contraído por Gaspar Marrades: « Y pues Vuestra Magestad a los hijos de dicho don Gaspar Marrades absolvió graciosamente de lo que su padre quedava deviendo de dichas cuentas, siendo arto más de lo que se le pide a don Luys, y esto attento a los servicios suyos propios de dicho don Gaspar y de los suyos siendo los de los Viques, sin comparación ni duda, mucho más superiores, bien merecen de su real pecho de Vuestra Magestad la misma gracia, demás de que también se advierte a Vuestra Magestad que quando estos alcances fueran muchos y muy averiguados no hay hazienda ninguna de dicho don Luys Vique de que Vuestra Magestad pueda ser pagado». ACA. CA. Legajos, 889, n.º 139. Era esta una gracia que resulta evidente que no consiguió.

> al dicho don Luis Vique, mi abuelo, de unos cinco años que regió la thesorería por suspensión de su hyerno don Gaspar Marrades, que era thesorero en propiedad, en las quales cuentas era alcansado el dicho don Luis en considerables sumas. Y teniéndose su magestad por muy servido con dichas pinturas mandó poner silencio perpetuo en dichas cuentas interponiendo su auctoridad y real decreto para que por ningún tiempo pudieran los successores de mi Casa pedir a mis herederos dichas pinturas, pues con ellas pagaba deudas de vinculador[55].

Pero también que algunas de las pertenencias familiares se encontraban ya en manos de los jerónimos. Relacionaba, en concreto, dos tapices antiguos con representación de unas ruedas que movían unos ángeles, seis tapices con paisajes, una joya con veinte diamantes alrededor y uno en el centro que él mismo añadió. Sumaba a ello, como bienes aportados por la herencia de don Luis Vich, virrey de Mallorca, una fuente grande dorada, dos flascos de plata y una imagen de santa Úrsula de piedra guarnecida de oro con algunos diamantes pequeños, también preservados en el Monasterio.

Justificada la ausencia de estos bienes, otorgaba algunos legados a sus familiares y en el resto de sus bienes instituía heredera universal a Nuestra Señora de la Murta. Imponía, no obstante, la condición de que del procedente de la herencia se cargaran 10.000 libras en un censo que produjera una renta anual de 500 libras que quedaran vinculadas al cenobio:

> En lo restante de mis bienes havidos y por haver, muebles e inmuebles, sitios y rahízes y semovientes, casas, deudas, patronazgos, drechos y acciones mías y míos y a mi pertenecientes y que puedan pertenecerme, y se me den agora y en cualquier tiempo, por qualquiera título, causa, vía, modo, nombre, manera y razón, nombro y elijo por mi universal heredero al Convento de Nuestra Señora de la Murta de la Orden de san Jerónimo, situado en el valle de Miralles y término de la villa de Alzira para que se utile, tenga por propios, reciba y goze todos los

55. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73. Efectivamente, así lo hizo constar Felipe IV en carta remitida el 22 de noviembre de 1645 al baile general de Valencia. «Por servicios particulares que en diferentes tiempos me ha hecho don Diego Vique y su Casa, y por el que agora he recibido con unas pinturas de su maiorazgo, de mucho valor y estimación, con que me ha servido, he tenido por bien de darle por libre a él y a sus bienes y maiorazgo de cualquier alcance que deviesse o pudiesse deber de las cuentas de la thesorería deste Reyno que administró su avuelo don Luis Vique el tiempo que duró la suspensión de don Gaspar Marradas, que tenía el officio en propiedad. Y assí os encargo y mando que en ningún tiempo a él ni a sus herederos y successores en el maiorazgo y descendientes de dicho don Luis les pidáis por raçón de dichas qüentas cosa alguna, por quanto desde agora para entonces les doy por libres, no obstante cualquier cosa que haya en contrario, que esta es mi voluntad, toda duda, consulta, dificultad y otro cualquier impedimento cesante. Datta en Valencia a XXII de noviembre MDCXXXXV. Yo el Rey. ACA. CA. Legajos, 922, n.º 7.

> dichos mis bienes, rentas y efetos y pueda hacer y disponer de aquellos a su libre y mera voluntad, como de cosa propia, con pacto, vínculo y condición que de todo lo recayente en esta mi herencia de dinero en contado y empleado a cambio y procedido de alajas, deudas y otros haveres se junten diez mil libras, las quales de hayan de cargar a censo en parte segura a fin de que rindan conforme los fueros de este reyno quinientas libras cada año (…) que queden *in perpetuum* situadas e vinculadas a dicho convento, sin que por ningún tiempo, vía, causa ni manera se puedan deshacer, vender ni enagenar[56].

Por su parte, el codicilo posterior de 9 de abril de 1657 estuvo orientado a incorporar como albacea a su sobrino Jerónimo Vives y Vich, presbítero y caballero de la Orden de Alcántara; a esclarecer algunos puntos sobre determinadas sumas que se habían venido cobrando por la Casa; y muy particularmente a disponer el destino de la renta de 500 libras producida por las 10.000 libras cargadas a censal: una vez satisfechas sus deudas, las cantidades restantes se dedicarían a proseguir la obra que estaba realizando en el edificio.

Bajo estas disposiciones, don Diego Vich fallecía el 15 de abril de 1657 en la casa familiar de la calle del «Forn del embaixador Vich». Apenas un día después, Nuestra Señora de la Murta se convertía en su última morada de acuerdo con la licencia expedida a tal fin por el General de la Orden de san Jerónimo el 8 septiembre de 1642, que, además, en reconocimiento de sus aportaciones, permitía poner sus armas en el claustro y la escalera y eliminar los escudos de otras familias:

> Nos, Luis de Aguilar, Prior del Monasterio de San Bartholomé el Real de Lupiana y General de la Orden n. p. S. Gerónimo. A los padre prior, monjes y Convento de nuestro Monasterio de Nuestra Señora de la Murta de Valencia, salud en nuestro Señor Jesucristo. Por vuestra parte me fue hecha relación de que el señor don Diego Vique, cavallero de la Ciudad de Valencia, por la singular devoción que siempre ha tenido a nuestro gran Padre San Gerónimo, y por afición a esta su Religión y en particular a essa vuestra casa, tan heredada de sus progenitores como la nobleza de su sangre, la ha enriquecido con piadosos dones y preseas, hecho el retablo de la iglesia, sagrario, escalera y otras obras dignas de su mucha largueza y que esperáis en ella que siempre os ha de favorecer. Y que por mostraros agradecidos a tantos beneficios queríades darle el sagrario que ha labrado para su entierro y juntamente poner sus armas en el claustro que renueva por su qüenta para perpetua memoria de tan gran bienhechor y quitar otras de quien no la ay. Y porque esto no lo podéis hacer sin mi consentimiento y licencia me pedíades os la concediesse, y yo, viendo que vuestra petición es tan justa y debida, por la presente, en la mejor forma que de derecho debo y puedo, os la concedo para que deis para entierro al susodicho señor don Diego Vique el susodicho sagrario y para que pongáis sus armas en el

56. AHNOB, Fernán Núñez, C. 153. D. 73.

> claustro y borréis las demás (…) En este Real Monasterio de San Bartholomé, en ocho días del mes de setiembre de 1642 años (Almarche, 1919, pp. 221-222).

El fallecimiento de don Diego Vich suponía la extinción del linaje por falta de descendencia y con ello cambios en la línea de transmisión, no sin que precedieran numerosos litigios que se prolongaron a lo largo del siglo XVIII y en los que también la Murta se involucró en defensa de los que consideraba sus derechos. Para el cenobio de la Orden Jerónima marcaba el final de su periodo de máximo esplendor y el inicio de un proceso de decadencia que culminó cuando tras la desamortización de 1835 el Monasterio fue abandonado y vivió un periodo dispersión de sus pertenencias[57] y de destrucción generalizada, que persistió hasta que en 1989 pasara a propiedad del Ayuntamiento de Alzira y en 2002 las ruinas conservadas fueran declaradas Bien de Interés Cultural.

5. CONCLUSIONES

Los servicios a la Corona y en las instituciones valencianas, unidos a algunos ventajosos enlaces matrimoniales, procuraron al linaje Vich un progresivo encumbramiento social que les confirió un elevado prestigio entre la sociedad valenciana, que trataron de inmortalizar después de la muerte. Nuestra Señora de la Murta fue el lugar privilegiado elegido para enterrar a sus difuntos —incluidas algunas de las esposas— desde finales del siglo XV y sobre el que desarrollaron un ininterrumpido patrocinio hasta su propia extinción. Si Luis Vich Corbera —en quien parecen situarse los inicios del vínculo con el cenobio— quiso contribuir al embellecimiento de la capilla con un nuevo retablo, su hijo y sucesor en la Casa, Jerónimo Vich Vallterra, mostró especial interés por el acondicionamiento de este recinto funerario para el que previno varias reformas, la realización de un retablo nuevo y la disposición de un Crucifijo. Y continuando en esta línea, el hijo de este, don Luis Vich y Ferrer, perfeccionó la capilla con la colocación de un banco de madera y de las armas de los Vich, Vallterra y Manrique en la cubierta y la donación de un fragmento del *Lignum Crucis,* así como de una caja de plata con reliquias. Asistimos, por tanto, durante esta etapa a un completo programa de embellecimiento y distinción de la que se había convertido en la capilla funeraria de los Vich.

Pero el compromiso con el centro jerónimo no concluyó aquí. De la veneración por él participaron también, ya en los albores del Seiscientos, los miembros de la siguiente generación. Así lo evidencia que el virrey don Luis Vich y Manrique,

57. Véase a mero título de ejemplo el diferente destino de la colección de retratos. Elías Tormo identificó en 1932 ocho en el convento del Carmen de València (Tormo 1932, pp. 60-61) y David Gimilio documenta actualmente once en el Museo de Bellas Artes de València (Gimilio, 2016, pp 193). Un estudio específico sobre el tema en Delicado y Ballester, 1999, pp. 82-90.

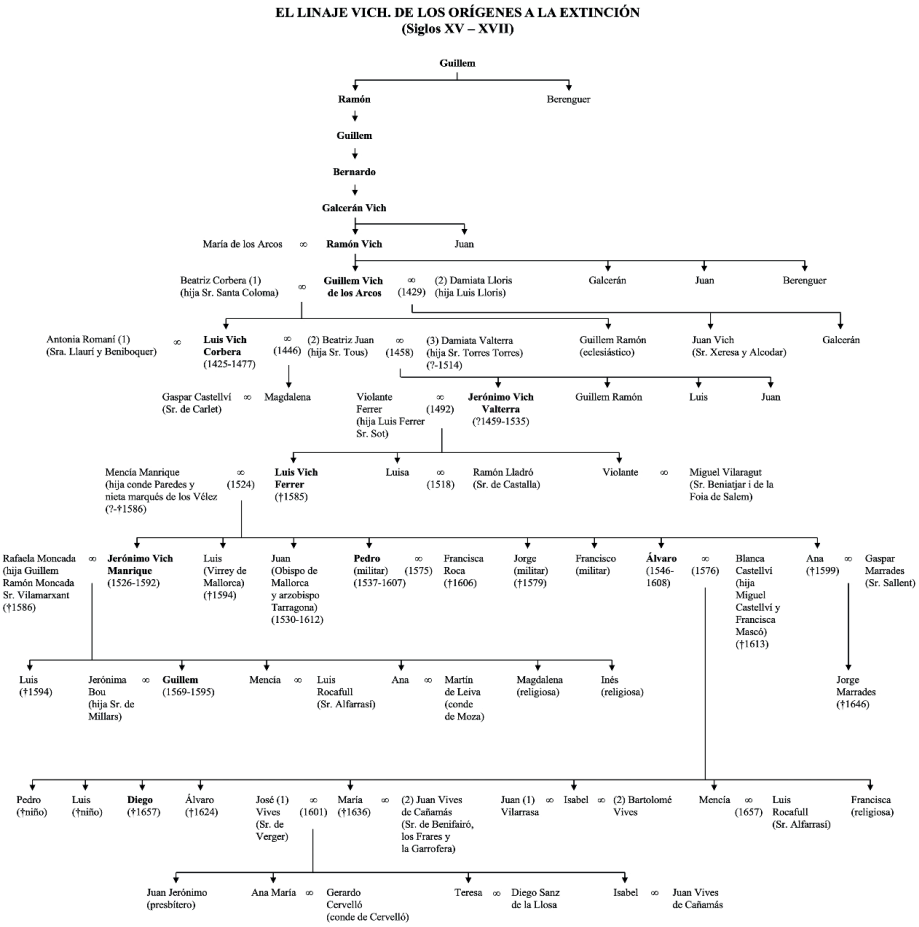
además de la donación de ricas vestiduras litúrgicas, tras instituir un vínculo con sus bienes libres —que incluía censales, joyas y piezas de plata de elevado valor— y contemplar la eventualidad de falta de descendencia familiar nombrara sucesor al Monasterio a fin de culminar el altar mayor de su iglesia; que don Álvaro Vich y Manrique ofreciera una lámpara de plata valorada en 100 libras; y que don Juan Vich y Manrique donara su biblioteca, objetos litúrgicos valorados en 6.000 libras y asumiera la reconstrucción de la iglesia.

Será, no obstante, el último representante del linaje, don Diego Vich y Mascó, quien acometa una labor de mayor envergadura en el cenobio jerónimo. Así lo muestra que, además de la realización del retablo mayor de la iglesia —que contrató con tan prestigiosos artífices como Miguel Orliens y Pedro de Orrente— asumiera un amplio conjunto de intervenciones arquitectónicas —que afectaron a espacios tan diversos como la torre de las campanas, portada, claustro, sagrario, coro, sacristía, refectorio, cocina, celdas, galería, escalera, bóvedas, ventanas o balcones— que constituían un excepcional proyecto de renovación y ornamentación del lugar. También magnífica fue la riquísima colección pictórica que donó. Y no menos relevancia cabe atribuir al hecho de que, culminación de este proceso, en sus últimas voluntades instituyera heredero universal de sus bienes libres al Monasterio.

No cabe duda de que el mecenazgo de los Vich sobre la Murta fue una tendencia centenaria mantenida por las sucesivas generaciones del linaje en un proceso *in crescendo* que alcanzó su punto álgido a mediados del siglo XVII. Es cierto que con él la orden jerónima pudo gozar de un proyecto integral de mejoras del edifico, pero también lo es que, en contrapartida, proporcionó a los Vich algo más que un espacio en el que inmortalizar las virtudes del linaje. La concesión del patronazgo de la capilla y convento, el privilegio de colocar sus armas en el claustro y escalera y la autorización de eliminar los escudos de otras familias parece aproximar a los Vich a lo que A. Atienza (2008) caracterizó como «apropiación de patronatos conventuales»[58].

58. Entre otras muchas estirpes afectadas por la *damnatio memoriae* ocasionada por la primacía de los Vich figuran los Vilanova-Serra, Calatayud, Cervera, Eixarc, Collar…. Ver Garés Timor, 2017, pp. 202-207.

6. GENEALOGÍA DEL LINAJE VICH



Fuente: Elaboración propia.

Contribución de las autorías

La autora declara haber desarrollado individualmente todo el proceso de investigación, redacción, revisión del texto y aprobación del manuscrito final publicado.

Política de financiación y agradecimiento

Trabajo realizado al amparo del proyecto de investigación *Ganar y perder en las sociedades hispánicas de la Edad Moderna. Dialécticas de éxito y fracaso en los procesos históricos de cambio y resistencia (WINLOSE)* (2023-2026) con financiación de las convocatorias I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

No se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

7. BIBLIOGRAFÍA

Aldea Hernández, A. (1999). La colección pictórica de varones ilustres valencianos, pertenecientes al Monasterio jerónimo de Nuestra Señora de la Murta de Alzira. En F. J. Campos y Fernández de Sevilla (Coord.), *La orden de San Jerónimo y sus monasterios: actas del simposium (II)* (Vol. 1, pp. 529-554). Real Centro Universitario Escorial-María Cristina.

Almarche Vázquez, F. (1919). *Historiografía valenciana: catálogo bibliográfico de dietarios, libros de memoria, diarios, relaciones, autobiografías, etc., inéditas y referentes a la historia del antiguo Reino de Valencia*. La Voz Valenciana.

Arciniega García, L. (1999). Santa María de la Murta (Alzira). Artífices, comitentes y la damnatio memoriae de D. Diego Vich. En F. J. Campos y Fernández de Sevilla (Coord.), *La orden de San Jerónimo y sus monasterios: actas del simposium (II)* (Vol. 1, pp. 268-292). Real Centro Universitario Escorial-María Cristina.

Arciniega García, L. (2001). *El Monasterio de San Miguel de los Reyes*. Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

Atienza López, A. (2008). La apropiación de patronatos conventuales por nobles y oligarcas en la España Moderna. *Investigaciones Históricas*, *28*, 79-116.

Atienza López, A. (2010). Nobleza, poder señorial y conventos en la España moderna. La dimensión política de las fundaciones nobiliarias. En E. Sarasa Sánchez & E. Serrano Martín (Coords.), *Estudios sobre señorío y feudalismo: homenaje a Julio Valdeón* (pp. 235-269). Diputación Provincial de Zaragoza; Institución Fernando el Católico.

Atienza López, A. (2016). Conventos y patronos: cuestiones sobre las relaciones de patronazgo conventual en la España moderna. En J. M. Imízcoz & A. Artola Renedo (Coords.), *Patronazgo y clientelismo en la monarquía hispánica (siglos XVI-XIX)* (pp. 109-134). Universidad del País Vasco. https://doi.org/10.4000/caravelle.2544

Benito Doménech, F. (2000). *Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y su obra. Catálogo de la exposición celebrada en València, Museo de Bellas Artes de València*. Generalitat Valenciana.

Bruna López, D. (1957). *Un gran mecenas valenciano del siglo XVII: Don Diego de Vich* [Tesis de licenciatura inédita]. Universidad de Valencia.

Callado Estela, E. (2000). *Devoción popular y convulsión social en la Valencia del seiscientos. El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó*. Institució Alfons el Magnànim.

Campón Gonzalvo, J. (1991). *Historia del Monasterio de Santa María de la Murta*. Ayuntamiento de Alzira.

Campos Perales, A. (2022). *Arte, coleccionismo y cultura nobiliaria en el Reino de València en tiempos de Felipe III* [Tesis doctoral, Universitat de València]. RODERIC.

Carrasco Martínez, A. (2000). Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en la cultura nobiliaria. *Cuadernos de Historia Moderna*, *25*, 233-272.

Carrió Invernizzi, D. (2014). Las galerías de retratos de virreyes de la Monarquía Hispánica, entre Italia y América (siglos XVI-XVII). En D. Aznar, G. Hanotin, & N. F. May (Coords.), *À la place du roi: vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (XVIe-XVIIIe siècles)* (pp. 113-134). Casa de Velázquez. https://doi.org/10.4000/books.cvz.1238

Cavero de Carondelet, C. (2020). Proyectos compartidos. Las fundaciones religiosas del Cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas en el valimiento del duque de Lerma. En B. J. García García & Á. Rodríguez Rebollo (Dirs.), *Apariencia y Razón. Las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III* (pp. 67-92). Doce Calles.

Delicado Martínez, F. J., & Ballester Hermán, C. (1999). El monasterio jerónimo de Santa María de la Murta, de Alzira, tras de las desamortizaciones del siglo XIX. La dispersión y pérdida de su legado artístico y cultural. *Archivo de Arte Valenciano*, (80), 80-90.

Delicado Martínez, F. J., & Ballester Hermán, C. (2000). El Monasterio de Cotalba (Gandía), una fundación jerónima del siglo XIV. *Ars Longa: Cuadernos de Arte*, (9-10), 73-86.

Díaz Marcilla, F. J. (2023). La orden jerónima en el contexto de la Corona de Aragón: conformación, evolución y adaptaciones en época medieval a la luz de José de Sigüenza. *Hispania Sacra*, *75*(151), 49-56. https://doi.org/10.3989/hs.2023.05

Falomir Faus, M. (1994). El duque de Calabria, Mencía de Mendoza y los inicios del coleccionismo pictórico en la Valencia del Renacimiento. *Ars Longa: Cuadernos de Arte*, (5), 121-124.

Felipo Orts, A. (1993). *La Universidad de Valencia durante el siglo XVI (1499-1611)*. Universidad de Valencia.

Garés Timor, V. M. (2017). *Aproximació a la vida, heretatge i descendència de don Manuel de Vilanova i Serra*. Ayuntamiento de Alzira.

Gil Saura, Y. (2011). Les galeries de retrats a la València barroca. La construcció de la memoria. *Afers: Fulls de Recerca i Pensament*, *26*(70), 655-672.

Gimilio Sanz, D. (2016). La galería de retratos de la casa real de Aragón en Nápoles. *Potestas: Religión, Poder y Monarquía*, (9), 167-196. https://doi.org/10.6035/Potestas.2016.9.8

Gómez-Ferrer Lozano, M. (2024). Devoción y piedad. Sebastiano del Piombo y el Tríptico de don Jerónimo de Vich y Valterra en Valencia. *Goya: Revista de Arte*, (387), 197-211.

Herreros Moya, G. J. (2012). Así en la tierra como en el cielo. Aproximación al estudio de las capellanías en la Edad Moderna: entre la trascendencia y la política familiar. El caso de Córdoba. *Historia y Genealogía*, (2), 111-144. https://doi.org/10.21071/hyg.vi2.14869

Ladero Quesada, M. A. (1986). Mecenazgo real y nobiliario en monasterios españoles los jerónimos (siglos XV y XVI). *Príncipe de Viana. Anejo*, (2-3), 409-440.

López Yarto, A., Mateo Gómez, I., & Ruiz Hernando, J. A. (1995). El Monasterio de Santa María de la Murta (Valencia). *Ars Longa: Cuadernos de Arte*, (6), 17-23.

Manglano y Cucaló de Montull, J. (1944). *Jerónimo de Vich, embajador de Fernando el Católico en Roma (1507-1521): Discurso leído en el acto de su recepción por el ilustrísimo señor barón de Terrateig y contestación del ilustrísimo señor barón de San Petrillo*. Tipografía Artística.

Marco, V. (2021). *Pintura barroca en Valencia, 1600-1737*. Centro de Estudios Europa Hispánica.

Martínez Valls, J. (2024). Semblanza biográfica del Obispo de Orihuela Don José Esteve Juan (1551-1603) y sus relaciones «ad limina». *Anthologica Annua*, (26-27), 555-612. https://doi.org/10.59530/ANTHANN.1979.26.6

Mas i Usó, P. (1999). *Academias valencianas del barroco. Descripcion y diccionario de poetas*. Reichenberger.

Montaner Alonso, P. (2017). Mallorca entre crónicas y avisos. La correspondencia de Jordi de Vich en 1624-1625, y esbozos biográficos de algunos de sus más destacados parientes. *Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics*, (27), 105-143.

Morera, J. B. (2020). *Historia de la fundación del monasterio del Valle de Miralles y hallazgo y maravillas de la Santíssima Ymagen de Ntra. Sra. de la Murta*. Ajuntament d'Alzira.

Ranera Nadador, J. G. (2022). *La muerte en la Casa de Mendoza: fama y memoria póstuma de los duques del Infantado a través de sus enterramientos (siglos XV-XIX)* [Tesis doctoral, Universidad de Valladolid]. Repositorio UVa.

Rocha, A. R. (2025). Making treasure in heaven: family chapels as a manifestation of the social power of urban elites (Portugal, 14th-17th centuries). *Revista de História da Sociedade e da Cultura*, *25*(1), 159-182. https://doi.org/10.14195/1645-2259_25-1_7

Roth, D. (2007). Mayorazgos, capellanías y lugares de memoria como perpetuación del ascenso social de la oligarquía de un centro administrativo de señorío. El ejemplo de Vélez Blanco (1588-1788). En F. Andújar Castillo & J. P. Díaz López (Coords.), *Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez* (pp. 213-234). Instituto de Estudios Almerienses.

Soria Mesa, E. (2002). Las capellanías en la Castilla moderna: familia y ascenso social. En A. Irigoyen López & A. L. Pérez Ortiz (Eds.), *Familia, transmisión, y perpetuación (siglos XVI-XIX)* (pp. 135-148). Universidad de Murcia.

Tarifa Castilla, M. J. (2017). La imagen del power, prestigio social y religiosidad a través del patronato artístico y la fundación de conventos. Beatriz de Beaumont y Navarra (1523-1603). En H. Gallego Franco & M. C. García Herrero (Coords.), *Autoridad, poder e influencia: mujeres que hacen Historia* (pp. 823-838). Icaria.

Tormo y Monzó, E. (1932). *Valencia: los museos. Guías-catálogo* (Vol. 1). Centro de Estudios Históricos.

Viforcos Marinas, M. I., & Campos Sánchez-Bordona, M. D. (Coords.) (2005). *Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual: nuevas aportaciones al monacato femenino*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de León.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481455486

DE PODER Y POLÍTICA: LA SECULARIZACIÓN DEL CABILDO METROPOLITANO DE ZARAGOZA ENTRE FELIPE II Y EL DUQUE DE LERMA (1575-1604)

On Power and Politics: The Secularization of the Metropolitan Chapter of Zaragoza Between Philip II and The Duke of Lerma (1575-1604)

Daniel OCHOA RUDI

École Française de Rome
daniel.ochoa-rudi@efrome.it

Recibido: 28/06/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: El principal objetivo de este estudio es dar a conocer el proceso de secularización del Cabildo Metropolitano de Zaragoza (1575-1604) y su trascendencia política para el reino de Aragón. A partir de nuevas fuentes de estudio, proponemos establecer la continuidad existente en los intereses políticos de la monarquía en secularizar y controlar la institución capitular, especialmente tras la rebelión aragonesa de 1591. El proceso vivió dos fases diferenciadas por esa misma fecha: una primera fase, que comprende los intentos de secularización con el fin de aplicar el Concilio de Trento a la corporación catedralicia; y una segunda fase, promovida por Felipe II y continuada por el duque de Lerma, como consecuencia de los cambios políticos iniciados en Aragón tras las Cortes de 1592.

Palabras Clave: Felipe II; Duque de Lerma; secularización; Cabildo Metropolitano; Zaragoza.

ABSTRACT: The main objective of this study is to shed light on the process of secularisation of the Metropolitan Chapter of Zaragoza (1575-1604) and its political significance for the kingdom of Aragon. On the basis of new study sources, we propose to establish the existing continuity in the political interests of the monarchy in secularising and controlling the chapter institution, especially after the Aragonese rebellion of 1591. The process underwent two distinct phases around the same date: a first phase, comprising the attempts at secularisation in order to apply the Council of Trent to the cathedral corporation; and a second phase, promoted by Philip II and continued by the Duke of Lerma, as a consequence of the political changes initiated in Aragon after the Cortes of 1592.

Keywords: Philip II; Duke of Lerma; secularisation; Metropolitan Chapter; Saragossa; Spain.

1. INTRODUCCIÓN[1]

La aplicación del Concilio de Trento en la Monarquía de España tuvo fuertes connotaciones políticas. Felipe II supo adaptar los preceptos tridentinos a favor de sus intereses con el fin de reforzar su autoridad política. Ignasi Fernández Terricabras comprobó que las estructuras de la Iglesia fueron aprovechadas por la corona para consolidar y vertebrar, a través de la reforma eclesiástica, la influencia política del rey sobre las diferentes realidades locales de la monarquía. El proceso no fue uniforme y, en ocasiones, se encontró con fuertes resistencias por parte del papado, de los obispos y de los cabildos catedralicios. Pese a ello, a finales del reinado de Felipe II, la confesionalización del clero secular y el control de las estructuras eclesiásticas fortalecieron la influencia política del rey sobre los reinos de la monarquía compuesta de los Austrias (Fernández Terricabras, 2000). Especialmente en Castilla y Aragón, pero también en otros contextos como Portugal. Allí la aplicación de los presupuestos tridentinos convivió con la castellanización de la vida del reino (Paiva, 2010).

Dentro de este contexto, uno de los procesos que menos han llamado la atención a la historiografía modernista es el de la secularización de algunos cabildos catedralicios del norte de la península ibérica. Las comunidades de canónigos regulares tuvieron especial arraigo, como consecuencia de la reforma gregoriana, desde la segunda mitad

1. Abreviaturas empleadas: Archivio Apostolico Vaticano [AAV]; Archivo de la Corona de Aragón [ACA]; Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza [ACSZ]; Archivo Histórico Nacional [AHN]; Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza [AHPNZ]; Archivio Storico Capitolino di Roma [ASCR]; Biblioteca Nacional de España [BNE].

del siglo XII (Calvo Gómez, 2015). A lo largo de los siglos XIV y XV, muchas de las iglesias erigidas durante la Reconquista abandonaron la vida en común. Los nuevos tiempos hicieron que este estilo de vida fuera decayendo, iniciándose un proceso de secularización que no fue homogéneo (García-Villoslada, 2020, pp. 659-660). Parece ser que en la Corona de Aragón el proceso de secularización de colegiatas y catedrales fue mucho más lento que en Castilla. En el reino de Aragón, fue el rey Sancho Ramírez el que introdujo la regla de San Agustín en los cabildos de Jaca, Pamplona, Roda y la abadía de Montearagón a finales del XI. La secularización de Jaca y Huesca tuvieron efecto en 1302, por medio de una bula de Bonifacio VIII (Huesca, 1796, pp. 237-247). El de Tarazona en una fecha indeterminada antes de 1539 (De la Fuente, 1865, p. 134).

La política religiosa de Felipe II y de su episcopado buscó homogeneizar estas realidades secularizando los cabildos regulares que quedaban como testimonios residuales de otros tiempos religiosos en Navarra, Aragón y Cataluña. Detrás de la intención regia no solamente estaba el de reformar a estos clérigos que no cumplían la regla ni la vida en común, sino que también afectaba al *ius corrigendi* y al *ius eligendi* de aquellos prioratos, colegiatas y catedrales. Es decir, con la secularización de estas iglesias su jurisdicción y las formas de elección de los canónigos quedaban supeditados al ordinario de cada lugar y, por ende, bajo control regio. En 1592, el papa Clemente VIII aprobó la bula *Vinae Electae Domini* por la que declaraba extintos y secularizados, a petición de Felipe II, aquellos cabildos que siguieran la regla de san Agustín en Cataluña, Rosellón y Cerdaña[2]. Algunas catedrales como Tortosa y algunas colegiales se vieron afectadas por estas medidas. Otros, como el de Tortosa supieron mantenerse regulares hasta bien entrado el siglo XVIII (Calvo Gómez, 2015). Felipe III, durante el valimiento del duque de Lerma, continuó con esta misma política. Así lo ejemplariza el intento de fray Prudencio Sandoval —del linaje del propio valido—, de secularizar el cabildo catedral de Pamplona durante las cortes navarras de 1617 (Goñi Gaztambide, 2008, pp. 600-601); o la necesidad de secularizar y cambiar la ubicación de la colegiata de Roncesvalles. Sin embargo, ambos proyectos contaron con la fuerte oposición de las dos instituciones, así como de buena parte de la élite política del reino navarro[3].

En este mismo contexto hay que entender el tema que atañe a este estudio: la secularización del cabildo de la seo zaragozana. Durante el reinado de Felipe II,

2. La bula *Vinae electae Domini* se encuentra en *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, t. IX. Roma: Sebastiane Franco, 1865, pp. 580-584.

3. Juan de Huarte, *Apología a favor del cabildo de Roncesvalles y contra visitas y fautores y de la secularización y renovación y nuevo estado*, 1616. Mss. de la Biblioteca de Navarra. Puede consultarse en: https://binadi.navarra.es/opac/ficha.php?informatico=00008842MO&codopac=OPBIN&idpag=166763117 [consultado el 2 de julio de 2026].

en el reino de Aragón quedaban cinco cabildos regulares[4]. En 1604, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza abandonó la regla de san Agustín y se convirtió en una institución formada por canónigos seculares. La secularización del cabildo fue un proceso religioso y político que se prolongó durante los reinados de Felipe II y Felipe III. La bula *Reductionis* del papa Clemente VIII no sólo cambió el carácter de los miembros de la corporación capitular, también su estructura y composición. Su ejecución significó la creación de un cabildo *ex novo*, diseñado desde los paradigmas del Concilio de Trento y conllevó un aumento del peso político del rey en los asuntos del reino de Aragón.

Las causas que motivaron la secularización, y su implicación con la rebelión aragonesa de 1591, no quedan del todo claras. Tampoco se sabe nada sobre el proceso de disolución del antiguo cabildo regular, los agentes que participaron en las negociaciones y las causas de su prolongación en el tiempo. Este trabajo pretende reconstruir todos estos puntos tocantes a la bula *Reductionis*, firmada el 15 de julio de 1604 en la basílica de San Marcos de Roma. El estudio de diversas fuentes inéditas ha permitido contextualizar y analizar todo este proceso de secularización de la institución capitular zaragozana. Y, con ello, valorar la implicación política de su ejecución.

El trabajo está dividido en tres grandes apartados. El primero de ellos hace referencia a los intentos frustrados de algunos arzobispos de Zaragoza de reformar y secularizar la catedral de la diócesis en el último tercio del Quinientos. En el segundo, se desarrolla el proceso de secularización, iniciado por Felipe II y concluido por el valido de Felipe III, el duque de Lerma. El último de los apartados describe cómo fue la aplicación de la bula de secularización, analizando su dimensión religiosa y política.

1.1. *El otoño de la vida regular del Cabildo Metropolitano de Zaragoza y los primeros intentos de secularización (1575-1591)*

En 1123, pocos años después de la reconquista de Zaragoza por parte de Alfonso I *el Batallador,* el obispo Pedro de Librana hizo división de los frutos del término de la ciudad para aplicarlos en la dotación y fundación de un cabildo de canónigos. La institución, que en un principio estaba compuesta por personados seculares, adoptó la regla de san Agustín alrededor del año 1139, durante el pontificado del obispo Bernaldo (Espés, 2019, p. 241).

4. La abadía de Montearagón; la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud; el Cabildo Metropolitano de Zaragoza; la colegiata de Santa María del Pilar; y la colegiata de San Vicente de Roda de Isábena.

Desde entonces el cabildo quedó conformado únicamente por los canónigos que habían jurado guardar la regla de san Agustín y haber hecho votos de pobreza, castidad y obediencia al prior. Solamente estos capitulares tenían voz y voto en la institución. Algunos de ellos ostentaban a la vez oficinas, debiendo cumplir con la administración y las obligaciones propias de su oficio[5]. Las dignidades, por el contrario, tenían dotaciones particulares, privativas e independientes de la mensa canonical. Por ese motivo, podían estar ocupadas por eclesiásticos seculares[6]. También los cuatro arciprestes —Zaragoza, Daroca, Belchite y Teruel— que, aunque no estaban considerados ni dignidades ni oficinas, participaban de la vida del coro de la catedral. Su cometido principal era el de ayudar al arzobispo en el gobierno espiritual y material de las cuatro demarcaciones de la diócesis[7].

En este tiempo regular, el número de prebendas canonicales no era fijo y dependía siempre de las rentas disponibles por la mensa común. Los estatutos del obispo Hugo Mataplana disponían que debía ser un número comprendido entre los cuarenta y los cincuenta profesos (Requejo, 1971). Un número que, a finales del siglo XVI y principios del XVII, quedó limitado en los treinta prebendados como máximo. Aunque lo más frecuente era que, con la finalidad de garantizar una buena dotación económica, el número se situase entre los quince y los dieciocho claustrales (Miguel, 2014, p. 667). Después de haber sido elegidos por el cabildo y habiendo pasado un año de noviciado, los canónigos claustrales —de pleno derecho— seguían el mismo modelo de vida común que guardaban los monjes en los monasterios. Era obligación común a todos estos prebendados asistir al coro diariamente para rezar las horas canónicas y concelebrar la misa conventual en el templo catedralicio. A cambio de ello, tenían derecho de percibir las distribuciones y remuneraciones diarias en concepto de alimento y vestuario (Gutiérrez Iglesias, 1980).

Pese a ello, a la altura del siglo XVI, el panorama en el cabildo de la seo de Zaragoza nada tenía que ver con aquel ideal reformador de la regla agustiniana. En muchas ocasiones, el alto clero cesaraugustano no era ejemplo de las virtudes sacerdotales que con tanto afán se intentaban aplicar desde finales del siglo XV en el clero hispano. Los cabildos catedralicios estaban necesitados de una reforma urgente en su organización y sus miembros.

5. Por bula del papa Alejandro III (1162) las oficinas únicamente podían ser ocupadas por clérigos regulares profesos (Espés, 2020, p. 265). El número de oficios fue variando a lo largo del tiempo, según las necesidades de la comunidad. Algunas de ellas fueron: el refitolero, el dormitolero, el subsacristán, el obrero, el caricatero, el enfermero, el limosnero y el capellán mayor.

6. Eran dignidades el prior; el suprior; el sacristán mayor; los arcedianos de Zaragoza, Daroca, Belchite y Teruel; el chantre; el camarero y el tesorero.

7. ACSZ, Armario de Privilegios, letra L. Domingo Pérez, *Libro de las cosas hechas por el capítulo de la seo de Zaragoza y definidas en él desde el año 1543,* fol. 101r.

Por una parte, en el seno de la institución la desigualdad imperaba en sus mecanismos estructurales: el prior se enfrentaba en numerosas ocasiones para defender sus prerrogativas frente a las demás dignidades; las dignidades se negaban a contribuir a la mensa canonical las mensadas que le correspondía a cada una de ellas; y los canónigos claustrales se enfrentaban continuamente contra los eclesiásticos seculares que ocupaban dignidades por el afán de estos de participar en el gobierno de la catedral. El resultado de todo ello eran continuos y grandes litigios que dilapidaban las rentas de la iglesia en la defensa de las prerrogativas de los particulares.

Por otra parte, los privilegios y exenciones jurisdiccionales de la regla provocaron que algunos de los miembros capitulares vivieran parapetados en una vida relajada y disipada, que nada tenía que ver con el ideal del clérigo reformado del siglo XVI. Durante los pontificados de la Casa de Aragón —Alonso (1478-1520), Juan (1520-1530) y Hernando (1539-1575)— se comprueban algunos intentos de reforma del cabildo encaminados a disipar los conflictos internos y eliminar la falta de ejemplaridad de algunos de los sujetos que lo componían (Miguel, 2024, pp. 273-342). Estas reformas se hicieron con especial énfasis durante el gobierno de la mitra de Hernando de Aragón, decidido aplicador de las resoluciones del Concilio de Trento en Zaragoza (Miguel, 2014, pp. 659-675).

Los anhelos de reforma del clero alcanzaron su plenitud con las disposiciones tridentinas, aunque hundían sus raíces en movimientos iniciados durante el siglo anterior. Desde finales del siglo XIV comenzó a hacerse patente la idea de la reforma de la Iglesia en todos sus sentidos. La labor pastoral de Alonso de Aragón y de sus obispos colaboradores se vio impregnada de esta corriente renovadora de la vida eclesial (Elipe, 2023). Durante este tiempo, los cabildos catedralicios comenzaron a ser desplazados del gobierno diocesano. Un hecho que se tradujo en «un repliegue sobre sí mismos, concentrando sus esfuerzos en la defensa de su autonomía frente a los prelados y la corona» (Barrio, 2014, p. 421). Por supuesto, en esta exacerbada protección servía como escudo de los abusos cometidos en el seno de las instituciones catedralicias. En tiempo de Alonso de Aragón se llevaron a cabo varios intentos de reforma, algunos frustrados. La visita de 1496 supuso un punto de inflexión en las relaciones entre el arzobispo y el cabildo. A ello pudo contribuir el compromiso alcanzado entre ambas instituciones años antes y que ponía de manifiesto que, tanto el prelado y sus colaboradores como el capítulo, estaban conformes en reformar algunos aspectos nocivos para la vida catedralicia: la vestimenta, le residencia, las formas de elección o el transcurso de las comidas comunitarias[8]. Como consecuencia de esto mismo, y con la finalidad de evitar las disputas que surgían dentro de la propia institución, Alonso de Aragón llevó a cabo una política de reforma funcional.

8. AAV, Reg. Lat., vol. 878, fols. 20r-31v [23/VI/1489]. Agradezco a Jaime Elipe la referencia y el texto transcrito.

La caricatería mantenía lites continuas contra la corporación capitular por ser la única oficina obligada a contribuir dos mesadas a la pabostría. Por esa razón, el arzobispo erigió la dignidad del tesorero el 8 de marzo de 1489. También aprobó el acuerdo tomado entre el obispo auxiliar Figuerola, el suprior y el cabildo sobre la erección de la fabriquería el 17 de julio de 1510. Y acordó con los canónigos la supresión de la sacristía y la aplicación de sus rentas a la mensa canonical, la reparación de la enfermería y otras necesidades de la corporación en 1511 (Miguel, 2024, pp. 275-282).

El Concilio de Trento culminó estos anhelos reformistas, no sin la consiguiente reacción de los cabildos catedralicios (Fernández Terricabras, 2000, pp. 291-359). Las sesiones finales de la reunión ecuménica trataron de emprender un cambio en la concepción y el comportamiento del clero (Catalán Martínez, 2013). Los sacerdotes se convertían en una *macchina burocratica* con funciones jurisdiccionales, administrativas y policiales (Turchini, 1994). Y, desde el punto de vista beneficial, el proceso de disciplinamiento del clero conllevó la necesidad de reorganizar los beneficios, evitando la acumulación de capitales tan frecuente en la Edad Moderna. Con ello no solamente se conseguía evitar el absentismo clerical, sino unificar oficio y beneficio. La presencia social de los sacerdotes en las comunidades era necesaria como factor de control de las conciencias. Especialmente el de los prebendados catedralicios, modelo y ejemplo del resto de sacerdotes diocesanos.

El concilio hizo hincapié en las cualidades que debían tener aquellos individuos promovidos a las dignidades y canonicatos de las catedrales. Estas prebendas, a ojos de los padres tridentinos, habían sido establecidas «para conservar y aumentar la disciplina eclesiástica» con el objetivo de que sus poseedores «se aventajasen en virtud, sirviesen de ejemplo a los demás y ayudasen a los obispos en su trabajo y ministerio». Para acceder a ellas se establecieron una serie de requisitos: ser mayor de veinticinco años, haber sido ordenado sacerdote, estar en posesión de un título universitario y jurar obediencia al obispo. Mientras que, para la percepción de los frutos, estaban obligados a residir en la catedral durante más de nueve meses al año como mínimo. El decreto recomendaba la asistencia puntual y devota al coro, vestir decentemente y ausentarse de monterías, cazas ilícitas, bailes, tabernas y juegos, «distinguiéndose con tal integridad de costumbres que se les pueda llamar con razón el senado de la Iglesia» (López de Ayala, 1787, pp. 415-420).

Además de ello, se encargaba al obispo la labor de supervisar en todo a los cabildos, especialmente lo relativo a la disciplina clerical. El concilio prohibió que ningún clérigo fuera eximido de la jurisdicción ordinaria, instando a las catedrales a no parapetarse en exenciones, costumbres ni concordias que se opusieran a las visitas de sus prelados. La mayor parte del episcopado hispano entendió que la reforma *in capite et in membris* de la Iglesia, debía pasar por la sujeción de los cabildos a su

autoridad[9]. No en vano, las corporaciones catedralicias, como cuerpos jurídicos y económicos sólidamente arraigados en la mentalidad colectiva del clero diocesano, constituían en ocasiones un menoscabo de la dignidad episcopal. Mientras tanto, las corporaciones catedralicias buscaron en todo momento reducir el impacto de los decretos tridentinos en sus instituciones, aunque no tuvieron el éxito esperado en sus intenciones debido a la colaboración regia con los prelados (Fernández Terricabras, 2000, p. 311).

El encargado de la aplicación de los preceptos reformadores de Trento en el clero de la iglesia catedral de Zaragoza fue Hernando de Aragón (Miguel, 2014, pp. 59-607). En 1548, el nieto de Fernando *el Católico* llevó a cabo una visita de su catedral según el ceremonial. De esta primera visita, y tras la escucha de las súplicas hechas por los racioneros y canónigos, el arzobispo fijó una serie de mandamientos que mejorarían la convivencia entre los prebendados y su estilo de vida. Además de insistir en el cuidado del archivo y de las rentas de la mensa, reguló el orden de sitiales del coro, que tantos conflictos públicos provocaba. Instó al personal de la catedral al cumplimiento de los aniversarios y de la asistencia al coro; expulsó a las sirvientes de la cocina y la pabostría, prohibiendo que hubiera mujeres en las casas del cabildo; favoreció que algunos jóvenes prebendados fueran a estudiar cánones y teología en universidades tan principales como Alcalá y Salamanca; e insistió, por último, en la honestidad de vida que debían de mantener los componentes del cabildo durante las reuniones capitulares, evitando injurias verbales y palabras indecentes (Miguel, 2014, pp. 176-193).

La inadaptación de la vida capitular con los ideales de la regla agustiniana y la falta de ejemplaridad estaban a la orden del día en la seo. Tanto que algunos capitulares violaban el voto del celibato. El incumplimiento de la regla era tan notable que el arzobispo quería seguir reformando y corrigiendo al clero catedralicio. Se encontró, sin embargo, la oposición de los priores y algunos miembros del cabildo que defendían a capa y espada la autonomía jurídica que les confería el carácter regular de la institución. Las primeras desavenencias fueron encabezadas por el prior Juan Ortal (1527-1547), que lideró la oposición de la visita pastoral en 1545, saldándose con dos canónigos expulsados por desobedientes y una concordia con el prelado.

A partir de entonces, la táctica de Hernando de Aragón consistió en introducir hombres de su confianza en las filas canonicales. En una primera elección nombró a personas de alta cualificación, como Antonio Melendo, Antonio Fortanet y Domingo Pérez. Eso conllevó un enfrentamiento directo contra el prior Lupercio

9. Un estudio colectivo reciente sobre la influencia del humanismo y la aplicación del Concilio de Trento en la reforma de la catedral de Valencia (Callado Estela, 2022-2025).

Ortal (1548-1572), afanoso por patrimonializar el priorato en manos de su familia[10]. Él, como otros muchos del cabildo, llevaban una vida disipada y poco ejemplar: se les acusaba de no vivir *intra claustrum*; de intentar castigar a algunos canónigos fieles al diocesano; de derrochar los bienes catedralicios en un pleito; y de intentar usurpar al arzobispo su jurisdicción y capacidad de elección de nuevos canónigos.

Los desencuentros se sucedieron hasta que Pío V facultó al prelado para visitar y corregir a los canónigos exentos a través del breve *Cum Semper* de 1567. El papel del arzobispo quedó reforzado tras varias sentencias rotales que permitían al prelado elegir seis canónigos de su simpatía en 1568: Juan Albarado, Lope Albero, Bartolomé Tello, Agustín Pérez, Pedro Morcat y Pedro Cerbuna. Todos de amplísima formación y muy comprometidos con la causa tridentina.

La valoración de estos conflictos y su resolución, en palabras de Isidoro Miguel, dejaban la puerta abierta a la reforma: «el problema de fondo no era solo un enfrentamiento de personas (obispo/prior) ni siquiera de instituciones (curia diocesana/cabildo catedralicio), sino algo más importante: una lucha de principios, en la que subyacía una nueva eclesiología» (Miguel, 2014, p. 696).

El 27 de mayo de 1575, pocos meses después de la muerte de Hernando de Aragón, el prior Pedro Cerbuna y el cabildo enviaron a su agente en Roma, Pedro de Luna[11], un informe con el estado de la catedral cesaraugustana para solicitar a la Santa Sede la concesión de la secularidad[12]. Este memorial supone el primer intento de abandono de la regla de san Agustín y es llamativo en dos sentidos. En primer lugar, porque sugiere que, durante los últimos años del pontificado de Hernando de Aragón —quizás tras la muerte de Lupercio Ortal— surgieron en el propio cabildo algunos anhelos de secularización, quizás como medio para alcanzar la reforma ambicionada. Trento no se podría aplicar en el cabildo sin su secularización. En segundo lugar, es sugerente que el envío del informe se realice meses después de la defunción del último prelado del linaje Aragón. Esto nos hace plantearnos algunas preguntas sobre su naturaleza: ¿Era una iniciativa únicamente desde los miembros del cabildo y para ellos mismos? ¿Era la sede vacante, con Cerbuna a la cabeza, el momento oportuno para promover la causa de la secularización sin la influencia directa de un prelado? ¿Qué motivaciones habría tras ello? No podremos resolverlo hasta que, en futuros estudios, no lo analicemos detenidamente.

10. Los Ortal formaban parte de la élite mercantil y ciudadana de Zaragoza, constituyéndose en una de las principales familias que controlaron el cabildo de la seo durante la centuria del Quinientos. Para ver el papel *in extenso* de ambos priores (Oliván, 1966, pp. 94-138).

11. Probablemente se trate del mismo Pedro de Luna, deán de Huesca, que hace testamento en Roma el 8 de octubre de 1589. ASCR, Archivio Urbano, Sezione I, vol. 606, fol. 202r-ss.

12. ACSZ, *Libro de cartas de 1567-1580,* s/f. Transcrito por en Miguel García 2014, pp. 1013-1016.

Comienza el informe de 1575 insistiendo en que la catedral de Zaragoza en su origen estaba compuesta de clérigos seculares. Esto suponía una fuerte baza en el argumento de conseguir la secularización, por cuanto —decían los canónigos— «Toledo era reglar, Tarragona, Lérida, Tarazona y otras muchas, y se han hecho seculares habiendo sido su primera institución reglar y no como esta, que fue antes secular».

El que la sede de Zaragoza fuera regular provocaba una serie de contradicciones en el seno capitular que no hacían sino menoscabar el culto divino y la aplicación del Concilio de Trento en dicha iglesia. En primer lugar,—siguen argumentando los prebendados— la incapacidad de poseer bienes, comer en el refectorio y dormir en el dormitorio se guardaba poco y mal desde hacía tiempo. Prácticamente la totalidad de los canónigos, que solían ser en torno a quince, vivían fuera del claustro de la catedral y administraban sus propios bienes como si fueran clérigos seculares. En segundo lugar, las condiciones de la regla de san Agustín eran la causa de que muchos jóvenes reusaran a profesar en el cabildo cesaraugustano, especialmente «los hijos de señores y caballeros». En tercer lugar, las elecciones de nuevos canónigos eran una causa de enfrentamiento constante con los arzobispos, pese a que a la hora de ingresar en las filas canonicales hacían voto de obediencia al ordinario. También la situación de que el papa y el arzobispo hacían nombramiento de clérigos seglares para ocupar algunas dignidades y oficinas reservadas a los canónigos profesos originaba un ambiente de crispación entre unos y otros, especialmente en lo relativo a algunas preeminencias con respecto a los sitiales del coro. Por último, a este choque entre dignidades y canónigos se sumaba la desigualdad económica existente entre unos y otros: «todo el peso del trabajo de la iglesia [lo] llevan los canónigos, y es gran miseria (...) que el prelado tenga cincuenta mil escudos de renta y las dignidades sean muy ricas y los canónigos, que tienen todo el trabajo, tengan tan poco».

Ante esta situación, el informe que debía ser expuesto por Pedro de Luna ante el papa Gregorio XIII da una serie de razones para convencer al pontífice de la urgencia de secularizar a la iglesia cesaraugustana. Se comienza arguyendo que, con los medios económicos que disponía el cabildo, los canonicatos podrían aumentar hasta los veinte. Sin embargo, su valor no ascendería a más de trescientos escudos de renta anua, por eso propone una serie de remedios para aplicar a la mensa común. Estos consistían en la supresión de algunos oficios —caricatería, enfermería, limosnería y obrería— y de los cuatro arciprestes que «de nada sirven a la iglesia ni tienen cargo ni oficio ni ministerio alguno» y valdrían de ochocientos a mil escudos anuales cada uno. El prior y canónigos argumentan que los actuales poseedores consentirían su supresión y más si se les concediera un canonicato *a posteriori*[13]. En caso de que esto

13. Algunos de los poseedores eran: Pedro Hervás, camarero; Lupercio II Ortal, enfermero; Rodrigo Zapata, limosnero; Gil de Luna, obrero; y Jerónimo Sora, arcipreste de Zaragoza.

no fuera posible, Cerbuna y el resto de los prebendados solicitaban la aplicación de las vacantes de todas las piezas eclesiásticas del arzobispado. También planteaban la posibilidad de suprimir algunas raciones que, por su poco valor, se aplicaban a criados y ministros —cocinero, dormitolero y refitolero— y la aplicación de otras distribuciones menores, como las dotaciones antiguas del refectorio que consistían en dar de comer a aquellos canónigos que rezaban misas por algunos fundadores.

Una de las razones de peso que presentan al papa para intentar influir en su decisión es la cuestión de las canonjías de oficio. En la catedral de Zaragoza, durante el tiempo de la regularidad, no existió ninguna prebenda de oficio, al igual que ocurría en otras iglesias de la Corona de Aragón (Callado Estela, 2019)[14]. En el informe que tratamos se plantea la necesidad de convertir tres de las veinte prebendas en doctoral, penitenciario y magistral —«como en Castilla»—. Además, con la secularización de la iglesia, el papa ganaría la provisión de las nuevas canonjías y dignidades en los ocho meses apostólicos que le reservaba el Concilio. Una razón de peso para que el papa aceptara el plan de secularización. Mientras, el propio cabildo y el arzobispo como si fueran uno, harían lo propio en los otros cuatro meses que le pertenecían al ordinario, en perjuicio de este último —no olvidemos que se plantea en una sede vacante—. Y para evitar situaciones de conflicto entre ambas instituciones, «sería mejor que la provisión de los canónigos en los meses que no son del papa fuese del cabildo solo, y la de las dignidades y oficios del arzobispo solo, o al revés».

En caso de que el papa diera el visto bueno a la nueva planta del cabildo, el prior y canónigos recordaban a su agente en Roma, Pedro de Luna, que quedarían tres puntos para tratar. El primero giraba en torno a la jurisdicción del propio cabildo, que según la sesión XXV de Trento, quedaría sujeto al arzobispo, aunque todavía estaban pendientes los litigios rotales con el difunto Hernando de Aragón. El segundo hacía hincapié en la situación política del nuevo deán que, como estaba insaculado en las bolsas del reino, debían reservarle los mismos derechos que poseía el antiguo prior. Y, finalmente, la negociación de la situación religiosa de aquellos que debían secularizarse. Sabiendo que no podían dejar de ser regulares solicitaban más libertad en «lo que toca a la jurisdicción, tener propio, poder resignar nuestros beneficios y tener otros de nuevo y pensiones». En definitiva, reclamaban poder actuar con libre conciencia como los clérigos seculares, aunque hubieran hecho voto de pobreza.

Este informe supone el primer testimonio localizado de la voluntad del cabildo catedral de Zaragoza para hacerse secular. A partir de entonces se inició un proceso que duró casi treinta años y que se consumó en 1604 con la bula *Reductionis* de Clemente VIII. Sobre las verdaderas causas de la secularización hubo alguna

14. En el año 1589 se planteó la posibilidad de suprimir parte de los frutos de la camarería y aplicarlos en la erección de las cuatro canonjías de oficio conforme a las bulas de Sixto V para las iglesias de Castilla (Aznar Recuenco, 2011, p. 259).

discrepancia entre los historiadores de la época. Y esto nos permite hacernos una pregunta: las causas de la secularización de la iglesia de Zaragoza ¿fueron un hecho político o religioso?

El canónigo zaragozano Vicencio Blasco de Lanuza defendió que las únicas causas que motivaron la mudanza del estado de la iglesia atendían únicamente a intereses de la reforma. Señala el inicio del proceso en la vacante de Hernando de Aragón (1575-1577) y parece que copia parte del informe que hemos descrito con anterioridad al decir que las causas principales eran: «[que] muchas personas importantes y principales dudaban de profesar la vida regular; y los regulares vivían en casas particulares y con solo roquete blanco por hábito. Y en la manera de gastar sus rentas como los seglares, con quien habían de estar comunicar continuamente». Por estas razones, «era cosa dificultosa conservarse el estado reglar con la decencia debida» (Blasco, 1622, p. 409). Sin embargo, Antonio Herrera, cronista mayor de Castilla, a quien Blasco de Lanuza acusaba de hablar «en gran perjuicio de este reino» (Blasco, 1622, p. 409), no compartía la visión del prebendado aragonés. Herrera no pierde tiempo en relacionar la rebelión aragonesa de 1591 como móvil del ánimo de Felipe II en apoyar la causa de secularización del cabildo zaragozano[15]. Dos visiones contrapuestas de dos personas con intereses y naturalezas diversas: un castellano laico y un aragonés eclesiástico. Es probable que esas realidades e intereses distintos hicieron que ambos autores se centrasen en unas causas o en otras.

Lo cierto es que, si nos atenemos a las fuentes consultadas en el Archivo Capitular de Zaragoza, el Archivo Histórico Nacional y el Archivio Apostòlico Vaticano, ambos historiadores estaban en lo correcto. Por eso, en nuestra exposición, hemos dividido los treinta años que dura el proceso de secularización en dos grandes fases atendiendo a las causas principales. La primera fase se inicia en la vacante de Hernando de Aragón y finaliza en las cortes de Tarazona de 1592, es la fase de la *secularización religiosa*. La segunda fase tiene que ver con la politización del negocio por parte de Felipe II, por cuanto veía en él un medio capaz de ser aprovechado para desplegar su política interior en Aragón. Es la fase más amplia, iniciándose en 1592 y prolongándose hasta la toma de posesión de los nuevos canónigos en 1605. La causa de esta dilatación temporal se entiende por el choque de intereses y negociaciones consiguientes entre el papado, la monarquía, el arzobispo de Zaragoza y los canónigos cesaraugustanos en razón a las formas de secularización.

El 5 de julio de 1579, el arzobispo Andrés Santos hizo su entrada triunfal en la ciudad de Zaragoza. Este episodió marcó el inicio de un pontificado caracterizado

15. «Y por quitar ocasiones a los eclesiásticos de entremeterse en cosas seglares (...), como se vio en la pasada alteración, pareció cosa necesaria que la Iglesia Metropolitana de Zaragoza (...) se hiciera secular. El rey envió a don Francisco de la Cueva, arcediano de Daroca, a Roma a suplicar al pontífice que lo tuviese por bien, y así lo concedió» (Herrera, 1612, p. 407).

por la implantación de la política tridentina en el espacio diocesano zaragozano (Aznar Recuenco, 2016). A él se debieron, sin lugar a duda, los primeros intentos de secularizar el cabildo catedral de Zaragoza. Es probable que las desavenencias existentes entre el prelado y la corporación canonical desde el inicio del pontificado provocasen la paralización de las negociaciones. Las discordias entre ambas figuras giraron en torno a la implantación de las disposiciones tridentinas en las cuestiones litúrgicas de la catedral: «la catedral se vio fuertemente mermada por los presupuestos de Andrés Santos, un prelado educado en el celo tridentino y, por tanto, un enérgico reformador de los excesos eclesiásticos» (Aznar, 2016, p. 181).

La inasistencia de algunos prebendados a las ceremonias pontificales fue motivo de desencuentro constante, por cuanto el arzobispo, siguiendo lo dispuesto en el capítulo 12 de la sesión XXV del Concilio de Trento, creía que los canónigos tenían la obligación de asistirle en las ceremonias, mientras que los prebendados canonicales argumentaban que únicamente cumplirían lo establecido por el ceremonial propio de la catedral. Otras situaciones de conflicto se dieron, por cuestiones de preeminencias, en las procesiones y actos ceremoniales. E, incluso, en la toma de posesión de los nuevos canónigos creados en 1579 de mutuo acuerdo entre el arzobispo y el cabildo cesaraugustano (Aznar, 2016, pp. 181-192)[16]. Ante esta situación de estancamiento, Andrés Santos instaba a Felipe II a interceder en su favor ante el papa Gregorio XIII en vísperas de las Cortes de Monzón de 1585:

> El modo de vivir [de los canónigos] es muy peligroso, porque no cumplen lo que profesan. Y en la reformación se presentan tantas dificultades que parece imposible según el presente estado. Con hacerles seculares se allanaría todo[17].

Suponemos que la repentina muerte de Andrés Santos, el día 13 de noviembre durante las Cortes de 1585, truncó cualquier posibilidad de reforma del cabildo. La secularización viviría una situación de *impasse* motivada, en nuestra opinión, por la crisis finisecular del reinado de Felipe II, la larga sede vacante de la diócesis de Zaragoza (1585-1587) y la sucesión de breves pontificados que mantuvieron la curia romana en un estancamiento administrativo notable.

16. Los nuevos capitulares tomarían especial relevancia en las negociaciones de la secularización. Estos fueron: Gabriel Ciria, Diego Monreal, Juan Romero, Martín Terrer, Marco Antonio Servet, Pascual Mandura, Juan López, Pedro Torrellas y Miguel Violarte. ACSZ, *Memorias para la Historia de la iglesia metropolitana de Zaragoza*, núm. 2, fols. 1r-3v.

17. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 149, núm. 272 [Carta del arzobispo de Zaragoza al rey, 29/III/1585].

1.2. *La politización de la secularización del Cabildo Metropolitano de Zaragoza (1592-1604): una consecuencia de la rebelión aragonesa de 1591*

La politización de la secularización de Zaragoza estuvo motivada por dos razones. La primera devenía de la política que llevó Felipe II en lo relativo a la aplicación del concilio como forma y herramienta para el desarrollo de un mayor control de las estructuras socioeconómicas de la sociedad hispana de la Edad Moderna (Fernández Terricabras, 2000). La segunda fue la participación del clero catedralicio en la rebelión aragonesa de 1591[18]. El proceso fue tan dilatado en el tiempo que abarcó todo el pontificado de Clemente VIII y buena parte del reinado de Felipe III (1598-1621). La característica principal de esta fase será, sin atisbo de duda, el continuo choque de intereses entre las partes implicadas en el negocio, lo que provocó algunas situaciones de atasco en las negociaciones. Como llegó a afirmar Pedro Cosida: «este negocio de nuestra iglesia no lo entiendo, porque tiene más intercadencias que pulso de hombre enfermo»[19].

Parece ser que durante el pontificado de Andrés de Bobadilla se formó una comisión de dos canónigos —Diego Monreal y Martín Terrer— para tratar el asunto de la secularización con el ordinario. Sobre lo acordado en la junta, se mantenía una comunicación constante con el procurador en Roma, Pedro Cosida, y con el auditor de la Rota Francisco Peña, a la sazón arcediano de Zaragoza. Sin embargo, la rebelión aragonesa de 1591 interrumpió totalmente el buen curso de las cosas. Los canónigos de la seo zaragozana tuvieron especial protagonismo en el conflicto aragonés: unos en defensa de las prerrogativas forales aragonesas, otros con una actitud mucho más prudente ante los ojos de Felipe II. De los estudios mencionados se aprecia una división del cabildo en esos dos bandos. Entre los primeros destacaron, sin duda, el prior Vicencio Agustín y los canónigos Pedro Torrellas, Juan López y Pascual Mandura.

Vicencio Agustín (1565-1594) fue la cabeza visible del grupo de sediciosos de la catedral. Era miembro de una destacada familia aragonesa al servicio del rey y de la Iglesia, siendo sobrino-nieto del obispo de Huesca Pedro Agustín y del arzobispo de Tarragona Antonio Agustín. Tomó la silla prioral en 1587 mediante un breve papal. Diversas fuentes y testigos le acusaban de sedicioso, dirigiendo y organizando algunos motines populares e interviniendo, de palabra o por escrito, en las reuniones de los contrarios a Felipe II. El 31 de octubre de 1591 presentó una recuesta a la Diputación solicitando la oposición de la entrada de las tropas regias en Aragón, concluyendo que, incluso, las armas fueran entregadas a la propia Diputación en caso

18. Sobre este asunto se han elaborado varios trabajos: Royo García, 1992 y Gascón Pérez, 2010, pp. 505-520.

19. ACSZ, *Correspondencia recibida, 1600-1610* [cartas de Pedro Cosida, 5/X/1601 y 20/XI/1601].

de entrar los soldados afines al rey en territorio regnícola (Gascón Pérez, 2010, p. 210). Finalmente, sería apresado el 7 de enero de 1592. Por su parte, Pedro Torrellas, fue uno de los canónigos nombrados en 1579 por Andrés Santos. Era natural de Zaragoza y miembro de una familia de la mesocracia ciudadana. En 1588 fue rector de Zaragoza y en 1590 diputado por el brazo eclesiástico. Un anónimo le acusó de ser muy apasionado de Antonio Pérez. Murió en 1592 recluido en la Aljafería por ello (Gascón Pérez, 2010, pp. 513-514). Otros eclesiásticos del entorno de la seo, pero sin ser parte activa del cabildo —racioneros y beneficiados, mayormente— también fueron acusados de sedición contra el rey con penas pecuniarias y destierros por su colaboración con Antonio Pérez (Royo García, 1992).

Los que compusieron el segundo grupo, con una actitud mucho menos levantisca y más pacificadora fueron Diego de Monreal, Martín Terrer y Gabriel Sora, en sintonía con el arzobispo Andrés Bobadilla. Especialmente el primero, que fue el síndico del cabildo en la corte para solicitar el perdón regio (Gascón Pérez, 2010, pp. 345-351).

A diferencia del primer grupo de canónigos, las carreras de estos tres no fueron truncadas a consecuencia de su actuación en 1591. Los tres fueron destinados a varias sedes aragonesas. Diego de Monreal (1543-1607) nació en Zaragoza, estudió en Salamanca, fue visitador general de Segovia y Cuenca bajo la protección del obispo Covarrubias. En 1579 accedió a una canonjía en Zaragoza. En 1592 fue promovido al obispado de Jaca y en 1594 se trasladó a Huesca, donde llevó siempre una labor reformadora, favoreciendo la implantación de los capuchinos y de los jesuitas en la última ciudad. Murió siendo diputado del Reino en 1607 (Latassa, 1799, pp. 65-66). Martín Terrer (1549-1631) era natural de Daroca, estuvo siempre al servicio de Alonso Gregorio, que le hizo canónigo de Teruel. En 1579, le promovió a una canonjía en Zaragoza, donde también fue examinador sinodal y canciller de Competencias (1589-1593). Actuó como diputado y asistió en las Cortes de Tarazona (1592). Por su labor política, fue preconizado obispo de Albarracín (1593), de Teruel (1596), de Tarazona (1614) y de Zaragoza (1630) (Latassa, 1799, pp. 451-452).

Por último, Gabriel Sora (1550-1622) fue el último canónigo regular de la iglesia de Zaragoza. Desempeñó algunos servicios para la Inquisición de Aragón, fue rector de la Universidad, comisario de la Cruzada y canciller de Competencias. Debió sus estudios a Zaragoza, Alcalá y Lérida, siendo doctor en cánones. En 1618 tomó posesión de la sede episcopal de Albarracín como premio a sus servicios, donde murió en 1622 (Latassa, 1799, pp. 316-319).

Según nos narra Blasco de Lanuza, Martín Terrer no fue el único prebendado que estuvo en Tarazona en 1592, en el transcurso de las Cortes acudieron los canónigos Pascual Mandura y Juan López a tratar de la secularización con el arzobispo Andrés Bobadilla. Sin embargo, el prelado falleció en agosto de 1592, dejando el negocio sin terminar. Es natural que el rey Felipe II quisiera aprovechar la idea de la

secularización en su favor y, por eso, lo retomaría con el nuevo arzobispo, Alonso Gregorio (†1602). Este eclesiástico estuvo al servicio de Andrés Santos y Andrés Bobadilla como vicario general, por lo que tenía un conocimiento directo y empírico de la diócesis zaragozana, su clero y su cabildo catedral. En 1591 fue promovido a la diócesis de Albarracín. En su largo pontificado se dieron los primeros pasos y las primeras discordias sobre cómo debía hacerse la secularización de la catedral y en qué manos debía permanecer el patronato de sus prebendas.

Durante los meses que duró la sede vacante y, tras la clausura de las Cortes de Tarazona en diciembre de 1592, el parecer de algunos canónigos había cambiado con respecto al modo de secularizar la iglesia, quizás influenciados por las pretensiones de Felipe II de hacerse con el patronato y la provisión sobre todas las prebendas de la Iglesia. Ante esta situación, el propio arzobispo escribió una carta al papa a favor de mantener la regularidad de la Iglesia. Denunciaba ante el papa que la idea de la secularidad había sido promovida por «algunas personas de esta ciudad, movidas más de su interés (...) que del servicio de Dios» y que con ello «habían persuadido a los ministros de Su Majestad conviene mucho hacer esta iglesia secular, sin tener consentimiento del capítulo ni mío». En la misma misiva, fechada en julio de 1593, el arzobispo denuncia que han llegado a sus oídos que el rey suplicaba «el patronazgo de todas las provisiones de la iglesia», hecho que entendía que iba «en notable perjuicio y desautoridad de esta dignidad»[20]. El arzobispo Alonso Gregorio tomó la iniciativa de encargar a Diego Espés un informe histórico sobre la implantación de la regla de san Agustín y el derecho de patronato regio[21]. También, tras conocerse las intenciones de Felipe II, el cabildo se dividió en dos bandos. Algunos canónigos —Ortal, Mandura, Revés y López— se apartaron de la decisión de secularizar la iglesia bajo el patronato regio y que procurarían estorbar las intenciones de Felipe II, «diciendo públicamente que se gastase cuanto fuese menester, tomando por motivo que, habiendo de nombrar Su Majestad los canónigos, nunca serían sino hijos de ministros y criados suyos». De entre todos los opositores, destacó el canónigo Juan López[22]. El único que permanecía fiel al rey era Gabriel Sora, «que no consentía se hiciese diligencia alguna contra la voluntad de Su Majestad, pues se habría de creer

20. AAV, *Segr. Stato, Spagna*, vol. 41, fol. 147r Carta del arzobispo de Zaragoza al papa [20/VII/1593].

21. ACSZ, Alm. 2, caj. 6, lig. 1, núm. 17, ff. 47r-54v. Para más detalle sobre esta obra en: (Miguel y Casabón, 2019, pp. LII-LVI).

22. «Quien más se ha declarado en esto de los del cabildo y ha hablado con harta libertad, procurando reducir los actos a su opinión, es el canónigo López, el cual tomaba su cargo todas las cartas y memoriales que se han escrito sobre ello, acostumbrando a hacerlo siempre el secretario del cabildo, y se dice que particularmente ha escrito el dicho canónigo López al cardenal de Toledo y a otros para procurar este negocio». AHN, Consejos, leg. 19 196-1. *Relación de lo que ha pasado en el negocio que se trata de hacer secular la iglesia metropolitana de la seo de Zaragoza* [5/VIII/1593].

que cuando ponía la mano en ello era lo que más convenía», y por eso había enviado varios memoriales a los ministros del rey con la orden y forma que debía tomar la iglesia en su secularización[23]. Los canónigos y el arzobispo hacían caso omiso de Sora y siguieron comunicándose con su agente en Roma, Pedro Cosida, «para que no se haga la secularidad o que no se le quite [al arzobispo y al cabildo] la provisión de los canonicatos». También enviando memoriales al Supremo de Aragón y conde de Chinchón[24]. Las dignidades, que se juntaban en casa del chantre «para estorbar la secularidad», fueron convencidas por el arcipreste de Daroca, Francisco de la Cueva, de que «la secularidad que se tocaba no se les hará perjuicio a ellos» y no siguieron con su oposición[25].

El arcipreste Francisco de la Cueva (†1616) fue una pieza clave en todo el proceso de secularización, especialmente desde el punto de vista de la consecución de las intenciones reales. Fue enviado a Roma por Felipe II en los últimos días de agosto de 1593 para actuar como agente personal de la causa, con un salario estipulado en 5.500 reales anuales[26]. No sabemos si era natural de Burbáguena o de Daroca, en cualquiera de los casos, provenía de una familia de infanzones y, durante su estancia en Roma, permaneció bajo la protección de Alejandro Centurión, arzobispo de Génova, de la casa de los marqueses de Estepa y embajador ante la Santa Sede[27]. A él le correspondía establecer una comunicación constante con las autoridades del Consejo Supremo de Aragón.

Para acallar las discrepancias internas, Felipe II envió una carta al cabildo el 24 de enero de 1594, diciendo que el asunto de la secularización era «conveniente para el servicio de Nuestro Señor, autoridad de esa iglesia y beneficio universal del reino». Y que tan solamente le movían esos deseos. Mientras que el cabildo respondió que creían necesario hacerles partícipes de los propósitos regios, por cuanto «hasta ahora no se nos ha dicho cosa alguna ni sabemos el designio que Vuestra Majestad ni las razones que hay para quitar la regularidad». Los canónigos seguían mostrándose desconfiados en los verdaderos motivos que tenía Felipe II en promover la secularización. Y más cuando entendían que el cabildo tenía un número suficiente

23. AHN, *Consejos*, leg. 19 196-1. *Relación de lo que ha pasado…* [5/VIII/1593].

24. El conde de Chinchón era Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla (†1608), tesorero general de la Corona de Aragón, mayordomo de la Casa Real y consejero de Estado, Guerra, Aragón e Italia. Era hermano del arzobispo Andrés de Bobadilla (Blasco, 1622, p. 409).

25. AHN, *Consejos*, leg. 19 196-1. *Relación de lo que ha pasado…*[5/VIII/1593].

26. ACA, *Cancillería*, *Registros,* núm. 4.320, fol. 136r; núm. 4.321, fol. 155; núm. 4.322, fols. 78, 132, 218, 285; núm. 4.323, fol. 21.

27. AHPNZ, Juan Moles, 1616, fols. 563r-569r [9/IX/1616]. Algunos historiadores han vinculado erróneamente la filiación de Francisco de la Cueva con la familia del cardenal Bartolomé de la Cueva y el linaje de los duques de Alburquerque (Arigita Lasa, 1899, p. 27).

de prebendados que vivían conforme a las costumbres y atendían con cuidado y puntualidad el culto divino en la ciudad[28].

A la altura de 1596 el negocio estaba completamente paralizado por la oposición del arzobispo y de la mayor parte del cabildo catedralicio, enfrentados a los intereses del rey. Probablemente, en respuesta de este enfrentamiento y como medio de presión para agilizar las negociaciones, Felipe II vetó el nombramiento de nuevos prebendados. Y, además, el duque de Sesa continuaba influyendo en la voluntad del papa Clemente VIII a través de su sobrino, el cardenal nepote, Pedro Aldobrandini (1571-1621). El papa parecía estar indeciso entre las tres opciones que se planteaban de acabar con el negocio de la secularización de Zaragoza: la primera era haciendo que las dignidades y canonicatos fueran electivos; la segunda opción era conceder al rey el patronato de tres dignidades, seis canonicatos y seis raciones; y la tercera consistía en respetar los ocho meses apostólicos para el papa y los cuatro del ordinario se dividiesen entre el rey y el arzobispo. El duque de Sessa, embajador en Roma, insistía en las razones que tenía Felipe II para ampliar su real patronato sobre cualquier prebenda de Aragón por ser

> necesario medio (...) para poder mejor conservar Su Majestad aquel reino quieto en su obediencia y de esta Santa Sede, sabiéndose la autoridad de las personas eclesiásticas tienen en las Cortes y gobierno temporal (...) y ser visto bien en las alteraciones pasadas la inquietud y daños que han causado algunas personas eclesiásticas de calidad, poco aficionadas al servicio de Su Majestad y bien público. (...) Y así debe suponer Su Santidad por cosa cierta que, el día que la iglesia de Zaragoza se secularizase y las provisiones tocaren a la Sede Apostólica y al ordinario resultaría de muy grande inconveniente para la quietud y gobierno temporal por ser aquella nación muy libre. Y más lo serían los eclesiásticos no teniendo obligación y dependencia alguna de Su Majestad[29].

Consciente de ello, el arzobispo Alonso Gregorio escribió dos cartas muy aireadas en contra de la pretensión regia. Lo hacía «lastimado de ver la necesidad en que nos tiene Su Majestad, impidiendo la elección de canónigos, no habiendo más de cinco y solos tres de provecho en una iglesia tan principal como esta donde hay tanto en que entender». Las razones de solicitar que, si el papa tenía a bien secularizar la iglesia, lo hiciese sin darle el patronato al rey porque de hacerlo según la conveniencia real «no habrá en el mundo prelado más desautorizado ni menos respetado de sus capitulares que el de Zaragoza, porque a cada cosa que se les mande pretenderán ser en perjuicio del rey (...) y no se hará a derechas cosa que importe»[30].

28. ACSZ, *Memorias para la Iglesia…,* s/f.
29. AAV, *Segr. Stato, Spagna*, vol. 41, fols. 372r-373r.
30. AAV, *Segr. Stato, Spagna*, vol. 41, fol. 246r-246v Carta del arzobispo de Zaragoza al papa [Zaragoza, 27-I-1597].

Pese a esas instancias, el arzobispo Gregorio parecía pecar de prudencia cuando, desde 1593, no había escrito al papa «por haberse resentido de ello Su Majestad»[31].

Los canónigos de Zaragoza —quedaban pocos: Madura, Morera, López y Sora— aprovecharon la muerte de Felipe II (13/IX/1598) para escribir al Consejo de Aragón un memorial para hacer elección de nuevos canónigos de la manera acostumbrada[32]. Lejos de desinteresarse por el asunto de Zaragoza, Felipe III (1578-1621) instó al duque de Sessa a proseguir los negocios de una manera mucho más beligerante frente a la indecisión del papa Clemente VIII[33]. En junio de 1599, Felipe III escribió una carta a la Diputación del Reino para advertirles que, de vuelta de su boda en Valencia, pasaría por Zaragoza para congregar a las Cortes y jurar los Fueros del reino en la catedral. El nuncio del papa, Camillo Gaetani (1552-1602), escribía al cardenal nepote que también él se acercó a la capital de Aragón con «eccessivo travaglio per il caldo estremo di questi giorni canicolari et per le molte encomoditá et disagi patiti nel viaggio». Partió de Barcelona el 12 de julio y llegó a Zaragoza el 29 de ese mismo mes, alojándose en la casa del camarero, dignidad de la seo[34]. Los recién esposados reyes, Felipe III y Margarita de Austria, llegaron a Zaragoza un mes y medio después, el 11 de septiembre de 1599 (Blasco, 1622, pp. 398-405). Para entonces, el nuncio habría allanado algunos caminos relativos a la secularización de la iglesia cesaraugustana. Porque, aunque el rey no convocó las Cortes al final, sí que visitó al arzobispo Gregorio y al Cabildo Metropolitano de la seo ¿Quizás para llegar a un acuerdo sobre el patronato de la catedral? No podemos determinarlo, aunque sí es llamativo el episodio que describe Blasco de Lanuza sobre la bienvenida del cabildo al rey. El 15 de septiembre, cuatro canónigos y doce racioneros llegaron al palacio episcopal a saludar a las personas reales. El arzobispo Gregorio presentó individualmente a los cuatro canónigos y Pascual Mandura, como prebendado más antiguo, elevó un razonamiento que fue transcrito años después por Lanuza. En él el cabildo se ofrecía como propiedad del rey y agradecía la promoción del canónigo Juan López como prior de la abadía de Montearagón (Blasco, 1622, p. 402)[35].

31. AAV, *Segr. Stato, Spagna*, vol. 41, fol. 247r. Carta del arzobispo de Zaragoza al papa [Mallén, 5-XI-1596].

32. ACSZ, *Memorias para la historia…,* s/f.

33. AAV *Segr. Stato, Spagna*, vol. 52, fols. 347r-347v Copia de la carta de Felipe III al duque de Sessa sobre el patronato real de Zaragoza [San Martín de la Vega, 22/I/1599].

34. AAV, *Segr. Stato, Spagna*, vol. 52, fols. 311r-315r. Carta del nuncio Gaetani sobre el viaje a Zaragoza [Zaragoza, 31/VII/1599].

35. No debemos olvidar que, tanto Pascual Mandura como Juan López eran los canónigos más belicosos contra las pretensiones del rey Felipe II en 1593 y 1594. Juan López era natural de Hecho. Había sido comisario de la Santa Cruzada, regidor del Hospital de Gracia y consultor de la Inquisición. Murió siendo abad el 25 de septiembre de 1614 (Gómez Zorraquino, 2017, p. 543). ¿Era esta una estrategia real para *quitarse* a uno de sus grandes opositores en el tema de la secularización? En el papel nunca lo veremos así.

Aprovechando la estancia del rey, se desarrollaron una serie de juntas en el convento de santo Domingo para llegar a algún acuerdo entre las partes. Estaban formadas por el nuncio Camillo Gaetano, el confesor del rey fray Gaspar de Córdoba, el arzobispo Alonso Gregorio, el vicecanciller Diego Covarrubias, y el arcipreste Jerónimo Sora (Blasco, 1622, p. 408). A esta nómina aportada por Blasco de Lanuza, debemos sumar la figura del marqués de Denia —duque de Lerma—, valido del rey[36]. Gracias a la relación que envió Gaetani al cardenal nepote sabemos cómo se desarrollaron dichas juntas y cuáles fueron los puntos principales que se trataron: el primero versaba sobre el debate existente sobre el punto de mantener la regularidad o hacer la iglesia secular. El nuncio Gaetani se mostró «constantissimo in defendere la regularitá», que era la opción que más convencía al papa. Sin embargo, el confesor real, fray Gaspar de Córdoba, se votó en contra alegando que era un abuso y un desorden que en un mismo coro convivieran clérigos regulares y seculares y que, además, en su principio la iglesia zaragozana era secular.

El segundo tema de las juntas giró en torno al *ius patronato* de las prebendas: el arzobispo se mantuvo contrario a que el rey tuviera el patronato universal sobre el templo del Salvador, mientras que los ministros regios defendían que el rey «si sarebbe contentato di una cosa giusta senza pretendere piu che tutta la collatione fatta fuesse sull'arcieviscovo». A ojos del nuncio, el arzobispo cambiaría su postura al comprobar que el nuevo cabildo estaría sujeto a él sin exenciones ni privilegios.

Parece ser que la junta se decantó por la secularización como única vía posible (Blasco, 1622, p. 409). Y, en ejecución de ello, Jerónimo Sora fue enviado a Valladolid para facilitar el modo y la nueva traza de la iglesia[37]. De estas negociaciones, Pedro Cosida, ahora como agente regio en Roma, entregó al cardenal nepote un memorial elaborado por orden de Felipe III con las razones de secularizar la iglesia y la traza de cómo había de quedar (Aznar, 2011, p. 263). Seguramente estos documentos se conservan en el Archivio Vaticano bajo el nombre *Ragioni per la secolarizatione et patronato de Zaragoza*[38]. El informe detalla al papa Clemente VIII siete razones

36. AAV, *Segr. Stato, Spagna*, vol. 50, ff. 377r-378v. Carta del nuncio Gaetani al cardenal Aldobrandini sobre las reuniones en Zaragoza [26/IX/1599].

37. Jerónimo Sora Azpeitia (1549-1627). Nació en Zaragoza, siendo hijo del regente Juan Sora y de su esposa Esperanza Azpeitia. Primo-hermano de Gabriel Sora Aguerri, canónigo. Estudió artes y derecho canónico en la Universidad de Alcalá. El 12 de octubre de 1569 se hizo con el arciprestazgo de Zaragoza, por medio de resigna *in favorem*. Fue visitador de Aragón y juez de residencia (1582) y capellán de Felipe II. Fue el fundador del convento de san José de carmelitas descalzas y promovió la fundación de la Cartuja Alta. Felipe III le propuso en tres ocasiones para desempeñar las labores episcopales, a lo que él renunció. Murió en Zaragoza el 17 de mayo de 1627 (Latassa, 1799, p. 392).

38. AAV, *Segr. Stato, Spagna,* vol. 41, fols. 317r-322v; 340r-346v; y 347r-362r.

para aceptar la secularidad de la iglesia bajo el patronato regio, según había dispuesto la junta de Zaragoza.

En primer lugar, al rey le interesaba ganar la fidelidad de sus servidores en Aragón, muchos de los cuales tenían en su familia eclesiásticos seculares. Si el rey podía nominarlos en aquella «chiesa tanto principale si garantirà in medesimo tempo li padri, li Fratelli et tutti li allti congiunti et amici di queltale et li stesso provisto haverá sempre grande obligo al re». En segundo lugar, las intenciones regias giraban en torno a controlar a los miembros de la iglesia que participaban en las Cortes y en la Diputación —no debemos olvidar el papel del canónigo Torrellas durante la rebelión aragonesa—. En tercer lugar, el rey creía que la vecindad con la frontera francesa podía suponer un peligro para la autoridad del papa en Aragón. Que la iglesia, siendo reducida a secular, ganaría desde el punto de vista del culto divino. Que la supresión de la regla conllevaría muchos gastos que la iglesia solamente podría afrontar con la ayuda de la Corona. Que el *ius patronato* regio no menoscabaría los ingresos de la Datería y de la Cancillería Apostólica, porque dos de las dignidades de Zaragoza eran ya del patronato regio. Y, por último, el rey reclamaba el *ius eligendi* por cuanto la mensa había sido dispuesta y engrandecida por sus antepasados después de recuperar la ciudad de la mano de los infieles.

El cardenal Aldobrandino contestó con dos cartas al nuncio, a finales de octubre de 1599, representándole que el papa no solo no quería secularizar la iglesia, sino que solamente lo haría si el arzobispo y el nuncio lo solicitaban; y no el marqués de Denia [duque de Lerma] o el confesor, a quienes no les reconocía la capacidad de entrometerse en los asuntos de la Iglesia[39]. Y sobre el asunto el nepote manifestó a Gaetani la «ripugnanza grandíssima» por «manumettire la libertà di una chiesa così insigne per porla in una servitú come quella dell'*iuspatronato* che vi desiderava la maestrá del re morto»[40].

El 7 de febrero de 1600 el Consejo de Aragón se reunió para tratar el asunto. Y, pocos días después, el 21 de febrero, el vicecanciller Diego de Covarrubias visitó al nuncio Gaetani antes de su reemplazo. En una carta, fechada en Madrid a 24 de esos mismos mes y año, exponía el estado del negocio después de haberle comunicado al rey el parecer del papa. Covarrubias mostró que Felipe III «restava un po discontento» por cuanto las instancias que había llevado a cabo su padre y las promesas dadas al duque de Sessa habían sido desaprobadas tras la intercesión del arzobispo Gregorio que, cuando era vicario general —dice la carta—, era favorable

39. AAV, *Segr. Stato, Spagna,* vol. 327, fols. 138r-138v. *Carta del cardenal Aldobrandino al nuncio Gaetani contra la secularización y el patronato real de Zaragoza* [30/X/1599].

40. AAV, *Segr. Stato, Spagna,* vol. 327, fols. 129r-130r. *Carta de Pedro Aldobrandino al nuncio Gaetani sobre la denegación de la secularización de la iglesia de Zaragoza bajo el patronato regio* [25/X/1599].

a la secularización. El rey esperaba alcanzar, sino el patronato universal, sí una parte del *ius eligendi* en algunos canonicatos. El nuncio Gaetani aprovechaba su última misiva al cardenal nepote para defender el derecho regio, al menos, durante cuatro de los ocho meses apostólicos reservados al papa[41]. Es probable, también, que Francisco Peña (1540-1612), arcediano de Zaragoza y auditor de la Rota romana, intercediera a favor del rey en ese asunto. Como tal, este eclesiástico oriundo de Villarroya de los Pinares (Teruel) fue uno de los personajes más influyentes en la Roma de Clemente VIII (Dandelet, 2001, pp. 180-181)[42]. Y, cuando el duque de Sessa dejó en 1603 la embajada en Roma, Francisco Peña fue recomendado al nuevo representante ante la Santa Sede, el marqués de Escalona, como «persona de muchas letras, prudencia y destreza y de quien se puede fiar de todo». Y que, por ello, «el conde de Olivares le fio los negocios más importantes» (Giordano, 2006, pp. 177-178).

A la llegada del nuevo nuncio a Madrid, Domenico Ginnasio, arzobispo de Spontino, el cardenal Pietro Aldobrandino le escribió una carta detallándole el estado del negocio de la iglesia de Zaragoza. A la altura de marzo de 1600, y pese a las reticencias del papa Clemente VIII, «la chiesa si secularizara con riserva di quattro mesi di collatione de canonicati a nostro signore, quatro mesi saranno a nominatione dil re, et quatro a collatione dil medisimo vescovo»[43]. El rey escribía sobre esta cuestión que se conformaba con los cuatro meses sobre las canonjías y que no debía impedirse más la elección de los canónigos[44]. Sin embargo, pese a este aparente acuerdo entre el papa y el rey, el asunto del cabildo zaragozano se alargó durante tres años más por dos razones.

En primer lugar, el rey, a través del cardenal Fernando Niño de Guevara (1541-1609), solicitaba al nuncio que todas las dignidades fueran de patronato regio. Mientras, Ginnasio y el vicecanciller de Aragón estaban de acuerdo en que la colación de estas siguiera la misma fórmula que las canonjías, siempre y cuando no fueran el decanato —de provisión papal—, el arcedianato de Aliaga ni el priorato de santa

41. AAV, *Segr. Stato, Spagna,* vol. 50, fols. 521r-522r. *Carta del nuncio Camillo Gaetani al cardenal nepote Pedro Aldobrandini sobre el negocio de la secularización de la iglesia de Zaragoza* [25/I/1600].

42. Francisco Peña, además, fue prelado doméstico de Clemente VIII, juez apostólico del palacio papal y promotor de los procesos de canonización de san Diego de Alcalá, san Jacinto, san Raimundo de Peñafort, san Carlos Borromeo y santa Francisca Romana. Fue decano de la Rota entre el 9 de junio de 1604 y el día de su muerte, el 21 de agosto de 1612 (Latassa, 1799, pp. 121-127).

43. AAV, *Segr. Stato, Spagna,* vol. 328, fols. 33r-34v. Representación de Pedro Aldobrandino al nuncio Ginnasio [7/III/1600].

44. AAV, *Segr. Stato. Spagna,* vol. 53, fols. 8r-88r. El nuncio Ginnasio remite las consultas del Consejo de Aragón al rey sobre la secularización de Zaragoza [27/IV/1600].

Cristina —cuyo patronato era regio—[45]. Y, en segundo lugar, que la Dataría Apostólica pedía 25 mil escudos romanos para cubrir los gastos de expedición de la bula de secularización de acuerdo con la nueva planta[46]. El asunto de la secularización quedó de nuevo suspendido por varios factores. El asunto económico pasaba a primer lugar y a ello se sumaban la destitución de Sessa como embajador y la muerte de Alonso Gregorio, arzobispo de Zaragoza (27/XII/1602).

Por el transcurso de los años, casi nadie de los que comenzaron el asunto de la negociación en 1593 estaba presente en las negociaciones entre Zaragoza, Madrid/Valladolid y Roma a principios del XVII. Tan sólo quedaban tres canónigos: Francisco Lamata —prior—, Pascual Mandura[47] y Gabriel Sora. Durante los años sucesivos, el nuncio mantendrá continuas audiencias con el rey, el duque de Lerma y el arcipreste Sora en Valladolid. De estas recepciones saldrían los puntos de acuerdo relativos a la composición del nuevo cabildo catedralicio y la mensa canonical. Además de ello, desde 103, la corona contaba en Zaragoza con un nuevo aliado: el arzobispo Tomás Borja (1551-1610), mucho menos beligerante que su antecesor y mucho más obediente al rey. No en vano, este eclesiástico era hermano de san Francisco de Borja y, por lo tanto, tío-abuelo del duque de Lerma[48].

Finalmente, la bula *Reducionis* fue firmada por Clemente VIII en la basílica de san Marcos de Roma en los idus de julio del año 1604, después de que Felipe III se viera obligado a abonar los 25 mil escudos romanos solicitados por los ministros pontificios el mes anterior (Aznar, 2012, p. 149).

La bula *Reductionis* (1604): dimensiones y aplicación

El 24 de marzo de 1605, el canónigo Gabriel Sora presentó en el cabildo la bula que había traído a Zaragoza desde Valladolid; la había recibido de las manos

45. AAV, *Segr. .Stato, Spagna,* vol. 53, fol. 67r-67v. Carta del nuncio Ginnasio al cardenal Aldobrandino sobre la secularización de Zaragoza [19/IV/1600].

46. AAV, *Segr. Stato. Spagna,* vol. 53, fol, 294r. Carta del nuncio Ginnasio al cardenal Aldobrandino [22/XII/1600]. Un borrador de la bula en AAV, *Segr. Stato. Spagna,* vol. 41, fols. 347r-362r.

47. Pascual Mandura (1550-1604) se ocupó durante los últimos años del siglo XVI y primeros del XVII a reconfigurar la vida litúrgica de la catedral zaragozana de acuerdo con el ritual romano. De ahí el ceremonial conservado en el ACSZ, *Armario de Privilegios,* letra M. Transcrito y estudiado por Miguel García; Andrés Casabón, 2015.

48. Como muestra de afecto, Tomás de Borja hizo una donación de muebles al duque de Lerma dos años antes de morir (Abad Zardoya, 2009). El arzobispo Borja presentó una serie de reparos tocantes a la jurisdicción del nuevo cabildo. AHN, *Consejos,* leg. 19.195/2. El Consejo de Aragón sobre las cosas de la iglesia y reparos del arzobispo [10/VII/1603].

del nuncio Domenico Ginnasio[49]. Su ejecución incontinenti comenzó ese mismo día. El prior Francisco Lamata mandó llamar a las dignidades y oficinas que acto inmediato mudaron el hábito gris que usaban en la regularidad, poniéndose el de armiños blancos que les concedía la nueva bula. Ese fue el último cabildo en estado regular que tuvo la seo de Zaragoza. El acto fue recogido por el notario de número Juan Moles[50]. Tan solo el canónigo Sora quedaba profesando la regla de san Agustín. La bula ponía punto final a muchos de los problemas internos del cabildo cesaraugustano, a la vez que cumplía con los objetivos políticos de la Monarquía. Era el resultado de largos años de negociaciones, como hemos podido comprobar hasta ahora. A consecuencia de ella se creó un cabildo catedralicio completamente distinto y reformado de acuerdo con las disposiciones del Concilio de Trento.

A) Los canonicatos

Se instituyen 24 canonjías permanentes y seculares, entre las que se encontraba la de Gabriel Sora como último regular (§43). Dentro de estos 24 canonicatos: cuatro serían de oficio, a saber: el magistral en teología, a quien se le reservaban los sermones de adviento y cuaresma (§89); el doctoral, que debía ostentar el título de doctor o licenciado en cánones, y cuyo fin era aconsejar y trabajar en los negocios de la iglesia cuando fuere requerido por su corporación (§90); el penitenciario, como confesor del cuerpo capitular (§91); y el lectoral, para enseñar y formar al resto de personal catedralicio en las Sagradas Escrituras (§92).

B) La nueva mensa canonical

La nueva mensa canonical estaba compuesta por los frutos de la antigua mensa regular y por los derechos, réditos y censos de las antiguas oficinas y dignidades regulares que fueron suprimidas: la camarería —6.000 ducados—; la obrería —600—; la caricatería —1.100—; la fabriquería —250—; y la capellanía de la infanta —300— (§23-42). De esta forma se conseguía engrosar la mensa, de tal manera que todas las canonjías pudieran gozar de una porción igualitaria y en cantidad acorde a lo que requería su estado social (§58). Para seguir engrosando la dotación económica de los prebendados, la bula obligaba a algunas dignidades muy bien dotadas a contribuir con una aportación que recibía el nombre de *dismembraciones*. Esto es, que los frutos de algunas dignidades eran aplicados anualmente a la masa común. Así, el arcediano de Zaragoza debía aportar 700 ducados y la mitad de los frutos de Épila; al arcediano de Daroca se le desmembraban otros 700 ducados sobre La Almunia;

49. *Clementis VIII. Bulla reductionis sanctae ecclesiae metropolitanae civitatis Caesaraugustae in secularem*, Zaragoza, Impr. Diego Dormer, 1653. Hay un ejemplar impreso en ACSZ, *Estatutos siglo XVII*, caja 1.También en BNE, Mss. 6.219, fols. 55-78. ACSZ, *Armario de Privilegios,* Letra C, Lig. 2, núm. 9. Hay copias de 1605, 1635 y 1701.

50. AHPNZ, Juan Moles, 1605, fols. 294v-355v [24/III/1605].

el arcediano de Belchite debía aportar 1.000 ducados; y, finalmente, el tesorero hacía lo propio con 600 ducados de oro (§48, 49).

C) Las dignidades

Las dignidades, al contrario de lo que ocurría anteriormente, ahora sí conformaban parte integrante del gremio capitular, con voz y voto (§69). Cada una gozaba de su propia mensa, aunque participaban de las distribuciones cotidianas y de la porción de cuatro coquetas diarias[51]. Sin embargo, no harían lo propio con los derechos de vestuario, ni la gruesa de la mensa canonical, ni las mesadas, que quedarían reservadas solamente para los canónigos (§78-84).

El número de dignidades ascendería a doce. El antiguo prior se llamaría deán y la limosnería se transformaría en maestrescuela (§60). Permanecerían intactos los antiguos arcedianatos: el de Zaragoza, el de Daroca, el de Belchite y el de Aliaga. También el chantre y el prior de santa Cristina, cuya dignidad había sido trasladada en 1597 desde Somport a la iglesia de Zaragoza por voluntad regia[52]. Los arciprestes de Zaragoza, de Belchite y de Daroca, que en los tiempos regulares no eran considerados ni oficinas ni dignidades, fueron convertidos por la bula en tres dignidades más —¿quizás como reconocimiento por la buena disposición de sus poseedores en el negocio de la secularidad?—. Cada una de las doce dignidades estaban obligadas a aportar a la mensa capitular, en cada mes asignado, una *mesada* de 1.000 ducados de oro de cámara. Y, en caso contrario, la bula da la capacidad jurídica a la mensa capitular para secuestrar y sustraer los frutos de la dignidad que se negase a contribuir.

La renta del capellán de la infanta se aplicaba a la mensa, mientras que el título se reservaba al canónigo más antiguo, que pasaría a denominarse así, cobrando ochenta escudos anuales de más con la obligación de celebrar 200 misas anuales. Este título no sería una dignidad, sino que dotaría al prebendado de un mayor reconocimiento honorífico (§61).

51. «Interim tamen eorum singulis, si ibidem personaliter resederint, portio quatuor panum coquetarum nuncupatarum quotidie distribuatur» (§84). Las *coquetas* eran los panes horneados en la pabostría y que, en recuerdo de la vida en común, se distribuían diariamente entre los canónigos residentes en la iglesia.

52. El priorato de santa Cristina de Somport fue fundado por los reyes de Aragón en el siglo XII como enclave estratégico de atención en las rutas de peregrinación. Al ser disuelto el monasterio a finales del siglo XVI, hubo cierto debate sobre qué hacer con las rentas del priorato y de sus canónigos. Según una resolución del Consejo de Aragón los canónigos pasarían a residir en la catedral de Jaca, acomodándose con la misma renta que los prebendados de la catedral y con la obligación de acudir a la iglesia del Puerto y tener en ella personas que recogieran a los pobres. Mientras que, por una consulta de 1596, parecía mejor que, como en Jaca había «hartas dignidades (...) será más conveniente» trasladar al prior como dignidad de la seo zaragozana. AHN, *Consejos,* leg. 19.188/5.

En la bula de secularización se describe el orden de asiento en el coro y en las procesiones, siendo el deán la cabeza y presidente del cabildo. Todas las dignidades retienen sus antiguos derechos y preeminencias, incluyéndose las prerrogativas de participación política en las Cortes y en los oficios del reino. En ausencia del deán, sería sustituido por las dignidades, según el orden establecido, y en total ausencia de estas, ocuparía su lugar el capellán de la infanta debido a su antigüedad (§71-73).

D) El sistema de provisiones

Durante la regularidad, los canónigos eran elegidos entre el obispo y el capítulo en conjunto. Las dignidades —excepto las dos de patronato regio— y los oficios regulares eran provistas en por el papa y el arzobispo según los meses. La bula de secularización, sin embargo, uniformizó la provisión de las 12 dignidades y las 20 canonjías simples. Los poseedores de las otras cuatro prebendas de oficio —magistral, doctoral, penitenciario y lectoral— serían elegidos mediante el sistema de oposición (§101-102).

Para contentar las pretensiones de todas las instancias implicadas en el negocio de la secularización, la bula dispuso que los ocho meses apostólicos y los cuatro meses ordinarios se dividieran. De esta forma, las colaciones de las prebendas vacantes en marzo y septiembre corresponderían al cabildo y al arzobispo en conjunto. El arzobispo tenía un voto entre todos los miembros capitulares, disponiendo también del voto de calidad en caso de empate entre los candidatos (§96). Los meses de junio y diciembre pertenecían al arzobispo por entero (§97). Los ocho meses restantes estaban reservados a la silla apostólica, al igual que las reservas pontificias derivadas de las vacantes por muerte de prebendados que hubiesen sido miembros u oficiales de la Curia Apostólica (§104). Sin embargo, el papa hacía donación de cuatro meses al rey Felipe III y a sus sucesores como reyes de Aragón: febrero, mayo, agosto y noviembre (§103). De esta manera, el papa únicamente tendría las provisiones de los meses de enero, abril, julio y octubre. El decanato, como *primam post pontificalem* siempre sería de colación apostólica, mientras que el arcedianato de Aliaga y el priorato de santa Cristina permanecerían bajo patronato regio, independientemente del mes que quedasen vacantes (§100).

E) La jurisdicción y el papel del arzobispo

La bula reconoce al arzobispo el papel que Trento reservó a los obispos en cuestiones de jurisdicción, después de las luchas existentes desde antiguo entre ambas instituciones, como hemos visto. De esta forma, la bula (§75-76) manda que el cabildo, los racioneros y los beneficiados debían estar sujetos a la visita, corrección, jurisdicción y superioridad del arzobispo. Y que todos los crímenes, excesos y ofensas de los miembros del cabildo de la iglesia cesaraugustana debían ser investigados y castigados por los dos vicarios capitulares, elegidos entre los canónigos.

Además de ello, la bula *Reductionis* dotaba al cabildo de libre facultad de hacer y reformar los estatutos del gobierno de la iglesia, siempre y cuando tuvieran su base en el texto de la bula y tuvieran el visto bueno del ordinario. A él le correspondía la última palabra.

Tabla 1. Composición del cabildo catedralicio tras la secularización y valor de las piezas eclesiásticas. Elaboración propia[53]

	PREBENDA	PROVISIÓN	VALOR (EN LIBRAS JAQUESAS)
DIGNIDADES	Deán	Papa	4.000
	Arcediano de Zaragoza	Por meses	2.300
	Arcediano de Daroca	Por meses	2.200
	Arcediano de Belchite	Por meses	2.200
	Arcediano de Aliaga	Rey	1.000
	Chantre	Por meses	1.000
	Maestrescuela	Por meses	1.300
	Tesorería	Por meses	1.800
	Arcipreste de Zaragoza	Por meses	800
	Arcipreste de Daroca	Por meses	1.100
	Arcipreste de Belchite	Por meses	1.200
	Prior de santa Cristina	Rey	700
	20 canonicatos	Por meses	1.000
	4 canonicatos de oficio	Oposición	1.000

Los primeros estatutos se elaboraron en 1607 y fueron el resultado de una junta delegada por el arzobispo Tomás de Borja. El prelado se ocupó personalmente de mantener informado al Consejo de Aragón de algunos problemas que surgieron de la aplicación de la bula: la falta de dotación de la fábrica; el ajuste de las distribuciones diarias por asistencia al coro entre dignidades, canónigos y racioneros; o la incapacidad de algunas dignidades de contribuir a la mesnada anual. Con base en ese informe, el rey envió al embajador en Roma una carta solicitando el visto bueno del papa para introducir algunos cambios en la ejecución de la bula a través de dichos estatutos[54].

53. AAV, *Segr. Stato, Spagna,* vol. 41, fols. 317r-332v. *Summarium praesentis et futuris status ecclesiae Cesaraugustanae*

54. La carta al embajador con los apuntes del arzobispo Tomás de Borja se encuentran en ACA, Consejo de Aragón, leg. 149, núm. 155 [10/VIII/1607].

El nuevo cabildo se constituyó en una plataforma más donde premiar a su clientela aragonesa (Gómez Zorraquino, 2017, pp. 566-577). El duque de Lerma aprovechó la ocasión para incluir en los nuevos capitulares a miembros de su propia clientela. Como ya hemos señalado, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza a comienzos del Seiscientos tenía un único canónigo y pocas dignidades sin vacar. El resto de las piezas eclesiásticas —24 canonicatos y 3 dignidades— fueron nominados por el rey. Desde el año 1600, el Consejo de Aragón fue recibiendo ternas de personas eclesiásticas elaboradas por el arzobispo de Zaragoza[55]. En 1605 tomaron posesión todas ellas.

Aunque el reinado de Felipe III sigue siendo uno de los menos trabajados en Aragón, hemos de suponer que la política que desarrolló su valido no difirió de la impulsada en otras partes de la monarquía (Gascón Pérez, 2008). Esta pasó por crear sinergias de continuidad con respecto al reinado precedente e integrar en las instituciones políticas a miembros de su clientela, con la finalidad de extender su influencia a todas las realidades de la monarquía (Ferós, 2002, p. 180). De esta manera, elegir a los miembros del nuevo cabildo se consolidó, a nuestro modo de ver el proceso, como una oportunidad política para que Tomás de Borja y el duque de Lerma pudieran introducir sus redes clientelares en una de las instituciones más representativas del reino y de la Iglesia de Aragón.

Si nos acercamos a la nómina de los nuevos prebendados, podemos comprobar que muchos de ellos pertenecían a las familias más representativas del servicio regio en el reino. Muchas de ellas ligadas a la fidelidad política durante la rebelión de 1591. Luis Sarabia, por ejemplo, era hijo de Pedro Sarabia, uno de los consejeros privados de Felipe II (Latassa, 1799, p. 477); Pedro Herrera Guzmán, que acabaría siendo arcediano de Zaragoza durante unos años, era hermano de Alonso Herrera, alguacil del Santo Oficio durante las turbaciones de 1591 (Andrés de Uztárroz, 1663, p. 92); y Juan Clavero de Algas, rector de la Universidad de Huesca, era hermano de Diego Clavero, uno de los juristas al servicio del Consejo de Aragón durante las alteraciones y que llegaría a ostentar el cargo de vicecanciller del mismo en 1608[56].

Muy paradigmática es la presencia de Jaime Arroyos en el nuevo cabildo. Este canónigo, que lo había sido antes de Barbastro, era comisario del Santo Oficio y participó activamente en la persecución inquisitorial de Antonio Pérez y Martín de Lanuza (Sánchez, 1997, p. 323).

Otros, en cambio, pertenecían al ámbito de confianza de Tomás de Borja. Entre ellos podemos señalar a Juan Izquierdo que, después de haber ejercido como vicario general de Calatayud a las órdenes de Pedro Cerbuna, pasó a serlo del arzobispado

55. ACA, Consejo de Aragón, leg. 149, núm. 142.

56. AHN, Inquisición, leg. 1469, exp. 40. *Información genealógica del doctor Diego Clavero y de su hermano, el doctor Juan Clavero* [1579].

de Zaragoza ya con Tomás de Borja (Latassa, 1799, pp. 369-370). Martín Carrillo ocupaba desde 1592 la cátedra de decreto de la Universidad de Zaragoza; comensal del arzobispo Borja, así como su oficial eclesiástico, juez sinodal y vicario general (Latassa, 1799, p. 434). Tampoco faltaron en el nuevo cabildo miembros de las familias más nobles de Aragón, como José Palafox, hijo del señor de Ariza y canónigo de Tarazona (Latassa, 1799, p. 391); o Enrique Castro-Cervellón y Alagón, sobrino del conde de Sástago.

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza quedaba conformado como una nueva realidad política desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo con respecto a lo que hubo antes de 1591. Era la expresión de una nueva realidad política —influenciada por la rebelión aragonesa— y religiosa —imbuida por Trento—.

2. CONCLUSIONES

La bula *Reductionis* de 1604 supuso un hito en la historia de la corporación catedralicia de Zaragoza, por varios motivos. En primer lugar, puso fin a cerca de quinientos años de vida regular y a toda una serie de oficios propios de la vida en común, cuyos derechos y obligaciones se traspasaron a la mensa común canonical, ahora renovada y engrosada.

En segundo lugar, la bula supuso la creación de un cabildo *ex novo* siguiendo los modelos castellanos y tridentinos. Si en lo antiguo la reforma del clero aragonés devino del seguimiento de la regla de san Agustín, ahora lo sería adoptando los preceptos *De reformatione* del tridentino. La mezcolanza en el coro entre canónigos regulares y dignidades seculares, fuente de continuos conflictos internos desde hacía siglos, se acabó el mismo día que Gabriel Sora trajo la bula de secularización desde Valladolid. Ahora unos y otros formarían parte del gremio capitular en igualdad de condiciones, aunque con administraciones diversas. La bula, además, reconocía el *ius corrigendi* del arzobispo de Zaragoza sobre los miembros y ministros de la iglesia catedralicia de la ciudad del Ebro. Era el desenlace que esperaban los prelados cesaraugustanos del siglo XVI, como hemos visto al inicio del capítulo. La figura pastoral del ordinario supeditaba ahora la voluntad de su *senatus* particular e, incluso, le otorgaba capacidad para aprobar nuevos estatutos y formar una nueva mensa de distribuciones común para dignidades y canónigos. Muchos de las tensiones internas irresolutas, y que causaban grave perjuicio para el culto divino en la metropolitana del Reino, fueron acalladas y aparentemente solucionadas a través de la bula de Clemente VIII. Tanto es así que este documento sería la base de futuras bulas —*In Apostolicae Dignitatis* (1676) y *Romanum Decet* (1731)— y estatutos.

Por último, el contexto y las causas de la bula *Reductionis* (1604) es extremadamente interesante si lo contemplamos desde el punto de vista histórico-político y eclesiástico. Era el producto de la Reforma de la Iglesia Católica, sí; pero impulsado

desde la propia monarquía desde el mismo momento en que esa labor reformadora fue concebida como una oportunidad para consolidar el poder regio en Aragón tras la rebelión de 1591. Esta mezcolanza de intereses —políticos y religiosos— nos ayudan a comprender cómo fue la aplicación de la Reforma en España. La implicación directa de la monarquía, deseosa de aprovechar las prebendas catedralicias de Zaragoza para granjearse la dependencia de los eclesiásticos y de sus familias, cambió el devenir de la reforma del alto clero cesaraugustano iniciada durante los pontificados de Alonso de Aragón y su hijo, Hernando. Ahora las prebendas —no solamente las de patronato regio— tendrán un papel político más resaltado del que tenían hasta entonces. El rey disfrutará en la catedral primada de Aragón de una prerrogativa que no gozaba en casi ninguna otra iglesia del reino: podría proveer vacantes en cuatro de los ocho meses apostólicos. Algo que tendrá consecuencias directas en la composición social de los miembros capitulares. La bula *Reductionis*, en definitiva, significaba la aplicación del Concilio de Trento sobre el Cabildo Metropolitano de Zaragoza bajo el prisma político de la Monarquía.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Daniel Ochoa Rudi.

Agradecimientos y financiación

Este trabajo se encuadra dentro de los objetivos planteados por el Proyecto ERC ROTAROM17 *Delivering justice on a transnational scale in Europe. The Roman Rota and the enforcement of a legal culture of negotiation (c. 1560-1700),* ERC n.º 101096639 (2023-2028), vinculado a l'École Française de Rome. IP: Isabelle Poutrin.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

3. BIBLIOGRAFÍA

Abad Zardoya, C. (2009). Por el bien y beneficios que de su mano hemos recibido: estudio documental de una donación de bienes muebles hecha por Tomás de Borja a su sobrino el duque de Lerma en 1608. *Artigrama*, (24), 341-371. https://doi.org/10.26754/ojs_artigrama/artigrama.2009247746

Andrés de Ustárroz, J. F. (1663). *Segunda parte de los anales de la corona y reino de Aragón*. Herederos Pedro Lanaja.

Arigita Lasa, M. (1899). *Don Francisco de Navarra, de la orden de san Agustín. Estudio histórico-crítico*. Diputación Provincial de Navarra.

Aznar Recuenco, M. (2011). Orígenes familiares y desarrollo profesional en la corte romana de Pedro Cosida: agente del arzobispo Andrés Santos y de la procura de negocios del cabildo de la seo zaragozana en la Santa Sede, 1581-1600. *Emblemata: Revista Aragonesa de Emblemática*, (17), 239-264.

Aznar Recuenco, M. (2016). *La figura y patrocinio artístico del inquisidor y arzobispo de Zaragoza, Andrés Santos (1529-1585): vínculos y reflexiones culturales en los territorios peninsulares* [Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza]. Repositorio Institucional de la Universidad de Zaragoza.

Barrio Gozalo, M. (2014). Los Reyes Católicos, Cisneros y la reforma del clero secular y regular. En J. A. Escudero López (Dir.), *La Iglesia en la Historia de España* (pp. 415-432). Fundación Rafael del Pino.

Blasco de Lanuza, V. (1622). *Historias eclesiásticas y seculares de Aragón* (2 vols.). Juan de Lanaja.

Callado Estela, E. (2019). Las primeras canonjías de oficio en la catedral de Valencia. Un episodio de rivalidad entre obispos y cabildos durante el siglo XVII. *Hispania Sacra*, *71*(143), 179-189. https://doi.org/10.3989/hs.2019.013

Callado Estela, E. (2022-2025). *La catedral de Valencia en el siglo XVI: humanismo y reforma de la Iglesia*. Institució Alfons el Magnànim.

Calvo Gómez, J. A. (2015). Las comunidades no confederadas de canónigos regulares en Cataluña en la Baja Edad Media. *Aragón en la Edad Media*, (26), 169-200. https://doi.org/10.26754/ojs_aem/aem.2015261061

Catalán Martínez, E. (2013). De curas, frailes y monjas: disciplina y regulación del comportamiento del clero en el obispado de Calahorra, 1500-1700. *Hispania Sacra*, *65*(131), 229-253. https://doi.org/10.3989/hs.2013.021

Dandelet, T. (2001). *La Roma española, 1500-1700*. Crítica.

De la Fuente, V. (1865). *La Santa Iglesia de Tarazona en sus estados antiguo y nuevo*. Real Academia de la Historia.

Elipe, J. (2023). *Don Alonso de Aragón, un príncipe con mitra*. Institución Fernando el Católico.

Espés, D. (2019). *Historia eclesiástica de la ciudad de Zaragoza* (A. Blasco Martínez & P. Pueyo Colomina, Coords.). Institución Fernando el Católico.

Fernández Terricabras, I. (2000). *Felipe II y el clero secular: la aplicación del Concilio de Trento*. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Ferós, A. (2002). *El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III*. Marcial Pons.

Gascón Pérez, J. (2008). El reino de Aragón a principios del siglo XVIII. En J. Martínez Millán & M. A. Visceglia (Dirs.), *La monarquía de Felipe III: los reinos* (Vol. 4, pp. 173-196). Fundación Mapfre.

Gascón Pérez, J. (2010). *Alzar banderas contra su rey. La rebelión aragonesa de 1591 contra Felipe II*. Prensas Universitarias de Zaragoza.

Giordano, S. (2006). *Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma, 1598-1621*. Archivio di Stato.

Gómez Zorraquino, J. I. (2017). *Patronazgo y clientelismo. Instituciones y ministros reales en el Aragón de los siglos XVI-XVII*. Prensas Universitarias de Zaragoza.

Goñi Gaztambide, J. (2008). Episcopado y cabildo. *Príncipe de Viana*, *69*(245), 575-614.

Gutiérrez Iglesias, M. R. (1980). *La mensa capitular de la iglesia de San Salvador de Zaragoza en el pontificado de Hugo de Mataplana*. Institución Fernando el Católico.

Herrera, A. (1612). *Historia general del mundo*. Alonso Martín.

Huesca, R. (1796). *Teatro histórico de las iglesias del Reino de Aragón* (Vol. 6). Viuda de Longás e hijo.

Latassa, F. (1799). *Biblioteca nueva de los escritores aragoneses* (Vol. 2). Joaquín Domingo.

López de Ayala, Ignacio. (1787). *El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento*. Impr. Real.

Miguel García, I. (2014). *La diócesis de Zaragoza en el siglo XVI. El pontificado de don Hernando de Aragón (1539-1575)* (2 vols.). Fundación Teresa de Jesús.

Miguel García, I. (2024). *Tiempos recios. La diócesis de Zaragoza, de metropolitana (1318) a Trento*. Institución Fernando el Católico.

Miguel García, I., & Andrés Casabón, J. (2015). *El ceremonial cesaraugustano del canónigo Pascual Mandura (1579-1604)*. Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Miguel García, I., & Andrés Casabón, J. (2019). Biografía del maestro Diego de Espés (1531-1602). En D. Espés, *Historia eclesiástica de la ciudad de Zaragoza* (A. Blasco Martínez & P. Pueyo Colomina, Coords.). Institución Fernando el Católico.

Oliván, F. (1966). *Los deanes de Zaragoza* [Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza]. Archivo de la Universidad de Zaragoza.

Paiva, J. P. (2010). La reforma católica en Portugal en el periodo de la integración del reino en la Monarquía Hispánica (1580-1640). *Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna*, *7*(20), 1-28.

Requejo, E. (1971). La vida conventual del cabildo de la seo de Zaragoza en 1292, según el reglamento capitular de su mensa. *Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita*, (24), 123-189.

Royo García, J. R. (1992). Procesos del tribunal eclesiástico de Zaragoza por sedición política en 1592. *Cuadernos de Estudios Borjanos*, (27-28), 241-272.

Sánchez Núñez, P. (1997). Después de las alteraciones aragonesas: aspectos de la represión inquisitorial de la revuelta de 1591. *Ius Fugit: Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos*, (5), 311-358.

Turchini, A. (1994). La nascita del sacerdozio come professione. En P. Prodi (Dir.), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina de la società tra medioevo ed età moderna* (pp. 225-256). Il Mulino.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481487504

A PROPÓSITO DE UN LIBRAMIENTO Y RECIBO. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE IMPRESOS DE POLIFONÍA RELIGIOSA EN TORNO A 1600

Concerning a Payment Order and Receipt: On the Distribution of Printed Sacred Polyphony Circa 1600

Alfonso de VICENTE DELGADO

Investigador independiente
devicente@musicologia.com

Recibido: 28/06/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: El hallazgo en el Archivo de la Catedral de Salamanca de un libramiento de 1601 por el pago de unos libros de polifonía litúrgica es ocasión para abordar la circulación de esta tipología de libros impresos que adquirió cierta importancia en los primeros decenios del siglo XVII, así como los contactos personales entre los diversos maestros de capilla catedralicias y reales, entre ellos nombres tan importantes como Tomás Luis de Victoria, Alonso de Tejeda, Philippe Rogier y Géry de Ghersem.

Palabras clave: Catedral de Salamanca; España; libros de polifonía; circulación de músicos; Alonso de Tejeda; Géry de Ghersem; Philippe Rogier; Tomás Luis de Victoria.

ABSTRACT: The discovery in the Archive of the Cathedral of Salamanca of a payment order from 1601 for the payment of some books of liturgical polyphony allows us to address the circulation of this type of printed books that acquired a certain importance in the first decades of the 17th century, as well as the personal contacts between the various

cathedral and royal chapel masters, among them such important names as Tomás Luis de Victoria, Alonso de Tejeda, Philippe Rogier and Géry de Ghersem.

Keywords: Salamanca Cathedral; Spain; printed polyphony; relationships between musicians; Alonso de Tejeda; Géry de Ghersem; Philippe Rogier; Tomás Luis de Victoria.

1. INTRODUCCIÓN

En el fondo «1.4.4.1. Expedientes de cuentas de fábrica» del archivo de la Catedral de Salamanca, entre centenares de papeles sueltos de diverso formato y variada tipología, se conserva el siguiente recibo:

> Fran[cis]co de Miranda y Grado m[a]yor[do]mo de la fábrica desta S[an]ta Iglesia dará y pagará Al[ons]o de Texeda m[aestr]o de capilla de la Igles[i]a ciento y sesenta y seis reales para q[ue] ymbíe los cien r[eale]s a Geri de Cherssem [*sic*] teniente de m[aestr]o de la capilla real q[ue] se le mandaron dar por un libro de música q[ue] ymbió de las obras de Phelipe Rogier maestro que fue de la d[ic]ha capilla real y los sesenta y seis r[eale]s los remita y dé a Victoria capellán de la Emperatriz n[uestr]a s[eñor]a por çiertos libros de música de misas magníficas y otras cosas q[ue] él compuso y embió al cab[ild]o. Y pónganse por qu[en]ta y espensas de la fábrica q[ue] con esta y su carta de pago serán bien dados y se le pasarán y reçibirán en qu[en]ta. F[ech]o en Sal[aman]ca a 8 de ag[os]to de 1601 años.
> J. Scholasticus salmant[icensi]s [*rubricado*]
> Por m[anda]do de los s[eñore]s deán y cab[ild]o, Johann Téllez su secret[ari]o
> clxvi r[eale]s
> A q[uen]ta de la fábrica de çiertos libros de música de las obras de Phelipe Rogier y Victoria.
> [*vuelta*] [*cruz*]
> En 12 de agosto deste año de 1601 re[cibí] yo Al[ons]o de Texeda maestro de capilla de Salamanca del s[eñor] Fran[cis]co de Miranda y Grado mayordomo de la fábrica desta S[an]ta Yglesia los ziento y sesenta y seis r[eale]s en esta libranza contenidos. Y por verdad lo firmé
> Al[ons]o de Texeda [*rubricado*]
> 1601
> [*girado*] Librança de 166 r[eale]s al m[aestr]o de capilla por unos libros de canto.
> Pasada [*rúbrica*][1].

1. Expediente de cuentas de fábrica 1600-1601. Archivo de la Catedral de Salamanca Cj. 3.002 n.º 3 (Gómez González et al., 2014, p. 1016).

Una suerte que se haya conservado y localizado[2]. El pequeño documento (21'5 x 15'5 cm, apaisado) contiene tal cantidad de información que permite diversas lecturas —siempre conectadas entre sí— algunas de las cuales se hacen a continuación: los mecanismos de distribución de los impresos de polifonía litúrgica; la llegada de los libros del compositor Tomás Luis de Victoria a la Catedral de Salamanca; la conjunción de los nombres de cuatro de los principales autores de música religiosa en la corona de Castilla de finales del siglo XVI; la impresión y distribución de un músico ya fallecido; el compositor Alonso de Tejeda y el mundo del libro impreso. Cinco maneras de leer el documento que, como queda dicho, intersecan entre sí.

2. EL LIBRAMIENTO Y RECIBO DE 1601 COMO MUESTRA DE LA DISTRIBUCIÓN DE IMPRESOS DE POLIFONÍA

La lectura literal del documento lo que ofrece es la remuneración económica por unos libros de polifonía litúrgica enviados al cabildo de la Catedral de Salamanca. El pago lo ordena el cabildo al mayordomo de la fábrica (un profesional de la economía), que lo ha de pagar de esta; se paga a quienes han enviado los libros (los «profesionales» del libro y la edición) a través de un intermediario, el maestro de capilla (un profesional de la música). Esto es, nos sitúan en el meollo de la edición y distribución de los libros de música editados en Madrid a finales del siglo XVI y comienzos del siguiente; el mecanismo se reproduce exactamente igual unos años después (década de 1607-1618) con los libros impresos en Salamanca, Pamplona o Zaragoza y sigue un modelo anterior de libros editados por compositores españoles (o flamencos asentados en España) impresos fuera de la península (Roma, Venecia, Nápoles o Amberes).

Los poquísimos datos conocidos acerca de la edición musical indican que el compositor contrataba directamente la impresión y quedaba en su poder toda o la mayor parte de la tirada. En esta ocasión, adelantemos ya los dos libros a que se refiere el documento: *Missae sex* de Philippe Rogier, Madrid 1598 (RISM R1937)[3] y *Missae, magnificat, motecta, psalmi et alia* de Tomás Luis de Victoria, Madrid 1600

2. Es obligado citar el modélico trabajo de los técnicos responsables del archivo desde hace años, Raúl Vicente Baz y Pedro José Gómez González, bajo la dirección de los sucesivos canónigos archiveros, a quienes doy las gracias más sentidas por su generosidad y amabilidad, superiores incluso a su profesionalidad.

3. Missæ Sex | PHILIPPI ROGERII | ATREBATENSIS SACELLI | REGII PHONASCI MVSICÆ | peritissimi, & ætatis suæ facile | Principis. | AD PHILIPPVM TERTIVM | HISPANIARVM REGEM. | MATRITI. | Ex Typographia Regia. | M.D.XCVIII. Puede verse reproducción del ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Digital Hispánica. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000235604&page=1.

(RISM V1435)[4]. Son las dos primeras ediciones de polifonía o canto de órgano que hizo la Imprenta Real de Madrid, con Juan de Flandes como regente y el impresor Julio de Junti al frente de las prensas; son también las primeras ediciones de polifonía hechas en Madrid. En el caso del libro de Rogier se trata de una edición póstuma; constó de 100 ejemplares, fue cuidada por Géry de Ghersem (quien además añadió una misa de su autoría) y pagada por el rey Felipe III (Becquart, 1967, pp. 90-92; Solar-Quintes, 1961, p. 866). Del libro de Victoria conocemos el contrato firmado con Julio de Junti el 1 de octubre de 1598 en Madrid, aunque tardaron dos años en ver la luz los diez libretes de diverso formato de que consta la colección (Pérez Pastor, 1907, pp. 518-519; Vicente 2015, pp. 59-60).

Una vez impresos, los autores/editores hicieron envíos a distintos centros que pensaban podían estar interesados en adquirirlos; de otras vías de venta y distribución, en la propia imprenta, en tiendas, en ferias o de segunda mano, apenas queda documentación. Hay que tener en cuenta que es de un tanto por ciento pequeño del que sabemos su distribución (apenas un 10 % de los ejemplares en el caso de Victoria[5]). El envío del volumen iba acompañado de una carta del compositor en que exponía las características de la obra y de manera más o menos directa, solicitaba una retribución económica variable a discreción. Del primer músico de quien conocemos este proceso es Cristóbal de Morales en la década de 1540 (Knighton, 2007, pp. 161-175; Ruiz Jiménez, 2024).

En esta ocasión se ha conservado la carta dirigida por Victoria a la Catedral de Salamanca que ya ha sido publicada:

[*Cruz*]

> Muy ill[ustre]s señores:
>
> Yo e hecho inprimir esos libros de misas, magníficas, salmos, salves, y otras cosas, a dos y a tres choros, para con el órgano, de que va libro particular; que a gloria de Dios no a salido otro en Ytalia ni en España, para los organistas, porque con

4. THOMÆ LV | DOVICI DE VICTORIA | ABVLENSIS | SACRÆ CESAREÆ MAIESTATIS CAPELLANI | Missæ Magnificat, Motecta Psalmi, & alia quã plurima. | Quæ partim Octonis, alia Nonis, alia Duodenis vocibus concinuntur. Reproducciones de los distintos libretes conservados en diferentes bibliotecas en https://victoria.uma.es/1600a/1600a.html.

5. El libro de Rogier fue enviado por Ghersem al Vaticano, a las catedrales de Burgos, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadix, Jaén, La Guarda, Málaga, Oporto, Pamplona, Salamanca, Palencia, Plasencia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, más 3 a Aragón, 4 a América y uno al marqués del Carpio (ver más adelante). En total 26 de 100, no todos cobrados. Están documentados 19 envíos de los 200 de la colección de Victoria (a veces devuelto, a veces póstumo) a las catedrales de Ávila, Burgos, Cádiz, Coria, Cuenca, Granada, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Murcia, Palencia, Plasencia, Salamanca, Sigüenza, Toledo, Valencia, Valladolid y las cortes de Graz, Urbino y Juan de Borja.

él donde no vuiere aparejo de quatro vozes, una sola que cante con el órgano hará coro de por sí. Tanbién va misa, magníficat, y motete, para bozes, órgano, y ministriles, a tres choros. He traydo la inpresión a España, y hecho algún gasto. Suplico a V[uestr]a S[eñorí]a resçiva mi voluntad y mande se prueven esos libros, y haçiéndome alguna merçed para ayuda el [*sic*] gasto que e hecho la reconosçeré toda la vida. La qual Nuestro Señor prospere a V[uestr]a S[eñorí]a como yo deseo. Madrid y julio onze de 1601.

Thomé de Victoria Capellán de la enperatriz.

[*vuelta*:] A los muy ill[ustre]s señores deán y cabildo de Salamanca en Salamanca. Con unos libros.
[*girado*:] Carta de Thomé de Victoria de ciertos libros de música[6].

El paso siguiente era la recepción en cabildo del envío, con la lectura de la carta, quizás algún informe del maestro de capilla o de otro profesional, y la toma de acuerdo sobre el pago que habría de darse en caso de aceptar el o los libros. En la misma carta de Victoria hay dos anotaciones que dicen: «Leyóse en cab[ild]o a 20 de jullio de 1601 a[ñ]os. Se m[an]dó se entreguen al m[aestr]o de capilla y los pruebe luego»; «Mandáronsele dar seis du[cad]os y que se los remita el m[aestr]o de capilla a quien se le libraron en la fábrica». Es de suponer que así fuera, pero en los libros de actas capitulares no ha quedado reflejado; quizás para el secretario del cabildo fuera un acuerdo menor que no lo mereciera, o se traspapeló la anotación que hubiera tomado en la reunión[7].

Si el libro era aceptado y pagado, se emitiría una orden de pago o libramiento (generalmente firmada por el secretario del cabildo, como en este caso) y un recibo del propio autor o de la persona intermediaria. Estos pequeños documentos casi nunca se localizan; en su inmensa mayoría han desaparecido. Una excepción es precisamente esta que aquí se publica y comenta[8].

6. Archivo de la Catedral de Salamanca Ala Cj. 3 leg. 4 n.º 11. Montero García, 2002, p. 153; Vicente 2008, pp. 90-92.

7. Archivo de la Catedral de Salamanca, *Actas capitulares* 33 (1600-1616), ff. 67v-68 (*olim* 63v-64).

8. No es, desde luego, caso único. En el mismo archivo salmantino hemos localizado otros recibos de pago de las publicaciones de Alonso Lobo y Juan Esquivel de Barahona, este último firmado por el propio compositor (Archivo de la Catedral de Salamanca, Cj. 3.561 n.º 4 y Cj. 3.563 n.º1; Noone, Mazuela y Vicente en prensa: docs. 746 y 755). En la Seo de Zaragoza se han localizado los recibos por envíos de libros de Victoria en 24 de febrero de 1586 y 22 de noviembre de 1605 (Archivo de la Seo de Zaragoza, Recibos del común, Caja 30 carpeta 61 y Carpeta 105; Bonal Asensio, 2019, pp. 191; Vicente, 2025); también hay carta de envío del libro de 1605. Y en la Catedral de Sevilla se encuentra el pago el 27 de agosto de 1608 al maestro de capilla Alonso Lobo de 10 200 maravedís para enviar a Salamanca para Vivanco por el *Liber magnificarum* enviado por este, envío del que también se conoce carta (Archivo de la Catedral

El cuarto y último paso de este proceso administrativo[9] es el reflejo en los libros de cuentas, normalmente cuentas de fábrica en las catedrales castellanas. Así ha quedado en el *Quaderno de la fábrica frutos del año I mil DC* (1600) *de que a de dar quenta y pagar el año I mil DCI*:

> [*al margen*:] Libros de música.
> Yten çiento y sesenta y seis r[eale]s que di a el m[aestr]o de capilla de vnos libros de canto que conpró v mil DCXLIIII [5 644 maravedís][10].

Puede observarse que en esta ocasión ha sido un proceso muy rápido, apenas un mes: 11 de julio de 1601 Victoria fecha la carta de envío (no se conoce la carta de Ghersem enviando el de Rogier), 20 de julio el cabildo acepta el envío y decide el pago, 8 de agosto da la orden de pago y 12 de agosto Alonso de Tejeda cobra el dinero para enviar a los autores/editores. Por lo que se sabe de otros lugares el proceso podía ser mucho más lento, de bastantes meses o más de un año.

3. CUATRO MAESTROS DE CAPILLA: PHILIPPE ROGIER (1561?-1596), GÉRY DE GHERSEM (ca. 1574-1630), TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548?-1611), ALONSO DE TEJEDA (1540?-1628)

Acostumbramos a estudiar los autores de manera individual en una biografía lineal, o en los listados de músicos que se sucedieron en una institución. A lo más, unos vínculos maestro-discípulo, cuando pueden establecerse al menos como hipótesis. Pero las relaciones profesionales entre ellos fueron frecuentes y existió una correspondencia personal de relativa intensidad de la que no han quedado testimonios hasta casi un siglo más tarde[11]. Otro tipo de documentos aparecen en los protocolos notariales, que han conservado algunas escrituras de poder otorgadas por unos músicos a otros compañeros de profesión.

En lo que se refiere a los nombres que aquí aparecen, la relación más conocida y sin duda más intensa, fue la que unió a Philippe Rogier con Ghersem, que fue su discípulo. «Praeceptor meus» le llama este en la dedicatoria del libro póstumo del

---

de Sevilla, FC 11.698 Libramientos varios 1608; Noone, Mazuela y Vicente, en prensa: doc. 463). Conforme se vayan catalogando los fondos de otras catedrales aparecerán más documentos de este tipo, aunque es de presumir que en su mayor parte hayan desaparecido.

9. El marco de todo este proceso es analizado en Gómez González, 2018, pp. 140-143.

10. *Quadernos de la la* [sic] *fábrica de 97 hasta 1606*, f. 90. Archivo de la Catedral de Salamanca Cj. 66bis leg. 2 n.º 1 (Gómez González et al., 2014, p. 1062).

11. Son muy ricos los epistolarios conocidos y publicados de Miguel Gómez Camargo (1618-1684), maestro de capilla de la Catedral de Valladolid, y de Miguel Irízar (1635-1684), maestro de capilla de la Catedral de Segovia. Caballero Fernández-Rufete, 1990, 2005; López-Calo, 1963, 1965; Olarte-Martínez, 2016; Querol, 1959.

maestro, y como «discípulo que fue suyo» lo define García de Loaisa (Solar-Quintes, 1961, p. 866). Como tal («discipulo de Phelipe Rogier») figura en el inventario de la biblioteca de João IV (*Primeira parte,* 1649, p. 364). Ghersem fue el heredero de los libros de música de su maestro, entre ellos sus propias composiciones, con «una orden del maestro Felipe para el dicho Geri de Gersem escrita de su mano sobre lo que a de hacer en sus papeles y obras añadiendo y quitando» (Solar-Quintes 1961, p. 866). Como heredero, se encargó de la edición de las *Missae sex*, así como de su distribución. También tuvo en su poder «Doze libros de mottetes missas magníficas responsos de Reyes y Nauidad antíphonas de nuestra Señora Salue y Regina celi a 8. 10. ¿11? [*corregido sobre* 12] 12. 16 que son para imprimir, de Phelippe Rogier», aunque nunca vieron la luz (Bourligueux, 1966, p. 175; Vicente, 2015, p. 132).

Estos mandatos aparecen en la memoria que acompaña al testamento que hizo Ghersem en 1604 antes de partir para Flandes; en ella y en el poder que otorgó para cobrarlo, al indicar el paradero de los libros de Rogier enviados y no cobrados, recoge: «quatro libros ay en las Indias; destos tiene cuidado el m[aestr]o Victoria a quien se a de acudir» (Bourligueux 1966, p. 177; Vicente 2015, pp. 135, 137).

Relación comercial, por tanto, entre el teniente de maestro de la real capilla y el capellán de la emperatriz María en las Descalzas Reales. Pero a la vez, es relación de Victoria no con la persona pero sí con la obra de Rogier. En las Descalzas, estando allí Victoria, también se encontraba el libro impreso de misas según el inventario de ese mismo año 1604: «otro libro de misas de Philipe impreso en papel de marca mayor y cubierta de cartón y cuero colorado y dorado» (Olmos, 2003, p. 476; Vicente, 2012, pp. 215, 236). No hay datos, sin embargo, de una relación en vida.

Los vínculos de Alonso de Tejeda con Victoria están también marcados por los libros impresos. Mientras ocupaba el puesto de maestro de capilla de la Catedral de León, en marzo de 1591 el cabildo compró ocho libretes de Victoria y mandó «que yo los entregue a Texeda maestro de capilla con firma suya». Dos años más tarde Victoria envió a aquella Catedral su *Missarum liber secundus*, que llegaría también a manos de Tejeda[12].

No se conoce más contacto entre Tejeda y Rogier que el ahora publicado, pero sus nombres fueron asociados por Lope de Vega en la dedicatoria a Vicente Espinel de la comedia *El caballero de Illescas* (1602 y publicada en 1618), donde Lope escribe: «desde el origen que le dio Túbal (como consta en las Sagradas Letras) a la

12. Archivo de la Catedral de León, *Actas capitulares 1591-92*, n.º 9.913, f. 56, cabildo del 2 de marzo de 1591; *Actas capitulares 1593-94*, n.º 9.916, f. 14, cabildo del 24 de noviembre de 1593. Álvarez Pérez, 1995, p. 53; Preciado, 1974, p. 35.

edad nuestra, donde tanto han florecido Guerrero, Tejeda, Cotes, Felipe Roger y el Capitán Romero» (Vega, 1994, p. 111)[13].

4. LOS LIBROS DE VICTORIA EN LA CATEDRAL DE SALAMANCA

De las ediciones de Philippe Rogier parece que únicamente llegó el libro de misas a la Catedral salmantina (como refleja el recibo), pues no se ha encontrado ninguna noticia referente a los libros de motetes *Sacrarum modulationum, quas vulgo motecta appellant: quae quaternis, quinis, senis, & octonis vocibus concinuntur, liber primus*, impresos en Nápoles en 1595 (RISM R1936). Por el contrario, sí que está documentada la llegada de otras publicaciones de Victoria.

El cabildo del 29 de octubre de 1584 recoge este acuerdo:

> Este dia y cab[ild]o los d[ic]hos s[eñor]es mandaron dar al s[eño]r r[acioner]o Estevan Primo seis ducados para enviar a Roma a Tomé Luis de Vitoria por un libro grande de canto y unos motetes quel d[ic]ho envió al cauy[ldo] para la iglesia[14].

La redacción es un poco ambigua pero parece hacer relación a dos envíos, un libro grande que, por la fecha de envío, podría ser *Missarum libri duo* (Roma 1583, RISM V1431), más unos libretes de motetes, que en ese caso lo más probable es que fueran los *Motecta* publicados también en Roma el mismo año (RISM V1422), editados en ocho libretes en cuarto. Envíos dobles hizo Victoria por esas fechas, así es que es lo más verosímil, aunque el pago de seis ducados para ambas ediciones es muy raquítico[15]. El (o los) *Missarum libri duo* se conserva actualmente en el archivo salmantino[16] y probablemente sea lo que describe un inventario de 1841

13. Se refiere a Francisco Guerrero, Alonso de Tejeda, Ambrosio Cotes, Philippe Rogier y Mateo Romero (Matthieu Rosmarin) también conocido como «maestro Capitán».

14. *Actas capitulares* vol. 31, f. 244.

15. Por ejemplo al cabildo de La Seo de Zaragoza, el 24 de febrero de 1586:

«Yo mosén Joan Marco rationero en Nuestra Señora del Pilar otorgo aver reçibido del señor doctor Monreal canónigo de la Sancta Yglesia Metropolitana de la çiudad de Çaragoça son a saber çien reales digo diez libras y son por un libro de misas de canto de órgano [*nota al margen*: y otro de motetes] de Thomé de Victoria los quales [*corregido sobre*: el qual] yo e dado para el servitio de la yglesia sobredicha. Y por la verdad hize el presente alvalán de mi mano a 24 de febrero año 1586. Ita est Ioanes Marco [*rubricado*]. El doctor Romero prior». Vicente Delgado, 2025.

16. THOMÆ LVDOVICI | A VICTORIA ABVLENSIS | MISSARUM LIBRI DUO | QVÆ PARTIM QVATERNIS PARTIM | QVINIS, PARTIM SENIS | CONCINVNTUR VOCIBVS. | Ad Philippum secundum Hispaniarum Regem Catholicum. | ROMÆ | Ex Typographia Dominici Baſæ | M D LXXXIII. | CVM LICENTIA SVPERIORVM. Archivo de la Catedral de Salamanca, LP 11. Ver Montero, 2011, p. 240.

como «dos tomos en un volumen de misas a canto de órgano, su autor don Tomás Luis de Victoria»[17].

El siguiente envío de Victoria es el ya comentado de 1601, recogido en el copiado recibo. Y el último es el de la postrera edición hecha por el compositor, el *Officium defunctorum* publicado en Madrid en 1605 (RISM V1436):

> El m[aestr]o Bibanco m[aestr]o de capilla desta S[an]ta Ygles[i]a dio rel[aci]ón que al s[eño]r ob[is]po le auía ymbiado Tomé de Victoria músico vn libro de canto de vna missa y unoss motetes y su s[eñorí]a lo reçibió y lo m[an]dó enquadernar y se lo entregó y dio p[ar]a serui[ci]o de la Igles[i]a y le mandó diese quenta desto a sus m[e]r[ce]d[e]s. El cab[ild]o lo recibió y estimó en mucho la m[e]r[ce]d q[ue] su s[eñorí]a açía a la ¿f[ábric]a? y se m[an]dó cantasse por él y se pusiese con los demás libross de mússica de la Igles[i]a[18].

En esta ocasión el envío no es realizado directamente al cabildo o por medio de intermediario como el maestro de capilla u otro músico con quien pudiera tener contacto, sino al obispo y este lo reenvía a su catedral por medio del maestro de capilla. No fue frecuente ese *modus operandi*, pero sí se conoce algún otro caso con la producción de Victoria: la edición de 1600 llegó al cabildo de la catedral de Tarazona pero por mano del obispo, a quien se le devolvió para comprarlo directamente en Madrid[19]. Hay algún otro caso con otros autores[20]. Puesto que el libro llegó al prelado salmantino y este lo encuadernó, no aparece reflejado en los documentos de gastos de la catedral. Creo que no cabe duda de que se trate del *Officium defunctorum* a pesar de que no diga que sea una misa de réquiem; pero la fecha y el que se describa como un único libro con una sola misa y unos motetes (en sentido estricto únicamente *Versa est in luctum*, aunque quizás los responsorios pudieran entrar bajo este término tan ambiguo de «motetes»), no puede referirse a otra edición. Es de destacar la rapidez del proceso; el libro debió de ver la luz entre

17. *Inventario de los papeles de música entregados por el señor don Manuel Doyagüe maestro de capilla de la Santa Iglesia de Salamanca [al] infrascrito obrero mayor de la misma, al efecto autorizado por el ilustrísimo cabildo con el señor don Francisco Olivares primer organista de dicha Santa Iglesia para depositarlos y custodiarlos en el archivo. 6 de mayo de 1841*, Archivo de la Catedral de Salamanca, Alac. 4, leg. 1, n.º5. Citado en Montero García, 2010, vol. II, p. 71.

18. Archivo de la Catedral de Salamanca, *Libro de actas capitulares de 1 de julio de 1600 a 28 de septiembre de 1616*, f. 360v. Cabildo del 14/10/1605. Noone y Vicente, 2021.

19. Archivo de la Catedral de Tarazona, *Libro de resoluciones del cabildo general desde 15 de mayo de 1587 hasta 2 de diciembre de 1605* (Caja 149), f. 179v.

20. El *Libro de missas, motetes, salmos, Magnificas y otras cosas tocantes al culto divino* de Sebastián López de Velasco (Madrid, Imprenta Real, 1628) (RISM L2822), fue enviado al obispo de Oviedo, quien lo entregó al cabildo en abril de 1634. En esta ocasión el obispo lo envía directamente al cabildo y este acuerda hacer entrega al maestro de capilla (Arias del Valle, 1978, p. 191).

junio y agosto: el 13 de junio firma la dedicatoria y el 25 de agosto data una carta de Victoria enviándolo al cabildo de Zaragoza; probablemente hacia esta última fecha haría el envío a Salamanca (Vicente, 2016, pp. 34-38)[21]. Salamanca es la primera Catedral en donde se documenta la llegada del *Officium defunctorum*, veintiún días antes que en la Seo de Zaragoza (4 de noviembre) y bastante antes que en Granada, Burgos, Sigüenza, Cádiz, Zamora o Teruel.

En definitiva, al menos cuatro ediciones hechas por Victoria (Roma, 1583ª; Roma, 1583b; Madrid, 1600ª; Madrid, 1605) llegaron a la Catedral de Salamanca y fueron incorporadas a su archivo musical.

5. GÉRY DE GHERSEM Y LOS LIBROS DE PHILIPPE ROGIER

En el contexto de los libros de polifonía editados en España, las *Missae sex* de Rogier constituyen un caso un tanto singular pues el autor murió el 29 de febrero de 1596, antes de su edición. Como ya queda dicho, fue su discípulo quien se encargó de la parte material de la edición, y el guardajoyas Antonio Voto de la gestión económica, así como de recibir los ejemplares impresos. Este último entregaría una parte a Ghersem: «los libros q[u]e quedaren en ser después de sacado el d[ic]ho coste los entregaréys al d[ic]ho Gheri Ghersem para q[u]e disponga y se aproveche dellos a su voluntad como fue la del d[ic]ho maestro [Rogier]»[22]. Fue Ghersem, por tanto, quien se encargó de realizar los envíos a las distintas instituciones, lo que ha dado lugar a algunas confusiones de identificación.

En la «Memoria de los libros que tengo embiados en diferentes partes que no me an embiado ni dado aun nada por ellos» adjunta a su testamento de 3 de julio de 1604 (repetida en un poder notarial del día siguiente) (Bourligueux, 1966, pp. 177-178; Vicente, 2015, pp. 135-137) detalla los siguientes:

- Al papa, se entiende la Capilla Sixtina del Vaticano.
- Al obispo de La Guarda.
- Al obispo de Oporto.
- Al marqués del Carpio, junto con «otros libros de motetes del m[aest]ro Phelippe» (*Sacrarum modulationum* de 1595).
- Cuenca (Catedral).
- Cuatro a las Indias, que gestiona Tomás Luis de Victoria.

21. En la carta a Zaragoza dice expresamente que «este oficio (...) le he embiado a todos los príncipes y perlados de España»; hasta el momento este es el único caso de obispo español que ha sido documentado.

22. Real Cédula de 15/IV/1598. Solar-Quintes, 1961, p. 866.

– Tres a Aragón, que gestiona el organista Diego Gascón.
– Palencia (Catedral).
– Toledo (Catedral).
– Guadix (Catedral).
– Málaga (Catedral), que gestiona el organista Sebastián Martínez.

El listado es de sumo interés no sólo porque informa sobre algunos de los destinos de la distribución y circulación del libro, sino también porque indica los nombres de los intermediarios que hacían llegar los libros a los cabildos y los dineros al propio Ghersem, intermediarios que frecuentemente eran también músicos. Pero además evidencia algunos recipiendarios que es difícil conocer por otras fuentes, pues casi todo lo que conocemos es a través de los archivos catedralicios; aquí en cambio se habla de obispos (aunque luego los libros pudieran terminar en sus respectivas catedrales, como ya se ha visto en Salamanca y Oviedo) y aristócratas como el marqués del Carpio, cuyas bibliotecas musicales son todavía muy poco conocidas.

Además de los datos contenidos en esta «memoria» están las noticias de la llegada, recepción y pago en las distintas catedrales españolas (no conozco noticias sobre la distribución en América, Italia o Flandes):

– Valencia 23/4/1599. Recibo de Joseph de Ysassy [Isasi] músico de tecla, por «un libro de misas de Philipe Rogier maestro de capilla que fue del rey nuestro señor»[23]. Es la referencia más antigua, pocos meses después de que el libro viera la luz. No se dice que el libro fuera enviado a la Seo de Valencia; pudo llevarlo el propio organista que quizás lo adquiriera en Madrid. En este caso no aparece la intermediación de Ghersem.
– Toledo 11/5/1599 (Casares 1986, p. 412; Noone, 2006, p. 258). Tanto el libramiento como la partida de las cuentas de fábrica, indican que el «libro de missas de canto de Phelipe Rogier» fue enviado por el teniente de maestro de la real capilla, al que se le debe pagar.
– Sevilla 12 y 14 de abril de 1600. En las actas capitulares que dan cuenta del envío le nombra como «maestro de capilla del Rey» y como «maestro Geri de Ghersem» (Gutiérrez Cordero et al., 2012, p. 10).
– Granada 20/3/1601. El acta capitular refiere el libro de seis misas de «maese Felipe» (López-Calo, 1963, p. 129).

23. Archivo de la Catedral de Valencia n.º 1298, *Cuentas de tesorería de fábrica 1591-1602*, ff. 8v y 22 (Pérez Giménez, 2022, p. 319).

– Pamplona 29/3/1601. En el acuerdo capitular se habla del libro de canto de «Geri de Gersen» que envió desde Madrid; en el recibo se le denomina «un capellán del rey» (Goñi Gaztambide, 1986, p. 60). También «Jeri de Jersen» envió a esta catedral unos «libro de motetes»; posiblemente la edición de Rogier de 1591 *Sacrarum modulationum, quas vulgo motecta apellant*.
– Burgos 16/7/1601. El acta capitular recoge que «el maestro de capilla de la capilla real había inviado un libro de las misas dominicales apuntado en canto de órgano que él había compuesto» (López-Calo, 1996, p. 20).
– Valladolid 18/7/1601. El acta capitular y las cuentas de fábrica refieren un libro de música enviado por «Xeris teniente de m[aestr]o de capilla». Palacios Sanz no identifica el nombre de Ghersem ni, en consecuencia, el libro de Rogier[24]. Seis años más tarde se compraron unos motetes de Philippe Rogier, pero fue una venta particular del organista
– Salamanca 8/8/1601, documento aquí publicado y comentado. El libramiento, muy detallado en su brevedad, cita a «Geri de Cherssem teniente de maestro de la capilla real» y hace referencia al «libro de música que ymbió de las obras de Phelipe Rogier».
– Cuenca 2/12/1602. Al indicar el acta capitular «maestro de capilla de su magestad», José Luis de la Fuente piensa que se trata de Mateo Romero, maestro en ese momento; pero no existe noticia de que Romero enviara ningún libro de música, ni impreso ni manuscrito, ni propio ni ajeno. Por lo visto en otras catedrales, se trata del envío hecho por Ghersem, teniente de maestro y no maestro, del libro de Rogier. La Catedral de Cuenca era uno de los lugares a que Ghersem había enviado el libro y no había cobrado, según la memoria de su testamento. De la Fuente, al no encontrar referencia de pago, sospecha que el cabildo lo rechazó quizás porque el maestro de capilla Juan de Castro Mallagaray tenía cierta desavenencia personal con Mateo Romero; pero en realidad —si se trata del libro de Rogier, como pienso— el rechazo fuera porque el maestro ya lo tenía (Castro Mallagaray fue discípulo suyo) y de hecho su viuda lo vendería a la catedral en 1632 (Fuente Charfolé, 2012, p. 27; Fuente Charfolé, 2021, pp. 376, 490).
– Plasencia 1602. «Un libro de misas en canto de órgano del maestro de capilla del rey» (López-Calo, 1995, p. 38).

24. Archivo de la Catedral de Valladolid, Caja 291, *Libro de la fábrica desde el año de 1595 asta el año de 605*, f. 123. (López-Calo, 2007, vol. VII, p. 78; Palacios Sanz, 2023, pp. 304, 310). Curioso que en el índice onomástico de este último volumen, p. 446, sí se identifica «Jeri, véase Ghersem, Géry de».

– Jaén 1/3/1603. El canónigo obrero informa al cabildo «acerca del libro de música que conpuso el maestro de la capilla de su magestad». El libro fue llevado y cobrado por el racionero Pedro de Salas (Jiménez Cavallé, 1998, p. 57).
– Zaragoza, Santa María del Pilar, 3/6/1603. El cabildo acuerda pagar al «teniente de maestro de capilla del Rey» por un libro de misas que envió, aunque en la entrada al margen dice solo «Al maestro de capilla de Su Magestad» (Ezquerro Esteban, 2018, p. 22).
– Palencia 9/2/1605. Se aprueba el pago a Philippe Rogier que había mandado un libro de misas. Kastner señaló la contradicción con la fecha de fallecimiento, ignorando el papel de Ghersem. En la citada «Memoria», este último había dejado dicho que no le querían y que el maestro de capilla lo devolvería; quizás eso explique la cantidad tan baja que pagaron (Kastner, 1959, p. 164; Luis Iglesias, 1990, p. 299)[25]. Quizás también el cambio de opinión y la cantidad pagada tenga que ver con el estado de salud del maestro de capilla Bricio Gaudí, que falleció a los seis días. O quizás Ghersem hizo un último intento por recuperar el volumen o cobrarlo antes de su marcha de Castilla (y hasta es posible que pasase por la ciudad en su viaje a Flandes).

Tabla 1. Pagos por el libro *Missae sex* de Philippe Rogier

Toledo	330 reales (30 ducados)
Plasencia	320 reales (20 escudos de oro)
Sevilla	300 reales
Valencia	250 reales (23 libras 18 sueldos 2 dineros)
Granada	220 reales (20 ducados)
Pamplona	132 reales (12 ducados)
Valladolid	132 reales (12 ducados)
Jaén	132 reales (12 ducados)
Salamanca	100 reales
Zaragoza, El Pilar	100 reales
Palencia	96 reales (6 escudos)

Nota: Las cantidades se han pasado a reales.

25. José López-Calo no recoge este acuerdo en su documentario publicado sobre esta Catedral.

6. ALONSO DE TEJEDA Y EL LIBRO IMPRESO

Tejeda fue otro de los grandes polifonistas protagonista del cambio de siglo. No llevó a la imprenta ninguna de sus obras como sí hicieron compositores tan cercanos a él como Alonso Lobo (a quien sucedió como maestro de capilla de la Catedral de Toledo), Sebastián de Vivanco (su sucesor en el magisterio de Salamanca), Bernardo Clavijo del Castillo (con quien coincidió en la capilla de Salamanca), Juan Esquivel de Barahona (propuesto para sucederle en Salamanca) o Diego Bruceña (con quien rivalizó en varias oposiciones y sucesor suyo en los magisterios de León y Zamora). Ese hecho ha influido en su valoración hasta nuestros días, considerándolo como perteneciente a otra «liga» o categoría inferior a los músicos cuya obra sí vio la luz en las prensas. Sin embargo, dejó preparados tres libros con su música que entregó al cabildo por su codicilo del 2 de febrero de 1628, que tal vez pudieran estar pensados para la imprenta: «era su voluntad de dexar a la fábrica de la dicha santa iglesia sus libros de canto, echos por su mano, que son tres encuadernados en beçerro y tabla, de mysas y magnificas» (Luis Iglesias, 1987, p. 339)[26].

Su relación con los impresos musicales tuvo que ver exclusivamente con la distribución de los libros de otros colegas, haciendo de intermediario, recipiendario o pagador de algunos volúmenes. Fue frecuente que los autores se sirvieran de otros músicos, el maestro u otros miembros de la capilla musical, para presentar sus obras a los cabildos: Victoria se sirvió de Guerrero en la Catedral de Sevilla[27] o Vivanco de Marcos Esteban de Castro en la de Ávila[28]. Esta función de intermediario podría requerir, incluso, de un poder notarial. Así lo hizo Vivanco con Tejeda el 18 de mayo de 1609 para enviar y cobrar de la Catedral de Toledo su *Liber magnificarum*; en virtud de ese poder Tejeda cobró 30 ducados y extendió recibo el 10 de noviembre.[29] Más tarde, Sebastián Aguilera de Heredia haría lo propio el 27 de junio de 1619 al otorgar poder al organista de la capilla real Bernardo Clavijo para cobrar los 400 reales que el cabildo de Toledo le había concedido por su colección de magníficats titulada *Canticum Beatissime Virginis* (Casares, 1986, pp. 141-142).

26. Nada se dice, pero bien pudiera tratarse de un caso paralelo al de Pedro Fernández Buch, que en su testamento de 3 de enero de 1623 deja al cabildo de la Catedral de Sigüenza «tres libros de música que he compuesto en el tiempo que he estado y residido en la dicha catedral, que el uno es de misas y el otro de magníficats y lamentaciones y el otro de motetes de todo el año, los cuales mando a la dicha santa iglesia ... e impresos los dichos libros valen muchos ducados» (Suárez-Pajares, 1998, p. 314).

27. Carta de 14 de enero de 1582. Archivo de la Catedral de Sevilla, FC 10 997 exp. 9A. (Vicente, 2010, pp. 54-55).

28. Archivo de la Catedral de Ávila, *Actas capitulares* vol. 37 (1608-1610), f. 48bis (recte 58), cabildo del 16 de abril de 1608. Noone, Mazuela y Vicente, en prensa: doc. 155.

29. Archivo y Biblioteca capitulares de Toledo, OF Papeles varios. Libramientos y otras cuentas de la obra 1608-1610. Copia del poder y recibo firmado por Alonso de Texeda. Noone, Mazuela y Vicente, en prensa: doc. 1.093.

En otras ocasiones, como se vio antes en relación con Victoria en la Catedral de León, Tejeda se encargó, en tanto que maestro de capilla, de recibir los impresos que llegaban a la respectiva catedral. Ello suponía examinar el contenido de las obras, valorarlo para informar al cabildo e incorporarlo al inventario y al repertorio vivo de la capilla[30].

A la ya citada adquisición en 1591 por la Catedral de León de ocho libros de Victoria, se añadían en la misma compra otros cinco de Francisco Guerrero, entregados «a Texeda maestro de capilla con firma suya»[31]. Y mientras ocupaba el magisterio de la Catedral de Burgos, el cabildo recibió los envíos de sendos libros impresos de Aguilera de Heredia (1619) y Bruceña (1621); ambos fueron aceptados por el cabildo y entregados al maestro de capilla sin que conste la intervención de este, pero hay que tener en cuenta que en esa catedral el maestro era canónigo y por tanto un miembro más del cabildo (López-Calo, 1996, pp. 233, 271).

El recibo salmantino ahora comentado incrementa esa relación de Tejeda con los impresos musicales y en concreto con las ediciones de Rogier y Victoria.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Alfonso de Vicente Delgado.

Agradecimientos y financiación

Trabajo no financiado.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

30. Hay referencias a cómo el cabildo entregaba el libro recibido al maestro de capilla y este informaba en reunión capitular posterior; incluso podía informar desfavorablemente de modo que el cabildo decidiera devolver el libro a su autor. Es el caso del envío de Victoria de sus *Missae, Magnificat, motecta, psalmi & alia*... a la Catedral de Ávila el 6 de junio de 1601: «Remitiéronse al maestro de capilla para que los vea y refiera su pareçer en cabildo». Y dos días más tarde, en virtud de lo que dijo el maestro y los cantores después haberlo «visto en la prueba», «determinaron que se le buelban a embiar al dicho Bartolomé de Victoria» (Archivo de la Catedral de Ávila, *Actas Capitulares* 33, 1599-1601, s.f.; Noone, Mazuela y Vicente, en prensa: doc. 124 y 125). Otros ejemplos, en Sevilla, el 6 de junio de 1608 «cometieron a mí el secretario infraescrito y al maestro Alonso Lobo vean que cosa es el libro de musica que presenta a la Iglesia Juan Esquibel maestro de capilla de la Santa Iglesia de Salamanca», o el 30 de julio de 1612, «cometieron al s[eño]r d[o]n Manuel Sarmiento que bea el libro que presento en este cabildo el maestro de capilla de Lixboa con el maestro Lovo y haga cantar una misa del en la primera fiesta» (Gutiérrez Cordero et al., 2012, pp. 34, 71).

31. Archivo de la Catedral de León, *Actas capitulares 1591-92*, n.º 9.913, f. 56, cabildo del 2 de marzo de 1591. El recibo no se ha localizado. Álvarez Pérez, 1995, p. 53; Preciado, 1974, p. 35.

7. BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Pérez, J. M. (1995). *La música sacra al servicio de la Catedral de León*. Asociación Amigos del Órgano Catedral de León.

Arias del Valle, R. (1978). El magisterio de capilla de la Catedral de Oviedo en el siglo XVII (1597-1723). *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos*, *32*(93/94), 177-215.

Becquart, P. (1967). *Musiciens néerlandais à la cour de Madrid: Philippe Rogier et son école (1560-1647)*. Académie Royale de Belgique.

Bonal Asensio, C. (2019). Los ministriles polifónicos en la Catedral de El Salvador de Zaragoza y en la colegiata de Santa María La Mayor y del Pilar: ampliación documental (1498-1604). *Nassarre*, (35), 171-201.

Bourligueux, G. (1966). Géry de Ghersem, sous-maître de la chapelle royal d'Espagne. *Mélanges de la Casa de Velázquez*, (2), 163-178. https://doi.org/10.3406/casa.1966.946

Caballero Fernández-Rufete, C. (1990). Miguel Gómez Camargo: Correspondencia inédita. *Anuario Musical*, (45), 67-102.

Caballero Fernández-Rufete, C. (2005). *El barroco musical en Castilla y León. Estudios en torno a Miguel Gómez Camargo*. Diputación de Valladolid.

Casares, E. (Ed.). (1986). *Francisco Asenjo Barbieri: Biografías y documentos sobre música y músicos españoles (Legado Barbieri)* (Vol. 1). Fundación Banco Exterior.

Ezquerro Esteban, A. (2018). Noticias relativas a la música y los músicos procedentes de las Actas Capitulares de la iglesia de Santa María del Pilar de Zaragoza, 1600-1656. *Cuadernos de Investigación Musical*, (6), 5-48. https://doi.org/10.18239/invesmusic.v0i5.1915

Fuente Charfolé, J. L. de la. (2012). La música en la Catedral de Cuenca: El maestro de capilla Juan de Castro y Mallagaray (Cañete, 1570 - Cuenca, 1632). En *El libro de la 51 SMRC [5 artículos]* (pp. 9-37). Semana de Música Religiosa.

Fuente Charfolé, J. L. de la. (2021). *Documentos para el estudio de la música y la cultura en Castilla - La Mancha. Actas capitulares de la Catedral de Cuenca (1498-1660)*. Alpuerto.

Gómez González, P. J. (2018). Los libros de cuentas generales de fábrica. Estudio documental. En P. J. Gómez González, R. Vicente Baz, & J. Montero García, *Los libros de cuentas generales desde los inicios de la Catedral Nueva de Salamanca* (pp. 21-57). Catedral de Salamanca.

Gómez González, P. J., Vicente Baz, R., & Rodríguez Martín, V. (2014). *La sala de la contaduría. Catálogo de la documentación económica del archivo Catedral de Salamanca*. Catedral de Salamanca.

Goñi Gaztambide, J. (1986). *La capilla de música de la Catedral de Pamplona en el siglo XVII*. Catedral de Pamplona.

Gutiérrez Cordero, R., & Montero Muñoz, M. L. (2012). *La música en la Catedral del Sevilla a través de sus autos capitulares: Volumen I 1599-1644*. Junta de Andalucía.

Jiménez Cavallé, P. (1998). *Documentario musical de la Catedral de Jaén. I. Actas capitulares*. Centro de Documentación Musical de Andalucía.

Kastner, M. S. (1959). Palencia, encrucijada de los organistas españoles del siglo XVI. *Anuario Musical*, (14), 115-164.

Knighton, T. (2007). Morales in Print: Distribution and Ownership in Renaissance Spain. En O. Rees & B. Nelson (Eds.), *Cristóbal de Morales. Sources, Influences, Reception* (pp. 161-175). The Boydell Press.

López-Calo, J. (1963). *La música en la Catedral de Granada en el siglo XVI*. Fundación Rodríguez Acosta.

López-Calo, J. (1963-1965). Corresponsales de Miguel de Irízar (I-II). *Anuario Musical*, (18), 197-222; (20), 209-233.

López-Calo, J. (1995). *La música en la Catedral de Plasencia (notas históricas)*. Ediciones de La Coria; Fundación Xavier de Salas.

López-Calo, J. (1996). *La música en la Catedral de Burgos: Vol. IV. Documentario musical (II)*. Caja de Ahorros y Monte de Piedad el Círculo Católico de Obreros.

López-Calo, J. (2007). *La música en la Catedral de Valladolid*. Ayuntamiento de Valladolid.

Luis Iglesias, A. (1987). La música policoral de Alonso de Tejeda. *Anuario Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo*, 331-437.

Luis Iglesias, A. (1990). Manuscritos e impresos con polifonía en la Catedral de Palencia (1535-1633). En M. V. Calleja González (Coord.), *Actas del II Congreso de Historia de Palencia* (Vol. 5, pp. 293-304). Diputación Provincial de Palencia.

Montero García, J. (2002). La música en la Catedral de Salamanca. En *Catálogo de la Exposición Ieronimus. 900 años de arte y de historia. 1102-2002* (pp. 143-174). Catedral de Salamanca.

Montero García, J. (2010). *La figura de Manuel José Doyagüe (1755-1842) en la música española* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. Docta Complutense.

Montero, J. (Dir.). (2011). *Catálogo de los fondos musicales del archivo Catedral de Salamanca*. Catedral de Salamanca.

Noone, M. (2006). Printed polyphony acquired by Toledo Cathedral, 1532-1669. En I. Fenlon & T. Knighton (Eds.), *Early Music Printing and Publishing in the Iberian World* (pp. 241-272). Reichenberger.

Noone, M., & Vicente Delgado, A. de. (2021). Llegada del Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria a la Catedral de Salamanca (1605). *Paisajes Sonoros Históricos*. http://www.historicalsoundscapes.com/evento/1328/salamanca

Noone, M., Mazuela, A., & Vicente, A. de. (en prensa). *Sebastián de Vivanco entre el coro, el aula y la imprenta*. Catedral de Salamanca.

Olarte-Martínez, M. M. (2016). *Una correspondencia singular: maestros de capilla, ministriles y bajonas, tomando el pulso de la música española del último barroco*. Universidad de Salamanca. https://doi.org/10.2307/j.ctt1mtz5g7

Olmos, Á. M. (2003). Aportaciones a la temprana historia musical de la capilla de las Descalzas Reales de Madrid (1576-1618). *Revista de Musicología*, *26*(2), 439-489. https://doi.org/10.2307/20797806

Palacios Sanz, J. I. (2023). Recepción y producción autóctona de repertorios musicales en la Colegiata-Catedral de Santa María La Mayor de Valladolid (a. de 1547-1629). En E. Esteve, J. Griffiths, & F. Rodilla (Eds.), *Cultura y música en la Península Ibérica hasta 1650* (pp. 291-325). Reichenberger; Universidad de Extremadura.

Pérez Giménez, J. I. (2022). La biblioteca de la Catedral de Valencia en el siglo XVI a partir de los libros de fábrica y tesorería. En E. Callado Estela (Coord.), *La Catedral de València en el siglo XVI. Humanismo y reforma de la Iglesia* (Vol. I, pp. 313-326). Diputació de València; Institució Alfons el Magnànim.

Pérez Pastor, C. (1907). *Bibliografía madrileña o descripción de las obras impresas en Madrid. Parte tercera (1621 al 1625)*. Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Preciado, D. (1974). *Alonso de Tejeda (ca. 1556-1628) polifonista español* (Vol. 1). Alpuerto.

Primeira parte do index da livraria de musica de muito alto e poderoso rey dom João o IV, nosso senhor. (1649). Paulo Craesbeck.

Querol, M. (1959). Corresponsales de Miguel Gómez Camargo. *Anuario Musical*, (14), 165-177.

Ruiz Jiménez, J. (2024). Carta autógrafa de Cristóbal de Morales que acompañaba el envío de sus libros de misas impresos en Roma al príncipe Felipe (1546). *Paisajes Sonoros Históricos*. https://www.historicalsoundscapes.com/evento/1675/madrid

Solar-Quintes, N. Á. (1961). Nuevos documentos sobre ministriles, trompetas, cantorcicos, organistas y capilla real de Felipe II. En *Miscelánea en homenaje a monseñor Higinio Anglés* (Vol. II, pp. 851-888). CSIC.

Suárez-Pajares, J. (1998). *La música en la Catedral de Sigüenza, 1600-1750*. ICCMU.

Vega, L. de. (1994). *Obras completas: Comedias* (Vol. 8). Fundación José Antonio de Castro.

Vicente, A. de. (2008). *Tomás Luis de Victoria: Cartas (1582-1606)*. Fundación Caja de Madrid.

Vicente, A. de. (2012). El entorno femenino de la dinastía: el complejo conventual de las Descalzas Reales (1574-1633). En A. de Vicente & P. Tomás (Eds.), *Tomás Luis de Victoria y la cultura musical en la España de Felipe III* (pp. 197-246). Centro de Estudios Europa Hispánica; Machado Libros.

Vicente, A. de. (Ed.). (2015). *El mayordomo de Tomás Luis y otros documentos sobre Victoria*. Edición del autor.

Vicente, A. de. (2016). Cómo «vender» un libro de polifonía. Cartas al cabildo de la Seo de Zaragoza (1583-1627). En A. de Vicente Delgado, *Libros y obras de Tomás Luis de Victoria (y otros) en Aragón* (pp. 19-44). Edición del autor.

Vicente Delgado, A. de. (2025). Documentación de Tomás Luis de Victoria en la Catedral de Zaragoza (1586-1608). *Paisajes Sonoros Históricos*. https://www.historicalsoundscapes.com/evento/1692/zaragoza

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481505528

LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL OFICIO DE AGENTE SOLICITADOR EN LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID: LA COMISIÓN DEL CONDE DE CASTRILLO EN TORNO AL DONATIVO DE LAS GUERRAS DE ITALIA (1629)

The Creation and Consolidation of the Solicitor's office in the Chancery of Valladolid: The Commision of the Count of Castrillo regarding the donation for the Italian wars (1629)

Sandra BERTOLINI CRESPO
Universidad de Valladolid
sandra.bertolini@uva.es

Recibido: 30/07/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: El propósito del presente artículo es analizar el oficio de agente solicitador en la Real Chancillería de Valladolid, con especial atención a la incorporación de veinte plazas a la plantilla oficial del tribunal en 1629. Esta medida, promovida por García de Haro y Avellaneda, II conde de Castrillo, como parte del donativo destinado a financiar las guerras de Italia, lejos de ser un simple recurso fiscal, supuso un punto de inflexión en la administración de justicia dentro del tribunal y en el régimen del oficio, antes ejercido sin reconocimiento oficial. Para comprender el alcance de esta reforma, el estudio examina la actuación previa de los agentes solicitadores y los factores que motivaron su institucionalización y encargo al conde, así como sus implicaciones fiscales, judiciales y políticas. El caso permite, en última instancia, entrever los mecanismos de ejercicio del poder regio en el territorio y la progresiva equiparación funcional y corporativa de los solicitadores con el cuerpo de procuradores.

Palabras clave: agente solicitador de negocios; donativo; Conde de Castrillo; García de Haro y Avellaneda.

ABSTRACT: The aim of this article is to examine the solicitor's office in the Royal Chancery of Valladolid, with particular attention to the incorporation of twenty positions into the tribunal in 1629. This measure, promoted by García de Haro y Avellaneda, second Count of Castrillo, as part of the aid or donation intended to finance the wars in Italy, far from being a mere fiscal device, it marked a turning point in both the administration of justice within the tribunal and in the status of the office itself, which had previously operated without formal recognition. To understand the reach of this reform, the study considers the earlier activity of the solicitors, the motivations behind their institutionalisation and commission to the Count, as well as the fiscal, judicial, and political implications. Ultimately, the case provides insight into the mechanisms through which royal authority was exercised in the territories and into the gradual functional and corporate convergence of the solicitors with the body of *procuradores*.

Keywords: solicitor; donation; Count of Castrillo; García de Haro y Avellaneda.

1. INTRODUCCIÓN

R. Kagan, al abordar el saber historiográfico sobre los «hombres de leyes» de los siglos XVI y XVII, señaló que, entre las diversas figuras que conformaban la dinámica procesal de los tribunales a través del asesoramiento legal brindado a los pleiteantes, quizás ninguna resultara tan esquiva y «oscura» como la del solicitador (1991, p. 74). Cierto es que la ausencia de una temprana regulación y de normas definidas a las que pudieran acogerse, convierte a los agentes solicitadores, frente al resto de «consejeros legales», en una figura particularmente enigmática, menos definida institucionalmente y, por ello, menos explorada que la de abogados y procuradores, especialmente en el contexto de las chancillerías castellanas.

Si bien el presente trabajo no se ocupa de un análisis de la figura histórica del agente solicitador, se propone, no obstante, examinar un episodio poco explorado que marcó un punto de inflexión tanto en el régimen del dicho oficio como en la propia configuración del tribunal: la creación, en 1629, de veinte plazas de agente solicitador del número en la Real Chancillería de Valladolid, a instancias de García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo, como parte del donativo de las guerras

de Italia. Esta reforma incluyó igualmente la dotación de plazas para diligencieros; sin embargo, el estudio se centra en los agentes solicitadores debido a su mayor proyección e impacto en la administración de justicia en el tribunal vallisoletano. Se analizan las causas que motivaron la comisión conferida al conde, entonces consejero del Consejo Real de Castilla y de la Cámara, y se presta particular atención a las repercusiones de esta medida tanto de índole política como en la administración de justicia del tribunal. Especialmente, se atiende a la adquisición de prerrogativas por parte de los agentes solicitadores y las consecuencias de largo alcance que ello conllevó, aproximándose gradualmente, tanto en funciones como en entidad, al cuerpo de procuradores.

La relevancia de la reforma de 1629 radica en su inserción dentro del más amplio fenómeno de los donativos reales solicitados para paliar los persistentes problemas financieros de la Monarquía. En particular, aquellos vinculados con la guerra de Italia de entre 1625 y 1636 y las peticiones de perpetuación, acrecentamiento y venta y consumo de oficios que dicha petición recogió. La historiografía ha estudiado con especial atención la aplicación de esta medida sobre oficios concejiles —como regidurías, alférez mayor y alguacil mayor—, dejando de lado la atención sobre los cargos vinculados a la justicia regia, y en territorios como Castilla la Nueva (Lanza García, 2008, 2010b), Andalucía (Fayard, 1982, p. 111; Lanza García, 2010a) y Navarra (Correa, 2019). En cambio, la comisión encomendada a García de Avellaneda en Valladolid —inscrita en este mismo contexto— ha recibido menos atención. No obstante, son referentes para conocer el proceso enajenador en los oficios de justicia los estudios de Gómez González (2000), Andújar Castillo (2004, 2022a, 2022b), Marcos Martín (2007, 2008).

Así, convergen en este estudio las dimensiones financiera y judicial, revelando las complejas tramas de interconexión entre los distintos brazos de la Monarquía y el papel de quienes articularon su entramado institucional, como el conde de Castrillo.

2. LOS AGENTES SOLICITADORES EN LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID ANTES DE 1629

A diferencia de los abogados y procuradores, los agentes solicitadores de negocios no fueron plenamente incorporados a la plantilla oficial de la Chancillería de Valladolid hasta el año 1632 —aunque el proceso de integración se remontó al 1629—, ni, en términos generales, figuraron previamente en registros institucionales hasta bien entrada la década de 1620. En contraste, tanto procuradores como abogados ejercían de manera oficial ante la Audiencia, con un número previamente establecido y regulado.

Los solicitadores, también llamados *tinterillos* o *pica-pleitos* (Pérez Perdomo, 2003, p. 577), actuaban en el ámbito de los concejos, chancillerías y audiencias, y tomaron su nombre de las funciones que desempeñaron: según el *Diccionario*

historico, y forense del Derecho Real de España, trataban negocios y pleitos en nombre de los litigantes, orientando e instruyendo a las partes en «el modo de introducir, continuar, y *solicitar* la consecución de estos derechos»[1]. Es decir, su función principal consistía en solicitar, en nombre de los pleiteantes, la tramitación y avance de los negocios, actuando de eslabón entre sus clientes y los tribunales. En la práctica, desempeñaban actividades propias del oficio de procurador, cuerpo profesional con entidad y funciones en parte similares.

El propio Fernández de Ayala Aulestia, elaborador de la *Práctica y formulario de la Chancillería de Valladolid dirigido a la Real Chancillería, Presidente y jueces della* (1667), ejerció como procurador en la audiencia vallisoletana, y sobre su oficio afirmaba que «concurre tanta obligación y peso, que se puede decir sin exageración que en el buen despacho consiste el bueno ó mal sucesso de los pleytos, por ser la llaue por donde entran, y quien principalmente para el estilo y hecho de ellos, les da la dirección para su mejor acierto»[2].

Empero, una de las diferencias más sustanciales entre procuradores y solicitadores radicó en que los primeros actuaron en virtud de un título real —es decir, por concesión del monarca—, lo que implicaba una identificación jurídica con la parte a la que representaban. En cambio, los agentes solicitadores se limitaban a diligenciar y mover el proceso. De hecho, la Recopilación de las *Ordenanzas* de 1566 prohibieron expresamente la realización de autos y la presentación de peticiones, permitiéndose, únicamente y contando con poder de la parte, designar un procurador que lo defendiera en juicio[3]. Esta distinción también la subraya Torremocha Hernández al analizar las diferencias entre ambos cuerpos profesionales en el siglo XVIII:

> Ambos eran elementos enraizados en el sistema procesal, que ayudaban a solventar los trámites previos y circundantes al juicio. Si los procuradores tenían o podían tener presencia en el tribunal, donde —además de los abogados— representaban a alguna de las partes, los agentes realizaban tareas necesarias para culminar el proceso, pero fuera de los tribunales (2011, p. 146).

1. Cornejo, A. (1779). *Diccionario historico, y forense del Derecho Real de España*, p. 21.
2. Fernández de Ayala Aulestia, M. (1667). *Práctica y formulario de la Chancillería de Valladolid dirigido a la Real Chancillería, Presidente y jueces della*, Capitulo XXVI, *De los Procuradores*, p. 44. También ejerció como procurador el autor de la *Práctica de la Real Chancillería de Granada*, Juan Martínez Lozano (López de Nevot, 2005), a mediados del siglo XVII, quien afirmaba sobre aquellos oficios que «son los mas esenciales y neçesarios en ella, porque los pleytos, y causas no se pueden seguir, ni sustançiar sin procuradores, por quanto las partes litigantes, ni otras personas pueden dar peticiones, ni hacer autos, sino ellos», f. 27r.
3. Fernández de Córdoba, F. (1566). *Recopilación de las Ordenanzas de la Real Audiencia y Chancillería de Su Magestad que reside en la villa de Valladolid* [RORChV], Valladolid, f. 79, col. 2; Ibidem, f. 209, col. 1; y Cornejo, A. (1779). *Diccionario histórico, y forense del Derecho Real de España*, p. 21. Sobre la *Recopilación de las Ordenanzas* de 1566, véase Garriga Acosta, C. (2007). *Recopilación de las ordenanzas de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid*. Consejo General del Poder Judicial.

En efecto, los procuradores podían representar en juicio a los pleiteantes y llevar a cabo las diligencias necesarias para la conservación de sus derechos. Además, en dichas actuaciones contaban con el asesoramiento técnico de los abogados, quienes intervenían personalmente en las fases públicas del proceso, informando del hecho y alegando el derecho de sus patrocinados[4]. Según Garriga, correspondía también a los abogados la redacción de las informaciones de derecho apropiadas para fundamentar la pretensión y sostener la causa (1994, p. 309).

La regulación de procuradores y abogados en la Chancillería de Valladolid, entonces el más alto tribunal en todo el territorio castellano, se remonta a las fundamentales *Ordenanzas para la Chancillería de Valladolid* de 1489 dadas en Medina del Campo, herederas de las de Córdoba (1485) y Piedrahita (1486)[5]. Este cuerpo normativo concretó el alcance de la actuación de los procuradores, prohibiendo su presentación de escritos ante cualquiera de los juzgados de ella, excepto los siguientes casos: «saluo solamente las petiçiones por que mas para acusar rebeldías e para nombrar lugares e para concluyr los pleitos o semejantes abtos, so pena de çinco rreales por cada vez que lo contrario fiziere»[6]. Asimismo, establecieron la obligatoriedad de la realización de un examen que determinara la aptitud de procuradores y abogados para poder ejercer su oficio en la Chancillería[7]. Más tarde, en 1515, su número se fijó en un máximo de treinta —y veinte en la Chancillería de Granada—, aunque frecuentemente esta cifra se veía superada (Garriga Acosta, 1994, p. 310).

En cambio, para el oficio de solicitador no existió una normativa o regulación específica que rigiera su acceso ni actuación, por lo que, en teoría, cualquier persona podía desempeñarlo. Una parte de estos individuos eran magistrados u otros empleados del tribunal que ejercían simultáneamente como solicitadores, incluso los propios criados de presidente, oidores, fiscales y otros oficiales de la misma chancillería, práctica vetada ya desde 1480[8] y, en la Chancillería, expresamente en las *Ordenanzas* de 1566[9]. Muchos otros no contaban con formación previa como

4. Juan Martínez Lozano, sobre el oficio de procurador, en la *Práctica de la Chancillería de Granada*: «Ni tanpoco a menester tener tanta abilidad y sufiçiençia, como se rrequiere en los oficios de escriuanos de camara y rreçeptores, porque se gobiernan y deuen gobernar por los abogados», f. 27v (López de Nevot, 2005). Para el conocimiento de la Chancillería granadina, véase Gómez González (2005).

5. *Ordenanzas para la Chancillería de Valladolid* [*Ordenanzas* 1489]. La obra de referencia de su estudio es Varona García (1981), cuya edición transcrita se ha manejado.

6. *Ordenanzas* 1489, cap. 53.

7. El primer examen de abogados se realizó el 25 de marzo del año 1495. Algunos estudios sobre el régimen de abogado y su examen son Alonso Romero y Garriga Acosta (2013) y Gautier Fernández (2021, 2024).

8. *Nueva Recopilación de las leyes de Castilla*, libro 2, título 4, ley 30.

9. RORChV, 1566, f. 81, col. 1.

aprendices de procurador ni con estudios universitarios[10]. Entre estos últimos se encontraban, según el testimonio de un visitador de la Chancillería de Valladolid en 1590, «mesoneros, taberneros, lacayos y gente perdida», al referirse a los doscientos o trescientos solicitadores presentes en la ciudad en aquel momento[11].

Además, como han evidenciado Alonso Romero y Garriga, especialmente a partir del primer tercio del siglo XVII, la estima de los abogados fue en detrimento en favor de otros oficiales como los aquí expuestos solicitadores (2013, p. 75), quienes, según Covarrubias, vivían «con lo que les cercenan á los letrados»[12]. Aunque, al parecer, según indica Suarez, en algunos distritos audienciales de Indias hacia la segunda mitad del siglo XVIII existió la tendencia de proveer el cargo de solicitador a abogados; más aún, por medio de cédula de 1777, se facultó a los fiscales para designar a sus propios agentes o solicitadores y presentar su nombramiento ante el Consejo de Indias para su confirmación y se ordenó que para tales oficios se nombraran abogados (Suarez, 1995, p. 260).

En cualquier caso, tanto los procuradores como los solicitadores tenían contacto directo con los pleiteantes, de quienes recibían la retribución por su servicio, percibiendo un salario sobre los pleitos en los que actuaban, controlado por presidente y oidores[13]. Asimismo, los litigantes les proporcionaban los recursos económicos necesarios para retribuir a los diversos actores involucrados y sufragar las actuaciones requeridas por la representación procesal[14]. Por este motivo, diversos autores coinciden en subrayar la reputación negativa que pesaba sobre estas profesiones —en especial la figura del solicitador—, así como su inclinación a la codicia y ante prácticas corruptas guiadas por intereses económicos (Garriga Acosta, 1994, p. 313, 2017; Gaudin, 2017; Gómez González, 2016, 2018; Kagan, 1991, p. 71; Ramos Pérez, 1980, p. 388). También las tempranas *Ordenanzas* de 1489 se hicieron eco del uso de estas prácticas, penándolas con el retorno de las setenas:

10. Por ejemplo, el ya citado Juan Martínez Lozano, procurador de la Chancillería granadina, se declaraba *romancista*, es decir, no sabía latín, y, sobre la precaria formación de los procuradores, afirmaba: «los procuradores no nos preçiemos de tan bien entendidos y nos conozcamos ya nuestras ynorançias y en todo acontecimiento, avn en los casos y cosas mas leves, tomemos consejo», *Práctica de la Real Chancillería de Granada*, f. 243 (López de Nevot, 2005).

11. Archivo General de Simancas [AGS], CC, leg. 2.729, f. 2.167. En Kagan (1991, p. 73).

12. Covarrubias, J. (1789). *Discurso sobre el estado actual de la abogacía en los tribunales de la nación...*, p. 77.

13. *Ordenanzas* 1489, cap. 47.

14. «Otrosy mandamos que los procuradores de la nuestra Corte e Chançilleria den a los letrados e rrelatores e escriuanos y otras personas los dineros y otras qualesquier cosas que sus partes enbiaren para cada vno dellos, syn yncubrir ni tomar para sy cosa alguna, so pena que todo lo que asy tomaren o encubrieren a.la persona para quien se enbiare, lo tornen con las setenas». *Ordenanzas* 1489, cap. 52.

> Mandamos que los procuradores de la nuestra Corte e Chançilleria den a los letrados e rrelatores e escriuanos y otras personas los dineros y otras qualesquier cosas que sus partes enbiaren para cada vno dellos, syn yncubrir ni tomar para sy cosa alguna[15].

De esta manera, los solicitadores usaban sus redes de influencia y relaciones personales para ayudar a clientes poderosos a ganar sus causas, facilitando sobornos, compensaciones y otros pagos ilícitos; por su parte, los pleiteantes esperaban tales prácticas como parte del servicio ofrecido, llegando a desembolsar grandes sumas de dinero con la esperanza de asegurar un desenlace favorable en el litigio (Gómez González, 2008). Incluso, Gaudin (2017), en el contexto de las audiencias indianas, ha subrayado el papel de los solicitadores como agentes de *lobby*, cuya labor se sustentaba en la construcción y mantenimiento de relaciones sociales y políticas que les permitían ejercer influencia en decisiones tanto políticas como administrativas, obteniendo así favores y resoluciones propicias. En este sentido, la figura el solicitador resulta especialmente relevante para estudiar las formas de mediación en la organización del imperio español.

En lo que respecta a la actuación de los solicitadores en la Chancillería de Valladolid, se tiene constancia de su presencia al menos desde comienzos del siglo XVI, según se desprende de los pleitos conservados en los que se les denuncia por su negligencia en diferentes causas[16].

Además, su actividad quedaba reflejada en diversos libros de control documental. Dichos registros evidencian la actuación paralela de procuradores y solicitadores previamente al primer tercio del siglo XVII[17], e individualizada de cada grupo profesional tras la incorporación oficial de los agentes en la plantilla de la Chancillería[18]. Los libros contienen certificados de pleitos en poder de agentes del número y en los asientos se consignaba, por un lado, la fecha desde la cual se cumpliría el plazo de devolución, litigantes, asuntos y número de piezas y tipo documental, pudiendo incluir alguna alusión al trámite o situación del encausado; por otro lado, se establecían los lugares de vecindad de los litigantes en el margen derecho del asiento y la fecha de devolución en el izquierdo (Marcos Díez, 2023a, p. 135).

15. *Ordenanzas* 1489, cap. 52.

16. Véase, a modo de ejemplo: Archivo de la Chancillería de Valladolid [ARCHV], Sala de Vizcaya, Caja 1624, 6; ARCHV, Sala de Hijosdalgo, Caja 1.688, 3.

17. ARCHV, Real Chancilleria, Libros, 605. «Libro de conocimientos de pleitos del escribano Juan de Santiesteban (escribanía de Pérez Alonso o de Varela) por los procuradores y agentes».

18. Véase: ARCHV, Real Chancilleria, Libros, 796, ff. 1r.-14v. Recoge certificados de pleitos gestionados por los agentes de número desde la institucionalización de estos oficios en la Chancillería en 1632 hasta el año 1733.

Por último, cabe realizar una breve nota sobre diligencieros —también llamados diligencieros de hidalguías—, igualmente creados en el año 1629 por el conde de Castrillo, encargados de practicar las diligencias de las causas de hidalguías y partir a los lugares donde hubiera que ejecutarlas, formando un memorial que, luego, debía ser revisado por el fiscal para que hiciera «lo correspondiente al Real Patrimonio, y pida lo conveniente a su favor»[19]. Previa incorporación de los diligencieros a la plantilla, las comisiones eran realizadas por personas nombradas directamente por el fiscal[20]. A partir de 1629, su número se redujo a diez y su asignación de los negocios se realizó por turno, siendo el fiscal quien presentaba al primero que se hallaba en turno, y luego debían ser nombrados para ello por el Acuerdo[21].

3. LA COMISIÓN DE GARCÍA DE AVELLANEDA Y HARO Y EL DONATIVO DE LAS GUERRAS DE ITALIA

3.1. *Breve aproximación a don García de Avellaneda y Haro (1588-1670)*

García de Avellaneda y Haro (1588-1670), II conde de Castrillo[22], fue una persona de confianza del monarca y del conde-duque de Olivares. Reflejo del reinado de Felipe IV y del «marcado favoritismo» de su época, el conde de Castrillo obtuvo el favor del valido por los estrechos lazos que mantuvieron sus padres, Luis Méndez de Haro y Beatriz Sotomayor Haro, IV marqueses de Carpio, con la familia Guzmán, a la que pertenecía el conde-duque. Gracias a estos apoyos y a su notable versatilidad profesional, Castrillo logró ocupar una amplia variedad de altos cargos a lo largo del reinado, especialmente en entre los años 1623 y 1631: consejero de Órdenes (1623), de Castilla (1624) y de la Cámara (1625), presidente del Consejo de Hacienda interino y del Consejo de Indias y consejero de Estado desde 1629 hasta su muerte en 1670. Entre 1632 y 1633 fue Conductor de las Cortes de Castilla, gentilhombre de la Real Cámara «sin ejercicio», gobernador «con calidad de presidente» del Consejo de Indias, asesor experto en cuestiones del ámbito diplomático y eventual embajador designado para Francia (Mazín, 2016, p. 165). Luego, en 1640, por vacante del duque de Alba, fue nombrado mayordomo mayor del rey como recompensa a las

19. Cornejo, A. (1779). *Diccionario historico, y forense del Derecho Real de España*, p. 226.

20. ARCHV, Cédulas y Pragmáticas, Caja 4, 33. Décadas después, se dispuso por cédula real que, estando juntos presidente y oidores en acuerdo general, a la hora de nombrar diligencieros, eligieren el que fuere de «mejor opinión». Universidad de Valladolid, Biblioteca Histórica de Santa Cruz, SC 12.492 (2) (U/Bc 12.492 (2).

21. Fernández de Ayala Aulestia, M. (1667). *Práctica y formulario de la Chancillería de Valladolid dirigido a la Real Chancillería, Presidente y jueces della*, p. 46v.

22. El título no procedía de su linaje paterno, sino del de su mujer, razón por la cual sucedió a su suegro como II conde de Castrillo tras el fallecimiento de aquel el 6 de diciembre de 1629 (Mazín, 2021, pp. 78-79).

diversas responsabilidades y funciones que asumió por encargo de Olivares y, en 1653, virrey de Nápoles hasta 1659. Finalmente, en los últimos años del reinado fue nombrado presidente del Consejo de Castilla (Fayard, 1982, p. 143). Incluso, recientemente, autores como Mazín han considerado su condición como aspirante a valido en los años siguientes a la caída de Olivares (2016, p. 154).

Aunque Elliott en su obra de referencia del conde-duque ya apuntó a la excepcional carrera política del conde de Castrillo y su vinculación más o menos directa con el valido (2005), García de Avellaneda y Haro no ha sido estudiado de manera sistemática hasta hace unos años, especialmente con las investigaciones llevadas a cabo por Mazín (2012, 2016, 2022, 2023a, 2023b, 2025), ahondando en las actividades que le llevaron a alcanzar tal trayectoria política. Asimismo, sobre la labor de García de Haro como comisionado para la venta de cargos en Indias, destacan los trabajos de Gil Martínez (2017a, 2017b) y, en relación a su actuación como «reformador» del reino, sobresalen las aportaciones de Lanza García (2010a, 2010b), Correa (2019, 2021b, 2021a, 2023), así como Heredia López, en torno a las comisiones impulsadas y avaladas por Castrillo desde la presidencia del Consejo de Indias (2021) y su participación en la articulación de una nueva política comercial con América durante dicho periodo (2023).

Es bien sabido que el conde de Castrillo se formó académicamente en ambos derechos en la Universidad de Salamanca, en la que fue elegido rector. También ingresó en el Colegio Mayor de Cuenca y, posteriormente, fue catedrático de clementinas. Su bagaje jurídico y su vocación de letrado versado en leyes se manifestaron en su posterior desempeño en el ámbito de la administración de justicia, especialmente como oidor de la Chancillería de Valladolid entre 1619 y 1623, cargo que precedió a su nombramiento como miembro del Consejo de Órdenes. Mucho menos conocida, sin embargo, es la singular misión que le fue confiada por el rey en el seno de aquel mismo tribunal en el año 1629 y que marcaría un episodio revelador de las complejas dinámicas entre justicia y gobierno en la Monarquía.

3.2. *La comisión del conde de Castrillo y la Chancillería de Valladolid*

En 1629, la Monarquía se vio una vez más sacudida por el agravamiento de sus problemas financieros, esta vez a causa de un nuevo preparativo bélico: la guerra en Italia, ante la amenaza de una invasión francesa. Ante tal coyuntura, el rey optó por reactivar un recurso fiscal excepcional, bajo la petición de un donativo de carácter general, el llamado «de las guerras de Italia», figura que hacía tiempo que estaba en desuso en Castilla, pero que se había solicitado también cuatro años antes —en 1625, con motivo del ataque de los ingleses a Cádiz (Domínguez

Ortiz, 1983, p. 299; Fortea Pérez, 2011)—. A estos se sumarían los posteriores donativos de 1632 y 1636[23].

Los donativos fueron fórmulas fiscales recuperadas por Felipe IV que, al menos en el plano teórico, conservaban un carácter gracioso y voluntario, concebidas como un instrumento de recaudación «suave» frente a la creciente rigidez de los tributos tradicionales establecidos hasta entonces. Como señala Fortea Pérez (2000, p. 39), la aportación que el donativo realizaba al fisco se legitimaba doctrinalmente como *don* y no como *dádiva*, en palabras de Damián López de Haro ya en 1625. Se ha hablado desde la historiografía de una «desnaturalización» de estos principios, puesto que, en la práctica, la proposición del donativo fue percibido como obligatorio y el gran rigor con el que se requirió esta contribución suscitó resistencias en diversos territorios de la Monarquía (Domínguez Ortiz, 1983, p. 43; Fortea Pérez, 2000, p. 44; Truchuelo García, 2004, p. 284, 2008). Así, esta vía de recaudación urgente ya había derivado en auténticas almonedas de oficios y mercedes, disimulada bajo un supuesto paraguas de generosidad para con el monarca y, en no pocas ocasiones, convertida abiertamente en una herramienta de coerción sobre élites e instituciones.

La recaudación del donativo se confió a diferentes ministros investidos de autoridad mediante cédulas reales. A José González se le asignó Galicia, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa y León; Fernando Ramírez Fariña (también visitador de la real Chancillería vallisoletana) fue enviado a Toledo y Guadalajara; Melchor de Molina salió a los obispados de Cuenca y Sigüenza; Juan de Chaves a Extremadura; Antonio de Camporredondo se ocupó de Madrid; Juan Chumacero de los reinos de Murcia y Granada; Alonso de Cabrera a la Baja Andalucía; y, por último, García de Avellaneda de Castilla la Vieja y Navarra[24] (Lanza García, 2010a, p. 182). El cometido de este último incluyó diversas facultades: tomar censos sobre bienes vinculados y de mayorazgos; conmutar e indultar penas para considerar otras cualesquier expensas; visitar las cárceles, incluidas las de las chancillerías y audiencias; la vista de las cuentas de los concejos ayuntamientos; así como atender cualquier otra cuestión que permitiera llevar a cabo las ejecuciones y cobranzas que estimase convenientes[25].

23. Según los datos recogidos por Lanza García, (2010a, p. 181), los cuatro donativos generales contribuyeron con un 4 % al total de todos los ingresos percibidos por la hacienda real entre 1621 y 1640, si bien aún quedaban plazos pendientes de cobro tras esa fecha. En relación con los ingresos estrictamente fiscales de la Corona de Castilla, el porcentaje se eleva hasta situarse en torno al 10 % aproximadamente.

24. AGS, DGT, Inv. 24, legs. 1.296 y 1.375 (Ramírez Fariña), 1.303 (García de Avellaneda), 1.316 y 1.317 (Chumacero), 1.344 y 1.363 (Cabrera), 1.366 (González), 1.385 (Chaves) y 1.409 (Molina), y CG, leg. 3.179 (Camporredondo). Tomado de Lanza García, (2010a, p. 182).

25. ARCHV, Cédulas y Pragmáticas, Caja 10, 17, f. 4v. Véase Domínguez Ortiz, (1983, p. 299).

Previa comisión del conde de Castrillo, la Chancillería de Valladolid ya había tenido noticia de la necesidad en la que se encontraba la hacienda real, pues el 2 de abril de 1629 el Consejo reclamó a los ministros de la Audiencia que socorrieran a los ejércitos reales a través de la financiación de una partida de soldados para la guerra de Italia, por el «aprieto grande en que se halla don Gonçalo de Cordoua»[26], gobernador de Milán. Aunque se reconocía la posibilidad de imponer nuevos tributos, se explicaba que se había preferido evitar esta vía por «no afligir sus vasallos (…), sino representarles el aprieto en que se halle y quan preciso es su remedio»[27], optando por apelar al amor y fidelidad hacia el monarca y al carácter urgente de la situación.

La respuesta de la Audiencia subrayaba las limitaciones económicas de la institución, agravadas por los gastos derivados de su reciente traslado a Medina del Campo y posteriormente a Burgos (1601-1606)[28], así como por las obras acometidas para la ampliación de la cárcel real y del archivo. En consecuencia, las penas de cámara y los gastos de justicia siquiera bastaban para sufragar los salarios del personal necesario para el funcionamiento ordinario de la Chancillería. No obstante, la Audiencia se comprometió a contribuir con el sostenimiento de cincuenta soldados durante un año, gasto que podía ser suplido gracias a las propinas que recaudaban en las celebraciones de fiestas de toros[29].

En el marco de la recaudación del donativo de 1629, se insertaron también las peticiones de perpetuación, acrecentamiento, venta y consumo de oficios, cuyo ejemplo es la Chancillería de Valladolid. Apenas dieciséis días después, en el patio de la dicha institución, el secretario del Acuerdo recibió varios autos dictados por el conde de Castrillo. En ellos se ordenaba a solicitadores y diligencieros recibir, ante su señoría, los títulos que tenían de los dichos oficios, quedando suspendido su ejercicio hasta entonces. Asimismo, mandó que los receptores de las penas y gastos de justicia y los escribanos de provincia de la Chancillería realizaran un memorial.

Luego, se dispuso que los autos fuesen leídos tanto en acuerdo general como en la audiencia, a fin de que su aplicación formal fuera realizada por el Real Acuerdo, como máximo órgano de gobierno de la Audiencia vallisoletana. No obstante, presidente y oidores se negaron a dar el cumplimiento de los autos, exigiendo que tal medida debía ser precedida por cédula real. Esta llegó a fecha de 27 de julio, en la que el monarca reprochaba la resistencia del tribunal:

26. ARCHV, Cédulas y Pragmáticas, Caja 10, 16; Se hace alusión a este episodio en Marcos Díez (2023a, p. 117).

27. ARCHV, Cédulas y Pragmáticas, Caja 10, 16, f. 2.

28. Sobre el traslado de la Chancillería a Medina del Campo y Burgos, véase Marcos Díez (2023b).

29. Sobre la ceremonia en la Chancillería de Valladolid, incluidas las fiestas de toros, véase Amigo Vázquez (2004, 2013).

> en casos en que a sido neçesario pediros vuestro parecer e informaros sobre diferentes materias, habéis reparado en ella por decir que para semexante acto ha de preceder cédula mía, y que no basta el decreto que de su mano y rrúbrica a puesto en algunas peticiones y memoriales y no se an cumplido[30].

Entonces, el Acuerdo aceptó los decretos dados por García de Avellaneda y Haro, y procedió a informar sobre los diversos memoriales presentados. Por un lado, los escribanos de provincia de la Audiencia solicitaron que los derechos se equipararan a los de los escribanos de corte, por lo tanto, reclamando el aumento de cada vista de hoja de cuatro a doce maravedíes. Por otro lado, los receptores de penas elevaron diversas propuestas: la posibilidad de que las comisiones para las cobranzas de penas de cámara y gastos de justicia pudieran estar firmadas de su propia letra; su inclusión en la recepción de las propinas en fiestas de toros y luminarias —hasta entonces exclusivamente reservadas a presidente y oidores, alcaldes del crimen y de hijosdalgo, juez mayor de Vizcaya, fiscales, alguacil mayor, pagador y escribano del Acuerdo, por ser considerados «el cuerpo del Acuerdo»[31]—; la percepción de dos ducados de salario en cada un día que salieran por sus personas a cobrar las dichas penas de cámara y gastos; y el disfrute de los lutos cuando se ofrecían al Acuerdo[32]. A ello se le sumó la petición de Martín Fernández, quien solicitó la merced de la perpetuación del oficio de alguacil. Todas estas demandas fueron consideradas por presidente y oidores, en acuerdo general, quienes, con su correspondiente justificación, informaron que resultaban inconvenientes.

Asimismo, y de forma significativa, en los autos dictados en 1629 por García de Avellaneda y Haro se mandó la incorporación de un número determinado de agentes solicitadores y diligencieros a la plantilla oficial de la Chancillería, ordenando que se les proveyera título real para ello y que no pudieran ejercer su oficio hasta la aprobación de su nombramiento. Así, se fijó el número de diligencieros a diez y de solicitadores a veinte. Los oficios de solicitador, en particular, fueron vendidos en subasta pública bajo régimen de perpetuidad, alcanzando cada uno un precio de cuatrocientos cincuenta ducados, pagados al contado en un plazo de dos meses desde que se les recibió en el ejercicio del oficio. Esta operación permitió reunir un total de nueve mil ducados, fondos destinados al donativo para las guerras de Italia.

No obstante, los compradores no pudieron tomar posesión efectiva de sus cargos hasta 1632, año en el que se despachó cédula que autorizaba su admisión ante el Real Acuerdo. Así, fueron admitidos por el Acuerdo trece solicitadores, quienes compraron estos oficios en régimen de perpetuidad, algunos de los cuales se conservan sus

30. ARCHV, Cédulas y Pragmáticas, Caja 10, 17, f. 10.
31. ARCHV, Cédulas y Pragmáticas, Caja 10, 17, f. 12.
32. Sobre los lutos en Valladolid y la Chancillería, véase Torremocha Hernández (2005).

expedientes personales: Francisco Centeno[33], Pedro del Castillo[34], Antonio García de Ledesma[35], Gerónimo de Ulibarri[36], Juan de Monroy[37], Gaspar de Uriarte[38], Alonso Gutierrez de Caunedo[39], Juan Gallo[40], Juan de Hacha[41]. Todos ellos hubieron de presentarse ante el Real Acuerdo para ser admitidos, con la demostración de su habilidad y suficiencia y acreditación de la posesión en su patrimonio de, al menos, la tercera parte del valor total del oficio, como requisito indispensable para poder ser admitidos. Este mismo proceso debieron seguirlo también sus sucesores en el oficio. En cuanto a las siete plazas restantes, se estableció un año de término para buscar y aprobar la elección de siete personas ante el Acuerdo.

La naturaleza perpetua con la que se concedieron estos oficios conllevaba importantes implicaciones patrimoniales, puesto que sus propietarios pudieron transmitirlo por venta o herencia, convirtiéndose en bienes susceptibles de generar ganancias (Gómez González, 2000). Por ejemplo, cuatro décadas después de su compra, Francisco Centeno vendió el oficio de solicitador por seiscientos ducados a Pedro González Camino —antiguo receptor del número de la Chancillería—, quien, a su vez, lo revendió ese mismo año a Juan de Monrevilla por setecientos ducados. En fin, estos oficios de solicitador, una vez comprados, pasaron de mano en mano mediante ventas, cesiones, herencias y otros títulos, recayendo sobre diferentes sujetos, prolongando su vigencia y circulación hasta bien entrado el siglo XIX, como lo atestiguan los citados expedientes personales.

Sin lugar a duda, el factor económico fue una variable determinante para la incorporación de veinte plazas de agente solicitador a la Chancillería, que permitieron contribuir a las arcas de la Monarquía. No obstante, cabe considerar otra variable, tocante al funcionamiento de la administración de la justicia. Como ya se ha hecho referencia, antes de 1629, el oficio de agente era libre y, por lo tanto, podía acceder a él cualquier persona, situación que generaba desorden, descontrol y negligencias en el oficio por la profusión de profesionales inexpertos y corruptos. De esta manera, la medida llevada a cabo por el conde de Castrillo no solo supuso una formalización del cuerpo administrativo, sino también una regulación de su actuación, revelando una voluntad regia de poner orden y cierto control sobre los agentes. Esta misma intención se materializó también en la reforma que tuvo lugar en la corte cuatro

33. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 71, 1.
34. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 71, 2.
35. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 71, 3.
36. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 71, 4.
37. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 71, 5.
38. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 70, 1.
39. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 70, 2.
40. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 70, 3.
41. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 70, 4.

años antes, en 20 de junio de 1625, cuando se mandó que todos los solicitadores y agentes de negocios de ella se registraran en la Escribanía de Gobierno del Consejo de Castilla[42] (Gaudin, 2017).

Del mismo modo ocurrió en la Real Chancillería de Granada —cuya jurisdicción se extendía al sur del río Tajo—, la cual reproducía la de su homóloga vallisoletana, puesto que las denuncias sobre la proliferación de solicitadores se documentan desde mediados del siglo XVI[43]. No obstante, fue en 1632 cuando, coincidiendo con la orden de dar posesión a los oficios de solicitador vendidos tres años antes en la Chancillería de Valladolid, el rey estimó que también en Granada podría obtenerse una «cantidad grande» mediante la venta de plazas de solicitadores y diligencieros, mandando su enajenación en igual número, calidad y condición que las de la Chancillería septentrional[44].

4. LOS AGENTES SOLICITADORES EN LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID DESPUÉS DE 1629

Las implicaciones de la comisión llevada a cabo por García de Avellaneda fueron de largo alcance y múltiple calado, suponiendo un punto de inflexión tanto en el régimen del oficio de agente solicitador como en la propia configuración del tribunal. No solo afectaron al orden judicial, sino que permiten entrever las formas concretas en que se proyectaba y aplicaba el poder real en los territorios.

En primer término, el episodio de 1629 supuso un cambio significativo en la administración de justicia, al integrar en la plantilla oficial de la Chancillería veinte solicitadores con título real, lo que favoreció un progresivo acercamiento de los agentes al cuerpo de procuradores. Si la principal diferencia entre procuradores y solicitadores radicaba en que los primeros actuaban en virtud de un título real —es decir, por concesión del monarca—, lo que implicaba una identificación jurídica con la parte a la que representaban, la provisión por García de Avellaneda de título real a veinte solicitadores y su posesión efectiva en 1632 terminó por acabar con esta distinción. En el despacho de los títulos, el mismo conde de Castrillo estableció que los procuradores no podrían impedir que se proveyera un agente solicitador para ayudar y defender a las partes litigantes que así lo quisieran, debiendo dar conocimiento al agente correspondiente del pleito, en cuyo riesgo y cuenta empezaría a correr[45]. De esta manera, la institucionalización de los solicitadores provocó la paulatina equiparación de ambos grupos profesionales.

42. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, libro 4, título 26, ley 1.
43. *Ordenanzas para la Chancillería de Granada*, 1601.
44. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 86, 1.
45. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 86, 1.

Incluso, esta paridad terminó por establecerse también en el ámbito ceremonial: en 1645, por real cédula, se dio facultad a los solicitadores de entrar en las salas con capa y gorra para la defensa de los pleitos y sentarse en ellas sin diferencia alguna de los procuradores[46]. En la descripción de las ceremonias de Fernández de Ayala Aulestia, el autor ya no hizo distinción entre procuradores y agentes y se estableció que, para que pudieran hablar, era preciso que se pusieran en pie y, descubiertos, pidieran licencia. Una vez concedida, se les permitía intervenir únicamente sobre el hecho del pleito o sobre aquello que directamente condujese a él, sin entrometerse en el curso del relato hasta su finalización[47]. Por otro lado, en las procesiones y demás actos públicos, debían ocupar el lugar inmediato a los procuradores[48].

Ya en el siglo XVIII, procuradores y solicitadores fundaron un Montepío, el cual ha sido estudiado en profundidad por Torremocha Hernández (2011). Previa fundación del Montepío, ambos grupos profesionales habían constituido conjuntamente una cofradía en Valladolid, vinculada probablemente a San Miguel. Posteriormente, tomando como modelo a los abogados, constituidos como colegio profesional desde 1592[49], modificaron este sistema de previsión social para fundar el Montepío en 1780, cuyo objetivo era auxiliar a los trabajadores y a sus familias, como adaptación a los tiempos del reformismo borbónico, que prefería este sistema frente a las cofradías y hermandades. Como demuestra la autora, ambos grupos profesionales de la Audiencia hicieron referencia en sus *Ordenanzas* a la práctica de asociacionismo previo —«juntos y congregados en la forma que tenemos de costumbre los Procuradores y Ajentes de los números de la Real Chancillería, que reside en dicha Ciudad» (Torremocha Hernández, 2011, p. 152)— y fue de mutuo acuerdo la iniciativa de la fundación del Montepío, el cual modificó sus *Ordenanzas* en 1783 para incluir también a los porteros de la Chancillería de Valladolid.

46. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 86, 1.

47. Fernández de Ayala Aulestia, M. (1667). *Práctica y formulario de la Chancillería de Valladolid dirigido a la Real Chancillería, Presidente y jueces della*, Capitulo XXXIII. *De las ceremonias de las Salas*, p. 56. Así ocurre también en la Chancillería de Granada, según su *Práctica* de mediados del siglo XVII: «En la Chançilleria tienen agentes para sus negocios el Honrrado Concejo de la Mesta, la ziudad de Sevilla y algunos grandes de España, y por esta causa tienen asiento con capa, y gorra: el de la Mesta en el banco de los procuradores; y los de los grandes en el de los relatores: mas para esto an de presentar en el Acuerdo los titulos y nombramientos de los tales ajentes, hauiendo visitado a Presidente y oydores, y por petiçion piden liçençia para acudir a los negocios, y que se les guarden las preheminençias, que son traer capa y gorra, y sentarse en las salas, como queda dicho, dasele liçençia para soliçitar los negocios del titulo que le nombra, y no otros algunos, so çiertas penas que dispone la hordenanza», f. 29r (López de Nevot, 2005).

48. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 86, 1.

49. Sobre el colegio de abogados, véase Torremocha Hernández (1996).

Del mismo modo, su actuación conjunta se demostró en el seno del tribunal, tal y como ilustran las diferentes peticiones y quejas elevadas por solicitadores y procuradores ante el Real Acuerdo por la permisividad al ejercicio de agentes y procuradores que no tenían título real para ello. En ocasiones, debido a que muchos de estos oficios se encontraban vacantes. En 1704, el Real Acuerdo dictó auto para hacer hincapié de nuevo en lo perniciosa que resultaba la injerencia de otros profesionales, cuestión que se reiteró en 1715, y se incluyó la prohibición expresa de que ningún abogado, relator, escribano de cámara, ni cualquier ministro ni persona que no fuera procurador o agente solicitara ni asistiera ningún pleito civil ni criminal pendiente en la Chancillería, ni admitiese poder de litigante alguno para ello, estableciendo diferentes penas. Aún, a estos autos les sucedieron otros tantos en las siguientes décadas —1723, 1758, 1787 y 1791- hasta 1811[50] y, especialmente, 1815, cuando los diez agentes solicitadores con título que actuaban en ese momento en la Chancillería, junto a los procuradores, representados por los «decanos de los números de procuradores y agentes de esta Chancillería», elevaron una queja ante el Acuerdo reclamando que los subalternos de la chancillería vallisoletana seguían sin cumplir el tenor de los diferentes autos, reiterando el perjuicio de la intrusión de otras personas en su oficio:

> Se resiente el orden, la práctica y estilos bien seguidos en este tribunal y chancillería y indudablemente llegará el caso de desconocer la buena dirección que debe darse a los negocios si continuase por más tiempo la intrusión de tantos sujetos muchos […]. La importancia de que los negocios forenses se traten por personas conocidas, afianzadas, instruidas, examinadas y legítimamente recibidas constituye el mayor bien y seguridad de las partes litigantes, quienes en tal suposición las han confiado y confían sus facultades, sus poderes y sus caudales: por esto se redujeron los oficios de esta clase a un número determinado y exclusivo de procuradores y agentes, experimentándose que sin enbargo se habían ingerido e ingerían otros sin autoridad ni los devidos conocimientos en la agencia y solicitud de los negocios[51].

Hacían así alusión a la comisión de García de Avellaneda y Haro, por el menoscabo que la injerencia de otros oficiales causaba a los derechos de propiedad y regalías adquiridas tras la reforma del conde. Entonces, el Real Acuerdo mandó por auto de 31 de agosto de 1826 una providencia que contenía una serie de disposiciones para remediar esta situación y que recogía los nombres de procuradores y solicitadores autorizados a operar en el tribunal pinciano en virtud de su título. La providencia se imprimió y mandó circular y fijar en las puertas de la sala pública, para que así quedara en conocimiento de todos los oficiales de la Chancillería, y se conserva

50. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 94, 23.
51. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 95, 5.

actualmente en el Archivo[52]. Por último, se ordenó que anualmente se formara y repartiera impresa la lista de procuradores y agentes en legítimo ejercicio y con la inserción de esa providencia para lograr un mayor control de su oficio.

En fin, la paulatina adquisición de competencias de agentes solicitadores favoreció su acercamiento al grupo profesional de los procuradores en el seno de la Real Chancillería de Valladolid. Esta simbiosis fue perceptible no solo en la fundación del Montepío, sino también en la práctica profesional, donde compartían cargas y agravios. La apropiación por parte de los agentes solicitadores de negocios terminó por traducirse en una petición formal: que se les reconociera la gracia de utilizar la fórmula «agentes procuradores» en los encabezamientos y firmas de pedimentos y demás escritos, la cual terminó por ser desestimada[53]. No en vano, más de un siglo de acumulación de prerrogativas aspiraba, por fin, a encontrar expresión en el lenguaje oficial y consolidarse en el papel.

Por otro lado, la comisión del conde de Castrillo tuvo consecuencias de índole política. No debe olvidarse que la Audiencia surgió en sustitución del rey en el oficio de la justicia y, mediante la custodia del sello real, personificaba ficticiamente a la figura real en el espacio en el que estuviera asentada, en virtud del cual además ejercía su suprema jurisdicción y potestad (Garriga Acosta, 1990, 1994). Asimismo, como bien es sabido, la concepción de la justicia en el Antiguo Régimen no se entendía estrictamente como aquel poder tocante al ámbito judicial, sino que incluía frecuentemente tareas de gobierno y carácter político, lo cual se materializaba en el caso de la Chancillería en diversas tareas de gobierno que el rey encomendaba al Real Acuerdo y, especialmente, al presidente de la Chancillería.

Sin lugar a duda, el Real Acuerdo desempeñó un papel esencial en la implementación de la reforma dictaminada por el conde de Castrillo, en parte por su condición de máximo órgano de gobierno de una institución del rey y, por consiguiente, su capacidad de negociación en dicha institución. Esta colaboración no constituyó una excepcionalidad de la institución chancilleresca, pues, como han señalado autores como Andújar Castillo (2016), en las comisiones para la venta de oficios en otras instituciones la Corona delegaba la gracia regia en presidentes u otros agentes con capacidad de negociación dentro de las mismas. Sabemos que, a fecha de 1629, Nicolás Enríquez era quien ejercía como presidente, ante la ausencia de Francisco Márquez de Gaceta, y en virtud de su condición de oidor más antiguo (Martín Postigo, 1982, p. 65). Fue el encargado de recibir de la mano del secretario del Acuerdo los autos dados por el conde de Castrillo y presidió las valoraciones de los memoriales. Y, aunque el Acuerdo en un inicio mostró cierta reticencia, acabó por colaborar activamente en una dinámica que habría de repetirse en intervenciones posteriores.

52. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 89, 5.
53. ARCHV, Secretaría del Acuerdo, Caja 95, 3.

Así, en 1634, se incorporó a la presidencia Juan Queipo de Llano, quien venía de ejercer su silla como auditor de la Rota romana, efectuando su entrada en Valladolid el 22 de marzo. Aunque nombrado gobernador, contaba con todas las prerrogativas debidas a los presidentes, así como los mismos salarios y emolumentos (Martín Postigo, 1982, p. 67). Tal vez por esta condición fue por lo que se le asignó un papel importante dentro de uno de los donativos solicitados en el período aplicado con mayor rigurosidad y severidad, el de 1635, tras iniciarse la guerra decisiva con Francia (Domínguez Ortiz, 1983, p. 13; Gil Martínez, 2015). Han sido estudiadas las resistencias que surgieron especialmente en Granada, pero también en Valladolid, donde, como demuestra Fortea Pérez, diversos caballeros se opusieron a ofrecer contribución alguna (2000, p. 53). El papel del gobernador de la Chancillería como mediador fue entonces fundamental, pues Juan Queipo Llano logró alcanzar un acuerdo con los caballeros más reticentes, lo que asombró al propio monarca. Aun así, el rey desautorizó el acuerdo y ordenó que no admitiera menos del doble de lo que hubieran ofrecido[54]. La confianza que el poder real depositó en los presidentes de la Chancillería como recaudadores se repitió en siglos siguientes[55].

5. CONCLUSIONES

En definitiva, el presente estudio ha examinado la comisión conferida al conde de Castrillo en la Real Chancillería de Valladolid del año 1629, en el marco del donativo destinado a financiar las guerras de Italia, prestando particular atención a la incorporación de veinte agentes solicitadores del número a la plantilla oficial del tribunal. El episodio, apenas explorado previamente por la historiografía, se ha analizado no solo como medida extraordinaria de recaudación, sino también como punto de inflexión tanto en el régimen del dicho oficio como en la propia configuración institucional del tribunal vallisoletano.

El estudio del régimen del oficio en la Chancillería de Valladolid antes de 1629 y su proximidad funcional al resto de «consejeros legales», especialmente al cuerpo de procuradores, ha permitido valorar con mayor precisión el alcance de las transformaciones impulsadas por García de Avellaneda y Haro en 1629. Procuradores y solicitadores desempeñaron un papel esencial como eslabón entre el tribunal y los

54. Archivo General de Simancas [AGS], CJHª, leg. 1.753. «Relación de lo que ha pasado en Valladolid sobre el donativo que está pidiendo en aquella ciudad y obispado el gobernador de aquella Chancillería, el Lcdo. Don Juan Queipo Llano», Madrid, 12 de noviembre de 1635. Proporciona datos al respecto Fortea Pérez, (2000, p. 53).

55. Véase: «Comunicación de la Real Cancillería de Valladolid ordenando que el donativo voluntario y Préstamo gratuito se entregue a las Tesorerías del Ejército, de Rentas o Tabacos, quienes reunirán sus caudales u ofertas». Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias Sociales. Fondo Carandell. https://ddd.uab.cat/record/62015.

pleiteantes, con quienes tenían contacto directo, articulando redes de mediación cuya eficacia dependía no solo de competencias técnicas, sino también de la capacidad de construir y mantener relaciones sociales y políticas que les permitieran ejercer influencia en favor de sus clientes. Ambos oficios constituyen, por ello, una pieza clave para comprender las modalidades de intermediación de la Monarquía Hispánica.

La comisión del conde de Castrillo respondió a una lógica eminentemente fiscal. Su carácter excepcional y urgente se insertó en la política de donativos que Felipe IV reactivó y reformuló con el propósito de obtener una nueva recaudación que permitiera atenuar los problemas financieros que acuciaban a la Monarquía ante un nuevo preparativo bélico, en este caso las guerras de Italia. A pesar de que la historiografía ha abordado con atención la implementación del donativo en regiones como Castilla la Nueva, Andalucía o Navarra, el caso de Castilla la Vieja —y especialmente el de Valladolid— ha permanecido en gran medida al margen. De ahí que apenas se hubiera valorado el impacto institucional que pudo tener en la Chancillería la venta de veinte plazas de solicitador, operación que permitió recaudar nueve mil ducados y cuyo éxito fiscal favoreció su posterior reproducción en otras sedes judiciales, como en Granada en 1632.

Con todo, las implicaciones trascendieron al plano administrativo y judicial del tribunal pinciano. La medida llevada a cabo por el conde de Castrillo no solo supuso una formalización de un cuerpo administrativo hasta entonces de acceso libre, sino también una regulación de su actuación. Antes de 1629, cualquier individuo podía acceder al oficio de agente, situación que generaba desorden, descontrol y negligencias en el oficio por la profusión de profesionales inexpertos y corruptos. Existió, por tanto, una preocupación por ordenar el ámbito profesional de los solicitadores, cuyo desempeño afectaba directamente a lo que Ramos Pérez ha denominado el importante «entramado íntimo de los fundamentos jurídicos»; es decir, en la forma en que individuos y colectivos articulaban sus deseos y necesidades de la gestión de sus asuntos, mediante la representación legal ante los órganos superiores de justicia (1980, p. 384).

No obstante, aunque el anhelo de controlar esta figura para el buen orden de la justicia fue una variable determinante en la regulación de estos oficios tras su venta, los resultados en el plano administrativo-judicial en realidad no fueron los esperados. Aún a finales del siglo XVIII, los solicitadores y procuradores reclamaban la injerencia de personas sin título en su desempeño profesional, situación que contravenía los numerosos —e igualmente ineficaces— autos emitidos por el Acuerdo a lo largo del Setecientos.

Al mismo tiempo, la creación de estas plazas aceleró un proceso de adquisición de prerrogativas por parte de los nuevos agentes solicitadores, que progresivamente los aproximó, tanto en funciones como en entidad, al cuerpo de procuradores. Hasta el punto que, a lo largo del siglo XVIII, actuaron conjuntamente en la presentación

de peticiones ante el Acuerdo para reclamo de sus derechos y fundaron un Montepío, ambos como expresión formal de su convergencia profesional.

Además, en esta coyuntura, el Real Acuerdo de la Chancillería jugó un papel decisivo en la implementación de la reforma, recibiendo y valorando los diferentes memoriales que se presentaron. A través de su intervención en la admisión de candidatos, la validación de peticiones y la evaluación de los efectos de las medidas, el tribunal actuó como órgano de ejecución de la política regia en el territorio. En particular, la figura del presidente resultó clave para trasladar las directrices reales al contexto local, repitiéndose su papel mediador en ocasiones similares durante los años posteriores.

En última instancia, la comisión encomendada a García de Avellaneda y su puesta en práctica a través del Real Acuerdo permite vislumbrar tanto la articulación de complejas redes de poder que sostenían la estructura de la Monarquía como las formas concretas en que la política regia se desplegaba en los territorios, mediante la delegación de la gracia real en agentes investidos de capacidad de negociación y de amplias atribuciones de gobierno dentro de sus respectivas instituciones. El caso, junto con el proceso de consolidación de los agentes solicitadores, terminó contribuyendo a redefinir equilibrios corporativos y formas de mediación en el seno de la administración de justicia castellana.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Sandra Bertolini Crespo.

Agradecimientos y financiación

Se agradece la financiación del Fondo Social Europeo Plus, Programa Operativo de Castilla y León, y de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación.

Trabajo vinculado al Proyecto Feminidades y masculinidades desde la cultura jurídica en las sociedades atlánticas, ss. XVI-XX, PID2024-158460NB-I00, financiado por MICIU / AEI / 10.13039/501100011033 / FEDER, UE.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

La autora declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Alonso Romero, M. P., & Garriga Acosta, C. (2013). *El régimen jurídico de la abogacía en Castilla (siglos XIII-XVIII)*. Universidad Carlos III de Madrid; Figuerola Institute of Social Science History.

Amigo Vázquez, L. (2004). Fiestas de toros en el Valladolid del siglo XVII: Un teatro del honor para las élites del poder urbanas. *Studia Historica. Historia Moderna*, (26), 283-319.

Amigo Vázquez, L. (2013). *Epifanía del poder regio. La Real Chancillería en Valladolid festivo (siglos XVII y XVIII)*. Universidad de Valladolid.

Andújar Castillo, F. (2004). *El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII*. Marcial Pons.

Andújar Castillo, F. (2016). Cuando el rey delegaba la gracia: las comisiones de ventas de oficios en la Castilla del siglo XVII. En F. Andújar Castillo & P. Ponce Leiva (Eds.), *Mérito, venalidad y corrupción en España y América, siglos XVII y XVIII* (pp. 135-156). Albatros.

Andújar Castillo, F. (2022a). El barco de los magistrados y gobernadores: venalidad y corrupción entre España e Indias (1710-1711). *Protohistoria, Políticas de la Historia*, (38). https://doi.org/10.35305/prohistoria.vi38.1740

Andújar Castillo, F. (2022b). La quiebra de la justicia distributiva en el siglo XVII: venalidad y patronazgo. En J. F. Pardo Molero, N. Verdet Martínez, & F. Andrés Robres (Coords.), *¿Al servicio de quién? Poder, instituciones y familias en la monarquía de España* (pp. 17-32). Comares.

Correa, M. P. (2019). Agente del rey y reformador del reino: la actividad del II conde de Castrillo en Navarra (1629-1630). *Librosdelacorte.es*, (18), 113-129. https://doi.org/10.15366/ldc2019.11.18.006

Correa, M. P. (2021a). El Reino del Perú y los libros dedicados al conde de Castrillo, Presidente del Consejo de Indias (1632-1653). En G. Nieva Ocampo, H. Pizarro Llorente, & M. P. Correa (Eds.), *Gobernar, conservar y reformar. Agentes y prácticas políticas en la monarquía hispana (siglos XVI-XVIII)* (pp. 276-300). La Aparecida.

Correa, M. P. (2021b). *García de Haro y Avellaneda, conde de Castrillo. Biografía política de un cortesano al servicio de la Monarquía Hispana en tiempos de Felipe IV*. Universidad del Salvador.

Correa, M. P. (2023). Por una historia biográfica del II Conde de Castrillo (1585-1670): itinerario a través de las fuentes. *Revista Escuela de Historia*, *2*(22).

Domínguez Ortiz, A. (1983). *Política y hacienda de Felipe IV*. Pegaso.

Elliott, J. (2005). *El Conde-Duque de Olivares: el político en una época de decadencia*. RBA.

Fayard, J. (1982). *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*. Siglo XXI de España Editores.

Fortea Pérez, J. I. (2000). Los donativos en la política fiscal de los Austrias (1625-1637): ¿servicio o beneficio? En L. A. Ribot García & L. De Rosa (Eds.), *Pensamiento y política económica en la época moderna* (pp. 31-76). El Río de Heráclito.

Fortea Pérez, J. I. (2011). El Donativo de 1625 en el realengo andaluz. En A. Marcos Martín (Ed.), *Hacer Historia desde Simancas. Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego* (pp. 317-338). Junta de Castilla y León.

Garriga Acosta, C. (1990). Observaciones sobre el estudio de las chancillerías y audiencias castellanas (siglos XVI-XVII). En B. Clavero Salvador, P. Grossi, & F. Tomás y Valiente (Eds.), *Hispania entre derechos propios y derechos nacionales: atti dell'incontro di studio Firenze - Lucca 25, 26, 27 maggio 1989* (Vol. 2, pp. 757-803). Giuffré.

Garriga Acosta, C. (1994). *La Audiencia y las Chancillerias castellanas (1371-1525): historia política, régimen jurídico y práctica institucional*. Centro de Estudios Constitucionales.

Garriga Acosta, C. (2017). Crimen corruptionis. Justicia y corrupción en la cultura del ius commune (Corona de Castilla, siglos XVI-XVII). *Revista Complutense de Historia de América*, (43), 21-48. https://doi.org/10.5209/RCHA.56725

Gaudin, G. (2017). Un acercamiento a las figuras de agentes de negocios y procuradores de Indias en la Corte. *Nuevo Mundo, Mundos Nuevos*. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.71390

Gautier Fernández, V. (2021). Régimen jurídico del examen de abogado ante el Real Acuerdo de la Chancillería de Valladolid (1495-1834). En C. Nogueira Da Silva & M. Seixas (Eds.), *Estudos Luso-Hispanos de História do Direito II* (pp. 161-188). Dykinson. https://doi.org/10.2307/j.ctv1s7ccf5.9

Gautier Fernández, V. (2024). *La Real Audiencia y Chancillería de Valladolid y su sala de gobierno: el Real Acuerdo (siglos XV-XIX)*. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Gil Martínez, F. (2015). De la negociación a la coerción: La recaudación del donativo de 1635. *Studia Historica, Historia Moderna*, (37), 211-234. https://doi.org/10.14201/shhmo201537211234

Gil Martínez, F. (2017a). La venta de cargos de Indias en tiempos de Olivares: el conde de Castrillo. *Anuario de Estudios Americanos*, *74*(1), 97-126. https://doi.org/10.3989/aeamer.2017.1.04

Gil Martínez, F. (2017b). *La Junta de Vestir la Casa (1636-1643). Juntas, financiación de la Corte y venalidad*. Polifemo.

Gómez González, I. (2005). *La justicia, el gobierno y sus hacedores. La Real Chancillería de Granada en el Antiguo Régimen*. Comares.

Gómez González, I. (2008). Sobre la corrupción judicial. En J. L. Castellano Castellano & M. L. López-Guadalupe Muñoz (Eds.), *Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz* (pp. 435-450). Universidad de Granada.

Gómez González, I. (2016). «En defense de los ministros afligidos de Su Majestad». Las alegaciones jurídicas (porcones) en favor de los jueces del Antiguo Régimen. En E. Carselli (Ed.), *Justicias, agentes y jurisdicciones: de la monarquía hispánica a los estados nacionales (España y América, siglos XVI-XIX)* (pp. 197-218). Fondo de Cultura Económica; Red Columnaria.

Gómez González, I. (2018). Corrupción moral versus corrupción profesional: percepción, persecución y castigo en el Antiguo Régimen. En F. Andújar Castillo & P. Ponce

Leiva (Eds.), *Debates sobre la corrupción en el Mundo Ibérico, siglos XVI-XVIII*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Heredia López, A. J. (2021). *El control de la corrupción en la Monarquía Hispánica. La Casa de la Contratación (1642-1660)*. Universidad de Sevilla.

Heredia López, A. J. (2023). Actores para una nueva política comercial con América (1642-1660). En A. Jiménez Estrella, J. J. Lozano Navarro, & F. Sánchez-Montes González (Eds.), *Urdimbre y memoria de un imperio global. Redes y circulación de agentes en la Monarquía Hispánica* (pp. 427-453). Universidad de Granada.

Kagan, R. (1991). *Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700*. Junta de Castilla y León.

Lanza García, R. (2008). El donativo de 1629 en el distrito de Fernando Ramírez Fariñas. En L. M. Bilbao, R. Lanza García, C. Álvarez Nogal, & J. I. Andrés Ucendo (Eds.), *IX Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica* (pp. 1-37). Asociación Española de Historia Económica.

Lanza García, R. (2010a). El donativo de 1629 en la Andalucía bética. *Studia Historica. Historia Moderna*, (32), 179-227.

Lanza García, R. (2010b). El donativo de las guerras de Italia (1629): estudio del caso del Arzobispado de Toledo y la provincia de Guadalajara. *Obradoiro de Historia Moderna*, (19). https://doi.org/10.15304/ohm.19.476

López de Nevot, J. A. (2005). *Práctica de la Real Chancillería de Granada. Estudio preliminar y edición del manuscrito 309 de la Biblioteca Nacional de Madrid*. Comares.

Marcos Díez, D. (2023a). El Real Acuerdo de la Real Chancillería de Valladolid: organización, funciones y documentos. *Anuario de Historia del Derecho Español*, (93), 101-143. https://doi.org/10.53054/ahde.vi93.10221

Marcos Díez, D. (2023b). La Real Chancillería de Valladolid en Medina del Campo y en Burgos (1601-1606). *Cuadernos de Historia del Derecho*, (30). https://doi.org/10.5209/cuhd.91648

Marcos Martín, A. (2007). Las ventas de oficios en Castilla en tiempos de suspensión de ventas (1600-1621). *Chronica Nova*, (33), 13-35.

Marcos Martín, A. (2008). La justicia también se vende. Algunas consideraciones sobre las ventas de jurisdicción en la Castilla de los siglos XVI y XVII. En J. L. Castellano & M. L. López-Guadalupe Muñoz (Eds.), *Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz* (pp. 469-486). Universidad de Granada; Junta de Andalucía.

Martín Postigo, M. de la S. (1982). *Los presidentes de la Real Chancillería de Valladolid*. Institución Cultural Simancas.

Mazín, Ó. (2012). Ascenso político y «travestismo» en la corte del rey de España: un episodio de la trayectoria de don García de Haro, segundo conde de Castrillo. *Pedralbes: Revista d'Història Moderna*, (32), 79-126.

Mazín, Ó. (2016). Hombres de prudencia y «grandes partes». El conde de Castrillo y Don Luis Méndez de Haro. En R. Valladares (Ed.), *El mundo de un valido: Don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661* (pp. 153-193). Marcial Pons Ediciones de Historia. https://doi.org/10.2307/j.ctt20fw77n.9

Mazín, Ó. (2021). Arquetipo de actuación y trayectorias cortesanas. Los condes de Castrillo. *Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna*, *11*(43), 78-89.

Mazín, Ó. (2022). De El Carpio a la Avellaneda. García de Haro (1588-1670), un periplo de juventud. *Pedralbes: Revista d'Història Moderna*, (42), 361-415. https://doi.org/10.1344/pedralbes2022.42.11

Mazín, Ó. (2023a). El inventario de libros de García de Avellaneda y Haro, segundo conde de Castrillo, 1670. En M. M. Vences Vidal & H. A. Félix (Eds.), *Avatares de la intervención: cultura, materialidades y discursos* (pp. 47-66). El Colegio de Michoacán.

Mazín, Ó. (2023b). Empalmes de poder y gobierno del Consejo de Indias en 1626. En A. Jiménez Estrella, J. J. Lozano Navarro, & F. Sánchez-Montes González (Eds.), *Urdimbre y memoria de un imperio global. Redes y circulación de agentes en la Monarquía Hispánica* (pp. 353-363). Universidad de Granada.

Mazín, Ó. (2025). Cómo gobernar el Consejo de Indias al final del primer tercio del siglo XVII. En F. Velasco Quijano & C. Cunill (Eds.), *Gobernar el orbe indiano. Personas, mediaciones, objetos (Siglos XVI y XVII)* (pp. 41-72). Silex.

Pérez Perdomo, R. (2003). Los abogados americanos de la monarquía española. *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, (15), 545-600.

Ramos Pérez, D. (1980). Los agentes solicitadores de Indias: otra reforma de Carlos III. En *V Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano: realizado en el Ecuador (Quito-Guayaquil), del 24 al 30 de julio de 1978* (Vol. 1, pp. 381-442). Ediciones Corporación de Estudios y Publicaciones.

Suarez, S. G. (1995). *Los fiscales indianos: origen y evolución del ministerio público*. Academia Nacional de la Historia.

Torremocha Hernández, M. (1996). Las actividades benéfico-asistenciales del Colegio de Abogados de Valladolid en el Antiguo Régimen. *Investigaciones Históricas: Época Moderna y Contemporánea*, (16), 61-76.

Torremocha Hernández, M. (2005). Exequias para las reinas de la Casa de Austria. En M. V. López-Cordón & G. Franco (Eds.), *Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna* (pp. 339-356). Fundación Española de Historia Moderna. https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/12085

Torremocha Hernández, M. (2011). Los Procuradores de la Real Chancillería de Valladolid y su Montepío: Dificultades y problemas de una fórmula de previsión y sociabilidad forzada. *Cuadernos Dieciochistas*, (12), 145-170.

Truchuelo García, S. (2004). *Guipuzkoa y el poder real en la Alta Edad Moderna*. Diputación Foral de Guipúzcoa.

Truchuelo García, S. (2008). Privilegios y libertades fiscales: los donativos al monarca en los territorios vascos y Cataluña en el período altomoderno. *Pedralbes: Revista d'Història Moderna*, *28*(1), 283-300.

Varona García, M. A. (1981). *La Chancillería de Valladolid en el Reinado de los Reyes Católicos*. Universidad de Valladolid.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481529563

«EL MANANTIAL INAGOTABLE CON QUE PREMIAN LOS MONARCAS LOS GRANDES SERVICIOS». LA POLÍTICA DE CONCESIÓN DE MERCEDES NOBILIARIAS DE CARLOS III, EL ARCHIDUQUE, EN CATALUÑA (1705-1713)

«The Inexhaustible Spring with which Monarchs Reward Great Services»: The Policy of Granting Noble Favors by Charles III, the Archduke, in Catalonia, Spain (1705-1713)

Eduard MARTÍ FRAGA
Universidad Internacional de La Rioja
edumarti@gmail.com

Recibido: 06/08/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Cada vez son más los estudios que centran su atención en las causas y consecuencias que tuvo la intensa concesión de mercedes que llevaron a cabo algunos monarcas peninsulares. El presente trabajo profundiza en la complejidad de este tipo estudios por la multiplicidad de factores que influyen. Para ello, centra la atención en el caso catalán, concretamente en la actuación de Carlos III, el archiduque. Su política de concesión de gracias a catalanes ha sido objeto de debate, pues no hay un consenso sobre su alcance ni sus motivaciones. En primer lugar, se analizan las dificultades que presenta su estudio, para luego profundizar en el contexto político, social y económico en que se encontraba Cataluña a la llegada del monarca. A partir de allí, el trabajo estudia la política Carlos III desde una triple perspectiva: determinar cuántas mercedes se concedieron, quiénes se beneficiaron y las motivaciones que tuvo la corona para actuar de este modo.

Palabras clave: Carlos III; archiduque; nobleza; mercedes nobiliarias; Guerra de Sucesión; monarquía constitucional.

ABSTRACT: An increasing number of studies have focused their attention on the causes and consequences of the intensive granting of noble privileges that some Iberian monarchs carried out. The present study delves into the complexity of such research due to the multiplicity of influencing factors. To do so, it focuses on the Catalan case, specifically on the actions of Charles III, the Archduke. His policy of granting noble privileges to Catalans has been the subject of debate, as there is no consensus regarding its scope or his motivations. First, the difficulties presented by its study are analysed, and then the political, social, and economic context in which Catalonia found itself upon the monarch's arrival is examined in depth. Subsequently, the study examines Charles III's policy from a threefold perspective: to determine how many noble privileges were granted, who benefited, and the motivations the Crown had for acting in this manner.

Keywords: Charles III; archduke; nobility; noble grants; War of the Spanish Succession; constitutional monarchy.

1. INTRODUCCIÓN

Un «manantial inagotable con que premian los monarcas los grandes servicios, mas comunicados a personas indignas se hacen despreciables» (Robres, 2006, p. 83)» Así definía el conde de Robres en 1709 la potestad de otorgar privilegios de nobleza por parte de los monarcas. Sus palabras recogían las reflexiones de un titulado aragonés de ascendencia catalana, que había servido en las instituciones del Principado con Carlos II y Felipe V y que fue respetado por Carlos III, el archiduque[1]. En los últimos decenios se han publicado numerosos estudios sobre los procesos institucionales de concesión de mercedes y sus ámbitos materiales, así como de las noblezas de la corona hispánica y sus transformaciones en los siglos XVII y XVIII: instituciones, órganos competentes, grandes linajes, privilegios, redes de poder o vínculos mercantiles, (Álvarez-Ossorio et al., 2024; Cruz et al., 2021; De Dios, 2014; Felices, 2011; Sandoval, 2013; Soria, 2007). Una parte de ellos, con más o menos intensidad, muestran las consecuencias sociales que tenía la excesiva concesión de

1. De ahora en adelante se hará referencia a este monarca como Carlos III, sin mencionar a su condición de archiduque de Austria.

honores de algunos monarcas. Muchos centran su interés en los títulos, que en no pocos reinos representaban casi la totalidad de la nobleza (Carrasco, 2021; Felices, 2011; Felipo y Pérez, 2014; Moreno, 2012; Ribot, 2018). Pero esto no sucedía en los reinos de la Corona de Aragón. En ellos existía, en cambio, una pléyade de categorías privilegiadas inferiores que no casaban bien con la figura del hidalgo castellano (Molas, 2004; Morales Roca, 1983; Torras, 1993). Cuando se analiza el uso que hicieron algunos monarcas sus regalías en la concesión de mercedes en estos reinos conviene poner la atención en estos grupos sociales inferiores y propios de cada reino. Para el caso catalán, y más concretamente para el gobierno de Carlos III durante la Guerra de Sucesión, se ha convertido en un lugar común considerar que el monarca concedió entre 1705 y 1713 unas doscientas mercedes nobiliarias, cifras notablemente superiores a las de Felipe V entre 1701 y 1705 (Molas, 2024). Algunos autores han considerado que en su reinado hubo un «derroche arbitrario de muchas gratificaciones» (León, 1993, p. 154), que en algunos momentos llegó a ser «oportunista y demagógica» (Torras, 1981, p. 207).

La reflexión sobre la política de concesión de mercedes nobiliarias se inserta en el debate, mucho más amplio, de la configuración del estado moderno (Domínguez Ortiz, 1976; Elliott, 1963; Kamen, 1987; Soria, 2007). Este trabajo profundiza en la actuación de Carlos III en el referido campo, a la vez que resulta también ilustrativo de las dificultades que tienen el análisis de sus causas y consecuencias sociales. Por esta razón, en primer lugar, se analiza algunas dificultades metodológicas, para profundizar después en las transformaciones sociales que experimentaba Cataluña durante los años previos al gobierno de Carlos III. A partir de allí, el trabajo analiza las mercedes concedidas desde una triple perspectiva: el número de mercedes, la naturaleza social de los beneficiados y las motivaciones que justificaron su concesión.

2. ALGUNAS DIFICULTADES Y LÍMITES EN EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA DE CONCESIÓN DE MERCEDES

No se puede abordar con solvencia el estudio de la política de concesión de gracias nobiliarias por parte Carlos III sin antes reflexionar sobre los problemas y los límites que se encuentra el historiador. Un primer problema es el modo de proceder de los monarcas en la concesión de mercedes. Mar Felices ha señalado que tanto con Felipe V como con Carlos III se produjeron en algunas ocasiones «promociones colectivas» y otras se concedieron a título individual (Felices, 2011). La política del pretendiente austriaco ya fue estudiada por Pedro Voltes (1962), a lo que cabe añadir los trabajos de algunos autores que también han destacado esta doble dinámica (Fluvià, 2006; García Cárcel, 2002; Molas, 2015; Morales Roca, 1978; Moreno, 2012). El presente trabajo sigue esta línea investigación y aporta nuevas informaciones encontradas en el *Archivio di Stato di Napoli*, especialmente de los memoriales de petición de

mercedes a Carlos III insertas en los Libros de «Consultas de la junta de Estado del Consejo Supremo de Aragón». Estos datos han sido completados con legajos y libros de la sección de Estado del Archivo Histórico Nacional, así como diversos legajos del Archivo de la Corona de Aragón y el *Llibre de Verd* del Braç Militar[2]. Este doble modo de proceder en la concesión de mercedes no fue exclusivo de Felipe V y Carlos III, sino que también lo encontramos en otros monarcas de la Europa de los siglos XVII y XVIII (Constant, 2004; Labatut, 1979; Scott, 1995). Resulta necesario tener clara esta distinción en los procesos antes de proceder al análisis de las consecuencias que tenía la política de concesión de regalías nobles.

Un segundo problema que dificulta el análisis de esta cuestión durante el reinado de Carlos III en Cataluña es el contexto en que se produjo. Es conocido que los conflictos bélicos fueron una causa común que facilitó el aumento de concesión de mercedes en determinados momentos (Albareda, 2010; Andújar, 2006; Bueno, 2024). Sin embargo, este marco conceptual no se corresponde adecuadamente con el objeto analizado en este trabajo. Los estudios de Virginia León, Joaquim Albareda, Pedro Voltes y Agustí Alcoberro (Albareda, 2010; Alcoberro, 2002; León, 1993, 2000; Voltes, 1963) muestran que el contexto bélico fue uno de los elementos que influyó en su política, pero no el único. En esos años el monarca instauró su corte en Barcelona, celebró Cortes, estableció nuevos órganos de gobierno e intentó solventar los problemas sociales y económicos de los diferentes estamentos sociales. Como se verá, estos elementos influyeron a la hora de decidir a cuántos y a qué personas se concedía una gracia. Por esta razón, y por la complejidad expresada en el párrafo anterior, en este trabajo no se compara su política con otros episodios de otros monarcas en que la motivación bélica fue la principal causa de la concesión de mercedes.

En tercer lugar, la disparidad entre las categorías sociales y los privilegios que comportaban en cada reino supone otro elemento que dificulta establecer grandes generalizaciones. En Castilla es conocida la diferencia entre los hidalgos y los títulos (Soria, 2015), una estructura social muy diferente a la que había en la Corona de Aragón o en las provincias vascas (Felipo y Pérez, 2014; Jarque, 2004; Laborda, 2012). Tradicionalmente en Cataluña los estamentos privilegiados se dividían en cuatro categorías: los ciudadanos honrados (que incluían a los *gaudints*), los caballeros (donde se sitúan también los donceles), los nobles y los títulos (Molas, 2004; Morales Roca, 1973, pp. 191-201). Más allá de las divergencias que había entre ellos (nivel de riqueza, antigüedad, privilegios), a todos les unía el gozar del fuero militar, lo cual les diferenciaba nítidamente de los estamentos inferiores. Este fuero, del que también gozaban los mandos militares, implicaba importantes exenciones fiscales

2. El *Llibre Vert* se encuentra en el Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Generalitat, G-225. En adelante se citará como ACA, indicando sección (Generalitat) y referencia (G).

en el pago de impuestos, el derecho a no alojar soldados, de no ser encarcelados por delitos económicos o de ser juzgados por tribunales específicos (Andújar, 1996; Bajet, 2001; Ferro, 1987). Con excepción de los *gaudints* (jueces, doctores en derecho o medicina) y los militares profesionales, todas estas categorías eran de carácter hereditario. La falta de control en la concesión de mercedes nobiliarias suponía importantes riesgos económicos y legales que afectaban a los ingresos por pago de tasas o al reparto de los alojamientos militares. Desde la segunda mitad del siglo XVII se constatan diferentes quejas del Brazo Militar protestando tanto a Luis XIV como a Carlos II en 1648 y 1681 por el descontrol en la concesión de mercedes[3]. La llegada de Carlos III a Cataluña se produjo después de un primer gobierno de Felipe V, que también había concedido numerosas mercedes (Albareda, 1993). La particular división social de Cataluña, así como la evolución del número de los miembros de cada estamento en los años anteriores, condicionó la política del monarca austriaco a partir de 1705. Estos elementos eran diferentes a Aragón, Valencia o Castilla.

Finalmente, un cuarto problema radica en la distinción entre mercedes concedidas y ejecutadas. Mar Felices (2013) ha mostrado que las primeras son las que concede el monarca, pero solo son efectivas cuando la persona agraciada paga las tasas correspondientes por su emisión (mercedes ejecutadas). En función de qué criterio se siga en el estudio de estos dos tipos de mercedes, los resultados pueden ser muy dispares. En el presente trabajo analiza únicamente las mercedes concedidas por Carlos III, independientemente de que fueran ejecutadas. Esto explica que las cifras no sean iguales a las de otros estudios. El objetivo no es determinar lo que sucedió después con los agraciados ni la validez que tuvieron esas mercedes al finalizar el conflicto bélico (Felices, 2013; Fluvià, 2006; León, 2009). Resulta necesario recalcar que se centra únicamente en las mercedes otorgadas a catalanes entre 1705 y 1713 por parte de Carlos III. Si bien con matices, el Principado fue gobernado por este monarca durante nueve años, lo cual explica que haya más información y que se pueda valorar mejor en qué medida las coyunturas influyeron en su actuación.

Las limitaciones de espacio han llevado a omitir algunos aspectos que con frecuencia se analizan en este tipo de estudios, como el proceso de tramitación del título desde su petición a su ejecución (Felices, 2011, pp. 122-211; Morales Roca, 1979, p. 192), las consecuencias que tenía para la hacienda el pago de las tasas[4], o la venalidad (Andújar, 2004; Felices, 2012). Como queda claro, el objetivo principal es mostrar la complejidad de las causas que influyen en la concesión de mercedes por

3. ACA, *Llibre de Deliberacions del Braç Militar*, G-69, vol. II, s/f, 21 de diciembre de 1648; vol. III, fol. 542. En adelante se citará como ACA, LLDBM.

4. Sobre el coste de cada una de las mercedes véase Archivo Histórico Nacional, Estado, Libros, 1.007. En adelante se citará como AHN, Estado, libro 1.007.

parte de los monarcas. Para ello, centramos nuestra atención en el caso de Carlos III y los catalanes. Su estudio, puede ayudar a entender su alcance, sus motivos y los grupos sociales que se beneficiaron.

3. ASPECTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA CATALUÑA DE FINALES DEL SIGLO XVII

El dos de diciembre de 1705 Carlos III anulaba

> todas las mercedes, enagenaciones, gracias, privilegios y demas concessiones y autos politicos, jurisdiccionales y militares assi en lo Ecclesiastico, como en lo militar, por dicho Duque de Anjou, sus ministros y otros otorgados y echos hasta oy[5].

Su reinado empezaba en el mismo punto en que lo había dejado la muerte de Carlos II en octubre de 1700. La Cataluña que encontró estaba en pleno proceso de transformación social y económica, en que grupos sociales diversos pugnaban por aumentar o mantener sus privilegios. Las Cortes de 1701-1702 y algunas mercedes concedidas por Felipe V, habían conseguido reducir parcialmente la tensión. Por esta razón, en 1705 no solo empezaba una nueva fase de la guerra. El monarca se encontraba también ante el reto de pacificar una sociedad tensionada por los enfrentamientos derivados del deseo de privilegios por parte de grupos sociales diversos.

Los estudios de Vilar, Fontana, García Espuche, Lobato y Molas han destacado las transformaciones que padeció Cataluña durante el cambio del siglo XVII en los sectores productivos, lo que conllevó no solo una redefinición de la relevancia económica de numerosas ciudades, sino también la aparición y mutación de oficios y cofradías, provocando una conflictividad social que a veces podía pasar desapercibida (Fontana, 1955; García Espuche, 2004; Lobato, 1995; Molas, 1975, 2017, p. 127; Vilar, 1979). Al aumento de la actividad mercantil, visible en los ingresos del puerto barcelonés y las numerosas y diversas compañías comerciales creadas esos años, se añadía el desarrollo de la producción vitícola tarraconense. Barcelona y su hinterland, pasó de ser un centro productor a un núcleo distribuidor de la producción fabril del interior, cada vez más numerosa (García Espuche, 1998, p. 154). Mercaderes de otras naciones se instalaron en el Principado emparentando con familias catalanas que ampliaban sus redes económicas. Son conocidos los casos de los holandeses, genoveses, ingleses, sardos, napolitanos y franceses (García Espuche, 2004; Maixé-Altés, 1987).

El enriquecimiento de sectores sociales muy diversos, y el reto de integrar a los miembros de otras naciones tuvo claras consecuencias en vida cotidiana. Entre

5. ACA, Generalitat, N-103, fol. 275.

1559 y 1717 la población catalana pasó de 365 000 habitantes a unos 600 000, concentrándose una parte importante de ellos en Osona, el Maresme y el Camp de Tarragona (Gual, 2015, p. 168). Resulta lógico, como muestra la documentación, que numerosos municipios de esas zonas solicitaran nuevos privilegios y reformas de sus gobiernos locales acordes a su nuevo estatus económico. Es lo que sucedió en Tarragona (1673), El Prat de Llobregat (1689), Sant Quirze (1698), Cervera, Mataró y Vic (1703) o Balaguer (1704). La llegada de Carlos III supuso una continuación de esta política, y otros municipios consiguieron nuevos privilegios municipales (Girona y Castellterçol en 1705, Granollers, Borges Blanques y Ripoll en 1706; Puigcerdà y Mataró en 1707, Garriguelles y Sant Martí d'Empúries en 1711)[6]. Estos datos muestran que los ennoblecimientos del monarca austriaco se insertaban dentro de esta política más amplia de concesión de regalías en favor de grupos o personas que estaban adquiriendo un nuevo protagonismo social o económico. Cabe recordar que en la Cataluña de 1700 había 1 600 municipios bajo jurisdicción baronial (70 %), mientras que los de jurisdicción real no llegaban a 700 (Ferro, 1999, p. 138). El poder que ejercían los barones y sus equivalentes los podía convertir, como decía Víctor Ferro, en pequeños «reyezuelos», porque en no pocos casos gozaban de mixto y medio imperio, además de amplias facultades económicas y políticas[7].

Uno de los episodios que mostró con más claridad la tensión constante entre privilegiados y no privilegiados fue el conflicto de los barretines (1688-1689) (Albareda, 1998; Dantí, 1993, 1995). El Libro de Deliberaciones del Brazo Militar constata que desde finales del siglo XVII se produjeron no pocos levantamientos de campesinos contra sus señores quemando o asaltando sus propiedades. Así sucedió en Centelles (1688), Vich (1691), Manresana (1695) o Ripoll (1696)[8]. Los conflictos no disminuyeron durante el reinado de Carlos III. Tanto los antiguos privilegiados como los nuevos, exigieron la ejecución de sus derechos señoriales. En 1706 el mercader Amador Dalmau fue nombrado caballero. En 1712, seis años después, Amador reclamaba la concesión de la dignidad de noble y ejercer el mero y mixto imperio sobre la baronía de Vallromanes[9] Carlos III rechazó ambas peticiones pero no lo pudo hacer en 1710, cuando tuvo que conceder esos derechos a Josep Amigant sobre el municipio de Fenollar, del cual había sido nombrado conde en

6. Entre otros lugares, se pueden encontrar referencias a estos privilegios en los libros de deliberaciones del *Consell de Cent*. Cfr. *Arxiu Històric Muncipal de Barcelona*, 1B, II, N-182 a 223. Véase también, *Archivio di Stato di Napoli*, Consiglio di Spagna (ASN), 146-160.

7. Entre ellas destacaban el cobro de impuestos, derechos de paso, uso de bienes comunales, construcción de tabernas. También decidían el nombramiento de bailes y autorizaban o presidían las reuniones del gobierno municipal, Ferro, 1999, pp. 139-141.

8. ACA, LLDBM, vols. 4-8.

9. ASN, 164: 1-50.

1708[10]. Exigencias semejantes fueron también solicitadas por el conde de Cardona en 1711 y el marqués de Alfarràs en 1713[11]. Ramon Vilana Perlas, hecho marqués en 1710, tuvo que enfrentarse con los habitantes de Rialp en 1711 enviando tropas, porque estos se negaban a reconocer sus derechos señoriales (Voltes, 1963, p. 234). Carlos III no siempre se plegó a los deseos de los nobles, como muestra el apoyo que otorgó en 1710 a los comunes de Camarasa, frente a su marqués[12], o a Sitges y Andorra en 1706 y 1711[13].

En este contexto, el conocido debate sobre si los privilegiados podían ejercer actividades mercantiles adquirió un renovado protagonismo. En Cataluña tuvo algunas particularidades. A pesar de que ambas actividades no eran compatibles, la presión de las élites mercantiles por gozar de dichos privilegios se había acentuado a finales del siglo XVII. Tanto en 1697 como en 1702 y 1709 los mercaderes de matrícula de la *Llotja* de Barcelona habían solicitado este privilegio para sus miembros, lo que generó una fuerte oposición tanto de ciudadanos honrados como de nobles (Molas, 1977, pp. 182-188) Formalmente la incompatibilidad se mantuvo[14]. Sin embargo, numerosos miembros de los estamentos privilegiados continuaron participando en actividades mercantiles. De hecho, la presencia de ciudadanos honrados, caballeros, nobles y titulados en compañías comerciales barcelonesas fue algo habitual. En las 150 compañías analizadas por Isabel Lobato Franco, se constata la participación activa de 26 miembros de las clases privilegiadas (cuatro *gaudints*, 14 ciudadanos honrados, siete caballeros y un noble). En ocasiones se observa que mantuvieron un papel activo a pesar de cambiar de estamento[15]. Algo semejante sucedía con la venta de carne al *Consell de Cent*. Para el periodo 1699-1705 al menos 61 privilegiados se beneficiaron de esta actividad (27 nobles y caballeros, 12 ciudadanos, 12 *gaudints* y 10 eclesiásticos). Entre ellos destacan algunos miembros de dinastías nobles antiguas, a los que Carlos III concedió nuevas gracias durante su reinado, como Miquel de Pinós, Josep Oliver, Francesc Palau (Voltes, 1962). Si

10. ASN, 161: 62-72. La exigencia de los nuevos títulos de ejercer los privilegios señoriales recientemente adquiridos se convirtió en algo frecuente. Véase, por ejemplo, ASN, 1: 231; 157: 61.
11. ASN, 148: 288; 235: 202.
12. ASN, 164: 284 y ss.
13. ASN, 179: 94-97; 156: 421.
14. Tanto el Brazo Militar como Carlos III usaron este argumento para negar la entrada de algunas personas en el estamento. En 1680, por ejemplo, el Brazo no reconocía el privilegio de caballero de Jeroni Vidal porque todavía ejercía como platero (ACA, LLDBM, fol. 533r). Carlos III, por su parte, negó esta misma merced en 1707 a Mateo Darza después de que la Real Audiencia le informase que ejercía como fundidor en las atarazanas de Barcelona (ASN, 152: 268).
15. Entre ellos cabe destacar a Joan Lapeira, Pau Feu o Joan Pau Llorens. Cfr. Lobato, 1993, pp. 731-880.

fijamos nuestra atención en la venta de trigo, constamos procesos semejantes[16]. En otros momentos actuaban como financieros de miembros de estamentos inferiores que se dedicaban a estas actividades. Así procedieron, por ejemplo, el marqués de Llupià, la madre del futuro marqués de Montnegre, el obispo de Gerona o Josep Moret, juez de la Real Audiencia[17].

Estos hechos sugieren que las diferencias estamentales en Cataluña no eran tan grandes como la letra impresa podía sugerir y que, por tanto, la concesión de mercedes por parte de Carlos III, quizá no comportó cambios tan trascendentes a nivel social y económico. Privilegiados y no privilegiados compartían en no pocas ocasiones los mismos espacios y actividades. Elliot ya destacó en su momento, que la diferencia entre un noble y un caballero en Cataluña era «más nominal que real» (Elliot, 1990, p. 103). La actuación del monarca austriaco en este campo pudo haber sido un modo de dar forma legal o nominal a un hecho real. El abogado Gabriel Turell definía a principios de siglo a los ciudadanos honrados como «gente honrada, rica, viviendo onerosamente, con caballos y armas, pomposamente vestidos y acompañados. No son solamente ciudadanos, mas caballeros en lo vivir» (Duran, 1973, p. 462). En 1622 se concedió el privilegio de caballero al mercader genovés Francesc Berardo, abuelo del futuro Marqués de Montnegre. En la argumentación de méritos no se destacaba ningún servicio especial sino solamente sus «comodidades» en las formas de vivir, que eran semejantes a los nobles (Elliot, 1966, p. 88).

Conceder privilegios de nobleza a hombres de negocio era una manera de poner fin a la injusticia que denunciaban los mercaderes de la Lonja en 1702 cuando pidieron a Felipe V que todos sus miembros matriculados obtuvieran el privilegio militar. Los mercaderes recordaban que estaban insaculados en numerosas bolsas del Consejo de Ciento junto a caballeros y ciudadanos sin distinción, cosas que también sucedía en las bolsas de oidores reales de la Diputación. Mostraban que los miembros de su estamento no eran «diferentes del de los Militares: siendo muy frecuente el casarse los Mercaderes con hijas de caballeros y estos con las de aquellas». Se destacaba que para ser miembro del estamento se requería pasar un estricto examen de modo que «no se admite en el dicho estamento persona que no sea muy honrada, limpia de sangre y de buena vida y costumbres». El texto reclamaba que pudieran ejercer las actividades mercantiles sin renunciar al fuero militar, «teniendo por compatibles estas dos cualidades, a fin de establecer más el comercio e ilustrar más al magistrado» (Capmany, 1779, p. 341). La petición se justificaba por dos razones: la necesidad de aumentar la riqueza del Principado, pues hacer compatibles ambas actividades facilitaría que más personas se dedicasen al comercio, y recompensar a aquellos

16. Para ese periodo se han encontrado 34 eclesiásticos, 21 caballeros y nobles y ocho ciudadanos. Cfr. AHMB, Manual del Pa 1E.IV 01-06 y *Deliberacions del Consell*, 1B.II 215-219.

17. AHMB, *Manual del Pa*,1E.IV-03-06.

vasallos (los mercaderes) que estaban sirviendo a la Monarquía con su actividad. Los mercaderes se situaban en la misma línea argumentativa del Conde de Robres y daban un paso más: la concesión de mercedes no solo era necesaria para premiar a los «buenos». También debía otorgar el reconocimiento debido y justo a los nuevos actores sociales, políticos y económicos que era merecedores de ellos.

El problema no se limitaba a premiar a los mercaderes con mercedes. Los conflictos afectaban a todos los estratos estamentales, fruto de las transformaciones económicas y productivas referidas (Dantí, 2017, pp. 81-82). A lo largo del siglo XVII se agudizó la tensión entre una nobleza que se resistía a renunciar a sus privilegios y una amplia variedad de estratos sociales inferiores que exigía tenerlos. La adquisición de privilegios nobiliarios era una parte de este conflicto que afectaba a más aspectos de la sociedad catalana. El caso de Barcelona puede ser ilustrativo de muchos de ellos. Es conocido que la ciudad estaba dividida en cinco grupos sociales: ciudadanos honrados, militares, mercaderes, artistas y menestrales. Cada estamento tenía sus derechos y privilegios a la hora de pagar impuestos, detentar cargos municipales, formar parte de juntas, un lugar en las celebraciones públicas, etc. (Florensa, 1996). Especialmente a partir de la segunda mitad del s. XVII y hasta 1714 los conflictos entre ellos fueron constantes. Molas, ya mostró que los conflictos entre gremios eran consecuencia de la especialización y la aparición de nuevos oficios (Molas, 1977). Algunos gremios, como los carniceros, los revendedores, los taberneros y los hostaleros, no podían pertenecer al Consejo de Ciento porque eran considerados «indignos». A pesar de ello, en 1709 los carniceros intentaron entrar en la institución. Su petición fue rechazada a instancias de los *consellers* al considerar que «no tienen en su actuación nada que necesite de arte, y declarándose arte, sería un desprecio al resto de gremios»[18]. Lo llamativo, es que fue precisamente este mismo tipo de argumentación, la falta de dignidad, el utilizado por la nobleza para impedir la entrada de los mercaderes en su estamento. En 1703 afirmaban que los mercaderes

> son incapazes de ser promovidos a tanto honor y a la dignidad militar, porque el estado de los mercaderes y arte de mercaduría según divinas y humanas letras es un estado y arte mecánica como en las sagradas letras lo atestiguan el profeta rey Ezequiel (….)Por derecho civil es cierta conclusión establecida en diferentes leyes del código que la negociación y arte de mercaduría es incompatible con la nobleza y dignidad militar, hallándose expresamente prohibidos los nobles y militares de exercer semejante oficio[19].

18. *Manual de Novells Ardits*, 1973, p. 249.
19. *Dietaris de la Generalitat de Catalunya* (DCG), vol. 10, p. 2.319.

No deja de ser paradójico que los mismos nobles cuya riqueza procedía en parte de su participación en las compañías comerciales y otras actividades mercantiles, rechazasen la entrada en el estamento de sus conciudadanos que actuaban de modo semejante a ellos. Estos enfrentamientos fueron comunes a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y la Guerra de Sucesión. Desde 1680, tanto tenderos, libreros como pintores intentaron separarse de los menestrales y equipararse a los artistas, que era un coto únicamente de notarios, apotecarios, drogueros, barberos, cirujanos y cereros (Molas, 1977, pp. 191-195). En 1685 los percheros consiguieron tener gremio, independizándose de los pasamaneros (Pallàs, 2014, p. 41). Con la llegada de Carlos III, estas dinámicas se acentuaron: en 1706 se permitió a los colchoneros tener un gremio[20], y se concedieron nuevos privilegios a los *Traginers de Mar* y los *barreters de agulla*[21]. En 1707 los corredores de cambio consiguieron entrada en el estamento de los artistas[22]. Los enfrentamientos internos también afectaban a la misma clase privilegiada. En 1691 marqueses y condes disputaban por la precedencia en las celebraciones públicas[23] y a partir de 1693 nobles, caballeros y ciudadanos negaron la presidencia del Brazo Militar a los títulos (Martí-Fraga, 2024). Todos estos conflictos estaban vivos a la llegada de Carlos III a Cataluña. Desde esta perspectiva, se comprende mejor que la política de concesión de mercedes nobiliarias del monarca austriaco formaba parte de un conflicto social más amplio.

4. EL NÚMERO DE MERCEDES CONCEDIDAS

Los notarios de Lérida en 1706 justificaban su petición a Carlos III para que les concediese el privilegio militar a los miembros de su estamento «por ser esta noble de estimación y autoridad y muy necesaria en las repúblicas» Si en 1703 eran los mercaderes los que pedían ser nobles, tres años después eran los notarios. Una parte de su argumentación se asemejaba a los mercaderes, al defender que el estamento «ha tenido siempre la dicha de haber en él sujetos de mucha satisfacción desempeño y cabales y que siempre ha sido ilustrado y condecorado de algunos individuos militares»[24]. Sin embargo ellos ponían énfasis en un punto nuevo: la necesidad para el Estado. La concesión de las mercedes nobiliarias a personas dignas era obligación de justicia y de conveniencia para el buen gobierno de la república. Esta concepción era compartida por el conde de Robres, que en sus *Memorias* recordaba que los Príncipes debían evitar el «abandono de los honores», pues con ellos «premian los monarcas grandes servicios, más comunicados a personajes indignos se hacen

20. ASN, 146: 196.
21. ASN, 152: 435; 146: 48 y ss.
22. ASN, 146: 24.
23. Biblioteca de Catalunya (BC), *Follet Bonsoms*, 10987.
24. ASN, 146: 441.

despreciables» (Robres, 2006, p. 83). La concesión de mercedes no era vista como algo negativo o un instrumento para asegurar fidelidades al monarca. Era un deber de buen gobierno.

Ya se ha mencionado la necesidad de diferenciar entre las mercedes concedidas por iniciativa del monarca en las promociones colectivas, y las que fueron consecuencia de peticiones de los interesados. La distinción entre ellas es relevante, pues puede indicar si el fenómeno era fruto de una política intervencionista de Carlos III para favorecer sus intereses o, por el contrario, si había una demanda social fruto de los conflictos analizados. No resulta fácil cuantificar el número de mercedes concedidas por iniciativa real. Tradicionalmente se reconocen tres: en 1706 con motivo de las Cortes: en 1707 por el anuncio de la boda de Carlos III y en 1708 por la celebración de dicha boda. A las tres referidas promociones colectivas habría que añadir una cuarta: la que se produjo en 1710 en Vic como consecuencia de la visita real a este municipio[25]. El total de todas ellas asciende a 111 mercedes. Sin embargo, se ha constatado que 22 de esas personas solicitaron la merced a través de un memorial de méritos, lo que pone de manifiesto que no todas fueron por iniciativa real[26]. Después de contrastar estos datos con las informaciones que aportan otras fuentes (ACA, AHN), se concluye que al menos hubo 112 mercedes concedidas sin petición previa (24 %)[27]. Es decir, el 76 % de las gracias nobiliarias que Carlos III otorgó, fueron por petición de los interesados, lo que cambiaría la perspectiva del análisis de su política en este tema. Más que «intervención» quizá se debería hablar de «concesión», pues 355 mercedes fueron aprobadas por el Consejo de Estado después de evaluar los méritos del candidato. Para los agraciados no era tanto un «obsequio» como un «derecho». Resulta necesario replantearse si «el limitado apoyo recibido por el pretendiente austriaco puede explicar la abundante concesión de mercedes y títulos de nobleza a sus partidarios y mantener su adhesión» (León, 2000, p. 44). Los datos recogidos sugieren la existencia de una «demanda» consecuencia de los cambios socioeconómicos expuestos anteriormente.

Más allá de la distinción entre iniciativa y concesión, cabe preguntarse por el resultado final. De las 467 mercedes nobiliarias concedidas, 164 fueron de ciudadanos honrados, 121 de caballeros, 119 de nobles y 63 de títulos. El número de

25. ASN, 164, 197. Cfr. También Gudiol, 1910.

26. Entre ellos se encontraban personajes con una clara filiación austriacista como, Josep Oliver, Jaume Teixidor, Francesc Toda o Francesc Areny (ASN, 1: 12; 6: 204; 147: 183).

27. Se han encontrado algunas mercedes concedidas gratuitamente por el monarca al margen de las promociones colectivas. Es el caso, por señalar solo algunos ejemplos, del notario Francesc Masbernat de Olot, del campesino Jaume Rierola, del doctor en medicina Jaume Vila, el veguer de Vic Francesc Coromines, el señor de vasallos Fra Francesc Montmany o los mercaderes tarraconense Francesc Vidella y Manuel Roger (ASN, 6:198; 146: 179; 161: 20; 164: 212 y 235: 132).

agraciados fue menor, 435 personas, pues 30 de ellos recibieron dos o tres mercedes durante esos años. Según algunos autores, la inflación de honres fue algo común en la Europa de los siglos XVII-XVIII (Dewald, 2004; Stone, 1985). En Cataluña se llegó a su punto culminante con Carlos III. La siguiente tabla compara sus datos con los monarcas anteriores.

Tabla 1. Concesión de mercedes a catalanes bajo los Austrias y Felipe V

Categoría	Carlos I	Felipe II	Felipe III	Felipe IV	Carlos II	Felipe V	Carlos III
Ciudadanos honrados	18	73	88	306	214	45	164
Caballeros	170	74	82	208	150	42	121
Nobles	24	35	88	96	101	47	119
Títulos		3	9		13	17	63
Total	212	185	267	610	478	151	467
Media anual[28]	5,0	4,6	11,6	13,9	13,7	30,2	51,8

Fuente: elaboración propia a partir de Amelang, 1986;
Morales Roca, 1979 y 1983; Bru y Fluvià 1998, y AHN, Estado, libro 1007.

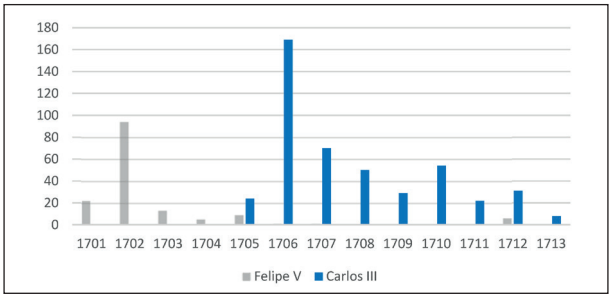
Se constata el aumento de las mercedes a medida que se avanza en el siglo XVII, a pesar de ligeras excepciones. En cifras absolutas fue Felipe IV el que más gracias nobiliarias concedió (610). Sin embargo, si analizamos los datos en cifras relativas, los datos muestran que fue con los últimos monarcas, Felipe V y Carlos III, cuando se produjo un cambio de tendencia: de las 13,7 mercedes anuales de Carlos II se pasa a 30 con el monarca borbón y 52 con el pretendiente austriaco. No parece probable que este crecimiento se deba únicamente al contexto militar. Sin duda, tanto Felipe V como Carlos III, celebraron Cortes en Cataluña y estaban necesitados del apoyo de sus habitantes ante la Guerra de Sucesión. Pero no es menos cierto que estas dos motivaciones también existieron bajo los reinados de Felipe IV y Carlos II. El primero no consiguió cerrar las Cortes de 1626/1632 por las muchas exigencias de los súbditos catalanes, entre las que destacaban la unión de armas. A ellos se añadió la *Guerra dels Segadors* que fracturó el Principado entre partidarios de Francia y de Castilla (Elliott, 1990). El segundo tuvo que lidiar con el peligro constante de los ataques franceses a la frontera catalana, así como el levantamiento de los Barretinas (Kamen, 1987). Sin embargo, a pesar de que todos estos hechos podrían justificar la conveniencia de una generosa política de concesión de mercedes para asegurar la

28. Para hacer este cálculo se ha considerado que Carlos I gobernó durante 42 años; Felipe II, 40 años; Felipe III, 23 años; Felipe IV, 44 años: Carlos II, 34 años; Felipe V, 5 años (1701-1705) y Carlos III, 9 años (1705-1713).

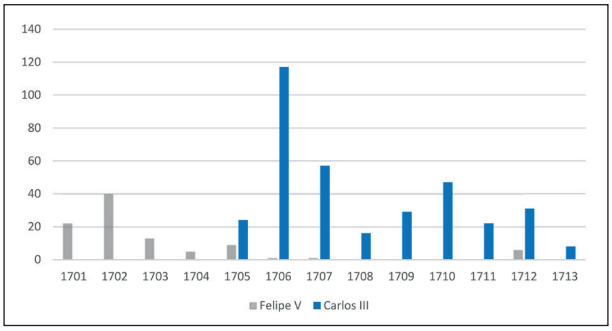
fidelidad catalana, ninguno de ellos lo hizo con la intensidad de Felipe V y Carlos III en el primer decenio del siglo XVIII.

Tanto Virginia León como Mar Felices consideran que las dificultades económicas llevaron a una disminución del número de gracias concedidas a partir de 1708 (Felices, 2011, p. 329; León, 1993, p. 154). Si bien es cierto que en sus estudios se refieren a la concesión de todo tipo de mercedes, tanto nobiliarias como de cargos y oficios, el análisis individualizado de únicamente los privilegios estamentales aporta algunas diferencias. En los siguientes gráficos se recoge esta información desde dos perspectivas. En el gráfico 1 se incluyen los datos de las promociones colectivas de 1702, 1706, 1707, 1708 y 1711. En el Gráfico 2 se excluye esa información.

Gráfico 1. Evolución concesión mercedes



Gráficos 2. Evolución concesión mercedes
con las promociones colectivas excluidas



Fuente: ASN, 1-8; 146-179; 235 y 279. AHN, Estado, libros 990 y 1.007.

Se evidencia que no hubo un proceso de disminución de mercedes a partir de 1708, pues había empezado antes y no fue progresivo. En los dos casos tuvo gran

importancia la celebración de Cortes en la concesión de mercedes, así como las diferentes promociones colectivas. Sin embargo, cuando eliminamos esta variable (gráfico 2) las diferencias resultan menos evidentes. En el caso de Felipe V se ve con claridad que previamente a la celebración de las Cortes, había concedido un número significativo de gracias, indicativo quizá de su voluntad de atenuar la animadversión que generó su nombramiento en algunos grupos dirigentes catalanes (Albareda, 1993). A la vez, la importancia de 1702, no solo se debió a las Cortes, pues no pocas gracias nobiliarias se otorgaron los meses posteriores. Estos dos primeros años concentran el 81 % de todas las mercedes de Felipe V a catalanes. Sin embargo, la reducción de mercedes concedidas se acentúa sensiblemente a partir de 1703, a la vez que aumentaban los enfrentamientos con las instituciones catalanas (Albareda, 2010; Martí-Fraga, 2008). Esta realidad puede sugerir que en el contexto de la creciente tensión política (Albareda, 2010), el monarca consideró otorgar nuevos privilegios nobiliarios a sus vasallos catalanes no era el método adecuado para disminuirla.

De forma diferente actuó Carlos III. Las mercedes concedidas los dos primeros años (1705 y 1706) suponen el 42 % del total. Los datos muestran que, con este monarca, más que un proceso de disminución de gracias, lo que hay es un mantenimiento de su ritmo de concesión, una vez superado el momento inicial de 1706. El 43 % de las mercedes se otorgaron entre 1708 a 1713, cifra que aumenta al 58 % si se incluye el año 1707. Estos datos no cuestionan las informaciones recogidas por León y Felices, sino más bien, señalan que se deben tener en cuenta las particularidades de los territorios. Lo que seguramente fuera cierto para Castilla, Valencia y Aragón, territorios que ya no estaban bajo control austriaco a partir de 1707, no se puede aplicar al caso catalán, ni a todos los tipos de gracias.

Mientras que las mercedes que concedió el monarca borbón al finalizar las Cortes de 1702 suponen el 53 % del total, el peso de las cuatro promociones colectivas de Carlos III significa el 23 %. Ciertamente, 1706 sigue teniendo un peso importante respecto a los otros años. La magnitud de esta cifra quizá se puede entender en parte como una consecuencia de la necesidad de conseguir lealtades ante el asedio de Barcelona de marzo de ese año[29]. Se constata que, con la excepción de 1708 y 1713, la media de mercedes por año siempre fue superior a 20, llegando en algunos casos a cifras superiores a 40 (1707 y 1710).

5. LOS GRUPOS BENEFICIADOS

Identificar el perfil social de las personas agraciadas con nuevas dignidades resulta necesario por las consecuencias en la sociedad que conllevaba. De las 435

29. Carlos III, llegó a promulgar un decreto por el que concedería el estatus privilegiado a todos aquellos que fueran a defender la ciudad. Cfr. ACA, Generalitat, V 36.

personas que recibieron algún tipo de grado de nobleza, se ha podido identificar la categoría social de 429, lo que supone el 98,4 % de nuestro estudio. De estas personas, al menos 130 no pertenecían al estado privilegiado, lo que implica que el 70 % de mercedes que otorgó Carlos III fue a individuos que ya gozaban de privilegios. El dato sugiere que, por muy numerosas que fueran las gracias otorgadas, sus consecuencias a nivel social, económico y judicial quizá no lo fueran tanto. Se ha constatado que en ocasiones Carlos III denegó la merced solicitada o rebajó su grado, lo que indica la existencia de una reflexión previa antes de la concesión de la gracia. También se ha podido documentar cinco peticiones que fueron rechazadas por no estar debidamente justificada[30] y otras diecinueve en que se concedió una gracia menor a la solicitada[31].

Fijar la atención en el perfil estamental de las 130 personas agraciadas que no pertenecían al estado privilegiado puede ayudar a valorar mejor la naturaleza de esta política. La siguiente tabla recoge esta información dividiéndola en cuatro categorías.

Tabla 2. Catalanes de estamentos no privilegiados ennoblecidas por Carlos III

Categoría	N.º
Mercader	59
Campesino	41
Notario	23
Otros	7
Total	129

Fuente: ASN, 1-8; 146-179; 235 y 279. AHN, Estado, libros 990 y 1.007.

30. Es el caso del notario Pere Miquel Bosch Alzina, que había sido hecho ciudadano honrado por Felipe V pero que había contribuido con trigo y hombres en el asedio de 1706. Pedía ser caballero. Carlos III le mantuvo la merced que le había hecho el monarca Borbón. El noble Baltasar Montaner pedía el marquesado de Gàver por el fallecimiento de su hermano, también se le negó. Los otros casos son el labrador leridano Isidre Musa, el caballero Joan Riba y el cerrajero Joan Roig. Cfr. ASN, 147: 355; 150: 30; 151: 70; 157: 539 y 164: 194.

31. Cuatro personas pidieron ser caballeros, pero se les concedió la ciudadanía honrada: Jaume Carner (cónsul de Moià), Pere Ribalta (campesino) y los doctores Melcior Solà y Josep Llorens (Cfr. ASN, 146: 11 y 143; 151: 288; AHN, Estado, libro 990, fol. 348). Otras once personas se les otorgó la dignidad de caballero a pesar de haber solicitado la de noble: los tres hermanos Baró (Jaume, Salvador y Francesc), Ignacio Bas, Llorens Camps, Pere Canals, Francesc Casamitjana, Antoni Gil de Frederic, Josep Rubíes, Jacint Torres y Joan Ximenis. Cfr. ASN, 8: 108; 147: 20, 229 y 255: 149: 217; 150: 303; 151 :297 y 533 y 153: 27. Joan Copons y Francesc Magarola, por su parte, solicitaron un marquesado en 1712 y 1713, pero Carlos III les concedió un condado. Un caso peculiar fue Francesc Amat que solicitaba ser marqués o conde, por lo que el monarca le concedió la merced de menor rango. A estos casaos se debería añadir el referido de Baltasar Montaner. Cfr. ASN, 153: 33 y 422; 235: s/n.

Dentro del grupo de los mercaderes se incluyen aquellos oficios a los que con frecuencia se les asociaba, aunque no fueran mercaderes de matrícula. En este sentido se constata que Carlos III concedió la gracia de ciudadano honrado a ocho tenderos de lienzos, a dos drogueros y a un miembro de los siguientes gremios: apotecario, calderero, zapatero y confitero. Todos ellos pertenecen a la categoría social de artistas y menestrales. En la siguiente tabla se han recogido, pues su análisis permite ver otras realidades.

Tabla 3. Artistas y menestrales ennoblecidos

Año	Nombre	Origen	Oficio
1711	Abadal, Jaume	Barcelona	Droguero
1706	Dalmau y Capcir, Josep	Barcelona	Mercader de paños
1706	Pascual, Josep	Palafrugell	Zapatero y propietario
1706	Mas Duran, Francesc	Ripoll	Tendero
1711	Mestre, Geroni	Desconocido	Calderero
1709	Pineda Guardiola, Jacint	Castellterçol	*Paraire*
1707	Ratés, Francesc	Sant Feliu del Llobregat	Tendero
1710	Ponsich, Gabriel	Vic	Tendero
1710	Riera, Cristòfol	Vic	Tendero
1709	Rovira, Isidre	Vic	Tendero
1710	Sastres y Forolleras, Josep	Llagostera	Tendero del puerto
1706	Vidal, Pere	Tortosa	Apotecario
1710	Vidal, Sebastià	Desconocido	Mercader de lienzos
1710	Vilar, Francesc	Barcelona	Confitero
1706	Vilas, Francesc	Barcelona	Droguero

Fuente: ASN, 1-8; 146-179; 235 y 279. AHN, Estado, libros 990 y 1.007.

Grandes mercaderes del momento, como Jaume Abadal o Francesc Vila aparecen en la documentación como drogueros o confiteros (Oliva, 2001 y 2017). Lo mismo sucedía con los mercaderes de lienzos, que ejercían actividades que iban más allá de la venta al por menor en una tienda: Josep Dalmau, Francesc Màs, Francesc Ratés o Isidre Rovira, son buenos ejemplos de ello. La tabla permite ver la disparidad de los orígenes. De los 15 nombres recogidos, solo cuatro son de Barcelona, el resto pertenecen a una gran variedad de lugares del centro y la costa catalana: Vic, Tortosa, Castellterçol, Palafrugell, Llagostera, Ripoll o Sant Feliu. Ello es indicativo que no fue únicamente la élite económica barcelonesa la que se

benefició de estos privilegios. Si analizamos los que propiamente aparecen como «burgueses» o «mercaderes» constatamos que fueron 35. Entre ellos figuraban algunos de los hombres de negocio más importantes del momento: los hermanos Amador y Sebastià Dalmau, Joan Pau Llorens, Ignasi Martell, Joan Cata, Félix Benajes, Joan Lapeira, Francesc Mascaró o los hermanos Píria Dalmases. La tabla permite constatar que algunos de estos mercaderes habían sido hasta no hacía muchos años antes, drogueros o apotecarios, lo que es indicativo de la conocida movilidad social entre estamentos no privilegiados que había en la Cataluña de ese periodo (Amelang, 2008; Martí-Fraga, 2009).

Bajo el nombre «campesinos» se engloba a 45 personas que en la documentación aparecen como «agricultores», «labradores» o «propietarios». Algunos tuvieron papeles clave en el abasto de víveres (Isidor Musa, los hermanos Alrà o Josep Figueres)[32] y otros fueron militares (Jacint Horteu, Jaume Puig de Perafita). En esta misma línea se debe destacar que 90 privilegiados agraciados con nuevas mercedes por Carlos III, participaban también en actividades económicas. Si se añaden a las 101 personas no privilegiadas implicadas en transacciones económicas que se han mencionado antes[33] se concluye que el 45 % de ellos participaban de algún tipo de estas actividades. En la siguiente tabla se recoge su distribución en función del estamento al que pertenecían antes de recibir los favores reales y el estamento final que gozaban al finalizar el gobierno de monarca austriaco en Cataluña.

La tabla 4 muestra que el 48 % de las personas con actividades mercantiles ya pertenecían al estamento privilegiado (ciudadanos, *gaudints*, militares, caballeros y nobles), con lo que la nueva merced no tenía consecuencias relevantes a nivel económico y social. Los datos sugieren que la entrada los estamentos privilegiados de dirigentes económicos y sociales que no estaban en ellos, no fue tan grande como las cifras parecen sugerir: los 112 miembros de los estamentos no privilegiados (incluyendo los notarios) representan solo el 26 % de todos los agraciados por Carlos III. La tabla también permite ver el significativo número de *gaudints* y notarios ennoblecidos que tenían vínculos mercantiles (15 %) y que la mayor parte de los hombres de negocios ascendieron a la categoría de ciudadanos honrados (50 %), con lo que su ascenso fue limitado en la escala social.

32. ASN, 149: 231; 150:30; 155:158. Véase también Espino (1987).
33. Se incluye en esta cifra a los notarios y mercaderes.

Tabla 4. Número de personas con vínculos mercantiles agraciadas con mercedes nobiliarias

Categoría social antes de ser ennoblecido		
Categoría	**Número**	**%**
Estamentos no privilegiados	101	52
Ciudadano honrado	28	14
Gaudints	20	10
Caballero	19	10
Noble	15	8
Notario	11	5
Militar	2	1
Ciudadano honrado	98	50
Caballero	49	25
Noble	30	16
Titulo	19	9

Fuente: ASN, 1-8; 146-179; 235 y 279. AHN, Estado, libros 990 y 1.007.

El notariado fue otro grupo especialmente favorecido por Carlos III, lo cual se correspondía con su creciente protagonismo político (Amelang, 1986, Molas, 1994). En algunos municipios catalanes los notarios podían ser *consellers* / *paers en cap* (Tárrega o Sant Feliu de Guíxols) o consejeros segundos (Puigcerdà, Tarragona, La Seu d'Urgell, Vic y Balaguer) (Verde, 2021). Se ha documentado 24 notarios ennoblecidos entre los que destacan personajes vinculados a las instituciones catalanas, donde solían ejercer como secretarios (Joan Francesc Verneda, Ramon Congost, Josep Ferran, Josep Llaris, Mariano Rufasta o Josep Soldevila). De modo semejante a los mercaderes, procedían de toda la geografía catalana, donde su influencia sobre sus conciudadanos podía ser considerable: Vilaller, Vic, Montblanc, Montbrió, Sant Feliu de Guíxols, Amer, Ripoll, Tarragona, Bellpuig, Olot o Amer. Más allá de los servicios propios de su profesión, no pocos de ellos alegaban haber prestado dinero, levantado compañías, proporcionado abastos para el ejército o participado directamente en la defensa de algún municipio asediado como voluntarios o dirigentes militares. Incluso hubo algunos que llegaron a ser destacados líderes militares, como el tarraconense Ramon Permini[34].

34. ASN, 150: 122.

Carlos III concedió la merced de ciudadanía honrada o de caballero a 71 *gaudints*, entre los que hubo figuras de gran protagonismo durante la Guerra de Sucesión: Rafael Casanova, Emmanuel Flix, Francesc Bàssols, Salvador Cervera o Tomàs Llorens. También fueron agraciados jueces que se habían destacado por la defensa del marco constitucional catalán frente a Felipe V: Rafael Llampilles o Francesc Más. Pero como sucede con las actividades mercantiles, el número de doctores en leyes o medicina ennoblecidos fue mayor, pues algunos de ellos ya pertenecían a la clase privilegiada, p. 15 ciudadanos honrados, cinco caballeros y tres nobles, que tenían un doctorado en leyes o medicina, pasaron a ser caballeros, nobles o títulos. De los 63 títulos que otorgó el archiduque siete tenían estudios de derecho[35]. En números absolutos Carlos III permitió que 119 doctores subieran en la escala social (27 % de los ennoblecidos), a lo que habría que añadir las mercedes de *gaudint* que otorgó[36].

El ennoblecimiento de militares en un contexto bélico no suponía ninguna novedad para Cataluña. Desde la segunda mitad del siglo XVII estuvo bajo un estado constante de guerra con Francia, lo que había favorecido la llegada de contingentes de otros países (Espino, 1987). Algunos de sus miembros se acabaron naturalizando al contraer vínculos matrimoniales con catalanas, participando en la vida social, pero sin poder hacerlo en la política por carencia de privilegios nobiliarios propios de Cataluña (Martí-Fraga, 2025). En cifras absolutas, 19 militares fueron ennoblecidos, entre los que destacaban *vigatans* de primera hora (Jaume Puig de Pedrafita, Francesc Casamitjana o Josep Moragull) y otros de larga trayectoria al servicio de la corona desde Carlos II (Ignacio Picalqueres, Josep Boneu, Antoni Cortés). A ellos habría que añadir los ciudadanos honrados, caballeros y nobles que habían ocupado y ocuparon cargos directivos en el ejército aliado, como Rafael Nebot, Sebastià Dalmau, Antoni Desvalls, Josep Oliver o Jaume Brichfeus. La importancia que ejercieron las urgencias militares a la hora de conceder mercedes nobiliarias se visualizó en tres decretos del monarca. El primero fue el referido decreto de 1706 prometiendo mercedes a los que se quedasen para defender Barcelona del asedio de Felipe V[37]. El segundo se produjo en 1711, cuando el monarca hizo una pequeña promoción colectiva en la que otorgó la nobleza a Antoni Sabater, Josep Puges, Félix Jordana y Jacint Huerle por haber ayudado al general Shomberg[38]. El tercero se produjo en 1713. Con el asedio de Barcelona ya iniciado, se otorgaron mercedes de caballero y ciudadano honrado a diversas personas para dirigir las escuadras de la coronela (Castellví, 1997, p. 707).

35. En concreto: los condes de Montagut, Quadrells, Camprodón y Claramunt; los marqueses de Rialb, Orís y de Mura.
36. Un listado de las mercedes de notarios concedidas se puede encontrar en ASN, 111.
37. Vid supra. Nota 32.
38. ASN, 164: 146.

6. LA TIPOLOGÍA DE MERCEDES CONCEDIDAS

La mayor parte de mercedes concedidas fueron de grados inferiores de nobleza, especialmente de ciudadanos honrados y caballeros, que representan el 62 % del total. Los ascensos en la escala social fueron reducidos y los casos de personas que en poco tiempo pasan de un estamento muy bajo a uno muy alto no abundaron. De los 130 miembros que pertenecían a estamentos no privilegiados, 101 fueron hechos ciudadanos honrados (75 %), 23 caballeros (17 %) y solo 10 consiguieron la nobleza (8 %). Lo mismo sucedía con ciudadanos honrados y caballeros. El 69 % de los ciudadanos fueron hechos caballeros y el 29 % nobles. Solo hubo dos que llegaron a ser titulados: el mencionado Ramon Vila Perlas, el militar Josep Boneu. Respecto a los caballeros, el 89 % consiguió la nobleza y el resto un título[39]. Los datos siguieren que, a pesar de la abundancia de mercedes concedidas por Carlos III, sus efectos en vida social y económica fueron reducidos. Se debe valorar que el 12 % de las mercedes concedidas implicaron un ascenso de más de dos grados en la escala social, es decir: la mayor parte de las gracias concedidas supusieron cambios limitados en el estatus social[40]. En esta misma línea se constata que, entre los agraciados, hubo cuatro personas que habían solicitado la merced en 1693 y que, tras obtener la aprobación del Consejo de Aragón, solo les quedaba recibir la autorización real[41].

Mención aparte merecen los titulados. Para el periodo que analizamos (octubre de 1705 hasta junio de 1713) Pere Molas considera que se otorgaron una quincena de mercedes tituladas, mientras que Armand de Fluvià eleva la cifra a 55 (Fluvià, 2006; Molas, 2015, p. 198). En este trabajo se han contabilizado un total de 63 mercedes de título: cuatro vizcondes, 29 condes, 24 marqueses y seis Grandes de España[42]. De estas mercedes se beneficiaron 54 personas, lo que representa el 12,4 % de todos los agraciados[43]. Si se pone la atención en su perfil social, el 70 % eran nobles y un 18 % eran titulados con anterioridad a la merced. Hubo cinco caballeros y dos ciudadanos

39. Los condes de Belloc, de la Torre, de Puigdesalit, Estarás, Arenys y Montagut, los marqueses de Poal y Parves.

40. El 69% de las mercedes implicaron cambios de un grado: de mercader a ciudadano; de ciudadano/*gaudínt*/ militar a caballero; de caballero a noble; de noble a título). El 19% supusieron dos grados: de estamentos no privilegiados a caballeros, de ciudadanos honrados a nobles, de nobles a marqueses.

41. ACA, Consejo de Aragón, leg. 242, exp. 17.

42. Los ocho titulados que se han documentado y que no están recogidos por Fluvià son dos condes (Francesc Magarola en 1712 y Josep Meca en 1706) y seis marqueses: Josep Azcón (1706), Guillem Destcatllar (1707), Josep Meca (1707), Josep Erill (1711), Francesc Despujol (1711) y Pere Ribes (1711). Cfr. ASN, 154:180; 162:389, 279:93. Algunos están en Voltes, 1962.

43. Las nueve personas que tuvieron dos títulos fueron: tres vizcondes pasaron a condes (Ramon Belloch, Josep Oliver y Hugo de Sant Joan), dos condes a marqueses y un vizconde a

que alcanzasen esta merced[44]. Se han encontrado 25 memoriales en que se solicita una nobleza titulada. Uno de ellos fue denegado por falta de méritos (el referido Baltasar Montaner), en otros dos se rebajó la merced solicitada de marqués a conde y en otro, en el que interesado pedía indistintamente un marquesado o condado se optó por otorgar la más baja de las dos[45].

Estos memoriales recurren una gran variedad de argumentos: parientes con cargos en instituciones de la Corona, méritos militares y familiares, fidelidad de la estirpe a la casa de Austria, haber levantado o abastecido tropas, etc. Dos ejemplos pueden ilustrar su cariz. En 1706, Francesc Berardo, solicitaba la merced de marqués. Había «sido el único en su esfera [juez de la Real Audiencia] que se reservó puros e intactos sus labios para la real mano de Vuestra Magestad, y evitando la precisión del juramento de fidelidad a otro monarca» razón por la cual no asistió a las Cortes de 1701. También ejerció como capitán de «una de las compañías de la coronela en 1691» y se presentó

> al arribo del Príncipe Darmstad en el de 1704 delante de aquella capital para no tomar las armas contra las tropas auxiliares de su Magestad, habiendo padecido la sinrazón de salir desterrado por dichas operaciones[46].

Josep Oliver, por su parte, solicitaba el condado de Camp Redó. Argumentaba que con Carlos II sirvió a los virreyes «para levantar gente y recoger donativos para engrosar el ejército de aquel principado, como también haber concurrido muchos años en las juntas de la Deputación, Brazo Militar y ciudad de Barcelona». Se opuso al decreto de modificación del testamento de Carlos II que emitió Felipe V, razón por la cual «le fueron quitados los honores que había merecido de aquellos comunes», así como casas y haciendas «con pérdidas muy considerables». Además, añadía que defendió Barcelona en 1697 y había sido capitán de la coronela en 1706[47].

Se ha constatado que el 48 % de los titulados tuvo que justificar sus méritos a través de los mismos mecanismos institucionales (Consejo de Aragón, Real Audiencia) que lo hacía un mercader o un droguero. En este sentido quizá la política de Carlos III supuso una novedad respecto a los monarcas anteriores. Hasta el momento los títulos catalanes habían sido gracias otorgadas por los monarcas de manera muy limitada. Antes de la llegada de Felipe V había en Cataluña 18 títulos,

marqués (Josep Meca, Josep Tord, Josep G. Cartellà Antoni Desvalls) y se concedió la Grandeza de España a un marqués y dos condes (Francesc Blanes, Felip Ferran y Antoni Erill).

44. Los caballeros fueron: los primos Francesc y Félix Areny, Antoni Armengol, Ramon Bell-lloch y Magí Vilallonga. Los ciudadanos honrados fueron: Ramon Vilana Perlas y el militar Josep Boneu.

45. ASN, 153: 33 y 422; 164: 194; 235: s/n.

46. ASN, 147: 358.

47. ASN, 147: 483.

cifra que aumentó a 32 con el monarca borbón. Carlos III introduce un cambio de concepto relevante: el título no es solo una gracia real sino también un derecho de los individuos que posean los méritos adecuados. En caso de existir, el monarca debe concederlo. Es, en la línea de lo planteaba el conde de Robres, una cuestión de justicia. Los datos analizados muestran que algunos de los titulados de mayor protagonismo político durante los años de su gobierno, habían conseguido la merced en fecha tardía, por petición del interesado y después de obtener la aprobación del Consejo de Aragón. No era iniciativa real. Es lo que hicieron algunos miembros de los comunes como Josep Ribera (conde de Claramunt, 1708), Josep Terre (conde de Terré, 1711), Francesc Magarola (conde de Magarola, 1711) o Joan Copons (conde de Sant Martí, 1713). Lo mismo sucedió con destacados militares: Josep Camprodón (marqués de Santdionís, 1709), Francesc Moner (marqués de la Sierra, 1711), Lluís de Peguera (conde de Peguera, 1708) o Josep Boneu (conde de Coromina, 1712). De hecho, el 38 % de las mercedes tituladas se otorgaron a partir de 1708, cifra que aumenta al 60 % si se incluye el año 1707.

7. LAS JUSTIFICACIONES UTILIZADAS

Para acabar este trabajo, se debe profundizar en el argumentario utilizado por los candidatos para demostrar su derecho a recibir una merced. De las 355 peticiones que hubo, se han localizado 278 en las que se detallan los méritos del candidato, lo que supone el 78 % de las peticiones. Es conocida la importancia que tienen los contextos bélicos y los méritos conseguidos en ellos para conseguir mercedes nobiliarias (Andújar, 2006; Bueno, 2024). Pero estas no son las únicas razones. A la hora de identificar las justificaciones de los candidatos, Mar Felices diferencia tres tipologías: la tradición al servicio a la casa de Austria, las alianzas y estrategias familiares, y cuestiones de interés personal (Felices, 2011, pp. 330-333). Esta misma autora cuando se aproxima a la nobleza titulada castellana distingue otros tres amplios bloques: servicios realizados en el ámbito del gobierno; servicios por el pago de un monto económico (donativos, préstamos, asientos) y los que presentan una ausencia de servicios. La autora considera que estos últimos, con mucha probabilidad, fueron compras encubiertas (Felices, 2011, pp. 75-76, 253-280). Para el caso de Cataluña, se constatan algunas diferencias. Al analizar los 77 memoriales que no concretan los méritos que poseen para obtener la gracia solicitada, se observa que al menos 35 de esas personas habían ocupado cargos políticos de responsabilidad en las instituciones catalanas durante y después del gobierno de Felipe V con claros posicionamientos a favor de Carlos III. Entre ellos figuran personas como Rafael Casanova, Pau Ignasi Dalmases, Joan Copons, Pere Ribes o Joan Francesc Verneda. La situación económica de una parte de ellos, no parece que les permitiera la compra de una merced, pues algunos eran doctores en derecho (Josep Dou, Josep Saurina), en medicina (Josep Campmany, Diego Caseta), notarios (Ignacio Gelambí, Josep

Soldevila, Josep Quer) o militares (Lluís de Peguera, Joan Baptista Falcó). Sí que es cierto que también encontramos algunos mercaderes o familiares suyos pudientes (Pau Ignasi Dalmasses, Jaume Abadal, Tomàs Antic), pero suponen muy pocos y tenían méritos que podía justificar su merced. De hecho, en los decretos de concesión, el monarca hacía referencia con frecuencia «al mérito, zelo y amor que en mi servicio se ha acreditado», los «méritos, servicios y circunstancias de la calidad» o «los grandes servicios de la casa del suplicante»[48].

A la luz de la documentación consultada en este trabajo, ha parecido más oportuno clasificar los argumentos utilizados por los candidatos en cuatro grupos divididos a su vez en tipologías. El primer grupo engloba los méritos vinculados a la vertiente bélica del conflicto. Dentro de ellos estarían los militares (haber participado en acciones militares o en la leva de soldados), los económicos (ayudar con préstamos o donativos a financiar la guerra) y el abastecimiento de tropas (proporcionar granos, transportes, vestuario, armas u hospedaje a los soldados). El segundo grupo lo conforman aquellos argumentos relacionados con la actuación política antes o durante el conflicto bélico. La tipología «institucional» recoge los que argumentan haber sido miembros de instituciones políticas. La segunda tipología, «Persecución», hace referencia a las personas que fueron perseguidas y sufrieron daños personales (prisión, secuestro de bienes) como consecuencia de su lealtad a la causa austríaca. Finalmente, con «Besamanos y asedio», se pretende recoger los memoriales que refieren la presencia del candidato en el besamanos a Carlos III en noviembre de 1705 o en el asedio de Barcelona de 1706, como mérito. El grupo «Familiares» comprende todos aquellos memoriales que consideran que sus vínculos sanguíneos con personas que poseen méritos justifican la concesión de una gracia nobiliaria, independientemente que el candidato haya llevado a cabo alguna acción concreta a favor de Carlos III. Una parte de ellos apelaron a los méritos de «otros familiares», otros recurrieron a sus «servicios a Carlos II» y finalmente hubo candidatos que apelaron a la «dignidad de su familia». Los argumentos que no tienen cabida dentro de estos tres grupos se han unificado en un cuarto grupo denominado «otros argumentos». En la siguiente tabla se recoge el número de memoriales en que se recurre a cada una de las tipologías de estos grupos, así como el porcentaje que representan.

Los argumentos más utilizados fueron los de carácter bélico, presentes en 186 memoriales (67 %). Se constata que el 55 % de los candidatos argumentaron alguna actuación personal en la defensa del Principado. Este motivo, en parte estuvo favorecido por los decretos reales de 1706, 1711 y 1713 que se han referido anteriormente[49]. Es llamativa la gran variedad de acciones militares contenidas en

48. ASN, 162: 98; 164: 253; 279: 80.

49. Los decretos de ennoblecimiento a los defensores de Barcelona en 1706, los que ayudaron al general Shomberg en 1711 y el de 1713.

Tabla 5. Grupos y tipologías de argumentos utilizados para conseguir una merced

Grupo	Tipología	Número	%
Bélicos	Militares	152	55
	Económicos	80	29
	Abastecimientos de tropas	53	19
Políticos	Institucional	87	31
	Persecución	41	15
	Besamanos y asedio	55	20
Familiares	Otros familiares	59	21
	Servicios a Carlos II	34	12
	Dignidad de su familia	32	11
Otros argumentos		14	5

Fuente: ASN, 1-8; 146-179; 235 y 279. AHN, Estado, libros 990 y 1.007.

los memoriales: las campañas de Aragón, Valencia, y Madrid, la defensa o conquista de municipios del interior de Cataluña (Lérida, Cervera, Castellfollit de la Roca, Calaf, Urgell, Montbrió, Tremp, Tarragona, Berga, Balaguer, Vic, Gerona), así como su protagonismo en el levantamiento y dirección de tropas por cuenta propia[50].

La ayuda a la Corona a través de donaciones o préstamos de dinero en efectivo es el segundo argumento más utilizado (29 %). Es conocido que una parte de las principales fortunas mercantiles apoyaron a Carlos III, razón por la cual, según Oliva (1992), recibieron mercedes nobiliarias. Pero no fueron los únicos. Los memoriales ponen de manifiesto la pléyade de personas de estamentos diversos que también colaboraron de esta forma. A pesar de representar montos menores, consideraban que su proceder en este campo les hacía dignos de una gracia. Así pensaba el caballero Baltasar Castellarnau y el comerciante Antoni Compte que donaron 50 doblones; el masovero Enrique Deu, el mercader Joan Viles o el caballero Josep Figuerola dieron 100 doblones y el ciudadano honrado de Girona Francesc Roca llegó a los 200 doblones[51]. También hubo otras formas de contribución: el

50. Sobre las formas de levantamiento de tropas véase Andújar, 2004 y 2013. Entre los numerosos ejemplos que recoge la documentación se puede destacar los casos de los labradores, Francesc y Pere Alrà, que pagaron y dirigieron una compañía de 50 hombres en 1706 (ASN, 155: 158); Pau de Ager, barón de la Granadella, que había mantenido y dirigido el *somatent* de Ager a su costa (ASN, 150: 298); el ciudadano de Vic Cristòfol Abrell, había levantado y movilizado más de un centenar de hombre para la defensa de Vic y de Barcelona, siendo su coronel ASN, 149: 245); O el ciudadano de Tortosa Antoni Cases había sido el capitán del regimiento de Tarragona (ASN, 150: 267).

51. ASN, 8: 148; 151: 272, 365 y 406; 157: 415 y 558; 279: 119.

mercader Francesc Castamitjana liberó y alimentó presos a su costa; el campesino Lluís Folch pagó a «las gentes» que participaron en la expedición para conquistar Riudoms en 1706, etc.[52]. En esta línea, los abastecimientos a las tropas tuvieron su relevancia: el 19 % de los memoriales contiene referencias a ellos. Más allá de los habituales suministros de granos y pan, que estuvieron parcialmente en manos de los grandes asentistas (Ferré, 2023), otras personas aportaron madera (Llorens Camps, Ambrosi Màs), jergones (Josep Dalmau), alquitrán (Josep Grases y Gralla), armas (el labrador Tomás Mestre), aceite (Ignacio Gausch), vino (Rafael Mayner), caballos (Ildefons Barraclet) o medicinas (Vicens Pastor). La precisión con que se describen las mercancías entregadas[53] y el perfil social tan variado de sus donantes (ciudadanos, caballeros, *gaudints*, mercaderes, nobles) parecen confirmar tanto el dinamismo social y económico catalán como el amplio apoyo de estamentos muy diversos que tuvo Carlos III (Albareda, 2010, p. 169). De hecho, la barrera entre «méritos económicos» y «abastecimientos» resulta muy fina pues forman parte de una misma realidad: la ayuda al monarca con bienes personales, ya fueran en metálico o en especie. Se ha constatado la existencia de 29 memoriales en que un mismo individuo declaraba haber contribuido con dinero y abastos al mantenimiento de la guerra. Así lo hizo, por ejemplo, el ciudadano honrado Ildefons Barraclet, que había sido *conseller en cap* de Tortosa, proporcionó 900 caballos, aportó dinero para la defensa de la ciudad y fue perseguido por los borbones. El notario Josep Ferrán, además de contribuciones monetarias, abasteció a las tropas con mulas, víveres y madera. Incluso hay casos en que las responsabilidades militares se complementaron con ayudas monetarias y materiales. El mercader Francesc Sambassart, capitán de las diferentes escuadras de la coronela, aportó dinero, jergones para los soldados y herraduras para los caballos[54].

Los méritos vinculados a cuestiones institucionales representan el segundo grupo más numeroso: aparecen en 126 memoriales (45 %). Los de carácter estrictamente político, entendido como los servicios al monarca ejercidos desde cargos de dirección de la monarquía o de los comunes, son los más frecuentes: aparecen en 87 memoriales (31 %). Entre ellos estaban algunos de los hombres que lideraron la oposición al virrey Velasco y a Felipe V desde las instituciones catalanas o la Real Audiencia, así como sus abogados. Se ha hecho referencia a ellos en múltiples ocasiones en las líneas anteriores, por lo que no resulta necesario repetirlos. Menos conocida es la actuación de Carlos III respecto a los méritos políticos de los dirigentes de numerosos

52. ASN, 147: 100; 151: 297.

53. ASN, 146: 458 y 465; 150: 204; 151: 357; 157: 162; 161: 137, 268; 279: 93; AHN, Estado, libro 990, fol. 87.

54. ASN, 146: 33; 147: 488; 157: 162.

gobiernos municipales, ya fuera como *conseller/paer/cònsol en cap*[55], miembro del consejo general o sus bailes[56]. La lista de municipios es considerable: Mataró, Vic, Moià, Cervera, Girona, Tarragona, Olot, Rubí o Manresa. Si a estas cifras, se añaden las 65 personas de las promociones colectivas que también habían ejercido cargos en las instituciones catalanas se llega a la conclusión de que casi la mitad (48 %) de todos los agraciados por Carlos III habían ejercido responsabilidades políticas.

La persecución, encarcelamientos y pérdida de bienes por parte de las autoridades borbónicas aparecen en 41 memoriales, los cuales pertenecen a personas de todo tipo de estamentos: mercaderes (Antoni Alberic, Felip Dosset y Emmanuel Fontanilles) abogados, jueces y notarios (Josep Niubó, Melcior Corbera, Pere Joan Soldevila, Pau Bofarull, Mariano Rufasta); propietarios de tierras (Josep Canals, Francesc Viles, Bernat Vilarrubias) así como una gran variedad de miembros de los estamentos privilegiados (Josep Ferrer, Josep Vilallonga, Felip Vaquer)[57]. Las historias narradas evidencian la gran implicación de algunos de ellos en la causa austríaca. El referido Josep Vaquer, había levantado miquelets, por lo que fue encarcelado por Felipe V; Bernat Vilarrubias había sido perseguido por Velasco, a la vez que contribuyó con víveres para las tropas asediadas en Barcelona en 1706 y el pago del salario de los voluntarios. El notario Melcior Corbera sufrió prisión, pero consiguió escapar para contribuir con donativos a Carlos III[58]. A esta lista, habría que añadir los que encarceló el Virrey Velasco en 1704 por su filiación austríaca, pero que no lo refieren en sus memoriales: los notarios Ramon Vilana Perlas y Josep Llaris, el mercader Amador Dalmau o los nobles Narcís Feliu de la Peña y Josep Copons de la Manresana (Feliu, 1709, vol. III, fol. 528).

Es significativo que algunas de las personas encarceladas por la misma causa no recibieran ninguna merced por parte de Carlos III. Entre ellos encontramos a los caballeros Joan Kies y Josep Rodolat, el ciudadano Arnald Jaguer, los nobles Antoni Pera y Jaume Cordelles así como corredores de cambio (Josep Sayós), cereros (Jaume Brunés) o panaderos (Josep Llarisa y Manuel Rovira)[59]. De los 24

55. Es lo que sucedió con Josep Companys, Josep Reniu, Jaume Regàs o Antoni Grau entre otros.

56. En estos cargos, resulta significativo constatar la presencia personas de estamentos no privilegiados que compatibilizaron su profesión con el desarrollo de sus responsabilidades políticas. Ejemplos de esta realidad pueden ser el mercader Jaume Teixidor y el apotecario Josep Saurina en Barcelona; los negociantes Josep Font y Francesc Roca en Girona, o el notario y militar Ramon Permini de Tarragona. Cfr. ASN, 1:12; 279: 80; 150: 122; 151: 349; 157: 415.

57. ASN, 146: 221; 147: 488; 150: 209; 151: 406; 153: 144; 155: 284; 156: 141; 157: 119; 162: 229, 298; AHN, Estado, libro 990, fol. 156.

58. ASN, 150: 209, 155: 284; 156: 141.

59. La lista de encarcelados fue mucho mayor. Feliu recoge una lista con casi medio centenar de personas, pero constata que hubo «y otros de diferentes estados cuyos nombres ignoro» Feliu de la Peña, 1709, vol. III, fol. 528, lo que sugiere que la cifra debió llegar cerca

presos de 1704 referidos por Castellví, el monarca austriaco ennobleció solo a 10. El dato implica que la concesión de mercedes no fue algo improvisado, guiado únicamente por recompensar fidelidades. Se requiere, por tanto, prudencia a la hora de establecer nexos directos entre los miembros que se opusieron a Felipe V durante sus primeros años de gobierno y las mercedes que les concedió Carlos III[60]. Otro ejemplo ilustrativo se puede ver en los signatarios del *dissentiment* de Torrelles. Algunos autores consideran que los que apoyaron el texto formaban parte del núcleo austriacista (Molas, 2014). Los datos muestran que de los 31 signatarios más de la mitad no recibieron ninguna gracia por parte de Carlos III[61].

Menor importancia tiene el recurso al Besamanos, utilizado por nueve personas y siempre acompañado de otros argumentos. Igualmente se constata que el decreto en el que se prometían mercedes a los que colaboraran en la defensa de Barcelona durante el asedio de 1706, tuvo un efecto limitado. Solo tres personas (el doctor Josep Rubíes, el notario Jeroni Axandrí y Ramon Roig) recurrieron únicamente a él para justificar su demanda de gracias nobiliarias.

Parece claro que los argumentos institucionales y bélicos, son los más frecuentes en los memoriales (91 %). Todos ellos tienen un elemento en común: refieren méritos personales. Esto supone una diferencia respecto del último grupo de motivaciones, que se ha englobado bajo el nombre de «familiares». En ellos los candidatos no justifican sus derechos con base a sus actuaciones personales en servicios directos a Carlos III, sino en la de sus familiares. Así sucede en 59 ocasiones (22 %). En otros se alega haber hecho actos de méritos, pero con Carlos II (12 %), se apela a la «dignidad y fidelidad» de su estirpe o se recuerda al monarca la riqueza y antigüedad familiar (11 %)[62], remontándose en ocasiones hasta tiempos de Carlomagno[63]. Si bien estos tres motivos están presentes en el 39 % de los memoriales solo en 29 casos no se mencione ningún mérito personal (9 %). Este dato es indicativo de dos realidades. Por un lado, reafirma la necesidad de méritos personales para merecer unas gracias. Esto sucedió en el 91 % de los memoriales analizados. Por otro lado, denota la poca

de un centenar. Véase también los datos aportados por los Anales Consulares. Biblioteca de Cataluña Manuscrito, 713, vol. II, fol. 40.

60. Antoni Simón, establece que uno de los criterios que determina el núcleo austriacista fue el hecho de haber sido encarcelado por el virrey Velasco en 1704. Cfr. Simón, 2011: 298.

61. Los signatarios agraciados con alguna merced por parte de Carlos III, fueron: Francesc Amat, Ramon Bell-lloch, Felicià Cordelles, Francesc Despujol, Francesc Magarola, Josep Mata, Josep Meca, Francesc Parrella, Francesc Prats, Antoni Peguera, Josep G Pinos, Francesc Monar, Francesc Sunyer y Pere Torrelles.

62. En otros casos, Miquel Azcón hacía constar que era cuñado de Teresa Potau y Ferran y su familia tenían muchos méritos (ASN, 279: 93); Josep Martínez Areny solo aduce que era hijo del ciudadano fallecido Diego Martínez (ASN, 149: 349); Josep Mata que su tío era titulado y le recomendaba y el ciudadano Pere Villar que su padre era adinerado (ASN, 149: 128)

63. Así lo hacen Lluís y Antoni Cruilles en 1706. ASN 146: 31.

relevancia que el monarca otorgaba a la estirpe familiar o la riqueza del individuo como elementos merecedores de reconocimiento. Fueron muy pocas las mercedes concedidas que se fundamentaron únicamente en este tipo de argumentos. Ejemplo de ello puede ser el capitán de infantería Pere Jonch, que presentaba la antigüedad de su familia en La Marina y tener dinero para vivir con la dignidad necesaria[64].

Finalmente se debe mencionar el reducido grupo de méritos englobados bajo el nombre genérico de «otros argumentos». A pesar de su poca relevancia numérica, son indicativos de la amplia casuística que podía influir en la concesión de mercedes. Algunos hacen referencia a que la casa del candidato hubiese sido utilizada por el rey o la reina para hospedarse (el ciudadano gerundense Antón Grató, el mataronense Josep Reniu o el mercader Antoni Alberich)[65]. También es frecuente el recurso a las riquezas personales para poder vivir con la dignidad que requiere la merced demandada (Daniel Parrella, Josep Perpinya, Francesc Vidiella, Jacint Torres)[66]. En otras ocasiones se pide la merced para ejercer un cargo reservado únicamente a privilegiados, como ser miembro del Consejo de Santa Clara de Nápoles (Francesc Solanes), o maestro racional (Francesc Ratés)[67]. Incluso hay una persona que pretende la nobleza por el simple hecho de haber escrito una alegación jurídica a favor del monarca (Antoni Salvador). Estos casos, y algunos otros en que el fundamento es poco sólido, sugieren que en ocasiones Carlos III sí que pudo actuar con ligereza en la concesión de alguna merced, e incluso compras encubiertas, pero estos casos fueron más la excepción que la regla. Se ha constatado que en el 66 % de los memoriales se usaron dos o más argumentos para justificar el derecho a una merced. Los datos aportados parecen evidenciar que quizá el marqués de San Felipe se equivocaba al considerar que con la llegada de Carlos III «muchos ambiciosos de premio, fingieron servicios que no habían hecho: la codicia no les dejaba ver que se imponían la nota de traidores» (Bacallar, 2007, p. 179).

8. CONCLUSIÓN

El análisis de la política de concesión mercedes llevada a cabo por Carlos III, el archiduque, en Cataluña ilustra la complejidad de factores que influyen en este tipo de decisiones. Más allá de la necesidad conseguir lealtades como consecuencia de un contexto bélico, las líneas precedentes ilustran la fuerte influencia que ejercen otros elementos. En ocasiones obedecen a la necesidad de hacer justicia a

64. ASN, 148: 387. En este caso, se decía que su tío Alexandre Boixadors le recomendaba.
65. ASN, 153: 144; 162: 85; AHN. Estado, libro 990, fols. 258.
66. ASN, 146: 179; 149: 117; 151: 533, 157: 416; En 1707 el mercader Francesc Vidella, recordaba que había sido síndico de Tortosa en las Cortes de 1705, muy afecto a Carlos III, y «hallarse el suplicante con suficientes conveniencias para obtener la honra de ciudadano honrado».
67. ASN, 5: 78; 146: 113.

méritos de carácter político o económico, en otras son necesarias para otorgar la dignidad y el reconocimiento social de los nuevos grupos dirigentes derivados de las transformaciones sociales y económicas. El perfil estamental de los agraciados y la tipología de merced concedida también deben analizar en estos estudios. Las líneas precedentes muestran cómo estos dos factores pueden ser más relevantes que el número de mercedes otorgadas para valorar las consecuencias sociales y económicas de las políticas de concesión de regalías. Finalmente, resulta necesario analizar los argumentos utilizados para ser merecedor de estas gracias. Para ello el análisis de los memoriales y decretos de concesión resultan fundamentales para determinar si las peticiones están sólidamente argumentadas.

Los datos también permiten conocer con más detalle la naturaleza y rasgos del modo de proceder Carlos III en Cataluña. En total concedió más de 467 privilegios de los que se beneficiaron 435 personas. Esta cifra es notablemente superior a la de los anteriores monarcas, sin embargo, sus efectos en la sociedad fueron reducidos. El estudio de los catalanes que se beneficiaron ha mostrado que el 70 % de ellos ya gozaban de fuero militar y otros privilegios propios de la nobleza. Además, el análisis de la tipología de las mercedes, ha puesto de manifiesto que la mayor parte de ellas (62 %) fueron de ciudadanos honrados y caballeros, mientras que la concesión de títulos es inferior al 14%. El argumentario utilizado en los 278 memoriales analizados pone de manifiesto que, en numerosas ocasiones, hubo razones de peso para otorgar la merced solicitada. El estudio de las consultas enviadas por la Real Audiencia, así como la formulación de los decretos reales, demuestra la existencia de sistemas de evaluación y control por parte de las instituciones de gobierno de Carlos III. Todos estos datos sugieren que la política llevada por el monarca austríaco no se caracterizó por la improvisación y derroche que en ocasiones se le ha atribuido.

La política llevada a cabo por Carlos III no distaba mucho de la que habían hecho sus predecesores, especialmente Carlos II y Felipe IV: siguió premiando, pero con mayor intensidad, a estamentos no privilegiados y a la pequeña nobleza, especialmente la vinculada a actividades mercantiles y del mundo de los juristas. Es llamativo que 151 doctores en medicina, en derecho y notarios recibieran mercedes, lo que en cifras totales representan el 43 % de todos los agraciados. Este modo de proceder sugiere que, sin cuestionar el peso que tuvieron los factores militares, el monarca tuvo también en cuenta las transformaciones sociales y económicas a la hora de otorgar las mercedes nobiliarias.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Eduard Martí Fraga.

Agradecimientos y financiación

Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del Grup d'estudis de les institucions i de les cultures polítiques, segles XVI-XXI (2021 SGR 00924) y del grupo de investigación La paz de Viena (1725): cambio en las alianzas internacionales, fin de la guerra civil en España (PID2022-139592NB-100), ambos dirigidos por el profesor Joaquim Albareda.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

9. BIBLIOGRAFÍA

Albareda, J. (1988). Els dirigents de la revolta pagesa de 1687-1689: de barretines a botiflers. *Recerques*, (20), 151-170.

Albareda, J. (1993). *Els catalans i Felip V, de la conspiració a la revolta, 1700-1705*. Vicens Vives.

Albareda, J. (2010). *La Guerra de Sucesión de España (1700-1714)*. Crítica.

Alcoberro, A. (2002). *L'exili austracista (1713-1747)*. Fundació Noguera.

Álvarez-Ossorio, A., Quirós, R., & Bravo, C. (2024). *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*. Marcial Pons.

Amelang, J. (1986). *La formación de una clase dirigente. Barcelona, 1490-1714*. Ariel.

Amelang, J. (2008). *Gent de la Ribera i altres assaigs sobre la Barcelona moderna*. Eumo.

Andújar, F. (1996). El fuero militar en el siglo XVIII. *Chronica Nova*, (23), 11-31.

Andújar, F. (2004). *El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del s. XVIII*. Marcial Pons.

Andújar, F. (2006). Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías. Las recompensas de la Guerra de Sucesión en Andalucía. En J. M. Bernardo Ares (Coord.), *La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725* (Vol. 1, pp. 43-74). Universidad de Córdoba.

Andújar, F. (2013a). Cataluña en el contexto de los cambios políticos de 1705. *Pedralbes*, (33), 39-75.

Andújar, F. (2013b). Guerra, venalidad y asientos de soldados en el siglo XVIII. *Studia Historica*, (33), 235-268. https://doi.org/10.14201/shhmo201335237269

Bacallar, V. (2007). *Comentarios de la guerra de España, e historia de su Rey Phelipe V el animoso* (Vol. 1). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Bajet, M. (2001). *Ciutadans de Barcelona, ciutadans honrats i donzells en l'obra de Fontanella*. Quaderns d'Història.

Bru, L., & Fluvià, A. (1998). *Nobiliari del reial cos de la noblesa de Catalunya*. Joventut.

Bueno, A. (2024). *Aristocracia y representación del State Moderno. Una historia social de la diplomacia a partir de los embajadores españoles en Francia en el reinado de Felipe IV (1621-1665)* [Tesis doctoral, Universidad Carlos III]. Archivo Digital UC3M.

Capmany, A. (1779). *Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona* (Vol. 4). Impremta Antonio de Sancha.

Carrasco, A. (2021). Una ética para la distinción. Los Grandes y el estoicismo en los siglos XVI y XVII. *Magallánica*, *7*(14), 44-66.

Castellví, F. (1997). *Narraciones históricas* (Vol. 3; J. M. Mundet i Gifré & J. M. Alsina Roca, Eds.). Fundación Francisco Elías de Tejada.

Constant, J. M. (2004). *La noblesse en liberté. XVIe-XVIIe siècles*. Presses Universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.18086

Cornete, J. (2000). *La monarchie entre renaissance et révolution 1515-1792*. Seuil.

Cruz, A., Franganillo, A., & Sanz, C. (2021). *La nobleza española y sus espacios de poder (1480-1715)*. Sanz y Torres.

Dantí, J. (1993). *Aixecaments populars als Països Catalans 1687-1693*. Curial.

Dantí, J. (1995). Dels barretines als vigatans i botiflers. La persistència dels conflictes interns. *Afers*, (10), 15-28.

Dantí, J. (2017). Els gremis i el govern municipal: participació i representació corporativa al Consell de Cent en època moderna. *Barcelona Quaderns d'Història*, (24), 81-98.

De Dios, S. (2014). *El poder del monarca en la obra de los juristas castellanos (1480-1680)*. Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha.

Dewald, J. (2004). *La nobleza europea, 1400-1800*. Pre-Textos.

Domínguez Ortiz, A. (1976). *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*. Ariel.

Duran, A. (1973). *Barcelona i la seva història*. Curial.

Elliot, J. H. (1963). *Imperial Spain 1469-1716*. Hodder.

Elliot, J. H. (1990). *España y su mundo*. Alianza.

Elliott, J. H. (2006). *La revolta catalana, 1598-1640*. PUV.

Espino, A. (1987). *Catalunya durante el reinado de Carlos II. Política i guerra en la frontera catalana. 1679-1697*. Universitat Autònoma de Barcelona.

Felices, M. (2006). Hacia la nobleza titulada: los «méritos» para titular en el siglo XVII. En P. Ponce & F. Andújar (Coords.), *Mérito, venalidad y corrupción en España y América: siglos XVII y XVIII* (pp. 19-40). Albatros.

Felices, M. (2011). *La nobleza titulada en el reinado de Felipe V. Formas de acceso y caracterización* [Tesis doctoral, Universidad de Almería]. Repositorio UAL.

Felices, M. (2012). La venta privada de títulos nobiliarios durante los reinados de Felipe V y Fernando VI (1701-1759). En E. Serrano (Ed.), *De la tierra al cielo: Líneas recientes de investigación en historia moderna* (Vol. 2, pp. 695-712). Fundación Fernando el Católico.

Felices, M. (2013). Recompensar servicios con honores: el crecimiento de la nobleza titulada en los reinados de Felipe IV y Carlos II. *Studia Historica. Historia Moderna*, (35), 409-435. https://doi.org/10.14201/shhmo201335409435

Felipo, A., & Pérez, C. (2014). *La nobleza valenciana en la Edad Moderna*. PUV.

Ferré, D. (2023). *Exèrcit i negoci. El proveïment militar a Catalunya durant el regnat de Felip V (1700-1746)* [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. DDD UAB.

Ferro, V. (1987). *El dret públic català*. Eumo.

Florensa, N. (1996). *El Consell de Cent, Barcelona a la Guerra dels Segadors*. Universitat Rovira i Virgili.

Fluvià y Escorça, A. (2006). La qüestió del reconeixement dels títols nobiliaris atorgats pel comte-rei Carles III 'l'Arxiduc'. *Paratge*, (19), 65-75.

Fontana, J. (1955). Sobre el comercio exterior de Barcelona en la segunda mitad del siglo XVII. Notas para una interpretación de la coyuntura catalana. *Estudios de Historia Moderna*, (5), 197-219.

García Cárcel, R. (2002). *Felipe V y los españoles: una visión periférica del problema de España*. Plaza & Janés.

Garcia Espuche, A. (2004). *Barcelona entre dues guerres: economia i vida quotidiana 1652-1714*. Eumo.

García Espuche, A. (1998). *Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña 1550-1640*. Alianza.

Gual, V. (2015). Canvis en la jerarquia urbana catalana des de la perspectiva demogràfica (1553-1787). En J. Dantí (Ed.), *L'articulació del territori a la Catalunya moderna* (pp. 168-170). Dalmau.

Gudiol, J. (1911). *Dos episodis vigatans*. Impremta Portavella.

Jarque, E., & Salas, J. (2004). Oligarquías locales y poder real en Aragón en la segunda mitad del Seiscientos. En F. Aranda (Coord.), *VII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna* (pp. 695-706). Universidad de Castilla-La Mancha.

Kamen, H. (1987). *La España de Carlos II*. Crítica.

Labatut, J. P. (1979). *Les noblesses européennes de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle*. PUF.

Laborda, J. J. (2012). *El Señorío de Vizcaya. Nobles y fueros (c. 1452-1727)*. Marcial Pons.

León, V. (1993). *Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España 1700-1714*. Sigilo.

León, V. (2000). El reinado del archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa dinástico de gobierno. *Manuscrits*, (18), 41-62.

León, V. (2009). La gracia del rey. Las mercedes concedidas por Felipe V sobre los bienes confiscados a los austracistas en vísperas de la Paz de Viena (1725). En J. Ruiz Rodríguez & F. Edelmayer (Coords.), *Hispania-Austria III: der spanische Erbfolgekrieg* (pp. 340-391). Universidad de Alcalá.

Lobato, I. (1993). *Capital mercantil y actividad económica en la Cataluña preindustrial. Compañías y negocios en Barcelona en la segunda mitad del siglo XVII* [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. Dipòsit Digital UB.

Lobato, I. (1995). *Compañías y negocios en la Cataluña preindustrial*. Universidad de Sevilla.

Maixé-Altés, J. C. (1987). Parentesco y relaciones sociales en el seno de la burguesía barcelonesa: Los extranjeros en la Barcelona de los siglos XVII y XVIII. *Manuscrits*, (6), 151-180.

Martí-Fraga, E. (2021). Detrás del asentista. Los contratistas militares de Felipe V en Cataluña 1715-1720. En I. Valdez-Bubnov (Ed.), *Redes empresariales y administración estatal. La provisión de materiales estratégicos en el mundo hispánico durante el largo siglo XVIII* (pp. 97-130). UNAM.

Martí-Fraga, E. (2025). Naciones 'letradas'. Extranjeros y sus relaciones con la elite económica catalana en la Barcelona del cambio del s. XVII. *Magallánica*, (25), 131-161.

Martí-Fraga, E. (2024). Paguistas y prestamistas de Felipe V en Cataluña tras la Guerra de Sucesión (1714-1720). *RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, (14), 101-141.

Molas, P. (1977). *Comerç i estructura comercial a Catalunya i València als segles XVII i XVIII*. Curial.

Molas, P. (1994). La condició social dels notaris de Barcelona a l'edat moderna. En J. M. Sans (Ed.), *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català* (pp. 713-726). Pagès.

Molas, P. (2004). *L'alta noblesa catalana a l'Edat Moderna*. Eumo.

Molas, P. (2015). *Noblesa i Guerra de Successió*. Reial Acadèmia de Bones Lletres.

Morales Roca, F. (1983). *Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Catalunya, siglo XVII (1599-1713)*. Hidalguía.

Morales Roca, F. (1978). *Privilegios nobiliarios del Principado de Cataluña. Dinastía de Austria. Gobierno intruso del Archiduque Don Carlos (1704-1714)*. Hidalguía.

Morales Roca, F. (1979). Privilegios nobiliarios del Principado de Catalunya. Dinastía de Austria. Reinado de Carlos II (1665-1700). *Hidalguía*, (153), 177-201.

Moreno, P. (2012). La noblesa catalana titulada: els grans d'Espanya. *Armoria*, (1), 129-155.

Oliva, B. (2001). *La generació de Feliu de la Peña*. Universitat de Lleida.

Oliva, B. (2017). Els Dalmau de Teià. *Sessió d'Estudis Mataronins*, (33), 181-200.

Pallàs, J. (2014). *El gremi dels perxers: un exemple de cohesió i d'integració a la Barcelona moderna: segles XVI, XVII i XVIII* [Tesis doctoral, Universitat Abat Oliba CEU]. TDR CEU.

Peña, F. (1709). *Anales de Cataluña* (Vol. 3). Juan Pablo Martí.

Pérez Samper, M. A. (1982). La familia Alós. Una dinastía catalana al servicio del estado (siglo XVIII). *Cuadernos de Investigación Histórica*, (6), 195-239.

Ribot, L. (2018). El IX conde de Santisteban (1645-1716). Poder y ascenso de una Casa noble a través del servicio a la Corona. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna*, (31), 23-42. https://doi.org/10.5944/etfiv.31.2018.21141

Robres, Conde de. (2006). *Memoria para la historia de las guerras civiles de España*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Sales, N. (2002). *De Tuïr a Catarroja*. Afers.

Sandóval Parra, V. (2013). La naturaleza jurídica de la merced en la Edad Moderna. *Anuario de Historia del Derecho Español*, (83), 325-411.

Scott, H. (1995). *The European nobilities in the seventeenth and eighteenth century*. Longman.

Serra, E. (1997). Catalunya després del 1652: recompenses, censura i repressió. *Pedralbes*, (17), 191-216.

Simon, A. (2011). *Del 1640 al 1705: l'autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política internacional europea*. PUV.

Soria, E. (2007). *La nobleza en la España moderna: cambio y continuidad*. Marcial Pons.

Soria, E. (2015). Nobleza y élites en la Castilla moderna: De la renovación historiográfica de las últimas décadas a las nuevas líneas de investigación. En O. Rey & F. Suárez (Eds.), *Los vestidos de Clío* (pp. 505-544). Universidad de Santiago de Compostela.

Stone, L. (1985). *La crisis de la aristocracia, 1558-1640*. Alianza.

Torras Ribé, J. M. (1981). Reflexions sobre l'actitud dels pobles i estaments catalans durant la Guerra de Successió. *Pedralbes*, (1), 187-209.

Torras Ribé, J. M. (1993). *Els municipis catalans de l'antic règim (1453-1808)*. Curial.

Verde, J. (2021). *Participació i representació polítiques a la Catalunya dels inicis del segle XVIII. Universitats locals, Cort general i Diputació del General* [Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra]. Repositori UPF.

Voltes, P. (1953). *El Archiduque Carlos de Austria, rey de los Catalanes*. Aedos.

Voltes, P. (1962). Noticias sobre las mercedes nobiliarias otorgadas por el archiduque Carlos de Austria durante su gobierno en Barcelona. *Documentos y Estudios*, (10), 65-105.

Voltes, P. (1963). *Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714)* (Vol. 2). Instituto Municipal de Historia de Barcelona.

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481565597

VERSOS PARA UNA *ILUSTRACIÓN MILITAR*: LA EVOLUCIÓN DE LA TÁCTICA MILITAR EN LA EDAD MODERNA A PARTIR DE LOS *AXIOMAS MILITARES* DE NICOLÁS DE CASTRO

Verses for a Military Enlightenment*: The Evolution of Military Tactics in the Early Modern Age from the* Axiomas Militares *of Nicolás de Castro*

Manuel SOBALER GÓMEZ
Universidad Complutense de Madrid
msobaler@ucm.es

Recibido: 16/09/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Uno de los aspectos fundamentales a la hora de comprender el desarrollo de Europa durante la Edad Moderna fue la influencia de la guerra. Las nuevas realidades del fenómeno bélico no hicieron sino incrementar el interés de los contemporáneos, surgiendo la tratadística militar como un tema independiente. El caso de los *Axiomas Militares* de Nicolás de Castro será como el de otros muchos autores militares, hombres experimentados en el servicio militar, que decidieron plasmar sus conocimientos con el objetivo de obtener reconocimiento y guiar a quienes quisieran dedicarse a la milicia. Al igual que otros tratadistas del siglo XVIII buscará leyes generales aplicables al «arte de la guerra», destacando por su recurso a la poesía para el desarrollo y justificación de principios de la táctica militar extraídos de su experiencia personal y de la historia; así como participar en los debates teóricos de la época, como fue la pugna entre los partidarios del *ordre profond* y del *ordre mince*.

Palabras clave: Nicolás de Castro; axiomas militares; siglo XVIII; tratados militares; Historia Militar.

ABSTRACT: One of the key elements in understanding Europe's development during the Early Modern Age was the influence of war. The new realities of the warfare only served to increase the interest of contemporaries, with military treatises emerging as a distinct genre. The case of the *Axiomas Militares* of Nicolás de Castro is similar to that of many other military writers, men with extensive military experience, who decided to set down their knowledge with the aim of achieving recognition and guiding those who whised to pursue a military career. Like other 18th century military writers, he sought to identify general laws applicable to the «art of war», notable for his use of poetry to develop and justify principles of military tactics extracted from his personal experience and from history; he also took part in the theoretical debates of the time, such as the dispute between the supporters of the *ordre profond* and the *ordre mince*.

Keywords: Nicolás de Castro; military axioms; 18th century; military treatises; Military History.

1. DE LA ANHELADA SIMILITUD CON LA ANTIGÜEDAD A LA DIFERENCIA EMANADA DE LA TECNOLOGÍA MODERNA

La época comprendida desde mediados del siglo XV al final de la guerra de los Treinta Años (1618-1648) es conocida por el desarrollo y la consolidación de los ejércitos modernos, caracterizados entre otros elementos por el aumento de sus efectivos y el afianzamiento del papel de la infantería (O'Donnell y Duque de Estrada, 2013, p. 149) en lo que ha venido a denominarse como «Military Revolution»[1]. Concepto acuñado por la historiografía anglosajona debido a la integración en el arte de la guerra de la pólvora, una revolución no sólo técnica, sino también táctica, que posteriormente facilitaría la expansión por el mundo de los estados europeos (Arnold, 1999, p. 36; Black, 1994, p. 60). Concepto que ha sido puesto en revisión desde entonces, y que aún hoy en día sigue haciendo correr ríos de tinta (Sandberg, 2023, p. 113)[2].

1. El término hace referencia al conjunto de estudios relacionados con los progresos técnicos relativos a la capacidad de los estados europeos para hacer la guerra entre los siglos XVI y XVII. Planteado por primera vez por Roberts (1956).

2. Al respecto convendría la lectura de la de Burns (2022), donde se incluye una perspectiva sobre la guerra en el siglo XVIII, así como la trayectoria de armas, ejércitos, unidades

Dichos ejércitos desarrollaron nuevas tácticas[3] tanto en campaña como en batalla[4], conocidas como «pike and shot tactics», cuya clave estribaba en la capacidad de las formaciones para combinar el poder de choque con la potencia de fuego (Rogers, 2010, pp. 214-216). La pica, un arma característica de la antigüedad, gozaría de un uso revitalizado y sería integrada junto a las armas de fuego de reciente invención, arcabuces y mosquetes, cuyo manejo era más sencillo y necesitaba menos práctica que el de los arcos, aunque tuviesen menor alcance, que era compensado con su mayor poder de penetración.

El origen y extensión del uso de la pica en cuadros nos lo encontramos primero entre los suizos en su exitosa resistencia contra los intentos de conquista austríacos en la Baja Edad Media, si bien ellos utilizaron en ese momento la alabarda. Más la técnica es la misma, el uso en formaciones cerradas de infantería bien adiestrada, las cuales resultan muy eficaces contra la caballería imperante hasta ese momento en los campos de batalla. Su modelo sería posteriormente utilizado por los alemanes bajo la forma de los lansquenetes y de los españoles en los tercios (Rogers, pp. 205-208).

En aquellos momentos el equilibrio entre picas y armas de fuego solía resultar favorable a las primeras frente a las segundas, rondado el 80 % de las unidades, e incluso se llegó a la proporción de un soldado con arma de fuego por cada seis equipados con pica. No sería hasta mediados del siglo XVII cuando se invirtiese la situación, y se redujese en algunos casos a un arma de cuerpo a cuerpo por cada arma de fuego. Si bien éstas últimas eran capaces de infligir grandes pérdidas a sus enemigos, resultaban vulnerables mientras eran recargadas, por lo que los piqueros se desplegaban en formaciones mixtas para protegerlos frente a la infantería y la caballería enemiga. La innovación vendría de manos de los españoles con la creación del Tercio, unidad que además de combinar picas y armas de fuego, incrementó éstas últimas y recurrió al uso de tropas que luchaban con otras armas. Es el caso de infantes armados con espada y escudo para apoyar a los piqueros y desarrollar una clase de infantería ligera que con arcabuces actuaría a modo de escaramuzadores en su frente, precursores de los tiradores dispersos desarrollados a mediados del siglo XVIII. Sería ya en el siglo XVIII cuando los avances técnicos produjesen un nuevo cambio en la táctica militar y con ello el incremento en las publicaciones relativas

---

y generales; relaciones de batallas y novedosas perspectivas acerca de cómo integrar las nuevas metodologías desarrolladas en las últimas décadas para ampliar los campos de estudio de la Historia Militar.

3. Un autor contemporáneo de Castro, Raimundo Sanz, entendía la táctica como «la ciencia de las ordenes que se ofrecen dàr en las diferentes ocasiones de la Guerra» (1749, pp. 397-398).

4. Nuestro término «batalla» se utiliza para definir una acción militar realizada por el grueso de un cuerpo o ejército, y sus distintas partes dispuestas para la acción, por lo que se concibe como un enfrentamiento estructurado frente a combates de menor entidad (O'Donnell y Duque de Estrada, 2013, p. 149).

a la misma, entre las que se encuentran los *axiomas militares* de Nicolás de Castro, que abordaremos a continuación.

2. HISTORIA Y PROPÓSITO DE LOS «AXIOMAS MILITARES» DE NICOLÁS DE CASTRO

El presente trabajo propone abordar la evolución táctica durante la Edad Moderna tomando como referencia los postulados defendidos en los *axiomas militares* de la obra de Nicolás de Castro Álvarez Maldonado (1710-1772) y realizar un estudio que compare su visión particular del arte de la guerra con la evolución de la táctica de la época, tomando como referente, entre otros elementos su apego por el recurso al combate cuerpo a cuerpo o su posicionamiento en enfrentamientos teóricos del momento como el debate entre el *ordre profond* y el *ordre mince* que abordaremos más adelante.

Los *axiomas militares* es una obra compuesta por 264 axiomas, puestos sin orden o relación aparente y dos sonetos, en los que Nicolás de Castro desarrolla su concepción del arte de la guerra en verso, sintetizando sus principios en estrofas, redactadas a partir de sus experiencias en el servicio en Italia y América (Sobaler Gómez, 2024, pp. 25-27).



Figura 1. Retrato de Nicolás de Castro Álvarez-Maldonado, (1710, Ciudad Rodrigo, España - 1772, Panamá). Autor desconocido. Fecha aproximada: Siglo XVIII. (Recuperado de la Venciclopedia)

La obra es más que un curioso ejemplo entre los tratados militares de la época por su formato en verso. El motivo de que se halle escrita en verso puede deberse a que en la Ilustración los autores recurrían a la poesía como un medio de favorecer el aprendizaje, sirviendo como un soporte lúdico que facilitase el estudio de materias áridas (Collantes Sánchez, 2015, pp. 94-95), lo que resultaría pertinente en una obra especialmente compuesta para aquellos jóvenes que buscasen ingresar en la milicia. Por si no fuera poco, el recurso a la poesía enlaza con el origen mismo del arte de la guerra, pues en tiempos primitivos la difusión de los acontecimientos bélicos se realizaba en obras en verso como evidencian Homero con la Ilíada o el Cantar del Mío Cid en la España medieval. Si bien en ambos casos primó la conservación de la memoria y la propaganda política sobre la difusión de saberes, función que la poesía cumplió en época grecorromana y más tarde en la Edad Moderna (Van Creveld, 2015, pp. 8-45). Su escritura no resulta del todo extraña pues en ese mismo siglo XVIII el rey de Prusia, Federico II, publicó en 1760 una obra en francés sobre el arte de la guerra en la que destacó por su recurso a la poesía.

La historia de cómo los *axiomas militares* llegaron a ver la luz décadas después de la muerte de su autor continúa en gran medida siendo una incógnita. Lo poco que conocemos se debe a la introducción de la obra. En ella se nos cuenta como el manuscrito fue terminado en vida de Castro, permaneciendo en el olvido hasta que lo recuperó Pedro Bailin (Castro, 1815, pp. V-VIII), quien lo encontró cuando participaba en las operaciones mlitares en América entre 1780 y 1783, si bien por diversos acontecimientos la publicación no se produjo hasta 1815 (Sobaler Gómez, 2026, pp. 8-10), y sin que podamos conocer hasta qué punto la obra es un original de Castro o fue alterado en algún punto antes de su recuperación por Pedro Bailin, o por el mismo Bailin antes de publicarla, por lo que la obra se encuentra al menos mediada por dos individuos, su autor y su editor, dado que siendo una obra redactada en la segunda mitad del siglo XVIII, no sería publicada hasta comienzos del siglo XIX, más concretamente en 1815, tras la conclusión de la guerra de la Independencia.

El motivo de la redacción de la obra según su autor era la formación de aquellos jóvenes que quisieran ingresar en la milicia y se convirtiesen en los oficiales del ejército (Castro, 1815, p. 2). Mientras que la finalidad de los *axiomas* consistía en establecer una serie de reglas concisas y claras sobre el modo más perfecto de hacer la guerra. En la obra se percibe la influencia de tratadistas y autores de la época tanto originarios de la Monarquía Hispánica, como el III marqués de Santa Cruz, como extranjeros, como Saxe o Folar, entre otros.

El autor aborda en sus axiomas el desempeño de los ejércitos en campaña y en batallas y las estratagemas a seguir para conseguir la victoria. Además de aspectos como la formación del oficial, el papel de la religiosidad, y la necesidad de honor o de mantener la disciplina, incluyendo la recomendación de liderar también con el ejemplo, haciendo referencia al cambiante modelo del perfecto militar en el siglo XVIII.

Un elemento a destacar fue su defensa de la historia como fuente de inspiración, y por tanto, base de la construcción de muchos de sus axiomas, una idea compartida por los autores de su época (Espino López, 2000, pp. 201-202; Maffi, 2007, p. 42). Aunque elementos comunes y propios de la época no eximen al autor de controversias, como ocurre con algunos axiomas que critican de forma poco velada el sistema de ascensos imperante en la España de la época, como se observa en el axioma «16. En la profesion de Marte / el ascenso, sin agravio, / se debe dar al mas sabio, / como en toda ciencia y arte. / Sufrió Roma guerras muy molestas / de los Burros, los Brutos y los Bestias» (Castro, 1815, pp. 3-4). Con el que parece reivindicar la necesidad de establecer el conocimiento y el estudio como un motivo de peso para el ascenso frente a los que hoy sabemos eran los factores predominantes, las relaciones sociales y la venalidad (Andújar Castillo, 2016, pp. 348-350), junto a una soslayada antigüedad defendida por las ordenanzas.

Su defensa del mérito académico (Castro, 1815, pp. 33, 46-48) refleja un pensamiento innovador, aunque no por ello exclusivo de su autor, propio de la confianza ilustrada en el valor de la educación, que se nos hace también patente en su implicación en la enseñanza de las matemáticas en América a los jóvenes que ingresaban en la milicia, y por ende orientada no sólo a la transformación de la sociedad, sino a la sociedad militar en especial. Dicho reconocimiento del estudio frente al valor, la nobleza o la antigüedad supuso toda una innovación del pensamiento militar en el siglo XVIII (Abián Cubillo, 2021, pp. 33-36).

Un elemento relevante sería su defensa del establecimiento de una Escuela Superior de Táctica en la que los axiomas podrían ser utilizados y donde se formase un grupo selecto de oficiales cuyas funciones entiende Castro serían la dirección de toda la institución castrense y que por evidentes motivos sugiere un curioso símil con los estados mayores de los ejércitos en la actualidad. Si bien la posibilidad de establecer una academia militar general en su época era una idea compartida por sus contemporáneos (Abián Cubillo, 2018, p. 517).

3. LA VISIÓN DE NICOLÁS DE CASTRO DE LA TÁCTICA Y SU EVOLUCIÓN EN LA EDAD MODERNA

A continuación relacionaremos los *axiomas militares* de Castro con el arte táctico de la época, indicando sus diferentes cambios y evoluciones, y los momentos en los que el autor coincide o disiente con la táctica imperante en la época. Debemos comenzar recordando como los ejércitos de la Edad Moderna se desplazaban con su impedimenta por zonas previstas de cara al futuro aprovisionamiento. En vanguardia iba la caballería explorando el terreno, y si se diese la ocasión sería la primera en trabar combate, seguida del grueso de la infantería y los bagajes. Una vez se había avistado al enemigo, se iniciaba un despliegue para la batalla que bien podía durar un día, y, sin embargo, resolverse la acción en pocas horas (Duffy, 1987, p. 140).

El despliegue para dar batalla se realizaba con la infantería en el centro, protegida en sus flancos por la caballería como queda ejemplificado por el axioma «103. Una formacion encuentro / que á Marte le dictó Palas, / y es el poner las dos alas / entre los cuernos y el centro». Si bien también podía recurrir uno de los ejércitos a apoyar uno de sus flancos en un obstáculo natural que impidiese el ataque enemigo y le permitiese emplear la totalidad de su caballería concentrada en el lado opuesto, como esgrime en el «124. Si un costado asegurado / tienes con un fuerte terreno / la caballería es bueno / toda en el otro costado» (Castro, 1815, pp. 18, 21). Ideas que Castro, al igual que la mayoría de los autores de la época, suscribe.

Pese a la preeminencia del despliegue clásico, éste se solía amoldar a las características de cada terreno y la composición de cada ejército (Black, 2023, p. 8), optando por diversas configuraciones. Si se era superior en número o se poseía una fuerza superior de caballería, y se tenía la iniciativa y la intención de atacar, se solía preferir el despliegue en terrenos regulares y sin obstáculos naturales. Mientras que se solía preferir desplegar el ejército en terrenos de difícil acceso, escarpados y de complicado avance como zonas boscosas si se estaba en inferioridad numérica o el principal activo era la infantería y se debía recurrir a una actitud defensiva, la cual se veía reforzada en zonas que dificultasen la cohesión y el ataque de las unidades enemigas, en especial de la caballería, frente a la mayor versatilidad y adaptabilidad de la infantería a la variabilidad del terreno (Duffy, 1987, p. 159; O'Donnell y Duque de Estrada, 2013, pp. 158-159), tal y como atestigua el axioma «96. La diversa variedad / de ataques usar es bueno / conforme á la calidad / de las tropas y el terreno» (Castro, 1815, pp. 16-17).

Si se plantea dar una batalla defensiva, y además se tenía conocimiento del camino por el que el ejército enemigo se aproximaría, y el terreno no contaba con accidentes, éstos se podían crear de forma artificial, como las trincheras que servían para reforzar una posición, reflejado por el axioma «183. En la trinchera esperando / vale un hombre contra cinco / si no lo pasan de un brinco, / ó si no vienen volando» (Castro, 1815, pp. 30-31), y en el caso de ser necesario se recurría a los gastadores que preparaban el camino para el grueso de las tropas, allanando el camino como ejemplifica el axioma «46. Pala y azadon construyen, / si se trata de defensa; / mas si se trata de ofensa / pala y azadon destruyen: / en cualquiera fortuna buena ó mala / siempre trabajan azadon y pala», entre otros presentes en la obra (Castro, 1815, pp. 30-31).

Era conveniente concebir si se podía, una forma de retirada para tus fuerzas, remarcado por el axioma centésimo septuagésimo tercero, en el que además se aconsejaba el control en la medida de lo posible de los terrenos elevados, «Viéndote en las apreturas / de retirada forzosa, / es utilísima cosa / el ir ocupando alturas» (Castro, 1815, p. 29).

Respecto a la artillería, también presente en los axiomas, cabría mencionar que, a comienzos de la Edad Moderna, antes de ser empleada principalmente contra la artillería enemiga como ocurriría después, era utilizada para desorganizar los grandes cuadros de infantería característicos de la época, desmoralizándolos y causándoles bajas que facilitasen un contrataque posterior (O'Donnell y Duque de Estrada, 2013, pp. 159-164).

Además de esos principios generales del arte de la guerra, era aconsejable llegar con el ejército descansado a la batalla, habiendo ocupado previamente si se podían las mejores posiciones, y haber tenido en cuenta las condiciones meteorológicas como el viento, el sol a las espaldas, etc. Principios ideales para plantar batalla (O'Donnell y Duque de Estrada, 2013, pp. 163-164) recogidos en el axioma más extenso y detallado de todos los presentes en la obra, el ducentésimo quincuagésimo cuarto:

> 254. Si espera tu enemigo algun refuerzo,
> si notas en tus tropas mucho esfuerzo,
> si víveres te faltan ó dineros,
> si al retirarte hay desfiladeros,
> si con desórden tu rival se mueve,
> si eres mas diestro al arma blanca, y llueve,
> si los coges recien desembarcados,
> si de una larga marcha están cansados,
> si tú sabes su plan, y el tuyo ignora,
> si tu desercion le aumenta y te aminora,
> si te sitia la plaza mas urgente,
> si el rival enfermó, ó si está ausente,
> si algun desfiladero los ataja,
> ó si te dan alguna otra ventaja:
> estos, con otros que el ingenio halla,
> son los motivos para dar batalla
>
> (Castro, 1815, pp. 43-44).

Pero además de enfrentamientos campales o asedios, en la época se recurría a escaramuzas o emboscadas en terrenos accidentados o complicados como bosques, y en especial durante la noche. Siendo en la Edad Moderna más numerosos que las grandes batallas o asedios (Domizio, 2025, pp. 7-47; Wilson, 1999, p. 94). La finalidad era mantener alta la moral propia y en tensión al enemigo, atacando a sus exploradores o sus líneas de suministro a retaguardia. Dichos golpes de mano los solía protagonizar la caballería, a veces apoyada por grupos de infantería. Ocasiones como el cruce de pasos de montaña eran especialmente propensos a las emboscadas (O'Donnell y Duque de Estrada, 2013, p. 170).

En la obra de Castro son varios los axiomas relativos a las mismas y al peligro que puede suponer el desconocimiento del terreno, o su control por el enemigo, que

lo convierte en una ventaja a su favor, representado en el nonagésimo tercer axioma, «Tendrás un sumo cuidado / por medio de algun abrigo / no te coja el enemigo / por retaguardia ó costado: / esto mismo lo harás como prudente / siempre que la ocasion se te presente» o el peligro que podía suponer la falta de luz «259. La noche los temores acrecenta, / y ocultando los riesgos los aumenta» entre otros (Castro, 1815, pp. 41, 44, 45).

La siguiente innovación vendría de manos de los hermanos Nassau y Gustavo Adolfo, los grandes innovadores en el arte de la guerra de su época[5]. De hecho, los avances tácticos introducidos en los ejércitos holandeses a finales del siglo XVI fueron perfeccionados por los suecos a comienzos del siglo XVII. Los primeros crearon los batallones (Asch, 1999, p. 54; Parker, 2010, p. 162), unidades más reducidas, y por ende menos vulnerables al fuego de la artillería, además de ganar en movilidad y en versatilidad.

Los soldados con armas de fuego desarrollaron una táctica de disparo por filas que se alternaban de 6 a 12 en profundidad, la contramarcha, consistente en disparar y retirarse a retaguardia para protegerse mientras recargaba su arma, protegido por sus compañeros (Castro, 1815, p. 120). Lo que les confirió mayor poder de fuego y seguridad, dependiendo en menor medida de los piqueros (cuya proporción se redujo de 2 a 1) para su defensa, aunque requería más entrenamiento. Con lo que las armas de fuego impulsaron un tímido cambio hacia la dispersión que se materializa en la reducción del tamaño de las unidades (Rogers, 2010, p. 203).

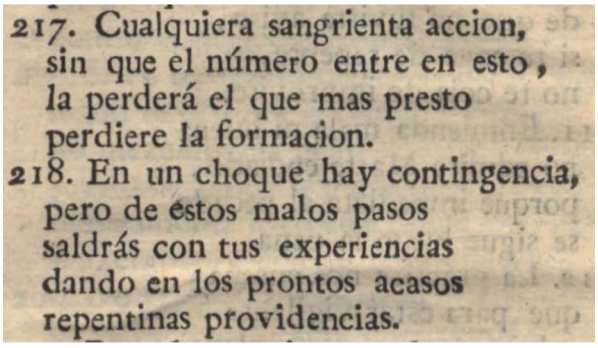

217. Cualquiera sangrienta accion,
sin que el número entre en esto,
la perderá el que mas presto
perdiere la formacion.
218. En un choque hay contingencia,
pero de éstos malos pasos
saldrás con tus experiencias
dando en los prontos acasos
repentinas providencias.

Figura 2. *Axiomas* ducentésimo decimo séptimo y ducentésimo decimoctavo (Castro, 1815, p. 36)

5. En sus postulados originales Michael Roberts entendía la revolución táctica de Mauricio de Nassau como una medida defensiva frente a España, la potencia hegemónica de Europa en la época. Mientras que Gustavo Adolfo perfeccionó la ofensiva durante las operaciones contra esa misma Monarquía Hispánica que había acudido a la guerra de los Treinta Años en apoyo de sus parientes austríacos (Storrs, 2023, p. 161).

Por su parte, la caballería, continuó reduciendo su armadura, y su proporción respecto a una infantería que no dejó de acrecentar su número. Además de la incorporación de armas de fuego, la caballería desarrolló el uso de la técnica de la caracola, consistente en acercarse a la infantería para luego disparar y retirarse inmediatamente a recargar, repitiendo el proceso hasta que el número de bajas en la infantería enemiga habilitaba la carga frontal (Martí Sempere, 2006, p. 93).

Lo que se demostró como un método ofensivo poco efectivo ya que la infantería tenía un mayor poder de fuego, por lo que el uso de la caballería siguió siendo como antaño, a modo de contrapartida de la enemiga, para amenazar sus flancos o para perseguir al enemigo si éste había entrado en desbandada. Momento culmen en el enfrentamiento, en el que las unidades de un bando lograban que las del enemigo, creyéndose derrotadas y por ende perdidas, traten de escapar o de retirarse desorganizadamente. Como observamos en la obra de Castro en el axioma «217. Cualquiera sangrienta accion, / sin que el número entre en esto, / la perderá el que mas presto / perdiera la formacion» (Castro, 1815, p. 36). Con todo, los cambios técnicos motivados por la evolución táctica de dicho periodo se vieron limitados por la capacidad logística y la eficacia de la administración de los estados, que posteriormente desarrollarían un mejor sistema fiscal-militar de cara a financiar la preparación de la guerra, un negocio caro en costes humanos y materiales[6].

El mejor exponente sintetizador de los avances producidos hasta el momento fue Gustavo Adolfo II de Suecia, uno de los grandes comandantes de su época. Algunas de sus innovaciones fueron la creación de un ejército permanente en el que las unidades reclutadas entre la población regnícola servían junto a mercenarios. Su maquinaria militar gozó de gran éxito debido a elementos como su cohesión, fruto del rigor en la disciplina y la instrucción de sus unidades. Su habilidad táctica como general quedó atestiguada en axiomas, como el «141. De Mantinëa y Pavía / las dos famosas acciones / ganó la caballería / mezclada con pelotones / de escogida infantería; / y despues sagaz y bravo / en Lutzen el gran Gustavo» Cuyo éxito no sólo vino de sus propias innovaciones sino de lograr una integración armónica de las diferentes evoluciones que había experimentado el arte de la guerra en aquella época, expuesto en el axioma «99. Gustavo en Leisprig formó / columnas entre brigadas, / con cuyas sierras dentadas / al contrario derrotó» (Castro, 1815, pp. 17, 24).

Destacó por el uso de una artillería reformada a la que había reducido, para una mayor operatividad a cuatro calibres, 6, 12 y 24 libras, y de 3 que serviría

6. Un tema estudiado en menor medida por la historiografía tradicional pero que ha cobrado vida en los últimos años de manos de autores como Rafael Sánchez Torres, que se han interesado por la financiación y los costes de la guerra, tanto en el apartado armamentístico como más puramente logístico (Torres Sánchez, 2016, p. 373; Weigley, 1991, p. 103). Para un estado de la cuestión de la materia véase (González Enciso, 2020, pp. 15-43).

como un apoyo previo al asalto de la infantería, una carga conjunta de piqueros y mosqueteros, innovando al conferirle a los primeros tal rol ofensivo. Formaba a su infantería en dos líneas incompletas que permitían la retirada de la primera o el avance de la segunda en apoyo de la primera en batalla sin romper el orden de las formaciones. Reflejado por Castro en el axioma «100. Si á primera línea / tal error que se confunda, / debe abrirse la segunda / para que atrás se rehaga. / La tropa lo hará con desenfado / si en tiempo de paz lo ha practicado» (Castro, 1815, p. 17). Respecto a la caballería, recurrió a la ligera y al uso de coraceros, armados con espada y pistola, los cuales gozaron de una gran eficacia en sus cargas por su férrea disciplina y por el uso combinado junto a la infantería.

El establecimiento en la época de los depósitos de suministro en los fuertes hizo que éstos cobrasen una mayor importancia, al ser a partir de ese momento no sólo un elemento de control del territorio sino también la clave habilitante de los desplazamientos. Ya que a lo largo de la Edad Moderna los ejércitos que entraban en campaña tuvieron que hacer frente tanto a las dificultades logísticas derivadas de las malas infraestructuras, las restricciones físicas involuntarias y a la dependencia del clima para realizar las campañas, prefiriéndose primavera-verano para su ejecución[7].

En ese sentido los mejores territorios para el despliegue y mantenimiento de una fuerza capaz de llevar a cabo acciones de envergadura debían contar con buenas comunicaciones terrestres, aún mejor si eran complementadas por rutas fluviales o marítimas. Además, deberían contar con un buen desarrollo de los sectores agrícola y comercial y con grandes ciudades, como en la época ocurrió en los Países Bajos o el norte de Italia, donde tuvieron lugares numerosos enfrentamientos (Duffy, 1987, pp. 8-9, 13; Segura García, 2014, p. 127). Todo ello supuso el desarrollo y el perfeccionamiento del arte de las operaciones de ataque y defensa de las plazas (Strachan, 2005, p. 34). Como el autor justifica con el axioma «155. Que no quede plaza es bueno / á la espalda en la conquista, / si no tienes á la vista / otras que sirvan de freno» (Castro, 1815, p. 26).

Fue una época en la que se prefirió el asedio por encima de la batalla, aunque se ha demostrado que éste comportaba un mayor número de bajas. Sin embargo, el hecho de que las mismas fueran graduales ayudaba a la reposición de unas tropas cuyo entrenamiento rondaba de tres a seis años, por lo que el miedo a su deserción o pérdida fue un elemento real condicionante del arte de la guerra de la época. Y siempre fue más lenta la formación del jinete como atestigua el axioma «136. El de á pie pronto es guerrero; / el ligero con tardanza, / por ser doble la enseñanza / de caballo y caballero» (Castro, 1815, p. 23).

7. Sanz definió en su diccionario militar la campaña como «el tiempo que se pueden tener las Tropas en cuerpo de Exercito cada año» (Sanz, 1749, p. 53).

Además, entendían un asedio como una operación que a largo plazo podría compensar los beneficios a los costes, lo contrario de una batalla, que era entendida como algo más cercano a una apuesta, falta la mayoría de las ocasiones de la debida planificación, y sin las suficientes certezas de éxito que compensasen el riesgo. Las batallas eran entendidas, así como un acontecimiento devenido de los asedios[8], por lo que siempre se prefirió la maniobra con el fin de amenazar las líneas de suministros enemigas o tratar de aislarle de su retaguardia, privándole de una vía de escape y forzar con ello su retirada. Por lo que los enfrentamientos campales eran deseables si se tenía una clara superioridad, la posibilidad de vencer con reducidas pérdidas o si por el contrario no quedaba otra opción (Duffy, 1987, pp. 8, 140).

El siguiente gran exponente en el arte de la guerra lo encontramos en la Francia de Luis XIV, emulada en casi toda Europa, consistente en el uso de un ejército estandarizado que recurriese en menor medida a los mercenarios. Recurso omnipresente durante la Edad Moderna dado que aliviaba la carga demográfica de los estados y el sempiterno problema de la elevada deserción. Especialmente propicios resultaban los momentos de dispersión durante las tareas de forrajeo; sin olvidarnos del riesgo de insubordinación, que se podía subsanar con una férrea disciplina (Ibidem, pp. 24, 70, 100; Strachan, 2005, p. 30). Si bien, la deserción siempre fue algo común en los ejércitos europeos de la época, tanto por parte de las tropas regnícolas como de las extranjeras (Andújar Castillo, 2003, p. 139; Bragado Echevarría, 2020, pp. 46, 47).

El ejército francés estuvo en los siglos XVII y XVIII organizado en regimientos cuya historia y emblemas mantenían la cohesión, modelo posteriormente implantado por Felipe V en España. Castro manifiesta la necesidad de escribir la historia de cada regimiento en el axioma «11. Sería de gran fomento / el que en cada cuerpo hubiera / un oficial que escribiera / la historia del regimiento» (Castro, 1815, p. 3).

4. LA GUERRA EN EL SIGLO XVIII: EL ADVENIMIENTO DE LAS TÁCTICAS LINEALES

El mando en la Edad Moderna recayó en su inmensa mayoría en la clase nobiliaria; y la recluta se realizaba siguiendo una política mercantilista, es decir, orientada a las clases improductivas primordialmente, con intención de perjudicar lo menos posible a la economía. Lo que se tradujo en la recluta de hombres de escasa confianza, por lo que la disciplina se hizo cada vez más necesaria. El estado no sólo se encargó del aprovisionamiento y suministro de las tropas, sino que en el siglo XVIII también

8. Un claro ejemplo es el de John Churchill, I duque de Marlborough, quien ganó fama como comandante cuando sólo lucho en cuatro batallas, pero participó en treinta asedios (Starkey, 2003, p. 45).

de su alojamiento en espacios diferenciados de la población civil para evitar los subsiguientes roces, nada extraños en la época.

El siglo XVIII fue un periodo de transición en Europa en el que se consolidaron y perfeccionaron los avances tecnológicos y las instituciones militares previas. Lo cual hizo que el arte de la guerra practicado por los europeos fuese más efectivo que el de sus rivales extraeuropeos. Todo ello no habría sido posible sin la existencia de fuertes gobiernos e instituciones consolidadas que permitieran mantener el esfuerzo de guerra, encargándose los gobiernos en mayor medida del reclutamiento, gestión y aprovisionamiento, aunque eso no eliminó el recurso a asentistas que proveyesen material de guerra y hombres. Para lo que el esfuerzo económico resultaba fundamental, siendo el país mejor preparado para ello Gran Bretaña gracias a instituciones como el Banco de Inglaterra o el Sinking Found (Duffy, 1987, p. 3; Segura García, 2014, p. 126).

En aquella época el aumento del número y de la potencia de fuego de la infantería jugará un papel fundamental, que terminó por derivar en un problema táctico sin una resolución satisfactoria hasta la época napoleónica. Se trata de la época de las llamadas «tácticas lineales», surgidas de la mezcolanza de nuevas tecnologías para hacer la guerra junto a la adaptación de las tácticas de la segunda mitad del siglo XVII. A lo que hemos de sumar la disciplina, la cual redundó en un incremento de la profesionalización y de la capacidad de combate de las unidades (Dupuy, 1980, p. 144; Segura García, 2014, p. 120).

La guerra del siglo XVIII ha sido vista por la historiografía como una guerra limitada debido a la restricción impuesta a unos despliegues condicionados por fortalezas y líneas de suministro, una mayor sujeción de los generales a la autoridad política y el recuerdo de las atrocidades de la guerra de los Treinta Años (Segura García, 2014, p. 128). Actualmente sabemos que el avance del siglo fue paralelo al incremento del número de combates, por lo que ocurrieron más a menudo de lo que hasta ahora se había pensado, y la elevada mortandad era debida en su mayoría a la mejora de las armas de fuego (Segura García, 2014, p. 129).

En esta época, los mosquetes de mecha dan paso a los de chispa; los cuales no sólo eran más fiables, sino también más seguros y rápidos de recargar, permitiendo reducir el espacio entre mosqueteros y el tiro hombro con hombro. Su uso se remonta al siglo XVI en rifles y pistolas, aunque al ser más caro tardó en incorporarse al mundo militar, estandarizándose a principios del siglo XVIII (Segura García, 2014, p. 120). Además de producirse la invención de los cartuchos de papel, que permitieron aumentar la velocidad de recarga, reduciendo los movimientos necesarios, con lo que se incrementó el número de disparos por minuto; y por consiguiente aumentó su potencia de fuego, siempre vinculada al entrenamiento y las condiciones climáticas. Con lo que el piquero vio reducida su proporción en los ejércitos a uno por cada cuatro o cinco mosqueteros, hasta el punto que suscitó

el problema de su emplazamiento, dudando entre repartirlos entre el centro y los flancos, situarlos solo en el centro o en una formación de cinco filas con los piqueros en la tercera. El problema de coordinación concluyó con la incorporación de la bayoneta, que de ser un simple cuchillo insertado en el cañón del fusil llegó a evolucionar a modelos que permitían tenerla calada y disparar al mismo tiempo, si bien su uso requirió de un mayor adiestramiento.

Los tratadistas de la época trataron sin éxito de responder a nuevas problemáticas derivadas de los cambios tecnológicos y el aumento de la potencia de fuego en el plano táctico. Dada la carencia de una fórmula maestra cada comandante actúo en consonancia con su formación y de acuerdo con la situación, y dependiendo del momento, no faltaron las voces que preconizaron un eventual retorno de la pica, despreciando la potencia de fuego. Dicho debate, que abordaremos más adelante, entre los partidarios del orden profundo y la columna, o el orden delgado y la línea abarcará buena parte del siglo XVIII, hasta que se encuentra una solución que abogue por una combinación de las ventajas de dichos sistemas (Segura García, 2014, p. 121).

Ambas innovaciones permitieron una mayor cohesión de la unidad de infantería y adelgazar las líneas por la reducción del número de sus filas hasta tres, cuando a mediados del siglo XVII su número solía rondar seis o más. El motivo era maximizar la potencia de fuego a la par que reducir el efecto de la artillería enemiga en las unidades propias. En el caso británico, desde finales del XVIII y hasta finales del XIX adoptaron el uso de sólo dos filas (Duffy, 1987, p. 160). Las cuales contaban con una segunda línea a modo de reserva como emana de los axiomas «101. De tropa bien arreglada / la segunda línea puesta / para todo está dispuesta / si está en columna formada» Y «111. Si una línea sola opones, / verás como la conservas / si en su defensa dispones / muchas y buenas reservas» Donde además se alude a la mayor velocidad y efectividad del desplazamiento en columna de las unidades, previamente al despliegue en línea (Castro, 1815, pp. 17, 19).

En el siglo XVIII poco se había innovado respecto a siglos previos en cuanto a la táctica, realizándose despliegues similares, aunque utilizando la línea como principal formación, lográndose resultados poco determinantes pero costosos en vidas. Un intento de resolución parcial fue el uso del orden oblicuo utilizado por Federico II de Prusia, consistente en concentrar sus fuerzas frente al punto débil del enemigo, contra el que lanzaba una parte importante de sus efectivos mientras el flanco más débil entretenía al contrario y comprometía sus reservas.

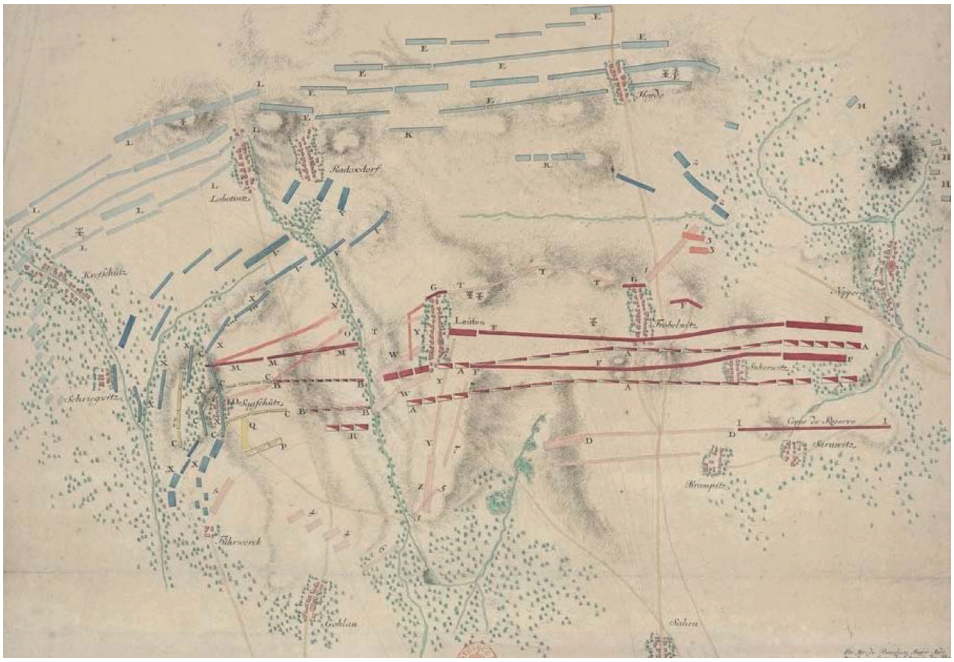


Figura 3. Detalle de un plano de la batalla de Leuthen (5 de diciembre de 1757). Librada en Silesia entre el ejército austríaco y el prusiano. Obra de Sébastien de Beaulieu y Johann Thomas von Trattner. Dato de edición según Gallica 1757. Bibliothèque nationale de France (BNF), département Cartes et plans, GE D-13 585

Sin embargo, su éxito dependía en gran medida de la desorganización del enemigo antes de que la propia ala débil cediera, y de la sorpresa garantizada por el descuido del contrario, la orografía y el uso de marchas forzadas, sostenidas con entrenamiento y disciplina. Si bien existía el riesgo de que esa parte del ejército quedara aislada del conjunto y supusiese una brecha entre tus dos alas. Como expone Castro en axiomas como el centésimo décimo segundo, «112. El órden oblicuo emplea / sin despreciar la coluna / y porque mejor se vea / tienes leccion oportuna / en Leuctres y Mantinea», entre otros, que incluimos a pie de página[9]. Su objetivo no era otro

9. «119. En ataque paralelo / tan comun en apariencias, / deben obrar con desvelo / excelentes experiencias / precedidas de un gran celo»; «180. Son buenas marchas forzadas / sabiéndolas disponer / ocultas y anticipadas, / tanto para acometer / como para retiradas» y «253. Con tu fuerte ala ataca oblicuamente / á la de tu rival de débil gente: / la otra firme manten y defendida / libre de la contraria ala escogida: / si la una envistes, y la otra atajas, / lograrás pelear con dos ventajas» (Castro, 1815, pp. 19, 20, 30, 43). Como evidencia el axioma 112, la

que tratar de dotar de nuevo a la táctica de una movilidad perdida (Nosworthy, 1992, p. 192; Segura García, 2014, pp. 121-122).

La infantería en aquella época formaba en dos líneas en el centro, separadas por trescientos metros, y con la caballería en sus alas. La artillería, por su escasa movilidad al inicio del periodo quedaba repartida en la línea, agrupada en baterías, y protegida por tropas de infantería y pequeñas construcciones temporales. Su función principal continuó siendo debilitar al enemigo, aunque una vez emplazada rara vez era reposicionada debido a su peso, hasta el surgimiento de la artillería volante en el siglo XVIII, que tenía un cariz más ofensivo. También conocida como ligera, rodada o montada. Uno de los elementos innovadores de los que se sirvió Federico II (Telp, 2005, p. 15). Un adelanto técnico controvertido en la época, y del que varios militares reivindicaron su invención, véase en el caso español los testimonios de Peñalosa y Zúñiga (1796, pp. 4-5) y Salas y Cortés (1831, p. 125).

Si se contase con unidades sobrantes se constituiría una tercera línea a modo de reserva. Algunos autores de la época abogaban por el despliegue dejando espacios en la línea que posibilitasen retirar algunas secciones, o la incorporación de reservas de infantería por dichos huecos, a la par que la combinación de caballería con infantería en los flancos, sistema conocido como entreverado para reforzar las alas. La intención era asegurar su éxito en las maniobras de envolvimiento (Segura García, 2014, p. 122), y con ello la victoria en la batalla. Castro lo ejemplificó en el axioma «139. Del ligero y del peön, / los dos cuerpos se entretejan, / de tal modo lo dispon / que uno á otro se protejan» (Castro, 1815, pp. 23-24).

No deja de resultar curioso que, aunque el ataque oblicuo sólo tuvo éxito en Leuthen (1757), causase una honda impresión en sus contemporáneos, siendo fruto de la preparación de los soldados de Federico II, del terreno favorable y de la sorpresa de los austríacos. Federico II también fue famoso por usar la columna para el movimiento de tropas, que rápida y disciplinadamente se orientaban como una fila al enemigo. Y por emplear artillería ligera de tres libras, vital para apoyar a su infantería y a su caballería (Liddell Hart, 1991, p. 88; Martí Sempere, 2006, pp. 94-95; Starky, 2003, p. 47).

La táctica lineal, sin embargo presentaba el problema del movimiento, y en concreto en un terreno desigual, el avance exigía continuos reajustes del despliegue de las unidades, para lo que la disciplina resultará algo fundamental, como en especial demostrarán los ejércitos de Federico II, un monarca que en aquellos tiempos no sólo destacó por no dudar a la hora de entablar una batalla campal, sino que además desarrolló una importante y prolongada actividad como líder militar, algo inusual

---

inspiración para el desarrollo de la técnica provino de las lecturas sobre la Grecia antigua, en especial de su uso por el general tebano Epaminondas contra los espartanos en la batalla de Leuctra en el 371 a. C.

para un monarca en la época (Black, 1994, p. 65; Delbrück, 1990, p. 273; Martínez Ruiz, 2016, p. 244).

También requirió una fuerte disciplina el desarrollo de los distintos métodos de disparo de las unidades, por filas o por compañías. En el caso de estas últimas, disparaba primero la de un extremo y luego la del opuesto, alternándose hasta llegar al centro, de forma independiente, reservando a la compañía de granaderos, cuyo fuego solía quedar en reserva. En el método del fuego por filas, que podían realizar compañías y batallones, disparaba la primera línea mientras la segunda y la tercera aguardaban, realizando sus salvas cuando disparaba la anterior, estando siempre una dispuesta como prevención para hacer fuego. El tiempo entre salvas dependía de la velocidad de recarga. Claro está, su efectividad dependía de la puntería, y ésta a su vez lo hacía del entrenamiento. Los soldados solían disparar por encima de los enemigos, por lo que se les aconsejaba bajar la línea de tiro, aunque así los proyectiles pudieran dar en el suelo (Segura García, 2014, pp. 123-124).

Castro ejemplifica el problema mencionado y la necesidad de esperar al momento oportuno para ejecutar el disparo en el axioma «64. Tus fuegos los mas constantes / los hallarás imperfectos, / si no los dispones rectos, / recíprocos y rasantes» Y en el «130. Eugenio con grande instancia / á sus tropas les encarga / que no ejecuten descarga / hasta muy corta distancia» (Castro, 1815, pp. 11, 22). Cuando menciona a Eugenio se refiere al príncipe de Saboya durante la guerra de Sucesión Española, presente en la victoria británica en la batalla de Malplaquet (1709).

La desconfianza francesa de la efectividad de las armas de fuego tuvo una probable explicación debido a motivos como la batalla de Lens, en 1648, donde abrieron fuego primero y no pudieron recargar sus armas a tiempo, entrando en pánico los soldados, y terminando por desbandarse. En dicha batalla los disparos a corta distancia de las filas británicas tuvieron un efecto devastador en las filas francesas (Wilson, 1999, p. 91).

En esa época se desarrollaron varias formas de combatir dependiendo de la cronología y el país. A comienzos del siglo XVIII se usaba el sistema holandés de fuego por pelotones, cuyo uso se extendió durante la guerra de Sucesión Española salvo a Francia, cuya infantería continuó recurriendo al fuego por filas. Dichos sistemas tuvieron en la época una gran influencia en la decisión de las batallas que no sólo eran ganadas por la maniobra o la disciplina de los soldados, sino por su poder de fuego o las habilidades del generalato para la combinación de las tres armas, infantería, caballería y artillería; ésta última dados los avances técnicos, que la dotaron de mayor movilidad y potencia de fuego, cobró un papel más ofensivo que en épocas anteriores Aunque su uso principal, seguía siendo contra la infantería y caballería y no contra la artillería enemiga (Strachan, 2005, pp. 31-33; Wilson, 1999, pp. 92-93).

La infantería continuó siendo la reina de los campos de batalla, aunque cada vez se hizo más necesaria la colaboración con los ingenieros que facilitasen su movimiento

y protección, así como con los artilleros, encargados de debilitar al enemigo antes del choque. La caballería siempre fue clave en el ataque y la exploración, dadas sus capacidades de movilidad y choque cuerpo a cuerpo, aunque también fue más costosa de equipar y entrenar. En contraposición se encontraba la infantería, que era más económica de equipar y más rápida de instruir. Existían varias clases de caballería según su función, una ligera de exploración, escaramuza o desgaste de la caballería enemiga con tácticas de acoso como eran los húsares; una pesada, los coraceros, destinados a efectuar una carga frontal en el momento y lugar adecuado. Y una tercera clase, mixta, que podía combatir a pie o a caballo indistintamente, en función de la situación, los dragones (Wilson, 1999, p. 92).

Además de enfrentarse en batalla a la caballería enemiga, una vez se imponía, apoyaba a su propia infantería, siempre pendiente para golpear la retaguardia o el flanco enemigos, evitando el peligro que podían suponer sus bayonetas si se realizaba una carga frontal contra una formación de infantería compacta y ordenada, que, sin embargo, resultaba vulnerable a la combinación de infantería y caballería enemiga. Un último cometido de la caballería era perseguir al enemigo en retirada o proteger la propia, en función del desenlace del combate. Dependiendo del momento, la caballería podía servirse de pistolas o espadas, y fusiles también en el caso de los dragones (Segura García, 2014, pp. 125-126).

Lo que Castro ejemplificó con axiomas como el «126. Para todas ocasiones / selecta reserva entables, / para esto son admirables / los ambidiestros dragones» Además del «142. En varios lances de guerra / una y otra tropa ocupa, / infantes á la gurupa / y dragones pie á tierra»; «149. Si una ala tiene la gloria / de vencer en el encuentro, / debe tirar sobre el centro / para acabar la victoria: / como anibal en Cannas vigilante, / no como en Tracia Antíoco ignorante» y «176. El huir para engañar / es bueno saberlo hacer, / malo hacerlo sin saber, / por eso se ha de estudiar» (Castro, 1815, pp. 22-25, 29), aludiendo a su capacidad de desplazamiento y, por ende, de posicionamiento táctico, ocupando posiciones vitales antes que el enemigo, además de por su versatilidad que les permitía combatir tanto a pie como montados.

La caballería era utilizada para explorar por delante del grueso del ejército y como pantalla para evitar caer en emboscadas, resultaba útil además contra la artillería y contra la infantería enemiga, si a ésta última la cogía desprevenida, desordenada, cansada, por el flanco o la retaguardia, ya que la fuerza, valía o voluntad de lucha del soldado de infantería quedaba anulada cuando daba la espalda al enemigo con la intención de huir, como reconoce en el axioma «241. El infante que huye inadvertido / del ligero ó dragon, queda perdido; el de á caballo no, que en todo trance / el infante no puede darle alcance: use el montado de su ligereza / y el peön aproveche su firmeza» (Castro, 1815, p. 40).

La caballería no sólo fue el arma más prestigiosa de la época, también resultaba crucial para tomar posiciones clave antes que el enemigo, y obviamente para

contrarrestar su caballería, además de ser idónea para perseguirlo cuando se batía en retirada, aconsejado en el axioma ducentésimo cuadragésimo primero. Su movilidad era su principal baza, y al igual que la infantería, abandonó gradualmente el uso de armadura.

Al final de la guerra de los Siete Años todos los ejércitos habían adoptado el mismo esquema de operaciones, consistente en disponer las tropas en formaciones con tres filas de profundidad que disparaban por pelotones. Además de iniciarse el uso de tropas de infantería ligera por influencia austríaca, y ésta a su vez por el estilo de guerra de frontera contra el Imperio Otomano. Tropas muy útiles en terrenos difíciles, donde además las grandes unidades no pueden desplegarse eficientemente, dado que experimentan el inconveniente de los problemas inherentes al movimiento, inevitables en el caso de la rigidez táctica propia de densas formaciones. Dicha infantería ligera podía combatir en orden cerrado además de en orden abierto o escaramuza. Desde su aparición en los campos de batalla europeos su número no dejaría de incrementarse, a la par que aumentó su importancia. Su principal función en las grandes batallas consistía en debilitar mediante escaramuzas a la infantería enemiga además de actuar como pantalla de la propia infantería, o para cubrir una retirada (Dupuy, 1980, pp. 146-148; Lynn, 2010, p. 190).

Ya hemos comprobado que las batallas del siglo XVIII no fueron como el estereotipo extrapolado de las fuentes de la época y defendido por la historiografía durante cierto tiempo, pero aun así podemos extraer patrones tácticos firmes como el uso de líneas extensas para maximizar el fuego al aumentar el número de soldados en el frente; sin que por ello se abandone el uso de reservas, aunque rara vez se ven en campo de batalla, ya que su disposición no asegura su presencia en el lugar requerido en el momento preciso.

Siendo aún menos comunes en los inicios de la Edad Moderna, cuando se comprometía la fuerza al completo del ejército antes de la batalla. De hecho, desde finales del XVII y durante el XVIII las líneas se harán más extensas a costa de reducir la profundidad de las filas. Aún con el uso de innovaciones técnicas como bayonetas, nuevos fusiles, cartuchos de papel, etc., los despliegues continuaron utilizando tácticas de combate desarrolladas en el pasado como las fortificaciones temporales o el apoyo en obstáculos naturales que mejoraron su posición defensiva y forzaran al atacante a un asalto con cuantiosas bajas, previamente habiendo seleccionado el punto más débil del dispositivo (Dupuy, 1980, pp. 145-146; Martínez Ruiz, 2016, p. 242; Wilson, 1999, pp. 89-90).

Los ejércitos a comienzos del siglo XVIII marchaban por una única línea de operaciones previamente establecida para conseguir los objetivos de la campaña y su sostenimiento. Pero al final de la centuria autores como Saxe, Broglie y Guibert lograron extender sus ideas sobre dividir el ejército en varios cuerpos o divisiones que siguiesen rutas alternativas pero próximas, facilitando su desplazamiento en

el espacio y reduciendo el tiempo, facilitando el sostenimiento en el terreno y mejorando las posibilidades de preparar los combates (Segura García, 2014, p. 127; Telp, 2005, p. 19).

Sería en el siglo XVIII donde adquirió mayor importancia no sólo el perfil del general al mando y su formación, sino la de sus propios oficiales. Relacionado con esto último y también con la táctica y lo que en la época se entendía como atributos propios de los militares se encuentra el conocido como «golpe de ojo» o *coup d´oeil* en francés, la mayor de todas las habilidades, se suponía que permitía a un comandante captar lo esencial de una situación y tomar la decisión adecuada con celeridad. Esto queda reflejado en axiomas como el «59. Este estudio, si no es flojo, / te adquirirá la instruccion / de aquel ente de razon / á quien llaman golpe de ojo» (Castro, 1815, p. 10). Aunque otras habilidades tenidas en cuenta en la época eran la suerte, la firmeza, prudencia, detalles y visión de conjunto (Duffy, 1987, pp. 103-104).

La creencia del autor en la necesidad de la oficialidad como la clave de la victoria queda constatado en los axiomas «47. Ejército consumado / será en dos cosas igual, / pericia en el oficial, / y valor en el soldado». y «50. Entre ejércitos iguales, / de igual destreza y valor, / debe quedar vencedor / quien tenga más oficiales» (Castro, 1815, pp. 8, 9). No eran suficientes sin una formación militar profesionalizada, académica y reglada en especial en lo referente a los viejos oficios como el de artillero o el de ingeniero, que fueron a lo largo de la centuria constituidos en cuerpos de ejército, y sus miembros formados en academias.

En el caso español, y poniendo el enfoque en el ejército[10], cabe destacar para los miembros del Real Cuerpo de Artillería la fundación en 1764 del Real Colegio de Artillería de Segovia. Si bien convivió el modelo de cadete de academia militar con el de regimiento a lo largo del XVIII en los cuerpos de infantería y caballería, jugando un importante papel junto a sus lecturas y experiencias profesionales (Duffy, 1987, p. 11, 36; Herrero Fernández-Quesada, 2020, p. 119)[11]. Cadetes que siempre se pretendió proviniesen de la nobleza, que en el caso español tuvo que ser «convencida» de las bondades del servicio en una milicia devaluada en los inicios de la centuria ilustrada. Aunque entre los oficiales de los cuerpos facultativos o armas sabias, ingenieros y artilleros, no siempre predominó la clase aristocrática (Herrero Fernández-Quesada, 2020, p. 113).

Con todo, la táctica en la batalla se resumía en el mantenimiento del orden y la formación tanto por la disciplina como la moral, en la acertada utilización y despliegue de fortificaciones, artillería y unidades, así como en un correcto y oportuno uso de armas de fuego, cargas de caballería e infantería. Aunque como hemos

10. Para la marina habríamos de referirnos a la Academia de Guardiamarinas.

11. Sobre dicho centro y su éxito en la España de la Ilustración véase Herrero Fernández-Quesada (2015, pp. 211-247; 2016, pp. 391-424).

visto, en ocasiones la iniciativa o la inacción podían decantar una batalla. Podemos resumir las claves propicias para la victoria —que no garantizaban la misma— en la superioridad del número, la moral, la disciplina, disponer de la ventaja del terreno, de la sorpresa si es posible, de un uso racional, correcto y oportuno de infantería, caballería y artillería en conjunto, así como la disponibilidad de oficiales bien formados y tropas bien instruidas y no faltas de experiencia (Duffy, 1987, p. 177).

5. LA INFLUENCIA EUROPEA Y LA DISCUSIÓN TEÓRICA: DEL APEGO A LA TRADICIÓN AL DESENGAÑO DE LA PRÁCTICA

Durante el siglo XVIII Francia fue un centro irradiador de lengua, cultura, arte y literatura militar, tanto en francés, convertido en este momento en una lengua de comunicación, como traducida, aunque ésta última con cierta demora. La influencia gala llegará a tal punto que se verá reflejada en el argot militar, incorporándose galicismos como «golpe de ojo», o la adopción en castellano de términos como «bayoneta». Aunque en el caso español no se ha de desdeñar la presencia de oficiales franceses entre las filas de sus ejércitos con la llegada de la nueva dinastía en los inicios de siglo, que vino a superponerse con el fenómeno de la «galomanía» a nivel europeo, que alcanzó todo aspecto de la vida cotidiana, y no fue distinto en el plano militar. Las ideas y obras de los militares circularán por Europa, y su nivel de influencia será tal que incluso extranjeros como Federico II de Prusia redactarán sus obras en francés (García Hurtado, 1999, pp. 18-26, 32, 35, 43, 49, 63, 74).

Relacionado con lo anterior no deja de resultar además curioso, como comentamos anteriormente, que en el mismo siglo que Castro redactó sus *axiomas*, Federico II de Prusia fuese autor de una obra en verso sobre el arte de la guerra, impresa en francés en 1760, *L'art de la Guerre…* que fue traducido siete años después al italiano, y en 1793 al castellano y al inglés a comienzos del XIX. En el caso español con el nombre de *El arte de la guerra. Poema escrito por Federico II Rey de Prusia, dedicado al que actualmente reyna*, traducido por Genaro de Figueroa, e impreso en Madrid por la Imprenta Real en 1793.

El ejército se surtió para su renovación en especial de las experiencias de su más próximo aliado, Francia (Coutau-Bégarie, 2017, p. 208), que en esos momentos era la mayor potencia terrestre y económica, además de la segunda naval y comercial. La Monarquía consciente de su nuevo papel a nivel europeo, se amoldó a las circunstancias, dado que desde mediados del siglo XVII había perdido su condición de poder hegemónico (Segura García, 2014, p. 116), y recurrió a tratar de adoptar e integrar las aportaciones más importantes de las principales potencias en el ámbito militar, es en este contexto que el debate teórico se convierte en un campo especialmente relevante como atestigua el hecho de que el debate teórico sobre la táctica militar dieciochesca surgido al calor de las innovaciones técnicas se encuentra presente en numerosos *axiomas* de la obra de Castro.

Por lo que primero realizaremos una selección concisa de los más representativos, como ocurre con el «53. No juzgues mas poderoso / al que hacer mas fuego puede: / el que en arma blanca excede / debe quedar victorioso» y el «67. Si fueres mas diestro al fuego, / tenta á tiro de escopeta; / mas si no, arremete luego / al golpe de bayoneta»[12]. Para a continuación adentrarnos, en una justificación del contexto, en los autores más relevantes con quienes compartía ideas similares, cronología y que pudieran haber tenido influencia en la concepción de los *axiomas* de Castro.

En dicha centuria, e íntimamente relacionada con el uso y la innovación de la pólvora en el campo de batalla, aconteció el desarrollo de lo que se conocería como «les grandes querelles», teniendo una especial relevancia el debate entre el choque (*ordre profond*) y el fuego (*ordre mince*). Se discutía sobre cuál de las dos opciones era más adecuada para desplegar de las tropas en el campo de batalla, en un siglo en que se consagró el terrible efecto de la potencia de fuego de la artillería, y de una infantería armada con bayonetas y mosquetes[13].

El surgimiento de una nueva arma exige un nuevo modelo de combate. Con el desarrollo de la potencia de fuego se busca maximizar su efecto, con lo que se dispone a las tropas en líneas, naciendo el orden lineal, conforme se reducen las filas en las que se despliega la infantería, desde las diez que llegó a haber durante el siglo XVII al máximo de cuatro de comienzos del XVIII. Y los pros y los contras de dicha disposición táctica darán inicio al debate (García Hurtado, 1999, pp. 49-50).

Siempre ha habido una tensión inherente entre la teoría y la práctica, al igual que ocurrió en este caso entre las tácticas de choque y de fuego. Y la elección de las tácticas de la batalla dependía siempre del comandante del ejército y de su formación.

Uno de los más destacados e influyentes escritores militares de la centuria fue Jean-Charles de Folard (1669-1752), primer gran teórico en exponer sus ideas al respecto, en 1724 con sus *Nouvelles découvertes sur la guerre* y los *Commentaires sur Polybe* publicados entre 1727 y 1730. Criticó entre otros elementos, la falta de colaboración entre la caballería y la infantería, que combatían en muchas ocasiones

12. En este caso con la palabra escopeta se refiere a un fusil de llave de pedernal (Rodríguez Hernández, 2016, p. 283). Otros axiomas del mismo estilo presentes en la obra serían «71. Victoria tendrás completa / si usáres anticipadas, / no carabinas, espadas; cartuchos no, bayonetas»; «95. Serás el mas eminente / de todo el mundo redondo, / si manejas de repente / mucho frente, poco fondo, / mucho fondo y poco frente» y «198. Es una regla completa / que nunca padece error, / vencer con la bayoneta / el mayor fondo al menor. 199. Si los autores compilas / de lo antiguo y lo presente, / mas vale aumentar las filas / que prolongar tanto el frente. 200. No es rio aquel que no es hondo, / entendimiento, diamante, / ejercicio militante, / nada es bueno sin buen fondo» (Castro, 1815, pp. 9, 12, 16, 33).

13. Si bien entre aquellos armados con mosquetes nos encontramos varias clases por su distinta función y características, distinguiéndose mosqueteros, fusileros y granaderos (Martínez Ruiz, 2016, p. 67).

en fases separadas, y que, con la derrota de cualquiera de ellas por parte de uno de los bandos, la otra se vería obligada a replegarse o se arriesgaba a verse condenada (Nosworthy, 1992, pp. 148-151; Strachan, 2005, p. 24). En ellas expuso sus ideas sobre el arte de la guerra, defendiendo la efectividad de la columna en el ataque, argumentando que si era decidido no podía ser contenido por las armas de fuego. Además, abogaba por la reintroducción de la pica, justificándose en las similitudes con la forma de hacer la guerra de los antiguos (García Hurtado, 1999, pp. 50-51).

Para él y otros muchos autores franceses de su época el fuego no dejaba de ser una preparación previa al asalto a bayoneta, ya que en su opinión ese era el verdadero condicionante de la victoria. Dicho ataque se realizaría mediante densas formaciones en columna. En la obra de Castro se aborda tanto su figura como su técnica en los axiomas «76. Arma blanca, no arcabuz, / opinion que juzgan buena / el gran Capitan, Turena, / Feuquier, Folard, Santa Cruz» Y «116. Cuando la ocasion conspira / toda traza es oportuna; / con el ataque en coluna / venció Folard en Spira» (Castro, 1815, pp. 13, 20). Castro defendía que el ataque era una cualidad inherente al soldado español como confirma el axioma «70. La audacia fuera mas franca / para el español apego, / si en lugar de tanto fuego / se usára mas arma blanca» (Ibidem, p. 12). Lo cual se encuentra en consonancia con la creencia en la época de la influencia de la geografía sobre la forma de ser de los estados y sus habitantes, y claro está sus ejércitos, considerándose a los españoles un pueblo impulsivo o «caliente», tal y como quedó reflejado también en las *Reflexiones Militares* de Marcenado (Duffy, 1987, p. 14), el mayor proyecto de quien fuese uno de los tratadistas militares españoles de mayor renombre del siglo XVIII (Fernández García, 2024, p. 135).

Folard demuestra una admiración por los autores antiguos, griegos y romanos, que en la práctica creía, podrían servir de modelo para instituciones militares modernas. Entendía la guerra como una ciencia, tratando de identificar principios racionales y universales que rigiesen su funcionamiento (al igual que Castro), así como el espíritu militar o los fundamentos psicológicos de la guerra. Además, al ser un firme defensor de la ofensiva, despreciaba la guerra de asedio, y consideraba que sus contemporáneos habían socavado el espíritu ofensivo de Francia. Jacques François de Chastenet de Puységur, autor en 1748 del *Art de la guerre*, compartía su atracción por la ofensiva y por los antiguos tratadistas, si bien rechazaba el uso de la pica, pero no el de la bayoneta y las armas de fuego, compartía también su afán por establecer reglas científicas aplicables al arte de la guerra (Gat, 1989, p. 33-36; Starkey, 2003, pp. 34-38).

Su defensa del ataque fue un intento de superar un evidente estancamiento producido por las tácticas lineales de la época, siendo más que un programa táctico, ya que buscaba revitalizar un teórico espíritu militar francés apoyado en la ofensiva. Su escaso apego por las armas de fuego se encontraba fundamentado en las experiencias de su época, pese a que la evolución de la tecnología moderna

hiciese ver que iba contra el modelo predominante, con su defensa de densas formaciones de piqueros, en clara desventaja frente a las armas de fuego portátiles y la artillería en el siglo XVIII. De hecho, autores como Saxe o Federico II llegaron a interesarse por sus propuestas, si bien las calificaron de extremas. Sus ideas se convirtieron en objeto de experimentación y fueron incluidas en los reglamentos franceses de 1753, 1754 y 1755. Su opinión se basaba en la creencia en el éxito de las tácticas ofensivas al malinterpretar la ejecución del duque de Marlborough durante la guerra de Sucesión Española, ya que, si bien recurrió a la ofensiva, siempre la acompañó de una disciplinada potencia de fuego (Chandler, 1995, pp. 130-131; Starkey, 2003, pp. 36-37).

Folard inauguró una tendencia de la literatura militar francesa a favor del orden profundo y la columna, insertada entre las formaciones lineales de infantería, que fue continuada por autores como François Jean de Graindorge d'Orgeville, baron de Mesnil-Durand, quien en su tratado *Suite du project d'un ordre français en tactique* (1758) aboga por usar la columna como una forma natural de hacer la guerra para los franceses (García Hurtado, 1999, p. 51).

Maurice de Saxe o Mauricio de Sajonia (1696-1750) fue uno de los escritores militares de mayor renombre de su época. Su obra refleja la experiencia militar de las guerras de Luis XIV, en la que se nos presentan ideas como la importancia de los distintos tipos de guerra o el concepto de «legión», en honor de las romanas, como una unidad táctica de actuación independiente en la que se combinasen infantería, caballería y artillería, así como ingenieros y tropas de servicio. Abordaba una reestructuración de la infantería en base a manípulos, idea con la que en cierto modo preconizaba una nueva forma de organización para hacer la guerra, que en el futuro estructuraría los ejércitos de Napoleón (Duffy, 1987, pp. 39, 40; Van Creveld, 2015, pp. 41-42). Fue un hijo ilegítimo de Augusto el Fuerte de Sajonia, y el autor de *Mes Rêveries*, un conjunto de reflexiones militares redactadas en 1732 para un reducido grupo de lectores incluyendo a su padre y a Folard, dadas posteriormente a la imprenta en 1757. No sugirió nada nuevo, sino un sistema de ideas para que los comandantes del XVIII pudieran superar las restricciones del momento (Gat, 1989, pp. 29-33; Starkey, 2003, p. 50).

Otro autor militar que abogó por líneas de actuación similares de los ejércitos fue Pierre-Joseph de Bourcet (1700-1780), ingeniero militar francés y experto en la guerra de montaña. Abogaba por la división del cuerpo de ejército y conceder mayor autonomía al comandante, lo que en su opinión aseguraría el éxito de las operaciones. Al igual que Folard apostó por restaurar la iniciativa militar y la decisión en el campo de batalla, si bien cada uno en un nivel diferente, el primero en la *grande guerre* y el segundo en la *petite guerre* o guerra de posiciones como se la conocía en la época (Starkey, 2003, pp. 43-44).

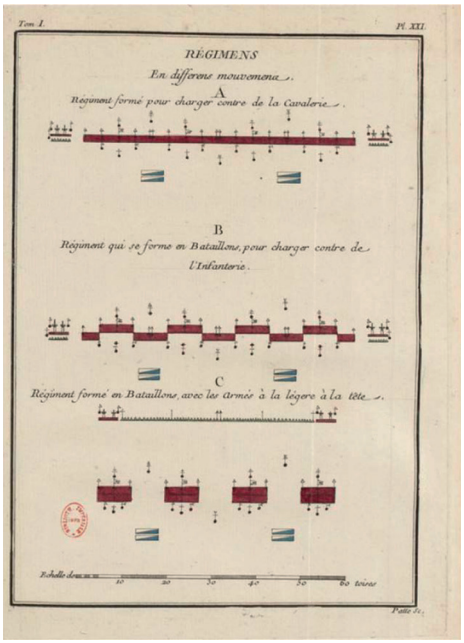


Figura 4. Diferentes maniobras de los regimientos (Saxe, 1757). Imagen obtenida de la copia digitalizada de la obra de la a Bibliothèque nationale de France en el portal Gallica

Se ha utilizado la amistad existente entre Folard y Saxe para justificar que Saxe apoyase su visión del ataque en columna, aun cuando él siempre criticó dicho sistema como poco flexible. No se opuso sin embargo al uso de la pica, por compartir la desconfianza hacia las armas de fuego. Las ideas de Saxe junto a las de Folard, pesarían durante años en Francia, como demostró el establecimiento por el reglamento del 6 de mayo de 1755 de la Columna de Ataque, dos batallones formados en paralelo entre sí, y perpendiculares al enemigo (Chandler, 1995, p. 137).

La utilidad de la columna radicaba en la facilidad y velocidad de desplazamiento de tropas. Era una formación flexible y versátil, con un contundente poder de choque, que se tornaba en línea para realizar varias descargas, o fuego de volea[14]. El objetivo era contrarrestar una baja precisión con una alta cadencia de fuego que quebrase la resistencia enemiga. Presta para recuperar su forma inicial a continuación para proseguir el avance. Además, contaba con una fuerza auxiliar de infantería ligera, una

14. El fuego de volea consistía en el disparo en masa de los soldados en la misma dirección de forma simultánea y por turnos.

clase de tropas en auge en la segunda mitad del siglo XVIII, como comentásemos anteriormente (Martí Sempere, 2006, pp. 95-96; Strachan, 2005, p. 24).

Si bien, reconoce que el modelo que plantea es un ideal, aclara que es factible. Nunca renunció al uso de las armas de fuego, aunque defendió el uso de la pica y de armaduras defensivas, la importancia de los asedios o las tropas ligeras. Por lo que, aunque su tratado sea el menos sistemático, fue la obra de un militar pragmático, que evolucionó con el cambio de los tiempos, quien además aportó ideas revolucionarias como su concepción sobre el reclutamiento de los soldados y el servicio militar universal (Chandler, 1995, pp. 131-136; Nosworthy, 1992, pp. 151-160; Starkey, 2003, pp. 50-52).

Tanto Folard como Saxe, a su manera, criticaron la primacía de las tácticas lineales que redujeron el arte de la guerra a un enfrentamiento inflexible entre dos líneas opuestas de infantería que antes de llegar a la distancia de fuego, o la opción de cargar habían sufrido el bombardeo de la artillería contraria, y cuyas alas de caballería se habían enfrentado (Nosworthy, 1992, p. 143).

Otros autores con ideas similares y que pudieron haber influido en la concepción de Castro del «Arte de la Guerra», pudo ser Federico II de Prusia, entre cuyas obras se encuentra su *Principes Généraux de la Guerre* (1748), en la que aborda su concepción orgánica de la guerra y la táctica de los ejércitos. Confería una gran importancia a la disciplina para un buen desempeño del soldado en la batalla. Así mismo, aconsejaba eludir ambientes pantanosos, bosques o montañas donde la posibilidad de emboscadas era muy elevada. Si bien su modo de hacer la guerra quedó mejor atestiguado por su desempeño en campaña que por su teoría (Van Creveld, 2015, pp. 43-44). De hecho, fue su éxito en el teatro de Marte, el que movió a los franceses a continuar con el debate, que tuvo un momento álgido en 1778, cuando se celebró en Vassieux un ejercicio de maniobras en el que ambos órdenes se enfrentaron, se constató tanto sus fortalezas como sus debilidades. La columna se demostró eficiente para el movimiento de aproximación, y el posterior despliegue o para la carga cuerpo a cuerpo, mientras la línea para hacer fuego (García Hurtado, 1999, p. 52).

Tampoco podemos olvidarnos de Lancelot Turpin de Crissé (Gat, 1989, pp. 36-37) y su *Essai sur l'Art de la Guerre* publicado en dos volúmenes en 1754, donde se nos hace patente la importancia de las partidas; opinión compartida por Castro, tal y como aparece reflejado en el axioma «158. Muchas partidas ligeras / continuas exploradoras / te darán á todas horas / las noticias verdaderas» (Castro, 1815, p. 27).

La *petite guerre* fue una forma de hacer la guerra que cobró mayor importancia conforme avanzó el siglo XVIII como atestigua el incremento de tropas ligeras en los distintos ejércitos. Un modo de hacer la guerra que inauguró una nueva rama de la literatura militar, debía su origen a la participación en la guerra de Sucesión Austríaca de tropas ligeras extraídas de la frontera oriental del imperio, como la

caballería húngara o croata. Si bien sufrió el desprecio de algunos de sus contemporáneos, en España no se tuvo inconveniente en el estudio de sus planteamientos (Coutau-Bégarie, 2017, p. 495; Duffy, 1987, pp. 41, 198; García Hurtado, 1999, p. 70; Starkey, 2003, pp. 53-54).

Castro en su obra aborda y toma partido de forma clara en el debate suscitado entre los partidarios del *l'ordre mince*, que enfatizaba la potencia de fuego y el combate en línea, lo que las hacía más frágiles al choque, y reducía su movilidad, sacrificadas en aras de conseguir un incremento de la potencia de fuego. Y los defensores del *l'ordre profond*, autores que siguieron a Folard[15], y abogaban por el choque cuerpo a cuerpo de formaciones profundas, desconfiando de las armas de fuego (Gat, 1989, pp. 39-42; Starkey, 2003, p. 53)[16]. Lado del que Castro se inclina al afirmar que «la historia es el tribunal á quien toca sentenciar el pleito pendiente de varias opiniones opuestas que se hallan en los autores militares, por el cotejo de mayor ó menor número de ejemplares, que favorezcan mas ó menos una opinion que otra» (Castro, 1815, pp. 46-47).

La discusión fue trasladada a un plano superior por el entonces joven Jacques Antoine Hypolite de Guibert (1743-1790), autor en 1772 de *Essai Général de Tactique* (Gat, 1989, pp. 48-50)[17]. Quien combinó los mejores elementos de ambos órdenes al considerar a la columna como el medio de despliegue idóneo para la formación en tres filas que se ejecutaría siguiendo la «conversión sobre pivote andante», dotando al despliegue de velocidad y efectividad de cara a obtener la victoria, en lo que vino a denominarse como «columna de Guibert» (Starkey, 2003, pp. 54-55)[18].

Tuvo cierta influencia en la Ordenanza francesa de 1791, la cual se convertiría en la base de su táctica en la era revolucionaria y napoleónica. Abordó el tema de lo que denominó como «grandes tácticas», y suscitó un gran interés por sus ideas acerca de la regeneración de Francia, y el potencial de un ejército ciudadano, que además debería estar enraizado en las costumbres y constitución de su propia nación

15. Los autores defensores de la columna fueron Louis-Pierre de Puysegur, Jean-Charles de Folard, François-Jean de Ménil-Durand, y Joly de Maizeroy. Defendian su valor de choque y moral, frente a adversarios que entendían que la movilidad era posible a la par que confiar en la potencia de fuego, siendo menos vulnerables a la artillería, como el conde Hippolyte de Guibert y el Chevalier Tronçon du Coudray.

16. Algunos de sus más firmes defensores se cuentan el barón François-Jean de Mesnil-Durand (1729-1799) y Paul Gédéon Joly de Maizeroy (1719-1780), autor de *Cours de tactique, theoretique, pratique et historique* (1776 el primero de dos volúmenes). El principal tema es la búsqueda de un sistema de táctica.

17. Autor conocido en su momento por los círculos intelectuales. Voltaire escribió en 1774 un poema titulado *La Tactique* en relación con su obra.

18. Lo curioso de todo fue la permanencia de algunos autores reacios como Jean Le Michaud d´Arçon, autor en 1779 de *Défense d´un système de guerre nationale*, del modo tradicional de hacer la guerra, y claro está del orden profundo. (García Hurtado, 1999, pp. 52-54).

(Duffy, 1987, pp. 41-42). Sin embargo, su admiración por Federico II le granjeó la enemistad de muchos de sus compañeros y durante un tiempo sus innovadoras ideas fueron relegadas al ostracismo (Strachan, 2005, pp. 24-26).

Con sus ideas sobre el arte de la guerra, consideradas adelantadas a su tiempo, pretendía alcanzar un sistema definitivo de táctica. Sus revolucionarias opiniones sobre la importancia de factores como la audacia, la velocidad de movimiento, la adaptación al terreno, el despliegue en columna antes de hacer fuego, entre otras, tendrían una influencia en la guerra posteriormente (Gat, 1989, p. 52).

Pero no quisiéramos finalizar este apartado sin mencionar como la teoría militar de Castro bebe de un autor español en especial, del marqués de Santa Cruz, y sus *Reflexiones Militares*[19], donde abogaba, en los inicios de la década de 1730, por el uso combinado de las tácticas lineales con las formaciones en columnas, además de despreciar la atención excesiva en su opinión alrededor del potencial de las armas de fuego (Chandler, 1995, p. 130).

No nos deja de sorprender la importancia que el autor confiere al debate teórico entre el orden profundo y ligero enmarcado en la *grande guerre*, cuando en la España de su época el debate que gozó de mayor popularidad fue el de la *petite guerre* (García Hurtado, 1999, pp. 70, 81). Ya que las obras que se traducen son aquellas que responden a las necesidades tácticas y estratégicas de cada reino. Y en el caso de la España del siglo XVIII su situación política y económica, a la que hemos de añadir su reducida población y la complicada geografía de su territorio peninsular hiciesen que se prefiriese otro tipo de libros. Si bien no impidió que se buscasen compendios de grandes obras y autores de reconocido prestigio durante toda la centuria (García Hurtado, 2002, p. 67).

6. CONCLUSIONES

Lo anteriormente nos mueve a pensar que Nicolás de Castro fue uno de los oficiales del ejército español que participaron de la Ilustración como evidencia su búsqueda de principios generales aplicables al arte de la guerra. Además de realizar una defensa de los valores y la religiosidad españolas frente a la influencia francesa. Con lo que contribuía a la defensa de una fuente de orgullo y de virtudes castrenses, tales como el ardor y el valor en la batalla, reflejados en la dedicatoria de la obra, «*en obsequio de la religión, del rey y de la patria*». Mientras que su carrera militar tanto en Europa como en América constata la movilidad de los oficiales del ejército de la Monarquía.

19. Se recomienda la lectura de Díaz Álvarez, J. y Fernández García, P. (eds.), (2025). Una obra que reúne los trabajos más recientes elaborados por especialistas sobre el marqués de Santa Cruz y su obra.

Los *axiomas* de Castro nos muestran su visión de lo que debería ser el arte de la guerra, a la par que nos permiten comprobar la extensión e influencia de diferentes ideas y postulados acerca del arte militar que compartía con otros autores de su época. Especialmente aquellos de origen francés, país irradiador de teoría militar a toda Europa y a España durante el siglo XVIII, dada su estrecha vinculación con ésta durante toda la centuria. A la vez que nos permiten constatar la consolidación y preeminencia a lo largo del siglo XVIII de las tácticas lineales, pese a que su autor defendiese la preponderancia del orden profundo.

Su obra no sólo nos permite conocer su visión en particular de la guerra, fruto de sus lecturas y experiencias, de lo que debiera ser en su opinión la táctica militar. Se convierten en un importante recurso para conocer la realidad española del momento, y aquello que el autor considera como los males y los remedios necesarios para solucionarlos, lo que evidencia como los axiomas se hallan orientados no sólo a los jóvenes que quieran convertirse en oficiales, sino al público español en concreto. Lamentablemente su trabajo, debido a su tardía publicación y opiniones que resultaron menos acertadas, terminó por ser conocido sólo por eruditos y nunca fue utilizado como un tratado orientado al aprendizaje.

La inclusión de algunas ideas superadas en el momento de publicación de la obra, que fue muy posterior al de su redacción, no excluye la presencia de elementos innovadores en la época, los cuales corroboran como el autor va más allá de ser un mero defensor de ideas anticuadas, y se puede incribir en un círculo de pensadores y tratadistas del arte militar, siempre interesados por la innovación y el perfeccionamiento del mismo.

Debido al número de los axiomas y su variada temática no hemos podido abordar con profundidad en el presente trabajo relevantes elementos del pensamiento de Castro como fue la defensa junto a la disciplina, propia del siglo XVIII, de ideas como un mejor trato de la oficialidad hacia la tropa. Además de otro elemento digno de destacar, cómo fue su defensa de la creación de una Escuela Superior de Táctica, para la formación de oficiales, que podría preconizar la teorización de un Estado Mayor que abarcase las distintas armas y cuerpos del ejército bajo un único mando, conformado por militares pertenecientes a las distintas especialidades, desde la infantería a la artillería. Relacionado con esto se deberían comparar sus ideas con las de autores de su época y en especial españoles como el marqués de Santa Cruz de Marcenado, que hemos reservado para abordar con el debido rigor en futuros trabajos que en estos momentos estamos escribiendo.

Contribución de autoría

La concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito es únicamente obra de Manuel Sobaler Gómez.

Agradecimientos y financiación

Trabajo no financiado.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

El autor declara que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

7. BIBLIOGRAFÍA

Abián Cubillo, D. A. (2016). La instrucción militar durante el reinado de Carlos III: el proyecto de una academia militar general. En M. Á. Pérez Samper y J. L. Betrán Moya (Eds.), *Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: Economía, Sociedad, Política y Cultura en el Mundo Hispánico* (pp. 516-528). Fundación Española de Historia Moderna.

Abián Cubillo, D. A. (2021). El mérito académico en el pensamiento militar español dieciochesco: del caballero medieval al oficial de infantería. *Erasmo: Revista de Historia Bajomedieval y Moderna*, (8), 19-42. https://doi.org/10.24197/erhbm.8.2021.19-42

Andújar Castillo, F. (2003). La privatización del reclutamiento en el siglo XVIII: el sistema de asientos. *Studia Historica, Historia Moderna*, (25), 123-147.

Andújar Castillo, F. (2016). El reformismo militar de Carlos III: mito y realidad. *Cuadernos de Historia Moderna*, *41*(2), 337-354. https://doi.org/10.5209/CHMO.53815

Arnold, T. F. (1999). War in Sixteenth-Century Europe: Revolution and Renaissance. En J. Black (Ed.), *European Warfare, 1453-1815* (pp. 23-44). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-27521-2_2

Asch, R. G. (1999). Warfare in the Age of the Thirty Years War, 1598-1648. En J. Black (Ed.), *European Warfare, 1453-1815* (pp. 45-68). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-27521-2_3

Black, J. (1994). *European Warfare, 1660-1815*. UCL Press. https://doi.org/10.4324/9780203499429

Black, J. (2023). Place and the Nature of Battle. *Nuova Antologia Militare. Storia Militare Contemporanea*, (4), 7-25.

Bragado Echevarría, J. (2020). Guerra y mercenarios: la crisis del reclutamiento de extranjeros en el ejército borbónico en la segunda mitad del siglo XVIII. *Cuadernos Dieciochistas*, (21), 45-81. https://doi.org/10.14201/cuadieci2020214581

Burns, A. S. (Ed.). (2022). *The changing face of Old Regime warfare. Essays in honour of Christopher Duffy*. Helion y Company.

Castro, N. de. (1815). *Axiomas militares ó máximas de la guerra, cuyo comento es la historia...* Imprenta de don Miguel de Burgos.

Chandler, D. G. (1995). *The art of warfare in the Age of Marlborough*. Sarpedon.

Collantes Sánchez, C. M. (2015). Versos y tratados en la Ilustración científica (1650-1750). *Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII*, (25), 75-96. https://doi.org/10.17811/cesxviii.25.2015.75-96

Coutau-Bégarie, H. (2017). *Traité de stratégie*. Economica.

Delbrück, H. (1990). *History of the art of war: Vol. 4. The dawn of modern warfare*. University of Nebraska Press.

Díaz Álvarez, J., y Fernández García, P. (Eds.). (2025). *Santa Cruz de Marcenado (1724-2024). Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII. Anejo 18*. Instituto Universitario Feijoo del Siglo XVIII; Ediciones Trea; Ediuno, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.

Domizio, L. (2025). The night in Early Modern warfare: Risk, opportunities, and military perceptions of darkness. *Nuova Antologia Militare. Storia Militare Moderna*, (6), 7-47.

Duffy, C. (1987). *The military experience in the Age of Reason*. Routledge y Kegan Paul.

Dupuy, T. N. (1980). *The evolution of weapons and warfare*. Bobbs-Merrill Company Inc.

Espino López, A. (2000). El aprendizaje de la guerra a través de las obras de los historiadores de la Antigüedad. *Obradoiro de Historia Moderna*, (9), 189-210.

Fernández García, P. (2024). *El marqués de Santa Cruz de Marcenado (1684-1732). Cultura, milicia y redes sociales*. Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII; Ediciones Trea.

García Hurtado, M.-R. (1999). *Traduciendo la guerra. Influencias extranjeras y recepción de las obras militares francesas en la España del siglo XVIII*. Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións.

García Hurtado, M.-R. (2002). *El arma de la palabra. Los militares españoles y la cultura escrita en el siglo XVIII (1700-1808)*. Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións.

Gat, A. (1989). *The origins of military thought, from the Enlightenment to Clausewitz*. Clarendon Press.

González Enciso, A. (2020). Guerra y movilización de recursos económicos en el siglo XVIII. Un ensayo historiográfico. *Cuadernos Dieciochistas*, (21), 15-43. https://doi.org/10.14201/cuadieci2020211543

Herrero Fernández-Quesada, M. D. (2015). La innovación militar en la España del XVIII. Felice Gazzola conde de Gazola y el Real Colegio de Artillería, Segovia (1760-1780). *Revista Storica Italiana*, (127), 211-247.

Herrero Fernández-Quesada, M. D. (2016). Educando a Marte. Rentabilidad de la innovación docente militar y versatilidad profesional. *Cuadernos de Historia Moderna*, *41*(2), 391-424. https://doi.org/10.5209/CHMO.54198

Herrero Fernández-Quesada, M. D. (2020). Sistemas de captación e innovación en la formación del militar borbónico. Educación para la guerra. *Cuadernos Dieciochistas*, (21), 107-150. https://doi.org/10.14201/cuadieci202021107150

Liddell Hart, B. H. (1991). *Strategy*. Meridian Printing.

Lynn, J. A. (2010). 1661-1763. X. Estados en conflicto. En G. Parker (Ed.), *Historia de la guerra* (pp. 173-193). Ediciones Akal.

Maffi, D. (2007). El estudio de la Historia Militar en la Edad Moderna. En Instituto Español de Estudios Estratégicos y Ministerio de Defensa (Eds.), *La enseñanza de la historia militar en las fuerzas armadas* (pp. 38-58). Ministerio de Defensa.

Martí Sempere, C. (2006). *Tecnología de la defensa. Análisis de la situación española*. Instituto Universitario Gutiérrez Mellado; Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Martínez Ruiz, E. (2016). *Historia militar de la Europa Moderna*. Editorial Síntesis.

Nosworthy, B. (1992). *The anatomy of victory. Battle tactics 1689-1763*. Sarpedon.

O'Donnell y Duque de Estrada, H. (2013). La táctica y la técnica españolas. El combate en sus diversos tipos. En L. Ribot (Coord.), *Historia militar de España: T. 3. Edad Moderna: Vol. 2. Escenario europeo* (pp. 149-185). Ministerio de Defensa; Real Academia de la Historia.

Parker, G. (2010). 1494-1660. IX. La guerra dinástica. En G. Parker (Ed.), *Historia de la guerra* (pp. 153-171). Ediciones Akal.

Peñalosa y Zúñiga, C. (1796). *Memoria sobre la artillería volante o de a caballos*. Imprenta de Espinosa.

Roberts, M. (1956). *The Military Revolution, 1560-1660*. Boyd.

Rodríguez Hernández, A. J. (2016). ¿Evolución o innovación? Los cambios técnico-tácticos en el armamento del ejército español durante el relevo dinástico: nuevas consideraciones. *Cuadernos de Historia Moderna*, *41*(2), 273-294. https://doi.org/10.5209/CHMO.53812

Rogers, C. J. (2010). Tactics and the face of battle. En F. Tallet y D. J. B. Trim (Eds.), *European Warfare, 1350-1750* (pp. 203-235). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511806278.012

Salas y Cortés, R. de. (1831). *Memorial histórico de la artillería española*. García.

Sandberg, B. (2023). Early Modern France and the Military Revolution. En J. Black (Ed.), *Global Military Transformations: change and continuity, 1450-1800* (pp. 113-160). Società Italiana di Storia Militare; Nadir Media.

Sanz, R. (1749). *Diccionario militar, o recolección alphabética de todos los términos propios al Arte de la Guerra*. Imprenta de Juan Piferrer.

Saxe, M. de. (1757). *Mes rêveries* (Vol. 1). Chez Arkstée et Merkus; Chez Desaint et Saillant; Durant.

Segura García, G. (2014). Organización, táctica y principales acciones militares del ejército español. En C. Iglesias (Coord.), *Historia militar de España: Edad Moderna: Vol. 3. Los Borbones* (pp. 115-145). Ministerio de Defensa; Real Academia de la Historia.

Sobaler Gómez, M. (2024). Didácticas de la guerra en el siglo XVIII a partir de los Axiomas Militares de Nicolás de Castro. *L'Aigle: Revista de Historia Napoleónica*, (Especial 2), 19-37.

Sobaler Gomez, M. (2026). Memoria y legado de un militar ilustrado: los Axiomas militares de Nicolas de Castro. *L'Aigle: Revista de Historia Napoleónica*, (4), 6-21.

Starkey, A. (2003). *War in the Age of Enlightenment, 1700-1789*. Praeger. https://doi.org/10.5040/9798216033653

Storrs, C. (2023). Spain and the Military Revolution. En J. Black (Ed.), *Global Military Transformations: change and continuity, 1450-1800* (pp. 161-184). Società Italiana di Storia Militare; Nadir Media.

Strachan, H. (2005). *European armies and the conduct of war*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203995587

Telp, C. (2005). *The evolution of operational art, 1740-1813. From Frederick the Great to Napoleon*. Frank Cass. https://doi.org/10.4324/9780203339954

Torres Sánchez, R. (2016). Alimentando a Marte: la política de suministros militares al ejército. *Cuadernos de Historia Moderna*, *41*(2), 373-389. https://doi.org/10.5209/CHMO.53816

Van Creveld, M. (2015). *A history of strategy from Sun Tzu to William S. Lind*. Castalia House.

Weigley, R. F. (1991). *The Age of Battles. The quest for decisive warfare from Breitenfeld to Waterloo*. Indiana University Press.

Wilson, P. (1999). Warfare in the Old. En J. Black (Ed.), *European Warfare, 1453-1815* (pp. 69-95). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-27521-2_4

ISSN: 0213-2079 — ISSN electrónico: 2386-3889
DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481599646

ESCLAVITUD, ESPACIO DOMÉSTICO Y FAMILIA EN TENERIFE: UNA LECTURA CRUZADA ENTRE PADRONES DE HABITANTES Y PROTOCOLOS NOTARIALES (1640-1845)

Slavery, Domestic Space, and Family in Tenerife: A Cross-Reading of Population Registers and Notarial Records (1640-1845)

Pablo MOLEJÓN

Institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades, CSIC.
pablomolejonfontan@gmail.com

Paula BARBERO

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT).
pau_barbero@hotmail.com

Recibido: 26/09/2025
Aceptado: 18/05/2026

RESUMEN: Este trabajo analiza las dinámicas familiares y los perfiles individuales de las personas esclavizadas en Tenerife entre los siglos XVII y XIX, a partir de una lectura cruzada de padrones de habitantes y protocolos notariales. Desde un enfoque cualitativo, se examinan cartas de libertad y compraventa para aproximarnos a las circunstancias personales y los mecanismos utilizados para integrar a los esclavos en los hogares de sus propietarios. Paralelamente, mediante una perspectiva cuantitativa, se aplica la metodología propia de la Historia de la Familia —adaptada a la realidad hispánica por especialistas a partir del modelo del Grupo de Cambridge— al

estudio sistemático de los padrones de habitantes de entre los siglos XVII y XIX, con especial atención al padrón de 1779. Estas fuentes, escasamente utilizadas hasta ahora para llevar a cabo estudios sobre la población esclavizada, permiten observar las estructuras familiares, las relaciones de dependencia y las dinámicas domésticas y sociales configuradas en torno a la esclavitud. A partir de los resultados obtenidos, se reflexiona sobre la necesidad de repensar las categorías historiográficas tradicionales aplicadas a la familia en contextos de esclavitud, incorporando nuevas perspectivas que atiendan tanto a las rupturas como a las estrategias de supervivencia observadas en las sociedades del mundo atlántico.

Palabras clave: esclavitud; familia; grupos domésticos; padrones de habitantes; protocolos notariales; Islas Canarias; siglos XVII-XIX.

ABSTRACT: This article analyses the family organisation and sociodemographic profiles of enslaved people in Tenerife between the seventeenth and nineteenth centuries through a cross-reading of population registers and notarial records. From a qualitative perspective, it examines manumission letters and bills of sale in order to reconstruct personal trajectories and the mechanisms through which enslaved individuals were incorporated into the households of their owners. At the same time, from a quantitative approach, the study applies the methodology developed within Family History —adapted to the Hispanic context by specialists following the Cambridge Group model— to the systematic analysis of population registers dating from the seventeenth to the nineteenth centuries, with particular attention to the 1779 census. These sources, only rarely used until now in studies of enslaved populations, make it possible to examine household structures, patterns of co-residence, relations of dependency, and the domestic dynamics shaped by slavery. Drawing on these findings, the article reflects on the need to rethink the traditional historiographical categories applied to the study of family and household organisation in contexts of slavery, incorporating new perspectives capable of addressing both the ruptures and the survival strategies developed within Atlantic societies.

Keywords: slavery; family; households; population registers; notarial records; Canary Islands; Spain seventeenth-nineteenth centuries.

1. INTRODUCCIÓN

La esclavitud en las Islas Canarias ha despertado, desde el siglo pasado, un destacado interés historiográfico. Un hito inicial fue la publicación, en 1966, del estudio pionero de Manuela Marrero Rodríguez sobre la esclavitud indígena en Tenerife tras la conquista del archipiélago por la corona española. Desde entonces, los temas abordados por la investigación canaria han sido diversos y, en muchos casos, desarrollados de forma temprana en comparación con otros espacios historiográficos, a partir de líneas de estudio propias, marcadas por las particularidades históricas del archipiélago.

Uno de los enfoques más originales emprendidos por la historiografía canaria fue el estudio de la explotación de la mano de obra esclavizada en los ingenios azucareros durante el siglo XVI, una dinámica productiva que otorgó al archipiélago un carácter singular dentro del sistema esclavista atlántico (Armenteros Martínez, 2012, pp. 106-113). Este interés anticipó temáticas que posteriormente serían abordadas en otras regiones del mundo ibérico, las cuales fueron trabajadas por investigadoras como la profesora Ana Viña Brito, quien vinculó la esclavitud en Canarias con las estructuras agrarias y productivas articuladas en torno al azúcar, en sintonía con buena parte de la historiografía latinoamericana y estadounidense (Viña Brito, 1993, 2014, 2015).

No obstante, la mayor parte de la producción historiográfica en las islas sobre esta temática se ha centrado en el análisis del fenómeno esclavista en contextos urbanos, con especial atención al servicio doméstico. En ese sentido, los estudios dedicados a las Canarias orientales han mostrado, desde su origen, una notable solidez metodológica y empírica. Los trabajos realizados por el profesor Manuel Lobo Cabrera, considerados hoy una referencia ineludible, no solo aportan datos demográficos valiosísimos, sino que también exploran aspectos muy variados sobre la esclavitud, caso de la inserción laboral o los comportamientos sociales y culturales de las personas esclavizadas, así como sus trayectorias vitales una vez alcanzada la libertad (Lobo Cabrera, 1982; 1983; Torres Santana y Lobo Cabrera, 1982; Lobo Cabrera y Díaz Hernández, 1984; Lobo Cabrera et al., 1993). Su obra ha resultado fundamental en el conocimiento de la esclavitud en Canarias y constituyó, además, un punto de partida para abordar estudios de carácter comparativo en el ámbito hispánico.

En el caso de las Canarias occidentales, Alberto Marcos Martín realizó el primer estudio demográfico sobre la población esclavizada de la ciudad de La Laguna durante la segunda mitad del siglo XVI, mediante el análisis seriado de documentación parroquial (Marcos Martín, 1980). Esta línea metodológica situó tempranamente a la historiografía canaria dentro de una corriente historiográfica que posteriormente alcanzaría un amplio desarrollo en otros espacios peninsulares, como Sevilla (Corona Pérez, 2022). Asimismo, el análisis de padrones y censos históricos ha permitido

reconstruir las dinámicas demográficas y las formas de convivencia que se daban en torno a la población esclava en la isla de La Gomera a finales del siglo XVII (Díaz Padilla y Rodríguez Yanes, 1990).

Durante las dos últimas décadas, la historiografía canaria ha seguido ampliando sus horizontes, incorporando nuevas perspectivas y consolidando su presencia en los debates historiográficos sobre la esclavitud atlántica. En este contexto, se han desarrollado investigaciones centradas en figuras clave del comercio esclavista (Fajardo Spínola, 2011; De Paz Sánchez et al., 2024), en la conflictividad vinculada a la esclavitud (Fajardo Spínola, 1995, 2012; Rivero Zerpa, 2023; Rodríguez Arrocha, 2014; Viña Brito, 2019), en la posición del archipiélago dentro de las redes del tráfico atlántico (Álvarez Santos, 2018; Calderón Ordóñez et al., 2016; De Paz Sánchez y Naranjo Orovio, 2020; Martín Casares, 2016; Reyes, 2004; Wheat, 2016), en los aspectos socioculturales de la vida de las personas sometidas a la esclavitud (Anaya Hernández, 2008; Barrios Díaz, 2019; De Paz Sánchez, 2017; Geremia, 2023; Hernández González, 2002) o en la realidad de la esclavitud en contextos particulares como la Casa Fuerte de Adeje (García Pulido y Barrios Díaz, 2024; Granado Suárez y Calvo Cruz, 2009).

Esta producción diversa demuestra que la historiografía canaria ha logrado insertarse con voz propia en los principales debates internacionales sobre la esclavitud. Sin embargo, el notable desarrollo alcanzado por estos estudios no ha impedido que ciertos aspectos fundamentales continúen siendo poco conocidos. Aunque parte de esta producción historiográfica ha recurrido a metodologías propias de la demografía histórica, esta disciplina no ha logrado consolidarse en el archipiélago[1]. A esta escasa atención hacia las dinámicas familiares de la población esclava en los análisis demográficos se suma el limitado desarrollo que también ha tenido la historia de la familia en las islas, especialmente en su vertiente más clásica (Barbero, 2024; González Zalacain, 2005; Hernández González, 1988; Rodríguez Calleja, 2014).

En consecuencia, la vida familiar de los esclavos ha recibido una atención limitada y continúa constituyendo uno de los ámbitos menos tratados dentro de este campo historiográfico. Este vacío no es exclusivo del caso canario, pues también en la Península Ibérica el estudio de la configuración familiar de la población esclava ha ocupado un lugar secundario hasta fechas recientes, cuando empezó a cobrar impulso gracias a investigaciones basadas en fuentes parroquiales y enfoques demográficos, como las desarrolladas por el Dr. Eduardo Corona (Corona Pérez, 2023a, 2023b, 2024a, 2024b) y por los profesores Fernández Chaves y Pérez García, de la Universidad de Sevilla, cuya amplia trayectoria historiográfica dificulta su síntesis en una única cita.

1. Véase el balance bibliométrico realizado por Bolaños González (2004) sobre la producción científica vinculada a la geografía humana canaria.

Esta carencia en el ámbito hispánico contrasta, sin embargo, con el desarrollo de enfoques más específicos en otros espacios. En el plano internacional, si bien la historiografía anglosajona ha realizado aproximaciones importantes (Gutman, 1976; Morgan, 2007, pp. 96-100), ha sido la historiografía luso-brasileña la que ha contribuido de forma más decidida al estudio de los lazos familiares de la población esclavizada y sus vínculos con los grupos familiares de los propietarios en los territorios coloniales de la Monarquía Portuguesa, prestando especial atención a procesos como el mestizaje, la infancia, las formas de movilidad social o las relaciones afectivas y de dependencia (Ferreira, 2007; Florentino y Goés, 2005; Freire, 2014; Goés y Florentino, 1999; Guedes, 2008, 2024; Ivo y Paiva, 2008; Kuznesof, 2007; Paiva, 2018, 2020, 2022; Paiva et al., 2024; Sá, 2024; Slenes, 2011).

En definitiva, estas y otras investigaciones planteadas desde Canarias han aportado una base sólida para el conocimiento del fenómeno esclavista, especialmente enfocado en los espacios urbanos y en sus dimensiones sociales y económicas, mientras que el estudio de las formas de convivencia y de la organización doméstica de la población esclava continúa siendo una línea todavía poco desarrollada. Este trabajo se inscribe en esa línea de investigación, incorporando herramientas de análisis provenientes de la historia de la familia y dialogando con las perspectivas recientes aportadas por los estudios dedicados a la esclavitud en el mundo atlántico.

Nuestro estudio propone analizar las dinámicas familiares e individuales de la población esclavizada en Tenerife durante la Edad Moderna desde una perspectiva comparada y mediante análisis cualitativos y cuantitativos. Para alcanzar los objetivos planteados hemos recurrido al análisis de dos tipologías documentales. En primer lugar, utilizamos documentación notarial custodiada en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (AHPSCT), a partir de catas aleatorias que dieron lugar a una muestra compuesta por 36 cartas de libertad otorgadas en zonas urbanas de Tenerife entre 1640 y 1779[2]. Estas cartas recogen distintos aspectos de la vida de los esclavos: su inserción en los núcleos familiares de los amos; las prácticas culturales que reforzaban vínculos informales, como el bautismo o el matrimonio; y las estrategias familiares desplegadas para conseguir la libertad.

Dentro de esta tipología documental, también analizamos las cartas de compraventa y las concesiones de libertad efectuadas en Santa Cruz y La Laguna entre 1702 y 1750, gracias a los datos recopilados y publicados por el profesor Manuel de Paz

2. Nuestra muestra comprende documentación de escribanías de las ciudades de Santa Cruz, La Laguna y un caso de La Orotava. El valor de la muestra reside, por supuesto, en la información cualitativa que podemos extraer de ellas, pero no es representativa respecto al volumen total que puede hallarse en el archivo. Con todo, los patrones observados en las cartas coinciden, a grandes rasgos, con los hallados en otros centros esclavistas del mundo ibérico, lo cual valida nuestra muestra para responder a las preguntas planteadas.

Sánchez (2017). De este modo, hemos accedido a información sobre el género, la edad, el precio de venta y otros aspectos jurídicos y sociales de los esclavos.

Empero, estas fuentes presentan ciertas limitaciones. La fundamental es que las cartas de libertad solo aluden a los casos de quienes lograron ser manumitidos. En Tenerife, durante el siglo XVIII, estas personas representaron en torno al 13 % del total de los esclavos que fueron comprados o vendidos (De Paz Sánchez, 2017, p. 25). Este porcentaje es comparable al de otras regiones del ámbito hispánico, como Granada en el siglo XVI (12 %), Barcelona en la Baja Edad Media (15 %), Extremadura (26 %) o Cádiz en el siglo XVII (13 %). Solo en el Cádiz del siglo XVIII el valor asciende al 80 %, debido no tanto a un aumento de manumisiones como a un notable descenso en las compraventas (Armenteros Martínez, 2015, p. 369; Martín Casares, 2000, p. 437; Morgado García, 2010, p. 403; Periáñez Gómez, 2010, p. 465). A pesar de ello, consideramos que el número de cartas que hemos podido seleccionar resultan representativas para abordar los aspectos cualitativos planteados, como asimismo se ha hecho en otros contextos esclavistas con porcentajes similares a los nuestros (Fernández Chaves, 2023; Pérez García, 2023; Periáñez Gómez, 2014).

En segundo lugar, trabajamos principalmente con diferentes padrones de habitantes confeccionados en la isla de Tenerife entre los siglos XVIII y XIX. La documentación empleada incluye el padrón de La Laguna de 1776, cuya transcripción aparece publicada en la colección de volúmenes dedicados a Amaro Pargo (García Pulido et al., 2019, pp. 677-848); el padrón de Tenerife de 1779, elaborado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife[3]; el padrón de Santa Cruz de 1797 (Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción)[4]; el padrón general de La Laguna de 1835 (Archivo Municipal de La Laguna); y los padrones de 1845 conservados en el citado Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife[5]. Igualmente, incorporamos el padrón parroquial de La Gomera del año de 1680 con fines comparativos y de contextualización regional, cuyo análisis ha sido posible gracias a la transcripción realizada por José Antonio Cebrián Latasa (2005), donada posteriormente al Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna, y

3. Los originales de los padrones de 1779 se custodian y conservan en el Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (ARSEAPT), sigs. RS21, 22, 23. Asimismo, se encuentran sus digitalizaciones disponibles en el portal on-line de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife: http://www.rseapt.es/es/archivo/padrones-de-habitantes-digitalizado

4. La transcripción del padrón de Santa Cruz de 1797 fue realizada por el investigador y documentalista Daniel García Pulido, quien nos la remitió cuando estábamos ampliando la búsqueda de listas nominativas relativas a población esclava. Por ello, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por la ayuda prestada y por sus recomendaciones de consulta de documentación y bibliografía.

5. AHPSCT, Fondo Papeles Sueltos de La Orotava (PSO).

publicada más tarde por Julio Vera (2016). Con ese objeto, recurrimos, además, al estudio de Gloria Díaz Padilla y José Miguel Rodríguez Yanes (1990).

Estos padrones fueron incorporados a una base de datos, ya que su información permite conocer el sexo, la edad, el estado civil y las relaciones que se establecían dentro de los hogares, así como la composición, las estructuras y otros aspectos evidenciados por los grupos domésticos, además de las ocupaciones y propiedades de sus integrantes en aquellos casos en que estas se indican (Laslett, 1975). Si bien es cierto que algunos catastros, censos y padrones de habitantes —de carácter predominantemente fiscal— tendían a omitir o simplificar la información relativa a los sectores subordinados (Dubert, 1992; Sarasua, 2021), los recién mencionados para las islas recogen, además, la «calidad» de los individuos empadronados (Henry, 1983), lo que permite identificar el perfil de los esclavos y analizar su posición en el seno de los agregados domésticos[6].

En este sentido, destaca el referido padrón de 1779[7] por el elevado nivel de detalle de la información recogida y por su amplia cobertura territorial, puesto que abarca gran parte de las zonas rurales de la isla e incluye el Puerto de la Cruz, un destacado enclave urbano y comercial de la región. No obstante, el resto de los padrones utilizados también aporta datos similares para el estudio de la población esclava y su uso permite ampliar el análisis a una parte significativa de las islas occidentales entre los siglos XVII y XIX, tanto en espacios rurales como urbanos.

Para su estudio recurrimos a la metodología comparativa de análisis familiar desarrollada por el Grupo de Cambridge y adaptada en España por la escuela modernista de Santiago de Compostela. Este enfoque resulta especialmente útil porque el empleo de listas nominativas correspondientes a distintos momentos cronológicos, levantadas en ámbitos rurales y urbanos y que, además, contienen información relativa a las edades, calidades u ocupaciones de los habitantes registrados, contribuye a superar las conocidas limitaciones derivadas de la aplicación del mencionado sistema de clasificación familiar a este tipo de fuentes (Sobrado y Dubert, 2012, p. 96).

Finalmente, recurrimos al enfoque comparativo para situar el caso de Canarias dentro de debates historiográficos más amplios sobre esclavitud y familia. Para ello, integramos las aportaciones recientes de la historiografía iberoamericana. En particular, tomamos como referencia los estudios de Eduardo Corona, Manuel

6. La aparición de estas y otras referencias en los padrones históricos de Canarias posibilita aproximarnos a las dinámicas personales, familiares y laborales de sectores tradicionalmente invisibilizados (Barbero, 2022; 2023).

7. Dispone de mayor información sobre el padrón de Tenerife de 1779 en la revista *Obradoiro de Historia Moderna*, en su número 33.

Fernández Chaves y Rafael Pérez García para el contexto andaluz, así como los trabajos de Roberto Guedes Ferreira y Eduardo França Paiva para Brasil[8].

2. APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LA ESCLAVITUD EN TENERIFE

«Es tanto el número de negros que se han introducido en la isla […] que muchos vezinos tienen a seys y a ocho negros […] y hasta los taberneros tienen negros, y regulados, se hallarán más negros que vecinos […] y no se encuentran por las calles otra cosa que negros […]»[9]. Así se expresaba, en la década de 1680, el personero Pedro de Ocampo en una comunicación dirigida al Cabildo de La Laguna. Su testimonio ofrece una imagen reveladora de hasta qué punto la esclavitud, en especial la de origen subsahariano, formaba parte de la vida cotidiana de Tenerife a finales del siglo XVII.

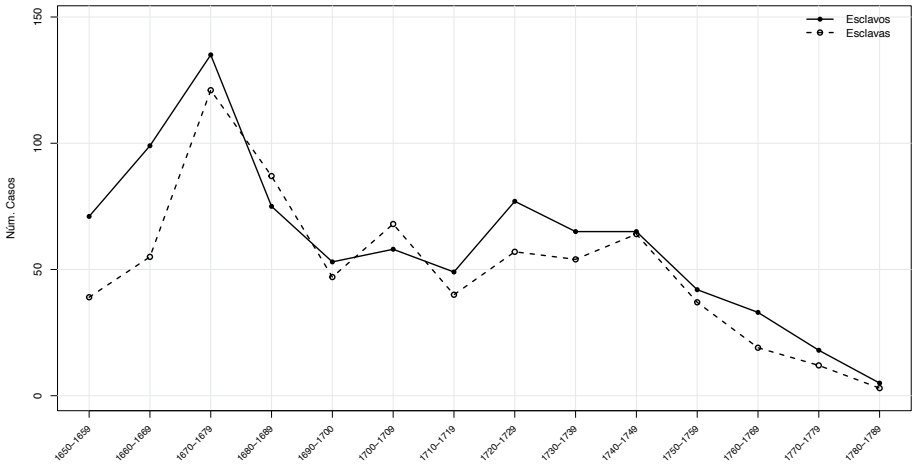
La institución esclavista estuvo presente en el archipiélago desde los primeros momentos de la conquista por parte de la Monarquía Hispánica, primero mediante la esclavización de las poblaciones indígenas y, posteriormente, a través de la llegada de personas esclavizadas procedentes del África occidental y subsahariana (Cortés, 1956; Marrero, 1966; Armenteros Martínez, 2012). Esta presencia quedó reflejada tempranamente en las fuentes parroquiales: entre mayo de 1530 y abril de 1531, un 35,1 % de los bautismos registrados en la parroquia de Los Remedios, en la ciudad de La Laguna, correspondía a esclavos (Marcos Martín, 1980, p. 15).

Desde entonces, la esclavitud mantuvo un peso considerable en la sociedad insular, sustentada inicialmente por la introducción de mano de obra forzada para los ingenios azucareros. Sin embargo, este sector entró en crisis a finales del siglo XVI, aunque la llegada de mano de obra esclava no se vio interrumpida y pasó a orientarse hacia otras actividades económicas, caso de las actividades agrarias, la construcción y el servicio doméstico (Lobo Cabrera, 1982, pp. 237-246). En este sentido, cabe suponer que los esclavos también participaron en la transformación del territorio tras el declive del azúcar, adaptando las antiguas tierras de cañaverales a las nuevas plantaciones de viñedo, esenciales para la economía vitícola que ahora iniciaría su fase de expansión.

8. Las investigaciones de los autores recién citados ofrecen herramientas conceptuales y metodológicas de gran utilidad para interpretar las dinámicas familiares desarrolladas en contextos de subordinación y dependencia.

9. Archivo Municipal de La Laguna, Sección Primera, E-XX, 6 (citado en Marcos Martín, 1980, p. 18).

Gráfico 1. Compraventas de personas esclavizadas en Santa Cruz y La Laguna (1650-1789)



Fuente: De Paz Sánchez (2017, p. 14);
De Paz Sánchez y Naranjo Orovio (2020, p. 71). Elaboración propia.

La continuidad de la esclavitud en las islas explica que, en torno a las décadas de 1670 y 1680 —coincidiendo con la redacción de la citada carta de Ocampo—, Tenerife registrara la mayor presencia de población esclava de origen africano de su historia, en un contexto marcado por el retroceso de la esclavitud en otros centros peninsulares, como Sevilla o Granada (Corona Pérez, 2022, pp. 270-279; De Paz Sánchez y Naranjo Orovio, 2020; Marcos Martín, 1980, p. 16; Martín Casares, 2000, pp. 464-468)[10]. Todo ello se relaciona con la posición geoestratégica de las islas en las rutas de la trata atlántica: desde aproximadamente 1480 y, sobre todo, a partir de 1650 y durante el siglo XVIII, Canarias se consolidó como un punto estratégico en las rutas de tráfico de personas entre África, América y Europa (Armenteros Martínez, 2012; De Paz Sánchez y Naranjo Orovio, 2020; Wheat, 2016). En este contexto, la evolución de la población esclava en Tenerife a lo largo de los siglos XVII y XVIII puede observarse en el gráfico 1, donde se aprecia que el punto más elevado se concentra entre 1670 y 1680, seguido de un descenso progresivo durante el siglo XVIII.

10. Sobre la evolución de la esclavitud en la Península durante el siglo XVII, véase, para el caso de Sevilla, Vasseur Gámez (2018).

La presencia de población esclava en este período también aparece documentada en la isla de La Gomera, como evidencia, por ejemplo, el padrón de habitantes de 1680, que registra la presencia de 138 esclavos en ese año, concentrados principalmente en hogares de familias hacendadas o con cierto poder socioeconómico. Se trata de una cifra significativa si consideramos que esta isla apenas superaba los 4 500 habitantes al finalizar el siglo XVII y que la gran concentración de ingenios había correspondido a Gran Canaria y Tenerife (Díaz Padilla y Rodríguez Yanes, 1990; Macías, 2004; Sánchez Herrero, 1975).

Volviendo con el gráfico 1, podemos observar un ligero repunte en torno a la década de 1730, aunque seguidamente la institución comienza a tornarse residual, como también se aprecia en los padrones fechados a término de la centuria (Tabla 1, *infra*), siguiendo así un patrón similar al encontrado en otros espacios hispánicos (Corona Pérez, 2022). Este declive, cuyas razones de ser fueron sumamente variadas y complejas[11], continuó acentuándose durante las primeras décadas del siglo XIX, hasta hacer de la esclavitud una institución marginal. Lo prueba, por ejemplo, el hecho de que los padrones analizados para estos años revelan la aparición de un reducido número de esclavos y alguna mención esporádica a libertos empadronados en los hogares urbanos de La Laguna en 1835 y en el Puerto de la Cruz en 1845. Incluso, estos ya no aparecen en distintas listas de habitantes consultadas, como en el caso de Santa Cruz en 1818[12] o en numerosas jurisdicciones de la isla en 1845 y 1848[13] (Tabla 1, *infra*). Con todo, parece indicar que la omisión presente en estas fuentes o el uso de determinadas denominaciones, como «criado doméstico», pudieron haberse empleado para ocultar la pervivencia de vínculos de subordinación y dependencia heredados del sistema esclavista. Recordemos que, en Europa, la abolición de la esclavitud se fue produciendo de manera gradual a

11. La interpretación historiográfica tradicional ha vinculado el declive del trabajo esclavo con su menor rentabilidad frente al avance del trabajo asalariado libre. Sin embargo, como ya demostraron para el caso de los Estados Unidos autores como Robert William Fogel y Stanley L. Engerman en 1974, o más recientemente Klas Rönnbäck (2021), la evolución de la esclavitud atlántica estuvo profundamente condicionada por la disponibilidad de mano de obra esclava en los circuitos comerciales internacionales. Si se parte de que la oferta de individuos esclavizados en el espacio atlántico explica, en términos generales, las variaciones del volumen de población esclava, y de que la natalidad de las personas sometidas a esclavitud resultaba insuficiente para garantizar la reposición natural del contingente (Corona Pérez, 2022), el declive de la mano de obra esclava en el mundo ibérico parece responder más a las dificultades de abastecimiento del mercado esclavista que a una caída efectiva de la demanda.

12. Padrón Municipal de Santa Cruz de Tenerife (1818), cuya transcripción hemos consultado en la obra de García Pulido y Fariña Pestano (2009).

13. Archivo Municipal de Tegueste (AMT), sig. 100-3.

lo largo del siglo XIX: Reino Unido en 1833[14], Francia en 1848[15] y otros países europeos y latinoamericanos siguieron el mismo camino (Sobrevilla Perea, 2023). En España, la esclavitud no fue abolida hasta la promulgación de la ley de 1837[16], que marcó la supresión definitiva de la esclavitud en los territorios peninsulares, incluidas las Islas Canarias. Con todo, la influencia de los cambios económicos y las presiones internacionales posiblemente ya habían comenzado a reducir la población esclava mucho antes de esa fecha (Gráfico 1).

3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN ESCLAVA

3.1. *Los esclavos en el mercado*

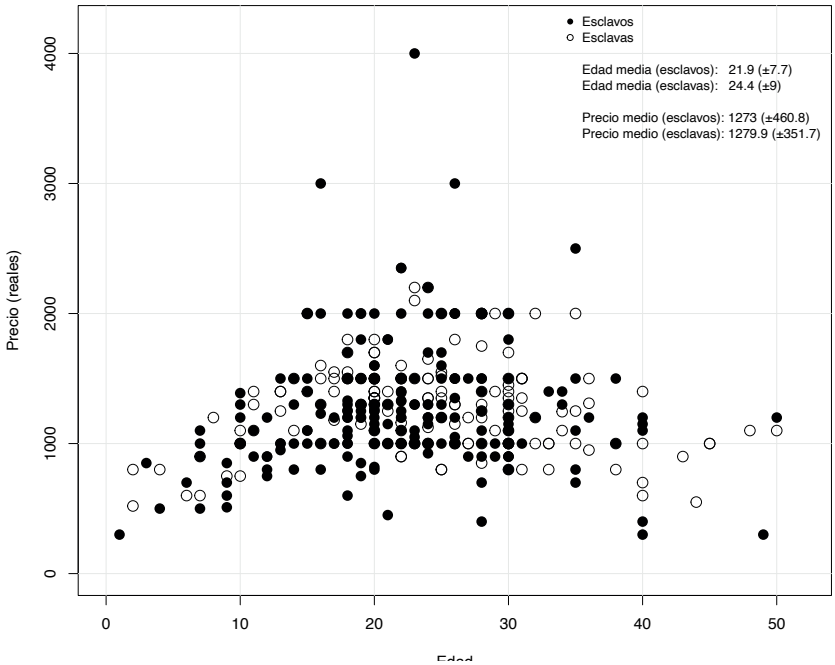
El análisis de las cartas de compraventa otorgadas en Santa Cruz y La Laguna entre 1700 y 1789, recogidas por el profesor Manuel de Paz Sánchez (2017), permite observar algunos rasgos de la población esclavizada en Tenerife. Por ejemplo, en el Gráfico 2 se aprecia una tendencia relativa hacia la masculinización: un 53,8 % de los 766 esclavos registrados en las cartas eran hombres. Esta tendencia coincide con lo observado en Sevilla en el siglo anterior (Corona Pérez, 2022) y contrasta con el caso de la Barcelona de finales del siglo XV (Armenteros Martínez, 2015) o la Granada del siglo XVI, donde un 61,4 % de un total de 2 163 esclavos eran mujeres (Martín Casares, 2000, pp. 237)[17].

El Gráfico 2 permite observar, además, las edades y los precios asignados a los esclavos que fueron objeto de transacción en las mencionadas ciudades de Santa Cruz y La Laguna entre los años 1700 y 1789. Sabemos que en la mayoría de los casos se trataba de jóvenes que rondaban los 20-30 años. Esto coincide con la dinámica observada en otros mercados esclavistas del mundo ibérico, aunque en algunos, como el de Sevilla y su entorno, se observa un envejecimiento progresivo de la población esclavizada en el tránsito del siglo XVI al XVII (Corona Pérez, 2022, p. 169).

El predominio de jóvenes respondía en parte a las exigencias del mercado esclavista, ya que se trataba de la etapa de máxima capacidad física y reproductiva, factores que incrementaban su valor económico dentro de este tipo de transacciones, tal y como ha señalado la literatura especializada (Corona Pérez, 2022, p. 174; Izquierdo Labrado, 2004, pp. 133-134; Martín Casares, 2000, p. 229; Periáñez

14. British National Archives, *Act for the Abolishion of Slavery*, PC 1/4444, 28 de Agosto de 1833.
15. *Le Moniteur Universel, Journal Officiel de la République Française*, 2 de mayo de 1848.
16. *Gaceta de Madrid*, 8 de marzo de 1837.
17. Hay que señalar, con todo, que la elevada feminización del contingente esclavo observada en Granada durante el siglo XVI es resultado de una muestra documental sesgada por el impacto de la Guerra de Granada (1569-1570) (Pérez García y Fernández Chaves, 2015).

Gráfico 2. Género, edad y precio de los esclavos vendidos y comprados en el mercado esclavista de las ciudades de Santa Cruz y La Laguna (1700-1789)



Fuente: De Paz Sánchez (2017, pp. 27-37). Elaboración propia.

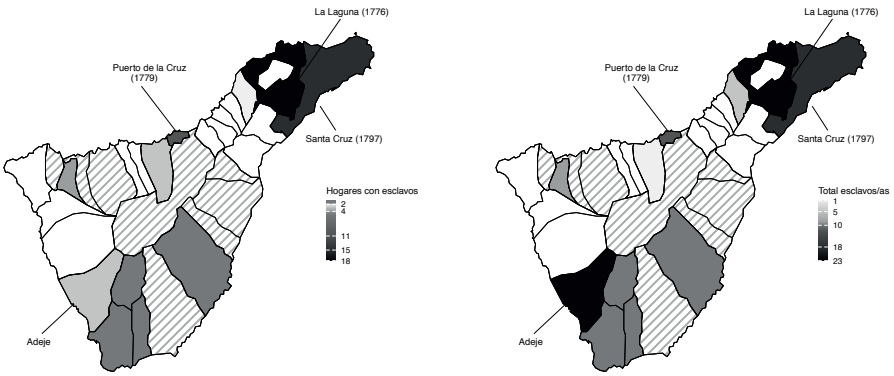
Gómez, 2010, p. 133). Con todo, investigaciones recientes han apuntado al papel de la oferta, es decir, de las características de las personas que eran embarcadas en África, en la configuración de la pirámide demográfica de las poblaciones esclavas (Corona Pérez, 2022).

Si bien en el siglo XVIII la estructura productiva de Tenerife había cambiado tras la desaparición de gran parte del trabajo esclavo en los ingenios, el mercado esclavista insular continuó caracterizándose por la compraventa de varones de origen fundamentalmente subsahariano. Esta situación podría explicarse por el papel que desempeñaba la isla como punto de tránsito y reexportación hacia los mercados situados en Indias, donde la demanda de mano de obra esclava masculina era mayoritaria (Corona Pérez, 2022, pp. 163-164). La continuidad de este tráfico en la isla se vinculaba, además, con la mencionada posición geoestratégica del archipiélago, lo que le facilitaba su inserción en las redes comerciales atlánticas.

3.2. *La población esclava en los hogares*

Ahora bien, las cartas de compraventa reflejan fundamentalmente las dinámicas comerciales del mercado esclavista, y no necesariamente se refieren a la población esclavizada que formaba parte de los hogares de la isla. Para aproximarnos a esta segunda dimensión, resulta útil acudir a fuentes de carácter censal si se tiene la posibilidad. En este sentido, los padrones de 1776 y 1779 ofrecen una valiosa imagen de la población esclava que vivía en Tenerife a finales del siglo XVIII. En el Mapa 1 observamos cómo los hogares con esclavos y, por consiguiente, la población esclavizada empadronada se concentraba en la metrópolis (Santa Cruz y La Laguna) y en el sur (Vilaflor, Adeje, Arico…). Asimismo, en el Mapa puede percibirse ya una sutil diferencia entre la realidad esclavista del sur y del norte de la isla: los hogares del sur tienden a concentrar más esclavos que los del norte, algo que se relaciona con una diferencia, observable en muchos otros puntos del mundo ibérico, entre la esclavitud urbana, que sería la predominante en el norte, y una esclavitud más vinculada al trabajo agrícola o, directamente, a grandes plantaciones, como fue el caso de la Casa de Adeje, que predominaría en el sur.

Mapa 1. Hogares con esclavos (izq.) y número de esclavos (der.)
en los padrones de Tenerife (1776-79)[18]



Fuentes: Padrón de La Laguna (1776) (García Pulido *et al*., 2019, pp. 677-848). ARSEAPT, Padrones de Tenerife (1779). APNSC, Padrón de Santa Cruz (1797). AMLL, Padrón General de La Laguna (1835). AHPSCT, Padrones de Tenerife (1845). Elaboración propia.

18. Las áreas rayadas se corresponden con regiones que no fueron cubiertas por el Padrón de La Laguna de 1776 ni por el de Tenerife de 1779.

En 1779, en las zonas rurales de la isla, fueron empadronados en los grupos domésticos un total de 60 individuos sometidos a la esclavitud, de los cuales el 51,7 % eran mujeres (Tabla 1). Todo lo cual estaba relacionado con el tipo de actividades productivas que se destinaban a esta mano de obra en las islas. Por un lado, a los varones se los explotaba en el trabajo agrario y en la construcción, y por otro lado, a las mujeres se las usaba en las tareas domésticas (Lobo Cabrera et al., 1993). Esta diferenciación por sexo explica por qué en los hogares rurales el número de esclavos y esclavas era relativamente equilibrado, mientras que en los núcleos urbanos —como La Laguna, Santa Cruz y el Puerto de la Cruz— la presencia femenina resultaba ligeramente más acentuada (Tabla 1). Allí, donde se concentraba precisamente el grueso de la demanda del servicio doméstico, cubierto fundamentalmente por jóvenes solteras asalariadas ocupadas en las tareas domésticas de las familias urbanas (Barbero, 2024, pp. 173-177).

Tabla 1. Número de esclavos en los hogares rurales y urbanos de Tenerife (siglos XVIII-XIX)

Geografía	Esclavos	Esclavas	Total
Vilaflor	4	6	10
Adeje	10	13	23
Arico	5	5	10
Tanque	6	3	9
Realejo Bajo	0	1	1
Realejo Alto	2	0	2
Tacoronte	2	3	5
Total rural (1779)	**29**	**31**	**60**
Ciudad de La Laguna (1776)	7	16	23
Centro del Puerto de la Cruz (1779)	3	9	12
Ciudad de Santa Cruz (1797)	8	10	18
Ciudad de La Laguna (1835)	2	2	4
Puerto de la Cruz (1845)	2	3	5

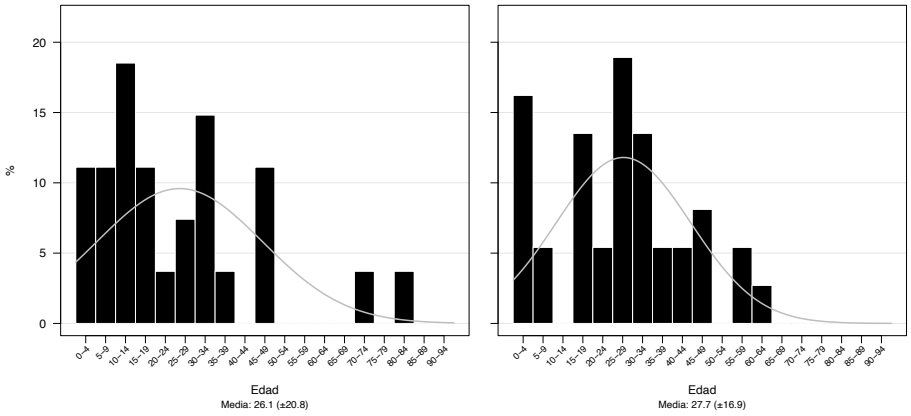
Fuentes: Padrón de La Laguna (1776) (García Pulido et al., 2019, pp. 677-848). ARSEAPT, Padrones de Tenerife (1779). APNSC, Padrón de Santa Cruz (1797). AMLL, Padrón General de La Laguna (1835). AHPSCT, Padrones de Tenerife (1845). Elaboración propia.

En las zonas rurales de Tenerife, el padrón de 1779 muestra igualmente un marcado predominio de población esclavizada joven: el 30 % de los individuos registrados eran menores de 14 años y el 23,3 % tenían entre 15 y 29 años. Si incorporamos la variable de género al análisis de las edades, observamos que en el ámbito rural los varones se concentraban principalmente en los grupos de edad más jóvenes, mientras que el grupo de las mujeres estaba ligeramente más envejecido (Gráfico 3). Esta diferencia en la distribución por sexo y edad de los jóvenes esclavos podría relacionarse también con la mayor mortalidad masculina, intensificada por las condiciones laborales más extremas impuestas a los varones, particularmente en tareas agrarias pesadas, trabajos de carga y construcción, tal y como se ha observado en cronologías similares en otros espacios esclavistas como Cuba o Brasil (Díaz Martínez, 2017; Domínguez Cabrera, 2023). En el caso femenino, destaca la elevada proporción de mujeres entre los 25 y los 34 años, especialmente en el tramo de 30-34 años. Esta concentración podría relacionarse con las funciones domésticas antes citadas y con las tareas de cuidados desempeñadas por muchas esclavas, algunas de las cuales fueron destinadas, además, como amas de cría para la lactancia y la crianza de los hijos e hijas de sus propietarios (Lobo Cabrera et al., 1993, p. 130). Este rol específico incluso llegó, en ocasiones, a ser reconocido y recompensado por los amos, como se recoge en algunas cartas de libertad otorgadas a esclavas en Sevilla al correr del siglo XVI (Fernández Chaves, 2023, p. 6).

De hecho, el padrón de 1779 recoge varios casos de criaturas de muy corta edad nacidas ya bajo la condición esclava, consecuencia de la transmisión hereditaria establecida por la legislación de la época, según la cual las esclavas transmitían su condición a sus hijos e hijas (Lobo Cabrera et al., 1993, p. 114). Así sucedía en la Casa Fuerte de Adeje, donde aparecen registrados Domingo, de 1 año, Jacinta Peña, de 3, y José, de 5, hijos del matrimonio formado por Juan Peña y Magdalena Rodríguez, ambos esclavos de 30 años[19]. Todo ello resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que Adeje constituía un señorío situado en el sur de la isla, relativamente alejado de los principales circuitos del comercio atlántico y donde todavía continuaba funcionando el último ingenio azucarero de Tenerife. En este contexto, la reproducción de la población esclava podía constituir una vía complementaria para garantizar el mantenimiento de la mano de obra que necesitaba la hacienda (Granado Suárez y Calvo Cruz, 2009; Lobo Cabrera et al., 1993, pp. 115-116). No obstante, la historiografía reciente ha demostrado, para el ámbito hispánico, que estas prácticas eran extremadamente inusuales e insuficientes para garantizar la reposición de la población esclava, cuyo volumen era, como se ha dicho, muy dependiente de la trata (Corona Pérez, 2022, 2023).

19. ARSEAPT, Padrón de Tenerife (1779), sig. RS21, f. 65v.

Gráfico 3. Distribución por edad de esclavos (izq.) y esclavas (der.) en hogares rurales de Tenerife (1779) (en porcentajes)



Fuente: ARSEAPT, *Padrones de Tenerife* (1779). Elaboración propia.

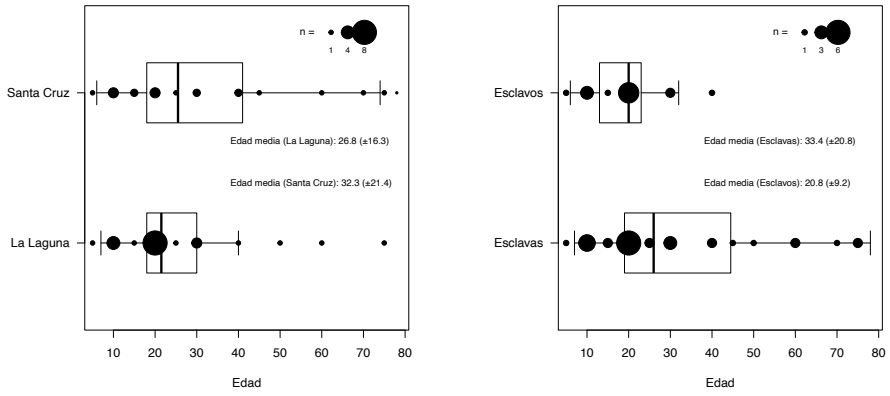
Si continuamos con el análisis de los niños, atendemos a que el 30 % de la población esclava registrada en las zonas rurales de Tenerife en 1779 tenía menos de 16 años. Dentro de este grupo, destacaba, además, la elevada presencia de criaturas de muy corta edad, ya que la mitad de los menores registrados no superaba los cinco años y más del 70 % tenía menos de diez años (Gráfico 3, *supra*). Entre los pequeños que aún no habían cumplido los 16 años, el 61,1 % eran niños esclavos y el 38,9 % niñas esclavas. Otro ejemplo se da en un hogar situado en el valle de Vilaflor de Chasna, en las medianías del sur de Tenerife, donde residían cuatro criaturas esclavizadas menores de 16 años: José Antonio, de 11 años; Tomás Antonio, de 9; Gertrudis, de 7; y Úrsula, de 5[20].

Su condición esclava convertía el trabajo en una obligación forzosa que estaban sometidos a realizar de forma compulsiva, de modo que podían ser destinados a las tareas domésticas, alquilados a terceros o incluso ser vendidos, tal como sucedía en diferentes territorios atlánticos vinculados con la trata de personas (Lobo Cabrera, et al., 1993; Viña Brito, 2006; Viña Brito *el al*., 2006; Muñoz Buendía, 2000; Masferrer León, 2012; Aranguren, 2021).

20. Una familia que se declaró como «pobres». Este hogar era de Antonio Díaz de 56 años, quien estaba «ausente», lo que suponía que su esposa estuviera al mando de la jefatura familiar: Lucía María de 56 años, encargada de sus hijos: Bárbara Josefa de 29 años, María Antonia de 26, y Juan Antonio de 10. ARSEAPT, Padrón de Tenerife (1779), sig. RS23, f. 324r.

Por tanto, la presencia de niños esclavos de tan corta edad en los hogares domésticos permite plantear que su participación en determinadas tareas y formas de trabajo se daba desde edades extremadamente tempranas, en torno a los cuatro o cinco años, lo que constituye una de las evidencias más precoces de trabajo infantil documentadas hasta ahora para la sociedad isleña del Antiguo Régimen (Barbero, 2024, pp. 144-168).

Gráfico 4. Distribución por edad y sexo de los esclavos en los hogares urbanos de La Laguna (1776) y Santa Cruz (1797)



Fuente: Padrón de La Laguna (1776) (García Pulido et al., 2019, pp. 677-848). APNSC, Padrón de Santa Cruz (1797). Elaboración propia.

En cuanto a los núcleos urbanos de la isla, el padrón de La Laguna de 1776 refleja que el 65,2 % de los esclavos registrados tenía entre 5 y 24 años, y el de Santa Cruz de 1797 indica que en torno a la mitad de ellos pertenecía a este mismo tramo de edad (Gráfico 4). A pesar de que la distribución por edad sea considerablemente más dispersa en Santa Cruz que en La Laguna, la tendencia general observada coincide con la de otros espacios y períodos del archipiélago. Así, por ejemplo, los padrones de La Gomera a finales del siglo XVII o los libros sacramentales de la ciudad de Las Palmas a mediados del siglo XVIII evidencian igualmente un marcado predominio de población esclava joven en Canarias (Díaz Padilla y Rodríguez Yanes, 1990; Lobo Cabrera et al., 1993; Vera, 2016).

Con todo, la juventud que caracterizaba al grueso de las personas sometidas a la esclavitud no implica que en Tenerife tampoco se explotara a individuos de edades avanzadas para la época. El tipo de actividades productivas a las que fueron destinados explica la presencia de esclavos ancianos en los hogares insulares. Esta

realidad afectó de manera significativa a las mujeres y se concentró, sobre todo, en los espacios urbanos de la isla (Gráficos 3 y 4). Esta mayor supervivencia femenina podría explicarse, en parte, por su dedicación a las labores domésticas dentro de los hogares urbanos, tareas que, aunque extremadamente duras, resultaban menos destructivas físicamente que los trabajos agrícolas o de carga. A ello se sumaba la tendencia general, constatada también entre las poblaciones esclavizadas, a una mayor esperanza de vida femenina frente a la masculina (Lobo Cabrera et al., 1993, pp. 179). Así sucedía, por ejemplo, con María, empadronada como esclava de 78 años en la ciudad de Santa Cruz en el año 1797, quien continuaba sirviendo en el seno del grupo doméstico de su amo[21]. Tiempo después, en 1845, en el Puerto de la Cruz, se encontraba María del Carmen, de 60 años, apuntada igualmente en el padrón como esclava[22].

Si atendemos al género, observamos que, en los núcleos urbanos, los hombres tendieron a concentrarse mucho más en el tramo de edad de los 15 a los 25 años, mientras que las edades de las mujeres fueron considerablemente más variadas. Asimismo, su media de edad estaba casi 13 años por encima de la de los hombres, una diferencia mucho mayor de la que se observaba en el mundo rural (Gráfico 3) o, por ejemplo, en la Sevilla del siglo XVI (Corona Pérez, 2021, p. 211). Este envejecimiento femenino tiene sentido, más aún en un contexto urbano tan tardío, si tenemos en cuenta que el envejecimiento de las poblaciones esclavizadas observado en muchos centros esclavistas del mundo ibérico está ligado a una deficiente reposición natural del contingente (Corona Pérez, 2021, p. 212). Así, partiendo de la base de que esta renovación dependía de la trata, y en un contexto, como el de finales del siglo XVIII, en el que la trata demandaba, fundamentalmente, esclavos hombres para ser enviados a América, se entiende que la reposición de la población esclava femenina fuese mucho más complicada de lograr que la masculina, provocando así un mayor envejecimiento en la primera que en la segunda.

Por su parte, durante las primeras décadas del siglo XIX, la población esclavizada registrada en los padrones de Tenerife experimentó una notable reducción numérica. No obstante, las fuentes continúan mostrando un perfil demográfico similar al documentado en décadas anteriores, caracterizado por una clara concentración de individuos jóvenes entre los 5 y los 30 años.

21. María vivía en la calle de San José en el hogar encabezado por don Carlos Pavía, viudo de 70 años, que corresidía además con su hija viuda, doña Rafaela, de 47 años, su hijo don Pablo, de 49, y su nieto don Pascual, de 32. APNSC, Padrón de Santa Cruz (1797), caja 22-1.

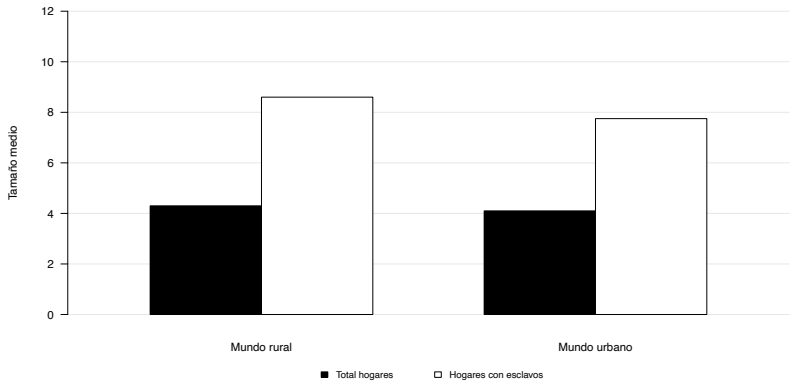
22. María del Carmen residía en la calle San Juan, en el hogar de tipo CLS, encabezado por su propietaria: doña Rosario Ramos, viuda de 39 años, quien trabajaba como tendera en el puerto. En este hogar se encontraba la hermana de la jefa de casa: doña Francisca de 37 años, y además disponían del servicio ofrecido por la criada: Petra Rodríguez, soltera de 26 años. AHPSC, Padrón de 1845, sig. PSO2991, s/f.

4. LOS ESCLAVOS EN EL SERVICIO DOMÉSTICO

Los padrones de habitantes de Tenerife nos permiten aproximarnos a la composición de los hogares que integraban población esclava en la isla a finales de la Edad Moderna. En las zonas rurales, el padrón de 1779 registró 22 grupos domésticos que declaraban contar con esclavos dentro de su servicio doméstico. Como se observa en el Gráfico 5, estos hogares presentaban un tamaño medio de 9,7 miembros, un número que duplicaba al registrado entre el grueso de las familias campesinas empadronadas ese mismo año (Barbero, 2024, pp. 74-98).

En la mayoría de los casos se trataba de familias de tipo nuclear (Tabla 2) encabezadas por hombres, cuya edad media era de unos 50,1 años. La mayoría de las veces, estos hogares masculinos, además, disponían de trabajadores del servicio doméstico, siendo muy numerosos en algunos casos, lo que explica que estos jefes de casa estuvieran al frente de los hogares con las mayores dimensiones en la isla (11,9 miembros por hogar). Una característica que refleja una posición socioeconómica relativamente acomodada, visible también en el uso del tratamiento de don, el desempeño de ocupaciones prestigiosas o asociadas a cierta autoridad (tenientes capitanes, sargentos o labradores) y la posesión de un importante número de cabezas de ganado menor y mayor. Por tanto, estamos ante algunas de las familias

Gráfico 5. Tamaño medio de los hogares registrados en los padrones de Tenerife (siglos XVIII-XIX)



Fuente: Barbero (2024); Padrón de La Laguna (1776) (García Pulido et al., 2019, pp. 677-848). ARSEAPT, Padrones de Tenerife (1779); APNSC, Padrón de Santa Cruz (1797). AMLL, Padrón General de La Laguna (1835). Elaboración propia.

más pudientes registradas en el padrón de 1779, integradas en un sector social privilegiado en el seno de una sociedad en la que predominaban los hogares cuyos componentes se ganaban la vida trabajando en oficios modestos, como jornaleros, pastores, pescadores, marineros, criados o trabajadoras de la protoindustria textil (Barbero, 2024, pp. 98-100).

Por su parte, solo seis de los hogares con esclavos registrados estaban encabezados por mujeres, quienes tenían una edad media de 59,1 años. En su mayoría se trataba de viudas con hijos a su cargo, salvo una casada con ausentes y una viuda que vivía sola. Su posición socioeconómica se evidencia asimismo en el tamaño de estos hogares, compuestos por una media de 5,3 personas. Esta posición socioeconómica explica que gran parte de ellas no declarara ejercer una actividad remunerada. Con todo, una de las viudas afirmó ser labradora, la viuda solitaria se identificó como costurera y solo una viuda declaró dedicarse al cuidado de la casa y la familia. Sin embargo, sus hogares no parecen haber pertenecido a los sectores más acomodados de la sociedad isleña, puesto que solo una de estas jefas de casa disponía de criados y otra declaró poseer un reducido número de piezas de ganado.

En los ámbitos más urbanizados de la isla también encontramos hogares cuyo servicio doméstico se componía no solo de trabajadores asalariados, sino también de personas sometidas a la esclavitud. Así, se registraron 17 hogares de este tipo en la ciudad de La Laguna en 1776, 15 en Santa Cruz en 1797 y 11 en el Puerto de la Cruz en 1779.

La personalidad de sus jefes de casa no difiere mucho de la observada en el ámbito rural de la isla: la mayoría de los hogares estaban liderados por varones, incluso en un porcentaje superior al encontrado en las zonas rurales. En la ciudad de La Laguna estos jefes de casa se distinguían por el uso de don y presentaban una edad media de 50 años. Asimismo, estos hogares contaban con unas dimensiones inferiores a las registradas en el ámbito rural, con una media de 8,2 miembros por hogar, en sintonía con las características descritas para los hogares urbanos de otras ciudades españolas y europeas de la época (Dubert, 1992).

El padrón de La Laguna de 1776 únicamente registró las categorías socioprofesionales de aquellos cabezas de casa varones pertenecientes a las élites sociales, por lo que la información ocupacional conservada resulta parcial, aunque especialmente útil para el análisis de este tipo de hogares. Así, sabemos que estos jefes de casa declararon ser capitanes, licenciados, tenientes coroneles, doctores o presbíteros, y la mayoría afirmó poseer ganado. Se trata de una realidad semejante a la documentada en el mundo rural de la isla, que coincide además con la información proporcionada por las citadas cartas de compraventa otorgadas en las notarías de la ciudad para fechas próximas.

Un escenario similar se observa en la ciudad de Santa Cruz según el padrón de 1797. La mayoría de estos hogares estaban encabezados por varones de edad elevada,

con una media de 55,5 años. Además, sus agregados domésticos presentaban un tamaño más bajo al apreciado en el entorno rural: 8,8 personas por hogar (Gráfico 5).

Del mismo modo, se registraron en Santa Cruz tres hogares encabezados por mujeres, cuya edad promedio calculamos en 46,7 años. Entre ellas se encontraba doña Micaela Miranda, viuda de 32 años, quien corresidía con Josefa, de 48 años, identificada en el padrón como «su esclava». Por su parte, las otras dos, también viudas, convivían con sus hijos e hijas, así como con criados y esclavos.

Por su parte, en el Puerto de la Cruz los hogares que integraban a esclavos dentro de su servicio doméstico presentaban una media de 7,4 personas por hogar, por debajo del tamaño medio registrado en los otros espacios urbanos analizados. Asimismo, reflejaban una realidad social más heterogénea que la documentada en las ciudades de La Laguna o Santa Cruz. En este enclave portuario, al lado de los tradicionales tenientes capitanes, aparecen comerciantes, tenderos, tenderas, campesinos e incluso mujeres vinculadas a la industria textil doméstica. Esta mayor diversidad ocupacional y social evidencia una presencia más amplia de la propiedad esclava dentro del tejido urbano-portuario de la localidad.

Tabla 2. Estructuras familiares de los hogares con esclavos en Tenerife (1776-1835) (en porcentajes)[23]

Tipos de familias	Mundo rural (1779)		Mundo urbano (1776-79, 1835 y 1845)	
	Hg. con esclavos	Total hogares	Hg. con esclavos	Total hogares
Solitarios	4,8	7,3	5,8	10,4
CLS	4,8	5,4	14,7	8,3
Nucleares	76,2	76,7	38,2	56,9
Extensa	9,5	8,7	29,4	12,1
Múltiple	0	1,4	8,8	3,6
Indefinida	4,8	0,4	2,9	9,7
Núm. casos	**22**	**7 154**	**34**	**2 701**

Fuente: Barbero (2024); Padrón de La Laguna (1776) (García Pulido et al., 2019, pp. 677-848). ARSEAPT. Padrones de Tenerife (1779). AMLL. Padrón General de La Laguna (1835). Elaboración propia.

En general, las familias nucleares eran las formas de convivencia más habituales entre los hogares rurales que mantenían en su seno a mano de obra esclava a

23. Para el mundo urbano hemos analizado conjuntamente los datos de los padrones del siglo XVIII y el XIX debido a lo poco numerosos que son los casos en estos últimos.

finales del siglo XVIII. No obstante, las estructuras complejas y, especialmente, las indefinidas alcanzaban una presencia superior a la registrada en el mundo urbano (Tabla 2). En particular, las familias indefinidas tendieron a ser más frecuentes en los hogares con esclavos que en aquellos sin población esclavizada. Esta situación respondía, en ocasiones, a las estrategias hereditarias desarrolladas por las élites urbanas, aunque en otros casos reflejaba las dinámicas de corresidencia establecidas por los propios esclavos y libertos, junto a otros grupos sociales, como veremos. Este tipo de estructura también repercutía en las dimensiones de los hogares urbanos, condicionadas tanto por las particularidades sociales y económicas de cada enclave como por las estrategias familiares desarrolladas por las élites y los sectores subalternos. Así, mientras en La Laguna predominaban las familias nucleares, en Santa Cruz alcanzaban mayor peso las estructuras indefinidas y en el Puerto de la Cruz las formas extensas. Incluso en las primeras décadas del siglo XIX persistían ciertas diferencias entre ambos espacios urbanos, pues mientras en La Laguna se documentaron hogares extensos vinculados a sectores acomodados, en el Puerto de la Cruz predominaban formas de convivencia más simples, como los hogares solitarios, los CLS[24] y las familias nucleares.

Cabe destacar que los hogares encabezados por mujeres constituyeron una minoría entre las jefaturas domésticas con esclavos a su servicio, una realidad vinculada al menor tamaño de estos grupos domésticos y a la modestia del patrimonio declarado. Sin embargo, estas jefas de casa ejercieron un destacado nivel de autoridad en el seno de sus hogares, sustentado en el control de la economía familiar y de las relaciones de dependencia articuladas dentro del espacio doméstico, lo que incluía la supervisión de sus hijos e hijas, otras mujeres de la familia, esclavos y trabajadores del servicio doméstico. Así, estas mujeres no solo participaron activamente en las dinámicas de dominación y reproducción social propias de la sociedad urbana isleña, sino que también consolidaron espacios de poder y autoridad dentro de un contexto profundamente jerarquizado y patriarcal.

Ya en las primeras décadas del siglo XIX observamos que la presencia de esclavos en los hogares urbanos se redujo notablemente, como ya se ha señalado. No obstante, sabemos que en la ciudad de La Laguna y en el Puerto de la Cruz las familias propietarias registradas en 1835 y 1845 continuaron mostrando rasgos similares a los observados en el siglo anterior. Asimismo, los casos documentados

24. Los corresidentes sin estructura familiar (CLS) estaban formados por personas integradas en hogares sin un núcleo matrimonial. Entre ellos predominaban en Tenerife, a finales del Antiguo Régimen, los agregados domésticos constituidos por hermanos solteros, tíos y sobrinos o abuelos y nietos. En su mayoría, estos grupos domésticos estaban encabezados y habitados por mujeres de distintas edades y estados civiles. Asimismo, en las zonas con un mayor grado de urbanización de la isla destacaban además las formas de corresidencia establecidas entre personas sin vínculos familiares (Barbero, 2024).

reflejan dinámicas diferenciadas entre ambos espacios urbanos: mientras que en La Laguna persistían hogares vinculados a sectores acomodados y formas amplias de corresidencia, en el Puerto de la Cruz predominaban unidades domésticas más reducidas y asociadas a actividades comerciales y de servicio.

Si bien el número de esclavos era ya reducido por entonces, el tamaño medio de los hogares propietarios continuaba siendo relativamente elevado (5 miembros por hogar). Así sucedía, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, en la calle Cupido, donde en 1845 estaba a la cabeza de su hogar una viuda solitaria, doña Francisca Luna de Orea, de 54 años, quien contaba con un amplio servicio doméstico, el cual estaba integrado por una criada, esclava, soltera de 46 años, María Aurora, que en el seno de la casa de su patrona constituía su pequeño núcleo con sus dos hijos, también esclavos, Eugenia de la Cruz, de 19 años y Francisco de la Cruz, de 14. Además, doña Francisca disponía para su servicio del criado, Luis Baez, casado de 64 años[25]. Igualmente podemos citar el caso de un hogar de tipo CLS, situado en la calle San Juan, de la referida villa marinera, el cual estaba encabezado por una viuda de 39 años, doña Rosario Ramos, quien trabajaba como tendera y residía junto a su hermana, Francisca, soltera, de 37 años. Ambas sostenían su hogar y tienda gracias además al trabajo diario que realizaba, María del Carmen, esclava, soltera de 60 años y Petra Rodríguez, criada, soltera de 20[26].

5. ESCLAVITUD Y RELACIONES FAMILIARES

La condición sociojurídica que sometía a las personas a la esclavitud, al convertirlas en propiedad explotable, implicaba que estos individuos formasen parte de los bienes pertenecientes a aquellas familias que concentraban un destacado poder socioeconómico dentro de la sociedad isleña. Esta realidad limitaba, al menos en teoría, las posibilidades de las personas esclavizadas de formar parte de la vida familiar en condiciones semejantes a las del resto de habitantes que convivían en los grupos domésticos de Tenerife a finales del Antiguo Régimen.

En este sentido, las formas de convivencia de los esclavos fueron analizadas tradicionalmente desde perspectivas historiográficas que cuestionaban la existencia de auténticas dinámicas familiares entre esta población. La elevada ilegitimidad que caracterizaba a buena parte de la descendencia de los esclavos —derivada de las dificultades para formalizar matrimonios estables dentro del sistema esclavista— y la inestabilidad de muchas de sus relaciones domésticas llevaron a parte de la historiografía a interpretar a estos individuos como una prolongación subordinada de los hogares propietarios, es decir, como parte de la «familia extensa», más que como

25. AHPSCT, Padrones de 1845, sig. PSO2991, 11v.
26. AHPSCT, Padrones de 1845, sig. PSO2991, f. 37v.

grupos familiares con dinámicas propias[27]. La visión de los esclavos como parte de la familia de los amos, de hecho, coincide con lo establecido por Alfonso X en sus *Siete Partidas*, es similar a la opinión de algunos teóricos de la época[28], y es, incluso, lo que se puede inferir de muchos de los vínculos que se observan en buena parte de las cartas de libertad para nuestra geografía y para muchas otras (Blumenthal, 2009; Fernández Chaves, 2023, p. 5; Heers, 1981, como se citó en González Arévalo, 2006, p. 174; Pérez García, 2023).

Sin embargo, por nuestra parte, consideramos que reducir las relaciones familiares de los individuos en régimen de esclavitud exclusivamente a lo anteriormente

27. El término «familia extensa», traduciendo del inglés «extended family», es utilizado por especialistas en Historia de la esclavitud, como Debra Blumenthal, para referirse a aquellos miembros del núcleo de convivencia que no mantenían lazos de consanguinidad con el cabeza de casa (Blumenthal, 2009). Sin embargo, el sistema de clasificación de las estructuras familiares propuesto por el Grupo de Cambridge y adaptado en el ámbito hispánico, especialmente por la historiografía gallega, organiza los hogares a partir de la existencia o ausencia de un núcleo matrimonial (matrimonio con o sin hijos/as, viudas/os con hijos/as, solteras/os con hijos, casadas de ausentes con hijos/as). Según esta propuesta, los hogares extensos estaban formados por una familia nuclear que convivía con uno o varios parientes corresidentes, tales como abuelos, tíos, sobrinos u otros familiares. Por su parte, las familias múltiples eran resultado de la convivencia de dos o más núcleos matrimoniales bajo un mismo techo. En cuanto a las familias indefinidas, se identifican porque se desconoce la relación que mantenían los componentes del hogar con el cabeza de casa. Se trata de una estructura muy presente en los espacios urbanos de la isla. Asimismo, dentro de esta categoría predominaban principalmente dos formas de convivencia que contribuían a dotar a los hogares de una mayor complejidad: por un lado, los grupos domésticos constituidos por un núcleo matrimonial junto a uno o varios corresidentes; por otro, aquellos en los que la corresidencia se establecía entre distintos núcleos familiares. Igualmente, desde la perspectiva de la Historia de la Familia, la presencia de criados o esclavos no afecta a la definición de las estructuras familiares, dado que los vínculos mantenidos por el cabeza de casa respondían a las relaciones laborales en el caso de los sirvientes y de propiedad jurídica en el de los esclavos (Laslett, 1976; Laslett y Wall, 1972; Henry, 1983; Dubert, 1992; Barbero, 2024).

28. Eduardo Corona (2023) saca a colación el ejemplo de Sebastián de Covarrubias, que en *Tesoro de la Lengua* afirmó que «[…] debaxo desta palabra familia se entiende el señor y su mujer y los demás que tiene de su mando, como hijos, criados, esclavos […]». Asimismo, Fray Vicente Mexía, en su *Saludable instrucción del estado del matrimonio* (1566), cuando hablaba de la diferencia entre los criados que vivían en la casa de sus amos y los que no, afirmaba que «aunque los unos y los otros se entiendan generalmente en nombre de criados, se llaman propiamente familiares sino aquellos que sirven en casa, y están a cargo del señor. Puesto caso que extendiendo algún tanto el nombre de la familia todos los que llevan acostamiento de un señor, se pueden en alguna manera decir y ser tenidos por familiares suyos» (citado en Fernández Chaves, 2023). Covarrubias y Mexía, igual que otros teóricos de la época, entendían la familia en función no tanto de la cuestión de la consanguinidad sino de las relaciones de poder establecidas entre el cabeza de familia y el resto de los miembros de su grupo doméstico. En esta línea se podría citar que en algunas licencias para viajar a América custodiadas en el Archivo General de Indias se incluía a criados y esclavos en el listado de «familiares» que viajaban con la persona que solicitaba la licencia.

mencionado es una visión simplista y presentista. En primer lugar, porque, como señalan Eduardo Corona (2023, p. 4) y Eduardo França (2020, p. 409), es un análisis que reduce a los esclavos a sujetos meramente pasivos, que en el fondo solo se limita a reproducir discursos moralistas, anacrónicos y extremadamente estereotipados. En segundo lugar, porque se basa en una concepción de la familia sumamente limitada, más aún al hablar de sociedades del Antiguo Régimen. Analizar las familias esclavas teniendo como modelo la estructura de padre y madre unidos en matrimonio y su descendencia legítima, deja fuera del análisis no solo a buena parte de las relaciones familiares entre esclavos[29], sino a cualquier forma de organización en el espacio doméstico que se salga de la institución del matrimonio y la monogamia o que no estuviera «dotada de entidad jurídica y espacio privado propio» (Corona Pérez, 2023, p. 3).

5.1. *Legitimidad y matrimonio*

Las relaciones familiares de los esclavos estuvieron protagonizadas por una elevada tasa de ilegitimidad (Corona Pérez, 2022, 2023, p. 6). Para empezar, la juventud de las personas reducidas a esta institución, ya apuntada anteriormente, también contribuyó a una elevada tasa de soltería. En los padrones de 1779 correspondientes a las zonas rurales, aproximadamente el 80 % del total de la población esclava figuraba como soltera, mientras que solo un 20 % declaraba estar casada. Esta proporción fue algo menor entre las mujeres, ya que un 22,6 % del total de ellas declararon estar casadas, frente al 17,2 % de los varones.

Entre los escasos datos encontrados en los padrones podemos destacar el matrimonio formado por María del Socorro, esclava de 30 años, y Domingo Navarro, de 35 años, un hombre libre que trabajaba como peón en huertas ajenas. Ambos declararon estar casados en el padrón de 1779 correspondiente a la Casa Fuerte de Adeje, a pesar de las limitaciones que la esclavitud imponía a la vida familiar en el seno de los ingenios azucareros[30].

Aunque los párrocos promovían el acceso de los esclavos al matrimonio, incitando a sus propietarios a consentir las nupcias (Lobo Cabrera, et al., 1993, p. 120), esta iniciativa chocó con la resistencia de muchos amos, quienes temían que la vida matrimonial entorpeciera los beneficios extraídos de su explotación diaria, especialmente durante las edades de mayor rendimiento laboral (Corona Pérez, 2023, p. 6; González Jáuregui, 2019; Periáñez Gómez, 2010, pp. 314-315). Como consecuencia,

29. Y decimos «muchas» porque el matrimonio entre personas esclavas, o de personas esclavizadas con personas libres, estaba permitido y aceptado legal y socialmente, con lo que había familias esclavas que ciertamente tenían base jurídica.

30. ARSEAPT, Padrón de Tenerife (1779), sig. RS21, f. 65v.

en los padrones consultados, las personas esclavizadas figuraban sistemáticamente como solteras, evidenciando la dificultad real de acceso al matrimonio pese a los intentos de fomento religioso.

En otro orden de cosas, el matrimonio no solo tenía un valor simbólico, sino también estratégico. La formación de núcleos familiares legítimos se convirtió en un mecanismo sumamente efectivo para sortear, al menos en parte, el dominio de los amos. Ciertamente, el matrimonio actuaba como una estrategia de autoprotección que favorecía la movilidad física y social de los esclavos, facilitaba la acumulación de pequeños recursos propios y promovía el establecimiento de redes de contacto, solidaridad y sociabilidad (Fernández Martín, 2024, pp. 309-312; Paiva, 2020, p. 416). Prueba de ello es, por ejemplo, que el matrimonio se alegaba como motivo para solicitar la libertad incluso por vía judicial. En este sentido, en el Reino de Granada, el matrimonio apareció como motivo principal en casi el 4 % de los pleitos de libertad, superando incluso a otras causas, tales como malos tratos, la esclavitud ilícita por rehén o las falsas promesas de libertad (Fernández Martín, 2024, p. 285).

También en Canarias encontramos ejemplos de esta estrategia en las cartas de libertad de nuestra muestra. Por ejemplo, Francisco Antonio, «esclavo moro» del presidente de la Real Audiencia de Canarias, fue liberado en 1735 directamente por haberse convertido al cristianismo y por haber contraído matrimonio con María Esquibelo[31]. Otro caso es el de Luis, esclavo «pardo» del cónsul francés Esteban Porlier, quien obtuvo la libertad provisional en 1721 gracias a las gestiones de su esposa María Rodríguez, que logró presionar y negociar con Porlier a pesar de que no existían otros motivos aparentes para su manumisión. Tanto es así que, tras concederle la libertad, Porlier estableció un plazo de un año para que Luis y María le reembolsaran el 80 % del precio que había pagado en su momento por la adquisición de Luis[32].

En muchas regiones, los amos mostraron actitudes contradictorias ante el matrimonio de las personas esclavizadas. En Valencia en el siglo XV o en Sevilla, Extremadura y Granada durante los siglos XVI y XVII, se documentan episodios de resistencia de los propietarios frente a los matrimonios de sus esclavos (Blumenthal, 2009; Corona Pérez, 2023, pp. 6-7; Martín Casares, 2000, pp. 361-362; Periáñez Gómez, 2010, pp. 314-318). En Tenerife no hemos localizado casos de esta naturaleza, en parte debido a la pérdida de documentación judicial. Sin embargo, sí hemos encontrado ejemplos testimoniales de la actitud opuesta entre la documentación notarial; situaciones en las que a los amos les convenía promover o incluso concertar matrimonios entre sus esclavos, como forma de reforzar vínculos de dependencia

31. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 1585, s/f.
32. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 857, ff. 99v-102r.

personal y consolidar la formación de núcleos familiares bajo su control, demostrando su enorme capacidad para manipular las relaciones familiares surgidas bajo condiciones de esclavitud (Blumenthal, 2009, pp. 122-153).

En 1617 tuvo lugar un caso que lo ejemplifica. María Romano adquirió a María Castellana, una esclava que en el momento de la venta estaba embarazada, bajo la condición de que «lo que pariese la dicha María Castellana fuese libre de toda suxestión y cautiverio». La niña nacida en su casa, Mariana, creció en ese hogar y, ya en su juventud, fue casada con Pedro Doble en un matrimonio concertado por la propia María Romano. En compensación, Mariana:

> Se me entregó para que me sirviera, como efectivamente me sirvió, porque la casé con el dicho Pedro Doble y porque siempre la mantuve en mi compañía y servicio como persona libre, que es lo que es, y nunca ninguno de los dos tuvo odio alguno contra ella, ni lo pueden tener nuestros herederos[33].

Es decir, concertar el matrimonio entre Pedro Doble y la hija de su esclava sirvió a María Romano para establecer un vínculo de dependencia asimétrica[34] con esta, el cual le permitió emplearla como sirvienta. Así, el matrimonio de los esclavos podía representar, simultáneamente, una amenaza y una oportunidad para sus propietarios. Aunque ofrecía una vía para acceder a la libertad, los amos también supieron instrumentalizar estos lazos, promoviendo matrimonios como forma de reforzar vínculos de dependencia no solo con los esclavizados, sino también con su descendencia libre. En esta línea, había ocasiones en que los propietarios llegaban a imponer directamente el matrimonio a sus esclavos, tal como sucedió en Málaga a finales del siglo XV, o bien lo convertían en una condición para alcanzar la manumisión, práctica se documenta en Sevilla en el siglo XVI (Fernández Chaves, 2023, p. 9; González Arévalo, 2006, p. 182). De hecho, entre los grupos sociales que habitualmente componían el conjunto de dueños de esclavos, podía llegar a ser relativamente frecuente la preocupación por procurar «un casamiento adecuado a las esclavas que eran apreciadas y que habían sido liberadas» (Pérez García, 2023, p. 11).

5.2. *Las relaciones familiares*

Las *Siete Partidas* fomentaban, en la teoría, que a la hora de llevar a cabo la venta de los esclavos se evitara la separación de aquellos que conformasen familias legítimas. Así, en las cartas de compraventa otorgadas en la ciudad de Santa Cruz a finales del siglo XVII, se dejaba constancia de la venta conjunta de familias formadas por individuos sometidos a la esclavitud. Un ejemplo de ello fue la familia

33. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 693, f. 409r.
34. Sobre el concepto de «Asymmetrical Dependency» véase Winnebeck et. al. (2023).

conformada por Manuel, su esposa María y su hija Frasquita, vendidos juntos en 1694, para ser luego trasladados todos a La Habana. Esta misma práctica se observa también en la venta de Teresa y su hija, Adriana, vendidas juntas en 1699, y en la de Juan y Nicolasa, matrimonio vendido en 1696[35]. Este comportamiento también ocurría en otros puntos de la Península, caso de Granada durante el siglo XVI: allí, el 66 % de los niños moriscos esclavizados fueron vendidos junto con algún familiar, generalmente su madre o sus hermanos (Martín Casares, 2000, p. 355). A pesar de ello, hubo propietarios que, cuando pudieron, se saltaron esta restricción (Corona Pérez, 2023, p. 8; Periáñez Gómez, 2010, p. 318).

Si bien las disposiciones legales intentaban proteger la unidad familiar conformada por esclavos, esta protección solo se aplicaba cuando existía un legítimo matrimonio. De este modo, en el caso de José Antonio, vendido de manera individual en La Laguna en 1729, se especificó que era hijo legítimo de María Antonia, pero de «padre desconocido»[36], lo cual, en ausencia de vínculo matrimonial, justificaba ser vendida separada de su madre. Este tipo de situaciones sugiere cómo la aplicación jurídica de «familia» podía condicionar el destino de algunas personas sometidas a esclavitud, en ocasiones dando legitimidad a los propietarios para separar a su voluntad a individuos esclavizados que formaban un núcleo familiar considerado en la época informal o ilegítimo. En este punto, es importante recordar que la información anotada en las citadas cartas de compraventa tenía como principal objetivo identificar al esclavo como parte de una transacción de propiedad, por tanto, no era su función definir su estatus familiar impuesto a través de dinámicas forzadas bajo la esclavitud en el contexto jurídico de la monarquía hispánica. Un último ejemplo de este tipo lo encontramos en el caso de Cayetana, esclava «parda», quien, tras ser vendida, fue apartada de su hija Ana, cuando la criatura apenas tenía cuatro años[37].

5.3. *Espacio doméstico y dinámicas familiares con los amos*

Algunas personas esclavizadas llegaron a conformar dentro de la casa de sus amos sus propios núcleos familiares, integrados por esposas e hijos/as y diferenciados de otros grupos familiares formados también por individuos sometidos a la esclavitud con los que convivían. Un ejemplo de ello lo encontramos en 1731 en la casa de don Diego Durón, músico de la capilla catedral de Las Palmas, quien en ese año corresidía en su grupo doméstico con cuatro núcleos familiares formados por personas esclavizadas (como se citó en Lobo Cabrera et al., 1993, p. 141).

35. AHPSCT, Protocolos no especificados (citados en De Paz Sánchez y Naranjo Orovio, 2020).
36. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 538, ff. 95v-97r.
37. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 310, f. 365r.

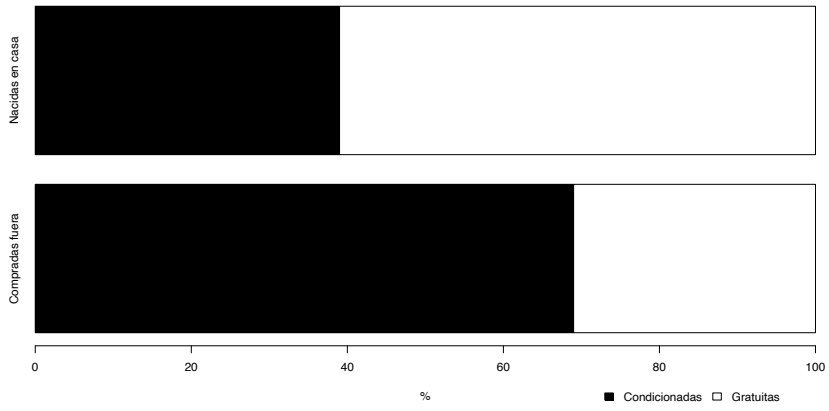
No obstante, en los padrones consultados es poco frecuente encontrar esclavos que, dentro de la casa de su propietario, compartiesen lazos consanguíneos con otras personas en su misma situación. Las pocas excepciones que aparecen corresponden, en su mayoría, a madres solteras con hijos o hijas, una situación que podría estar relacionada con las dinámicas de dependencia y vulnerabilidad que condicionaban la vida de las mujeres esclavizadas existentes en el espacio doméstico esclavista. Por ejemplo, en la ciudad de La Laguna, en la calle Juan de Vera, en 1835, vivía el presbítero racionero medio de la santa iglesia, de 51 años, quien convivía con su hermana de 46 años, cuya dedicación era «la de su casa», su cuñado labrador y sus tres sobrinas: dos niñas de 16 y 14 años y un niño de 6 años. Además, para el servicio de su casa disponía de María Matías, esclava de 26 años, y su hija Luisa, de 6 años, llegadas desde La Habana cinco años antes[38].

Este tipo de estructuras de carácter matrifocal, entendidas desde la perspectiva de la historia de la familia como lazos familiares compuestos por madres solteras con hijos/as, son frecuentes también en las manumisiones de nuestra muestra. Pero en ellas podemos apreciar también la fragilidad e inestabilidad de este tipo de vínculos y, en general, de aquellas tipologías familiares adoptadas por los esclavos que se salieran del modelo de familia tridentina y legitimada por el matrimonio. Y es que la liberación implicaba en muchos casos la ruptura de estos vínculos familiares. En este sentido, recordemos el caso ya mencionado de la esclava «parda» llamada Cayetana, quien había dado a luz a Ana, «mulata», en casa de su amo el coronel Francisco Nicolás de Valcárcel: Cayetana y Ana formaban un núcleo matrifocal hasta que la criatura cumplió cuatro años, momento en que el coronel vendió a su madre y decidió mantener en su hogar a la pequeña[39]. En definitiva, estas situaciones permiten observar la existencia de pequeños núcleos matrifocales conformados por personas bajo la esclavitud que coexistían en el espacio doméstico de las familias propietarias, y cuya estabilidad era extremadamente frágil. Así, estas dinámicas pudieron generar vínculos familiares e identidades complejas difíciles de rastrear en la documentación, en las cuales las relaciones de dependencia, violencia y pertenencia se entremezclaban de forma contradictoria.

La complejidad de las relaciones establecidas entre los esclavos y sus amos se aprecia también al analizar las distintas vías de acceso a la libertad. El estudio detallado de las cartas de alhorría de nuestra muestra revela diferencias en el trato otorgado a los esclavos según su trayectoria dentro del hogar esclavista. Así, quienes se criaron en la casa de sus propietarios tendieron a recibir la libertad sin condiciones, mientras que aquellas personas adquiridas mediante compra solían acceder a alhorrías condicionadas (Gráfico 6). Esta diferencia de trato puede verse incluso

38. AMLL, Padrón General de La Laguna, sig. PIII, f. 23r.
39. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 310, f. 361r.

Gráfico 6. Tipo de libertad concedida en función del origen de la persona liberada (La Laguna y Santa Cruz, 1640-1779)



Fuente: AHPSC, Protocolos Notariales de Tenerife (1640-1779). Elaboración propia.

en un mismo otorgamiento de libertad: en 1677, en La Laguna, Juan Fernández, inquisidor y propietario de seis esclavos, ordenó en su testamento la venta de todos ellos salvo de Antonia, hija de una de sus esclavas y la única nacida en su casa[40]. A diferencia del resto, a Antonia le concedió la libertad y dispuso que sus herederos le proporcionaran cada semana cuatro libras de pan y ropa limpia, además de facilitarle el ingreso en el convento que ella eligiera[41].

Esta diferencia de trato ha sido observada asimismo en distintos espacios peninsulares y atlánticos vinculados a las monarquías ibéricas (Armenteros Martínez, 2015, pp. 372-373; Fernández Chaves, 2023, p. 5; González Arévalo, 2006, p. 177; Periáñez Gómez, 2014, p. 143). Todo ello ha generado en la historiografía reciente un debate acerca de la consideración de los esclavos como parte del espacio doméstico y familiar de sus amos: ¿respondía esta percepción a vínculos afectivos reales o, por el contrario, constituía una estrategia discursiva de los propietarios destinada a reforzar su honor ante la comunidad y mantener relaciones informales de dependencia con sus esclavos incluso después de concederles la libertad?

40. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 1382, f. 145r. Antonia tenía una hermana, Juana, pero no había nacido en la casa.
41. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 1382, ff. 145r-165v.

En ese sentido, algunos especialistas, como Debra Blumenthal, sostienen que las personas esclavizadas podían integrarse como parte de la «familia extensa» de sus amos (Blumenthal, 2009, pp. 124), mientras que la escuela sevillana ha destacado la importancia que alcanzaron los vínculos afectivos en determinados contextos (Fernández Chaves, 2023, p. 5; Pérez García, 2023; Fernández Chaves, 2024). Por el contrario, otras investigadoras, como Rocío Periáñez o Aurelia Martín Casares, han señalado que este tipo de expresiones solía encubrir intereses alejados de una verdadera integración afectiva (Periáñez Gómez, 2014, p. 144).

En efecto, un número importante de los propietarios de nuestra muestra alegó razones de «afecto» para justificar la concesión de la libertad. En las 36 cartas de libertad analizadas, el 52,4 % de los amos declararon haber liberado a sus esclavos por el «afecto» que les profesaban por haberlos criado en su casa, algo que corresponde con lo observado en territorios como Extremadura o Sevilla en ese mismo período (Fernández Chaves, 2023; Periáñez Gómez, 2010, p. 388). Este fue el caso de Bárbara Ángela Carrasco y Ayala, vecina de La Laguna, quien en 1721 declaró que

> su madre le dio en dote y casamiento entre otros vienes una esclava llamada Josepha de color negro y esta en el tiempo de su esclavitud procreó a un hijo llamado Gavriel de color pardo el qual la otorgante lo a criado en su casa y por el mucho afecto y amor que le a tenido a deseado y desea el que use libremente de su libertad[42].

Sin embargo, por explícitas que pudiesen resultar estas expresiones, su análisis aislado no permite determinar si reflejaban sentimientos reales o si, por el contrario, respondían a fórmulas discursivas propias de este tipo de escrituras. Solo cuando atendemos al contexto social y personal de la manumisión y de quienes participaron en ella resulta medianamente posible aproximarse al significado de las emociones expresadas en los documentos. Desde este enfoque, observamos situaciones muy diversas, que muestran la alhorría como una práctica compleja, donde coexistían estrategias económicas y vínculos afectivos aparentemente sinceros. Por ejemplo, cuando se concedía la libertad incondicional a individuos «mulatos» o «negros» de unos 20 años, resulta difícil interpretar estas decisiones únicamente como estrategias económicas, dado el elevado valor que individuos de esa edad alcanzaban en los mercados esclavistas. En situaciones de este tipo, las expresiones de afecto recogidas en la documentación podrían reflejar vínculos personales relativamente sinceros.

Sin embargo, como decimos, aunque estos argumentos puedan sugerir una percepción afectiva, las fórmulas empleadas bien podrían funcionar como instrumentos de legitimación social y de mantenimiento de las jerarquías de subordinación establecidas, más que como expresiones reales de vínculo emocional o de

42. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 535, f. 564v.

integración familiar efectiva. En no pocas ocasiones, estas expresiones afectivas servían para reforzar los vínculos de dependencia entre las personas recién liberadas y el hogar al que habían servido: el 59 % de los esclavos puestos en libertad en nuestra muestra continuaron ligados de algún modo u otro a sus antiguos dueños. Un ejemplo significativo es el de Rosa María, esclava «parda» nacida y criada en casa de sus amos, a quien concedieron la libertad en 1716 en La Orotava por los «buenos servicios que ha hecho»[43] y por haberse criado en su hogar. Sin embargo, su manumisión incluía condiciones explícitas: debía permanecer obediente y fiel, asistir a una sobrina de su antigua ama, y podía ser revendida en caso de que esto no se cumpliera. A veces, ese control alcanzaba incluso aspectos íntimos como la formación de familias. De hecho, este fue el caso de Inés, liberada en La Laguna en 1708 bajo la condición de lo que en la mentalidad de la época se entendía por «llevar una vida honrada», cuya libertad fue posteriormente revocada al quedar tan solo embarazada[44], lo cual muestra que, en muchas ocasiones, la libertad otorgada no suponía una ruptura con las relaciones de subordinación, sino su reconfiguración bajo nuevas formas jurídicas y sociales de dependencia[45].

En efecto, las cartas de libertad nos muestran que, en ocasiones, las relaciones entre esclavos y amos trascendían los límites de la institución esclavista, hasta el punto de que los primeros podían llegar a integrarse en los núcleos familiares de los segundos. Con todo, esta dinámica no debe asociarse de manera automática a la ruptura de la relación de dominación o a la presencia de sentimientos de afecto: aunque estos pudieron existir y sin duda lo hicieron en no pocas ocasiones, la integración de los esclavos en la familia de sus amos habitualmente respondía a lógicas de subordinación y dependencia asimétrica e informal, cuyo objetivo era el de asegurar la fidelidad de las personas esclavizadas a los miembros del hogar y la familia más allá de las fronteras de la esclavitud e, incluso, una vez alcanzada la libertad. La documentación nos muestra, en síntesis, que la vida familiar de los esclavos en el hogar de sus amos era compleja, que trascendía los límites formales

43. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 3811, ff. 19v-20v.

44. AHPSCT, Protocolos Notariales, leg. 1271, f. 103r-104v, 124r-125v. Las revocaciones de libertad como la de Inés son acciones muy interesantes cuyas implicaciones sociales y culturales han sido analizadas de manera muy reveladora por la historiografía lusófona para el ámbito de la América portuguesa. Véase, por ejemplo, Pinheiro (2016).

45. La historiografía brasileña ha desarrollado extensamente esta cuestión ya desde Cunha (1985). Más recientemente, Douglas Lima ha propuesto hablar de la construcción de un nuevo lugar social tras la manumisión, un concepto con mucho potencial para hablar de un espacio en el que se entrelazan trayectorias de movilidad social con dinámicas de dependencia en no pocas ocasiones bidireccionales (Lima, 2020).

de la esclavitud, y que en ella podían convivir, de manera simultánea, vínculos afectivos con lógicas de subordinación formales e informales, atravesadas por distintas formas de violencia.

6. ESCLAVITUD Y ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA

6.1. *Los esclavos en la jefatura del hogar*

Si bien las leyes permitían a las personas esclavizadas acceder al matrimonio, en la práctica estos vínculos eran poco frecuentes debido a la falta de interés de los propietarios en favorecerlos, como antes comentamos. Incluso en los casos en que el matrimonio llegaba a formalizarse, resultaba excepcional que el cónyuge esclavizado abandonara el hogar del amo para establecerse en su propio grupo doméstico, tal como revelan los datos extraídos de los padrones de habitantes de las islas de La Gomera (1680) y Tenerife (1779).

No obstante, cuando uno de los miembros de la pareja era esclavo y ambos lograban establecerse fuera del hogar del amo, podían generarse formas de organización familiar que modificaban las estructuras tradicionales de convivencia. Al mismo tiempo, la condición servil del marido contribuía a reconfigurar los patrones clásicos de autoridad en el seno de la familia, abriendo espacios de liderazgo doméstico a las mujeres libres en la época (Dubert, 1985; González Zalacain, 2005; Hernández González, 1988).

Esta situación se documenta en el padrón de La Gomera de 1680, donde Polonia Francisca, de 38 años, estaba al frente de su hogar en el «barrio de cerca del cuerpo del Valle» de Gran Rey. Ella figuraba como «mujer legítima de un esclavo del capitán Juan Ventura», y convivía junto a su hija natural, María Polonia, de 14 años, y sus hijos legítimos, Juan, de 8 años, y Francisco, de 3. En las viviendas próximas residían varios capitanes y vecinos acomodados que disponían de numerosos esclavos, entre ellos el propio Juan Ventura, aunque no hemos podido identificar al esclavo referido por Polonia Francisca como su marido[46].

Una situación parecida se halla en el padrón de Tenerife de 1779, concretamente en Arico el Nuevo, al sureste de la isla, en una zona próxima al entorno de la Casa Fuerte de Adeje. Allí, Ana González, de 64 años, aparecía empadronada como jefa de casa y declaraba trabajar hilando «para la manutención». En su hogar residía su marido, Domingo, de 46 años, registrado como esclavo[47].

Sin embargo, ser reducido a la condición de esclavo en la sociedad isleña del Antiguo Régimen no impedía que algunos llegaran incluso a encabezar su propio

46. AHDSCLL, Padrón de La Gomera (1680) (Cebrián Latasa, 2005, p. 141).
47. ARSEAPT, Padrón de Tenerife (1779), sig. RS21, f. 120r.

hogar fuera de la casa de su amo. En los padrones analizados solo hemos encontrado dos esclavos registrados como cabezas de casa, conviviendo junto a sus respectivas esposas e hijos en La Gomera en 1680, lo cual resulta especialmente relevante si se considera que en ese año se registraron 136 esclavos distribuidos en 68 grupos domésticos, frente a un total aproximado de 1 145 hogares empadronados en esta isla. Uno de estos casos fue el de Gaspar de Orgaz, esclavo de 39 años, empadronado en La Villa de La Gomera como jefe del grupo doméstico que compartía con «su legítima mujer», Juana Bernal, de 44 años; «sus hijos legítimos», Sebastián, de 12 años, Jacob, de 4, y Juan, de 2 meses; además de su suegra, de 90 años[48]. A varias casas de distancia se encontraba el hogar de Francisco Gallardo, esclavo de 40 años, que asimismo vivía con «su legítima mujer», María Francisca, de 24 años, y sus hijos legítimos, Valentín, de 5 años, y Dominga, de 2[49].

6.2. *Los barracones de la Casa Fuerte de Adeje*

Un 71,7 % de la población esclavizada empadronada en el mundo rural de Tenerife en 1779 se concentraba en el suroeste y sureste de la isla, con especial intensidad en el entorno de la Casa Fuerte de Adeje. En conjunto, sumaba un total de 54 individuos, cifra que incluía el núcleo familiar del señor, y también a sus trabajadores dependientes, criados y esclavos. Esta realidad explica que en el padrón de 1779 en el seno de dicha villa se contabilizaron 23 esclavos, es decir un 38,3 % del total de esclavos empadronados en las zonas rurales en ese año.

La persistencia en esta zona del último ingenio azucarero de Tenerife contribuyó a mantener una elevada concentración de mano de obra esclava, empleada tanto en la producción azucarera como en otras actividades agrarias (García Pulido y Barrios Díaz, 2019; Granado Suárez y Calvo Cruz, 2009). A ello se sumaba el alquiler temporal de esclavos practicado por los señores de Adeje como estrategia para obtener liquidez en momentos de dificultad económica (Lobo Cabrera et al., 1993, p. 133).

En el citado padrón de 1779 se aprecia que, junto a la casa principal del señor de Adeje, se distribuían numerosos grupos domésticos vinculados al funcionamiento del señorío. Estos agregados domésticos correspondían en realidad a chozas o barracones: estructuras habitacionales caracterizadas por su extrema precariedad y hacinamiento. Se trataba de un esquema habitacional que reproducía las lógicas de explotación de la mano de obra esclava propias de las plantaciones de caña de azúcar.

La funcionalidad que adquirieron los barracones situados alrededor del ingenio azucarero de Adeje entre los siglos XVI y XIX dificulta considerarlos hogares en un

48. AHDSCLL, Padrón de La Gomera (1680) (Cebrián Latasa, 2005, p. 10).
49. AHDSCLL, Padrón de La Gomera (1680) (Cebrián Latasa, 2005, p. 15).

sentido estricto desde la perspectiva de la historia de la familia, puesto que respondían a necesidades de control y concentración de mano de obra esclavizada más que a las dinámicas de convivencia y reproducción social propias de los grupos domésticos del Antiguo Régimen. No obstante, el uso de las herramientas metodológicas que brinda esta disciplina permite analizar las dinámicas de corresidencia que llegaron a desarrollarse en estas precarias chozas, tan típicas en aquellos territorios, toda vez que se iban asentando en ellos los modelos de los grandes ingenios azucareros.

El estudio del padrón de 1779 muestra que, en su mayoría, estos espacios reunían en un mismo barracón o choza a varios núcleos matrimoniales y/o familiares. A su vez, dichos grupos domésticos podían estar compuestos por personas empadronadas como esclavas, libertas o asalariadas, caso de carpinteros, panaderos, jornaleros, hilanderas o criados, cuya composición revela formas de convivencia complejas, de tipo indefinido, organizadas en torno a varios núcleos matrimoniales o familiares.

Estas formas de convivencia también se tradujeron en uniones matrimoniales entre esclavos y libres. Así sucedió con Domingo Navarro, de 35 años, jornalero en huertas ajenas, casado con María del Socorro, esclava de 30 años. Esta pareja convivía con sus dos hijas, Rita y María Navarro, de cinco y tres años respectivamente, quienes, al igual que su madre, se encontraban en condición de esclavitud. Además, el hogar integraba otro núcleo matrimonial, formado por Diego Rodríguez, peón jornalero de 40 años, y Antonia, esclava de 45 años. Todos ellos afirmaron servirse de una mula para contribuir al sustento común del hogar[50].

Del mismo modo, estas estructuras podían favorecer, aunque de forma excepcional, la aparición de esclavas al frente de los viejos barracones ante la ausencia de varones. No en vano, la historiografía ha señalado que las jefaturas femeninas en las sociedades rurales del Antiguo Régimen tendieron a verse reforzadas por la emigración masculina (Dubert, 1992, p. 115). Este fue el caso de María Peña, esclava, de 46 años, que «sirve a su amo» y que figuraba a la cabeza de un hogar sin estructura definida compuesto por trece personas. La jefatura del hogar había sido cedida por José Cruz, su marido, de 50 años, tras emprender su viaje a Indias. En su choza convivían esclavos, libertos y libres, organizados a su vez en pequeños núcleos familiares: junto a la jefa de casa se encontraba, Blasiña Peña, esclava de 36 años, casada con Nicolás Rodríguez, de 40 años, «pardo y ausente en Indias». A su lado, permanecía su hijo, Miguel Rodríguez, liberto de 18 años, quien «esta acomodado». También residía allí Josefa Peña, esclava de 41 años, casada con José Morales, de 43 años, igualmente emigrado a América, pero permanecía junto a ella su hija Lorensa Morales, esclava de 17 años. Por último, este barracón incluía un matrimonio de esclavos: Juan Peña, de 35 años, y «su mujer» Magdalena Rodríguez,

50. ARSEAPT, Padrón de Tenerife (1779), sig. RS21, f. 65v.

de 30, «trabaja para su amo»; quienes tenían tres hijos esclavos: José, de 5 años, Jacinta, de 3 y Domingo, de 1[51].

En ocasiones, estos hogares adoptaban además la forma de tipo CLS, como ocurría en el barracón que estaba dirigido por Domingo Rodríguez, esclavo de 20 años, quien vivía con Francisco del Rosario, esclavo de 27 años, y con María García, mujer libre de 25 años, soltera, dedicada a la costura y al cuidado de sus hermanos, todos ellos, también esclavos: Antonio García, de 23 años, Domingo García, de 19, Antonia García, de 16, y Mateo García, de 11[52].

A partir de estos y otros ejemplos se constata que en los barracones de Adeje llegaron a desarrollarse formas de convivencia complejas, tales como los hogares de tipo CLS o sin estructura definida. En muchos casos, estas chozas reunían a varios núcleos matrimoniales vinculados a la esclavitud, aunque no todos sus miembros compartían necesariamente el mismo estatus jurídico, como ocurría a las esclavas casadas con hombres libres o ausentes. Asimismo, la ausencia de los hombres favorecía la concentración de hogares feminizados integrados por grupos de esclavos y libertos. Estas formas de organización doméstica guardaban cierta proximidad con las desarrolladas en las regiones rurales del norte y, sobre todo, en los principales espacios urbanos de la isla, donde las solteras, casadas y viudas tendían igualmente a organizar su convivencia en hogares de tipo CLS o indefinidos (Barbero, 2024). Todo ello sugiere que, en determinados contextos, algunos esclavos desarrollaron formas de corresidencia comparables a las observadas entre parte de la población libre de la isla, favorecidas tanto por las necesidades de supervivencia cotidiana como por las propias dinámicas del espacio doméstico.

Con todo, cabe señalar que estos procesos de intercambio y adaptación cultural no fueron unidireccionales. Así lo demuestra, por ejemplo, la documentación inquisitorial del período en Canarias, donde varias mujeres sometidas a la esclavitud fueron juzgadas por brujería y prácticas mágico-religiosas. De su análisis se revela cómo algunas de ellas fusionaron tradiciones africanas con las prácticas religiosas y cotidianas desempeñadas por las mujeres canarias (Valeria Geremia, 2023). Del mismo modo, en la Península Ibérica del siglo XVI era relativamente habitual la imitación de «bailes de negros» por parte de personas blancas (Berruezo-Sánchez, 2024), lo cual refleja no solo la agencia cultural de la diáspora africana, sino también su capacidad para influir en las prácticas de las sociedades receptoras (Berruezo-Sánchez, 2024; Jones, 2019).

51. ARSEAPT, Padrón de Tenerife (1779), sig. RS21, f. 65v.
52. ARSEAPT, Padrón de Tenerife (1779), sig. RS21, f. 65v.

6.3. *Los hogares de los libertos*

En los padrones de 1779 solo aparecen 6 hogares donde vivían 8 libertos, entre los cuales solo había una mujer, repartidos a partes iguales entre solteros y casados, tratándose de personas relativamente jóvenes. Estos hogares se situaban en su mayoría en los citados barracones de La Casa Fuerte de Adeje y en zonas más o menos próximas a la misma. Si dejamos al margen las chozas del señorío, apreciamos que los grupos domésticos ocupados por libertos se caracterizaban por la sencillez en su estructura y dimensión. Un ejemplo lo encontramos en Arguaio, Santiago del Teide, donde fue empadronado en una casa pajiza Amaro León, de 56 años, identificado como «liberto», quien se hallaba ausente en Santa Cruz trabajando como cocinero en un barco de Indias. «Su esposa», María de la Encarnación, también de 56 años, «pasa sumamente pobre», pese a que «se ejercita en hilar». Junto a ellos vivía su hijo Amaro, de 22 años, pastor de cabras, quien «está para casarse» y «guarda también ovejas todo a medias»[53].

La escasa mención de estos casos en los padrones de habitantes nos limita a realizar mayores consideraciones sobre la vida doméstica de los libertos, por lo que se recomienda en un futuro atender a esta cuestión valorando el estudio de otros períodos, tipologías documentales y el recurso de la reconstrucción de parroquias.

No obstante, merece la pena plantear un ejemplo revelador de la vida familiar de un esclavo que había conseguido vivir en libertad en la isla a principios del siglo XIX. En la ciudad de La Laguna, en 1835, en la calle de Álamos, según el padrón de ese año, se registró un grupo doméstico encabezado por un «negro libre» procedente de Santo Domingo. Llevaba viviendo en la antigua capital desde hacía 25 años, y pese a la edad que tenía por entonces, 63 años, continuaba trabajando: servía en una casa y además ejercía como aguatero de la ciudad para completar sus ingresos. Este liberto encabezaba un hogar de estructura indefinida, en el cual convivía con una expósita superviviente, nacida en Santa Cruz, pero residente desde hacía 17 años en La Laguna, quien afirmaba ahora tener 50 años. Se ganaba la vida como aguatera de la ciudad, y estaba casada con un hombre ausente, aunque ella tenía consigo a sus dos hijos: uno legítimo, de 25 años, y otro natural, de 17, ambos muchachos se ocupaban haciendo mandados, con lo que colaboraban a mantener el techo que les unía[54].

Este caso ilustra cómo los sectores más «marginados»[55] de la sociedad —antiguos esclavos, expósitos o incluso trabajadores empobrecidos— pusieron en marcha estrategias de solidaridad mutua que les permitieron sostener cooperativamente sus

53. ARSEAPT, Padrón de Tenerife (1779), sig. RS23, f. 65v.
54. AMLL, Padrón General de La Laguna (1835), sig. PIII, f. 8v.
55. La noción de marginalidad aplicada a los individuos esclavizados ha sido discutida y cuestionada en Molejón (2026).

economías domésticas. A pesar de vivir en una sociedad que tendía a marginarlos social y moralmente, y de quedar relegados a los trabajos más duros y peor remunerados del mercado laboral, estos sectores consiguieron articular redes de apoyo y convivencia que contribuían, al menos parcialmente, a mitigar su situación de vulnerabilidad.

En definitiva, la coexistencia en un mismo grupo doméstico de esclavos, horros y libres, sin necesidad de lazos consanguíneos formales, refleja la complejidad de las relaciones familiares que se establecían en el seno de la sociedad canaria durante el Antiguo Régimen. Estas dinámicas evidencian que la vida familiar no se limitaba exclusivamente a la unión legítima entre esposos e hijos, sino que podía incorporar otras formas de convivencia y dependencia (Barbero, 2024). Asimismo, permiten observar los vínculos de solidaridad y apoyo establecidos entre personas que habían experimentado la esclavitud, visibles en la convivencia cotidiana, como refleja la formación de grupos de corresidencia identificados en los padrones y en las donaciones testamentarias documentadas por otros autores (Armenteros Martínez, 2015; Vinyoles Vidal, 2000).

7. CONCLUSIÓN

El análisis cruzado de padrones de habitantes, cartas de libertad y compraventa ha permitido aproximarnos a las dinámicas familiares, domésticas y sociales desarrolladas por la población esclava en las islas occidentales de Canarias, principalmente en el caso de Tenerife, entre los siglos XVII y XIX. Este trabajo demuestra las posibilidades que ofrece la combinación de fuentes padronales y notariales para el estudio de la esclavitud atlántica. Asimismo, la aplicación de herramientas procedentes de la historia de la familia y de la demografía histórica ha permitido aproximarnos al perfil sociodemográfico de los esclavos y de sus respectivos amos, así como conocer sus formas de convivencia, sus relaciones domésticas y sus estrategias familiares.

La documentación analizada muestra que buena parte de los esclavos registrados en ella eran jóvenes solteros, una realidad vinculada tanto a las características del mercado esclavista como a las dificultades existentes para consolidar matrimonios y núcleos familiares estables. Aunque las autoridades eclesiásticas fomentaron el acceso al matrimonio, muchos propietarios mostraron escaso interés en favorecer este tipo de vínculos, probablemente porque podían generar redes de solidaridad y/o dependencia distintas a las articuladas bajo el control directo del amo. No obstante, la documentación revela también que, en determinados contextos, algunos propietarios utilizaron el matrimonio y las relaciones familiares como mecanismos destinados a reforzar vínculos de subordinación informal que trascendían los límites estrictamente jurídicos de la esclavitud.

Asimismo, el análisis de la vida doméstica de las personas esclavizadas permite observar la complejidad de las relaciones familiares desarrolladas en el interior de los hogares esclavistas. La presencia de esclavas con hijos, que conformaban pequeños núcleos matrifocales, y las dinámicas de convivencia establecidas entre esclavos y libres evidencian que las relaciones familiares bajo la esclavitud no pueden reducirse únicamente a los modelos tradicionales de «familia legítima». En este sentido, los resultados obtenidos permiten matizar aquellas interpretaciones historiográficas que entendían a las personas sometidas a la esclavitud como una simple prolongación subordinada del hogar de sus propietarios o que niegan la existencia de dinámicas familiares entre la población esclavizada. La documentación consultada evidencia, por el contrario, que los esclavos desarrollaron vínculos familiares, estrategias de convivencia y redes de apoyo profundamente condicionadas por la lógica esclavista, aunque no completamente anuladas por ella.

Las cartas de libertad muestran, además, cómo las relaciones entre amos y esclavos podían combinar dependencia, violencia, pertenencia y afecto en el marco de vínculos profundamente ambivalentes. Las fuentes señalan igualmente diferencias de trato entre los esclavos nacidos y criados en el hogar de sus propietarios y aquellos adquiridos mediante compra, lo que pone de manifiesto la importancia que tenía el espacio doméstico y las relaciones que se articulaban bajo distintas formas de subordinación y dependencia.

El estudio del hogar constituye, además, una vía privilegiada para comprender la naturaleza de la esclavitud en las islas. Los padrones evidencian que los propietarios de los esclavos pertenecían, en términos generales, a los sectores más acomodados de la sociedad isleña, tanto en el ámbito urbano como en el rural. La mayoría de estos hogares estaban encabezados por varones adultos vinculados a las élites locales, al clero, al comercio o a la oficialidad militar, aunque se documenta entre los propietarios de esclavos también la presencia de campesinos medios, viudas y mujeres relacionadas con la industria textil doméstica. Todo lo cual estaba estrechamente ligado a las particularidades socioeconómicas de cada enclave, generando diferencias entre los espacios rurales, urbanos y portuarios, así como al contexto tardío en que se confeccionan los padrones estudiados. Al mismo tiempo, el análisis de los hogares conformados por esclavos evidencia la presencia de formas de convivencia muy complejas, particularmente en los barracones de la Casa Fuerte de Adeje, donde esclavos, libertos y trabajadores libres desarrollaron estrategias de corresidencia y sostenimiento colectivo adaptadas a las condiciones impuestas por el sistema esclavista en este ingenio azucarero. Todo ello evidencia también la capacidad de agencia de los esclavos, especialmente de las mujeres, en la articulación de redes domésticas y de solidaridad, forjadas entre ellas, como también en la adaptación e incorporación de prácticas culturales dentro de la sociedad isleña.

En términos generales, la escalvitud en Canarias muestra dinámicas comparables a las constatadas en otros espacios atlánticos e ibéricos, especialmente en relación con las dificultades de acceso al matrimonio, la importancia de las relaciones de dependencia informal, las estrategias de corresidencia y el papel desempeñado por las esclavas en la configuración de la vida doméstica. Todo ello evidencia la utilidad de la aplicación de la metodología desarrollada por la historia de la familia para aproximarnos a las dinámicas domésticas de las sociedades del Antiguo Régimen, al tiempo que permite observar formas de convivencia, dependencia y parentesco que trascendían los modelos familiares legítimos y jurídicamente reconocidos en la época.

En definitiva, esta investigación sobre la historia de la familia esclava en Canarias revela que las relaciones domésticas desarrolladas bajo la esclavitud fueron mucho más complejas y dinámicas de lo que tradicionalmente ha sostenido la historiografía. Los hogares esclavistas no constituyeron únicamente espacios de explotación económica, sino también ámbitos donde se articularon relaciones familiares, vínculos afectivos, dependencias informales y estrategias de supervivencia que desdibujaban constantemente las fronteras entre dominación, convivencia y pertenencia, así como entre esclavitud y libertad.

Por otra parte, las particularidades del contexto canario respecto a la realidad de la esclavitud hacen que las comparaciones que se puedan hacer en el futuro con otros espacios del mundo ibérico sean sumamente prometedoras. En efecto, durante el periodo estudiado, Canarias era una escala fundamental en la trata atlántica, y era también un espacio en que convivía la esclavitud urbana típica de la Península o del espacio novohispano, con importantes resquicios de la esclavitud de plantación característica del Caribe. Así, Canarias fue un espacio en el que convivieron múltiples maneras de entender y practicar la esclavitud, lo que dio lugar a una realidad esclavista muy compleja que merece la pena poner en diálogo con otros contextos geográficos del mundo ibérico.

En este sentido, es necesario seguir profundizando en el vaciado sistemático de documentación notarial, libros sacramentales y listas de habitantes, puesto que se presenta como una via destacada a fin de contribuir al analisis de las trayectorias vitales y familiares de las personas sometidas a la esclavitud en las islas, ampliando así el conocimiento historiográfico sobre las dinámicas sociales y domésticas desarrolladas por la población esclava a lo largo de la historia de Canarias.

Contribución de autoría

Pablo Molejón y Paula Barbero ha realizado equitativamente la concepción, investigación, redacción, revisión crítica y aprobación final del manuscrito.

Agradecimientos y financiación

Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el *Seminario Internacional. Esclavitud, género y familia, siglos XVI-XIX*, celebrado en el Instituto de Estudios Canarios, en septiembre de 2025, por lo que el presente texto incluye las aportaciones que amablemente nos ofrecieron los investigadores asistentes. Asimismo, queremos agradecer la ayuda prestada a lo largo del proceso de elaboración de esta investigación a Carlos Rodríguez Morales, Daniel García Pulido, Eduardo Corona Pérez, Ivan Armenteros Martínez y Francisco B. Cabrera Alonso. Del mismo modo, extendemos nuestro agradecimiento al personal del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife y del Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.

Igualmente, mostramos nuestro agradecimiento al equipo editorial y a los/as evaluadores/as anónimos/as de la revista *Studia Historica. Historia Moderna* las valiosas aportaciones y sugerencias de mejora que nos han permitido enriquecer sustancialmente este trabajo.

En especial, deseamos expresar nuestro reconocimiento más sincero al profesor Isidro Dubert por la ayuda brindada durante la elaboración de este trabajo, y sobre todo, por transmitirnos su metodología y ética de trabajo.

Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del Proyecto de Investigación PID2022-138689NB-100 «La esclavitud en el Mediterráneo Bajomedieval: de los mercados de aprovisionamiento a la ¿integración social?», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España (IPs: Dra. Roser Salicrú i Lluch, Dr. Iván Armenteros Martínez).

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Los autores declaran que no se ha utilizado inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo.

8. BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Santos, J. L. (2018). Las Islas Canarias en el tráfico atlántico de esclavos a finales del siglo XVII, a partir de la documentación notarial insular. *Humania del Sur*, *13*(25), 123-138. https://doi.org/10.53766/HumSur/2018.25.08

Anaya Hernández, L. A. (2008). Voces del cautiverio. Las cartas de los esclavos canarios desde Berbería (siglos XVI-XVII). *Coloquios de Historia Canario-Americana*, 1200-1212.

Ares Queija, B., y Stella, A. (Eds.). (2000). *Negros, mulatos, zambaigos. Derroteros africanos en los mundos ibéricos*. Escuela de Estudios Hispanoamericanos.

Armenteros Martínez, I. (2012). *Cataluña en la era de las navegaciones. La participación catalana en la primera economía atlántica (c. 1470-1540)*. Editorial Milenio.

Armenteros Martínez, I. (2015). *L'Esclavitud a la Barcelona del Renaixement (1479-1516). Un port mediterrani sota la influència del primer tràfic negrer*. Fundació Noguera.

Barbero, P. (2022). Las nodrizas de los niños expósitos en Tenerife (siglos XVIII-XIX). En P. Barbero, A. Barrena Gómez, y R. Lizardo (Eds.), *Hospitales durante el Antiguo Régimen. Instituciones benéfico-asistenciales, siglos XV-XIX* (pp. 247-263). Palermo University Press.

Barbero, P. (2023). Las amas de cría en las familias nobiliarias de Tenerife a finales del Antiguo Régimen. En S. Intorre y V. Patti (Eds.), *Majestad y espacios del poder. La representación de las élites en la Edad Moderna, ss. XVI-XVIII* (pp. 253-271). Editorial Confluencias.

Barbero, P. (2024a). *Historia de la familia en Tenerife a finales del Antiguo Régimen* [Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela]. Repositorio Institucional USC.

Barbero, P. (2024b). Trabajo y educación infantil en el mundo rural de Tenerife al final del siglo XVIII. *Obradoiro de Historia Moderna*, (33). https://doi.org/10.15304/ohm.34.10016

Barrios Díaz, S. (2019). Estudio comparative entre la obtención de la libertad en las Islas Canarias y el Chile republicano (siglos XVIII-XIX). En N. Cinelli (Ed.), *Apuntes y reflexiones sobre las artes, las historias y las metodologías* (pp. 93-110). RIL Editores.

Berruezo-Sánchez, D. (2024). *Black Voices in Early Modern Spanish Literature, 1500-1750*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/9780198914259.001.0001

Blumenthal, D. (2009). *Enemies and Familiars: Slavery and Mastery in Fifteenth-Century Valencia*. Cornell University Press.

Bolaños González, J. I. (2004). *Análisis de la evolución de la producción científica de la Geografía Humana de Canarias (I)*. Monografías. https://www.monografias.com/trabajos16/geografia-humana-canarias/geografia-humana-canarias

Calderón Ordóñez, A., Pérez Álvarez, A., Fregel, R., Gómez Mendoza, A., y Arnay de la Rosa, M. (2016). Análisis genético y documental de las poblaciones de origen africano en la sociedad canaria del siglo XVIII y su relación con el tráfico de esclavos. *XXI Coloquio de Historia Canario-Americana*.

Cebrián Latasa, J. A. (2005). *Padrones de las islas de La Gomera y El Hierro (1680)*. Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna.

Corona Pérez, E. (2020). Aproximación a la mortalidad infantil de los esclavos en Sevilla (1620-1650). *Revista de Demografía Histórica*, *38*(2), 83-105.

Corona Pérez, E. (2021). *La población esclava en la ciudad de Sevilla (1500-1650)* [Tesis doctoral, Universidad de Sevilla]. Idus: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla.

Corona Pérez, E. (2022). *Trata atlántica y esclavitud en Sevilla (ca. 1500-1650)*. Universidad de Sevilla.

Corona Pérez, E. (2023a). Familias amestizadas en contextos esclavistas. Un estudio comparado entre la Península Ibérica en los siglos XVI-XVII y las Minas Gerais del siglo XVIII. *Revista de História da Sociedade e da Cultura*, *23*(1), 123-148. https://doi.org/10.14195/1645-2259_23-1_5

Corona Pérez, E. (2023b). Familias esclavas en Sevilla, siglos XVI-XVII. Estudio de caso y perspectivas comparadas. *Hispania: Revista Española de Historia*, *83*(275). https://doi.org/10.3989/hispania.2023.063

Corona Pérez, E. (2024). De Sevilla a Vila Rica de Ouro Preto: maternidades esclavas en perspectiva comparada, siglos XVI-XVIII. En R. M. Pérez García, E. Corona Pérez, E. França Paiva, y M. F. Fernández Chaves (Eds.), *Esclavas, horras y libres. Historias de mujeres en los mundos ibéricos, siglos XVI-XIX* (pp. 95-117). Universidad de Sevilla.

Cunha, M. C. da. (1985). Sobre os silêncios da lei: lei costumeira e positiva nas alforrias de escravos no Brasil do século XIX. *Dados*, *23*(1).

De Paz Sánchez, M. (2017). Islas felices. Aspectos de la esclavitud macaronésica durante el siglo XVIII. En C. Naranjo Orovio (Ed.), *Esclavitud y diferencia racial en el Caribe hispano* (pp. 11-38). Doce Calles.

De Paz-Sánchez, M., y Naranjo Orovio, C. (2020). Bajo el sollado: traslado de esclavos de Tenerife a Indias. En R. M. Pérez García, M. F. Fernández Chaves, y E. França Paiva (Eds.), *Tratas, esclavitudes y mestizajes. Una historia conectada, siglos XV-XVIII* (pp. 67-88). Universidad de Sevilla.

De Paz Sánchez, M., García Pulido, D., y Barrios Díaz, S. (2024). *Amaro Pargo. Documentos de una vida: Vol. 17. Esclavos y Libertos*. Ediciones Idea.

Díaz Martínez, Y. (2017). Esclavitud, fuerza de trabajo forzado y auge constructivo en La Habana durante la primera mitad del siglo XIX. En J. A. Piqueras (Ed.), *Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la Cuba colonial* (pp. 473-468). Universitat Jaume I.

Díaz Padilla, G., y Rodríguez Yanes, J. M. (1990). *El señorío en las Canarias occidentales. La Gomera y El Hierro hasta 1700*. Cabildos de La Gomera y El Hierro.

Domínguez Cabrera, D. (2023). *Trabajo portuario y segunda esclavitud en Cuba (1763-1886)*. Comares.

Dubert, I. (1985). *Estructura y comportamientos familiares en Santiago en el siglo XVIII* [Tesina de Licenciatura, Universidade de Santiago de Compostela].

Dubert, I. (1992). *Historia de la familia en Galicia durante la época moderna, 1550-1830: estructura, modelos hereditarios y conflictividad*. Edicións do Castro.

Fajardo Spínola, F. T. (1995). El maltrato de los esclavos en documentos de la Inquisición canaria. En *Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu* (Vol. 1, pp. 565-580). Cabildo Insular de Gran Canaria.

Fajardo Spínola, F. T. (2011). La biblioteca de John Pendarves, mercader de esclavos. *Anuario de Estudios Atlánticos*, (57), 445-496.

Fajardo Spínola, F. T. (2012). El castigo de los esclavos en la documentación inquisitorial. En A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (Eds.), *Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna: Vol. 2. Conflictividad y violencia en la Edad Moderna* (pp. 86-96). Universidad de Granada.

Fernández Chaves, M. F. (2023). Amas, esclavas y libertad en Sevilla, 1512-1600. *Obradoiro de Historia Moderna*, (32). https://doi.org/10.15304/ohm.32.8741

Fernández Chaves, M. F., y Pérez García, R. M. (Eds.). (2020). *Tratas, esclavitudes y mestizajes: una historia conectada, siglos XVI-XVIII*. Universidad de Sevilla.

Fernández Chaves, M. F., y Pérez García, R. M. (2021). La esclavitud en la Península Ibérica durante la Edad Moderna y los historiadores. En M. F. Fernández Chaves y R. M. Pérez García (Eds.), *La esclavitud en el sur de la Península Ibérica, siglos XV al XVII* (pp. 11-19). Los Libros de la Catarata.

Fernández Martín, J. (2024). *Esclavos y libertos ante los tribunales de justicia en el sur de la Corona de Castilla, siglos XVI-XVII*. Editorial Universidad de Sevilla.

Florentino, M., y Goés, J. R. (2005). Morfologias da infância escrava: Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX. En M. Florentino (Ed.), *Tráfico, cativeiro e liberdade. Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX* (pp. 207-228). Civilização Brasileira.

Fogel, R. W., y Engerman, S. L. (1974). *Time on the Cross. The Economics of American Negro Slavery*. Little, Brown and Company.

Freire, J. (2014). *Escravidão e família escrava na Zona da Mata Mineira oitocentista*. Alameda.

García Pulido, D., y Fariña Pestano, F. (2009). *Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Padrón Municipal 1818*. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

García Pulido, D., Ginovés Obón, C., y de Paz Sánchez, M. (2019). *Amaro Pargo: Documentos de una vida: Vol. 4. El hijo cubano*. Ediciones Idea.

Goés, J. R., y Florentino, M. (1999). Crianças escravas, crianças dos escravos. En M. Del Priore (Ed.), *História das Crianças no Brasil* (pp. 177-191). Contexto.

González Arévalo, R. (2006). *La esclavitud en Málaga a fines de la Edad Media*. Universidad de Jaén.

González Jaúregui, Y. M. (2019). *Los esclavos de Lima y su defense del matrimonio en el siglo XVIII*. Universidad Nacional Federico Villarreal.

González Zalacain, R. (2005). *Familia y sociedad en Tenerife a raíz de la conquista*. Instituto de Estudios Canarios.

Granado Suárez, S., y Calvo Cruz, M. (2009). Análisis histórico-contable de las formas de trabajo en el marquesado de Adeje (Canarias, siglo XVIII). En *VI Encuentro de trabajo sobre Historia de la Contabilidad. Ponencias y comunicaciones*. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

Guedes, R. (2008). *Egressos do cativeiro. Trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798-1850)*. Mauad X.

Guedes, R. (2024). Senhoras forras (Rio de Janeiro, século XVIII). En R. M. Pérez García, E. Corona Pérez, E. França Paiva, y M. F. Fernández Chaves (Eds.), *Esclavas, horras y libres. Historias de mujeres en los mundos ibéricos, siglos XVI-XIX* (pp. 319-348). Universidad de Sevilla.

Gutman, H. (1976). *The Black Family in Slavery and Freedom, 1750-1925*. Pantheon Books.

Henry, L. (1983). *Manual de demografía histórica. Técnicas de análisis*. Crítica.

Hernández González, M. V. (1988). La familia canaria en el Antiguo Régimen. *Tebeto*, (1), 181-198.

Hernández González, M. V. (2002). La otra emigración canaria a América: mulatos y negros libres y esclavos (1670-1820). *Revista de Historia Canaria*, (184), 181-198.

Jimeno Aranguren, R. (2021). La esclavitud infantil y su abolición en España (siglos XVI-XX): una aproximación histórico-jurídica. *Ivs Fugit*, (24), 79-108.

Jones, N. R. (2019). *Staging Habla de Negros. Radical Performances of the African Diaspora in Early Modern Spain*. Penn State University Press. https://doi.org/10.1515/9780271083940

Kuznesof, E. A. (2007). Slavery and Childhood in Brazil (1550-1888). En O. E. González y B. Premo (Eds.), *Raising an Empire: Children in Early Modern Iberia and Colonial Latin America* (pp. 187-218). University of New Mexico Press.

Laslett, P. (1974). *Household and family in past time*. Cambridge University Press.

Lima, D. (2020). *Libertos, patronos de tabeliães. A escrita da escravidão e da liberdade em alforrias notariais*. Caravana.

Lobo Cabrera, M. (1982). *La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI (negros, moros y moriscos)*. Cabildos Insular de Gran Canaria.

Lobo Cabrera, M. (1983). *Los libertos en la sociedad canaria del siglo XVI*. Instituto de Estudios Canarios.

Lobo Cabrera, M. (1993a). La mujer esclava en los comienzos de la Edad Moderna. *Baetica*, (15), 295-315.

Lobo Cabrera, M., y Díaz Hernández, R. (1984). La población esclava de Las Palmas durante el siglo XVII. *Anuario de Estudios Atlánticos*, (30), 157-316.

Lobo Cabrera, M., López Caneda, R., y Torres Santana, E. (1993b). *La «otra» población: expósitos, ilegítimos, esclavos (Las Palmas de Gran Canaria, siglo XVIII)*. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Marcos Martín, A. (1980). La esclavitud en la ciudad de La Laguna durante la segunda mitad del siglo XVI a través de los registros parroquiales. *Investigaciones Históricas*, (2), 5-35.

Marrero Rodríguez, M. (1966). *La esclavitud en Tenerife a raíz de la conquista*. Instituto de Estudios Canarios.

Martín Casares, A. (2000). La esclavitud en Granada en el siglo XVI: género, raza y religión. *Arenal*, *7*(1). https://doi.org/10.30827/arenal.v7i1.16777

Martín Casares, A. (2016). Memorias de un tratante de Liverpool sobre el comercio esclavista entre Canarias y el África occidental subsahariana a finales del siglo XVIII. *XXI Coloquio de Historia Canario-Americana*.

Masferrer León, C. V. (2012). Hijos de esclavos. Niños libres y esclavos en la capital novohispana durante la primera mitad del siglo XVII. *Ulúa*, (19), 81-99.

Molejón, P. (2026). ¿Estaven marginats els esclaus a l'Espanya de l'Edat Moderna? *Ràfec. Revista d'Història Social i Cultural dels Països Catalans*, 1(1), 119-131.

Molejón, P., y Barbero, P. (2025, marzo). *Bases de datos de padrones de habitantes y el cruzamiento con otras fuentes complementarias para el estudio de la esclavitud en Canarias* [Ponencia]. Seminario Internacional Esclavitud, género y familia, siglos XVI-XIX. https://www.youtube.com/watch?v=w_9u939qDJAyt=6224s

Morgado García, A. (2010). Los libertos en el Cádiz de la Edad Moderna. *Studia Historica: Historia Moderna*, (32), 399-436.

Morgan, K. (2007). *Slavery and the British Empire. From Africa to America*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199238996.001.0001

Muñoz Buendía, A. (2000). La infancia robada. Niños esclavos, criados y aprendices en la Almería del Antiguo Régimen. En M. D. Martínez Sampedro (Ed.), *Los marginados en el mundo medieval y moderno* (pp. 65-78). Instituto de Estudios Almerienses.

Paiva, E. F. (2001). *Escravidão e universo cultural na Colônia: Minas Gerais, 1716-1789*. Universidade Federal de Minas Gerais.

Paiva, E. F. (2009). *Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos*. Annablume.

Paiva, E. F. (2018). O mundo escravista ibero-americano e seus produtos: dinâmicas de mestiçagens e revisão historiográfica. En R. M. Pérez García, M. F. Fernández Chaves, y J. L. Belmonte Postigo (Eds.), *Los negocios de la esclavitud. Tratantes y mercaderes de esclavos en el Atlántico Ibérico* (pp. 37-45). Universidad de Sevilla.

Paiva, E. F. (2020). Esclavitud, dinámicas de mestizajes y familias en Minas Gerais, Brasil. En R. M. Pérez García, M. F. Fernández Chaves, y E. França Paiva (Eds.), *Tratas, esclavitudes y mestizajes. Una historia conectada, siglos XV-XVIII* (pp. 401-416). Universidad de Sevilla.

Paiva, E. F. (2022). *«Por meu trabalho, serviço e indústria». Histórias de africanos, crioulos e mestiçados nas Minas Gerais, 1716-1789*. Caravana.

Paiva, E. F., Angelo, F. V. M., y Lima, D. (Eds.). (2024). *Famílias, escravidão e cotidiano (séculos XVIII-XX)*. Caravana.

Pérez García, R. M. (2023). Matrimonio, vida familiar y trabajo de esclavas y libertas en la Sevilla de los siglos XVI y XVII. *Obradoiro de Historia Moderna*, (32). https://doi.org/10.15304/ohm.32.8737

Pérez García, R. M., y Fernández Chaves, M. F. (2015). La cuantificación de la población esclava en la Andalucía moderna. Una revisión metodológica. *Varia Historia*, *31*(57), 712-740. https://doi.org/10.1590/0104-87752015000300004

Pérez García, R. M., y Fernández Chaves, M. F. (Eds.). (2021). *La esclavitud en el sur de la Península Ibérica, siglos XV al XVII: demografía e historia social*. Los Libros de la Catarata. https://doi.org/10.31009/illesimperis.2022.i24.16

Periáñez Gómez, R. (2010). *Negros, mulatos y blancos: los esclavos en Extremadura durante la Edad Moderna*. Diputación de Badajoz. https://doi.org/10.4000/books.cvz.21704

Periáñez Gómez, R. (2014). El acceso a la libertad de las esclavas: ¿liberación o distinta forma de sometimiento? En A. Martín Casares y R. Periáñez Gómez (Eds.), *Mujeres esclavas y abolicionistas en la España de los siglos XVI al XIX* (pp. 133-154). Vervuert. https://doi.org/10.31819/9783954872947-007

Pinheiro, F. (2016). Libertos ingratos: práticas de redução ao cativeiro na América portuguesa (século XVIII). En Â. Barreto Xavier y C. Nogueira da Silva (Eds.), *O governo dos outros. Poder e diferença no Império Português* (pp. 365-386). Imprensa de Ciências Sociais.

Puig Samper, M. A. (2020). La salud en el barracón. En C. Naranjo Orovio y M. A. Puig Samper (Eds.), *La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe* (pp. 121-123). Doce Calles.

Reyes, J. (2004). *El comercio de esclavos en Canarias*. Cabildo Insular de Tenerife.

Rivero Zerpa, C. M. (2023). Esclavitud y delincuencia en las Islas Canarias del Quinientos. *Clio y Crimen*, (20), 149-169. https://doi.org/10.1387/clio-crimen.25732

Rodríguez Arrocha, B. (2014). De testimonios y delitos: los esclavos en los procesos penales canarios de la Edad Moderna. *XXI Coloquio de Historia Canario-Americana*, 1-11.

Rodríguez Calleja, J. E. (2014). La población de Valsequillo según el padrón parroquial de 1829. *XX Coloquio de Historia Canario-Americana*, 652-664.

Rönnbäck, K. (2021). Were Slaves Cheap Workers? A Comparative Study of Labor Costs in the Antebellum U. S. South. *Labor History*, *62*(5-6), 721-741. https://doi.org/10.1080/0023656X.2021.1974366

Sá, I. D. G. (2024). Slavery, Family and Childhood in the Portuguese Diaspora in Southeast Asia, 16th-17th Centuries. *Ler História*, (84), 113-133. https://doi.org/10.4000/11uqw

Sarasua, C. (Ed.). (2021). *Salarios que la ciudad paga al campo. Las nodrizas de las inclusas en los siglos XVIII-XIX*. Universitat d'Alacant.

Slenes, R. (2011). *Na senzala uma flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava: Brasil sudeste, século XIX*. Editora da Unicamp.

Sobrado Correa, H., y Dubert, I. (2012). La familia y las edades de la vida. En I. Dubert (Coord.), *Historia de la Galicia Moderna* (pp. 95-150). Universidade de Santiago de Compostela.

Sobrevilla Perea, N. (2023). The Abolition of Slavery in the South American Republics. *Slavery y Abolition*, *44*(1), 90-108. https://doi.org/10.1080/0144039X.2022.2122814

Vasseur Gámez, J. (2018). El mercado de esclavos y los mercaderes y corredores de esclavos en Sevilla durante el siglo XVII. En R. M. Pérez García, M. F. Fernández Chaves, y J. L. Belmonte Postigo (Eds.), *Los negocios de la esclavitud. Tratantes y mercaderes de esclavos en el Atlántico Ibérico, siglos XVI-XVIII* (pp. 185-234). Universidad de Sevilla.

Vera, J. C. (2016). *El Censo de 1680 de La Gomera y El Hierro*. Autoeditado.

Vinyoles Vidal, T. (2000). L'integració de les llibertes a la societat barcelonina baixmedieval. En M. T. Ferrer i Mallol y J. Mutgé i Vives (Eds.), *De l'esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l'edat mitjana* (pp. 593-615). CSIC.

Viña Brito, A. (1993). *La esclavitud en las Islas Canarias durante la Edad Moderna*. Ediciones La Laguna.

Viña Brito, A. (2014). *Azúcar y mecenazgo en Gran Canaria: el oro de las Islas, siglos XV-XVI*. Cabildo de Gran Canaria.

Viña Brito, A. (2015). El cultivo de la caña de azúcar en Canarias en los inicios de la colonización. *Anuario del Instituto de Estudios Canarios*, (59), 239-264.

Viña Brito, A. (2019). La sociedad canaria en el siglo XVI. Conflicto y violencia a raíz de un proceso por sodomía protagonizado por un esclavo. En S. de Luxán y J. Figueirôa-Rêgo (Eds.), *El tabaco y la esclavitud en la rearticulación imperial ibérica (s. XV-XX)*. Publicações do CIDEHUS. https://doi.org/10.4000/books.cidehus.6372

Wheat, D. (2016). *Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640*. University of North Carolina Press.

Winnebeck, J., Sutter, O., Hermann, A., Antweiler, C., y Conermann, S. (2023). The Analytical Concept of Asymmetrical Dependency. *Journal of Global Slavery*, (8), 1-59. https://doi.org/10.1163/2405836X-00801002

RESEÑAS

Bahena Pérez, Martha Atzin (2024). *Una sociedad de frontera. Lazos interpersonales y configuración de la vecindad en Ciudad Real de Chiapa (1524-1630)*. México: Instituto de Investigaciones Históricas UNAM; Presses Universitaires du Midi. 352 pp. ISBN: 978-607-30-9044-5.

El libro que hoy reseño constituye un trabajo fundamental para quienes nos interesamos en el estudio de las vecindades en las ciudades indianas y en sus dinámicas sociales. Es un trabajo minucioso que nos muestra cómo se articularon los europeos en los territorios americanos en el siglo XVI. Aunque la vecindad ya ha sido abordada por la historiografía, resulta pertinente profundizar en la configuración social de esta categoría en los espacios americanos.

El libro de Atzin Bahena es un trabajo excepcional y sumamente interesante por la temporalidad y el tema que aborda, así como por la metodología utilizada. Como no siempre ocurre, el titulo sintetiza muy bien el contenido de la obra y el argumento del que parte la autora para desarrollar su investigación. Sustentada en una vasta historiografía y una exhaustiva consulta de fuentes primarias, la autora logra explicar el papel de la vecindad y los lazos interpersonales, en la configuración de una «sociedad de frontera». Estos conceptos son centrales en la indagación de Atzin.

La autora muestra claramente en el título los tres ejes que articulan el texto. El eje principal es la vecindad, Atzin pone en el centro de su explicación el arraigo al espacio local. Para estudiar la configuración de la vecindad, la autora recurrió al estudio de los lazos interpersonales mediante el análisis relacional. Además, en este texto muestra la singularidad de la configuración de la vecindad en un territorio de frontera, esta característica situó a Ciudad Real de Chiapa como un nodo estratégico en la articulación de otros espacios y la circulación de bienes y personas. Como se expone a lo largo del texto, los vecinos utilizaron de manera reiterada el argumento de la frontera para solicitar mercedes.

La investigación se divide en dos partes. En la primera se expone la configuración de la primera vecindad de Ciudad Real entre 1524 y 1562, esta parte consta de tres capítulos (vecindad de los conquistadores, vínculos de la primera vecindad y reconfiguración de la primera vecindad). En la segunda se trata sobre la consolidación, conciliación y control del territorio entre 1564 y 1630, y también consta de tres capítulos (Autoridad Real en Chiapa, el Reino de Guatemala y los vínculos globales). Los capítulos siguen un orden cronológico en el que la autora explica el proceso de configuración, reconfiguración, consolidación y

preservación de la vecindad en el espacio estudiado.

Uno de los planteamientos principales es que el arraigo al espacio local implicaba en primer lugar el acceso y, en segundo lugar, el control efectivo de los recursos. El núcleo urbano de la provincia de Chiapa surgió por los intereses de los primeros conquistadores asentados como una forma de buscar legitimación para acceder a los recursos, desde la mano de obra indígena a los bienes de consumo procedentes del tributo. De tal forma que el proceso de establecimiento y pervivencia de los primeros núcleos urbanos de españoles respondía a los intereses de distintos actores. En los primeros capítulos, que abarcan desde 1524 hasta 1562 seguimos el proceso de conformación del espacio social en medio de diversas pugnas. Por ejemplo, observamos los conflictos derivados de la difusión de las Leyes Nuevas referentes a las encomiendas o los conflictos entre las distintas órdenes religiosas asentadas en el territorio.

El texto nos muestra cómo se fueron organizando los diferentes grupos de poder en Ciudad Real para explotar y controlar los recursos. La autora pone de relieve la relación de codependencia entre la Corona y las repúblicas urbanas. Subraya que entre las estrategias de los vecinos para acceder y controlar los recursos fue imprescindible la negociación con la Corona y las autoridades reales.

Atzin Bahena identificó cuatro aspectos que dieron forma a la vecindad de Ciudad Real entre 1524 y 1630:

1. Los mecanismos de sociabilidad, es decir, las distintas formas en que los vecinos se relacionaron entre ellos y con otros, el tipo de vínculo que crearon, así como su temporalidad y alcance.
2. La territorialización, entendida como la apropiación política del espacio mediante la consolidación de la jurisdicción secular y eclesiástica.
3. La configuración de la frontera que fue de la mano con la de la ciudad, pues Ciudad Real se identificaba como una ciudad de frontera.
4. La importancia de la migración para su consolidación y conservación porque los diversos flujos migratorios favorecieron que la vecindad se fuera redefiniendo en distintos periodos, y en respuesta a diferentes coyunturas o vicisitudes.

La perspectiva micro le permite a la autora advertir dinámicas y actores que de otro modo pasarían inadvertidos. Una de las bondades del análisis relacional es que nos permite humanizar a los individuos estudiados, que pasan de una categoría abstracta como vecinos a ser personas con nombres como Juan de Tovilla o Francisca de Estrada. Y, en este sentido, fue muy importante el entrecruzamiento de fuentes, gracias al cual, la autora brinda una gran cantidad de información minuciosa.

La autora identificó varias estrategias políticas y sociales que los vecinos de Ciudad Real utilizaron para obtener y preservar sus privilegios como

encomiendas, y solicitar mercedes como regidurías o un convento, entre otras. Entre estas estrategias destaca presentar los servicios a la Corona en las misiones de conquista, ya fueran propios o de los antepasados, las alianzas entre vecinos, la formación de facciones, remitirse a la pobreza, el intercambio de encomiendas o apelar a la participación en las guerras de pacificación y defensa del territorio. Así, también, la autora nos muestra cómo la concesión de encomiendas fue un medio de negociación para la conservación de los centros urbanos españoles y que la lucha por las encomiendas se encontraba en la base de la búsqueda de acceso a los recursos.

Al mismo tiempo que la autora explicita la dinámica de la sociedad estudiada subraya los factores económicos intrínsecos en sus relaciones y en la configuración misma de la vecindad. La investigación nos da muchos rastros sobre las lucrativas actividades económicas que se desarrollaron en Ciudad Real en los distintos periodos analizados. De este modo, se observa que, aunque el tributo y la mano de obra indígena sostenían la provincia, otras actividades económicas se desarrollaron en el territorio, como la captura de esclavos indios, la construcción de ingenios, la extracción aurífera en los lavaderos de oro, la ganadería y el comercio de diversas mercancías, entre las que destacan las mantas de algodón y el cacao. Lo que da cuenta de la existencia de un circuito comercial de participación indígena en el que los españoles intentaron insertarse al aliarse con mercaderes indios para tener acceso a las rutas comerciales de la zona. Aunque la autora no profundiza en el estudio de este tema ni en explicar la importancia del mercado de mantas y cacao en la región.

En el capítulo tres, la autora demuestra que los vínculos locales fortalecieron las dinámicas de integración y preservación de la vecindad, y que para integrarse en la comunidad era indispensable crear o contar con vínculos locales. Como lo manifiestan los casos de desarraigo, pues para quienes se desarraigaban de la ciudad fue complicado mantener el control sobre los recursos. Y, en buena medida, los intereses por formar parte de la comunidad residían en la capacidad de acceder a los recursos locales.

La autora revisó una vasta documentación y los casos que nos presenta son muy interesantes, sobre todo porque aborda no solo a los vecinos sino también a los no vecinos como los estantes, y explora el importante papel de las mujeres en la conformación de nuevas alianzas por medio de enlaces matrimoniales.

Al final del capítulo cinco queda patente que a quienes la autora estudia es sobre todo a los vecinos prominentes o por lo menos, quienes las autoridades consideraban que merecían ser categorizados bajo alguna calidad a diferencia de quienes no lo merecían. Aun así, Atzin nos da pistas para estudiar al segundo grupo, porque da cuenta de ellos y los visibiliza, aunque no los aborda en profundidad porque se tiene poca información sobre ellos. Me parece también relevante que la autora exponga algunos de los vínculos imprescindibles

entre indios y europeos para el acceso y control de la riqueza y la mano de obra indígena. Por ejemplo, pone de relieve cómo los españoles recurrieron a alianzas con los indios para conquistar el Lacandón.

En la obra se menciona que las estrategias que los migrantes utilizaron para arraigarse al territorio estaban directamente relacionadas con la creación de vínculos y alianzas con los vecinos «viejos», por así decirlo. Por ejemplo, a principios del siglo XVII varios mercaderes se avecindaron y se afianzaron en la ciudad gracias a su incorporación al cabildo secular.

El libro cuenta con varios cuadros, gráficos y mapas que nos ayudan a tener una imagen más clara de la información que la autora nos brinda. Por ejemplo, en la página 207 se muestra una red completa de los vínculos que se abordan en el texto, en ella podemos visualizar las relaciones estudiadas y la estructura de la red. El análisis de la red expresada en el grafo ayudó a la autora a identificar quiénes tenían más vínculos en la red, quiénes eran los principales intermediarios y quiénes tenían mayor influencia o prestigio, y de esta forma mostró por intermediación de quiénes se entrelazaban estos grupos.

Concluyo con una invitación a leer el libro pues constituye un excelente trabajo que nos permite advertir la complejidad de los procesos sociopolíticos y económicos en la configuración de la vecindad en Ciudad Real de Chiapa, en un periodo sumamente interesante y complicado, que la autora supo sortear hábilmente gracias al entrecruzamiento de fuentes. Un trabajo complejísimo, por el tipo de fuentes de la época, en ocasiones por escasez de estas, y el amplio periodo que estudia.

Ana Consuelo Rojas Cruz
Universidad Nacional Autónoma de México

Guerrero Martín, Alberto y García González, Víctor (Eds.) (2025). *La historia militar y la sociedad*. Madrid: Ministerio de Defensa, Doce Calles. 405 pp. ISBN 978-84-1083-045-5 y 978-84-9744-507-8.

La historia militar y la sociedad aborda un tema crucial en el panorama historiográfico actual, la labor de dar a conocer aquellos trabajos de investigación académicos más allá de la «torre de marfil» en la que los historiadores desarrollan su labor profesional, centrados en la investigación y aislados de la sociedad, a la que el conocimiento llega a través de los divulgadores. La presencia de la historia militar en la sociedad ha sido una constante a lo largo de la historia, si bien sus diversas manifestaciones, finalidades y grados de aceptación y difusión se han visto modificados con el paso del tiempo.

El libro que presentamos trata de ofrecer una respuesta a dichos desafíos a partir de sus amplios y variados enfoques. Presentando todas aquellas manifestaciones que buscan lograr el mayor impacto de la historia militar tanto en el gran público como en el mundo universitario y en la sociedad actual, desde las instituciones públicas y asociaciones privadas, pasando por la arqueología y las nuevas tecnologías, o el valor de la reconstrucción del pasado que realizan los recreadores, sin dejar en el tintero la *gamificación* de la historia y el impacto de la historia militar en el mundo audiovisual.

El presente volumen es el resultado de las contribuciones de los participantes en el congreso celebrado en junio de 2024 en el Museo del Ejército en Toledo, organizado por la Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI). En ellos se plantean cómo divulgar los avances en historia militar de manera exitosa, recurriendo a distintos modos para transferir este conocimiento, otorgando un papel relevante a las nuevas tecnologías.

En la introducción Alberto Guerrero Martín y Víctor García González reivindican la necesidad de corregir tan compleja situación, superando el desprecio y la rivalidad entre los mundos académico y divulgativo. Como bien nos recuerdan sus editores «es más cómodo […] permanecer en la trinchera. Lo realmente valiente es salir de esta, […] acercarse al diferente y advertir qué se puede aprender de él y qué se puede ofrecer a cambio», animándonos a buscar soluciones a esta situación. Opinión compartida por su prologuista, el general de brigada Jesús Arenas García, al recordarnos cómo la transmisión del conocimiento de la historia militar se debe situar al mismo nivel que la investigación.

A pesar de la dilatada variedad de trabajos y la amplitud cronológica y de líneas de investigación, el objetivo e hilo conductor de la obra no se ve interrumpido, puesto que cada autor en su campo corrobora sus afirmaciones con abundancia de fuentes y una exposición solvente. La obra ha sido estructura en cinco grandes apartados.

Si bien es cierto que es una ardua tarea reseñar en tan ajustada extensión una obra coral con enfoques y temáticas tan amplias, y líneas de investigación tan plurales como la procedencia y formación de sus autores, no nos gustaría por ello renunciar a tratar de reflejar las líneas principales de cada contribución, por lo que, en esta reseña, respetando el orden temático de la obra, se ha preferido dentro de cada conjunto agrupar las diferentes contribuciones en función de su temática.

El primero de dichos apartados se encuentra dedicado a la divulgación desde colectivos o asociaciones civiles e instituciones públicas. Enrique Martínez Ruiz inaugura este grupo reflexionando sobre la importancia de la colaboración y el compromiso del historiador con la divulgación. Daniel Macía recoge el testigo y nos expone en su contribución la importancia de la divulgación de la historia militar como una herramienta fundamental en la Educación para la Paz y la Cultura de la Defensa en la actualidad.

Por su parte, Fernando Cevallos Fresneda nos mueve a reflexionar acerca de la importancia de la visualización de la historia militar con el proyecto de la Asociación para la reconstrucción del navío San Juan Nepomuceno, destinado a convertirse en un testimonio didáctico de la historia de la Armada española y la técnica del siglo XVIII. Mientras Joaquín Rivaya-Martínez resalta las oportunidades que brinda para la divulgación histórica la frontera septentrional del Virreinato de Nueva España, además de ser al mismo tiempo un desafío por el desconocimiento o los prejuicios imperantes en el mundo académico estadounidense en la actualidad.

La segunda parte de la obra se dedica a un campo de gran relevancia, desarrollo y trayectoria en el mundo académico tanto en España como en el extranjero, la arqueología aplicada a la historia militar y los campos de batalla. En este apartado Xavier Rubio Campillo reflexiona sobre la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la reinterpretación de los campos de batalla y nos permite una mejor comprensión de la relación entre el combate y el paisaje. Por su parte, Pablo Carrasco Gómez en una línea similar, con su estudio de las excavaciones en el campo de batalla de Ordal (1813), pone el foco de atención no solo en las nuevas metodologías o tecnologías, sino también en el potencial de la divulgación y la dimensión social de la arqueología al abordar el valor de preservar el legado material del pasado como el testimonio de la «cicatriz» que las guerras del pasado dejan en nuestro presente. En una línea similar se orienta la contribución de Agustín Pacheco Fernández, quien ilustra la relevancia de la localidad de l'Alcora, en la que se produjeron hasta doce batallas en el siglo XIX.

Mientras que el grupo de investigación de la Universidad de León «Historia y Memoria Contemporánea» (HISMECON), formado por Ana Cristina Rodríguez Guerra, Javier Revilla

Casado, Sergio Alberto Peña Pérez, Clara Ramos Huerga, Adrián Renilla García e Inés Cía Fernández, busca destacar la importancia de la cartografía histórica y el uso de nuevas tecnologías asociado a la investigación y recuperación del patrimonio de la Guerra Civil española. Una cronología, medios y objetivos compartidos por Carlos Iriarte Aguirrezabala y Fernando Atienza Blanco, miembros del Grupo de Estudios del Frente de Madrid (GEFREMA) quienes se centran en el estudio de las «cicatrices» o vestigios del conflicto en la Ciudad Universitaria y la necesidad de divulgarlo a través de rutas didácticas.

La tercera parte de la obra se halla dedicada a la recreación histórica en la actualidad, la cual presenta un destacado desarrollo en los últimos años, tanto en el mundo académico como en el divulgativo, por gozar de una gran popularidad, además de ser uno de los medios más polémicos y que más debate ha suscitado.

En esta línea se incluyen trabajos como los de Juan Antonio Bermejo das Neves, orientados a señalar la importancia de la recreación como elemento de divulgación de los avances de la arqueología militar, en especial aquellos relativos al armamento, con el ejemplo del «scutum de Kalkriese», buscando con ello dotar de rigor académico a una importante labor divulgadora en constante riesgo de distorsionar la visión de la historia o quedar desactualizada. Objetivo compartido por Jonathan Jacobo Bar Shuali, quien realiza un estado de la cuestión sobre la recreación napoleónica en España y presenta los resultados obtenidos por la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, de la que es presidente, así como los retos y dificultades que han tenido que afrontar, en especial en el mundo universitario, teniendo un importante éxito en la divulgación al gran público.

Mientras que en un plano más visual y participativo se encuadran las contribuciones del maestro de esgrima Alberto Bomprezzi, fundador de la Asociación Española de Esgrima Antigua, quien en su capítulo sostiene el importante valor divulgativo de la esgrima histórica, además de su valor como actividad deportiva, dado que a partir de los tratados de la época «la pica nos pone la historia en la mano». Punto de vista compartido por Javier Fernández Castroagudín, Óscar Galansky López, Jesús González Beade y Rubén Travieso Díaz (Universidad de Santiago de Compostela y Grupo de Investigación Manuel Otero), quienes en su capítulo nos desgranan la importante labor de investigación detrás de la recreación y divulgación de contenido audiovisual de los gallegos alistados en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, resultando así la recreación no solo una forma de divulgación, sino también de aprendizaje, tanto para expertos como aficionados.

La cuarta parte se halla orientada a la divulgación de la historia militar a través de medios lúdicos, digitales y audiovisuales, indispensables hoy en

día. Alberto Venegas Ramos inicia con un texto acerca de la representación de la Segunda Guerra Mundial en los videojuegos, destacando los retos y las oportunidades, y la necesidad de contar con el asesoramiento de especialistas. Mientras que en una línea similar Aitor Sainz Lasheras propone una serie de *wargames* más clásicos que destacan por un equilibrio entre diversión y aprendizaje. En una aproximación parecida Paulino García Diego realiza un recorrido por la historia de estos juegos en el caso español, destacando su utilidad no solo lúdica o didáctica sino también como apoyo a la investigación histórica.

Por su parte, en el proyecto de videojuego «Ecos de Almansa, 1707», el grupo interuniversitario integrado por Adrián Díaz Milán, Víctor González Melgar, Francisco Dios Fernández y Mario Piñero Fernández nos presentan un producto didáctico y divulgativo, no exento de rigor, fruto de su creencia en «el compromiso social» de la labor del historiador. Siguiendo ese planteamiento Antonio Manuel Berná Ortigosa nos propone la batalla de Waterloo del *Napoleón: Total War* como la oportunidad perfecta para un aprendizaje activo en el que el alumno, más allá del estudio de una campaña específica, aprenda a utilizar diferentes técnicas y métodos de investigación.

Cierra este grupo la contribución de Juan Pastraña Piñero, quien evalúa el creciente auge de canales de *pódcast* y vídeos de divulgación en YouTube sobre historia militar, entrevistando además a varios de los creadores. En sus conclusiones destaca no solo los riesgos sino también las oportunidades que nos ofrecen dichas plataformas, como la capacidad de difusión a nivel internacional.

Termina la obra con una quinta sección orientada a la presencia de la historia militar en la expresión artística contemporánea y la utilización de los medios artísticos para su divulgación. En primer lugar, Salvador Amaya nos relata su trayectoria profesional como escultor histórico en España, género del que es su máximo exponente. Retratando el pasado español en la misma línea que el conocido «pintor de batalla», Augusto Ferrer-Dalmau, cuya obra aborda María Fidalgo Casares, para quien no solo es un *rara avis* por el género histórico que desarrolla sino también por el «el gran impacto sociológico e iconográfico de sus obras». Por su parte Vanesa Andrés Manzano pone el foco de atención en las dificultades y las oportunidades de la pintura histórica para la divulgación de la historia militar en los medios audiovisuales y las técnicas y recursos propios de sus lenguajes. Así como Daniel Domenech Muñoz, fundador de la empresa Proyecto XVI, nos demuestra el potencial de futuro de la reconstrucción, modelado digital e impresión 3D aplicado a la pedagogía histórica o la recuperación del patrimonio histórico dañado.

La contribución de Marco Antonio Cervera Obregón analiza la idealización y reinterpretación de los guerreros mexicas hasta nuestros días, y cómo estas representaciones han influido en el

mundo de la recreación y de la divulgación. En la misma línea se encuentra el capítulo con el que concluye esta obra, un estudio sobre la visión que se tenía acerca de la Legión Extranjera francesa en el periodo de entreguerras, destacando su importancia en el imaginario colectivo de su época, y mostrando cómo sus ecos continúan resonando en el presente.

A modo de conclusión, nos gustaría destacar la importante labor que los autores han desarrollado con sus contribuciones y el modo en que nos permiten constatar la amplia variedad de formas en las que podemos acercarnos a la historia militar en la actualidad. Y cómo a pesar de los desafíos y retos inherentes a la divulgación, el conocimiento científico puede recurrir a las nuevas tecnologías, lo que constituye no solo una gran oportunidad de dar a conocer investigaciones punteras, sino también cumplir con la que debería ser una de las principales tareas del historiador, la divulgación de sus investigaciones. No nos queda lugar a dudas al afirmar que la presente obra esta destinada a convertirse en un libro de referencia en el campo de *la historia militar y la sociedad*.

Manuel Sobaler Gómez
Universidad Complutense de Madrid

Hernández Rodríguez, Alfonso J. (2025). *Soldados de la Carrera de Indias. Estructuras militares y conexiones atlánticas de la Monarquía Católica en el siglo XVII*. Madrid: Ediciones Doce Calles. 418 pp. ISBN: 978-84-9744-486-6.

Salvo las grandes campañas de conquista de los imperios mexica e incaico o los sistemas de presidios y defensa articulados en el Caribe, las estructuras militares indianas y los hombres que las conformaban en época de los Habsburgo no han suscitado la misma atención que los escenarios de guerra europeos. Así ha ocurrido con el componente militar de la Carrera de Indias, el sistema que articuló la Monarquía para proteger el oro y la plata americanas, destinados, en buena parte, a financiar las grandes campañas militares de los Austrias en Europa. A excepción de aportaciones como las de Serrano Mangas y Pérez Mallaína sobre la composición material y humana de las flotas del circuito americano, las de Vincente Pajuelo sobre la Armada de la Guarda o los estudios de José M. Díaz Blanco, el peso específico de la historiografía sobre la temática se ha concentrado especialmente en el período borbónico. Afortunadamente, Alfonso Hernández viene a llenar ese vacío con un libro que conecta con distintas corrientes historiográficas, bien definidas en las dos partes en las que se estructura la obra, muy diferentes en cuanto a contenido y enfoque.

En la primera, dedicada a la infraestructura militar de la Carrera de Indias, establece un diálogo entre la tradición historiográfica del Estado fiscal-militar, que opuso el modelo de administración directa al de asientos —su proliferación sería síntoma de su fracaso—, y la más reciente del *Contractor State*, para la que el funcionamiento de la inmensa maquinaria militar del imperio español y sus importantes desafíos logísticos solo pudieron llevarse a cabo mediante la participación de factores, asentistas e intermediarios con capital privado, de lo cual la Armada de la Guarda y su Tercio de Galeones sería un ejemplo claro, en opinión del autor. Esta primera parte es la más extensa y consta de cinco capítulos.

Los tres primeros nos introducen en la trama administrativa y militar de la Carrera de Indias, las bases territoriales de su dispositivo militar y el impacto ejercido por la presencia de la tropa. Desgrana la estructura organizativa del régimen de convoyes que protegían los metales americanos y su consolidación con el establecimiento del asiento de la avería en 1591. A partir de entonces, se consolidó la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, que dio cabida a una pionera infantería de marina, el Tercio de los Galeones, integrado por compañías de oficiales y soldados especializados en el combate naval. El autor destaca cómo la Baja Andalucía jugó un papel esencial en el aprovisionamiento de recursos humanos y materiales para la Armada del Mar Océano y la Carrera de Indias. La relevancia del *hinterland* andaluz estuvo presidida por dos factores clave. Uno, el protagonismo de los Medina Sidonia y los Medinaceli al frente de la

Capitanía General de la Mar Océano y Costas de Andalucía en el mando y apoyo logístico de las operaciones militares y como provechosos intermediarios entre la Corte y los poderes locales. Otro, el papel de Cádiz y su presidio como pieza clave del dispositivo militar andaluz, base invernal de las armadas y punto de redistribución de levas, a pesar de problemas enquistados como las precarias condiciones de vida de su guarnición. El autor expone el importante desafío logístico que suponía el desplazamiento de estas fuerzas sobre el territorio y cómo las tensiones y conflictos generados por la tropa fueron convenientemente instrumentalizados por las oligarquías locales y los capitanes generales para librar del alojamiento del Tercio de Galeones a Sevilla y su alfoz y a los estados de los Medina Sidonia, que presionaron para que se aposentasen en el presidio de Cádiz. Los duques defendieron la permanencia de esta tropa en Cádiz, porque así se aligeraba la carga sobre las poblaciones de la Baja Andalucía y se solucionaba la falta de dotación de la plaza. El problema, como pone de manifiesto Hernández Rodríguez, es que la Corona fue incapaz de asegurar su financiación con regularidad a través de los fondos de la avería y la consignación del presidio.

Los dos capítulos finales de la primera parte hacen un recorrido diacrónico por los mecanismos de financiación del aparato militar de la Carrera de Indias. Establece una cesura entre la primera y la segunda mitad de siglo, marcada por la no prorrogación del asiento de la avería, que se firmó en nueve ocasiones entre 1591 y 1642 con el Consulado y particulares vinculados al comercio indiano. Frente a una historiografía clásica que vio en el asiento la incapacidad de la Monarquía para administrar directamente el dispositivo militar de la Carrera y la causa principal de su deterioro, Alfonso Hernández sostiene que aquel se debió a múltiples factores, más allá del asiento. Es más, el asiento se planteó como una necesidad tras la crisis hacendística de fines del XVI y el incremento en los costes de los fletes y provisión de recursos y hombres de las Armadas. La intensificación de los ataques navales holandeses tras la Tregua y la consecuente escalada militar con Olivares pusieron en jaque la viabilidad de la avería y los asientos. En opinión del autor, el incremento del número de galeones y efectivos militares a reclutar, la exigencia de un mayor esfuerzo de financiación a los asentistas de la avería y el aumento de la fiscalidad extraordinaria tuvieron consecuencias sobre el comercio indiano y provocaron una importante recesión del capital privado del dispositivo militar, que se tradujo en la no renovación del asiento y una necesaria transferencia de recursos navieros de la Armada del Mar Océano a la Carrera de Indias. El cambio de modelo se registraría tras la visita de Juan de Figueroa (1642-1648), un acto de «reseteo» y condena del período de Olivares, en el que se trató de combatir la generalización del fraude y el contrabando —buena parte perpetrado por los oficiales militares de la Carrera—, mediante una mayor implicación del capital privado de la élite mercantil al dispositivo militar,

por vías alternativas al asiento. Estas fueron la concesión de indultos o donativos a los oficiales militares de la Carrera para librarlos de su imputación en el comercio ilícito, la firma de asientos de construcción y mantenimiento de naves y la obtención de empréstitos, todo ello a cambio de beneficiar cargos de la oficialidad de mar y guerra. Esta política permitió, en opinión del autor, la consolidación de una elite de militares-empresarios, preferentemente afincados en Cádiz, que comprometieron buena parte de su dinero en la financiación del dispositivo militar de la Carrera y, aprovechando su inserción en las redes comerciales transnacionales, obtuvieron importantes beneficios. No obstante, la suerte del dispositivo militar corrió pareja —menos gastos y menor periodicidad de los convoyes— a procesos como el descenso de la tensión militar tras la muerte de Cromwell y la propia evolución del tráfico atlántico de metales preciosos americanos, con una cierta reactivación entre 1660 y 1670 y una fase de estancamiento y descenso a partir de 1680.

La segunda parte —capítulos sexto y séptimo— es, en nuestra opinión, la aportación más original del libro. En ella, Alfonso Hernández adopta el enfoque de la historia social del ejército para ocuparse de los integrantes de la Armada de la Carrera de Indias. El capítulo sexto ofrece un amplio análisis de la oficialidad, dedicando la mayoría de las páginas a los cabos o capitanes de mar y guerra, frente a los gobernadores, análogos a los maestres de campo, y los sargentos mayores del Tercio de Galeones, que nunca pudieron equiparar su estatus y prestigio al de sus homólogos en los tercios terrestres. El autor señala cómo a lo largo del XVII primó la meritocracia en la provisión de las capitanías de mar y guerra, a pesar de verse amenazada con el incremento de capitanes reclutadores a su costa en los años treinta o con la proliferación de las futuras y la venta de cargos vinculados a los asientos y préstamos a partir de los sesenta. Sin embargo, en el caso de los alféreces, pudieron prevalecer criterios de parentesco y clientela entre jóvenes de las oligarquías andaluzas, dado que su provisión estaba otorgada a los capitanes generales del Tercio de Galeones y desde 1632 a los cabos. Aunque en 1619 se ordenó que solo fuesen alféreces quienes certificasen los servicios estipulados en las ordenanzas, en algunos casos este criterio se soslayó, como se ha podido documentar en otros estudios para el ejército de tierra, especialmente en época de Olivares, mediante la concesión de suplimientos. Alfonso Hernández matiza las tesis sobre la escasa profesionalización y formación de los capitanes de mar y guerra, que era más elevada de lo que se sostiene. En cuanto a su procedencia social y geográfica, el grupo reproduce patrones similares al resto de la oficialidad militar de la Monarquía: amplia representación de las oligarquías y miembros de la baja y media nobleza, provenientes de linajes de servidores castrenses de Castilla, la cornisa vasco-cantábrica y los centros urbanos de la Baja Andalucía, cuya representación fue aumentando, sobre todo en las décadas finales del siglo XVII. De especial interés,

en nuestra opinión, es la parte dedicada a los «estímulos» que marcaron el acceso de muchos individuos a estos cargos, considerados verdaderas palancas de ascenso social que ofrecían algo más que un sueldo o los beneficios que podían procurar el fraude y el contrabando: honor y reputación en el marco local, posibilidades de promoción —aunque menores— al generalato y al almirantazgo, hábitos militares, gobiernos, alcaidías y corregimientos en Indias que, según el autor, fueron una salida muy frecuente para muchos capitanes de mar y guerra de la Carrera de Indias, pues su perfil se adecuaba a las necesidades defensivas de algunas plazas americanas y además contaban con conexiones y conocimiento de las redes y circuitos comerciales en Indias.

El séptimo y último capítulo se ocupa de los grandes «olvidados» del ejército: los soldados y cuadros inferiores del Tercio de Galeones, a quienes, por la ausencia de fuentes o su excesiva fragmentación, ha sido mucho más difícil seguirles el rastro. A pesar de ello, el autor hace un esfuerzo de indagación para proporcionarnos algunas claves sobre sus orígenes geográficos, edad, procedencia social, formación y nivel económico. En gran medida, coinciden con las características generales de los soldados de otros cuerpos militares de la Monarquía: un grupo de jóvenes —de entre 14 y 25 años—, provenientes de los grandes núcleos urbanos próximos a los lugares de embarque en la Baja Andalucía y con una amplia representación de los estratos más bajos de dichas ciudades, que veían en el Tercio de Galeones una salida económica y una vía de ascenso social. Por otro lado, como ocurría con otros cuerpos militares de la época, los soldados de la Carrera desarrollaron una marcada conciencia de grupo y habilitaron mecanismos de solidaridad y ayuda mutua en torno a hermandades y cofradías que vehiculaban mecanismos de asistencia material y espiritual. La máxima expresión de ello fue la fundación de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, institución que se consolidó como un espacio de sociabilidad extendido al resto del entramado urbano gaditano. Durante los años iniciales del siglo XVII sabemos que su nivel de formación y adiestramiento en la milicia fue elevado, gracias al flujo de veteranos procedentes de la guerra de Flandes tras la firma de la Tregua en 1609. Sin embargo, el porcentaje de bisoños sin formación fue creciendo a partir de los años veinte, muchos de ellos artesanos urbanos que usaron el Tercio de Galeones como una vía gratuita para pasar a América a ejercer sus oficios. Esta circunstancia levantó sobre ellos la sospecha de ser soldados de mala calidad, sin vocación castrense y potenciales desertores cuando llegaban a las Indias —más mercaderes que soldados—, convenientemente amplificada por las críticas de muchos de sus superiores. No obstante, estos juicios son matizados por Alfonso Hernández y situados en un contexto mucho más complejo de intereses económicos y políticos, ya que los soldados de la Carrera, enrolados por el sueldo, pero también por las ventajas y beneficios del contrabando sobre el tráfico indiano, formaron parte de una extensa red de

prácticas corruptas y fraudes, sostenida y alimentada por los oficiales del sueldo y los capitanes de mar y guerra que, sobre todo estos últimos, debían rentabilizar la importante inversión realizada en la compra de sus cargos.

Estamos ante un libro bien armado a nivel metodológico, que además apoya su contenido con un importante cuerpo de tablas, gráficos y anexos de gran utilidad. A partir de una bibliografía sólida y un arduo trabajo de investigación sobre fuentes de archivo, el autor ha sabido explotar documentación local y aquella otra que procedía de los órganos de decisión y control que participaron en la organización militar de la Carrera de Indias, con un mayor peso específico —lógicamente— de los fondos del Archivo General de Indias, cruzada a su vez con información procedente del Histórico Nacional y del General de Simancas. La elección de estas fuentes nos da la clave del funcionamiento de la administración militar indiana, en la que la toma de decisiones sobre la Carrera de Indias no solo correspondió a la Junta de Guerra de Indias, sino también a otros órganos como el Consejo de Guerra y sus Juntas específicas, con los que se tuvo que coordinar en la toma de decisiones. Y también nos muestra una vez más lo necesario que es eliminar las barreras tradicionales que han separado americanismo y modernismo en el mundo académico hispano, sobre todo cuando hablamos de una vasta maquinaria militar que la Monarquía tuvo que desplegar en múltiples escenarios geográficos a uno y otro lado del Atlántico, y que interconectaban conocimientos técnicos y carreras al servicio del rey.

La obra, no obstante, cuenta con algunos elementos que debemos someter a crítica. El primero remite a la ambiciosa cronología a la que aspira, todo el siglo XVII, un desafío solo abarcable con un trabajo de investigación gestado a largo plazo como este, fruto de una tesis doctoral. Sin embargo, a lo largo de sus páginas detectamos un desequilibrio entre la primera mitad, y más concretamente el período de Felipe III y los años treinta y cuarenta, y lo acontecido hasta fines del XVII. Tampoco compartimos del todo expresiones como «ciclo militarista», «militarización y autoritarismo regio» o «vorágine fiscal» en términos de relación dialéctica Corona-comerciantes a la hora de referirse al período del valimiento de Olivares y en el que, en opinión del autor, se rompió la armonía entre el Comercio y la Monarquía, que permitía el sostenimiento del asiento de la avería, recuperada más tarde mediante diferentes vías que trataron de satisfacer los intereses de las elites mercantes bajo-andaluzas en la segunda mitad del XVII. También convendría manejar con cuidado conceptos como el de «fraude», «corrupción» y su vinculación a determinadas prácticas venales, usados por algunos contemporáneos para caracterizar y deslegitimar la época del valido, cuando aquellas se reprodujeron e incluso se ampliaron con Carlos II. En nuestra opinión, más bien se produjo un complejo proceso de adaptación en un contexto de creciente tensión y exigencia en la periodicidad de las armadas de la Carrera y guerra abierta con múltiples frentes y enemigos,

mediante la búsqueda —a veces desesperada— de diferentes vías de financiación y de obtención de hombres sin coste para la Corona. Ello determinó, por ejemplo, la multiplicación, entre 1630 y 1643, de asientos de reclutamiento con particulares a cambio de mercedes honoríficas, cargos de maestres de campo y patentes de la oficialidad en blanco y con suplimientos para su embarque a Flandes e Italia o su paso a la frontera catalana en la guerra con Francia, del mismo modo que ocurrió en los años cuarenta con las futuras concedidas a capitanes de mar y guerra del Tercio de Galeones, o cuando veinte años después se recurrió a la firma de asientos para construir naves y la adquisición de empréstitos a cambio de beneficiar oficios militares de mar y guerra de la Carrera de Indias. Son aspectos menores que no restan valor alguno a una obra necesaria, convertida a partir de su publicación en un referente en el campo de la historiografía militar hispana sobre los Austrias y cuya lectura recomendamos.

Antonio Jiménez Estrella
Universidad de Granada

Herrero Sánchez, Manuel, Orozco Cruz, Jonatán y Cardim, Pedro (2026). *The «Asiento» system and the transatlantic trade in enslaved Africans (circa 1580-1750)*. Leiden: Brill. 373 pp. ISBN: 978-90-04-54928-9.

La esclavitud africana en América y, más concretamente, el *Asiento de Negros* han demostrado ser uno de los temas más debatidos y reflexionados a ambas orillas del Atlántico, ya desde los pioneros trabajos de Enrique Vila Vilar. En esta ocasión, el volumen coordinado por Manuel Herrero Sánchez, Jonatán Orozco Cruz y Pedro Cardim parte de trabajos previos de los autores acerca de las conexiones sefarditas con las redes de la trata esclavista o desde la perspectiva del Portugal de los Braganza a partir de 1640, además del estudio pormenorizado del asiento de Nicolás Porcio y Baltasar Coymans o el protagonismo del Consulado de comerciantes de Sevilla. Este bagaje historiográfico permite darse cita a investigadores que encabezan novedosas perspectivas sobre este fenómeno transatlántico. De ahí que el volumen abarque desde el comienzo del sistema del Asiento durante el último tercio del siglo XVI hasta la década de 1740, en torno a los espacios coloniales portugueses, españoles, franceses, ingleses y neerlandeses en África y América. Un fin tan ambicioso va aparejado de una distribución en torno a 3 bloques temáticos: la fundación, estructura y consolidación del sistema del Asiento; las redes comerciales y diplomáticas en base al comercio transatlántico de esclavos africanos a partir de 1662; y los modelos alternativos de administración y participación dentro del Asiento.

En el caso de la Monarquía de España, el Asiento se manifiesta como un elemento clave a la hora de analizar la entidad monárquica dentro del sistema policéntrico que beneficiaba la descentralización en los procesos de desplazamiento forzoso de los esclavos africanos desde la Alta Guinea, Cabo Verde o Angola pasando, o no, por estancias intermedias en Sevilla, y de ahí a La Habana, Veracruz o Portobelo, entre otras. Todo esto requería extensas negociaciones llevadas a cabo entre las compañías y sus agentes con las autoridades locales y los oficiales reales, lo cual en muchas ocasiones puso en cuestión el propio sistema monopolista de la Carrera de Indias. Esto contrastaría enormemente con los intentos privativos de Portugal o Francia para controlar la introducción de esclavos en sus colonias. En función de esto, el volumen acierta a la hora de ofrecer una perspectiva internacional sobre el Asiento que pone énfasis en las distintas redes transnacionales que articulaban los mundos ibéricos y sus áreas de influencia.

El primer capítulo, a cargo de Miguel Geraldes Rodrigues, pone el foco en el papel de los oficiales y agentes del Asiento, pero también aquellos que tenían funciones informales, a la hora de articular la provisión de esclavos africanos a partir de 1595 —fecha del primero—, hasta la rebelión de 1640. En sus primeros momentos, este negociado se caracterizó por su carácter

semimonopolista que se conectaba con las redes argentíferas americanas, necesarias para el funcionamiento del sistema. De ahí que el papel de los comerciantes locales fuese elemental para el mantenimiento de estos contratos durante tanto tiempo, a pesar del cambio en su titularidad.

Al hilo de esta aportación, David Wheat arranca en el siglo XV para definir las actividades de estos *brokers*, que comenzaron desde la expansión africana de Portugal y que a lo largo del XVI se fueron conectando con los puertos caribeños. Así mismo se relaciona con las consecuencias sociales y culturales, específicamente en las comunidades de la Alta Guinea, y el análisis de las relaciones matrimoniales o en concubinato con los oficiales ibéricos, denominados *lançados* o *tangomãos*. Lo cual es novedoso en virtud del análisis de su integración en esas comunidades costeras.

El trabajo de Manuel Fernández Chaves establece su análisis en la rentabilidad económica de los asentistas portugueses de Cabo Verde que proveyeron a la Corona española a partir de 1589, a través del estudio de la bancarrota de Pedro Freire, quien es el sujeto de análisis junto a su socio, Diego Nunes Caldeira. Esta aportación evidencia las complejas redes de crédito que involucraban redes transnacionales que sobrepasaban el espacio de los mundos ibéricos. De nuevo, estos contratistas aparecen como inversores de media y corta escala que movilizaban el capital para promover estas actividades mercantiles y navales, siendo ellos imprescindibles para el anclaje de la economía-mundo moderna.

En el caso del capítulo de Linda Newson, se estudia la trayectoria de Manuel Bautista Pérez, quien pertenecía a las redes comerciales judeoconversas del Asiento portugués en la primera mitad del siglo XVII. A través del proceso inquisitorial que hizo ver la luz su patrimonio, Newson reconstruye sus redes de influencia en Lima que, a su vez, se diversificaban por ambos virreinatos y Asia. En específico, la investigadora estadounidense completa este estudio con el análisis del comercio de la cera de abeja, textiles y perlas, los cuales encontraban extensos nichos de mercado dentro de las dinámicas del comercio triangular.

El segundo bloque es iniciado por Filipa Ribeiro da Silva, cuyo capítulo observa el Asiento de Diogo Nunes Belmonte, integrante de la comunidad sefardí en Ámsterdam, y Francesco Ferroni, de origen florentino y que tuvo un papel relevante en la etapa de Grillo. Además de ofrecer una reconstrucción minuciosa de esta red, la autora examina los costes y beneficios de este comercio, lo que se traducía en medrar en las corporaciones de la monarquía. Se traduce en una reflexión muy acertada sobre el papel de la esclavitud en el desarrollo de la economía de mercado moderna.

Le sucede la aportación de Jonatán Orozco Cruz, que se enfoca en los Asientos de Juan Barroso, Nicolás Porcio y Baltasar Coymans, entre 1675 y 1694. Se muestran las formas de cohesión y conectividad y, a su vez, la problemática

asociada a delegar la autoridad en agentes formales o informales, como *jueces conservadores,* capitanes de barcos o factores o administradores generales, lo que, paradójicamente, redundaba en la continuidad del sistema. En esta línea, igualmente se analizan los mecanismos para el mantenimiento de la autoridad de los asentistas en la red transnacional. Al hilo de este análisis, la contribución de Ramona Negrón complementa la investigación previa, enfocándose en el papel de estos mismos agentes para el caso específico del Asiento de Coymans en 1685. De nuevo, se corrobora cómo los asentistas establecieron sistemas jerárquicos claros en las factorías y eligieron cuidadosamente a los agentes que debían enlazarse con el medio local. Sin embargo, el caso de Coymans demuestra la crisis de confianza de la monarquía de España hacia las Provincias Unidas y el rápido colapso que podía acechar a estas compañías a finales del siglo XVII.

Por su parte, Maximiliano M. Menz ofrece una introducción a la *Real Companhia de Guiné* que asumió este negociado entre 1698 y 1701, estableciendo el análisis de rutas y mecanismos de movilización y venta de esclavos, muy parecidos a los que ya habían desarrollado los genoveses, nutriéndose del capital de Ámsterdam y Londres para subcontratar sus servicios.

Pasando al análisis del Asiento como mecanismo de negociación en la diplomacia europea, Manuel Herrero Sánchez focaliza su trabajo en la figura de Manuel de Belmonte, agente oficial de la monarquía de España en Ámsterdam desde la década de 1660 hasta 1704. De nuevo, su origen como financiero sefardí lo colocó en un lugar muy relevante a la hora de mediar en torno a las estrategias de provisión de esclavos desde Curazao.

De vuelta al análisis de las compañías, la contribución de Klaus Weber y Joseph Mainberger examina la que disfrutaron los comerciantes franceses entre 1702 y 1712. En la *Compagnie de l'Assiente* se puede observar la importancia del capital francés y su movilización por la familia Portchartrain y sus redes de negocios. La posición comercial de Francia, el acceso al trono de Felipe V y la transformación de Santo Domingo en un gran centro exportador de esclavos y azúcar explican la larga vida de esta etapa. A su vez, en esta cronología, Wim Klooster pone de relevancia que la provisión de esclavos desde Curazao siguió siendo imprescindible para el mantenimiento del sistema, pero a la vez los diplomáticos neerlandeses no consiguieron participar de forma legal tras el fin del dominio francés.

El último bloque se abre con el trabajo de Edgar Pereira, quien estudia los contratos esclavistas que realizó la Corona portuguesa, buscando demostrar que la mayoría de los contratistas eran inversores, más que compradores y vendedores en sentido estricto, y que actuaban de forma libre en el sistema.

Le sucede la investigación de William Pettigrew, el cual estudia la incorporación inglesa al negocio esclavista durante la dominación de la *South Sea Company* entre 1714 y 1740 y cómo participaron

agentes externos que pugnaron por una desregularización del comercio.

Este apartado es finalizado por la aportación de Thiago Krause y Christopher Eber, quienes estudian las redes comerciales para importar esclavos desde Salvador de Bahía hasta Brasil, y donde los comerciantes baianos lograron comerciar directamente, sin lidiar con la intervención extranjera. El apoyo de la Corona portuguesa y la fuerza de la comunidad mercantil, beneficiada a través del contrabando del oro y otras mercancías, determinaron la durabilidad de esta situación.

Por último, el epílogo a cargo de Alejandro García-Montón ofrece claridad sobre la visión general del volumen que busca reivindicar el carácter transnacional del negocio esclavista y abre otras rutas de indagación, como el papel del Consulado de comercio de Sevilla. Para concluir, el libro consigue analizar el Asiento como la íntima unión entre expansión imperial, lógica mercantil y violencia estructural que dio forma al mundo atlántico moderno y ofrece un excelente ejemplo del desarrollo de la historia transnacional e imperial a cuenta del prisma del policentrismo.

Alberto Hernández Pérez
Universidad Autónoma de Madrid

Imízcoz, José María, Artola, Andoni y Esteban, Javier (Eds.) (2026). *La vertebración de España. Culturas políticas, organización institucional y entramados sociales en la primera modernidad española (siglos XVI-XIX)*. Madrid: Marcial Pons. 474 pp. ISBN: 978-84-19892-60-7.

La presente obra es fruto de la XVII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, celebrada en el Campus de Álava de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea durante los días 21 al 23 de junio de 2023. Dicha reunión, como es habitual, reunió a gran parte de los especialistas en la Historia Moderna de España, dando como resultado dos obras de gran relevancia: esta última que acaba de ver la luz en 2026 y otra, publicada en 2023, titulada *Los entramados políticos y sociales en la España Moderna. Del orden corporativo-jurisdiccional al Estado liberal*, coordinada por los mismos profesores Imízcoz, Artola y Esteban, editada por la propia Fundación Española de Historia Moderna. Ambos trabajos vienen a constituirse como una referencia de las últimas tendencias y avances historiográficos que actualmente se vienen trabajando desde el ámbito universitario e investigador nacional e internacional, por lo que se complementan de forma extraordinaria.

El libro está concebido como una historia de procesos históricos complejos —políticos, sociales y culturales— que, relacionados entre sí, contribuyen a explicar la construcción de la España moderna con sus características y contradicciones internas. Va precedido por dos aportaciones de los editores destinadas a dar mayor contexto y coherencia al conjunto, desde los planteamientos que están en el origen de la publicación: una Presentación («Combatir con la historia, por la convivencia. El aporte de la historia moderna hoy») y una Introducción («La vertebración de España en la Edad Moderna. Una historia social de lo político»).

La obra se organiza en torno a dos grandes ejes temáticos: el primero, titulado «Procesos de organización política e institucional. Cooperación y conflicto», y el segundo, «Procesos sociales y culturales. Comunidades, contradicciones, resistencias». Ambas perspectivas, más que ser una mera agregación de estudios sin relación, presentan una visión global y detallada de los principales cambios y desarrollos políticos, desde cuestiones conceptuales hasta otras más prácticas y relacionadas con la acción cotidiana de gobernantes y gobernados, junto con las transformaciones sociales y culturales de la España Moderna, donde se incide tanto en elementos de continuidad como de disrupción y cambio. Esta organización del contenido responde a la intención declarada por los propios coordinadores de la obra para explicar la transformación de la monarquía jurisdiccional y de orden corporativo de comienzos del siglo XVI hacia el Estado liberal y la sociedad de individuos del siglo XIX.

Así pues, dentro del primer eje nos encontramos primeramente el trabajo de

María Victoria López-Cordón, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, titulado «La construcción de una comunidad política. Bases conceptuales y percepciones sociales». Su aportación incide claramente en cuestiones conceptuales esenciales para la comprensión de las bases ideológicas de la Monarquía. Para ello, emplea textos y tratados de numerosos autores desde finales de la Edad Media hasta el propio siglo XVIII. Define y desarrolla el concepto de la *res publica* a lo largo de todo aquel período, mostrando cómo el monarca era concebido como la cabeza de todo el cuerpo de la Monarquía y cuya función primordial era la de defender las leyes y privilegios de cada corporación. El empleo de autores como Mariana, Suárez o Vitoria le permiten exponer los fundamentos de las limitaciones del poder regio a lo largo de los siglos XVI-XVII y, con referencias a autores del siglo XVIII, explica las fallas y cambios que fueron surgiendo en ese planteamiento, los cuales permitieron el desarrollo de un poder monárquico más sólido a medida que avanzaba la Edad Moderna.

En segundo lugar, nos encontramos con el texto «La monarquía hispánica, un agregado imperial policéntrico de repúblicas urbanas» de Manuel Herrero Sánchez, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Su estudio entra plenamente en el debate en torno a la construcción política de la Monarquía, haciendo hincapié en la conformación policéntrica de la misma. En este sentido, apuesta por un modelo territorial con diversas sedes de poder más allá de la propia corte del rey, sin cuestionar que aquella fuera el centro de todo el sistema, donde las principales ciudades de la Monarquía serían también focos importantes en la toma de decisiones. De esta manera, se aleja de una perspectiva centralista o de la interpretación de la Monarquía como un mero agregado de territorios, destacando también la existencia de una jerarquía interna entre los referidos centros de poder repartidos a lo largo y ancho de la estructura imperial.

Manuel Rivero Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, presenta el capítulo «Centro y periferia. Consejos y territorios en la segunda mitad del siglo XVII». Este estudio pone el acento en los organismos polisinodiales como los elementos clave en el reparto del *don* o la gracia real. Expone la centralidad de los mismos en la recepción de las relaciones de méritos que, durante la segunda mitad del siglo XVII, llegaban a la corte desde los cuatro continentes conocidos, su posterior análisis y resolución final. En ese sentido, actuaban como mecanismo de transmisión entre los súbditos-servidores y el monarca, desempeñando un papel crucial en el reparto de la gracia, la cual garantizaba los servicios de los súbditos y permitía, en última instancia, el gobierno de los diferentes territorios de la Monarquía. En consecuencia, podemos afirmar que es un análisis que avanza en el conocimiento de la organización administrativa de la Monarquía complementando nuestro conocimiento en torno a la función de los Consejos territoriales del rey.

Anne Dubet, catedrática de la Universidad de Clermont-Auvergne, centra su estudio en las políticas reformistas borbónicas en el capítulo cuarto, «Reformismo borbónico y resistencias. Unos conflictos múltiples». Pone de relieve la necesidad de comprender mejor las experiencias compartidas entre aquellos que promovieron una u otra solución política, así como en la conveniencia de averiguar cuáles pudieron ser los valores e intereses compartidos entre los partidarios y detractores de las reformas borbónicas. Esta vía ofrece una posibilidad de escapar a la clásica interpretación antagónica que suele concluir la existencia de una resistencia general de los españoles a las reformas de la nueva dinastía frente a una aceptación mucho mayor de los súbditos de la corona francesa.

El quinto y último lugar de este primer eje lo ocupa «El reformismo político borbónico y sus límites. Una lectura ius-histórica y algunos desafíos», de María López Díaz, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Vigo. En estrecha relación con la autora anterior, también aquí se ponen de relieve los límites del reformismo borbónico o, más bien, de los *reformismos borbónicos*, tal y como se insinúa en el propio estudio señalando la diversidad de aquellos procesos que, a su vez, se desarrollaron en cronologías e intensidades diferentes, teniendo igualmente alcances muy dispares. La autora se detiene en cuestiones elementales de este periodo reformista, tales como el proceso de recuperación de oficios y el reforzamiento de las regalías, el establecimiento de las intendencias y la relación entre las corporaciones locales y los nuevos elementos e ideas contenidas en los planes reformadores. La cuestión, en su opinión, estaba en los propios límites que el mismo sistema imponía a cualquier aspiración modernizadora que se pretendiera llevar a cabo.

El segundo bloque temático es inaugurado por el trabajo de Francisco Chacón Jiménez (†), catedrático de la Universidad de Murcia, considerado como uno de los referentes de la Historia de la Familia en nuestro país. «Transformaciones sociopolíticas en España (siglos XVI-XIX). Nuevo paradigma» da título a estas páginas, donde se subraya la importancia que la historiografía tradicional ha achacado a los principales cambios políticos para la transformación de la sociedad del Antiguo Régimen durante el siglo XIX. En contraste, Chacón considera que existe otro factor elemental a tener en cuenta: las relaciones familiares y de parentesco. Por ello, propone nuevos enfoques metodológicos que, sin dejar de tener en cuenta por completo al individuo, se centran en dichas relaciones y en su transformación. Así, observa cómo el individualismo va también imponiéndose en el ámbito familiar a la par que las jerarquías sociales se van desintegrando de una manera lenta pero inexorable. Sin duda, esta perspectiva es absolutamente necesaria para comprender esa transformación a la sociedad de individuos.

El séptimo capítulo, «Comunidades reencarnadas. Algunas reflexiones a partir del estudio de la trayectoria de las comunidades territoriales vasconavarras

(siglos XV-XVIII)», corre a cargo de José Ángel Achón Insausti, catedrático de la Universidad de Deusto. En este caso, el factor analizado es el de la comunidad, el cual permite al investigador una aproximación mucho más certera a los siglos de la Baja Edad Media y Edad Moderna que el de la sociedad de individuos. El análisis de amplia cronología le ayuda a analizar los fundamentos conceptuales del término «comunidad» para, después, desgranar su evolución. Así, se puede observar la pervivencia de aquella a lo largo de los siglos XVI-XVII, a pesar de una primera globalización que fue aprovechada para el reforzamiento de los lazos comunitarios. Por el contrario, el siglo XVIII presenta unos rasgos que supondrán una paulatina disolución de la vida comunitaria, precisamente por no poder ser aprovechados en favor de la misma. Este trabajo, al igual que el anterior, plantea nuevos enfoques esenciales a tener en cuenta a la hora de explicar el desmoronamiento del Antiguo Régimen que, tal y como observamos, no puede explicarse exclusivamente desde perspectivas jurídico-políticas.

El penúltimo estudio, «El proceso de civilización y sus paradojas. Tensiones y diálogos culturales», está realizado por Mónica Bolufer Peruga, catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Valencia. La autora pone en cuestión la interpretación tradicional acerca de la escasa permeabilidad de las ideas ilustradas en la España del siglo XVIII y la dicotomía que, en este sentido, se ha planteado habitualmente: élites contra vulgo, civilización frente a barbarie. Resulta muy interesante observar cómo buena parte de las ideas ilustradas, que sin duda partían de una escasa minoría, podían ser reinterpretadas o directamente asimiladas como propias por sectores mucho más amplios de los que hasta ahora habíamos considerado. Desde luego, no se niega aquí la existencia de resistencias hacia estas nuevas tendencias, aunque sí se dan las claves para entender los motivos por los que se produjeron, tales como el aislamiento de algunos sectores respecto a las nuevas corrientes. En todo este proceso, la autora también considera la cuestión del género, la literatura y el teatro como vías para la extensión de esas ideas ilustradas y de su contraparte, las de una sociedad mucho más tradicional.

La obra finaliza con el trabajo «Gente que resiste. Hacia una cartografía de las revueltas en los imperios ibéricos (1500-1850)», realizado por Mafalda Soares Da Cunha, profesora de Historia Moderna de la Universidad de Évora. En este caso se nos expone una herramienta de trabajo para el historiador, *Mapping Rebellions*, destinada a presentar un panorama global de las rebeliones acontecidas en las monarquías española y portuguesa de los siglos XVI al XIX. A diferencia de los trabajos anteriores, se nos plantea aquí un interesante recurso digital que permite relacionar las revueltas con las estructuras de poder y establecer entre ellas similitudes y discordancias. Un trabajo sistemático con esta clase de herramientas permite, sin duda, superar algunos retos casi insuperables de otra forma, tales como los planteados ante el manejo de grandes volúmenes

documentales, facilitándonos en gran medida comprender la evolución de esta clase de conflictos en las monarquías peninsulares modernas. Por ello, estas páginas pretenden explicar el funcionamiento de esta herramienta haciendo reflexionar al lector sobre la idoneidad de la misma para sus propias investigaciones.

En definitiva, estamos ante una obra de gran valor, tal y como la propia nómina de autores nos lo hacía imaginar. Se trata de un avance historiográfico de gran relevancia que nos permite comprender mejor la evolución política y social de la Monarquía española entre los siglos XVI y XIX. Los nuevos enfoques aplicados, algunos de ellos resumidos ya en estas páginas, ponen el acento sobre elementos tradicionalmente no considerados en profundidad y que, sin embargo, son fundamentales para comprender la profunda transformación sufrida por una Monarquía jurisdiccional compuesta por numerosísimas corporaciones que acabaría dando paso a un Estado liberal caracterizado por la sociedad de individuos.

Pablo Presumido Casado
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

Mena Acevedo, Daniel (2025). *Casas de Señores: Las élites compostelanas y sus residencias a fines de la Edad Moderna*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. 281 pp. ISBN: 978-84-1014-282-4.

La historia de la casa y de la cultura material en la Edad Moderna ha dejado de entender la vivienda como un simple marco arquitectónico para analizarla como un espacio de jerarquización, representación y construcción de identidades. En ese campo se inserta con pleno sentido la monografía de Daniel Mena Acevedo, dedicada a las élites compostelanas y a sus residencias en el final del Antiguo Régimen. La obra se propone contribuir a una laguna historiográfica que solo en los últimos años ha comenzado a recibir mayor atención. Para ello, el autor toma como estudio de caso la ciudad de Santiago de Compostela, uno de los principales núcleos urbanos del norte peninsular en términos demográficos, sociales, económicos y culturales.

Uno de los principales aciertos del libro consiste en convertir la residencia en un verdadero objeto de interpretación histórica. Mena no se limita a describir casas ni a reconstruir patrimonios familiares, sino que examina la vivienda como un artefacto social donde se expresan diferencias de rango, estrategias de ascenso y formas de visibilidad urbana. Desde este punto de vista, *Casas de Señores* aporta una lectura convincente de Santiago de Compostela como espacio donde la casa funciona simultáneamente como bien patrimonial, como escenario de vida cotidiana y como dispositivo de representación.

La estructura de la obra responde con coherencia a ese planteamiento. El primer capítulo sitúa el problema en el contexto urbano compostelano. Más allá de una descripción geográfica, Mena utiliza el espacio urbano como herramienta analítica para explicar la configuración de las residencias y su evolución durante el crecimiento poblacional entre comienzos del siglo XVII y mediados del XVIII. En este sentido, el autor pone de relieve cómo las características físicas de la ciudad, como la estrechez y la pendiente de sus calles, condicionaban no solo la vida cotidiana, sino también las formas de sociabilidad y los conflictos entre vecinos. Asimismo, el capítulo muestra cómo el espacio urbano actuaba como un reflejo de las jerarquías sociales, donde plazas y calles adquirían un carácter representativo vinculado al estatus de sus habitantes. La progresiva preocupación por la higiene, la seguridad y el confort a finales del siglo XVIII no solo generó demandas de reforma, sino que impulsó transformaciones que afectaron directamente a la arquitectura doméstica. De este modo, Mena evidencia la estrecha relación entre entorno urbano, prácticas sociales y cambios materiales, destacando también el papel de factores como la estacionalidad en la elección de residencia, lo que conecta el espacio doméstico con los ritmos económicos y climáticos.

El segundo capítulo se centra en el acceso a la propiedad y en la gestión

de las residencias, prestando atención tanto al patrimonio de las instituciones eclesiásticas como al de las élites civiles. A partir de este análisis, Mena pone de relieve la complejidad de las relaciones socioeconómicas en el ámbito urbano, así como la existencia de dinámicas de movilidad social entre distintos grupos profesionales. Asimismo, el autor aborda los conflictos derivados de la gestión de estos bienes, lo que permite comprender mejor las tensiones inherentes a la propiedad urbana. En este contexto, destaca también la situación del cabildo catedralicio, cuyo deterioro tuvo implicaciones en la administración de las casas capitulares.

El tercer capítulo profundiza en el papel del cabildo catedralicio como agente fundamental en la configuración del espacio urbano compostelano, a través de su control sobre un amplio conjunto de viviendas. Mena analiza la gestión y distribución de estas casas, lo que permite observar su concentración en zonas clave del entramado urbano y su importancia como reflejo del poder económico de la institución. Asimismo, el capítulo aborda los cambios producidos a raíz de los procesos desamortizadores del siglo XIX, que supusieron la transferencia de parte de este patrimonio a manos de las élites civiles, evidenciando así transformaciones significativas en la propiedad urbana durante el tránsito del Antiguo Régimen al periodo liberal.

El núcleo más sólido de la monografía se encuentra, sin embargo, en el análisis de la residencia como expresión material de las diferencias sociales. La atención a los materiales constructivos, a las fachadas, a los balcones, a los vidrios, a las chimeneas y a la distribución interna de las estancias permite reconstruir con notable precisión cómo se articulaban distinción y cultura doméstica entre las élites compostelanas. En este punto, el libro resulta especialmente eficaz porque consigue pasar del detalle material a la interpretación social: la casa deja de aparecer como un mero espacio habitable para convertirse en un lenguaje visible del rango, del gusto y de la pretensión social.

Otro de los méritos del estudio reside en su base documental. El autor trabaja con un corpus amplio y variado —fuentes notariales, judiciales, fiscales, municipales y privadas— y maneja con cautela crítica instrumentos tan relevantes como el Catastro del marqués de la Ensenada. Esa solidez empírica da consistencia a un libro que evita el impresionismo y se apoya en una investigación archivística extensa. Resulta también reseñable el uso del material visual, integrado no como mero complemento ilustrativo, sino como parte del razonamiento histórico.

Desde una perspectiva crítica, quizá se eche en falta un diálogo más explícito y sostenido con la historiografía internacional sobre domesticidad, cultura material y espacio doméstico. El libro trabaja en esa dirección, pero una confrontación más explícita con esos debates habría permitido calibrar con mayor nitidez la aportación específica del caso compostelano en un marco comparativo más amplio. Del mismo modo, la atención

al papel de las mujeres y de la dote en la gestión de las residencias apunta una línea de gran interés que el propio estudio deja abierta y que podría haberse desarrollado todavía más.

Con todo, *Casas de Señores* es una monografía valiosa y bien construida, que aporta una visión matizada de las élites urbanas compostelanas y de sus formas de inscripción material en la ciudad. Su mayor virtud es demostrar que la historia de la vivienda puede ser, al mismo tiempo, historia social, historia urbana e historia de la cultura material. Por ello, el libro no solo interesa a los especialistas en Galicia o en mundo urbano hispano, sino también a quienes trabajan sobre domesticidad, distinción y representación social en la Europa moderna.

En definitiva, *Casas de Señores* muestra con notable persuasión que, en la ciudad de la Edad Moderna, las élites no solo habitaban las casas: se definían a través de ellas. En sus muros, en sus fachadas, en sus materiales y en la disposición de sus interiores se hacía visible un orden social entero. Ese es el logro más profundo del libro de Daniel Mena Acevedo: haber convertido la historia de la residencia en una historia de la visibilidad del poder, de sus códigos materiales y de su inscripción en el espacio urbano.

María Pía Arana Barbier
Universidad de Salamanca

Reichert, R. B. (2024). *Wood, Trade, and Spanish Naval Power (c. 1740-1795)*. Leiden-Boston: Brill. 265 pp. ISBN: 978-90-04-68963-3.

En los últimos años la historia naval de la Monarquía se ha incorporado a la renovación historiográfica en torno a *lo militar* desarrollada en España desde inicios del siglo XXI, y en la que los estudios marítimos habían quedado un tanto relegados. Para todo lo relacionado con los ejércitos y armadas todavía existe un desequilibrio entre la etapa de los Habsburgos y los Borbones a favor de la primera; y para el siglo XVIII, todavía es notoria la diferencia entre los numerosos estudios dedicados al comercio exterior y sus plazas de cabecera (Cádiz *in primis*), y los trabajos sobre la Real Armada. No obstante, la nueva historia naval ha situado a la Armada española del siglo XVIII en el mapa de la primera globalización de la Edad Moderna, ayudando así a reequilibrar el dominio historiográfico anglosajón sobre la *Royal Navy*, la fuerza naval hegemónica en dicha centuria[1].

El libro *Wood, Trade, and Spanish Naval Power (c. 1740-1795)* se suma a esta renovación de la historia naval a través del estudio del aprovisionamiento de madera como materia prima clave para el desarrollo de la Real Armada durante la segunda mitad del XVIII. La obra parte de dos preguntas: ¿cómo afrontó la Armada el reto del abastecimiento de madera en un contexto general de gran expansión naval en Europa y extrema competencia? ¿qué estrategias puso en marcha la Corona para conseguir esta materia prima fuera de la península ibérica? Para intentar responder a estas preguntas, la obra se organiza en dos partes y cuatro capítulos: la primera parte atiende a las políticas de aprovisionamiento de madera desde el Báltico sur y a los principales asientos (capítulo 1); el capítulo 2 se centra en las zonas de extracción en el *hinterland* báltico. La segunda parte estudia los esfuerzos de la Monarquía para proveerse de madera en sus territorios americanos, con especial atención al virreinato de Nueva España (capítulo 3), y a los asientos en Nueva España y el Gran Caribe (capítulo 4). A continuación, desarrollamos brevemente algunos aspectos de cada una de las dos partes.

En la primera etapa de importación de madera desde los puertos del Báltico sur (1751-1760) hubo una dependencia total del sistema de asientos con contratistas extranjeros, principalmente holandeses. Las estimaciones anuales de

1. Pueden destacarse dos aportaciones generales: Valdez-Bubnov, I., *Poder naval y modernización del Estado: política de construcción naval española (siglos XVI-XVIII)*, México, UNAM, 2011 y Torres Sánchez, R., *Historia de un triunfo. La Armada española en el siglo XVIII*, Madrid, Desperta Ferro, 2021. La Real Armada como motor de la innovación científica en España puede seguirse en las contribuciones reunidas por García Hurtado, M.-R. (ed.), *Las innovaciones de la Armada en la España del siglo de Jorge Juan*, Madrid, CSIC, 2020. Sobre la oficialidad es imprescindible la monografía de Ortega del Cerro, P., *El devenir de la élite naval. Experiencias de los oficiales de la Armada en tiempos de cambio (inicios del XVIII-finales del XIX)*, Madrid, Sílex Universidad, 2018.

la madera del Norte avanzadas por los tres departamentos navales (Cádiz-La Carraca, El Ferrol y Cartagena) constatan una planificación, así como la importancia en sí misma de esta materia prima del Báltico. La derrota borbónica en la guerra de los Siete Años (1756-1763) aceleró la modernización de la Real Armada: en paralelo con el incremento de las necesidades de construcción y una mayor presencia de oficiales en el área (el conde de Aranda como embajador en Varsovia entre ellos), creció el interés por «hispanizar» los asientos y firmar contratos por adelantado en origen, con el objetivo de asegurar la calidad de la materia prima y su entrega a tiempo. A partir de 1786 el Banco de San Carlos centralizó todos los asientos y las compras directas por agentes de la Monarquía *in loco*.

La segunda parte del libro inicia con el interés de los tratadistas españoles por la explotación de la madera en territorios americanos desde principios del XVIII. Hasta la década de 1760 Cuba fue uno de los principales lugares de explotación de madera tropical para la construcción naval, pero entre 1766 y fines de siglo creció el interés por el virreinato de Nueva España. A diferencia de la primera parte dedicada al Báltico sur, en esta segunda parte están más presentes el «factor humano» y los límites naturales y logísticos del aprovisionamiento de madera: el trabajo de corte y transporte era duro físicamente y mal pagado, lo que se traducía en dificultades para encontrar mano de obra. Los costes salariares eran elevados si los trabajadores debían de abandonar sus lugares de residencia. Las comunidades indígenas interrumpían la extracción de madera para regresar a sus trabajos agrícolas. En algunas áreas, las enfermedades tropicales podían causar una gran mortalidad entre los trabajadores. Otros límites a la extracción eran los elevados costes de los animales de carga; la protección de los territorios indígenas frente a la tala por parte de la Corona; una difícil orografía (terrenos escarpados y ríos peligrosos para el transporte de la madera); el robo de material y la falta de transportes hasta los astilleros. Por último, el coronel Miguel del Corral también denunció el saqueo de los bosques por parte de los vecinos, la tala clandestina y el aclarado para la extensión de la agricultura y la ganadería. Todos estos límites dejaban poco espacio para la planificación del aprovisionamiento de madera para la Marina Real en territorios americanos (pp. 159-160).

Tras su lectura, el libro tiene un extraordinario valor como «obra de consulta»: se aportan numerosos mapas y tablas de gran valor estadístico. En especial, resulta muy interesante la tabla 11 con un listado del número de mástiles y sus dimensiones, destinados a Cádiz en 1766 y comprometidos con los terratenientes de la Mancomunidad polaco-lituana (p. 49). Además del poder de los datos (convertidos en el «eje» del libro), la monografía presenta tres ideas fuerza que resumimos brevemente a continuación.

En primer lugar, entre 1775 y 1790 —apunta el autor— se alcanzó el pico de las importaciones de madera desde el Báltico sur, lo que contribuyó a acelerar el proceso de modernización de la Real Armada entre 1770 y 1790. Esta modernización logró situar a la fuerza naval española, en la década de 1780, como segunda

fuerza marítima global, solo por detrás de la *Royal Navy* (p. 58). Esto, a pesar de la dura competencia por la materia prima con otras potencias marítimas y los constantes períodos de interrupción del comercio como consecuencia de los conflictos con Gran Bretaña.

En segundo lugar, aunque el libro mantiene una línea «técnica», el lector puede intuir (o al menos establecer la hipótesis) de que la debilidad política interna de la Monarquía polaca sobre el territorio y frente a los grandes magnates convirtió a los decretos reales sobre la protección forestal en papel mojado (lo mismo que la *Real Ordenanza sobre Bosques y Plantíos* de 1748 para la América española). Los bosques polacos comenzaron a ser explotados entre el siglo XV y fines del XVI, mientras que en Lituania empezaron en la segunda mitad del XVII (p. 120): en el siglo XVIII la explotación en masa afectaba a toda la Confederación polaco-lituana, por lo que cabe suponer (es nuestra hipótesis) un fracaso de las políticas forestales por parte de la Corona. La voraz demanda de las potencias navales occidentales —a partir de la década de 1740 ya se constató una escasez de las piezas de madera más gruesas y más largas— contribuyó indirectamente a esquilmar los bosques de la Confederación, pero los principales responsables y beneficiarios fueron las grandes casas nobiliarias. Esto (repetimos) es una hipótesis en la que el libro no entra, porque en el caso de algunas grandes familias, estas eran las principales interesadas en mantener un ciclo de regeneración forestal. En este sentido, resulta muy interesante el seguimiento que se hace en el libro sobre el papel de la todopoderosa familia de magnates Radziwiłł, quienes, a través de sus diversas ramas, controlaban en Polonia y en Lituania miles de hectáreas de superficie forestal. Su explotación les proporcionó suculentos beneficios económicos gracias a la exportación de madera destinada a las grandes potencias navales (España incluida), desde los puertos bálticos de Königsberg, Memel y Riga. En las páginas dedicadas a esta familia se estudia especialmente el bosque de Naliboki, que llegó a contar con 350.000 hectáreas explotadas «con gran cuidado». Así, con el objetivo de mantener el equilibrio de la superficie forestal, la producción se movía estacionalmente y en diferentes áreas, lo que permitía una adecuada regeneración de los árboles y del suelo (p. 113).

La tercera idea fuerza es que el aprovechamiento de los recursos forestales por parte de la Confederación polaco-lituana y de la Corona española en el virreinato de Nueva España parecen muy diferentes. El libro establece una relación causa-efecto entre el crecimiento económico de Polonia-Lituania en la segunda mitad del XVIII y la producción de madera destinada al sector industrial, la construcción de viviendas y a las grandes armadas europeas durante las décadas de 1760, 1770 y 1780. En el caso del virreinato de Nueva España, los límites físicos y humanos del territorio eran tantos que, a pesar de ser un vasto espacio controlado por la Monarquía española, no llegó a cubrir nunca la demanda de madera para la Real Armada, que se vio obligada a buscar otros espacios.

A nuestro juicio, la fuerte impronta «técnica» del libro ha dejado menos

espacio para un aparato crítico-teórico y una contextualización, a veces necesaria, para ayudar al lector a tener un cuadro más completo. El trabajo sobre los dos espacios elegidos (Báltico sur y virreinato de Nueva España) resulta excelente, pero entre las dos partes del libro faltan elementos de conexión para «justificar» la elección de dos áreas tan lejanas y tan distintas geográficamente: entre una zona europea fuera de la «zona de confort» española como el Báltico y la América hispana —con sus límites, pero al fin y al cabo bajo dominio de Madrid— existen numerosos elementos que hubieran podido favorecer una historia comparada (aunque esto no era el objetivo del libro). Queda claro que los límites a la extracción de madera en el virreinato de Nueva España forzaron a la Secretaría de Marina a buscar otros espacios en el Báltico, Italia, Rumanía y Norteamérica. Hubiera sido deseable conocer brevemente el papel de otros espacios como el Mediterráneo y los Balcanes. Siguiendo la necesaria contextualización, no hubieran estado de más unos breves apuntes sobre el aparato administrativo, la logística, la organización jerárquica y militar de la Real Armada española durante el siglo XVIII. De este modo, los lectores hubieran tenido una aproximación a su marco institucional y operativo, desde el trabajo burocrático en la Secretaría de Marina hasta la responsabilidad técnica de los cuerpos de ingenieros y de los intendentes de marina en La Habana y México. La consulta de distintos archivos y bibliotecas europeos y americanos ha debido de suponer un esfuerzo de años: la «intrahistoria» del libro bien hubiera merecido unos breves apuntes al final de la obra sobre estos archivos consultados en España, Polonia, México y Alemania, entre otros, sobre sus posibilidades y dificultades (se echa en falta un listado breve de las abreviaturas de los archivos y bibliotecas, y los principales fondos consultados). Por último, las diversas monedas españolas utilizadas en los pagos también hubieran necesitado de una breve tabla de equivalencias al inicio o final de la obra.

En conclusión, nos encontramos ante una obra imprescindible para entender el salto de la Real Armada española en la segunda mitad del siglo XVIII a través del suministro de madera fuera de la península ibérica. Es una obra compleja en cuanto a la recopilación seriada de datos procedentes de distintos archivos y bibliotecas europeas y americanas, y su trabajo en mapas y tablas. Esto ha requerido una labor en equipo liderada por el autor y en la que han participado los doctorandos Karolina Juszczyk y Daniel Prusaczyk, especialmente para las secciones relacionadas con los bosques de la familia Radziwiłł. Toda esta información estadística resulta imprescindible para seguir el desarrollo de la obra, pero también de referencia obligada para los expertos en las fuerzas navales del XVIII. Por último, la edición de Brill es muy cuidada, con unos mapas de extraordinaria calidad y un apéndice de láminas a color procedentes del *Diccionario demostrativo de la arquitectura naval*, el manuscrito del marqués de la Victoria depositado en el Archivo Histórico de la Armada, Madrid.

Óscar Recio Morales
Universidad Complutense de Madrid

Rivero Rodríguez, Manuel (2025). *Las tres vidas del conde duque de Olivares*. Madrid: Alianza Editorial. 441 pp. ISBN: 979-13-7009-063-0.

Abordar una figura como la del conde duque de Olivares en los tiempos que corren podría estar de moda, sobre todo, si se acude a una visión tradicional sobre su figura y se le tilda —lo indicará Manuel Rivero en su introducción— de déspota, de dirigir un gobierno arbitrario y de utilizar a su antojo las leyes de su época. No nos costaría mucho encontrar ejemplos habituales en las actuaciones políticas de algunos líderes actuales. Hoy podría hablarse de la astucia maquiavélica por *mantenerse en el poder*, ayer, rescatando las palabras de Gregorio Marañón, hablaríamos de la *pasión de mandar.* La influyente biografía histórica escrita por el intelectual madrileño, publicada desde el exilio en 1936 y tantas veces reeditada, retrató a Gaspar de Guzmán y Pimentel, valido de Felipe IV, como un hombre complejo impulsado por un deseo insaciable de poder, con algunas virtudes notables pero también con grandes defectos. Después de previos ensayos biográficos, sobre lo que pudo ser la «psicohistoria», centrados en *Enrique IV de Castilla* (1930) o *el padre Feijoo* (1934), en su *conde duque de Olivares* el doctor Marañón ofrecía un cuidadoso análisis psicológico sobre la figura y el gobierno del valido, precisamente en un momento en el que las democracias parecían estar cuestionadas o, al menos, en retroceso en una Europa que observaba el peligroso ascenso de los totalitarismos.

Tres décadas más tarde, Eulogio Zudaire, religioso capuchino e historiador navarro, publicaba su obra *El Conde-duque y Cataluña* (1964), un libro que surgió de su tesis doctoral defendida en la Universidad de Barcelona (1958). La obra, centrada en las dos décadas que transcurren entre 1621 y 1641, tienen como protagonista al valido y a la Cataluña de la revuelta. Las medidas del conde duque habían fracasado, sin embargo, las decisiones del valido no fueron suficientes para hacer recaer solo en él la culpa del alzamiento de la rebelión. Olivares intentó detener la rebelión y negociar la solución al conflicto, incluso ante hechos tan graves como el asesinato de un virrey. El valido se equivocó, pero las responsabilidades de la debacle fueron compartidas debido a la intransigencia de las instituciones catalanas que, buscando cómo mantener sus cotas de poder y salvaguardar su riqueza, permitieron que Francia ocupase el Rosellón y alargase el conflicto.

A mediados de los 1980, el historiador inglés Sir John H. Elliott publicaba su obra sobre *El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de decadencia,* en 1986 en inglés y en 1990 en castellano. Una figura que ya venía siendo objeto de su interés desde su famoso *The Revolt of the Catalans* (1963). El impacto y el legado de su obra sobre Olivares silenció durante muchos años cualquier nuevo acercamiento a la figura del valido. Elliott presentaba a Olivares como a un hombre de Estado, consciente de los males de una España sumida en una decadencia estructural, pero atrapado en el marco

mental y político de su tiempo. Su gran proyecto reformista encalló debido a la resistencia de los distintos territorios y a las limitaciones económicas, estructurales y políticas de un imperio incapaz de mantener su hegemonía.

¿Hacía falta un nuevo libro sobre Olivares? Todo parece indicar que sí. Durante la última década Manuel Rivero se ha acercado a su figura no en una sino en tres ocasiones para presentarnos sólidas monografías, además de hacerlo en otros artículos y capítulos de libro. La primera de las obras de la tríada con el título *El conde duque de Olivares. La búsqueda de la privanza perfecta*, fue publicada en la editorial Polifemo (2017), y se centró en su famoso Gran Memorial de 1624. El autor, con un enfoque original y novedoso, cuestionaba el documento clave que había servido hasta la fecha para interpretar la actuación política del valido. Tras un generoso repaso historiográfico no solo puso en tela de juicio la autoría del conde-duque de dicho documento —que ya había adelantado en un artículo previo— sino que apeló a la importancia del catolicismo como seña de identidad de la nueva política gestada por la monarquía y recuperada por Olivares. El valido en el que se centra Rivero —por encima de prejuicios y conductas irracionales— no es el que pretendía crear una monarquía centralizada a la castellana, gobernada desde la corte, sino el que fue incapaz de lograr el respaldo moral y de combatir la corrupción de su tiempo. El desengaño de la guerra con Francia, en 1635, evidenció que la confesionalidad ya no era la ideología que dirigía la guerra y Richelieu pareció más pragmático que Olivares al implementar con éxito sus políticas. Gaspar Sala, un profesor de la Universidad de Barcelona, ya lo había anunciado a finales del otoño de 1640, los catalanes no eran el problema sino el mal gobierno del conde duque (p. 289).

En 2023, se acercaba de nuevo a su figura en su *Olivares. Reforma y revolución en España (1622-1643),* para poner su foco de atención en la cosmovisión profundamente religiosa del conde duque, hecho que favoreció una suerte de «revolución cultural» en su tiempo, marcando e inspirando una serie de iniciativas reformadoras que fueron criticadas en su momento por considerarse el resultado de un cúmulo innecesario de extravagancias. En la obra, vuelve a explorar la autenticidad del gran memorial afirmando que no es posible sostener, como habitualmente se señala, que fuera «la viga maestra del proyecto político de Olivares» (p. 255) a pesar de permitir establecer fáciles conclusiones. Su gobierno, lejos de los tópicos y estereotipos habituales sobre los que se había juzgado, no supuso en opinión de Rivero el hundimiento de la monarquía, aunque Felipe IV fracasara en lograr la hegemonía, tuviera que ceder terreno frente a Francia y se reconociese durante las siguientes décadas la independencia de Holanda y de Portugal, esta última ya con la regencia de Mariana de Austria. El fracaso de la Unión de Armas fue uno de los síntomas que más pronto trascendieron a su forma de hacer política, a un gobierno que luchó sin conseguirlo reglamentar el comportamiento, combatir la ociosidad e imponer unas normas

sociales de decoro. Como ha indicado Jesús María Usunáriz al referirse a este libro, si la monarquía ponía sus miras hacia la reconfiguración a finales del siglo XVII debía hacerlo sobre las bases olivaristas de la ejemplaridad, el mérito y el servicio. En consecuencia, me atrevería a señalar, que no todo se había ido al fondo, como tiempos atrás había señalado el conde de Gondomar.

Ahora, dos años más tarde, vuelve de nuevo a Olivares en su obra, *Las tres vidas del conde duque de Olivares*. Es el tiempo de la propaganda política y de la construcción cultural de su imagen. Durante los años que duró su ministerio el valido recibió la dedicatoria de más de 400 obras y desde la posición de su *hipermecenazgo* —tomo prestado este neologismo del autor— creó todo un mundo narrativo para ratificar la idea de que se iba por el buen camino, con obras de teatro que celebraban los sucesos, con pinturas de batallas para decorar el salón de reinos en el Palacio del Buen Retiro y con toda una literatura narrativa escrita para la ocasión. Esta prolija literatura colaboró en la *fabricación de la imagen* del conde duque de Olivares. Un discurso que se pudo mantener durante la década de 1630 pero que se diluyó a medida que las rebeliones de Cataluña y Portugal progresaban y se enquistaba cualquier solución política para resolverlas. Y todo ello como consecuencia del catastrofismo de su política, castigada duramente por una propaganda que se cebaría con él en algunos momentos de su gobierno y especialmente tras su caída. Se apagaba la luz que había dado brillo a la política del conde duque.

Según Manuel Rivero, las tres biografías que encargó y supervisó tenían la intención de que la opinión pública no solo aceptase sino también apoyase las iniciativas y propuestas de su gobierno, con el objeto de construir o controlar el relato (p. 16). En otras palabras, el conde duque se convirtió en un gestor de comunicación política moderna. Los dos primeros textos, de Juan de Vera y Virgilio Malvezzi, mantienen esa voluntad de construir un relato, y el tercero, atribuido a Francisco de Rioja, se sitúa en otra línea, más bien en la defensa de quien ha perdido su control e intenta de forma desesperada recuperarlo. En estos documentos, tanto en lo que se afirma como en lo que se silencia, se pueden conocer de primera mano las ideas e inquietudes de Olivares, sobre todo en tres fechas concretas: 1628, 1635 y 1643.

El primer momento llega con la publicación de los *Fragmentos históricos de la vida de don Gaspar Felipe de Guzmán*, escritos en 1628 y que solamente circularon como manuscrito hasta que se llevaron a la imprenta a finales del siglo XVIII. Era una biografía anómala al referirse a una persona viva y en un momento poco heroico en el que a la impopularidad del gobierno de Olivares se sumaba la oleada de sátiras y coplillas críticas con la labor del valido. Hacía falta un relato que obviase los desastres —entre ellos el de la pérdida de la flota española en Cuba— y valorase con saldo positivo los primeros siete años de Olivares al frente del gobierno. Juan de Vera, que era hijo de una granada nobleza emeritense, estuvo envuelto desde joven en el ambiente artístico y cultural de la

sociedad andaluza. Su obra *El embajador,* publicada en Sevilla en 1620, a pesar de la escasa experiencia de su autor cuando la escribió, fue compañera de viaje durante muchos años de embajadores, plenipotenciarios y agentes, convirtiéndose en un manual práctico para la diplomacia moderna.

El segundo hito se producía en 1635 cuando aparecía en Bolonia *Il retratto del privato político christiano* de Virgilio Malvezzi quien, con una fuerte carga antimaquiavélica y partiendo de los *Fragmentos* de Vera, contiene una articulada serie de aforismos contraria a la forma de abordar la Historia y afirma el carácter providencial del ministerio del conde duque, en un tono general en que destaca el buen gobierno y el progreso de las armas españolas ante el nubarrón que se avecinaba de la guerra con Francia. Malvezzi, nacido en el seno de una familia noble boloñesa vinculada con el servicio a la Casa de Austria, participó en algunas campañas militares contra Saboya y los franceses, hasta que su mala salud le obligó a regresar a Bolonia en 1626. Al año siguiente, obtuvo el oficio de senador tras la renuncia de su padre, que estaba muy enfermo y falleció poco después. Se concentró en actividades intelectuales y en 1629 fundó la Academia de *L'Eterno,* manteniendo contactos con artistas y humanistas de toda Italia. Ese reconocimiento y prestigio adquirido fueron suficientes para que aceptase el encargo de *Il retratto* una obra que permitía entender el valimiento de Olivares, proyectando su figura hasta ensombrecer la de Richelieu, y construir un relato sobre el reinado de Felipe IV que perdurase en el inconsciente colectivo de las generaciones futuras.

Por último, destaca la fecha del 23 de enero de 1643 que conllevó la caída de Olivares y generó una nueva oleda de panfletos, coplillas, sátiras y folletos contra su figura. No faltaron quienes pidieran que el valido rindiese cuentas de su ministerio, a modo de juicio de residencia, como el memorial que publicaba por entonces Andrés de Mena. Su mala gestión en la dirección de los negocios de la monarquía y la serie de delitos, abusos y muestras de ineptitud que recogía el panfleto no podían quedar incólumes. J. H. Elliott, en su obra no escapa a la polémica desatada por Mena, que había servido al parecer en 1633-1634, como agente del duque de Béjar en la corte. El círculo pro olivarista no tardaría en responder al veneno de Mena a través de un antídoto, con el opúsculo titulado *Nicandro o Antídoto contra las calumnias que la ignorancia y envidia han esparcido por deslucir y manchar las acciones del Conde duque de Olivares después de su retiro,* supuestamente de Francisco de Rioja, bibliotecario de cámara de su majestad, aunque desde la corte y dados los secretos de Estado que recogía el *Nicandro* —que incluían al propio Felipe IV— hubo quienes apuntaron, sin pruebas fehacientes, que la autoría correspondía a Olivares. Rioja acompañaría al conde duque a su destierro en Loeches en 1643 aunque separaría su destino y su fortuna cuando don Gaspar de Guzmán se retiró a Toro, mientras Rioja regresaba a Sevilla y diez años después a la corte donde todavía sería nombrado consejero de la Santa y

Suprema Inquisición hasta que le encontrase la muerte en Madrid en 1659.

Luchar contra décadas de tópicos nunca ha sido sencillo, pero la apuesta de Manuel Rivero con esta tríada es valiente y, me atrevería a decir, acertada. La «revolución cultural» planteada por el valido promovió valores como el mérito, la disciplina o la moral estoica, que debería extenderse más allá de la política, al ámbito de las mentalidades. El sistema estaba dando muestras de sus desajustes internos, en el marco de una monarquía compuesta, con tensiones entre los territorios que venían a responder a desequilibrios internos, más allá de a propios errores personales. Olivares construyó una imagen cuidadosamente elaborada mediante escritores afines y un uso adecuado de la propaganda, sin importarle utilizar la historia como herramienta política. Frente a la visión de la historiografía tradicional sobre el conde duque como gran estratega del reinado de Felipe IV que, con objeto de defender el prestigio de la Monarquía Hispánica, intentó sin conseguirlo llevar a cabo su modelo de centralización, a través de la Unión de Armas, el autor entiende que la acción exterior respondió más a decisiones coyunturales y a motivaciones ideológicas. Sea como fuere, la mayor cohesión fiscal y militar se acabó disipando y su proyecto reformista terminó fracasando por las distintas resistencias territoriales, especialmente en Cataluña y Portugal. Si la guerra lo había sostenido en el poder, la debacle militar lo acabaría llevando al exilio en enero de 1643.

La imagen de Olivares —como señala el autor— debe ser matizada y estudiada en su contexto, no pudiéndose cargar sobre él la responsabilidad del declive de una monarquía con un funcionamiento más complejo del simplismo con la que se le ha tratado. El valimiento, señalará Manuel Rivero, no fue otra cosa que un sistema de concentración de poder en que el control de la información era vital para la aceptación pasiva de su superioridad (p. 85). Para la historiografía tradicional fue un político soberbio y sin escrúpulos dispuesto a mantenerse en el poder contra viento y marea, mientras otras interpretaciones más recientes casi lo han encumbrado como a un héroe. Ni Marañón ni Elliott fueron capaces de agotar la figura del valido y se hacía necesario buscar nuevas respuestas a cuestiones que no habían quedado suficientemente aclaradas. La figura de Olivares tampoco se agota con este libro y no es improbable que Manuel Rivero trabaje en una cuarta monografía —no hay una *biografía definitiva*— a pesar de que las respuestas que obtenemos al leer esta obra sobre las actuaciones personales, el liderazgo político del valido y la *fabricación* de su figura, superan a las preguntas que hasta el momento teníamos pendientes.

Porfirio Sanz Camañes
Universidad de Castilla-La Mancha

Vincent, Bernard (2025). *Aportación a la historia de la provincia de Almería. Siglos XVI-XVIII*. Mojácar (Almería): Arráez Editores. 228 pp. ISBN: 979-13-87808-02-0.

El indiscutible magisterio del profesor Bernard Vincent tiene su reflejo en la publicación de su última obra, dedicada íntegramente al escenario del levante del reino granadino, la actual provincia de Almería.

Estamos ante una aportación de quien es, sin duda, el mejor conocedor de las tierras almerienses, a las que ha dedicado su tiempo y esfuerzo investigador, abriendo con su tarea una senda para el conocimiento de su pasado luego transitada por múltiples historiadores. La experiencia siempre crea un criterio ,y como bien señala Bernard Vincent en su introducción a la obra, conoció el lugar de Almería en un lejano junio del año 1969, siendo por entonces becario de la madrileña Casa de Velázquez, al establecer un primer contacto con un territorio hasta entonces prácticamente yermo para la profesión del historiador. Fue también cuando coincidió con el padre José Antonio Tapia Garrido, artífice de la inacabada *Historia General de Almería y su Provincia* y de otras aportaciones de indiscutible valor. Desde entonces surgió una inquebrantable amistad y colaboración entre ambos, tan solo rota por la desaparición en 1992 del insigne historiador natural de Abla.

En esta ocasión se nos presenta una amplia recopilación de los escritos dedicados a Almería por Bernard Vincent. Y hay que agradecer a Juan Grima su empeño editorial en publicar una obra de cuidada edición, a la que acompañan en su elaboración y cierre unos índices onomástico y toponímico de gran utilidad, pues hilvanan entre sí los diversos artículos que forman la publicación. En su prólogo Grima muestra la cercanía y afecto que le une a Bernard Vincent, recorriendo, con la memoria personal, los hechos y acontecimientos que traban su amistad. De hecho, recrea los espacios y escenarios con la vivencia de B. Vincent desde las más diversas iniciativas de carácter cultural, de toda índole, algunas de las cuales fueron promovidas por él y en las que participó el propio Bernard. Añadiendo, con acierto, la inclusión de ciertas entrañables anécdotas que enmarcan la dimensión humana y figura del autor.

La obra se fragua en su construcción sobre las aportaciones sobre Almería publicadas hasta la fecha por Vincent, dividiéndose en cuatro apartados. Posee un extraordinario valor, ya que recopila 19 artículos de extraordinaria valía; además de tres prólogos, realizados en su día por Vincent para las publicaciones de otros tantos autores. Con ello, el cuerpo del libro posibilita la consulta de una producción historiográfica que no siempre resulta fácil de hallar, y desde luego se convierte en un instrumento útil, de ahí el interés de su unión. De hecho, a título de ejemplo, se puede señalar la presencia de títulos clásicos, caso del destinado a los «Terremotos en la provincia de Almería (siglos XV-XIX)», publicado por vez primera

en su versión en francés en 1974, el cual, con más de medio siglo de vida, aún posee un indiscutible interés investigador; y en igual sentido, por su también carácter innovador y con todavía plena vigencia, destacaría la conocida aportación en el año 1981 del artículo «Un ejemplo de corso berberisco-morisco: el ataque a Cuevas de Almanzora (1573)».

El amplio recorrido cronológico conjuga la citada producción, distante en el tiempo, con la muestra más reciente de la infatigable capacidad que caracteriza a Vincent. De hecho, podríamos señalar la presencia de otros títulos novedosos, caso de «Los tres Ginés: algunas reflexiones sobre el cautiverio en el norte de África a mediados del siglo XVI» (en *Prohistoria*, 2023), junto con el ejemplo de su aportación «Comunicar, saber, controlar a través de un epistolario» (Instituto de Estudios Almerienses, 2021).

La evolución del modo de historiar de Bernard Vincent se observa en el recorrido por las páginas escritas. Su inicial atracción por el escenario almeriense le condujo a realizar una serie de artículos pioneros, destinados al paisaje, en los que aborda temas tales como la ganadería, junto con hechos como la práctica de la trashumancia, además de la presencia en dicha actividad del grupo morisco. También, en una deuda con *Annales*, investigó acerca del rigor climático almeriense, tan característico por su pertinaz sequía, el cual afectó a la producción agrícola. A su vez, en unión con el profesor Francisco Andújar, lograron ambos «reconstruir» fragmentos del desaparecido *Libro de Ordenanzas* de Almería, para así poder conocer en un riguroso esbozo documental la estructura socioeconómica almeriense en el siglo XVI.

El vínculo formativo del autor con el esencial conocimiento poblacional tiene su reflejo en las aportaciones insertas en el apartado de la obra destinado a la sociedad. En tal sentido, se debe de destacar el acierto de un título de enorme proyección: «50.000 moriscos almerienses» (Instituto Estudios Almerienses, 1991), pues muestra la contrabalanza entre la pervivencia del mundo morisco y la acción de la expulsión de dicha minoría en el levante del reino. Con ello se abren las páginas que muestran, junto con lo anterior, el reconocido prestigio que merece el profesor Bernard Vincent en el campo del conocimiento sobre la minoría morisca y el posterior proceso repoblador; comenzando por la Guerra de las Alpujarras en su vertiente almeriense o bien señalando el caso de Vera como modelo; donde introduce también la condición servil de los moriscos y su intenso «tráfico», junto con los aspectos de su compraventa y mercado.

La abrumadora producción historiográfica de Bernard Vincent valida a la presente nueva recopilación de sus artículos. Se trata, en su caso, de una práctica necesaria, que incluso ya tiene otros antecedentes: en 1985 fue publicada por la Diputación de Granada la recopilación de trece aportaciones suyas con el título *Andalucía en la Edad Moderna: economía y sociedad*; además, la misma institución granadina editó en 1987 la

obra recopilatoria de Vincent *Minorías y marginados en la España del siglo XVI*. Se trata pues, en su caso, de una práctica tan habitual como necesaria; de hecho, en 2015, por iniciativa conjunta de las universidades de Granada, Zaragoza y Valencia, en su colección compartida «Biblioteca de Estudios moriscos», con traducción del profesor Antonio Luis Cortes Peña, se publicó la obra recopilatoria de Bernard Vincet *El río morisco.*

Desde su primer contacto con Almería, que ya supera con creces el medio siglo, la tierra y pueblos almerienses forma parte esencial del paisaje de Bernard Vincent. A ellos ha dedicado más de media vida, destacando, para el caso que nos ocupa, su contribución científica al conocimiento del eje de Mojácar-Turre-Vera. Lo investigado y escrito por él supone la puesta en valor del pasado, al desvelar las complejas claves que resultan esenciales para su comprensión desde la extraordinaria capacidad de interpretación científica que posee. De modo erróneo pudiera ser considerado el quehacer de Bernard Vincent un sobresfuerzo aplicado a un territorio de limitada extensión. Sin embargo, lejos de construir la aún mal llamada «historia local», supo abrir la veta del trabajo capaz de interpretar a la densa trama de los hechos y acontecimientos de un lugar. Sin duda, para ello hubo de partir del microanálisis, pero en la construcción del edificio orientó su tarea hacia la necesaria renovación historiográfica al abrigo de un relato firme y seguro, sustentado sobre el riguroso análisis de las fuentes archivísticas.

Sus conclusiones, por universalidad y validez, son extrapolables a la mejor «historia general», ya que se enfrentan con aquellas prácticas que, en muchas ocasiones, adolecen del rigor o carácter innovador, convirtiendo así al historiador en un mero reproductor del pasado. No es el caso de Bernard Vincent, un indiscutible maestro de historiadores.

Francisco Sánchez-Montes González
Universidad de Granada

NORMES RELATIVES À LA REMISE DES ORIGINAUX À *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA*[1]

1. *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* est un moyen d'expression adressé à toutes les personnes intéressées dans l'Histoire Moderne et dont la seule limitation est l'acceptation préalable des travaux par le Conseil de Rédaction. Le Conseil de Rédaction —respectueux de la liberté intellectuelle des auteurs— ne modifiera pas les opinions ni se solidarisera avec celles-ci.
2. Le Conseil de Rédaction de *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* publiera différents types de travaux, pourvu qu'ils présentent un haut niveau de qualité et aient pour objet la période historique appelée Histoire Moderne. Tous les travaux feront allusion à leur contribution scientifique à la connaissance de l'Histoire Moderne, soit par la nouveauté du sujet, soit par la façon différente ou plus profonde d'envisager un problème déjà identifié dans l'historiographie, soit par l'apport de renseignements méconnus concernant une question historiographique déterminée, soit par les applications potentielles d'une méthodologie plus moderne ou raffinée.
3. L'original sera remis à «eUSAL Revistas» <http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica>.
4. Les articles n'excèderont 15000 mots. Chaque texte sera précédé d'une page contenant le titre du travail, le nom de l'auteur, catégorie professionnelle, lieu de travail, adresse postale complète, téléphone et adresse email.
5. Les articles seront publiés de préférence en espagnol et l'auteur remettra avec l'article un petit résumé de 20 lignes (150 mots) en espagnol et anglais. Les descripteurs du contenu, qui faciliteront l'indexation, y seront également insérés.
6. Les notes de bas de page seront corrélativement numérotées en chiffres arabes en exposant au-dessus du texte. Toutes les notes seront mises à la fin du texte. Un nombre excessif de citations textuelles est déconseillé. Si les citations dépassent deux lignes, elles seront composées en alinéas ou se placeront entre guillemets. Les explications de l'auteur dans les citations textuelles apparaîtront entre crochets pour les distinguer clairement du texte cité.
7. Les références bibliographiques suivront le système APA (6ème édition). À la fin de chaque article, la liste des œuvres citées dans l'article sera incluse. Les références bibliographiques seront complètes et conformes aux normes de citation de la Revue.
8. La numération des divisions et subdivisions des originaux, sera faite exclusivement en arabiques, sans introduire des chiffres romains ni des lettres. Chaque division du premier niveau pourra à la fois se diviser en niveaux successifs numérotés, en commençant par le 1. La numération relative aux divisions des divers niveaux sera toujours faite avec un point entre deux chiffres.
9. Les tableaux, les graphiques et les cartes insérés dans le travail seront numérotés corrélativement en chiffres arabiques. Chaque tableau, graphique ou carte aura un court titre d'identification et les sources de provenance seront signalées.
10. Le Secrétariat de *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* accusera de réception des originaux dans un délai de 30 jours ouvrables après sa réception et le Conseil de Rédaction résoudra sur sa publication le plus rapidement possible, après la fin du processus d'évaluation décrit sur le site web de la revue (Normes pour les auteurs).
11. Les auteurs ne recevront qu'une épreuve. Le Conseil de Rédaction prie de ne pas introduire des variations d'importance dans l'original pendant la correction, à fin de ne pas répercuter sur les coûts d'édition. Les auteurs corrigeront les épreuves dans le délai spécifié par la rédaction de la revue dans leur courriel.
12. *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* ne donne droit à aucun type de rémunération. Les droits d'édition appartiennent à *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* et l'autorisation préalable du Conseil de Rédaction doit être obtenue pour toute reproduction totale ou partielle. La provenance sera indiquée dans tous les cas.

1. http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica/about/submissions#authorGuidelines

CONDITIONS FOR SENDING ORIGINALS TO *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA*[1]

1. *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* is a channel of expression open to those interested in Modern History, the only prerequisite being prior approval by the Editorial Board of the papers sent. The Editorial Board, respecting the intellectual freedom of the authors, will not modify the opinions they express, neither will it declare support for them.
2. The Editorial Board of *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* will consider the publication of papers of all kinds, provided that they have a high level of quality and deal with aspects relating to the chronological period within the sphere of Modern History. In any case reference should be made to the paper's scientific contribution to the knowledge of Modern History, either because of the novelty of the subject, the different or more in-depth treatment of a problem already identified in historiography, the providing of new data on a certain historiographic matter, or the potential applications of a new or more refined methodology.
3. The original should be sent to «eUSAL Revistas» <http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica>.
4. Articles should be no longer than of 15,000 words in total. Each text should be preceded by a page with the title of the study, name of author or authors, professional category, work centre, full postal address, telephone and electronic mail address.
5. Preference will be given to articles in Spanish, although in any case the author must send, together with the article, a brief summary of 20 lines (150 words) in Spanish and English. Content descriptors to facilitate indexation should be included.
6. Notes should be numbered consecutively in Arabic numbers in superscript. All the notes should be placed at the end of the text. An excessive number of textual quotations should be avoided, and, in any case, if the quotation exceeds two lines it should be indented, and, if not, it should be in inverted commas. Author's comments in textual quotations should be placed between square brackets to distinguish them clearly form the text quoted.
7. Bibliographic references will follow the APA system (6th edition). At the end of each article the list of works cited in the article should be included. The bibliographical references will be complete and following the citation standards of the Journal.
8. Arabic numerals should be used in numbering divisions and sub-divisions of the originals, without mixing them with Roman numbers or letters. The divisions of the first level should be numbered consecutively, beginning with 1. Each division of the first level can in turn be subdivided into successive levels numbered consecutively, beginning with 1. A stop should always be placed between the numbers relating to the divisions of the different levels.
9. The tables, diagrams and maps included in the paper should be consecutively numbered with Arabic numerals. Each table, diagram or map should have a short title to identify it and should indicate its sources.
10. The Secretary's Office of *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* will acknowledge receipt of the originals within a period of thirty working days after their reception, and the Editorial Board will decide on their publication as quickly as possible, after the completion of the evaluation process described on the journal's website (Guidelines for Authors).
11. The authors will receive only one print proof. The Editorial Board requests that during the correction of proofs no major variations be introduced into the original text, since this may have repercussions on publishing costs. The authors will correct the proofs within the time frame specified by the journal's editorial staff in their email.
12. *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* does not give the right to any payment. The publishing rights correspond to the journal and the permission of the Editorial Board is necessary for its partial or total reproduction. In any case it is necessary to indicate its provenance.

1. http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica/about/submissions#authorGuidelines

NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES A *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA*[1]

1. *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* se ofrece como un cauce de expresión abierto a cuantas personas se interesen por la Historia Moderna, poniendo como único requisito la previa aprobación por el Consejo de Redacción de los trabajos remitidos. El Consejo de Redacción, respetuoso con la libertad intelectual de los autores, no modificará las opiniones vertidas por ellos, si bien tampoco se solidariza con las mismas.
2. El Consejo de Redacción de *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* considerará la publicación de trabajos de toda índole, siempre que demuestren un alto nivel de calidad y se ocupen de aspectos relativos al período cronológico comprendido dentro del ámbito de la Historia Moderna. En cualquier caso deberá aludirse a la contribución científica del trabajo al conocimiento de la Historia Moderna, bien sea por lo novedoso del tema, por el tratamiento distinto o más profundo de un problema ya identificado en la historiografía, por la aportación de datos desconocidos en relación con una cuestión historiográfica determinada, o por las aplicaciones potenciales de una metodología nueva o más refinada.
3. El original será enviado a «eUSAL Revistas» <http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica>.
4. Los artículos deberán tener una extensión de 15.000 palabras en total. Cada texto irá precedido de una página que contenga el título del trabajo, nombre del autor o autores, categoría profesional, centro de trabajo, dirección postal, teléfono y dirección electrónica.
5. Se publicarán preferentemente artículos en español, aunque en cualquier caso el autor deberá enviar, junto con el artículo, un breve resumen de 20 líneas (150 palabras) en español y en inglés. Además deberán incluirse en ambos idiomas los descriptores que faciliten la indicación, así como el título de trabajo.
6. Las notas a pie de página irán numeradas correlativamente en caracteres árabes y voladas sobre el texto. Se evitará un número excesivo de citas textuales que, en todo caso, si exceden de dos líneas irán sangradas y si no es así entrecomilladas. Por otra parte, los intercalados del autor en las citas textuales deberán ir entre corchetes para distinguirlos claramente del texto citado.
7. Las referencias bibliográficas en las notas se atenderán al sistema APA (6ª Edición). Al final de cada trabajo se incluirá la relación de obras citadas en el artículo. Las referencias bibliográficas serán completas y siguiendo las normas de citación de la Revista.
8. En la numeración de divisiones y subdivisones de los originales deben emplearse números arábigos, sin mezclarse con cifras romanas o con letras. Las divisiones del primer nivel se numerarán correlativamente, empezando por el 1. Cada división del primer nivel puede a su vez subdividirse en sucesivos niveles numerados consecutivamente, empezando por el 1. Siempre se colocará un punto entre las cifras relativas a las divisiones de los distintos niveles.
9. Los cuadros, gráficos y mapas incluidos en el trabajo deberán ir numerados en números arábigos correlativamente. Cada cuadro, gráfico o mapa deberá tener un breve título que lo identifique y deberá indicar sus fuentes.
10. La Secretaría de *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* acusará recibo de los originales en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción, y el Consejo de Redacción resolverá sobre su publicación en el menor tiempo posible una vez finalice el proceso de evaluación detallado en la web de la revista (Normas para los autores).
11. Los autores recibirán una sola prueba de imprenta. El Consejo de Redacción ruega que durante la corrección de pruebas no se introduzcan variaciones importantes al texto original, pues ello puede repercutir en los costos de edición. Los autores se comprometen a corregir las pruebas en el plazo que se indique, contado desde la entrega de las mismas.
12. *STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA* no da derecho a la percepción de haberes. Los derechos de edición corresponden a la revista, y es necesario el permiso del Consejo de Redacción para su reproducción parcial o total. En todo caso será necesario indicar la procedencia.

1. http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica/about/submissions#authorGuidelines

STUDIA HISTORICA
HISTORIA MODERNA

ISSN: 0213–2079 – e–ISSN: 2386–3889 – DOI: https://doi.org/10.14201/shhmo2026481
CDU: 94 – IBIC: Historia moderna: c. 1450/1500–c. 1700 (HBLH) – BIC: Early Modern History: c 1450/1500 to c 1700 (HBLH) – BISAC: History / Modern / General (HIS037030)
VOL. 48, n. 1 (2026)

ÍNDICE

LA HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES HOY

María López Díaz y M.ª del Carmen Saavedra Vázquez, *Presentación. «La historia de las instituciones hoy: logros del presente y perspectivas de futuro»* 7-21
Rafael Valladares, *El valido, ¿institución* de facto*? Haro y el virrey Alburquerque* 23-50
Carlos Javier de Carlos Morales, *Entre visitas y ordenanzas: el Consejo de Hacienda, una institución al servicio del gasto dinástico en la Corte de los Austrias* 51-80
Ramón Lanza García, *Juros, media anata de juros y el problema de la deuda pública de los últimos Habsburgo españoles (1621-1700)* 81-106
Anne Dubet, *Las intendencias españolas del marqués de Esquilache: un proyecto ambivalente (1760-1766)* 107-133
Eduardo Cebreiros Álvarez, *La intendencia y los regimientos gallegos ante las reformas municipales de Carlos III: un análisis desde la óptica local* 135-159
María López Díaz, *Entre lo necesario y lo inconveniente: la alcaldía mayor y auditoría general de Marina de Ferrol-A Graña (1734-1773)* 161-190
María del Carmen Saavedra Vázquez, *Ejército del reino, ejército del rey: La integración de los tercios gallegos en el primer ejército borbónico* 191-217
Josep Capdeferro, *Procesos legislativos y lucha por la sujeción de las autoridades al derecho en la Cataluña moderna* 219-248
David Bernabé Gil, *La Gobernación Foral de Orihuela y su sede alicantina: oficiales, conflictos y dinámica institucional en la Edad Moderna* 249-277
María del Carmen Irles Vicente, *El primer* «reformismo» *de Felipe V y sus ministros:* «compradores» *de corregimientos en el periodo 1705-1711* 279-309
José María Imízcoz Beunza, *Por una historia social de las culturas políticas: las élites reformistas y las élites resistentes al reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII* 311-343
María Seijas Montero y Antonio Presedo Garazo, *Linajes de poder municipal en Galicia: la presencia en el Cabildo Catedralicio Compostelano de las familias de la élite orensana en el siglo XVIII* 345-374

VARIA

Alfredo Bueno Jiménez, *El uso de la caballería ligera durante las primeras campañas militares en la isla española, 1493-1505* 377-422
Amparo Felipo Orts, *El linaje Vich y el patrocinio sobre el monasterio de Nuestra Señora de la Murta de Alzira* 423-454
Daniel Ochoa Rudi, *De poder y política: La secularización del cabildo metropolitano de Zaragoza entre Felipe II y el Duque de Lerma (1575-1604)* 455-486
Alfonso de Vicente Delgado, *A propósito de un libramiento y recibo. Sobre la distribución de impresos de polifonía religiosa en torno a 1600* 487-504
Sandra Bertolini Crespo, *La creación y consolidación del oficio de agente solicitador en la chancillería de Valladolid: la comisión del Conde de Castrillo en torno al donativo de las guerras de Italia (1629)* 505-528
Eduard Martí Fraga, *«El manantial inagotable con que premian los monarcas los grandes servicios». La política de concesión de mercedes nobiliarias de Carlos III, el archiduque, en Cataluña (1705-1713)* 529-563
Manuel Sobaler Gómez, *Versos para una* Ilustración Militar*: la evolución de la táctica militar en la Edad Moderna a partir de los* Axiomas Militares *de Nicolás de Castro* 565-597
Pablo Molejón y Paula Barbero, *Esclavitud, espacio doméstico y familia en Tenerife: una lectura cruzada entre padrones de habitantes y protocolos notariales (1640-1845)* 599-646

RESEÑAS 647-685

VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Fecha de publicación de este volumen: junio de 2026